

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento de Ciencia Política y de la Administración III

(Teorías y Formas Políticas y Geografía Humana) 



TESIS DOCTORAL

Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Jerónimo Ríos Sierra

Directores

Heriberto Cairo Carou

María Dolores Lois Barrio

Madrid, 2016

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento de Ciencia Política y de la Administración III
(Teorías y Formas Políticas y Geografía Humana)



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

LOS ENCLAVES DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, 1998-2012

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Jerónimo Ríos Sierra

Bajo la dirección de los Doctores

Heriberto Cairo Carou

María Dolores Lois Barrio

Madrid, 2015

TESIS DOCTORAL

LOS ENCLAVES DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, 1998-2012

Jerónimo Ríos Sierra



U N I V E R S I D A D
COMPLUTENSE
M A D R I D

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Programa de Doctorado en Ciencias Políticas

Trabajo realizado bajo la dirección de:

Dr. Heriberto Cairo Carou

Dra. María Dolores Lois Barrio

Madrid, 2015

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS.....	9
ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS	10
ÍNDICE DE MAPAS	12
ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	14
AGRADECIMIENTOS.....	20
RESUMEN	23
ABSTRACT	24
INTRODUCCIÓN.....	27
1. Estructura del trabajo doctoral: distribución, hipótesis y variables.....	27
2. Metodología de la investigación y fuentes para la investigación	41
3. Justificación y limitaciones de la investigación	50
CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.....	52
1. Una revisión bibliográfica a la literatura más relevante sobre el conflicto armado colombiano.....	52
2. El Estado y su territorio: violencia legítima y control territorial.....	73
3. La Geografía Política en la comprensión de la violencia	77
4. La Geografía Política como disciplina explicativa del conflicto armado interno colombiano.....	80
5. La Geografía Política y el conflicto armado interno desde las cartografías del ODHDIH.....	85
6. El concepto de conflicto. Un debate teórico.....	87
7. La investigación para la paz y los conflictos armados	100
8. Conflicto armado colombiano y estructuralismo. Una aproximación desde las aportaciones de Johan Galtung	117
CAPÍTULO II. GÉNESIS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, 1946-1998.....	132
1. Introducción.....	132
2. Los antecedentes de la Violencia en Colombia	133
3. La primera etapa de la Violencia, 1946-1953.....	134
4. La segunda etapa de la Violencia, 1953-1957.....	139
5. El Frente Nacional, la segunda Violencia y la emergencia de las guerrillas.....	143
6. Aparición e historia de las FARC. De 1964 a 1998	149
7. Aparición e historia del ELN. De 1965 a 1998	158
8. Otras guerrillas en el escenario del conflicto armado colombiano: EPL, M-19 y Quintín Lame	165

9. Otras dinámicas de la violencia colombiana. Narcotráfico y paramilitarismo.....	172
10. El Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982)	176
11. El Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986).....	177
12. El Gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990)	178
13. El Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994).....	180
14. El Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998).....	182
CAPÍTULO III: CONTINUIDADES Y RUPTURAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO ENTRE 1998 Y 2012	186
1. Introducción.....	186
2. La victoria de Andrés Pastrana y la situación del conflicto armado bajo el proceso del Caguán	187
3. Relaciones cívico-militares y modernización de la fuerza pública colombiana.....	195
4. El Plan Colombia en cifras. <i>Si vis pacem para bellum</i>	200
5. Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática y la Iniciativa Regional Andina 207	
6. Cuando no es oro todo lo que parece: Falsos positivos, Ley de Justicia y Paz y la encrucijada de la parapolítica.....	220
7. La <i>periferialización</i> del conflicto armado y las nuevas dinámicas territoriales bajo la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón.....	233
CAPÍTULO IV: EL FACTOR DEL NARCOTRÁFICO EN LA PERIFERIALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DEL ELN.....	245
1. Introducción.....	245
2. La economía del narcotráfico en las guerrillas. Un rubro de creciente importancia.....	248
3. Una mirada a la <i>periferialización</i> de la acción armada del ELN y los escenarios con presencia de cultivos ilícitos	257
4. Conclusiones. Presencia del ELN en enclaves con cultivos ilícitos. Una tendencia creciente en retrospectiva.....	294
CAPÍTULO V: EL FACTOR DEL NARCOTRÁFICO EN LA PERIFERIALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE LAS FARC	300
1. Introducción.....	300
2. Una mirada a la <i>periferialización</i> de la acción armada de las FARC y los escenarios con presencia de cultivos ilícitos	300
3. Conclusiones. FARC y presencia sobre enclaves con cultivos ilícitos. Una tendencia creciente en retrospectiva.....	342
4. Síntesis final. La <i>periferialización</i> y la <i>narcotización</i> de la violencia directa en el ELN y las FARC.....	347

CAPÍTULO VI: EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DEL PLAN COLOMBIA EN LAS TRANSFORMACIONES ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO

CAPÍTULO VI: EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DEL PLAN COLOMBIA EN LAS TRANSFORMACIONES ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO	355
1. Introducción.....	355
2. Colombia en 1998. Aproximaciones al concepto de “Estado fallido”	357
3. El gobierno de Andrés Pastrana: buscando superar el colapso del Estado.....	359
4. El Plan Colombia. Una intervención por invitación que comparten Andrés Pastrana y Álvaro Uribe	362
5. El alcance regional de la política de seguridad de Andrés Pastrana en el conflicto armado colombiano, 1998-2001	368
8.1. <i>La región nororiental durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	369
8.2. <i>La región central durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	371
8.3. <i>La región suroccidental durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	372
8.4. <i>La región atlántica durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	375
8.5. <i>La región amazónica interior durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	377
8.6. <i>La región amazónica fronteriza durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	378
8.7. <i>La región occidental durante la presidencia de Andrés Pastrana</i>	378
8.8. <i>Conclusiones. Valoraciones al impacto de la política de seguridad entre 1998 y 2001</i>	380
9. La presidencia de Álvaro Uribe y la Política de Seguridad Democrática, 2002-2010	383
10. El impacto de la política pública de seguridad democrática durante la primera presidencia de Álvaro Uribe	392
10.1. <i>La región nororiental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	393
10.2. <i>La región central durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	397
10.3. <i>La región suroccidental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i> ..	399
10.4. <i>La región atlántico durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	402
10.5. <i>La región amazónica de interior durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	406
10.6. <i>La región amazónica fronteriza durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	408
10.7. <i>La región occidental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe</i>	410
10.8. <i>Conclusiones. Valoraciones al impacto de la PSD entre 2002 y 2005</i>	412
11. El alcance regional de la política de seguridad de Álvaro Uribe en el conflicto armado colombiano entre 2006 y 2010.....	415
11.1. <i>La región nororiental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	415
11.2. <i>La región central durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	419

11.3.	<i>La región suroccidental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	422
11.4.	<i>La región atlántico durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	425
11.5.	<i>La región amazónica de interior durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	427
11.6.	<i>La región amazónica fronteriza durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	431
11.7.	<i>La región occidental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe</i>	432
11.8.	<i>Conclusiones. Valoraciones al impacto de la PSD entre 2006 y 2010</i>	434
12.	<i>El alcance regional de la política pública de seguridad de Juan Manuel Santos en el conflicto armado colombiano en 2011 y 2012</i>	438
12.1.	<i>La región noroccidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	439
12.2.	<i>La región central durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	441
12.3.	<i>La región suroccidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	441
12.4.	<i>La región atlántico durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	443
12.5.	<i>La región amazónica de interior durante la administración Santos</i>	444
12.6.	<i>La región amazónica fronteriza durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	445
12.7.	<i>La región occidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos</i>	445
12.8.	<i>Conclusiones. Valoraciones al impacto de la política pública de seguridad de Juan Manuel Santos entre 2011 y 2012</i>	446
13.	<i>Conclusiones</i>	449
CAPÍTULO VII. EL PARAMILITARISMO Y SU IMPACTO EN LAS LÓGICAS ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO		453
1.	<i>Introducción</i>	453
2.	<i>El origen del paramilitarismo en Colombia</i>	455
3.	<i>El paramilitarismo como actor armado frente a las FARC y el ELN</i>	467
3.1.	<i>El Bloque Héroes de Montes de María (BHMM)</i>	473
3.2.	<i>El Bloque Élmer Cárdenas (BEC)</i>	479
3.3.	<i>El Bloque Bananero (BB)</i>	481
3.4.	<i>El Bloque Norte (BN)</i>	482
3.5.	<i>El Bloque Catatumbo (BCat)</i>	486
3.6.	<i>El Bloque Metro (BM)</i>	488
3.7.	<i>El Bloque Centauros (BCen)</i>	490
3.8.	<i>El Bloque Sur (BS)</i>	492
3.9.	<i>El Bloque Calima (BCa)</i>	493

3.10.	<i>El Bloque Pacífico (BP)</i>	496
3.11.	<i>El Bloque Libertadores del Sur (BLS)</i>	498
3.12.	<i>El Bloque Central Bolívar (BcB)</i>	499
3.13.	<i>El Bloque Vencedores de Arauca (BVA)</i>	503
4.	¿Son las AUC un fenómeno de expulsión de las guerrillas?	505
4.1.	<i>El Pacto de Ralito</i>	506
4.2.	<i>El Pacto de Chivolo</i>	507
4.3.	<i>El Pacto de Granada</i>	508
4.4.	<i>La Cumbre de El Caramelo</i>	508
4.5.	<i>El Pacto de Puerto Berrío</i>	508
4.6.	<i>La Reunión de Coordinación</i>	509
4.7.	<i>El Pacto de Pivijay</i>	509
4.8.	<i>El Pacto de La Lorena</i>	510
4.9.	<i>El Pacto de Chocó</i>	510
4.10.	<i>El Pacto de Urabá</i>	511
4.11.	<i>El Pacto del Eje cafetero</i>	511
4.12.	<i>El Pacto de Las Canarias</i>	512
5.	El fenómeno pos-paramilitar	512
6.	Conclusiones.....	521
CAPÍTULO VIII: EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN LAS TRANSFORMACIONES ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA		524
1.	Introducción.....	524
2.	La dificultad estadística para medir el impacto de la violencia estructural	525
3.	La violencia estructural entendida por grupos de departamentos y violencia directa	540
4.	La percepción de la violencia estructural a través de las alcaldías de Colombia	543
5.	Conclusiones.....	551
CONCLUSIONES GENERALES		556
POST-SCRIPTUM		566
BIBLIOGRAFÍA		569

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Medición de la confiabilidad de la muestra de alcaldes objeto de estudio.....	44
Tabla 2: Conflictos violentos entre 1740 y 1974 según Bouthoul y Carrere	89
Tabla 3: Clasificaciones en cuanto a concepto, enfoque, discurso y actores de paz en Sandole	110
Tabla 4: Número de cuadrillas alzadas en armas hacia 1960	145
Tabla 5: Recursos movilizados por el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana.....	203
Tabla 6: Número de acciones guerrilleras de FARC y ELN en 2012	223
Tabla 7: Violaciones a los DD.HH y el DIH en Colombia (enero de 2002 - junio de 2011)	225
Tabla 8: Casos y víctimas por "falsos positivos" en Colombia (enero 2001 - diciembre de 2010).....	227
Tabla 9: Desplazamiento forzado en Colombia (enero de 2000 - junio de 2011).....	230
Tabla 10: Evolución municipal y departamental de la presencia del ELN entre 1998 y 2012	294
Tabla 11: Evolución municipal y departamental de la presencia de las FARC entre 1998 y 2012	343
Tabla 12: Percepción de la presencia de grupos armados en 1998 y en 2012.....	351
Tabla 13: Percepción de presencia de cultivos y vínculo con grupos armados.....	352
Tabla 14: Valoración del impacto de las políticas de seguridad y las aspersiones aéreas, 1998 - 2012.....	451
Tabla 15: Municipios afectados por masacres de las AUC entre 1998 y 2005	473
Tabla 16: Evolución de la presencia territorial de las Bacrim en términos de mayor concentración regional.....	514
Tabla 17: Evolución de la presencia territorial de las Bacrim, 2008 - 2012	516
Tabla 18: Percepción de presencia de FARC, ELN y paramilitares, 1998 y 2012	522
Tabla 19: Correlación estadística entre acciones armadas de las guerrillas y las variables socio-económicas.....	528
Tabla 20: Correlación de la violencia estructural con los departamentos de mayor violencia (>30 acciones armadas)	541
Tabla 21: Correlación de la violencia estructural con los departamentos de mayor violencia (>30 acciones armadas)	542
Tabla 22: Clasificación tripartita de los departamentos de Colombia en función de la violencia directa de las guerrillas, 2011 - 2012	542
Tabla 23: Indicadores socioeconómicos en función del grado de violencia departamental	543
Tabla 24: Percepción de los problemas más importantes por municipio pero con desglose departamental.....	545
Tabla 25: Percepción de los problemas más importantes por municipio pero con desglose departamental.....	547

Tabla 26: Percepción de las capacidades institucionales y socioeconómicas de las alcaldías, en desglose por departamento.....	549
Tabla 27: Indicadores de Desarrollo Humano y Necesidades Básicas Insatisfechas	550
Tabla 28: Expectativas sobre el posconflicto según las alcaldías pero con desglose departamental.....	554

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS

Gráfico 1: Evolución de los secuestros cometidos por FARC y ELN entre 1998 y 2012..	253
Gráfico 2: Evolución de las extorsiones cometidas por FARC y ELN entre 2002 y 2012	254
Gráfico 3: Evolución del número de combatientes del ELN entre 1987 y 2012.....	258
Gráfico 4: Evolución de las acciones armadas del ELN entre 1998 y 2012	295
Gráfico 5: Presencia armada del ELN en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012	296
Gráfico 6: Acciones armadas del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos 1998 - 2012	298
Gráfico 7: Relación porcentual entre las acciones armadas y la presencia municipal del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012.....	299
Gráfico 8: Evolución del número de combatientes de las FARC entre 1987 y 2012	302
Gráfico 9: Evolución de las acciones armadas de las FARC entre 1998 y 2012	343
Gráfico 10: Presencia armada de las FARC en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012	344
Gráfico 11: Acciones armadas de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012	346
Gráfico 12: Relación porcentual entre las acciones armadas y la presencia municipal de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012.....	347
Gráfico 13: Evolución del conflicto armado entre 1998 y 2001	381
Gráfico 14: Prioridades de la Fuerza Pública, 1998 - 2001.....	382
Gráfico 15: Evolución del conflicto armado entre 2002 y 2005	413
Gráfico 16: Prioridades para la Fuerza Pública, 2002 - 2005.....	414
Gráfico 17: Evolución del conflicto armado entre 2006 - 2010.....	434
Gráfico 18: Prioridades para la Fuerza Pública, 2006 - 2010.....	435
Gráfico 19: Evolución del conflicto armado entre 2011 y 2012	447
Gráfico 20: Prioridades para la Fuerza Pública, 2011 - 2012.....	448
Gráfico 21: Evolución del activismo guerrillero en la Costa Atlántica, 2008 - 2005	471
Gráfico 22: Evolución de la presencia guerrillera a nivel municipal en la Costa Atlántica, 1998 - 2005	472
Gráfico 23: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BHMM, 1998 - 2005	477
Gráfico 24: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BEC, 1998 - 2005.....	480
Gráfico 25: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BB, 1998 - 2005.....	482
Gráfico 26: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BN, 1998 - 2005	486

Gráfico 27: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCat, 1998 - 2005	488
Gráfico 28: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BM, 1998 - 2005	489
Gráfico 29: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCen, 1998 - 2005	492
Gráfico 30: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BS, 1998 - 2005	493
Gráfico 31: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCa, 1998 - 2005	496
Gráfico 32: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BP, 1998 - 2005	497
Gráfico 33: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BLS, 1998 - 2005	499
Gráfico 34: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BcB, 1998 - 2005	501
Gráfico 35: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BVA, 1998 - 2005	504
 Figura 1: Imagen ilustrativa del paradigma del conflicto anidado	113
Figura 2: Esquema de actores y enfoques de construcción de paz por niveles de Lederach	115

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Primera representación cartográfica de la Violencia.....	135
Mapa 2: Representación geográfica de las repúblicas independientes.....	141
Mapa 3: Primera cartografía de los frentes de la FARC, 1964 - 1980.....	148
Mapa 4: Cartografía de los frentes de las FARC creados entre 1981 y 1989.....	151
Mapa 5: Cartografía de los frentes de las FARC creados entre 1990 y 1996.....	154
Mapa 6: Localización de los frentes de las FARC en 1995.....	157
Mapa 7: Primera cartografía del ELN, 1965 - 1980.....	160
Mapa 8: Cartografía de los Frentes del ELN entre 1981 y 1989.....	163
Mapa 9: Presencia del EPL en municipios de Colombia en 2012.....	167
Mapa 10: Distribución espacial de las acciones violentas realizadas por las Autodefensas entre 1985 y 1994.....	174
Mapa 11: Municipios con presencia activa de la guerrilla entre 1992 y 1994.....	181
Mapa 12: Municipios con presencia activa de la guerrilla entre 1995 y 1997.....	184
Mapa 13: Municipios que conformaban la zona de despeje.....	192
Mapa 14: Presencia de las FARC en Colombia en el año 2002.....	213
Mapa 15: Presencia del ELN en Colombia en el año 200.....	215
Mapa 16: Presencia de las AUC en Colombia en el año 2002.....	218
Mapa 17: Corredores estratégicos y <i>periferialización</i> del conflicto, 2011.....	221
Mapa 18: Tasa de desplazamiento forzado en Colombia por 100.000 habitantes en Centros de Coordinación y Atención Integral - CCAI (Enero - junio de 2011).....	229
Mapa 19: Periferialización y corredores estratégicos de la violencia, 2012.....	234
Mapa 20: Presencia de grupos narco - paramilitares según INDEPAZ (2012).....	242
Mapa 21: Presencia de los cultivos de coca en Colombia, 2012.....	255
Mapa 22: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 1998.....	261
Mapa 23: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2000.....	264
Mapa 24: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2002.....	271
Mapa 25: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2003.....	274
Mapa 26: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2006.....	280
Mapa 27: Densidad de cultivos en Colombia en 2006.....	281
Mapa 28: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2008.....	284
Mapa 29: Densidad de cultivos en Colombia en 2008.....	285
Mapa 30: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2010.....	286
Mapa 31: Densidad de cultivos en Colombia en 2010.....	287
Mapa 32: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2012.....	290
Mapa 33: Densidad de los cultivos en Colombia en 2012.....	291
Mapa 34: Presencia de FARC en Colombia en 1998.....	303
Mapa 35: Presencia de FARC en Colombia en 2000.....	311
Mapa 36: Presencia de FARC en Colombia en 2002.....	313
Mapa 37: Presencia de FARC en Colombia en 2003.....	317
Mapa 38: Presencia de FARC en Colombia en 2005.....	321
Mapa 39: Presencia de FARC en Colombia en 2006.....	322

Mapa 40: Densidad de los cultivos en Colombia en 2006	323
Mapa 41: Presencia de FARC en Colombia en 2007	326
Mapa 42: Densidad de los cultivos de coca en Colombia, en 2007	327
Mapa 43: Presencia de FARC en Colombia en 2009	334
Mapa 44: Densidad de cultivos de coca en Colombia, en 2009	335
Mapa 45: Presencia de FARC en Colombia en 2011	340
Mapa 46: Densidad de cultivos de coca en Colombia en 2011	341
Mapa 47: Concurrencia de cultivos ilícitos y activismo guerrillero en 2003	348
Mapa 48: Concurrencia de cultivos ilícitos y activismo guerrillero en 2012	349
Mapa 49: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 1998	370
Mapa 50: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 1999	374
Mapa 51: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2000	376
Mapa 52: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2001	379
Mapa 53: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2002	394
Mapa 54: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2003	395
Mapa 55: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2004	403
Mapa 56: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2005	409
Mapa 57: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2006	417
Mapa 58: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2007	420
Mapa 59: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2008	424
Mapa 60: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2009	428
Mapa 61: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2010	430
Mapa 62: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2011	440
Mapa 63: Georreferenciación de los Bloques de las ACCU - AUC	470
Mapa 64: Presencia activa de las AUC 2000	474
Mapa 65: Densidad de la presencia activa de las AUC en el año 2002	476
Mapa 66: Densidad de la presencia activa de las AUC en el año 2004	483
Mapa 67: Presencia activa de las AUC en 2006	485
Mapa 68: Presencia de Los Rastrojos (2012)	517
Mapa 69: Presencia de Los Urabeños (2012)	518
Mapa 70: Presencia de Los Paisas (2012)	519

INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADM - 19	Alianza Democrática
ACDEGAM	Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio
ACC	Autodefensas Campesinas de Casanare
ACCU	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ACO	Autodefensas Campesinas de Ortega
ADO	Autodefensa Obrera
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BB	Bloque Bananero
BCa	Bloque Calima
BCat	Bloque Catatumbo
BcB	Bloque Central Bolívar
Bacrim	Bandas Criminales
BEC	Bloque Elmer Cárdenas
BHMM	Bloque Héroes de Montes de María
BLS	Bloque Libertadores del Sur
BMe	Bloque Metro
BN	Bloque Norte
BP	Bloque Pacífico
BVA	Bloque Vencedores de Arauca
CUT	Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
CCAI	Centros de Coordinación y Atención Integral
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
COCE	Comando Central
CAN	Comunidad Andina
CODHES	Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CNG	Conferencia Nacional Guerrillera
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
CGSB	Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
DPS	Departamento de Prosperidad Social

DD.HH.	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
ELN	Ejercito de Liberación Nacional
EPL	Ejercito Popular de Liberación
ERG	Ejercito Revolucionario Guevarista
ERP	Ejercito Revolucionario del Pueblo
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
FCM	Federación Colombiana de Municipios
FND	Federación Nacional de Departamentos
FENALPER	Federación Nacional de Personeros
FAL	Fuerza Armadas de Liberación
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
CAB	Frente de Guerra Carlos Alirio Buitrago
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUAR	Frente Unido de Acción Revolucionario
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
QL	Guerrilla Indigenista Quintín Lame
ICV	Indice de Calidad de Vida
IDH	Indice de Desarrollo Humano
INBI	Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas
IEPRI	Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
IRA	Iniciativa Regional Andina
IPI	Instituto Italiano de Polemología
IFP	Instituto Francés de Polemología para el Estudio Científico de las Causas de la Guerra
IPG	Instituto Polemológico de Groningen
JIC	Junta de Inteligencia Conjunta
MB	Movimiento Bolivariano
MOEC	Movimiento Obrero Estudiantil Campesino
M-19	Movimiento 19 de abril
MAS	Muerte a Secuestradores
NFO	Nueva Forma de Operar
NMS	Nuevos Movimientos Sociales

ODHDIH	Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
OEA	Organización de Estados Americanos
OEI	Organización de Estados Iberoamericanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PCCC	Partido Comunista Colombiano Clandestino
PCCML	Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PC	Plan Colombia
PPP	Plan Puebla Panamá
PSD	Política de Seguridad Democrática
PIB	Producto Interior Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PDS	Promotores de Desarrollo Social
SIMCI	Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
UNRG	Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca
UP	Unión Patriótica

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

- EP 1. Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la República de Colombia entre 2002 y 2010. Junio de 2015.
- EP2. Angelino Garzón. Vicepresidente de la República de Colombia entre 2010 y 2014. Junio de 2015.
- EP 3. Marta Lucía Ramírez. Ministra de Defensa de la República de Colombia entre 2002 y 2003. Junio de 2015.
- EP 4. Germán Bula Escobar. Ministro de Educación de la República de Colombia entre 2000 y 2002. Septiembre de 2015.
- EP 5. General (r) de la Policía Nacional de la República de Colombia. Abril de 2015.
- EP 6. General (r) del Ejército de la República de Colombia. Septiembre de 2015.
- EP 7. Elda Neyis Mosquera, “Karina”. Excomandante del Frente 42 de las FARC. Mayo de 2015.
- EP 8. Danis Daniel Sierra, “Samir”. Exsegundo comandante del Frente 5 de las FARC. Agosto de 2015.
- EP 9. Carlos Arturo Velandia Jagua, “Felipe Torres”. Exmiembro de la Dirección Nacional del ELN. Mayo de 2015.
- EP 10. José Luis Ramírez Mejía, “Byron”. Excomandante del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Junio de 2015.
- EP 11. Olimpo de Jesús Sánchez Caro, “Cristóbal”. Exsegundo comandante del Frente Ernesto Che Guevara del ELN y comandante general del ERG. Septiembre de 2015.
- EP 12. Edwar Cobos Téllez, “Diego Vecino”. Excomandante del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC. Mayo de 2015.
- EP 13. Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”. Excomandante del Bloque Élder Cárdenas de las AUC. Junio de 2015.
- EP 14. Personero¹ del departamento de Antioquia. Agosto de 2015.
- EP 15. Personero del departamento de Arauca. Julio de 2015.

¹ El personero es una figura particular de Colombia que, vinculada a la Defensoría de Pueblo, se encarga de salvaguardar los Derechos Humanos en el orden municipal.

- EP 16. Personero del departamento de Chocó. Septiembre de 2015.
- EP 17. Personero del departamento de Huila. Seotiembre de 2015.
- EP 18. Personero del departamento de Nariño. Febrero de 2015.
- EP 19. Personero del departamento de Norte de Santander. Mayo de 2015.
- EP 20. Personero del departamento de Putumayo. Abril de 2015.

“Si miramos a la izquierda, vemos a los insurgentes. Si miramos a la derecha, vemos a los paramilitares. Si levantamos la vista al cielo para rogar a Dios, vemos los helicópteros del Gobierno”.

Informe presentado por el Representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos (2007: 6).

AGRADECIMIENTOS

Los agradecimientos de esta tesis doctoral, considero, deben ser escuetos, pues todos los agradecidos ya lo han sido, en algún momento, de manera personal. No obstante, en algunos de los casos, merece la pena su nueva mención, a efectos de dejar constancia en cuanto a su contribución en un trabajo tan complejo y tan necesitado de apoyos, como es una tesis doctoral.

El principal agradecimiento es para mis directores, Heriberto Cairo y Maria Lois, quienes a pesar de las dificultades iniciales, nunca duraron en apoyarme, incluso más allá de lo académico, y a quienes agradezco su paciencia, dedicación y acompañamiento. Hicieron más de lo que debían y, por todo, son un referente para mí. Sin más. Asimismo, darle gracias a Fernando Harto, doliente en muchas ocasiones de mis idas y venidas en el camino predoctoral, y quien siempre se portó, a tal efecto, como un buen amigo que es.

No puedo sino reconocer el apoyo que, igual en las dificultades, me brindó Ángel Martín, Director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia, quien me permitió llegar al país en el año 2012, y quien siempre me respaldó, a efectos de llegar a realizar el profundo trabajo de campo que requería esta tesis. Confió incasablemente en mí y de manera generosa me facilitó todo tipo de contactos y, en buena medida, parte del trabajo de fuentes primarias, se debe a él.

Iguales palabras para Germán Bula. Exministro, exembajador, Consejero de Estado y muchas más cosas pero, igualmente, un buen amigo y un apoyo incuestionable. Germán es una de las personas que mayor y mejor conoce el conflicto armado colombiano. Mis largas conversaciones con él, sin duda, confirieron lucidez intelectual al desarrollo de este trabajo.

Es a estas cinco personas a quien más agradecido estoy pues, sin ellas, sencillamente, el desarrollo de este trabajo doctoral hubiera sido imposible.

A nivel institucional debo agradecer el apoyo que siempre me brindó la Federación Colombiana de Municipios, poniéndome a disposición el poder llegar a cientos de alcaldías, a las que igualmente debo mencionar, por su valioso aporte a este trabajo doctoral. Especialmente, gracias, a María Romero.

También, mi agradecimiento a la Vicepresidencia de la República de Colombia, pues siempre dispuso de fuentes directas con transparencia y amable atención. Gracias al entonces Vicepresidente, Angelino Garzón y gracias, muy especialmente, a Harvey Suárez y a Luis Gabriel Salas, quienes al frente del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, han hecho una labor encomiable. Agradecer muy especialmente a Marisol Forero, por su apoyo para la obtención de algunas de las entrevistas más importantes y difíciles de esta tesis doctoral, y por servir de enlace con muchos de los personeros, garantes de los Derechos Humanos en Colombia, objeto de entrevistas en profundidad, y a quienes también quiero reconocer su apoyo. Gracias.

Debo hacer especial mención a mi amigo, Christopher de Andrés y su hermano, Amado, quien este último, como director regional de UNODC para Centroamérica y el Caribe, me facilitó acceder a todas las fuentes relacionadas con el trabajo de cultivos ilícitos de coca, tan importante para su desarrollo, y que la oficina de Colombia gentilmente me dispuso.

Debo reconocer mi gratitud a Lya Fernández, la primera persona que confió en mí para que viajara a Colombia como profesor invitado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, al expresidente Ernesto Samper y a Edith Camerano, por su apoyo en mi vinculación como profesor de Ciencia Política en la Universidad Santo Tomás. Mencionar, de la misma manera, a Olga Illera, Directora del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por su apoyo, a igual efecto, en mi vinculación como profesor de la facultad, y a Paula Bula y Juan Manuel Gil, quienes me acompañaron en mi último y actual paso como profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad EAN. Todos me facilitaron espacios para discutir y dar visibilidad a mi investigación y, lo más importante, me ofrecieron la posibilidad de concitar el desarrollo de esta tesis doctoral con las funciones académicas y docentes que, finalmente, sirven de soporte a la misma.

Agradecer mis discusiones con Miguel Benito, Egoitz Gago, César Niño, Alberto Castillo, Nicolás Botero y Alcira Tapia y las siempre palabras de aliento de otros amigos de la universidad como Margarita o Lorenzo. Visiones, contrarias en muchos casos que, siempre leales y generosas, contribuyeron a enriquecer este trabajo. Asimismo, agradecer a Camilo Echandía, a mi juicio, uno de los mayores referentes en lo que a comprender las dinámicas espaciales del conflicto en Colombia, y con quien pude compartir varias conversaciones, por completo, reveladoras en cuanto a conocimiento. Agradecer también a dos personas más, Álvaro López y Andrés Hernando. Con vosotros nunca discutí sobre el objeto de estudio pero, sencillamente, no os podíais quedar fuera de cualquier mención.

Agradecer a todos, expresidentes, exministros, generales, alcaldes, personeros, víctimas y victimarios – que también víctimas-, que confiasteis en este trabajo y que le dedicasteis parte de vuestro tiempo, desinteresadamente, en apoyar una investigación académica con la que, en muchos casos, no estabais de acuerdo pero que de igual manera facilitasteis. Gracias.

Por último, agradecer a quienes en algún momento dificultaron la realización de esta tesis. Gracias, porque, sin duda, la hicisteis más fuerte.

Finalmente, agradecer y dedicar este trabajo doctoral de manera muy especial a mis padres, María del Pilar y Jerónimo, que siempre confiaron en mí y me apoyaron en todas mis difíciles decisiones, obteniendo en todo caso, palabras de aliento, paciencia y confianza. Lo mismo para mi hermana, Sonia. Y muy especial mención para mi abuela, Pilar. Siempre estuvo de mi lado. Apoyo incondicional aun cuando irme a más de 8.000km suponía, de largo, la decisión más difícil para ella. Me hace feliz que todos estén acompañándome en este momento.

El mayor agradecimiento y la mayor dedicatoria de esta tesis doctoral es para Miriam, quien rehízo su vida acompañándome a Colombia – previo paso por Irlanda-, adaptándose, siempre comprensiva, paciente y colaboradora, a las lógicas un país, en ocasiones incomprensible, como es Colombia.

Gracias a todas y todos, de verdad. Todo lo bueno que aporte esta tesis doctoral es vuestro.

Septiembre de 2015, Bogotá. Colombia

RESUMEN

El propósito fundamental de esta tesis doctoral es el de comprender cuáles y a qué responden los cambios de la geografía de la violencia derivada del conflicto armado colombiano entre los años 1998 y 2012. Así, la hipótesis fundamental es la de plantear una creciente *periferalización* del conflicto armado, que durante estos años, ha experimentado un mayor arraigo, en lo que a violencia armada de las FARC y del ELN se trata, en enclaves predominantemente fronterizos.

Esta *periferalización* se corrobora con base en cuatro tendencias que, analizadas con profundidad, ocupan buena parte de la tesis. En primer lugar, la mayor concurrencia de las guerrillas de las FARC y el ELN sobre escenarios con cultivos ilícitos. Es decir, tanto las FARC como el ELN pasan a concentrar su presencia y activismo en escenarios cocaleros, lo cual invita a pensar en una mayor dependencia de estos en lo que a la continuidad del conflicto armado se trata.

En segundo lugar, las políticas de seguridad acontecidas en Colombia entre 1998 y 2012, especialmente las dirigidas bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), han obtenido importantes resultados, en lo que a minimizar la presencia guerrillera, en enclaves centrales del país como Cundinamarca, Santander, Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y buena parte de la costa Atlántica. Sin embargo, y a pesar de tratarse de prioridades militares, en el nororiente del país, especialmente en Arauca y Norte de Santander; en el suroccidente, principalmente en Cauca, Nariño, Huila y Tolima; y en el eje Meta – Caquetá – Putumayo, las tendencias de activismo guerrillero no solo se han mantenido constantes sino que, además, se han incrementado.

A lo anterior no afectó el paramilitarismo, en la medida en que se descarta que éste, verdaderamente, haya influido en las dinámicas de expulsión de la guerrilla sobre aquellos departamentos donde coincidieron en tiempo y lugar. Todo lo contrario, con la excepción de Antioquia y algunas regiones de la costa Atlántica, no se puede apreciar, con base en los indicadores que se plantean, que verdaderamente el factor paramilitar influyese en la reubicación geográfica de las guerrillas, especialmente de las FARC.

Finalmente, la violencia estructural, si bien no se aborda como factor explicativo y causal del conflicto armado, sí que se muestra como una variable muy a tener en cuenta en las tendencias de cambio y continuidad de la violencia directa de las guerrillas. Aquellos departamentos con mayor presencia de FARC y ELN son, igualmente, buena parte de los departamentos con menores niveles de desarrollo económico y social del país. Asimismo, son en buena medida departamentos con gran arraigo de cultivos ilícitos, lo cual, se acaba consolidando como un binomio de alto valor agregado a efectos de atraer una mayor presencia guerrillera y dificultar un mayor éxito en lo que concierne a las políticas de seguridad.

A todo lo anterior se llega gracias al análisis de las cartografías facilitadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario adscrito, hasta 2014, a la Vicepresidencia de la República, y por medio de cuestionarios a 221 alcaldías del país y entrevistas en profundidad con actores involucrados en el conflicto armado, tanto del nivel gubernamental y de la Fuerza Pública, como de las FARC, el ELN, las AUC o las instancias garantes de los Derechos Humanos – personeros – en la institucionalidad local.

ABSTRACT

The main purpose of this doctoral thesis is to understand what changes have occurred in the geography of violence stemming from Colombia's armed conflict between 1998 and 2012.

Thus, the fundamental hypothesis is to establish an increasing peripheralization the armed conflict that has increased and entrenched over the years, in which armed violence of the FARC and the ELN appears in predominantly border scenarios. This is corroborated on four trends that are analyzed in depth, occupying much of the thesis. First, the largest gathering of the guerrillas of the FARC and ELN on places with a extensive presence of illicit crops. That is, both the FARC and the ELN concentrate its presence and activism in scenarios with illicit crops, which invites us to think in a greater reliance on these as far as the continuation of the armed conflict exists.

Second, security policies occurred in Colombia between 1998 and 2012, especially those addressed under the presidency of Andrés Pastrana (1998-2002) and Alvaro Uribe (2002-2010) have achieved significant results to minimize the presence guerrilla in central departments as Cundinamarca, Santander, Boyaca, Caldas, Quindio, Risaralda and much of the Atlantic coast. However, despite trying to military priorities, in the northeast of the country, especially in Arauca and Norte de Santander; in the southwest, especially in Cauca, Nariño, Huila and Tolima; and the axis Meta - Caquetá -Putumayo, trends in guerrilla activism not only have remained constant but also have increased.

However, this does not affect the paramilitaries, which does not influence the dynamics of expulsion of the guerrillas on those departments where they both have presence in time and place. On the contrary, with the exception of Antioquia and parts of the Atlantic coast, the paramilitary factor has not influenced the geographical relocation of the guerrillas, especially the FARC.

Finally, structural violence, although not discussed as explanatory and causal armed conflict factor, it is displayed as a variable to be taken into account to explain trends of change and continuity of direct violence of the guerrillas as those departments more presence of FARC and ELN are, also, some of the departments with lower levels of economic and social development of the country. They are also largely departments with deep roots of illicit crops,

which is just emerging as a binomial high added value in order to attract more guerrilla presence and hinder greater success in regard to security policies.

All this is reached by analyzing the maps provided by the Observatory on Human Rights and International Humanitarian Law attached, until 2014, to the vice presidency, and through questionnaires to 221 municipalities of the country and in-depth interviews with actors involved in the armed conflict, both the government level and the security forces, as the FARC, the ELN, the AUC or the guaranteeing of human rights bodies - ombudsmen - local institutions.

INTRODUCCIÓN

La siguiente tesis doctoral, que tiene por título *Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012*, se erige como una investigación que, especialmente, desde la Resolución de Conflictos y las Investigaciones para la Paz y la Geografía Política, disciplinas *sui generis* próximas a la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, busca entender algunas dinámicas espaciales de la violencia derivada del conflicto armado y cómo han afectado a su evolución y transformación. Particularmente, con respecto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN.

De igual forma, intenta entender el alcance de la respuesta de las políticas de seguridad, eminentemente beligerantes, acontecidas entre 1998 y 2012, con el objeto de cuestionar, cuando menos, su alcance y éxito.

También, busca entender otros tres factores que, en inicio, fueron concebidos como clave para interpretar, y en cierto modo profundizar, algunos de los mitos que acompañan a la prolífica literatura que versa como objeto de estudio en el conflicto colombiano y que con posterioridad será expuesta. De un lado, se intenta comprender cuál es la relación que las guerrillas y las transformaciones espaciales de la violencia directa han guardado con el narcotráfico en los últimos años. De otro, en iguales términos, con la violencia estructural del Estado colombiano.

Este trabajo finalmente aspira a comprender la cuestión sobre si, verdaderamente, el paramilitarismo, construido en torno a lo que fue denominado como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC – anteriormente Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU-, verdaderamente afectó a la ubicación y disposición violenta de las guerrillas pues, dados los resultados mostrados, cabría cuestionar el alcance de una hipótesis, mayormente dominante en el imaginario colectivo colombiano.

A lo largo de las siguientes líneas, y antes de profundizar en el marco teórico y conceptual sobre el que se construye este trabajo doctoral, se presentará la estructura formal y de fondo del mismo. Es decir, su estructura en capítulos, sus principales hipótesis y variables, sus fuentes y su metodología, y en última instancia, sus debilidades y su justificación.

1. Estructura del trabajo doctoral: distribución, hipótesis y variables

Esta tesis doctoral, además de los agradecimientos y estas líneas de introducción previa, se comprende en torno a nueve capítulos.

En el capítulo primero se propone una profunda revisión sobre el estado de la cuestión o estado del arte que durante las últimas décadas, especialmente, las dos últimas, ha centrado su objeto de interés en la comprensión del conflicto armado en Colombia.

La intención es la de destacar cuáles han sido las líneas predominantes de investigación y estudio, partiendo, en todo caso, del tradicional y primer trabajo de Guzmán, Fals Borda y Umaña publicado en 1962 sobre la Violencia en Colombia². Un período oscuro, de guerra civil, y que si bien se suele desconectar del análisis histórico que centra su punto de partida en cuanto al estudio de las causas del conflicto, en los años sesenta, sin duda, marca un punto de inflexión que va a determinar lo que va a suceder en Colombia en las décadas siguientes.

Así, en este estado de la cuestión, se revisan las principales aportaciones efectuadas en los ochenta y los noventa, y que de manera dispar ponen su acento, bien en una comprensión historiográfica de las causas objetivas del conflicto armado, bien en la evolución histórica de los actores implicados, desde las FARC y el ELN, hasta el paramilitarismo y la propia Fuerza Pública.

De igual manera, predominan los trabajos que se centran en el impacto económico del conflicto, en la dimensión del *cleavage* rural-urbano, o en el fenómeno del desplazamiento forzado y su afectación, por ejemplo, al capital social colombiano. También destacan los trabajos, ya a inicios de la década del año 2000, de perspectiva regional, gracias especialmente a las aportaciones del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, y los que centran su atención en el narcotráfico o la debilidad institucional del Estado y su cooptación por los actores armados. Igualmente, se destacan las aportaciones centradas en la internacionalización del conflicto, tanto por el impacto de su agenda negativa, como por las respuestas que determinan ciertas políticas de cooperación y/o asistencia militar. Respuestas variopintas que transitan entre el proyecto de los Laboratorios de Paz de la Unión Europea³ hasta el Plan Colombia, desarrollado desde Estados Unidos.

Sea como fuere, el trabajo se reivindica como un intento por entender la interacción compleja entre la violencia directa de FARC y ELN, entre 1998 y 2012, y una serie de factores y actores que van desde los cultivos de coca, hasta los operativos de la Fuerza Pública, a lo que se suma el paramilitarismo o la violencia estructural. Ello, porque la integración de todos estos factores, de acuerdo a una variable dependiente como es la violencia directa de FARC y ELN,

² Aunque después se abordará con profundidad el término. La Violencia es un contexto de guerra civil que acontece en Colombia, desde 1948 y hasta 1964 – aunque hay varias consideraciones sobre cuándo concluye. Se da con motivo del asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo cual sume al país en una tesitura de violencia desmedida a partir de las identidades partidarias, liberales y conservadoras dejando más de 200.000 muertes.

³ Los Laboratorio de Paz de la Unión Europea han sido el proyecto estrella de ésta en Colombia. Ello, a través de intervenciones locales de recomposición del tejido social y construcción de paz en aquellos enclaves más violentos del país. Iniciaron en 2002, en el Magdalena Medio, y en una segunda y tercera fase llegaron al Oriente Antioqueño, Norte de Santander y Macizo y Alto Patía, primero, y a Meta y los Montes de María, después. Han cubierto un total de 125 municipios de los mpas violentas del país, y ha contado con una aportación de la Unión Europea de 99.7 millones de euros, a los que se adicionan otros 21.85 de contrapartida nacional. Estos laboratorios se desarrollan de acuerdo a “enfoques en proyectos integrales que sean la expresión de procesos sociales participativos, donde la reapropiación de los DH sea la base para la reconstrucción del tejido social y la recuperación de un sentido de ciudadanía que contribuye a garantizar la paz duradera” (Castañeda, 2009: 165).

tradicionalmente, o solo se ha realizado con relación a una de todas las variables, aquí utilizadas como independientes, o se ha investigado obviando las escalas geográficas regional-nacional, que confieren un valor especial a este trabajo doctoral.

Tal y como sería de esperar, se presenta toda una profunda revisión bibliográfica, también, en cuanto al marco teórico, de las más relevantes aportaciones que, desde la Geografía Política y la Resolución de Conflictos y las Investigaciones para la Paz⁴, ofrecen modelos teóricos de análisis que, ni mucho menos, pueden pasar desapercibidos a efectos de esta tesis. No obstante, en ningún momento se oculta, más bien todo lo contrario, el enfoque estructuralista que domina la forma en la cual se interpreta el alcance y sentido del conflicto colombiano en cuanto a su comprensión y transformación espacial.

Al respecto, la estructura estatal ofrece una serie de condiciones objetivas, no necesariamente causales, pero que en todo caso afectan a cómo se desarrollan las dinámicas del conflicto y que son determinantes para entender su actualidad. Por ejemplo, no es casualidad que los mayores éxitos y alcances de la Política de Seguridad Democrática⁵ – PSD-, hayan sido los departamentos que conforman el “corazón” geográfico del Estado colombiano así como la costa Atlántica.

Tampoco es casualidad que de los departamentos más violentos de la actualidad, seis resulten ser departamentos fronterizos, como son los casos de Arauca y Norte de Santander, frontera con Venezuela; Chocó, frontera con Panamá; Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y Perú; y Cauca, principal salida del suroccidente del país hacia el Pacífico.

Asimismo, estos departamentos son los que adolecen de menores indicadores de desarrollo humano – IDH-, calidad de vida –ICV- o necesidades básicas insatisfechas – INBI- y que, con la excepción de Arauca, concentran tres cuartas partes del total de producción cocalera que tiene lugar actualmente en el país.

Es por lo anterior, que la comprensión de dinámicas centro-periferia; atracción-expulsión; continuidad-ruptura se encuentran marcadas por las estructuras objetivas que, particularmente, presenta el Estado colombiano. Así, Galtung (2003b), pero también otros reconocidos nombres como Mitchell (1981), Sandole (1987), Burton (1990), Rifkin (1996),

⁴ Como señala Harto de Vera (2013: 54): “La Investigación para la paz nace tras el final de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Su objetivo fundacional fue configurarse como una disciplina científica unificada por una teoría general del conflicto, de carácter universal, integrada e interdisciplinar. Esta ambiciosa pretensión fue abandonada a finales de los años sesenta del siglo XX. A partir de ese momento se reconoció la imposibilidad de lograr dicho objetivo. En su lugar, el área experimentó un proceso doble. Por un lado, se asistió a su fragmentación y a la especialización en función de los distintos niveles del conflicto (internacional, interpersonal, intrapersonal). Por otro, el esfuerzo de investigación se dirigió hacia el descubrimiento, aplicación y extensión de técnicas prácticas para la resolución de conflictos en todos los niveles del mismo y en muy variados contextos de la realidad”.

⁵ La Política de Seguridad Democrática, en sentido laxo, se entiende a todo el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010. En ella se integró el Plan Colombia, que fue el proyecto más importante de Estados Unidos con el país durante toda la década pasada. Nuncá quedó de manera precisa qué abarcaba la PSD y qué el Plan Colombia, de manera que sus resultados se presentaban de manera conjunta e imprecisa.

Dukes (1999), Kriesberg (1999), Rubenstein (1999), Stewart (2001) o Miall, Mitchell, Ramsbotham y Woodhouse (2015), reivindican la atención de los condicionantes estructurales, ya sea en la interpretación de conflictos, ya sea en las estrategias de construcción de paz. De igual manera, en el marco de estudio colombiano, esta posición, entre muchos otros, estaría representada por los trabajos de Pizarro (2004), Echandía (2006), Restrepo (2006) o Sánchez y Chacón (2006), entre muchos otros, especialmente, provenientes de las investigaciones que, en los años noventa produjo la Universidad Nacional. Todos, como se verá, son muy tenidos en consideración a efectos de elaborar un marco teórico desde el que atender, y entender, las dinámicas y transformaciones espaciales de la violencia directa en Colombia.

Tras esta presentación bibliográfica y teórica, los capítulos II y III buscan servir de instrumento contextual e histórico, a efectos de mostrar el devenir del conflicto armado colombiano, desde sus primeros orígenes y hasta la actualidad.

Así, en el segundo capítulo se presenta una contextualización que parte de la década de los años treinta del siglo pasado y de la crisis que el Partido Liberal experimenta tras 16 años en el poder, entre 1930 y 1946. Estos años conllevan, en primer lugar, un cambio de gobierno hacia un cariz netamente conservador, y segundo, una crisis sin precedentes en el Partido Liberal, la cual llega a su máxima expresión tras la muerte de su referente ideológico y partidista, Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948⁶.

Se presta en este capítulo especial atención a las dinámicas cambiantes que experimenta la violencia en Colombia, especialmente entre 1946 y 1953, conocida como Violencia, bajo un contexto de guerra civil en la que el conservadurismo gobernante resulta incapaz de controlar la situación.

Desde 1953 y hasta 1957 tiene lugar una dictadura, bajo la presidencia del general Rojas Pinilla que más bien, a efectos de *dictablanda*, y tras un rápido efecto de “luna de miel”, igualmente, no consigue superar la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra el país.

Llega la “normalidad democrática” con la llegada del Frente Nacional⁷, en 1958, a través de un gobierno de coalición y de reparto estricto y alternado de las estructuras administrativas y políticas del Estado, y que se desarrollará hasta 1978. Estas son dos décadas de dificultades, de intentos de políticas de fortalecimiento del Estado, de aperturismo dentro las exigencias

⁶ Como se señalaba con anterioridad, el 9 de abril de 1948 es muy importante en la historia política del país y, particularmente, en la violencia a tenor de que establece, como se verá con posterioridad, algunas de las bases sobre las que se constituye el conflicto armado colombiano, ya en la década de 1960.

⁷ Se utiliza el término “normalidad democrática” porque, desde 1958, el Frente Nacional pone fin a la dictadura del General Rojas Pinilla (1953-57), especialmente, por la incapacidad para contener las dinámicas de violencia del país. Desde entonces, y durante dos décadas, se produce una alternancia en el poder que permite a los dos grandes partidos, Partido Liberal y Partido Conservador, controlar todo el espectro político y administrativo del Estado colombiano.

del viejo regionalismo⁸, y de construcción de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Además, son años de violencia estructural y debilidad institucional que acogen, desde la exclusión política de la izquierda colombiana, la aparición de las primeras guerrillas, al albor de la efervescencia de la Guerra Fría, tal y como sucede con las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación - EPL. También emergerán, ya desde finales de los setenta, lo que conocerá como guerrillas de segunda generación, más focalizadas en la transformación de las estructuras en clave nacional que en los relatos propios de la Guerra Fría. Así sucederá con el Movimiento 19 de abril – M 19-, y la guerrilla indigenista del Cauca, Quintín Lame – QL.

En este capítulo II, también se profundiza en la aparición del paramilitarismo. Un factor irregular que afectará tanto a la misma composición de las guerrillas, como al Estado colombiano, en la medida en que se consolida como un proyecto criminal, con fuentes particulares ideológicas, políticas, económicas y militares que, finalmente, acaban desvirtuando al mismo Estado de Derecho colombiano.

Tales fuentes, desde los ochenta, encontrarán en el narcotráfico un factor nuclear, primero, por asociación al fenómeno de los cárteles de Medellín y Cali, y después por su propia cooptación como recurso nuclear, en una particular rivalidad con las estructuras guerrilleras de las FARC.

Finalmente, se finaliza describiendo la relación que con el conflicto y su superación, ya sea por términos de negociación, ya sea por términos de un incremento en los niveles de activismo de la Fuerza Pública, desarrollan los cuatro gobiernos previos al marco temporal objeto de estudio. Es decir, el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), especialmente destacada por lo que se denominó como Estatuto de Seguridad⁹; el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), que es la primera en explorar acuerdos de negociación y de cese bilateral de las hostilidades; el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1982-1986), garante de los primeros acuerdos para la desmovilización, dentro de un marco que se consolidará bajo la aprobación de un nuevo orden constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente¹⁰, bajo la presidencia de Gaviria (1990-1994); y, por último, la presidencia de Ernesto Samper Pizano, golpeada por lo se conocerá como “Proceso 8.000”¹¹

⁸ Por “Viejo Regionalismo” se entiende la etapa de la integración latinoamericana que tiene lugar durante el contexto de Guerra Fría y en el que prima la influencia de Estados Unidos en la región y acontecen, por ejemplo, esquemas de integración como el Mercado Común Centroamericano o el Pacto Andino aparte de la OEA.

⁹ El Estatuto de Seguridad fue una norma aprobada bajo la presidencia de Turbay Ayala y en la lucha contra unas guerrillas en alza, supone la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional de influencia estadounidense.

¹⁰ Por Asamblea Nacional Constituyente, se entiende la Asamblea Constituida en 1991, por medio de un proceso electoral abierto, con el cual se constituyó y proclamó un nuevo texto constitucional que derogaba al anterior, vigente desde 1886.

¹¹ “Proceso 8.000”, que aparece en reiteradas ocasiones en este capítulo, es como se conoce a la investigación abierta por la Fiscalía General de la República para investigar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, concretamente del cartel de Cali, a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano de 1994. El nombre proviene del número que le correspondió a la investigación y cuya suma asciende a los cinco millones de dólares, si bien es inexacta. Por ejemplo, en las últimas declaraciones de William Rodríguez Abadía, hijo de

y un fuerte déficit de legitimidad que, no obstante, no será óbice en la búsqueda, sin resultados, de una salida negociada al conflicto, muy particularmente, con el ELN.

Ya en el capítulo III se busca presentar, pormenorizadamente, los aspectos que, a nivel descriptivo, resultan más relevantes a efectos de conocer el impacto real del conflicto armado sobre la estructura del Estado colombiano en los últimos quince años, entre 1998 y 2012.

Es decir, en este capítulo se presenta el contexto en el cual se desarrollan FARC y ELN, dentro de las dimensiones de la violencia directa y su interacción con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), valedor de un proceso frustrado como fue el de negociación en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.

Asimismo, se hace especial énfasis en el auge y consolidación del fenómeno paramilitar, que desde 1997 se redefine desde las antiguas ACCU, y se organiza en torno a la casa Castaño¹², en lo que se conoce como AUC. Este actor paramilitar va a desarrollar unos niveles de violencia, hasta el momento inusitados, sobre todo, contra la población civil, aunque por sus connivencias con la Fuerza Pública, y dado su discurso anti-subversivo, va a afectar, cuestionar y debilitar el andamiaje y la respuesta del Estado colombiano en la tesitura de conflicto.

Dentro de este contexto, se van a describir con profundidad, los dos gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 y 2006, y nuevamente, entre 2006 y 2010. Especialmente, se va a hacer énfasis en dos instrumentos, tan próximos como discutidos, como son el Plan Colombia y la PSD. Es decir, se van a describir con detalle la lógica y la orientación de este tipo de política de seguridad, sumida en la concepción de entender la paz como ausencia de guerra y, en extensión, se va a buscar describir, a grandes rasgos, cuáles fueron los principales pilares, éxitos y fracasos, siempre, sin perder la óptica descriptiva, de esta política. Todo, para con un mismo planteamiento que versará sobre los dos primeros años de Juan Manuel Santos Calderón como presidente de Colombia, entre agosto de 2010 y diciembre de 2012.

El capítulo IV es junto con el capítulo V, el primero de esta tesis doctoral con un componente ya no solo descriptivo sino, igualmente, analítico. En su caso, el objetivo fundamental es plantear que, verdaderamente, los cultivos de coca deben entenderse como una variable independiente que aun hoy, a pesar de algunos trabajos que cuestionan su importancia como factor explicativo, permiten entender las dinámicas espaciales de la confrontación armada y la ubicación, ya no solo de las FARC sino, igualmente, del ELN.

Miguel González Orejuela, la suma real de este incidente ascendería a un montante, incluso a los diez millones de dólares

¹² Por “Casa Castaño” se entiende a la familia de los tres hermanos Castaño: Fidel, Carlos y Vicente, que son los creadores de toda la estructura paramilitar colombiana desde la década de los noventa y, muy especialmente, una vez desarticulados los cárteles de Medellín y Cali.

A tal efecto, así lo reconocía el General (r) de la Policía Nacional entrevistado, cuando señalaba:

“No piense que el ELN no depende del narcotráfico. Lo hace igual que las FARC. El matiz, sin embargo, se encuentra en que el ELN siempre ha tratado de manejar las bases cocaleras de otro modo, mucho más respetuoso, e integrándolos en su estructura al entender que son proyectos necesarios de inclusión y que conduce al hecho de que el ELN tenga más base y apoyo en términos de organización tanto social como política. Fíjese, nunca se ha hablado de extraditar un comandante del ELN, y en buena medida es por eso. Es muy diferente a unas FARC que son mucho más violentas y que, cuando se imponen al ELN, predominan en su accionar aunque en muchas ocasiones el ELN trata de transar para apoyar a sus bases de legitimación” (EP 5, abril de 2015).

Lo mismo reconocía, por ejemplo “Samir”, cuando, preguntado por el narcotráfico en el seno de las FARC admitía que:

“En el propósito, la década pasada, por tomar el poder por las armas frente al Estado, en ese desespero, el narcotráfico se adentró en las entrañas de la guerrilla. Había que expandir los métodos de financiación. Hasta se sembraba y procesaba la pasta de coca en los laboratorios. Empezamos a construir retaguardias para el cultivo ilícito en todas sus etapas. Allí había campesinos refugiados, perseguidos y delincuentes, familias *farianas*, lisiados de guerra. Se desarrolla la siembra y el procesamiento. Bastaba con ver los dominios de “Iván Márquez”, cuando construyó pistas de aterrizaje en Chocó, o el mismo Frente 58, en el Sinú, como hicieron “Tomás”, recientemente en La Habana, o “El Choncho”, en prisión. El narcotráfico pasó a convertirse en prioridad para las FARC”. ” (EP 8, abril de 2015).

Es decir, se revitalizan tesis como las de Pécaut (2008) o Henderson (2010), en la medida en que se reivindica que los cultivos de coca, cartográficamente hablando, podrían considerarse un factor explicativo de peso, a efectos de entender las lógicas espaciales que acompañan a la violencia directa de FARC y ELN.

Ello, en todo caso, contravendría la hipótesis que, tradicionalmente, han sostenido las guerrillas. En el caso de las FARC, apenas se reconoció su proximidad al narcotráfico a efectos de impuesto de gramaje. Es decir, gravando los cultivos de coca que tuvieran lugar en los enclaves de su control territorial o a lo sumo, gravando el paso de narcotraficantes en la búsqueda por dar con rutas de distribución y salida de la droga fuera del país.

Esta afirmación se construye, no solo con base en la interpretación que cifras y mapas arrojarían sino que, igualmente, se encuentran en las entrevistas en profundidad realizadas, tanto a guerrilleros y otros actores armados, como a miembros de la Fuerza Pública o personeros del país.

Más evidente, incluso, serían los resultados que afectan al ELN que, tradicionalmente, se ha mostrado como la guerrilla más alejada y renuente a participar en todo tipo de prácticas que tengan que ver con cultivo de coca y el narcotráfico.

Las tendencias cartográficas y las entrevistas en profundidad, sobre todo, invitan a pensar en la proximidad que algunos frentes del ELN guardan con este tipo de prácticas, especialmente, en Norte de Santander, Chocó o Nariño. De hecho, cuando el personero de Chocó era pregunta por esta cuestión, reconocía:

“En el municipio no está, A lo sumo están de paso. Pero el Frente “Resistencia Cimarrón” lleva años con gran arraigo aquí. Se reparten las zonas de influencia con el Frente 34 y el Frente 57 de las FARC y también con el Clán Úsuga (o Urabeños). ELN y FARC, al menos aquí llevan años metidos en el cultivo, procesamiento y tráfico de la coca. A eso súmele la minería ilegal, de gran valor en la zona y, sobre todo la extorsión. Quizá como ahora estamos en cese al fuego nos encontramos algo más tranquilos con la presión guerrillera. Pero ésta no ha persistido. Nunca se fue. Aquí nunca llegó ni Uribe ni su Política de Seguridad Democrática. El error fue entender que con mandar a algún policía se solucionaba todo”. (EP 16, septiembre de 2015).

La hipótesis que en ambos casos se baraja es la misma: los cultivos de coca, en tanto que suponen un alto valor agregado para las finanzas de las guerrillas, paulatinamente, se han consolidado como focos de atracción para la presencia de estos grupos y, en extensión, como escenarios propicios para intensificar la confrontación armada, tanto con grupos paramilitares que buscan acceder a estos recursos, como con la Fuerza Pública colombiana, que busca consolidar su presencia territorial y expulsar a las guerrillas.

Tomando como variable dependiente esta violencia directa, la cual se *operacionaliza* a través de las acciones armadas de FARC y ELN, la variable independiente sería la concurrencia de cultivos ilícitos, en forma de hectáreas cultivadas. En suma, la afirmación de partida es que, a medida que se avanza en el lapso de tiempo que transcurre entre 1998 y 2012, intervenido por una lógica de repliegue de las guerrillas y de expansión territorial del Estado - en términos de cobertura y presencia de la Fuerza Pública-, cabe esperar una afectación negativa a las fuentes de poder económico de las guerrillas y, en extensión, una mayor dependencia sobre los cultivos ilícitos. Es decir, dicho de manera más simple, a medida que pasa el tiempo, a mayor presencia de cultivos ilícitos, mayor concurrencia de FARC y ELN.

Esta hipótesis se verifica atendiendo a las cifras que, a efectos de esta tesis doctoral, facilitó el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –ODHDIH-, y el cual se sirve de los reportes de los Boletines Diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, para los años que transcurren entre 1998 y 2010, y para los años 2011 y 2012, de las bases de la Policía Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares. Estos reportes, desglosan homicidios, secuestros, extorsiones y atentados terroristas, y se cruzan con los datos proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – por sus siglas en inglés, UNODC-, a través de su Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI-, y cuyas fuentes, a efecto de aspersión con glifosato, provienen de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional

y en cuanto a la erradicación manual, con base en el Programa de Cultivos Ilícitos de UNODC.

Ya en el capítulo VI se busca, de manera integrada con los dos capítulos recién referidos, atender a la lógica espacial dispuesta por las políticas de seguridad de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2011-2012).

De este modo, la hipótesis nuclear tiene que ver con plantear de qué forma, el éxito, traducido en cifras, de todas estas políticas comprendidas bajo una noción de paz negativa, es decir, de comprensión de la paz como ausencia de conflicto armado, más bien invitan al desánimo o a importantes cautelas. De manera concreta, la hipótesis que se plantea es que los departamentos con mayor nivel, actualmente, de activismo de FARC y ELN, han presentado como constante, una falta de consolidación territorial del Estado colombiano en términos militares. Ello sucede, especialmente, en el suroccidente y la vertiente Pacífico, en el nororiente, y en torno al eje Meta-Caquetá-Putumayo. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que, desde 1998, y de manera creciente, se hayan fortalecido policial y militarmente, especialmente, en el centro del país, en Antioquia y en la costa del Atlántico.

Nuevamente, como variable dependiente se presenta al activismo armado unilateral de las guerrillas, con base en los mismos indicadores que en los capítulos anteriores si bien, como variables independiente, se utiliza el número de operativos unilaterales de parte de la Fuerza Pública colombiana, ya sea por acción de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares.

El resultado es que los enclaves más violentos de la actualidad han mantenido niveles estables, cuando no crecientes, en los últimos quince años de conflicto, toda vez que las prioridades y las evidencias de consolidación territorial se encuentran en otros escenarios. Escenarios que, incluso, como Antioquia o algunos departamentos de la costa Atlántico, como La Guajira, parecen haber empeorado en cuanto a sus indicadores de violencia e inseguridad, especialmente, entre los años 2010 y 2012.

Es por lo anterior que cabe aceptar la invitación al desánimo y la crítica en cuanto a cuestionar este tipo de políticas reactivas, que por medio de posiciones beligerantes buscan consolidar su particular, y discutible, noción de paz. De un lado, porque departamentos como Nariño o Chocó, tradicionalmente, con escasa presencia de la Fuerza Pública, por sus condiciones geográficas y socio-económicas, han servido de bálsamo para las nuevas ubicaciones de la violencia de FARC y ELN que encuentran aquí seguros corredores estratégicos y de retaguardia. De otro, porque enclaves con alta tradición guerrillera, como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Arauca y Putumayo, a pesar de resultar prioritarios en término de número de acciones y combates de parte de la Fuerza Pública, bien por la paridad de fuerzas, bien por la concurrencia, descrita en los capítulos III y IV, de importantes fuentes de financiación, resultan ser mucho más resistentes y apenas muestran cambio alguno en favor de las políticas de seguridad. De hecho, más bien, sucede todo lo contrario.

Resultaría cierto que todos estos departamentos, los más resistentes a la violencia directa del Estado, son los que tradicionalmente acumularon mayor presencia de FARC y ELN, y mayor disposición de recursos económicos y geoestratégicos – por su condición fronteriza, montañosa y selvática. No obstante, lo cierto es que no existen fuentes fiables que, realmente, cuantifiquen de manera rigurosa, más allá de meras aproximaciones, los efectivos guerrilleros que FARC y ELN disponen por departamento¹³.

En todo caso, y como las acciones de las guerrillas, la presencia del Estado a modo de control territorial se cuantifica conforme a uno de los indicadores más confiables de los que se puede disponer, y que es el número de operativos y acciones por iniciativa de la Fuerza Pública, y que se encuentra desglosado a su vez, en el actor receptor de los mismos, ya sean FARC o ELN. Nuevamente, este indicador es dispuesto gracias al mencionado Observatorio, y con base en los idénticos reportes de DAS, Policía Nacional y Estado Mayor de las Fuerzas Militares.

En el capítulo VII se busca, una vez analizada la interacción de FARC y ELN con la Fuerza Pública, incorporar la dimensión del factor paramilitar. Un paramilitarismo que surge a finales de la década de los años setenta e inicios de los años ochenta, y que durante ese tiempo transita como estrecho colaborador de los cárteles de la droga más importante del país.

Esto, sin que suponga, ni mucho menos, renunciar a una particular consolidación de mecanismos de poder y control territorial, de recursos económicos y también de influencia política. Toda su estructura, sin embargo, se consolida con la desaparición de los cárteles y la orientación de todo un relato y una práctica, aunque limitada a algunos casos, de marcado carácter anti-subversivo. De este modo, en los años noventa y en la primera parte de 2000, es cuando, primero las ACCU y después las AUC, se consolidan como el verdadero y renovado entramado de poder paramilitar.

Aunque esta evolución es descrita, primero en los capítulos III y IV y después en este capítulo VII, el objetivo de este último capítulo pasa más por mostrar la organización, la expansión y la ubicación espacial que las AUC experimentan, especialmente, entre 1998 y 2006. Ello, no solo porque hace parte del marco temporal de análisis objeto de estudio, sino porque las AUC, comienzan a actuar a finales de 1997, de manera tal que se inicia su análisis, por sencillez en el manejo de datos, a partir del 1 de enero de 1998. Asimismo, el año 2006 se toma de acuerdo a que si bien la mayoría de los grupos paramilitares se desmovilizan al amparo de la Ley 975 de 2005 - Ley de Justicia y Paz- en el mismo año 2005, hay pequeños remanentes que lo hacen en el primer semestre de 2006. De este modo, se cierra el período de estudio a fecha de 31 de diciembre de 2006.

¹³ No existen datos reales sobre el número real de combatientes que hacen parte, por desglose regional, de los diferentes frentes y bloques de los grupos armados. No obstante, existen aproximaciones en trabajos como los de Medina (2010) o Echandía (2006) así como en los reportes que elabora el Ministerio de Defensa.

La hipótesis general que domina buena parte del imaginario colombiano¹⁴, e incluso en la misma narrativa de las AUC, para lo cual se adicionan algunos testimonios de altos comandantes de la estructura paramilitar, es que allí donde concurrió el paramilitarismo, las guerrillas experimentaron un repliegue en sus acciones cuando no una completa desaparición.

Tal vez, esta noción pueda afectar a las débiles estructuras del ELN en la costa Atlántica e, incluso, algunas de sus notables estructuras en Antioquia, como sucedió con el Frente “Carlos Alirio Buitrago”. Empero, cuando se hace especial referencia a las FARC, el resultado que muestra este capítulo de la investigación parece arrojar resultados bien diferentes. En la posición de relativa debilidad del ELN cuando concurren las autodefensas en Antioquia, es significativa el testimonio de “Byron”, cuando recuerda que:

“Entre 1998 y 2002 llegamos al tope de poder militar en el ELN, y el frente que yo comandaba militarmente, el CAB, llega a sus máximos históricos. Llegué a tener 300 hombres armados. Nosotros veníamos de ser muy pequeños pero experimentamos un alto desarrollo gracias al trabajo con las masas y a los mecanismos de financiación. Ese valor nos pone en una situación a la par del Ejército y del paramilitarismo, a los que combatimos con fuerza en los noventa. La acción armada y nuestra posición hicieron que nos fuese bien hasta que llegan las AUC y se fortalece a las Fuerzas Militares. Eso nos va a afectar muchísimo. En esa época luchamos fervientemente contra Policía, Ejército y paramilitares, pero desde 1998 a la región llegan varios batallones y la situación se pone compleja por la relación que las AUC y las Fuerzas Militares van a mantener contra nosotros”. (EP 10, junio de 2015).

Manteniendo como constante la variable independiente sobre las acciones guerrilleras de las FARC y del ELN, y tomando como variable dependiente la concurrencia de paramilitarismo sobre los mismos enclaves municipales y departamentales objeto de estudio, el resultado es que el activismo de las FARC, principalmente, sobre aquellos escenarios en los que concurre el paramilitarismo, no se reduce sino más bien todo lo contrario. Durante su coexistencia con los mayores niveles de activismo de las AUC, incluso una vez que éstas desaparecen, salvo excepciones como Antioquia, la realidad resultante, más bien, se traduce en un incremento en cuanto a los niveles de violencia directa protagonizados por las FARC, lejos de cualquier atisbo de repliegue o una desaparición.

Los indicadores de violencia directa para el caso de las guerrillas siguen siendo los mismos que en los capítulos anteriores si bien, en el caso del paramilitarismo, a falta de cifras sobre acciones en los mismos términos que la guerrilla, la medición exige la necesidad de utilizar otro indicador. Primeramente, se recurren a los trabajos realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH¹⁵ que, a partir de sus investigaciones, consigue una profunda

¹⁴ Una idea generalizada en Colombia es la de concebir que el paramilitarismo fue un factor de desaparición de la guerrilla allí donde ambos actores coincidieron. Esto, por ejemplo, se constató en las entrevistas con los líderes de las AUC. Asimismo, en algunos trabajos como en Rivas y Rey (2008) se le da una dimensión excesiva al alcance de la disputa entre paramilitares y guerrillas.

¹⁵ El CNMH es quizá el gran referente histórico en el estudio del conflicto armado colombiano. De hecho, además de disponer un importante archivo de actores, acciones, víctimas y dinámicas del conflicto armado

descripción en lo que afecta al alcance territorial, municipal y departamental sobre el que, particularmente entre 1997 y 2005, actuaron los diferentes grupos paramilitares.

Al respecto, la información dispuesta se enriqueció con las entrevistas en profundidad que se llevaron a cabo con algunos comandantes jefe de las AUC y que, especialmente, para Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar, permitieron enriquecer los niveles de control territorial que, inicialmente, habían sido identificados con base en estos trabajos del CNMH.

Sea como fuere, y a efectos de fortalecer el análisis, sí que se presentó la cartografía de las masacres paramilitares, que son el indicador sobre el que el ODHDIH construye sus análisis espaciales, y que fueron puestos a disposición a efectos de la elaboración de este trabajo. Cartografía que se corresponde, a su vez, con la base de datos que, desde el repositorio *Rutas del Conflicto*, el CNMH registra, a efectos de estudiar el alcance territorial de las AUC y la geografía del terror de acuerdo a las masacres producidas. Masacres que a su vez son desglosadas en su base de datos, pormenorizadamente a efectos de municipio, departamento, descripción del actor, número de muertos y motivación del crimen.

Finalmente, en el capítulo VIII, se introduce un último factor de estudio, a fin de entender si las condiciones socioeconómicas afectan a las transformaciones de la violencia directa derivada del conflicto armado y, en tal medida, de qué modo lo hacen. La hipótesis fundamental es la de reivindicar a los factores estructurales, más que como factores causales del conflicto armado, lo cual no es de importancia a efectos de esta investigación, como factores explicativos de las posibles tendencias de cambio o continuidad que la violencia ha experimentado en Colombia, a través de su conflicto armado.

Es decir, la violencia directa de FARC y ELN, como en el resto de casos, opera como variable dependiente, en iguales términos que en los casos anteriores mientras que los condicionantes socioeconómicos, especialmente PIB per cápita, desempleo y umbral de pobreza, pero también IDH o INBI son empleados como medidores que fungen como factor de afectación de acuerdo a los datos favorecidos tanto por Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE como por el Departamento de Prosperidad Social – DPS.

El resultado es que, en términos históricos, cuando se cruzan las variables de violencia directa de FARC y ELN con las de violencia estructural, de carácter socioeconómico, se arroja como resultado una limitada relevancia en lo que a términos de correspondencia estadística se trata. Los datos actuales imposibilitan las opciones para desarrollar una regresión que confiera rigor histórico al análisis de esta relación, aunque las correlaciones acompañadas a tal efecto,

interno colombiano, es creador de uno de los informes más completos, como es, publicado en el año 2013, *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*.

Especialmente, se destacan sus trabajos sobre paramilitarismo. Asimismo, y tal y como se señala, con un programa interactivo como <http://rutasdelconflicto.com/>, creado en 2014, se puede acceder de manera sencilla a todo el banco de datos e información.

en la mayoría de los casos, muestran un resultado negativo y, cuando es positivo, termina siendo poco significativo, con la excepción de unos pocos departamentos.

Sin embargo, y reconociendo esta debilidad, lo cierto es que, con base en estadística descriptiva sí que es posible identificar algunas afectaciones que vinculan la violencia directa y la violencia estructural en los últimos años. Es decir, si se centra la atención es los departamentos que últimamente se han consolidado como los que contabilizan mayor número de acciones de FARC y ELN, tal y como es el caso de Arauca, Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, se puede encontrar que no solo los indicadores sociales y económicos referidos coinciden con los de violencia sino que, igualmente, otros medidores multidimensionales, como son el IDH o el INBI, lo hacen en unos términos muy parecidos. A su vez, todos estos departamentos, con la excepción de Arauca¹⁶, condensan los mayores niveles de hectáreas cultivadas con coca de todo el país.

Aunque los factores estadísticos, por tanto, invitan a relativizar análisis estadísticos de acuerdo a los datos disponibles, desde una cartografía descriptiva, y al menos, con base en el proceso selectivo sobre ciertos enclaves que desarrollan los actores protagonistas del propio conflicto, se invita a tomar en consideración la variable social y la variable económica, al menos, como factores coadyuvantes en cuanto a las transformaciones y continuidades espaciales que a la violencia directa de FARC y ELN se refiere.

Por último, el capítulo IX serían las conclusiones, las cuales buscan, no solo cerrar el análisis descriptivo e interpretativo sobre el que se desarrolla este trabajo doctoral sino, lo más importante, plantear más preguntas que respuestas y explorar, con base a los resultados obtenidos, nuevas posibles líneas de investigación y nuevas hipótesis que permitan arrojar más luz en la comprensión de un fenómeno tan complejo y multifactorial como es el conflicto armado de Colombia.

Es así, y a modo de resumen, que el planteamiento analítico que propone esta tesis se construye con base a cuatro hipótesis fundamentales:

- a) Los cultivos de coca afectan al conflicto armado en términos que resultan un factor atractivo a la presencia de grupos armados como las FARC y el ELN. Es decir, a más cultivos de coca, más posibilidad de que confluyan grupos armados y acciones de violencia directa. Así, la variable dependiente sería la violencia directa unilateral de FARC y ELN, por medio de acciones armadas, y la variable independiente, los cultivos de coca, expresados en términos de hectáreas cultivadas de coca.
- b) Las acciones unilaterales de parte de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Fuerzas Militares, son un factor disuasivo a la presencia de grupos armados como las FARC y el ELN, allí donde las cifras presentan grandes diferencias entre el número de acciones militares y el número de acciones guerrilleras. Es decir, a menor concurrencia de FARC

¹⁶ Como ya se verá con detalle, porque en Arauca priman otras fuentes de financiación como secuestro y extorsión a la industria extractiva así como el control del contrabando con Venezuela.

y ELN, mayores posibilidades de éxito de presencia de la Fuerza Pública y control territorial en favor del Estado. En esta ocasión, la variable dependiente sería la violencia directa unilateral de FARC y ELN, por medio de acciones armadas, y la variable independiente, el número de acciones armadas unilateralmente desarrolladas por Policía Nacional y Fuerzas Militares. Es conveniente redundar en que se trata de resaltar el factor de disparidad de fuerzas pues, como se verá, los departamentos que más acciones militares reciben no son aquellos donde las FARC, y en menor medida, el ELN, son expulsados, dado el notable arraigo sobre algunos de estos territorios.

- c) El control territorial del paramilitarismo, concretamente de las AUC, no son un factor disuasivo a la presencia de grupos armados como FARC, en términos del número de acciones guerrilleras. Es decir, donde mayor concurrencia de AUC hubo, no se evidencian reducciones significativas en el activismo de las FARC. Más bien, todo lo contrario. Salvo excepciones como Antioquia, no solo no se reducen sino que, en muchos escenarios, se incrementan tanto el número de acciones armadas, como el número de municipios con presencia guerrillera. La variable dependiente sería la violencia de FARC y ELN, por medio de acciones armadas y presencia municipal, y la variable independiente, los municipios con dominio y control paramilitar.
- d) La violencia estructural, en términos socioeconómicos, es un factor que explica la persistencia de las acciones armadas de FARC y de ELN, de acuerdo al número de acciones guerrilleras. Es decir, donde hay peores niveles de desempleo, pobreza o ingresos, hay más tendencia a que concurren acciones violentas de las FARC y del ELN. Igual sucede con otros indicadores como IDH o INBI. Es decir, la variable dependiente sería la violencia unilateral de FARC y ELN, por medio de acciones armadas y municipios con presencia guerrillera, y la variable independiente, los indicadores y medidores de desarrollo socioeconómico que, por su ausencia, son entendidos en términos de violencia estructural. No obstante, a esta afirmación se llega tras un intento de comprensión, frustrado, por regresiones y correlaciones, y de acuerdo a la información disponible de fuentes que, desestima una correlación positiva y afirmativa en términos absolutos.

En conclusión, se podría afirmar que la violencia directa de los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN en Colombia, entre 1998 y 2012, se puede entender sobre la base de la concurrencia de cultivos ilícitos, de un menor número de operativos de la Fuerza Pública y de mayores niveles de violencia estructural, dejando por fuera, por ende, la importancia como factor interviniente, del paramilitarismo lo cual tiene como punto de convergencia lo que podría señalarse como una hipótesis transversal, presente en todo el trabajo: la *periferialización* del conflicto armado. Una *periferialización* que se sostiene como resultado de una suma de factores como la expuesta y que se entiende con base en aquellos departamentos que se caracterizan por ser no solo departamentos alejados de los centros políticos, administrativos y económicos del país y, predominantemente, de carácter

fronterizo sino que, igualmente, son periféricos por presentar niveles de desarrollo económico, social e institucional de los más bajos del país.

2. Metodología de la investigación y fuentes para la investigación

La metodología de esta tesis doctoral concita dos elementos o partes en cuanto a la estructura del trabajo y su orientación. De un lado, se cumple con una función descriptiva que, mayormente, se condensa en los capítulos II y III, cuando en términos generales se describe el conflicto colombiano, remontándose para ello a una contextualización de Colombia, ya referida, que comienza en los años treinta y cuarenta, y que desemboca en los aspectos más actuales, propios de los mandatos presidenciales de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y los dos primeros años de Juan Manuel Santos.

De otro, se cumple con una función analítica e interpretativa que, construida sobre una revisión bibliográfica y un marco teórico que busca ubicar este trabajo doctoral dentro del prolífico campo bibliográfico que ha tratado el tema del conflicto armado colombiano, se desarrolla en los capítulos IV, V, VI, VII y VIII, y sobre los cuales se vierten las diferentes hipótesis descritas en el epígrafe anterior.

Lo cierto es que en toda esta dimensión de mayor cariz analítico se construye de acuerdo a un recurrido empleo en cuanto a fuentes, indicadores y cifras que, en suma, confieren al trabajo una impronta eminentemente cuantitativa. Ello, en la medida en que, en última instancia, por el valor agregado de las mismas fuentes, las cuales hasta el momento no habían sido analizadas en profundidad, permite entender un notable arraigo entre lo que se afirma y lo que invita a interpretar la realidad numérica de tales fuentes.

Una base fundamental que sustenta este trabajo doctoral reposa en el valor de la documentación, apenas trabajada por algunas aportaciones académicas pero, ni mucho menos, en su totalidad, que fue proporcionado por el ODHDIH, en el cual, desde 1998 y hasta 2012 se desglosaban, a nivel municipal, multitud de indicadores propios del conflicto, como acciones de las FARC, acciones del ELN, casos de secuestro y extorsión, desplazamiento forzado, número y tasa de homicidios violentos o iniciativas de la Fuerza Pública contra FARC y ELN, igualmente, por desglose, anual y municipal.

Una vez trabajado este documento y revisada a profundidad la bibliografía existente, hasta el momento, ningún trabajo analiza, tan pormenorizadamente, esta cuestión, a efectos de entender las evoluciones y transformaciones que, en los últimos quince años, y muy particularmente, de acuerdo a sus dinámicas espaciales, ha experimentado el conflicto armado colombiano.

Los otros datos son obtenidos, igualmente, de un documento que, sin ser público, fue puesto a disposición de este trabajo de investigación, gracias a la colaboración de UNODC Colombia. Éste es el reporte anual, entre 2001 y 2012, del total de cultivos ilícitos del país,

a partir de un desglose municipal por hectáreas cultivadas y, lo más importante, por hectáreas erradicadas, tanto manual como de forma aérea, y que resulta de gran valor a efectos de desarrollar los capítulos IV, V y VI. La información adicional, en términos numéricos, fue simplemente obtenida de los reportes anuales que UNODC desarrolla para Colombia a través del SIMCI y que sirvieron, por ejemplo, a efectos de identificar las acciones de desmantelamiento de laboratorios de procesamiento y tratamiento de la coca así como para incorporar algunas cartografías.

Asimismo, las cifras de los indicadores socio-económicos se obtienen, también, gracias a la colaboración del DPS, que proporcionó todo el banco de datos sobre pobreza, informalidad, marginalidad, PIB, PIB per cápita o desempleo, entre otros muchos indicadores. Sin embargo, como ya se reconoció, el alcance de las cifras sigue siendo insuficiente y es necesaria una mayor recolección de información por parte de las autoridades del país. En todo caso, las cifras socioeconómicas accesorias fueron obtenidas de las bases de datos de libre disposición que tiene el DANE.

Sin embargo, la dimensión de cifras socioeconómicas de acuerdo a un intento de desglose municipal o departamental continúa siendo una necesidad, hasta el momento irresoluta. Tal es la magnitud de esta carencia que, por ejemplo, a modo de ilustración, el último censo de población realizado fue de 2005 y, por el momento, el país continúa sin disponer de un catastro nacional. Dos elementos que visibilizan la debilidad que, en lo que afecta al tratamiento de datos, persiste en el país.

Todo este sustento cuantitativo se acompañó de cartografías, hasta el momento de este trabajo de investigación, algunas de libre acceso, otras no, y que fueron dispuestas por el mencionado Observatorio. Quizá estas cartografías, como técnicas de representación del fenómeno de la violencia derivada del conflicto armado colombiano, son los instrumentos de mayor importancia para esta tesis doctoral, en la medida en que fungen de perfecta forografía de cómo ha evolucionado el activismo guerrillero de las FARC y del ELN y de cómo se construyó, especialmente, la PSD.

Dicho de otro modo, las hipótesis de *periferialización* del activismo guerrillero de las FARC y del ELN, así como el componente centrífugo de la PSD no quedarían tan corroboradas, de no haberse recurrido a las técnicas cartográficas como valor ilustrativo de las hipótesis en cuestión. Asimismo, la base cuantitativa que acompaña a las cartografías es igualmente nuclear, en la medida en que permite traducir no solo en mapas, sino también en datos, todo el contenido analítico que se despliega en los capítulos IV, V, VI, y parte del VII.

Indistintamente, y como toda labor de profundidad científico social, además de esta base numérica, se recurrió a diferentes técnicas de investigación social, mayormente observación directa, que me permitió conocer casi doscientos municipios en contexto de violencia, entrevistas en profundidad y encuestas que, antes de todo, exigen ser abordadas con un mínimo de detalle.

Un elemento que permitió conocer y aproximar este trabajo a la intrincada realidad colombiana se encontró en mi propio desempeño profesional que, especialmente, durante los años 2012 y 2013, por medio de mi labor como consultor en la Federación Nacional de Departamentos – FND-, y en la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI-, me permitió conocer dos terceras partes de los departamentos del país y, en total, acumular una experiencia directa sobre más de 200 municipios.

A nivel de encuestas, como se recogió en los agradecimientos, el acceso y la colaboración con las fuentes se pudo desarrollar a través de la Federación Colombiana de Municipios – FCM-, la cual favoreció el trabajo al permitir contactar con las alcaldías de Colombia, e interactuar, de facto, con los alcaldes y alcaldesas del país tanto en los cursos y capacitaciones que brindaba la FCM como en los encuentros nacionales que, como en Bucaramanga, se produjeron en el año 2014. De hecho, de los 1.123 municipios que conforman el país, se consiguió encuestar a un total de 221 alcaldías, respondiendo a la siguiente distribución y proporción: Antioquia: 32 alcaldías sobre 125 municipios (25.60%); Atlántico: 7 alcaldías sobre 25 municipios (28.00%); Bolívar: 10 alcaldías sobre 48 municipios (20.83%); Boyacá: 16 alcaldías sobre 123 municipios (13.00%); Caldas: 12 alcaldías sobre 27 municipios (44.44%); Caquetá: 5 alcaldías sobre 16 municipios (31.25%); Casanare: 9 alcaldías sobre 19 municipios (47.36%); Cauca: 11 alcaldías sobre 42 municipios (26.19%); Cesar: 3 alcaldías sobre 25 municipios (12%); Chocó: 5 alcaldías sobre 30 municipios (16.66%); Córdoba: 4 alcaldías sobre 30 municipios (13.33%); Cundinamarca: 30 alcaldías sobre 116 municipios (25.86%); Guainía: 1 alcaldías sobre 1 municipio (100%), Guaviare: 2 alcaldías sobre 4 municipios (50%); Huila: 7 alcaldías sobre 37 municipios (18.91%); Magdalena: 3 alcaldías sobre 30 municipios (10.00%); Meta: 7 alcaldías sobre 29 municipios (24.13%); Nariño: 10 alcaldías sobre 64 municipios (15.62%); Norte de Santander: 4 alcaldías sobre 40 municipios (10%); Putumayo: 3 alcaldías sobre 13 municipios (23.07%); Quindío: 4 alcaldías sobre 12 municipios (33.33%); Risaralda: 3 alcaldías sobre 14 municipios (21.42%); Santander: 16 alcaldías sobre 87 municipios (18.39%); Sucre: 3 alcaldías sobre 26 municipios (11.53%); Tolima: 4 alcaldías sobre 47 municipios (8.51%); Valle del Cauca: 11 alcaldías sobre 42 municipios (26.19%)¹⁷. Dicho de otro modo, sobre un total de los 1.123 municipios de Colombia, el total de alcaldías encuestadas sería de 221 alcaldes, es decir, el 19.67%.

Aunque se trata de una muestra considerable, el volumen de las alcaldías trabajadas en esta tesis doctoral se encuentra por debajo del término deseado. Partiendo, por razones de alcance y cobertura, de un muestreo aleatorio simple, el ideal de la muestra de alcaldías encuestadas hubiera sido de un total de 286 municipios (25.4%), a efectos de obtener un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación del 5%. Empero, la cifra obtenida, de 221 alcaldías encuestadas, ofrece un nivel de confianza del 95% pero con un error de estimación del 6%, lo cual supone relativizar lo que, a modo de encuestas se concibe como el mínimo óptimo. No obstante, la complejidad del objeto de estudio, la dificultad de acceso a fuentes y la

¹⁷ Es decir, de Amazonas, Arauca, La Guajira, San Andrés, Vaupés, Vichada no se tendría registro alguno.

renuencia, en muchas ocasiones, a tratar estos temas, y otras tantas cuestiones de agenda o disponibilidad dificultaron la labor de aumentar el objeto de muestra estudiada.

A efectos de metodología de la encuesta, hay que señalar algunos aspectos que resultan importantes tener en consideración. En primer lugar, la propia información dirigida a quien resuelta encuestado, y por la cual, dada la actualidad de la violencia respecto de este tipo de cargos, próximos a la institucionalidad local, se reconoce la confidencialidad de los datos tanto personales como de la alcaldía objeto de encuesta.

Es por ello que todo el manejo de información de los cuestionarios sobre las alcaldías, elaborado durante más de un año que fue el período de recolección de datos, en ningún momento muestra cifras o interpretaciones por desglose municipal. Los desgloses de información son siempre, estrictamente, en términos departamentales, precisamente, a efectos de evitar poner en riesgo ciertas posiciones políticas dentro de los enclaves que conviven en mayor proximidad con la violencia directa y la presencia de los grupos armados.

Tabla 1: Medición de la confiabilidad de la muestra de alcaldes objeto de estudio

N [tamaño del universo] 1.123

P [probabilidad de ocurrencia] 0.5

Nivel de confianza (alfa)	1-alfa/2	Z (1-alfa/2)	Fórmula empleada
90%	0.05	1.64	$N = \frac{n_o}{1 + \frac{n_o}{n}}$ donde: $n_o = p^*(1-p)^* [z (1-\alpha/2) / d]^2$
95%	0.025	1.96	
97%	0.015	2.17	
99%	0.005	2.58	

Matriz de tamaños muestrales para un universo de 1.123 con una p. de 0.5										
Nivel de confianza	d [error máximo de estimación]									
	10.0%	9.0%	8.0%	7.0%	6.0%	5.0%	4.0%	3.0%	2.0%	1.0%
90%	63	77	96	122	160	217	306	449	673	962
95%	88	107	132	167	216	286	391	547	765	1005
97%	107	129	158	198	253	332	445	604	813	1025
99%	145	174	211	261	327	418	540	699	884	1052

Fuente: Elaboración propia

El cuestionario, además de iniciar con la declaración de intenciones y la referida cláusula de total confidencialidad, solicita información sobre el cargo y la persona objeto de encuesta, a fin de favorecer su tratamiento analítico. A ello le siguen catorce preguntas las cuales, de una manera sencilla, y con un lenguaje adaptado a la realidad social colombiana, previamente socializado, busca indagar sobre aspectos concretos que tienen que ver con las hipótesis y visiones desde las que, inicialmente, se configura este trabajo.

Las tres preguntas iniciales buscan indagar en si verdaderamente, se puede encontrar un cambio sustancial, a nivel local, en las dinámicas que acompañan al desarrollo del conflicto armado colombiano entre 1998 y 2012. Se ofrece tanto una respuesta de escala, sobre si dicha evolución puede considerarse como “excelente”, buena”, “regular” o “mala”, como dos respuestas abiertas, a modo de identificar la principal fortaleza y la principal debilidad acontecidas en estos quince años.

- *Pregunta 1. La respuesta en su municipio a los problemas derivados del conflicto armado ha sido: 1- Excelente; 2- Buena; 3- Regular y 4- Mala.*
- *Pregunta 2. Para el período 1998 – 2012, ¿el principal avance en materia de seguridad en su municipio ha sido?*
- *Pregunta 3. Para el periodo 1998 – 2012, ¿la principal debilidad en materia de seguridad en su municipio ha sido?*

Las preguntas 4, 5 y 6 buscan obtener información en relación a la variable de cultivos ilícitos, a fin de explicar si estos existen o no en el nivel municipal y, en caso de darse, indagar con respecto a si supone un efecto de atracción para la presencia de grupos armados. Es así que las preguntas se articulan con base en una lógica definida. En primer lugar, de acuerdo al reconocimiento sobre si en el municipio de la alcaldía encuestada hay o no existencia de cultivos ilícitos de coca. En caso de no haberlos, el resto de preguntas no ameritan ser respondidas. Sin embargo, si la respuesta es positiva, las siguientes dos preguntas van orientadas a entender la relación entre tales cultivos ilícitos y la concurrencia de prácticas violentas, ya sea *lato sensu*, ya sea concretamente por la existencia de grupos armados irregulares en el municipio.

- *Pregunta 4. Dentro del periodo 1998 – 2012, el impacto de los cultivos ilícitos en su municipio ha sido: 1- Crítica; 2- Alto; 3- Medio; 4- Bajo*
- *Pregunta 5. La relación entre cultivos ilícitos y violencia en su municipio es: 1- Muy Alta; 2- Alta; 3- Regular; 4- Baja; 5- Muy Baja*
- *Pregunta 6. La relación entre cultivos ilícitos y presencia de grupos armados en su municipio es: 1- Muy alta; 2- Alta; 3- Regular; 4- Baja; 5- Muy Baja*

Asimismo, las preguntas 7 y 8 se integrarían con esta misma dimensión aunque a efectos de obtener información respecto de cómo la alcaldía percibe el impacto de la PSD y del Plan Colombia. Especialmente, en el caso del Plan Colombia, de acuerdo a las acciones de

aspersión aérea con glifosato. Ambas preguntas solo son respondidas en el momento en que, inicialmente, el encuestado reconoce la existencia de cultivos ilícitos en su municipio.

Al respecto, la pregunta 7 intenta valorar cuál es la percepción del impacto de ese tipo de preguntas, en una escala de respuestas que ofrecen cinco posibilidades: “muy buenos”, “buenos”, “regulares”, “malos” y “muy malos”. La pregunta 8 permite la posibilidad de profundizar en la respuesta, en tanto que busca obtener mayor información con respecto a cómo son concebidas las prácticas de erradicación aérea de los cultivos ilícitos.

- *Pregunta 7. Para el periodo 1998 – 2012, los resultados de la fumigación aérea sobre los cultivos ilícitos en su municipio han sido: 1- Muy Buenos; 2- Buenos; 3- Regulares; 4- Malos; 5- Muy Malos*
- *Pregunta 8. ¿Por qué?*

Por su parte, las preguntas 9, 10 y 11, buscan obtener información sobre la situación socio-económica de los municipios, a efectos de ver cómo esta cuestión ha sido abordada en el tiempo, de qué modo afecta a la violencia estructural y se integra con la violencia directa de los grupos armados y, finalmente, qué dimensión ofrece a efectos de aspirar a desactivar el conflicto armado.

- *Pregunta 9. Para el periodo 1998 – 2012, la evolución de la situación socioeconómica de su municipio ha sido: 1- Excelente; 2- Buena; 3- Regular y 4- Mala.*
- *Pregunta 10. Valore de 1 a 10 las causas de la violencia en su municipio, siendo 1 nada relevante y 10 muy relevante: Desempleo, Desigualdad, Pobreza, Corrupción, Presencia de Grupos Armados, Presencia Cultivos Ilícitos o Ausencia Institucional del Estado.*
- *Pregunta 14. Valore de 1 a 10 las condiciones socioeconómicas actuales de su municipio de cara al posconflicto, siendo 1 muy poco satisfactorias y 10 muy satisfactorias.*

Con base en lo anterior, a efectos de valorar la presencia de los grupos armados en el municipio - incluyendo el EPL y los grupos paramilitares- es imprescindible valorar las percepciones de los mismos en el nivel local, tanto en 1998, como en 2012, para lo cual se plantean las preguntas 11 y 12:

- *Pregunta 11. Valore de 1 a 10 el nivel de presencia que en 1998 tenían en su municipio los siguientes grupos armados, siendo 1 nada relevante y 10 muy relevante: FARC-EP, ELN, EPL y AUC.*
- *Pregunta 12. Valore de 1 a 10 el nivel de presencia actual de los siguientes grupos armados en su municipio, siendo 1 nada relevante y 10 muy relevante: FARC-EP, ELN, EPL y Bacrim.*

Por último, y para finalizar el cuestionario, quedaría la pregunta número 13, que permite evaluar sobre las alcaldías si ha existido o no una evolución, en términos de fortalecimiento municipal – prosperidad socio-económica, generación de ingresos y favorecimiento de oportunidades- dentro de la tesitura de conflicto armado, desde 1998.

- *Pregunta 13. Valore de 1 a 10 el fortalecimiento y desarrollo que su municipio ha experimentado desde 1998 hasta la actualidad, siendo 1 muy poco satisfactorio y 10 muy satisfactorio.*

Estas 221 encuestas buscan, con todo, plantear una primera aproximación interpretativa respecto del análisis que las bases de datos y las cartografías utilizadas representan. Así, sobre los capítulos IV y V, se busca adicionar información y profundizar en su análisis, de acuerdo a los resultados que arroja el estudio, en cuanto a la referida relación entre violencia directa y presencia de FARC y ELN, y concurrencia de cultivos ilícitos. Igualmente, adiciona información en relación a la percepción de seguridad experimentada en Colombia aunque, en este caso, interpretada con base a la consideración de las diferentes alcaldías. De este modo, se profundiza en las interpretaciones no solo sobre el alcance de las políticas públicas de seguridad sino, en adición, entendiendo si se pueden apreciar cambios significativos en cuanto a las dinámicas regionales.

Asimismo, las encuestas adicionan una importante información sobre el alcance y sentido del factor paramilitar y de qué manera, se puede entender la igual dimensión, a efectos del fenómeno pos-paramilitar, de las Bacrim.

Por último, en relación con la variable estructural-institucional del Estado colombiano, los aportes del cuestionario son tanto a efectos de identificar sus principales debilidades, como en relación a la evolución de las mismas en los últimos quince años. También, de acuerdo a la posición actual de la institucionalidad local a efectos del referido y eventual escenario de posconflicto, en la medida en que las negociaciones de La Habana con las FARC, prosperen positivamente.

Una tercera técnica de investigación, junto con las cartografías y las encuestas serían las entrevistas en profundidad, con las cuales resulta imprescindible incorporar testimonios y experiencias de combatientes, tanto de las guerrillas como del paramilitarismo, así como de la Fuerza Pública y del poder político.

Por las AUC se consiguió entrevistar a dos de los comandantes de mayor importancia en la estructura del paramilitarismo colombiano durante los años objeto de estudio. De un lado, Edward Cobos Téllez, “Diego Vecino”, preso en el establecimiento carcelario de Bogotá, “La Picota”, y jefe político de las AUC, máximo comandante de Bloque Héroes de Montes de María (BHMM) así como firmante del Pacto de Ralito – que fue el proyecto político del paramilitarismo en Colombia, posteriormente abordado. De otro lado, Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, preso en el establecimiento carcelario de “Itagüí”, próximo a

Medellín, y hombre de confianza de los hermanos Castaño que, como se verá con posterioridad, le pusieron al frente del Bloque Élmer Cardenas” (BEC).

Del lado del ELN, las entrevistas se hicieron con dos guerrilleros, igualmente, de relevancia dentro de su estructura organizativa. El primero de ellos, Carlos Velandia, conocido en su época de guerrillero como “Felipe Torres”, y que durante treinta años en la estructura guerrillera, fue uno de los miembros de la Dirección Nacional, esto es, parte del Comando Central – COCE-, y uno de los valedores del proceso de negociación con la presidencia de Ernesto Samper. El segundo, José Luis Ramírez Herrera, alias “Byron”, antiguo jefe militar del ELN en el frente Carlos Alirio Buitrago (CAB), uno de los más importantes de esta guerrilla, y recluido en el establecimiento carcelario de Itagüí, una vez que fue capturado, en 2005. Razón esta por la que la revista Semana no dudó en publicar que se trataba del “golpe más duro al ELN de la última década”¹⁸

Además de los cuatro testimonios descritos, de parte de las FARC se integraron dos testimonios más. El primero de ellos, el de Elda Neyis, alias “Karina”, sin duda, la mujer más importantes en la estructura organizativa de la historia de las FARC, en las que, tras más de dos décadas de pertenencia, llegó a ser comandante del Frente 42, siendo la primera mujer que llegaba a ese rango en el seno de las FARC. También se consiguió entrevistar a Daniel Sierra Martínez, “Samir”, quien tras más de dos décadas en las FARC llegó a ser el segundo comandante de las FARC en el poderoso Frente 5, operativo en Urabá, donde trató de obtener arraigo en esta zona bananera, donde competía por el control de las masas con el EPL.

Finalmente, se incorporó el testimonio de Olimpo de Jesús Sánchez, alias “Cristóbal”, quien en los años noventa encabezó una escisión con el ELN a fin de crear su propio grupo armado, el Ejército Revolucionario Guevarista – ERG-, que actuó en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca y que, con eventuales acciones de combate, optó más por actividades delictivas, en alianza con las FARC. El propio “Cristóbal”, una vez que era entrevistado reconocía:

“Yo me metí en la guerrilla por combatir a la oligarquía colombiana. Luego vinieron los paramilitares y entonces el frente del cual yo era comandante ofrecía respuestas livianas. ¿Qué hice? Salirme y montar mi propio grupo insurgente. Había que aspirar a tomar el poder por las armas. Y puedo decir que yo le di duro al paramilitarismo y al Estado. De hecho, yo me desmovilizo sin sentir lo más mínimo la presión de la Política de Seguridad Democrática”. (EP 11, septiembre de 2015).

Con estos testimonios se integraban a las tres estructuras ilegales más importantes de la historia del conflicto armado, y se garantizaba una particular perspectiva en la medida en que todos ellos tuvieron y ostentaron importantes cargos de responsabilidad y control dentro de sus respectivas estructuras. De igual forma se cubría espacialmente el conflicto armado con responsables directos respecto de las acciones propias de la violencia en los departamentos

¹⁸ Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/yugular/72452-3> Consultado el 5 de agosto de 2015.

de Arauca, Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Las anteriores entrevistas se complementaron con otras de orden gubernamental, como las realizadas al Expresidente de la República, Álvaro Uribe (2002-2010), en la actualidad, Senador de la República; y a Angelino Garzón, un referente sindical que llegó a ser Gobernador de Valle del Cauca, Ministro de Trabajo y Vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). También se incorporaron los testimonios de Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2003, y creadora de la PSD – que según su testimonio, en inicio era mucho más integral que el simplismo militar en la que quedó desdibujada; y Germán Bula, Consejero de Estado, exministro de Educación con Andrés Pastrana, y uno de los grandes conocedores del conflicto armado en el complejo departamento de Córdoba.

Por último, una tercera dimensión de entrevistas en profundidad se dirigió a recoger los testimonios de algunos de los personeros de municipios con alta tradición de violencia derivada del conflicto armado. Principalmente se entrevistaron personeros de Antioquia, Arauca, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Todos estos testimonios son recogidos con total rigurosidad y siempre bajo garantía absoluta del anonimato, al tratarse todas de municipios con elevados niveles de concurrencia en cuanto a presencia de grupos armados, desplazamiento, narcotráfico y violencia directa. Es por todo que, son obviados datos personales así como referencias expresas a los municipios en cuestión.

Finalmente, se entrevistaron a dos generales, en buen retiro, de la Fuerza Pública, uno de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Militares que, no obstante, estuvieron activo en buena parte del período objeto de estudio. Dos testimonios, igualmente, conocedores y decisores sobre algunas de las lógicas de las políticas de seguridad acontecidas en Colombia pero que, como en el caso de los personeros, por razones de seguridad, resulta obviada su identidad.

Junto a la interpretación de la base de datos y las cartografías originales favorecidas, unido al cercano trabajo de observación directa, las 221 encuestas y las 20 entrevistas en profundidad, se recurre a una interpretación de cariz estadístico que, a modo de correlaciones primero, y de estadística descriptiva después, en especial, en el capítulo VIII, busca entender si lo mostrado por todas las fuentes anteriores se corrobora o si, por el contrario, en términos estrictamente cuantitativos se pueden encontrar importantes desviaciones que debiliten la hipótesis de partida de la que se sirve este trabajo.

Empero, parece que finalmente lo anterior no sucede y cabe entender que en el recurrido término de *periferialización*, mayormente concurre una dimensión social y económica que no debilita sino todo lo contrario la dimensión estructural en cuanto a la comprensión de la violencia directa derivada del conflicto armado.

3. Justificación y limitaciones de la investigación

De acuerdo a todo lo anterior, es que se pueden plantear o destacar algunos aspectos que hacen de este trabajo una aportación novedosa y original a una de las muchas aristas que ofrece el conflicto colombiano, de la misma manera que se deben reconocer otras tantas debilidades.

Del lado de las posibilidades, interpreta de la manera más extensa posible, toda una información, densa, amplia y multifactorial, respecto de los aspectos más relevantes de la violencia directa en Colombia en los últimos años. Ello, con base en unos datos y unas cartografías que, en suma, con lo ya descrito, permiten arrojar luz sobre la comprensión de las dinámicas espaciales del conflicto armado en los últimos quince años.

Además, esto se hace, no solo describiendo las evoluciones en cuanto a la geografía del conflicto sino, de manera integrada, por medio de su interacción con factores que se entienden, y se muestran explicativos. Así es el caso de los cultivos ilícitos, el impacto de las políticas de seguridad, la relación con el paramilitarismo y, finalmente, la violencia estructural.

Todo se ajusta y redunda en unas hipótesis que, igualmente, puede entenderse como novedosa. El reduccionismo de entender a las guerrillas, en ocasiones, como narco-terrorismo, casi nunca está acompañado de fuentes confiables y análisis estrictos. Asimismo, se tiende a ensalzar, también sin bagaje comprensivo, el resultado de las políticas de seguridad más beligerantes cuando, todo lo contrario, este trabajo más bien evidencia profundas debilidades, que bien pudieran ser atendidas a efectos de diseños posteriores.

De otro lado, también domina la consideración, en buena parte del imaginario colectivo colombiano, de un impacto del paramilitarismo como actor de expulsión de las guerrillas que, con base en lo que plantea este trabajo, debe relativizarse, pues salvo en excepciones departamentales, ni mucho menos cabría afirmar que ésta fuese la tendencia dominante.

Por último, muchos trabajos, tanto de resolución de conflictos como de investigaciones para la paz enfatizan en el análisis estructural como escenario de partido para la comprensión de las lógicas de guerra y paz. Este trabajo, empieza en 1998 y termina en 2012 de manera que, aun cuando se quisiera, no se pueden abordar los factores estructurales que sirvieron de base a la aparición del conflicto en Colombia a mediados del siglo pasado, y que buena parte de la bibliografía así lo reconoce. Es más, si se hace uso de los datos y cifras actualmente disponibles, esa afirmación no se puede categorizar aunque, en términos descriptivos, y tal y como se plantea, sí que parecería que la dimensión socio-económica pudiera contribuir, notablemente, en la comprensión de las continuidades y rupturas acontecidas en el conflicto armado colombiano.

Del lado de las debilidades, existen varios aspectos que merecen ser mencionados. La primera pudiera ser temática, esto es, respecto de justificar por qué trabajar un tema que ha

condensado tanta bibliografía y tanta discusión académica. Sin embargo, es precisamente esa discusión, en ocasiones mucho más interpretativa que analítica, y en otras ocasiones, sesgada por juicios de valor, la que deja entrever amplios resquicios sobre los que aportar nuevas posibilidades en cuanto a la comprensión del conflicto.

Sea como fuere, una primera debilidad se encuentra en el manejo de fuentes. Las fuentes más fiables, continúan siendo institucionales aunque, bien es cierto, cuando se analizaron otras como, por ejemplo, los bancos de datos del CINEP, descartados por el desmesurado coste económico para acceder a los mismos, la tendencia es bien similar. No obstante, hay que reconocer un posible sesgo derivado de una obviedad como es la fuente que maneja los datos, como se dice, marcadamente institucional.

Otra debilidad se encuentra en el manejo de la muestra de encuestas sobre las alcaldías, pues no se llega a cubrir el ideal de un 95% de confiabilidad sobre un 5% de margen de error. Si bien es cierto que el resultado se aproxima mucho, un resultado óptimo hubiera requerido de 76 encuestas más. Sin embargo, la dificultad de recolección de datos, la difícil disposición, en muchas ocasiones, de los alcaldes y alcaldesas, y la coyuntura pre-electoral, unido a la necesidad de cerrar este trabajo en términos de calendario académico, finalmente, invitaron a desestimar esa posibilidad, y proceder con el cierre de los datos y las fuentes disponibles.

Finalmente, una gran debilidad tiene mucho que ver con las cifras y datos puestos a disposición, en cuanto a su desglose departamental, a efectos de entender la relación entre violencia directa y violencia estructural. En muchos casos, las cifras no se encuentran disponibles en su totalidad y en otros, en el análisis interanual, se afectan muy negativamente los datos de años intermedios dentro del período de análisis, lo cual dificulta, cuando no imposibilita, el manejo de regresiones estadísticas. Como se decía, se trata de un mal endémico de la Administración pública colombiana y que se evidencia, como ya se comentó, en dos hechos particulares como pueden ser la inexistencia de un catastro municipal, en términos de propiedad privada, o la ausencia de un censo poblacional, siendo el último el realizado en el año 2005.

Empero, se espera que este trabajo satisfaga algunas inquietudes de la comunidad académica interesada en este tema y responda a los criterios formales y de fondo que se esperan de una tesis doctoral de calidad. Los aspectos que más se destaquen la misma, mucho tienen que ver con las apreciaciones de los dos directores de esta tesis, los referidos Heriberto Cairo y María Lois. Las debilidades y carencias del mismo, siempre, responsabilidad mía, pero con la firme disposición de seguir enriqueciendo este trabajo y de entender que el aprendizaje y el perfeccionamiento académico no son sino constantes en la vida académica dentro de la universidad.

CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El siguiente capítulo tiene una doble intención. De un lado, busca plantear una exhaustiva revisión bibliográfica en cuanto a lo más destacado respecto de un tema tan prolífico y complejo como es el conflicto armado colombiano. De otro, busca identificar, en primer lugar, las disciplinas de estudio, la Geografía Política y la Resolución de Conflictos y las Investigaciones para la paz, definiendo las escalas de análisis y observancia de las mismas y, en segundo término, y más importante, concretar la posición y enfoque de toda la investigación con base, sobre todo, en la posición teórica del estructuralismo.

1. Una revisión bibliográfica a la literatura más relevante sobre el conflicto armado colombiano

Uno de los primeros trabajos de referencia en el estudio del conflicto armado, de obligada mención para todo el que se aproxime a entender las dinámicas del conflicto en Colombia, lo marca el trabajo de Guzmán, Fals Borda y Umaña, cuya primera publicación es de 1962. Todo un esfuerzo que indaga, por primera vez, en el intento de explicar y describir el fenómeno de la Violencia de mediados del siglo pasado y que, se puede afirmar, en el momento de su publicación, supuso un punto de luz en lo que se refería a entender la dimensión real, desde un sustento marcadamente sociológico, de una de las páginas más oscuras de la reciente historia colombiana. De hecho, una de las muchas aportaciones de este trabajo, pasa por el intento de esclarecer causas, tanto objetivas como subjetivas, desde las que iniciar toda una línea de investigación con la que profundizar en el estudio de la violencia colombiana.

Lo anterior, tiene una representación posterior, a inicios de los ochenta, con un trabajo que cierra el análisis en cuanto al proceso de degeneración de la Violencia pero que, a la vez, explica como las heridas de la guerra civil terminaron abiertas e irresolutas, y desconectadas como consecuencia de unas estructuras sociales, económicas y políticas, mayormente inalteradas, y cuyos últimos retazos, los denominados como “bandoleros”, son objeto de representación y análisis por parte de la contribución de Sánchez y Meertens (1983). Unos bandoleros que, excluidos por el sistema, operaban como actores a los que el sistema impidió su entrada y nunca tuvieron más opción que continuar en las dinámicas propias de la criminalidad.

Paralelamente, en los años ochenta empiezan a proliferar trabajos que buscan entender la particular relación que violencia, política y conflicto mantienen, ya bajo un contexto de emergencia y consolidación, sobre todo, de lo que se conoce como guerrillas de primera generación, y muy particularmente en su relación con el Estado y el incipiente paramilitarismo. Quizá, el aporte más importante, bajo una óptica nacional, sea el trabajo de Oquist (1978), mientras que en la dimensión regional, el profundo trabajo de campo llevado

a cabo en el departamento de Tolima por Henderson (1984) resulte la aportación más relevante que mencionar.

No obstante, hay que esperar a inicios de los años noventa para que el particular objeto de estudio que supone el conflicto colombiano gane dosis de protagonismo y visibilidad y, así, proliferen los múltiples enfoques y disciplinas de estudio entre las cuales se debe destacar la particular y prolífica contribución del sociólogo francés Daniel Pécaut, y cuyas aportaciones académicas van a ser una obligada referencia en la proliferación de debates y perspectivas sobre la comprensión de la violencia en Colombia. Una comprensión que aúna historia con dinámicas sociales como elementos de respuesta a la violencia, y que quedan patentes, sobre todo, en *Orden y Violencia*, publicado en 1987 pero centrado en los años de la Violencia, y después, en *Crónica de dos décadas de política colombiana*, publicada en 1989 y con una versión ampliada a una perspectiva de cuatro décadas, que se publica en 2006. Quizá, y aunque Pécaut saldrá en reiteradas referencias dentro de esta tesis, una de las hipótesis más interesantes de éste será la absorción de los movimientos sociales por parte de las guerrillas que, por su posición en el escenario del conflicto armado, terminan por asumir buenas partes de las reivindicaciones de transformación social requeridas en el país sin dejar espacio a lo que se conoce, normalmente, como Nuevos Movimientos Sociales.

Otro trabajo relevante es el de Leal y Dávila (1990), quienes entienden la necesidad de mostrar la consolidación de mecanismos de cooptación de la violencia sobre la institucionalidad. Antes, en 1987, el trabajo de la Comisión de la Violencia (1987), dirigida por Gonzalo Sánchez, es el que marca un verdadero punto de inflexión, pues es la primera vez que se desarrolla un análisis multidisciplinar, integral, en la comprensión de la violencia en Colombia. Un análisis en el que confluyen como dimensiones de estudio, la violencia política, la violencia económica, la violencia urbana o la violencia cultural.

Es de lo anterior, que cobra fuerza el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, y que empieza a marcar una línea importante de trabajos de investigación, a inicios de los noventa, haciendo valer lo que, vulgarmente, se conoce en Colombia como “violentólogos”. Violentólogos que abogan por reivindicar la causalidad objetiva en la comprensión del conflicto armado colombiano. Allí desembocan trabajos varios, como los que buscan analizar la construcción de fuentes de poder económico, ya sea con base a la acumulación del poder territorial de los grupos de autodefensa (Medina, 1990), de acuerdo a la magnitud del narcotráfico con base en el comercio de las esmeraldas (Betancourt y García, 1990), o de acuerdo a la magnitud de la violencia paramilitar (Guerrero, 1991).

También, aparecen los primeros trabajos sobre cartografía de la violencia, de Alejandro Reyes (1993), así como otras aportaciones, como las de Blair (1993) o Leal (1994), centradas en el papel de la Fuerza Pública, la influencia de las doctrinas de seguridad nacional y la concurrencia de enemigos internos, fruto de la influencia del pensamiento estadounidense.

En este discurrir, cada vez más enriquecedor, de trabajos académicos que buscan entender las diferentes aristas del caso colombiano, lo cierto es que el “Proceso 8.000”, bajo el gobierno de Samper, y tras él, el fracaso del Caguán de la presidencia de Pastrana, representa otra dimensión distinta en la relación de la violencia colombiana y su estudio. Por ejemplo, son relevantes los primeros trabajos que buscan aunar economía, sociedad y conflicto armado. De esta manera, en la segunda mitad de los años noventa pueden destacarse trabajos centrados en mostrar la repercusión negativa que el conflicto tiene sobre la economía del país y, por extensión, en la continuación de los problemas sociales. Es así que se pueden destacar las aportaciones de Castro, Arabia y Celis (2000: 86); Trujillo y Badel (1998: 9); Granada y Rojas (1995: 122) o Deas y Gaitán (1995: 11), quienes coinciden, en suma, en señalar que los costes del conflicto armado para Colombia, en un estudio macroeconómico focalizado en los años noventa, vendrían a suponer entre un 2 y un 4% del PIB.

Más actual, no se puede pasar por alto el trabajo de Otero (2007: 10), quien centrado en la PSD, se refiere a una afectación sobre el 4.5% del PIB, de acuerdo a un ejercicio de cuantificación del conflicto por el cual, se afirma que entre 1964 y 2007, éste ha dejado atrás más de 95.000 muertes, 50.000 desaparecidos, 4.5 millones de desplazados, 25.000 víctimas por actos de terrorismo y 5.000 atentados contra la infraestructura pública. En suma, una afectación económica, solo entre 2000 y 2003, de 35.000 millones de dólares de gastos en seguridad, a lo que se adicionarían otros 2.300 millones en cuanto a costos directos de la guerra.

Un importante punto de disenso, en cierto modo, como punto de partida, es el que tiene que ver con los orígenes, factores y sustentos del propio conflicto que, a partir de los años noventa, incide en los estudios sobre Colombia, empezando a divergir múltiples puntos de partida y de llegada en cuanto a los resultados obtenidos.

Como en todo conflicto interno que se precie, es imposible negar cuando menos, la identificación de unos planteamientos iniciales desde los que comprender la construcción y representación del conflicto. A tal efecto, la literatura colombiana no podía sino construirse con base en lo ya escrito desde el campo de la resolución de conflictos y los estudios para la paz. Así, por ejemplo, a Colombia llegan influencias de quienes entienden que la esencia de la comprensión de los conflictos armados reposa en factores tales como la invisibilidad política de parte de la ciudadanía (Gurr, 1970; Ballentine y Sherman, 2003), la inequidad social (Blattman y Miguel, 2010), o el sub-desarrollo económico, tal y como reconocen Hardy (1979) o Weede y Tiefenbach (1981).

Además de estos factores de entrada para la comprensión del conflicto colombiano, hay muchos otros, como los que evocan lo conocido vulgarmente como la “maldición de los recursos”. Es decir, el rédito sobre fuentes legales, y mayormente ilegales, que alimentan toda confrontación armada contra el Estado y construyen particulares dinámicas de legitimidad (Collier, 2000; Collier y Hoeffler 2004; Bates, 2008). Al respecto, Yaffe (2011:

193) para el caso de Colombia, retoma las referidas contribuciones de trabajos como los Ballentine y Nitzchke (2003) o Ballentine y Sherman (2003), en la medida en que, en estos estudios, identifican que:

“aunque la pugna por el acceso a recursos económicos puede ser un elemento perpetuador de los conflictos armados, no es la causa principal de su surgimiento (pues) coinciden en afirmar que el origen de los conflictos violentos se encuentra en los resentimientos generados por la mala administración de los recursos, por la desigual repartición de las riquezas derivadas de estos recursos, y por las políticas gubernamentales que impiden que muchos sectores se beneficien de estas riquezas”.

Lo anterior, en inicio, colisionaría parcialmente los reconocidos trabajos de Collier (2000) o de Collier y Hoeffler (2004) si bien, lo más relevante, es que incorpora una dimensión que no pasa desapercibida para esta tesis doctoral. Es decir, la distinción entre las causas que originan los conflictos internos como el colombiano, por un lado, y aquellos factores que los retroalimentan y contribuyen a su perpetuación, por otro, y que es donde se concentra la contribución explicativa más importante a la que se adhiere este trabajo doctoral.

Es así que a modo de una suerte de tercera vía, este trabajo, con base en lo anterior, estaría, quizá, más cerca de la línea de aportaciones como las de Sánchez y Chacón (2006), Pizarro (2004), Echandía (2006) o Restrepo (2006), que si bien comparten causas socioeconómicas y políticas como razón explicativa del conflicto, de otro lado, entienden que el narcotráfico, el secuestro, el crimen organizado u otras tantas fuentes de poder económico, servirían para entender su supervivencia y transformación en el tiempo. En este caso, particularmente, la hipótesis que adiciona este trabajo con respecto de estos mencionados, tiene que ver en relación con la configuración espacial de la violencia y su vínculo con la violencia directa y la violencia estructural, a continuación abordadas.

Lo anterior, no es óbice para la atención sobre otros estudios que, influyentes sobre el caso del conflicto colombiano, focalizan su énfasis en la comprensión de los factores político-institucionales y, sin duda, deben adicionarse a las consideraciones anteriores.

Trabajos generales desde la disciplina de la resolución de conflictos, como son los de Goldstone, Gurr, Marshall y Vargas, (2004), vendrían a reivindicar de qué manera, más allá de las causas socioeconómicas como la pobreza, los conflictos armados como el colombiano, tienen una mayor razón explicativa a medida que su institucionalidad política se encuentra desdibujada y el Estado de Derecho, por extensión, desnaturalizado.

Razón que, asimismo, plantean Fearon y Laitin (2003), cuando reconocen que un gobierno central débil es la causa primera para entender la aparición de grupos insurrectos y que es enriquecida por el planteamiento de Kalyvas (2007), para quien la debilidad estatal debe integrarse multifactorialmente. Esto, por entender que los conflictos armados como el caso colombiano se erigen desde una situación de *multidimensionalidad* de la violencia. Una

multidimensionalidad, tal y como sucede por la concurrencia de recursos naturales y la existencia de antagonismos étnicos, los cuales, unidos, son la mezcla idónea para la explicación científico-social de la mayor parte de las guerras civiles y conflictos internos, dada la propuesta del profesor de Ciencia Política de la Universidad de Yale.

En relación con la particularidad explicativa del caso colombiano, y con base en las aproximaciones generalizadas sobre la explicación de conflictos armados referidas, se encuentran, por ende, autores como Gómez (2001), más próximos a entender que la causa explicativa del origen del conflicto armado reposa en la desigualdad y otros, como Rangel (1998), que enfatizan en la concurrencia de fuentes de poder económico que explican el arraigo y la capacidad de disputa de los grupos armados levantados en armas.

De otro lado, aportaciones como las de Holmes, Gutiérrez de Piñeres y Curtin, (2006), Duncan (2006), o Leal (2006), se centran, especialmente, a partir de la conexión del arraigo paramilitar a nivel de la política local y regional, buscando poner en evidencia la relación del conflicto, muy particularmente, con la débil institucionalidad del Estado colombiano. Estado, en muchas ocasiones, responsable de una lógica de despojo de tierras puesta en evidencia en el primer trabajo, ya mencionado, de la geografía de la violencia, elaborado por Reyes (1993).

Igual lo plantea Bagley (1988), cuando señala que la debilidad del Estado colombiano estriba en lo desvirtuado que se encuentra el concepto de soberanía territorial, y que en Acemoglu y Robinson (2013: 442)¹⁹ o antes en Richani (2002:150), permite entender la construcción de sistemas de guerra; es decir: “estructuras de poder y arreglos institucionales irregulares, que surgen cuando las instituciones estatales fracasan en su rol de mediar o arbitrar los conflictos entre grupos antagónicos y que contribuyen a perpetuar el conflicto violento”.

No faltan trabajos de enfoque más cultural o social, en cuanto a su primera aproximación a entender o explicar el conflicto armado colombiano. Trabajos que se refieren a Colombia como un país con una sociedad culturalmente tendente a prácticas violentas, como controvertidamente señala Sriram (2004). No obstante, más interesante son las reflexiones de Legrand (2003), en favor de cómo la mayor articulación social, cohesión grupal, capital social (Sudarsky, 1997, 1999, 2001) o formas de resistencia colectiva, invitan a pensar en un nuevo horizonte sobre el que entender, ya no solo el origen sino más bien su transformación, y la posibilidad de encontrar procesos de construcción de paz, *bottom-up*. Esto, partiendo de conferir un protagonismo mayor del hasta ahora otorgado al papel, el alcance y sentido de la sociedad colombiana en cuanto a pensar en entender y superar el conflicto armado interno.

En otro orden de ideas, en los noventa también se encuentran los primeros trabajos que tienen como intención humanizar los rostros de la violencia (Molano, 1997) pero, sobre todo,

¹⁹ Según señalan los propios Acemoglu y Robinson (2013), el conflicto armado se entiende, en buena medida por la debilidad del Estado colombiano, su incapacidad para controlar el territorio. Asimismo, los ingentes niveles de desigualdad han impedido tener un régimen tributario equitativo y justo, y no han proliferado instituciones políticas y económicas fuertes, con capacidad para asumir los cambios necesarios.

aquellas aportaciones académicas e investigadoras que exploran los estudios de caso locales. Inicialmente, en el intento de entender la representación urbana del conflicto (Camacho y Guzmán, 1990) o interpreta su dimensión dentro de la esfera municipal (Cubides, Olaya y Ortiz, 1998). Sin embargo, son los primeros trabajos de CINEP, especialmente, a partir de inicios de la década pasada, los que exploran de mejor manera el alcance y sentido local del conflicto armado en Colombia, a través de aportaciones como las de García (2003) sobre actores paz y violencia en el Bajo Cauca antioqueño; Guzmán (2003), sobre Valle del Cauca y Cauca, o Gutiérrez (1998; 2002) sobre la relación de violencia y sistema político en Cundinamarca.

Lo mismo, sobre el impacto en la Amazonía de las marchas cocaleras y su relación con los actores del conflicto armado (Ramírez, 2001), la relación entre cultivos y FARC en Caquetá (Ferro y Uribe, 2002). Otro enfoque, pero igual de base regional, se encontraría en el trabajo de Dover y Ocampo (2004) sobre modelos de manejo de conflictos a nivel comunitario en contextos de conflicto armado, por ejemplo, de Córdoba o La Guajira. Finalmente, más actuales serían los trabajos de Vásquez *et al.* (2011) sobre el sur del país, especialmente, como es la aportación de Torres (2011), sobre Putumayo; García y Aramburo (2011) sobre el Oriente y la región del Urabá antioqueño; González *et al.* (2012) sobre el oriente colombiano, muy particularmente, respecto de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Arauca y, por último, el mismo González *et al.* (2014), en atención a la costa Caribe y Rodríguez Cuadros (2015) con respecto del Pacífico nariñense.

También desde el punto de vista regional, hay un especial interés por el desarrollo de trabajos que enfatizan en el nivel de seguridad fronteriza. Así, por ejemplo, Ramírez (2004: 147) habla de la *transfronterización* del conflicto y de cómo afecta a Colombia una *transnacionalidad* de la ilegalidad de la que a veces surgen intereses nacionales, como sería el caso de Estados Unidos y su cooperación militar, la cual ha dificultado la posibilidad de respuestas integrales, haciendo valer su estrategia dominante de seguridad nacional.

Otros, como Piña (2012), reivindican las particularidades de las fronteras colombianas a efectos de servir de caldos de cultivo óptimos para la reproducción de la violencia. Violencia fronteriza, y en última instancia, de afectación regional, que para Vargas (2006) es razón suficiente para hacer valer la hipótesis por la cual, Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina – IRA, no es sino la determinación, *ad extra*, de cómo debe gestionarse la seguridad, una vez que brilla por su ausencia una respuesta, coordinada, en términos sub-regionales.

Además de los mencionados enfoques, existen, por ejemplo, otros trabajos que tratan de entender sus dinámicas desde una perspectiva subjetiva, al reconocer la necesidad de trascender de las dimensiones, tradicionalmente, puramente objetivas, ya sean estructurales o institucionales. Es decir, Cruz (2003), por ejemplo, considera que existen elementos contruidos y alimentados desde la esfera individual, como el odio, la reparación del daño o la venganza que, con base en una estructura de marginalidad y exclusión, tienen un caldo de

cultivo idóneo para una violencia. Violencia en la que democracia, Estado de Derecho o ciudadanía terminan por ser realidades a media construcción en el particular caso colombiano.

Esta consideración, confluye igualmente, en los trabajos, como los de González Jácome (2007), en los que cobra valor analítico el componente ético en cuanto a búsqueda de la verdad y la necesaria reparación del daño a la víctima. Una reparación que no debe quedarse en devolver al individuo a una situación previa a la del daño, como plantea el concepto de restitución integral de la Corte Constitucional, sino la construcción de una conciencia colectiva que, más allá de perseguir y encarcelar a los causantes, construya colectivamente la verdad.

Un punto clave desde el que se estudia el conflicto colombiano, por ejemplo, tiene que ver, por otro lado, con las contribuciones que se llevan a cabo desde el análisis del discurso. Una de las primeras cuestiones, marcadamente sesgadas por el prejuicio ideológico que se discuten es, precisamente, si se puede hablar o no de conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, Valcárcel (2008: 387), o Nieto-Navia (2007: 158) señalarían, bajo una interpretación no ausente de cuestionamiento, que Colombia transitaría, de acuerdo a sus características, en “un conflicto armado interno de baja intensidad” en el que las Fuerzas Militares se encuentran bajo la obligación de acatar las normas de Derecho Internacional Humanitario - DIH.

Asimismo, a tal efecto, la atribución de condición de grupo terrorista a FARC o ELN no restaría o afectaría a su carácter guerrillero. No obstante, lo más importante que plantean estos autores sería que, desde el año 2001, a las FARC no se les podría reconocer subjetividad ni el estatus beligerante en la medida en que no controlan territorialmente porciones del Estado colombiano ni se encuentran en la condición de contener de manera sostenida los diferentes operativos militares.

Otros como Gaviria (2005: 43), reconocerían que FARC y ELN no hacen parte de un conflicto armado pues, a su entender, Colombia transita por una confrontación interna en la que “un rebelde puede ser visto como tal: con jerarquía política y vocación de poder como fuerza beligerante”. Asimismo, Rodríguez Rodríguez (2010: 111) señalaría que, bajo la administración Uribe conviene entender que:

“técnicas como la atenuación, el eufemismo, la lexicalización y la polarización para proscribir del lenguaje público, la referencia a un conflicto armado interno y sustituirla por el nombre de amenaza terrorista. Los resultados obtenidos con el estudio evidencian la necesidad de reemplazar la retórica guerrillera por una narrativa más conciliadora, que permita construir nuevos relatos de país y que guarde una mayor coherencia con la expectativa de la reconciliación, inherente a la justicia transicional”.

Esta cuestión semántica, en inicio, podría entenderse como dirigida a fortalecer confianza en la inversión extranjera; atenuar la fragilidad institucional; redefinir el sentido de la soberanía

en beneficio del Estado; negar el estatuto de combatiente a las guerrillas; descalificar el origen social del conflicto colombiano; posicionar a Colombia en la agenda de Estados Unidos sobre la base de exacerbar la amenaza terrorista, y, finalmente, disponer discrecionalmente del DIH tal y como, desafortunadamente, sucedió durante los años de presidencia de Álvaro Uribe.

Algunos trabajos, más allá de lo unidireccional, abordan el discurso sobre la base de contextos clave que sirven de caso al entender que la interacción discursiva entre los actores del conflicto busca construir una imagen propia y modular la del adversario. Así lo plantea, por ejemplo, Olave (2011: 526) cuando trata de entender cómo FARC y Gobierno interpretan un mismo hecho como, por ejemplo, puede ser atentado con carro-bomba²⁰.

Por medio de este ejemplo, se busca entender el conflicto armado, desde la sociología de Goffman (1983), 1) con base en diferentes puntos de problematización social, causas y responsables – gobierno fascista vs grupo terrorista; 2) interpretar los objetivos – proteger a la población frente al terrorismo de las FARC vs proteger a la población vs terrorismo de Estado; 3) atender de las probabilidades de éxito – evidencia de la debilidad de la guerrilla vs necesidad de negociar con las FARC; 4) caracterizar de los destinatarios – los colombianos que colaboran con las FARC sufren las consecuencias de la contrainsurgencia vs los colombianos que colaboran con el Estado sufren las consecuencias de las FARC-, y finalmente, 5) consolidar bases de legitimidad - que para el Gobierno hace pensar que las FARC por su debilidad se refugian dentro de la población civil lo cual justifica la contrainsurgencia vs abuso del poder del Estado y vulneración continua al DIH, la Convención de Ginebra y, por ende, la necesidad de mantener la resistencia armada. Es decir, se buscan desarrollar toda una compleja construcción dual de problemas, objetivos, protagonistas, antagonistas y destinatarios.

Existe, por otro lado, un amplio bagaje de investigaciones y aportaciones académicas que se centran en los aspectos, dimensiones o necesidades de buscar una salida negociada desde la que desactivar el conflicto armado colombiano. A tal efecto, Suárez (1999: 105), en el contexto de la negociación del Caguán, enfatizaba en la necesidad de conseguir acuerdos cooperativos habida cuenta que:

“la confrontación armada ha demostrado, hasta la saciedad, que no es el paliativo que necesita la sociedad para encontrar salida a los problemas de marginalidad social, ni mucho menos el escenario dentro del cual han de resolverse las controversias ciudadanas”.

De este modo, negociar se entiende como una razón indisociable a un proceso de transformación estructural del Estado de Derecho, el poder judicial y la impunidad –

²⁰ El trabajo referido de Olave (2013) se centra en analizar discursivamente la forma en la cual, un atentado terrorista, con un coche-bomba en el municipio de Toribío, Cauca, supuso la muerte de 6 personas y otras 99 heridas. Este hecho dio lugar a posiciones e interpretaciones enfrentadas que permitían evidenciar la particular forma en la que los actores involucrados en el conflicto entienden el resultado de la violencia.

extensible a la jurisdicción militar- que afecta y deslegitima el poder público del Estado colombiano. Alejo Vargas (2003: 130), por su parte, es determinante al respecto cuando, en iguales términos, señala que:

“No se puede olvidar que el actual conflicto interno armado es de naturaleza fundamentalmente política, y es en esta dimensión que la democracia debe ganarles a los actores armados. La derrota de los grupos guerrilleros y paramilitares se consolidará cuando los colombianos rechacen sus métodos, los condenen, marginen, y en esa medida los aisle, de tal manera que entiendan que el recurso que les queda, si quieren mantener su vocación política, es aceptar un proceso de negociación serio y creíble para integrarse a las reglas del juego democráticas”.

Fracasado ese contexto, las aportaciones en aras de mantener un proceso de diálogo, en este caso con ELN y AUC, tras el fin de las negociaciones de Andrés Pastrana, van a seguir manteniendo inalterada la necesidad de buscar vías expeditivas de diálogo en buena parte de los trabajos académicos de la década pasada. Así lo plantea, por ejemplo, Restrepo (2004: 57), quien en el contexto de 2004, ante la posición del ELN por negociar y los avances en el contexto de desactivación de las AUC, entiende que es posible abrir futuros de una nueva negociación con las FARC siempre que, en paralelo, se combatan las fuentes de poder económico de la guerrilla, por un lado, y se conciba la necesidad de extender institucionalmente la presencia del Estado más allá de la dimensión estrictamente policial y militar, por otro.

Ya en el actual marco de negociación, nuevamente, los aportes desde la resolución de conflictos aplicada, junto con el enfoque centrado en estrategias de negociación, han cobrado relativa importancia en el escenario académico colombiano. A tal efecto, Olave (2013: 358) reconoce que FARC y Gobierno:

“vinculan el proceso de paz con la autoridad que confiere la representación del pueblo: en el caso del Estado, su legitimidad institucional es utilizada para determinar los significados de los eventos y dotar de carácter ético a las decisiones; por su parte, la guerrilla se hace vocera de un pueblo oprimido y denuncia el origen de esa opresión en el poder gubernamental. Las definiciones del proceso de paz que aparecen menos explícitas en los discursos de los actores, pueden inferirse como implicaciones a partir de las relaciones de lo dicho y lo callado con las circunstancias políticas del conflicto armado colombiano”.

Otros como Ballén (2014: 74) o Serrano (2013: 434), plantean dudas sobre la posibilidad de que la negociación fructifique, a tenor de la confrontación armada que subyace en paralelo al marco de negociaciones y la profunda debilidad de los mecanismos garantes del Estado de Derecho y el funcionamiento de la justicia. Además, estos añaden la profunda afectación del conflicto sobre la población civil colombiana si bien, en todo caso, ello no es óbice a efectos de reconocer la importancia y la necesidad de buscar fórmulas de diálogo ante la magnitud de un conflicto como el colombiano.

En todo caso, como señala Pizarro (2003: 93), el conflicto colombiano acaba siendo una guerra de perdedores en el que, de un modo u otro, su desactivación pasa por la necesaria negociación que deben plantear, en algún momento, las partes en liza y que, por su complejidad, necesita, en todo caso, de estrategias que trasciendan de la gestión *ad intra* en Colombia. Esto es, con base en un firme apoyo internacional, especialmente de Europa, que garantice el buen desempeño del marco negociador.

Esta consideración era compartida por Angelino Garzón, Vicepresidente de la República entre 2010 y 2014, cuando señalaba que:

“La guerra colombiana es una guerra entre pobres. La mayoría de los guerrilleros son pobres. La mayor parte de la Fuerza Pública, también. Y así es como se construyó y se comprende la guerra en Colombia. Que hayamos tenido que esperar tanto para aspirar a un proceso de paz se debe al interés que siempre ha despertado el conflicto entre los involucrados. Al Estado le convenía la existencia de guerrilla por la propia posibilidad que ofrece pactar con la corrupción. A la guerrilla, a su vez, le convenía un Estado poco democrático a fin de justificar su existencia. Y en esa estamos en una negociación que se piensa que ya está firmada, pero que no es fácil, pues podemos asistir a un nuevo fracaso si las transformaciones sociales, políticas y económicas no se desarrollan como requiere el país”.

Todo, por la situación, que definiría Zartman (1993: 20), de empate mutuamente doloroso (*mutually hurting stalemate*), habida cuenta de que su “persistencia en el tiempo está afectando duramente las potencialidades económicas del país, la vigencia de las instituciones democráticas y la solidez del tejido social”. Dicho de otra manera, para este tipo de planteamiento, el caso de Colombia correría el riesgo de desdibujarse dentro de un marco de *guatemalización* creciente en el que negociación, como se planteaba con anterioridad, debe ir en línea a un fortalecimiento de la institucionalidad estatal, especialmente, en sus dimensiones de justicia y seguridad²¹.

Lo anterior, conduce, nuevamente, a otra variopinta línea de trabajos sobre las condiciones objetivas de la violencia. Por ejemplo, son muchos los trabajos que se focalizan en la propiedad, el despojo y la concentración de tierras como un factor de estructura sin el cual, no se puede entender la interacción y proliferación, sobre todo, de ciertos actores armados como el paramilitarismo.

Estas hipótesis, como otras ya mencionadas se alinean con lo que plantean los “clásicos” trabajos de Collier (2000; 2004), pero también de Snyder (2006: 343), cuando reconoce que “la riqueza saqueable, definida como recursos lucrativos, fáciles de transportar, tales como

²¹ La *guatemalización* del conflicto se puede encontrar, en primer lugar, en los bajos niveles de popularidad que actualmente se encuentra el proceso de diálogo en La Habana, el cual lleva tres años y que pueden dificultar la legitimidad del proceso de paz. Asimismo, la ausencia de transformaciones estructurales, como ya sucediera con el proceso de desmovilización de las AUC puede suponer mayores incrementos de violencia que, como en Centroamérica, tras más de dos décadas, continúan irresolutos.

piedras preciosas, madera tropical y drogas ilícitas, genera desorden al proveer las razones y los medios para la rebelión armada”.

De igual manera, focalizando lo anterior, y sirviendo como marco teórico para muchos trabajos sobre el conflicto armado colombiano, se pueden destacar aportaciones como las de Ross (2004), que enfatizan en el particular impacto de la producción agrícola y que permiten afirmar, como lo hace Fearon (2005: 486), que la mayor parte de conflictos armados y guerras internas, como la colombiana, tienen su representación en escenarios rurales en los que los actores armados terminan por construir y consolidar sus fuentes de poder económico. Fuentes, como secuestros o extorsiones pero cuyos mayores beneficios provienen de la mercantilización, la distribución y el comercio de estos bienes de producción agrícola.

También, aterrizados en la realidad colombiana, se destacarían los trabajos de Hurtado y Pereira (2011), en relación al estudio de caso de las grandes empresas en la explotación del aceite de palma en sur de Bolívar. A tal efecto, señalan cómo las políticas de Gobierno son especialmente flexibles con las prácticas extractivas, y junto con otras prácticas, acaban encontrando un punto de entendimiento con el paramilitarismo para despojar tierras, intimidar sindicatos y modular acciones que construyen imaginarios legítimos en su impacto local. Lo anterior, habida cuenta de la relación directa entre pauperismo, desplazamiento y aprovechamiento indiscriminado de los recursos, dentro de un contexto en el que muchos de estos grupos de capital pasaron de ser víctimas a victimarios en la dinámica particular del conflicto armado.

Este tipo de trabajos han sido abordados por otros como Goebertus (2008) u Ocampo (2009), quien focalizado en Chocó o Nariño, concluyen explicando que la presencia de grandes proyectos de monocultivo concitan estímulos que favorecen la extorsión, la *saqueabilidad*, el desplazamiento forzado, el extractivismo y la explotación extensiva. Razones de peso aun cuando su disposición no se puede comparar como factor financiador del conflicto en los mismos términos que, muy especialmente, supone el tráfico de drogas.

Dentro de este debate, también García Reyes (2014: 236) visibiliza esta problemática, en esta ocasión, en el Bajo Atrato chocoano, donde a pesar de que desde 1991 hay un nuevo régimen de propiedad a favor de las negritudes²², desde antes, con las FARC, “se realizaron actividades sobre los negocios locales y el negocio de la palma fue objeto de extorsión, *aunque* en el período posterior los grupos paramilitares instrumentalizaron el régimen para consolidar la apropiación territorial y establecer los cultivos de palma”.

La lógica a efectos de este tipo de trabajos es siempre la misma. Práctica de despojos de tierras baldías de acuerdo a una sucesión de eventos de violencia que desvirtúan el concepto

²² En el marco de la Constitución de 1991, Colombia se reconoce como “Estado multicultural”. A tal efecto, pone en marcha, por ejemplo, la Ley 70 de 1993 o “Ley para las mancomunidades afrocolombianas”, con la que se busca fortalecer a estos colectivos étnicos. Sea como fuere, el alcance de esta legislación, como sugieren algunos como Wade (1997) o Escobar (2004).

de propiedad, y donde los intentos de reforma agraria terminan quedando en nada. Intentos que surgen en los ochenta y que llegan, casi sin opciones de éxito, hasta esta misma década. Así sucedería con el actual proceso de restitución de tierras, que nació de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, aprobada en junio de 2011, que más allá del Pacífico, se han representado como infructuosas en otros enclaves como el departamento de Meta (Rodríguez González, 2014).

Lo anterior quedaría complementado por otro tipo de investigaciones que también conforman un escenario importante de estudio del conflicto colombiano. Así se entienden los trabajos sobre violencia urbana que, tradicionalmente, se han enfocado en enclaves concretos como Barrancabermeja (Vargas, 2008), Cali (Castillo, 2004) o Medellín (Giraldo, 2008) - o más particularmente, la Comuna 13 (Atehortúa, Sánchez Medina y Jiménez, 2009). De igual manera, y en relación con lo anterior, otros trabajos terminarían por abordar el impacto del éxodo sobre los enclaves rurales de mayor conflicto social, incluso, desde los años cincuenta hasta la actualidad, y su implicación en la transformación del paisaje urbano colombiano (Sánchez Steiner, 2008).

En otra óptica, varios autores se centrarían en entender las dinámicas del conflicto colombiano desde una dificultad estructural que tiene que ver, directamente, con el Estado de Derecho y sus debilidades. Algunos como Gómez Araujo (2003: 110) señalan que existe una corresponsabilidad del Estado traducida en corrupción e impunidad, y que convierten al aparato judicial en una víctima más del conflicto armado colombiano pero, sobre todo, en una especie de *feedback loop* que debilita el sistema. Ello, a modo de desconfianza ciudadana y democrática que retroalimenta la exploración de vías subjetivas y al margen de la ley para responder a la violencia y al conflicto en sí.

Otros, como Cepeda (2012), partiendo del neo-constitucionalismo colombiano²³, identificarían de qué modo la Corte Constitucional asume y debería asumir los nuevos desafíos en las recomendaciones al Estado colombiano en materia de garantía de derechos y protección de libertades. Todo, a fin de conferir eficacia a las políticas públicas, especialmente, aquéllas que se encuentran destinadas a proteger y restituir a las víctimas del conflicto armado, muy particularmente, en lo que concierne al derecho a la seguridad.

Lo anterior, sería una necesidad contrastada que se da por prioritaria, no solo en los trabajos de cariz más jurídico, sino también en los trabajos que se centran, de mayor modo, en lo que afecta al problema del desplazamiento forzado en Colombia. Fenómeno este sobre el cual la bibliografía es sencillamente inabarcable.

²³ Por neoconstitucionalismo, se puede entender una nueva forma de entender el orden jurídico en el que ante todo prima el garantismo. Es decir, proteger y consolidar mecanismos desde los que promover y proteger los derechos, libertades y bienes individuales frente a las intromisiones del poder público. Es decir, el propósito es el de construir un Estado Democrático y de derecho cuya razón de ser resulta de una concepción normativa en la que los derechos, per se, operan como vínculos y límites en la labor del Legislador (Ferrajoli, 2001).

Egea y Ceballos (2008: 217), por ejemplo, se focalizan en la *invisibilización* de los desplazados y su relación directa con las empresas agro-industriales y ganaderas y el cultivo ilícito, particularmente en Meta, Putumayo, Chocó, Sucre, Bolívar y Norte de Santander. Al desplazamiento le acompaña un proceso de *desterritorialización* en el que no puede obviarse una variable adicional, y es que durante la PSD, los enclaves de mayor desplazamiento hubieran sido aquellos donde la presencia de la Fuerza Pública ha sido mayor.

A la debilidad institucional y la “guerra irregular prolongada” planteada por los anteriores autores, Ceballos (2013: 173) añade el factor de la inequidad como variable directa en la explicación, por ejemplo, en cuanto al creciente impacto del problema del desplazamiento forzado que evidencia unos ingentes niveles de conflicto armado, por el momento, irresolutos. Esto, en la medida en que reconoce que:

“esta relación de doble vía entre guerra y desigualdad genera una denegación generalizada de derechos, toda vez que su convergencia obstaculiza el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y en general condiciona el goce integral de los derechos humanos. Mientras tanto, la necesidad de brindar respuestas inmediatas al conflicto presente parece no dejar ni tiempo ni recursos disponibles para ocuparse de problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, cuya solución se posterga entonces indefinidamente”

De este modo, el desplazamiento forzado se entiende, para otros trabajos de referencia que lo focalizan como elemento nuclear del conflicto actual, en la medida en que representa la máxima expresión de un entorno económico y social roto, con una institución estatal endeble, en la que reparación, restitución e indemnización resultan insuficientes. Una especie de imposible mientras que agentes, instituciones y estructura no se adapten al entorno que exige un proceso de superación del conflicto y de recomposición de su tejido tanto político como jurídico, económico y social.

En esa misma lógica, Pérez Murcia (2001), ya señalaba de qué modo, junto a las referidas causas de pobreza y abandono estatal, trabajadas incluso en los noventa en aportaciones como la citada de Deas y Gaitán (1995), u otras como la de Bejarano (1997) o Ramos (1999), se adicionan factores tales como el desplazamiento, la velocidad de las transformaciones económicas o la presencia de recursos estratégicos, más propias de los trabajos que se centran en el conflicto colombiano durante la segunda mitad de la década pasada.

De hecho, de un modo integral, y bajo modelos de correlación estadística multifactorial, el propio Pérez Murcia (2001: 229) termina por mostrar cómo es la violencia directa, expresada a través de la concurrencia de grupos armados – especialmente paramilitares-, y especialmente focalizada en enclaves con presencia de fuentes de financiación legales o ilegales. Todo, para evidenciar que las dinámicas explicativas del desplazamiento forzado, antes que las causas socioeconómicas como pobreza, miseria o abandono estatal, para este autor, no explicarían la expulsión y el desplazamiento forzado en Colombia. Desplazamiento

que, mucho más, tiene que ver con la propia representación espacial del conflicto armado colombiano y de la concurrencia de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública.

Otra dimensión, igualmente prolífica tiene que ver con la dimensión psicológica que acompaña al desplazamiento forzado y su relación con el conflicto armado, de acuerdo a variables sociales, demográficas, laborales, interacción con la violencia y tipo de resultado y consecuencia que lleva consigo, tanto individual como colectivamente (Lozano y Gómez, 2004: 113; Segura y Meertens, 1997: 31). Tal relevancia, en todo caso, conduce a reivindicar la necesidad de nuevas políticas de construcción de paz y de cooperación internacional que, sin embargo, hasta el momento, no parecen haber sido objeto de una adecuada y extensa aplicación (Arango, 2007).

Algunos como Abrisketa (2009: 27), desde un enfoque más jurídico tanto, de DIH como de derecho interno, acompañaría lo anterior con base en fallos de la Corte Constitucional, como es el caso de la Sentencia T-025 de 2004. Sentencia que puede servir como referente desde el que entender que, tal vez, la clave interna puede ser la dimensión verdaderamente urgente para proteger y superar la situación que presenta el desplazamiento forzado en Colombia y, en última instancia de iniciar un proceso de recomposición del tejido social y de superación del conflicto. Ello, sin perder de óptica a los trabajos que ponen su acento en la necesidad de incorporar y tener en consideración a la jurisdicción internacional y por las particularidades de Colombia, a la Corte Penal Internacional, lo cual requiere de ciertas cautelas que, de desatenderse:

“pondrían en grave peligro la viabilidad jurídica de los procesos de paz si no se realiza una ponderación adecuada de los principios de justicia y paz, en la cual se cumpla con los parámetros internacionales sin obstaculizar la tan anhelada paz en nuestro país” (Sandoval y Abello, 2006: 5).

En el marco de los DD.HH., más allá del desplazamiento, concurre una pluralidad de dimensiones, propias de un conflicto de estas características, como son enfoques, por ejemplo, sobre reclutamiento de menores o atención a otras poblaciones vulnerables. Dentro de una multitud de trabajos, entre los que se pueden destacar a Pachón (2009), termina siendo revelador, entre otros, el aporte de Carmona-Parra, Moreno y Tobón (2012), en el que ponen de manifiesto hasta qué punto las motivaciones criminales o ideales son marginales en el caso de reclutamiento de menores y prima, ante todo, el componente auto-afirmativo y *victimizador*.

Otra población especialmente afectada por la violencia derivada del conflicto armado son los sindicalistas, como muestra Echandía (2013), al señalar de qué manera, los sindicatos son objeto de violencia directa de parte de los grupos armados, especialmente paramilitares, y especialmente en el caso de ciertos sectores estratégicos como la agricultura industrial o la minería. Sea como, terminan compartiendo un énfasis en los destinatarios, a través de sus

múltiples facetas, de la compleja violencia directa que genera el conflicto armado interno en Colombia.

Finalmente, deben mencionarse, en continuidad con lo anterior, expresamente, algunos de los trabajos de enfoque étnico, por ejemplo, a efectos de territorialidad, en los que se reivindica – y que de alguna manera también hace esta tesis doctoral-, una mayor y creciente virulencia en los escenarios de negritudes del Pacífico colombiano (Echandía 2006, 2008; Salas 2010, 2015; Presidencia de la República, 2014).

Estos trabajos se complementarían perfectamente con trabajos como los de Arocha (1996), y ya más desarrollados, los de Castillo (2005), en los que se ensalza el factor de organización y resistencia de los afrocolombianos, y que frente a la inacción de Estado y partidos políticos, han podido llevar a cabo fórmulas de diálogo y negociación que invitan, cuando menos, a repensar el impacto local que la violencia ha tenido en estos enclaves.

Igualmente, extensible a comunidades indígenas se encontrarían las aportaciones académicas de González-Piñeros (2006), Lombana (2005) o Molina (2005), que particularizan un especial arraigo a la tierra, unas cosmovisiones propias, o una posición marcada respecto de los resguardos o la propia noción de resistencia que, en suma, invitan a entender de qué manera los grupos indígenas, en su relación con el conflicto armado, han terminado respondiendo, de una manera muy peculiar a un tipo de violencia que, finalmente, para algunos como Wade (1997, 2010), ha tenido muchos ingredientes en cuanto a violencia institucionalizada.

Sin desconectarse de la línea central de los trabajos anteriores, muchos académicos e investigadores sobre el conflicto colombiano han reivindicado la necesidad de incorporar nuevas necesidades que, en inicio, solo pueden ser integralmente atendidas desde una óptima cooperación internacional. Cooperación que, en no pocas ocasiones, ha relegado a un segundo plano el componente social y ha terminado centrándose en la dimensión puramente militar y, particularmente, en el Plan Colombia.

Al respecto, hay marcadas posiciones proclives a defender la necesidad y la importancia de la cooperación militar brindada por Estados Unidos, como proponen Rangel (2003), Ramírez (2000) u Ortiz (2000). De la misma manera, existen trabajos que cuestionan la idoneidad de un instrumento reactivo como es el Plan Colombia. Autores como Tickner (2007: 91), hablan de “intervención por invitación”, toda vez que otros como Rodríguez Núñez (2010), interpretan que el Plan Colombia es un instrumento que evidenciaría las relaciones Norte-Sur en términos políticos, económicos, energéticos, culturales, de seguridad y, en definitiva, geopolíticos. Es más, se trataría de un instrumento de injerencia que permitiría una vía de entrada a la región por parte de Estados Unidos, incluso, para afectar y controlar negativamente a rivales dentro del escenario suramericano, muy particularmente, como podría ser el caso de Venezuela (Romero, 2004).

Este tipo de escenarios de enfoque regional también encuentran en los estudios de frontera, mencionados anteriormente para algunos casos, y que son un importante caldo de cultivo en cuanto al estudio de la internacionalización y la afectación respecto de escenarios compartidos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, Cabrera (2012: 16) apunta al hecho por el que:

“la localización de grupos irregulares en zonas limítrofes permite una prolongación del conflicto. Las fronteras facilitan una continuidad de los esfuerzos de guerra por ser posiciones de elevado valor estratégico para la diversificación de redes de financiación, reordenamiento de tropas y establecimiento de santuarios para su protección. Una segunda conclusión importante es que los grupos armados adecúan sus estrategias armadas y tienen un impacto transfronterizo. Por lo tanto, aquellas medidas militares tanto a nivel unilateral como en conjunto deben complementarse con acuerdos políticos de cooperación transfronteriza”.

Tales consideraciones, en todo caso, son muy similares a la de los trabajos de Ávila (2012) sobre Venezuela o de Faivre (2005) sobre Ecuador, y que según este mismo autor evocan la necesidad de explorar soluciones regionales antes que medidas reactivas como el mencionado Plan Colombia.

En una misma óptica crítica, Mondragón (2002: 91) se refiere al concepto de *gamonalismo* para explicar la subordinación de Colombia a través del Plan Colombia, y que se evidencia en otras iniciativas similares como son el Plan Puebla Panamá – PPP- o la IRA. En todas, concurren intereses que marcan el alcance, el sentido y la prioridad de la intervención, como es el caso del petróleo, la energía eléctrica, los cultivos ilícitos, los nichos agro-empresariales o la industria armamentística.

Más allá van otros trabajos, igualmente críticos, como los de Bonilla (2001) que ya a inicios de la década pasada hablaba del fracaso de *securitizar*²⁴ la agenda de las relaciones exteriores de Bogotá con Washington y que, con posterioridad, se ha desarrollado en trabajos tales como Rojas (2007:19). La profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional cuestionaría la militarización de la seguridad y su sobredimensión a través de la cooperación militar. Afirmación que, muy especialmente, pone de manifiesto en su último trabajo, de 2015, *El Plan Colombia*. Antes, y en iguales términos, Wickham-Crowley (1992) ya destacaban el apoyo militar estadounidense como factor determinante de un nivel de injerencia que, tradicionalmente, ha desequilibrado la correlación potencial de fuerzas entre los grupos insurgentes, las bases campesinas de apoyo y la elite y el establecimiento político.

Aparte de cuestionar sobre las bonanzas y perversiones del Plan Colombia, lo cierto es que una tercera vía por la que optan muchos trabajos tiene que ver con la necesidad de

²⁴ Por securitizar se entiende al término de Buzan por el cual amenazas subjetivas – que pueden ser amenazas no tradicionales, emergentes, nuevas amenazas o no convencionales- son definidas desde un proceso de interacción desde el cual se entiende la realidad y la respuesta y adaptación a la misma. La securitización es cuando esa realidad, antes politizada, se torna amenaza y, por ende, de necesaria intervención Buzan (1991).

multilateralizar la agenda derivada del conflicto armado y la importancia de una mayor presencia, por ejemplo, de los socios regionales de la Comunidad Andina -CAN o, por otro lado, de actores como la Unión Europea.

A tal efecto, transformar la imagen negativa de Colombia, la necesidad de multilateralizar una agenda cuya resolución pasa, indefectiblemente, por una mesa de negociación, son prioridades que si hoy se aprecian en la negociación de La Habana (Cuba), ya se reivindicaban en trabajos como los de Puyana (2005) o González Arana (2001). Este último, en el marco del Caguán, asociaba la necesidad de legitimidad internacional a fin de insertar compromiso, seriedad y credibilidad a los elementos que configuran un marco de negociación.

Bajo el mismo escenario negociador del Caguán, aunque en todo caso extrapolable al contexto actual, otros como Moreno (2009: 168) señalarían que:

“En el caso de la relaciones entre Colombia y la UE, la incertidumbre en la anarquía del sistema internacional creó un escenario interdependiente en donde la competencia y la cooperación fueron los móviles que permitieron a los actores construir alianzas horizontales y verticales para impulsar una política pública frente al proceso de paz entre 1999 y 2000. Los beneficios para el vencedor de la contienda, en este caso, eran el apoyo político y financiero a la propuesta de paz que se acercó más a la perspectiva de seguridad humana que tuvo la comunidad europea”.

A todo lo anterior y antes de finalizar y posicionar dónde, dentro de todo este entramado bibliográfico, se posiciona la tesis doctoral que se presenta, habría que añadir dos grandes temas de análisis y estudio que, quizá, por su alcance y sentido, mucho tienen que ver con la contribución investigadora y académica que se propone en este trabajo.

En primer lugar estaría la cuestión de estudio sobre la relación entre conflicto armado y cultivos ilícitos. Al respecto, destacan los trabajos de Echandía (2006), en cuanto a su esfuerzo por cartografiar la violencia y el cultivo ilícito; o Henderson (2010), por su análisis en la integración del narcotráfico, la violencia armada y la globalización.

Particularmente, aportaciones como las de Mejía (2009; 2012) o Vargas (2005), e incluso de un modo menos académico, Samper (2013), centran sus análisis en cómo las estrategias reactivas sobre los cultivos resultan siendo ineficientes, del mismo modo que, por su mayor componente, lo ha terminado siendo el Plan Colombia. Es en relación con esta afirmación que Raffo (2010: 254) señala que: “un aumento de la productividad de las actividades ilícitas, que ha contrarrestado los efectos de las políticas de represión de la oferta y el descenso registrado de la superficie de cultivos de coca, invita a repensar cómo se debe abordar el problema del narcotráfico”, y en extensión, la forma en la cual se ha intervenido en Colombia.

El narcotráfico permea no solo en términos de violencia, sino a modo de corrupción, cooptación local, impunidad y control sobre la escasa gobernabilidad que llega a los

municipios más afectados, tanto por la presencia tanto de guerrillas como por el control de las AUC y las Bacrim. Esto permite entender las dinámicas, para Borrero (2004: 259), que son preponderantes en las regiones con mayor impacto de la violencia y que en su trabajo se focalizan en Arauca y Casanare, el Catatumbo, Guaviare, la región de Urabá, Putumayo, el Magdalena Medio y el “zócalo” Pacífico.

Es más, posteriores estudios al respecto se han centrado en entender que, por las dinámicas en las políticas de seguridad puestas en marcha en la década pasada, los grupos armados han respondido en una lógica acción/reacción por las que los cultivos ilícitos, su concentración e intensificación en los últimos años, y el recurrido empleo a las minas antipersonal, se han consolidados como fuente de resistencia frente al Estado. Afirmaciones que se aproximan en parte a algunas de las que propone esta tesis doctoral, si bien, desde posiciones muy generalistas y que han requerido de una mayor precisión (Bejarano, 2010: 266).

En adición al tema anterior, quizá, el que se ha consolidado en los últimos años como el concepto *mainstream* desde el que estudiar el conflicto armado colombiano, a tenor de los diálogos de La Habana (Cuba), ha sido el concepto de posconflicto. Un concepto tan prolífico como, generalmente, mal interpretado. Son trabajos de referencia las aportaciones de Currea Luego (2015) o Morales (2015) si bien se pueden destacar otros aportes no menos relevantes. De acuerdo con Vargas (2003), quien precisa el hecho de posconflicto armado, algunos como Cárdenas, Cadena o Montenegro (2003) consideran que el lapso de posconflicto como aquél que transcurre desde el momento que inician los diálogos de concertación hasta que estos, consolidados, son sometidos a juicios de ratificación, incluso por la sociedad civil. No obstante, se tiende a entender, por la imprecisión semántica del término, por ejemplo, que el posconflicto es el escenario emergente una vez que ha concluido otro, anterior, de violencia en un entorno de conflicto armado. Utilizar imprecisamente el posconflicto como categoría de análisis supone, erróneamente, entender que por su significado, el posconflicto se refiere a una realidad en la cual el conflicto ha dejado de existir cuando, todo lo contrario, es cosustancial a la naturaleza humana. Lo anterior, porque para autores como Fisas (2002), Galtung (2003), Lederach (1997) o Vinyamata (2001), el conflicto se entiende como una fuerza social que no debe ser rechazada, especialmente, en tanto que dispone de un potencial constructivo a la vez que destructivo.

La posición Kumar (1997; 1998), Lederach (1997) o Ardon (1998) terminan, igualmente, siendo aportaciones notables a efectos de asociar el posconflicto a la participación de la ciudadanía en el proceso de construcción de paz y toma de decisiones, siempre, con base a un sistema incluyente, reforzado por la legalidad y la legitimidad del Estado social y Derecho. Esto último, no obstante, y como se verá más adelante en este trabajo, fue fuertemente erosionado durante la PSD de Álvaro Uribe, lo cual es definido por Pérez Pérez (2011: 144) como “un freno a la construcción de posconflicto en Colombia”.

Sea como fuere, hablar de posconflicto no es nuevo, a tenor de las lecciones aprendidas por la desmovilización de otras guerrillas como el M-19, el EPL o algunos aspectos de Desmovilización, Desarme y Reconciliación con las AUC. Experiencias que, de cualquier modo, que deben ser necesariamente incorporadas en el esfuerzo por desactivar y superar el conflicto armado de Colombia (Villarraga, 2013).

Estas afirmaciones ponen en la mira académica las decisiones que se encuentran enmarcadas dentro del actual proceso de negociación. Así sucede, muy particularmente, con decisiones como la Ley de Tierras – Ley 1448 de 2011²⁵-, (Bolaños, 2011) que, en todo caso supone, según Martínez Sanabria y Pérez Forero (2012: 125):

“un esfuerzo de todos los entes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por buscar herramientas que lleven a la práctica los principios constitucionales e internacionales suscritos y ratificados por Colombia en materia de protección a la población civil dentro del contexto del conflicto armado, lo cual conlleva replantear otras políticas en materia de desarrollo social y de apoyo a la producción agraria, políticas educativas para las personas más desfavorecidas y destinar presupuesto con miras a su efectividad”.

Es así que con base en lo anterior, la justicia restaurativa, entendida como la normalización y restablecimiento de la libertad, de los DD.HH, la vida familiar, la ciudadanía así como la vivienda, el empleo y la recuperación de los bienes despojados, se trata de la empresa más compleja en la construcción de un escenario de posconflicto en Colombia con seguridad y dignidad (Gómez Isa, 2010). Más difícil si cabe, si a ello se unen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, principios inquebrantables que deben ser abordados integralmente y bajo todo un entramado de garantías en la referida construcción (Douzinas y Estepa, 2010; Salcedo, 2013).

Dada la complejidad de las aristas analíticas que presenta el conflicto armado colombiano, es imprescindible, antes de exponer el marco teórico sobre el que se erige este trabajo doctoral, identificar cuáles son las líneas a las que se busca aportar y que le resultan más próximas bibliográficamente.

De acuerdo en la línea de trabajo de Yaffe (2011), anteriormente expuesta por Ballentine y Nitzchke (2003) o Ballentine y Sherman (2003), se acepta que los elementos causales del conflicto armado, especialmente marcados por la frustración de un Estado de escasa dimensión social, cooptado por elites alejadas de las necesidades y el bienestar de buena parte de la sociedad, son en cierto modo irrelevantes de manera que, de forma más concreta, se

²⁵ La Ley 1448 de 2011 se enmarcaría, en sentido estricto, como una norma de construcción de paz y de “posconflicto”, en la medida en que busca restaurar un estado de derechos afectado por el conflicto armado. Sin embargo, su alcance, hasta el momento, es relativo porque los mayores escenarios de desplazamiento y despojo de tierras siguen siendo los enclaves de mayor violencia directa y persistencia de grupos armados.

busca entender los factores de cambio y transformación en cuanto a las dinámicas de la violencia.

Es así que cobra especial valor, en los dos primeros capítulos analíticos de esta tesis, el factor del narcotráfico, en la medida en que se busca evidenciar un cierto proceso de atracción entre la concurrencia de cultivos ilícitos y el activismo armado tanto de las FARC como del ELN. Al respecto, los trabajos de Reyes (1993) pero muy especialmente de Echandía (2006), se aproximan a esta consideración aunque con una debilidad que esta tesis busca superar, y es la tendencia histórica, en retrospectiva, que permita analizar, evolutivamente, cuál ha sido la concurrencia espacial entre violencia y presencia de cultivos ilícitos. Los trabajos de mayor referencia, en su mayor medida son descriptivos y con escasa retrospectiva histórica, y en todo caso, su mayor actualidad termina en 2006-2007, años que, como se verá, marcan un importante cambio de tendencia.

Un segundo ámbito sobre el que tiene lugar este trabajo, es con base en los análisis a las políticas públicas de seguridad. En un estricto sentido de cuál es el alcance y la orientación de los tres últimos gobiernos, en cierta medida, se trata de “desmitificar” el tradicional éxito que ha acompañado a éstas, más particularmente, en el caso de la presidencia de Álvaro Uribe.

Con independencia de los trabajos referidos, que hacen énfasis en los déficits en materia de DD.HH y superación a los límites de la democracia y el Estado de Derecho, más bien, este trabajo busca presentar, en su capítulo VI, de qué manera, las políticas de sesgo militar ni mucho menos ofrecen un bagaje de éxito; más bien, a lo sumo, todo lo contrario. De acuerdo a una revisión del impacto espacial de este tipo de políticas, hasta el momento, tampoco existiría un trabajo académico que analice de qué modo se han dispuesto los operativos de la Fuerza Pública colombiana, qué resultados han llevado consigo y cómo han afectado a las cartografías de la violencia de FARC y ELN.

En este caso, la posición dominante es la planteada por autores como Posada (2001), Rangel (2003), Gaviria (2005) o Henderson (2010), entre muchos otros, que atribuyen resultados, a efectos de esta tesis, sobredimensionados en cuanto a los resultados de las políticas públicas de sesgo militar. Tal vez, la relativa invisibilidad de los escenarios de conflicto, el desconocimiento existente por la debilidad que muchos de estos trabajos atesoran a tenor de su falta de experiencia con trabajos de campo, y el aumento general de la percepción de seguridad subjetiva, que relega las dinámicas de violencia a escenarios locales de dimensión más reducida, puedan afectar negativamente a los resultados que estos trabajos evocan.

El Plan Colombia, objeto igualmente de una amplia literatura de estudio, no es una prioridad para este trabajo, más allá de por su alineamiento con la política de seguridad tanto de Andrés Pastrana como, especialmente, de Álvaro Uribe. Muchos trabajos, especialmente interesantes

los de Otero (2010), Ramírez y Robledo (2011) o Rojas (2007; 2015) abordan, con mucha mayor profundidad, esta cuestión.

Sin embargo, nuevamente, la dimensión analítica en retrospectiva, muestra una realidad poco reconocida en la literatura académica sobre el conflicto armado, y que es la debilidad en cuanto a resultados de las políticas de aspersión aérea a efectos de erradicación de cultivos ilícitos. Ello, por la fácil recomposición de los cultivos ilícitos de coca, pero, muy especialmente, por la no afectación sobre los enclaves con mayor presencia guerrillera.

Estas afirmaciones entroncan este trabajo con investigaciones como las de Mejía (2009; 2012) o Vargas (2005), que coinciden en señalar la necesidad de reducir el impacto de la droga, no tanto en las cadenas productivas, de cultivo, sino en los eslabones de distribución. Eslabones donde el valor agregado resulta mucho mayor, y que afectaría negativamente a quienes verdaderamente dirigen las coordenadas del crimen organizado transnacional.

Junto al estudio del factor del cultivo ilícito y del alcance de las políticas de seguridad, un tercer componente que se aborda sería el de la interacción de las guerrillas, dentro del contexto armado, con el paramilitarismo. Ello, con el fin de entender si, verdaderamente, la noción mayoritaria que atribuye un factor de expulsión y reacomodación geográfica del paramilitarismo sobre la guerrilla, realmente, es cierta. Sorprendentemente, el resultado muestra que ni siquiera en la costa Atlántico, donde acontece el escenario de mayor arraigo paramilitar, se puede afirmar que éste opere como actor expulsor, especialmente, de las FARC.

Todo lo contrario, las FARC mayoritariamente, con pequeñas excepciones en Antioquia, ya identificadas por el trabajo de Medina (1990), se mantendrían constantes, cuando no crecientes, en cuanto a sus dinámicas de violencia. Posiblemente, éste sea uno de los aportes más interesantes al estudio de la interacción entre guerrilla y paramilitarismo, carente de trabajos aplicados en su mayoría, y contruidos casi siempre, con base en testimonios de importante sesgo local que terminan por limitar las posibilidades de comprensión a nivel nacional.

Finalmente, en términos de violencia estructural, debería relativizarse, al menos para el caso colombiano. La afirmación que sostienen Blattman y Miguel (2010), en cuanto al papel preponderante y explicativo que, para los conflictos armados como el colombiano, supone la inequidad social amerita trabajos de profundidad investigadora. Lo mismo, para otros como Hardy (1979) o Weede y Tiefenbach (1981), quienes comparten que la razón mayoritaria que explica los conflictos armados internos se encuentra, más bien, en el subdesarrollo económico.

No tanto como factores causales pero, en cualquier caso, sí como factores explicativos del cambio, a efectos de esta tesis doctoral deben integrarse parte de los enfoques sobre la “maldición de los recursos” y el rédito sobre fuentes legales, y mayormente ilegales, que

alimentan las confrontación armadas contra el Estado, de acuerdo a lo que sostienen Collier, (2000; 2004) o Bates (2008). Ya se señaló que en el particular marco de análisis colombiano, trabajos próximos a esta línea serían los de Sánchez y Chacón (2006), Pizarro (2004), Restrepo (2006) o Echandía (2006), pero también otros como los de Salas (2015) o la Presidencia de la República (2014), que si bien aceptan las causas socioeconómicas y políticas como razón explicativa del conflicto, de otro lado, el narcotráfico, y otras fuentes de poder económico servirían para entender la supervivencia y transformación del conflicto armado colombiano en lo que actualmente representa.

2. El Estado y su territorio: violencia legítima y control territorial

Un primer concepto que hay que manejar para entender el conflicto en Colombia, en tanto que se entiende como escenario, pero también como actor involucrado en el conflicto armado, es el Estado. Un Estado cuya concepción moderna para el caso colombiano ha quedado, cuando menos, desnaturalizada, respecto del alcance real en el cual se han desarrollado sus dos principales pilares: la soberanía y el monopolio legítimo de la violencia.

Basta con observar las cifras en cuanto a los municipios con presencia de grupos armados, el nivel de municipios afectados por la violencia directa, especialmente relevante, con motivo del desplazamiento forzado, o la capacidad de movilizar recursos de parte de las guerrillas y del paramilitarismo, para entender que el alcance territorial del Estado en Colombia es, al menos, cuestionable.

Si bien, algunos como Waldman (1997: 37) consideran que eso es una constante, prácticamente en todo América Latina, y si bien es cierto que en muchas ocasiones la ubicuidad del Estado es una mera reducción normativa, lo igualmente real es que, en el caso que presenta Colombia, esta circunstancia ha sido especialmente palpable y creciente, hasta el punto de “causar una verdadera disolución del Estado”.

Una disolución que, como señala Trejos (2013: 56), se ha desarrollado de manera más o menos evidente a lo largo de tres momentos en el siglo XX. Un primer momento, que se encontraría en la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902; un segundo momento, durante los años de la Violencia (1948-1958) y, finalmente, desde 1964 y hasta la actualidad, bajo un contexto, al menos formal, de lucha revolucionaria con organizaciones insurgentes, como FARC y ELN.

El Estado, en este contexto, se entiende bajo la óptica de tener más territorio que presencia institucional. Es decir, la capacidad coactiva, con base en el ordenamiento jurídico, que le permitiría satisfacer y hacer cumplir elementos de justicia, seguridad y servicios básicos, en

Colombia, tradicionalmente habría sido cuestionada, de la misma manera que su legitimidad. Buena prueba de ello es el testimonio de Manuel Marulanda²⁶, cuando señalaba que:

“... de hecho nosotros somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional (...) Vd. va a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el inspector jefe les dice ‘Tengo un problema y necesito que me lo ayuden a arreglar’ la autoridad en estos territorios es la guerrilla. Los alcaldes no pueden trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo debe ser su gobierno. En la práctica nosotros somos otro gobierno dentro del gobierno” (Observatorio para la Paz, 1999: 111).

Igualmente reveladoras serían las palabras del líder paramilitar, Carlos Castaño²⁷, quien en términos similares afirmaba:

“Comenzamos por darle trabajo a toda esta gente que vive dispersa. Nosotros los reunimos para que vivan mucho más cerca. Les procuramos el agua haciéndoles represas. Les prestamos una retroexcavadora y en dos horas hacen un pocito mientras se busca un lugar para hacerles una represa grande. Se les lleva agua para que tengan donde bañarse, para que dejen de sufrir una cantidad de necesidades y, una vez aglutinados, se les hace la escuela y los puertos de salud. Con esto estamos consiguiendo algo de infraestructura, algo de solidaridad... Es que la guerrilla argumenta que ellos están donde no hay Estado. Nosotros decimos lo mismo” (Castro, 1998: 79)

Aunque esta definición de Estado pudiera resultar de mínimos, no obstante, debe ser entendida como un punto de partida, pues bajo estos términos el Estado se entiende, más allá que por su presencia física, por el cumplimiento efectivo de las funciones, libertades y garantías que tienen atribuidas a sus instituciones, y que en el caso colombiano no termina por llevarse a cabo.

Algunas de las definiciones “de manual”, que se refieren al Estado sería, dentro de una inabarcable bibliografía, sería la que plantea Bouza (2006: 48), para quien el Estado pudiera comprenderse como:

“una organización política (capaz de ser sujeto de adhesiones y objeto de reivindicaciones por sí misma, como consecuencia de un proceso de despersonalización del poder) que en ejercicio de su soberanía, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima (tanto como la potestad para crear y unificar el derecho y para generar una mínima cohesión social) en un territorio delimitado por las correspondientes fronteras, cubriendo estos objetivos mediante la especialización y subsiguiente integración de una parte de la población en una administración pública - civil y militar- profesional y permanente”.

En iguales términos, se podría destacar la definición que realiza De Gabriel (2000: 51), quien considera que el Estado debe comprenderse como:

²⁶ Manuel Marulanda Vélez (1930-2008). Líder histórico de las FARC

²⁷ Carlos Castaño Gil (1965-2004). Líder histórico de las AUC

“el poder político y el complejo institucional organizado sobre un territorio determinado, en el que es capaz de ejercer, con una eficacia razonable, el monopolio de la legislación y del uso público de la fuerza sobre la sociedad o las personas bajo su jurisdicción”.

Tanto una como otra definición, comparten la consideración de que el Estado se trata de una fuente última y suprema de poder cuya preponderancia se debe gracias a instrumentos tales como la soberanía, la violencia legítima o la administración pública, y cuya puesta en marcha es la que le faculta su capacidad gobernar. Así, el poder del Estado como fuente de coerción, influencia, autoridad, fuerza o manipulación; pilares que permiten, según la teoría clásica de Bachrach y Baratz (1970), consolidar su rol dominante respecto de otros actores, en términos de población y territorio, no pueden ser entendidos en sentido estricto para el caso colombiano.

El carácter inacabado y limitado que se reclama como hipótesis de partida en el análisis del caso colombiano, se construye a partir de la consideración de que en Colombia, el Estado no adquiere en exclusiva los medios de coerción, dominación, control y protección para con su territorio y población. Existen actores que, al margen del Estado, paramilitares y guerrillas, así como otras estructuras de crimen organizado, comparten, dentro del contexto conflictual, las funciones que según Eisenstadt (1966) son, en principio, indisociables de la naturaleza del Estado.

Es decir, los actores armados irregulares socavan, en primer lugar, la función estatal de dirección suprema de la sociedad en cuanto a objetivos y herramientas para su consecución, defensa exterior e interior, y normas finales y superiores en la organización de la sociedad. Así, esta función supondría controvertir respecto del dominio del Derecho, tanto para definir las condiciones generales en el despliegue de una sociedad, como en cuanto al establecimiento de objetivos y metas con vistas a hacer prosperar y beneficiar a un cuerpo de ciudadanos (Palmer, 2000).

De otro lado, se desvirtúa la función de ordenación de la sociedad a través de actividades judiciales, político-partidistas y administrativas mediante el empleo de normas organizativas de la sociedad. Es decir, la función organizadora y ejecutora del poder, la cual transcurre desde una burocracia administrativa hasta una disposición de los últimos recursos opresores, como la Policía o las Fuerzas Militares, son relegadas, cuando no suplantadas, en muchos escenarios del país donde el monopolio del poder, ni mucho menos, se encuentra con base en el Estado (Bouza, 2006).

Para autores como Urrego (2005), la fragilidad con la que el Estado colombiano llega a nuestros días debe buscar su *causa máter* en la debilidad irresponsable de la que las elites dirigentes del gobierno colombiano hicieron gala a la hora, tanto de prevenir el conflicto armado, como de sobreponerse a la realidad creada por los grupos insurgentes y contrainsurgentes. Un precio sumamente alto por el que la sociedad colombiana sigue pagando el precio en la actualidad.

Otros autores, como Sandoval (2004), añaden como razón explicativa de la debilidad institucional del poder público colombiano, la deficitaria manera en la que se desarrolló el sentido de ciudadanía social²⁸, la lentitud de su proceso, la escasa base social a la que comprometía, y la considerable fragmentación de unas elites políticas que, a menudo, han estado más preocupadas de colmar las expectativas de sus intereses privados que de afrontar con responsabilidad un problema que ha socavado durante décadas el poder público en Colombia.

También hay quienes consideran que este contexto conflictual sobre el que hoy se erige el Estado, adolece de una “cuestión genética”, fruto de una confrontación política intensa, y casi permanente, desde los primeros compases del siglo XIX, y que ha contribuido sobremanera a enfrentar ideológicamente, por medio de las elites afectas, a gran parte de la comunidad cívica del Estado colombiano.

Santanderistas y bolivarianos, progresistas y moderados, centralistas y federalistas en el SXIX; Partido Liberal, Partido Conservador, guerrilla, paramilitares y cárteles narcotraficantes en el siglo XX, han copado la beligerancia y la violencia de una confrontación de sentido político y militar que, a menudo, ha servido para encontrar en ella una razón de peso más que considerable, con la que entender las limitaciones y lastres que merman el sentido de Estado dentro del contexto colombiano (Urrego, 2005: 167)

Académicos como Patiño (2003) consideran, en consonancia con lo señalado, que existen tres razones fundamentales con las que explicar decididamente el carácter sesgado y el alcance limitado del modelo de Estado moderno en Colombia. Por un lado, se encontraría la deficitaria administración colonial heredada, cuyo legado resulta el causante de la debilidad impositiva y fiscal de la que tradicionalmente ha adolecido el Estado colombiano. Por otro lado, estaría la atención desigual que ha desarrollado el Estado colombiano con los sectores urbanos y los núcleos de población más fuertes y pudientes. Así, los sectores rurales, los más desfavorecidos, una especie de “segunda Colombia”, siempre han quedado en un relegado nivel de atención y (des)preocupación que le ha conllevado a desarrollar considerables carencias y déficits en las políticas nacionales destinadas. Ello, fundamentalmente, con especial énfasis en la justicia, la sanidad, la educación y la seguridad.

Es pues, que por esta razón puede explicarse que en muchos lugares nunca ha existido un verdadero control, ni dominio, ni gobierno por parte del Estado. Una última razón que destacaría el profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional sería la ausencia de una organización militar permanente que ejerciera el control sobre todo el territorio.

²⁸ Por ciudadanía social se entiende el tradicional concepto de Marshall (1992), de integrar derechos civiles, políticos y sociales en su conjunto, como base de la ciudadanía democrática y participativa.

En suma, la ausencia de un control territorial y del correspondiente monopolio en el uso de las armas, podría entenderse a estos efectos, al menos, como un caldo de cultivo idóneo desde el que comprender la aparición de los grupos insurgentes y contrainsurgentes. Guerrilla y paramilitarismo que, tras más de cinco décadas, siguen debilitando, desplazando, suplantando y socavando la posición que por naturaleza debería corresponder al Estado.

Un nutrido elenco de académicos y especialistas, como por ejemplo Urrea y Viáfara (2002) o Duncan (2004), entre otros, comparten que la razón que ha servido de acicate para el desarrollo del conflicto y las dificultades a las que se presenta el Estado colombiano, más que encontrarse en las razones recién referidas, reposan también en lo adverso de su perfil geográfico. Un hándicap más que considerable a la hora de atender algunas de las fracturas políticas, sociales, económicas, raciales y culturales que han afectado y enfrentado a su sociedad. Así, el vestigio de una geografía hostil, que ha fragmentado a territorio y población durante siglos fungiría como esa razón de peso que ha impedido a Colombia resarcirse de los vestigios de su pasado, resultando incapaz de superar con ello la debilidad fiscal, la escasa capacidad reguladora y la parcialidad en el ejercicio de la soberanía de la que ha adolecido desde sus primeros tiempos como Estado independiente.

3. La Geografía Política en la comprensión de la violencia

Lo anterior necesita integrarse, a su vez, con la Geografía Política, la cual, junto con las Investigaciones para la Paz y la Resolución de Conflictos, se ha tratado, quizá, de la disciplina, dentro de buena parte de las Ciencias Sociales, que más importancia ha dado a contextos espaciales en la comprensión de ciertos fenómenos políticos, entre ellos, la violencia.

De hecho, su objeto de estudio en cuanto a la violencia aborda desde la comprensión de los conflictos armados en sí hasta la propensión hacia los mismos, por ejemplo, mediante el estudio y la variación de intervalos de espacio-tiempo en su análisis. Así, recientemente, la Geografía Política ha resultado un campo prolífico para el estudio de la violencia en su relación causal con diferentes tipos de población (Raleigh y Hegre, 2009), bajo condiciones de pobreza (Hegre *et al.*, 2011), de acuerdo a dimensiones fronterizas (Buhaug y Rød, 2006), de acuerdo a la proximidad de recursos como gas y petróleo (Basedau y Pierskalla, 2013) o en atención a la pluralidad étnica de una comunidad (McDoom, 2014).

Todo lo anterior, por entender que las condiciones demográficas, las condiciones sociales o los elementos culturales, según su heterogeneidad, afectan particularmente los contextos espaciales sobre los cuales tiene lugar la violencia, entendiendo que ésta solo resulta comprensible a partir de una comprensión en cuanto a la interacción de la población con el lugar.

La intrincada y particular relación del individuo con el ambiente que le rodea construye el contexto espacial sobre el que la Geografía Política focaliza su interés disciplinario,

entendiendo contexto, como un “container” o un escenario de interacciones en medio de diferentes elementos que, a su vez, conforman una totalidad. Escenario que, para Agnew (1987: 5) no es más que el producto de un día a día; de interacciones personales que desembocan en construcciones sociales (Pattie y Johnston, 2000) que, a su vez, integra diferentes escalas geográficas, de lo local a lo global (Taylor y Flint, 2002).

A tal efecto, para la Geografía Política, como perfectamente sostiene Agnew (1987: 60), la base fundamental explicativa, por ejemplo, de la violencia, la determinan las particularidades de la localidad. Particularidades que son las únicas que pueden explicar por qué, bajo mismas circunstancias objetivas, unos escenarios tienden a ser más violentos que otros. De hecho, ello supone un amplio campo de estudio, pues existen vastos marcos de análisis de interpretación que van desde cuáles y cómo se construyen las referidas particularidades de la localidad; qué factores determinan su cambio; o cómo se articulan estas lógicas con las de otras escalas geográficas de mayor magnitud (Wallerstein, 2004) y que confieren un carácter explicativo que trasciende de eventuales problemas de casualidad o de “falacia ecológica” (Linke & O’Loughlin, 2015).

De hecho, en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de trabajos académicos que desde la Geografía Política buscan comprender los factores de comprensión de la violencia. Así, según Linke, Witmer y O’Loughlin (2012), en su intento por aproximarse a explicar el caso de la violencia en Iraq, muestran de qué modo, el ámbito territorial que define la dinámica acción/reacción social frente a la violencia, cambia una vez que se controlan los términos espacio/temporales de la misma. Tanto, que afecta directamente al modo en que través de la distancia y el tiempo varía la relación del entorno social sub-nacional con las lógicas propias de la violencia.

Algo similar plantean Linke y O’Loughlin (2015) cuando buscan entender las respuestas de violencia en el norte del Cáucaso, reconociendo que elementos particulares de la localidad, como el orgullo nacional, el capital social, el cariz separatista o la exposición directa a la violencia, son factores que determinan las respuestas y las percepciones de la comunidad local. Sin embargo, esta afectación varía, igualmente, en función de cómo se controlen las coordenadas espacio-temporales. Una conclusión que, en unos términos muy similares, se puede encontrar en el trabajo de Schutte y Donnay (2014), también sobre Iraq: “Matched wake analysis: Finding causal relationships in spatiotemporal event data”, publicado en la reconocida *Political Geography*.

Otros como Forø y Buhaug (2015), sin restar valor a lo anterior, reivindican la importancia de la Geografía Física como contexto modulador de ciertos elementos políticos, igualmente, presentes en el trabajo de Kaplan (2013). De este modo, escenarios periféricos, en términos de difícil accesibilidad y de mayor distancia con respecto de los centro económicos y políticos del país, son un factor clave a efectos de comprender ciertas dinámicas de conflicto intraestatal, como lo plantean también Horowitz (1985) o Brancati (2006).

De hecho, Forø y Bahaug (2015: 7) precisamente reivindican con un valor agregado a efectos de entender particularidades locales en su relación con la violencia, la distancia con la ciudad, la disponibilidad de corredores y refugios selváticos o montañosos, así como la distancia socio-cultural con los centros políticos y económicos del país (*inaccessibility*). Lo anterior, por entender que la noción de Estado permea en estos escenarios de una manera parcial, dada una debilidad institucional marcada, lo cual puede desvirtuar la noción clásica de autoridad y favorecer la emergencia de poderes paraestatales, perfectamente comprensibles, en términos de guerrilla o paramilitarismo, en el caso colombiano.

La fractura regional, la ausencia de infraestructura en términos de conectividad, la afectación de fronteras inestables así como la presencia de imaginarios distanciados, en clave de unidad nacional, para algunos trabajos de Geografía Política como los recién mencionados, u otros como los de Salehyan (2009) o Cunningham *et al* (2009), son una ventana de oportunidad para la emergencia de conflictos armados internos.

Dicho de otro modo, para investigaciones como las que plantea esta tesis doctoral, y que se enmarcan en hipótesis de una mayor fractura centro-periferia, tanto geográficamente como, adicionalmente, en términos sociales, políticos y culturales, a mayor distancia, mayor propensión a experimentar dinámicas de violencia interna.

Es más, estas afirmaciones, irían en la misma lógica que aportes como los de Buhaug y Rød (2006), que consideran que las grandes distancias con el centro nacional son un factor clave a modo de riesgo interno de conflicto. En relación con ello, aportes como los de O’Loughlin *et al.* (2012) le apuntan a que, con base en lo anterior, los conflictos internos tienden a una mayor *fronterización* toda vez que otros trabajos como los de Cederman *et al.* (2013) señalan como un factor importante la construcción de comunidades étnicas transnacionales, que desde la frontera tienden a producir un lugar que dista de las dinámicas mono-nacionales del Estado.

Por ejemplo. Un trabajo reciente que iría en la línea anterior sería el de Schutte, de 2015, “Geography, Outcome and Casualties”, publicado en el *Journal of Conflict Resolution* y en el que se busca reivindicar la Geografía como disciplina, a efectos de entender las interacciones de las guerrillas, sus resultados y bajas, con las fuerzas regulares de un gobierno. Ello, con base en dos hipótesis de partida que quedan corroboradas.

Reconociendo el valor agregado que las zonas periféricas han servido generalmente para poner en marcha procesos insurgentes – China, Cuba, Tailandia-, las relaciones centro-periferia son entendidas como una oportunidad en la victoria de algunos grupos insurgentes. Así, para Schutte (2015: 1112), el actor que es capaz de ejercer la violencia con más precisión, y en disposición de mayor cercanía, tiene más probabilidades de ganar. El factor poblacional es importante en la medida en que éste, cuanto más distante y disperso resulte, menos afecta en términos de imaginario a los resultados de una guerra y más expuesto a las posibilidades de una violencia “deteriorada”. Es decir, se entiende como un indicador adecuado la capacidad del gobierno para aplicar la fuerza con precisión sobre grandes núcleos

de la población. Si estos núcleos son periféricos, esas posibilidades se reducen sustancialmente en favor de la insurgencia, lo cual, si se da sobre la base de una notable *periferialización*, corre el riesgo de incrementar, muy sustancialmente, el número de bajas y víctimas de la guerra.

Lo anterior, y aunque se desmarcaría de la hipótesis de inicio, por ejemplo, y dentro del inabarcable campo de estudio de la Geografía Política, sería criticado por trabajos como los de Zukerman (2012), para quien, en el particular estudio que hace sobre Colombia, descarta los factores de pobreza, de geografía hostil, la dispersión poblacional o los recursos naturales *saqueables* (*lootable natural resources*) como factores explicativos del conflicto colombiano.

En inicio, ello le desmarcaría de trabajos clásicos, sobre la “maldición de los recursos”, como los de Collier, Hoeffler y Rohner (2009), al entender Zukerman (2012) que la presencia de guerrilla estriba, directamente, de una conexión con las luchas agrarias y las acciones de disputa anteriores al conflicto armado, en su escenario inicial de los años sesenta. Dicho de otro modo, el conflicto se conecta causalmente, predominantemente, en aquellos escenarios en los que años atrás hubo movimientos y reivindicaciones agrarias en Colombia.

De hecho, tal hipótesis parece perfectamente válida si bien, en el estudio que focaliza la profesora de Ciencia Política de Stanford, el cual se centra entre 1964 y 1984, se obvia el factor de los cultivos ilícitos, pues hacia 1984 ni siquiera las FARC estaban inmiscuidas en el mismo, y además se desatiende la diferencia que, el propio Collier (2004) señala, entre factores causales y factores de cambio. Entendido estos factores de cambio como los verdaderamente importantes a efectos de continuidad en un conflicto armado.

Sea como fuere, la importancia del trabajo de Zukerman (2012), tanto en el marco general de aunar Geografía Política y violencia, como en el marco particular de aterrizar su análisis sobre Colombia, se destaca la importancia que se da al lugar como constructo político de las interacciones sociales particulares que en él acontecen, escapando de cualquier atisbo de determinismo alguno y visibilizando las estructuras latentes que, como reconoce Kalyvas (2008: 401), son imprescindibles en la medida en que “las dinámicas de la violencia y las dinámicas de la guerra son analíticamente distintas”.

4. La Geografía Política como disciplina explicativa del conflicto armado interno colombiano

En Colombia, son muchos los estudios que se han servido de la Geografía para atender y entender las evoluciones del conflicto armado colombiano. Quizá el primer intento por representar en un mapa lo que resultaba la magnitud de la Violencia, lo plantean Fals Borda, Guzmán y Umaña, en 1962, no obstante, de una manera muy rudimentaria, no solo por cuestiones tecnológicas, sino por la misma comprensión de violencia, entendida como cualquier acción que gravase la vida humana. Es decir, desde asesinatos hasta

desplazamientos y, en todo caso, bajo representaciones de mapas que, a su vez, obvian la responsabilidad de la acción. En estos primeros mapas, lo que se busca proyectar es que la Violencia – tanto en mayúscula como en minúscula- impregna buena parte del país, y se obvian las representaciones espaciales que cada una de las facciones en lucha, liberales y conservadores, llevan consigo.

Hay que esperar tres décadas para encontrar un trabajo que, nuevamente, evoque la necesidad de presentar en mapas las configuraciones espaciales de la violencia en Colombia. Ello lo hace Alejandro Reyes (1999), cuando en su *Geografía de la Guerra*, representa la violencia guerrillera de las FARC, sin embargo, con una intención poco alejada de la sus predecesores, al mostrar la ubicuidad de las acciones guerrilleras en Colombia.

Su representación cartográfica utiliza el mismo color para proyectar aquellos municipios que, al menos, habían tenido una acción guerrillera en los últimos años, y dejando en blanco aquellos municipios que no. Evidentemente, el mapa colombiano era un mapa monocolor negro, casi en su totalidad que, no obstante, desatendía la intensidad de esa presencia, o mucho menos, desglosaba el tipo de acción guerrillera llevada a cabo, en la medida que las acciones beligerantes, de combate, resultan por su impacto y relevancia, bien distintas a las acciones destinadas, por ejemplo, solo a infringir daños materiales.

Esta lógica sería similar al trabajo de Vélez (2000), que si bien, novedosamente, busca comparar marcos temporales distintos, esto es, presentando cuál era la presencia guerrillera en 1980 y cuál era la misma presencia, dos décadas después, sin embargo, termina un tanto desdibujada en la medida en que el parámetro de representación espacial es, igualmente, sobre categorías 1-0, que no dan cuenta de la magnitud, ni de la intensidad real, en este caso, del activismo guerrillero.

Lo anterior, por ejemplo, queda inicialmente superado por Echandía (1999), quien en sus primeras representaciones cartográficas, busca trascender del foco de magnitud generalizada de la violencia en Colombia, para visibilizar aquellas regiones que particularmente se encuentran más afectadas, incorporando una gama de colores en función de la intensidad, por ejemplo, de las operaciones de la guerrilla. Quizá, y esa cuestión es una debilidad incluso de las cartografías más actuales, es que en la representación de la violencia, al utilizar el conjunto del municipio como unidad, buena parte del país se puede decir que aparece sobrerrepresentada, especialmente, la mitad sur de Colombia. Ello, en la medida en que se encuentran los municipios más grandes del país, algunos con extensión superior a 40.000 km², toda vez que son los menos poblados, y en los que, en muchas ocasiones, la violencia se constriñe a la presencia guerrillera en veredas rurales muy concretas, lo cual magnifica sobremanera la representación de la violencia.

Es por estp que las fragmentaciones espaciales de la violencia, dejando de lado el municipio como categoría administrativa, y por ende, como unidad de análisis, se encuentran ya, incluso, en algunos trabajos previos de Losada y Vélez (1988), quienes parten precisamente

de la hipótesis de abandonar categorías espaciales preconcebidas de análisis si bien, manteniendo el deseo de integrar las mismas con los factores explicativos de grupos guerrilleros, paramilitares y cárteles de la droga.

Lo anterior, en la misma lógica que la de Reyes (1988) si bien, en este caso, el propósito primero era el de hacer ver la ruralización real del conflicto armado en Colombia y su cercana relación con las luchas agrarias del pasado, lo cual distancia el trabajo del de sus predecesores, centrados en mostrar la cercana relación entre pobreza, ausencia del Estado y muertes violentas. Causas objetivas que, en esencia, eran consideradas como la matriz explicativa del desigual desarrollo de la violencia en el país.

Esta circunstancia también es abordada por Evelyne Mesclier, en el trabajo de cartografías que coordina para el DANE, en 1999, y que se llama *Dinámicas socioeconómicas en el espacio colombiano*. Este trabajo es importante porque en la búsqueda por representar la violencia en el país, lo primero que hace es desglosar la densidad de población y mostrar de qué manera los niveles de mayor presencia se dan en el corredor andino hacia el norte, de manera que se visualiza el nivel de contraste entre las dos mitades del país.

Asimismo, muestra la diferencia en cuanto a magnitud de superficie, de manera que lo que anteriormente se refería queda resuelto en la medida en que el corredor amazónico se muestra como el de mayores municipios, mayormente por encima de 40.000km², pero a su vez, con un gran déficit de población civil. Sobre lo anterior, muestra, por ejemplo, el nivel de homicidios con base a tasas por habitante, lo cual permite observar una dinámica, entre 1985 y 1988 de expansión de la violencia, sobre todo, en torno a Medellín, por el factor del cártel de la droga y la delincuencia generalizada en la que se imbuye el país. Esta dinámica da lugar, entre 1988 y 1990, a una segunda tendencia, de detenimiento de esa expansión espacial de la violencia, explicado, en buena medida, por la desmovilización de algunos grupos guerrilleros como el M-19 o el EPL (Mesclier, 1999. 116)

En lo que afecta, particularmente, al conflicto colombiano, la intención de las cartografías de Mesclier es poner de manifiesto de qué modo los grupos armados tienen un especial arraigo sobre zonas de potencial económico, y desde los que se desarrolla un asedio hacia los centros económicos y administrativos del país, de lo que se observan dos cinturones, muy particulares de violencia que aíslan al centro del país y conforman zonas de ocupación y dominio de guerrillas, paramilitares y cárteles de la droga:

“El primero, en forma de collar, rodea la región mas urbanizada de la costa atlántica dificultando su acceso al centro del país, desde Urabá y el norte de Antioquia, pasando por el sur de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena y subiendo desde el Norte de Santander, por Cesar hasta la Sierra Nevada y el occidente de La Guajira. El collar se prolonga hacia Venezuela por el Norte de Santander. El segundo, que se extiende sin solución de continuidad, desde Arauca, otra vez en la frontera con Venezuela, hasta el Putumayo en la frontera con Ecuador. Es una amplia franja que desciende por todo el piedemonte llanero. Separa el país andino del país amazónico, con puertas de acceso al centro del país, y

obstaculiza la comunicación de la zona central andina con los antiguos territorios nacionales”. (Mesclier, 1999: 117).

En todo caso, y como señala Pissotat (2002: 6), “las representaciones, así como las interpretaciones, se modifican a medida que la violencia se desarrolla y cambia de naturaleza”. Así, los trabajos cartográficos en el estudio de la violencia en Colombia, encuentran un importante calado académico en lo que a entender las dinámicas espaciales de interacción, disputa o control entre grupos armados, tanto en los mencionados trabajos de Reyes (1988; 1993), como en los de Echandía (1999) y Vélez (2001). De hecho, en esa misma evolución, otros trabajos posteriores, como el de Reyes (1998) o Echandía (2006), dada la magnitud del narcotráfico, buscan integrar la relación violencia y grupos armados, sobre un trasfondo que distingue zonas de producción de coca y de exportación de coca, y sobre la que se añaden otros factores, especialmente en la comprensión del fenómeno paramilitar, como es el despojo de tierra y su concentración o lo que Reyes (2009) denomina como “contrarrevolución agraria”.

Esta relación con el narcotráfico también es cartografiada en el referido trabajo de Mesclier (1999: 117), a efectos de mostrar cómo Medellín, Cali y Bogotá, son el centro nuclear de las muertes violentas del país entre 1985 y 1990, durante los años más duros de la confrontación entre cárteles de un lado y que, especialmente, en la “guerra” particular que Pablo Escobar le declara al Estado colombiano, tiene una afectación *sui generis* en Bogotá, y que termina por afectar a casi 7.000 víctimas mortales por año.

Igualmente, esa conexión, pero desde una cartografía más focalizada sobre el eje Bogotá-Medellín, lo plantea el Observatorio Geopolítico de las Drogas (1996: 93), cuando busca mostrar la relación entre las tierras adquiridas por el cártel de Medellín, los servicios de expansión hacia la costa Atlántica, el Pacífico, el centro del país y los Llanos Orientales, y la conexión entre enclaves productores, laboratorios de pasta y clorhidrato, y las pistas clandestinas, con salida al Mar Caribe. Algo que, en términos muy similares plantean otros trabajos como el de Vargas (1994), regionalizando los diferentes cultivos de coca, marihuana o amapola; el de Castillo (1996), sobre rutas nacionales del tráfico de cocaína; el del Consejo Nacional de Estupefacientes (1995) sobre rutas para el desvío y contrabando de insumos para los estupefacientes; o, finalmente, el de Betancourt (1994: 44), que busca recrear lo que él denomina como los “cinco núcleos mafiosos de la droga”: el núcleo costeño, el núcleo antioqueño, el núcleo valluno, el núcleo central, el núcleo oriental y los “subcultivos sueltos”.

Finalmente, cabría adicionar los trabajos de cartografía que de manera más relevante, se centran en análisis regionales, particularmente, con base en los estudios que, por ejemplo, desde un enfoque absolutamente regional, promovía el CINEP, especialmente, desde la década pasada.

Al respecto, son varios los trabajos que se destacan por entender las dinámicas del conflicto armado, desde una óptica regional, es decir, focalizando las unidades espaciales objeto de análisis. Ello, ha proliferado hasta el punto de que los estudios sub-regionales han sido una corriente predominante en el ejercicio de cartografías sobre la violencia. Estos trabajos encuentran sus primeros estudios en el caso de Tolima, especialmente, porque se trataría del

primer gran escenario objeto de análisis tanto durante la primera etapa de la Violencia, como aborda el trabajo de Fals Borda, Guzmán y Umaña, ya referido, y la segunda etapa, como evocan trabajos como los de Sánchez y Meertens (1983) o Henderson (1984). En todo caso, se trata de trabajos más descriptivos que explicativos a efectos de apoyar un trabajo de más cariz historiográfico que geográfico.

Por ejemplo, los trabajos de García (1998) o los de González (2002; 2007; 2011) dan buena cuenta de ejercicio explicativos respecto de los enclaves de disputa entre FARC, ELN y AUC, tanto a modo explicativo de las dinámicas de confrontación como de reubicación en clave estrictamente sub-nacional. Así, por ejemplo, en lo que afectaría al Urabá, una región bananera colindante entre Antioquia y Córdoba, el trabajo de García (1998) da cuenta de los repliegues y las nuevas (re)territorialidades de la violencia si bien, en todo caso, se adolece, como en los otros trabajos de CINEP, mayormente, de elementos explicativos o de disputa que permitan entender o interpretar tales espacialidades. Algo similar, por ejemplo, realizaría Bejarano (1997), quien sí integra como trasfondo de explicación los yacimientos auríferos o los cultivos cocaleros como epicentro de la confrontación, extensiva al Magdalena Medio, entre paramilitares y guerrillas.

De otro lado, quedarían los trabajos en clave urbana, que ya optan por análisis de la violencia, por ejemplo, con base en grandes ciudades como Cali (Guzmán, 1999) o Bogotá (Echandía, 2000b) y que presentarían tanto la presencia o la distribución de estructuras criminales como la concentración de muertes violentas, lo cual permite, a diferencia de otros trabajos, integrar dimensiones estructurales de la violencia económica y social a tenor de la organización municipal sobre estratos en función de los recursos económicos.

Es decir, y tal y como se puede apreciar, existe una evolución importante en el empleo de análisis geográficos a efectos de entender las dinámicas de la violencia en Colombia. De hecho, hasta la segunda mitad de los años ochenta, este tipo de análisis son muy reducidos y específicos, y sobre la base de técnicas cartográficas poco sofisticadas así como respecto de análisis sencillos respecto de una realidad compleja como la del conflicto armado.

Sea como fuere, lo cierto es que los trabajos, que empiezan siendo inicialmente descriptivos, desde finales de los años ochenta empieza a profundizar en su carácter analítico y explicativo, ya no solo, desde diferentes escalas geográficas de análisis sino, lo más importante, desde variables explicativas e hipótesis mucho más complejas y elaboradas. Tal y como reconoce el trabajo de Pissotat (2002: 20), de obligada referencia:

“Concebidas como herramientas de investigación, estas representaciones geográficas han participado en una mejor percepción del problema, particularmente permitiendo el rechazo o, por el contrario, apuntalando las interpretaciones propuestas (de manera a veces excesiva: la coincidencia espacial de dos fenómenos no prueba evidentemente la correlación efectiva). Acompañando los avances en el conocimiento del tema, la utilización creciente del mapa en el análisis de las violencias –cualquiera sea el tipo– muestra hasta qué punto los expertos colombianos (investigadores y encargados de la toma de decisiones) progresivamente han dirigido su atención sobre los territorios así identificados”.

5. La Geografía Política y el conflicto armado interno desde las cartografías del ODHDIH

Con base en lo anterior, el objeto de explicación de los cambios y continuidades del conflicto armado, como se plantea en esta tesis doctoral, incorpora varias cuestiones novedosas que, en cierta manera, buscan sobreponerse a algunas de las debilidades planteadas.

Lo primero de todo es que el trabajo actual se alinearía en todo caso con el trabajo referenciado con anterioridad de Echandía y Salas (2005), Echandía (2006), Echandía, Bechara y Nossa (2010), Salas (2010) y Salas (2015), entre otros. En primer lugar, porque lo que se busca plantear en estos trabajos es una dimensión de evolución espacial y temporal en las interacciones de la violencia que deriva del conflicto armado colombiano.

En el primer caso, de Echandía y Salas, (2005), lo que se busca es mostrar cómo la violencia en general, y el conflicto armado en particular, han evolucionado entre 1990 y 2005, especialmente con base en la confrontación guerrilla/paramilitarismo que ocurre en Antioquia, y el conjunto de los departamentos de la costa Atlántica del país, que son los que soportan mayores niveles de homicidios violentos, secuestros o desplazamiento forzado. Todo, en la medida en que se trata de un documento público, financiado desde el Programa Presidencial, que plantea la necesidad de ilustrar qué dinámicas generales acompañan al conflicto armado.

Ello se complementaría con el trabajo de Echandía (2006), que desde una visión temporal de dos décadas, desde 1986 y hasta 2006, concreta de mayor modo aspectos que pueden ser entendidos en términos de disputa, como la presencia de cultivos de amapola pero, sobre todo, de coca. Asimismo, hace un ejercicio novedoso hasta el momento de representación cartográfica exhaustiva, de los diferentes Frentes y Bloques de guerrilla y paramilitarismo, en clave departamental. También, permite mostrar la evolución de la presencia territorial, las diferentes dinámicas expansivas y constrictivas de la violencia o las lógicas de presencia en clave de ciertos recursos económicos así como de orden urbano/rural.

Uno de los aspectos más relevantes al respecto, sería el que tiene que ver con poner énfasis en la importancia del suroccidente del país como escenario de transformación del conflicto. Transformación entendida en términos de consolidación y auge de la presencia guerrillera, especialmente, en torno a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila y Tolima, y que como se observará en esta tesis, han experimentado un particular y notable arraigo de tendencias particulares, a modo de cultivos ilícitos y activismo guerrillero. Hipótesis ésta que se esboza, pero que no termina de contrastarse con instrumentos cartográficos y mapas, en el trabajo colectivo que el mismo Echandía encabeza en el año 2010.

Un trabajo que complementa los anteriores serían los de Salas (2010; 2015) que lo que plantean es, también de forma novedosa, ilustrar los redefinidos corredores estratégicos del

narcotráfico; la traslación de los cultivos desde las regiones orientales del país, hacia el Pacífico, y cómo ello termina por afectar las nuevas geografías de la violencia derivada del conflicto en Colombia aunque, no se incorpora, en esta ocasión una análisis pormenorizado de cómo esta dimensión del narcotráfico y de los corredores se integra en las dinámicas propias de la violencia directa e, incluso estructural.

Así, con base en lo planteado, es que la dimensión geográfico política no puede obviarse en esta tesis doctoral. Más bien, todo lo contrario, es su principal elemento de análisis. Claro está, gracias a la colaboración ya mencionada del ODHDIH, que con base en su ejercicio cartográfico es que se pueden integrar estos aspectos, hasta el momento, mayormente abordados de manera atomizada. Es decir, tomando las acciones armadas de las FARC y del ELN, en el transcurso que tiene lugar entre los años 1998 y 2012, y adicionando a ello las cifras y datos favorecidos en UNODC es que, por un lado, se puede hacer valer la hipótesis, no solo por razones obvias, de *periferialización*, sino igualmente de lo que se puede denominar como *narcotización*.

Del mismo modo, y gracias a las cartografías de las acciones y operativos por iniciativa de la Fuerza Pública, igualmente, para el período 1998-2012, es que resulta posible contrastar las dinámicas de éxito/fracaso de las últimas políticas de seguridad planteadas y que suponen un ejercicio novedoso, hasta el momento no analizado con la profundidad que plantea este trabajo doctoral.

Por último, la disposición de los mapas sobre la continuidad del activismo paramilitar, igualmente, integrado con las dinámicas de activismo guerrillero permite dimensionar otra hipótesis hasta el momento sin explorar, y que es la continuidad del activismo guerrillero en la mayor parte de los enclaves con arraigo paramilitar durante los años que transcurren entre 1998 y 2005.

Es decir, la Geografía Política se acaba disponiendo como una disciplina nuclear desde la que este trabajo busca corroborar sus afirmaciones iniciales. Y si a ello se añade un trabajo sostenido por la base de datos, desglosada por variable, municipio y año desde la que se construye la cartografía, tanto para la violencia como para el cultivo ilícito, la profundidad tanto analítica como el detalle espacial termina por ser tan riguroso como, tal vez, en exceso descriptivo.

Sin embargo, ahí se puede encontrar un valor adicional a este trabajo. Es decir, un trabajo que por la magnitud de cifras y datos disponibles puede recurrir a una cartografía que si bien mantiene la escala geográfica estatal como unidad de análisis, encuentra una representación tanto multivariable como por escalas de intensidad que acaba siendo enriquecida por el detalle municipal y departamental que se suma al ejercicio analítico de los capítulos IV en adelante.

6. El concepto de conflicto. Un debate teórico

Los primeros intentos de teorizar sobre los conflictos armados se deben a Gaston Bouthoul, sociólogo francés, quien en 1945, en un contexto de fracaso de las tesis idealistas de las Relaciones Internacionales²⁹ y de auge del realismo político³⁰, creó el Instituto Francés de Polemología para el Estudio Científico de las Causas de la Guerra – *Institut Français de Polémologie pour l'étude scientifique des causes des guerres*.

Es a partir de entonces que acuña el concepto de *polemología*³¹, apareciendo como tal en su primera gran obra, de 1951, *Las Guerras. Elementos de Polemología* y que, sin embargo, no van a obtener un éxito inmediato al erigirse sobre una noción *periodomorfa* en cuanto a la comprensión de las guerras. Es más, habrá que esperar a 1966, dos décadas después de la creación del Instituto, cuando gracias a un programa de financiación del gobierno francés, se crea la revista académica *Guerra y Paz*, rigurosamente periódica hasta 1970, y a partir de ese momento, rebautizada como *Estudios Polemológicos* (Molina, 2007: 193). En todo caso, lo cierto es que para el estudio académico de los conflictos armados contemporáneos, esta publicación marca un antes y un después.

Conviene señalar que el IFP a duras penas obtuvo reconocimiento de la academia más allá de ámbitos muy reducidos como fueron, por ejemplo, el Instituto Italiano de Polemología - IIP, dirigido por el psicoanalista Franco Fornari, y el Instituto Polemológico de Groningen – IPG-, al frente del cual se encontraba el reputado Bert Röling.

Lo importante de Bouthoul es que se trata, pese a todo, de los primeros referentes en desarrollar un estudio científico social de carácter psicológico, económico y demográfico en el estudio de las guerras, reconociendo que el desafío más importante de la polemología pasaba por trascender de la sociología del conflicto, propia del siglo XIX, para llegar a la “desacralización de la guerra y la despolitización de la paz” (Bouthoul, 1976: 175). Dicho de otro modo, la guerra no es para Bouthoul (1984: 17) sino una forma de:

“violencia cuya característica esencial es el carácter metódico y organizado de los grupos que la hacen, así como de la manera que estos tienen de conducirse en ella; se presenta limitada en el tiempo y el espacio, y sometida a reglas jurídicas particulares, extremadamente variables

²⁹ Por tesis idealistas se entienden a aquellas, que especialmente en el contexto de entreguerras, y después de la Segunda Mundial, aunque ya a modo de interdependencia compleja (Keohane y Nye, 1988) o de funcionalismo (Mitrany, 1948) aspiraban a configurar el sistema internacional en términos de multilateralismo, transparencia, diálogo, organizaciones internacionales y salvaguarda del Derecho Internacional Público.

³⁰ Por tesis realistas se entienden aquellas que especialmente, desde el fin de la segunda Guerra Mundial, y a partir de los trabajos estadounidenses de Morgenthau (1948) y otros como Spykman (1944), Kennan (1947) o Waltz (1967), entre muchos otros, entienden el sistema internacional en términos de poder, estatocentrismo, unilateralismo y seguridad.

³¹ Polemología entendida como la disciplina encargada a entender las dinámicas de aparición, evolución y finalización de los conflictos armados.

según lugares y épocas, *esto es*, un homicidio pautado, la lucha armada y sangrienta entre grupos organizados”

Los mismos Bouthoul y Carrere (1976), citados en Harto de Vera (2004: 147), en su afán por desarrollar toda una estructura de análisis y una tipología de los conflictos armados, clasifican los mismos de acuerdo a diferentes magnitudes. Es decir, se encuentran los conflictos armados mayores o macro-conflictos que, a su vez, suponen guerras exteriores, guerras civiles, ocupaciones por la fuerza, invasiones militares, revoluciones, levantamientos e insurrecciones, masacres y disturbios violentos. Todos ellos, requieren ciertos elementos característicos, como tener bajas superiores a 1.000 muertos por combate, durar más de un año, llevar consecuencias internacionales relevantes y, por su propia trascendencia, afectar al menos a una gran ciudad o a la capital, incluso, acarreando afectaciones de tipo secesionista o de cambio de gobierno. *Sensu contrario*, la categoría opuesta sería la que los mismos autores denominan como conflictos armados menores o micro-conflictos.

Partiendo de la noción que plantean los referidos autores franceses, Colombia y su particular conflicto armado tendría mucho más de gran conflicto que de micro-conflicto. Si se toma como punto de partida de inicio del conflicto, como es mayoritario, el año 1964, cuando se forman las FARC y el ELN, el conflicto armado, en este año 2015, estaría cumpliendo 51 años, acumulando, como recogió el Informe *Basta Ya*, del CNMH (2013: 31), más de 220.000 muertes violentas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012³². Víctimas a las que se añaden seis millones de víctimas y otros tantos secuestros y desapariciones forzadas.

No obstante, esta tipología es relativa, pues si utiliza una segunda tipología desarrollada por los autores con posterioridad, el conflicto colombiano, paradójicamente, tendría más de micro-conflicto que de cualquier otra posibilidad. Ello, porque los mismos Bouthoul y Carrere hablan de ultra-conflictos (atómicos, químicos y bacteriológicos), hiper-conflictos (guerras mundiales), macro-conflictos (guerras exteriores, mixtas y civiles), conflictos medios, micro-conflictos (inter e intraestados) e infra-conflictos. Es decir, ya no tanto con base en criterios numéricos sino a las dimensiones espaciales del mismo.

Una clasificación similar a la de Bouthoul, aunque inspirada en ella, es la que plantea Calduch (1993: 10), cuando distingue entre conflictos no violentos, que a su vez pueden ser nacionales (políticos, sociales, económicos o jurídicos) o internacionales (políticos, diplomáticos o territoriales); y conflictos violentos, encontrándose a mitad de ambos lo que denomina como crisis o tensiones.

³² El Informe, que es el trabajo más completo sobre el conflicto colombiano, al menos en términos historiográficos, se puede descargar del siguiente enlace:
<http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/>

Los conflictos violentos pueden derivar, a su vez, de la criminalidad común (individual o grupal), de la violencia social (espontánea u organizada) y de la violencia política, para el autor, la más importante de todas.

Tabla 2: Conflictos violentos entre 1740 y 1974 según Bouthoul y Carrere

Tipo de conflictos	Porcentaje	1740-1800	1800-1850	1850- 1900	1900-1950	1950-1974
Ultraconflictos		Imposibles	Imposibles	Imposibles	0	0
Macroconflictos interestatales	43%	22	27	57	37	14
Macroconflictos intraestatales	57%	19	47	42	60	41
Macroconflictos total	100%	41	74	99	97	53
Microconflictos	-	-	-	-	-	-
Infraconflictos	-	-	-	-	-	-

Fuente: Bouthoul y Carrere (1976: 81)

Esta violencia política permite desarrollar otras clasificaciones: 1) violencia política directa y unilateral (bien en forma de terrorismo de Estado, asesinato político, represión indiscriminada o genocidio); o 2) conflictos armados. Estos conflictos pueden ser prebélicos, como motines, insurrecciones, golpes militares o terrorismo civil, y, finalmente, conflictos bélicos. Asimismo, los conflictos armados bélicos, según su ámbito de desarrollo, se clasificarían en guerras civiles (de secesión o subversivas), guerras internacionales (bilaterales, regionales o mundiales) y mixtas (de liberación colonial). De igual forma, y por el tipo de armamento utilizado, los conflictos según el propio Caldach, se podrían clasificar en convencionales, nucleares y mixtos.

Nuevamente, el conflicto armado colombiano, de acuerdo a esta tipología, podría encuadrarse como un conflicto marcadamente violento, con una violencia de carácter político, con mezcolanza de terrorismo de Estado, insurrección o guerra civil.

En términos mucho más generales, Kriesberg (1999: 415) considera que la tipología de conflictos viene determinada por el contexto social en el que tienen lugar, de manera que cada conflicto responde a problemas y situaciones particulares de origen, lo cual redundaría en la dificultad que supone desarrollar una teoría unificada de los conflictos.

Kriesberg, que destaca la dimensión subjetiva de los mismos, diferencia entre: 1) *conflictos entre personas*, los cuales son universales, ya sean interpersonales, familiares o comunitarios; 2) *conflictos entre instituciones*, especialmente entre partidos políticos, corporaciones,

sindicatos, iglesias o gobiernos y que si bien, tienden a ser dirimidos en los límites del ordenamiento jurídico de la comunidad en los que tienen lugar, en ocasiones, por cuestiones de identidad, territorial, étnica, lingüística, o religiosa, pueden concurrir demandas que desafían a las agencias gubernamentales, por medio de métodos de acción no institucionales. Finalmente, estarían los 3) *conflictos entre grupos comunales*, en los que las partes involucradas son los grupos interactuantes entre sí, que comparten una identidad común, y cuyos miembros tienen intereses comunes, enfrentados, como colectividad.

En muchas ocasiones, los límites de estos conflictos serían ambiguos y su estructura resultaría difusa aunque, en todo caso, responderían a confrontaciones e intereses de tipo territorial, étnico, de clase, de creencia, de lenguaje, de tipo religioso o de liberación nacional, entre otras muchas posibilidades. Además, suelen tratarse de conflictos duraderos y muy destructivos - por ejemplo, el conflicto entre blancos y negros en Sudáfrica, o entre serbios, bosnios y croatas. Asimismo, en otras ocasiones, implican a otras partes, ya sea como intervinientes o como mediadores.

En este orden de ideas, conviene mencionar otro ejercicio de organización en cuanto a la tipología de los conflictos armados, tal y como lo plantean Djalili (1986: 25) o, más recientemente, la Escola de Cultura de Pau, vinculada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos planteamientos, atenderían los conflictos, a diferencia de los anteriores, con base en su naturaleza, sus motivaciones y la extensión sobre la cual se representan.

Así, Djalili, según su naturaleza, diferencia entre guerras internacionales, por motivaciones territoriales y no territoriales, y guerras civiles, cuyas motivaciones pueden ser trastornos poscoloniales, rivalidades político-ideológicas o fruto de una heterogeneidad étnica, religiosa o económica. Dentro de las motivaciones territoriales, el mismo Djalili habla de conflictos fronterizos, guerras de secesión, de reunificación, irredentistas y autonomistas, frente a motivaciones no territoriales. Éstas pueden ser de índole socio-económico, ideológica o simplemente por disputas de poder, donde se encuadraría, bajo esta óptica, el conflicto armado colombiano. Finalmente, por su extensión, las guerras podrían ser generales, cuando intervienen superpotencias, limitadas, locales – entre dos países, o regionales, cuando confluyen varios países.

Por su parte, la *Escola de Pau* (s.f.), define conflicto armado como:

“todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; la oposición al

sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos o del territorio”.

De acuerdo a lo anterior, se identificarían, por tanto, dos criterios de clasificación. Primero, según las causas principales, se hace referencia a reivindicaciones de autodeterminación y autogobierno, aspiraciones identitarias, aspiraciones anti-sistema – de tipo económico, político, social o ideológico-, o bien la lucha por el control de recursos o territorios. Esta última, más propia del conflicto armado colombiano, especialmente, si se atiende la importancia referida, y ya planteada sobre los factores económicos.

Asimismo, se podría destacar la noción de Fisas (2000: 14), quien afirma que:

“Entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares, regulares o irregulares, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, con armas u otros medios de destrucción, y organizados, provocan más de cien víctimas en un año a través de actos intencionados, sea cual sea su justificación”.

De otro lado y, según su dimensión, los conflictos armados se diferencian entre internos, cuando acontecen dentro de un Estado; internos-internacionalizados, cuando se desarrolla bajo dinámicas regionales supranacionales o, por último, internacionales, cuando se enfrentan entre 2 y 5 actores estatales o no estatales. En este caso, el ejemplo colombiano, dada la *transfronterización* planteada por algunos autores mencionados, como Ávila (2012), especialmente en la frontera ecuatoriana y venezolana, y por las dimensiones transnacionales que acompañan tanto a la violación de las normas de DIH como del tráfico de narcóticos, se encontraría en la tipología de conflictos internos-internacionalizados. Hipótesis de la que se apropia este trabajo doctoral, y que se desmarcaría de algunas consideraciones construidas sobre un arraigo más nacional, como la de Pizarro (2002), quien reivindica una marcada dimensión interna en la comprensión del conflicto armado colombiano, y que respondería a la lógica mayoritaria de los conflictos vigentes en la actualidad.

En términos similares con los anteriores, Brown (1996: 123) entiende un conflicto armado interno como el colombiano, como aquella “una confrontación violenta cuyos orígenes echan raíces esencialmente en factores domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual la violencia armada transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado”. Sin embargo, por el especial arraigo que el narcotráfico representa para el caso colombiano, esta tesis suele ser controvertida. De hecho, Buzan y Wsever (2003) se refieren a Colombia como un conflicto regional complejo, mientras que otros como Lincoln y Leiss (1990) lo definen como un conflicto armado con significativo involucramiento externo por el mismo factor narcotraficante.

Para David (1997: 16), ocho de cada diez conflictos son de esta tipología particular; y según Wallensteen y Sollemberg (2001: 631), a su vez, este tipo de conflictos internos terminan siendo los más difíciles de resolver por medio de solución militar y los más proclives a resolverse bajo fórmulas negociadas. Tanto es así, que 22 conflictos fueron resueltos de forma negociada entre los años 1989 y 2000. De igual manera, entre 1945 y 1989 hubo 22 victorias de las partes enfrentadas, 34 ceses al fuego y 33 conflictos se mantuvieron más allá de la Guerra Fría dominando sobre estos los escenarios de negociación y resolución pacífica. En términos similares, el referido Pizarro (2002: 166) computa un total de 24 conflictos armados, los que superan el escenario de Guerra Fría y se postergan en el escenario de Posguerra Fría, y apuntan a la categoría de conflictos crónicos. Calificación que, para trabajos como los de Fearon y Laitin (2003), terminan siendo, claramente, los más difíciles de resolver, por su profunda transformación y enquistamiento y la desconfianza y el menoscabo consolidado entre las partes en lucha.

Como se señaló en la revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión, dentro de la cual se debe destacar el trabajo de Trejos (2013), lo cierto es que en este tipo de conflictos, como plantean Collier y Hoeffler (2004), terminan por desatender sus elementos causales, para focalizarse en lógicas de supervivencia y acceso a recursos que determinan y explican la supervivencia de los grupos y la continuación de la confrontación armada. Claro está, más allá de las razones objetivas, sociales, políticas y económicas, que explicaron su emergencia (Collier, 2000).

En semejante línea se encontrarían las aportaciones de Kaldor (1999) o Hardt y Negri (2004), quienes se refieren a guerras degenerativas o nuevas guerras. Éstas, terminan desarrollándose sobre agendas negativas y representaciones locales en las que la debilidad del Estado es una constante en términos de corrupción, debilidad e imposibilidad de articular respuestas efectivas integrales, no solo militares sino en cuanto a su dimensión política, económica y social. A efectos del particular caso colombiano, por ejemplo, Duncan (2006), Moreno (2006) y antes Salazar o Castillo (2001), plantean de qué modo parte del conflicto armado en Colombia debe entenderse en estos términos, en la medida en que transcurre una cooptación bidireccional de violencia y política, especialmente, en la dimensión local.

Según buena parte de lo anterior, además de los factores objetivos que determinan la clasificación dominante de los conflictos, concurren factores de acuerdo a una dimensión subjetiva que no pueden quedar desatendidos. Así, en función de los actores en liza, por ejemplo, estos pueden ser regulares o irregulares, tendiéndose a identificar por actores regulares al Estado y su Fuerza Pública, y como irregulares, a guerrillas, paramilitares, milicias, cárteles y estructuras ilegales organizadas, entre otras posibilidades.

Estos actores implicados, a su vez, pueden hacer uso, por norma general, de armas convencionales, pero en ocasiones se recurren a armas no convencionales que van desde las hambrunas, hasta los suicidios pasando por atentados. El nivel de virulencia y confrontación

marca su intensidad – alta, media o baja-; su evolución – escalada de violencia, reducción de violencia o sin cambios-; y su letalidad, de acuerdo al número de víctimas.

Atendiéndose otros criterios como la frecuencia, la complejidad, la situación del Estado o el número de actores involucrados, según la *Escola*, son conflictos de alta intensidad los que superan 1.000 muertos directos al año y que afectan a porciones significativas de población y territorio, mientras que entre 100 y 1.000 son de intensidad media, y de intensidad baja aquellos que están por debajo de 100 víctimas mortales al año.

El conflicto colombiano, aun cuando su magnitud dista mucho de ser la de hace dos décadas, pese a todo, incorpora todas las variables para seguir siendo considerado de alta intensidad aunque pareciera lo contrario. Empero, basta hacer referencia, no solo a los más de mil muertos anuales que se cobra sino, igualmente, a tenor de una expansión municipal que sigue afectando a casi 200 municipios en unos términos, cuando menos, relevantes.

Es más, para los trabajos de Wallesteen y Axell (1993: 336), en el caso de Colombia aplicaría la controvertida categoría de guerra³³, por afectar a más de 1.000, las muertes directas por año y, además, propender de algún modo, el colapso de la autoridad central y de la infraestructura del Estado. Igualmente, por afectar a descomponer el tejido social, y desarticular la relación entre identidad y ciudadanía, lo cual, unido a una lógica de acciones y alianzas entre grupos irregulares, termina por fragmentar el poder y desarrollar dinámicas locales marcadas por la interacción particular que, sobre el lugar, proyecta el propio conflicto (Lederach, 1997: 37).

Un tercer aspecto que, no obstante engloba y afecta directamente a los dos anteriores tiene que ver con la propia nomenclatura que amerita para describir y entender el particular caso que plantea el conflicto armado colombiano. El lenguaje, lejos de ser neutral, tiene implicaciones en la forma en que se atienden y entienden los fenómenos políticos y sociales. Así, si se denomina el conflicto armado como guerra, como reconocen Rangel (1993), Guerrero (2011), ello supone aceptar que existen dos facciones con arraigo y apoyo social sólido. Algo muy distinto si la denominación es la de guerra contra-insurgente, la cual supone, todo lo contrario, aceptar un apoyo social débil, frente a un grupo organizado, armado, al margen de la ley. A esta denominación cabría adicionar otras, pues su interpretación cambia sustancialmente si se habla de guerrillas, de crimen organizado o de terrorismo.

³³ Según Wallenstein y Axell (1993: 336), un conflicto armado menor es aquel en el que las fuerzas involucradas son responsables de al menos 25 muertes al año y, necesariamente, una de esas fuerzas debe tener la categoría de Estado. Asimismo, un conflicto es intermedio en su intensidad cuando ha acumulado entre 25 y 1.000 muertes en un año, mientras que son guerras, aquellas en las que el conflicto acumula más de 1.000 muertes en un año dado. No obstante, en esta tesis doctoral se cuestiona el concepto de guerra por la implicación real que la sociedad civil tiene como soporte a la confluencia de fuerzas armadas dentro del conflicto.

Con base en estas consideraciones, si se revisa la realidad actual, y se aceptan los criterios de la *Escola de Pau*, lo cierto es que la mayoría de los conflictos vigentes acaban siendo de índole nacionalista, religiosa o étnica, los cuales no aplicarían para el caso colombiano. Quizá, más bien, el conflicto colombiano podría denominarse como un conflicto prolongado, cuya sobrevivencia permite entender un cambio sobre los pilares y condicionantes que determinaron su aparición hace ya más de medio siglo. Si en los sesenta, el conflicto colombiano se enmarcaba dentro del contexto de Guerra Fría, en la actualidad tiene más que ver con otros enfoques que, más al albor de la globalización, como serían los de Collier o Kaldor, que entienden que convergen factores concomitantes como la minería ilegal, el contrabando o el narcotráfico.

La noción de conflicto prolongado la confiere el mero hecho de aceptar, como acepta la mayoría, que el conflicto armado colombiano inicia en 1964, y que incluso, para otros, hunden sus raíces entre 1946 y 1948; incluso, en las transformaciones sociales y las luchas agrarias propias de los años treinta³⁴.

Con base en el sistema de *hit and run*, y la guerra de guerrillas, especialmente redefinidas desde inicios de la década pasada, y en la que los hostigamientos, los atentados contra la infraestructura pública, las minas antipersonal o las acciones unilaterales esporádicas son dominantes, podría decirse, de acuerdo a esto, que el caso colombiano sería un conflicto de tipo no convencional. Esto es, de mayor desgaste y dificultad en cuanto a su medición, pues resultan menos evidentes algunas de las prácticas, como extorsión, cooptación o reclutamiento, respecto de otro tipo de conflictos, de mayor visibilidad.

También se podría señalar, a tenor de la desnaturalización, sobre todo de las FARC, pero también de las AUC, y mucho más de las Bacrim, que el conflicto armado colombiano resulta ser un conflicto desideologizado. Un conflicto cuyo motor material, más allá de narrativas y discursos de justificación, pasa por consolidar fuentes de poder económico en lo local, que se amparan en la ilegalidad y que en una coyuntura de fuerzas claramente favorable al Estado, invitan a no pensar en la posibilidad de relatos o posibilidades alternativas, de ruptura o profunda transformación.

La violencia, el narcotráfico y la concurrencia donde el Estado adolece de desventajas en cuanto a su presencia, terminan por ser una suerte de supervivencia para el crimen organizado que, incluso, ha terminado por afectar negativa y muy especialmente a unas FARC transformadas de guerrilla *estricto sensu*, a un complejo grupo criminal armado. Esto lo reconocen, a la perfección testimonios como los de “Cristóbal” o “Samir”. El que fuera segundo comandante del Frente 5 de las FARC, a tal efecto, reconocía que:

³⁴ En algunos trabajos como el de Gilhodès (1972) o Legrand (1988) se pueden encontrar argumentos que permitirían integrar las dinámicas de violencia provenientes de las luchas agrarias con las de los años 40 y 50.

“Respecto de la fortaleza de las FARC gracias al narcotráfico es fundamental. Hacia el interior de las FARC nos llegó una circular firmada por Manuel Marulanda en la que se ordenaba a todos los bloques de las FARC recaudar 230 millones de dólares. Se busca expandirnos en plena PSD. Ello, porque Manuel Marulanda pensaba que para 2010 sería posible la primera gran ofensiva nacional. Todo sin perder de vista armas y política y sin duda, el narcotráfico era la fuente de ingresos más importante para nosotros. De hecho, las AUC son conscientes de ese poder y es cuando nos disputan lo que vamos a llamar “la disputa del poder local”. Una lucha en la cual, el que gana va a mantener la siembra y el procesamiento de coca”. (EP 8, agosto de 2015).

Asimismo, el que fuera comandante del frente “Ernesto Che Guevara” y, posteriormente, fundador del ERG señalaba que:

“Cuando yo dejo el ELN nuestras fuentes de financiación son los impuestos de guerra y el secuestro. Nada de narcotráfico en esa zona. Pero por desgracia en otros frentes sabíamos que eso no sucedía. Ni en el ELN ni en las FARC. Eso acabó con la ideología para volver a las guerrillas en narcos. Vimos cómo se terminaba la ética revolucionaria y el espíritu del combate armado en Colombia. Las guerrillas se fueron al crimen y olvidaron su razón social”. (EP 11, septiembre de 2015).

Aunque trasciende del objeto de estudio de esta tesis doctoral, esta aseveración se puede observar, en parte, en las dificultades por las que está transitando el actual proceso de negociación de La Habana, en el que en el despliegue de conversaciones e intercambios cooperativos, se mantienen unos notables niveles de beligerancia entre las partes, sobre todo, en la región suroccidental del país, donde se acumula casi la mitad de los cultivos del país. El Bloque Sur, y el Bloque Oriental, que concentran el control sobre tres cuartas partes de los enclaves cultivadores de coca, son los que están siendo más díscolos con el modo de negociación³⁵. Ello, hasta el punto de que se han descolgado en varias ocasiones del mismo, poniendo en cuestionamiento la unidad de mando del Secretariado³⁶ y del equipo negociador, y la posibilidad real de que el eventual acuerdo consiga desmovilizar al grueso importante de efectivos que las FARC condensan en el seno de estos dos bloques.

También cabría señalar que el colombiano podría categorizarse como un conflicto de alta intensidad, a tenor, no solo de las víctimas mortales, sino de las cifras de violencia directa unilateral, la presencia territorial de los grupos, el número de desplazados o el volumen de secuestros o extorsiones que, en suma, siguen presentando, a pesar de todo, un grueso de cifras nada desdeñable. Más de 1.000 muertes violentas al año, más de 100.000

³⁵ El Bloque Sur y el Bloque Oriental son los más díscolos respecto de cómo se ha desarrollado el proceso de negociación. De hecho, es donde se concentran los mayores niveles de activismo guerrillero entre 2013 y 2015, en buena medida, por la coincidencia respecto de los enclaves de mayor disposición de recursos económicos para las guerrillas.

³⁶ El Secretariado del Estado Mayor Central, puede decirse, es la estructura central y superior de la organización de las FARC. Está formada por siete comandantes que, actualmente son, Rodrigo Londoño “Timochenko”, Luciano Marín “Iván Márquez”, Milton de Jesús Roncel “Joaquín Gómez”, Wilson Valderrama “El Médico”, Jorge Torres Victoria “Pablo Catatumbo” y Félix Antonio Muñoz “Pastor Alape”.

desplazamientos forzados, más de 1.000 violaciones anuales a los DD.HH y el DIH o más de 300 secuestros son cifras a tener en cuenta (ODHDIH, 2014; Revista Criminalidad, 2013: 13)

Así pues, conflicto prolongado, transnacional, no convencional y de alta intensidad son cuatro categorías no estancas, que permiten adicionar otras múltiples variables pero, en suma, condensan, teóricamente, algunos de los rasgos propios que el Estado colombiano y su situación de confrontación armada presentan en la actualidad.

Dicho de otro modo, se descartan las dimensiones que se refieren a una guerra civil en sentido estricto, ya mencionado pero que en extensión afecta a otros como los aportes de Pécaut (2006) o Lair (2000, 2004)³⁷, entre muchos otros. Hablar de guerra civil, tal y como lo plantean estos autores, supone aceptar dos proyectos enfrentados, antagónicos, con un fuerte arraigo social que confrontan, como se señalaba con anterioridad, grandes volúmenes de población civil a utilizar las armas como forma de resolución. Actualmente, las FARC, con 7.5000 guerrilleros y el ELN, con menos de 2.000 combatientes, y con unas dosis de legitimidad que no superan el 2% no permiten aceptar esta posibilidad. Posibilidad que, en Colombia, solo transcurrió en el siglo XX en el contexto de la Violencia, y que será abordada en el capítulo posterior.

Antes de concluir esta primera aproximación teórica y conceptual al caso de Colombia, es necesario hacer una detención en torno a algunas consideraciones que si bien fueron mencionadas, requieren de mayor profundidad, dada su proximidad a la comprensión teórica des esta tesis doctoral.

De acuerdo con Pécaut (2008), la legitimidad se erige en este caso, como un elemento fundamental para entender las dimensiones, por ejemplo, de una supuesta guerra revolucionaria, como definen, muy particularmente, algunas posiciones intelectuales próximas a las guerrillas. Aun aceptando algunas de los postulados más antiguos de Pécaut, que entienden que los movimientos sociales quedaron relegados e invisibilizados en Colombia, en la década de los Nuevos Movimientos Sociales – NMS-, como consecuencia de que la guerrilla asumió un rol de interlocución en la transformación social y económica del país, lo cierto es que la tesis de “guerra revolucionaria” se hace difícil de aceptar.

Por un lado, porque muchas de las banderas discursivas de las FARC, como la reforma agraria, nunca han sido puestas en marcha allí donde ha ostentado el poder local, como pueden ser los casos de Cauca o Chocó. Más bien, todo lo contrario, lo que ha dominado ha sido una lógica de intereses compartidos en la que, mientras que las fuentes de poder económico, como el secuestro, la extorsión o el control sobre los cultivos ilícitos quedasen satisfechos, se garantizaba un orden local *sui generis*. Orden, que con violencia, se rompe, y experimenta más violencia, en el momento en el que el fenómeno paramilitar empieza a

³⁷ Es especialmente interesante ver el debate en: Posada, Nasi, Ramírez y Lair (2005).

desarrollarse, permitiendo más bien aceptar las tesis de “guerra ambigua” de Rashid (2001), Collier (2000) o Richani (1997). Es más, al respecto, se pueden incorporar un testimonio como el de “Karina”, que perfectamente ilustra esta situación:

“Las FARC desde los ochenta y toda la década de los noventa tuvieron un gran arraigo en la región del Urabá, inicialmente con el Frente 5. También algunos movimientos de izquierda. Pero allí no había Estado. Allí había mucho abandono y pobreza y el orden local era de las FARC. Mucha gente nacía, crecía y moría en las FARC. Jamás tuvimos que conseguir una res o cultivar el campo. Eso nos lo daba la población, hasta que en el año 2000 llegan las AUC y comienzan los desplazamientos y despojos de tierra. Solo a partir de entonces, las FARC tienen que hacer algo que nunca antes hicieron, al proveérselo la población civil: las FARC tienen que sembrar. Nos tocó sembrar, tanto en el Urabá como en el oriente antioqueño. Y a eso añada algo más: el impacto de la PSD. Pues yo le soy sincera, tras 24 años en las FARC, yo vi 6 presidentes y ninguno nos dio tan duro como Uribe Vélez aunque jamás, jamás nos sacaron de allí donde las FARC éramos verdaderamente poderosas. Teníamos todo el control. De hecho, hay sitios del país donde las FARC siguen siendo muy muy poderosas”. (EP 7, mayo de 2015).

La valoración negativa, especialmente de la población colombiana sobre las FARC y sus líderes, o los hechos de masacres o desplazamiento forzado tanto de la guerrilla como de las AUC, finalmente, invitan a pensar en un intento de consolidación de todo un proyecto criminal. Proyecto que descarta la bandera de la lucha por transformaciones sociales y más bien, permite entender el conflicto colombiano como la disputa orientada a la lucha por el control de recursos, y especialmente, de narcotráfico.

Una tesis que descarta el propio Pizarro (2002) pero a la que se aproxima este trabajo doctoral, especialmente con base a lo referido hasta el momento, es que en Colombia se da un conflicto que, particular y localmente, permiten aceptar la idea de Estados dobles, paraestados o Estados dentro de un Estado. El mismo Pizarro u otros como Jackson (1990), se quedan en reduccionismos contruïdos, pero siempre recurridos, como el hecho de que el elemento de reconocimiento internacional de Colombia como Estado nunca ha sido puesto en tela de juicio. Otro argumento igualmente recurrido es el de afirmar que en su mayor momento, las FARC apenas dominaron, con totalidad, lo que se hizo llamar como “zona de despeje”, es decir, un total de 42.000Km que apenas suponían, en el mejor de los casos, el 3.66% del territorio.

Así, discrepando con los anteriores y más próximos a lo que propone Kalyvas (2001:7), en Colombia se podrían aceptar, en última instancia, nociones como la de “soberanía escindida”, o “soberanía dual”. Ello, sin la necesidad de que, como dice Kalyvas, ello sea indicativo de guerra civil. Más bien, es la evidencia, ya reiterada, de la creación de órdenes de legalidad y legitimidad locales, representados, por ejemplo, en los testimonios que se mencionaban de acuerdo a las palabras de Carlos Castaño o Manuel Marulanda.

Aunque Pécaut (2001) se desmarcó de la literalidad del título³⁸, la noción de guerra contra la sociedad, también reproducida en otros artículos como los de Lair (2000) tampoco resultaría válida a efectos de esta tesis. A diferencia de la noción de guerra civil, este término se aproxima a una noción de favorabilidad o sobredimensión en cuanto a la violencia ejercida contra el Estado y, por tanto, se aproxima en exceso a una noción como la de Estado fallido o fracasado. Noción que, en todo caso, albergó una prolífica literatura en cuanto al estudio del caso colombiano, desde finales de los noventa y hasta mediados de la década pasada.

En inicio, cabría descartar la idea de “guerra contra la sociedad” o, en su defecto, de “Estado fallido”, pues desde 1999, parecen quedar superados los años de mayores dificultades en cuanto a la gobernabilidad colombiana, aunque la coyuntura del momento dificultase vislumbrar con claridad esa posibilidad en el análisis. Dentro del contexto de negociación que representaba el Caguán, la negociación del Plan Colombia y la modernización de la Fuerza Pública van a permitir que la correlación de fuerzas en favor del Estado inicie un proceso, favorable e irreversible. Así lo reconoce el General (r) de la Policía Nacional cuando señala que:

“Durante la presidencia de Andrés Pastrana, sin embargo hay que destacar y reconocerle la introducción de una visión diferente, que cambiaba la centralidad de la Fuerza Pública, y que la orienta hacia una mayor modernización a la que se unieron recursos externos. Aun así, hay que señalar que la interferencia de la negociación del Caguán, también produjo limitaciones en esa modernización si bien, pese a todo, se produjo un importante cambio. Un cambio de estrategia, en el que se pasaba de la debilidad a una mayor y mejor concepción estratégica”. (EP 5, abril de 2015).

Más aceptadas, finalmente, serían las dimensiones planteadas, y ya mencionadas, por Kaldor (1999) o Kalyvas (2001b), en cuanto a concebir el caso colombiano dentro de las posibilidades que ofrecen las “nuevas guerras”. Unas “nuevas guerras” en las se patrimonializa el beneficio, se relega a un segundo plano el apoyo popular y la violencia se torna gratuita. Todo, a diferencia de las pautas de violencia controlada, legitimidad popular y malestar colectivo que caracterizaba a las conocidas como “viejas guerras”.

También se aceptarían las nociones sobre terrorismo que plantean Stern (2000) o Wieviorka (1993), y que pese a la complejidad del término, en cuanto a las dimensiones del conflicto armado, permite identificar una lógica de la violencia por parte de los actores involucrados, en la que el terrorismo funge con su función nuclear de atentar contra población civil. Todo, a fin de influir en la opinión pública a través de venganza o intimidación, si bien serían más propias de las AUC que de las guerrillas. Esto, porque FARC y ELN más que terroristas, aun cuando se sirven del terrorismo como un instrumento más de acción, deben ser concebidos

³⁸ Conversación personal de más de tres horas mantenida con él, en mayo de 2013, en L'École des Hautes Études en Sciences Sociales, en París.

como grupos criminales que, en su compleja comprensión, tienen más de guerrillas que otra cosa³⁹.

Sea como fuere, no puede negarse la complejidad de esta opción habida cuenta de los cambios estructurales y coyunturales no solo de Colombia, sino del sistema internacional, sobre todo tras la Guerra Fría, dificultan a su vez la posibilidad de entender FARC o ELN en los términos que lo hacían trabajos clásicos como el de Carl Schmitt, en su *Teoría del Guerrillero*, o el propio Ernesto Che Guevara.

Para concluir, quizá el elemento que dificulta en mayor medida la aceptación *in extenso* del término de guerrilla reposa en el distanciamiento, especialmente en las FARC, respecto de asumir una confrontación contra el Estado. Por su proximidad con el narcotráfico y otras prácticas criminales, se ha ido produciendo una paulatina desnaturalización, especialmente de las FARC, pero también del ELN, marcada en buena medida por la lógica de supervivencia dentro del conflicto. Lógica ilógica, valga la redundancia, en tanto que las guerrillas comienzan a propiciar ataques contra la población civil, a modo de secuestros, asesinatos selectivos, extorsiones o masacres y que dificultan la posibilidad de aceptar la misma como actor bandera de la transformación social; tal y como se construye en su particular relato.

Sin embargo, tampoco puede entenderse que las FARC o el ELN sean grupos terroristas a tenor de que su particular monopolio de la violencia, incuestionable para comprender un conflicto de más de 60 años, su control territorial, su componente ideológico y su poder militar, más evidente que el de un grupo terrorista a tenor de que su contextualización espacial y temporal. Todo ello, invita a pensar en algo más complejo y amplio que en un grupo terrorista “al uso”.

De igual forma, se podrían aceptar dentro del juego inabarcable de las denominaciones, otras más imprecisas y amplias como, por ejemplo, las de actor armado no estatal. Con ésta, para reconocer a las guerrillas y diferenciarlas del actor armado que supone el Estado y que interviene, directamente, por medio de la Policía y las Fuerzas Militares. Esta condición de actor armado estatal vs actor armado no estatal, empero, no puede ser reducida a una dimensión *schmittiana* amigo-enemigo, pues la dimensión de violencia armada que también vincula a la Fuerza Pública se ha desdibujado en ocasiones. Esto, por algunos intereses compartidos con grupos paramilitares, por el desarrollo de prácticas de terrorismo de Estado, favorecimiento del desplazamiento forzado, comisión de violaciones a los DD.HH. o responsabilidad directa en el caso de los falsos positivos. Dimensión ésta que, en un clima de

³⁹ A efectos de entender la difusa línea entre insurgencia o terrorismo, resulta especialmente ilustrativo el aporte de Jordán (2011), quien considera como elementos característicos, aspectos tales como poder y proyecto político; poder y control territorial y autonomía con respecto a la presencia del Estado. Es decir, con base en lo anterior, sobre estas condiciones, el terrorismo es una forma más de lucha, que se adiciona a otras como la guerra de guerrillas.

violencia desmedida en el que todas las aristas se entrecruzan, imposibilita la delimitación perfecta de la frontera que separa a los actores armados involucrados.

7. La investigación para la paz y los conflictos armados

Como punto de partida en la comprensión de las diferentes teorías y corrientes de pensamiento que abordan la resolución de conflictos, resulta imprescindible mencionar la contribución que, en español, representa la obra de Harto de Vera (2004: 164-198), quien en su obra, *Investigación para la paz y resolución de conflictos*, presenta hasta cuatro formas o clasificaciones de entender el alcance y sentido de los diferentes enfoques sobre las investigaciones para la paz.

El primero de los planteamientos, esbozados por Curle (1976), Eide (1974) y Dunn (1978), y citados en Harto de Vera (2004: 164), distingue entre corrientes minimalistas, intermedias y maximalistas. Es decir, las corrientes mínimas son aquellas que entienden la paz como la ausencia de guerra dentro de la esfera internacional. Una esfera internacional, tendente al *status quo* y, por ende, próxima a los postulados más conservadores de las Relaciones Internacionales. La segunda, definida como corriente intermedia, iría más allá, en la línea de entender la paz tanto como la ausencia de guerra como, además, la ausencia de amenazas a la misma. Es decir, bajo esta óptica estarían las teorías por ejemplo, de la “interdependencia compleja” y, con matices, postulados propios de las teorías estructuralistas. Finalmente, el enfoque maximalista abogaría la comprensión de la paz como la ausencia de violencia directa, estructural y cultural, bajo una óptica tanto nacional como internacional. En ésta encaja plenamente la comprensión de la paz como instrumento que solo se puede conseguir por medio de fines pacíficos, como presentan Galtung (1985, 2003c), Kriesberg (1999) o Miall, Mitchell, Ramsbotham y Woodhouse (2015). Sin embargo, también se integrarían los postulados que plantean la paz como ideal al que se puede acceder por medios violentos, como plantean en términos de lucha revolucionaria, los aportes leninistas o maoístas.

Esta tesis doctoral, dentro de esta clasificación teórica, se enmarcaría en la corriente maximalista. Ello porque, por un lado, busca exponer las profundas debilidades que en Colombia, han llevado consigo las políticas de seguridad, ancladas en una comprensión de la paz como ausencia de guerra, y que, en todo caso, por sus resultados, al menos cabe la opción de cuestionar. Asimismo, el trabajo enfatiza en la complejidad que el narcotráfico y la violencia estructural representan de manera que, una forma diferente de combatir el crimen organizado y los cultivos ilícitos, pasa necesariamente por la necesidad de abordar profundas transformaciones estructurales y culturales, en tanto que la agenda social, irresoluta, concentra buena parte de los condicionantes que han alimentado el conflicto durante décadas.

Un segundo enfoque sería el que plantea Boulding (1977), citado igualmente en Harto de Vera (2004:167), y que propone un planteamiento, igualmente tridimensional, pero dual a su

vez en cada una de sus categorías, y en el que, en todo caso, la estructura funge de escenario articulador al cual no perder de vista en ningún momento.

El propio Boulding, desde la negación de la violencia como instrumento, considera que las estructuras son resultados naturales de un proceso constante de interacción y evolución que, según su interpretación, pueden ser objeto de “relativa predicción”. De ahí su auto-posición como evolucionista, aunque esta posición permita posiciones, tanto, que no rechazan la violencia, como sería el caso, por ejemplo, de Garret Hardin (1983).

En un segundo grupo estarían los planteamientos que interpretan las estructuras en términos dialécticos, ya sean en clave nacional, cultural o económica y que, por extensión, como factor de cambio, casi siempre acogen de buen grado el recurso de la violencia como factor de transformación. Así sucede con Hegel (2004), Marx (2010), Lenin (2006) o Bakunin (1997). Quizá teóricos como Herman Schmid (1968) sean la excepción a esta particularidad.

Finalmente, estaría el enfoque estructural “más ortodoxo”, que entiende que la estructura, a pesar de todo, termina siendo estática espacio-temporalmente o a lo sumo, adoptando dinámicas *lampedusianas*, inspiradas en cambiar para que nada cambie. Esto es, de acuerdo a autores como Rummel (1998), Galtung (2003) o Boulding (1992), que coinciden, con esta tesis doctoral, especialmente en su rechazo a la violencia como medio para obtener la paz. Frente a ellos, se encontrarían referentes clásicos como Parsons (1976), Weber (1977) o los teóricos elitistas como Pareto (1968) o Mosca (1966), que no terminarían por rechazar el empleo de la violencia.

Un tercer intento de clasificación de las diferentes teorías sobre la resolución de conflictos sería el planteado por Röling (1984) y Dedring (1981), citados en Harto de Vera (2004: 168), y que basan su conceptualización, en función de los métodos de análisis empleados, entre cualitativos y cuantitativos. Esto se entiende, en buena medida, por la marcada influencia de la Ciencia Política estadounidense, desde la cual los trabajos cuantitativos, con dosis de tratamiento estadístico y matemático, serían denominados como enfoques “duros”, frente a los estudios simbólicos o discursivos sobre la violencia o la paz, que con técnicas de investigación cualitativa, son categorizados como enfoques “blandos”.

Esta tesis, como señalaba al inicio, en el momento de precisar la metodología de investigación, su intención es la de concitar ambas posibilidades. Es decir, análisis cuantitativos, con base en estadística descriptiva y analítica, desde la cual entender la concurrencia de la violencia directa con la violencia estructural, unido a una descripción cartográfica. Por otro lado, se sirve de instrumentos cualitativos, especialmente sustentados con un trabajo de entrevistas en profundidad que, en todo caso, terminan por respaldar las hipótesis y los resultados cuantitativamente planteados.

Por último, estarían los enfoques planteados por Miall, Mitchell, Ramsbotham y Woodhouse (2015), referidos en Harto de Vera (2004: 170), y que como en los casos anteriores, responden a un intento de clasificación tripartita.

En primer lugar se encontraría la corriente de tipo realista, basada en términos estrictamente de paz negativa y modelos cuantitativos, teniendo como referencia las aportaciones de Rapoport (1960) y Boulding (1962). En un segundo enfoque se encontraría el planteamiento estructuralista, impulsado por Galtung desde la década de los sesenta, y que adicionando la noción de paz positiva, aboga por el recurso a métodos cualitativos de análisis. Finalmente, el enfoque pluralista, planteado por Azar (1990), trata de integrar ambas posiciones bajo la noción de “conflicto social prolongado”. Sería un intento de señalar que en muchos casos, los conflictos son multidimensionales en sus factores, desarrollos y actores, de modo que el origen y la forma de resolución terminan por converger en una frontera difusa e imprecisa que impide utilizar parámetros estancos de análisis o intervención. De este modo, esta tesis doctoral se encontraría en la difusa frontera que distingue al segundo y tercer enfoque, mucho más próximos entre sí que diferenciados.

A modo de corolario, teóricamente, desde las diferentes corrientes y tipologías que, *grosso modo*, categorizan los estudios sobre resolución de conflictos, esta tesis doctoral comprendería, con base a lo expuesto, un enfoque maximalista, a camino entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Además, entendería la estructura como un escenario dinámico, que en su transformación termina por mantener un relativo *status quo* en la representación de la violencia directa o estructural, pero que no por ello preserva una condición inalterada dentro del Estado como escenario de confrontación armada.

Es decir, se abogaría por plantear un modelo de conocimiento científico desde el que entender el conflicto armado colombiano y muy particularmente, sus dinámicas tanto de violencia directa como de violencia estructural, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con el alcance y el sesgo que determinan una serie de condicionantes negativos, económicos y sociales. Condicionantes, que actualmente describen las pautas de cambio y que se solapan, sobre todo, con la concurrencia de los mayores escenarios de cultivo ilícito, por un lado, y de un bagaje menos exitoso, en cuanto a las políticas de seguridad para la superación del conflicto, por otro.

Lo cierto es que, además del referido planteamiento estructural, la interpretación de todas las hipótesis, por el propio uso de fuentes y datos para la investigación, el trabajo termina quedando alineado en un férreo modelo de análisis positivista, que si bien, en ocasiones puede tratarse de una camisa de fuerza interpretativa del objeto de estudio, por otro, en la medida en que se corroboran los resultados planteados, refuerza el alcance y la profundidad de las aseveraciones que se exponen.

Sea como fuere, si de adicionar alguna de la literatura más relevante en la comprensión teórica de la resolución de conflictos y la construcción de paz, uno de los primeros referentes a mencionar debe ser el de Immanuel Kant. En sus *Discursos sobre la paz perpetua*, y tal y como reconoce Habermas (1997: 61), trasciende más allá que cualquier otro teórico hasta su tiempo, al concebir, por primera vez, que además del derecho nacional y del derecho internacional, una tercera dimensión, articulada en torno al derecho cosmopolita, debe ser el que aspire a garantizar un estadio de paz mundial. Ello, porque entiende Kant que la paz perpetua, es decir, un estado ideal y platónico, solo resulta factible a través de un derecho cosmopolita que, en su consolidación, suponga *per se*, la abolición de la guerra y la asunción de tres postulados iniciales: el positivismo antropológico, la naturaleza positiva de los Estados y la cooperación como estado racional de satisfacción de intereses y superación de dificultades compartidas.

No obstante, para aproximar más los estudios contemporáneos de la resolución de conflictos y las investigaciones para la paz, más allá del anteriormente mencionado Bouthoul, hay un primer elenco de académicos, principalmente estadounidenses, que deben ser necesariamente mencionados. Entre esos nombres destacaría Quincy Wright, cuya mayor contribución *Study of War* (1965), supone uno de los primeros ejercicios multidimensionales en la comprensión de las guerras, con base en una primera clasificación en la que se hace referencia a conflictos de índole político-tecnológico, jurídico-ideológico, socio-religiosos y psicológico-económicos.

En todo caso, la paz, para Wright, es entendida, de manera igualmente kantiana, como un articulador nuclear del sistema internacional, habida cuenta que, en última instancia, es imprescindible de abordar, dada la naturaleza conflictual de la misma y el necesario desarrollo que hacia mediados de los cuarenta había experimentado⁴⁰.

Coetáneo a Wright estaría Lewis Richardson (1993: 66), que desde los modelos estadísticos y matemáticos, se centraba en entender los conflictos con base en los aspectos frecuenciales y cambiantes de los mismos, entendiendo que la fuerza matriz de todo conflicto armado se reduce a una mera cuestión de acción reacción⁴¹. Especialmente elaborado sería su trabajo

⁴⁰ Este tipo de consideraciones pueden encontrarse cuando Whright (1957: 4) señala: “From the point of view of developing a science of conflict resolution, international conflict is specially important because it has benn so widely studied. A unified discipline of international relations in only beginning to emerge, but its components – international politics and diplomacy, international law, international organization, international economics, the art of war, international communications and propaganda and international education-, are well established disciplines, each with a voluminous literature which gives special emphasis to the causes and methods of solution of international conflicts”.

⁴¹ Richardson (citado en Barlett 2005: 128) plantea: “The view here put forward is that the warlike striving of either side is lagerly, though not entirely, an instinctive reaction to the stimulus of the warlike striving of the opposing side. By an instinct is here mean tan inborn tendency to perceive a certain state of affairs, and thereupon to feel in a particular way, and to act towards a corresponding end. A tendency, that is to say, which one might easily follow without considering it; and to resist which if one judged it desirable to resist, would require an effort of will”.

Statistics of Deadly Quarrel, desde el que busca clasificar los conflictos armados, con base en indicadores tales como las víctimas mortales, sus esquemas de repetición y, por ende, sus intervalos de paz. Todo, adicionando correlaciones estadísticas para entender la guerra con base en variables independientes como la proximidad geográfica, la población, la religión o la lengua. Algo similar plantearía en su segunda gran obra, *Arms and Insecurity* (1960), cuando de un modo más elaborado, busca conferir una posibilidad predictiva a los conflictos armados con base en ecuaciones diferenciales desde las que explicar las “carreras armamentistas” rivales, y a través de modelos de mutua respuesta.

Muy probablemente, los dos primeros grandes aportes a la resolución de conflictos los protagonizan Kenneth Boulding y Anatol Rapoport. Kenneth Boulding, fuertemente influido por la teoría de sistemas, partía de la premisa de que la sociedad contemporánea difícilmente podía ser atendida con base a posiciones estancas o parciales. Sin embargo, desde su posición de pacifista y economista heterodoxo, va a plantear la posibilidad de identificar escenarios estables desde los que propender la paz como estado deseado.

Así se recoge, muy especialmente, en *Conflict and Defense: A General Theory* (1962: 3). Un trabajo en el que se reconoce la posibilidad de identificar tres escenarios integrados bajo líneas imprecisas marcada por el sistema y las fronteras de acción en el *continuum* competición-conflicto-cooperación. Las líneas a las que se refiere Boulding son la amenaza, el intercambio y el “amor”.

La primera, concebida como una realidad egoísta, conflictiva, de satisfacción de intereses inmediatos unilaterales, y que se encuentra marcada en todas las líneas sobre las que se construye un conflicto, especialmente, si es violento. La segunda, de mutua satisfacción coyuntural, con base en una lógica de intercambios cooperativos, retributivos, pero, aun con todo, sometidos a cambios que pueden afectar el equilibrio entre actores. Finalmente, el amor, como escenario deseado, de confianza, de mutua dependencia positiva, próxima a los imperativos categóricos kantianos. Según prime uno u otro es posible entender la posición del sistema en cuanto a su exposición hacia un contexto de guerra, de paz armada o de paz integral.

Por su parte, Anatol Rapoport, más desde la resolución de conflictos que desde la comprensión de la paz como estado ideal, interpreta la misma de acuerdo a una fuerte influencia de los parámetros racionales de Richardson y, que en este caso particular, desembocan en lo que, vulgarmente, se conoce como el “dilema del prisionero”. Este sencillo modelo, era utilizado por Rapoport para explicar de qué manera lo más racional, ante la desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de Guerra Fría, no era la opción de favorecer un escalamiento de acumulación armamentista sino, todo lo contrario, en términos de interés común, lo óptimo pasaría por acciones de desarme recíproco.

En Rapoport, lo que prima sería la noción realista de lucha y acumulación de poder. Con base en esto, plantea tres tipos de conflicto, dos de ellos irracionales y otro, en principio, de índole racional. El primero, sería el de confrontar y lastimar al enemigo, es decir, por medio de la lucha directa. El segundo escenario sería el de evitarlo, disuadiendo la necesidad de confrontación y recurriendo como factor explicativo al pensamiento estratégico a través de la teoría de juegos. Ambos son excluyentes y no retributivos de manera que, el único que resulta mutuamente satisfactorio sería el tercero de sus modelos. Un modelo retributivo que, el que fuera profesor de Matemáticas en la Universidad de Chicago, denomina como “debate”⁴², y que se basa de acuerdo a elementos tales como la persuasión, la comprensión o la empatía.

Estos modos de conflicto sugerirían tres enfoques de la investigación para la paz. El enfoque sistémico, como el representada por los modelos matemáticos de la carrera de armamentos y más generalmente por los modelos de equilibrio y desequilibrio internacional; el estratégico, que se concentra en el análisis de las trampas inherentes a militares y pensamiento geopolítico; y el ideológico, dirigido a promover una mejor comprensión entre las personas que, por razones históricas o culturales, comprometidos con diferentes concepciones de la realidad social o ideas diferentes acerca de la justicia social.

También, desde la resolución de conflictos, debe destacarse la aportación tradicional que Burton (1990) realiza con respecto a una clásica diferenciación que pone su énfasis en el arraigo sobre el cual se desarrollan los conflictos, diferenciando, a tal efecto, entre disputas (*disputes*) y conflictos de gran arraigo (*deep-rooted conflicts*). Asimismo, distinguiendo, en el mismo orden de ideas, entre el factor de severidad, esto es, el impacto del conflicto en un individuo y en una sociedad, y el factor de arraigo, que atiende a la importancia de los factores causales.

Para Burton este punto de partida en el análisis de un conflicto es imprescindible, a tenor que los conflictos, si son severos y arraigados, como pudiera ser el caso colombiano, requieren sofisticados mecanismos de resolución de conflictos que los distancian por completo, de las posiciones realistas, más conservadores y centradas en el recurso de la fuerza. Así lo reconoce cuando señala que:

“Si se piensa que el conflicto está causado, por ejemplo, por la codicia o por la agresividad personal, puede ser apropiado y eficaz emplear técnicas represivas contra la parte o las partes. Por otro lado, si el conflicto está causado por algún tipo de frustración o un impulso humano

⁴² Así, Rapoport (1978, s.p.) reconoce que: “The three modes of conflict suggest three approaches to peace research, the systemic, as represented by mathematical models of arms races and more generally by models of international equilibrium and disequilibrium; the strategic, which concentrates on the analysis of traps inherent in military and geopolitical thinking; and the ideological, aimed at promoting better understanding among people who, for historical or cultural reasons, are committed to different conceptions of social reality or different ideas about social justice. None of these directions is more important or more promising than another. If peace research is to contribute to the hope of establishing a durable peace on this planet, all three directions must be synthesized into a science of peace”.

irreprimible, la conducta apropiada de respuesta sería analizar la naturaleza del problema y ajustar en consecuencia el medio institucional y normativo. La teoría de la resolución de conflicto como analítica y solución de problema se deriva de una concepción del conflicto como un fenómeno humano normal y universal. Conflicto describe una relación en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antítesis de los suyos. Conflicto abarca, en primer lugar, las relaciones entre las partes en disputa, sus percepciones y falsas percepciones, los valores compartidos y los que no lo son, y sus metas y motivaciones; en segundo lugar, el medio político, social, económico, e institucional en el que la disputa tiene lugar. (Burton, 1990: 5).

Lo anterior se integra, en el trabajo del profesor de la Universidad Estatal de San Francisco y congresista del Partido Demócrata desde abril de 2009, de acuerdo a lo que denomina como “teoría de las necesidades humanas” (Burton, 1990). Es decir, un constructo teórico por el que los conflictos deben ser investigados en su aproximación a las condiciones estructurales que alimentan el conflicto. Así, los conflictos no se pueden entender sin el nivel de insatisfacción que sobre la población civil, la estructura genera. Algo similar al enfoque planteado por Dukes (1999), años después, y que coincide en entender que la paz se torna imposible si no termina siendo un ideal sostenible que se proyecte, igualmente, sobre las fuerzas sistémicas y dinámicas que acompañan a todo conflicto armado. Dicho de otro modo, la paz debe entenderse, a este efecto, como algo más complejo que una mera comunicación o negociación, en tanto que se trata de un proyecto transformador de la estructura, en términos integrales.

Algo parecido plantea Rubenstein (1999), cuando define a los conflictos armados como el resultado de relaciones sociales estructuradas, y que experimentan desviaciones en su cometido por satisfacer las necesidades mutuas de las partes involucradas. Asimismo, como en los anteriores ejemplos, se reivindica la dimensión estructural de los conflictos armados, cuya complejidad no puede quedarse, en exclusiva, en torno a déficits de comunicación u objetivos o valores enfrentados. Por ende, la resolución de conflictos no es una mera gestión, sino un profundo proceso de transformación estructural del escenario que termina por mantener las dinámicas de violencia propias que acompañan a los conflictos armados. Es así que vale la pena recoger las palabras del jesuita colombiano, Francisco de Roux, máximo exponente de la experiencia de los Laboratorios de Paz, en el Magdalena Medio, cuando afirma que “sin estas transformaciones [estructurales], la paz no es más que un discurso de buenas intenciones”. (Citado en Barreto, 2009: 524).

De acuerdo a lo señalado, un trabajo igualmente que debe destacarse en los estudios sobre resolución de conflictos de acuerdo a esta línea expuesta, es el del ya mencionado Azar (1990). En *The Management of Protracted Social Conflict* se intenta integrar los enfoques realistas y estructuralistas de la resolución de conflictos haciendo valer el concepto de “enfoque social prolongado”, a fin de identificar los factores causantes, cambiantes y externos que afectan, determinan y particularizan un conflicto armado.

De este modo, en los factores causales, Azar identifica como elementos explicativos las particularidades propias de la sociedad en conflicto, destacando bien, de un lado, el legado colonial, bien, de otro, las particularidades étnicas, lingüísticas o culturales, de acuerdo a un nivel notable de multiculturalidad, mayormente necesario, para explicar los conflictos armados. A estos, adiciona, el nivel de satisfacciones básicas satisfechas – reconocimiento, inclusión, seguridad, y, por tanto, el nivel de legitimidad de un gobierno y la capacidad de resolución e integración que tiene lugar dentro de un Estado-, pero también incorpora como variable determinante el nivel de conexión de dicho Estado dentro del sistema internacional.

Luego estarían los factores de transformación de un conflicto, para cuya comprensión hay que atender los sistemas y canales de comunicación e interacción, el nivel de frustración y la manera en que se manifiestan y resuelven los mecanismos y demandas de acción colectiva. Es decir, de parte del poder público, si la respuesta se orienta hacia mecanismos represivos/coercitivos o si, por el contrario, utiliza mecanismos de cooptación instrumental y, cómo afectan a la lógica parcialidad-totalidad. Los resultados son inseguridad, desafectación, clientelismo o depravación institucional que, en suma, permiten medir no solo el nivel de representación violenta sino el nivel de intervención y la propia evolución del conflicto.

Un planteamiento original con respecto a los anteriores, si bien bastante más antiguo, sería el de Coser (1961: 7), quien parte de entender un conflicto como la “lucha respecto a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a los rivales”.

Con base en esto, Coser interpreta que el conflicto es un estado de lucha que va más allá de la fuerza física, esto es, con base a elementos disuasorios y persuasivos que determinan la dualidad conflicto real-conflicto irreal. Solo en el conflicto real prima la fuerza física, y los objetivos de la disputa terminan por ser tangibles. Ello, porque en el conflicto irreal, no existe dicho antagonismo entre actores y mucho menos la disputa gravita en torno a bienes que se conciben como escasos. Es decir, en los conflictos irreales la alteridad, el otro o el enemigo, es una construcción más simbólica que nada, desde la que cabe justificar ciertas acciones violentas.

Se trataría de una especie de relato inventado que justifica la agresión y que, perfectamente, dentro del caso colombiano, puede ser extrapolable a ciertos enclaves. Por ejemplo, como se detallará con posterioridad en el capítulo VII, en la frontera entre Córdoba y Sucre nunca se dieron visos notables de activismo guerrillero de las FARC o el ELN. Sin embargo, el paramilitarismo va a surgir con fuerza en esta región, construyendo una imagen inexistente pero, por completo, legitimadora con respecto de la necesidad de una acción violenta, anti-subversiva.

Un planteamiento más constructivo, en términos de entender la paz, sería la aportación del premio Nobel de Economía en 2005, Thomas Schelling (1961), quien trasciende de las nociones que entienden el conflicto como una patología a evitar y, a su vez, de quienes entienden que es un hecho inevitable y que debe ponerse el punto de atención en los elementos causales.

Schelling pone el foco dentro de esta dimensión en los actores que buscan de manera racional, consciente y motivacional un elemento de justificación en el conflicto, en lo que Rapoport concebía como comportamiento estratégico, y en el que prima no solo la fuerza real o tangible sino la dimensión potencial, en la que opera la intimidación. Es por ello que Schelling reivindica la teoría de juegos como constructo analítico para la resolución de conflictos. Sin embargo, incorpora la noción de racionalidad limitada, esto es, con base en el intento de integrar otros elementos como emociones o como elementos racionales que, por su propia condición, pueden conducir a resultados indeseados.

Coetánea a los anteriores, pero con trabajo de imperiosa actualidad, Elise Boulding (1992: 35) se trataría de una de las primeras en reivindicar, a diferencia de los anteriores, la paz como objeto de estudio disciplinario en lugar del recurrido concepto de guerra. La paz para Boulding es un resultado, proceso de una paulatina transformación social en la que la educación representa un valor nuclear y sobre el cual, el cambio social, amerita indefectiblemente un enfoque de género. Las mujeres son concebidas como actores portadores de paz en su esfera doméstica y reproductiva, por lo general invisibilizada:

“si los hombres dedicaran más tiempo con los niños y aprendieran nuevos instrumentos de escucha y relación, se pondría en marcha un proceso que ayudaría a reducir los comportamientos violentos y equilibraría la balanza entre temas culturales de paz y agresión”.

Similares reivindicaciones culturales plantea Curle (1994), quien reclama la necesidad de una cultura de paz con base en una interacción social entre población civil y entidades de gobierno, de acuerdo a un intercambio constructivo de experiencias y lecciones aprendidas. Esto, porque Curle (1994:40) entiende que la paz es “una relación entre individuos, grupos, naciones o incluso unidades mayores, basadas en la cooperación”.

De esta manera, analiza las condiciones bajo las que en vez de cooperación hay hostilidad mutua y violencia a fin de explorar instrumentos y herramientas con las que transformar las interacciones sociales de acuerdo a lógicas de convivencia pacífica. Es a partir de aquí que el profesor de Bradford reivindica la esfera individual, de promoción de pensamientos, actitudes y acciones enmarcadas dentro de un espíritu de *noviolencia*⁴³ que debe construirse

⁴³ El término *noviolencia* puede entenderse en términos de vida (forma de vida o actuación) o de lucha (la forma de enfrentarse u oponerse a la injusticia). Siempre, dejando de lado prácticas violentas y optando por estrategias alternativas como la desobediencia civil o la no-cooperación (Lederach, 2000: 100).

desde una cultura de paz y una educación cuyos pilares sean participación, cooperación y crítica. Así, en términos similares a los de Robinson, Curle (1994: 45) plantearía que:

“Los estudios por la paz deben interesarse en enfoques que remodelen la sociedad y el orden mundial de tal modo que no sólo sea eliminada la violencia manifiesta y la latente, sino que se establezcan y se mantengan la armonía y la cooperación”.

Con base en un enfoque estructuralista, Christopher Mitchell, con su primera gran obra, *La estructura del conflicto internacional* (1981), pero sobre todo en *Conflictos intratables: claves de tratamiento* (2014: 6), el profesor emérito de la Universidad George Mason, asume que los conflictos armados se pueden clasificar en crónicos – que continúan por largos periodos intergeneracionales-, o arraigados, caracterizados por ser resistentes a una solución, capaces de reaparecer tras largos períodos de letargo, o interiorizados por elementos identitarios y de etnicidad, incorporando la dimensión de “conflicto intratable” como escenario de intervención de la resolución de conflictos y que perfectamente podría aplicar al caso colombiano.

Ello, porque define que los “conflictos intratables” son aquellos que, potencialmente, mezclan ambos elementos de manera que, a la categoría de conflictos etno-políticos de Gurr (1995) - aquellos que gravitan en torno a etno-nacionalismos, derechos indígenas, luchas intra-comunitarias por el poder y cuestiones integradas económicas, sociales y de clase-, Mitchell incorpora esta noción de “conflicto intratable”. Un conflicto que se entiende como violento – pues a menudo supone la confrontación pueblo-Estado-, prolongado, interno, extensivo e inextricable. Un conflicto cuya superación pasa atendiendo tanto a la dimensión estructural de Galtung como a la dimensión de cambio de Azar.

Es más, algunos como Horowitz (1985: 187) se destaca la necesidad de entender el conflicto como resultado del sistema político, en tanto que los conflictos no pueden desligarse de la actividad política y, muy especialmente en cuanto a:

“los asuntos fundamentales, tales como la ciudadanía, el sistema electoral, la designación de las lenguas y la religión oficiales, los derechos de los grupos a “puestos especiales” en la entidad política, más que establecer un marco de referencia para la actividad política, se convierten en los asuntos recurrentes de la política”.

En iguales términos estructuralistas, aunque más propio de la línea de investigaciones para la paz y menos desde la resolución de conflictos, se destacan los trabajos de Sandole (1987; 1997). El profesor de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, aboga por entender la paz como un escenario de paz positiva, ideal, de superación de las condiciones estructurales del conflicto, pero bidireccional, es decir, que requiere integrar estructuras multinivel *top-down*, de carácter institucional-gubernamental, con otras *bottom-up*, en las que es imprescindible focalizar intervenciones locales en las que se tenga en cuenta a las demandas de la población civil.

De hecho, Sandole, enfatiza en la necesidad de dar visibilidad a las particularidades locales, por encima de patrones generales – lo cual sirve para el posconflicto colombiano.

Asimismo, en su conceptualización sobre la paz, Sandole desarrolla una particular clasificación que, al menos, merece ser mencionada, y en la que se sirve de cuatro grandes categorías de análisis, y que se aprecian en la siguiente tabla.

También, con base en un enfoque de estructura estarían los trabajos de Keen (2001) y Berdal y Malone (2000), los cuales parten de enfoques cuantitativos, con atención en bases de datos sobre cientos de conflictos armados en el mundo, a fin de hacer valer su hipótesis (Nasi y Rettberg, 2005). Hipótesis por la cual, cabría pensar en una relación íntima entre la disponibilidad de recursos *saqueables* y la concurrencia de insurrecciones, muy especialmente en África y en parte de Oriente Medio, pero perfectamente válidas a efectos del caso colombiano. De este modo, las lógicas sobre condiciones de pobreza son relativizadas, en la medida en que el conflicto no se entiende ni se prolonga si no es con base a fuentes de financiación (De Soysa, 2000).

Tabla 3: Clasificaciones en cuanto a concepto, enfoque, discurso y actores de paz en Sandole

Concepciones de paz	Enfoques (<i>graduations</i>) de paz liberal	Discursos de construcción de paz	Actores/discursos/ e intereses subyacentes
Paz como Manejo de conflictos	Ortodoxo	Construcción democrática de paz (<i>democratic peacebuilding</i>)	Corresponde al discurso de la democracia liberal: respeto a los derechos humanos, vigencia de la constitución e impersonalidad de la ley, respeto a la propiedad privada.
Paz como Justicia (social, etc.)	Emancipatorio	Sociedad civil	Es el típico discurso religiosos de la paz como: “espacios sociales de reconciliación” (más como una actitud) con menos énfasis en apuestas de generación de instituciones.
Paz como prevalencia de un Orden	Conservador (antecedentes en Huntington con un enfoque institucionalista) <i>Statebuilding</i>	Aquí priman más discursos realistas y pragmáticos (conservadores) de la política	El Estado es el eje, se reclama su respeto como factor de orden. Énfasis en el dominio de la soberanía del estado

Fuente: Sandole y Sandole (1987): 259-74.

Es por ello que, sin negar la importancia de la desigualdad, la ausencia estatal o la disponibilidad de mano de obra para la guerra, los recursos terminan por ser, y así lo trata de mostrar esta tesis doctoral, un recurso por el cual un conflicto armado se prolonga e, incluso, se envilece. De hechos, estos trabajos muestran como diamantes, petróleo, madera o coltán, en los casos del África Sub-sahariana, afectan directamente a la aparición de conflictos. Asimismo, otros trabajos ya han mantenido esta línea hipotética (Ross, 2004; Le Billon, 2001) así como el objeto de estudio sobre la diferencia cualitativa entre aquello que origina los conflictos y aquello que los sostiene (Collier, Hoeffler y Soderbom, 2001).

A tal efecto, y para el particular caso de Colombia, los nexos entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales han generado versiones reduccionistas y trivializadas del argumento que consideran la insurrección como simple instancia de criminalidad a gran escala. Políticamente atractiva, dicha noción ha sido cualificada, sin embargo, con estudios sobre el complejo sistema de guerra ya mencionados por Richani (2002); con estudios sobre las motivaciones de los rebeldes, derivadas de estudios con desmovilizados y desertores (Gutiérrez, 2004), o con base en sobre los procesos y justificaciones internas respecto del funcionamiento de los grupos armados (Camacho 2002). También, de acuerdo a estudios de caso sobre zonas específicas (Guáqueta 2003) y con avances en la identificación de las particularidades regionales de la relación entre recursos y conflicto (Nasi y Rettberg 2005).

De la misma manera, con tintes de estructuralismo, se encontraría el trabajo académico de Frances Stewart (2008), cuya principal aportación tiene que ver con las desigualdades horizontales - *horizontal inequalities*- al considerar que en los conflictos hay un fuerte componente irreconciliable, que se determina a partir de grupos culturalmente definidos y cuyas interacciones deben trascender de la tradicional desigualdad vertical, la cual acaba siendo resultado de un carácter agregado, y multidimensional, de desigualdades horizontales, que imbrican factores políticos, económicos y sociales⁴⁴.

Para Stewart el conflicto es directamente proporcional al nivel de bienestar, el cual determina la estabilidad social que, finalmente, determina el conflicto (Stewart, 2001). De este modo, la falta de bienestar puede propiciar razones instrumentales entre grupos con los que dar lugar al conflicto. De otro lado, el propio bienestar puede desestructurar y organizar las jerarquías sociales. Es con base en esto que, por ejemplo, Akerlof y Kranton (2000: 719), señalan al propio bienestar como un configurador de la estructura social y de la identidad ciudadana. Esto, con base a grupos sociales que, cuando afectan negativamente a los niveles de

⁴⁴ Según Stewart (2003: 2): “It is my hypothesis that an important factor that differentiates the violent from the peaceful is the existence of severe inequalities between culturally defined groups, which I shall define as horizontal inequalities to differentiate them from the normal definition of inequality which lines individuals or households up vertically and measures inequality over the range of individuals – I define the latter type of inequality as vertical inequality. Horizontal inequalities are multidimensional – with political, economic and social elements (as indeed are vertical inequalities, but they are rarely measured in a multidimensional way). It is my contention that horizontal inequalities affect individual wellbeing and social stability in a serious way, and one that is different from the consequences of vertical inequality”.

movilidad social, permiten aceptar la hipótesis de una mayor preponderancia hacia el conflicto. Dicho de otra manera, las desigualdades horizontales, serían las que tradicionalmente, generarían los mayores niveles de frustración, exclusión, marginalidad, lastrando la autorrealización y alimentando el resentimiento sobre el que tiene lugar el conflicto violento (Stewart, 2002).

En iguales términos estructuralistas debe encuadrarse el clásico trabajo de McAdam, Tarrow y Tilly (2001), *Dynamics of Contention*, que surge con el propósito de entender las líneas que marcan la movilización y la desmovilización dentro del conflicto, y particularmente los límites que lo determinan ya sean convencionales (factores contingentes) o no (factores transgresivos).

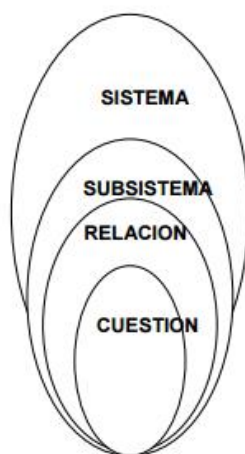
Desde el propio estructuralismo, sin embargo, esta propuesta busca trascender una de las principales debilidades del enfoque, y es su estatismo. Es decir, su propuesta buscar superar los tradicionales compartimentos estancos que han delimitado la comprensión de movimientos sociales, acción colectiva y mecanismos de contención, sobre todo. Es así que se busca integrar un planteamiento dinámico a partir de entender el conflicto como proceso social y como resultado de un intrincado elenco de factores causales.

Es decir, las transformaciones sistémicas a nivel económico, político y cultural, deben integrarse con las oportunidades de acción política, las posibles formas de organización e interacción, y los mecanismos concurrentes desde los que canalizar la acción colectiva del movimiento social dentro del escenario político. Con base en esto, McAdams, Tarrow y Tilly plantan que las oportunidades y las amenazas distan de ser categorías cerradas y son más bien un producto de esta compleja interacción social.

Así, la atribución de amenazas/oportunidades usualmente emerge de la competencia entre diferentes interpretaciones, y una de las cuales finalmente prevalece respecto de otras (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001: 95). Sobre la base de ello, la capacidad de acción estatal, a modo de represión, sería nuclear en la medida en que marca las identidades y los canales de interacción dentro del conflicto y, por ende, si los márgenes se resuelven dentro de los canales democráticos o a través de expresiones de índole violento.

A camino entre la resolución de conflictos y las investigaciones para la paz se reivindica el trabajo de Marie Dugan (1996), con base en lo que se conoce como su “teoría del paradigma anidado”. En todos los conflictos se desencadenan cuestiones problemáticas que demandan una respuesta inmediata y que a la vez son sintomáticas de otros sistemas y estructuras sociales profundas. En ocasiones, la respuesta que se da al problema resulta ser una solución contingente que, de otro lado, agrava el conflicto y de ninguna forma contribuye a una transformación de las estructuras sociales tal y como, precisamente, sucede en el caso colombiano.

Figura 1: Imagen ilustrativa del paradigma del conflicto anidado



Fuente: Dugan (1996: 15).

De acuerdo con este paradigma, se permite integrar, de manera original, los actores objeto de los estudiosos sobre resolución de conflictos, de un lado, y los enfoques de paz, de otro. Es así que sobre los escenarios planteados por los conflictos armados prolongados, como es el caso colombiano, el paradigma anidado permite considerar un área específica de interés y articular las perspectivas de las cuestiones inmediatas y del sistema, pues el subsistema permite abordar los problemas del corto y largo plazo a través de ciertas acciones.

Una obligada referencia en el estudio de la resolución de conflictos y, también, en las investigaciones para la paz es el profesor de la Universidad de Notre Dame, John Paul Lederach, quien parte de la noción de conflicto como sistema y como fenómeno dinámico y dialéctico que transita por diferentes etapas.

Desde su particular comprensión, el conflicto armado colombiano sería un conflicto intra-societal, con base en complejas raíces que imbrican factores políticos, históricos y económicos (Lederach, 1997; Fisas, 2002). En este particular caso, como en el resto de conflictos armados, Lederach (1997) reivindica la necesidad de diferenciar entre factores objetivos, especialmente marcados por carencias estructurales o la oportunidad sobre recursos escasos, y factores subjetivos, erigidos desde elementos ideológicos e identitarios. No obstante, y como recoge anteriormente el trabajo de Tajfel (1982), no resulta imprescindible la concurrencia de ambas categorías.

Para Lederach (1997: 48) en la preservación de la paz, dado el papel limitado que por cuestiones de soberanía y capacidad tienen los organismos internacionales, debe darse una articulación con el conflicto en sí y su transformación. Ello, porque el conflicto, en tanto que dinámico, para su desmantelamiento, requiere de un “concepto global que abarca, produce y

sostiene una serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles”.

Esta consideración, no obstante, es relativizada por otros como Osler (1996: 535), quien sostiene que un “exitoso proceso de paz depende de un montón de ayuda y asistencia externa, no sólo con la negociación de un acuerdo de paz, pero también con su puesta en práctica” y que de igual forma destacan otros autores como Crocker y Osler (1996), Maynes (1993), Walter (1997) o López-Pintor (1997). Todos quienes, a diferencia de Lederach, comparten que el éxito y el fracaso de las transiciones hacia la paz tienen una relación directa con el nivel de apoyo y acompañamiento que proyecta la comunidad internacional.

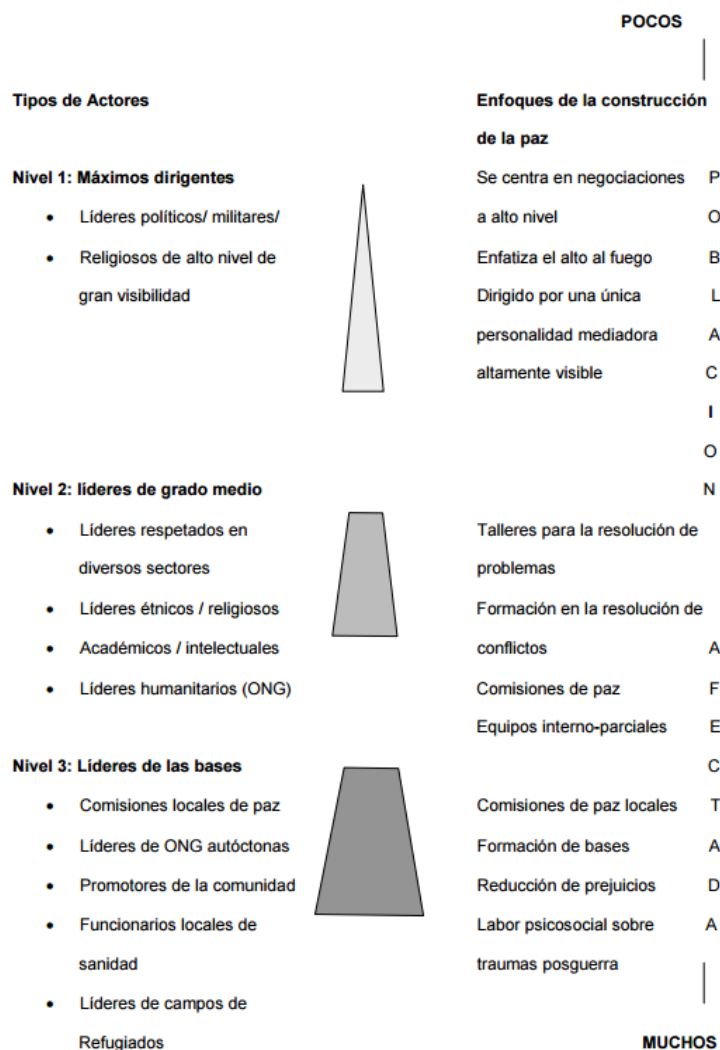
Es así que la estructura, en Lederach (1997) supone un marco global de análisis en torno a dos posibilidades. Primero, en cuanto al nivel de los actores involucrados en la construcción de paz y la disposición de recursos para su mantenimiento, según el nivel en el que se encuentre dentro de la estructura social. De acuerdo al estudio, particular, del tipo de líderes y sectores de la población de los que proceden en cada nivel, y las actividades o enfoques de transformación de conflictos de las que pueden participar los actores de un nivel dado.

Segundo, propone identificar y analizar pormenorizadamente los problemas y crisis inmediatos del conflicto como cuestiones sistémicas más profundas de la resolución del conflicto y la construcción de la paz, aproximándose así al “paradigma anidado” de Dugan (1996), y enfatizando especialmente la importancia del subsistema como espacio de actividad del nivel medio que relaciona a los otros niveles del sistema.

La transformación estructural, como *condictio sine qua non* en la superación de conflictos armados, está presente también en el trabajo Peter Wallensteen (2007:13), cuando considera que los conflictos armados trascienden de percepciones tangibles de las acciones que muestra la realidad. Es decir, las acciones no constituyen el conflicto sino que, igualmente, hay fuerzas ocultas que no son perceptibles, a diferencia las conductas. Esto, llevado al extremo, puede suponer una cierta tautología en la medida en que, en última instancia, un conflicto necesita de acciones que resulten, en última instancia, siempre, visibles.

Dicho de otro modo, el conflicto, para resistir o sobrevivir dentro de las dinámicas que ofrece su interacción violenta, puede servirse de factores latentes pero las conductas de los actores involucrados, necesariamente, deben terminar visibles. Ello, acercaría la hipótesis de este trabajo a los enfoques de otros autores como Galtung (2003, 2003c) o Miall, Mitchell, Ramsbotham, y Woodhouse (2015), que también entienden que la conducta o la acción de los actores es la parte visible del conflicto, sin necesidad de que la totalidad del conflicto en sí, lo sea.

Figura 2: Esquema de actores y enfoques de construcción de paz por niveles de Lederach



Fuente: Lederach (1997: 8).

A los enfoques anteriores, un trabajo que busca aportar una hoja de ruta analítica para la resolución de conflictos y las investigaciones para la paz, pero sin entrar a profundidad en los debates teóricos sobre dimensiones objetivas o subjetivas de los conflictos armados, se encuentra en la aportación de Mason y Rychard. A partir de su trabajo, *Conflict Analysis Tools* (2005), diferencian seis elementos que ameritan ser, cuando menos, tenidos en cuenta, en todo análisis sobre resolución de conflictos.

Así, se destacaría, en primer lugar, la necesidad de elaborar una “rueda de conflictos”, por la cual se presentan seis dimensiones importantes en el análisis de conflictos armados

(dinámicas, actores, causalidad, estructuras, problemas y opciones/estrategias). Después hay que elaborar un “árbol de conflictos” que ayude a identificar, dentro del conflicto, la diferencia entre los factores estructurales y los factores coyunturales, y sus posibilidades de interacción. Un tercer estadio sería el del “mapa de conflictos”, que se centra en los actores y sus interrelaciones, tratándose de una buena herramienta para iniciar el análisis de un conflicto, en tanto que visibiliza las asimetrías de poder y las alianzas y confrontaciones entre los diferentes protagonistas involucrados.

En otro nivel se encontraría lo que Mason y Rychard denominan el “modelo de escalada de Glasl”, cuyo objetivo es adaptar las estrategias de intervención con base en las particularidades objetivas y subjetivas que presenta el conflicto. Tras ello, sería el momento del “modelo de análisis del conflicto INMEDIO”, centrado sobre las diferentes percepciones de las partes en conflicto, a fin de encontrar potenciales o reales posiciones compartidas que, a su vez, ayuden en las posibilidades de éxito de una eventual mediación.

Finalmente, estaría el “mapa de necesidades y temores”, erigido con base en los actores y sus problemas, intereses, necesidades, temores, medios y opciones permitiendo, igualmente, una comparación clara de los actores, sus similitudes y sus diferencias. Se concluiría con el “modelo de multicausalidad”, centrado en la causalidad, valga la redundancia, y en la diferente calidad de razones, canales, medios, y metas, tanto por razón de coyuntura como de estructura, que vinculan a los actores con el conflicto.

Lo anterior sería perfectamente integrable con los modelos de análisis dinámico o multi-etápico que plantea, desde la resolución de conflictos, Dudouet (2006), para quien los conflictos deben entenderse en función de la línea de tiempo en la que se encuentren. Una aproximación muy cercana a lo que también plantean Lederach (2005: 43), Lund (1996: 38) o Miam, Mitchell, Ramsbotham y Woodhouse (2015: 11), y que de un modo u otro coinciden en identificar cuatro etapas de la escalada del conflicto (diferencia, contradicción, la polarización, la violencia), el pico más alto de la curva (la guerra), y cuatro etapas de desescalada (alto el fuego, el acuerdo, la normalización correspondiente, la reconciliación).

Para concluir, quedarían otras aportaciones como la de Roger Mac Ginty, en torno a la idea de *paz híbrida*. Un modelo de paz, en constante construcción, en la que distintos actores y redes compiten y cooperan a partir de diversos temas de la agenda. Partiendo de la necesidad de una paz que articule estrategias coercitivas y persuasivas, Mac Ginty propone cuatro elementos fundamentales para su planeación: 1) la capacidad de acuerdo entre actores, redes y estructuras liberales de la paz; 2) la capacidad de dichos agentes y redes para construir estructuras de incentivos hacia los otros actores y redes; 3) la habilidad de los actores locales para resistirse, ignorar o adaptarse a las intervenciones de dichos actores; y 4), la habilidad de los actores, redes y estructuras locales para proponer y mantener estrategias alternativas para la construcción de la paz (Mac Ginty, 2010: 11). No obstante, esta consideración, en última instancia, requiere de un Estado que garantice el funcionamiento

sincronizado entre sus niveles local y nacional; pues de cualquier otra manera, la violencia, la política y los tejidos sociales en los territorios en donde su presencia no es hegemónica, seguirán siendo materia de disputa entre todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo.

8. Conflicto armado colombiano y estructuralismo. Una aproximación desde las aportaciones de Johan Galtung

Buena parte de la revisión bibliográfica realizada en los epígrafes anteriores de este capítulo reivindican la necesaria atención estructural en la comprensión de los conflictos armados en general, y del caso colombiano en particular. Sin embargo, de todas las aportaciones que construyen el enfoque teórico que predomina en este trabajo doctoral, se encuentran en torno a la figura de Johan Galtung.

A diferencia de las influencias de Hobbes o Durkheim sobre los enfoques más conservadores en la resolución de conflictos, inspirados en torno a ideas como el poder o la fuerza, Galtung plantea una posición de partida que le aleja de éstas: las prácticas violentas no garantizan ni permiten la construcción de escenarios de paz. Todo lo contrario, las estrategias de seguridad en la superación de conflictos requieren de mecanismos de *noviolencia*, siendo esta aseveración puesta en evidencia en el particular caso colombiano. Tal y como muestran, particularmente, los capítulos VI y VII, las acciones de violencia por parte del Estado no han contribuido a desarrollar escenarios de paz en Colombia. Esto, porque para el sociólogo noruego, con el que esta tesis comparte posición, es que a la paz solo se puede llegar, valga la redundancia, por medios pacíficos y transformaciones, mayormente, estructurales y culturales.

Resulta imprescindible antes de nada, plantear o analizar las tres fases sucesivas que tienen lugar en todo conflicto armado para Galtung (1998, 2003, 2003c) y que se asemejan a otros aportes como los mencionados, por ejemplo, de John Paul Lederach (1998, 2005).

Inicialmente, es imprescindible identificar en qué momento el conflicto de intereses, en este caso en Colombia, incurre en el empleo de la violencia como mecanismo de resolución del conflicto. Ello, en este caso particular se describiría a lo largo del capítulo II, y en extensión, en el capítulo III.

Especialmente, en el capítulo II, se opta por describir los orígenes del conflicto armado. Ello, presentando cómo evoluciona el sistema político colombiano, particularmente desde los años treinta, cuando se empiezan a acumular tensiones políticas y elementos irresolutos que terminan por desbordarse en la Violencia a partir de los años 1946-1948 y que enlazan directamente con la tesis que para muchos determina la base histórica, que no actual, del conflicto armado. Un inicio que, como se señaló, mayoritariamente se ubica en el año 1964.

El año 1946 es el que profundiza esa relación irreconciliable de nosotros/ellos que, en torno al binomio Partido Liberal-Partido Conservador, permite entender la fase de violencia que,

transformada en guerra civil, tiene lugar en Colombia. A tal efecto el déficit democrático⁴⁵, en su dimensión social, por no proveer derechos básicos de seguridad, bienestar e inclusión social, por un lado, y por otro, la escasa tolerancia política e ideológica, cuando no de inclusión, permiten entender por qué el factor político-cultural, también imprescindible para entender la emergencia de grupos insurrectos. Dicho de otro modo, el importante déficit político de la democracia colombiana, la más antigua de América Latina, invita a explicar el escenario que acoge la comprensión propia del conflicto armado interno por el que transcurre Colombia.

El proceso por el cual transcurre la violencia, como segunda fase de análisis, ha sido especial objeto de atención desde la década de los noventa, habiendo sido agudizado, en cuanto a su nivel de beligerancia, los últimos quince años. Guerrillas, cárteles, paramilitares y Fuerza Pública han buscado siempre en sus interacciones complejas, satisfacer sus objetivos. Objetivos que, por su inmediata correspondencia con fuentes de poder económico, especialmente minería ilegal, narcotráfico, secuestro, extorsión y despojo de tierras, cuestiona, al menos, la afirmación de que la violencia es la opción menos racional en un conflicto.

Lo anterior, durante los años de mayores dosis de violencia, en los que FARC y AUC, sobre todo, buscaban expandirse a costa de un Estado débil, sin capacidad de respuesta a fin de reducir los niveles de beligerancia y aumentar los mecanismos de seguridad. Es así que se llega, igualmente, a lo que Galtung llama metaconflicto (2003: 83), es decir, el escenario de búsqueda de destrucción del adversario y, tras esto, del deseo de revancha entre los actores involucrados.

Pese a todo, la violencia no es perenne y lo normal es que termine por agotarse, bien porque desaparecen los medios de destrucción, los objetivos a destruir, el deseo de destruir, la esperanza de ganar o, el último término, la intervención de un tercero que facilita una forma, mutuamente favorable, desde la que desconectar y desactivar la confrontación. Es así que llegaría a la tercera etapa, de fin del conflicto, es decir, de posconflicto, previa consolidación de “las 3R´s”: reconstrucción, reparación y resolución (Galtung, 1998).

Con base en lo anterior, esta tesis doctoral pone su foco en la descripción y comprensión del segundo gran momento para Galtung dentro de un conflicto, esto es, el nivel de mayor beligerancia. No obstante, y aun con ello, el objeto de estudio dejaría muchas puertas abiertas con respecto a la tercera etapa, de superación, aunque no se entra directamente a valorar tales posibilidades. Ello, no porque incorpore como parte de la investigación el actual proceso que transita en La Habana, sino porque deja abierta la posibilidad de entender algunas variables

⁴⁵ El déficit democrático se entiende en la medida en que el Frente Nacional excluye cualquier tipo de participación política que no se encuentre integrada en la dualidad Partido Liberal – Partido Conservador. De hecho, el Partido Comunista, ilegalizado en 1956, no va a tener forma de participación directa sobre el sistema político colombiano.

como el narcotráfico, la violencia estructural o el alcance de políticas de seguridad beligerantes, como factores de análisis y comprensión dentro de un marco de posible superación negociada del conflicto actual.

A tal efecto, la noción de conflicto es, por tanto, una extrapolación de la noción teórica planteada por Galtung en su prolífica obra sobre los estudios en paz y conflictos que incluso, y que para muchos como Calderón (2009:60), se presume que puede representar el 50 por ciento de los trabajos sobre en esta disciplina.

De acuerdo con Galtung, se puede entender que el conflicto colombiano se erige desde una dimensión bidimensional (positiva-negativa, crisis-oportunidad) respecto de la que convergen objetivos incompatibles cuya superación requiere de cómo se entiende la noción de paz. Aunque ello se tratará más adelante, se puede decir que la paz debe ser concebida, en estos términos, no como ausencia de guerra sino como ausencia de las condiciones estructurales de la misma, y en términos no solo de carácter social y económico, sino en términos de paz cultural y la cultura de paz.

El propio Galtung (2003c) concibe el conflicto como una interacción entre crisis y oportunidad, que en el caso de Colombia debe entenderse de acuerdo a un Estado sin control territorial, institucionalmente debilitado, y con una lógica de disputa de recursos, que van desde el despojo de tierras hasta el narcotráfico y el secuestro, y que alimentan las dosis de la violencia armada de parte de grupos irregulares.

La oportunidad que plantea este déficit del Estado colombiano concurre con una confrontación de intereses en la medida en que éste, especialmente desde 1999, busca expandir sus redes de poder territorial y combatir la dimensión militar y económica, sobre todo, de la guerrilla.

Todo, en torno a una dimensión horizontal, de disputa por lógicas de poder sobre los recursos y también con base en el control territorial. Sin embargo, se adiciona una relación vertical que termina teniendo a la población civil como el gran damnificado, al interactuar localmente de acuerdo a lógicas de violencia particulares que bien suponen el desarraigo y el desplazamiento forzado, bien la inclusión en comunidades de legitimación que terminan por desplazar y relegar al Estado a posiciones de debilidad.

A la vez, para Galtung (2003: 8) un conflicto responde a cuatro dimensiones de acuerdo a su escala geográfica de desarrollo: micro, meso, macro y mega. A nivel micro, en este trabajo se podrían encontrar algunas cuestiones concretas, como son, por ejemplo, ciertos niveles municipales de estudio que, muy particularmente, en los capítulos sobre violencia directa de FARC y ELN, permiten observar el foco de atracción que suponen algunas localidades como San Carlos en Antioquia, Tibú en Norte de Santander, Tumaco en Nariño o Buenaventura en Valle del Cauca. También, este análisis se puede atender en la relación creciente, y cada vez

más notable, que ciertos municipios guardan con base a la violencia directa ejercida, principalmente, por los grupos guerrilleros.

Los niveles meso y macro, son los dominantes dentro del trabajo. Es decir, desde una simple metodología de identificación de regiones, con base en criterios espaciales, se trata de plantear de qué manera, no todas las regiones son igualmente afectadas por la violencia directa, tanto de guerrillas como de paramilitares y Fuerza Pública, y de violencia estructural. Asimismo, se busca identificar de qué modo el propio conflicto arroja dinámicas cambiantes que, sin duda, afectan a la organización misma de los recursos y las respuestas que derivan desde el Estado. Respuestas que, en todo caso, deben ser tenidas en cuenta si de aspirar a superar la violencia del conflicto se trata.

El nivel supra-nacional es desatendido, intencionadamente, al dominar como unidad de estudio el Estado colombiano. No obstante, el propio proceso de *periferialización* invita a pensar en dinámicas de violencia puramente transfronterizas, tanto físicamente, como por la confluencia de intereses en la tesitura que abre el conflicto armado. Intereses que afectan muy especialmente, por Estados Unidos, y que obligarían a desarrollar un planteamiento geopolítico que aunque identificado, desviaría el objeto de estudio de este trabajo. Igual sucedería con relación a otros aspectos como las afectaciones que a Colombia realiza la transnacionalidad del crimen o el cambio en la agenda de seguridad en los términos post-11S. Sin embargo, a tal efecto, se pueden mencionar algunos trabajos actuales que, sobre todo, desde una aproximación a la perspectiva de Geopolítica Crítica⁴⁶, como el de Rodríguez Pinzón (2015), enriquecen la comprensión teórica del conflicto armado, al trascender, en este caso, de la construcción discursiva del conflicto armado colombiano, para tratar de entender cómo se ve directamente afectado por cuestiones de orden político tanto nacional como internacional y cómo la imbricación de las escalas geográficas nacional y supranacional modulan particularmente el nivel de gestión y/o de superación del mismo.

En otro orden de ideas, se yuxtaponen otras categorías que determinan la forma de comprender el conflicto armado colombiano. Igualmente, de acuerdo con Galtung (2007) deben identificarse, en el estudio de todo conflicto, las actitudes internas, los comportamientos externos y la contradicción entre ambos. Estas tres dimensiones son recogidas a lo largo de los dos capítulos descriptivos que forman parte del inicio de esta tesis doctoral y que buscan retrotraerse a los orígenes del conflicto, en 1946 e incluso con anterioridad.

Poniendo su énfasis desde 1998, la actitud interna de FARC y de ELN pasa por considerar que la transformación del Estado colombiano, y la superación de las necesidades y fracturas

⁴⁶ La Geopolítica Crítica, como sugieren Cairo y Pastor (2006), entiende que los discursos geopolíticos están constituidos por las representaciones geopolíticas, toda vez que son parte consustancial de las mismas y su poder o inteligibilidad deriva directamente de ellas. Buena prueba de ello dan, por ejemplo, las aportaciones de O'Tuathail (1996), Agnew (2005) o Dalby (1990).

económicas, políticas y sociales, son perfectamente asumibles desde un estadio de lucha revolucionaria. Así, su comportamiento externo estriba en lógicas de violencia directa, especialmente, en forma de contactos y combates contra la Fuerza Pública, el ataque a oleoductos, redes de energía y otras infraestructuras del Estado y el secuestro y la extorsión que sirven de base para la “impuestación” de guerra. No obstante, la contradicción se encuentra, sobre todo, en la proyección que parte de esa violencia orienta sobre la población civil colombiana, y la obtención de recursos que desnaturalizan la esencia guerrillera, muy especialmente por el narcotráfico (Pécaut 2008b). Sea como fuere, es importante señalar cómo es concebida tal “impuestación”, a lo cual, se recoge en el siguiente testimonio de “Felipe Torres”:

“Como en el ELN no teníamos el flujo de caja que podía proveernos el narcotráfico nos fue imposible construir el ejército que nos hubiera gustado. Para la guerra utilizábamos recursos propios. Lo más importante para nosotros fue la “impuestación de guerra”, sobre todo, a extranjeros y empresarios, los cuales debían tributar al Estado, pero también al nuevo Estado en gestación que les debía liberar. Era un tributo de guerra” (EP 9, mayo de 2015).

Este factor se busca demostrar en los dos capítulos que analizan la correspondencia de violencia directa de estos grupos y su representación, creciente y significativa, en los últimos años, respecto de enclaves con presencia de cultivos ilícitos.

Del lado del Estado, la lógica pudiera resultar similar. Ante un aparente comportamiento de lucha anti-subversiva, lo cierto es que desde 1965 y hasta bien entrada la década de los ochenta, el problema de la violencia guerrilla era insustancial para quienes dirigían las riendas del Estado colombiano. Riendas, que cambian su orientación desde las presidencias de Pastrana y Uribe, y una vez que la tendencia de violencia cambia por un mayor protagonismo de FARC y AUC.

Hasta que Colombia no queda casi al borde del colapso, y gracias a la intervención de Estados Unidos, no es que la correlación de fuerzas comienza a cambiar pero, paralelamente, se puede encontrar un comportamiento contradictorio. Contradictorio porque, toda vez que se traduce en ingentes inversiones en seguridad y defensa, de otro lado, se desatienden sobremanera la dimensión de las necesidades económicas y sociales del país. Ello, por entender, erróneamente, como también da cuenta esta tesis, que la superación del conflicto armado en Colombia debe entenderse como una mera ausencia de activismo guerrillero. Una lógica que, incluso, va a llegar hasta la actual presidencia de Juan Manuel Santos.

El conflicto armado colombiano debe entenderse como una intrincada suma de estas tres dimensiones que destaca Galtung, en las que concurren motivaciones construidas con base en percepciones, los imaginarios y las metas definidas como plausibles que, a su vez, determinan conductas y evocan marcadas contradicciones.

Al respecto, y como se señalaba, los actores involucrados en la dimensión subjetiva del conflicto armado colombiano más destacables son las FARC, el ELN, las AUC y el Estado, a través de su Fuerza Pública, pero también desde su estructura socio-económica.

Partiendo del enfoque de los trabajos sobre investigaciones para la paz, este trabajo permite entender las dinámicas, objetivas y subjetivas, en este caso, con énfasis en FARC y ELN que acompañan a la violencia directa, entre 1998 y 2012, sin perder de vista la violencia estructural, a la cual se le dedica uno de los capítulos más importantes de la tesis doctoral y la interacción, en inicio con dos de las variables que más agresivas pueden resultar frente a la violencia guerrillera: el paramilitarismo y las operaciones militares de la Fuerza Pública.

Así, permite hacer valer el escepticismo de los enfoques más pacifistas que estudian la resolución de conflictos y respecto de los cuales, cabe cuestionar las respuestas reactivas que, tradicionalmente, han predominado en Colombia. Un predominio cuya forma de entender el conflicto armado debe desmitificarse a tenor de sus propios resultados.

Todo lo contrario, la PSD, como se verá, agotada e ineficaz en sus últimos años, no ha servido para desmontar las lógicas de un conflicto armado mucho más complejo y multidimensional, en el que las estructuras particulares regionales han terminado por servir de escenarios de necesaria lectura e interpretación si de conseguir dinámicas de paz en Colombia se trata. Fundamentalmente, la violencia directa, atendiendo a las acciones directas como indicador tangible y la violencia estructural, como trasfondo explicativo de las dinámicas espaciales, coinciden en un escenario de violencia deliberada, en un caso más visible, en otro más latente. Sin embargo, junto con una variable adicional que es el cultivo ilícito, ambas dimensiones de la violencia terminan por converger como constantes donde las respuestas con base en la violencia, no han terminado, ni mucho menos, por arrojar resultados positivos en cuanto a su reducción o, mucho menos, superación.

Según Galtung (1998) la violencia llevada a cabo en Colombia sería la máxima expresión del fracaso de poder transformar el conflicto armado por medios pacíficos. Una violencia que en el caso de Colombia, en Galtung (2003b), concurre sobre la base de las tres tipologías planteadas por Galtung (2003b: 7): violencia directa, violencia estructural y violencia cultural.

La violencia directa sería como la violencia manifiesta, en términos físicos, verbales o psicológicos pero que en el caso colombiano, a efectos de esta tesis doctoral, son concebidos como actos violentos de las guerrillas, actos violentos y combates unilaterales por iniciativa de la Fuerza Pública, secuestros, extorsiones, ataques terroristas, desplazamiento forzado, muertes violentas, masacres, entre muchas otras.

La violencia directa en Colombia, ha tenido casi siempre una representación importante en cuanto a violencia política, y se ha desarrollado en torno a tres grandes momentos. En primer lugar, entre 1946 y 1953, cuando tiene lugar la primera etapa de la Violencia, acontecida tras

la llegada del Partido Conservador en 1946, la muerte de Gaitán y la guerra civil que tras todo se desencadena y que deja cerca de 200.000 muertos.

Una segunda etapa, entre la llegada de la dictadura de Rojas Pinilla, esto es, 1953 y 1964, cuando la Violencia entra en su segunda etapa y la inicial capacidad de gestión de la Violencia por parte de la dictadura, da lugar a un sistema de integración política, entre Partido Liberal y Partido Conservador que se conoce como el Frente Nacional. En este segundo momento emergen las “Repúblicas Independientes”⁴⁷ que articulan su respuesta frente a la presión del Estado, bien en forma de autodefensa, bien en forma de guerrilla. En todo caso, se consolida un espíritu rebelde contra los excesos del Estado. Por primera vez en Colombia acontecen napalm, bombardeos, intervención militar estadounidense, y grandes operativos de la Fuerza Pública colombiana.

El tercer gran período de la violencia directa en Colombia transcurriría desde 1964 y con base en la confrontación armada que el Estado va a mantener con diferentes grupos guerrilleros, en los que destacan las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y QL. Tras situaciones cambiantes de confrontación, negociación, desmovilización y continuidad, se adicionan otros actores como el paramilitarismo y el pos-paramilitarismo o los cárteles narcotraficantes como los de Medellín, Cali o el Norte del Valle.

Estos actores junto con la Fuerza Pública concurren dentro de una lógica compleja de alianzas y rivalidades que se traducen en la disputa sobre recursos, áreas de influencia y control de finanzas, que han afectado la forma en la que se representa espacialmente la violencia directa derivada del conflicto armado. Asimismo, en lo que afecta a la Fuerza Pública y la población civil, se ha traducido en términos de toma de municipios, aniquilamiento de pequeñas unidades de Policía y Ejército, toma de carreteras, paros militares o control de impuestos. Igualmente, en formas de secuestro, extorsión, violaciones, minado de tierras, amenazas, asesinatos selectivos, despojo de propiedades, desplazamiento forzado, atentados contra la infraestructura, cooptación del poder local o confrontación por controlar los escenarios de cultivo, procesamiento y las rutas de distribución que, paulatinamente, se ha consolidado, en enclaves de manifiesta impronta rural, de presencia indígena y, sobre todo afrocolombiana – en la vertiente del Pacífico.

Todos, actores legales e ilegales, han transgredido los límites que marca el DIH y los DD.HH, siendo recurrentes las masacres, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales lo cual hace del conflicto armado colombiano, en lo que afecta a su violencia directa, uno de los escenarios de confrontación armada más sanguinolentos de segunda mitad del siglo XX. Dicho de otro modo, la violencia directa sería la dimensión más perceptible de la misma.

⁴⁷ El término “repúblicas independientes” se refiere a los escenarios que, en los años cincuenta, buscan disputar al Estado el monopolio legítimo de la violencia al entender que éste incumple con las responsabilidades de protección, inclusión y oportunidad para con la población civil.

La violencia estructural, trabajada en el capítulo VIII sería entendida como la violencia que hace parte en sí de los sistemas sociales, políticos, y económicos dentro de Colombia y que permite pensar en su concurrencia como caldo de cultivo explicativo de las dinámicas de la violencia directa. Es decir, la violencia estructural sería una violencia indirecta, sustentada por injusticia y desigualdad.

A tal efecto, Colombia plantea un marco paradigmático, en la medida en que, si se revisa el informe anual del PNUD sobre el IDH, que en el año 2013 respondía al título *El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso*, Colombia presentaba el puesto 91 sobre un total de 186. Si bien lo hacía con base a niveles medio-altos de desarrollo, sin embargo, quedaba lastrada por una profunda desigualdad, de acuerdo a uno de los coeficientes de Gini más elevados del mundo (0.54), y unos niveles de polaridad social, en educación y en salud que debilita sobremanera la gobernabilidad. Todo, en la medida en que casi la mitad del país vive en niveles de pobreza relativa o extrema y otro 20% se encuentra en condición de vulnerabilidad extrema.

Dos años antes, en el *Informe de Desarrollo Humano* de 2011, ya se señalaba que a pesar de los niveles notables de desarrollo humano, ello no se ha traducido ni en desarrollo rural, ni mucho menos en un óptimo sistema de distribución de la riqueza. La concentración de tierras en Colombia plantea unos niveles en los que el 1% de la población concentra casi el 50% de la tierra. Si a esto se une la falta de sostenibilidad ambiental, el impacto del *extractivismo*, el arraigo local de mafias y grupos armados, la falta de presencia de la institucionalidad - especialmente, en esta dimensión rural que afecta al 75% del territorio nacional- o las fuertes brechas campo-ciudad, se entiende cómo la violencia estructural puede ser concebida como un escenario, caldo de cultivo idóneo para entender las representaciones espaciales que presenta el conflicto armado colombiano.

Téngase en cuenta que, como señalaba el mismo informe del PNUD (2011b: 51) la propiedad de la tierra en terratenientes, empresarios, capitales transnacionales y grupos armados ilegales, imposibilitan que los pobladores de los escenarios rurales, esto es, campesinos, en su mayor parte indígenas y afrocolombianos, puedan obtener de la tierra una posibilidad para prosperar. Es así, que el mismo PNUD concluye señalando que en Colombia “hay una relación inversa entre concentración de la tierra y desarrollo humano”.

Es decir, cabría entender la violencia estructural como una violencia institucionalizada e interiorizada que, como recoge la Comisión Sudamericana de Paz (1994), a través de la pobreza y la exclusión, termina por desarrollar un escenario de inestabilidad económica, política y social que pone en peligro la seguridad de las personas, además de acoger dinámicas reiteradas de violencia. Dinámicas que, por ejemplo, afecta a quienes se ven privados de seguridad o anulados en cuanto a disponer oportunidades de desarrollo personal (Rifkin, 1996: 249).

En estos términos la violencia estructural se entiende en íntima relación con la seguridad humana. Es decir, como señalaba el PNUD (1995: 26), “sin paz no puede haber desarrollo pero sin desarrollo la paz puede estar amenazada”. Es así como se entiende la noción, a partir de entonces emergente, de seguridad humana, desde un enfoque integral, y por la que deben atenderse las necesidades diarias de la población civil para sobrevivir. Dicho de otro modo, la seguridad es interpretada desde mediados de los noventa como la protección frente a las amenazas que la pongan en peligro, tales como enfermedades, hambre, desempleo, analfabetismo o insalubridad. En ese mismo orden de ideas, como señala Martínez Román (1997:21) “la seguridad es un concepto integrador y globalizador en el que se pueden distinguir siete categorías: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política”.

Tras todo lo anterior, cabe apreciar una importante informalidad y explotación de la fuerza de trabajo, a lo que se adicionan inconmensurables dosis de marginalidad económica, social y política, en la que la cobertura de servicios como salud, empleo o educación queda desdibujada en buena parte del país y conviven con corrupción e impunidad. Elementos óptimos para la retroalimentación de escenarios de pobreza. Pobreza que junto con inequidad sostienen un sistema tan excluyente como violento en su estructura y en el que, por su alcance y sentido, se termina por integrar junto a la violencia directa y la violencia cultural.

La violencia estructural, por ende, camina circunscrita a la exclusión social, definida por Rodgers (1995: 43) entendida como la situación a partir de la cual la sociedad acepta diferentes formas discriminatorias, especialmente, por el acceso a los bienes, servicios, mercados y recursos que se asocian a la familia de manera que la exclusión puede aceptarse como un enfoque multidimensional de la pobreza. A su vez, la pobreza, como señalaba la Unión Europea en 1993, supone una amenaza para el progreso de una sociedad y guarda una relación directa con la estructura de trabajo (Castel, 1995).

De este modo, el desempleo y la informalidad terminan por afectar a la desestructuración social y familiar, hundiendo la cohesión y las formas tradicionales de organización social, acabando con el capital social y favoreciendo dinámicas migratorias que, por el caso de Colombia, mayormente terminan consolidándose como formas de desplazamiento forzado a la vez que potencialmente afecta al desarrollo de dinámicas de violencia directa en la sociedad⁴⁸.

Ya como tercera dimensión, estaría la violencia cultural, y que afecta a aquellos aspectos de la cultura dentro del ámbito simbólico de nuestra experiencia, es decir, la suma de mitos y

⁴⁸ A tal efecto, en el trabajo de Merva y Fowles (1992: 11) se pone de manifiesto la relación entre desempleo y violencia. En su estudio sobre Estados Unidos concluyeron que por cada 1% de desempleo se encontraba un incremento del 6.7% de homicidios, del 3.4% de muertes violentas y del 2,4% de crímenes contra la propiedad.

traumas que justifican un marco de violencia directa. Es decir, las dos dimensiones descritas, violencia directa y violencia estructural, se acompañan de un tercer nivel que sería el de la violencia cultural, esto es, entendiendo que la violencia se termina por consolidar como una forma de vida, de acuerdo a manifestaciones explícitas e implícitas de poder.

La violencia termina por integrarse en el sistema cultural en términos de intolerancia política, de género o étnica, en la que el no reconocimiento y la dominación por medios coactivos terminan por normalizarse por medio del lenguaje, las imágenes o elementos más tangibles dentro de las relaciones sociales. Esta violencia cultural estaría, en el caso de Colombia, fuertemente afectada por un componente ideológico, que hunde sus raíces en las identidades partidistas, irreconciliables, de mediados del siglo XX y que entiende y justifica los dos tipos de representación de la violencia anteriores.

La violencia cultural puede entenderse, por ejemplo, de la mano de la *invisibilización* (Wade, 1997) de los afrodescendientes en Colombia o de las grandes masas campesinas que, por otro lado, son los más afectados por los despojos de tierras – hasta 4 millones de hectáreas en la última década- y actualmente, tanto por la violencia directa de los grupos implicados en el conflicto como por la violencia estructural que les sirve de soporte.

También puede hacerse extensible a las importantes cargas de dogmatismo que, además de los grupos, han llevado a cabo las políticas de seguridad. Basta recordar cómo sindicalistas, periodistas o activistas sociales, críticos con la PSD eran criminalizados por el mero hecho de cuestionar el modo en que la seguridad y la paz fueron concebidas durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe. De igual forma, para las minorías étnicas, se puede recoger la aportación de Sandoval (2008: 32) cuando reconoce que:

“En lo particular, las acciones de los violentos y la aplicación del Plan Colombia en sus territorios no les permite a los indígenas ejercer la autonomía territorial y regional, nombrar a sus autoridades, disentir de todos los violentos del Estado y de los que se oponen a éste, y tener el más elemental de los derechos: la vida”

Es decir, la violencia cultural, sobre indígenas o afrocolombianos, se pone de manifiesto cuando Fuerza Pública y los grupos armados intervienen sobre territorios indígenas o afrocolombianos, a través de la violencia directa, y cuya correspondencia termina desembocando en lo que Jaulin (1973) denomina como *etnicidio*. Es decir, la paulatina destrucción, por medio de la *desterritorialización* y su correspondiente desplazamiento forzado, y que conduce a la destrucción de las comunidades étnicas, sus costumbres y organizaciones, su estructura social, política y económica, además de la desaparición de sus líderes, activistas y dirigentes.

Asimismo, el estado de sitio en el que queda inmersa parte del país, a costa de las amenazas, homicidios selectivos, allanamientos o seguimientos, no solo de grupos involucrados, especialmente paramilitares, sino del propio Estado, serían una perfecta representación de

qué supone esta violencia cultural en Colombia. Tesitura ésta que se remonta, perfectamente, a la década de los ochenta, a lo cual, conviene recordar, de qué manera resultaba concluyente Amnistía Internacional de 1984: al reconocer que existían:

“pruebas convincentes de que las fuerzas armadas han adoptado una política de terror para intimidar y eliminar a la oposición, de modo que sectores enteros de la sociedad corren el riesgo de ser considerados subversivos, lo que en Colombia equivale a una sentencia de muerte” (Ramírez, 1998: 84).

Violencia cultural, igualmente, presente dos décadas después cuando Brett y Specht (2005: 18) en un informe para la Organización Internacional del Trabajo – OIT- aseveraban que:

“La adolescencia es una época de vulnerabilidad, con las incertidumbres y las turbulencias del desarrollo físico, mental y emocional. Es también el tiempo de las oportunidades de una libertad mayor, del desarrollo de la comprensión de la propia identidad y del lugar en la comunidad y en la sociedad, y de una nueva capacidad para hacer escogencias y asumir responsabilidades. La etapa de la pubertad, durante la cual muchos de estos jóvenes se enrolaron, se caracteriza por sentimientos de oposición y resistencia a la autoridad y a las estructuras de poder en las familias, la escuela y el Estado. Además, es un tiempo en el que la injusticia y su inaceptabilidad se sienten fuertemente. Las razones por las que los jóvenes se enrolan en las fuerzas armadas y los grupos armados reflejan todos estos aspectos de esta etapa específica de la vida”.

En todo caso, la violencia para Galtung (1990: 291), y en extensión, para cómo entiende esta tesis doctoral, termina resultando la suma de las tres dimensiones, tal y como reconoce el autor noruego cuando señala que:

“la violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructural un proceso con altos y bajos; la violencia cultural es invariable, permaneciendo esencialmente la misma durante largos períodos, dada la lenta transformación de la cultura básica”.

Lo anterior, por ende, se correspondería con la idea de que estructuras y culturas violentas no se resuelven con medios violentos del agente transformador – el Estado-, pues finalmente lo que se hace es reforzar la cultura bélica. Solo, anteponiendo estructuras y culturas de paz es posible superar conflictos armados como el colombiano.

Es decir, la paz se entiende como un escenario ideal de ausencia de violencia directa, estructural y cultural si bien, el propio Galtung no rehúsa a aceptar que bajo estos términos, la paz es la dimensión antónima a la violencia.

Esta cuestión permitiría entender por qué la PSD del presidente Álvaro Uribe, y las políticas beligerantes que, tradicionalmente, han tenido lugar en Colombia para desactivar el conflicto armado no han servido más que para afectar a cambios espaciales, de dinámicas, pero que ni mucho menos permiten aceptar la hipótesis de su desactivación a través de una respuesta armada por parte del Estado.

De acuerdo a esta consideración, la paz termina siendo el resultado de transformación de la violencia dentro de un contexto de violencia en el que resulta imprescindible identificar un buen diagnóstico. Es decir, entender las raíces del conflicto violento, los actores involucrados y su evolución dentro de ese contexto, cambiante, pero constante en el recurso de la violencia.

Para Galtung, el punto de partida es que la violencia cultural y la violencia estructural determinan los niveles de violencia directa. No obstante, la violencia cultural se puede intuir a partir de las identidades políticas tradicionalmente enfrentadas en Colombia, del mismo modo que se pueden presentar las dinámicas sociales y económicas como factor causal del conflicto colombiano. Empero, a efectos de esta tesis, el énfasis está en el factor modulador de los condicionantes socioeconómicos, los cuales parecen haber ganado enteros, en los últimos años, como factor explicativo en cuanto a las dinámicas espaciales del conflicto.

Conviene precisar que, por lo anterior, no se trata de rehusar de la dimensión de seguridad y de monopolio legítimo de la violencia que deviene imprescindible para caracterizar al Estado moderno. Ello, es imposible. Más bien, se trata de significar la dimensión militar en términos de paz, que Hueso (2000: 137), en su análisis sobre Galtung define como “defensa defensiva”, esto es:

“autodefensa del propio Estado con medios convencionales de corto alcance y en colaboración con fuerzas paramilitares y no militares. Este tipo de defensa tiene la ventaja que no provoca a nadie ni tampoco causa miedo y al mismo tiempo permite al Estado el derecho natural a defenderse”.

Lo anterior iría en relación con el pronóstico que debe, necesariamente, hacerse respecto del caso colombiano. Un pronóstico que, con el propósito de teorizar sobre el conflicto violento, en el caso de esta investigación, reducido al período 1998-2012, invita a pensar en todo lo contrario a su desactivación y superación. Ello, a tenor de los ingentes niveles de violencia directa, cultural, y muy especialmente en los últimos años, estructural, de modo que si bien no se termina por incidir en la tercera fase que señala Galtung, de terapia (tras identificar el conflicto y sus niveles de beligerancia), se apunta a la necesidad de construir escenarios de cultura de paz, de una estructura social y económica más equitativa y justa y, por extensión, con base en un proceso de negociación que, muy necesariamente, debe ser el que resuelva el punto de partida para empezar a pensar en un escenario de posconflicto en Colombia.

A tal efecto, y como se señalaba con anterioridad, Galtung (1998) reconoce que para superar un conflicto violento y construir un escenario de paz es imprescindible curar las heridas del enfrentamiento armado (reconstrucción), deshacer el meta-conflicto (resolución) y crear condiciones necesarias que superen el conflicto original (resolución) y que, incluso, deben activarse en las fases anteriores previas y consolidarse pues, de no suceder, la violencia puede volver a aflorar en cualquier otro momento.

En lo que tiene que ver con la reconstrucción, ésta ha de ser material pero muy especialmente simbólica. La reconstrucción material interviene sobre los resultados de la violencia estructural, pero la simbólica es la que afecta a la violencia cultural que, por otro lado, es la más imperceptible de todas. Al respecto, ayuda la posibilidad de convocar comicios electorales que ayuden a la normalización de la vida política. De igual manera, modificaciones en la estructura tributaria, en la orientación de políticas públicas además de cambios normativos en pro de generar dinámicas de mayor injusticia y equidad son claves. También, en paralelo, debe construirse todo un andamiaje cultural sensible y respetuoso con la democracia, los DD.HH, el medio ambiente o la paz. Todas, cuestiones por desarrollar aún en Colombia.

En lo que afecta a la reconciliación, lo cierto es que su mayor complejidad transitaría en la confluencia de factores psicológicos, filosóficos y sociológicos, que dificultan la posibilidad de predeterminedar una hoja de ruta. Reconciliar en Galtung es cerrar heridas, es debatir y discutir sobre cómo recomponer el tejido social, mientras que resolver el conflicto es afectar a los factores causales que construyeron al mismo. De esta manera, valores como trascendencia, empatía y creatividad son factores clave a fin de cumplir con tan intrincado cometido.

En todo caso, estas 3R's deben ser desarrolladas a la vez. Esto es, no se puede anteponer una u otra como consecuencia de la integralidad cruzada de las tres, tanto en el desarrollo de un conflicto como en su superación.

Solo con base en lo anterior es que se puede transformar un conflicto violento y aspirar a desarrollar un escenario de paz. La paz, por tanto, como resultado último, requerirá de un escenario despolarizado, que garantice la seguridad – en este caso, de quien se desmoviliza, con compromisos mutuos y equilibrados, y con una presencia interna del Estado, con base en un enfoque de seguridad alternativo, de seguridad humana.

Así es que, en última instancia se puede conceptualizar la paz, que para Galtung (1985:107) es la ausencia de violencia directa, cultural y estructural, orientada a la satisfacción de necesidades básicas, esto es, calidad de vida, bienestar, identidad y libertad para todos. Dicho de otro modo, la paz es el resultado de superar su ausencia, entendida como violencia presente en el momento en el que “los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales”, o dicho de otro modo, “cuando lo potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia (Galtung, 2003c: 314).

Es así que en cuanto a la paz, Galtung señala que existen dos niveles. La paz negativa, entendida como la ausencia de violencia directa, que en el marco del conflicto armado supondría aceptar la superación militar de la Fuerza Pública sobre los grupos armados; y la

paz positiva, que supondría las causas que dieron lugar a la violencia, tanto en términos estructurales como en términos culturales, y que dista mucho de acontecer en Colombia.

Con base en la noción de paz positiva deseado para Galtung, son imprescindibles seis etapas. En las tres primeras se desactiva la violencia directa, estructural y cultural para, tras ello, buscar superar las condiciones que facultaron estas tres dimensiones de violencia. A tal efecto, desmovilizar, desarmar y activar políticas de reciprocidad, equidad, justicia y bienestar en aras de buscar equilibrios mutua e integralmente favorables para el conjunto de actores involucrados es imprescindible. Además, éstas, deben distribuir de manera integral los esfuerzos dentro de todo el conjunto de la sociedad mediante medios tan multilaterales como multidimensionales, en atención a las particularidades más importantes que en la sociedad confluyen y respecto de las que educación y familia así como la estructura de trabajo representan instituciones nucleares (Galtung, 2013).

Como consecuencia, y de acuerdo con Galtung (2003c: 86), en Colombia hay que construir una sociedad antes que erigir institucionalmente el Estado. A pesar del conflicto armado, los males del país pasan por la marginalidad, la exclusión, la informalidad y el crimen organizado. Al caso colombiano, Galtung le confiere una especial importancia al narcotráfico, tal y como plantea esta tesis doctoral, en la medida en que éste factor irradia y desvirtúa el Estado de Derecho por medio de ilegalidad, corrupción e impunidad.

Es así que para entender un eventual escenario de paz, Galtung (2003c: 89), reivindica las siguientes necesidades, que no debieran estar desatendidas al caso colombiano: (1), fortalecer el papel de la escuela y la Iglesia en la estructura social; (2) empoderar a mujeres y jóvenes como mediadores de paz; (3) desarrollar toda una política de pedagogía en las escuelas sobre conflicto y paz; (4) introducir un periodismo de paz más próximo a la ciudadanía y más alejado del sensacionalismo elitista; (5) construir espacios municipales de paz en los que la comunidad internacional funja de garante y acompañante e (6), integrar más dinámicas *bottom-up* en cuanto a construcción de paz, con mayor atención en los socios regionales y menor presencia de Estados Unidos.

Asimismo, (7) elaborar una Comisión de la Verdad; (8) fortalecer sectores productivos como el café, con especial énfasis a los pequeños productores y regulando un mercado en pos de desplazar a los intermediarios; (9) favorecer economías de subsistencia competitivas por medio de microcréditos, cooperativas; (10) *deconstruir* las culturas violentas de tipo machista, clasista o racista; (11) transformar el Ejército y la Policía de acuerdo a mayor aptitud y cercanía en los contextos que requieran más seguridad interna y, por último (12) promover una democracia con base en los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Es por todo, en suma, que las necesidades irresolutas, en la dimensión económica y social del Estado colombiano, unido a una falta de acciones preventivas y alternativas en el manejo

de la superación del problema del cultivo ilícito de coca, y la redundancia en el empleo de métodos violentos para superar el conflicto con FARC y ELN, resultan una constante por redefinir en Colombia. Una constante que, de manera integral, busca ser abordada por esta tesis doctoral y que, por su resultado, infiere la posibilidad de reflexionar sobre las necesidades del país a efectos de construir eventuales escenarios de posconflicto, y por ende, de resolución, reconstrucción y reparación integrales.

CAPÍTULO II. GÉNESIS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, 1946-1998

1. Introducción

El propósito de este segundo capítulo, y al igual que el capítulo III, tiene como finalidad, describir los orígenes del conflicto en Colombia. Particularmente, en este capítulo se parte de la contextualización de Colombia durante los años treinta, pero con la intención de encontrar las primeras y directas raíces del conflicto armado actual de acuerdo a la situación de violencia que experimenta el país, a mediados de la década de los cuarenta.

Es así, que se presta especial atención a la Violencia, entendida como la guerra civil que acontece, con mayor severidad, entre 1946 y 1953, y que se extiende, más allá de los años de dictadura del General Rojas Pinilla, hasta 1964. Es en ese momento, que la violencia en Colombia, tras una sucesión de eventos violentos contra estructuras guerrilleras y de autodefensa campesina, continuamente cambiantes, se transforma a tenor de la aparición de los primeros movimientos insurgentes. En primer lugar, las FARC y el ELN, y después el EPL.

Se dedica especial atención al origen, evolución e interacción, como actor involucrado en el conflicto armado, tanto de las FARC como del ELN, lo cual se realiza en atención a tres décadas de historia, desde 1964-1965 y hasta 1998. Ello, integrando, en paralelo, la aparición de otras guerrillas como el EPL, y las conocidas como “guerrillas de segunda generación”, que son el M-19 y la QL, principalmente.

Asimismo, se atiende a los diferentes procesos de divergencia y convergencia, sin desatender la situación estructural e institucional del Estado colombiano, y la concurrencia de otros actores y factores multiplicadores de la violencia, como es el caso del paramilitarismo, - primero, a modo de autodefensa frente a la guerrilla y después, con base en complejas estructuras como las ya citadas ACCU, reconvertidas en AUC-, y los cárteles de la droga y el factor narcotraficante.

Finalmente, el capítulo concluye presentando la interacción de los gobiernos más afectados por el auge de la violencia del conflicto armado iniciando, a tal efecto, con la presidencia de Turbay Ayala (1978-1982), y finalizando con la presidencia previa al lapso histórico objeto de estudio, y que se correspondería con el gobierno de Samper Pizano (1994-1998). Es decir, igualmente, se integran valoraciones sobre los mandatos presidenciales de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994).

2. Los antecedentes de la Violencia en Colombia

El fenómeno de la guerra o de la violencia en Colombia no es patrimonio, ni mucho menos, de las últimas décadas. Como señala Pécaut (2008), a lo largo del siglo XIX se pueden registrar en torno a una veintena de guerras regionales o nacionales entre los dos partidos hegemónicos del sistema político colombiano: el Partido Liberal y el Partido Conservador. La última de esas guerras, conocida como la Guerra de los Mil Días, transcurrió entre 1899 y 1902 causando la nada desdeñable cifra de 100.000 muertes – sobre una población de menos de tres millones-, y suponiendo, además, la pérdida de Panamá (Martínez, 1999: 11).

Hay quienes, como Guedán (2005), tomando como base lo anterior, entienden que Colombia ha sido y es un país abocado a la violencia endémica. Sin embargo, en perspectiva comparada con el resto de países de su entorno, hasta 1930 pudiera afirmarse que Colombia no presenta niveles de violencia exacerbados o fuera de los niveles propios de la región. Más bien, lo que acontece es un paulatino derrumbe del Estado (Oquist, 1978), que empieza a degradarse a partir de las confrontaciones que tienen lugar entre 1930 y 1946. Confrontaciones, entre las que se agravan varias cuestiones como los antagonismos partidistas, los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra o las disputas derivadas del avance de la colonización. No obstante, el trasfondo de todo pasa por una la debilidad de un Estado que no es capaz de dotarse de los medios suficientes para ejercer su autoridad en buena parte de su territorio (Pécaut, 2011).

Con la llegada a la presidencia del gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera se rompe el predominio conservador y se instauran dieciséis años de presencia liberal. Dieciséis años de dificultades en cuanto a gobernabilidad caracterizados por fracturas internas del partido de gobierno⁴⁹ y por una agitación social, fruto de un descontento que alimenta tanto la aparición de importantes conflictos agrarios⁵⁰, como una frustración obrera que sirve de acicate para la aparición de los primeros movimientos obreros⁵¹.

De este modo, se va gestando la semilla embrionaria de una época convulsa para la historia política colombiana, en tanto y en cuanto empieza a albergar los primeros escenarios de violencia desmedida; primero en departamentos como Boyacá, Santander y Norte de

⁴⁹ Durante este período, con alguna excepción durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el liberalismo va a estar fragmentado entre quienes se muestran más represivos con el campesinado y próximos a un entendimiento con el conservadurismo, y quienes abogan por la lucha de las masas obreras y campesinas. Bajo esta tesitura, López Pumarejo, a partir de lo que se conoció como la “Revolución en Marcha”, aspiró a una Ley de Tierras que si bien generó las simpatías del Partido Comunista y evocó multitud de expectativas en los sectores populares, ni mucho menos supuso la reforma estructural del Estado que urgía en las masas populares y especialmente en el campesinado. Su modelo transformador rápidamente quedó agotado y López Pumarejo se vio obligado a renunciar antes de que finalizase su segundo mandato (1942-1945).

⁵⁰ Para el estudio de la etapa de conflictos agrarios que tiene lugar en este momento son fundamentales las obras de Gilhodès (1972), Hirschman (2013) o Tovar (1975).

⁵¹ Para el estudio de la emergencia de los primeros movimientos obreros y sindicales en Colombia son fundamentales las obras de Caicedo (1975), Urrutia (1969), Sánchez (1982) o Pécaut (1973).

Santander, en el nororiente del país, y más tarde y en menor medida, en Cundinamarca, Antioquia y el occidente de Caldas.

En paralelo a un proceso de violencia creciente, se va fraguando un escenario, como telón de fondo, que permite entender el viraje que experimenta el país a partir de 1946. Un escenario, en el que se va desarrollando una creciente fractura social, carente de simbolismo de unidad nacional, y alimentada a partir de lealtades políticas con base en unos partidos tradicionales cada vez más distanciados. Así, la ciudadanía política se va a construir en términos casi insustanciales y va a quedar reemplazada por sometimientos colectivos a la vez que irreconciliables, en ocasiones voluntarios, en la mayoría de las ocasiones, impuestos por redes de dominación (González, 1997).

Junto a lo anterior, los problemas desatendidos sobre la tenencia de la tierra, la precaria legitimidad económica del Estado, el alimento confrontado de subculturas políticas enfrentadas y la subordinación de los intelectuales y militares a un poder establecido (Pécaut, 2000), van a converger en un escenario de colapso generalizado en el país, que iniciará en 1946, a partir de la victoria presidencial del conservador Luis Mariano Ospina Pérez, y que quedará definitivamente desbordado, como se verá a continuación, tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948.

3. La primera etapa de la Violencia, 1946-1953

Una vez que llega a presidencia Luis Mariano Ospina Pérez, en agosto de 1946, se pone fin a cuatro gobiernos consecutivos del Partido Liberal, y se inicia en Colombia una etapa política convulsa. Una etapa espoleada por una oleada de violencia y agitación social, que va a conferir continuidad a la acontecida una década atrás y que, más allá de Santander y Norte de Santander, se va a desarrollar con especial virulencia en Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

La segunda mitad del año 1946, así como todo el año 1947, van a caracterizarse por acumular un fuerte descontento social que, paulatinamente, va a ir fraguando en una confrontación en las lealtades político-partidistas liberales y conservadoras que va a terminar por descontrolarse en 1948. Entre enero y marzo de 1948, en continuidad con lo anterior, y en todas las grandes ciudades del país, se van a producir innumerables huelgas, manifestaciones y confrontaciones de la sociedad civil con la Policía que se van a acompañar de violentos ataques contra infraestructura pública además de la toma de edificios oficiales y asaltos a personalidades políticas.

El detonante va a ser, sin embargo, el asesinato de la que entonces era la figura clave del Partido Liberal: Jorge Eliécer Gaitán⁵². Éste, había emergido como la figura política que aunaba las expectativas liberales en Colombia, de acuerdo a una responsabilidad por hacer

⁵² Algunas autores clave para entender la figura política de Jorge Eliécer Gaitán y su relevancia en Colombia son Alape (1983), Córdoba (1952), Miranda (2008), Sharpless (1978) o Sierra (1997).

converger las fuerzas políticas del partido, y generar grandes expectativas en buena parte de la población civil, especialmente en las capas menos favorecidas. Ello, gracias a un discurso que, como reconoce Pécaut (2000: 53), resulta muy similar al del peronismo:

“(…) El mismo cuestionamiento a la oligarquía, a los partidos políticos y a la democracia liberal; la misma oposición entre el pueblo y la oligarquía, entre el país real y el país político, entre el individualismo y la unidad orgánica de la sociedad; la misma aspiración a superar las oposiciones entre el capital y el trabajo en nombre de una reconstrucción orgánica de la sociedad”.

Mapa 1: Primera representación cartográfica de la Violencia



Fuente: Borda, Guzmán y Umaña (2010: 114)

El asesinato de Gaitán que tiene lugar el 9 de abril de 1948 en Bogotá, coincidiendo con la preparación de la Conferencia Panamericana que posteriormente daría lugar a la Organización de Estados Americanos, va a marcar un detonante sin precedentes en el devenir de la Violencia, no solo en Bogotá sino en todo el país⁵³.

Para el propio Hobsbawm (1974: 264), con la muerte del caudillo liberal se produce “la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia contemporánea del hemisferio occidental, probablemente con la sola excepción de algunos momentos álgidos de la Revolución Mexicana”.

A pesar de que el Ejército se mantuvo, desde el inicio de los acontecimientos, leal al presidente Ospina Pérez, Colombia va a encontrarse inmersa en una vorágine de violencia incontrolable y generalizada que incluso se va a radicalizar con motivo de las elecciones legislativas de 1949 y, sobre todo, por los comicios presidenciales de 1950, en los cuales se va a imponer la figura ultraconservadora de Laureano Gómez Castro⁵⁴. En otras palabras, se termina por fraguar un marco de confrontación conocida generalmente como la Violencia, en mayúscula, el cual se va a extender hasta 1964 y se va a cobrar en torno a 200.000 vidas (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010: 317).

Este período de la Violencia ha tratado de ser explicado desde diferentes aristas y perspectivas. La más común, como señala Henderson (1984), partiría de la doble acusación que se van a hacer conservadores y liberales. Los primeros, culpados de instrumentalizar de manera sectaria a las fuerzas policiales, y los segundos, señalados como insurrectos subversivos bajo la intención de derrocar el gobierno constitucional.

Sobre la base de estos argumentos, Gilhodès (1972), Hobsbawm (1967) o Torres (1970) plantean en común que la Violencia no fue sino el resultado esperado de un conjunto de frustraciones y tensiones reprimidas durante un largo período de tiempo, que debe entenderse más como una revolución social que, por la falta de organización y liderazgo efectivo, termina por desarrollarse en forma de una desorientada guerra civil.

Hay interpretaciones que acuden al concepto de modernidad como detonante de la Violencia. Es decir, como consecuencia de un Partido Liberal que se sirve de manipular las fuerzas de

⁵³ En muchas ocasiones la muerte de Gaitán es referida como “El Bogotazo”. Sin embargo, autores como Bushnell (2012), se refieren a la imprecisión de un término cuyas consecuencias fueron a nivel nacional. De ahí que resulte más pertinente denominar la muerte de Gaitán, como lo hace parte de la jerga colombiana, como “el 9 de abril”.

⁵⁴ Laureano Gómez Rodríguez (1889-1965) había sido desde los años veinte la gran figura del conservadurismo colombiano, si bien su tiempo al frente de la presidencia colombiana, desde agosto de 1950 hasta noviembre de 1951 se vio truncada, primero, por un ataque cardíaco que hace que sea suplido por Roberto Urdaneta Arbeláez, y después por el ascenso al poder del dictador Gustavo Rojas Pinilla, desde 1953. Gómez era un ferviente conservador, admirador del franquismo, y crítico tanto con el sindicalismo como con los diferentes movimientos agrarios, que fueron objeto de represión, por ejemplo, en Tolima, Huila o Valle del Cauca. Son obligada referencia para el estudio de Gómez los trabajos de Henderson (1988, 2001).

modernización en beneficio propio, frente a un Partido Conservador, en cierto modo pre-moderno, y que reacciona violentamente frente a cualquier atisbo de cambio (Weinert, 1966).

Finalmente, otros como López de Mesa (1956) u Oquist (1978) enfatizan en el papel desencadenante que tuvieron las profundas lealtades partidistas que se habían venido construido desde hacía un siglo, especialmente desde 1930. Argumentos que contrastarían con otros posicionamientos, como los de Pollock (1975) o Payne (1968), que terminan por responsabilizar de la Violencia, precisamente, a la falta de voluntad política y a la responsabilidad directa de las elites, indistintamente, liberales y conservadoras.

Lo cierto es que, en cierto modo, todas estas explicaciones permiten entender, desde una perspectiva integral, el desencadenamiento de la Violencia. Las fuertes lealtades políticas, el clivaje de la modernidad y el rédito político-electoral de la violencia son elementos que se retroalimentan y terminan por adicionarse al referido escenario de descontento por la pauperización del campesinado, los problemas con los territorios de nueva colonización así como los derechos sobre la titularidad de la tierra y la condición casi analfabeta de la población rural colombiana⁵⁵

Sea como fuere, el gobierno conservador de Laureano Gómez, férreo admirador de Mussolini y de Franco, se fue erigiendo como un sistema político que hacía continuos guiños a la noción de Estado corporativo, a la vez que generaba un profundo recelo tanto en el Partido Liberal como en el Partido Comunista. Recelo que, paulatinamente, iba albergando la necesidad de una reacción armada, especialmente, desde buena parte de los sectores campesinos.

Bajo este contexto de violencia emergente, lo cierto es que las zonas de mayor resistencia frente al Estado conservador de Gómez, especialmente recurrente a la Fuerza Pública para reprimir todo atisbo contestatario, fueron netamente liberales (Sánchez, 1986). Es en este período que transcurre entre 1949 y 1953, cuando comienzan las respuestas violentas de parte de la ciudadanía frente a los excesos del poder público, a modo bien de autodefensa campesina, bien de guerrilla. Sobre estos, cabía añadir las lealtades conservadoras, denominadas como “chulavitas” o “pájaros”⁵⁶, y que empiezan a generar un escenario de

⁵⁵ Esta condición, respondiendo a lo que Almond y Verba (1963) calificarían como “cultura parroquial”, estaría presente en la mayoría de la sociedad rural colombiana. Esto permitiría entender, como se verá con posterioridad, cómo las lealtades políticas rivales seguían haciendo funcionar el mecanismo de la guerra aun cuando los partidos, en lo que se conoce como el Frente Nacional, habían firmado la paz e instaurado un sistema en beneficio de ambos, a partir de la alternancia y el reparto equitativo de los cargos públicos.

⁵⁶ El término “chulavita” hacía a un grupo particular, formado por campesinos boyacenses conservadores que reclutados por la Fuerza Pública estuvo activo durante los primeros años de la Violencia en Colombia, sobre todo, en Bogotá. El grupo de ciudadanos en armas organizados para defender violentamente el conservadurismo, en Cauca, en Tuluá, respondió al nombre de “pájaros” mientras que las facciones liberales eran conocidas como “cachiporros”.

confrontación nacional del que solo escapan parte de la costa Atlántica – con la salvedad de parte de Bolívar y sur de Córdoba, y la región de Nariño⁵⁷.

En todo caso, la dinámica que hizo funcionar la Violencia, especialmente en esta primera etapa, siempre fue la misma. Como acertadamente señala Bushnell (2012: 293):

“casi nunca se escuchó hablar de campesinos liberales en conflicto con terratenientes liberales ni de conservadores contra conservadores de clase social distinta. Generalmente, la Violencia enfrentó a campesinos de un partido contra campesinos del otro, mientras los grandes propietarios, para no mencionar a los profesionales y hombres de negocios de los dos partidos, permanecían en la relativa seguridad de las ciudades”.

A partir de 1950, se hace evidente una sofisticación tanto del lado de los mecanismos represivos del Estado como de la resistencia liberal y comunista, que empieza a experimentar el paso de la mayoritaria respuesta de autodefensa de masas a la reacción a modo guerrilla campesina. Así sucederá, por ejemplo, tanto en el sur de Tolima⁵⁸, como en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander y la región de los Llanos Orientales⁵⁹.

En la mayor parte de estos enclaves va a primar la resistencia de tinte liberal si bien, el comunismo – aún alejado de la toma del poder político y más focalizado en la noción de “guerra popular prolongada”⁶⁰-, se va a afianzar en dos escenarios que, con posterioridad van a resultar claves en la emergencia guerrillera de las FARC a partir de la década de los sesenta: las regiones de Tequendama y Sumapaz en Cundinamarca, y el sur del departamento de Tolima⁶¹.

La posibilidad de una convergencia de las guerrillas liberales y comunistas, inicialmente distante, va a irse desarrollando paulatinamente, a medida que se va engrosando el número de levantados en armas contra la represión conservadora. Así va a ser planteado, por primera vez, en agosto de 1952, con motivo de la I Conferencia Nacional Guerrillera – CNG-

⁵⁷ Las excepciones de buena parte de la costa Atlántica colombiana o de regiones aisladas como el departamento de Nariño se explican como resultado de un profundo y paulatino proceso de desigual integración dentro de la vida política y cultural del país.

⁵⁸ Para conocer la experiencia de la Violencia en el departamento de Tolima son de obligada referencia los trabajos de Bedoya (1950) y sobre todo, la ya referenciada de Henderson (1984).

⁵⁹ Para conocer la experiencia de la Violencia en la región de los Llanos Orientales son relevantes las obras de Franco (1976) y de Sierra (1954).

⁶⁰ El concepto de guerra popular prolongada no es más que la versión maoísta de la guerra de guerrillas en la que sobre la base de un amplio apoyo popular y una perspectiva a largo plazo, y sobre la base de atraer al enemigo a estos emplazamientos, era posible su derrota militar.

⁶¹ En estos primeros escenarios de mayor influjo comunista es posible encontrar, ya a inicios de la década de los años cincuenta, lo que van a ser figuras fundamentales de la guerrilla de las FARC como es el caso de Manuel Marulanda o Ciro Trujillo. Es necesario precisar que el sur de Tolima empezó siendo un enclave netamente *gaitanista* si bien se trunció, por un lado, por la frustración generada por la inoperatividad de la Dirección Nacional Liberal, y por otro, por la disciplina, la organización y el buen funcionamiento de las guerrillas comunistas frente a las liberales. A tal efecto, es interesante el propio testimonio de Manuel Marulanda, Marulanda (1978).

vulgarmente conocida como la “Conferencia de Boyacá”. Sin embargo, su desarrollo va a encontrar importantes dificultades que van a impedir la convergencia guerrillera, especialmente, como consecuencia del escepticismo de la Dirección Nacional Liberal, la creciente autonomía y escisión de las guerrillas liberales en la región de los Llanos Orientales⁶², y la disparidad regional en cuanto a los motivos de una lucha que nada tenía que ver en el Llano, donde la principal preocupación era la propiedad de la tierra, en comparación, por ejemplo, con el sur de Tolima, continuadores de una larga tradición agrarista (Pizarro, 2011: 67).

Empero, ello no será óbice para la consolidación de un marco de violencia y confrontación generalizada. De un lado, con base en la represión conservadora, y de otro, de acuerdo a la respuesta, fracturada, de la resistencia liberal, a la que se añadía la reacción propiamente comunista. Dicho de otro modo, y a pesar de la ausencia de convergencia entre los actores opuestos al gobierno de Laureano Gómez, lo cierto es que Colombia se va a presentar como un escenario cruento, con más de 20.000 hombres levantados en armas, hacia finales de 1952, con especial virulencia en el suroriente antioqueño, la región del Carare y Opón en Santander, el nororiente de Cundinamarca, el sur de Tolima, las regiones de Tequendama y Sumapaz y la vasta extensión de los Llanos Orientales.

Así, dada esta tesitura, y a pesar de la coyuntura económica positiva en cuanto a crecimiento económico, inversión extranjera directa y producción industrial, lo cierto es que la ingobernabilidad derivada de la Violencia, unida a una generalizada situación de pobreza, elevada inflación y profundos desequilibrios interregionales, van a conducir a la irrefrenable convicción sobre la necesidad de abogar por un cambio político drástico (Ocampo *et al.* 1987). Un cambio político que, se entiende, amerita de la necesidad de un golpe militar.

4. La segunda etapa de la Violencia, 1953-1957

Dadas estas circunstancias, el general Gustavo Rojas Pinilla llegará al poder el 13 de junio de 1953 con el primer y firme propósito de reducir los ingentes niveles de violencia acontecidos en Colombia. Ello, a partir de la puesta en marcha de una política de sesgo pacifista que, especialmente en la región de los Llanos Orientales, va a conseguir, por medio de la figura del general Duarte Blum⁶³, con la desmovilización de más de 6.500 levantados en armas (Alape, 1993: 131).

⁶² La guerrilla de los Llanos Orientales, además de ser la más grande, al contar con unos 20.000 combatientes (Sánchez, 1989: 144), era la que fue experimentando una mayor desconexión en clave nacional, por estar en la frontera de la colonización, quedar muy alejada del centro - lo cual dificultaba la represión-, y tener una mayor homogeneidad política hacia adentro. Esto se evidencia a partir de la promulgación de normas regionales como la Primera Ley del Llano, de 11 de septiembre de 1952, y sobre todo, la Segunda, conocida como “Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia”.

⁶³ Alfredo Duarte Blum (1910-1990), además de asumir el proceso de pacificación de los Llanos Orientales y pacificar el departamento de Casanare, en 1953, gracias a un acuerdo con el guerrillero liberal Guadalupe

Por medio de los Decretos 1546 de 22 de junio de 1953, y 2184 de 21 de agosto de 1953 se va a buscar desactivar la violencia a partir de reducciones en la pena e indultos selectivos para los insurrectos. Sin embargo, como explica Pizarro (2011), las respuestas van a ser de lo más variopinto, entre quienes aceptaron la rendición incondicional o bajo ciertas condiciones – como sucedió con las guerrillas liberales en Tolima, el Llano o Antioquia-, y quienes, como el Partido Comunista, de acuerdo con las nuevas condiciones políticas creadas, “lanzó la consigna de transformar las guerrillas en movimiento de autodefensa campesina, sin desmovilizarse y sin entregar las armas al gobierno” (Vieira, 1965: 13).

Esta posición de los grupos comunistas, va a propiciar una respuesta excluyente y represiva del gobierno de Rojas Pinilla, en la que incluso va a contar con el apoyo del Partido Liberal. Tanto es así, que junto a la ilegalización del Partido Comunista, acontecida en 1956, se va a unir la puesta en funcionamiento de un conjunto de acciones en connivencia de la Fuerza Pública por parte de los grupos armados liberales, con el firme propósito de actuar contra la resistencia comunista en aquellos enclaves en los que su influjo resultaba más que notable, esto es, los referidos enclaves del sur de Tolima y la región de Sumapaz⁶⁴.

Dentro de esa lógica, será la intervención sobre un municipio en el oriente de Tolima, Villarrica, con especial arraigo de las autodefensas campesinas de cariz comunista, en noviembre del año 1954, cuando nuevamente Colombia va a quedar sumida en un espiral de violencia irrefrenable⁶⁵. Ello, porque la masacre de campesinos en este municipio, a finales de 1954, se va a traducir en una tendencia creciente de agitación y resistencia frente a lo que se concebirá como una extralimitación represiva de parte del Estado. A tal punto llega la situación, que en la primavera de 1955 Villarrica, sus municipios aledaños y la región del Sumapaz van a ser declarados como “zona de operativos militares”.

En ese lapso de tiempo que se extiende hasta el verano de 1955, el Ejército va a desplegar varios operativos, con base en más de 9.000 soldados y un número importante de unidades de artillería, aviones F-47 y B-26 que, junto contras prácticas como el cerco militar y el hostigamiento continuo, van a buscar acabar con los apenas 800 insurrectos alzados en armas (Pizarro, 2011: 108)⁶⁶.

Como sería de esperar, dada la desproporción en la correlación de fuerzas, el escenario en que se convirtió Villarrica causó dosis desproporcionadas de muerte y desplazamiento forzado – el cual se cifra en más de 100.000, entre desplazamiento directo e indirecto (Aprile-Gnisset, 1981: 51). Asimismo, va a suponer el acicate para la referida transformación de las autodefensas campesinas, nuevamente, en estructuras de guerrilla. Una guerrilla que para

Salcedo, pasó a la historia política colombiana por ser uno de los generales de las Fuerzas Armadas que persuadieron a Rojas Pinilla de la necesidad de abandonar el poder en mayo de 1957.

⁶⁴ Sobre la violencia en la década de los años cincuenta debe mencionarse el trabajo de Marulanda (1991).

⁶⁵ Sobre el affaire en Villarrica es obligada referencia la obra de Aprile-Gnisset, J. (1991).

⁶⁶ A ello, hay que añadir la desinformación y el oscurantismo de los operativos sobre Villarrica, especialmente, como consecuencia de la puesta en marcha del Decreto 1139 de 25 de abril de 1955, a partir del cual castigaba con pena de prisión a quien informase de todo lo que tuviera que ver con actividades de índole militar.

finales del operativo y a pesar de la disparidad de fuerzas, hacia septiembre de 1955 había conseguido dar de baja a 71 militares y herir a otros 212 (Ortiz y Lara, 1988:36).

Mapa 2: Representación geográfica de las repúblicas independientes



Fuente: Vélez (2001: 203)

Tras el referido cerco a Villarrica y la victoria militar, sin embargo, no se va a suceder la desaparición de una guerrilla, en la que ya se identifican figuras clave de las futuras FARC como “Jacobo Arenas”, Ciro Trujillo o el propio “Manuel Marulanda”. Más bien, todo lo contrario, se va a producir un fenómeno que algunos como Ramírez (1981: 200; 2001:64) van a denominar como “colonizaciones armadas”. Es decir, movimientos de campesinos y guerrilleros hacia otros enclaves de nueva colonización rural, como El Pato, La Uribe, El

Caguán, El Ariari o Guayabero que, una década después, serán lugares donde rápidamente encuentren arraigo las nacientes FARC⁶⁷.

Aunque es cierto que con la llegada de Rojas Pinilla, a partir de 1954, las cifras totales de la Violencia se van a reducir notablemente, por otro lado, el conflicto en Villarrica y el Sumapaz va a servir para, *sensu contrario*, reactivar escenarios de confrontación entre 1956 y 1957, extensibles a otros departamentos como Caldas, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y la región del Carare (Pizarro, 1989).

Es decir, la Violencia va a tener un alcance mucho más focalizado que en la etapa que transcurre entre 1946 y 1953 pero reproduciendo, en cierto modo, aquellos escenarios que en aquel entonces mostraron los mayores niveles de confrontación.

En todo caso, y con base en lo expuesto, no se podría identificar un patrón de conducta explicativo de la Violencia. Ello, porque como señalan Guzmán, Fals Borda y Umaña (2010), no se encuentra articulación lógica en el desarrollo de la misma, de acuerdo a patrones de pertenencia étnica, ubicación geográfica o estructura económica. La Violencia se presenta ante todo tipo de estructura agraria, tanto minifundista como latifundista; independientemente si se trata de regiones opulentas o empobrecidas. No obstante, había un patrón común, y ése se encontraba en la falta de legitimidad del Estado, su profunda debilidad y su incapacidad para proveer de servicios básicos a la mayor parte de las regiones y estratos sociales que conformaban el país.

El resultado hablaba por sí solo. Desde 1946 y hasta 1957 se podían computar cerca de 800.000 desplazados a los que había que añadir otros 150.000 refugiados en Venezuela y 180.000 muertes⁶⁸ – hacia 1964 superarían los 200.000, en su mayoría civiles (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010). Además, estaba la destrucción y pérdida de inmuebles y edificaciones y un profundo cambio en la mentalidad del pueblo colombiano hacia las instituciones políticas del Estado. Un cambio, que va a permitir comprender cómo se desarrolla la violencia a partir de los años sesenta y setenta. La Violencia desencadenará un mayor distanciamiento del campesinado respecto del Estado, a lo que hay que sumar inconmensurables dosis de impunidad y déficits en la administración de justicia.

A pesar de todo, para Henderson (1984), una mirada más a largo plazo permitiría adicionar una relativa conciencia reflexiva y crítica que conferiría a la ciudadanía colombiana la capacidad de exigir derechos con base en una mayor “cultura cívica”. Así se pondrá de

⁶⁷ Dentro de esta noción de “colonización armada” de Ramírez (1981; 2001) pueden adicionarse otras dos obras que de una manera descriptiva abordan el alcance y sentido de esta colonización como son las de González Arias, y Marulanda 1990); Molano, Fajardo y Carrizosa (1989) o Molano (1987).

⁶⁸ En el mismo estudio detallado de Guzmán, Fals Borda y Umaña (2010:316) se evidencia un registro pormenorizado, si bien adolecente por la precariedad de las fuentes y registros oficiales. Sea como fuere, es revelador que del conjunto de muertes violentas, el 41.4% se concentrasen en Tolima, el 11.9% en Valle del Cauca, el 11.7% en Antioquia, el 11.1% en Caldas y el 10.5% en los Llanos Orientales. Muy lejos se encuentran ya otros enclaves como Cundinamarca (4.1%), Huila (2.6%), Cauca (1.8%), Santander (1.2%), Boyacá (1.1%), Norte de Santander (1%), Chocó (0.4%), Bolívar (0.3%) y Bolívar (0.2%)

manifiesto a través de diferentes voces y exigencias que reclamarán mayor presencia del Estado en cuanto a educación, sanidad, infraestructura o medios de comunicación y que harán presencia en la etapa posterior a la dictadura de Rojas Pinilla. Una dictadura que para la primavera de 1957 ya resulta por completo insostenible, más allá que por los problemas de orden público, por un malestar general que lleva incluso, al propio mando militar, consciente de la situación, a solicitar al dictador el abandono del país.

5. El Frente Nacional, la segunda Violencia y la emergencia de las guerrillas

El 10 de mayo de 1957 una Junta Militar, integrada por cinco Generales, va a asumir las riendas políticas de Colombia de manera transitoria, mientras se conforma la etapa que se va a conocer como el Frente Nacional. Un nuevo sistema de gobierno constituido desde un régimen bipartidista por el cual, Partido Liberal y Partido Conservador, van a repartirse, en términos absolutamente paritarios, todos los cargos políticos con excepción de la presidencia, la cual se alternará cada cuatro años para cada partido.

La vigencia de este sistema, llamado a propiciar la reconciliación política nacional, en inicio, quedaba dispuesto para dos períodos presidenciales de cada partido, esto es, por dieciséis años. No obstante, una reforma constitucional de 1968 fue la que incluyó una cláusula para que el sistema, en lugar de lo previsto, fuera paulatinamente desmantelado, primero, en 1974, haciendo desaparecer la competencia electoral monopartidista, y después, en 1978, acabando con el imperativo de compartir, a partes iguales, los puestos públicos dentro del Ejecutivo.

Dentro de esta nueva tesitura, el primer presidente va a ser el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien va a tratar de buscar controlar el desorden público y la violencia heredada de la dictadura de Rojas Pinilla con la puesta en marcha, entre otras normas, del Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958, por el que se creaba la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia. Ésta, se va a encargar de recorrer poblaciones y zonas devastadas de manera tal que, como recogía algún medio, era “la primera vez que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a conversar con nosotros sin engaño; a hablarnos de paz sin echarnos bala después” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2010: 129). Lo cierto, es que durante sus inicios, la comisión consiguió lograr un importante cese de hostilidades, partiendo del diálogo y de convenios, declaraciones o entrevistas – más de 20.000, que se tradujeron en la nada desdeñable cifra de 52 pactos de paz, especialmente relevantes en Caldas, Tolima, Cauca, Huila y Valle.

De igual manera, se trató de recuperar la cuestión de la reforma agraria, habida cuenta del problema estructural que representaba el campo. Para ello, se albergaban posibilidades como incrementar ciertos lotes de los pequeños campesinos e incluso, proveer de títulos a aquellos que se encontraban desprovistos de cualquier tipo de propiedad, siempre que guardasen los patrones de producción fijados por el Estado.

Pese a todo, el alcance de la reforma debe relativizarse, pues los *lobbies* de la industria – terratenientes y algunos políticos-, hicieron que la puesta en marcha se retrasara hasta el último año de gobierno de Lleras Camargo.

La política de reconciliación que llevaron a cabo los gobiernos, sobre todo de Lleras Camargo, y su sucesor, el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), rápidamente experimentaron el desvanecimiento del efecto “luna de miel” sobre la gestión de una violencia que, si bien controlada entre 1959 y 1964, nuevamente va a volver a presentar exacerbados niveles de confrontación, si bien nada comparables con la época anterior.

En esta ocasión, la violencia pasó a concentrarse en cinco departamentos fundamentalmente, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas⁶⁹, lo cual, para algunos como Oquist (1978: 18), pone en tela de juicio hasta qué punto la política reconciliadora fue un éxito. Sobre todo, en tanto y en cuanto de los 18.481 que tuvieron el privilegio de ser computados como víctimas entre 1958 y 1966, tres de cada cuatro de estas muertes se ubicaron en los departamentos donde se focalizaba esta “segunda Violencia”, mientras que el resto lo hacía con base en apenas siete departamentos⁷⁰

Otro indicador de la violencia emergente, como lo sugiere Ramsey (1981), se puede encontrar en el número de cuadrillas y grupos armados que se mantuvieron al margen de las políticas de desmovilización sugeridas, especialmente, durante el primer Ejecutivo del Frente Nacional. Dentro de estos grupos insurrectos cabe destacar dos aspectos fundamentales. El primero, es que la mayoría de los reductos armados liberales y conservadores se acogieron a las diferentes iniciativas de desmovilización. Así, el mayor número de cuadrillas subversivas resultaba ser de carácter comunista. El segundo, viene a responder a un fenómeno conocido como bandolerismo, profundamente trabajado por Meertens y Sánchez (1983), y que no son otra cosa que personas sin salida; sin capacidad de reincorporarse a la vida normal.

Su condición de exguerrilleros en unos casos; de jóvenes con sed de venganza en otros; converge con una estructura de poder local que hace que el bandolerismo, atomizado y apartado de las viejas lealtades partidistas, encuentre su razón de ser en una subordinación a intereses provinciales que terminan por responder comunidades de legitimación, pero que les conduce a operar por fuera del sistema, al ser perseguidos por todo el engranaje político, judicial y policial del Estado colombiano.

Esta manifestación particular de violencia que estriba en el bandolerismo tuvo importancia en los Llanos Orientales, en torno a la figura de “Eliseo Velásquez”; en el sur de Tolima, donde fue consabida la presencia de “General Mariachi”; en Santander, donde fue destacado

⁶⁹ Cuando se hace mención al departamento de Viejo Caldas se está haciendo referencia a lo que hoy serían los departamentos, desde 1966, de Caldas, Risaralda y Quindío.

⁷⁰ De igual manera, Oquist (1978: 20) recoge el número de muertes violentas en los cinco departamentos que concentran esta “segunda Violencia”. En 1957 se dan 2.877 muertes; 3.796 en 1958; 2.550 en 1959; 2.557 en 1960; 3.173 en 1961 y, por último, 2.370 muertes violentas para el año 1962.

“Rafael Rangel”; así como otros enclaves como Sumapaz o el occidente y suroeste antioqueño, en la que fue protagonista la figura del capitán “Juan de J. Franco”⁷¹. Otras regiones como el norte de Valle del Cauca, el norte de Tolima o el Viejo Caldas fueron un caldo de cultivo óptimo para también figuras clave en la historia del bandolerismo, tal y como evocan nombres como los de “El Mosco”, “Efraín González”, “Zarpazo”, “La Gata”, “Chispas”, “Capitán Venganza”, “Desquite”, “Pedro Brincos” y “Sangrenegra”⁷².

Tabla 4: Número de cuadrillas alzadas en armas hacia 1960

	Cuadrillas activas		Cuadrillas periódicamente activas		Cuadrillas Comunistas	
	Número	Miembros	Número	Miembros	Número	Miembros
Tolima	6	98	15	1.613	3	217
Cundinamarca	2	46	4	70	7	655
Caldas	9	57	4	27	-	-
Valle	5	67	5	252	2	20
Cauca	6	40	-	-	-	-
Antioquia	9	73	5	39	-	-
Boyacá	3	25	1	50	2	10
Santander	3	65	1	11	1	10

Fuente: Ramsey (1981: 278)

Sea como fuere, las particularidades de este bandolerismo fueron objeto de una profunda represión policial y militar que, especialmente, a inicios del mandato de León Valencia, se tradujo en una política en la que, aun con carencias, se concebirá con base en la necesidad de fortalecer la administración judicial, reestructurar el andamiaje policial y militar e, incluso, incorporar una “cuota nacional para la paz”; cuota que debía representar un 20% sobre el impuesto de la renta, y en adición a otros rubros, con un eventual préstamo del Banco de la República que ascendía a 250 millones de pesos. De igual forma, se incorporaron estrategias de contrainsurgencia, de hostigamiento a la connivencia bandolero-campesina, y de guerra psicológica, con las que se buscaba, de otro lado, mitigar el impacto de debilidades tales como la escasa fuerza del poder público o el desconocimiento del terreno escenario de conflicto.

Dadas estas circunstancias, prácticamente, entre 1963 - cuando fuentes policiales estiman en unos 7.000 los alzados en armas (Revista de la Policía Nacional, 1962: 119)-, y 1965 se van a erradicar la mayoría de los escenarios violentos de esta “segunda Violencia”, con la excepción de los enclaves comunistas que, si bien habían abandonado la estructura guerrillera

⁷¹ Una obra interesante, aunque no comparable con la relevancia de de Meertens y Sánchez (1983), es la de Villanueva (2007).

⁷² Según la *Estadística de criminalidad del año 1962*, eso sí, sin entrar a distinguir entre reductos guerrilleros y bandoleros, se estimaba que en 1962 operaban solo entre estos departamentos 93 grupos armados que aunaban 1.781 integrantes Revista de la Policía Nacional (1962: 3).

para volver al mecanismo de la autodefensa campesina, iban a experimentar una situación absolutamente distinta con respecto al inmediato pasado.

Desde los reductos comunistas, la oposición al Frente Nacional resultaba absoluta aunque, durante los dos primeros gobiernos del nuevo sistema político, tal y como se identificaba, estos habían vuelto a la forma de autodefensa, abandonando la estructura guerrillera. El aperturismo democrático que suponía este nuevo momento en la vida política colombiana, a pesar de todo, seguía excluyendo la posibilidad de institucionalizar una opción de izquierda, pues el Partido Comunista, a pesar de que podía participar en la dimensión legal, nada tenía que hacer en lo que a política se refería.

En muchos de los escenarios descritos, de influjo y marcado sesgo comunista, como es el caso del valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz, el Ariari o la intendencia del Vichada, más que estructuras de autodefensa, en sentido estricto, se habían venido desarrollando en estos últimos años como escenarios al margen de la soberanía clásica del Estado. Ello, en tanto que el abandono del mismo, había constituido la emergencia de ciertas formas paraestatales de poder local en lo que se conoció como el fenómeno de las referidas anteriormente, “repúblicas independientes” (Uribe, 2007: 81)⁷³.

Unas “repúblicas independientes” que por su trascendencia creciente, como enclaves al margen de la política integradora del Estado, no tenían justificación para su existencia desde el mismo poder establecido. Es por ello, que tras la estrategia política de los primeros años del Frente Nacional, el gobierno de León Valencia, como había hecho frente al bandolerismo, va a poner en marcha una serie de cercos militares con los que asfixiar económica y militarmente, valga la redundancia, a todos estos enclaves cuestionadores directos de la autoridad del Estado.

Dentro de esta lógica será cuando tenga lugar el mito fundacional de las FARC. Hacia 1964 existe el firme convencimiento de acabar con la presencia de todo grupo armado operativo en las “repúblicas independientes”. A tal efecto, por ejemplo, se va a poner en marcha un contingente militar de 5.000 efectivos sobre lo que se empezó a conocer como la “República de Marquetalia”⁷⁴, a fin de terminar con la misma. Operativo militar que, por otro lado, va a precipitar la enésima transformación de la forma de resistencia, esto es, nuevamente, de autodefensa campesina a estructura guerrillera.

El resultado va a ser la justificación, desde el Partido Comunista, de asumir como válida la bandera de “todas las formas de lucha”, a lo cual se une la creación de una resistencia

⁷³ Cabe decir que esta concepción se podía hacer extensible a otros lugares del país como Natagaima, Purificación y Rioblanco en Tolima; Yacopí y Viotá en Cundinamarca; Montevideo, Puerto Wilches y la línea de Ferrocarril de Bucaramanga, en Santander.

⁷⁴ Por República de Marquetalia es a como se denominaba al corregimiento de Gaitania, perteneciente al municipio de Planadas, en el sur de Tolima, y donde autodefensas campesinas van a hacer valer el término de “repúblicas indepenedientes”, ya mencionado. A tal efecto, son ilustrativas las obras de Arenas (1973) o Ramírez y Jiménez (2002).

campesina armada que, hacia septiembre de 1964, se organizará en lo que se hará llamar la Primera Conferencia Guerrillera. A ella asisten los destacamentos del valle de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero entre otros, y será constitutivo de una guerrilla que empieza a auto-organizarse militar, económica y políticamente en torno a lo que pasa a denominarse como “Bloque Sur”.

El “Bloque Sur”, aún integrado dentro de la estructura del Partido Comunista como brazo armado, será objeto de un operativo militar que terminará con la “república independiente” de Marquetalia, habida cuenta de la ingente desproporción en la correlación de fuerzas pero que, empero, no servirá para acabar con el germen guerrillero que nace definitivamente en ese momento.

Tras la desaparición de todo atisbo reaccionario en Marquetalia, la resistencia guerrillera, en un ejercicio de supervivencia, se traslada a Riochiquito - Tierradentro, en Cauca primero, y a El Pato, en el departamento de Meta, después. Allí crearán dos conferencias guerrilleras que, en la primavera de 1965, darán lugar a la aparición, por primera vez de las FARC, y que tomarán como mito fundacional lo acontecido un año atrás en “Marquetalia”.

Si bien hay quienes consideran que si la “Operación Marquetalia” no se hubiera llevado a cabo las FARC nunca hubieran surgido, en tanto y en cuanto se hubiera mantenido la estructura de autodefensa (Gilhodès, 1972; Arenas, 1973), lo cierto es que de acuerdo con Pizarro (1989; 2011) y con Pécaut (2008), Colombia presentaba de por sí condiciones estructurales que alimentaban la posibilidad de una emergencia de focos guerrilleros.

Así se entiende, coetáneamente, la aparición en 1965 del ELN, en 1967 la del EPL- o, de manera infructuosa, pero al albor de la Revolución Cubana (1959), la aparición de otros movimientos de alcance más limitado, pero naturaleza insurgente, como es el caso del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino –MOEC 7 de Enero-, del Frente Unido de Acción Revolucionaria –FUAR-, o de las Fuerzas Armadas de Liberación –FAL-. Asimismo, la experiencia de Vietnam (1973) también va a repercutir positivamente en la aparición de grupos armados que buscan disputar el poder político al Estado colombiano, en aras de una revolución y transformación estructural del mismo.

Por otro lado, especialmente, a partir de los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974) y también con el mandato de López Michelsen (1974-1978), una que vez que la Violencia ha desaparecido en sentido formal desde 1964, la dimensión de orden público y de la seguridad pasa a tener un tratamiento diferente.

Mapa 3: Primera cartografía de los frentes de la FARC, 1964 - 1980



Fuente: Pécaut (2008b: 31)

Un tratamiento en el que si bien las guerrillas que surgen en la década de los sesenta empiezan a proyectarse tímidamente – FARC, ELN y EPL, lo cual no es óbice para la puesta en marcha de operativos militares importantes buscando su aniquilación, la prioridad va a pasar por afianzar un sistema de educación pública y de transporte, que mejore la comunicación y la conexión del país así como un plan de infraestructuras.

De igual modo, se comienza a avanzar, aunque tímidamente, en una reforma agraria que acompaña el firme propósito de llevar la presencia del Estado a la mayor parte del territorio colombiano. También se va a buscar acelerar el ritmo de crecimiento, otorgando tierras a más de 250.000 personas entre 1962 y 1979. Además, se va a fortalecer el desarrollo industrial, a la vez que se intenta revitalizar algunas exportaciones claves como la del banano. Se van a crear y consolidar sistemas de compensación familiar con los que cubrir subsidios de educación y salud, incrementando a su vez los servicios del Seguro Social. Los programas

de gobierno con los que financiar la educación, y que eran de un 10% en 1957, van a pasar a un 14% en 1964 y a un 20% del presupuesto del Estado en 1978, de manera tal que el analfabetismo se va a reducir de un 37% en 1963 a un 23% en 1977 (Bushnell, 2012: 316). Empero, la inequidad, los ingentes niveles de pobreza, el alcance limitado y la frustración de la reforma agraria y la concentración de tierras en muy pocas manos van a servir para seguir alimentando la supervivencia de grupos guerrilleros convencidos de la posibilidad de transformar la estructura del débil Estado colombiano.

Para que esta tesitura descrita resulte visible, cabe señalar que hacia 1970, la mitad más pobre de la población urbana no recibía ni siquiera el 16% del total de los ingresos urbanos, toda vez que el 10% más rico concentraba más del 43% del PIB. En el campo esta situación era más agudizada pues prácticamente dos terceras partes del campesinado colombiano lo hacía en términos de pobreza absoluta (Bushnell, 2012: 327). Una situación irresoluta que en los años venideros justificará la emergencia de nuevos grupos guerrilleros como el M-19, el Ejército Revolucionario del Pueblo – ERP- y la guerrilla indigenista QL.

6. Aparición e historia de las FARC. De 1964 a 1998

Tal y como se explicó con anterioridad, las FARC toman el ataque sobre la “república de Marquetalia” del 27 de mayo de 1964, como su mito fundacional si bien, esta denominación no aparece hasta finales de 1966, cuando con motivo de la II Conferencia Guerrillera celebrada en El Pato (Meta), el Bloque Sur pasa a autodenominarse como las FARC.

A partir de entonces, esta guerrilla surge en el escenario conflictual colombiano con la cifra de 350 insurgentes, entre los cuales, al frente ya se encontraba su líder histórico, “Manuel Marulanda Vélez”, junto con Ciro Trujillo como primer lugarteniente, y otras figuras clave como “Jacobo Arenas”. Los principales enclaves de acción de estas primeras FARC se focalizarán, sobre todo, y como podía verse en el mapa 3, en Tolima, Meta y Caquetá.

Desde el inicio, las FARC se van a nutrir de una impronta netamente campesina, dotándose de un reglamento interno de organización y funcionamiento a partir del cual orientar su acción armada. Sin embargo, en estos mismos inicios, van a estar a punto de desaparecer cuando un operativo militar se encuentra con un grueso de guerrilleros al mando del segundo de las FARC, Ciro Trujillo, en el departamento de Quindío, y que se va a traducir en la pérdida de numerosos nombres además de un 70% de su armamento⁷⁵.

A diferencia del ELN, las FARC no van a sufrir reveses considerables más allá del mencionado y, paulatinamente, van a ir consolidando su posición si bien, muy supeditada al inicio respecto del Partido Comunista, y con una escasa relevancia dentro del escenario de violencia en Colombia.

⁷⁵ Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ruta-de-cancharina-articulo-499801> Consultado 7 de agosto de 2015.

Su institucionalidad se va a ir reforzando con la III Conferencia Guerrillera de 1968 en Guayaquero y con la IV Conferencia Guerrillera de 1970 en El Pato, cuando su número de efectivos llega a duplicarse, hasta llegar a los 780 integrantes. No obstante, como reconoce Aguilera (2010: 88), durante los trece años que transcurren entre 1968 y 1982, el promedio real de violencia ejercido por las FARC fue apenas relevante. Esto es, de 1.6 tomas armadas sobre poblaciones rurales y dos emboscadas al año. Empero, sin que las FARC representasen un protagonismo en clave nacional, lo cierto es que su presencia notable en Tolima, Cauca, Meta, Huila, Caquetá, Cundinamarca y las regiones de Urabá y el Magdalena Medio se traducirán, dentro de esta tendencia creciente, en que para finales de los setenta la guerrilla ascienda hasta casi los 1.000 combatientes (Sánchez, Díaz y Formisano, 2003: 65).

Un punto de inflexión en la historia de las FARC va a ser la VII Conferencia Guerrillera que tendrá lugar en Guayaquero (Meta), entre los días 4 y 14 de mayo de 1982, y donde en la denominación de la guerrilla, pasa a incorporarse la sigla “Ejército del Pueblo”, FARC-EP, si bien lo más destacable, como estrategia de lucha, va a ser la incorporación de lo que se conocerá como la “Nueva Forma de Operar” – NFO.

La NFO no supone sino la extrapolación de la experiencia de la operación “Cisnes 3” que, dirigida por un casi desconocido “Mono Jojoy”, se pone en marcha en Guayaquero en el año 1980, con el objetivo de dirigir un conjunto de guerrillas móviles capaces de actuar sobre un solo frente y dispersarse (*hit and run*). Tal y como recoge Moreno (2006: 632), la NFO pasa a entenderse como “una nueva táctica militar, partiendo de la base de que la guerra regular pasó a ser irregular (...) y por la prolongación del conflicto, lo que lleva a cada ejército a actualizar sus formas de combate”.

Esta nueva dimensión del conflicto, que pone de manifiesto una nueva lógica de guerra para las FARC, queda orientada hacia una actitud mucho más ofensiva que, en los años venideros, se va a traducir en ofensivas de cerco y aniquilamiento de unidades militares. Para ello, resulta imprescindible el incremento de la fuerza de combate y el reclutamiento de nuevos efectivos para lo cual, el impacto que el narcotráfico va a suponer un factor imprescindible, adicional a las tradicionales fuentes de poder económico tales como el secuestro o la extorsión sobre sectores boyantes como el ganadero o el banano (Henderson, 2010).

Del mismo modo, al auge vertiginoso que desde 1982 van a experimentar las FARC, hay que añadir otros factores concomitantes. De un lado, la instrumentalización que la guerrilla va a realizar sobre el proceso de negociación con el presidente Belisario Betancur que, dentro de un escenario de cese bilateral de las hostilidades, va a permitir a las FARC fortalecerse y rearmarse. De otro, la ruptura con el Partido Comunista, al cual la guerrilla había quedado supeditado prácticamente desde su creación y con el cual, comienza un proceso de ruptura que termina con la creación del Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC)⁷⁶ y el

⁷⁶ El PCCC surge de la decisión adoptada en el Pleno del Estado Mayor de las FARC, de noviembre de 1997, de suplir la sombra hasta entonces alargada del viejo Partido Comunista Colombiano. El PCCC, también

Movimiento Bolivariano (MB)⁷⁷, que pasan a depender directamente de la organización armada dentro de en una lógica de subordinación de lo político respecto de lo militar.

Mapa 4: Cartografía de los frentes de las FARC creados entre 1981 y 1989



Fuente: Pécaut (2008b: 31)

conocido como PC3, no es sino la evidencia de cómo el proyecto político de las FARC queda subsumido en la dimensión militar en tanto y en cuanto el PC3 se encuentra absolutamente subordinado a las FARC y a una lógica de militarización de la política.

⁷⁷ En cuanto al Movimiento Bolivariano, éste surge, de acuerdo a los cambios que acontecen en el orden geopolítico a finales de los ochenta e inicios de los noventa, en el que las FARC deben reajustar su discurso a las lógicas y dinámicas en transformación e incorporar otros vectores como el bolivarismo, el anti-imperialismo o el intervencionismo económico (Sandoval, 2004). Tal y como reconoce Pizarro (2011: 228) “este movimiento organizado de manera vertical, clandestina y con estructuras compartimentadas podría en algún momento, según el pensamiento de las FARC, salir con el PCCC de la clandestinidad para constituir el eje estratégico de un nuevo gobierno revolucionario.

Tal es el auge del poderío militar de las FARC sobre las circunstancias descritas, especialmente con base en el narcotráfico, que desde 1982 se duplican sus frentes, que pasan de nueve a dieciocho, en una lógica similar a las que experimentan otras guerrillas. Así, el ELN, gracias a su control sobre parte de la industria petrolera y aurífera, se va a encontrar en fase de fortalecimiento, desdoblamiento y de centralización nacional; el EPL se va a encontrar en su fase auge gracias a la industria bananera y los campesinos cordobeses; el M-19 en el momento de creación del Frente Sur en Caquetá, Putumayo y Huila; y aparte, se produce la emergencia de otros grupos insurrectos ya mencionados con anterioridad, como son la guerrilla indigenista QL, el PRT o el MIR-Patria Libre (Pécaut, 2008; Pizarro, 2011). A tal efecto, como dirá el mismo Pécaut (1987: 8):

“la cuestión guerrillera cambia, de esta manera, de naturaleza y de escala. De un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de la Violencia y en los conflictos por la tierra, se transforma en un componente de un proceso que, por primera vez, percibe como objetivo la lucha por el poder”.

Tampoco se puede pasar por alto, en la efervescencia del activismo guerrillero, la atención que generan otros escenarios regionales, especialmente centroamericanos, donde la lucha por el poder frente al Estado supone un modelo a mimetizar. Esto sucede con el Frente Sandinista de Liberación Nacional –FSLN, en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca – UNRG-, en Guatemala.

Sobre esta tesitura, se va a ir produciendo un proceso de convergencia guerrillera que llega a concretarse a mediados de la década de los ochenta, con la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar – CGSB- y respecto de la que cada grupo guerrillero va a disponer de su facción política propia. Es decir, A Luchar en el ELN, el Frente Popular para el EPL y, por último, la UP para el caso de las FARC⁷⁸. Las dos primeras apenas tendrán relevancia mientras que la tercera será eliminada en una especie de genocidio sin precedentes en la historia política colombiana⁷⁹. Además, las concebidas como guerrillas de segunda generación, el PRT, el M-19 y la guerrilla indigenista QL no van a terminar por hacer presencia activa, entre otras cuestiones, por su pronta desmovilización y reintegración en la

⁷⁸ La UP surge en 1985 como el intento de integrar una traslación desde la lucha guerrillera hacia la disputa electoral. Consiguió integrar a miembros de la ADO y a combatientes desmovilizados del ELN y de las FARC, sobre todo. Su proximidad creciente hacia el PCC, por un lado, y su distanciamiento a la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha, por otro, colocó al partido en el disparadero de una violencia sin límites especialmente proveniente del narcotráfico, del paramilitarismo e incluso de la fuerza pública. Una violencia que se saldó con miles de militantes asesinados, además de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes. A tal efecto, son obras de obligada referencia: Ortiz (2009) y Giraldo (2001).

⁷⁹ El término de genocidio serviría para el caso particular de la UP a tenor de que, según la Resolución 96 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1946, el genocidio puede entenderse cuando “la denegación del derecho de vida a grupos humanos” reposa bajo razones de índole político.

vida política colombiana. Cosa diferente a las FARC y el ELN, que mantendrán inalterada su convicción por seguir disputando militarmente el poder político al Estado.

Factores como la cuestión agraria irresoluta, la precariedad del Estado y la consolidación de fuentes de poder social afines a los grupos guerrilleros (Mann, 1997) van a terminar por dar forma a una “guerra irregular” en Colombia donde las FARC predominantemente, y el ELN en menor medida, buscan una labor de hostigamiento y desgaste a largo plazo, haciendo valer las palabras de Kissinger (1969: 214), según las cuales: “la guerrilla gana si no pierde. El ejército convencional pierde si no gana”.

Para 1989, y desmarcadas de cualquier posibilidad negociadora bajo el gobierno de Virgilio Barco, las FARC pasan a tener más una treintena de frentes – incluso, algunos como Aguilera (2010: 144) ya identifican hasta 48 frentes-, y el número de combatientes asciende casi a 6.000 efectivos. Esta fortaleza guerrillera se va a repartir por casi toda la geografía del país (Echandía, 2006), y con especial predilección por la cordillera oriental de los Andes y los alrededores a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Igual va a suceder con las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, y los corredores estratégicos de gran valor para el tráfico de armas y droga. Chocó, en tanto que da acceso al Pacífico y queda libre, a diferencia de la región de Urabá, de paramilitares. Caquetá y Huila como bastiones tradicionales unidos a Cauca y Nariño, nucleares en la salida al Pacífico y la frontera con Ecuador, respectivamente, y por último, el corredor colombo-venezolano a través de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía (Pécaut, 2008).

Agotada cualquier pretensión de canalizar la fuerza política de las FARC a través de las elecciones y la Unión Patriótica, los últimos años de la década de los ochenta y los inicios de los noventa cambian por completo el devenir de la guerrilla. A la terrible situación experimentada por la UP, la ruptura con el Partido Comunista, y la algidez en que transitaba la insurgencia, pero también el paramilitarismo⁸⁰, hay que añadir la muerte del que se puede considerar como el ideólogo de las FARC, “Jacobo Arenas”, quien fallece en 1990 a causa de un infarto.

A partir de entonces, la facción más política de la guerrilla pasa a ser encarnada por la persona de “Manuel Marulanda Vélez”, a favor de una línea marcadamente mucho más beligerante, y que va a ponerse de manifiesto en la VIII Conferencia Guerrillera de 1993, en la que se propugna la asunción de las armas como única estrategia de lucha. A ello, sin lugar a dudas, había contribuido el distanciamiento que las FARC habían protagonizado con respecto al gobierno de César Gaviria quien, coincidiendo con la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente que debía dotar de una nueva Constitución al país, puso en marcha la Operación Centauro II. Esto es, un bombardeo estratégico sobre el santuario de las FARC en

⁸⁰ Tal y como se verá con posterioridad, en este mismo capítulo, el paramilitarismo empezará a ganar fuerza a partir de finales de la década de los setenta, en municipios concretos de Antioquia y Boyacá e, incrementalmente, en buena parte de la región del Magdalena Medio.

Casa Verde, en el municipio de La Uribe perteneciente al departamento de Meta, que no era sino su particular respuesta a la negativa a negociar y desmovilizarse dentro del escenario de cambio político que acontecía.

Mapa 5: Cartografía de los frentes de las FARC creados entre 1990 y 1996



Fuente: Pécaut, 2008b: 31

Paralelamente, la organización interna de las FARC se había ido solidificando en torno al Estado Mayor Central y el Secretariado⁸¹, las dos figuras claves en la organización interna

⁸¹ El Estado Mayor Central constituye el máximo organismo de dirección y mando de las FARC siendo las decisiones adoptadas en su marco de obligado cumplimiento para todos los integrantes que hacen parte de la guerrilla. Este Estado Mayor Central, durante la etapa de crecimiento y consolidación de las FARC estuvo conformado por 31 miembros. Una de sus principales funciones fue y es la elección del Secretariado (máxima autoridad guerrillera entre pleno y pleno del Estado Mayor Central), al igual que la designación de los

de la guerrilla, y que va a permitir entender en buena medida su longevidad así como su capacidad para sobreponerse a los golpes estratégicos que, fundamentalmente, tendrán lugar en la última década.

Así, con todo, la perspectiva de un enfrentamiento militar absoluto entre FARC y Estado se impone en ambos lados, de manera que la etapa de autodefensa es un vago y lejano recuerdo. A partir de entonces, a lo largo de toda la década de los noventa hasta la llegada del conservador Andrés Pastrana al gobierno, las FARC, sobre la base de su nueva y reorganizada estructura militar, tendrán como único fin el llevar a cabo operativos militares capaces de tomar el poder político y derrocar al gobierno. Es lo que pasa a denominarse para algunos autores - Pizarro (2004: 133; 2011: 275), Pécaut (2008: 49), Domínguez (2011: 17) o Ferro y Uribe (2003: 117), como “guerra de movimientos”, en tanto y en cuanto, se imbrica una estrategia de ofensiva táctica y estratégica en la que se busca la confrontación y la medición de fuerzas directa entre guerrilla y ejército, con el firme propósito de desplegar recursos bélicos a gran escala e infringir severas derrotas en la tesitura conflictual armada.

Esto así lo reconoce Germán Bula cuando plantea cómo hacia 1998, las FARC han llegado al mayor nivel de beligerancia de su historia:

“Hacia 1997-98, las FARC han pasado a conformar su propósito de erigirse como Ejército del Pueblo. En los ochenta eso era impensable. Sin embargo, durante el Gobierno de Samper, la guerra de movimientos produce importantes bajas al Ejército. Tal es la correlación de fuerzas que las FARC intentan tomarse la capital de Vaupés, Mitú. Sin embargo, en ese primer gran enfrentamiento, son derrotadas y su posición apenas dura 72 horas, con más de mil bajas en combate. Eso nunca más se volverá a repetir”. (EP 4, septiembre de 2015).

Es por todo que el año 1993 será un punto de quiebre en las pretensiones y estrategias de lucha de las FARC. Esto, porque se asientan las bases para que el pie de fuerza de la guerrilla supere los 10.000 efectivos, a los que cabrá añadir otra no menos importante cifra de 30.000 informantes. Todo el país con excepción de Amazonas y San Andrés va a comenzar a adolecer de una presencia de las FARC que se extiende en más de la mitad de los municipios del país.

Esta tendencia de expansión de las FARC es puesta de manifiesto tanto en “Karina” como en “Samir”. La que fuera comandante del Frente 42 de las FARC reconocía que:

“Hacia 1998 en las FARC seguíamos pensando en tomar el poder por las armas. El Secretariado era consciente de ello. De hecho, cuando nos sentamos con Pastrana en el Caguán estábamos cerca del golpe final. Todo aquello fracasa pero los guerrilleros lo entendieron mal. Empezaron muchos a darse al crimen y al narcotráfico sin ser conscientes de que podíamos en ese momento ganar la guerra. Se relajaron. De hecho, les decíamos que

comandantes del Estado Mayor en los frentes, el ajuste de los planes entre conferencia guerrillera y conferencia guerrillera, y la adopción de todas las decisiones financieras que afectan a la guerrilla.

no se trataba de negociar nada. Era un dialogo pues nosotros éramos más fuertes”. (EP 7, mayo de 2015).

En cuanto al testimonio de Samir, en una óptica similar señala que:

“En los años noventa el Frente 5, al amparo de la VIII Conferencia Guerrillera empieza a ser muy grande. De hecho, éramos más de 400 hombres en armas y otros 200 milicianos. Tanto, que el EMC y el Secretariado nos ordenan crear nuevos frentes y desdoblar el Frente 5, en el Frente 58. Allí teníamos un potencial muy grande, por el impacto de la UP si bien, desde 1993-94 empezamos a ser relegados por el enemigo de las Autodefensas, que nos llevan a muchos combates en el departamento. La violencia se recrudece especialmente desde 1994. Para ese entonces nosotros éramos poderosos. Tanto, que el EMC empieza a estar convencido de que puede llegar al poder por las armas, lo cual empieza a alimentar una fractura ideológica que lleva a crear dos tipos de combatiente. Por un lado, el hombre peleonero, bravo, que era el militar. Por otro el hombre cobarde, flojo, que era el político. Ese tipo de escuela fue creando mucho daño. Las FARC empiezan a convencerse de que tomar el poder por las armas es posible, dado el tamaño de su fuerza. Se focalizó en la fuerza militar pero descuidó la parte política”. (EP 8, agosto de 2015).

Dada esta tesitura, como se señalaba, el Ejército colombiano va a pasar a recibir importantes derrotas en el plano militar, en buena medida, por el cambio en la forma de actuar, con base en la creación y coordinación de bloques regionales y comandos conjuntos. En plena presidencia de Ernesto Samper, y en medio de una crisis institucional sin precedentes, derivada del “Proceso 8.000”, las FARC superan los 12.000 combatientes, y van a consolidar toda una reserva estratégica que le nutre de recursos económicos y de nuevos combatientes, especialmente, en torno al eje formado por los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Así, es desde aquí que se pasa de una estrategia centrífuga a una estrategia centrípeta, envolvente, en la que la NFO va a poner al Estado contra las cuerdas, tal y como ponen de manifiesto sonadas derrotas como las de Puerres, (Nariño), Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy (Nariño), El Billar (Caquetá), Miraflores (Guaviare) o La Uribe (Meta)⁸². Asimismo, se fortalecen los enclaves de confrontación urbana en las grandes capitales del país.

⁸² En un intento por ganar posición de cara a una eventual negociación con el Estado, las FARC asestaron diferentes golpes certeros y victorias estratégicas sobre las Fuerzas Militares colombianas. En abril de 1996 atacaron la base militar de Puerres, en Nariño, asesinando a 38 soldados. En agosto de 1996 en Las Delicias, Putumayo, las FARC asesinaron a 54 soldados y secuestraron a otros 60. Un mes después, en La Carpa, en Guaviare, murieron otros 30 soldados. En diciembre de 1997 se atacó la base de Patascoy, en Nariño, donde murieron 10 soldados y fueron secuestrados otros 18. Ya en 1998, en El Billar, en Caquetá, las FARC volvieron a atacar, en esta ocasión una brigada móvil del Ejército, la cual sufrió la muerte de 64 soldados y el secuestro de otros 43. Finalmente, en el ataque sobre Miraflores, en Guaviare, murieron otros 14 soldados y 3 civiles, siendo secuestrados hasta 135 uniformados y, en La Uribe, en Meta, fueron muertos 33 soldados y otros 8 fueron secuestrados (Echandía, 2000: 133).

Mapa 6: Localización de los frentes de las FARC en 1995



Fuente: Pécaut (2008b: 31)

Es de este modo que se entiende que la Agencia de Inteligencia de la Defensa empiece a concebir como plausible el hecho de pensar en una victoria de la guerrilla sobre el Ejército colombiano en un plazo máximo de cinco años si se mantienen constante los ataques y la precariedad del Estado y la Fuerza Pública colombiana. Una precariedad que ayuda entender la falta de incentivos de cara a una eventual desmovilización de la guerrilla, sobre todo, por la posibilidad real de, incluso, pasar a una guerra de posiciones en la que el objetivo militar tenga como siguiente objetivo el definitivo aniquilamiento del contrincante (Velásquez, 2006; Delgado, 2009; Sánchez y Chacón, 2005).

7. Aparición e historia del ELN. De 1965 a 1998

El ELN surge de una manera muy diferente a la puesta en escena de las FARC, como se explicó, influidas de manera directa por la transformación que en 1964 se da en los departamentos de Tolima y Caquetá, donde definitivamente, y sin vuelta atrás, se produce el definitivo pasa de las autodefensas campesinas a la estructura guerrillera.

Esta guerrilla, en primer lugar, surge alentada por la Revolución Cubana y la experiencia directa que algunos de los que serán sus primeros comandantes, como Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada o Heriberto Espitia, llevan a cabo cuando, entre 1960 y 1962, llegan a la isla con el fin de adelantar diferentes programas formativos. Todos, provenientes de algún modo u otro de la izquierda comunista, rápidamente se convencen de las bonanzas que el proceso revolucionario ha supuesto para Cuba, y es por ello que empiezan a pensar en la posibilidad de extrapolar esta experiencia a Colombia.

Desde 1963 y con Fabio Vásquez a la cabeza, el contingente de siete colombianos que finalmente deciden enrolarse al sueño de la revolución regresa con la finalidad de iniciar contactos en las dos ciudades más importantes de Santander, Bucaramanga, la capital, y Barrancabermeja, además de en otros enclaves de carácter urbano como Los Aljibes, La Yarima o San Vicente de Cuchurí (Arenas, 1973).

El departamento de Santander, había sido escenario de violencia desde 1946, e incluso en la década de los años treinta, y presentaba algunas particularidades para albergar la idea de insurrección subversiva. A su geografía montañosa, habitada por campesinos pobres de nueva colonización, había que añadir el valor estratégico de un río como el Magdalena, de gran valor agregado en términos socioeconómicos. De igual forma, el hecho de servir como nervio central de la industria petrolífera y disponer, en Barrancabermeja, de una planta de hidrocarburos, va a suponer un estímulo de gran interés para el ELN, especialmente, por la importancia que el anti-imperialismo representa para este movimiento (Harnecker, 1988). Finalmente, no se puede obviar la dimensión intelectual y de estudiantes que va a llegar al ELN, proveniente de la universidad más importante del departamento, la Universidad Industrial de Santander, de la que se destacarán figuras como el propio Jaime Arenas Reyes, Homero Sobrino o Jaime Andrade Sossa, entre muchos otros.

El lugar concreto para la emergencia del ELN va a ser en la región de Cerro de los Andes, en la jurisdicción del municipio de San Vicente Cuchurí, entre los corregimientos de El Carmen y La Yarima. Tras meses de preparación militar y política y contactos con las base a lo largo de 1964, desde ahí se va a dar la primera aparición pública de la guerrilla, conformada por apenas veinte combatientes, cuando el 7 de enero de 1965 se toma el municipio de Simacota.

El grupo guerrillero, fuertemente inspirado en el foquismo guevarista⁸³ y el marxismo-leninismo, primero, y también en la teología de la liberación, después, plantea su ideario en lo que se conoció como el “Manifiesto de Simacota”⁸⁴. Un manifiesto en el que se llama a que el pueblo luche por las armas y, por primera vez, y a diferencia de las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas, se plantee verdaderamente la necesidad de la conquista del poder como objetivo estratégico de carácter político y revolucionario.

Los siguientes meses tras Simacota tienen como finalidad consolidar la estructura guerrillera y conferirle mayor visibilidad dentro de un Estado de Derecho entendido como inexistente, en el que las Fuerzas Armadas parecen tener el papel político y social preponderante. También se busca profundizar el trabajo político, la apertura de nuevos enclaves de disputa, así como la creación de condiciones que permitan desarrollar un nuevo frente guerrillero además de mantener las relaciones con la ciudad (Medina, 1996).

De ese modo, en febrero de 1965 se toma el municipio de Papayal; y en los meses siguientes se ponen en marcha varios operativos aislados sobre la capital del departamento. No obstante, uno de los acontecimientos más importantes para el ELN va a tener lugar a finales de este año 1965, cuando se enrola en las filas guerrilleras la figura de Camilo Torres Restrepo. Un intelectual sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además de sacerdote, que va a plantear la necesidad y la posibilidad de aunar marxismo y cristianismo inspirando un desarrollo práctico que relacione cristianismo, guerrilla, base popular y triunfalismo revolucionario.

En la figura de Camilo Torres, el ELN va a encontrar una figura que va a aportar sobremanera al discurso político y al ideario de la guerrilla si bien, su presencia se va a desvanecer pronto. Lo hará con el primer gran revés que va a recibir el ELN, con motivo de la derrota de Patio Cemento, el 15 de febrero de 1966, cuando un operativo de 85 militares actúa contra el Frente

⁸³ De manera resumida, el foquismo guevarista recoge tres principios: 1) acepta la posibilidad de que las fuerzas populares se impongan sobre las militares; 2) no siempre hay que esperar a que se den las condiciones para crearlas, pues el foco insurreccional lo puede hacer; y, por último, 3) dado el escenario de sub-desarrollo que acontece en el continente, debe ser el campo el principal terreno de lucha armada (Guevara, 1997)

⁸⁴ Como señala Hernández (2006: 69), del Manifiesto de Simacota se pueden extraer algunos puntos interesantes tales como: “1) la toma del poder para las clases populares; 2) una auténtica revolución agraria que eliminase latifundio, minifundio y monocultivo y se inspirase en una distribución técnica y justa de la tierra a los campesinos; 3) el desarrollo económico e industrial mediante la protección de la industria nacional; 4) un plan de vivienda y reforma urbana que contemplase una vivienda digna a los trabajadores; 5) la creación de un sistema popular de crédito que acabase con la usura crediticia; 6) la organización de un plan nacional de salud pública que, en todo caso, brindase garantía a la atención médico-farmacéutica y hospitalaria a todos los sectores de la población; 7) la elaboración de un plan vial con el que articular la economía nacional y prestar servicio a las regiones densamente pobladas; 8) una reforma educativa que acabase con el analfabetismo a la vez que impulsase la construcción competente de escuelas; 9) la incorporación de la población indígena a la economía y la cultura de la nación, respetando sus aspectos ancestrales; 10) el respecto a la libertad de pensamiento y culto y la abolición de discriminaciones de raza, género o religión; 11) una política exterior independiente, basa en el respeto mutuo, la autodeterminación y la no intervención; y, finalmente, 12) la formación de un ejército popular permanente, dotado y disciplinado, al servicio de la soberanía y del pueblo”.

José Antonio Galán, compuesto por 33 guerrilleros, dando de baja a seis de ellos, entre los cuales se encontrará Camilo Torres (López Vigil, 1989: 19).

Mapa 7: Primera cartografía del ELN, 1965 - 1980



Fuente: Vélez (2001: 210)

Mientras el Gobierno proclamaba el fin del ELN, que aún subsistía con un total de 70 efectivos, Fabio Vásquez Castaño va a dar a conocer un nuevo frente, el “Camilo Torres Restrepo”. Su origen se remonta a agosto del año 1965, cuando una facción del Frente José Antonio Galán se desprende y se ubica en el noroeste santandereano bajo las órdenes de Ricardo Lara Parada, aunque, a causa de los duros golpes recibidos, apenas durará cuatro años. Razón ésta por la que habrá que esperar a otro momento de expansión, en 1975, cuando uno de los frentes insignes del ELN vuelva a aparecer nuevamente dentro del escenario de confrontación armada en Colombia bajo el nombre de “Camilo Torres Restrepo”.

Durante el transcurso de 1966 a 1973, el ELN va a transcurrir por un crecimiento vegetativo, en el que apenas se consolida la organización revolucionaria y se afianzan las condiciones para operar. Cualquier atisbo de disputa del poder resulta entonces una mera utopía, del mismo modo que resulta inimaginable la posibilidad de plantear una estrategia alternativa del poder. Además, las contradicciones entre la posición política y la posición militar del movimiento se unen a la contradicción entre los enclaves urbanos y el escenario campesino, y la confrontación entre dos liderazgos tan diferentes como son los de Fabio Vásquez Castaño y Víctor Medina Morón⁸⁵. Tres factores de confrontación que, en última instancia, van a lastrar sobremanera la solidificación real del movimiento guerrillero.

Hacia 1972, el ELN había conseguido, pese a estas dificultades, organizarse en torno a tres frentes, con presencia en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander, y que terminaban por representar una vasta extensión de unos 50.000 km². Buena parte de este paulatino crecimiento había sido fruto de la incorporación del secuestro y la extorsión sobre buena parte del capital petrolero que tenía presencia en la región, además de por la puesta en marcha de varias operaciones de sabotaje sobre la fuerza pública y pequeñas localidades.

Sin embargo, primero, la emboscada en Canelos, a mitad de 1972, y después, la puesta en marcha de la Operación Anorí⁸⁶, van a suponer un nuevo punto de inflexión en el devenir guerrillero. Ello, porque bajo el gobierno de Misael Pastrana se va a activar un dispositivo de más de 33.000 militares cuyo principal propósito va a ser el de acabar con la estructura guerrillera del ELN. De hecho, tras esta iniciática se va a conseguir dar de baja a más de un centenar de combatientes, entre los que se encontrarán dos de sus figuras iniciales, los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño.

Este golpe y otros, inmediatamente después, van a dejar al ELN muy diezmado, en tanto que su capacidad de combate va a quedar reducida de 250 a poco más de 70 guerrilleros. Entretanto, en un intento de reagrupar al contingente y depurar responsabilidades, el comandante en jefe, Fabio Vásquez Castaño, va a verse obligado a dejar el país por cuestiones de salud, lo cual permitirá una transición de su liderazgo frente al cual, paulatinamente, va a ir adquiriendo mayor protagonismo otra figura clave proveniente de la teología de la liberación: Manuel “Cura” Pérez⁸⁷.

⁸⁵ Concurrieron varias cuestiones que permitían entender las diferencias crecientes entre los liderazgos de Fabio Vásquez Castaño y Víctor Medina Morón. Por ejemplo, para Medina (1996: 58) que mientras Medina Morón era más partidario de reducir a los mínimos imprescindibles la muerte de fuerza pública, Vásquez Castaño asumía una posición mucho más guerrillista, en tanto y en cuanto la prioridad siempre debía ser el éxito de la acción con independencia del resultado.

⁸⁶ Según el propio ELN, y tal y como afirma Medina (2008: 186) “El ELN afirma que la operación Anorí, se constituyó en la de mayor envergadura en la historia de Colombia, porque superó en concentración de hombres armados – se estimaría que en torno a 33.000- al “Plan LAZO” desarrollado en Marquetalia en 1964, en la que se comprometieron 18.000 efectivos o a las recientes operaciones militares en el Caquetá y Magdalena Medio, en las que se han llegado a movilizar 16.000 y 12.000 efectivos respectivamente”.

⁸⁷ Manuel “Cura” Pérez fue, tras la figura de Camilo Torres, la personalidad que mayor importancia va a conferir al ELN en la construcción discursiva derivada de la teología de la liberación. Nacido en Alfamén (Zaragoza,

A partir de este momento, a mediados de los setenta, el ELN queda conformado por el Frente José Sepúlveda, con unos 40 combatientes; el Frente José Antonio Galán, con 45 guerrilleros; y el Frente Camilo Torres, con unos 25 ó 30 efectivos. Estos, en última instancia supeditados a la figura de Manuel Pérez, deciden proseguir con la lucha insurgente a pesar de los planteamientos cuestionadores con el sentido de autoridad, la renovación organizativa, y el trabajo con las masas. Así, pese a todo, entre 1974 y 1980 se va a trabajar en la (re)consolidación de la estructura guerrillera, incluso aun cuando el primero de estos frentes, el “José Sepúlveda”, iniciará su desmovilización en 1978.

Igualmente, otra prioridad tras el fracaso de Anorí y la llegada de Manuel Pérez, será la de centralizar el mando guerrillero, lo cual se va a conseguir por medio de la creación de una Dirección Nacional Provisional, en 1978, ya institucionalizada hacia mediados de la década de los ochenta.

Durante estos años, el ELN sufrirá la enésima fisura, en esta ocasión, de la facción “16 de Marzo”⁸⁸, si bien, por otro lado, va a experimentar dos novedades de gran importancia con respecto a su historia reciente. Por primera vez, fruto de la política negociadora de Belisario Betancur, de la cual se desmarca esta guerrilla, el ELN pasa a ser reconocido como fuerza beligerante en Colombia. Asimismo, paralelamente al proceso de centralización, especialmente importante entre 1983 y 1986, el ELN pasa a multiplicar por cinco su número de combatientes (Calvo, 1998: 139; Medina, 1996: 154), abriendo nuevos frentes en Valle del Cauca, Huila, Chocó, Boyacá, Santander, Cesar, Antioquia, Guajira y Cauca. Ello, en paralelo con el refortalecimiento de los frentes urbanos de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En suma y sin cuantificar estas estructuras urbanas, el ELN va a disponer entre 600 y 700 guerrilleros.

Es a partir de entonces cuando se experimenta en Colombia la efervescencia real y un sobredimensionamiento del poder del ELN y de las guerrillas en general. Mientras que el gobierno de Belisario Betancur se encuentra negociando la salida negociada al conflicto con las FARC, el EPL y el M-19, hacia febrero de 1985, el ELN está buscando converger con otras fuerzas minoritarias, como el PRT⁸⁹ y el MIR-Patria Libre, con quien se fusionará,

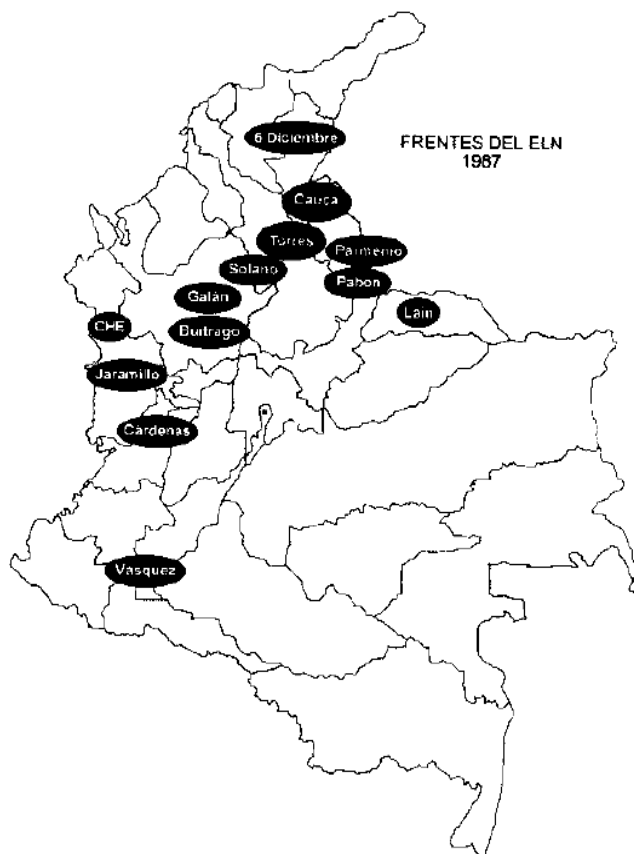
España) en 1948, se va a incorporar en 1969 a “Golconda” – un grupo sacerdotal colombiano próximo a la Teología de la Liberación y con gran arraigo en Santander-, para después enrolarse a las filas del ELN, dentro del cual empieza a ascender una vez que fallece Fabio Vásquez Castaño. Para 1983 ya es comandante en jefe de la guerrilla hasta el año 1998, cuando fallece enfermo de hepatitis C. A tal efecto, es especialmente ilustrativa la obra de Calvo (1998).

⁸⁸ Dentro de un escenario de diálogo por parte de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), esta facción disidente, separada por las tensiones ocasionadas y la indisciplina orgánica, va a ser la responsable del secuestro del magistrado y hermano del presidente, Jaime Betancur.

⁸⁹ El PRT surge en 1982 de la facción “Tendencia”, separada del PCC, y con un especial arraigo en Bolívar y Sucre, y también en Nariño, Cauca y Cundinamarca. Durante el gobierno de Virgilio Barco va a avanzar hacia una desmovilización que se materializa con la firma del acuerdo en Don Gabriel, en el municipio de Ovejas, y por el cual se desmovilizan unos 200 guerrilleros (Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, 2013, s.p.).

dando lugar, en junio de 1987, a la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN)⁹⁰.

Mapa 8: Cartografía de los Frentes del ELN entre 1981 y 1989



Fuente: Vélez (2001: 215)

El abandono de las FARC del proceso de negociación con Belisario Betancur va a permitir redundar en la búsqueda de un escenario nacional de convergencia guerrillera a partir de la creación de la referida CGSB, en septiembre de 1987, y sobre la cual el ELN va a tratar de hacer valer su noción de “guerra popular prolongada” así como su distanciamiento a los

⁹⁰ La UC-ELN hay que entenderla como resultado, igualmente, del proceso de convergencia que tiene lugar, coetáneamente, a partir de la Coordinadora Nacional Guerrillera, creada en mayo de 1985, y en la que buscan converger los que no hacían parte del proceso negociador, esto es, el ELN, el PRT, la guerrilla indigenista Quintín Lame y la facción disidente de las FARC, el grupo Ricardo Franco. Al cubrir iguales propósitos pero hacer con un mucho mayor alcance, el ELN entiende necesario diluir la que se conoció como la Trilateral y recupera el nombre de ELN tradicional

planteamientos desmovilizadores que, paulatinamente, empiezan a ganar peso, sobre todo, en el seno del M-19. De igual forma, se recupera el interés por los enclaves urbanos y se hace uso de una concepción más incluyente del poder popular, en tanto que se adiciona un objetivo por incidir en la vida política del país e incorporar nuevos elementos en la lógica de la vida militar (Medina, 1996).

Para entonces, en la segunda mitad de los años ochenta, y en buena medida gracias, presumiblemente, al impacto del narcotráfico en las finanzas de la guerrilla, empiezan a crearse estructuras de gran valor armado en el seno del ELN. Así, es que en 1986 nacen los frentes “Carlos Alirio Buitrago”, para el Magdalena Medio y el oriente antioqueño; el Frente “6 de Diciembre”, en la sierra nevada de Santa Marta; el Frente “José Manuel Martínez Quiroz”, para el norte de Cesar y sur de Magdalena; y la Compañía “Simacota”, en el departamento de Arauca.

De igual forma, entre 1987 y 1988 surgen y se fortalecen el Frente “Jaime Batemán Cayón”, en las sabanas de Sucre y Bolívar; el Frente “Astolfo González”, sobre los departamentos de Córdoba y Urabá; el Frente “Ernesto Che Guevara”, que pasa a operar en la zona cafetera del suroeste antioqueño; el Frente María Cano, para la región del nordeste y Magdalena Medio Antioqueño; el Frente “Bernardo López Arroyave”, igualmente, en el nordeste antioqueño; el Frente “Claudia Isabel Escobar”, en las regiones santandereanas de Suratá, Matanzas y California; y los frentes “Luis Fernando Porras” y “Armando Cauca”, operativos en la región fronteriza colombo-venezolana (Velásquez, 2009: 218).

Con la llegada en 1990 del liberal César Gaviria, sucediendo a Virgilio Barco, se va a plasmar un proceso de cambio político basado en la modernización del Estado, el fortalecimiento de la seguridad interna y la recuperación de la legitimidad del Estado. Para ello, va a llevar a cabo la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como principal propósito dotar al país de una nueva Constitución, y dentro de lo cual M-19, primero, y una facción mayoritaria del EPL, además de la guerrilla indigenista QL y el PRT, van a optar por desmovilizarse, buscando transformar su participación política dentro de los canales democráticos.

A tal transformación fueron igualmente invitados las FARC y el ELN, como grupos dirigentes de la CGSB, aunque sin fortuna. Con el ELN se entablan por primera vez conversaciones para la búsqueda de una salida política y negociada al conflicto, en encuentros que tienen lugar, primero en Cravo Norte (1991), y posteriormente en Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). Conversaciones truncadas pues, de acuerdo con Vargas (2006), cabe entender que en esta primera iniciativa de diálogos revistió más el interés estratégico que para la organización tenía la unidad guerrillera, que el hecho concebir una posibilidad real de una salida negociada al conflicto. Así lo puso de manifiesto la divergencia entre los diferentes interlocutores con el Gobierno, especialmente, a tenor de la operación insurgente en Norte de Santander, por parte del EPL, y que costó la vida al exministro Argelino Durán

Quintero, lo cual terminó por dinamitar los diálogos con la guerrilla por parte de la administración Gaviria.

No obstante, y aunque con el presidente Ernesto Samper (1994-1998) se retoma la politización del conflicto y se exploran vías de negociación con el ELN, a partir del “Preacuerdo de Viana” de febrero de 1998, y el “Acuerdo de Puerta del Cielo” de julio de 1998, las posibilidades de desconectar el conflicto armado con el ELN se mantendrán infructuosas. A tal efecto, se pueden entender como razones para entender el fracaso, tanto por el proceso expansivo del que se aprovecha la guerrilla, con motivo de la debilidad institucional y los problemas de gobernabilidad ocasionados por el referido “Proceso 8.000”, como por el auge de unas fuentes de financiación que permiten al ELN consolidar una posición armada con base en cerca de 5.000 combatientes y más de 30 frentes rurales, 8 urbanos y más de 40 estructuras urbanas⁹¹ (Lair, 2000: 138). Asimismo, debería añadirse una situación insostenible de violencia, fruto del impacto que el paramilitarismo, institucionalizado en torno a las ACCU, y las AUC, que desde finales de 1996 y principios de 1997, en departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar o Caquetá, van a terminar por desincentivar cualquier atisbo de posibilidad en el transcurrir de la negociación.

8. Otras guerrillas en el escenario del conflicto armado colombiano: EPL, M-19 y Quintín Lame

Aunque las dos guerrillas que van a ser objeto de estudio en esta tesis doctoral son las FARC y ELN, se han mencionado a lo largo de este capítulo otros grupos guerrilleros que merecen, cuando menos, ser planteados con algo más de detalle.

En primer lugar estaría el EPL, que surge como las dos viejas guerrillas colombianas hoy vigentes, a mediados de la década de los sesenta. Tal y como se ha dejado entrever, la mística guerrillera de otros lugares del mundo, como Yan'an en la China insurgente maoísta o Sierra Maestra en Cuba van a estar, igualmente, presentes en Colombia.

A partir de la escisión del Partido Comunista Colombiano en una facción como el Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista –PCCML-, en el año 1965, comienza a haber un convencimiento disidente sobre la necesidad de la lucha armada como medio para que el pueblo colombiano aspire a disponer del poder político y, con ello, poder solucionar sus problemas más agudos (Rizo, 2002: 103).

⁹¹ Buena prueba de cómo evoluciona entre 1986 y 1996 la fuerza del ELN, se pone de manifiesto en el trabajo de Richani (2003). El ELN disponía de 800 combatientes y una presencia en 180 municipios del país en el año 1986. Hacia 1990 la presencia se amplía a 250 municipios y un pie de fuerza de 1.800 guerrilleros. En 1994, si bien la presencia territorial se mantiene, el contingente de insurrectos asciende a 2.800. Por último, ya en 1996, las estimaciones gravitan en torno a los 5.000 guerrilleros y la presencia efectiva en unos 350 municipios del país.

En esta época, hacia 1964, se registran intentos por constituir la guerrilla en enclaves similares a los que albergan al ELN, en Santander, y en otros como sur de Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Risaralda.

La estrategia, fuertemente inspirada en el foquismo guevarista, pasaba por crear un núcleo en cada uno de estos departamentos desde los que estimular un movimiento insurreccional en clave nacional. Sin embargo, y tal y como señala Trejos (2013: 381), el apego al foquismo y la escasa experiencia militar van a terminar rápidamente, el mismo año 1965, con la desaparición del núcleo de Guacarí, en Valle del Cauca.

A partir de entonces y hasta 1967, se reubican los esfuerzos de un EPL que busca erigirse, más allá de como brazo armado del PCCML, como un ejército revolucionario *per se*. En este nuevo intento se va a hacer especial énfasis en el trabajo de masas en la región noroccidental del país, recogiendo, a tal efecto, parte del germen guerrillero que había quedado en algunos lugares bajo un profundo descontento campesino, tal y como sucedía en el Alto Sinú, el Bajo Cauca o el valle de San Jorge (Pécaut, 2006).

Sobre estas circunstancias, en 1967 se precipita una sublevación campesina focalizada en estos enclaves, en buena medida, gracias a los trabajos que se habían ido llevando a cabo sobre las bases populares, en lo que tiene que ver con convencimiento, educación y movilización en torno a un punto en común: la acción guerrillera como mecanismo, en última instancia, para aspirar a una sociedad mejor. De este modo, desde finales de los años sesenta, particularmente las regiones de Bajo Cauca y Urabá, en el departamento de Antioquia, y el departamento de Córdoba, se van a erigir como escenarios fundamentales de un EPL que, sin embargo, va a estar fuertemente diezmado por las disensiones internas que conduce incluso a varias escisiones.

Desde la segunda mitad de los años setenta, concretamente entre 1978 y 1980, se producirá una discusión interna entre el EPL y el PCCML en la que, con motivo del XI Congreso, se va a optar por dejar de lado el postulado maoísta, para profundizar en el trabajo de masas e incluso buscar converger con otras guerrillas. Asimismo, como sugiere Behar (1985), el objetivo va a pasar por enfatizar la dimensión política, incluyendo nuevas claves de pensamiento y desarrollando una estrategia envolvente del campo sobre la ciudad.

Serán tiempos de conformación sólida del EPL, que incluso superará los 2.000 combatientes, de acuerdo a una fuerte base campesina e intelectual, y con un gran arraigo en las plantaciones bananeras y los colonos campesinos del noroccidente del país (Richani, 2003: 140). Sin embargo, su constricción espacial al departamento de Antioquia va a conducir al grupo a tener una percepción errada de lo que debía ser un grupo guerrillero de proyección nacional.

Hacia el año 1984, el EPL va a ver con buenos ojos la invitación del presidente Belisario Betancur a negociar si bien, utiliza la tregua como oportunidad para su fortalecimiento aunque, apenas un lustro después, y aun siendo parte de la CGSB, va a terminar por posicionarse mayoritariamente a favor de la desmovilización. Ello, también, en buena

medida, por el fuerte impacto que sobre la guerrilla van a tener tanto la Fuerza Pública, especialmente en el departamento de Córdoba, como muy especialmente, el impacto de la acción paramilitar que las embrionarias ACCU⁹² van a desarrollar en la referida región de Urabá.

Mapa 9: Presencia del EPL en municipios de Colombia en 2012



Fuente: INDEPAZ (2012: 27)

Hacia finales de 1990 se comienza a negociar pues, una desmovilización que se materializa en febrero de 1991, con el abandono de las armas de más de 2.500 combatientes y la

⁹² Con posterioridad se verá que las ACCU reemergen el proyecto paramilitar en Córdoba y Urabá, y se redefinen, a partir de 1997, como proyecto con vistas a una expansión como proyecto en clave nacional.

transición a una estructura política, Esperanza, Paz y Libertad que, no obstante, va a ser víctima de multitud de asesinatos selectivos provenientes de las FARC, para quienes la desmovilización no fue sino una traición en connivencia con ciertos sectores del paramilitarismo.

Hoy en día quedaría una reducida facción disidente, conducida inicialmente, y hasta 1994 por Francisco Caraballo, y que en la actualidad se organizaría por una comandancia que responde al nombre de “Dirección Nacional Juan Montes”, y que aglutinaría menos de 200 guerrilleros sobre una base espacial organizada en milicias y poco coordinada, operativa en los municipios de Norte de Santander de El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Teorama, Tibú (INDEPAZ, 2012: 27).

La segunda guerrilla a presentar sería la guerrilla indigenista QL, la cual toma su mito fundacional cuando el 5 de enero de 1985, una columna de aproximadamente ochenta hombres, descienden del noroccidente caucano para tomar la población de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca. A diferencia del ELN en Simacota, este contingente se caracterizaba por un rasgo particular, se trataba de un grupo armado netamente indígena que portaba en sus uniformes las siglas CQL - Comando Quintín Lame-, que le confería una impronta diferente al resto de grupos armados que, hasta el momento, habían operado en la zona. A lo sumo, solo una parte del contingente se correspondía con un sector disidente de las FARC, el grupo Ricardo Franco, que años más tarde pagaría la propia violencia de las FARC en una sanguinolenta purga interna (Peñaranda, 2010: 44).

La existencia de la guerrilla indigenista QL hay que encontrarla, como sugiere Espinosa (1996: 21), en los enfrentamientos permanentes entre Ejército y guerrilla que habían deteriorado sobremanera la estructura económica y social de la región, cuyo imaginario percibía mayoritariamente que el conflicto en Cauca no tenía como propósito acabar con la guerrilla, sino repercutir directamente sobre los derechos de la comunidad indígena residente. Asimismo, la organización indigenista, articulada en torno al CRIC, fue ganando una visibilidad que colisionaba con los intereses de los grandes terratenientes de la región y que propició una campaña de desautorización que, incluso, llevó a tildar a los indígenas de combatientes subversivos del M-19 (Caballero, 2013).

Es precisamente esta situación de desamparo la que invita a la organización de la autodefensa indígena, la cual va a estar operativa entre 1977 y 1984 y después, en forma de guerrilla, hasta 1991, en los municipios caucanos de Puracé, Santander de Quilichao, Páez, Buenos Aires, Cajibío, Caldonó, Popayán, Caloto, Inzá, Jambaló, Piendamó y Totoró (Vicepresidencia de la República, 2004: 6).

Más difícil resulta precisar el número de integrantes que hicieron parte de esta guerrilla, la cual quedó articulada, en todo caso, en torno a cuatro frentes móviles (Rizo, 2002), que se distanciaban del tradicional quehacer guerrillero en tanto y en cuanto, el objetivo no era sino

fortalecer y defender a la comunidad indígena dentro de la tesitura de desarraigo y desprotección del departamento, coadyuvando a su vez a la institucionalidad de las autoridades tradicionales de la comunidad.

Dentro de una lógica racional de instrumentalizar la violencia, los años más violentos de la guerrilla indigenista QL transcurren, fundamentalmente, entre 1985 y 1988, cuando ésta protagoniza alianzas estratégicas con el M-19 y con el Comando Ricardo Franco, disidente de las FARC, para combatir a los propietarios rurales y la creciente expansión que venía experimentando, sobre todo, el Frente 7 de las FARC.

Tanto es así que la guerrilla indigenista va a hacer parte del conocido como “Batallón América”, erigido en torno al M-19 y dirigido por Carlos Pizarro. Éste, se va a constituir desde mediados de los ochenta y, especialmente entre los años 1986 y 1987, va a tener un especial protagonismo de la guerrilla indigenista, sobre todo, con motivo de la muerte de su fundador, Luis Ángel Monroy⁹³. Ello generará una serie de actos violentos de la guerrilla que se traducirán en la toma de varias localidades que, a su vez, conducen a más acciones militares y más presión sobre la comunidad local, generando un enrarecimiento entre la lógica de funcionamiento de la guerrilla y el resultado de las consecuencias generadas (Peñaranda, 2010: 70).

Es por todo que desde el año 1988, la guerrilla entra en un viraje orientado hacia la desmovilización armada, sin que ello suponga una despolitización de la reivindicación indigenista en el departamento del Cauca. Más bien, lo cierto es que la resistencia armada, en adición con la movilización social, sirvió para contener el avance expansivo de las FARC, frenando la violencia de los grandes terratenientes y colocando la problemática indígena en el escenario nacional, lo cual obligó a los indígenas a tener que asumir nuevas posiciones, a tal efecto, en el nuevo horizonte político que tiene lugar, sobre todo, a partir de 1990 en el nuevo escenario constitucional colombiano (Villa y Houghton, 2005).

Hacia mayo de 1991 ya se había materializado, de manera exitosa y ejemplar, la desmovilización de los últimos 157 insurrectos, con plenas garantías para su abandono de las armas, y con una proyección política tanto dentro del Cauca como a nivel nacional de las organizaciones indígenas del departamento y del movimiento en su enclave nacional. Movimiento que, por las particularidades multiculturales que ofrecía la Constitución de 1991, resultaba de gran valor e interés para el empoderamiento de estas comunidades indígenas tanto de Cauca como del conjunto del país (Pinto, Vergara y Lahuerta, 2002: 14).

⁹³ Luis Ángel Monroy fue uno de los grandes impulsores de las autodefensas indígenas. Durante la década de los setenta va a tener importantes vínculos con la guerrilla del M-19, y fue detenido por la represión que siguió al asalto del Cantón Norte, en 1978. Tras dos años en prisión vuelve al departamento de Cauca para inspirar la creación de la guerrilla indigenista Quintín Lame y ser su primer comandante (Peñaranda, 2012).

En tercer lugar, cabría hacer referencia a la guerrilla del M-19, la cual, puede decirse, es la tercera gran guerrilla que ha sufrido la historia política colombiana en los últimos años junto con las consabidas FARC y ELN.

Su origen hay que encontrarlo en el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 1970, en las que concurre el conservador Misael Pastrana junto con el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, al frente de la Anapo⁹⁴. El resultado de los comicios acabará resolviéndose del lado del conservador, con gran arraigo en el enclave rural, pero por apenas 65.000 votos. Un margen ajustado que será rechazado por la oposición anapista, alegando la existencia de fraude electoral si bien, el cuestionamiento debe relativizarse, pues como señala Bushnell (2012: 326-327):

“si las elecciones fueron robadas, lo fueron solamente en el sentido de que cualquier elección colombiana podría verse viciada por diversas irregularidades cometidas de un lado y otros (...) De cualquier manera, la disputada contienda electoral de 1970 no cambia el hecho que, a pesar de todo, las elecciones durante el Frente Nacional presentaron mucho menos irregularidades que las que hasta entonces había conocido Colombia”.

De acuerdo a esta circunstancia, es en el año 1974 que los representantes más a la izquierda de la Anapo, Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Luis Otero Cifuentes, junto a otros nombres como Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almarales, Everth Bustamante o Iván Jaramillo, fundan el “Movimiento 19 de abril”. Un movimiento operativo como brazo armado de la Anapo si bien, entre 1975 y 1976, se desmarca del mismo, primero, por desavenencias con el sector más conservador de la Anapo, y segundo, por el fracaso partidista de lo que se concibió como la Anapo Socialista (León, 2012: 247).

El M-19, a diferencia del resto de guerrillas, nunca tuvo una ideología muy marcada, a pesar de que trabajos como el de López de Rouch (1994) tildan a la guerrilla de una orientación de extrema izquierda en su formación. Alejados del guevarismo, del marxismo-leninismo o del maoísmo, aunque dentro de un sistema político, económico y social copado de contradicciones, el M-19 nunca dispuso de un ideario preciso (Luna, 2007). Su marcado nacionalismo, su hostilidad a las inversiones, y en especial a Estados Unidos, su reivindicación de mayor igualdad y su crítica a un sistema político excluyente pueden destacarse como los rasgos ideológicos más significativos (Bushnell, 2012; Narváez, 2012).

⁹⁴ La Alianza Nacional Popular, Anapo, fue una coalición política creada por Rojas Pinilla en 1961 y que en 1970 le llegó a disputar la presidencia de la República al conservador oficialista, Misael Pastrana. Tras una ajustada derrota, objeto de todo tipo de cuestionamientos, y que incluso va a albergar la aparición del M-19, va a mantenerse en la estructura partidista colombiana hasta 1998.

En 1974 es precisamente la hija del dictador, María Eugenia Rojas, quien concurre como candidata presidencial, sobre la base de un viraje de izquierda pero insuficiente para disputarle la victoria al liberal López Michelsen. La obtención de 492.000 votos relegará a la Anapo como tercera fuerza política si bien, desde entonces, operando como partido venido a menos hasta su definitiva desaparición en 1998. Resulta interesante la contribución de Ayala (2011).

Sobre la base de lo anterior, el M-19 se constituye como una guerrilla de carácter urbano aunque con una importante dimensión política de cambio que, en última instancia, termina por integrarse en la vida política colombiana. Ello, aun a pesar de su activismo armado, especialmente intenso en la primera mitad de los años ochenta, y bajo la particularidad de no disponer de espacios territoriales propios como sucedía con las FARC (Pizarro, 1986).

Las comunidades de legitimación del M-19, como del resto de guerrillas, hay que encontrarlas en un escenario como el de los setenta, en el que la economía de intervención estatal va abriendo paso a un modelo neoliberal que ya en los ochenta conduce al país a tasas de inflación del 30%, tasas de interés del 50%, una profunda pérdida de competitividad, o un desempleo que llega a cifras del 14% (Kalmanovitz, 2003: 483). De igual forma, la agudización del déficit externo comercial, del déficit en la balanza de pagos, del déficit público y del déficit fiscal, unido a un incremento de inequidad, pobreza y corrupción, van a darse en correspondencia inversamente proporcional a conquistas sociales en empleo, salud o educación, favoreciendo en suma un clima de relativo colapso y parálisis del Estado, que permite entender la efervescencia del hacer guerrillero (Ocampo *et al.*, 1987).

Como se señalaba, en el caso del M-19 no existen enclaves territoriales como los de las FARC, ELN o EPL. Más bien un fuerte arraigo urbano en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Medellín y, en menor medida, en Boyacá, Barrancabermeja, Popayán, la región de sur de Bolívar y los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Risaralda (Fajardo, Pabón y Roldán, 1980).

Desvinculado de la Anapo, el M-19 va a ser la guerrilla que en la década de los ochenta más protagonismo mediático va a tener, sobre todo fuera de Colombia. Sus actuaciones tuvieron un gran impacto en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, cabe destacar el robo de la espada de Simón Bolívar del Museo Quinta de Bolívar (1974); la sustracción de 5.000 armas en el establecimiento de Cantón Norte perteneciente al Ejército colombiano (1978); la retención de 52 personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985⁹⁵. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligados a retirarse a los emplazamientos selváticos del suroccidente colombiano, sobre los departamentos de Caquetá, Huila y Cauca, principalmente.

Sobre estas circunstancias, y fracasadas las negociaciones de 1984 con Belisario Betancur, y con serias fricciones dentro de la CGSB, el M-19 va a empezar a negociar con el gobierno liberal de Virgilio Barco el 2 de abril de 1988, cuando la guerrilla declara un cese unilateral del fuego y se lleva a cabo un acto que guardaba lógica con las declaraciones de su última conferencia nacional guerrillera de 1985.

⁹⁵ La toma del Palacio de Justicia tuvo lugar el 6 de noviembre de 1985 por parte del M-19, quien tomó 350 rehenes entre los cuales había magistrados, consejeros de Estado, abogados y visitantes, en un acto que se prolongó durante 27 horas y que dejó un total de 99 muertes y 10 desaparecidos (Pastrana, 2013: 114).

De manera rápida, el 9 de marzo de 1990 se va a firmar el que fue conocido como “Acuerdo de Corinto”, cuya materialización ya se llevaría a cabo ya bajo el gobierno de César Gaviria. A tal efecto, y como recoge el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Análisis Político (2013: 23):

“la desmovilización del M-19 sería fruto de un acuerdo político que implicó su participación en el régimen de circunscripción temporal especial de paz en el Congreso de la República para partidos políticos surgidos y constituidos por exintegrantes de grupos alzados en armas”.

Un procedimiento que, exitosamente, permitiría desmovilizar 900 guerrilleros y transformar el M-19, en un partido político como fue Alianza Democrática M-19 que llegaría a obtener un 12% de los votos en las elecciones presidenciales de 1990, y un 27% en la elección relativa a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente⁹⁶.

9. Otras dinámicas de la violencia colombiana. Narcotráfico y paramilitarismo

La década que transcurre a lo largo de 1980 va a ser un período particularmente oscuro de la historia colombiana, como resultado de los severos problemas de orden público por los que va a transcurrir el país.

A partir de los años ochenta se inicia un proceso expansivo de la violencia. Tanto es así, que si el homicidio violento era la séptima causa de muerte en Colombia en el año 1973, para 1986 ya se había consolidado como la primera (Bushnell, 2012).

El narcotráfico, más allá de las guerrillas, también alimentó la emergencia del paramilitarismo, favoreciendo como nunca antes la corrupción y la impunidad, y cooptando a numerosos sectores de la sociedad civil a las causas de la violencia. Tal es su impacto en Colombia que, de la tradicional *polemología* acuñada por Bouthoul (1946), se va a derivar un particular campo de estudio, fuertemente arraigado en las ciencias sociales colombianas, que se construye en torno a la noción de violencia en el país y que, incluso, vulgarmente pasa a conocerse como la “violentología⁹⁷” (Pissoat, 2002). Esto, muy a pesar del rechazo que genera en otros expertos como Sánchez (1989), por presuponer el concepto la aceptación de una violencia como constante generalizada en un país que hasta 1930 nunca se presentó como mayormente violento respecto de sus vecinos de la región.

⁹⁶ La Asamblea Nacional Constituyente repartió sus votos del siguiente modo: Partido Liberal Colombiano (35.7% - 25 escaños); ADM-19 (27.1% - 19 escaños); Movimiento de Salvación Nacional (15.7% - 11 escaños); Partido Conservador (12.8% - 9 escaños) y el Movimiento Unión Cristiana, la Unión Patriótica y los Movimientos Indígenas ONIC-AICO, los tres con dos escaños cada uno y una cuota de representación del 2.9%) Santos e Ibeas, 1995: 365)

⁹⁷ Como principales *violentólogos*, en su mayoría, vinculados al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI-, de la Universidad Nacional resaltarían Gonzalo Sánchez, Fernando Cepeda, Eduardo Pizarro, Alejandro Reyes, Iván Orozco, Alejo Vargas, William Ramírez, Ana María Berjarano, Francisco Leal Buitrago o Daniel Pécaut, entre muchos otros. Todos, mayormente, coinciden en señalar que las causas que han originado y sostenido el conflicto armado en Colombia han sido estructurales (Leal, Restrepo y Ramírez, 2008).

Como ya se señaló, el fuerte desempleo urbano, la pauperización creciente del campesinado, la inflación galopante y la profunda inequidad permitieron legitimar la existencia de las guerrillas que durante la década de los sesenta y los setenta se habían ido desarrollando ante un Estado institucionalmente sumamente debilitado. Como se señalaba igualmente, es así como todos los grupos armados, a partir de este momento, empiezan a crecer. El M-19 lleva a cabo sus acciones más destacadas; el ELN pone en marcha su plan de reorganización nacional y a consolidar su estructura en torno al oleoducto Caño Limón – Coveñas; las FARC empiezan a desdoblar frentes y en apenas cinco años multiplica por cuatro su número de combatientes (Osterling, 1989: 294) y el EPL disfrutará de sus momentos de mayor presencia territorial y subversiva.

Paralelamente, es cuando el paramilitarismo empieza a emerger de una manera mucho más evidente, la cual será tratada con mucho mayor detenimiento más adelante. Dentro de un contexto de inoperancia institucionalizada del Estado, en el que el estado de sitio, las medidas represivas y la participación de la Fuerza Pública en conflictos sociales aparecen como constantes, empiezan a aparecer nuevos grupos que operan al margen de la ley, a fin de resolver aquellos problemas, especialmente de seguridad y de orden público, que el Estado no puede resolver⁹⁸.

A ello contribuye, desde inicios de la presidencia de Belisario Betancur, y antes, con el gobierno de Turbay Ayala, la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional, que viene a aceptar la existencia de una guerra no convencional, no declarada, que tiene como principal propósito la lucha contra el comunismo, y que incorpora una nueva forma de guerra que, con el beneplácito de las fuerzas militares, permite la aparición de grupos armados no convencionales – inicialmente con fines de autodefensa-, que acaban configurándose como la semilla embrionaria del paramilitarismo. Como señala Medina (1990: 168):

“en esta concepción de guerra no convencional, las acciones militares adquieren una dinámica distinta que se manifiesta en la eliminación selectiva del enemigo (líderes políticos, sindicales y populares), la masacre colectiva (contra quienes apoyan a la subversión y se niegan a brindar información a la inteligencia militar) y el genocidio (contra las regiones en el que existe un reconocimiento formal de la influencia del movimiento insurgente). Se recurre para el desarrollo de esta concepción a sicarios procedentes de la fuerza militar y la población civil”.

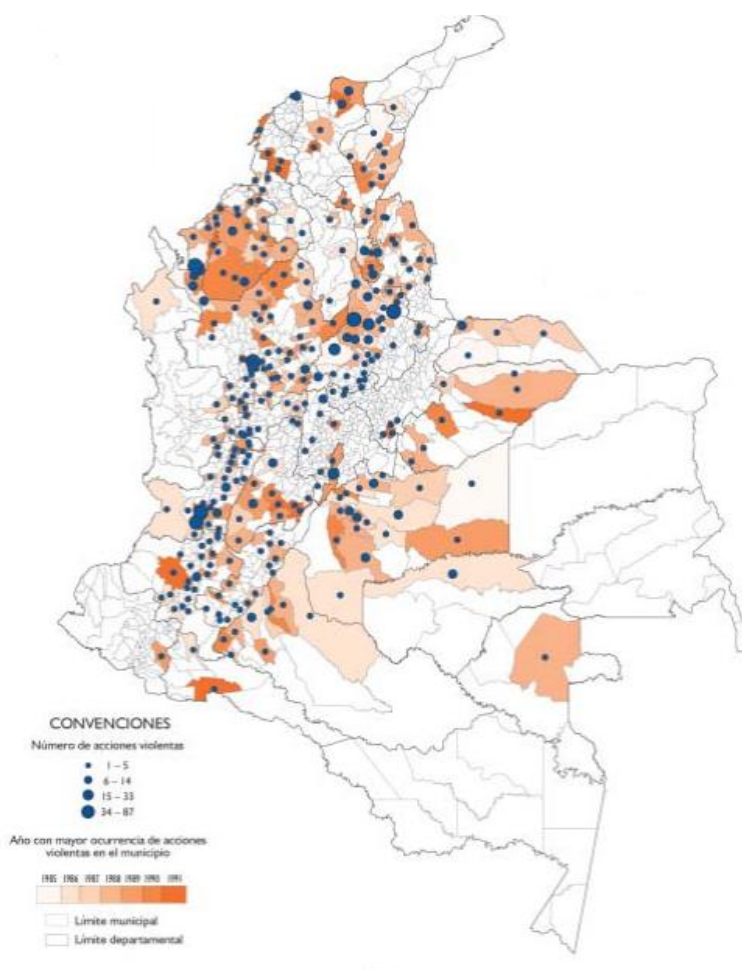
Inicialmente, el paramilitarismo que surge desde los grandes hacendados y ganaderos que buscan revertir el secuestro y la extorsión de la guerrilla en algunas regiones del Magdalena Medio, especialmente boyacense, empieza a construirse como un proyecto político, social,

⁹⁸ Véase las iniciales autodefensas de Henry Pérez en Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, y de Ramón Isaza en Sonsón, en el departamento de Antioquia. No obstante, la hipótesis que a tal efecto plantea esta tesis doctoral es la de cuestionar que la guerrilla, realmente, sirviera de razón de ser única en la emergencia del paramilitarismo, en tanto que, en muchas ocasiones, esta cuestión resultó operar, más como narrativa simbólica, que como circunstancia real.

económico y militar entre 1982 y 1983, y por ello, a hacerse extensible hacia otros enclaves como Huila o Casanare.

Asimismo, empiezan a operar narcotráfico y paramilitarismo, en connivencia contra la guerrilla y, sobre todo, contra unas FARC que tampoco renuncian a la cuota de poder que deriva del cultivo y procesamiento de coca.

Mapa 10: Distribución espacial de las acciones violentas realizadas por las Autodefensas entre 1985 y 1994



Fuente: PNUD (2003: 61)

Otra causa primera del paramilitarismo institucionalizado se encontraría en el secuestro que el M-19 llevó a cabo de Martha Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa, perteneciente al cártel de Medellín, y por el cual exigía de la suma de 12 millones de dólares en 1981. El resultado

inmediato fue la creación del MAS –Muerte a Secuestradores- que para algunos es el primer grupo paramilitar financiado desde el narcotráfico.

Lo cierto es que el MAS, en poco tiempo llegó a conseguir articular a más de 2.000 personas, especialmente narcotraficantes y terratenientes que buscaban combatir al M-19 o a las FARC por sus prácticas extorsivas y de secuestro, lo cual, si cabe más, envileció la confrontación violenta por la que atravesaba Colombia.

Poco a poco, y dentro de un escenario de guerra total entre guerrillas, paramilitares y Policía y Ejército, el narcotráfico empezó a ganar un protagonismo desmedido como trasfondo nacional. Si inicialmente surge con pequeñas plantaciones de marihuana en regiones escasamente pobladas, como la Sierra Nevada de Santa Marta y otras regiones próximas a la costa Atlántica, la cocaína rápidamente pasó a ostentar un protagonismo central en la vida del país.

Aunque Colombia inicialmente no se trataba de una región productora como lo eran Perú y Bolivia, poco a poco fue sirviendo como punto de conexión de enclaves productores a través del procesamiento en laboratorios ubicados en Medellín y sus alrededores, donde se culminaba el proceso desde el que dar salida, igualmente, hacia Estados Unidos.

La cocaína llegó en los mejores años de la década de los ochenta, a representar un 2-3% del PIB, dando lugar a una nueva clase opulenta, primero en Medellín y después en Cali, que se servía del secuestro de la democracia, a través de la corrupción y la impunidad, y de la lucha directa contra el Estado. Es bajo esta razón que en la segunda mitad de la década de los ochenta, más allá de la óptica guerrilla/paramilitarismo, emerge con fuerza el impacto del narcotráfico en la violencia del país.

Además de envilecer la situación descrita, va a ir albergando a una confrontación entre los cárteles de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, frente al cártel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela⁹⁹.

A la vez, esta cuestión se cobró la muerte de multitud de personalidades que hicieron suya la causa de combatir el narcotráfico, como el ministro de Justicia de Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, o Luis Carlos Galán, el llamado a suceder a Virgilio Barco, en agosto de 1989. Igual sucedió con otros candidatos presidenciales de la UP, como Jaime

⁹⁹ El término “cártel”, como acertadamente señalan Atehortúa y Rojas (2008: 2), fue acuñado por la *Drug Enforcement Administration* DEA-, a partir de 1982, y como consecuencia de una incautación en las proximidades a Cleveland. Es a partir de entonces que se populariza el término y pasa a ser empleado con normalidad por la justicia estadounidense y aunque el término, igualmente, pasó a ser recurrido por la opinión pública internacional, lo cierto es que este tipo de estructura nunca respondió a una expresión orgánica concreta, estable y definida. Todo lo contrario, si ésta existió fue más bien, fruto de la eventualidad, como también lo fue la lógica de alianzas y colaboraciones sobre las diferentes fases del negocio. Cali y Medellín terminaron por erigirse como dos de los centros neurálgicos más importantes del narcotráfico si bien, en toda Colombia, y con especial evidencia en el norte de Valle, el narcotráfico operó siempre con base en la relativa autonomía de actores y organizaciones.

Pardo Leal, en octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo, en marzo de 1990, y Carlos Pizarro en abril, también de 1990, y quien llegaba como candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 – ADM-19.

Desde entonces, la violencia empieza a generalizarse en todo el país. Si en 1987 el número de muertes violentas era de 16.535; en 1991 eran 28.284 (Revista Criminalidad, 2007: 119). La guerra entre los cárteles de la droga llega a sus años más violentos a la vez que, sobre todo, las FARC y el ELN comienzan a expandirse territorialmente y a incrementar notablemente su número de efectivos. En el caso de las FARC, su inclusión en el narcotráfico va a consolidarse en la región de los Llanos Orientales, donde se va a consolidar una simbiosis con los productores y distribuidores de coca que, no obstante, también se va a resquebrajar, ya en la década de los noventa, alimentando el auge paramilitar en este escenario. Antes, en el Magdalena Medio y en las regiones costeñas del noroccidente los narcotraficantes empezaron a concentrar vastas extensiones de tierra como resultado del desgaste que la extorsión de la guerrilla había ocasionado en los antiguos propietarios, acuñando lo que en 1994 se conoce bajo el nombre de las ACCU.

Así, los nuevos grupos ubicados en estos territorios, a diferencia de sus predecesores, no solo no iban a permitir la extorsión de la guerrilla sino que, además, disponían de todo un elenco de armas y organizaciones para evitarlo. Esta semilla, alimentada por la connivencia de intereses entre nuevos propietarios provenientes del narcotráfico, ganaderos y finqueros aposentados, además del Ejército y la policía regional, iba a tener como resultado la proliferación de grupos de autodefensa rurales que en la década de los noventa, primero, institucionalizadas por el Estado a través de lo que se conoció como las “Convivir”¹⁰⁰ – una vez que Barco deroga la norma que permitía la creación civil de autodefensas-, y después, en torno a unas AUC, a finales de 1997, que van a ser parte central de la violencia en Colombia.

En estas circunstancias, cualquier mínima simpatía o reticencia hacia una presunta conexión con la guerrilla o con el paramilitarismo, se traducía en terror para la población civil. Población que, en forma de secuestros, extorsiones, masacres, violaciones a los DD.HH.- y despojo de tierras, pasó a convertirse en el destinatario de una violencia de dosis inconmensurables.

10. El Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982)

Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones con anterioridad en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en

¹⁰⁰ Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada “Convivir”, que proliferaron en Colombia entre 1994 y 1997 era la forma en que vulgarmente se conocía a los grupos armados de autodefensa ciudadana que, anteriormente, y en veinte años, solo habían sido prohibidos por el presidente Virgilio Barco. Los civiles que las conformaban podían portar armas de fuego a efectos de colaborar con Policía y Ejército en la lucha contrainsurgente. Hacia 1997 tenían especial arraigo en Antioquia y Santander y llegaban a los 120.000 civiles armados.

Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo más detallado cómo, desde 1978 y hasta 1998, Colombia transcurre por dos décadas de luces y sombras en la búsqueda de una solución negociada a su conflicto armado.

Partiendo de la presidencia de Turbay, que transcurre entre 1978 y 1982, es necesario destacar cómo la consecución de la paz bajo su Gobierno fue prácticamente imposible. Primero, porque la reactivación de la guerrilla va a ser un hecho que, a lo largo de la década de los ochenta, responde a una lógica incremental constante. Por otro lado, el país incurre en una serie de dificultades económicas y un malestar social, ya explicado igualmente, de difícil gobernabilidad.

El período político de estos años resultará, en cierto modo, convulso. Al inicio de su mandato político, y haciendo uso del artículo 121 de la Constitución, Turbay Ayala va a expedir su polémico Estatuto de Seguridad; una norma que no es sino la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia, a fin de combatir el impacto de la guerrilla y del narcotráfico. Es el mismo año, 1978, cuando se produce el robo de armas en Cantón Norte, lo cual tiene como resultado inminente el incremento de la presión militar sobre las guerrillas, especialmente en los enclaves rurales, y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba – y que anteriormente habían sido restablecidas por su predecesor, López Michelsen.

Pese a esto, se encuentran dos gestos que no se pueden pasar por alto a pesar de su infructuosidad. El primero, la creación de una Comisión de Paz encabezada por el expresidente Lleras Restrepo, que inicialmente fue conformada para la búsqueda de mecanismos negociados para una salida política al conflicto. El otro, la creación, a partir de la Ley 37 de 1981, de la Ley de Amnistía, por la que se acogía una amnistía para aquellos insurrectos que, autores de delitos políticos, no fuesen responsables de ciertos tipos delictivos como homicidio fuera de combate, secuestro o extorsión. No obstante, esta vía nunca resultaría aceptada por los grupos insurgentes que, de uno u otro modo, convergían en considerar la medida como una invitación a la rendición de una causa que empezaba a vivir momentos de incuestionable algidez.

11. El Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)

La llegada de Belisario Betancur a la presidencia, en lo que tiene que ver con el tratamiento del conflicto armado, supone, por primera vez, el reconocimiento de una serie de causas tanto objetivas como subjetivas en la interpretación del conflicto armado colombiano. Causas objetivas, en tanto que se atiende a la razón político-estructural de la violencia en Colombia. Causas subjetivas, a tenor de la concurrencia de factores individuales que, de alguna manera, explicaban motivaciones personales para pasar a formar parte de los diferentes grupos insurrectos.

Se propuso un cese al fuego de carácter bilateral tanto con las FARC, como con el M-19, el EPL y la ADO¹⁰¹. Este cese de las hostilidades, además, quedaba acompañado de una amnistía dirigida a paliar las causas subjetivas de la violencia, además de una reforma democrática que debía paliar los condicionantes estructurales de la misma.

A tal efecto, el 19 de septiembre de 1982 se va a constituir la Comisión de Paz asesora del Gobierno Nacional, primero dirigida por el propio expresidente Lleras Restrepo, y después por Otto Morales Benítez y por John Agudelo Ríos, a fin de canalizar las dimensiones de paz subjetivas y objetivas, y aun cuando va a tener como actores en contra a un grueso político más que considerable y a la mayoría de las Fuerzas Armadas.

Mientras se negociaba la paz, el número de muertes violentas se duplicaba, habida cuenta del impacto de narcotráfico, la emergencia del paramilitarismo y la oposición de las referidas Fuerzas Armadas a la negociación. De hecho, durante el diálogo con las guerrillas se registraron más de 1.000 muertes violentas, directamente relacionadas con el conflicto armado.

El M-19, subestimando su apoyo popular, bajo estas circunstancias, va a decidir romper la tregua y protagonizar el magnicidio del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. El EPL, acogido también a la invitación del gobierno, va a instrumentalizar el mismo para rearmarse y llegar a los 2.000 efectivos. Las FARC, que habían conformado la creación de la UP para canalizar su transición hacia la democracia, duplicaban sus Frentes, de 27 a 48, y observaban el impacto de un paramilitarismo que empezaba a cometer uno de los mayores *partidicidios* de la Historia¹⁰².

12. El Gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990)

El gobierno de Virgilio Barco va a representar un importante cambio en la política de paz que hasta el momento se había llevado a cabo en Colombia. Se va a crear la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, al frente de la cual se encontraba Carlos Ossa Escobar, presidente en ese momento de la Sociedad de Agricultores

¹⁰¹ La ADO era una guerrilla urbana concentrada en Bogotá, que surge a finales de la década de 1970, como respuesta a un sistema capitalista concebido como opresor y violento contra la ciudadanía. Entre sus acciones más destacadas está el asesinato de Rafael Pardo Buelvas, exministro del Interior de López Michelsen, el 12 de septiembre de 1978. Siempre fue un grupo, en todo caso, muy minoritario y que se desmovilizó en la primera tregua, iniciada bajo el mandato presidencial de Belisario Betancur.

¹⁰² Como es de esperar, la UP entra rápidamente en contradicción con la idea beligerante y militar de las FARC y que permitió que en las elecciones de 1986 obtuviera más de 320.000 votos, 5 senadores, 9 representantes de Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Pese a esto, tal y como se ha señalado, el paso de las armas a las urnas nunca fue posible. De hecho, diez años después de las acciones contra la Unión Patriótica, en 1995, las estimaciones hacían referencia a la desaparición de más de 2.000 dirigentes y militantes. De hecho, en términos absolutos, Comisión Interamericana de DDHH, que es la entidad que lleva el genocidio ante la Unión Patriótica, registra actualmente más de 3.000 los asesinatos identificados y 200 desapariciones para el período que transcurre entre 1985 y 2006 (Chernick, 2012: 115).

de Colombia y después, desde 1988 al frente de la figura de Rafael Pardo como abanderado de la iniciativa para la paz.

El lema de campaña de Barco, “Mano tendida, pulso firme” se entiende a partir de la convicción de que el proceso de paz tenía que quedar en manos del Ejecutivo. La negociación requería de un cese al fuego unilateral y la posibilidad de reformas políticas, a las que había hecho alusión Betancur, se entendía que no podía quedar subsumidas a una negociación con las guerrillas.

El Estado colombiano, por su parte, debía encargarse de todo el proceso de transformación y traslación del campo de las armas al campo de los votos, para lo cual se fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación de la presidencia anterior, desde la óptica municipal y regional.

Lo cierto es que el programa de Virgilio Barco sobre el manejo del conflicto armado colombiano, tal y como reconoce Chernick (2012: 87), pareció más bien una invitación a la rendición más que una invitación a negociar. Ello, en buena parte, porque se comprendía que la violencia procedía más bien de enclaves urbanos que de rurales y, por ende, su tratamiento y mitigación debía focalizarse en enclaves donde la guerrilla, mayormente de base rural, tenía un menor arraigo¹⁰³.

Los esfuerzos del gobierno Barco siempre generaron malestar en las guerrillas, tal y como se traduce, por ejemplo, del comunicado de las FARC de 22 de septiembre de 1988, en el que la propuesta de paz de Barco se describía como un “ultimátum militar envuelto en mera retórica”¹⁰⁴. Sin embargo, hay que destacar que, a pesar de la distancia a la búsqueda de una solución negociada con la guerrilla, y aun con el auge experimentado por la violencia paramilitar¹⁰⁵, se consiguió avanzar sobremanera con el M-19, que como se ha señalado, va a decidir el 8 de marzo de 1990, desde su campamento en Santo Domingo, en el departamento de Cauca, dejar las armas bajo supervisión de la Internacional Socialista. De esta manera, se daba un tránsito, nada fácil, de las armas a las urnas, y con base en una integración en la vida política democrática, que terminaría por materializarse en administración del sucesor de Virgilio Barco, el igual candidato liberal, César Gaviria.

¹⁰³ La Comisión de Estudios para la Violencia (1987) informó que la violencia guerrillera, en 1985, solo estaba detrás del 7.51% del total de muertes violentas que acontecieron en el país. Véase: Sánchez (2009: 7) *Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios para la Violencia*. Bogotá, Colombia: Editorial La Carreta.

¹⁰⁴ Véase el comunicado publicado por el Secretariado de las FARC, del día 10 de agosto de 2012 con el título: “A 22 años de la partida de Jacobo Arenas”. Url: <http://farccom.blogspot.com.es/2012/08/el-legendario-co-fundador-de-las-farc.html>

¹⁰⁵ Hacia el final de la administración Barco, el paramilitarismo es una realidad innegable que había ido creciendo a medida que lo había hecho la guerrilla. Tanto es así que cuando el propio Virgilio Barco trató de revocar la legislación que desde 1965 permitía armas a civiles, ya era muy tarde para controlar el fenómeno. Esto es importante en la medida que por medio del Decreto Legislativo 3398 de 1965 – convertido en legislación permanente a partir de la Ley 48 de 1968–, existía en Colombia un fundamento jurídico para constituir grupos de autodefensa bajo el control de las fuerzas armadas.

13. El Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994)

César Gaviria llega a la presidencia en 1990, en buena parte, como consecuencia derivada del asesinato del candidato liberal, en 1989, Luis Carlos Galán, y que había corrido la misma suerte, dentro de una espiral de violencia, que otros candidatos presidenciales como Bernardo Jaramillo (UP) o Carlos Pizarro (AD-M19).

Bajo su gobierno, se termina de materializar el proceso de desmovilización y reintegración a la vida política del M-19 y sobre la cual, se consideraba la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución que sirviera abordar en términos más integrales, el problema de la violencia en Colombia y que, a tal efecto, estimuló la desmovilización de la mayoría del EPL, de la guerrilla indigenista QL y del grupo costeño del PRT.

Ni las FARC ni el ELN, como ya se ha señalado, tuvieron iniciativas reales de acogerse a un proceso de negociación. Más bien todo lo contrario, pues el paramilitarismo empezaba a tener un impacto sanguinolento, de confrontación, desplazamiento y disputa sobre aquellos enclaves que, tradicionalmente, durante más de dos décadas, habían sido controlados por la guerrilla. Además, por si fuera poco, la posición escéptica de las guerrillas se iba a ver reforzada una vez que, al margen de las negociaciones, el presidente Gaviria decide bombardear el campamento de Casa Verde¹⁰⁶, en La Uribe, el mismo día en que se debía votar la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de todo, se iniciaron esfuerzos en Cravo Norte (1991), Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). En Caracas se incluyó a la facción no desmovilizada del EPL y a las dos grandes guerrillas, las cuales sugerían como punto de partida, un cese bilateral del fuego que debía acompañarse de observadores nacionales e internacionales. Mientras, el gobierno solicitaba una zona de despeje en la que concentrar todo el movimiento guerrillero y que, como plantea Medina (2008), suponía aceptar que la CGSB era un actor derrotado plantear un escenario de distensión mucho más reducido que el requerido por la guerrilla¹⁰⁷.

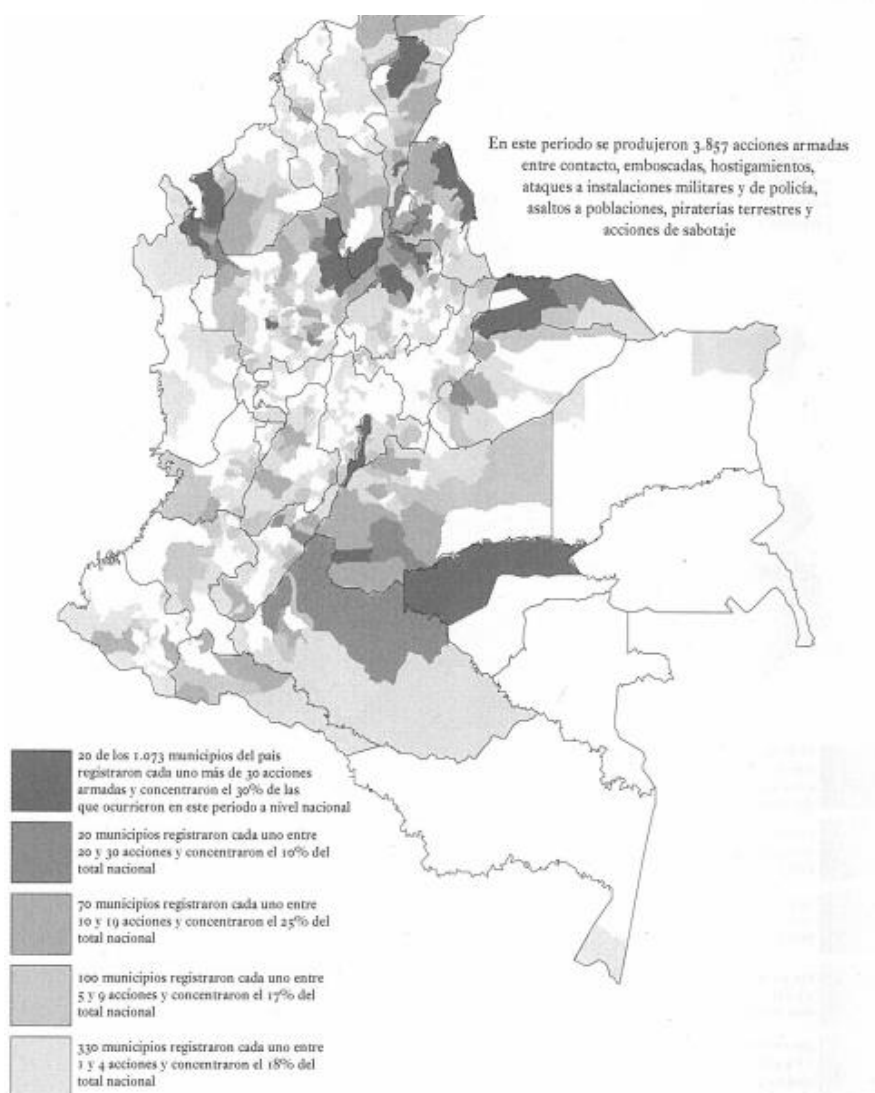
A la vista de la falta de entendimiento, en marzo de 1992 se retoman las conversaciones desde México, donde el liberal Horacio Serpa, como interlocutor del gobierno va a buscar extrapolar algunas de las lecciones aprendidas de las iniciativas de paz anteriores. Así, se va a plantear un diálogo con agenda abierta, en el que las prioridades sobre las que discutir sean:

¹⁰⁶ Casa Verde fue el campamento base del Secretariado de las FARC en el municipio de La Uribe, en Meta. Tras la intervención en Marquetalia, las FARC se piensa que se reubicaron aquí entre 1965 y 1990.

¹⁰⁷ En las negociaciones, la guerrilla insistió en mantener su área de influencia, la cual, según la misma, ascendía a 600 municipios. La intención era reagrupar a sus combatientes en 200 de ellos. El gobierno respondió ofreciendo 70 lugares como “zonas de distensión”. Ante tal circunstancia, la CGSB solicitó 96, pero cada una de ellas debía suponer un municipio completo, esto es, no aceptando la cuantificación de áreas sub-municipales. Además, en esos 96 lugares habría un cese bilateral con presencia restringida de las fuerzas armadas. Así, la guerrilla solicitaba el municipio completo, incluyendo el centro de la población y los edificios públicos. Por su parte, el gobierno concedía pequeñas áreas de campo, alejadas de los centros residenciales y administrativos. Chernick (2012: 91).

cese al fuego; relaciones con la Asamblea Nacional Constituyente; paramilitares, impunidad y doctrina de seguridad; democracia y favorabilidad política; soberanía nacional; acuerdos de verificación; y democracia económica, política y social (García, 1992).

Mapa 11: Municipios con presencia activa de la guerrilla entre 1992 y 1994



Fuente: Echandía (2006: 79)

No obstante, nuevamente, la falta de voluntad política, evidenciada, como se señaló con anterioridad, con el asesinato del exministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, a manos de la facción disidente del EPL, acabaría con cualquier atisbo de solución negociada.

El impacto del narcotráfico y del paramilitarismo, a pesar de la muerte de Pablo Escobar y el impacto sobre el cartel de Medellín; unido a un control territorial de la guerrilla que afectaba a 600 municipios de los casi 1.100 que tenía el país, y en adición a una violencia que rozaba las 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, eran razones más que suficientes para intuir que el conflicto armado seguiría vigente e inalterado.

Tampoco podía pasarse por alto la convicción, cada vez mayor, de que las guerrillas podían eficientemente alzarse con el poder político y transformar el Estado. Convicción a la que debía sumarse el fracaso político de las guerrillas desmovilizadas a partir de las elecciones de 1994, cuando el candidato presidencial de la ADM-19, Antonio Navarro Wolf, no alcanzaría ni siquiera el 4%, y peor aún, Esperanza, Paz y Libertad desapareciera a tenor de los asesinatos políticos y la represión de otros grupos armados que impidieron su consolidación a nivel local (Alcántara e Ibeas, 2001: 112).

14. El Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)

Tal y como se explicó, la presidencia de Ernesto Samper transitó por serias dificultades de gobernabilidad como consecuencia del descubrimiento de financiación por parte del cartel de Cali a su campaña contra el conservador Andrés Pastrana, en lo que se conoció como el “Proceso 8.000”.

Se trató de innovar en la política de paz a través de la creación del Alto Comisionado de Paz, y se buscó una mayor humanización del conflicto, ratificando en 1995 el Segundo Protocolo de la Convención de Ginebra, a la vez que se abría la posibilidad a que la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieran presencia en el país. Asimismo, el fortalecimiento institucional del Estado se combinó con una política de modernización y profesionalización militar¹⁰⁸.

Pese a todo, nunca hubo atisbo de que el conflicto colombiano acuñase la posibilidad de una solución política y negociada al mismo.

En lo que respectaba a las FARC, las aproximaciones estuvieron presentes desde el inicio y en torno a las posibilidades de un diálogo dentro del cual las propuestas de gobierno, como plantea Chernick (2012: 94), eran cinco: 1) garantizar la discreción en los contactos con la guerrilla, lo que no debía confundirse con secretismo; 2) asegurar por parte del gobierno la seguridad de los representantes de la insurgencia mientras tuviese lugar los posibles diálogos; 3) aceptar negociar con la totalidad de la CGSB y en su defecto, con aquellos grupos cuya voluntad así fuese; 4) negar como precondition el cese de las hostilidades y 5) en todo caso,

¹⁰⁸ Ésta se articuló en torno a cinco ejes: 1) favorecer la movilidad y el desplazamiento de las fuerzas armadas; 2) mejorar las comunicaciones físicas y tecnológicas entre los distintos organismos operativos en cuestiones de seguridad y defensa; 3) conferir mayor armamento y capacidad logística a la fuerza pública; 4) incrementar la capacidad de combate nocturno y, por último, 5) crear unidades militares concretas promoviendo, en todo caso, la profesionalización del Ejército (Samper, 2000: 111).

actuar de acuerdo con los protocolos establecidos por el DIH. De igual manera, se albergaba que una eventual negociación requeriría de un marco de reforma política, social y económica, y se partía de la necesidad de, por fuera de estas aproximaciones, trabajar paralelamente en una vía de aproximación también con el paramilitarismo – que se entendía más bien como una consecuencia no deseada del propio conflicto y de su creciente narcotización.

Bajo estas circunstancias, a finales de 1994, tendría lugar la primera aproximación con las FARC si bien ésta quedó truncada al no satisfacerse la reivindicación de la guerrilla por desmilitarizar el municipio de La Uribe, en el departamento de Meta. El gobierno accedía a la solicitud de la guerrilla, aunque con excepción de la cabecera urbana del municipio, lo cual, pese a todo, suponía aproximadamente 16.000km². Este punto de desacuerdo, en todo caso, fue suficiente para truncar cualquier opción real de diálogo que, según Samper (2000: 318), respondió a un desprecio continuo durante los cuatro años de su mandato y que, sin duda, de haberse superado, “hubiera permitido conseguir un avance en un acuerdo de reconciliación”.

Las negociaciones con el ELN fueron más allá. El éxito de la campaña del “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad”¹⁰⁹ obtuvo un fuerte acompañamiento y apoyo popular que se tradujo en que más de diez millones de personas reconocieran su legitimidad a un eventual diálogo de paz (Pizarro, 2011).

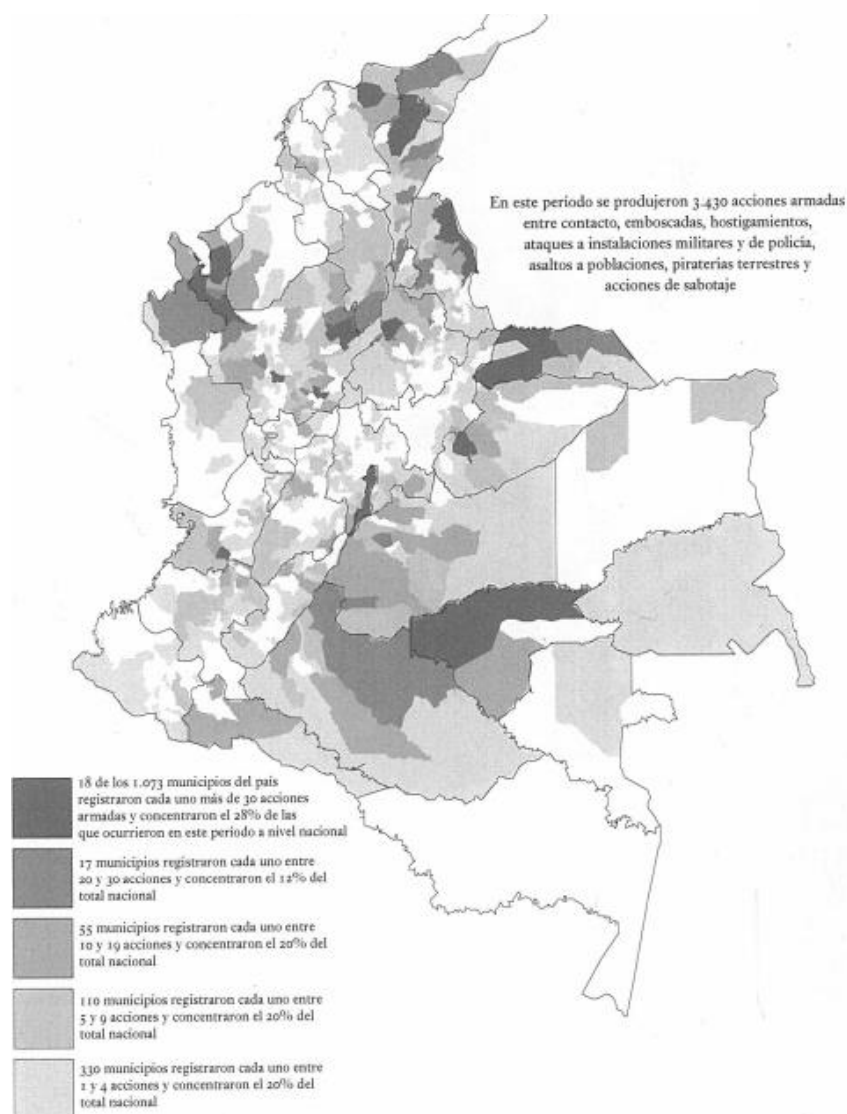
Gracias a ello es que se pudo firmar el “Preacuerdo de Viana” con el ELN, a inicios de 1998, y del cual se convino convocar una Convención Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia Social en la que quedasen reflejados los principales problemas y déficits estructurales que durante décadas habían alimentado la violencia derivada del conflicto armado. Sin embargo, este proceso finalmente no llegó a buen puerto por una filtración del diario conservador español ABC¹¹⁰ sobre el acuerdo, lo que propició que el ELN optase por interrumpir los avances en la negociación, arguyendo la proximidad electoral y su voluntad de no querer ser parte de una potencial herramienta electoral.

¹⁰⁹ El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad en Colombia fue una votación que tuvo lugar el día 26 de octubre de 1997, por la cual casi diez millones de colombianos expresaron su compromiso por la paz en el país. Ello, fue la primera expresión popular contra la guerra y un ejercicio ciudadano que evidenciaba el repudio a la violencia y el apoyo a la búsqueda de iniciativas que permitieran superar la violencia del país. El texto del conocido como Mandato por la Paz venía a decir lo siguiente:

“Me comprometo a ser constructor de Paz y Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta y acojo el Mandato de los Niños por la paz. Exijo a los actores del conflicto armado: No más guerra: Resuelvan pacíficamente el conflicto armado; No más atrocidades: Respeten el Derecho Internacional Humanitario; No vinculen menores de 18 años a la guerra; No asesinen; No secuestren personas; No desaparezcan personas; No ataquen a la población ni la desplacen por la fuerza; No vinculen civiles al conflicto armado”.

¹¹⁰ El diario ABC destapó el preacuerdo de Viana al entender que las negociaciones que habían avanzado ELN y el gobierno de Ernesto Samper había sido un “acuerdo de carácter sectario” que respondía al intento desesperado del presidente de lavar su imagen por medio de la paz. Véase: Diario ABC del 25 de marzo de 1998. Véase: <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/03/25/033.html> Consultado el 11 de abril de 2015.

Mapa 12: Municipios con presencia activa de la guerrilla entre 1995 y 1997



Fuente: Echandía (2006:80).

Aun con todas estas dificultades, Ernesto Samper no cesó en su empeño y tras la parálisis de las primeras aproximaciones con el ELN, trató de reactivar el diálogo, en esta ocasión, por medio de la Resolución 83 de 1998, a partir de la cual se reconocía el carácter político del ELN y se promovía un segundo encuentro para la paz. Éste, quedaría articulado en torno a los que fueron conocidos como los “Acuerdos de Puerta del Cielo”, los cuales contaron con el apoyo de la Conferencia Episcopal alemana y se identificaban cinco puntos con los que aspirar a una salida negociada al conflicto con el ELN: 1) la urgencia de humanizar la guerra;

2) la necesidad de controlar los abusos de los actores armados; 3) el respeto a la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición del uso de minas antipersonales; 4) la presencia de la sociedad civil como actor protagonista en la construcción de la paz; y, finalmente 5) la creación de una Convención Nacional como escenario para la resolución de los problemas sociales y políticos del país que arrastraba el país, y sin cuya superación, se entendía, resultaba imposible hablar de paz (Chernick, 2012: 76). Sin embargo, la apuesta por la paz con el ELN había quedado desdibujada y dada la proximidad con las elecciones presidenciales de 1998, esta nueva apuesta por el diálogo no terminaría nunca por dar sus frutos.

CAPÍTULO III: CONTINUIDADES Y RUPTURAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO ENTRE 1998 Y 2012

1. Introducción

El objeto de este segundo capítulo descriptivo en esta tesis doctoral es el de continuar con lo expuesto en el anterior si bien, profundizando en el período que va a resultar objeto de estudio. Es decir, entre 1998 y 2012, integrando los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002); Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010); y Juan Manuel Santos (2010-2012).

Se inicia con una presentación de Colombia hacia el año 1998, una vez que Pastrana se impone al candidato samperista, el liberal Horacio Serpa. Esta victoria electoral se traduce en el intento más serio, pero a la vez más desvirtuado, de la historia colombiana en cuanto al intento por superar y desactivar el conflicto armado, particularmente, con la guerrilla de las FARC.

El trasfondo es un proceso desvirtuado por la falta de voluntad política de unas FARC, en proceso de expansión, pero de acuerdo a un proceso de transformación de la Fuerza Pública que, tal y como se describe, se sostiene sobre la base de dos pilares: la modernización de la Policía y Fuerzas Militares y la negociación del Plan Colombia. De hecho, como se mostrará, los primeros pasos en el cambio en cuanto a la correlación de fuerzas entre guerrilla y Estado, precisamente, inicia, bajo la presidencia de Andrés Pastrana. Sin embargo, son merecedoras de destacar las palabras del General (r) del Ejército, cuando es preguntado al respecto:

“Respecto del Caguán, yo le digo que nadie quería negociar. Pastrana se puso nervioso cuando perdió con Serpa en la primera vuelta, y de ahí los contactos, la foto con Victor G. Ricardo y todo lo que ya casi ha sido algo novelesco. Pero Pastrana quería la presidencia. Y a la vez, las FARC querían crecer y tomar el poder por una vía que les resultaba posible. De ahí nunca se pasó de la primera de las tres fases que amerita un conflicto como el colombiano: 1) La palabra es apoyo para el fusil; 2) El fusil es apoyo para la palabra y 3) El fusil es un obstáculo para la palabra. En el Caguán nunca se pasó del primer nivel”. (EP 6, septiembre de 2015).

El fracaso del intento de negociación conocido como el “proceso del Caguán” se va a traducir en los niveles más elevados en cuanto a violencia directa, tanto de FARC y ELN como de paramilitarismo, al cual se le dedica especial atención, dentro de una coyuntura en la que, favorecido por todo, se implementa una política pública de seguridad, la PSD, en la que la dimensión más beligerante de la lucha contra los grupos armados irregulares se transforma en un intrincado escenario. Intrincado por las nebulosas, los éxitos militares y los fracasos democráticos que van a plantear, finalmente, más allá del rédito obtenido en materia de seguridad, un importante cuestionamiento respecto de la superación de los límites de la democracia y el Estado de Derecho.

Tal situación que va a desembocar en un cuestionamiento continuo que, a su vez, no parece resultar exitoso en la desactivación del conflicto, y que va a determinar la línea del gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras presentar, los éxitos y fracasos, y las luces y sombras de la PSD y su compleja articulación con el Plan Colombia se trata de llegar al año 2010 y a la consolidación de un proceso de *periferalización* del conflicto armado. Es decir, una reubicación y una consolidación espacial de las guerrillas, mayormente, sobre departamentos fronterizos, muy alejados de las dinámicas del centro, y en los que ni aspersiones aéreas ni iniciativas de la Fuerza Pública han conseguido terminar con el activismo guerrillero. En estos departamentos, además se dan otras particularidades como amplias zonas de cultivo de coca, existencia de minería ilegal así como unos indicadores en cuanto a desarrollo humano o calidad de vida de los más reducidos de todo el país.

De hecho, tal vicisitud va a determinar la política de Juan Manuel Santos, bajo la cual no se consigue reducir el activismo armado de FARC, ELN, e incluso Bacrim – más bien, todo lo contrario- y que puede permitir entender el proceso actual de negociación. Proceso que se puede entender bajo la lógica de “doble estancamiento doloroso”. Una situación en la que el Gobierno empieza a requerir ingentes esfuerzos económicos y militares para combatir a unas guerrillas cuya ubicación espacial termina siendo un valor agregado que, cuando menos, relativiza el alcance y éxito de los operativos orientados a su debilitamiento en estos enclaves. A su vez, para las guerrillas, la posición periférica le relega a una posición de presencia territorial mucho más compleja y, dadas las circunstancias de disparidad de fuerzas, imposible de revertir.

2. La victoria de Andrés Pastrana y la situación del conflicto armado bajo el proceso del Caguán

Andrés Pastrana Arango, a través del partido Gran Alianza para el Cambio, va a imponerse en los comicios de 1998 al candidato liberal y oficialista, Horacio Serpa Uribe, por un margen de casi medio millón de votos - 456.234 votos-, en lo que fue una campaña electoral fuertemente marcada por la necesidad imperativa de abordar un proceso de paz que confiriese una salida negociada al conflicto armado colombiano.

Ello, porque en la primera vuelta, Horacio Serpa resultó como la primera opción electoral, al obtener 3.696.334 votos frente a los 3.576.781 del candidato conservador (Pastrana, 2013: 149). Dada esta proximidad, ambos van a buscar, haciendo valer la importancia del mencionado con anterioridad “Mandato por la Paz”, convertir la negociación con la guerrilla como su *leitmotiv* electoral. Tanto es así, que incluso, para el caso de Andrés Pastrana, antes de celebrarse la segunda vuelta, el que posteriormente se va a convertir en su Alto

Comisionado de Paz¹¹¹, Víctor Guillermo Ricardo, se va a reunir con los dirigentes de las FARC, Manuel Marulanda y Mono Jojoy, en la región selvática de los Llanos del Yará, departamento de Meta, mostrando a la opinión pública colombiana una imagen que terminaría por decantar los comicios del lado de Pastrana.

Antes, incluso de su toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 1998¹¹², el propio Pastrana se va a reunir con Manuel Marulanda, a fin de poner en marcha un diálogo de paz que iniciaría a comienzos de noviembre de ese mismo año en lo que, vulgarmente, se conoce como el “proceso del Caguán”¹¹³.

Respecto de las reglas sobre las que va a operar este acuerdo, en primer lugar, cabe destacar la falta de un cese al fuego por parte de los actores. Ya se señaló cómo durante la presidencia de Betancur se aceptó un cese bilateral de las hostilidades, y bajo los mandatos presidenciales de Barco y de Gaviria operó la exigencia al cese unilateral de las acciones armadas por parte de los grupos armados.

En esta ocasión, por primera vez, se buscaba la negociación dentro de un contexto de guerra inalterada, quizá, tomando como referencia la experiencia inmediata de El Salvador, donde las partes, Gobierno y el FMLN, iniciaron las negociaciones dentro del conflicto y solo abordaron esta cuestión una vez que se resolvieron puntos sustanciales de la negociación (Martínez, 2011).

Un punto clave de la negociación tuvo lugar de acuerdo con la controvertida conocida como “zona de despeje”, pues las FARC no querían negociar fuera de Colombia. Al respecto, y haciendo valer una promesa electoral, Andrés Pastrana aceptó desmilitarizar 42.000 km² – es decir, una extensión superior a la de Suiza-, lo cual incluía a las cabeceras urbanas y rurales de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (Guerra de Hoyos, Pérez y Tapia, 2011).

El sentido de hablar de “zona de despeje” o “zona de distensión” suponía, no obstante, que el Gobierno debía retirar toda su presencia de los municipios que construían esta región y, muy particularmente, cualquier atisbo de Policía o Fuerza Militar. Tanto, que durante la vigencia de esta “zona de despeje”, la función de seguridad correspondió a las FARC y a un

¹¹¹ La figura del Alto Comisionado de Paz, en Colombia se trata de una figura que tiene su origen bajo la administración Betancur y que ha sido preservada y desarrollada durante las últimas dos décadas, al tratarse de un cargo de designación directa por parte del Presidente de la República a fin de servir como asesor directo del presidente en temas de negociación de paz con los actores que tradicionalmente han hecho parte del conflicto armado colombiano.

¹¹² El 7 de agosto es la fecha en la cual los presidentes electos toman posesión. Se trata de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, cuando el 7 de agosto de 1819 el Ejército realista y el criollo se enfrentaron en Boyacá con una victoria para las tropas de Bolívar que determina la futura liberación de Colombia del legado colonial español.

¹¹³ Para analizar el proceso del Caguán con mayor profundidad, son relevantes los siguientes trabajos de International Crisis Group (2002), Carvajal y Pardo (2002) o Cepeda (2001).

cuerpo, construido *ex profeso*, que a modo de policía civil¹¹⁴, tendría la función atribuida de colaborar con la guerrilla (Gomes, 2005).

Una vez que son inaugurados los diálogos, en enero de 1999, las FARC y el Gobierno van a conseguir una “Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz” que respondía a doce temas. Temas tales como reformas económicas, reformas políticas, reformas agrarias, cultivos ilícitos, derechos humanos, derecho internacional humanitario, recursos naturales, reforma de la justicia, reforma política, reforma del Estado, fuerzas armadas y relaciones internacionales¹¹⁵.

Sin embargo, y a pesar de ello, dentro de quienes discutían la agenda del lado de la guerrilla –“Raúl Reyes”, “Fabián Ramírez” y “Joaquín Gómez”- ni mucho menos podían ser considerados como la facción más política de las FARC como, por ejemplo, lo eran “Alfonso Cano”, “Iván Márquez” o “Pablo Catatumbo”.

Como sería de esperar, tan intrincada agenda dificultaba sobremanera cualquier atisbo de puesta en común, más si se añade que sobre estos temas, a su vez, se producía una subdivisión de 48 sub-temas que, finalmente, ponían de manifiesto hasta qué punto se carecía de una estrategia previamente definida, a efectos de la negociación. Por ejemplo, en ningún momento de la negociación aparecieron cuestiones tan relevantes en un proceso de paz, como es el caso de la discusión sobre la entrega de armas y el desarme.

A tal efecto, había que añadir una falta de voluntad política por, verdaderamente, resolver el conflicto armado. Así lo señala “Samir” cuando reconoce que:

“Aun con todo en el Caguán las fuerzas son parejas. Ninguno de los dos bandos tenía intención de paz. Ambos utilizan la zona de despeje para conocerse mejor, organizarse y preparar la guerra. Ambas fuerzas crecen paralelamente pero no crecieron por igual. La intención era militar pero se trataba de presentarse ante la sociedad como político-militares. Sin embargo, las FARC tiene un lema: Somos FARC, Ejército del Pueblo, Nuestra meta es la toma del poder para el pueblo. Esa consigna siempre estará presente en las FARC hasta que caiga el último guerrillero. Se trata de combinar todas las formas de lucha y eso es consustancial a nuestro espíritu. Esto operó en el Caguán y opera con JMS si bien bajo métodos muy diferentes. Pero no por eso olvide que las FARC buscan tomarse el poder. La lucha nunca ha terminado”. (EP 8, agosto de 2015).

De hecho, de parte del Gobierno, según afirma Germán Bula Escobar, entonces ministro de Andrés Pastrana:

¹¹⁴ En el proceso de desmilitarización del Caguán, se estableció una Policía Cívica que se encargaba de velar el orden en los municipios afectados si bien, en todo caso, la función nuclear de orden y seguridad recayó en las FARC. Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-892698> Consultado el 5 de septiembre de 2015.

¹¹⁵ Véase Anexo 1

“El proceso del Caguán por diversas consideraciones se interpreta como un fracaso. Más bien, es todo lo contrario, en la medida en que marca un punto de inflexión en el devenir del conflicto armado. Quizá, el punto de inflexión más importante. Mientras se está en el Caguán se está fortaleciendo la Fuerza Pública y se está negociando el Plan Colombia. ¿El resultado de todo ello? Las FARC nunca más van a vencer militarmente al Estado y ahí inicia su proceso de paulatino debilitamiento”. (EP 4, septiembre de 2015).

Esta situación de negociación, además, debía de avanzar de acuerdo a dos cuestiones más. De un lado, el imperativo de combatir un paramilitarismo creciente que surgía como el principal actor de disputa frente a la guerrilla. De otro, la puesta en marcha de intercambios humanitarios en los que se planteaba la liberación de policías y militares secuestrados por las FARC a cambio de guerrilleros. Conviene señalar que estas cuestiones no generaron más que acuerdos parciales pues, en el fondo, se produjo un único intercambio de miembros de la Fuerza Pública por guerrilleros enfermos. Además, apenas se llevó a cabo una actuación real frente al paramilitarismo.

Así con todo, el proceso de paz parecía fracasar desde el inicio, especialmente, a tenor del incidente de la conocida vulgarmente como “silla vacía”, es decir, la ausencia de Manuel Marulanda en la inauguración de los diálogos de paz, cuando todos los focos y medios centraban su atención en el momento¹¹⁶. De esta forma, empezaban las negociaciones con el serio cuestionamiento respecto de la seriedad y el compromiso de las FARC por negociar. Tanto fue así que, incluso, del lado de las FARC pronto empezó la lógica de paralizaciones unilaterales al proceso de negociación¹¹⁷.

La realidad es que poco se avanzó durante los 1.139 días que duró el proceso de negociación, pues las partes nunca llegaron a un solo punto de acuerdo de los previstos dentro de la agenda. El conflicto empezó a presentar inconmensurables dosis de violencia fuera de la “zona de despeje” y rápidamente, la opinión pública y la sociedad civil colombiana perdieron el interés y la convicción sobre las posibilidades reales de llegar a una salida negociada del conflicto.

Se pueden extraer varias explicaciones que invitan a pensar en el porqué del fracaso del proceso de paz. Un punto de partida, al respecto, sería la falta de “estancamiento doloroso”¹¹⁸

¹¹⁶ La silla vacía fue justificada por Marulanda por el miedo a que hubiera presencia paramilitar en el evento que hicieran peligrar su vida si bien, en el trasfondo parece que se buscaba no generar falsas expectativas y mostrar a la sociedad colombiana que la consecución de la paz, ni mucho menos, iba a resultar fácil.

¹¹⁷ De hecho, si el 7 de enero tiene lugar el inicio oficial del proceso de paz con las FARC, para el día 17 de enero ya se había producido la primera interrupción al mismo, al exigir la guerrilla un combate mucho más contundente de parte del gobierno frente al fenómeno paramilitar. Para ver un cronograma de cómo se desarrolló la negociación bajo la presidencia de Pastrana véase:

<http://www.latinamericanstudies.org/colombia/cronologia.htm> Consultado el 3 de junio de 2015

¹¹⁸ El concepto “*mutually hurting stalemate*”, tal y como señala Harto (2004: 34), y ya abordado con anterioridad, fue acuñado por Touval y Zartman en 1985, y se refiere a la situación que se da, proclive a negociar, “cuando las partes se hallan en una situación en las que el prolongamiento de la situación conflictiva no ofrece posibilidades de victoria a ninguna de las partes”. El propio Zartman (2001: 8) lo define del siguiente modo: “The mutually hurting stalemate is grounded in cost-benefit analysis, fully consistent with public choice notions of rationality and public choice studies of war termination and negotiation which assume

entre las partes negociadoras. Es decir, más allá de intenciones por la paz, podía entenderse que para ninguno de los dos actores, desde una perspectiva racional, existían motivaciones reales para la negociación y para el abandono de las dinámicas propias del conflicto armado.

Por un lado, el Gobierno de Andrés Pastrana concebía necesario y posible un marco de fortalecimiento creciente de la dimensión institucional y de seguridad del Estado colombiano. A tal efecto, la nueva relación con Estados Unidos, y la ingente inversión en fortalecer y modernizar las Fuerzas Militares ayudaban a concebir un horizonte próximo en el que el Estado colombiano podía asumir una posición ventajosa en la interlocución, dada una desigual y beneficiosa correlación de fuerzas.

Igual sucedía con las FARC. La guerrilla se sirvió de la “zona de despeje” “para adelantar la guerra contra el Estado, para esconder secuestrados, para adiestrar en sus escuelas militares a los combatientes a todos los niveles, y para aprender nuevas técnicas de guerra y utilización de explosivos” (Pizarro, 2011: 264). Asimismo, durante el proceso de paz, esta misma guerrilla elevó a 70 sus frentes de combate y consiguió el mayor nivel de guerrilleros de toda su historia, llegando los 17.000 combatientes (Mindefensa, 2002: 28). La continuidad del activismo guerrillero durante el Caguán es reconocida por los propios excombatientes pues, “Karina” señala que durante el proceso de diálogo:

“Veníamos de conformar, en 1995, el poderoso Bloque José María Córdoba, y yo a través del frente 5 soy la 5ª al mando si bien, para el año 2000 me mandan a dirigir el Frente 47 en Caldas como número 2. Veníamos desarrollando operativos y control territorial en esta zona. El comandante en ese tiempo al frente, es llamado a la zona de distensión y me quedo como comandante encargado durante 4 meses pero el comandante jefe nunca vuelve porque le capturan al salir de la zona de despeje, cuando se rompe el proceso, y me quedo dirigiendo el frente”. (EP 7, mayo de 2015).

Igual lo reconoce “Samir”, cuando recordando el proceso del Caguán señala que:

“Las FARC nunca interpretaron el Caguán como una rendición. La noción de tomar el poder por las armas continuaba. Y nuestra dinámica de fortalecimiento, también. De hecho, las FARC se van quedando solas y los guerrilleros políticos empezamos a ser despreciados dado que prima el hombre luchador. Nos trataban mal. Nos ofendían. El hombre apetecido era el combatiente y no el más ideológico. Aunque no resulte tan visible, desde 1998 y 2000, mientras se negocia y mientras las FARC siguen creciendo, lo cierto es que es ahí cuando empezamos a ser derrotados. Perdemos las dos formas de expresión – política y militar- y comienza el repliegue y la *clandestinización* de la guerrilla. Dicho de manera sencilla. Tras el Caguán volvemos a los años 1970”. (EP 8, agosto de 2015).

Dentro de esta lógica de racionalidad instrumental sobre el proceso de paz, se añadirían otras cuestiones como el incremento sustancial experimentado por el paramilitarismo, pues las

that a party will pick the alternative which it prefers, and that a decision to change is induced by increasing pain associated with the present (conflictual) course”.

AUC van a duplicarse entre 1998 y 2002, llegando a los 8.000 integrantes. De igual manera, la negociación del Plan Colombia¹¹⁹ y el fortalecimiento de la Fuerza Armada, unido a la insistencia de intervenir acciones de lucha antinarcóticos, van a disuadir a las FARC de todo compromiso real de negociación.

Mapa 13: Municipios que conformaban la zona de despeje



Fuente: Commons

Es más, se va a registrar un importante incremento de las actividades bélicas, los secuestros, la extorsión y otras actividades criminales que van a terminar por poner de manifiesto cómo, la idea de negociar la paz en medio de la guerra, va a ser profundamente errada, sirviendo más bien como acicate de la violencia. Una violencia que para las FARC se hacía extensible más allá de la “zona de despeje”, y que para el gobierno hacía irremediable su refortalecimiento de manera que, ambos negociadores, dentro de su articular percepción, encontraban serias posibilidades y muestras de superioridad militar con respecto a su adversario.

Todo ello contribuyó a desacreditar sobremano el diálogo, si bien, aun cuando ya la confianza estaba sumamente deteriorada, los negociadores del gobierno trataron la

¹¹⁹ El Plan Colombia es el principal instrumento de cooperación militar de Estados Unidos con Colombia y que será ampliamente abordado tanto en este capítulo como en este trabajo.

posibilidad de negociar un cese al fuego bilateral, tal y como se planteó en el acuerdo de San Francisco de la Sombra, de octubre de 2001¹²⁰.

Ya para el año 2002, y antes del fracaso total del proceso, a modo de facilitadores, tanto Naciones Unidas como el Grupo de Amigos¹²¹ trató de buscar vías con las que fijar una hoja de ruta desde la que tratar de alcanzar algunos resultados específicos. Esto, teniendo como horizonte el 7 de abril, que era la fecha para la cual se había fijado un cese al fuego por las partes y que devenía como un punto clave en el propio devenir del proceso de negociación. Como en la anterior ocasión, se trató de definir cuáles serían los enclaves donde los guerrilleros deberían ser ubicados para iniciar el proceso de desarme. Sin embargo, para aquel momento, uno de los principales *spoilers of peace*¹²² era la opinión pública que, rápidamente, comenzó a filtrar detalles y a avivar tensiones que terminaron por desvirtuar cualquier posibilidad de acercamiento.

Tampoco es que se hubiera dado un avance significativo respecto a dos cuestiones que determinaban un posible cese de las hostilidades. Una, la ausencia de disminución de los secuestros. Dos, la tendencia creciente tanto de la superficie objeto de cultivos ilícitos como de los mecanismos de erradicación forzosa y aspersión aérea, y respecto de los que las FARC estaban fuertemente en contra.

Además, de otro lado, no pueden pasarse por alto las implicaciones que trajo consigo la propia “zona de distensión”, especialmente, porque nunca hubo claridad sobre los términos, implicaciones y razones que habían facultado a ésta, lo cual avivó tensiones, por no decir fracturas, en la relación cívico-militar.

Finalmente, en lo que tendría que ver con los elementos propios de un proceso de negociación, la mayoría de los puntos incluidos en la Agenda Común no eran propios de lo que afecta a un proceso de negociación para desactivar un conflicto armado en el que todo podía haber sido muy distinto. Sobre todo, en el caso de haberse circunscrito la negociación a cuestiones propias de un proceso de estas características como las reformas agrarias, las Fuerzas armadas y paramilitares, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y condiciones de Gobierno tanto a nivel nacional como local. Así lo sugiere Chernick (2011: 134), “pues aunque las FARC luchan por el poder político nacional, en este

¹²⁰El acuerdo se recoge literalmente en los anexos de esta tesis doctoral.

¹²¹ Como señalan Vinyamata y Benavides (2011: 105) “En abril de 2001 se creó la Comisión de Países Facilitadores del Proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que estaba integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México Noruega y Venezuela. Sin embargo, su papel era el de meros observadores del proceso, pues no pudieron hacer nada para evitar su ruptura cuando esta se produjo”.

¹²²Los saboteadores de la paz se entienden, según Fisas (2010: 18), por haber “sectores que se han acomodado al conflicto y a la economía de guerra, que han encontrado ventajas comparativas en el seguimiento del conflicto armado y que, por ello, mantienen una actitud hostil a su finalización”. Asimismo, Newman y Richmond (2006: 1) los definen del siguiente modo: “groups and tactics that actively seek to hinder, delay, or undermine conflict settlement through a variety of means and for a variety of motives”.

punto hay mayor oportunidad para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de participación en los órganos de poder locales y regionales”.

En relación con esto, nunca hubo un planteamiento serio sobre la incorporación de la guerrilla como partido político viable. Esto es, se desatendieron las lecciones aprendidas, que por su fracaso, dejaban tanto la UP, cuya eliminación se explicó en el capítulo anterior, como la ADM-19 o Esperanza, Paz y Libertad, inviables políticamente.

Para completar estas apreciaciones cabría añadir que para el caso del ELN, la presencia de esta guerrilla siempre representó una posición relegada a un segundo plano, aun a pesar de que el Gobierno de Pastrana trató de recuperar los avances que se habían logrado bajo la presidencia de Ernesto Samper.

Lo cierto es que en octubre de 1998 se llevó a cabo una reunión en Rioverde, un pequeño corregimiento del oriente antioqueño, en el que representantes del ELN, como “Francisco Galán” y “Felipe Torres”, trataron de avanzar junto con miembros del Comité Impulsor de la Convención Nacional, del Gobierno, en la puesta en marcha de un proceso por el que se debía llevar al ELN a un proceso de negociaciones con el Gobierno.

Empero, esta aproximación no fue ni mucho menos sencilla a tenor de la negativa del Alto Comisionado de unir dentro de un mismo escenario, una “zona de despeje”, un contexto para dialogar y un punto donde concentrar la Convención Nacional que debía dirigir las peticiones e intercambios cooperativos que, suscritos por la sociedad civil, debía abanderar la posición negociadora del ELN¹²³. Un ELN que para este entonces, como apunta “Felipe Torres”:

“El ELN llegaba al gobierno de Pastrana con el propósito de bajar la intensidad de la confrontación y considerar que el camino debe ser otro a la guerra y, por tanto, hay que buscar la conciliación y se va afianzando la idea de buscar una salida negociada al conflicto. De hecho, yo quedé al frente de esas negociaciones y diseñamos una propuesta que se llamó “Convención Nacional”, y que era la aceptación de la necesidad de que la sociedad, para la consecución de la paz, debía conversar y discutir sus problemas, con una posición decisoria. Suponía superar una democracia caduca, excluyente, recortada y decimonónica”. (EP 9, mayo de 2015).

Esta “zona de despeje” solicitada por el ELN se encontraría en el sur de Bolívar, afectando a los municipios de Morales, Santa Rosa, Simití y San Pablo (Archila, 2006; Villarraga, 2008). No obstante, en ningún momento resultó aceptada por el Gobierno, sobre todo, a tenor del deterioro y el recelo que el mismo experimento en el Caguán había supuesto con las FARC.

¹²³ De acuerdo a lo planteado en el Acuerdo de Puerta del Cielo celebrado con el ELN y que se recoge en los anexos, por Convención Nacional el ELN entiende: “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen. La Convención buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad. Su desarrollo se hará a través de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a través de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Tanto, hasta el punto de incluso generar importantes movilizaciones de rechazo en municipios como Santa Rosa, contrarios con un eventual marco de desmilitarización.

Así, en ningún momento con el ELN se va a conseguir consolidar una posibilidad que permita vertebrar los diálogos, de manera tal que tras una multitud de negociaciones y acercamientos y distanciamientos, finalmente, el presidente Pastrana va a decidir romper, como lo haría algunos meses antes con las FARC, toda conversación de paz con la entonces segunda guerrilla más importante del país.

El propio proceso de negociación de las FARC estaba llegando a su fin. Éste llegaría con motivo del secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay, a manos de las FARC, el 20 de febrero de 2002. Tras el mismo, Andrés Pastrana informaba de la definitiva ruptura unilateral de las negociaciones, llevando consigo el fin de cualquier propósito de negociación y aproximación con las FARC, y hundiendo la imagen del presidente y la popularidad de cualquier atisbo negociador. Más bien, todo lo contrario, es por esto que el sucesor de Pastrana va a ser, inicialmente, un completo *outsider* como es Álvaro Uribe¹²⁴, quien va a ganar popularidad como consecuencia de su posición reactiva en cuanto a la confrontación directa contra la guerrilla.

Esta dimensión, próxima en su planteamiento a la noción de “paz negativa”¹²⁵, sin embargo, lo cierto es que solo va a resultar posible gracias a que, paralelamente a la negociación, la presidencia de Andrés Pastrana, en todo momento, mantuvo un importante rediseño y proceso de fortalecimiento y modernización de la Fuerza Pública colombiana. Así lo señala Rangel (2003: 58-59), en las siguientes palabras:

“si analizamos el salto tecnológico que las Fuerzas Militares dieron al adquirir una considerable capacidad aérea, de telecomunicaciones, de inteligencia técnica y de mejoras en el equipamiento militar, vemos que la principal condición de una transformación militar – el cambio tecnológico, sin duda se ha dado en Colombia en los últimos años, para continuar más adelante afirmando que las mejoras en comunicaciones, inteligencia técnica, y en capacidad de desarrollar operaciones nocturnas también han contribuido decisivamente a incrementar las capacidades de las Fuerzas Militares y contener la avanzada de los grupos armados ilegales”.

3. Relaciones cívico-militares y modernización de la fuerza pública colombiana

Lo cierto es que, continuando con lo anterior, la relación del gobierno de Pastrana en ningún momento atravesó una relación sencilla con el estamento militar (Forero, 2002), aunque sí transcurrió por una mejor tesitura que la que había tenido lugar bajo el presidente Samper,

¹²⁴ Por *outsider* se entiende que la medida en que, por primera vez, se desmarca como candidato de su tradicional participación como integrante del Partido Liberal y llega la presidencia rompiendo con el tradicional bipartidismo que hasta el momento había caracterizado al sistema de partidos colombiano.

¹²⁵ En términos de Galtung (1964: 2), recuérdese su primer trabajo conceptual a tal efecto, en el que ya señala que “negative peace which is the absence of violence, absence of war - and positive peace which is the integration of human society”.

cuando junto al problema de debilidad institucional del Estado, se unieron importantes derrotas militares frente a las FARC y cuestionamientos directos a la figura presidencial – que no al orden constitucional-, como la realizada por figuras tan relevantes como la del general Harold Bedoya¹²⁶.

A pesar de ello, es que bajo la presidencia de Pastrana, y con los cambios en la cúpula militar a partir de las figuras del general Fernando Tapias Stahelin y el general Jorge Enrique Mora Rangel, se va a dar el firme convencimiento sobre la necesidad de dotar de mayor eficacia logística, técnica y administrativa a las Fuerzas Militares colombianas.

Por ejemplo, durante estos años se va a pasar a combatir directamente con el Bloque Oriental de las FARC, dirigido por “Mono Jojoy”, llevando a cabo importantes iniciativas como las operaciones “Eclipse Negro” en Arauca, la Operación “Leopardo” en la zona de Urabá, las Operaciones “Némesis” y “Llanura” en Vichada y Arauca, la Operación “Lusitania” en Antioquia, la Operación “Espada” en Huila, la Operación “Independencia” en Meta y Caquetá, las operaciones de los primeros días de septiembre de 1999, en Hato Corozal, Casanare, y en el Páramo de Sumapaz, o la Operación “Cacería” en el Valle del Cauca (Pastrana, 1999: s.p.).

Por ejemplo, solo con la Operación “Independencia”, frente a un despliegue táctico en Meta y Caquetá de parte de las FARC en el que se movilizaron cerca de 12.000 guerrilleros, el Ejército va a conseguir neutralizar las ofensivas guerrilleras en un 98% y dar de baja a 158 guerrilleros. Asimismo, se obtuvieron importantes golpes estratégicos sobre las FARC y el ELN, por ejemplo, abatiendo a algunos de sus líderes más carismáticos, como es el caso en las FARC de Vladimir González Obregón, “Miller Perdomo” y “Esteban González”, y en el ELN de Armel Robles, “El Chino”¹²⁷.

Lo cierto es que las relaciones con la cúpula militar tampoco fueron especialmente mejores con los miembros del Alto Comisionado para la Paz, tanto con Víctor Guillermo Ricardo,

¹²⁶ El General Harold Bedoya (1938 -) fue un controvertido Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia que siempre expuso su oposición radical frente a la guerrilla, reivindicando políticas de seguridad de “mano dura”, y extendiendo su total oposición a cualquier atisbo negociador. Bedoya representa la máxima ruptura del diálogo cívico-militar, y en cierto modo personifica el concepto de *spoiler of peace* anteriormente mencionado. De hecho, si bien por un lado el paramilitarismo acogió una especial consolidación en regiones en las que su influencia militar eran evidentes – especialmente en Meta, pero sobre todo en Antioquia-, su posición marcadamente ortodoxa se explica por circunstancias como su participación en el seno de la Alianza Americana Anticomunista, erigida por escuadrones paramilitares, especialmente activos entre 1978 y 1980, y con notable presencia de miembros de la fuerza pública colombiana.

¹²⁷ Miller Perdomo era uno de los hombres de confianza de “Mono Jojoy”, jefe militar y dirigente del Bloque Oriental de las FARC. Perdomo asumió la entrada de las FARC en Bogotá, tanto en la localidad de Ciudad Bolívar como en la Universidad Nacional (Villamarín, 2010). “Esteban González” fue el jefe del Frente 16 de las FARC, operativo en los Llanos Orientales, especialmente en Meta, Vichada y Guaviare, y uno de los encargados de nutrir de ingresos provenientes del narcotráfico a la guerrilla. Por su parte, “El Chino” llegó a ser el máximo dirigente del Frente “Domingo Laín”, en el departamento de Arauca. Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4921027> Consultado el 6 de junio de 2015.

primero, como con Camilo Gómez después, pues el proceso por el que transcurrió el Caguán, en ningún momento satisfizo y acordó a ambas partes.

Suerte diferente hubo con los ministros de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, Luis Fernando Ramírez y Gustavo Bell Lemus. Los dos primeros consiguieron el apoyo y reconocimiento militar hasta el punto de que el primero dimitió por no aceptar las concesiones que el Ejecutivo estaba otorgando a las FARC, y el segundo defendió el apego de la Fuerza Militar a la salvaguarda de los DD.HH., asumiendo el proceso de transformación militar y el componente del Plan Colombia aunque, igualmente, mantuvo tensiones irresolutas entre el Ejército y el Gobierno¹²⁸.

No obstante, la lógica cívico-militar mejoró con Bell, Vicepresidente de la República y por decisión de Pastrana, ministro de Defensa en la parte final de su legislatura, lo cual supuso una oportunidad a tenor de que la defensa y protección de los DD.HH., afín al Vicepresidente, recaía en quien quedaba al frente de la cuestión militar (Forero, 2002).

La verdad es que la cúpula militar siempre se mantuvo escéptica al sentido y alcance que tenía la “zona de despeje” negociada en el Caguán, al entender que se trataba de un escenario óptimo para que la guerrilla se rearmase y se sirviese de una vasta extensión para el cultivo ilícito, el tráfico de estupefacientes y el entrenamiento militar. De hecho, y al respecto, señala “Karina” que:

“Es desde el mismo proceso que el Caguán que el Estado Mayor Conjunto de las FARC empieza a meterse en el tema de la coca con total decisión, pues en los ochenta eso estaba prohibido, así como a inicios de los noventa. A mí, incluso, me tocó retirar matas y amenazar por culpa de los cultivos. Pero claro, si una hectárea, digamos, deja 1 kilo de coca que vale tres millones de pesos y deja dos millones al campesino, una hectárea de café apenas deja 600.000 pesos que, descontando gastos, supone 200.000 pesos. Entendíamos que eso favorecía la vida al campesino y les dejábamos producir. Empezaron con bajas producciones pero por los rendimientos, nos pedía expandir cultivos para mantener la guerra y de ahí viene nuestro interés, primero, por el gramaje, de modo que por cada kilo de hoja de coca cobrábamos 200.000 pesos. Eso era lo normal aunque hacia dentro de las FARC sabíamos de frentes que, desde el inicio, fueron mucho más allá, llegando a sembrar y a disponer de sus propios laboratorios de procesamiento”. (EP 7, mayo de 2015).

A ello había que añadir otras cuestiones que dificultaban esta relación las FARC acusaban directamente la existencia de una conexión directa entre paramilitarismo y Ejército, frente a la cual el Ejecutivo no dudó en hacer saber que, a través del Alto Comisionado y por medio de información facilitada desde la Procuraduría¹²⁹, se estaban investigando a oficiales de la

¹²⁸De hecho, el propio Ramírez propuso, como en los procesos centroamericanos, que desmovilizados del ELN pudieran pasar a formar parte de la fuerza pública, reincorporándose a la sociedad. Ello desembocó en que el General Mora solicitase una rectificación o aclaración que, finalmente, no se hizo esperar. Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/quien-manda-quien/46056-3> Consultado el 6 de junio de 2015.

¹²⁹Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1321508> Consultado el 6 de junio de 2015
Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1321886> Consultado el 6 de junio de 2015

Fuerza Pública. Esta situación volvió a dificultar los canales cívico-militares al entender, especialmente en el Ejército, que el respaldo institucional recíproco quedaba, cuando menos, en entredicho.

Otro tema no menos importante fue también el del canje de guerrilleros capturados por policías y soldados secuestrados. Esta cuestión, llevó a plantear diversos inconvenientes jurídicos desde el ministerio de Defensa, lo cual, nuevamente, enrarecía las relaciones con el Alto Comisionado de Paz. Tanto es así que en el memorando contra el canje se recogía lo siguiente:

“como sea, no sobra anotar que el Gobierno no tiene facultades en materia judicial distintas a las contempladas en la Constitución y en las leyes, entre ellas, las establecidas en la ley 418, y que, por tanto, no tiene competencia para suspender por sí mismo u ordenar suspender a jueces o fiscales penas o medidas de aseguramiento, ni para desconocer las limitaciones en materia de condena de ejecución condicional y de suspensión de la detención preventiva que establecen los códigos Penal y de Procedimiento, ni para liberar de cualquiera otra manera a guerrilleros detenidos o procesos si previamente tales guerrilleros no se comprometen a cesar su actividad delictiva”¹³⁰ (s.p.)¹³¹

Finalmente, y a pesar de todo, la realidad es que el canje procedió, y unos 100 militares y policías fueron liberados por las FARC a cambio de 15 guerrilleros. A fin de evitar crispar más los ánimos, el Alto Comisionado se comprometió a que, no habría más acuerdos de intercambio comunitario con las FARC y, sobre todo, a que este acto no sería, ni mucho menos, el inicio para reconocer el estatus de beligerancia¹³². De igual modo, y no como fue consustancial, como en El Salvador, a la negociación de paz, en el caso colombiano en ningún momento se procedió a negociar la estructura de las Fuerzas Armadas. Una estructura que, lejos de transformarse en aproximación a una reivindicación de la guerrilla, se iba a reestructurar a fin de mejorar y fortalecer su lucha directa contra ella.

En primer lugar, dentro de esta transformación, Colombia iba a experimentar una labor de mayor atención y comprensión de lo que debían ser los DD.HH. dentro de la lógica del conflicto. Una lógica que durante el gobierno de Samper había alejado al país de Estados Unidos, en tanto y en cuanto se había desvirtuado el sentido de la Enmienda Leahy¹³³. Norma

Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1683595> Consultado el 6 de junio de 2015

¹³⁰ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-583496> Consultado el 6 de junio de 2015

¹³¹ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-583496> Consultado el 6 de junio de 2015

¹³² El estatus de beligerancia suponía empoderar a las FARC como interlocutor en el proceso de negociación. Ello, porque como señala en su trabajo Valcárcel (2008: 370), citando a Monroy (1998), “para que exista el estado de beligerancia según Max Sorensen, se requiere que i) exista, dentro del Estado, un conflicto armado de carácter general; ii) los insurgentes ocupan una parte sustancial del territorio nacional; iii) conducen las hostilidades de acuerdo con las reglas de la guerra, a través de grupos organizados que actúan bajo una autoridad responsable. En tal caso, existe la base necesaria para reconocer el nacimiento de un sujeto de derecho internacional, al cual deben conferirse derechos de beligerante”.

¹³³ Para el caso de Colombia, durante más de cuatro décadas el gobierno estadounidense ha asesorado, entrenado y equipado a policías y militares colombianos. Antes de la entrada en vigor de esta enmienda, en 1996, no se habían dado problemas con el acatamiento y respeto de los Derechos Humanos por parte del gobierno

por la cual se prohibía de manera expresa cualquier instrumento con fondos para unidades de seguridad extranjeras siempre que la Secretaría de Estado tuviese pruebas confiables de que aquéllas resultaban responsables directas de violaciones sobre los DD.HH., y actuaban en omisión de medidas efectivas en virtud del Estado de Derecho. (Human Rights Watch, 2001).

Por tanto, y habida cuenta del contexto emergente que plantea el Plan Colombia, a partir de 1999 se busca toda la conformación de una estructura de cultura de los DD.HH. que llevan a que las tropas colombianas se vuelvan en una referencia obligada en el continente en lo que a formación en tales derechos se refiere (Soto y Rodríguez, 2006), y aunque para algunos la evidencia final de las cifras resulte cuestionable respecto del el éxito obtenido (García, 2008).

Más importante resultó ser el eje de fortalecimiento de las Fuerzas Militares con lo que se conoció bajo el eslogan: “El Cambio es Ahora” (Vergara, 1998; Coghlan, 2004). Este programa, en clara alusión subyacente a la presidencia anterior de Ernesto Samper y al continuismo oficialista que representaba Horacio Serpa, reconocía literalmente el objetivo de:

“incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la fuerza pública; neutralizar y desestabilizar la capacidad de los grupos e individuos al margen de la ley; mantener una capacidad disuasiva, real y creíble, frente a amenazas externas y disminuir los índices de delincuencia” (González y Posada, 2001: 89).

Toda la infraestructura de paz que tiene lugar con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, especialmente cualitativo, durante el gobierno de Andrés Pastrana se va a evidenciar en diferentes aspectos. En primer lugar, con un crecimiento no sustancial del pie de fuerza, que sin en 1998 integra 177.300 militares y 103.958 policías, en 2002 se reparte en 181.414 y 97.382 efectivos, respectivamente (Presidencia de la República, 2005: 32).

Empero, el salto cualitativo, como se va a ver con mayor detenimiento en el siguiente epígrafe, se va a dar con la puesta en marcha de lo que se conoció como el ya referido término de Plan Colombia. Un Plan Colombia, resultado del acuerdo entre Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton, para poner en marcha un instrumento de cooperación que, a grandes rasgos, dispone en un 70% de su inicial presupuesto, para dotar de asistencia militar a Colombia. De esta manera, traducido en cifras, se destinaban 365 millones dólares para helicópteros y equipos de comunicaciones de inteligencia; 129 millones para interdicción y aviones de la Fuerza Aérea; y 115 millones para helicópteros, aviones de fumigación y construcción de bases militares (Garay, 2001 citado en Molano 2001: 84).

Desglosado de otro modo, este Plan Colombia comprendía una inversión inicial durante seis años de 7.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones eran aportación del Estado

colombiano. Antes de la enmienda, en 1996, el ejército colombiano, concretamente la IVa Brigada de Medellín y la VIIa Brigada de Villavicencio recibieron armas y municiones estadounidenses y ambas eran conocidas por sus reiteradas violaciones a los Derechos Humanos y la colaboración con grupos paramilitares (Human RightsWatch, 2000; 2001).

colombiano y 3.500 de la comunidad internacional, básicamente de Estados Unidos. Basta, a tal efecto, de revisar lo dispuesto por los archivos del Congreso, en la Ley Act – que es como se conoce al Plan Colombia en Estados Unidos-, desde la que se planteaba una ayuda inicial de 705 millones de dólares para el Ejército colombiano, 205 millones de dólares para la Policía y la fuerza naval, 410 millones para ayuda a los países fronterizos¹³⁴, 180 millones para la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, Perú y Bolivia, y 100 millones para la reforma del sistema judicial, derechos humanos y construcción de paz (Salgado, 2001 citado en Forero, 2002: 184).

La verdad es que, con base en esta aportación, en apenas dos años, la Fuerza Aérea va a ver incrementada en un 70% su fuerza de combate, de la misma manera que los helicópteros pesados artillados, destinados a prestar apoyo táctico, se habrán multiplicado por cuatro, todo, gracias al Plan Colombia (Ramírez, 2000).

Es decir, el gran salto cualitativo no se entiende sino es gracias al fortalecimiento de la fuerza pública colombiana, especialmente la Fuerza Aérea, y gracias a la incorporación de helicópteros de mayor movilidad, unidos a todo un programa de inteligencia técnica y satelital, un importante adiestramiento integrado de las tropas militares y policiales (Departamento Nacional de Planeación, 2002: s.p.), y a un ingente envío de recursos de parte del PIB nacional que pasó del 3.6% en 1997 a un 4.4 en 2002¹³⁵. El propio General (r) de la Policía Nacional, a tal efecto, reconoce que:

“El Plan Colombia fue el factor que verdaderamente es determinante en la transformación del conflicto. Como sabe, este Plan tenía varias líneas de acción, recursos, medios, tecnología y entrenamiento. Todo termina en el cambio de estrategia y en lo que le decía de debilitamiento de las FARC. El balance del conflicto va a ser positivo para la fuerza pública por el cambio en la inteligencia y en la capacidad de aeronaves. Si a ello le suma las aspersiones aéreas, que si bien era totalmente de índole antinarcótico, y no contra la guerrilla a modo de acciones bélicas, no se puede desconocer que sirvieron para debilitar las bases financieras de la guerrilla”. (EP 5, abril de 2015).

4. El Plan Colombia en cifras. *Si vis pacem para bellum*

La iniciativa de modernización y transformación profunda desde el gobierno de Andrés Pastrana, solo se entiende con base en la puesta en marcha del Plan Colombia. Este Plan Colombia, inicialmente concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se

¹³⁴ La internacionalización del conflicto colombiano, como factor de desestabilización regional siempre ha preocupado a Estados Unidos, tal y como plantean, entre muchos otros, Bonilla (2004), Tickner (2007) o Trujillo (2012).

¹³⁵ El gasto en defensa fue de un 3.6% en 1997; 3.4% en 1998; 3.8% en 1999 y 2000; 4.2 en 2001 y 4.4 en 2002. Giha, Riveros y Soto (1999: 178).

trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo¹³⁶, la cual fue acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la democracia y la consecución de la paz en el país (Fajardo, 2003).

Desde entonces se da lo que Tickner (2007) denomina como “intervención por invitación”, a partir de la cual, Estados Unidos pasa a ser un actor directo dentro de desarrollo del conflicto armado. Especialmente en la medida en que la lucha contrainsurgente colombiana, como señala Otero (2010: 65) “es considerada por los militares estadounidenses como un caso piloto de estudio para intervenciones en otras zonas del mundo”.

Toda la lógica contrainsurgente sobre la que se construye el Plan Colombia va a pasar a ser coordinada por el Comando Sur¹³⁷, en Florida, dentro del cual hay un Grupo Militar para Colombia que va a ser quien se encargue de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las fuerzas armadas colombianas (*Government Accountability Office*, 2008), y que se denomina vulgarmente como Organización de Asistencia en Seguridad.

Inicialmente, el Plan Colombia, conviene precisar, tenía una orientación de mayor inversión social, con la que lograr estabilidad política y social en Colombia si bien, a partir de la puesta en marcha de la contraparte estadounidense, y sobre todo a partir de la posterior llegada a la presidencia de George W. Bush, pasa a erigirse como un programa destinado, en la mayoría de sus recursos, a la lucha antinarcóticos. Esto, con especial énfasis en la fumigación aérea en lugar de la erradicación manual, que era la que contemplaba inicialmente el Plan Colombia y que era la aceptada por las FARC durante la negociación del Caguán. Así lo señala Germán Bula cuando reconoce que:

“el Plan Colombia, una vez que llega Álvaro Uribe a la presidencia queda desdibujado. Se desnaturaliza. Pierde el inicial componente social que Andrés Pastrana le había conferido y se reduce a una política netamente guerrerista, de absoluta paz negativa” (EP 4, septiembre de 2015)

Esta consideración es compartida, igualmente, por la Ministra de Defensa, entre 2002 y 2003, Marta Lucía Ramírez quien, igualmente, señala que:

“Al presidente Uribe yo le advertí en la necesidad de que tuviera en cuenta que la fuerza pública tiene en última instancia que proteger a los ciudadanos pero salvaguardando la democracia. Había que tomar la iniciativa y controlar territorios pero para controlar un

¹³⁶ El Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana se llamaba “Cambio para Construir la Paz”. Se encuentra disponible en: <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-antecedentes.aspx> Consultado el 11 de junio de 2015.

¹³⁷ Este comando se encuentra en Miami, y hace parte de uno de los diez Comandos Combatientes Unificados del Departamento de Defensa. Este comando es el responsable de catalizar todo lo que tiene que ver con planificación de contingencia, operaciones y cooperación en seguridad y acción sobre América Central, el Caribe y América del Sur. A tal efecto, por ejemplo, este comando vela por la seguridad del canal de Panamá. Se puede encontrar toda la información en: <http://www.southcom.mil/Pages/Default.aspx> Consultado el 11 de junio de 2015

territorio hacía falta mucho más que fuerza pública. Hacía falta verdadera y efectiva presencia del Estado en todo el territorio. No podíamos caer en reduccionismos netamente militaristas”. (EP 3, junio de 2015).

Como sucediera en los procesos centroamericanos, la paz que se concibe como una ecuación que aúna fortalecimiento democrático y desarrollo económico, claves en un marco de construcción de “paz positiva”, va a resultar obviada, en buena medida, por el redibujado Plan Colombia, que va a terminar por ser una estrategia reactiva más, frente a una amenaza como en 1999, representa la guerra contra las drogas. Quizá, a tal efecto, es revelador la comprensión que hacía la Fuerza Pública respecto de esta cuestión, pues como reconoce el General (r) de la Policía Nacional:

“En este contexto, y desde 1996, la impronta y la relación de las FARC con la coca era para nosotros incuestionable. Basta con ver las marchas cocaleras de las FARC de 1996 y su gran movilización. Eso es una muestra de poder sobre los enclaves de la coca. Unos enclaves que va más allá de gramaje y que requirió hasta el punto de nombrar gobernadores militares. Sin embargo, la relación del Plan Colombia con las FARC respondía a una lógica indirecta. Esto porque, insisto, se prevalecían las acciones antinarcóticos pues cualquier aspecto anti-FARC suponía reconocer un aspecto relacionado con la paz, más importante, y que requería de otra motivación. Sin embargo, y en todo caso, la prioridad era poner en marcha un plan integral contra la criminalidad del conflicto armado colombiano”. (EP 5, abril de 2015).

Para entender el Plan Colombia existe una concepción básica. Si se actúa contra el cultivo ilícito, como trasfondo, se están socavando las fuentes de financiación tanto de la guerrilla como del paramilitarismo, de manera que los dos principales escenarios de intervención van a ser en el sur del país. Es decir, además del macizo colombiano, en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo (Ramírez, 2009; Gallardo, 2005) el propósito va a ser reducir a la mitad el total del cultivo ilícito lo cual, a pesar de un éxito relativo, conllevó algunas consecuencias nefastas que posteriormente se abordarán con mayor detalle¹³⁸. Ello, porque la estrategia reactiva buscaba, en último término, motivar a que los campesinos abandonasen el cultivo ilícito para pasar a desarrollar otros proyectos alternativos que serían invocados, en paralelo al Plan Colombia, por el propio Estado colombiano.

Al margen de estas cuestiones, que serán fundamentadas y explicadas con profundidad en uno de los capítulos de esta tesis doctoral, el Plan Colombia se consigue plasmar, definitivamente, sobre la base de seis objetivos centrales: 1) fortalecer la lucha contra el narcotráfico, integrando la acción de las Fuerzas Armadas; 2) fortalecer el sistema judicial y lucha contra la corrupción; 3) neutralizar el sistema de finanzas del comercio de drogas para revertirlo en favor del Estado; 4) neutralizar y combatir los agentes de la violencia que actúan en connivencia con el tráfico de drogas; 5) integrar las iniciativas que provienen de las

¹³⁸ Uno de los capítulos de esta tesis tratará de cuestionar el alcance y éxito del Plan Colombia y la política de aspersión aérea como instrumento eficiente para la reducción y combate a un problema como es el derivado de los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

diferentes escalas geográficas local-nacional-internacional y, finalmente 6) fortalecer y expandir planes para desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el tráfico de drogas¹³⁹ (Otero, 2010: 197). Seis objetivos que, solo entre 1999 y 2002, van a requerir la nada desdeñable cifra de más de 1.9000 millones de dólares.

Como algunos de los logros señalados por el Gobierno colombiano, el Plan Colombia durante el desarrollo de la legislatura de Andrés Pastrana, y también después, en los primeros años del Gobierno de su sucesor, Álvaro Uribe, apoyó de manera determinante el mencionado proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo que respecta a Fuerza Aérea; capacidad de intervención en enclaves de cultivo ilícito, capacidad operativa nocturna, unificación del sistema de comunicaciones e implementación creciente de inteligencia técnica en las operaciones de las Fuerzas Militares (Díaz, 2002).

Asimismo, en lo que tiene que ver en la reestructuración, el Plan Colombia introdujo una doctrina de operaciones conjuntas, lo cual favoreció mayor especialización y complementariedad pues, por ejemplo, bajo el apoyo de la asistencia estadounidense, se crearon elementos tan importantes como el Comando Conjunto del Caribe y la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

Tabla 5: Recursos movilizados por el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana

	1999	2000	2001	2002
Total Ayuda Económica y Militar	283.7	1028.5	55.3	534.8
Prestamos	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones	283.7	1028.5	55.3	534.8
Asistencia Económica	213.1	1027.6	51.8	508.6
Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones	213.1	1027.6	51.0	508.6
Apoyo en seguridad y asistencia	5.3	128.5	2.5	6.6
Cuerpos de paz	0.0	0.0	0.0	0.0
Narcotráfico	205.9	894.4	48.0	499.0
Asistencia militar	70.6	0.9	3.8	26.2
Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones	70.6	0.9	3.8	26.2
Total de ayudas militares	281.8	1023.8	54.3	531.8

Fuente: Otero (2010: 111)

¹³⁹Toda la iniciativa del Plan Colombia, por su marcada impronta reactiva, contravenía la lógica fundada que cuestiona el alcance de las políticas exclusivamente reactivas, tal y como proponen Reuter, Crawford y Cave (1988). De igual manera, por ejemplo Samper (2013: 28) señala que "reducir el consumo del 1% de la cocaína en el mundo tiene un costo de 34 dólares por usuario cuando la inversión se concentra en la prevención del consumo; de 246 cuando se dirige a la lucha contra el narcotráfico y de 783 cuando se orienta a la erradicación de los cultivos ilícitos".

Tal y como reconoce el Departamento Nacional de Planeación (2006: 12), con el Plan Colombia también se coadyuvó, paulatinamente, al desarrollo de una postura ofensiva, como muestran la conformación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la creación de 12 brigadas móviles y más de 14 escuadrones móviles de carabineros.

Además de la profesionalización, un punto clave del Plan Colombia tendrá que ver con el problema del auge expansivo de los cultivos ilícitos. Entre 1990 y 1999, en Colombia se va desarrollando un incremento anual cercano al 18% de la superficie de cultivos de coca, y que entre 1998 y 1999 llega a un punto crítico. Tanto es así que mientras que en 1998 eran 101.800 el número de hectáreas cultivadas, en 1999 las mismas habían ascendido a las 160.119 Ha. Es decir, el incremento experimentado, solo en el año 1999, había terminado por ser del 57%, haciendo de Colombia el paradigma de *narcoestado* por antonomasia (Kruijt y Koonings, 2008: s.p.; Henderson, 2010: 343).

El fuerte componente de intervención en la lucha antinarcoóticos del Plan Colombia va a permitir reducir esta tendencia creciente y, por primera vez en la década, revertir la misma en términos netamente decrecientes. Si bien en el año 2000 el área de cultivos de coca llega a su máximo nivel, 163.289 Ha., en 2001 la tendencia decreciente es cuando empieza a hacerse visible, pues el total de hectáreas con cultivo de coca decaerá a 144.807 (- 11.4%) y a 102.071 Ha. en el año 2002. (-29.6%).

Sin embargo, un aspecto que se tratará con posterioridad tiene que ver con el tipo de erradicación de cultivos que bajo el Plan Colombia se va a llevar a cabo. Una erradicación que se va a servir como principal herramienta de la aspersión aérea, principalmente, porque, según Bernal (2003:32), la propia ilegalidad de estos cultivos:

“obliga a sus cultivadores a buscar zonas geográficas aisladas, con gran riqueza de cuerpos de agua que permitan su utilización en el procesamiento y eliminación de los desechos y en ecosistemas con abundante presencia de biomasa vegetal que dificulta su ubicación por las autoridades”.

Por otro lado, la erradicación aérea se llevará a cabo con herbicidas químicos, especialmente, el glifosato, altamente contaminante, y que termina por conferir un carácter itinerante a unas plantaciones de coca que, cada vez más, pasan a ser ubicadas en enclaves apartados y de más difícil acceso, lo cual termina por multiplicar el impacto ambiental de manera significativa (Pérez, 2007), además de repercutir negativamente sobre la fauna, la flora, los cultivos legales y la propia población civil (Salgado, 2004; Nivia 2001).

Sobre esta última cuestión cabría entender, por ejemplo, el fenómeno de desplazamiento transfronterizo experimentado, como resultado de las aspersiones unidas al Plan Colombia, en el departamento de Putumayo (Ahumada, Moreno y Sánchez, 2004). Desde el inicio de las fumigaciones, en el mes de diciembre del año 2000, además de afectar a la salud de personas y animales, y del sistema amazónico, las aspersiones llevaron consigo la destrucción de los cultivos de subsistencia, al no distinguir entre la necesidad de supervivencia de la

población, que en muchas ocasiones requería del cultivo ilícito para sobrevivir, y el interés de los grupos que operan en el narcotráfico (Mattié, 2007).

Solo en el año 2001, el Comité Estadounidense para los Refugiados responsabilizó al Plan Colombia del desplazamiento forzado de un total de 36.000 personas, además del abandono total sobre 42 municipios. A esta cifra se podía añadir la presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según el cual, entre los años 1999 y 2001, terminaron por producirse un total de 40.000 desplazamientos, especialmente provenientes del departamento de Putumayo, con destino hacia Ecuador. (Ayala *et al.*, 2001: 93).

Baste señalar que en 1999 se erradicaron por aspersión aérea 43.111Ha por 1.046Ha erradicadas manualmente. En el año 2000, la aspersión aérea se incrementó hasta las 58.074Ha por 3.495 de erradicación manual. Empero, es a partir de 2001 cuando esta proporción queda definitivamente rota a efectos de la influencia del Plan Colombia. Así, aquel año se erradicarán 94.152Ha por 1.745Ha eliminadas manualmente mientras que, en 2002, la cifra llega a las 130.364Ha erradicadas por aspersión aérea frente a 2.763Ha erradicadas manualmente.

En ese mismo orden de acciones, se incrementaron sustancialmente el número de toneladas de coca incautadas entre 1998 y 2002¹⁴⁰, del mismo modo que lo hizo la desaparición de laboratorios ilícitos¹⁴¹. Ello, en buena medida gracias a la creación de tres Brigadas contra el narcotráfico en el Ejército Nacional, cuatro bases móviles de erradicación y dos compañías de interdicción en la Policía Nacional (Departamento Nacional Planeación, 2006).

También, con recursos provenientes del Plan Colombia se inició el proceso de modernización y repotenciación de las aeronaves de ala fija (aviones y avionetas) y ala rotatoria (helicópteros) de la Fuerza Aérea, que fue complementado con equipos entregados en préstamo de uso para cumplir con los objetivos establecidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Traducido en cifras, si en 1999 se emplearon 34 aeronaves de ala fija y 1 de ala rotatoria; en 2001 se estaban empleando 79 aeronaves de ala fija y 3 de ala rotatoria; y en 2002, 120 aeronaves de ala fija y 8 de ala rotatoria.

A tal efecto, el Plan Colombia termina por erigirse, como anteriormente se apuntó, como responsable directo del incremento de la capacidad aero-táctica de la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia, a partir de la cual, se experimenta un aumento notable en el número de horas de vuelo. Es decir, si en 1999, el número de horas de vuelo de la Policía Nacional fue de 10.169, y en la Fuerza Aérea fue de 5.786; para el año 2001, el resultado era de 13.686 horas para la Policía (+34.5%), y de 19.996 para la Fuerza Aérea (245.5%). (Departamento de Planeación Nacional, 2006: 26).

¹⁴⁰ En 1999 se incautaron 43.666 kilos de coca; en 2000, 87.269; En 2001, 57.240 y en 2002, 95.278 (UNODC, 2007: 81).

¹⁴¹ En 1999 se destruyeron 245 laboratorios por 645 en el año 2000, 1.572 en 2001, y 1.448 en 2002 (UNODC, 2007: 79).

En cuanto al apoyo en infraestructura más destacable por parte del Plan Colombia, debe destacarse la asistencia estadounidense en las bases de Apiay, en el departamento de Meta, donde se encuentran los batallones de la Brigada VII; la controvertida base de Tolemaida¹⁴², en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá.

Sea como fuere, el Plan Colombia, dentro de la lógica de “paz negativa”, operó en los mismos términos que, primero Andrés Pastrana, y después Álvaro Uribe, de mucho mayor modo, concebirían el conflicto. Un conflicto en el que la paz venía a interpretarse, en última instancia, como la mera ausencia de guerra.

Así, junto a modernización y fortalecimiento de la fuerza de combate del Estado, y puesta en marcha de todo un operativo de lucha antinarcóticos, Estados Unidos vio recompensada su vieja reivindicación por la extradición¹⁴³. Si en 1999 consiguió extraditar a 10 colombianos por narcotráfico; en 2000 fueron 23; en 2001 fueron 39 y, finalmente, en 2002, fueron 68 los extraditados.

Sin embargo, y a pesar del notable fortalecimiento de la Fuerza Militar, lo cierto es que Colombia entre 1998 y 2002 transitó por una tesitura ambivalente, que permitirá entender lo que va a suceder en el transcurso de la década. Por un lado, en 2002, las FARC van a llegar a los 18.000 combatientes y 70 frentes, a los que se añaden otros 4.500 guerrilleros del ELN en 40 frentes y otras tantas estructuras urbanas. Asimismo, el paramilitarismo se había duplicado, en torno a las AUC fundamentalmente, llegando a los 8.000 combatientes. Dicho de otro modo, prácticamente toda la geografía del país se encuentra afectada por el conflicto armado (Mindefensa, 2005:28).

Solo entre 1998 y 2002 se producen 17.818 infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 17.043 violaciones a los Derechos Humanos; la violencia política y social se cobra 18.595 víctimas en estos cinco años; las víctimas en acciones bélicas representan 14.342 muertes (Otero, 2007: 14) y el número de desplazados llega a los mayores niveles de la historia de Colombia. Entre 1998 y 2002 se producen, según CODHES (2011: 18), 729.928 desplazamientos forzados que, en suma con todo lo anterior, desdibujan por completo el proceso de paz y la negociación del Caguán de Andrés Pastrana permitiendo entender cómo

¹⁴²La Base de Tolemaida, en Cundinamarca, sirve como centro de comando y despliegue de varias brigadas móviles y como unidad de formación, entrenamiento y reentrenamiento en diferentes especialidades y habilidades. También constituye un punto de apoyo y de servicio esencial para las diferentes actividades que la Fuerza Pública realiza en el territorio nacional (DNP, 2006: 27)

¹⁴³ El tema de la extradición siempre ha sido importante en Colombia, pues ha generado una importante preocupación entre los actores del conflicto armado, especialmente más próximos a las actividades narcotraficantes. Sobre todo, porque Estados Unidos reclama, por el impacto que genera el narcotráfico en su sociedad, capacidad punitiva, claramente relacionada con la importante cooperación que lleva a cabo, para afrontar este problema, en el país andino.

y bajo qué circunstancias se producen la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia¹⁴⁴.

5. Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática y la Iniciativa Regional Andina

El año 2002, como ya se ha señalado, representa un punto de inflexión en Colombia, tanto por la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez¹⁴⁵, que rompe con el bipartidismo imperante hasta entonces (Partido Liberal/Partido Conservador), como por, derivado de ello, las fuertes transformaciones que se van a producir en la forma de atender y entender el conflicto por parte del Estado y del poder público colombiano.

Tras el mencionado propósito truncado de la “Diplomacia por la paz” por llegar a un acuerdo con las FARC, la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se produce a través de una ruptura con las tendencias de carácter negociador dominantes en la presidencia anterior. Se descarta así cualquier política de aproximación con los grupos guerrilleros, al promoverse una política de confrontación, legitimada por una sociedad como la colombiana, escéptica y desafecta tras los reiterados fracasos de explorar una solución negociada al conflicto, y que por primera vez apuesta por una forma más reaccionaria en la forma de superar el mismo.

De hecho, las anteriores experiencias más reaccionarias contra las guerrillas no habían arrojado resultados exitosos. Basta recordar la “guerra contra los narcotraficantes” promovida por Virgilio Barco, con motivo del asesinato del candidato presidencial liberal, Luis Carlos Galán, así como la “guerra integral” de César Gaviria, una vez frustradas las negociaciones con las FARC y el ELN en el marco de una Asamblea Constituyente como la de 1991. Ambas iniciativas, que fracasaron en su propósito, a diferencia del caso de la elección popular de Uribe, además, tuvieron lugar tras la ruptura de políticas negociadoras e intentos por encontrar fórmulas de consenso para desactivar el conflicto armado colombiano.

Paralelamente, junto a esta dinámica endógena de cambio dentro del sistema político colombiano, se produce una afectación en el orden geopolítico mundial, como consecuencia de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 y la llegada a la presidencia estadounidense del republicano George W. Bush, máximo exponente del “realismo preventivo” y de la

¹⁴⁴Una prueba de hasta qué punto el proceso de paz del Caguán acaba llegando a un sinsentido como búsqueda del proceso de paz se puede entender, únicamente, atendiendo a las cifras que presenta el conflicto justo un mes antes de que termine el diálogo. Como señala Fernández de Soto (2004, p.177), en este tiempo se “habían perpetrado 117 atentados terroristas, entre los cuales 4 carros-bomba, 5 ataques a instalaciones militares, la voladura de 33 torres de energía, de 2 tramos de un oleoducto y de 3 puentes, el homicidio de 20 civiles”, entre otras acciones.

¹⁴⁵ Álvaro Uribe venía de ser Alcalde de Medellín (1982-83), en los años de inicio del cartel de Medellín, con Pablo Escobar. Asimismo fue Senador de la República entre 1986 y 1994 y Gobernador de Antioquia entre 1994 y 1998. Toda esta trayectoria, sorprendentemente la desarrolla bajo el Partido Liberal, hasta que en 2001 rompe con el mismo para lanzar su propia plataforma política “Primero Colombia”, que le proyectará como *outsider* a la presidencia.

seguridad como elemento nuclear del código geopolítico neoconservador de Washington y su proyección exterior¹⁴⁶.

Sobre estas circunstancias, la seguridad como valor y como derecho va a resultar la depositaria de toda la construcción del andamiaje institucional y de (re)construcción del Estado en Colombia, tanto desde la lógica uribista de “primero seguridad, después libertad”, como desde el apoyo proveniente de Estados Unidos y su comprensión conservadora de la seguridad.

Todo este elenco de circunstancias se imbrica sobre un punto común, que es el de concebir la superación del conflicto armado colombiano, como se antedicho, en los términos que Galtung (1964) y otros más tarde denominan como “paz negativa”, esto es, comprendiendo la paz como ausencia de guerra y no aspirando a superar las condiciones de violencia estructural –inequidad, marginalidad, pobreza, debilidad institucional de la dimensión social, democrática y de derecho del Estado- que dan sentido a la “paz positiva”.

Tal conjunción, *ad intra*, fruto de las transformaciones y cambios que acontecen a partir de 2002 en Colombia, y *ad extra*, a partir del nuevo escenario geopolítico emergente, va a materializarse en dos iniciativas dentro del particular caso colombiano. Dos iniciativas en las que la prioridad resulta el propósito compartido por reducir la fortaleza beligerante de los diferentes actores irregulares en liza y disminuir su control efectivo territorial. Son los referidos Plan Colombia, que a partir de la llegada de Bush a la presidencia, quedará inmerso dentro de lo que se conocerá como la Iniciativa Regional Andina - IRA¹⁴⁷ y la PSD. Esta PSD, que será abordada con mayor detalle en capítulo VI de esta tesis doctoral, se enmarca dentro de dos fases. La primera, entre los años 2002 y 2006, en lo que se conoce *stricto sensu* como la Política de Seguridad Democrática, y una segunda fase, más conocida como la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.

En su primera fase, la PSD tiene como principal objetivo el asumir la seguridad como una tarea conjunta y prioritaria de todas las autoridades, lo cual se produce a través de una inversión ingente de recursos económicos, humanos y militares, bajo una consideración y una proyección beligerante con las FARC y con el ELN especialmente, sobre un montante que asciende a los 1.835 millones de dólares. (Presidencia de la República, 2007: 33).

Ello representa un esfuerzo verdaderamente sin precedentes en Colombia, a tenor de que busca por primera vez pensar en revertir el sentido que hasta entonces había llevado consigo

¹⁴⁶ Entendiendo por neoconservadurismo la revitalización del término desarrollada bajo la presidencia del republicano George W. Bush (2000-2008) *que hace referencia* a cómo, tras los atentados del 11 de septiembre, la National Security Strategy se orienta a consolidar en la política exterior estadounidense una marcada impronta de unilateralismo, supeditando la seguridad nacional a una estrategia activa y agresiva cuyo ámbito de intervención se focaliza en todos aquellos escenarios donde concurren indicios más o menos fundados de peligro para los intereses de Estados Unidos.

¹⁴⁷ La Iniciativa Regional Andina como el instrumento de cooperación, especialmente antinarcóticos, con la región andina, y muy especialmente con Bolivia, Ecuador, Perú y, por supuesto, Colombia.

el conflicto armado, tal y como se ha visto, hastiado por una correlación de fuerzas, especialmente hasta el año 2000, cada vez más favorable, hasta ese momento, hacia los grupos armados irregulares. De esta manera, casi de forma inmediata, y sobre la base de trabajar en políticas y procesos ya iniciados bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se empiezan a obtener importantes logros en lo que a reducir la capacidad combativa de las FARC y del ELN se refiere, y que se acompañan de un sustancial incremento en la capacidad de ataque de la fuerza pública.

Empero, y tal y como se verá con posterioridad, los costos humanos y militares de esta iniciativa, igualmente fueron mayúsculos, a tenor del incremento desproporcionado de combates, acciones bélicas y violencia de la guerrilla. Tanto que, como señala Leal (2010: s.p.):

“ante la incapacidad de diseñar una estrategia eficaz mediante el plan de guerra de la Política de Seguridad Democrática, identificado con el eufemismo de Plan Patriota, se disimuló con la adopción del nuevo nombre: Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”.

Pese a los cambios de forma en cuanto a la narrativa de cómo identificar la política pública de superación del conflicto armado, y que incluso lleva al propio Álvaro Uribe a afirmar la inexistencia y la desaparición del mismo en una redefinición de la violencia hacia el terrorismo¹⁴⁸, lo cierto es que el trasfondo entre una y otra fase de la política de seguridad del *uribismo* prácticamente es el mismo, salvo por dos cuestiones.

La primera, claramente efectiva, pasaría por desarrollar, en articulación con el apoyo estadounidense, un mayor énfasis en lo referente a inteligencia técnica y humana, asesoría del más alto nivel así como fortalecimiento de los instrumentos de cooperación y coordinación del Ejército junto con la Policía Nacional. Asimismo, se identifica la necesidad de mejorar la distribución de recursos y se priorizan la desertión y la captura como formas de debilitar a los grupos irregulares armados frente a la búsqueda, casi obstinada hasta entonces, de causar bajas en el “enemigo”. También se refuerzan los instrumentos de recompensa y participación de la sociedad civil y si bien, la estrategia era netamente militarismo, Álvaro Uribe nunca lo ha reconocido, de manera que cuando es preguntado por esta cuestión en el marco de esta tesis doctoral, su respuesta era:

Yo nunca hablé ni utilicé la palabra conflicto. La palabra conflicto aplica a la disputa entre insurgencias y dictaduras. Entre guerrillas y sistemas no democráticos. En Colombia siempre ha habido una democracia sólida, desafiada por grupos que terminaron reducidos a narco-terrorismo. Tampoco he utilizado nunca el concepto de guerra porque el problema nuestro,

¹⁴⁸ Son sumamente ilustrativas las palabras de Giraldo (2006: 153), para quien “El esfuerzo del Gobierno nacional por deconstruir el lenguaje heredado sobre el conflicto político armado y elaborar un nuevo discurso debe entenderse como un reposicionamiento del Estado y como una estrategia de guerra. No obstante, Posada (2005) señala que evitar denominar a las FARC como grupo terrorista “termina dándole la razón a los enemigos de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho”.

Véase: <http://www.semana.com/opinion/articulo/tomarse-palabras-serio/74000-3> Consultado el 21 de junio de 2015.

en Colombia, era un problema de orden público. Nosotros lo que teníamos que hacer era garantizar seguridad y velar por un cumplimiento con el ciudadano. Esto se hizo con base en tres ejes: seguridad, inversión y política social”. (EP 1, junio de 2015).

La segunda diferencia estribaría en el monto de recursos que durante esta segunda etapa del mandato de Álvaro Uribe se utiliza para fortalecer la seguridad del país, y que según las cifras de la Presidencia de la República (2010: 30), asciende a 5.770 millones de dólares. Acontece un crecimiento paulatino y sustancial del porcentaje del PIB destinado a seguridad y defensa, que durante estos ocho años supera el 5%, y que representa más del doble de lo que destinan los presupuestos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE-, así como un punto porcentual más que los Estados Unidos.

De esta manera, Colombia se va a convertir, transcurrido este tiempo, en el cuarto país del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de Fuerza Pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia (Mindefensa, 2011b: 17).

Bajo esta misma tendencia, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, va a pasar de los 110.000 miembros a los 160.000, y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos, de manera tal que, en términos agregados, el pie de fuerza pública en Colombia experimenta un incremento del 40% al cual, cualitativamente, habrá que añadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (Mindefensa, 2010: 68).

Como sucediera con Andrés Pastrana y Bill Clinton, la convergencia entre Álvaro Uribe y George W. Bush va a ser total. Máxime, una vez que los atentados del 11 de Septiembre representa un viraje en la “guerra contra las drogas” para centrarse en la “guerra contra el terrorismo”. Guerra, en la que Colombia representa unos intereses geopolíticos y geoestratégicos de primer orden para Estados Unidos en el marco de la IRA y a cuyo efecto son ilustrativas las siguientes palabras de George W. Bush:

“La guerra contra el terror no se ganará a la defensiva. Debemos llevar la batalla al enemigo, desbaratar sus planes y confrontar las peores amenazas de que emerjan. En el mundo en que entramos, el único camino hacia la seguridad es la acción. Y esta nación actuará (...) Y nuestra seguridad requerirá que todos los americanos miren al frente con resolución y estén listos para la acción preventiva cuando sea necesario defender nuestra libertad y para defender nuestras vidas” (Office of PressSecretary, 2002, citado en Yepes, 2013: 381).

La IRA va a responder perfectamente a este nuevo enfoque sobre la “agenda negativa”¹⁴⁹ y muy particularmente sobre la amenaza que representa el narcotráfico, en la medida que 1) se

¹⁴⁹ Por “agenda negativa” se entienden aquellas amenazas originadas en un escenario global y que impactan a nivel local, dejando al Estado-nación, como actor, en una posición controvertida. En ocasiones por ser muy débil para afrontar integralmente la amenaza, y en otras por ser excesivamente grande y burocrático para

plantea la identificación y destrucción de las amenazas que afecten a la seguridad estadounidense; 2) se justifica una lógica de acción preventiva; 3) sobre la base de acuerdos y alianzas con otros Estados de la comunidad internacional; y 4) en la que la dimensión militar cobra una importancia netamente prioritaria.

Particularmente, y aunque la IRA cobra plena vigencia tras el 11 de Septiembre, lo cierto es que esta iniciativa fue presentada por George W. Bush al Congreso en la primavera de 2001, bajo el propósito de extender la lucha antinarcóticos y antiterrorista a los países limítrofes con Colombia, bajo una lógica que convierte a la región andina en un escenario de atrayente presencia para Estados Unidos, tal y como sugiere Ahumada (2007). Ello, porque la región andina es el origen del 100% de la cocaína y del 60% de la heroína que entra en el país. Y además, no se puede obviar que precisamente de Colombia, Ecuador y Venezuela procede mucho más petróleo que, por ejemplo, del conjunto de países del Golfo Pérsico. Dicho de otro modo, en la concreción de la IRA, la cuestión del petróleo no es ni mucho menos baladí. Tanto, que no es casualidad que uno de los ejes prioritarios del Plan Colombia durante la presidencia de George W. Bush fuera el apoyo a la XVIII Brigada, encargada de proteger el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Ello, con más de 4.000 soldados y con la adquisición de 12 helicópteros, para lo que Colombia recibió dentro del Plan, la nada desdeñable cifra de 98 millones de dólares en el año 2002¹⁵⁰.

En su conjunto, inicialmente la IRA previó un total de 458 millones de dólares. Cifra de la cual, 32 millones fueron para Perú, 110 millones para Bolivia, 20 millones para Ecuador y 80 millones para un conjunto de diferentes países de la región. A todos estos rubros, habría que añadir 53 millones para tareas de inteligencia en la región, 68 millones para el mejoramiento de radares del servicio de aduanas de Estados Unidos y para la adecuación de los conocidos como “puestos operativos avanzados” (FOL), 61 millones para el aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta, en Ecuador; 43.9 millones para el aeropuerto Reina Beatriz, de Aruba, y 1.1 millones para el aeropuerto internacional Hato, en Curazao, Brasil (Tokatlian, 2011: 141).

A pesar de todo esto, la realidad es que bajo el Gobierno de George W. Bush, el carácter prioritario de instrumentos de asistencia económica y militar se va a focalizar fuertemente en Colombia, llegando a convertirse en el tercer destinatario de ayuda de Estados Unidos tras Israel y Egipto. Tanto es así que, solo en ayuda militar, el Plan Colombia va a recibir una ingente cantidad de recursos: 606 millones de dólares en el año 2003; 594 millones de dólares en 2004; 579 millones de dólares en 2005; 582 millones de dólares en 2006; 573 millones de dólares en 2007 y 422 millones en 2008 (Otero, 2010: 132)¹⁵¹.

responder de manera efectiva a la misma. Sirvan algunas obras de referencia: Barbé (2007: 160), Beck (2003: 53) o Bouza (2006: 68).

¹⁵⁰Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1328372> Consultado el 21 de junio de 2015

¹⁵¹Véase: <http://www.lawg.org/storage/documents/blueprint.pdf> Consultado el 23 de junio de 2015

Así las cosas, bajo el mandato de George W. Bush, que en todo momento va a coincidir con la presencia de Álvaro Uribe en la presidencia colombiana, el país andino va a recibir un total de 3.356 millones de dólares. Y ello, aunque el Plan Colombia quedó fijado para un plazo inicial de seis años. Sin embargo, dada la relevancia del conflicto armado en la configuración de la agenda exterior estadounidense, y habida cuenta de la posición prioritaria que el narcotráfico representaba para la seguridad en Estados Unidos, se entiende que aconteciese una segunda fase de consolidación que transcurrirá entre 2006 y 2013.

Es durante este proceso de transformación del Plan Colombia, que la asistencia en seguridad pasa a desarrollarse como cooperación en seguridad en tanto y en cuanto se erige como una nueva forma de defender los intereses de Estados Unidos, como reconoce Otero (2010: 91):

“transfiriendo responsabilidades a los países socios que sirvan dos propósitos: a) permitir que el país socio apoye los intereses de Estados Unidos y b) disminuir la necesidad de desplegar fuerzas de Estados Unidos por algo que puede ser cumplido por el país socio”.

Es así que Colombia y Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, empiezan a poner en marcha, a diferencia de la etapa con Pastrana, siete elementos clave en cuanto a la participación dentro de la tesitura que plantea el conflicto armado: 1) ejercicios y operaciones combinadas; 2) educación militar en Estados Unidos; 3) entrenamientos combinados; 4) experimentación conjunta en inteligencia, comunicaciones, control y comando; 5) contactos de defensa y militares; 6) asistencia cívico-humanitaria; y, finalmente, 7) operaciones de mantenimiento de la paz.

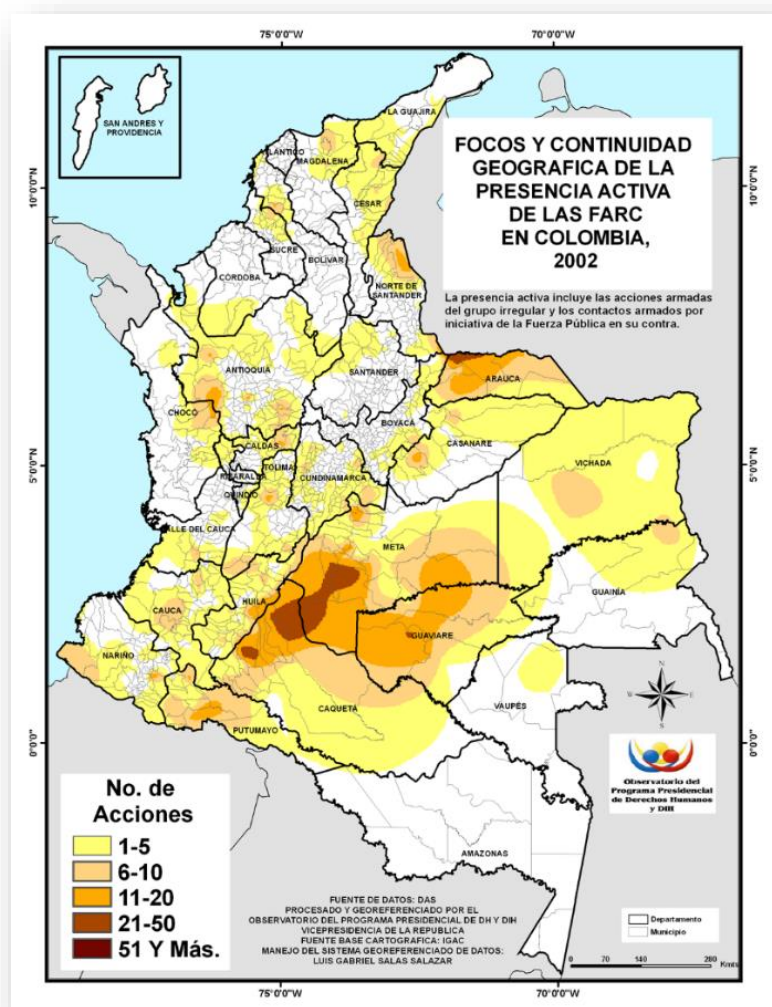
Dado el cambio en la lógica de confrontación directa que tiene lugar bajo la presidencia de Álvaro Uribe, claramente espoleada por esta asistencia estadounidense, es de entender el cambio que empieza a darse en la evolución del conflicto armado colombiano. Un cambio, que, por otro lado, como se profundizará con posterioridad, va a responder a lógicas de acción y expansión muy concretas que determinarán directamente la forma en que evoluciona la geografía del conflicto y la ubicación de los grupos armados al margen de la ley.

Hacia el año 2000, la distribución de las acciones armadas de las FARC y del ELN, y también del paramilitarismo, van a responder a una lógica centrípeta, especialmente por el propósito de la guerrilla de asfixiar económicamente los centros económicos del país, especialmente Bogotá y Medellín, pero también otros, como Cali, Barranquilla, Santa Marta o Barrancabermeja.

Es por ello que las mayores dosis de violencia derivadas del conflicto se van concentrar en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima. Tal cartografía, paralelamente, se acompaña por altos incrementos en la intensidad del conflicto en Casanare, Chocó, La Guajira, Magdalena o Putumayo que, en su mayor parte, son escenarios de retaguardia de gran valor estratégico para el sostenimiento del conflicto y la obtención de fuentes económicas de poder (Echandía, 2006).

Durante la negociación del Caguán (1999-2002), se va a consolidar la fase de expansión guerrillera, sobre todo de las FARC, fruto de una correlación de fuerzas sin precedentes, favorable a la guerrilla, y que permite encontrar algunos elementos definitorios de lo que Pizarro (2011) y Pécaut (2008) denominaron, lo ya mencionado como “guerra de posiciones”. Es decir, tras una consolidación militar y territorial de la guerrilla, se lleva a cabo una ofensiva técnica que tiene como principal finalidad aniquilar parcialmente o dispersar al Ejército colombiano, combinando la insurrección urbana con la guerra, y siempre con miras, en último término, a la toma del poder público.

Mapa 14: Presencia de las FARC en Colombia en el año 2002



Fuente: ODHDIH (2014)

Dicho esto, las FARC van a disponer de una presencia territorial más que considerable a través de sus 70 frentes. En el centro y suroriente del país, con el Bloque Oriental (Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés); y con los Bloques Central y Sur (Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle). Igualmente, sobre las regiones de Antioquia y Chocó va a operar a través del Bloque Noroccidental; por medio del Bloque Magdalena Medio en la región del Magdalena Medio, y finalmente, en el nororiente del país (Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander y Vichada) a través de los Bloques Norte, Magdalena Medio y Oriental.

En el caso del ELN, para 2002 va a contar con 33 frentes, cada uno de unos 130 combatientes aproximadamente (Sánchez y Chacón, 2005: 10), si bien con una ubicación geográfica claramente diferente a la de las FARC, al concentrarse en el norte y centro del país (Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre, y los tres departamentos del eje cafetero, Risaralda, Quindío y Caldas) y en mucha menor medida en el suroccidente colombiano, en Cauca, Nariño y Valle.

Como puede observarse, dada esta presencia de la guerrilla sobre gran parte del país, la PSD y el Plan Colombia van a tener como prioridades, por un lado, realizar combates directos en el grueso de departamentos que conforman la región central del país; y por otro, afectar algunos de los escenarios estratégicos que son caldo de cultivo de la financiación guerrillera.

Es como se entiende el fortalecimiento de los municipios sobre los que transcurre el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca, y clave para el ELN, o la actuación de fumigación aérea sobre los campos de cultivo de coca en Meta, Caquetá o Putumayo, en el sur del país, fundamentales con el fin de mermar las fuentes económicas de las FARC.

Dentro de esta lógica centrípeta de ataque a la insurgencia y búsqueda de recuperar el control territorial, desde el operar de la Fuerza Pública se parte del centro para extenderse paulatinamente hacia la periferia, circunscribiendo operaciones tan significativas como lo fue la Operación Libertad I, en la que participaron más de 15.000 efectivos dentro de un campo de acción de más de 70.000 km², abarcando el oriente de Tolima, todo el departamento de Cundinamarca, el norte de Meta y el suroriente de Boyacá.

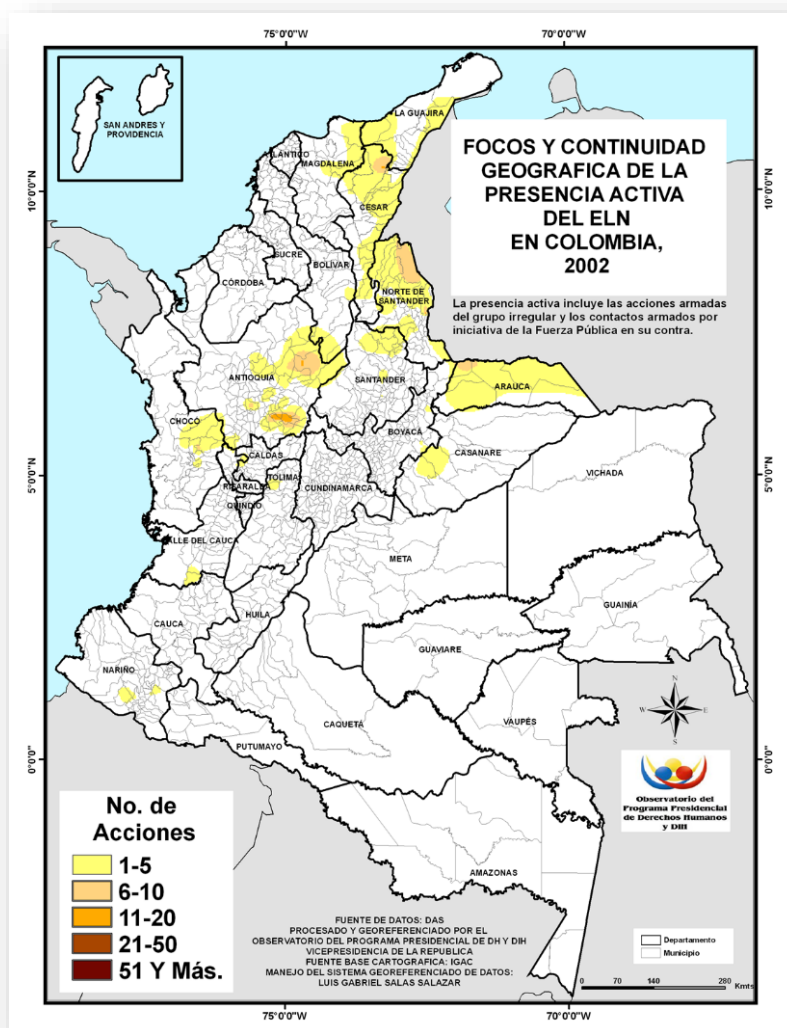
Esta operación, sin parangón, debe entenderse como el primer punto de ruptura con la cartografía envolvente de las FARC y el ELN sobre el centro en su búsqueda, sobre todo, de asfixiar Bogotá. Las victorias y las conquistas territoriales derivadas de la misma van a ser de gran valor estratégico para consolidar el control territorial creciente y sin retorno en beneficio del Estado, además, de traer consigo la muerte de importantes líderes, especialmente de las FARC, como son los guerrilleros “Manguera”, “El Viejo” o “Marco Aurelio Buendía” (Pizarro, 2011).

En este mismo escenario se pueden destacar las importantes operaciones que tienen lugar por medio del uso de diferentes unidades conjuntas, como es el caso de las Fuerzas de Tarea Omega, dirigidas a mermar los Bloques Sur y Oriental en la retaguardia estratégica de las

FARC, esto es, en la región suroriente del país, sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

Algo similar va a suceder con el ELN, al cual se le va a golpear con fuerza, especialmente durante los cuatro primeros años de mandato de Álvaro Uribe, en zonas de tradicional apego y presencia guerrillera. Es por ello que entre 2003 y 2006 se van a reducir sustancialmente las acciones de esta guerrilla a la vez que se incrementan notablemente los combates con el Ejército. Tanto es así que por 1.484 combates por iniciativa de la Fuerza Pública, acontecen tan solo 258 acciones pero que, en uno u otro caso, se terminan por concentrar, fundamentalmente en Arauca, Norte de Santander y el oriente y el nororiente antioqueño (ODHDIH, 2014).

Mapa 15: Presencia del ELN en Colombia en el año 2002



Fuente: ODHDIH (2014)

Paralelamente a esta mayor y mejor fuerza de combate de la Policía y el Ejército colombiano, acontecen importantes golpes estratégicos sobre los altos mandos de las FARC y del ELN. En primer lugar, como las tres acciones más significativas al respecto deben mencionarse la Operación Fénix (2008), la Operación Sodoma (2010) y la Operación Odiseo (2011) – ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Las tres supusieron la muerte de tres de los miembros históricos más relevantes de la guerrilla y, todos ellos, componentes del Secretariado de las FARC: “Raúl Reyes”¹⁵², “Mono Jojoy”¹⁵³ y “Alfonso Cano”¹⁵⁴.

Del mismo modo, no pueden obviarse otras bajas, también significativas, como la captura de “Simón Trinidad”¹⁵⁵ en Quito, en 2004, por parte de los servicios secretos colombianos; o las muertes, en 2007, de “Negro Acacio”, miembro del Secretariado y clave en la economía de la droga en Guaviare y Vaupés; de “Martín Caballero”, jefe del Frente 37 de sur de Bolívar; y, en 2008, de “Iván Ríos”, jefe del Bloque Central de las FARC.

Igual sucedió con el ELN, notablemente diezmado, y que en el transcurso de esta década experimenta una reducción de su fuerza de combate del 50%. Por ejemplo, entre 2009 y 2010 va a sufrir la pérdida de tres de los líderes más importantes del Frente Bolcheviques de Líbano, como son “Mauricio”, “Duván” y “Laín”, y lo cual va a conducir a la desarticulación del grupo más activo del ELN sobre el departamento de Tolima.

Como puede darse cuenta, la PSD y el Plan Colombia van a suponer un instrumento de gran valor en las rupturas sobre la cartografía envolvente de las guerrillas, lo que va a minar la extensión de su control territorial pero a lo que, igualmente, va a contribuir un tercer factor hasta el momento obviado: el paramilitarismo.

En un Estado como el colombiano, con un fuerte déficit de seguridad, el paramilitarismo había emergido con fuerza, décadas atrás, como un instrumento con el que combatir la guerrilla, primero, en beneficio de ganaderos, terratenientes y empresarios presionados por la guerrilla a modo de extorsión (“vacunas”) y secuestro; y después, como una forma óptima desde la que suplantar a la misma para acceder a sus fuentes de poder económico más relevantes, especialmente, el narcotráfico.

¹⁵² “Raúl Reyes” fue uno de los líderes más carismáticos de las FARC, miembro del Secretariado y dirigente del combativo Bloque Sur. Murió tras la controvertida “Operación Fénix”, por la cual la fuerza aérea colombiana bombardeó el municipio de Santa Rosa del Yanamaru, en Ecuador, lo que terminó por generar una importante crisis regional entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

¹⁵³ “Mono Jojoy” fue otro dirigente clásico de las FARC, miembro del Secretariado y dirigente del Bloque Oriental. Era el guerrillero más influyente en el accionar armado de las FARC. Murió el 22 de septiembre de 2010, por acciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, y gracias a las filtraciones dentro de la guerrilla.

¹⁵⁴ Tras la muerte de Manuel Marulanda en 2008, quien asume la jefatura máxima de las FARC es “Alfonso Cano”, miembro del Secretariado y hasta ese momento comandante del Bloque Central. Alfonso Cano asume la máxima comandancia de las FARC el 25 de mayo de 2008, como evidencia un comunicado emitido por otro de los dirigentes de la guerrilla, y sucesor al frente de la misma, tras la muerte de Cano, “Timochenko”. Así, Cano morirá con motivo de la Operación Odiseo, llevada a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana entre las localidades del departamento de Cauca, de Jambaló y Toribío.

¹⁵⁵ “Simón Trinidad” llegó a ser la tercera figura guerrillera del Estado Mayor del Bloque Caribe.

En 1997 tiene lugar la articulación de las AUC, ni mucho menos, nada comparable a la estructura jerárquica y organizada de la guerrilla, si bien, es la máxima expresión visible de lo que es el poder paramilitar. Las AUC, legitimadas como una forma de combatir la guerrilla en escenarios donde la presencia del Estado había adolecido de importantes carencias durante décadas, acaba favoreciendo la consolidación de un tercer actor que quiere ser parte del “negocio” que representa el conflicto armado colombiano, y que en muchas ocasiones se apropia de la razón antsubversiva para justificar su existencia, aun cuando la guerrilla, en ocasiones, para el caso de ciertos territorios, nunca existió o lo hizo de una manera poco combativa¹⁵⁶.

Escenarios del norte del país, como son la región oriental antioqueña de Urabá, las regiones del Magdalena Medio y los Montes de María así como los departamentos de Arauca, Chocó, Norte de Santander y Santander; y los departamentos del sur como Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo, corredores estratégicos de la retaguardia insurgente, a partir de 1998 y hasta 2005, se van a erigir como enclaves sobre los que el paramilitarismo se va a expandir, en muchos casos, con relativa facilidad y rapidez; y en otros, dando lugar a una nueva vuelta de tuerca en la violencia y la confrontación armada que se dirige, especialmente, hacia la población civil.

No casualmente, todos estos emplazamientos, mayormente, son lugares de cultivo de coca o corredores estratégicos desde los que se da salida a los mismos, sirviendo de fuentes de poder económico, desde entonces en disputa, con la guerrilla. De hecho, “Diego Vecino”, el que fuera jefe político de las AUC, así lo señala cuando reconoce que:

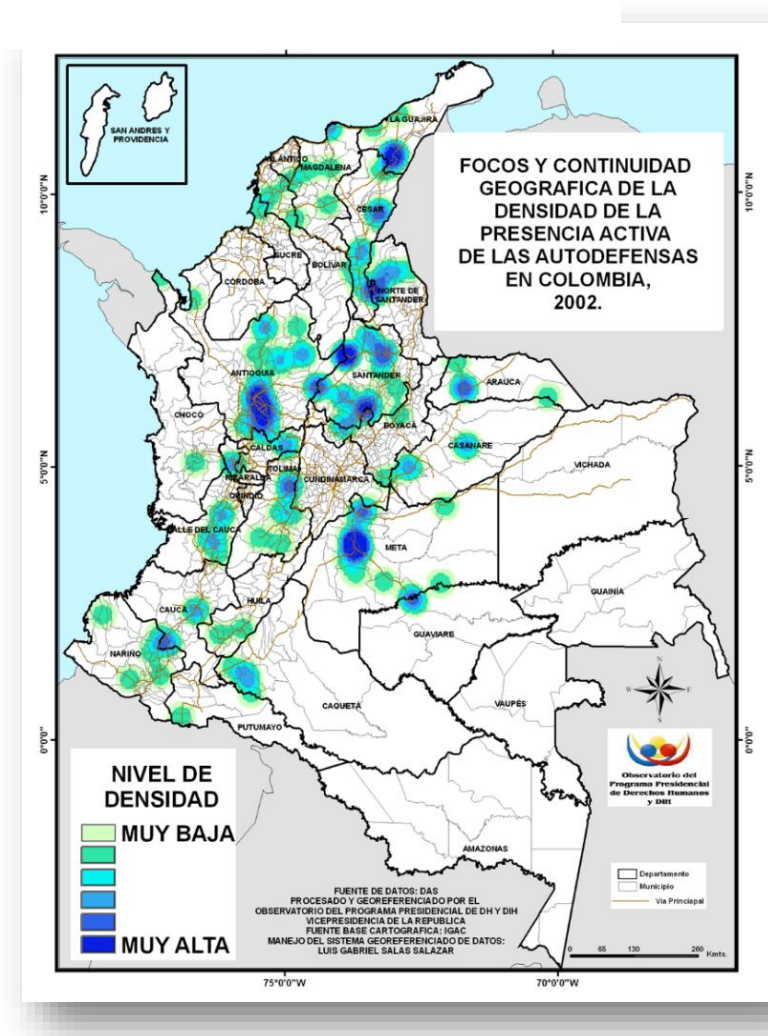
“En ese momento, de inicios de la década pasada es que las AUC buscan controlar los cultivos de coca. Esa era la principal fuente de financiación de la guerrilla de las FARC y del ELN. Necesitábamos arrebatar su principal fuente de financiamiento. Por ejemplo, nosotros solo cobrábamos el paso de la coca. Pero piense que donde ha cultivo hay tres cobros diferentes, que son los que utilizaban las FARC y que ahora también hacen las Bacrim. Nosotros cobrábamos 100.000 pesos y luego 200.000 cada kilo que el narco pasaba por nuestra ruta. Eso nos generaba, fácilmente, por cada ocasión, que no era siempre, 50 ó 100 millones de pesos. Sin embargo, donde hay coca se grava al campesino que cultiva la coca, al individuo que cocina la base y finalmente al que la cristaliza en el laboratorio. El beneficio es mucho mayor”. (EP 12, mayo de 2015).

El paramilitarismo, por tanto, va a coadyuvar en unos casos la tendencia de repliegue de FARC y de ELN, lo que va a permitir, después, la puesta en marcha de políticas de consolidación territorial por parte de la Fuerza Pública colombiana, claro está, dentro de una

¹⁵⁶ Como se verá con posterioridad, el paramilitarismo en ocasiones utiliza la narrativa antsubversiva para justificar su existencia, aun cuando la guerrilla en algunos enclaves nunca existió o su capacidad de resistencia fue relativamente débil, como en algunos enclaves de los Montes de María, en Bolívar.

connivencia de intereses que va a terminar por repercutir negativamente al gobierno de Álvaro Uribe¹⁵⁷.

Mapa 16: Presencia de las AUC en Colombia en el año 2002



Fuente: ODHDIH (2014).

Ello va a ser especialmente visible en los departamentos de la costa Atlántica y en parte de los departamentos de Antioquia y Chocó, en los que, tal y como ha evidenciado en su archivo

¹⁵⁷ La connivencia de intereses viene marcada por el factor denominador común que era la guerrilla. De este modo, para el Gobierno, el paramilitarismo coadyuvaba el factor de disputa directa frente a las FARC de modo que, en el orden de prioridades, era el último eslabón al que combatir. De hecho, son consabidos, y recogidos en multitud de testimonios en esta tesis, la concurrencia de operativos conjuntos entre Fuerza Pública y paramilitarismo.

el CNMH, los excesos en la lucha contra la guerrilla terminaron en muchas ocasiones incluyendo acciones como, operativos conjuntos del Ejército colombiano con el paramilitarismo; la integración de la población civil en muchas de las acciones de contrainsurgencia destinadas a debilitar los apoyos de la guerrilla y, en último término, la emergencia del escándalo conocido como la “parapolítica”, a tenor de la convergencia de intereses políticos entre el paramilitarismo y parte del poder político local y regional¹⁵⁸.

Así, las AUC van a llevar a cabo su acción destinada al repliegue guerrillero, en la mayoría de las ocasiones, con salvedades como la del BHMM o el BEC, no por medio de confrontaciones directas con las FARC o el ELN, sino a través de infundir el terror en la población civil y en las comunidades de apoyo local en disposición de la guerrilla, lo cual termina convirtiéndose en una especie de relativa “guerra contra la sociedad”¹⁵⁹. Es por ello que, como será constante a lo largo de la década, incluso desmovilizadas las AUC, el mayor número de masacres, causas de desplazamiento forzado o despojos de tierra van a ser responsabilidad de estos grupos paramilitares¹⁶⁰.

De esta manera, la variable paramilitar debe entenderse como fundamental y por ello no puede perderse de vista en la comprensión de los hechos que invitan a entender el repliegue de las FARC y el ELN y la transformación cartográfica del conflicto. Por ejemplo, el paramilitarismo va a ser la razón del repliegue guerrillero del ELN en Barrancabermeja, en el sur de Bolívar, en la región del Catatumbo o en La Gabarra, además de ser la razón de la desaparición del histórico bloque del oriente antioqueño “Carlos Alirio Buitrago”. Así lo remarca el entonces comandante del frente, “Byron”, cuando afirma que:

“El CAB, como le decía, llegó a tener 300 hombres pero a diferencia de las FARC nosotros no somos Ejército de un partido y, por tanto, nuestra organización era más flexible. Más parecida a Nicaragua. Así, la parte militar se configuraba según el objetivo. Era una guerra irregular de manera que yo dirigía operativos de 5 hasta 100 hombres, por ejemplo. Cuando llegan los paramilitares, entre 2001 y 2002, sobre todo tuvimos muchos combates con las AUC, pero también con las FARC. Nos dimos mucha bala. Eso nos generó muchas deserciones y la dificultad de justificar y explicar a la gente cómo era que las guerrillas se daban plomo entre sí. Teníamos, desde 2002 mucho cansancio de combate. Además la arrogancia de las FARC nos debilitaba como insurgencia y todo, porque nosotros, en esa vorágine, terminamos por parecernos a ellos. Nos arrastraron los mismos errores. Estábamos en descomposición interna y empezamos con una operatividad poco limpia, a criminalizarnos y perdimos parte de nuestra naturaleza. Era guerra perdida, sobre todo cuando se consolida la presencia de las Fuerzas Militares y las AUC. Ellos a nosotros no nos dieron mucho en el

¹⁵⁸ La “parapolítica”, posteriormente abordadas, resultó ser un escándalo que saltó a la luz en 2006, presentando la existencia de importantes vínculos entre grupos armados, especialmente narcotraficantes y paramilitares, con partidos políticos y grupos empresariales, y cuya confluencia de intereses ha terminado por trascender de la esfera local al ámbito departamental y a instituciones nucleares del Estado como el Congreso o el Senado

¹⁵⁹No se debe confundir con el título *Guerra contra la sociedad*, de Pécaut (2001) y el cual responde a otras motivaciones.

¹⁶⁰ Esto se verá en cifras, de manera detallada, en el capítulo que aborda con profundidad el paramilitarismo

combate directo pero le dieron muy duro a la población. Salimos bien frente al Bloque Magdalena Medio y del paramilitarismo previo, de los ochenta, que ya estaba por la región, pero nos debilitó la desaparición de nuestras bases. En definitiva, perdimos la guerra. Las AUC nos ganaron. Perdimos la guerra política y militar”. (EP 10, junio de 2015).

Para el caso de las FARC, la incursión paramilitar va a ser más que relevante, por ejemplo, en el Magdalena Medio o en el oriente antioqueño, hasta el punto que las FARC son relegadas, incluso, también, de algunos de sus tradicionales bastiones de control territorial como la región bananera de Urabá, o de ciertos escenarios tradicionales en Guaviare o Meta. A tal efecto, “Karina” señala lo siguiente:

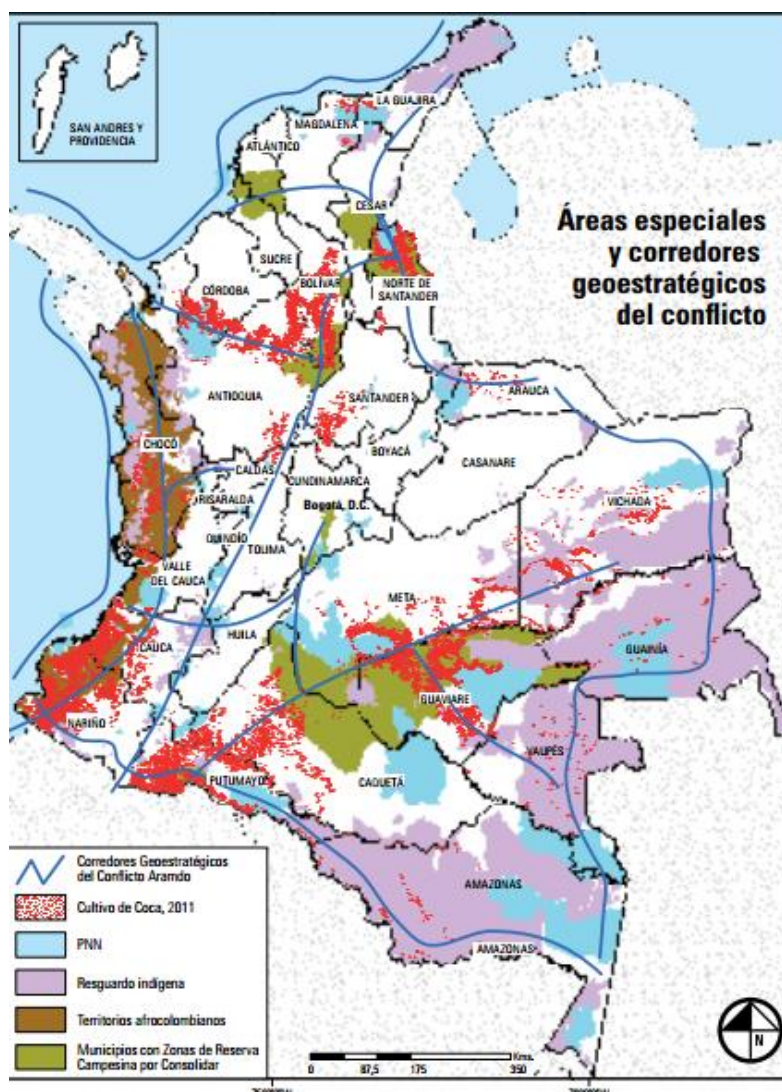
“Y a todo esto, emergen las AUC, que si bien, ni mucho menos nos vencen militarmente sí que frenan nuestra expansión, por ejemplo, en el noroccidente del país. Yo le digo que si no llegan a aparecer, seguro que nos tomamos el poder. Teníamos no solo ventajas militares. Teníamos en ese entonces una legitimidad que ya hemos perdido. Las AUC frenaron nuestro avance y atacó a la población civil. Todos eran susceptibles de apoyar a la guerrilla, fuese real o no. y en esas, nosotros acabamos haciendo lo mismo. Excediéndonos y dando de baja al que era susceptible de ser informante paramilitar. Las AUC hacían valer el dicho de quitar el agua al pez para asfixiarlo. Y así nos hicieron mucho daño. ¡Fíjese que hasta nos tocó sembrar en el Urabá o en el oriente antioqueño! Sobre todo desde el año 2000, cuando se consolidan las AUC pues hasta ese momento los grupos paramilitares habían sido controlados por Ramón Isaza, pero sin mayor relevancia. Y además, en lo que tiene que ver con ELN, la verdad es que no va a poder hacer nada y va a desaparecer sin mayor resistencia”. (EP 7, mayo de 2015).

6. Cuando no es oro todo lo que parece: Falsos positivos, Ley de Justicia y Paz y la encrucijada de la parapolítica

Ni mucho menos, la PSD representó los éxitos desmedidos que parte de la opinión pública, el oficialismo y algunos sectores alineados con la estrategia del gobierno se han encargado de enfatizar (Fuerzas Armadas, 2008; Vicepresidencia de la República, 2010). Es decir, negar la condición del conflicto armado como señala Rangel (2003) o reconocer, como señalaron Ortiz (2007) o Rivera (2010: 23), consideraciones grandilocuentes como que “el talento de Santos es que sabe que no hay un líder capaz de reemplazar a Uribe”, son consideraciones que distan mucho de la realidad. Igualmente, el sensacionalismo con el que el diario de mayor tirada de Colombia, *El Tiempo* o la *Revista* semana, afines al Gobierno, contribuyó a construir un imaginario que se alejaba mucho de realidades *invisibilizadas* y violentas que, irresolutas, persistían en el país (Ayala, Duque y Hurtado, 2006).

En buena medida, como se podrá ver a continuación, esta tesis doctoral invita precisamente a cuestionar el sentido y el alcance de la PSD y del Plan Colombia, en tanto y en cuanto, la realidad ofrece, cuando menos, cuestionamientos varios al resultado en lo que a construcción de paz y garantía de seguridad en Colombia se refiere.

Mapa 17: Corredores estratégicos y *periferalización* del conflicto, 2011



Fuente: Salas (2015: 168)

Puede afirmarse que la tendencia en los últimos años experimentada en la geografía del conflicto armado en Colombia ha respondido claramente a una tendencia centrífuga, coherente con un proceso de marcada *periferalización* en el que, pese a existir reducciones en el volumen de violencia total fruto del conflicto, lejos de desaparecer, éste se ha terminado por reubicar, transformando las interacciones tanto de los actores entre sí como de estos con el territorio.

Ello, de acuerdo con las particularidades que presentan los departamentos fronterizos, primero por una geografía mayormente selvática o montañosa, y después por otros factores tales como una fuerte debilidad institucional del Estado y que presenta, en muchas ocasiones,

una correlación de fuerzas desfavorable frente a los actores irregulares armados (Echandía, Bechara y Cabrera, 2010). Esta debilidad, traducida en falta de presencia del Estado, peores niveles de desarrollo económico o social, o mayores niveles de pobreza o informalidad – como con mayor detalle muestra el capítulo VIII de esta tesis- unido a la presencia imperante de cultivos ilícitos supone un importante valor estratégico. Por ejemplo, a efectos de servir como corredores desde los que dar salida a los canales de droga y tráfico ilícito hacia Ecuador, Venezuela y Panamá. Asimismo, concentrando otras importantes fuentes de poder económico tales como yacimientos auríferos, esmeralderos o energéticos, entre otros.

Es así, que se comprende cómo los departamentos más violentos del país en cuanto a acciones guerrilleras se trata son, precisamente, los de la vertiente del Pacífico – Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (CODHES, 2013)-, y junto con los tradicionales departamentos de violencia guerrillera, como Antioquia y Caquetá, otros cuatro departamentos fronterizos como son Arauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. De la misma manera, otros dos departamentos fronterizos, como Chocó y Cesar, serían actualmente los que tendrían, a su vez, mayor concentración de estructuras pos-paramilitares, con una presencia de Bacrim – bandas criminales herederas del paramilitarismo- superior al 90% del total de municipios que tiene el departamento¹⁶¹.

La PSD llevó consigo el despliegue de operaciones militares indiscriminadas, en principio, justificadas por la presencia en un territorio de un grupo armado y por la presunta connivencia de la población civil con el mismo, tal y como sucedió en reiteradas ocasiones durante la presidencia de Álvaro Uribe en los departamentos de Arauca, Sucre o Bolívar¹⁶².

De igual forma, se recurrió a operativos conjuntos entre unidades de inteligencia y a la acción a los que se sumaron informantes, cooperantes, testimonios pagados y organismos de control cuyo potencial, precisamente, reposaba en la capacidad de diluir responsabilidades. Ello, permitió asegurar la impunidad y los excesos de los agentes estatales intervinientes¹⁶³.

¹⁶¹ Asimismo, atendiendo a la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, igualmente, serían los de mayores niveles de violencia, superando todos, la media de tasa homicidios por 100.000 habitantes que en 2012 fue de 32.28. De acuerdo a estos datos, la tasa de homicidios fue de 81.24 Arauca, 77.7e en Valle de Cauca, 46.79 en Norte de Santander, 45.01 en Putumayo, 43.04 en Chocó, 40.45 en Antioquia, 39.85 en Cauca, 37.54 en Nariño, y solo sería excepción el departamento de Cesar, con una tasa de 22.64 (ODHDIH, 2014).

¹⁶² Como señalan Tickner y Pardo (2003: 67): “Con la creación, el 21 de septiembre de 2002, de zonas de rehabilitación y consolidación del orden público en 26 municipios de los departamentos del Sucre y Bolívar, y tres más en Arauca, el gobierno buscó enfrentar uno de los problemas más apremiantes del Estado colombiano en la actualidad: ¿cómo restablecer la presencia y la institucionalidad estatal en zonas del país en donde los actores armados ejercen funciones paraestatales? (...) Durante su tiempo de funcionamiento, las zonas arrojaron resultados ambiguos, en particular en el departamento de Arauca, en donde los tres grupos armados principales, ELN, FARC y AUC tienen una fuerte presencia y aunque la política de defensa y seguridad democrática, sobre el papel, recalca la necesidad de garantizar el estado de derecho, en la práctica uno de los obstáculos más grandes de la estrategia de la administración Uribe es la reconciliación de la seguridad con la protección de los derechos y libertades fundamentales de la población”.

¹⁶³ Como señala Guedán (2005: 43-44) “Por ejemplo, las operaciones Mariscal y Orión en Medellín, en la que participaron el Ejército Nacional (Batallón Bomboná, Batallón de Artillería 4, Batallón de Infantería 32, Batallón Granaderos y Brigada 4), la Policía Nacional (Estaciones Laureles y San Blas; Gaula, Bloque Urbano

Tabla 6: Número de acciones guerrilleras de FARC y ELN en 2012

Departamento	Número de acciones	Departamento	Número de acciones
Cauca	165	La Guajira	17
Antioquia	99	Magdalena	17
Norte de Santander	85	Guaviare	15
Arauca	83	Bolívar	8
Nariño	82	Casanare	8
Putumayo	70	Cesar	6
Caquetá	64	Córdoba	6
Meta	55	Boyacá	2
Huila	38	Santander	1
Valle del Cauca	36	Cundinamarca	1
Tolima	30	Guainía	1
Chocó	19	Vichada	1

Fuente: ODHDIH (2014)

A esto hay que añadir también la presunción de culpabilidad dirigida hacia parte de la población civil, y que explicará el auge de las cifras relativas a violaciones de los DD.HH, el desplazamiento forzado generado como causa directa por la Fuerza Pública o, en un extremo superior, el caso de los “falsos positivos”¹⁶⁴.

Así, la PSD va a representar una militarización de la vida cotidiana colombiana en la que va a resultar rutinaria la puesta en marcha de retenes militares, la creación de cuarteles, los allanamientos, registros y detenciones arbitrarias, la ocupación militar de las escuelas, parques o centros culturales, de maneras tal que toda la vida social va a quedar supeditada a una lógica de guerra estatal en la que la devastación resultante, en muchas ocasiones como en las ciudades de Bojayá o Medellín, o en buena parte de los departamentos de Sucre, Bolívar o Arauca, no quedó acompañada de su posterior reconstrucción.

Además, va a concurrir una cooptación persistente sobre los organismos de control y de investigación, sobre todo, durante los primeros años del mandato de Álvaro Uribe. De esta manera, operó durante unos años una lógica de relevar a aquellos funcionarios judiciales que buscaban investigar los casos de excesos violentos de la Policía y las Fuerzas Militares. Aparte, había que añadir los informantes, igualmente cooptados en su acusación respecto de quienes había que encausar, y junto a todo, unos medios de comunicación alineados con las versiones oficiales. Basta recordar las palabras del general Gallego cuando comandó las

Antiterrorista de la Sijín y Policía Metropolitana), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), la Fiscalía General de la Nación. Estuvieron implicados también los testigos pagados por las autoridades militares, la red de informantes, los desertores de grupos armados ilegales y los bloques Cacique Nutibara y Metro de las AUC”.

¹⁶⁴Por “falsos positivos” deben entenderse las ejecuciones sobre civiles realizadas por miembros de la fuerza pública que posteriormente son presentados a la sociedad como guerrilleros abatidos con el propósito de engrosar las cifras del conflicto y legitimar el gasto en seguridad y defensa

acciones contra los grupos armados en las comunas de Medellín, por medio de las Operaciones Mariscal y Orión, y reconocía que “hay que arrestar a todo el mundo. Después vemos quién no tiene nada que ver. Todo lo que se vea moverse hay que interceptarlo”¹⁶⁵.

Es por todo, finalmente, que se acaba imponiendo una lógica amigo/enemigo, irreconciliable, en la que cualquier crítico a la PSD y sus excesos termina por ser susceptible de complicidad con los grupos insurgentes, y traidor con la causa más importante del Estado: acabar con la guerrilla. Lo más preocupante de esto es que, dentro de esta bipolaridad, el paramilitarismo va a erigirse como factor coadyuvante para la consolidación de los territorios “recuperados”. Esto lo confirma el que fuera comandante del BEC paramilitar, “El Alemán” cuando señala lo siguiente:

“Lo cierto es que todo benefició a Uribe. El y gente muy cercana a él se beneficiaron de la guerra y de ahí su posición a que no acabe de manera negociada. Si bien Uribe no ha estado a la cabeza de nada, con sus tentáculos fomentó esta situación. Las AUC, junto con paramilitares y Convivir erradicaron parte de las milicias existentes en la región. Solo en Urabá murieron 7.000 personas de las cuales 4.500 eran guerrilleros. Todos, policía, Ejército, AUC, actuábamos contra un enemigo común.

Luego ya tras la desmovilización mandó policía donde nosotros habíamos hecho el trabajo. Eso le dio credibilidad. Con Uribe habíamos acordado todo. Se lo entregamos todo. Todo limpio. Pero pensaba que solo enviando militares el problema estaba resuelto. Por favor. Usted conoce el Carmen de Darién. Allí mandó un mísero contingente de 60 policías. Ese fue el resultado de Uribe. Instrumentalizar a las UAC, dejar todo por hacer, militarizar sin más el país y enriquecimiento de sus elites. Seguimos viviendo en la “Patria Boba”. (EP 13, junio de 2015).

Así, existen diferentes posicionamientos críticos que entienden que tal es la razón de la benevolencia con la que, por ejemplo, se construyó el marco jurídico para la desmovilización paramilitar, en torno a la controvertida Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz¹⁶⁶

El hecho de que el conflicto armado colombiano se desarrolle de “puertas hacia dentro” incorpora importantes dificultades en cuanto a la aplicación sistemática de las normas sobre DD.HH. y DIH, que tan importantes son en políticas de seguridad como las referidas. Al tratarse de un conflicto tanto *contra* como *dentro* del Estado, en el que los grupos armados irregulares han llegado incluso a encontrar importantes escenarios de connivencia con el poder público, la pugna por aspectos tales como el control del territorio y la disposición de

¹⁶⁵ Véase: http://www.elcolombiano.com/comuna_13 doce_anos_despues-MXEC_297092 Consultado el 23 de junio de 2015

¹⁶⁶ La Ley de Justicia y Paz, frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo, previó penas privativas de libertad entre 5 y 8 años para sus máximos responsables así como unas condiciones sobre los derechos de verdad, justicia y reparación que han generado importantes críticas entre muchos de los especialistas y estudiosos del conflicto armado colombiano, y que reivindican una connivencia de intereses y un tratamiento benefactor a los responsables. A tal efecto, son dignos de mención los trabajos de Amnistía Internacional (2005), Gómez Araújo (2007), Gallón *et al.* (2007), Henao (2008), Human Rights Watch (2008), Internacional Crisis Group (2008), Valencia (2009) o Ambos (2010).

recursos, imposibilitan la reducción de la confrontación exclusivamente a la acción armada. Si a ello se añaden prácticas como el *hit and run*¹⁶⁷ o la implicación de sectores de la población civil, la identificación, *stricto sensu*, de lo que se consideraría como población civil, protegida o no combatiente, queda cuando menos limitada, y desvirtuada, en todo caso, por el propio alcance de la “guerra sucia”. Guerra, igualmente, proveniente del poder público, y proyectada bajo el caso de los mencionados como “falsos positivos”.

Tabla 7: Violaciones a los DD.HH y el DIH en Colombia (enero de 2002 - junio de 2011)

Actor Armado	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010/jun. 2011	Total
ELN	162	57	26	12	12	13	14	25	30	351
FARC	1.092	362	296	204	125	168	58	202	159	2.666
Ejército-Policía	470	379	580	752	686	758	316	417	228	4.586
Otras guerrillas	171	52	23	22	39	12	3	3	4	329
Paramilitares	875	1.144	849	649	358	510	430	671	681	6.167

Fuente: CINEP (2010: 3)

Conforme a una publicación de CINEP (2010: 3), entre enero de 2002 y diciembre de 2009 – y completada por su propia base de datos, actualizada - se habrían producido en Colombia un total de 12.997 violaciones a los derechos humanos y el DIH, de las cuales 5.486 habrían sido atribuidas a los grupos paramilitares, 4.358 a la Fuerza pública, 2.507 a las FARC, 321 al ELN y 325 a guerrillas menores como, por ejemplo, el EPL en célula activa en Norte de Santander¹⁶⁸.

Vistos estos datos desde el plano temporal, habría que enfatizar la tendencia de *cronicidad* y estabilidad que presenta el menoscabo a los DD.HH. y el DIH en Colombia, lo que es firme indicativo de la continuidad, intensidad y excesos de violencia que gravitan en torno al conflicto armado interno. En adición, resultaría sumamente preocupante el protagonismo que a tal efecto cobra la Policía y el Ejército colombiano, al erigirse como el segundo de los actores en disputa al que más se le atribuyen prácticas agresivas contra los DD.HH. Para organismos críticos como CODHES o CINEP, igualmente preocupante serían los indicios de acciones en connivencia con ciertos grupos paramilitares. A tal efecto, señalarían como reveladora la coincidencia temporal de la reducción de prácticas violentas dentro del Ejército con el auge para el caso de los grupos paramilitares.

¹⁶⁷*Hit and run* es la forma de combate propiamente guerrillera, de “atacar y huir”. De este modo, se opta por ataques selectivos y por sorpresa con el fin de reducir al máximo la capacidad de respuesta y contraataque en la fuerza pública.

¹⁶⁸Completando ese estudio, cabría añadir que entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011 se computaron, según el CINEP (2011: 3), 681 violaciones al DIH por parte de los grupos paramilitares; 159 por parte de las FARC; 30 por parte del ELN; 228 por parte del Ejército y la Fuerza Pública y 4 por parte del EPL.

Un último aspecto destacado en relación con la delicada situación en la que se encuentra la protección de los DD.HH. y el DIH obligaría a no pasar por alto la implicación directa del Estado en la cuestión de los “falsos positivos”. La responsabilidad política no ha sido suficientemente enfatizada: el incentivo basado en la confrontación directa, coherente con la doctrina de la PSD, sería claramente responsable y explicaría que la eliminación del incentivo haya producido resultados tangibles en la disminución de los excesos de parte de la Fuerza Pública.¹⁶⁹

En todo caso, desde el punto de vista operacional, las víctimas serían el resultado evidente de la preocupante debilidad del poder público de cara a hacer efectivos los mecanismos garantes para la protección de la vida, la integridad física y la dignidad humana dentro de los límites del conflicto armado. El asunto de los “falsos positivos” también respondería al afán propagandístico de la presidencia de Álvaro Uribe de justificar permanentemente la aparente fortaleza y necesidad de la PSD. Es decir, la necesidad de una confrontación total y directa con los grupos armados se presumía que necesitaba mostrar, para legitimarse y perdurar, continuos resultados visibles. Resultados cuyo mayor alcance se traducían en cuanto al número de operativos y las bajas sobre combatientes. Especialmente, una vez que se aprueba la Directiva 029, promulgada por el ministro de Defensa, Camilo Ospina y que, a tal efecto, remuneraba económicamente a los efectivos de la Policía y del Ejército en función del número de bajas que obtuviese sobre las guerrillas.

Esta necesidad continua de presentar éxitos militares ante la sociedad acabó con la práctica de proyectar como guerrilleros abatidos a población civil, en realidad, ajena a tal circunstancia¹⁷⁰. Así, CINEP (2011b) registró entre 2001 y 2010 un total de 1.119 víctimas como consecuencia de esta violación flagrante a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Del total, resultaron 887 ejecuciones extrajudiciales y 87 casos de tortura además de cuantificarse 41 víctimas por amenaza, 36 heridos, 63 desapariciones forzadas individuales y un total de 214 detenciones arbitrarias.

Como puede verse en el cuadro, el momento de mayor auge de “falsos positivos” se registró entre 2006 y 2008, cuando se concentraron aproximadamente dos terceras partes del total de casos acumulados durante la década. Sin embargo, y aun cuando desde 2008 los casos de suplantación de víctimas por falsos guerrilleros de parte del Estado se han reducido muy

¹⁶⁹“En una reunión en la Casa de Nariño entre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, representantes de las Fuerzas Militares y el Ministro y Viceministro de Defensa, se informó que desde octubre del 2008 hay una drástica reducción de denuncias en lo que se ha conocido como “falsos positivos”. En la reunión se tomó en cuenta el informe de CINEP que habla de dos denuncias durante el 2009 y la Fiscalía investiga otras siete. El Ministerio de Defensa informó también que ha recibido una denuncia durante el 2010”. Véase: Nacional. <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/denuncias-sobre-falsos-positivos-disminuyen-gobierno-nacional>, Consultado el 29-04-12.

¹⁷⁰ En la actualidad, y a diferencia de como sucedía hasta 2008, las víctimas de “falsos positivos” ya no son presentados como guerrilleros sino que son asociados, por lo general, a personas de la delincuencia común.

considerablemente, todavía continúan siendo una cuestión amenazante hoy en día respecto de la credibilidad del Estado de Derecho en Colombia.

Tabla 8: Casos y víctimas por "falsos positivos" en Colombia (enero 2001 - diciembre de 2010)

Año	Casos registrados previamente	Víctimas registradas	Actualizaciones y/o nuevos casos	Víctimas nuevas y/o actualizaciones	Total casos	Total víctimas
2001	5	7	1	1	6	8
2002	11	47	1	3	12	50
2003	16	42	2	3	18	45
2004	38	77	4	6	42	83
2005	49	79	2	3	51	82
2006	93	213	8	14	101	227
2007	196	358	4	7	200	365
2008	108	201	5	18	113	219
2009	7	16	0	0	7	16
2010	6	6	6	12	12	23
Total	528	1.052	34	67	562	1.119

Fuente: CINEP (2011b: 5)

Ello se debe, en buena parte, a la obstaculización proveniente de la Justicia Penal Militar, la cual ha entorpecido notablemente la investigación de la causa, habida cuenta de su traslado a la justicia ordinaria¹⁷¹. Esta circunstancia ha deteriorado sobremedida los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, ha desvirtuado la función indagatoria de las instituciones del Estado colombiano y de las que representan los intereses de la sociedad civil, y ha impedido el esclarecimiento de una cuestión de tal gravedad como es la muerte de cientos, quizá miles de ciudadanos colombianos¹⁷²

Por el momento cabría señalar al respecto que la relativa incapacidad o falta de voluntad en el esclarecimiento de estas violaciones a los DD.HH., dados los tímidos resultados para tan ingente número de casos, cuestionaría directamente el sentido del Estado de Derecho a tal efecto. Frente a las cifras presentadas, la Fiscalía General de la Nación (2011) – citado en CINEP (2010: 11), apenas ha reconocido 654 víctimas y 527 casos, de los cuales, además, una tercera parte se encuentran inactivos. Hasta el momento solo 146 miembros de la Policía y las Fuerzas Militares habrían recibido resolución de acusación. De ellos, 54 habrían

¹⁷¹ La Defensa Militar Integral ha realizado un ejercicio de defensa a ultranza del estamento militar a base de acusar la intromisión de la justicia ordinaria y solicitar la nulidad del convenio entre Ministerio de Defensa y Fiscalía General, en aras de evitar que sea la justicia ordinaria la que, aún con todo, investigue los casos de civiles muertos por acción de la fuerza pública colombiana.

¹⁷² La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH afirmó en 2011 que la cifra de muertos en combate “con signos de violaciones de DDHH” podía alcanzar las 3.000 víctimas. Véase: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7405.pdf?view=1> Consultado el 29 de abril de 2014

obtenido sentencia condenatoria y 13 habrían sido absueltos o archivada su causa. Únicamente 112 estarían actualmente procesados; 90 con abstención de medida de aseguramiento y tan solo 15 en estado de sobreseimiento.

El último aspecto a tratar dentro de este propósito de cuestionar la presunta fortaleza del Estado colombiano más allá de la superioridad militar frente a los grupos armados irregulares, resultaría de la problemática planteada por el desplazamiento forzado.

Respecto de esta cuestión, la responsabilidad del Estado de Derecho es absoluta ya no sólo en términos de prevención sino, igualmente, de reacción para con un problema prioritario, preocupante y de gran complejidad¹⁷³.

Ya sea por acción, primero de las AUC y después de las Bacrim, o bien como resultado de presiones provenientes de la guerrilla o de la fuerza pública colombiana, lo cierto es que el desplazamiento forzado ha incorporado unas dosis de violencia de gran importancia, al acompañarse generalmente de masacres, combates armados, emboscadas, bombardeos o erradicación de cultivos ilícitos, que han terminado por agredir directamente a la población civil colombiana.

Solamente entre enero y junio de 2011, según CODHES, fueron víctimas del desplazamiento forzado en Colombia casi 90.000 personas, de las cuales, la mayoría fueron consecuencia directa de los 36 casos registrados de desplazamiento forzado masivo.

Lo más preocupante es que en los últimos años, tal desplazamiento forzado se ha concentrado con intensidad en zonas que se encontraban bajo el Plan de Consolidación Territorial del Estado, acorde a la prioridad de controlar territorialmente aquellos enclaves geográficos de mayor violencia. Así, el plan, cuando menos, queda en entredicho¹⁷⁴.

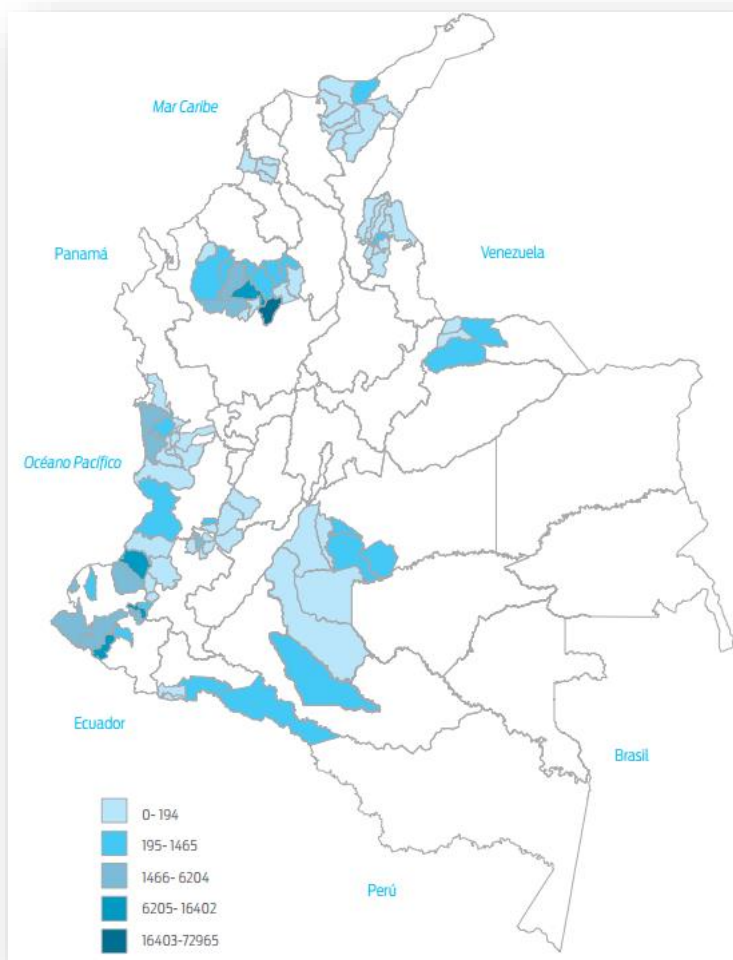
De hecho, si el análisis del fenómeno del desplazamiento forzado se remonta a 1985, el total de víctimas alcanzarían la cifra de 5.281.360 personas, o lo que es igual, el 11% de la población actual colombiana. Además, como puede apreciarse en la tabla, la importancia y la estabilidad de las dinámicas de la población víctima del desplazamiento se evidenciarían en la última década al registrarse por encima de 200.000 desplazamientos forzados la media anual en el transcurso de esta década (2000-2010)¹⁷⁵.

¹⁷³La sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional resolvió, “Declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado.” A partir de esta primera decisión se derivan una serie de decisiones de corte judicial y órdenes de naturaleza administrativa, dirigidas a la efectiva garantía de los derechos constitucionales a la población desplazada.

¹⁷⁴ Tanto es así que, igualmente, para el mismo primer semestre de 2011, el total de personas víctimas de desplazamiento forzado se concentró en 72 de los 86 municipios que conforman estas regiones objeto de consolidación territorial por parte del Estado colombiano (CODHES 2011: 23)

¹⁷⁵ La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional registra un total de desplazados en Colombia que asciende a 3.692.783 entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de junio de 2011. La disparidad de cifras respecto a CODHES (2011:18) tanto en el acumulado como en el anual se explica, principalmente, por el sub-registro y la no inclusión (ODHDIH, 2014).

Mapa 18: Tasa de desplazamiento forzado en Colombia por 100.000 habitantes en Centros de Coordinación y Atención Integral - CCAI (Enero - junio de 2011)



Fuente: CODHES (2011: 23)

Ello invita a pensar en el fenómeno del desplazamiento forzado tanto como consecuencia de la acción militar de movimientos que se desarrolló durante la PSD en los años de gobierno de Álvaro Uribe, como, a su vez, fruto de la actual reubicación y consolidación de los grupos armados irregulares, tiene lugar allí donde su posición está más consolidada y alejada de la presencia del Estado.

Ya se trate de escenarios controlados por grupos paramilitares, pos-paramilitares o por guerrilla, para entender el desplazamiento convergen diferentes factores explicativos, como la presencia de elevados niveles de ingreso en concepto de regalías por explotación minera, el hecho de tratarse de lugares clave en los corredores del narcotráfico colombiano, o por

tratarse emplazamientos de gran concentración de tierras. No en pocas ocasiones, conjugarían las tres condiciones a la vez.

Tabla 9: Desplazamiento forzado en Colombia (enero de 2000 - junio de 2011)

Año	Núm. de desplazamiento forzado registrado por CODHES	Número de desplazamiento forzado registrado por Acción Social	% de desplazamiento forzado concentrado en Zonas CCAI
2000	317.375	329.549	21%
2001	342.243	412.257	16%
2002	412.553	451.650	24%
2003	207.607	260.289	25%
2004	287.581	244.025	20%
2005	310.237	279.663	17%
2006	221.638	301.509	17%
2007	305.966	339.641	19%
2008	380.966	308.080	27%
2009	286.389	188.342	20%
2010	280.041	131.652	33%
2011 (jun)	89.750	48.142	28%
Total (2000-11)	3.442.346	3.294.799	

Fuente: CODHES (2011: 18-21)

Fruto de tan intrincada tesitura, actualmente los mayores focos de desplazamiento forzado en Colombia serían los departamentos de Caquetá, Valle de Cauca y Cauca, en el suroccidente del país, de gran agitación como consecuencia de los enfrentamientos que en los últimos años han librado FARC y Ejército colombiano; Antioquia, que ha sido un enclave tradicional en cuanto a confluencia armada entre guerrilla y paramilitarismo; y Chocó, Nariño y Putumayo, donde FARC y Bacrim se disputan o colaboran el corredor del Pacífico o el corredor sur del narcotráfico colombiano, donde también se han desarrollado importantes acciones militares del Plan Colombia y la PSD pero que ni mucho menos se han traducido en la consolidación territorial favorable al Estado¹⁷⁶.

Tal y como sucedía con lo expuesto sobre la violación sistemática de DD.HH. y DIH, el Estado de Derecho en Colombia terminaría por poner de manifiesto su debilidad, al resultar incapaz de prevenir y gestionar un problema como el desplazamiento forzado, íntimamente relacionado con el conflicto armado y las prácticas violentas protagonizadas por sus actores.

¹⁷⁶ Puede verse cómo el desplazamiento forzado tiene mucho que ver con el recrudecimiento del conflicto armado en el Pacífico colombiano. En él, las mayores víctimas de este desplazamiento forzado son las comunidades afrodescendientes que se encuentran en los territorios comunitarios. En relación con esta cuestión, cabe añadir que CODHES (2011) informa que los mayores responsables actuales del desplazamiento forzado en Colombia son los grupos paramilitares como “Águilas Negras”, “Rastrojos” y “Machos”; seguidos de las FARC; los combates entre guerrilla y Fuerza pública; y de las operaciones militares sobre zonas pobladas con mayores niveles de intensidad en cuanto a violencia.

Buena prueba de ello reposa en la incapacidad del Plan Nacional de Consolidación Territorial de 2007, que bajo la urgencia de “fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado”, ha quedado en entredicho en tanto en cuanto una tercera parte de los municipios con mayores tasas de desplazamiento se concentran en estas zonas conocidas como CCAI. Asimismo, más de la mitad de las víctimas del desplazamiento forzado en 2011, según informa Acción Social, provendrían directamente de estas regiones¹⁷⁷.

Finalmente, y antes de finalizar esta dimensión, no tan popular de la PSD, sería pertinente recuperar el escándalo que, durante los años de la presidencia de Uribe, representó la “parapolítica”. Un fenómeno que, en definitiva, deriva de un proceso de transformación de la violencia de los grupos armados que, por las circunstancias dadas, termina por cooptar el poder político, no solo local y regional, sino también en clave nacional.

La “parapolítica” saltó a la luz en el año 2006¹⁷⁸, al evidenciar la existencia de importantes vínculos entre grupos armados, especialmente narcotraficantes y paramilitares, con partidos políticos y grupos empresariales, y cuya confluencia de intereses habría terminado por trascender de la mera esfera local, al ámbito departamental y a instituciones nucleares del Estado como el Congreso o el Senado.

Hasta el momento habrían sido investigados, por esta cuestión, un total de 120 congresistas, de los cuales 40 ya habrían sido condenados, y se estima que, derivado de las elecciones municipales y departamentales acontecidas en noviembre de 2011, la persistencia de la “parapolítica” colombiana podría haber tenido continuidad, al menos, en 199 municipios. Cifra que, según la Defensoría del Pueblo (2011: 40), representa el número de municipios expuestos a un alto riesgo de violencia electoral o injerencia, especialmente, por parte de grupos sucesores de los paramilitares.

Con base en lo descrito, y para entender el proceso derivado de ello, de *periferialización* de la violencia derivada del conflicto armado colombiano, sobre lo cual versa esta tesis doctoral, surgen algunas de las prioridades del Estado colombiano y que, en cierto modo, han resultado tradicionalmente irresolutas: 1) fortalecer la mencionada dimensión social sobre aspectos de equidad social, justicia redistributiva o desarrollo humano; 2) garantizar el fortalecimiento y la adecuación institucional del poder público a las exigencias de los DD.HH. y el DIH; 3) trabajar en aras de la confianza y la legitimidad que una sociedad como la colombiana debe tener con respecto al poder político, a partir de mecanismos fehacientes de transparencia y rendición de cuentas; o 4) fortalecer la independencia del poder judicial y conferirle herramientas que hagan efectivo el sistema judicial, son urgencias que no fueron incorporadas por la PSD.

¹⁷⁷ Según Acción Social, de las 44.144 personas desplazadas en el primer semestre de 2011, un 53.16%, esto es, 23.469, provinieron de zonas CCAI que se repartieron de 84 de los 86 municipios que conforman dicho Plan de Consolidación Territorial (CODHES, 2011: 18)

¹⁷⁸ Véase: <http://www.semana.com/on-line/articulo/breve-guia-practica-para-entender-todo-escandalo-para-politica/83627-3> Consultado el 26 de junio de 2015

También debe destacarse la necesaria 5) consolidación de instrumentos de participación de la sociedad civil en la esfera política de manera abierta, libre, plena e inclusiva dentro del sistema político. Ello, porque solo así se puede superar la tradicional consideración de que los grupos armados irregulares, dadas las circunstancias, son los portavoces legítimos de una sociedad que no encuentra fórmulas de participación autónoma.

En otras palabras, el resultado de ochos años de Plan Colombia y PSD habrían redundado en un sesgo militarista de la política pública colombiana que si bien ha obtenido cifras a su favor, por otro lado, ha conducido a una cierta involución democrática. Ésta se evidenciaría en cuestiones tales como en las interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia colombiana sobre activistas, sindicalistas y periodistas (“chuzadas”¹⁷⁹), el referido drama de los “falsos positivos”, las falsas desmovilizaciones favorecidas por el marco jurídico de benevolencia de la Ley de Justicia y Paz, o los excesos de un Gobierno para el que reducir los males del Estado colombiano a una mera cuestión de orden público.

La promesa de la PSD y del Plan Colombia, más bien terminó por declararse ligada a la protección de los derechos de los ciudadanos, aceptados en su pluralidad y diferencia, y a la defensa de los valores de la sociedad y de las instituciones legítimas. Sin embargo, la realidad dista mucho de estas promesas. Frente a solidaridad, cooperación y valores democráticos dentro del Estado de Derecho, la PSD y el Plan Colombia concitaron la obcecación por una política de “paz negativa” cuyas consecuencias y resultados terminaron por repercutir negativamente sobre la población civil y sobre la dimensión más humana del conflicto. No obstante, esto se observará con mayor detenimiento, en capítulos posteriores, en los que el análisis terminará por redundar esta afirmación.

Tal vez, una de esas consecuencias negativas más importantes haya sido el legado de una “parapolítica” aún vigente. Bastaría con traer a colación las palabras del líder paramilitar, Salvatore Mancuso, cuando afirmó ante el Congreso, que el 30% de los allí sentados lo estaba a saldo del paramilitarismo, y reivindicaba con ello la deuda que la sociedad colombiana tenía con el actor que, de un modo más visible, a su entender, había tratado de luchar frente a la acción guerrillera. Cifra que incluso Vicente Castaño llegó a elevar al 35%¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Se entiende por “chuzadas” a las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales que fueron llevados a cabo durante la presidencia de Álvaro Uribe a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que sería la agencia de inteligencia colombiana y que, por el alcance de los hechos, se vio abocada a desaparecer. Este tipo de prácticas fueron desarrolladas sobre periodistas, líderes de la oposición, magistrados o altos funcionarios del Estado. Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-das-sigue-grabando/100370-3> Consultado el 6 de junio de 2015.

¹⁸⁰ Véase: <http://www.semana.com/portada/articulo/habla-vicente-castano/72964-3> Consultado el 6 de junio de 2015

7. La *periferialización* del conflicto armado y las nuevas dinámicas territoriales bajo la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón

Sobre la base de lo descrito, podría afirmarse que la tendencia en los últimos años experimentada por la geografía del conflicto armado en Colombia ha respondido claramente a la tendencia de marcada *periferialización* en la que, como se señalaba con anterioridad, los departamentos mayormente fronterizos ofrecen importantes ventajas competitivas a los diferentes grupos armados.

En este nuevo panorama geográfico, los departamentos que ofrecen mayor violencia directa, de parte de los grupos armados serían Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá en el suroccidente, unidos a Norte de Santander y Arauca, en el nororiente, y Antioquia, como enclave tradicional del conflicto armado, y por el especial impacto del paramilitarismo y el pos-paramilitarismo, cabría mencionar a Chocó y a Cesar¹⁸¹. De estos ocho departamentos seis son fronterizos y otros dos, por su conexión con los enclaves de violencia inmediatos, cabría entenderlos, igualmente, en clave de periferia territorial¹⁸². Casi todos acumulan importantes niveles de presencia de cultivo ilícito, o en su defecto, de intereses auríferos, esmeralderos o petroleros. Todos son enclaves estratégicos en las rutas del narcotráfico. Y casi todos fueron enclaves o bien en los que la PSD y el Plan Colombia no resultaron instrumentos exitosos, o bien donde las políticas estructurales de desarrollo socioeconómico se traducen en algunos de los menores niveles de desarrollo humano, calidad de vida o cubrimiento de las necesidades básicas elementales.

que la violencia va resultar una constante irresoluta. Por ejemplo, por el impacto del paramilitarismo en la región, un enclave con fuerte presencia de los continuadores de las AUC tras su desmovilización, a modo de Bacrim. Así va a suceder con la región del Magdalena Medio, y muy especialmente en el sur de Cesar. En esta región ha resultado evidente la injerencia del fenómeno paramilitar en la política local, incluso durante los años más intensos de la PSD¹⁸³. El principal atractivo de este escenario sería su alto valor estratégico, por servir de escenario comunicante con dos enclaves nucleares en los círculos del tráfico de drogas como son el sur de Bolívar y la región del Catatumbo, y que explicarían la presencia además de grupos pos-paramilitares, del Frente 24 de las FARC y los Frentes “José Solano Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa” del ELN¹⁸⁴.

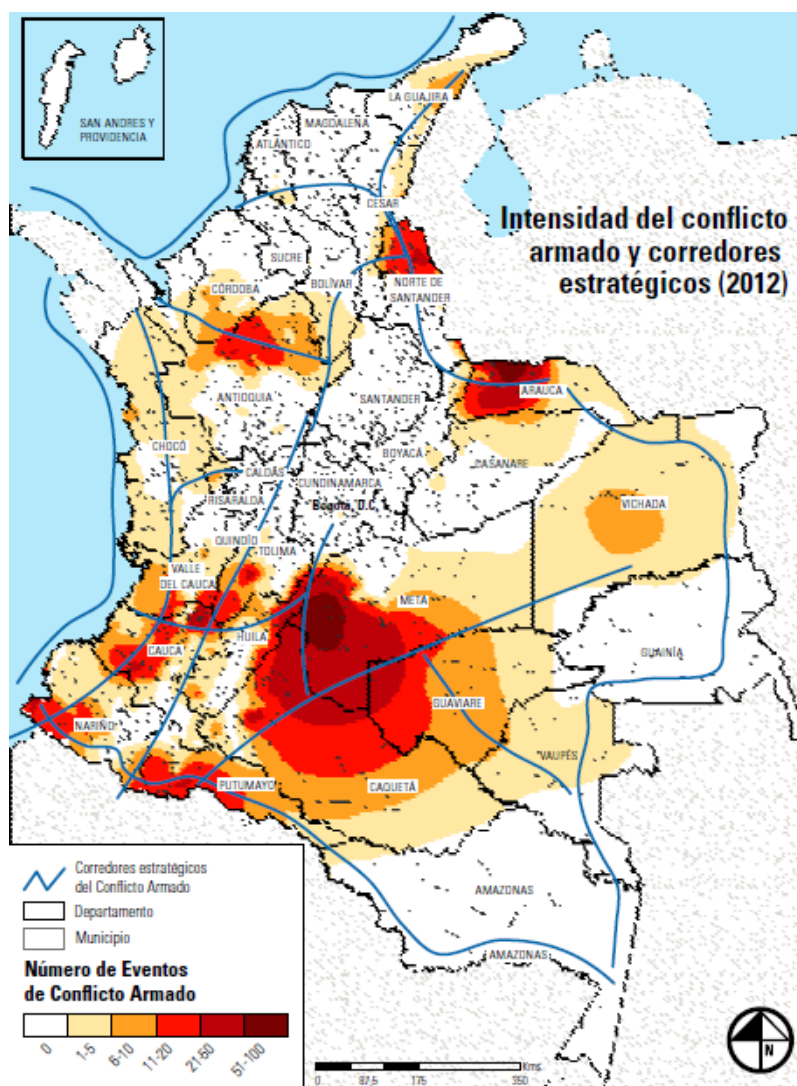
¹⁸¹ Chocó y Cesar, según Indepaz (2012: 4), son los dos departamentos con mayor proporción de presencia pos-paramilitar en sus municipios, por encima del 90%. En el caso de Chocó se identifica presencia de Bacrim en 28 de sus 30 municipios, y para el caso de Cesar, en 23 de sus 25 municipios.

¹⁸² Entendiendo por periferia, como se señalaba al inicio, además de una dimensión geográfica que es evidente y reveladora, un componente de desatención y distancia del poder central del Estado en términos de desarrollo humano, calidad de vida, necesidades básicas o satisfacción de derechos de primera necesidad. Esta cuestión es abordada con profundidad en el capítulo VIII.

¹⁸³ Solo entre 2000 y 2007 fueron asesinados en Cesar cinco alcaldes y trece concejales del departamento de Cesar (ODHDIH, 2014)

¹⁸⁴ Véase: <http://www.arcoiris.com.co/2013/01/la-poderosa-estructura-militar-del-eln-que-mantiene-a-los-seis-secuestrados-del-sur-de-bolivar/> Consultado el 11 de julio de 2015

Mapa 19: Periferialización y corredores estratégicos de la violencia, 2012



Fuente: Salas (2015: 168)

Así con todo, tras la PSD y el Plan Colombia, van a mantenerse diferentes escenarios en los A 260 kilómetros al noroeste del sur de César, se encontraría otra región olvidada por el Estado colombiano¹⁸⁵, de gran tradición violenta como son los Montes de María, con

¹⁸⁵ Los Montes de María se comprenden por los municipios de Bolívar de El Carmen de Bolívar, Zambrano, El Guamo, María La Baja, Córdoba Tetón, San Jacinto y San Juan Nepomuceno; y por los municipios de Sucre de Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Chalán, Ovejas, San Onofre, Colosó y Tolviejo. Durante mucho tiempo los Montes de María fueron azotados por el conflicto armado, especialmente desde mediados de los noventa y durante toda la primera legislatura de Álvaro Uribe. El gráfico 1 es interpretado por AECID (2012: 15) de manera tal que “se destaca un pico de los enfrentamientos entre actores, en los años 2005 y 2006, los cuales superan en promedio los 50 combates anuales, y una notoria disminución - casi un cese “informal” de

presencia de los Frentes 35 y 37 de las FARC, el Frente “Jaime Batemán” del ELN, y primero, del Bloque de las AUC “Héroes de Montes de María”, y después con la ubicación ingente de Bacrim como “Los Paisas”, “Los Rastrojos” o “Los Urabeños”. Todos ellos se disputarían el control territorial de otra zona con gran valor estratégico, con conexión directa con el Golfo del Morrosquillo en el Caribe, el cual se trata de una salida para la droga que se dirige con camino hacia Europa y Centroamérica.

Sea como fuere, estas afirmaciones, variables a desarrollar como variables explicativas de la *periferialización* del conflicto armado serán profundamente abordadas.

Esto explicaría de qué manera, en esta región, pese a todos los cambios cartográficos del conflicto, persiste un control territorial predominante de guerrillas y Bacrim, traducido en el abandono de más de 80.000 hectáreas, y el registro de una de las mayores tasas de desplazamiento forzado de todo el país, especialmente durante buena parte de la década pasada y hasta el año 2008¹⁸⁶(De los Ríos, 2011).

Ya en el nororiente del país, como se ha señalado, dos enclaves merecen ser destacados. Por un lado, Arauca, y en menor medida, el norte de Boyacá, que cobraron mayor relevancia tras el descubrimiento de petróleo en 1983, que inspira la construcción de un oleoducto hasta Coveñas, en el departamento de Sucre, y que va a ser un elemento fundamental para financiar la acción armada del ELN en esta región.

Una región que en los años de la PSD será territorio de disputa entre la Brigada V del Ejército colombiano, nuclear en la puesta en marcha de la Operación Dignidad, el Bloque paramilitar “Vencedores de Arauca”, los Frentes 28, 10 y 45 de las FARC y el importante Frente “Domingo Laín” del ELN y que tras la misma, mantiene relaciones directas en el territorio entre FARC, ELN y diferentes Bacrim, cambiantes según la coyuntura y la región.

Lo cierto es que tras la desmovilización de las AUC, en el departamento han venido operando “Los Águilas Negras” y, sobre todo, “Los Paisas”, lo cual ha consolidado la continuidad de un escenario de violencia y asesinatos selectivos, especialmente por la disputa de un control de salida del narcotráfico, principalmente dominado por el ELN, en connivencia con “Los Rastrojos”, y también por las FARC.

Por otro lado, y como resultado de la incursión de la “parapolítica” en el poder local, en los últimos años se habría producido un incremento del número de extorsiones, secuestros y atentados a la infraestructura petrolera por parte de la guerrilla predominante, a fin de

combates- en el año 2009, luego de la desmovilización paramilitar y de la operación militar del año 2007, en la cual se dio muerte a alias Martín Caballero, comandante histórico de las FARC en la región. Para el año 2002 las FARC reportaban su mayor nivel de actividad operacional en la región (contra fuerzas estatales), en contraste con las cifras correspondientes al 2008, año durante el cual se presentó una disminución notable en su actividad operacional. Respecto al ejército, entre el 2003 y el 2005, puede identificarse un incremento considerable en el número de acciones militares (combates y acciones unilaterales contra las FARC, coincidiendo este periodo con la creación del Comando Conjunto del Caribe de las Fuerzas Militares”.

¹⁸⁶ El volumen de desplazamiento forzado en Bolívar terminó por ser uno de los más elevados del país, pues entre 1997 y 2008 tuvieron lugar un total de 404.646 desplazados (ODHDIH, 2014).

reivindicar su posición dominante en Arauca y que, sin dudas, es nuclear en la propia supervivencia de esta guerrilla. Basta recordar que solo en 2011 y 2012 se cometieron en el departamento hasta 67 secuestros, según datos del ODHDIH.

Similar sucedería con el segundo escenario, Norte de Santander, que por sus condiciones geográficas, siempre ha sido un emplazamiento estratégico de gran valor en la lógica del conflicto armado. Su carácter fronterizo con Venezuela, y la frontera con el sur del Cesar y Santander lo convierten en un enclave estratégico fundamental por la ausencia de infraestructura, comunicación terrestre y presencia de Fuerza Pública. Aparte, estarían sus condiciones como corredor del narcotráfico y región de cultivo en la zona del Catatumbo, y que ha sido el principal enclave de disputa entre las guerrillas y el paramilitarismo si bien, son las FARC las que ocupan, en esta ocasión la posición predominante junto con un protagonismo creciente, especialmente, del EPL. Buena prueba de ello lo da un personero de uno de los departamentos más violentos del Catatumbo cuando, en una entrevista realizada para esta tesis doctoral afirmaba que:

“Entre 2002 y 2006 estimamos que tuvimos 5.000 muertes violentas, es decir, una cuarta parte del municipio y en su mayoría se debieron al paramilitarismo. Tanto, que la guerrilla desaparece por completo pues se intensifican los enfrentamientos directos, las confrontaciones y los combates contra la guerrilla. Los paramilitares son los que combaten a la guerrilla, y no el Ejército, que tuvo un protagonismo secundario. Sin embargo, no piense que hubo derrota de la guerrilla. Más bien hubo casos de resistencia y victoria guerrillera. En muchos lugares, las FARC, el ELN y el EPL se aliaron y tuvieron una victoria militar en ese escenario. Lo que sucede es que, mayoritariamente, los paramilitares toman los enclaves urbanos de modo que el único frente de resistencia que van a encontrar allí es el ELN. En otros, también las FARC fueron derrotadas aunque pelearon. Se podría decir, con todo, que los enclaves urbanos pasaron a ser de las AUC y los rurales y las veredas de las FARC y las otras guerrillas. En la actualidad en nuestro municipio y en toda la región del Catatumbo, el negocio de la droga está sectorizado. Hay lugares donde las guerrillas controlan todo el proceso, gramaje, procesamiento y toda la parte química, muy especialmente las FARC. Hay corregimientos en nuestro municipio que todo – gramaje, procesamiento y distribución, son controlados por el ELN. En otros casos, como en San Pablo, hay disputas de manera que finalmente terminan por competir y el cultivador escoge con quien trabaja. Últimamente, el EPL se ha posicionado al no cobrar gramaje lo cual ha generado malestar en los otros grupos”. (EP 19, mayo de 2015).

Así, Norte de Santander seguiría siendo una zona de especial concentración de violencia, primero, por las disputas territoriales del Bloque Catatumbo con la guerrilla y después, porque desmovilizadas las AUC, la continuidad ha venido del lado de “Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, que se confrontan, aunque con cambios es sus pautas, con los Frentes 33 y 41 de las FARC y los Frentes del ELN “Camilo Torres” y “Carlos Armado Cauca Guerrero”. Esto, muy especialmente, en la referida subregión del Catatumbo- que comprendería los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, San Calixto y, principalmente,

Tibú¹⁸⁷, mayormente de control guerrillero frente a la presencia urbana de las Bacrim en municipios como Cúcuta u Ocaña.

Pese a todo, si bien en Arauca se daban ciertas lógicas de apoyo entre ELN y “Los Rastrojos”, en muchas ocasiones contra las FARC, en la actualidad de Norte de Santander, la cooperación entre grupos más que el conflicto entre los mismos, ha sido la dinámica que se ha terminado por imponer. Tal vez por la preponderancia armada de las FARC en la región y por la debilidad con la que quedó el ELN, sin condición alguna de disputa. Sin embargo, y al respecto, el personero de Arauca reconoce lo siguiente:

“En el municipio, tras años de predominio de FARC, es el ELN el que vuelve a ganar más protagonismo en estos últimos años. De hecho aquí, es al que se le atribuyen los últimos asesinatos. La violencia empeora nuevamente en Arauquita, Fotul o Saravena y eso es porque, finalmente, no se superan las condiciones de vulnerabilidad. Hay temor nuevamente. Hay desconfianza. Desplazamiento. Se mantienen los casos de secuestro o extorsión. Piense que, por ejemplo, el ELN sigue con la extorsión, no solo a los sectores mineros o petroleros. A los mismos pescadores les pide una cuota de la venta. Si no se la dan, entonces llegan las amenazas e incluso las muertes. Igualmente los secuestros. Las guerrillas tienen casas de secuestro al otro lado de la frontera con Venezuela. Allí los retienen hasta que se salda el secuestro. Hace poco conseguimos la liberación de una joven a la que la guerrilla exigía al papá 400.000 pesos. Lo conseguimos y ahora tiene custodia, pero eso pasa por una ineficiencia de la política de seguridad.

Tenemos indicios de un mayor arraigo de ELN, sobre todo, en los poblados de invasión. Esos son nichos de violencia. Imagine. Miles de personas sin potabilidad. Sin luz eléctrica. Sin derechos de primera necesidad. Así es imposible pensar en posconflicto”. (EP 15, julio de 2015).

Otro enclave fundamental de la violencia del conflicto en Colombia se concentraría, con especial virulencia, en el suroccidente del país. Allí, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca son departamentos de fortísima presencia guerrillera, especialmente de las FARC, y en el caso de Nariño, de activismo paramilitar y pos-paramilitar.

Aunque es cierto que, tradicionalmente, este último departamento fue utilizado por la guerrilla como retaguardia, y no como escenario de expansión como Arauca o Norte de Santander, tal consideración se ha ido transformando considerablemente por el impacto de la PSD, y la presión sobre la guerrilla para replegarse hacia el suroccidente del país y el corredor del Pacífico. Igual sucedería con el Plan Colombia, que ha tenido un escenario de gran relevancia en Putumayo, por medio de la fuerte aspersión aérea y las acciones de erradicación de cultivos que, en suma, han coadyuvado para que en Nariño y Cauca se produzca una mayor concentración de actores irregulares y de violencia, especialmente, guerrillera.

En Nariño coinciden los Frentes 2, 29 y 64 de las FARC que, hasta 2011, estuvieron en guerra con el ELN, cuya presencia se articula en torno a los Frentes “Héroes y Mártires de

¹⁸⁷Tibú es el centro nuclear de la producción de cultivos ilícitos tanto en la región como en el departamento. De hecho, entre 2001 y 2012 se han cultivado en la localidad un total de 24.248Ha de coca (UNODC, 2014).

Barbacoas”, especialmente los “Comuneros del Sur”, marginalmente, el Frente “Manuel Vásquez Castaño” y, por último, “Guerreros de Sindagua”. Asimismo, habría que añadir la presencia del Bloque Sur y el Bloque Pacífico de las AUC, y que tras su desmovilización ha dado lugar a una fuerte presencia en forma de Bacrim traducida en “Águilas Negras”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” y que, operan como actores colaboradores tanto con las FARC como con el ELN¹⁸⁸. Buena cuenta de ello da el personero de Nariño, cuando señala que:

“La mayor intensificación del conflicto ha tenido lugar en lo que se conoce como el “triángulo del Telembí”, formado por Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Este corredor está altamente protegida por la Fuerza Pública si bien, ello no la excluye de una altísima presencia de grupos al margen de la ley, especialmente, de Rastrojos, Urabeños y Águilas. De hecho, estos grupos requisan a la población civil, por ejemplo, porque todo habitante de nuestro municipio que transita hacia Barbacoas, por la tradición guerrillera del municipio, es sospechoso de vínculos con la guerrilla.

Particularmente, en el municipio siempre ha habido una altísima presencia del Frente 29 de las FARC. Su mayor control es sobre las cabeceras rurales del municipio aunque también tienen infiltrados a milicianos en el casco urbano. En cuanto a sus acciones, las FARC en la región no han secuestrado. Funcionan más bien con base en extorsiones y “vacunas” tanto a las explotaciones mineras como a los pequeños comercios.

Por otro lado, el ELN es irrelevante. Actúa, igualmente, por medio de extorsiones, pero siempre subordinado a las FARC y actuando por medio de alianzas estratégicas. Incluso, en 2009 el ELN trató de romper esa subordinación frente a las FARC, lo cual se saldó con un incremento de violencia entre los grupos que, incluso, generó casos de desplazamientos masivos. Las FARC tienen mucho más poder y finalmente, el ELN recibió un correctivo importante de manera que en la actualidad, nuevamente, vuelven a actuar en alianza”. (EP 18, febrero de 2015).

Lo cierto es que Nariño (17.231Ha), pero también en menor medida Cauca (6.066Ha) y Putumayo (9.951Ha), mayormente con presencia predominante de las FARC, harían parte de un escenario donde se concentran más del 50% de la superficie destinada al cultivo de coca (UNODC, 2013: 11) y que es de vital importancia para la conexión con las redes de distribución que tienen lugar rumbo hacia Ecuador y Perú.

Como un último enclave de violencia creciente cabría resaltar los departamentos de Antioquia, que en los últimos años ha ido nuevamente consolidándose como un departamento de fuerte arraigo guerrillero, y en menor medida de sus colindantes departamentos de Córdoba – una de las cunas del paramilitarismo de los noventa y de la década pasada y actualmente en disputa por los principales grupos pos-paramilitares del país- y Chocó. Precisamente Chocó, igual que Cauca, Nariño, Putumayo o Norte de Santander se trataría de un departamento fronterizo, con una presencia creciente de cultivos ilícitos, pero además con

¹⁸⁸Véase: <http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/02/NARINO.TERCER-INFORME-Feb.2014.pdf> Consultado el 11 de julio de 2015.

Véase: <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1068> Consultado el 11 de julio de 2015.

unas reservas auríferas y de platino de las más importantes del país. Asimismo, por si fuera poco, sería el departamento con menores niveles de desarrollo económico y social de toda Colombia.

Si bien, como Nariño, Chocó sirvió de enclave de retaguardia para el Frente 57 y el Frente 34 de las FARC, y para la disidencia “Benkos Biohó” del ELN, el departamento va a ganar importancia para la guerrilla con la expansión paramilitar que sufre la región bananera de Urabá en Antioquia, por parte de los hermanos Castaño en la década de los noventa. No obstante, ello no va a ser óbice para la incursión en el departamento por parte del BEC en el norte, y “Héroes de Chocó” en el sur, desmovilizados ambos en 2005, y cuya continuidad ha quedado en manos de las Bacrim “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Águilas Negras” y, la nueva estructura conocida como “Renacer”.

Dada su importancia estratégica como corredor de droga hacia Centroamérica, y sus particularidades selváticas, Chocó se ha convertido en uno de los departamentos de Colombia que más ha incrementado la superficie de cultivos ilícitos, especialmente de coca, en los últimos años. Si en 2006, la superficie cultivada era de 800Ha, hoy en día supera las 3.000Ha. De igual forma, la transformación del territorio hacia una vocación extractiva de gran valor en cuanto a petróleo, metales nobles y madera, ha dado lugar a una notable actividad guerrillera, especialmente de las FARC, con los referidos Frente 57 y 34, y que colaboran conjuntamente, por ejemplo, con el Frente “Resistencia Cimarrón” del ELN.

Quizá, sea por todo que Chocó se traduzca hoy en día en un enclave con importantes disputas por el control estratégico y el incremento de prácticas extorsivas sobre los grupos de poder político y económico crecientes en el departamento, y que explicarían un alto nivel de eventos violentos y una tendencia creciente de los mismos. Así, baste señalar que solo entre 2008 y 2010 se ha producido el desplazamiento forzado de 35.000 personas aproximadamente, de las 475.000 que habitan en el departamento (ODHDIH, 2014).

No cabe duda de que la PSD puesta en marcha con Álvaro Uribe y el Plan Colombia han tenido un gran impacto a la hora de comprender un repliegue territorial de las FARC y del ELN que, dadas las circunstancias, se ha traducido en una importante “*desterritorialización*” y una paulatina pérdida de escenarios tradicionales de control territorial. Es decir, el abandono de algunos enclaves nucleares toda vez que se han consolidado otras retaguardias y corredores estratégicos.

A tal efecto, como se ha podido dar cuenta, en algunos de los escenarios más relevantes del conflicto armado, en la costa Atlántica o el Magdalena Medio, el paramilitarismo y la función de las AUC en la lucha contra la guerrilla han sido tan importantes en los cambios cartográficos del conflicto como lo han sido los referidos Plan Colombia y PSD. Sobre todo, por las connivencias y la imbricación de un interés compartido por el que el paramilitarismo alcanzó escenarios de disputa y prácticas de confrontación a las que el Estado no podía llegar.

Sin embargo, y pese a la voluntad por parte del Gobierno de Álvaro Uribe de favorecer un escenario de desmovilización de los comandantes en jefe de las AUC, a través de la Ley 975

de 2005 –Ley de Justicia y Paz- a la cual se acogieron buena parte de las elites paramilitares y por la cual se desmontó una estructura de más de 33.000 combatientes, el fenómeno paramilitar ni mucho menos ha desaparecido.

Ello, porque la continuidad de las condiciones estructurales de la violencia permitieron que tras la mencionada desmovilización, buena parte de los mandos medios, la logística paramilitar y los emplazamientos geográficos de mayor valor estratégico resultasen constantes dentro de la lógica de *periferalización* descrita, donde se presentan, indudablemente, condiciones más favorables a tal vicisitud. Al respecto, la sinceridad con la que “Diego Vecino” refuerza esta afirmación no deja lugar a dudas:

“Las Bacrim surgen de la falta de cambios estructurales. El encarcelamiento de los jefes de las AUC propició que muchos mandos medios, con todo el saber hacer, las armas, la logística, y apolitizadas, pudieran encontrar una gran oportunidad para mantenerse en la criminalidad y, como el fin justifica los medios, pasar a aliarse estratégicamente con las guerrillas. Quisiera incluirle la frase, que se ha convertido en un dicho, entre los mandos medios de las AUC que quedaron entre las Bacrim: “los jefes ya hicieron lo que tenían que hacer”. Ellos tienen el conocimiento, los contactos, conocen desmovilizados y eso en última instancia es responsabilidad del gobierno por varias razones: 1) Se dio un abandono sobre las zonas desmilitarizadas donde las AUC habían estado. Allí no llegó la institucionalidad ni el Estado Social de Derecho. Una vez que las AUC se van no llega el Estado y allí llega en muchos sitios el desmadre. 2) Otro elemento el fracaso de la reinserción. Un proceso de paz no se puede medir en fusiles, ni en un número de presos o extraditados. Lo que imparte es la reinserción social. No hubo un aparato productivo que acogiera a quienes abandonaron el paramilitarismo. 3) Finalmente, la paz vista desde la reinserción no puede generar ciudadanos de segunda categoría pues, finalmente, debe ser incluyente y por igual para todos”. (EP 12, mayo de 2015).

Es más, como se verá en uno de los capítulos de esta tesis, habría que adicionar dos consideraciones a esta afirmación. La primera, que no todos los bloques paramilitares surgieron con una naturaleza antiguerrillera. En muchos casos, la guerrilla se trató de una narrativa para justificar lo que en el fondo no era más que un proyecto criminal. La segunda, con base en la primera, permite entender que tras la desmovilización de las AUC y la continuidad de condiciones y estructuras, se puede entender una despolitización y un mayor margen de maniobra estratégico por el cual las Bacrim mantienen la logística paramilitar pero no la narrativa antiguerrillera. Así se comprende que la confluencia de intereses justifique las alianzas de estos grupos con la guerrilla y entender un fortalecimiento de ésta en muchos escenarios del país. Así “Diego Vecino” concluía:

“En nuestro caso, nosotros pasamos por la cárcel, como dirigentes de la estructura. Sin embargo, por fuera, desamparados, quedaron 30.000 hombres con más puntería que cultura y que, por ello, muchos de ellos terminarían conformando las Bacrim. Hay que hacer, por tanto, una importante función de seguimiento que garantice a todos la reinserción plena en la sociedad”. (EP 12, mayo de 2015).

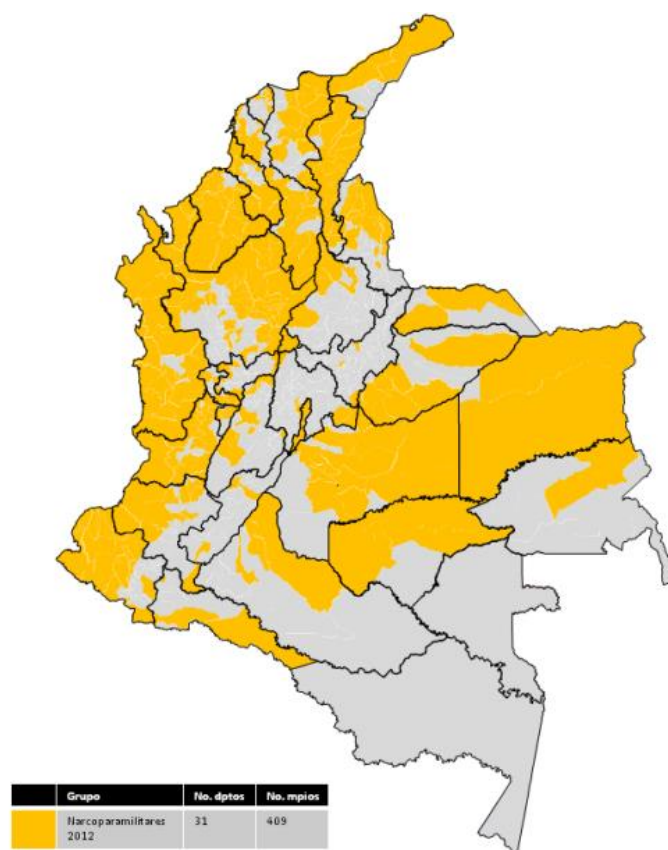
A tal efecto, el elemento más importante ha sido el de la redefinición del poder paramilitar. Un poder en transformación pero no desaparecido. Un poder no ya antisubversivo, pero por completo continuador de la esencia criminal que acompaña al mismo. Así, INDEPAZ (2012: 2), que se ha venido consolidando como uno de los observatorios más confiables en el análisis del fenómeno paramilitar y su continuidad en Colombia, planteaba recientemente que si por ejemplo, en 2008 había 259 municipios, de los algo más de 1.100 que comprenden Colombia, afectados por paramilitarismo, en 2012 esa cifra supera los 400. De igual manera el número de efectivos se habrían triplicado, superando ya los 7.000 efectivos.

Aparte, la región del Magdalena Medio y los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño o Norte de Santander serían algunos de los que concentrarían mayor número de afectaciones de estos grupos armados, entre los que destacan por su mayor control territorial “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Los Paisas” o “Águilas Negras” y que se integrarían sobre escenarios en los que, a pesar de todo, la posición fundamentalmente de las FARC sería la predominante. Por su parte, en otros departamentos como Magdalena, Córdoba, Sucre o Cesar seguirían siendo los firmes continuadores de la violencia paramilitar, por medio de conexiones con el poder político local y regional, y sin presencia alguna de la guerrilla, que bien nunca estuvo, bien fue expulsada por la acción de las AUC.

Actualmente, de los más de 400 municipios afectados por presencia paramilitar, ésta resultaría especialmente notable para INDEPAZ (2012: 2), en el caso de 271 municipios, de los cuales buena parte se concentran en los escenarios descritos de Antioquia, Chocó, Magdalena Medio Montes de María y Sur de Bolívar, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Córdoba y Cesar. En el caso de las FARC, con una fuerza por debajo de los 8.000 guerrilleros, su presencia comprendería 249 municipios, de los que, aproximadamente la mitad se ubicarían, igualmente, en estos emplazamientos. Así sucedería también con el ELN, que con unos 2.000 efectivos, igualmente, dentro de algo más de medio centenar de municipios que casi en un 90% se concentrarían en Arauca, Montes de María y Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Lo cierto es que, pese a las transformaciones de la cartografía del conflicto y la reducción del pie de fuerza y el control efectivo territorial de los grupos irregulares, en la actualidad, las cifras que presenta la violencia derivada del conflicto en Colombia resultan todavía más que significativas. Se siguen registrando por encima de las 1.000 violaciones a los DD.HH. y el DIH, unas 800 acciones armadas dentro del contexto que presenta el conflicto armado, más de 1.000 muertes relacionadas directamente con el mismo y más de 100.000 desplazamientos anuales –siendo el país del mundo con mayor nivel de desplazamiento interno (ODHDIH, 2014).

Mapa 20: Presencia de grupos narco - paramilitares según INDEPAZ (2012)



Fuente: INDEPAZ (2012: 5)

Es por ello que el control territorial, la presencia incluso creciente de los grupos irregulares y la violencia armada son constantes presentes en los enclaves de mayor conflictividad armada en Colombia. Tanto es así que solo sobre las regiones descritas se concentraría más de la mitad de las 64.000 Ha de cultivo de coca que dispone Colombia o el cultivo de amapola, cuyo 68% se concentra en Nariño y el 30% restante en Cauca. Asimismo, coexistirían otras fuentes de poder económico sumamente significativas, derivadas de la acción extractiva, pues en los departamentos referidos, en los que se concentra el 97% del carbón, el 43% de los metales preciosos y el 15% de la producción de petróleo (FND, 2013, s.p.).

Si a lo anterior, se añade una escasa presencia del Estado, una débil institucionalidad del poder público, en muchas ocasiones una geografía difícil favorecida por la dimensión fronteriza, y un importante rezago en términos de desarrollo humano, calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas, en suma, la conjunción de estos factores convierte a estos departamentos en un enclave óptimo para conferir continuidad del conflicto. Departamentos

que, tal y como se ha descrito y se analizará en los capítulos siguientes de esta tesis doctoral, representan *grosso modo*, una periferia no solo geográfica sino también económica y social.

A modo de conclusión, y conforme a lo planteado, conviene tomar ciertas cautelas cuando se habla de paz en Colombia, especialmente, de acuerdo con el actual proceso de diálogo abierto con las FARC que transcurre en La Habana y muy posiblemente, en un inminente plazo, con el ELN. Proceso ya iniciado por Juan Manuel Santos Calderón, y que en buena medida se construye con base en aceptar las limitaciones reales tanto del Plan Colombia y de la PSD, como de la propia *periferialización* descrita. No obstante, a tal efecto, el General (r) del Ejército entrevistado, señalaba que el actual provecho de paz debe entenderse en otra clave adicional, que es que: “Se actúa sobre tres aspectos que sí van a repercutir a las guerrillas: los corredores de la droga, la retaguardia estratégica y los apoyos de la población civil. Sin embargo, ni con eso es posible una derrota militar”.

Durante este último período presidencial, que transcurriría entre 2010 y 2014, es que parece haberse consolidado este proceso de *desterritorialización* sobre los enclaves tradicionales de la guerrilla y que, por la transformación descrita, invitaría a pensar en una posible pérdida de la estructura interna de las mismas. La ruptura hacia nuevos enclaves centrífugos, sin posibilidad de conectarse, podría amparar la hipótesis de una mayor descentralización organizativa y decisoria, que no solo afectaría a las guerrillas, sino también a las Bacrim, y que permitiría entender las nuevas dinámicas de cooperación y alianzas entre estos grupos armados. Dinámicas, que en buena medida se podrían comprender por la mayor dependencia económica del narcotráfico y la mayor disparidad, en la correlación de fuerzas, respecto de la fuerza del Estado colombiano.

Tal vez, sobre esta premisa se podría entender la tendencia convergente del ELN y de las FARC en sus métodos de guerra –secuestro, extorsiones, narcotráfico, su interacción y en su relación con los otros grupos armados-. De hecho, ya se señaló cómo las FARC y el ELN pueden enfrentarse en Arauca o Nariño y aliarse en Magdalena Medio, Bolívar o Norte de Santander. Igual sucedería con las Bacrim. Así lo remarcaba el propio “Felipe Torres” cuando reconocía:

“Las AUC, como con las FARC, golpean a nuestras bases sociales. Somos derrotados porque golpean el centro neural de nuestro proyecto político, que es la sociedad. Y eso nos sucede en el norte, principalmente en Cesar, y en todo el departamento de Antioquia, sobre todo, en Bajo Cauca, oriente y nordeste del departamento.

Hasta 2001 es que la confrontación con las FARC se mantiene. Luego se dan dinámicas regionales concretas, hasta que en 2010 se materializa el gran acuerdo, pues lo que ha ocurrido en muchos lugares ha sido horrible. Mira en Arauca, por ejemplo, pese a que no hay acuerdos en cifras, hablamos de que la guerra entre FARC y ELN se ha cobrado entre 500 y 3.000 muertes, de las que el 90 por ciento son bases sociales de ambos grupos. Esto tuvo lugar en un marco atípico, irracional, pues piensa que en el sur de Bolívar a la vez existía un hermanamiento entre guerrillas, con muy buen rollo, respeto, y cooperación. ¡Si hasta compartimos campamentos! Y mientras en otros lados, hay delatamientos y alianzas con el

Ejército, a modo de filtraciones, para debilitar a la guerrilla enemiga. Se nos fueron de las manos las dinámicas regionales”. (EP 9, mayo de 2015).

De acuerdo con esta afirmación, se podría entender que la política de negociación actual de Juan Manuel Santos respondería a un escenario próximo al ya mencionado como “estancamiento doblemente doloroso”. Ello, porque si bien por las políticas públicas de seguridad han contribuido a reducir las prácticas criminales de los grupos armados, a una mayor dependencia del narcotráfico, y a una reubicación estratégica más hostil, de la misma forma, ha repercutido en el propio alcance de la política de seguridad pública. La *periferialización* de la violencia supone mayores dificultades para intervenir y desplegar operativos exitosos en términos militares, dada la hostilidad y el desconocimiento respecto de estos enclaves. Enclaves en los que las inversiones ingentes de los operativos no garantizan éxitos como los que favorecerían combatir a la guerrilla sobre otros escenarios.

Sin embargo, y pese a todo, una de las hipótesis más importantes de esta tesis doctoral, es que Colombia sigue desatendiendo la dimensión estructural de la violencia, esto es, de superación y mitigación de los condicionantes que han sido claves para albergar la violencia en los últimos años, sobre todo¹⁸⁹, y que en buena parte permitirían entender las nuevas cartografías de la violencia.

Incluso, tanto es así, que del actual proceso de paz, a lo sumo, cabría esperar que de ser fructífero, obtuviese una desmovilización parcial respecto de aquellos sectores de las FARC, y posiblemente del ELN, más alejados de los escenarios y territorios afectos por el narcotráfico, el crimen organizado, y donde la integración a la vida política se erige como la alternativa transformadora única desde la que mantener influencia en el territorio.

Puede que la ausencia del Bloque Sur¹⁹⁰ – operativo en Nariño, Putumayo, sur de Cauca, y parte de Caquetá, o las dudas que genera el Bloque Oriental¹⁹¹, activo en otra de las regiones con mayor presencia de cultivos ilícitos, fortalezcan esta afirmación. De hecho, la experiencia de la relativa desmovilización de las AUC, sin transformación de las condiciones estructurales, bien podría ser una lección aprendida del pasado que no convendría repetir.

¹⁸⁹ Una de las tesis que sostiene esta investigación es que la violencia estructural ha pasado a ser especialmente importante en los últimos años, a medida que el Estado Colombia se ha fortalecido y, en paralelo, ha tenido lugar un proceso de *reterritorialidad* espacial de los actores armados involucrados en el conflicto.

¹⁹⁰ El Bloque Sur no se sumó a la mesa de negociación de La Habana hasta marzo de 2014, año y medio después del comienzo de los diálogos. No obstante, ha sido uno de los bloques más activos en todo este tiempo.

¹⁹¹ El Bloque Oriental aun que ha perdido de manera notable parte de su pie de fuerza, sigue disponiendo de 3.500 guerrilleros y solo en 2013, por ejemplo, protagonizó hasta un centenar de emboscadas. Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-declive-del-bloque-oriental-de-farc-articulo-554327>

Consultado el 6 de septiembre de 2015

CAPÍTULO IV: EL FACTOR DEL NARCOTRÁFICO EN LA PERIFERIALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DEL ELN

1. Introducción

El siguiente capítulo de esta tesis doctoral tiene como propósito plantear de qué modo los cultivos ilícitos, vinculados a la actividad narcotraficante, se han venido consolidando en la última década como un factor a tener en consideración en los cambios y dinámicas territoriales que ha desarrollado el conflicto armado colombiano.

A tal efecto, tomando como variable dependiente la violencia armada derivada de los dos grupos guerrilleros objeto de estudio – FARC y ELN-, la hipótesis que se busca corroborar es que, de manera creciente, las dinámicas territoriales del activismo guerrillero resultan coincidentes, cada vez más, con las dinámicas territoriales de presencia de cultivos ilícitos. Es decir, la geografía del cultivo ilícito operaría a modo de variable independiente, a fin de invitar a pensar en que la relación entre activismo guerrillero y dicha presencia de cultivos responde a una tendencia no solo positiva sino que, con el paso de los años, cada vez más significativa.

Conviene precisar que el indicador que se utiliza para medir el activismo guerrillero, de FARC y ELN, es el número de acciones guerrilleras, lo cual incorpora posibles respuestas no inmediatas ante acciones de la Fuerza Pública. Esto es, se considera como tales la suma de ataques contra la Policía y Ejército, hostigamientos¹⁹², emboscadas¹⁹³, ataques a la población¹⁹⁴ y otros eventos de terrorismo¹⁹⁵.

Esta cifra es obtenida gracias a la colaboración ya referida del ODHDIH, y cuya base de datos, como también se explicó, se conforma a partir de las informaciones que en relación al conflicto armado colombiano surten los Boletines Diarios del DAS¹⁹⁶, para el período 1998-

¹⁹² Se entenderían, de acuerdo a este indicador, combates, uso de minas, ametrallamiento, bloqueo de vías, ataque a objetivos militares, incursiones o sabotajes.

¹⁹³ Por emboscada, y de acuerdo con la definición de CINEP (2008: 48) se entiende “una acción legítima de guerra dirigida contra el adversario, la cual implica una preparación, conocimiento del terreno y la utilización de métodos y medios lícitos. La emboscada, pone en funcionamiento estratagemas que son lícitas, a fin de infligir una derrota al adversario, de producir bajas entre sus filas o de impedir el libre tránsito de las tropas enemigas”.

¹⁹⁴ Por ataques a la población se entenderían, fundamentalmente, asesinatos políticos, asesinatos a población civil, amenazas individuales, amenazas colectivas, ataques a la integridad personal, secuestros, reclutamiento forzado o desplazamiento forzado.

¹⁹⁵ Por otros eventos de terrorismo se incluirían, por ejemplo, ataques a bienes civiles, bienes religiosos, bienes culturales, bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, ataques a obra e instalaciones o ataques a la estructura vial.

¹⁹⁶ El DAS fue durante 51 años el centro de la inteligencia, la seguridad y el espionaje colombiano. Sin embargo, durante la presidencia de Álvaro Uribe, la institución fue objeto, primero, de una infiltración paramilitar, y después, de una sucesión de escuchas ilegales, llamadas vulgarmente como “chuzadas”, y que terminaron por

2010, y la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, para los años 2011 y 2012.

Como indicador para precisar la variable de los cultivos ilícitos, como no podía ser de otro modo, se utiliza la medición del número de hectáreas cultivadas de coca que, para el desarrollo de esta tesis doctoral, facilitó la Oficina Regional para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, por sus siglas en inglés-, y que recoge la evolución de los cultivos por desglose municipal desde 2001 hasta 2012¹⁹⁷.

Ambas informaciones no son de libre acceso, y por ello el agradecimiento expreso con el que se iniciaba esta tesis, habida cuenta de suponer un valor agregado para el óptimo desarrollo de esta investigación. Es más, sin esta información, hubiera resultado casi imposible precisar el alcance de la hipótesis que se plantea, más allá de la mera presunción.

Dicho esto, conviene precisar que este capítulo, por su extensión, amerita, partiendo de un enfoque conjunto para ambas guerrillas, de un desglose y desarrollo diferenciado. Es decir, mientras este capítulo, más allá de la contextualización de la hipótesis, se centrará sobre el ELN, el siguiente capítulo V, en iguales términos de estructura y organización, lo hará sobre las FARC.

Sin embargo, antes de todo, y para facilitar la lectura y comprensión de lo que se quiere plantear, se inicia desde una contextualización conjunta, para ambos grupos guerrilleros, para lo cual se presentan las que han sido las principales fuentes de financiación de FARC y ELN, bien de un modo general, pero especialmente enfatizando en los últimos años.

Todo con una intención clara, que es la de poner de manifiesto de qué modo, especialmente, por su alto valor económico, los secuestros y, en menor medida, las extorsiones, han ido decayendo de manera creciente a lo largo de buena parte de la geografía del país, a tenor del fortalecimiento institucional del Estado y de su Fuerza Pública. Así, las estadísticas anuales que respecto de las actividades criminales de los grupos publica la *Revista Criminalidad*, editada por la Policía Nacional, deviene como la fuente más fiable y de mayor cobertura, sobre todo desde el año 2002.

Del mismo modo, y de acuerdo a una reducción importante del volumen total de la superficie cultivada, obtenida por la propia PSD y el Plan Colombia – que serán abordados con mayor profundidad en capítulo VI-, y una notable labor de destrucción de laboratorios y centros de procesamiento – coincidentes como se verá, en gran medida, con la ubicación territorial de

propiciar su desaparición dentro del marco del Decreto 4057, bajo la administración Santos. Este DAS ha sido reformulado y modernizado en lo que actualmente sería la Agencia Nacional de Inteligencia.

Véase: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_144 Consultado el 5 de mayo de 2015

¹⁹⁷A tal efecto, y para la consecución de estos datos fueron imprescindibles, como ya se señaló al inicio, las colaboraciones de Christopher De Andrés, asesor en la Oficina Regional ONU Sida para Latinoamérica, y de Amado de Andrés, Representante Regional de UNODC para Centroamérica, el Caribe y la República Bolivariana de Venezuela.

los grupos guerrilleros-, se puede inferir la hipótesis de que tales cultivos ilícitos han tendido a consolidarse, primero, sobre enclaves geográficos más periféricos, y segundo, con una presencia creciente de los grupos guerrilleros.

De esta manera, se conduce a plantear que, muy posiblemente, de acuerdo a lo que puede interpretarse por la yuxtaposición de cartografías, con la reducción del resto de acciones criminales, y la propia tendencia de erradicación de la superficie cultivada, FARC y ELN optan por mantener como principal actividad económica el cultivo ilícito, el cual obtiene, por razones obvias, ventajas comparativas en las zonas fronterizas y geográficamente más difíciles, lo cual puede ayudar a entender, en última instancia, el porqué de los mayores niveles de violencia guerrillera en estos departamentos.

A tal efecto, nuevamente, es de destacar la cartografía puestas a disposición por parte del ODHDIH para este trabajo doctoral. Cartografía que, además de facilitar sobremanera el trabajo de análisis, revelan de qué modo la persistencia de FARC y ELN sobre ciertos departamentos responde a la presencia de cultivos. Ello, del mismo modo que, por extensión, la desaparición de estos grupos coincide con enclaves con ausencia de cultivos, y que cabe interpretar como básicos a efectos de mantener y financiar el activismo guerrillero.

Una vez esto resulte abordado, el capítulo de versará, exclusivamente, en analizar el ELN, presentando con relativa profundidad los cambios geográficos de su activismo guerrillero, y siempre en relación con la variable del cultivo ilícito. De este modo, se buscará profundizar en cómo es posible entender el atractivo de los cultivos ilícitos en la ubicación de esta guerrilla, ya sea en términos de mera presencia guerrillera, ya sea en términos de concentración de acciones armadas.

Asimismo, el siguiente capítulo a éste hará lo propio con con las FARC de manera que el análisis y los resultados, por cuestiones de metodología y coherencia, se presentará en iguales términos que con el ELN. Es decir, tratando de relacionar las acciones guerrilleras con la presencia municipal de las FARC y la concentración de acciones armadas.

En ambos casos, y con base en una premisa en la que las tasas de extorsión y secuestro en Colombia por responsabilidad de las FARC y el ELN se encuentran en los niveles más bajos de los últimos veinte años¹⁹⁸, y también con base en los cambios geográficos que se describen en este capítulo, cabe pensar en que la reubicación geográfica, coincidente en términos, con la ubicación de cultivos ilícitos, invita a pensar en la mayor, y referida, dependencia de las guerrillas respecto del negocio de los cultivos ilícitos.

Dicho de otro modo, este capítulo de la tesis debe permitir aceptar la hipótesis de que la intensificación y *periferialización* del activismo guerrillero sobre ciertos departamentos, en

¹⁹⁸ En la actualidad, para el año 2012, los secuestros de las FARC habían caído a 20, y en el caso del ELN, a 33 (Revista Criminalidad, 2012: 109).

su mayor parte fronterizos, puede tener un factor explicativo a tenor de la igual *periferialización* y persistencia de los cultivos ilícitos respecto de este tipo de enclaves.

2. La economía del narcotráfico en las guerrillas. Un rubro de creciente importancia

El punto de partida clave es el de plantear la hipótesis sobre una dependencia creciente de las guerrillas, FARC y ELN, respecto de la industria del narcotráfico. Siguiendo un trabajo clásico de la sociología histórica como son *Las fuentes de poder social*, de Michael Mann (1997), el poder territorial y la configuración de redes locales de cooptación y comunidades de legitimación solo es posible si concurren, particularmente, fuentes de poder social, de carácter ideológico, militar, político pero, sobre todo, de cariz económico.

Respecto de las finanzas de las FARC y del ELN, existen dos trayectorias claramente diferenciadas así como multitud de estudios coincidentes en su apreciación. Inicialmente, las FARC rechazaban cualquier relación con la marihuana o la coca, por entender que desvirtuaban a las comunidades receptoras y se contravenía a lo que debía ser el “espíritu guerrillero”. No obstante, a partir de la década de los ochenta, aceptan lo que se llama el impuesto de gramaje, más concretamente, desde la VIII Conferencia Guerrillera de 1989. Ese gramaje se justifica en sí como un cobro al cultivo de coca, con el propósito de proteger a los agricultores frente a la llegada de grupos paramilitares, evitando, por ejemplo, el despojo de tierras (Maddaloni, 2009).

Sin embargo, y asimismo, las zonas de dominación territorial de las FARC adicionaban una segunda contrapartida a los propios narcotraficantes, la cual, según Pécaut (2008b), incorporaba la posibilidad de disponer laboratorios, pistas clandestinas así como rutas de evacuación de los cargamentos. De hecho, el propio Pécaut, aunque tímidamente, plantea que la *periferialización* del activismo de las FARC, bien puede responder a esta relación cercana al tráfico de drogas.

Tal y como reconoce Aguilera (2014: 148), el gramaje, en sus inicios, ascendía a un 15% aproximadamente de cada transacción realizada con pasta o base de coca, lo cual marca un punto de inflexión de lo que será conocido como la diferencia entre frentes ricos y frentes pobres de las FARC. Empero, es cierto que los inicios de la relación de las FARC con el narcotráfico ni mucho menos fueron sencillos. Especialmente, porque los frentes ricos hacían evidencia de su opulencia a modo de joyas que, como reconoció un Informe de las FARC de 1987, desnaturalizaba la idea de guerrillero pobre, obrero y trabajador del campo (FARC-EP, 1987). De hecho, el concepto de narcoguerrilla o narcoterrorismo, tan recurrido, ya encuentra en ese momento su concepción, como reconocen trabajos como los de Palacio y Rojas (1990).

La propia concurrencia de las FARC sobre los principales enclaves cocaleros va a favorecer una lógica de mayor presencia en la industria de la droga una vez que, desde 1989, se busca incrementar el pie de fuerza y disputarle el poder al Estado con visos a su posible

derrocamiento. Hechos como la detención del gran capo de la droga brasileña, Fernandinho, en un territorio controlado por las FARC así como figuras en las finanzas de la guerrilla como es el caso de “Negro Acacio”, al frente de los negocios del Bloque Oriental - casualmente el más poderoso de las FARC y que se erige sobre vastos escenarios cocaleros-, invitan a pensar en una creciente participación. Participación que, por ejemplo, a efectos de esta tesis reconocía, cuando era preguntado por ello, el segundo comandante del Frente 5 de las FARC, Samir”:

“la única manera de cumplir con el cometido de tomar el poder por las armas, que ha sido y sigue siendo la consigna guerrillera de las FARC necesitaba del narcotráfico. Se trata de obtener recursos de donde resultara posible. Y claro, las posibilidades de la coca eran mucho mayores que cualquier otra fuente de ingreso”. (EP 8, agosto de 2015).

Igualmente, amerita traer a colación una de las entrevistas con el exjefe político de las AUC, y una las figuras más relevantes del paramilitarismo en Colombia, Edwar Cobos Téllez, “Diego Vecino”, quien precisamente justifica la expansión paramilitar sobre enclaves cocaleros como consecuencia del vasto poder que, por la mayor entrada de las FARC en el negocio de la droga, hacía pensar en un balance, en la correlación de fuerzas, favorable a la guerrilla en cuanto a la disputa paramilitar. Así, reconoce el propio “Diego Vecino”:

“Entre 1997 y 2001 nuestra financiación era totalmente sobre economía lícita, especialmente, agricultura y ganadería. Y también teníamos una cuota extorsiva. Pero desde 2001 se nos entrega el cobro de finanzas a los narcotraficantes, lo cual hasta ese momento lo hacía Vicente Castaño. Cobrábamos a los narcotraficantes que pasaban por la zona con búsqueda al golfo del Morrosquillo. Entre 2001 y 2004, cuando asumimos este rubro, esto nos suponía entre el 60 y el 65% mientras que el resto era legal. Es después de esto que las AUC, en el proceso de expansión que asume Castaño, buscan arrebatar los enclaves cocaleros de las FARC más importantes. Ahí estaba el poder y estaban las finanzas para la guerra”. (EP 12, mayo de 2015).

A tal efecto, resulta fácil entender el paso de las FARC del gramaje al procesamiento. Así lo señalan autoridades en el conocimiento del conflicto armado colombiano como el referido Pécaut (2008b: 39), cuando señala que:

En los últimos años, las FARC han creado sus propios laboratorios –los “cristalizaderos” les proporcionan ingresos muy superiores a los del “gramaje”-, tienen algunas redes para sacar la cocaína, cobran peajes a las organizaciones de narcotraficantes y negocian con ellas el precio de compra del producto.

En los mismos términos plantea Henderson (2010: 224) que, de hecho, “a finales de los años noventa el secuestro representaba el 36% de los ingresos de las FARC, comparado con el 54% derivado de la venta de drogas ilegales”. Iguales términos señalan todos los personeros entrevistados en la tesis, desde Chocó hasta Norte de Santander o Nariño. De hecho, por ejemplo, este último personero señala que:

“hay una relación directa entre los mayores niveles de violencia, presencia de grupos armados y concurrencia de cultivos ilícitos. Las FARC y los Urabeños se reparten los cultivos hasta el punto de que, en ocasiones, entre los mismos grupos no hay discusión en cuanto a su dominio de todos los circuitos del narcotráfico”. (EP 18, febrero de 2015).

Finalmente, y como otro de los testimonios destacables a tal efecto sería el de uno de los mayores conocedores del activismo criminal de las guerrillas, el General (r) de la Policía Nacional entrevistado igualmente, y que señala que:

“Desde 1996, la impronta y la relación de las FARC con la coca en cuanto al narcotráfico es incuestionable. Basta con ver las marchas cocaleras de las FARC de 1996 y su gran movilización. Eso es una muestra de poder sobre unos enclaves productores que va más allá de gramaje (...) piense que nuestras estimaciones calculan que el narcotráfico que ha venido suponiendo más del 50% de las finanzas de las FARC desde hace ya bastante tiempo”. (EP 5, abril de 2015).

Lo mismo señalaría el General (r) entrevistado de parte del Ejército quien afirma:

“Para mí la importancia del narcotráfico en la comprensión del conflicto de las guerrillas es directa, especialmente para las FARC. Cuando mi generación estaba en puestos de comandancia o como yo, de coronel, y se produce el fin de la Guerra Fría, pensábamos, en un manifiesto error de cálculo, que las guerrillas desaparecerían. Sin embargo, las causas persistían y las FARC fueron muy ágiles en buscar fuentes alternativas, desde el narcotráfico, que re-oxigenaron su logística, su administración y su presupuesto. Esto fue su gran atributo para mantener una guerra con altos costos, pero también su gran pecado, al desdibujarse y utilizar el narcotráfico como algo consustancial a sí mismas” (EP 6, septiembre de 2015).

Sea como fuere, y con respecto a cálculos sobre las finanzas de las FARC existen muchos trabajos académicos así como vagas especulaciones. Una de las aproximaciones más serias es la de Bejarano y Pizarro (2001: 3), quienes estiman que de las fuentes de poder económico referidas, el 48% era proveniente del tráfico de drogas, el 36% fruto de la extorsión, el 8% derivado del secuestro, un 6% producto del robo de ganado más un 2% restante de actividades varias.

Esta aproximación se aproxima al desglose realizado, desde el Gobierno, a partir de los estudios de la Junta de Inteligencia Conjunta (2005: 7) – JIC-, que en su momento estimó que las fuentes de poder económico de las FARC respondían a una distribución en la que el narcotráfico representaba un 46.44% de las cuales el desglose de actividades se condensa en una comercialización del clorhidrato de coca (45.9%), nada comparable con el 0.53% obtenido, presumiblemente del impuesto de gramaje.

De hecho, y en unos términos muy similares a los de Bejarano y Pizarro, la Junta de Inteligencia Conjunta considerarían que la extorsión representaría un 41.31%, por un 6.75% del secuestro, 1.39% el hurto de ganado, y un 7% restante de actividades criminales varias – asalto a entidades bancarias o hurto de combustibles.

Sea como fuere, lo cierto es que con base en lo anterior, son muchos los que se aproximan a considerar que el narcotráfico, sobre todo durante la primera mitad de la década anterior, terminó por suponer unos ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares y que en todo caso, se terminó por consolidar como el gran rubro de las finanzas de la guerrilla (Henderson, 2010; Gutiérrez, 2004; Rubio, 2001, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, 2012; Mackenzie, 2010; International Crisis Group, 2009; Pataquiva, 2009; Constantino y Lasa, 2010).

A diferencia de lo señalado, el ELN tradicionalmente ha tenido una estructura en sus ingresos bien diferente, fruto, como ya se señaló, de su carácter más renuente a participar de la industria del narcotráfico. Así lo reconoce “Felipe Torres”:

“Lo cierto es que la esencia del ELN siempre ha sido de subsistencia, es decir, con un proyecto pobre económicamente, en términos sociales, políticos y también ideológicos. El ELN jamás pretendió ser una organización como las FARC y, sin embargo, ello es clave para entender el hecho de que las guerras entrañan grandes costos. Yo te lo puedo reconocer, Jerónimo, porque fui jefe militar y sé lo que supone un contexto en el que no se produce y todo se consume. Además hay un factor adicional y es que, para ello, las FARC se involucraron en el negocio del narcotráfico y sobre los tres eslabones de la producción. Por su parte, el ELN nunca lo hizo por una decisión y convicción política. En 1998 y 1999 el mayor orgullo con el que yo exhibí esta cuestión era un momento en el que las relaciones Estados Unidos – Colombia estaban atravesadas y el gobierno, como sabes, totalmente descertificado. Sin embargo, busca las declaraciones en *El Espectador* de Anne Patterson, donde reconoce con absoluta seguridad que el ELN no tiene ningún vínculo con el narcotráfico. ¡Eso para mí fue todo un orgullo!”. (EP 9, mayo de 2015).

De hecho, Bejarano y Pizarro (2001: 5) identifican una estructura en cuanto a sus ingresos bien diferente. Así, sobre el 100% de sus fuentes de ingreso, un 60% provendría de la extorsión, un 28% del secuestro, un 6% del tráfico de drogas, un 4% del robo de ganado y, por último, un 2% de otro tipo de actividades criminales. De hecho, algunos análisis¹⁹⁹, plantean que la participación hasta 2007 de esta guerrilla en la industria del narcotráfico resultó tan ambigua como imprecisa y apenas, en una cuantificación general, llegaba a un millón de dólares, si bien, desde entonces, se empieza a apreciar una mayor presencia de esta guerrilla en acontecimientos relacionados con el narcotráfico (International Crisis Group, 2007).

Antes, señalan Fonseca, Gutiérrez, y Rudovist (2005), hacia 1997, se pueden identificar escenarios próximos al cultivo ilícito, especialmente preponderantes para el ELN, como es el caso del sur de Bolívar, primero, y de la región del Catatumbo, después, si bien, tal y como se podrá a ver a continuación, esta relación termina por ser mucho más íntima con el paso de

¹⁹⁹ Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-n-y-el-narcotrafico-una-relacion-peligrosa-articulo-502301> Consultado el 11 de mayo de 2014

los años, especialmente en Cauca, Nariño, Chocó, y en ocasiones en Antioquia y Arauca. Esto lo reconoce con desánimo el mismo “Felipe Torres”:

“Sin embargo, me apena reconocer que el ELN ha empezado a incursionar de unos años para acá en la fase que se relaciona con el gramaje sobre la coca. Estás en lo cierto, sin embargo, que algunas estructuras han ido incluso más allá y han pactado con narcotraficantes y con proyectos de las Bacrim. Es fácil. Yo te cuido laboratorios y pistas de aterrizaje y, por ejemplo, a cambio tú me provees de armas. Es un intercambio de servicios en el que todos ganan pues en muchos enclaves de narcotráfico hay un *modus vivendi* en el que no hay interés de guerra entre actores sino contra el Estado, que termina siendo el enemigo común, aunque es evidente que todo esto ha desdibujado la imagen del ELN. Sinceramente, me apena ver esta situación cuando a nosotros, a mí y al Cura Pérez, nos costó mucho mantenernos al margen del gramaje. Sin embargo, el pragmatismo en medio de la guerra se ha transformado en algunas estructuras en una dependencia de coca para mantenerse”. (EP 9, mayo de 2015).

De este modo, y de acuerdo a estas consideraciones, es de esperar una progresiva cercanía de las guerrillas de las FARC y el ELN respecto de los principales enclaves productores de coca. Ello, porque con motivo de la PSD y Plan Colombia, impulsados con Álvaro Uribe, pero conectado con el plan de modernización de Andrés Pastrana, se consigue afectar muy negativamente a los rubros que las guerrillas obtenían de secuestro y extorsión. Esto, invitaría a pensar en una mayor dependencia, tan directa como inmediata, respecto de los escenarios cocaleros como prioridad, y en segundo término, de los escenarios propicios en cuanto a minería ilegal, si bien estos escapan del propósito de esta tesis doctoral. De ello deja constancia, por ejemplo, el personero de Nariño, cuando reconoce:

“No puede haber seguridad con una situación crítica de los Derechos Humanos como la actual. Los abusos de autoridad de la fuerza pública se traducen en continuos atropellos. En otro orden de cosas, hemos venido pidiendo ayuda por el impacto que el extractivismo está generando en nuestro principal objeto de consumo, que es el agua. Como esta práctica da muchos beneficios no se llevan a cabo acciones para mitigarla. Además, el impacto es muy negativo pues afecta a los cultivos de *pancoger*. En suma, la inseguridad no es más que una arista que se entrelaza con otros factores como la falta de voluntad política, la corrupción y el abandono del Estado en términos de seguridad humana. Todos los grupos armados del departamento, tanto FARC y ELN, como Bacrim están muy vinculados con las minas de oro del departamento. Eso ha generado otro factor de disputa frente a los que ya tenemos”. (EP 18, febrero de 2015).

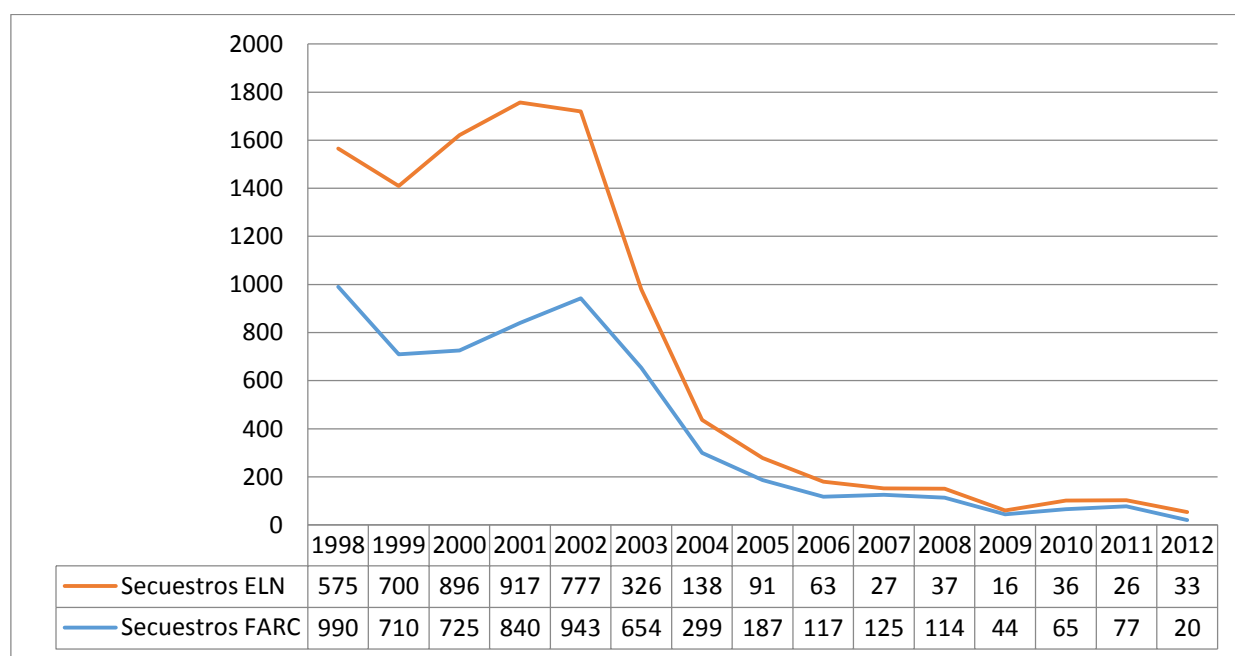
La tendencia de mayor proximidad del activismo guerrillero sobre los escenarios productores de coca, se puede entender, en primer lugar, de acuerdo a estas consideraciones aunque, en su dinámica creciente, puede interpretarse también, como se señala, resultado de una importante reducción respecto de los otros dos grandes rubros de sus finanzas, esto es, secuestro y extorsión

De hecho, en la siguiente gráfica, puede observarse cuál ha sido la evolución del secuestro y de la extorsión para las FARC y el ELN, desde 1998 hasta 2012. Una tendencia que, como

se observará, resulta muy similar a la propia dinámica del activismo guerrillero, que en el transcurso de los últimos quince años ha experimentado una fase expansiva hasta el año 2000 así como una importante reducción, paulatina y decreciente, especialmente hasta 2008. Esto, porque desde entonces se aprecia una nueva tendencia expansiva si bien, tímida, y nada comparable a unos tiempos de la guerrilla que, por la desigual correlación de fuerzas, difícilmente pueden volver a repetirse.

De hecho, por ejemplo, si entre 1998 y 2002 los secuestros en el caso de las FARC mantienen niveles próximos a los 800-900 casos al año, desde 2003 se comienza a apreciar un retroceso significativo, esto es, al pasarse de los 943 casos de secuestro de 2002, a los 654 de 2003, para seguir decayendo a los 299 de 2004. La tendencia va a seguir acentuándose, y entre 2006 y 2008 apenas se supera la perpetración de una centena de casos anuales y que va a seguir a la baja hasta el punto de que en todo el año 2012, apenas se contabilizan 20 secuestros.

Gráfico 1: Evolución de los secuestros cometidos por FARC y ELN entre 1998 y 2012



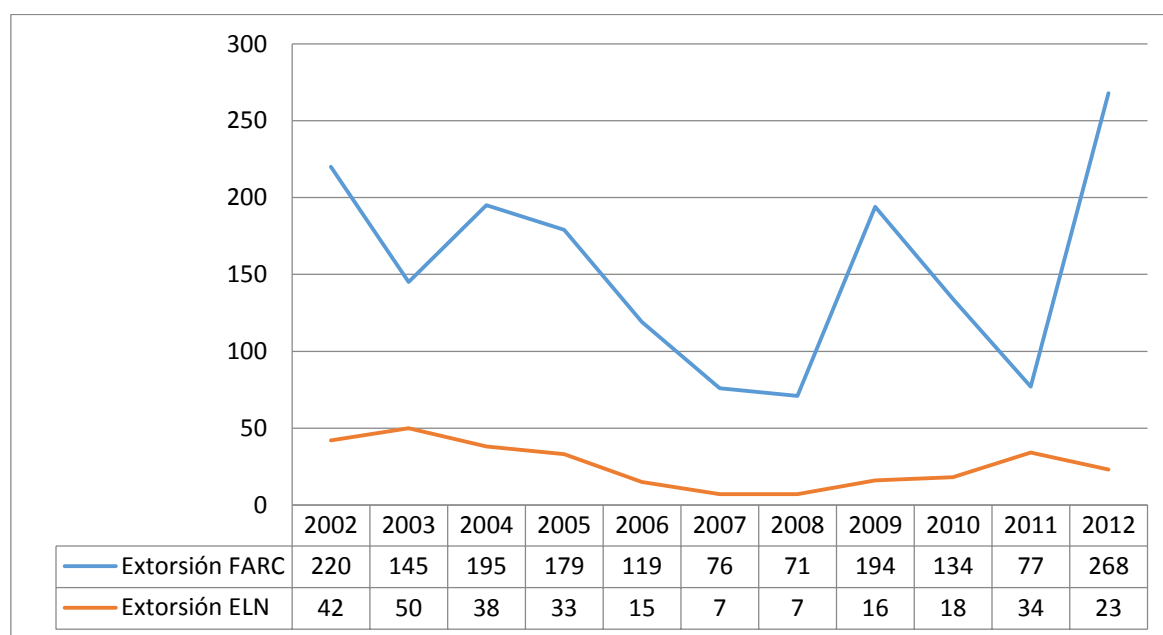
Fuente: Elaboración propia con datos de la *Revista Criminalidad* (2002, 2008 y 2012)

Idéntica tendencia se observaría para el caso delo ELN, que entre 1998 y 2002 supera ampliamente los 700 casos de secuestros anuales, incluso, aproximándose a los 900 casos en los años 2000 y 2001. No obstante, si en 2002 siguen siendo 777 los secuestros protagonizados por esta guerrilla, en el año siguiente la cifra decae hasta los 326, para continuar haciéndolo hasta los 138 casos en el año 2004. Así, los niveles de secuestro terminan por caer a mínimos históricos desde 2007 y hasta la actualidad, cuando en ningún

caso se superan los 40 casos anuales siendo 33 los registros efectivamente contabilizados en el año 2012.

La extorsión sí que ha mantenido niveles más estables, aunque en primer lugar, se debe señalar la imprecisión del término *per se*, por la propia dificultad de medición, y en segundo lugar, de acuerdo a lo señalado, por un menor impacto dentro de las finanzas de las guerrillas. No obstante, a grandes rasgos se mantiene la tendencia propia de los grupos armados en su activismo guerrillero. Es decir, tendencia decreciente, desde 2002 y hasta 2006, con los niveles más reducidos en los años 2007 y 2008, y un repunte, aunque muy marcado por la irregularidad, que se mantiene hasta el año 2012. Asimismo, es mucho más importante la debilidad de la extorsión para el caso del ELN toda vez que, como se mencionaba, tradicionalmente ha supuesto un rubro de mucho mayor peso específico en sus finanzas que para las FARC

Gráfico 2: Evolución de las extorsiones cometidas por FARC y ELN entre 2002 y 2012



Fuente: Elaboración propia con datos de la *Revista Criminalidad* (2002, 2008 y 2012)

De acuerdo a estas dinámicas, se puede entender la conexión creciente que se espera mostrar con base a lo que se plantea en los siguientes dos capítulos de esta tesis doctoral. Una conexión creciente que, además de con las apreciaciones sugeridas, se puede servir de otras razones adicionales.

Mapa 21: Presencia de los cultivos de coca en Colombia, 2012



Fuente: UNODC (2013: 14)

Por ejemplo, desde 2006, a partir del monitoreo a la destrucción de laboratorios de coca, ya sea de base de coca, ya sea de clorhidrato de coca, se aprecia una conexión directa en los departamentos con mayor presencia tanto de FARC como de ELN. Un enclave básico para las FARC, con ausencia del ELN, tal y como se va a apreciar en el siguiente capítulo, es el corredor amazónico formado por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Solo estos tres departamentos, entre 2006 y 2012, van a experimentar la destrucción de 3.235 laboratorios de pasta de coca, esto es, el 24.8% del total de los laboratorios destruidos y sobre

los que se adicionarían otros 82 (4.8%) laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína (UNODC, 2013: 85).

Un segundo escenario nuclear para las FARC sería el de la vertiente del Pacífico, esto es, conformado por los departamentos de Cauca, Nariño y Cauca – también con creciente presencia del ELN, donde, como en el caso anterior, se concentran un número de laboratorios de pasta de coca destruido en estos últimos siete años de 3.499, es decir, el 24.8% del total y al que se sumarían otros 545 de clorhidrato de coca, que representarían la cifra del 31.8% respecto del total de laboratorios de este tipo destruidos en los últimos años.

Finalmente, mucho más concurrida por ELN y FARC quedaría el nororiente colombiano, sobre los departamentos de Arauca y Norte de Santander primero, y el departamento de Antioquia después.

En el primer caso, entre 2006 y 2012 Norte de Santander va a concentrar la destrucción del 5.15% de laboratorios de pasta de coca (672) por el 16.2% (279) de laboratorios de cocaína. Unas cifras muy alejadas de los 66 laboratorios de pasta de coca y los 7 laboratorios de cocaína destruidos en Arauca, en el mismo lapso de tiempo donde, priman otras fuentes de financiación como el contrabando o la violencia contra las grandes empresas extractivas.

Por último, en Antioquia se acumularían hasta 1.758 laboratorios de base de coca y 216 laboratorios de clorhidrato de coca, de manera que esto supondría un 13.4% y un 12.6% del total de laboratorios destruidos, respectivamente.

En conclusión, y para entender la dinámica de proximidad referida, respecto del cultivo ilícito, de parte de las guerrillas, en adición a todo lo anterior, cabría señalar el hecho de que entre 2006 y 2012, en los 9 departamentos con predominante presencia guerrillera, se han destruido hasta 9.230 laboratorios de pasta de coca y 1.136 laboratorios de clorhidrato de coca, lo cual supone el 70.8% y el 76.3% respectivamente del total del país.

Asimismo, del lado de las FARC todo resulta más evidente, en la medida en que dentro del actual proceso de negociación de la administración Santos con esta guerrilla, iniciado en agosto de 2012, acontece una total ausencia de integrantes en la mesa de negociaciones de La Habana, tanto del Bloque Sur como del Bloque Oriental, los dos bloques más poderosos militarmente de las FARC (McDermott, 2013).

También cabría señalar, de acuerdo con UNODC (2014), que el último monitoreo sobre cultivos de coca en Colombia ha puesto de manifiesto, en primer lugar, un estancamiento en cuanto a la disminución de la superficie cultivada, y en segundo lugar, y más importante, un repunte de los cultivos ilícitos, precisamente, en los enclaves de mayor presencia del Bloque Sur, como es el caso de Putumayo, y del Bloque Oriental, en el eje Meta-Caquetá.

3. Una mirada a la *periferalización* de la acción armada del ELN y los escenarios con presencia de cultivos ilícitos

Hacia el año 1998, el ELN se encuentra en una dinámica expansiva, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de los hostigamientos, especialmente desde 1996²⁰⁰, como consecuencia de la disputa territorial que deriva a su vez del auge del paramilitarismo, como en lo que tiene que ver con el número de combatientes. Como ya se había mencionado, según Espejo y Garzón (2005: 16), y como se puede ver en el siguiente gráfico, ya se mencionaba en el capítulo anterior que la guerrilla contaba en aquel entonces, aproximadamente, con 4.500 guerrilleros, habiendo logrado incorporar ocho nuevos frentes, para llegar a un total de 33, a su vez, conformados por unos 130 efectivos en cada uno.

Sin embargo, este volumen de combatientes va a resultar insuficiente, principalmente, porque todavía la guerrilla se encuentra, mayormente, renuente a incursionarse sobre ciertos enclaves próximos a la industria del narcotráfico, toda vez que la ofensiva paramilitar se concentra en el norte del país, afectando directamente a enclaves de, hasta el momento, incuestionable hegemonía del ELN. Así sucede, por ejemplo, en Norte de Santander, Cesar, Arauca, Sucre o Bolívar²⁰¹. Por ejemplo, particularmente en Antioquia, el ELN se encuentra alejado de los cultivos ilícitos, tal y como sucedía en el suroriente, una región de gran arraigo guerrillero, lo cual supuso un factor adicional para su paulatino debilitamiento. Esto lo confirma “Byron” cuando afirma:

“Cuando el conflicto se agudiza en estos años el ELN llega al punto que nunca debió llegar. Éramos recelosos de reclutar, pero tras el 2000 lo que hacemos es flexibilizar los criterios de ingreso, que si bien antes eran muy rígidos, siendo muy difícil entrar, después se termina con el esmero de organización del ELN. Intensificamos la extorsión aunque la misma se decidía en el Congreso Nacional. Pero nunca entramos en el narcotráfico.

Tuvimos un gran arraigo urbano, cercanos a Rionegro. Y tampoco es que allí hubiera mucho cultivo, además de que las tierras son poco fructíferas y aunque no sé en qué están ahora, al menos en ese tiempo política e internacionalmente sabíamos que éramos respetados por esta fuera de la droga. Dentro de todo, tuvimos que escoger entre narcotráfico y secuestro. Optamos por lo segundo. Elegimos entre lo malo y lo peor y nos quedamos con lo malo y nos desnaturalizamos. Por ejemplo, desde el 2000 nos convertimos en una fuerza pegada a la autopista Bogotá-Medellín. Ya no hacíamos guerra de guerrilla sino pegarnos al terreno para

²⁰⁰ Como acertadamente se recoge en el informe de Internacional Crisis Group (2014: 6), el ELN inicia una fase expansiva desde 1996 y que llega, sobre todo hasta el año 2000, lo cual se traduce en una intensificación de la práctica del secuestro, llegándose incluso a superar los 1.000 secuestros anuales. Igualmente, se puede apreciar esta consideración a tenor de las cifras que presenta el ODHDIH.

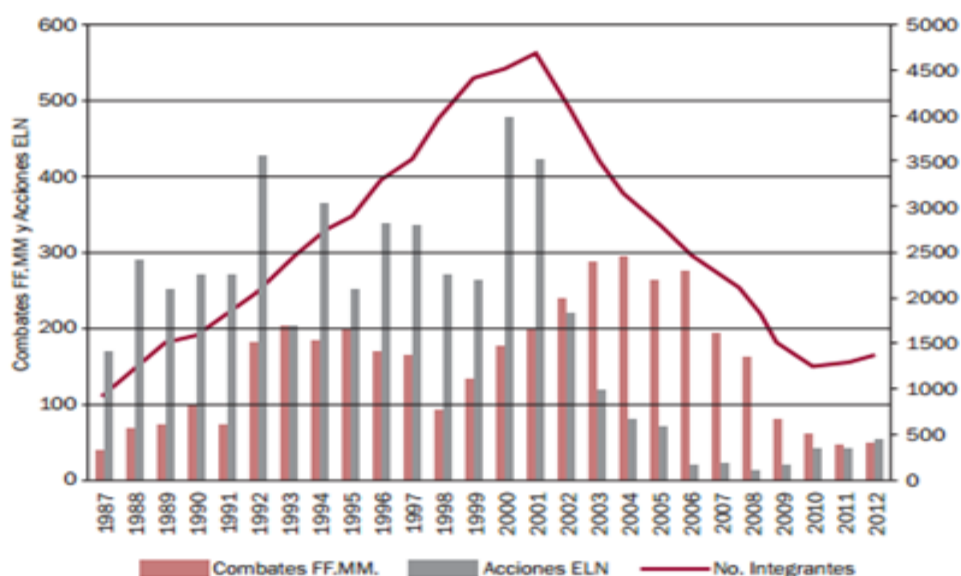
²⁰¹ En estos departamentos se encuentran algunos de los frentes más importantes del ELN como son los frentes “Seis de Diciembre”, “José Manuel Martínez”, “Camilo Torres Restrepo” y “José Solano Sepúlveda” en Cesar; los frentes “Carlos Germán Velasco”, “Carlos Armando Cauca Guerrero”, “Juan Fernando Porras”, “Claudia Isabel Escobar Jerez” y “Efraín Pabón Pabón”, en Norte de Santander; los frentes “Domingo Lain Sanz” y la “Compañía Simacota” en Arauca; y, finalmente, los frentes “Jaime Bateman Cayón”, “José Solano Sepúlveda”, “Héroes de Santa Rosa” y “Alfonso Gómez Quiñónez” en los departamentos de Sucre y Bolívar (Echandía, 2006).

subsistir. Había mucho paramilitarismo, por todos los lados. Tanto que el COCE nos dijo que mantener la posición allí era una guerra perdida”. (EP 10, junio de 2015).

Algo similar reconoce, cuando es preguntado, el propio “Cristóbal”:

“Yo me voy del ELN en 1993 para crear el ERG. Me fui por divergencias en el aspecto de las políticas del ELN sobre todo, por dicesiones en el aspecto militar. Para la coyuntura de los noventa el ELN era muy pasivo frente a los excesos del paramilitarismo. Era necesario dar más respaldo a las masas de la región. No había apoyo en la lucha contra el paramilitarismo y eran necesarias acciones más decididas. Si el ELN quería tomarse el poder por las armas eran necesarias acciones más decididas y por tanto había que construir una línea militar con más determinación. El grado de respuesta era muy débil y pasivo y no se hacía nada para fortalecer una posición más beligerante. Eso no significaba meternos en la droga. El ELN se servía del secuestro y la extorsión como impuesto de guerra. Debíamos continuar con esas fuentes de ingreso pero, verdaderamente, para poner en marcha acciones militares más decididas contra nuestros enemigos: el Estado y el paramilitarismo”. (EP 11, septiembre de 2015).

Gráfico 3: Evolución del número de combatientes del ELN entre 1987 y 2012



Fuente: ODHDIH (2014)

Tanto es así, incluso, que el ELN va a empezar a ser desalojado de algunos de estos enclaves tradicionales dentro de este período que transcurre entre 1998 y el año 2000. Entre estos enclaves, por ejemplo, se destacaría la ciudad de Barrancabermeja, el municipio de San

Vicente del Chucurí²⁰², ambos en Santander; la región de sur de Bolívar²⁰³ o dentro de la región del Catatumbo, en enclaves tan importantes como La Gabarra²⁰⁴. Derivado de ello, esta guerrilla se va a ver obligada a un repliegue estratégico hacia lo que fueron retaguardias históricas como la serranía de San Lucas²⁰⁵, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar; la serranía del Perijá²⁰⁶, en los departamentos fronterizos con Venezuela de Cesar, Norte de Santander y La Guajira y, por último, parte de las selvas del Catatumbo.

La presencia del ELN en 1998, teniendo en cuenta su grueso de acciones armadas, afectaba a un total de 94 municipios y 18 departamentos, dentro de los cuales se pusieron en marcha un total de 229 acciones armadas guerrilleras (ODHDIH, 2014). Sin embargo, de manera relevante, la presencia del ELN se puede decir que quedaba constreñida, tal y como puede observarse en el siguiente mapa, en torno a cuatro enclaves fundamentalmente: el oriente antioqueño, el departamento de Santander – y más concretamente la ciudad de Barrancabermeja - la cual acumuló hasta 56 acciones guerrilleras, y finalmente, Norte de Santander y los municipios de Arauca, Arauquita y Taravena, en el departamento de Arauca.

Para el año 1999 se evidencia, conforme a lo anterior, una estabilización en las acciones armadas del ELN, especialmente sobre la ciudad de Barrancabermeja (16) y en el departamento de Norte de Santander (16), toda vez que se incrementan, con especial virulencia, las acciones guerrilleras en el departamento de Antioquia, donde el oriente

²⁰² Tanto Barrancabermeja y San Vicente del Chucurí, desde el inicio de conformación de la guerrillera, se convirtieron en municipios que perfectamente se correspondían con el propósito de lucha de la guerrilla. Esto, por ser municipios con una importante tradición extractiva, al ser enclaves de paso de oleoductos de gran importancia. De hecho, desde finales de los sesenta, ambos municipios concitan conflictos sociales, especialmente de parte de los asalariados de los proyectos petroleros, con un entorno que se percibe como abandonado por un Estado que no brinda soluciones a urgencias de carácter inmediato. Son interesantes al respecto, las aportaciones de Alonso (1997), Vargas (1991), o más recientemente, Andrades (2008). De hecho, tal es la preponderancia sobre todo lo que resulta el Magdalena Medio que, en todo el lapso de tiempo que transcurre entre 1990 y 2003, el ELN se consolida como el actor responsable de más muertes violentas en la región, donde supera la comisión de los 200 asesinatos en años como 1999. Es interesante el trabajo de Celis (2014): <http://www.elespectador.com/noticias/paz/origen-auge-y-declive-de-segunda-guerrilla-del-pais-articulo-502305> Consultado el 6 de mayo de 2015

²⁰³ Mientras que en los años setenta y ochenta, de conformación y primera extensión guerrilleras, las FARC optan por consolidarse espacialmente en los departamentos del Magdalena Medio que se corresponden con Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Antioquia, en el caso del ELN, prepondera la región de sur de Bolívar y sur de Cesar, además de como se mencionaba en la anterior cita, Barrancabermeja, el valle del río Cimitarra y la provincia del Chucurí. Para profundizar en esta cuestión son recomendables las aportaciones del CNMH (2013), Echandía (2013) y Medina (2008; 2011). Incluyendo el análisis respecto de la interacción del ELN con las AUC, no se puede pasar por alto el trabajo de Reyes, Duica y Pedraza (2007). Asimismo, aunque se mencionará con profundidad en un capítulo posterior de esta tesis, estaría el trabajo de Reyes (2009).

²⁰⁴ Véase en Anexos, la denuncia del Frente de Guerra Nororiental de julio de 1999. El valor adicional que supone la industria extractiva del ELN también se puede apreciar, entre otros trabajos, en la aportación de Avellaneda (2003).

²⁰⁵ Véase: <http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/actualidad/articuloimpreso-serrania-no-brilla-el-oro> Consultado el 17 de julio de 2015

²⁰⁶ Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimitas-seccion/desplazados/5467-la-violencia-guerrillera-contra-san-jose-de-orientes-cesar> Consultado el 17 de julio de 2015

antioqueño continúa siendo un enclave de disputa con el paramilitarismo²⁰⁷, de manera que se recogen hasta 52 acciones armadas, concentradas mayormente en los municipios de Cocorná (6), El Peñol (3), San Luis (7), San Francisco (5).

Esto lo señalaba especialmente el personero de Antioquia entrevistado, perteneciente a esta región, cuando reconoce que:

“Lo cierto es que el municipio siempre fue, desde los ochenta, un municipio con importante presencia guerrillera de las FARC y del ELN, especialmente desde que en los ochenta se desarrolla la infraestructura hidroeléctrica, y ésta empieza a ser objeto de atentados contra la infraestructura. No obstante, la violencia guerrillera era mínima, taimada. Coexistíamos con la guerrilla hasta que llegan las AUC y la guerra de todo contra todos se alimenta de identificaciones de potenciales colaboradores y auxiliares y hasta 2005 se disparan las muertes violentas, las masacres y los secuestros de guerrillas y paramilitares contra la población civil. De hecho, salvo la excepción de 1992, hasta agosto de 1998 no se produce la primera toma guerrillera, mientras que ese mismo octubre tiene lugar la primera masacre paramilitar. Se desinstitucionalizó paulatinamente el municipio por culpa de la violencia que acompañó al paramilitarismo. Murieron 600 personas y otras 200 aún desaparecidas más miles de desplazados y despojos de tierra”. (EP 14, agosto de 2015).

Algo parecido sucede en Arauca, donde se registran un total de 27 acciones armadas del ELN, en torno a los municipios de Arauquita (11), ubicado en el complejo petrolero de Caño Limón²⁰⁸ y Saravena (12), el cual se trata del municipio del departamento con mayor concentración de cultivos ilícitos para el referido año 1999.

En este año, aunque bien es cierto que el total de acciones armadas decae hasta las 178, se identifica un repunte estratégico de la violencia armada en algunos departamentos, como es el caso de Casanare, donde se duplica la presencia guerrillera del ELN respecto del año

²⁰⁷ El oriente antioqueño se erige, sobre todo, como un enclave de disputa entre ELN y paramilitarismo. Desde los ochenta se encontraban actuando en la región grupos paramilitares, concretamente “Los Masetos”, que venían enfrentándose al frente “Carlos Alirio Buitrago”, de la guerrilla. Sin embargo, los noventa se recrudece la violencia por la aparición de las FARC en la región, y la (re)emergencia del paramilitarismo de manos de Ramón Isaza y “McGuiver”. De hecho, desde finales de los noventa el paramilitarismo socava las bases de un ELN que experimentará un abandono en sus filas con destino hacia las AUC. Por ejemplo, el testimonio de esta circunstancia será estudiado por Verdad Abierta (2008):

<http://www.verdadabierta.com/component/content/article/77-secuestrados/524-enemigos-intimos-> Consultado el 17 de julio de 2015.

De otro lado, son importantes los trabajos con enfoque regional de PNUD (2010: 14). A tal efecto y sobre este enclave se evidencia de qué modo, entre 1999 y 2001 “las guerrillas del ELN y las FARC se vieron disminuidas por la presión de los paramilitares y del Ejército, que las llevó a replegarse en sus corredores estratégicos de movilización, que comprenden la subregión de Bosques y otros municipios: San Francisco, San Carlos, Sonsón, Cocorná, San Luis, Argelia y Nariño”.

²⁰⁸ El oleoducto Caño Limón – Coveñas se trata del segundo oleoducto más importante del país. Ha sido, generalmente, la fuente de financiación más importante del ELN, en el departamento de Arauca. De hecho, entre 1984, año en el que se comete el primer atentado terrorista de parte del ELN, y 2007, se habían registrado más de mil actos terroristas por parte de esta guerrilla. Sin embargo, también fue objeto de acciones del paramilitarismo. De hecho, las AUC se estima, que solo entre 2000 y 2006, llegaron a robar hasta 346 millones de dólares del oleoducto (Viloria, 2008: 17).

anterior (15). Por otro lado, y a pesar de que la guerrilla se sigue concentrando en el centro y nororiente del país, siguen activos los frentes que operan en los departamentos de Tolima (8) y Cauca (6)²⁰⁹.

Mapa 22: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 1998



Fuente: ODHDIH (2014)

En evolución, el año 2000 vuelve a ser un año de expansión del accionar armado del ELN. Posiblemente, en ello tenga que ver un afán por romper la tradicional percepción,

²⁰⁹ En Tolima se destacaría al frente “Bolcheviques de Líbano”, en el norte del departamento, mientras que en Cauca estaría activo el frente “Manuel Vásquez Castaño” (Echandía, 2006).

generalizada en aquel entonces, que hacía concebir al ELN, dentro del imaginario colectivo colombiano, como una guerrilla menor, a la sombra de las FARC. Esto, porque el proceso abierto de negociación de Andrés Pastrana con las FARC no pasa desapercibido para una guerrilla que, como ya se apuntó en un capítulo anterior, en algún momento, incluso, aspiró a una zona de despeje similar a la obtenida por las FARC, en el sur de Bolívar. Pretensión, no obstante, que como también se explicó, nunca terminó por fructificar, habida cuenta la animadversión que esta posibilidad generaba en los territorios objeto de posible desmilitarización.

Así, dadas las circunstancias, la no inclusión del ELN en el proceso de negociación de paz, unido a un fortalecimiento paramilitar en el Magdalena Medio y cada vez más sobre enclaves de presencia de esta guerrilla, especialmente en Magdalena, Cesar, Arauca y Norte de Santander, va a traer consigo los dos años de mayor accionar armado del ELN en el transcurso de la última década.

De esta manera, para el año 2000, las acciones armadas del ELN ascienden significativamente hasta las 371, fortaleciéndose su presencia en aquellos escenarios de mayor tradición “elena”, terminando por afectar, de manera general, a un total de 126 municipios y 20 departamentos del país. Dentro de esta tesitura, por ejemplo, en Arauca se duplican las acciones de la guerrilla (47), si bien, sin transformar la lógica imperante en el departamento, al concentrarse las acciones en los municipios de Arauquita (13) y Saravena (24). Igual sucede en Santander, donde se registran 42 acciones armadas, de las cuales más de la mitad (27) se concentran únicamente en el municipio de Barrancabermeja²¹⁰.

También, en el departamento del Norte de Santander las acciones de la guerrilla se incrementan hasta la veintena, aunque el crecimiento más significativo de presencia del ELN va a tener lugar en el departamento de Antioquia. Es aquí donde se duplican las acciones armadas hasta llegar a la nada desdeñable cifra de 99 acciones guerrilleras, especialmente en el oriente antioqueño – en los municipios de San Luis (16), Cocorná (6), Granada (5), Guatapé (8) o Peñol (5), y en menor medida, en el nordeste del departamento.

Entre otros departamentos con presencia destacada del ELN, para este año 2000, cabría destacar al departamento de Casanare, en el que las acciones armadas se mantienen

²¹⁰ Desde 1992 y hasta el año 2001, el ELN se trata del grupo armado con mayor activismo sobre Barrancabermeja, ello porque, como señala Vargas (2009: 442), “existen varios elementos que explican la enajenación del apoyo popular insurgente en Barrancabermeja. La guerrilla con mayor arraigo en la ciudad, el ELN, trató de solucionar sus problemas de incidencia política a través de estrategias militares, pues si bien había convergencias programáticas con el movimiento social barramejo, éste no estaba subordinado al grupo insurgente. El militarismo insurgente estuvo acompañado de una baja preparación política y militar de las unidades guerrilleras presentes en la ciudad y su tendencia hacia la criminalización. En conjunto, esto configuró un escenario donde las prácticas violentas afectaban la vida económica y social del poblador común y retrasaban las luchas políticas y sociales del movimiento social barramejo”. Sin embargo, y como se verá después, la llegada del paramilitarismo supone la práctica desaparición del ELN de la ciudad. Las masacres sistemáticas así como las desapariciones forzadas, que se elevan a 171, solo entre 2000 y 2003, evidencian la fuerza con la que llegaron las AUC a la ciudad.

constantes con respecto al año anterior (16); pero sobre todo habría que mencionar el departamento de Cesar²¹¹, donde se pasa de 6 acciones armadas en 1999 a 27 acciones en el año 2000; el departamento de Valle del Cauca, donde igualmente las 6 acciones registradas en 1999 pasan a ser 19, especialmente concentradas en la ciudad de Cali (12), y finalmente en Cauca, donde se contabilizaron 22 acciones armadas en el año 2000 – sobre todo en la capital, Popayán (5), y en Cajibío (4), por tan solo 5 en el año inmediatamente anterior. Particularmente, en los dos primeros casos, el trasfondo de esta intensificación armada del ELN respondería a la mayor presión tanto de la Fuerza Pública colombiana, como del paramilitarismo²¹².

En igual lógica, el año 2001 va a mantener una constante y elevada beligerancia de parte del ELN, que contabiliza un total de 317 acciones armadas, concentradas sobre un total de 111 municipios y 18 departamentos. De estas acciones, los enclaves más importantes con presencia guerrillera continúan inalterados, pero con una confrontación elevada por la insistencia del paramilitarismo de expulsar a la guerrilla de sus escenarios tradicionales de presencia y control territorial en el norte del país.

Es a partir de este momento que se puede tomar como variable adicional de análisis la cuestión de los cultivos ilícitos, pues hasta entonces no existían las bases detalladas de UNODC sobre el monitoreo a la superficie objeto de cultivos ilícitos. No obstante, y como se puede observar para este año 2001, el factor de los cultivos ilícitos no va a plantear las tendencias convergentes con respecto de las acciones armadas del ELN que, con el paso de los años, sin embargo, sí que terminará por experimentar.

Bajo el propósito de valorar si resulta posible una posible relación entre la geografía de la violencia del ELN y la geografía de los cultivos ilícitos en Colombia, se podría señalar que para este año 2001, en la mayoría de los 18 departamentos con activismo de esta guerrilla no se registra presencia alguna de cultivos ilícitos. De hecho, así sucede en Caldas, Cesar, Chocó, Casanare, La Guajira, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Risaralda²¹³.

Además, en otros departamentos como Cauca, la actividad guerrillera del ELN no parece gravitar excesivamente en relación a enclaves con presencia de cultivos ilícitos. Esto, porque

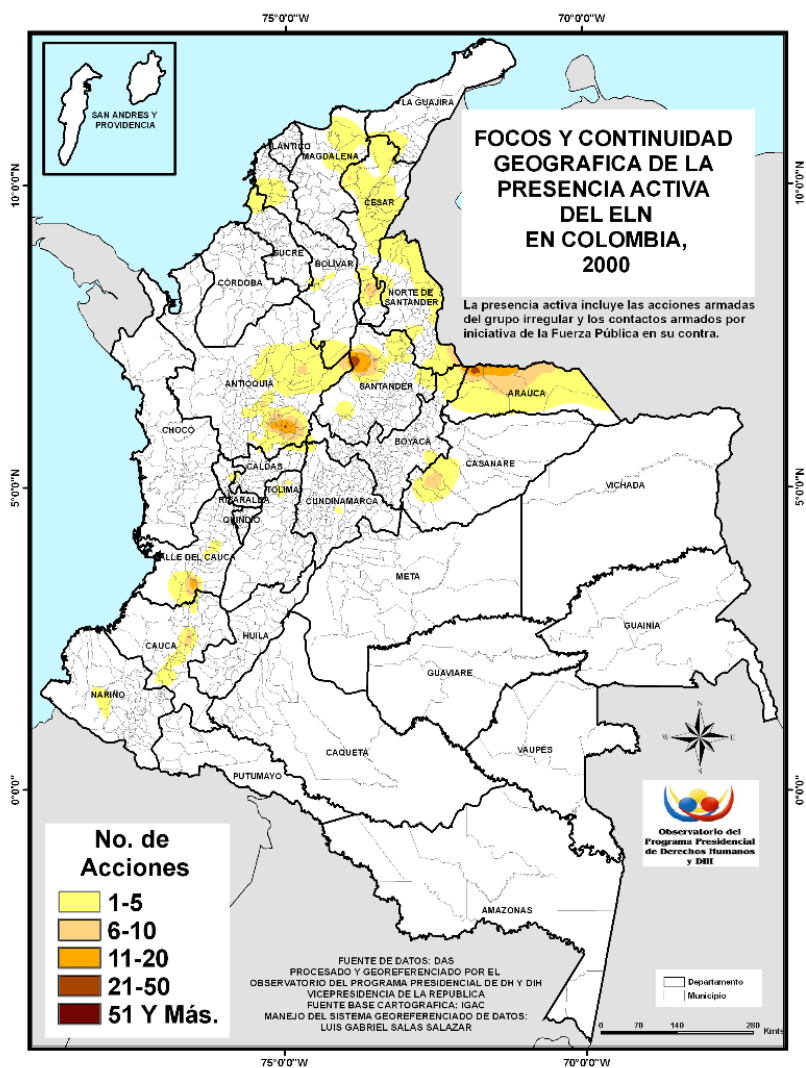
²¹¹ El activismo del ELN, en buena medida, se entiende como respuesta a los años de mayor beligerancia con el Bloque Norte de las AUC, para el cual, y como se verá con posterioridad, el departamento de Cesar resultaba nuclear. En el año 1999, las acciones del ELN son destacadas en El Copey (7), La Jagua del Ibirico (5), Valledupar (4) y en el resto de municipios que condensan el centro departamental, como son Chiriguaná, Curumaní, El Paso, Pailitas o Pelaya, donde tienen lugar otras 7 acciones armadas (ODHDIH, 2014).

²¹² El paramilitarismo de las AUC, en torno al Bloque Calima, llega al departamento de Valle del Cauca el 11 de mayo de 2000. Véase: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/3987-el-recorrido-sangriento-del-bloque-calima-por-cauca> Consultado el 22 de julio de 2015

²¹³ Así sucede en los departamentos de Caldas (4), Cesar (6), Chocó (9), Casanare (9), La Guajira (10), Santander (23); Sucre (3), Tolima (3), Valle del Cauca (2) o Risaralda (4). Es decir, en estos 9 departamentos se van a concentrar 99 acciones armadas del ELN – casi una tercera parte (31%) del total de acciones de la guerrilla en ese año, las cuales terminan afectando a 39 municipios que, por otro lado, no presentan atisbo alguno en cuanto a plantaciones de cultivos de coca (ODHDIH, 2014).

si en Cauca se recogieron hasta 9 acciones guerrilleras sobre 7 municipios del departamento, solo en uno cabría pensar en la posibilidad de pensar en esta relación. Así sucedería con el caso del municipio de El Tambo, un núcleo de alto valor agregado en el negocio de los cultivos ilícitos, y que en 2001 registró la nada desdeñable cifra de 1.436Ha cultivadas con coca.

Mapa 23: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2000



Fuente: ODHDIH (2014)

Igual pasará en Boyacá, donde de las 4 acciones armadas computadas en 2001, solo una se ubica en el municipio de Cubará, con unos cultivos que, además, apenas ascienden a 139Ha de coca. Finalmente, en el caso de Nariño, se registrará una presencia del ELN traducida en

un total de 6 acciones guerrilleras, aunque solo una en torno a enclaves productores de coca – en este caso Barbacoas (729Ha)-, dado que el grueso de acciones armadas va a gravitar en torno a la capital departamental, Pasto, ubicada en el oriente departamental.

Quizá resulte más presumible la presencia del ELN en cuanto a una potencial proximidad sobre escenarios de cultivo en el caso de la costa Atlántica del país. Primero, en el departamento de Bolívar, donde sus acciones armadas en 2001 se concentraron en los municipios de Morales y Santa Rosa del Sur – dos municipios próximos que en este año registraron una superficie objeto de cultivos ilícitos por valor de 1.500Ha-, y en María La Baja, un municipio con salida al mar, de alto valor estratégico por su carácter de corredor hacia los puertos de distribución del Golfo del Morrosquillo.

De igual manera, otro departamento costero, Magdalena, concentró 3 acciones armadas del ELN, las tres en torno al eje Santa Marta-Ciénaga, productor de 480Ha de coca en un radio de apenas 25 kilómetros y que, como puerto de mar, resulta igualmente fundamental en cuanto a los intereses de la guerrilla por participar del rédito de posicionar la producción de cultivos en los puertos de mar con salida, principalmente, a Centroamérica.

A pesar de lo descrito, los tres escenarios más importantes en la posible conexión entre activismo guerrillero del ELN y presencia de cultivos de coca son, por mucho, los casos de Antioquia, Arauca y Norte de Santander. Tres enclaves, como se verá, fundamentales para los intereses estratégicos y de supervivencia del ELN.

El departamento de Antioquia se va a aproximar al centenar de acciones armadas (94), focalizándose la presencia del ELN en un total de 27 municipios, si bien los referidos Cocorná (10) y San Luis (13) persistirán como los de mayor virulencia del ELN aunque, en esta ocasión, superados por el activismo recogido en la capital departamental, Medellín, como consecuencia de la intensidad de su frente urbano²¹⁴. Asimismo, debe destacarse el activismo del ELN, también en el oriente antioqueño, en torno al eje de 40 kilómetros del que hacen parte los municipios de El Bagre, Segovia y Remedios, y que en 2001 acumulará una extensión de cultivos ilícitos que superará las 1.000Ha toda vez que presentarán hasta 9 acciones armadas de la guerrilla. Como reconoce el personero antioqueño entrevistado:

“Aunque en nuestro municipio los cultivos de coca son irrelevantes, sí que es cierto que en la región hubo una conexión directa entre estos y la presencia de guerrillas. De hecho, algunas de nuestras veredas fueron zona de tránsito a tal efecto. Solo hay problemas limítrofes pero con otros municipios pues los principales cultivos están en Bajo Cauca, nordeste y Magdalena Medio. Aquí opera más el micro-tráfico pero aun así y aunque es cierto que ya no hay guerrilla en el municipio en sentido estricto, sí sabemos que transitan por veredas hacia otros municipios del suroriente antioqueño a fin de narcotraficar. Además, súmele problemas con Envigado o Urabeños, que si ya no necesitan del control territorial que en su tiempo

²¹⁴ Para entender las dinámicas locales que protagonizó el frente urbano del ELN así como las FARC y el paramilitarismo es imprescindible el trabajo de Blair, Grisales y Muñoz (2008).

tuvieron, sobre todo, las AUC, siguen muy presentes a modo de presión e influencia, y se alían con los guerrilleros por la coca. Controlan todo el procesamiento de la coca en esas regiones. Pero eso siempre estuvo igual. Ahora quieren alarmar con las cifras del incremento, de que si Antioquia ha superado en un 100% sus cultivos de coca en un año pero los que somos de aquí sabemos que allí ahora colaboran incluso los rencauchados del paramilitarismo que antes también fueron guerrilleros y que en todo caso, son criminales que a su vez se alían con los campesinos y temrinan por construir una compleja cadena de valor en torno a la droga”. (EP 14, agosto de 2015).

En Arauca se va a mantener el medio centenar de acciones armadas (54), y como en los años anteriores, en torno a los referidos municipios de Arauquita (14) y Saravena (20), si bien, hay que señalar un recrudecimiento significativo de la persistencia guerrillera sobre la localidad de Arauca (12), también ubicada sobre el importante pozo petrolero de Caño Limón y que, solo entre 2000 y 2001 llega a registrar hasta 47 de secuestros de la guerrilla.

Empero, hay que añadir que para el año 2001, más allá de la importancia extractiva del departamento, el problema de los cultivos ilícitos resultaba nuclear a tenor de la importante extensión de los cultivos ilícitos, los cuales ascienden a una superficie de 2.749 Ha. Es por ello que en todos los municipios del departamento, con excepción de Cravo Norte (0Ha), se registraron acciones del ELN e, igualmente, en todos los casos, con la excepción de Arauca (0Ha), se registró una importante presencia de cultivos ilícitos. Así sucede en Arauquita (1.685Ha.), Fotul (338Ha), Puerto Rondón (53Ha), Saravena (167Ha) o Tame (506Ha). Dicho de otro modo, de las 54 acciones armadas que llevó a cabo el ELN en este año, 42 se concentraron sobre estos municipios con presencia de cultivos, lo cual invita a pensar en la importancia de esta cuestión dentro del departamento de Arauca.

En esta misma región nororiental, Santander va a continuar siendo un departamento fundamental para la guerrilla, aunque las acciones armadas, en este caso, comienzan a decaer (23) hasta casi la mitad con respecto de los años anteriores. Ello, principalmente, por la pérdida de presencia guerrillera en Barrancabermeja (9), donde la presencia del ELN queda reducida a mínimos históricos, y con base en lógicas que distan mucho de intereses próximos al narcotráfico.

Sensu contrario va a resultar la dinámica en Norte de Santander, en la que el ELN va a recrudecer su presencia, bajo un total de 41 acciones guerrilleras, concentradas principalmente en la región del Catatumbo²¹⁵; región fronteriza con Venezuela, y que como ya se señaló, se trataba y trata de uno de los enclaves estratégicos más importantes dentro de la industria del narcotráfico colombiano²¹⁶.

²¹⁵ De las 41 acciones del ELN cabe destacar Tibú (5), San Calixto (3), Sardinata (2), Ocaña (1), El Carmen (4), El Tarra (1), Convención (1) y Ábrego (1), ODHDIH (2014).

²¹⁶ El importante nivel de cultivos ilícitos de esta región supuso que, rápidamente, el paramilitarismo proveniente del sur de Cesar, incursionará en Norte de Santander, a fin de disputar al ELN y también a las FARC un escenario que producía importantes beneficios a estos grupos armados. Baste recordar las

Al respecto, el ELN va a registrar presencia en 15 municipios bajo un total de 41 acciones armadas que se focalizan en torno a 10 municipios con cultivos ilícitos, y que son donde tienen lugar 31 de las acciones del ELN. Todos estos municipios, sobre el mencionado escenario del Catatumbo, terminaron por recoger una presencia de cultivos ilícitos por valor de 7.983Ha, y respecto de las que destacan los municipios de Tibú (7.468Ha) y El Tarra (487Ha). Además, y a pesar de no hacer parte de esta región, sí por proximidad, se destacaría el municipio de Sardinata (483Ha).

Por último, y lejos de conexiones directas con el cultivo ilícito, cabría mencionar al departamento de Casanare, donde las acciones armadas caen a 9, mientras que en Cesar, el activismo armado del ELN se intensifica, en disputa con el paramilitarismo, para alcanzar un total de 32 acciones a lo largo de 11 de los 25 municipios del departamento. Por el mismo motivo, en La Guajira, en disputa con el mismo Bloque Norte (BN) paramilitar, activo en Cesar, se incrementan las acciones del ELN de 1 a 10, si bien, más que por una tendencia expansiva de la guerrilla, por la resistencia al repliegue que va experimentando la guerrilla en parte del norte y del nororiente del país, y que se produce en términos similares, en departamentos como Magdalena, Sucre, el norte de Bolívar, y los departamentos de Cauca y Chocó, en la región del Pacífico colombiano²¹⁷.

declaraciones de El Iguano, en 2008, cuando sobre la planeación de la incursión paramilitar al Catatumbo reconoce que “Carlos Castaño nos citó a una reunión en la finca La 35, en el Urabá antioqueño. Me manifestó que había una zona a la que tenía planeado ingresar y que inclusive, tenía cuadrado hasta la entrada a El Catatumbo. A Cúcuta llegamos el 9 de mayo de 1999” (MOE, 2007m: 5).

²¹⁷ En el año 2000 se recogen 9 acciones del ELN, tanto en los departamentos de Cauca como de Chocó. Para el caso de Cauca, el activismo guerrillero se destaca en Popayán (3), y sus alrededores, como Puracé, Rosas, Caldonó y El Tambo, que acumulan otras 5 acciones. Como reconoce la Misión de Observación Electoral – MOE (2007a: 3), “El ELN tiene una presencia histórica en el departamento, a través del frente Manuel Vásquez Cataño que surgió en la Bota Caucana, en Almaguer, Rosas, San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa, Timbío y Florencia; del cual surgen a la vez el frente “Manuel Cárdenas Arbeláez” que opera en el norte del Valle y la regional urbana “Omaira Montoya Henao” con operaciones en Cali, Popayán y Pasto, el frente “Comuneros del Sur” en Nariño, y la estructura urbana “La Gaitana” en el Huila. El frente “Manuel Vásquez” debe su crecimiento a las extorsiones en las zonas petroleras del Huila y mineras de Nariño. También operan en el Cauca la columna móvil “Camilo Cienfuegos” creada en 1999, las columnas Lucho Quintero y Milton Hernández creadas en el 2003”.

Para el caso de Chocó, la referida MOE reconoce (2007b: 11), que “por su parte, el ELN ha tenido una presencia histórica en el departamento. En 1987 nacieron los frentes “Che Guevara” (sur-oriente de Antioquia en límites con Chocó) y “Hernán Jaramillo” (suroccidente del Chocó). Igualmente nació el frente “Benkos Biohó” en los primeros años de la década de 1990 que opera en el centro del departamento. Si en el pasado los referidos frentes “Hernán Jaramillo” y “Benkos Biohó” tuvieron importancia en límites entre Chocó, Risaralda y Valle, en la actualidad sobresale el “Ernesto Che Guevara” en los municipios de Istmina, Bagadó, Lloró, El Carmen y Tadó. El ELN, a diferencia de otros grupos armados, realizó en sus primeros años un fuerte trabajo político y de ahí su fortaleza inicial; sin embargo, como en el resto del país, la violencia paramilitar exterminó sus bases. También, en el norte del departamento se encuentra el frente “Manuel El Boche”, que tenía como centro principal de actuación el departamento de Antioquia, desde el 2002 comenzó a registrar acciones en el norte del Chocó”. De acuerdo al ODHDIH, el activismo guerrillero del ELN se focalizó en Lloró (3) y El Carmen de Atrato (6). En ambos casos, y para atender al proceso de expansión geográfico del ELN es recomendable el trabajo de Ortiz (2006).

De esta manera, traducido en cifras totales, en el año 2001, de la presencia del ELN en 131 municipios, menos de una cuarta parte, un 23.6%, van a tratarse de municipios con presencia de cultivos ilícitos. Asimismo, de las 317 acciones armadas registradas ese año, 112, esto es, el 35.3%, van a darse en municipios con presencia de cultivos ilícitos.

Rompiendo con la lógica expansiva descrita, y que tiene lugar hasta 2001, lo cual coincide a su vez con los mayores niveles de efectivos y capacidad de combate del ELN, es en el año 2002 que puede entenderse el inicio de una fase de repliegue que irá conformándose hasta el año 2005, de manera progresiva. Esto, en parte, por el mencionado proceso de expansión y consolidación paramilitar en el norte del país; en parte, por el fortalecimiento de la Fuerza Armada colombiana y el recrudecimiento de los combates militares; primero, roto el proceso de negociación del Caguán bajo la presidencia de Andrés Pastrana; y después, a tenor de la llegada de Álvaro Uribe, con la puesta en marcha de una nueva forma de concebir el conflicto armado colombiano y su superación.

Para el año 2002, la presencia activa del ELN se reduce notablemente, apenas a 65 municipios; es decir, la mitad respecto del año anterior (131). Las acciones armadas caen un 51.4%, hasta las 154, especialmente, como consecuencia de un proceso paulatino de desmantelamiento de las estructuras urbanas de una guerrilla que, por las circunstancias, va a replegarse hacia el nororiente del país, especialmente en torno a los departamentos de Arauca (17), Cesar (14), Norte de Santander (29) y Santander (11)²¹⁸, si bien Antioquia se mantiene como el departamento con mayor activismo de este grupo.

Lo cierto es que la presencia del ELN en Antioquia en este año 2002 va a caer a la mitad, con 50 acciones militares a lo largo de 17 municipios. San Luis (11) y Cocorná (7) continúan siendo los municipios del oriente antioqueño con mayor intensidad guerrillera del ELN, junto con otros como Granada (3), Peñol (3) o San Rafael (3) y, como en años anteriores, sobre localidades del nordeste del departamento²¹⁹. Esto no afecta al grueso de la presencia del ELN en el eje Segovia (222Ha) – Remedios (534Ha), donde van a protagonizar un total 5 acciones armadas. Además, si bien no va a registrar presencia en el municipio de El Bagre²²⁰,

²¹⁸Recuérdese que, tal y como reconoce Echandía (2013:11), “la fuerte arremetida de las autodefensas profundiza la crisis que el ELN venía enfrentando debido a los problemas de división interna y la desarticulación de las estructuras urbanas de la Costa y el Valle del Cauca, así como de los frentes “Héroes de las Bananeras” y “Astolfo González”, con presencia en Magdalena y Urabá”. Respecto a este momento, coincide en el tiempo la consolidación del Bloque Central Bolívar y su expansión por Risaralda y Caldas. Una expansión que se continúa a partir del año 2002, cuando se separa de las AUC y cobra plena autonomía, erigiéndose como una de las facciones más poderosas del paramilitarismo. Véase, al respecto: <https://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/2939-los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar> Consultado el 16 de julio de 2015.

²¹⁹Así, sería, por ejemplo, con los municipios de Segovia (3) y Remedios (2), ODHDIH (2014).

²²⁰ El Bagre, tradicionalmente, ha sido uno de los enclaves productores de coca más importantes del departamento de Antioquia, si bien, con escasa presencia del ELN. En un registro acumulado entre 2001 y 2012, este municipio presentaría una superficie cultivada por extensión de 7.942Ha (UNODC, 2014).

la guerrilla se va a mantener activa en las inmediaciones del oriente antioqueño, principalmente, en los municipios de Amalfi (110Ha) y Zaragoza (399Ha).

En lo que respecta a los departamentos de Arauca y Norte de Santander, como en el año anterior, cabe pensar en una relación más próxima entre el activismo guerrillero y la presencia de cultivos ilícitos. Así, en el primero de los departamentos, de las 17 acciones armadas registradas en ese año, la mayor parte se van a concentrar en torno al eje petrolero de Caño Limón, en Saravena (10), sin que ello suponga que el ELN renuncie a su presencia en los municipios de Araucita (1.647Ha), Fotul (165Ha) y Tame (314Ha), y que concentran la mayoría de las 2.214Ha de cultivos ilícitos que registró el departamento en el año 2002.

De igual manera, en Norte de Santander, a pesar de la intensificación de las acciones del ELN sobre la capital departamental, Cúcuta (5), se mantiene la presencia en los emplazamientos productores más importantes del Catatumbo. Ello, principalmente, en torno a Tibú (6.340Ha) con 5 acciones armadas y El Tarra (524Ha) con 2 acciones armadas, y alrededor de otros municipios claves en la producción de coca como son Sardinata (793Ha), colindante a esta región. Sea como fuere, la importancia para el ELN de este departamento puede traducirse en el hecho de que de los 11 municipios con presencia de la guerrilla, en 7 de ellos se evidencian presencia de cultivos ilícitos.

Mientras, con una tendencia de pérdida de influencia territorial cada vez mayor, en Santander y en Cesar, dos departamentos sin presencia entonces de cultivos ilícitos, las acciones guerrilleras caen más de un cincuenta por ciento²²¹.

En el resto de departamentos, la presencia del ELN en relación a escenarios propios de cultivos ilícitos pasa a ser testimonial, de la misma forma que los es su activismo armado. Es decir, en los departamentos de Caldas (1), Nariño (2), Risaralda (2), Sucre (1) y Tolima (4) se terminan computando un total de 35 acciones armadas que terminan por afectar a tan solo 19 municipios que, asimismo, no registran presencia alguna de cultivos. De hecho, termina por desaparecer todo atisbo de presencia del ELN, en comparación con 2001, en Boyacá, Cauca y Valle del Cauca²²².

Tampoco se registra presencia del ELN en el departamento costero de Magdalena, fuertemente afectado por el paramilitarismo²²³ si bien, sí que se recoge presencia del grupo

²²¹ Respecto a esta consideración, se discrepa con el trabajo de MOE (2007c), que considera que frente al impacto del paramilitarismo, el ELN se mantuvo sobre los enclaves de retaguardia en el departamento. Si bien es cierto que los frentes “Camilo Torres Restrepo” – desde la década de los setenta-, el frente “José Manuel Martínez Quiroz” – ya en la segunda mitad de los ochenta-, y el frente “6 de Diciembre” – en los años noventa-, extienden la presencia del ELN por todo el departamento, igualmente cierto es que por medio de una mayor fuerza pública y un ingente impacto del Bloque Norte, la guerrilla pasa de 73 acciones entre 2000 y 2002, a 8 acciones entre 2003 y 2012 (ODHDIH, 2014).

²²² Aquí se hace patente el fracaso del objetivo por consolidar la estrategia ABC, esto es, Arauca, Boyacá y Casanare (Vicepresidencia de la República, 2002).

²²³ Como se verá, con posterioridad, el departamento del Magdalena será clave en la consolidación armada y territorial del paramilitarismo del Bloque Norte. Recuértese que solo entre 2000 y 2006, en los departamentos

armado en Dibulla, en el departamento de La Guajira. Ciudad la cual se trata de la más próxima al referido departamento de Magdalena y donde se concentran hasta 349Ha de cultivos ilícitos de las 354Ha que registró en el año 2002. Asimismo, también se evidencia una mayor debilidad del ELN en el departamento restante de la costa Atlántica, Bolívar, donde apenas se recogen 2 acciones armadas que tienen lugar en el municipio de Morales (64Ha), con escasa presencia de cultivos ilícitos.

Finalmente, en esta presentación de las transformaciones cartográficas de la presencia del ELN, cabría destacar que, por primera vez, el departamento de Chocó se presenta como un renovado enclave de activismo del ELN, donde las acciones armadas ascienden hasta 11, y más específicamente, en torno al municipio de Lloró (7), al pie de la cordillera occidental andina y del río Atrato, y a 42 kilómetros de la capital departamental, Quibdó, donde se erige como uno de los centros de minería ilegal más importantes del país, en torno a oro y platino²²⁴.

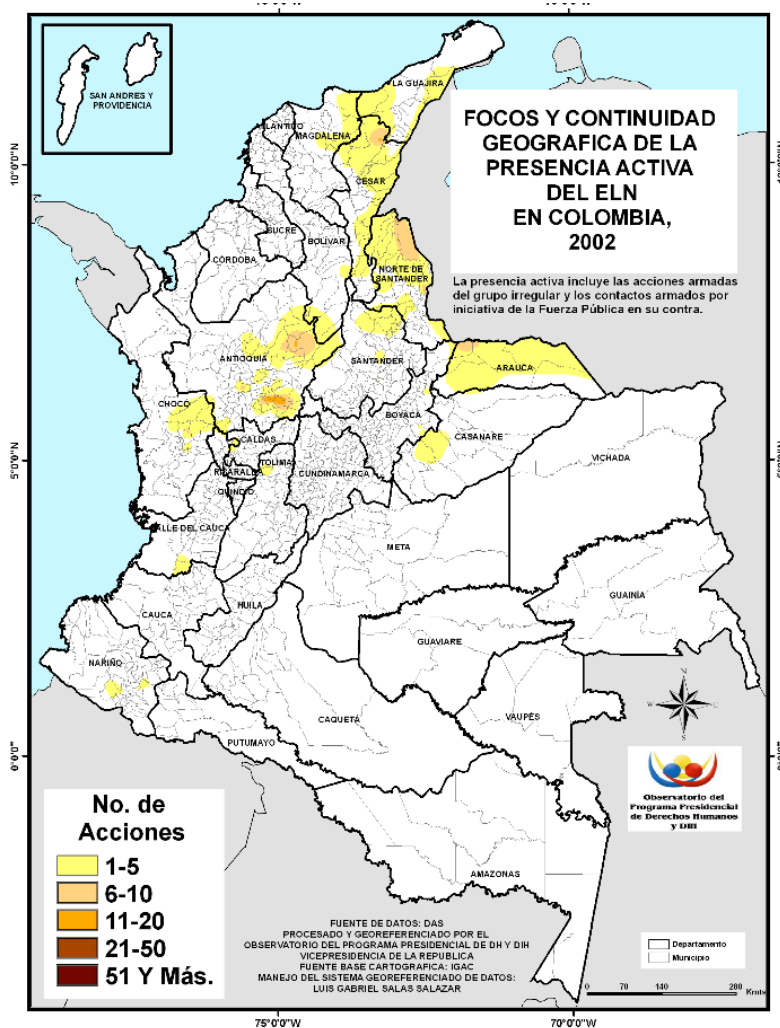
De este modo, y traducido en cifras, de las 154 acciones armadas que va a protagonizar el ELN en 2002, un porcentaje muy similar al de 2001, un 33.7%, se van a ubicar en emplazamientos con cultivos ilícitos. Es decir, 52 acciones van a tener lugar en 19 municipios con cultivos ilícitos del total de 65 donde se va comprobar presencia activa del grupo armado.

De acuerdo con la tendencia decreciente referida, el año 2003 continúa siendo un año de repliegue en la intensidad armada del ELN. Se recogen 114 acciones armadas que se concentran a lo largo de 54 municipios. No obstante, por primera vez, la presencia de la guerrilla en municipios con cultivos ilícitos supera el umbral del 40% (45.8%). De los 48 municipios donde se encuentra presencia activa del ELN, en 22 de ellos va a haber presencia notable de cultivos ilícitos de la misma manera que, de un total de 114 acciones armadas, 52 se van a dar en municipios con este tipo de característica, lo que representa, igualmente, un porcentaje sobre el total del 45.8%.

de Magdalena, Cesar, Atlántico y La Guajira se registraron medio millar de masacres. Véase: <http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/los-paramilitares-cometieron-cerca-de-500-masacres-en-cuatro-departamentos-de-la-costa-atlantica/20091027/nota/900830.aspx> Consultado el 22 de julio de 2015.

²²⁴ En Chocó, el ELN inició su presencia hacia el año 1987, por medio del frente “Che Guevara”, activo en la frontera con el suroriente antioqueño así como el frente “Hernán Jaramillo”, con presencia en el suroccidente departamental. Ya hacia inicios de los noventa se crea el combativo frente “Benkos Biohó” activo en el centro del departamento si bien, en la década del 2000, el más activo va a ser el Frente Che Guevara, especialmente en Istmina, Bagadó, El Carmen, Tadó y Lloró (MOE, 2007b). Como excelente análisis del extractivismo minero, y por extensión, de la relación del ELN con el mismo en el departamento de Chocó se destaca el trabajo de Defensoría del Pueblo (2014).

Mapa 24: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2002



Fuente: ODHDIH (2014)

Si la costa Atlántica, para el año 2003, ya había perdido todo atisbo de influencia de parte del ELN, tal circunstancia va a pasar a extenderse a otros enclaves de mayor importancia, sobre todo, en lo que afecta a los departamentos de Antioquia y Santander²²⁵. En lo que respecta a Antioquia, se produce la desaparición del que hasta entonces era el frente

²²⁵ El frente “Carlos Alirio Buitrago” surgió en 1978, en Puerto Triunfo, para disputar el Magdalena Medio. Se ha tratado de uno de los frentes más activos de la guerrilla, permeando sobre sindicatos oficiales, universidades y juntas de acción comunal de Antioquia. Por su particular historia, ha sido de los frentes más próximos a la teología de la liberación, y entre sus principales acciones se destaca el secuestro, el lavado de activos y el tráfico de drogas. Una referencia recurrida, si bien un tanto sesgada, es la del coronel Villamarín (2014)

guerrillero más operativo en la región, el CAB, por lo cual “Byron” responsabiliza a las FARC:

“Con las FARC hubo momentos muy irregulares. Hubo momentos muy buenos hasta que las FARC llevan a cabo su salto militar. Desde entonces cambian la relación con nosotros. Yo fui capturado en 2005, y en ese entonces con las FARC ya traíamos importantes problemas y una relación en declive. Tuvieron hacia nosotros una actitud desacertada. Ellos nos querían subordinar. Echó plomo a todas las guerrillas de su alrededor y nosotros en según qué casos no fuimos excepción. Entendíamos a las masas de manera muy diferente. Nosotros, por ejemplo, no reclutamos. Es libre entrada y salida. Eso fue un problema. Fue muy duro. En principio teníamos mandato del COCE de no darnos plomo. Solo defendernos en caso de ataque. Cuando eran débiles nos pedían ayuda. Al estar al mismo nivel nos coordinamos. Cuando fueron más fuertes, nos dieron plomo y ayudaron a sacarnos del mapa”. (EP 10, junio de 2015).

Esta afirmación sería respaldada, por ejemplo, por el testimonio de “Karina”, cuando señala que:

“El problema de esa guerra (con el ELN) estaba en los mandos medios y jefes de zona, que disputaban recursos, área y finanzas, desobedeciendo lo que les decía el COCE o el Secretariado. Y es una lástima porque nosotros usamos por un tiempo, mientras éramos más débiles, al ELN. Ellos nos enseñaron tácticas de manejo de explosivos que nosotros desconocíamos. Incluso, al oriente antioqueño nosotros enviábamos estudiantes. Particularmente, yo nunca tuve confrontaciones armadas con el ELN. Sí, y muchas, con el EPL. Sin embargo, nosotros teníamos órdenes del jefe del bloque, “Marcos”, de dar plomo al ELN en el oriente antioqueño, siempre por áreas y finanzas. Yo tuve buena relación con ellos hasta el punto de que me acusaban hacia dentro de las FARC de ser del ELN. Para mí, el enemigo era el Estado y finalmente era lógico que llegado el caso de hostigamientos, el ELN se defendiera”. (EP 7, mayo de 2015).

Asimismo, en Santander, las acciones guerrilleras decaen a mínimos históricos (7), en buena medida, por la paulatina y creciente pérdida de influencia sobre Barrancabermeja, y por la desaparición del importante Frente Urbano Resistencia Yariquíes²²⁶, respecto del cual el paramilitarismo, además de la propia PSD van a tener una responsabilidad nuclear. Baste recordar las significativas palabras del líder paramilitar “Don Berna”, quien llegó a asegurar que, por aquel entonces, cerca 2.000 combatientes del ELN abandonaron la guerrilla para engrosar las filas de las AUC (Aponte, 2011: 46).

Lo cierto es que, sobre todo en Antioquia y Santander, se va a apreciar una especial presencia de la PSD, la cual se va a acompañar de una significativa reducción del activismo del ELN,

²²⁶ El Frente Urbano “Resistencia Yariquíes” se convirtió en una de las milicias con mejor organización, mayor número de combatientes y más poderoso de la región del Magdalena Medio, al tener un especial arraigo en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Es interesante, sobre el impacto de la violencia paramilitar, además de los trabajos con anterioridad referidos, el de ACNUR (2004).

sobre todo, en lo que se refiere a secuestro y extorsión²²⁷. Ello se hace especialmente visible en el caso de la extorsión y secuestro que afectaba a los ganaderos del oriente y suroriente antioqueño, y a la elite petrolera afincada en Barrancabermeja. Además, habría que añadir la desventaja competitiva que para el ELN va a suponer el rezago, respecto de las FARC y las AUC, en lo que afecta a las cadenas productivas y de distribución, especialmente en el caso del paramilitarismo. En otras palabras, tal y como señala Ortiz (2006: 331), ésta sería la evidencia por la que “la vinculación al tráfico de narcóticos iniciada por las FARC demostró constituir una fuente mayor y más estable de recursos que la práctica del secuestro y la extorsión a escala industrial practicada por el ELN”.

Sea como fuere, el ELN mantiene su presencia en los enclaves del nordeste, en Arauca (27) – en torno a Arauquita (10) y Saravena (10)-, en Casanare (15), alrededor de las ciudades de Aguazul (7) y de la capital departamental, Yopal (7), y en Norte de Santander (10), en la región del Catatumbo.

Respecto de Arauca, sin embargo, comienza a hacerse evidente una importante reducción en la extensión de cultivos ilícitos. De hecho, de las 27 acciones armadas llevadas a cabo en 2003, 24 se van a concentrar en municipios con una presencia de cultivos ilícitos, no obstante, muy venida a menos. Así lo evidencian las 96Ha de Tame, donde acontecen 4 acciones armadas, las 77Ha en Saravena, y las 294Ha de Arauquita, donde las acciones guerrilleras se quintuplican, en buena medida, explicable por la disputa que este municipio va a tener el grupo guerrillero tanto con las FARC como con el paramilitarismo²²⁸.

Una competencia cruenta, además, por la fuerte mitigación del impacto de la erradicación de cultivos ilícitos que reduce en un 75.6% el total de la superficie cultivada, la cual va a pasar de las 2.214Ha en 2002, a las 539Ha en 2003. En buena medida, y aunque el cultivo se recupera nuevamente, hasta 2008, en el caso particular de Arauca concurre un especial interés del ELN tanto en la industria extractiva como en el contrabando. Esto era aceptado por “Felipe Torres”, quien afirma que:

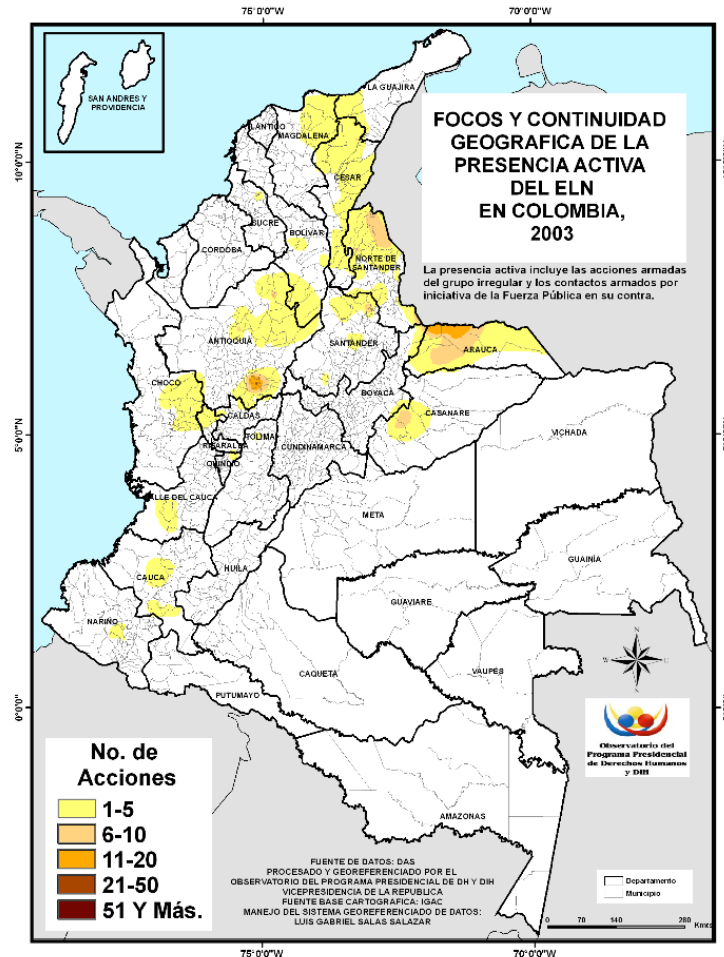
“En otro contexto, como en Arauca, el ELN siempre fue hegemónico. Impidió la llegada de los paramilitares, y le dio plomo a los Frentes 28, 10 y 45 de las FARC, evitando que la presencia de cultivos fuese dominantes. Esto se dio por la fuerza del frente Domingo Laín y su control sobre la frontera. Esto es muy importante porque de los 5.000 millones de dólares que pasan por la frontera colombiana a modo de contrabando, en los departamentos de Arauca, La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Vichada, una tercera parte, pasa por Arauca y la mitad de su control, lo tiene el ELN. A este ingreso hay que añadir el control sobre la construcción de obras, incluso civiles, en las que para su concesión la guerrilla se beneficia

²²⁷ Para el año 2003, según la Revista Criminalidad (2007: 532 y ss.) el ELN cometió 326 secuestros, es decir, menos de la mitad de los 777 perpetrados en 2002. En Santander tuvieron lugar 24 secuestros y en Antioquia 64, cifras nada comparables con el año anterior, cuando tuvieron lugar 37 y 247 secuestros, respectivamente.

²²⁸ En el caso particular del ELN, a través del activismo del poderoso frente “Domingo Laín Sanz”.

gravando hasta un 10% del valor de la obra. Es lo que vulgarmente se conoce como el “CVY”, es decir – y señala entre risas- el “cómo voy yo”. (EP 9, mayo de 2015).

Mapa 25: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2003



Fuente: ODHDIH (2014)

El segundo departamento clave, y quizá el primero por afección al tema de los cultivos de coca sería, nuevamente, Norte de Santander. En los seis municipios con presencia del ELN se van a registrar cultivos ilícitos. No obstante, y a pesar de que este departamento va a experimentar otra fuerte disminución de hectáreas objeto de cultivo, al pasar de las 8.041Ha a las 4.471Ha, el ELN va a tener especial presencia en Tibú (2.398Ha), a través de 3 acciones armadas y en otros municipios que forman el Catatumbo – El Carmen (102Ha), El Tarra (544Ha), Hacarí (15Ha) y Teorama (393Ha), donde el ELN va a protagonizar otras 5 acciones armadas.

Muy debilitados por la acción del paramilitarismo a lo largo del Magdalena Medio, tanto por las AUC como por el Bloque Central Bolívar -BcB²²⁹-, la acción armada del ELN en Antioquia se va a ver muy afectada, con apenas 15 acciones armadas y una presencia en 8 municipios del departamento, todos, parte de la región norte y nortoriental del mismo, y en torno al eje Anorí (614ha) - Remedios (331Ha) – Segovia (58Ha) – Valdivia (157Ha)²³⁰.

Por otro lado, en la costa Atlántica se va a recoger presencia armada del ELN en los departamentos de La Guajira, en torno a Dibulla (275Ha), donde se tendrá constancia de dos acciones armadas; y en el departamento de Bolívar, en el municipio de San Pablo (1.105Ha), ubicado en la serranía de Santo Domingo, en el sur del departamento, y haciendo frontera con el mencionado oriente antioqueño.

Del lado del Pacífico, cabe destacar que el ELN va a mostrar un importante incremento de las acciones armadas en Nariño (15), si bien con la excepción de una acción armada en Tumaco (5.234Ha), el grueso de sus acciones (7) va a darse en la cordillera central nariñense, en torno a los municipios de La Llanada (4) y Samaniego (5)²³¹. Igualmente, las acciones (3) en Cauca aparecen dispersas en Cajibío y San Sebastián, sin presencia de cultivos ilícitos, y en El Tambo, donde la superficie cultivada, 183Ha, nada tendrá que ver con las casi 1.500Ha de dos años atrás (UNODC, 2014).

Finalmente, en Boyacá (2), Casanare (8), Cesar (2), Santander (7) Sucre (1) y Chocó (8) se registrarán un total de 28 acciones armadas sobre 16 municipios que no presentarán presencia alguna de cultivos. No obstante, en este último departamento cabría destacar la intensificación guerrillera, sobre todo, en torno al municipio de Bagadó (4), de gran importancia por su alto valor extractivo tanto aurífero como de platino.

Durante los años 2004 y 2005, prácticamente se calcan los mapas de la ubicación del ELN, tanto en el volumen de acciones armadas como en cuanto a su creciente proximidad con los cultivos ilícitos. Tal y como se señalase para 2003, durante los años 2004 y 2005, la presencia del ELN en relación a municipios con presencia de cultivos ilícitos se mantiene en niveles que superan el 40%.

En el año 2004 se computan un total de 41 municipios con presencia de la guerrilla para 17 municipios con presencia de cultivos (41.4%), mientras que en el año 2005 son 39 municipios los que tienen presencia del ELN de los cuales 17, esto es, un 43.5%, presentan concurrencia de cultivos ilícitos. Igualmente, una idéntica proporción se encontraría en el indicador que

²²⁹ Recuérdese que AUC y Bloque Central Bolívar, como estructuras paramilitares “diferentes” se separan en 2002, aunque ello se abordará con detenimiento en el capítulo posterior

²³⁰ Un trabajo interesante sobre estos municipios, concretamente, y partiendo de la hipótesis de que sus dinámicas regionales son las mismas que las de la región del Bajo Cauca sería el de la Fundación Ideas para la Paz y el de García y Aramburo (2012).

²³¹ Los municipios de La Llanada y Samaniego, además, han sido y son dos centros nucleares de la extracción aurífera del departamento. De hecho, la altísima presencia de grupos armados, también, por este factor, se puede encontrar en el trabajo de Corporación Autónoma Regional de Nariño (2007). Este trabajo comprende tanto los municipios de La Llanada y Samaniego, como Cumbitara, Mallama, Los Andes y Santa Cruz.

representan las acciones armadas, de manera tal que si en 2004 se computaban 31 acciones armadas en cultivos ilícitos para un total de 76 (40.7%); en 2005 la proporción aumentaba a un 46% al darse 23 acciones armadas en municipios con cultivos ilícitos sobre un total de 50.

En ambos casos, la representación cartográfica de la presencia del ELN se mantiene estable. En primer lugar, Arauca va a seguir siendo un bastión clave para la guerrilla especialmente porque, tras la drástica reducción sobre la superficie de cultivos en 2003, en 2004 y 2005 nuevamente se va a experimentar un crecimiento sustancial de la misma, llegando a las 1.552Ha en 2004 y las 1.883Ha en 2005. Así, las lógicas territoriales se continúan inalteradas, aun cuando entre 2004 y 2005 se experimenta una fuerte reducción en la capacidad de combate y fuerza armada de la guerrilla. Ello, porque de las 13 acciones armadas que protagoniza el ELN en 2004, 11 se van a concentrar en municipios con cultivos ilícitos. Ello, especialmente en Arauquita (6) que registrará 939Ha y en Tame (2), que presentará una superficie de 253Ha de cultivos de coca. Sin embargo, el accionar armado del ELN, dentro de la dinámica de repliegue explicitada en el epígrafe anterior, va a hacer que en 2005 se reduzcan las acciones armadas a 5, aunque, en todo momento, manteniendo la presencia tanto en la referida localidad de Arauquita (1.165Ha) como en Saravena - que para este año presentará unos cultivos ilícitos por extensión de 184Ha.

Igual lógica va a acontecer en Norte de Santander. En 2004, los 5 municipios del departamento donde va a haber presencia del ELN van a ser municipios con elevada presencia de cultivos ilícitos. Empero, del total de 10 acciones militares, 4 se van a dar en Tibú (1.266Ha) y 5 en el resto de municipios de la región del Catatumbo (435Ha), siendo la acción restante ubicada en la capital departamental, Cúcuta. Sin embargo, como sucediera en Arauca, en 2005, dentro de la dinámica de repliegue, las acciones armadas van a caer a 6; la mayoría de ellas en municipios con presencia de cultivos ilícitos a pesar que, por primera vez en lo que va de década, el ELN no registrará presencia en Tibú, para sí hacerlo, en cambio, en los municipios de El Tarra, San Calixto o Sardinata, los cuales superan las 300Ha.

A medida que la debilidad del ELN y su repliegue geográfico-militar va resultando una evidencia, igualmente se manifiesta una mayor proximidad en su ubicación hacia enclaves con presencia de cultivos ilícitos. Aparte de los mencionados departamentos de Arauca y Norte de Santander, el noroeste se consolida como un enclave con especial activismo del ELN, pues se adicionan otras 16 acciones guerrilleras en Boyacá²³² - que pasa de 2 acciones guerrilleras en 2003 a 12 acciones en 2004-, y en Casanare (5). Dicho de otro modo, la región nororiental estaría concentrando en estos años casi el 60 por ciento de las acciones guerrilleras, aunque, también es cierto, para estos dos últimos casos, el activismo guerrillero

²³²Muy seguramente, esas acciones son atribuibles al Frente de Guerra Oriental del ELN, activo en Arauca y el oriente de Casanare. Por la proximidad territorial con Boyacá, he ahí la intensificación y el incremento sustancial en cuanto a los indicadores de violencia atribuidos. Sea como fuere, se puede consultar el trabajo de ACNUR (2006).

parecería algo más alejado de conexiones con la presencia de cultivos ilícitos²³³. El resto del grueso de acciones del ELN entre 2004 y 2005 se completarían con Antioquia (12), con una presencia incomparable con los registros de violencia de tres años atrás, y en Chocó (12), donde la presencia del ELN se mantiene constante, con una presencia efectiva en seis municipios de los cuales en cuatro – Istmina, Nuquí, Riosucio y Tadó-, se va evidenciar presencia tanto de cultivos ilícitos como el impacto de una fuerte minería ilegal²³⁴.

De un lado, en Antioquia, para el año 2004, la presencia del ELN se mantiene en torno al centro y oriente antioqueño, con un total de 13 acciones que tienen como columna vertebral a los municipios de El Bagre (546Ha), Valdivia (157Ha), Segovia (58Ha) y San Luis (18Ha). Empero, al año siguiente, su presencia comienza a ser testimonial, a modo de reducto, en los municipios de Yondó (88Ha), Remedios (202Ha) y San Francisco (27Ha), como consecuencia del accionar paramilitar, la disputa de los corredores estratégicos de un departamento en alza en lo que a incremento de la superficie de cultivos ilícitos se refiere, y por el impacto de la referida PSD. De hecho, desde 2005, el ELN prácticamente desaparecerá activamente del departamento de Antioquia, salvo pequeños reductos y tendencias crecientes que no llegarán sino hasta 2012.

Diferente tesitura sucede con Chocó, donde el departamento sigue consolidándose como emplazamiento estratégico en la lógica de supervivencia y resistencia pasiva de la guerrilla²³⁵. Tanto es así, que pese a que hasta 2003 su presencia era prácticamente inexistente, desde este año y también en 2004 y en 2005, empieza a identificarse una proximidad entre la presencia geográfica del ELN y la presencia de emplazamientos con cultivos ilícitos. Así, de este modo, en 2004, de las 11 acciones armadas, 5 se van a dar en emplazamientos con presencia de cultivos ilícitos – que en muchos casos se acompañan de presencia de minería de oro y platino ilegal, y otras 5 en torno a la capital del departamento, Quibdó.

Chocó, a pesar de que en 2004 va a presentar un reporte total de apenas 323Ha, para el año siguiente va a ascender a la nada desdeñable cifra de 1.025Ha, sobre las cuales, el ELN va a empezar a presentar presencia armada en torno a los municipios con presencia de cultivos ilícitos de Alto Baudó (104Ha), Medio Baudó (68Ha) y Sipí (150Ha); y a partir de la minería ilícita que se concentra en los municipios de Bagadó, El Carmen de Atrato, Lloró. De un total

²³³ La presencia del ELN en Casanare estuvo vinculada a los intereses respecto del petróleo si bien, el frente “José David Suárez”, que es un desdoblamiento del frente “Domingo Laín Sanz” de Arauca, nunca pudo obtener las cuotas por acciones extorsivas que la guerrilla obtuvo en aquel departamento. Asimismo, en Casanare, dentro de la región oriental del país, va a ser donde se evidencie el mayor impacto del paramilitarismo (MOE 2007d).

²³⁴ Entre 2004 y 2005, el activismo del ELN en Chocó se condensa, como ya se ha señalado, en torno al frente “Benkos Biohó” y el frente “Manuel Hernández el Boche”

²³⁵ La confrontación que el ELN, y también las FARC, mantienen con el bloque de las AUC, “Héroes de Chocó” se resume perfectamente en el siguiente reporte de Verdad Abierta. Véase: <http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/1211-bloque-pacifico-frente-heroes-del-choco> Consultado el 25 de julio de 2015.

de 13 acciones armadas que se computan en el año 2005 en 10 municipios del departamento, 9 acciones y 6 municipios van a corresponderse con la presencia de grupos armados y su potencial conexión con la presencia de cultivos ilícitos.

Finalmente, la dinámica decreciente de la guerrilla en cuanto a su activismo sobre enclaves sin presencia de cultivos se va a hacer patente en departamentos como Risaralda (1), Cesar (4) y Nariño (5²³⁶). Estos cinco departamentos van a recoger para los años 2004 y 2005 un total de 34 acciones armadas sin que tengan lugar en municipios con presencia de cultivos ilícitos. Igualmente, es decreciente la presencia de la guerrilla en sur de Bolívar, en 2004 presente con una única acción armada, en torno a Montecristo (287Ha); y en 2005, con 2 acciones armadas, en torno a San Pablo (638Ha).

Por su parte, en estos mismos dos años, en Cauca, la presencia del ELN igualmente queda circunscrita a 9 acciones armadas si bien mayormente gravitarán en torno al municipio de El Tambo²³⁷, que para ese año vuelve a experimentar un crecimiento importante de una superficie de cultivos ilícitos que asciende hasta las 629Ha.

El lapso de tiempo que transcurre entre los años 2006 y 2008 abre una nueva etapa en la historia armada del ELN. Ello, porque tras el sistemático decrecimiento de su activismo armado durante los años anteriores, en este nuevo momento, prácticamente la estrategia de la guerrilla se transforma en una especie de *invisibilidad* armada orientada a la resistencia pasiva (Ávila y Celis, 2008).

Una vez desmovilizado el paramilitarismo, al amparo de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, y evidente el incremento de tropas militares y de tecnología, unido a unas nuevas actitudes de combate, una redistribución de poder más eficiente y un importante cambio en las prácticas educativas militares (Borrero, 2006), al ELN no le queda otra opción que una estrategia de *aggiornamento* territorial. Un proceso que bien va a ser compartido por las dos guerrillas aunque para el caso del ELN, notablemente significativo.

Solo entre 2006 y 2008 el ELN apenas protagoniza 60 acciones guerrilleras a la vez que, en el marco de la PSD, va a ser objeto de hasta 826 acciones de parte de la Fuerza Pública. Dicho de otro modo, la coyuntura por la que transcurre el ELN a partir de 2006 recuerda mucho a la llevada a cabo durante la década de los setenta. Más que nunca, se evitan los escenarios de confrontación, dada la disparidad de fuerzas, pero incluso se evita la guerra de guerrillas – *hit and run*–, con la salvedad de los reductos de Arauca y Norte de Santander, y en menor medida, Cauca y Chocó.

²³⁶En Nariño, los años 2004 y 2005 son de redefinición de las dinámicas regionales, especialmente en Nariño que, con base en la aparición de las primeras Bacrim, como Los Rastrojos, se empieza a replantear el activismo conjunto con las FARC (MOE, 2007i)

²³⁷El municipio de El Tambo recogerá 1 acción armada en 2004, de acuerdo a una superficie de cultivos ilícitos que asciende a las 203Ha. Por su parte, en 2005 las acciones armadas del ELN en el municipio serán 3, toda vez que la superficie de cultivos ilícitos asciende a 629Ha (UNODC, 2014).

De acuerdo al proceso descrito, es que se entiende que el activismo guerrillero del ELN sea de tan solo 18 acciones armadas en 15 municipios en 2006; 23 acciones armadas en 16 municipios para el año 2007, y finalmente, en 2008, de 19 acciones armadas en 13 municipios. Nada que ver con el volumen de acciones guerrilleras de una década atrás aunque continúa siendo totalmente relevante la proximidad entre la cartografía del activismo del ELN y la cartografía de los cultivos ilícitos en Colombia.

Como se presentaba al inicio de este capítulo, es importante recoger la reducción de los actos de secuestro y extorsión. De hecho, según los datos de la Revista Criminalidad (2007: 532 y ss.), entre 2005 y 2007 el ELN protagoniza un total de 127 secuestros, de modo tal que para encontrar los mismos niveles en el pasado, hay que retrotraerse hasta el año 1987. Dicho de otra manera, los secuestros acumulados entre 2006 y 2008 distan mucho de los 326 secuestros perpetrados en 2003, los 777 secuestros de 2002 o los 917 acontecidos en 2001.

Igual sucedería con la extorsión, pues entre 2006 y 2008 se contabilizan únicamente 29 acciones extorsivas cuando, por ejemplo, en 2006 se registraron un total de 38 casos que superarían ampliamente los acumulados durante estos tres años en mención (Revista Criminalidad, 2008: 84).

Es por esto que, de acuerdo con esta tendencia, resulta factible aceptar la premisa de una mayor dependencia del ELN en relación a los cultivos ilícitos para su supervivencia y aun cuando, en la década de los ochenta sobre todo, cabe recordar, su posición era más bien renuente y escéptica al respecto. Empero, en una lógica de supervivencia como la descrita, erigida en evitar combates directos con las Fuerzas Militares y reducir el número de acciones unilaterales a lo estrictamente necesario para garantizar la supervivencia del grupo, es cuando parece que se hace necesaria una mayor proximidad con el narcotráfico. Un narcotráfico que, igual que las guerrillas, y especialmente a razón del Plan Colombia, obtiene ventajas comparativos en los enclaves fronterizos y de mayor dificultad geográfica (Echandía y Béchara, 2006; Cabrera, 2009; Echandía, Béchara y Cabrera, 2010)²³⁸.

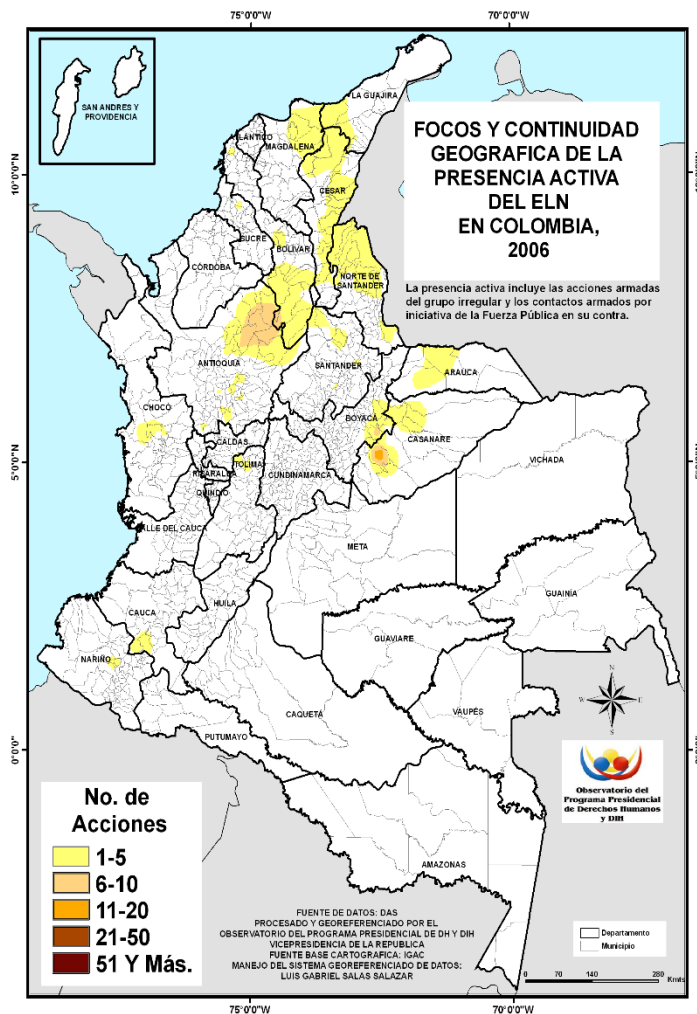
Por ejemplo, tal y como señala Vásquez (2009), esta hipótesis se podría traducir en la presencia creciente que empieza a tener el ELN en el departamento de Cauca, principalmente en torno a los municipios de El Tambo y Patía, donde todo conduce a una integración de la guerrilla en la cadena productiva y de comercialización de las drogas ilícitas²³⁹. Lo mismo pasaría a suceder en los municipios de Anorí, o El Peñón, en el departamento de Santander, donde se recogerían indicios de que el ELN, en colaboración con algunas Bacrim, atentó contra los beneficiarios del programa gubernamental de “Familias Guardabosques” que se negaban a hacer parte del circuito de cultivo de coca.

²³⁸ Debe destacarse un trabajo que aporta importantes notas sobre las ventajas transfronterizas, en general, para los grupos criminales, Salehyan (2007).

²³⁹ Véase: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5087-la-larga-y-cruel-lucha-por-la-tierra-en-el-cauca> Consultado el 23 de julio de 2015.

También debería mencionarse la región del Catatumbo, donde se experimentaría en estos años una intensificación de la presencia de un ELN que, a tenor de varios testimonios, habría participado como protector con los campesinos que trabajan en el procesamiento de base de coca frente a las presiones de los grupos pos-paramilitares activos en la región, en este caso los “Águilas Negras” (Aponte, 2011).

Mapa 26: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2006



Fuente: ODHDIH (2014)

Mapa 27: Densidad de cultivos en Colombia en 2006



Fuente: UNODC (2007:10)

De acuerdo a un mayor detalle respecto de las dinámicas territoriales que acontecen en estos años, y atendiendo al tema de la relación entre la presencia guerrillera del ELN y la presencia de cultivos ilícitos, cabría señalar que si bien, como se advirtió con anterioridad, los años que transcurren entre 2006 y 2008 van a ser los más duros para el ELN. No obstante, de manera menos significativa, por la reducida iniciativa de la guerrilla, puede empezarse a apreciar una mayor proximidad entre la presencia geográfica y la existencia de cultivos ilícitos.

Así, en 2006, como se señaló anteriormente, la guerrilla va a registrar un mínimo histórico en su accionar armado. En este año a duras penas se comprueba la presencia del grupo armado en 16 municipios del país de los cuales 5 presentan cultivos ilícitos (31.2%). De la misma manera, del total de 18 acciones armadas, solo 5 tienen presencia de plantaciones de coca (27.7%). Sin embargo, aun cuando la lógica de repliegue e *invisibilización* de la guerrilla va a mantenerse inalterada, la proporción entre accionar armado y presencia de cultivos va a superar por primera vez en la década, el 50%.

Ello, porque en 2007, de los 18 municipios donde se va a certificar presencia guerrillera, en 10 de ellos, igualmente se va a constatar la presencia de cultivos ilícitos (55.5%). Mayor proporción, incluso va a haber en 2008, pues sobre los 14 municipios con acciones armadas de la guerrilla, 8 van a ser enclaves con plantaciones de coca (57.1%).

Tendencia similar refleja el número de acciones armadas, que en 2007 asciende a 23, de las cuales 15 son en municipios con cultivos ilícitos (55.5%), mientras que en 2008, del total de 19 acciones armadas, casi la mitad (9) son en municipios con presencia de cultivos (47.3%).

Ello se debe a que el ELN, en estos tres años, deja de presentar actividad guerrillera en varios departamentos, todos sin presencia de cultivos ilícitos, como es el caso de Santander (1), Sucre (0), Risaralda (2), Cesar (0), Casanare (2), Bolívar (2) y Antioquia (3). Es decir, durante tres años, en estos siete departamentos apenas se alcanzan, en total, un volumen de 10 acciones armadas. La excepción será Tolima, que acumulará 8 hasta acciones armadas, especialmente en 2007, debido a la actividad del Bloque “Bolcheviques de Líbano”²⁴⁰, que no obstante quedó desarticulado entre 2008 y 2009 y que supondrá la desaparición de la presencia guerrillera en este departamento.

En Arauca, el repliegue se va a producir en los municipios de Arauquita (3), Fotul (2) y Saravena (2), todos con creciente presencia de cultivos ilícitos²⁴¹ a la vez que en Norte de Santander, durante estos tres años, las acciones armadas van a concentrarse en municipios con ingente presencia de cultivos ilícitos, como son los casos de El Tarra (5), Convención (3), San Calixto (3), Tibú (2), Sardinata (1) y con la excepción de Hacarí (1)²⁴².

Por ejemplo, en el departamento de Cauca entre 2006 y 2008 se van a recoger apenas 5 acciones armadas si bien, nuevamente, El Tambo, con 803Ha de superficie de cultivos ilícitos solo en 2007, se erige como un punto clave para explicar la presencia del ELN en el departamento. Más notorio sucede todavía en Chocó, donde en estos tres años hay al menos

²⁴⁰Se pueden ver informaciones al respecto en el diario colombiano, *El Tiempo*: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1689879>, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7708346> <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3368044> Consultado el 23 julio de 2015.

²⁴¹ Entre 2008 y 2009, de acuerdo a las cifras facilitadas por UNODC (2014) Arauquita acumuló, entre 2008 y 2009, 405Ha de cultivos; Fotul 109Ha y Saravena 126Ha.

²⁴² Entre 2008 y 2009 se acumularon 794Ha en El Tarra, 278Ha en Convención, 104Ha en San Calixto, 2.015Ha en Tibú y, finalmente, 708Ha en Sardinata, UNODC (2014).

constancia de 8 acciones armadas del ELN, donde aunque el extractivismo ilegal de oro y platino sigue resultando fundamental, también gana enteros la industria del cultivo ilícito, tanto en términos generales sobre el departamento, como en términos locales, especialmente en torno a Istmina, que presentará una superficie de 425Ha en el año 2008.

Es en el año 2009 cuando se evidencia un tímido signo de recuperación del ELN, pues su presencia en municipios pasa de 14 en 2008 a 25 en 2009, y sus acciones armadas pasan de 19 en 2008 a 42 en 2009. En ambos casos, es a partir de este año que se aprecia una mayor correspondencia de la guerrilla con los cultivos ilícitos. De un lado, porque del total de acciones armadas, el 71.4% (30) se van a dar en municipios con cultivos de coca. En similar proporción, en un 60% sobre el total de municipios con presencia del ELN (15) van a encontrarse presencia de cultivos ilícitos.

Tras esta tendencia, de casi desaparición del ELN en la geografía del conflicto armado colombiano, desde 2009 y hasta 2012 parecería experimentarse un importante repunte en el activismo guerrillero, el cual se circunscribe en departamentos con un alto impacto de los cultivos ilícitos, donde solo Arauca sería la excepción. Una excepción que en cierto modo resultaría contradictoria. Ello, porque, por ejemplo, en 2009, de los 16 secuestros cometidos por el ELN solo 2 tuvieron lugar en Arauca, y de los 16 casos de extorsión reconocidos, ninguno se concentró en este departamento, lo cual obliga a repensar que el activismo del ELN en el departamento.

Bajo una tendencia creciente, seguirían siendo prioritarios, por tanto, los departamentos de Arauca y Norte de Santander. Fruto de la creciente política de fumigaciones y aspersiones aéreas sobre los cultivos de coca, Arauca, en el año 2009, va a presentar un volumen en cuanto a superficie de cultivos ilícitos, de 430Ha; una cifra muy alejada de las 2.116Ha de 2007.

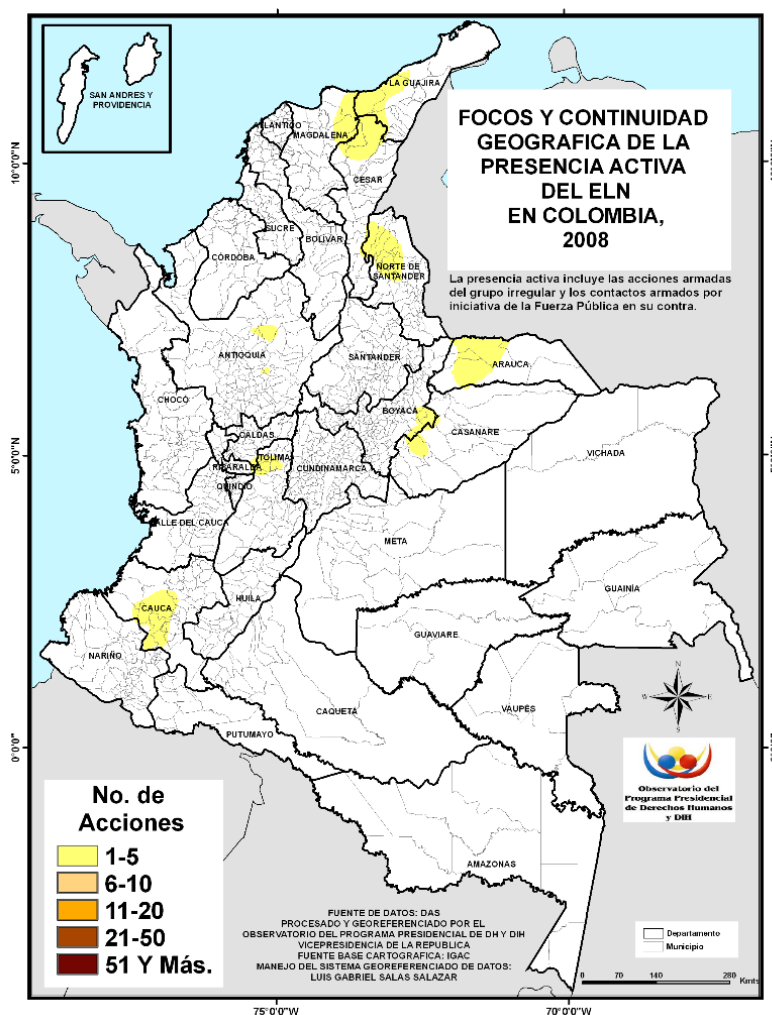
Esta situación, paulatinamente va a ir dificultado y consolidando la disputa territorial de los diferentes actores armados en un departamento que se va a mostrar como uno de los más violentos del país. Así, el ELN va a mantener inalterada su presencia en Arauca, con 4 acciones, y que va a concentrar casi la mitad del total de hectáreas de cultivo de coca del departamento (200Ha). Quizá, por lo anterior, aunque dentro de una tradición territorial constante, la guerrilla va a presentar acciones armadas en Tame (1), Fotul (1) y Saravena (3), los tres municipios que concentrarían la otra mitad de los cultivos del departamento.

Puesto de manifiesto la reducción drástica en buena parte del país, y dado el repliegue del ELN sobre el Catatumbo, en Norte de Santander, y sobre Arauca, el resto de acciones armadas en el país van a empezar a ser muy concretas y, aparentemente, casi siempre sobre enclaves en los que los cultivos ilícitos van a empezar a resultar fundamentales en esta fase de readaptación de la guerrilla.

En el caso de Norte de Santander, las fumigaciones van a afectar al departamento de manera bien distinta. Si en 2006 se registraban apenas 488Ha, en 2009 la superficie de cultivos

ilícitos va a superar las 3.000Ha (3.037Ha). Es por ello que en 2009, Norte de Santander experimenta un repunte de la violencia armada del ELN, que en todo caso se mantiene afín a su tradicional arraigo territorial. Se registran de esta manera la mayor actividad guerrillera desde 2002, con un total de 16 acciones armadas, de las cuales 14 se van a dar en enclaves con cultivo ilícito, y una presencia sobre 7 municipios, especialmente en la consabida región del Catatumbo. Es en esta zona, con una superficie cultivada de 1.090Ha de cultivos de coca, el ELN va a protagonizar hasta 13 acciones armadas, a las que hay que añadir otras tres acciones ya en municipios próximos a Cúcuta como son Sardinata (245Ha), Durania y Herrán.

Mapa 28: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2008



Fuente: ODHDIH (2014)

Igualmente, es desde 2009, que se empieza a recomponer la presencia del ELN en la costa del Pacífico. Primero, y especialmente en Cauca, donde se recogen 3 acciones armadas en torno al eje Cajibío – El Tambo – Argelia, que concentrará en ese año un total de 1.589Ha de cultivos ilícitos, y que supone casi la cuarta parte del total del departamento. En menor medida, pero de manera significativa dentro de esta nueva estrategia de supervivencia/recomposición, se encontraría el activismo del ELN sobre el departamento de Chocó, donde va a protagonizar 3 acciones armadas en los municipios de fuerte minería ilegal como son Bagadó, Llaudó y Bajo San Juan, además de presentar presencia armada en torno al municipio costero de Bajo Baudó (147Ha).

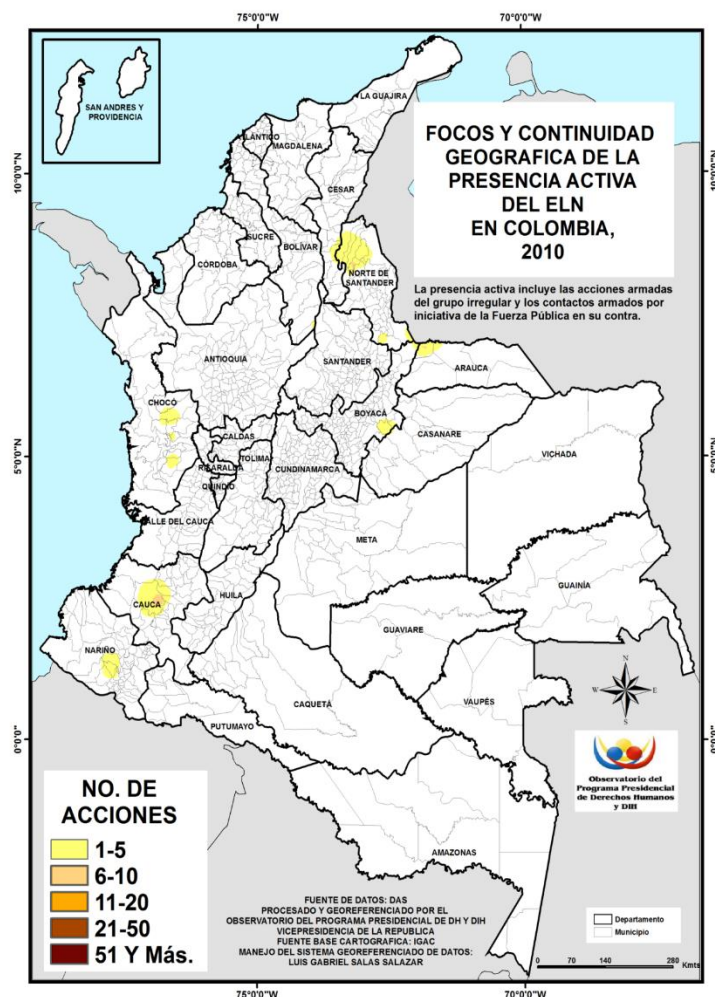
Mapa 29. Densidad de cultivos en Colombia en 2008



Fuente: UNODC (2009: 10)

Más evidente empieza a ser la presencia del ELN en Nariño, donde a pesar de registrarse 3 acciones armadas éstas se concentran en un margen de 40 kilómetros, en torno al eje de Samaniego, Providencia y Sapués, que presentará una superficie próxima a las 300Ha de cultivos ilícitos. Muy residualmente quedará la presencia testimonial en Antioquia (1), Boyacá (1) y Casanare (1).

Mapa 30: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2010



Fuente: ODHDIH (2014)

En el caso de Arauca, las acciones van a caer a 7, de las cuales 6 se van a concentrar en torno a Saravena (5) y Tame (1). Sin embargo, el primer municipio apenas registrará 60Ha de cultivos ilícitos y el segundo unas 15Ha. Ello, porque en conjunto, el departamento de Arauca apenas alcanza las 250Ha, y porque no se encuentra acción armada alguna en el tradicional municipio de Arauquita, que había sido el que más presencia de la guerrilla tuvo dentro de Arauca.

Sensu contrario, del caso de Norte de Santander también se recogen más acciones que en el año anterior. La guerrilla registra hasta 22 acciones armadas, de las cuales 18 tienen lugar en municipios con presencia de cultivos ilícitos. Por ejemplo, se vuelve a dar presencia armada del ELN en Tibú (943Ha), si bien la mayor actividad armada se concentra, como ha sido constante a lo largo de la década, en el resto de municipios del Catatumbo, donde se localizan 20 acciones armadas a lo largo de cinco municipios y 642Ha de plantaciones de coca.

Mapa 31: Densidad de cultivos en Colombia en 2010



Fuente: UNODC (2011: 16)

Se hace especialmente llamativo cómo el Pacífico sigue ganando enteros en la nueva construcción de un escenario de presencia armada del ELN. Por ejemplo, en Chocó se recogen 8 acciones armadas de las cuales 6 se dan en Quibó (26Ha), que es la capital departamental y cuyas inmediaciones son un atractivo vaso comunicante con municipios contiguos que presentan tanto cultivos ilícitos como extractivismo ilegal.

De igual manera, en Cauca hay una mayor evidencia que en el año anterior de la creciente relación que el ELN empieza a experimentar en este departamento. Ello, porque las 5 acciones armadas que se dan en el departamento, van a registrarse en el municipio de El Tambo, que solo en 2010 presenta la cifra de cultivos de 1.520Ha. Por último, igual sucedería en Nariño, donde se acumulan 18 acciones armadas con presencia en 8 municipios. De estas cifras, 11 acciones armadas tienen lugar en 4 municipios que va a concentrar vastas superficies de cultivos ilícitos²⁴³.

Como consecuencia del tránsito en la ubicación de los cultivos ilícitos, de la Orinoquia hacia el Pacífico²⁴⁴, es que este referido departamento de Nariño, por ejemplo, solo en el año 2010, va a presentar una superficie de cultivos ilícitos que asciende a las casi 16.000Ha (15.951Ha), esto es, más del doble que una década atrás. Así, en detalle, para el caso del ELN, se van a registrar 9 acciones armadas en el eje Samaniego (531Ha) – Santacruz (11Ha) y 5 acciones más en los municipios colindantes de Mallama (2) y Providencia (3). Otras 2 acciones significativas son las que se van a dar en el centro-occidente del departamento, en los municipios de Barbacoas y Roberto Payán que, separados apenas por 10 kilómetros, concentrarían más de 5.000Ha de cultivos ilícitos.

Para el año 2010 la tendencia va a ser similar en cuanto a la proporción de las acciones armadas del ELN y su presencia electoral con respecto a la presencia de cultivos ilícitos. No obstante, la tendencia y presencia activa de la guerrilla, nuevamente, será creciente aunque nunca en los términos de una década atrás. Así, en este año se recoge presencia del ELN en 27 municipios, de los cuales 15 acumulan presencia de plantaciones de coca (55.5%), de la misma manera que del total de 65 acciones armadas, casi tres cuartas partes (73.8%), esto es, 48 acciones armadas, se van a concentrar en municipios con presencia de cultivos ilícitos.

Es decir, de acuerdo con estas dinámicas descritas, la tendencia tímida pero expansiva en el comportamiento y la ubicación territorial de la guerrilla del ELN va a ser, por ende, cada vez más patente en su proximidad a los centros productores de coca, por lo que deviene insignificante su presencia en Casanare (1), Boyacá (1) y Antioquia (2)²⁴⁵.

²⁴³ Especialmente, respecto de las localidades de San Pablo (531Ha) y Barbacoas (3.433Ha), UNODC (2014).

²⁴⁴ Un trabajo interesante al respecto sería el de Salas (2007; 2010).

²⁴⁵ A pesar de la práctica desaparición del ELN de este departamento, en 2010 se van a registrar dos acciones armadas, en dos municipios que una década atrás sí tuvieron presencia arraigada del ELN, como es los casos de Anorí (103Ha) y de El Bagre (1.110Ha), UNODC (2014).

Finalmente, durante los dos últimos años que transcurren entre 2011 y 2012, la tendencia derivada de lo anteriormente mencionado habría sido la de afianzar esta nueva lógica que, sobre todo, se ha hecho palpable desde 2009. Tendencia, nada comparable al impacto armado y territorial del ELN en su historia reciente, aunque sí significativa y correlativa en cuanto a atender una tendencia creciente de la guerrilla en su activismo y presencia sobre escenarios con concurrencia de cultivos ilícitos.

En los años de 2011 y 2012, la presencia municipal del ELN ha sido constante, sobre 30 municipios en 2011 y sobre 31 municipios en 2012. Asimismo, la relación de esta presencia municipal en atención a la variable derivada de los cultivos ilícitos se ha mantenido en niveles más que significativos. Es decir, esta circunstancia acontecería en el 46.6% de los municipios con presencia armada del ELN (14), si bien es mucho más significativa en el caso de las acciones armadas, pues de las 61 registradas por causa del ELN, 41 de ellas (67.2%) tuvieron lugar en municipios con presencia de plantaciones de coca.

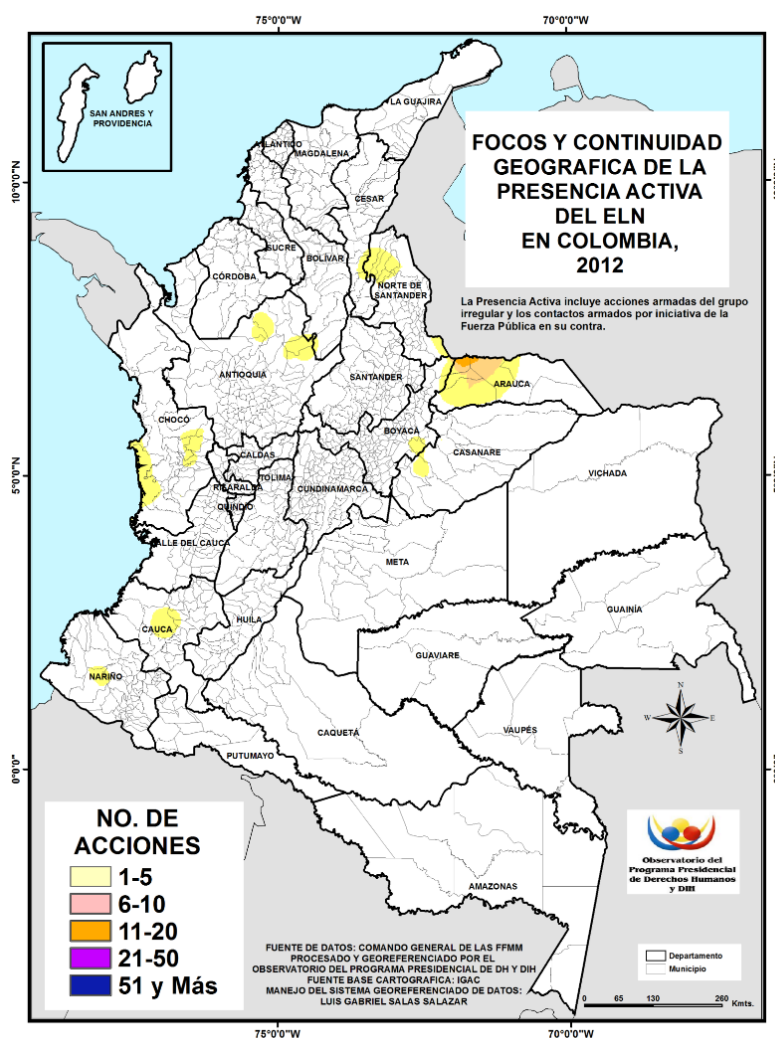
No obstante, el año 2012 va a mantener, y más bien profundizar esta tendencia. De un lado, porque de 71 acciones armadas, 52 acciones, estos es, casi tres cuartas partes (73.2%) van a darse sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos. De otro, porque de un total de 31 municipios con presencia del ELN, en 18 (58%) va a haber presencia del grupo armado, dentro de una proporción que va a ser la más elevada de los últimos doce años.

Dentro de la hipótesis de esta *periferialización* de la presencia armada de los grupos, en este caso del ELN, y su mayor proximidad a la cuestión de los cultivos ilícitos, la cartografía así como las cifras invitarían a aceptar la hipótesis de una relación positiva, creciente y altamente significativa, y que será abordada con mayor detalle en el siguiente epígrafe.

No obstante, cabría mencionar en primer lugar, que en estos dos últimos años se ha revitalizado la acción y la presión armada de la guerrilla sobre el departamento de Arauca. Ello, toda vez que el departamento ha experimentado una reducción drástica en su superficie de cultivos ilícitos que, si en 2011 fue de 132Ha, en 2012 tan solo registró 81Ha. A pesar de ello, el ELN ha mostrado síntomas de refortalecimiento controlando junto con las FARC la práctica totalidad de los cultivos en el departamento y a lo que se adiciona el valor agregado de la industria petrolera en torno al oleoducto que comunica Caño Limón con el municipio sucreño de Coveñas así como los más de 1.500 millones que, en inicio, controlarían a modo de contrabando²⁴⁶.

²⁴⁶ Como reconoce MOE (2007f), toda la presencia del ELN nunca llegó a Coveñas, sino que se quedó en los Montes de María sucreños.

Mapa 32: Intensidad de la presencia guerrillera del ELN en 2012



Fuente: ODHDIH (2014)

En 2011, 28 de las 26 acciones armadas del ELN se concentraron en torno a Arauquita (42Ha), Fotul (24Ha), Saravena (15Ha) y Tame (50Ha). Igualmente, en 2012, con un total de 26 acciones armadas, la tendencia fue similar aunque la reducción de cultivos en el departamento se hizo evidente en los municipios de Arauquita (58Ha), Fotul (5Ha) o Saravena (5Ha). Así, todo invita a pensar que pese la drástica reducción de la superficie de cultivos ilícitos en Arauca, este departamento se trata uno de los que ha pasado a experimentar tendencias más intensivas que extensivas sobre la base de otro tipo de cultivos,

también de coca que, por ejemplo, permiten más cosechas anuales y mejores rendimientos en la obtención de cosechas²⁴⁷.

Mapa 33: Densidad de los cultivos en Colombia en 2012



Fuente: UNODC (2013: 16)

²⁴⁷ Este tipo de consideración, también se encuentra en otros enclaves como Nariño, Putumayo o Cauca. Tal y como se recoge en algunas entrevistas en profundidad que se anexan a esta tesis doctoral, concretamente, en lo que afecta a algunos personeros, como el de Nariño, o a la entrevista con el General de la Policía Nacional, esta cuestión se ha convertido en un problema nuclear, hasta el momento, sin solución.

Como se venía explicando, a diferencia de lo que sucedía en Arauca, en su departamento contiguo hacia el norte, Norte de Santander, lo que ha venido sucediendo es un crecimiento exponencial en la superficie de cultivos ilícitos. Ésta, en 2011 fue de 3.490Ha y en 2012 de 4.516Ha. En estos dos últimos años se registraron 20 acciones armadas de las cuales 18 han coincidido sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos.

Lejos de debilitarse, su presencia territorial y armada sobre el Catatumbo ha sido creciente, concentrando 15 acciones armadas sobre una zona que concentra la casi la totalidad de cultivos del departamento, y sobre la que se adiciona otro municipio con gran tradición de cultivos ilícitos como es Sardinata, que concentraría más de 1.000Ha al año, y donde también hubo armada de la guerrilla.

De otro lado, la región del Pacífico colombiano se va a consolidar como el segundo gran enclave de acción guerrillera. En primer lugar, en el departamento de Cauca, donde entre 2011 y 2012 se van a dar un total de 9 acciones armadas, todas en municipios próximos a la capital, Popayán, donde se encuentran enclaves productores de coca como El Tambo, que supera las 1.000Ha anuales, o Argelia, en torno a las 200Ha²⁴⁸.

También estaría el departamento de Chocó. Como en el caso anterior, solo en 2012 se han dado 8 acciones armadas del ELN, 7 de las cuales en municipios con cultivos ilícitos, especialmente en torno al municipio de Istmina (760Ha), pero también, al sur, sobre el municipio de Sipí (125Ha)²⁴⁹.

Más evidente resulta la relación de la acción armada del ELN sobre los cultivos ilícitos se encontraría en Nariño. Entre 2011 y 2012 se van a dar 18 acciones armadas, 3 de ellas en el municipio de Barbacoas, tradicionalmente, el segundo municipio con mayor número de hectáreas cultivo de coca, de manera tal que, por ejemplo, en 2011 se computaron más de 3.000Ha (3.193Ha) y otras 1.815Ha en 2012. Otras 13 acciones se van a dar en el eje Túquerres-Samaniego, igualmente fuerte productor de coca, con 777Ha entre 2011 y 2012 y con una elevada presencia del frente Comuneros del Sur.

En último término, aunque con un tímido crecimiento armado y territorial del ELN, se va a constatar una mayor presencia de la guerrilla en Casanare, donde entre 2011 y 2012 se acumulan 9 acciones armadas, aunque el departamento no presenta registro alguno de cultivos ilícitos. También en Boyacá (4) se mantienen niveles constantes y, se destaca, tras varios años de ausencia, una presencia armada, para el año 2012, en el municipio de Galán, en Santander, y en el municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar. Por último,

²⁴⁸ Especialmente activos, en la región son los frentes “Manuel Vásquez Castaño” y el frente “José María Becerra”.

²⁴⁹ Asimismo, en la mayoría de los municipios descritos de Chocó, en su interacción con la presencia guerrillera del ELN se encontraría una motivación adicional, como es la referida minería ilícita y que si bien no reporta los beneficios de la participación en el tráfico de droga, son una fuente de poder económico nada desdeñable. Recuérdese que, de acuerdo a esto, que entre los más violentos destacan Quibdó (43 títulos mineros), El Carmen de Atrato (24), Bagadó (23), Riosucio (22), Tadó (14) e Istmina (11). (Guerrero, 2011, s.p.).

cabría señalar que en el oriente antioqueño hay indicios²⁵⁰ de una nueva actividad de la guerrilla, concentrada entre 2011 y 2012, con 4 acciones armadas en el eje Anorí (208) – Segovia (98Ha), si bien es pronto para auspiciar una nueva reubicación del grupo armado en la región, sobre todo por su práctica desaparición en años anteriores.

Así, de acuerdo a lo referido y a modo de conclusión, durante los años de 2011 y 2012, podría decirse que, como en tiempos pasados, Arauca ha retomado su posición de departamento más importante para los intereses y presencia del ELN junto con Norte de Santander. De otro lado, ha ganado peso específico en la ubicación del ELN la región del Pacífico, y muy especialmente los departamentos de Chocó y Nariño. Con base esto, parecería consolidarse la tendencia de reubicación en el occidente del país y fortalecimiento en el oriente, aunque, empero, parece haber dejado atrás la presencia en enclaves estratégicos como Antioquia y Santander, por un lado, y los departamentos del norte del país, sobre todo, Cesar, Magdalena y La Guajira, por otro.

Una segunda transformación, también contradictoria con la esencia de la guerrilla pasaría por la lógica de alianzas que, a partir de estos cambios, ha empezado a experimentar, pero que va a ser abordada con profundidad en uno de los capítulos siguientes de esta tesis²⁵¹. Unas alianzas que parecen romper con una siempre difícil unidad de mando por la que ha transcurrido el ELN y que pasan a traducirse en alianzas con “Los Rastrojos” en Arauca frente a la presencia de las FARC (Ávila y Núñez, 2008: 1), o la alianza con el Frente 33 de las FARC junto a “Los Rastrojos” en el Catatumbo de Norte de Santander (McDermort, 201: 24).

La misma lógica de connivencia, en estos últimos años habría transcurrido en Chocó, entre el ELN con los frentes 57 y 34, que colaboran conjuntamente frente al avance de las Bacrim en la región, especialmente de “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”²⁵². Por su parte, *sensu contrario* parecería haber sucedido en Nariño, donde hasta finales de 2011 el ELN combatía a los Frentes 2, 29 y 64 de las FARC, aceptando para ello alianzas estratégicas con los mismos actores con los que se disputa la hegemonía local, por ejemplo, en el Norte de Santander²⁵³

²⁵⁰ Estos indicios tuvieron como reacción una creciente presencia de la Fuerza Pública, la cual obtuvo importantes golpes estratégicos sobre esta guerrilla en esta región del país. Véase: <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/ejercito-da-de-baja-cabecilla-historico-del-eln-articulo-395801> Consultado el 24 de julio de 2015.

²⁵¹ La hipótesis que se plantea en este trabajo es que el fenómeno pos-paramilitar ha contribuido a favorecer a las guerrillas, tanto ELN como FARC, pues en muchos casos, la despolitización de estos grupos y su mayor maniobra, por su flexibilidad en cuanto a sus prácticas criminales, facilita puntos de convergencia y reparto en la interacción de los grupos armados por el control y beneficio de las fuentes de poder económico.

²⁵² Véase: <http://es.insightcrime.org/analisis/choco-refugio-grupos-criminales-colombia> Consultado el 24 de julio de 2015.

²⁵³ Una interesante radiografía para entender la posible interacción de grupos, una vez desmovilizadas las AUC, se puede encontrar en la síntesis que se recoge en Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2012).

(International Crisis Group, 2010: 3; Núñez, 2012: 61; Prieto, 2013: 4) pero respetando a la vez las alianzas con “Los Rastrojos” (Ávila, 2009: 12; Ávila y Núñez, 2008 : 1²⁵⁴).

4. Conclusiones. Presencia del ELN en enclaves con cultivos ilícitos. Una tendencia creciente en retrospectiva

Conforme a todo lo anteriormente descrito, se puede observar de qué modo, a lo largo de los últimos quince años que transcurren entre 1998 y 2012, la acción armada del ELN ha ido acumulando dificultades y problemáticas que han terminado por afectar no solo a la dimensión armada misma, sino la propia ubicación espacial de la guerrilla e, incluso, sus propios mecanismos de interacción con otros grupos.

Tal y como puede verse en la siguiente tabla, su presencia territorial se ha visto muy diezmada respecto de lo que acumulaba a finales de los noventa e inicios de la década pasada y, al borde de la desaparición durante los años más duros del paramilitarismo y de la PSD, entre 2006 y 2008, parece que en los últimos años, como se apuntaba, ha ido recobrando actividad aunque de un modo muy tímido, lo cual recuerda a los niveles de presencia territorial del año 2005.

Tabla 10: Evolución municipal y departamental de la presencia del ELN entre 1998 y 2012

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Municipios con presencia de ELN	90	85	129	131	65	48	41	39	16	18	14	25	27	30	31
Departamentos con presencia de ELN	16	16	19	18	15	14	12	12	8	9	5	8	8	8	10

Fuente: ODHDIH (2014)

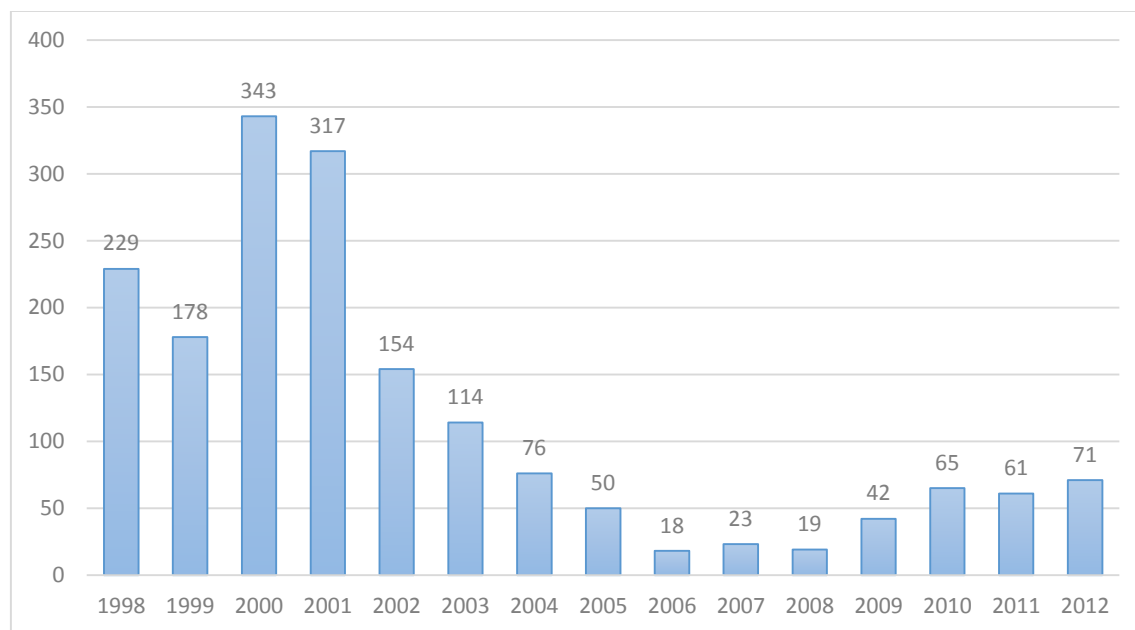
Es por esto que, unido al repliegue territorial que como se advirtió, se centra en los departamentos de Arauca y Norte de Santander en el nororiente colombiano, y en los departamentos del Pacífico, de Chocó, Cauca y Nariño, las acciones armadas de la guerrilla y su capacidad de combate y presión territorial, evidenciada a través de las acciones armadas, se han visto del mismo modo muy afectadas.

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, los niveles de acción armada están próximos a los del año 2004, aunque con una salvedad; tal y como se explicaba en este capítulo, las condiciones resultan en la actualidad bien diferentes. Recuérdese que en aquel entonces el ELN se estimaba, según el Ministerio de Defensa Nacional (2005: 5), que podía contar con

²⁵⁴ Según estos autores, la mayoría de las alianzas con Bacrim se identifican con el ELN. De hecho, hay grupos como “Águilas Negras” que, directamente, son desestimados como potenciales aliados.

cerca de 3.655 combatientes. En 2012 las apreciaciones más bondadosas apenas alcanzan los 1.800 guerrilleros²⁵⁵.

Gráfico 4: Evolución de las acciones armadas del ELN entre 1998 y 2012



Fuente: ODHDIH (2014)

La evidente reducción de la fuerza armada del ELN así como su *periferialización* geográfica invita a aceptar la hipótesis de una desnaturalización del ELN en lo que tiene que ver no solo con su ubicación geográfica, sino en su interacción con otros grupos y, sobre todo, con su relación con los cultivos ilícitos y muy especialmente con el cultivo de coca, manifiestamente expansiva.

En el obligado proceso de *reterritorialización* del ELN se observaría su desaparición de enclaves tradicionales de gran importancia como Antioquia y Santander, así como de otros de menor importancia como el eje cafetero o, sobre todo, la costa Atlántica.

En ese proceso, dos departamentos como Arauca y, sobre todo, Norte de Santander, se han convertido a lo largo de toda la década pasada en los de mayor arraigo. De hecho, si bien Antioquia y Santander fueron los inicialmente vitales para el ELN, con motivo del proceso de transformación del propio conflicto armado, a tenor del fortalecimiento del Ejército y del impacto del paramilitarismo, finalmente hizo que Norte de Santander, que por mucho fue un

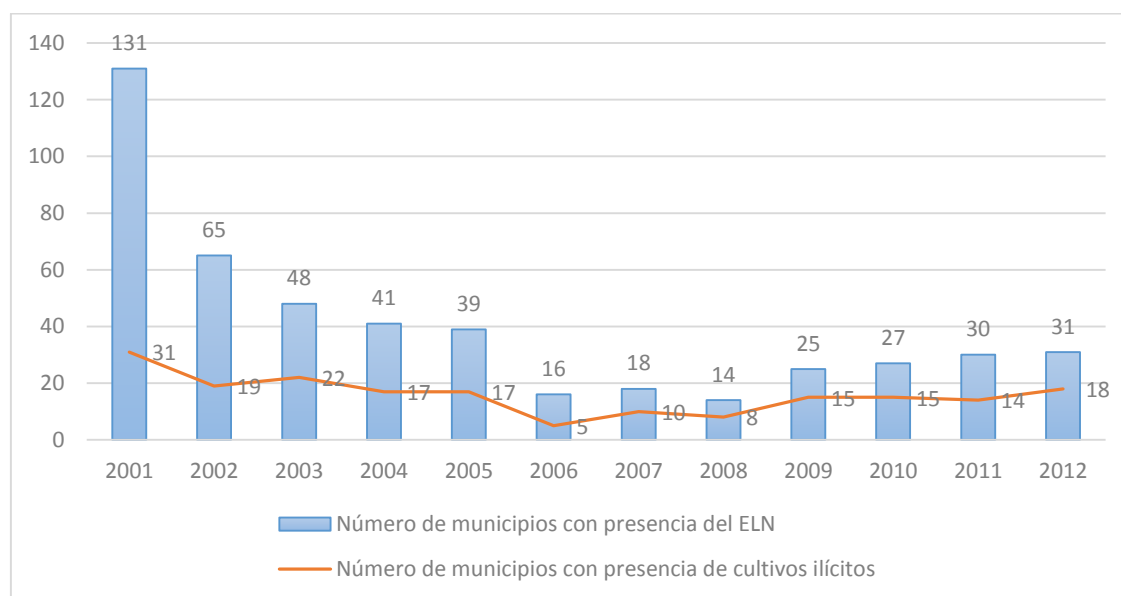
²⁵⁵ Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/disminuye-el-numero-de-guerrilleros-en-el-pais/358804-3>
Consultado el 25 de julio de 2015.

corredor de retaguardia, y Arauca, hayan sido vitales para garantizar la supervivencia del grupo guerrillero.

En adición, debería destacarse la reubicación del ELN en el Pacífico, sobre todo, en Chocó y Nariño. Dos de los departamentos con mayor crecimiento del cultivo ilícito y, en el caso de Chocó, de la minería ilegal. Ambos, con niveles de presencia del Estado muy reducidos, con una geografía fuertemente selvática y con un componente de frontera no menos importante.

Si se observa el año 2001, que era el año del que se partía para analizar la relación entre presencia armada del ELN y cultivos ilícitos, mucho ha cambiado aquella tesitura respecto de la actual. Hoy en día, la presencia del ELN se condensa en torno a cinco de los departamentos que presentan mayor número de hectáreas objeto de coca: Norte de Santander, y en el Pacífico, Cauca, Nariño y Chocó, a lo que cabría añadir la excepción ya mencionada de Arauca.

Gráfico 5: Presencia armada del ELN en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012



Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014).

Así, esta gráfica invita a la reflexión sobre la hipótesis que se propone. Ello, porque como se puede observar, nada tiene que ver la presencia municipal del ELN a inicios de la década pasada, cuando en 2001 ascendía a 131 municipios, con lo transcurrido once años después, cuando la misma ha decaído en un 76% hasta 31 municipios. Sin embargo, si se observa la

línea que determina el número de municipios con presencia del ELN que, a su vez, tienen cultivos ilícitos, cabe extraer otro tipo de consideración.

Es decir, los municipios en los que tradicionalmente se ha encontrado el ELN con presencia de cultivos ilícitos, esto es, primero en Antioquia, Norte de Santander y Arauca, y después, sustituyendo el primero de estos, por un mayor activismo en el Pacífico, han sido municipios donde su presencia, de mayor modo, se ha mantenido inalterada cuando no creciente. Dicho de otro modo, cabe pensar en que los cultivos ilícitos son una fuente importante de mantenimiento y supervivencia del grupo de manera tal que allí donde se intersecta la variable ELN - cultivo ilícito, hay mayores tendencias de mantenimiento del activismo guerrillero, dada su importancia como fuente de poder económico.

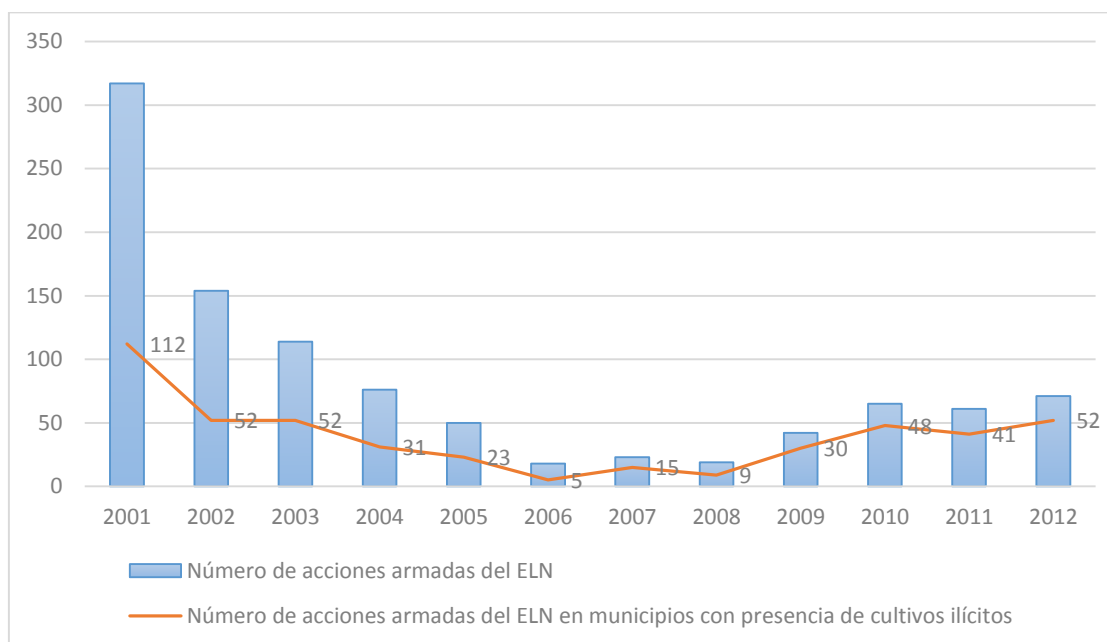
Así, departamentos como Huila, Tolima, Cesar, La Guajira, Santander o el eje cafetero, desprovistos de cultivo ilícito, son enclaves en los que, en pocos años, desapareció la presencia guerrillera del ELN. Quizá, es por eso que, con el paso de los años, se va aglutinando una concentración en cuanto a presencia del ELN respecto de municipios con plantaciones cocaleras. De hecho, esta apreciación resulta mucho más evidente si se utiliza como indicador no la presencia municipal sino el conjunto de acciones armadas y su distribución espacial.

De este modo, no solo se refuerza la hipótesis planteada, sino que se hace más evidente pues, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico 7, las acciones del ELN sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos hoy en día es muy similar a la cifra que se registraba en 2002 o en 2003, cuando la fuerza del grupo guerrillero y su presencia territorial era bien distinta.

Lo que sucedería es que, bajo esta apreciación, se evidencia una concentración creciente del activismo guerrillero del ELN sobre enclaves con presencia de cultivos de manera que la proporción ha pasado a convertirse de práctica similitud. Además, puede observarse que la concentración de acciones armadas con la existencia de cultivos ilícitos responde como una relación constante, estable y significativa, especialmente, a partir de 2009, una vez que se pone fin a la situación de arrinconamiento e *invisibilización* de la guerrilla entre los años, especialmente, 2006 y 2009.

Es por esto que cabría inferir una tendencia creciente en la concentración de acciones armadas del ELN sobre enclaves con presencia de cultivos ilícitos. Es ilustrativo, a tal efecto, por ejemplo, comparar los años 2002 y 2012. Así, como se decía, con un similar número de acciones armadas en municipios con presencia de cultivos de coca, alrededor de la media centena, si bien en 2002 la acción guerrillera del ELN mayormente tenía lugar en enclaves sin presencia de cultivos ilícitos, tal apreciación cambia notablemente una década después.

Gráfico 6: Acciones armadas del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos 1998 - 2012



Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

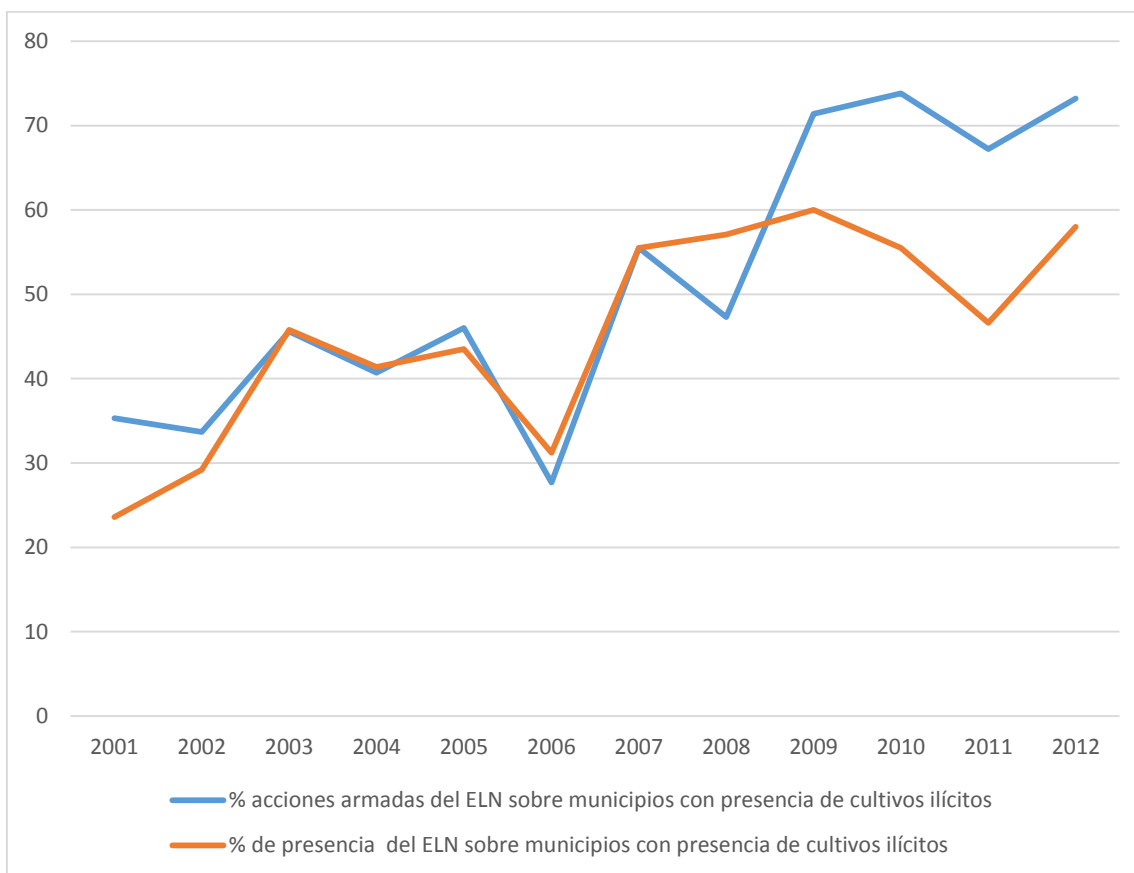
En otras palabras, cada vez se hace más evidente que para la subsistencia de la guerrilla, la financiación y los recursos económicos que facilita los cultivos ilícitos se ha erigido como un rubro indisociable a su existencia, y buena prueba de ello es que casi tres cuartas partes de las acciones armadas del ELN tienen lugar en escenarios coccaleros, lo cual significa más de treinta puntos porcentuales respecto de hace un lustro.

Finalmente, con todo, y antes de pasar a analizar la tendencia de las FARC en lo que ya es el capítulo V de esta tesis, la siguiente tabla también terminaría por redundar en la hipótesis planteada. Si en 2001 los municipios con presencia de cultivos ilícitos sobre los que se evidenciaba presencia del ELN era de un 23.6%, tras un proceso creciente e incremental, en 2012, el mismo indicador asciende a un 58.0%.

Más si cabe resulta reveladora la cifra de las acciones armadas. Si éstas se concentraban, para el caso del ELN, en un 35.3% en municipios con presencia de cultivo ilícito, ese porcentaje ascendía hasta el 73.2%, una década después.

Con esto, y en conclusión, parecería que los cambios y transformaciones del conflicto armado colombiano en los últimos años, y particularmente en su relación con el ELN, han terminado por poner de manifiesto qué importantes resultan los cultivos ilícitos, tanto para entender la supervivencia guerrillera al impacto del paramilitarismo y de la PSD, por un lado, y para comprender las dinámicas territoriales de la violencia guerrillera en cuanto a su proximidad con respecto de enclaves productores de cultivos ilícitos, por otro.

Gráfico 7: Relación porcentual entre las acciones armadas y la presencia municipal del ELN sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012



Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

CAPÍTULO V: EL FACTOR DEL NARCOTRÁFICO EN LA PERIFERIALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE LAS FARC

1. Introducción

En igual consonancia con el capítulo anterior, este capítulo V busca presentar y hacer valer la misma hipótesis de considerar el factor de los cultivos ilícitos de coca como un elemento explicativo en lo que a entender la violencia directa ejercida por las FARC además de su transformación espacial, en los últimos quince años.

El objetivo nuclear es presentar de qué modo la representación cartográfica de la violencia de las FARC ha respondido a dinámicas coincidentes con la presencia de cultivos de coca y cómo estos son de un valor tal, que han conferido continuidad cuando no incremento a las acciones de la guerrilla en los últimos quince años. Nuevamente, los enclaves periféricos vuelven a suponer, como se mencionaba en el caso del ELN, un valor agregado de gran importancia.

Así, se finaliza evocando y presentando la misma tendencia creciente, tanto en la presencia municipal de las FARC como en la lógica de sus acciones armadas. Es decir, en los últimos quince años, ambas tendencias han experimentado una notable relación con la concurrencia de cultivos ilícitos, sirviendo estos como escenarios garantes en la continuidad e intensidad del activismo guerrillero armado.

2. Una mirada a la *periferialización* de la acción armada de las FARC y los escenarios con presencia de cultivos ilícitos

El año 1998 es un año especial, punto de partida de esta tesis doctoral, en la medida en que supone un cambio de gobierno entre la saliente presidencia de Samper y la entrante de Pastrana. En lo que respecta a las FARC, en aquel entonces venía desarrollando una tendencia creciente en cuanto a fortalecimiento armado y reclutamiento que, entre otras cosas, propició, como ya se apuntó, la consecución de una decena de importantes derrotas por parte de la Fuerza Militar, especialmente, entre 1996 y los primeros meses de 1998 (Echandía, 2000, 2012; Pizarro, 2006).

Ello se entiende como resultado de la notable participación de la guerrilla en el negocio de los cultivos ilícitos, lo cuales repercutían, como se evidenció en el capítulo anterior, más de la mitad de los ingresos del grupo armado que, en adición, se nutría sobre todo del secuestro y la extorsión (Junta de Inteligencia Conjunta, 2005; Pécaut, 2008b). Tres fuentes de poder económica, ya consolidadas en la segunda mitad de los años ochenta, y que permiten entender la multiplicación tanto del número de guerrilleros como de su presencia territorial (Cadena,

2008; Pécaut, 2008, Pizarro, 2011). Así lo recogía perfectamente el personero de Putumayo cuando señalaba que:

“en nuestro municipio las FARC siempre han dispuesto de una gran presencia municipal, y aunque Uribe los arrinconó y las AUC los sacaron de algunas cabeceras urbanas, nunca han desaparecido del departamento. Se reubicaron en las veredas rurales. Este departamento les da mucha ventaja a las FARC, sobre todo por el control que tienen del cultivo y de la coca. Son el actor más importante, aunque participan con pequeñas bandas criminales que por ejemplo, actúan en mi municipio y operan con el microtráfico también. Igualmente, el secuestro y, sobre todo las vacunas son muy importantes. En el municipio hay muchas personas, comerciantes, campesinos que pagan su vacuna.”. (EP 20, abril de 2015).

Tal y como pone de manifiesto en el siguiente gráfico 9, hacia el año 1998, el grueso de las FARC superaba ampliamente los 10.000 guerrilleros, además de una presencia territorial, directa e indirecta, que termina por afectar, según algunos autores, a casi la mitad de los municipios del país (Bottía, 2003: 2, Echandía, 2006: 68). Más concretamente, en lo que tiene que ver con las acciones armadas, en este año se van a registrar un total de 356 que, como en el caso del ELN, atienden a modo de hostigamientos, emboscadas, ataques terroristas y ataques sobre instalaciones militares, y que tienen lugar sobre un total de 186 municipios y 25 departamentos²⁵⁶. En otras palabras, de acuerdo a un volumen de capacidad nada comparable, en su magnitud, a las cifras presentadas por el ELN.

Dentro de su ubicación geográfica, la presencia de las FARC va a resultar mucho más dispersa que en el caso del ELN, si bien se va a responder igualmente a una pauta de especial intensificación, en esta ocasión, en torno a los departamentos de Arauca y la región del occidente antioqueño, y en el sur del país, respecto a los departamentos de Meta, Casanare, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo.

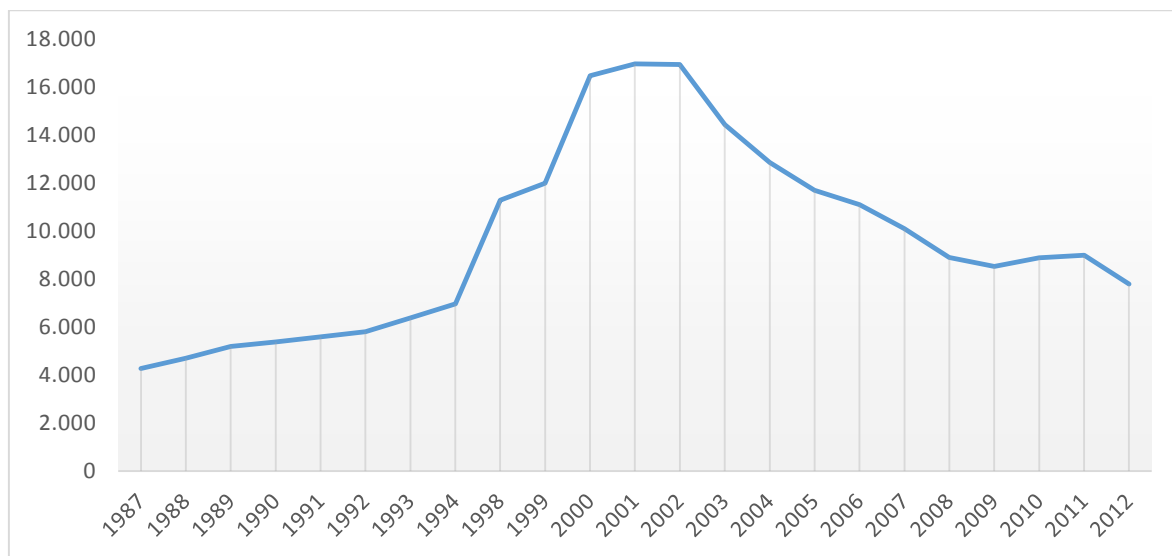
Particularmente, en el departamento de Arauca se van a registrar en este año 1998, un total de 37 acciones armadas – especialmente en los municipios de Arauca (8) – donde nunca hubo gran presencia del ELN, y en Arauquita (11) y Saravena (10), localidades, éstas sí, con un importante presencia del ELN, y que será objeto de una confrontación entre ambas guerrillas, de gran magnitud. Al respecto, por ejemplo, el personero de Arauca reconocía que:

“Hasta el año 2000, los actores que predominan son las FARC y el ELN pero no necesitan de una gran violencia para ejercer el poder. Todo cambia cuando en 2000 llegan las AUC y, después, la PSD. Su incursión es total. Las AUC, se ubican a diez minutos de la cabecera urbana. Había un total conocimiento de la Fuerza Pública. Ellos, desde ahí incursionan en las veredas rurales con masacres y actuando contra la población civil, pues todos esos miles de ciudadanos eran sospechosos de ser guerrilla. Durante muchos años, y hasta entonces, la

²⁵⁶ En todo caso, para conocer con mejor detalle la distribución de frentes de las FARC para el período que abarca esta tesis, se recomienda revisar el anexo en el cual se presentan los frentes de las FARC de acuerdo a su correspondencia con los departamentos o las regiones en las que actúan, si bien, en algunos casos se hará, además, referencia expresa dentro del texto.

sociedad araucana convivía con las FARC y el ELN. El nivel de violencia no era muy alto. No era necesario. Lo que pasa es que cuando llegan los paramilitares con sus retenes todos pasamos a ser sospechosos y eso se traduce en una difusión del terror en casi todo el departamento. Entiéndalo. Nos tocaba sí o sí. Había una connivencia y una convivencia aunque no fuese deseada porque una era la ley no escrita la que estuvo mucho tiempo vigente: la ley del monte. La guerrilla controlaba todo. Hacía la ley. Impartía justicia. Guardaba el orden público. Todo cambia cuando llegan los paramilitares y cuando, con la PSD, empieza a verse más Fuerza Pública. Sin embargo, esta fuerza no actuaba contra las AUC sino contra las guerrillas. Esto fue terrible, muy especialmente, en el piedemonte, donde por la presencia de cultivos, había un mayor arraigo de las guerrillas, que encontraban en la montaña una ventaja con respecto de otros municipios como Arauca, que son todo llanura”. (EP 15, julio de 2015).

Gráfico 8: Evolución del número de combatientes de las FARC entre 1987 y 2012



Fuente: ODHDIH (2014)

De hecho, Arauca también va a ser el departamento del nororiente del país con mayor presencia de las FARC pues, en otros como Norte de Santander (5) o Santander (11), la presencia de esta guerrilla va a seguir siendo muy inferior a la de la guerrilla rojinegra²⁵⁷.

²⁵⁷ Las FARC nunca tuvieron un especial arraigo en Santander aunque, en lo que afecta al Bloque Magdalena Medio, hacia 1998, entre Santander y Cesar tenían presencia los Frentes 12, 20, 23 y 46; y de otro lado, en cuanto a la región entre Boyacá y Santander, tenían presencia los Frentes 11 y 13. Del lado de Norte de Santander, cabría destacar que su presencia era sumamente reducida, pues a lo sumo, en estos años, incursionaban los Frentes 10 y 45 que, dicho sea de paso, y como plantea Cadena (2008), tenían mayor arraigo en el Sarare pues su origen está en el departamento de Arauca.

Mapa 34: Presencia de FARC en Colombia en 1998



Fuente: ODHDIH (2014)

Una segunda región de gran relevancia para las FARC se va a encontrar en el departamento de Antioquia, en el que se van a registrar un total de 63 acciones armadas, lo cual hace que se presenten cifras similares a las del ELN en este departamento. Sin embargo, a diferencia de esta guerrilla, las FARC van a concentrar su accionar armado en la región suroccidental²⁵⁸, donde se computan 13 acciones, además de una notable presencia tanto en la zona bananera

²⁵⁸ Especialmente, en Betulia (4), Concordia (1), Salgar (2) y Urrao (6) con presencia de los Frentes 9, 36 y 47, que son los mismos que tuvieron principal arraigo, dentro del Bloque Noroccidental, en el oriente antioqueño, ODHDIH (2014).

del Urabá²⁵⁹(8), así como en el oriente antioqueño, donde se acumulan otras 26 acciones armadas. Región, esta última, en buena medida, coincidente también con un importante activismo de parte del ELN²⁶⁰.

Un tercer enclave fundamental se va a encontrar en la región amazónica²⁶¹, especialmente en los departamentos de Meta (24) – con presencia efectiva en casi todo el departamento; Caquetá (19) – especialmente en el norte del departamento, sobre los municipios de San Vicente del Caguán (7) y Puerto Rico (5); y en Putumayo (25) – principalmente en el suroccidente del departamento, en los municipios de Valle del Guamuez (9), Orito (6) y Puerto Asís (5). En mucha menor medida, en esta macro-región del país quedarían los departamentos de Casanare (11) y Vaupés (4) con una importancia más relativa para el activismo armado de la guerrilla.

Menos relevante, aunque no por ello significativa, sería la presencia de las FARC en un cuarto escenario como sería el corredor suroccidental del país, en el departamento de Tolima²⁶² (22) y de Huila (13), de altísima importancia simbólica, y en los departamentos con salida a la costa del Pacífico, de Valle del Cauca (11) y Cauca (26). Es más, aun cuando Huila y Tolima nunca tuvieron presencia de cultivos ilícitos, como bien señala el personero del primero de los departamentos:

“Hacia 1998 en el sur del país y particularmente en Huila, las FARC tenían gran arraigo, especialmente por la movilidad estratégica que ofrece el departamento a través de la cordillera andina, a efectos de llegar a Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Entonces la Columna Móvil “Teófilo Forero” fue siempre protagonista, con una especial virulencia que se traducía en extorsión sobre el transporte, tránsito, pesca, comercio, retenes, extorsión al trabajo, etc. Era una zozobra terrible y el control era absoluto de manera que la población vivía atemorizada. Sin embargo, siempre hubo gran movilidad y nunca buscaron un control territorial concreto pues eso favorecía, por las condiciones del departamento, que el Gobierno pudiera

²⁵⁹ Especialmente en Apartadó (3), Chigorodó (2), Turbo (2) y Mutatá (1), con presencia de los Frentes 5, 34, 57 y 58, ODHDIH (2014).

²⁶⁰ Especialmente en San Luis (3), Abejorral (1), Guatapé (6), San Carlos (6), San Rafael (2), San Vicente (2), Marinilla (3), Guarne (1) y El Santuario (2), ODHDIH (2014).

²⁶¹ Hay que precisar que, por región amazónica, a efectos de esta tesis, se entiende todo el gran corredor amazónico centro-oriental si bien, se identifican dos tendencias diferentes que se pueden observar en esta investigación. Por un lado, la correspondiente, sobre todo, al eje Meta-Caquetá-Putumayo y, por otro lado, los enclaves propiamente amazónicos, y en su mayor parte, fronterizos con Venezuela, como son Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonía. Estos últimos plantean dinámicas muy diferentes, en buena medida, explicados por la escasa población y presencia institucional del Estado, y por una orografía profundamente selvática, que dificulta sobremanera su integración respecto del conjunto de dinámicas económicas, políticas y de infraestructuras, propias al resto del país.

²⁶² El departamento de Tolima, que es uno de los enclaves fundadores de las FARC, especialmente en el sur (Planadas), fue de un altísimo valor simbólico para las FARC, a diferencia de un ELN especialmente activo en torno a Líbano, en el norte del departamento. De hecho, para el año 1998, del total de 22 acciones guerrilleras de las FARC la mayoría tienen lugar en la región del sur de Tolima, en Planadas (3), Natagaima (3), Coyaima (2), Rioblanco (1), Dolores (1), Ataco (1), Purificación (1) o San Antonio (1). De hecho, los principales frentes aquí activos fueron los tradicionales frentes 21, 25 y 66 y que hicieron parte del Bloque Central, ODHDIH (2014).

bombardear con facilidad. Quizá por lo anterior, y también por la falta de cultivos de coca, las AUC tuvieron una presencia muy limitada. Sí hubo muertes, pero la proporción de mayor la influencia la tenían y la siguen teniendo las FARC. De hecho, en la región no hay Bacrim por esa misma cuestión y la guerrilla, aunque existe, sigue siendo móvil. Es por eso que la importancia del departamento sigue operando a nivel de corredor, aunque con la PSD se consiguió minimizar el impacto de las FARC. Hubo combates y la afectación de campamentos. Se mejoró la comunicación y la infraestructura y se obtuvieron importantes resultados militares si bien, en otros municipios cercanos como Acevedo, San Agustín y La Palestina, los personeros informan de nuevas emergencias de una violencia guerrillera que siempre ha persistido en Huila”. (EP 17, septiembre de 2015).

No obstante, y con niveles de incidencia mucho menores quedaría el eje central del país, concretamente en Cundinamarca, donde si bien se recogen 15 acciones armadas en 1998, son en su mayoría dispersas y poco focalizadas, y menos aún en Boyacá (8) o en el eje cafetero – Caldas (3), Risaralda (4) o Quindío (0).

A lo referido, cabría añadir cómo la presencia de las FARC resulta muy reducida en la costa Atlántica colombiana – Atlántico (0), Córdoba (2), La Guajira (4) y Cesar (7)- siendo excepcionales, a tal efecto, los departamentos con mayor presencia guerrillera, que son Magdalena (10) – con especial atención a los municipios de Fundación (4) y Pivijay (4)-, y muy especialmente el departamento de Bolívar (17), cuya región de los Montes de María²⁶³ va a registrar hasta 12 acciones guerrilleras. Sea como fuere, lo cierto es que el volumen de este activismo de las FARC no es nada comparable a la presencia que protagonizan en sus escenarios más relevantes.

Para el año 1999 se identifica un estancamiento en el accionar armado de las FARC, el cual se traduce en 343 acciones armadas que se focalizan, sin embargo, en un mayor número de municipios (194) y departamentos (27), lo cual permite apreciar algunos cambios en cuanto a la representación cartográfica.

En primer lugar, en la región nororiental, Arauca continúa siendo, con 41 acciones, el departamento con mayor presencia armada de la guerrilla, principalmente concentrada en torno al municipio de Arauquita (19), y en menor medida en las localidades de Saravena (9) y Cravo Norte (6) – frontera con el nororiente del departamento de Casanare.

Por otro lado, en Norte de Santander (3) la presencia es prácticamente irrelevante, mientras que en Santander va a concentrar una mayor presencia armada (11), sobre todo en el oriente del departamento, pero aún anda comparable con los términos que presenta el ELN en esta región.

²⁶³ Los Montes de María es una región que, si bien será abordada con posterioridad y mayor detalle, se encuentra entre el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre. En cuanto a Bolívar, que es donde se registra la mayor presencia de las FARC para 1998, ésta afectaría a los municipios de El Carmen de Bolívar (6), Zambrano (2), El Guamo (1), María La Baja, Córdoba (1), San Jacinto (2) y San Juan Nepomuceno, ODHDIH (2014).

Por su parte, en Antioquia va a experimentarse una reducción, casi en una tercera parte, de las acciones armadas de las FARC (41), de manera tal que en este año va a haber mayor iniciativa armada del ELN (52). Además, las acciones de las FARC van a presentar una mayor concentración, sobre todo, alrededor de cinco municipios: San Carlos (6), Urrao (6), Guatapé (6), Betulia (4) y Medellín (4)²⁶⁴.

En lo que afecta a la región amazónica, Meta y Caquetá, muy posiblemente por el hecho de hacer parte de la “zona de despeje” durante la negociación del Caguán, van a experimentar un importante descenso en las acciones armadas en comparación con 1998. Así, en Meta se recogen solo 18 acciones armadas, todas salvo una fuera de la “zona de distensión”²⁶⁵; y en Caquetá se registran 10 acciones armadas, es decir, casi la mitad, que en el año anterior. De otro lado, en Vaupés (4) y Casanare (7) la presencia armada de las FARC se mantendrá constante, y solo Putumayo evidencia un incremento en el activismo guerrillero, al alcanzarse las 32 acciones armadas sobre una ubicación que cubre, prácticamente, todo el departamento.

Por su parte, la región suroccidental del país, con excepción de Nariño (8), sigue siendo el cuarto escenario de presencia guerrillera, manteniéndose los niveles de presión ejercida por la guerrilla tanto en Tolima (20) como en los departamentos ribereños de Cauca (25) y, con un ligero ascenso, Valle del Cauca (16).

En el resto de enclaves, la presencia de las FARC para el año 1999, sigue siendo poco significativa en cuanto a activismo armado. Por ejemplo, en la costa Atlántica se mantienen reducidos niveles de presión guerrillera en los departamentos de La Guajira (3), Cesar (7), Magdalena (9) o Córdoba (3), mientras que se reducen de 17 a 10 las acciones de la guerrilla en el departamento de Bolívar, principalmente sobre la región de los Montes de María.

Tampoco se atenderán importantes variaciones en la región central del país, pues la presencia en Cundinamarca (18) va a continuar siendo dispersa y poco focalizada, y en el eje cafetero tampoco se van a apreciar variaciones sustanciales en Caldas (4), Quindío (1) o Risaralda (3). De este modo, la única excepción la representaría el departamento de Boyacá (17), en el que sí que se duplican las acciones armadas de la guerrilla a lo largo de buena parte del departamento, con motivo de la intensificación de los Frentes 10, 28 y 45, sobre el norte del

²⁶⁴ El año 1999 coincide con un fortalecimiento de las estructuras guerrillas de las FARC, especialmente en las principales ciudades del país. En el caso de Medellín, era de especial relevancia las milicias urbanas de las FARC que llegaron a la Comuna 13 (CNMH, 2011).

²⁶⁵ De esas 18 acciones armadas, una de ellas se realizó en Mesetas, si bien, el resto tuvieron lugar en San Juan de Arama (4), Acacias (3), Puerto Rico (2), Puerto Lleras (2), Lejanías (2), Granada (1) y Villavicencio (1), en el norte y centro departamental. En Meta siempre hubo presencia, especialmente desde 1996, del poderoso Bloque Oriental, y que en el departamento operaba a través de los Frentes 7, 9, 17, 26, 27, 31, 40, 42 y 43, ODHDIH (2014)

departamento, y a tenor de la disputa por el despojo de tierras con el ELN y el paramilitarismo, especialmente, en torno a la localidad de El Espino²⁶⁶.

Rompiendo con esta tendencia, tanto en los años 2000 como en 2001, se va a producir un importante incremento en las acciones armadas cometidas por las FARC, las cuales pasan a protagonizar 415 y 496 acciones armadas sobre 208 y 206 municipios respectivamente. Es decir, el incremento que acontece a partir de entonces es de más de 100 acciones armadas sobre apenas diez municipios más, lo cual evidencia una intensificación de la acción guerrillera; esto, aun cuando Colombia se encuentra, presuntamente, dentro de un proceso de negociación con el Gobierno.

Asimismo, básicamente esta transformación se traduce, sobre todo, en un recrudecimiento de las acciones de las FARC sobre Arauca y también en Norte de Santander, pero más importante, por su expansión, sobre el suroccidente del país, incluyendo al departamento amazónico de Caquetá²⁶⁷. Además, es a partir de este momento, concretamente, desde el año 2001, que puede incorporarse como variable de apreciación, la cuestión de concurrencia, sobre escenarios de activismo guerrillero, de presencia de cultivos ilícitos.

En el caso de Arauca, si en el año 2000 se registraban 50 acciones armadas cometidas por las FARC, en el año 2001 éstas llegan a duplicarse prácticamente, al darse un total de 94 acciones armadas, que hacen del pequeño departamento noroccidental, el más violento de todo el país. De hecho, en el año 2001, solo en Saravena se van a registrar hasta 47 acciones armadas²⁶⁸, mientras que otras 37 acciones armadas se van a dar lugar en Arauquita (16), donde en 2001 se van a contabilizar hasta 1.685Ha de coca, 14 en Tame (506Ha) y 7 en Fotul (338Ha).

Una tendencia contraria va a experimentar Santander en estos años de 2000 y 2001, cuando las acciones armadas decaen a 14, y toda vez que se incrementan en Norte de Santander (13), donde hasta entonces la presencia armada de las FARC había resultado prácticamente inexistente, con la presencia del Frente 33. Tal vez, ello responda a la incursión del paramilitarismo en el departamento en estos años, y también a la importancia que empieza a cobrar el departamento en términos de superficie objeto de cultivos ilícitos. Ello, porque no se puede pasar por alto que la presencia de las FARC en Norte de Santander se va a empezar a desarrollar, con 5 acciones guerrilleras, sobre el eje Sardinata (483Ha) - Tibú (7.468Ha),

²⁶⁶ Sea como fuere, Boyacá siempre fue menos relevante que Arauca, Casanare y Norte de Santander para los actores armados (ACNUR, 2007). Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5387527> Consultado el 26 de julio de 2015.

²⁶⁷ Caquetá, como en caso de Meta para el Bloque Oriental, era un enclave nuclear para las FARC y para el Bloque Sur, sobre todo, por el activismo de los Frentes 14, 15, 49 y 60. (Medina, 2011).

²⁶⁸ De hecho, en Saravena, se dieron 805 casos de desplazamiento forzado de los 2.055 casos del país. Asimismo, se cometieron hasta 12 combates por iniciativa de la fuerza pública y 65 homicidios violentos. El caso de Saravena es paradigmático por la confluencia de ELN, como se vio con anterioridad, pero también por la presencia del Frente 10, y también del Frente 45. Asimismo, no se puede obviar la llegada, por estos años, del Bloque Vencedores de Arauca, que sin duda harán del departamento un escenario de fuerte disputa. La tasa de homicidios en Arauca, por ejemplo, para el año 2000 fue de 85.66 toda vez que la tasa para Colombia fue de 65.76. ODHDIH (2014).

tan importante para la industria del narcotráfico. Con respecto a esto, el personero de la región del Catatambo señalaba que:

“En 1998 el municipio, y muy particularmente toda la región del Catatambo, estaban completamente dominados por las guerrillas, sobre todo las FARC y ELN, las cuales se beneficiaban de una absoluta ausencia de las Fuerzas Militares. De hecho, en mi municipio no había ni un solo policía. Imagínese. Sin embargo, le digo, aquí en el municipio y en la región en general había normalidad. No había confrontación. No había desplazamiento. Si es cierto que se presentaron homicidios, pero en todo caso selectivos porque no había enfrentamientos armados directos. Esto se mantiene hasta la llegada de Uribe, en el departamento había una presencia que fue creciente en cuanto a guerrilla por el aumento del narcotráfico. Había algún homicidio selectivo, pero no podíamos decir que hubiera violencia. Esta violencia se nos dispara con Uribe. Con él es que empezó a haber presencia de las Fuerzas Militares aunque, la verdad, la estación de policía era muy regular y la presencia policial era intermitente. No obstante, empieza a haber, por primera vez, presencia del Estado si es que se puede decir así. Una presencia reducida sobre todo a Policía. Lo peor es que a partir de entonces, y coincidiendo en el tiempo, llegan los paramilitares, que siempre estuvieron del lado de las Fuerzas Militares y entonces se nos dispararon los casos de homicidios y secuestros como nunca antes había tenido el municipio”. (EP 19, mayo de 2015).

Por otro lado, en lo que tiene que ver con Antioquia, el ELN va a seguir siendo la guerrilla predominante, pues en el caso de las FARC, tanto en el año 2000 (38) como en el año 2001 (49), el total de sus acciones armadas va a quedar muy alejado del centenar de acciones que va a protagonizar la guerrilla oriunda de Santander, el ELN.

Sea como fuere, las acciones de las FARC van a repartirse, especialmente, por el occidente del departamento – por ejemplo, Dabeiba va recibir en estos dos años 6 acciones armadas de las FARC, superando los 100 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes- y en algunos municipios del suroriente antioqueño donde, como se apuntaba con anterioridad, se reparte el dominio territorial con el ELN²⁶⁹.

Particularmente, es en el año 2001 cuando las 49 acciones guerrilleras de las FARC en Antioquia se reparten en 31 municipios de los cuales, empero, solo 5 acciones sobre 4 municipios evidencian algún nexo con la presencia de cultivos ilícitos: Anorí (188Ha), Remedios (424Ha), Tarazá (638Ha) y Valdivia (116Ha).

En cuanto a la región amazónica, los dos departamentos con mayor presencia guerrillera, van a ser Meta y Caquetá, que aunque en el año 2000 mantienen cifras de activismo guerrillero estables, con 15 y 16 acciones armadas respectivamente, a partir de 2001, en el marco de deterioro del Caguán, van a duplicar su activismo guerrillero. Así, para el año 2001, en el

²⁶⁹ Por ejemplo, en Sonsón se registran 6 acciones armadas y una tasa de homicidios de 102.58 homicidios por cada 100.000 habitantes que, a su vez, se acompaña de 41 muertes violentas, 5 acciones de la Fuerza Pública y 1.399 casos de desplazamiento forzado (ODHDIH, 2014).

departamento de Meta ya se concentran 31 acciones armadas que se distribuyen en 14 de los 29 municipios, mientras que en el departamento de Caquetá se llegan a las 34 acciones, las cuales terminan afectando a 13 de los 16 municipios del departamento, y que se ubican, muy especialmente, en torno a la capital departamental, Florencia.

No obstante, en el caso de Meta, por este entonces se trata del tercer departamento con mayor superficie de cultivos ilícitos, con más de 11.000Ha (11.425Ha), consolidándose como el departamento por antonomasia de control de las FARC²⁷⁰, más aún, a tenor de los réditos que supuso la desmilitarización de buena parte del mismo por efecto de la “zona de despeje”, aprobada bajo la negociación del Caguán.

En cuanto a Caquetá, en el año 2001 se registraron un total de 34 acciones armadas de las FARC, de las cuales 27 acciones armadas tuvieron lugar sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos. Dicho de otro modo, de los 13 municipios con presencia evidente de las FARC en Caquetá, todos con la excepción de Florencia, presentaron plantaciones de coca para ese año. Plantaciones cuyo volumen ascendió a 14.515Ha, haciendo del departamento, el de mayor superficie cultivada de coca de todo el país, solo superado entonces por Putumayo.

Como se podría esperar, y de acuerdo a esta tendencia, es en Putumayo, con una superficie objeto de cultivos ilícitos de 47.119Ha, que la totalidad de las acciones armadas (13) de unas FARC en alza, van a tener lugar, en su plenitud, en municipios con presencia de plantaciones de coca, lo cual invita a pensar en la conexión del activismo armado de las FARC y su presencia sobre estos particulares enclaves.

De otro lado, Vaupés y Casanare van a mantener estables sus registros de activismo guerrillero, muy secundarios para lo que es la región amazónica y la presencia de las FARC respecto de otros departamentos.

Con base en la tendencia descrita, además de Arauca, Meta y Caquetá como principales focos de intensificación guerrillera sobre la que se adiciona una yuxtaposición en cuanto a la propia geografía de los cultivos ilícitos, un tercer escenario que responde al incremento sustancial del activismo guerrillero se encontraría en el suroriente colombiano. Sobre todo, se va a incrementar muy sustancialmente en el departamento de Nariño, donde se pasa de 8 acciones armadas de 1999, a 28 y 24 acciones para los años 2000 y 2001, respectivamente. Tras esta intensificación puede encontrarse el hecho de que Nariño, para el año 2001, presenta una

²⁷⁰ El departamento del Meta, entre 1965 y 2000 fue un bastión de control armado y territorial, con presencia de 8 Frentes y, en buena medida, operando como sede de estructuras de gobierno de las FARC como Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, y Secretariado. De igual forma, la importancia de Meta reposa, fundamental, primero, en cuanto a la concentración de fuerzas, y también en términos simbólicos, si bien también es básico por la protección que ha brindado a los máximos dirigentes de la guerrilla, y en la acumulación de importantes recursos financieros.

superficie cultivada de 7.404Ha, sobre la cual, en el eje Tumaco – Barbacoas, se va a desarrollar la mayor parte de presencia guerrillera²⁷¹.

También en esta región del Pacífico habría que destacar al departamento de Cauca, donde en 2001 se contabilizan un total de 27 acciones armadas si bien, solo 6 de las mismas van a tener lugar en municipios con presencia de cultivos. Una presencia que, aunque reducida, será constante en el transcurso de la década, y siempre con un especial arraigo respecto de los enclaves más importantes en cuanto a producción de coca como son Argelia o El Tambo. Dos municipios que, en 2001, acumularán una superficie de cultivos ilícitos de 227Ha y 1.436Ha, respectivamente.

En menor medida se encontraría el Valle del Cauca, donde se presentarían 20 acciones armadas en el año 2000 y 13 en el año 2001, y donde el activismo armado respondería, sobre todo, a un importante y creciente activismo del paramilitarismo en el departamento, sobre todo, en lo que respecta al Bloque Calima - BC²⁷².

También, en los departamentos de interior del suroccidente colombiano, tanto en el departamento de Huila como en la región sur de Tolima, se van a mantener estables unos elevados niveles de presencia y continuidad en cuanto al activismo de las FARC. De hecho, entre 2000 y 2001 se computan 43 acciones en Tolima y 48 acciones en el departamento de Huila, que aunque no se traten de enclaves productores de coca, por su ubicación geográfica hacia la cordillera andina, el Pacífico y Ecuador los convierten en un corredor estratégico de alto valor agregado (Lair, 2004; Echandía 2004).

A diferencia de otros años, se evidenciaría en 2000 y 2001, un incremento sustancial de la violencia en algunos departamentos de la región Atlántica, aunque no comparables con los términos de violencia de Arauca o el corredor amazónico. Así, Bolívar, y concretamente los Montes de María, seguirán presentando cifras próximas a las 15 acciones armadas anuales. Por otra parte, el departamento de Cesar va a pasar de 7 acciones armadas, a 24 en estos dos años, y Magdalena duplicará la decena de acciones armadas que había mantenido desde 1998, para ascender hasta 19; ello, en buena medida, por los hostigamientos que se van a desarrollar

²⁷¹ Aunque en una de las entrevistas, sobre todo, a la personería de Nariño, aparece evidente el tema de la presencia de los grupos armados en el departamento, conviene precisar que Nariño tuvo arraigo guerrillero de las FARC desde la década de los ochenta. Inicialmente, como retaguardia y escenario de formación, para el frente 2, y con mayor notoriedad, también en la frontera con Cauca, el Frente 29. Más tarde, ya en la década del 2000, como respuesta al Plan Colombia, las FARC van a crear el Frente 64. Se pueden consultar los trabajos de Ávila (2009), MOE (2007), Observatorio DDR de la Universidad Nacional (2012) o Echandía (2006).

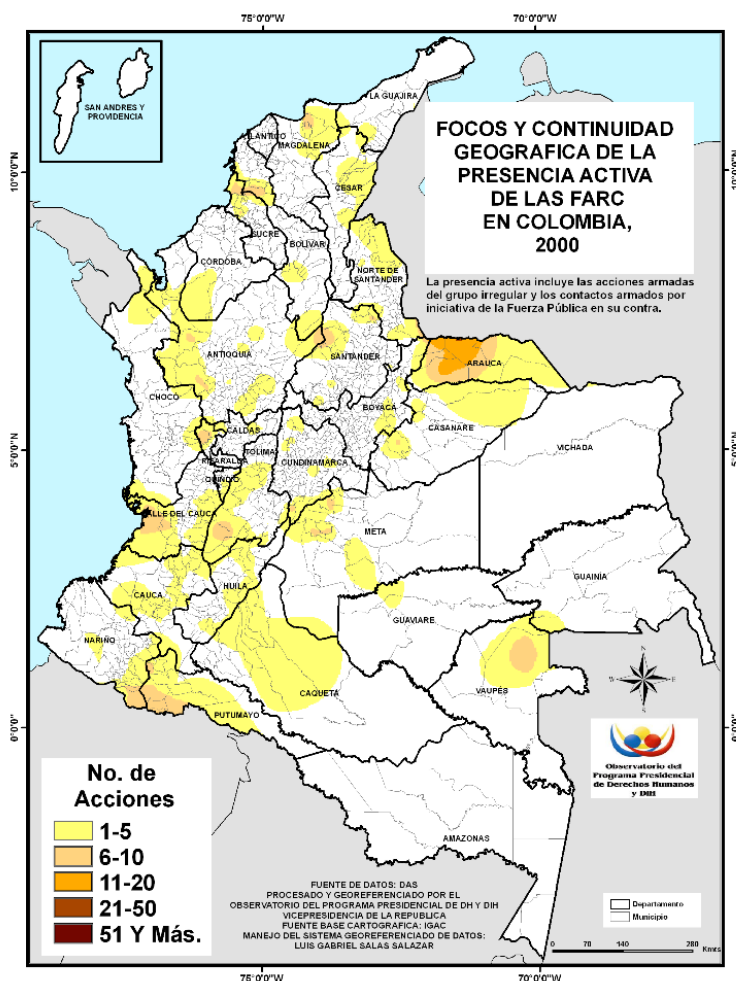
²⁷² Véase: <http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/3425-la-antesala-de-la-llegada-de-los-paramilitares-al-valle>

<http://www.verdadabierta.com/la-historia/2983-paramilitares-contaron-como-llegaron-las-auc-al-valle-y-cauca> Consultado el 27 de julio de 2015

Sea como fuere, una interesante aproximación regional se encuentra en Acosta, (2012). Más completa, si cabe, es la aportación de Castillo (2010). Finalmente, debe citarse el trabajo de Salazar, Castillo y Pinzón (2007).

a tenor del mayor activismo, en esta región del país, por parte del BN²⁷³. De otro lado, La Guajira, con 5 acciones en dos años, o Córdoba (4) mantendrán continuidad en sus registros.

Mapa 35: Presencia de FARC en Colombia en 2000



Fuente: ODHDIH (2014)

Finalmente, mientras que el eje cafetero, otrora conocido como Viejo Caldas, condensa en sus tres departamentos un total de 26 acciones armadas, se empieza a vislumbrar una mayor presencia activa, tanto en el departamento de Cundinamarca, donde las FARC protagonizan

²⁷³ Concretamente, para este caso, del Frente 19 de las FARC, el cual se encontraba en hostilidades con ELN, sobre todo, AUC.

47 acciones armadas, como en Boyacá, con 30 acciones armadas, dentro de una estrategia envolvente sobre Bogotá que se madurará, con mayor fuerza, en los años siguientes a 2001.

Así, y con base en lo descrito para estos años 2000 y 2001, en relación tanto al activismo de las FARC como a su posible conexión con respecto de escenarios relacionados con el cultivo ilícito, cabría señalar que la relación entre ambos factores no parece evidenciar una elevada correspondencia. Ello, porque para el año 2001, que es cuando inicia el monitoreo de droga de UNODC, sobre un total de 17 departamentos – Bolívar (17), Boyacá (18), Caldas (8), Casanare (13), Cesar (15), Chocó (5), Cundinamarca (22), Huila (25), La Guajira (4), Magdalena (19), Quindío (1), Risaralda (4), Santander (6), Sucre (13), Tolima (26), Valle del Cauca (13) y Vichada (3), se dan un total de 214 acciones armadas que, en inicio, quedarían por fuera de los enclaves de producción directa cocalera. Es decir, y en otras palabras, para 2001, de un total de 206 municipios con presencia de las FARC, solo en 62 se presentaría rastro de cultivos de coca (30.0%), de la misma manera que sobre 496 acciones, solo 194 (39.1%) responderían a esta misma lógica.

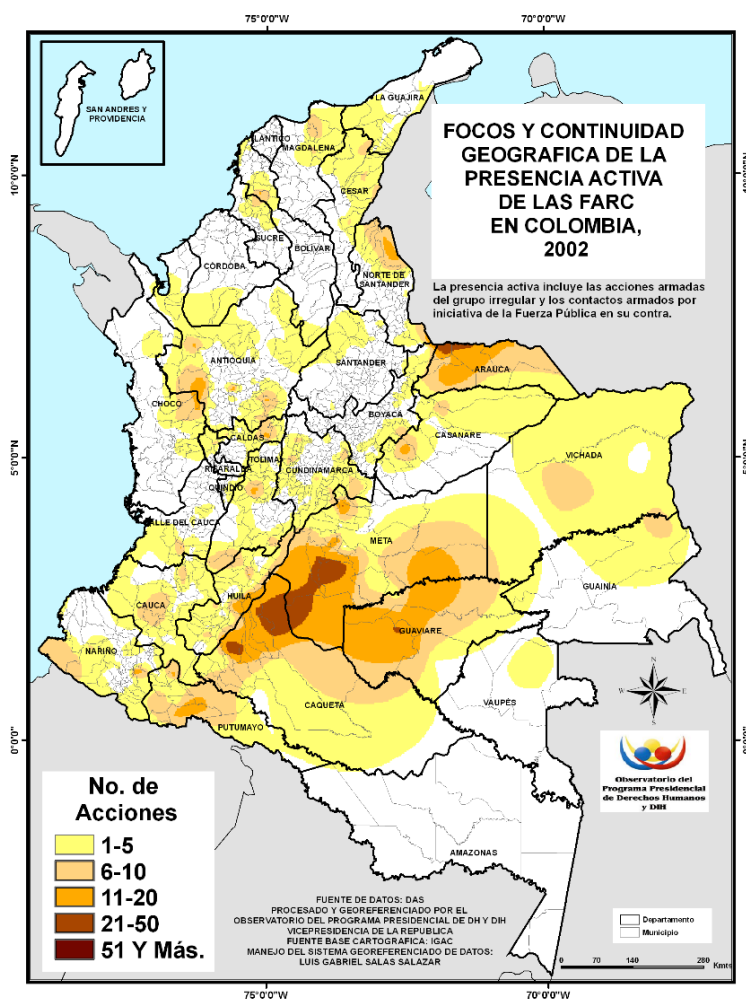
Ya en los años 2002 y 2003, se va a incrementar la intensificación anteriormente descrita, habida cuenta de una afán expansivo de las FARC, que se traduce en los mayores niveles de activismo armado y presencia territorial de su historia, tal y como se puede extraer de un grueso de efectivos que supera los 16.000 combatientes (Mindefensa, 2005: 28).

El contexto de esta situación, como se ha planteado, no es otro que la ruptura de la negociación del Caguán, y la respuesta activa a la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento en la capacidad de combate de la Fuerza Pública colombiana, que pasa por la PSD y el Plan Colombia, y que igualmente coincide con los mayores niveles de masacres y violencia fruto del auge paramilitar de las AUC.

En apenas un año, las acciones de las FARC se duplican, y durante 2002 y 2003 se superan las 1.000 acciones armadas anuales – se llega incluso a 1.278 en el año 2003. Igualmente, se superan ampliamente los 300 municipios de presencia activa de las FARC – sobre un total de 1.100-, de manera tal que la cobertura guerrillera llega a afectar a 30 de los 32 departamentos, dentro de un despliegue de fuerza de combate sin precedentes en las FARC pero, por otro lado, sin capacidad suficiente como para derrotar militarmente a la Fuerza Militar colombiana.

Bajo estas circunstancias, en el año 2002, de las 1.042 acciones armadas que desarrollaron las FARC, apenas el 30.8% se dieron en municipios con presencia de cultivos ilícitos. Igualmente, en lo que afecta a la estricta presencia municipal, tal relación se redujo a algo menos del 20% (19.0%), esto es, sobre 66 municipios dentro de un total de 346 que entonces presentaron alguna evidencia de activismo guerrillero.

Mapa 36: Presencia de FARC en Colombia en 2002



Fuente: ODHDIH (2014)

Igualmente, y ya en el año 2003, la presencia municipal de las FARC terminó por afectar a 313 municipios, de los que, únicamente, en una cuarta parte (24.6%) tal concurrencia se acompañó de presencia de cultivos ilícitos. Empero, si se toma como indicador a las acciones armadas, sobre este indicador sí que se arrojaría una tendencia creciente en cuanto a la posible relación de la violencia guerrillera de las FARC en connivencia con la existencia de plantaciones de coca, pues sobre un total de 1.278 acciones guerrilleras, un 44.5% (569) se habrían dado sobre enclaves con presencia de cultivos ilícitos.

De acuerdo a lo que muestran las cifras para los años 2002 y 2003, se puede destacar, *prima facie*, una intensificación sobre los mismos departamentos en los que, en 2000, y sobre todo, 2001, habían presentado un mayor volumen de activismo armado de las FARC. Es decir,

nuevamente, Arauca y en menor medida Norte de Santander, el departamento de Antioquia, la región amazónica y el suroccidente del país vuelven a presentar los mayores rubros de activismo guerrillero, aunque la tendencia expansiva va a ser, igualmente, sobre el centro del país y en la región Atlántica.

Es necesario precisar que se va a encontrar un crecimiento sustancial de las acciones insurgentes en la región central del país, especialmente en Cundinamarca y Boyacá, de acuerdo a la lógica que, especialmente desde 2001, tiene como firme propósito la intención de *asfixia* geográfico-económica de Bogotá (Ávila, 2008)²⁷⁴.

De hecho, a tal efecto, las FARC van a protagonizar en Cundinamarca 109 acciones armadas en 2002 y 69 acciones armadas en 2003, teniendo presencia en más de la mitad de los municipios (60) que conforman el departamento (116). Así, especialmente notable va a ser el activismo guerrillero en Bogotá, cuando en estos dos años protagonizan un total de 34 acciones armadas, lo cual supone un absoluto hito histórico en la medida en que ello representa la incursión de la guerrilla en el centro político y financiero más importante del país (MOE, 2007e).

De igual manera, y en continuidad con esta tendencia envolvente, la presencia de las FARC también va a crecer sustancialmente, tanto en Boyacá (66), como en los tres departamentos del eje cafetero: Caldas (41), Risaralda (26) y Quindío (15). En suma, estos cuatro departamentos van a experimentar, por ende, los mayores niveles de activismo de las FARC de su historia.

Igual sucede en la región Atlántica. Las acciones armadas se van a incrementar en casi toda la región durante los meses que transcurren entre 2002 y 2003. Sobre todo, y desde 2001, se acumula un crecimiento en Cesar (37), Magdalena (36), La Guajira (26) y Sucre (53) – nada relevante, sin embargo, en Atlántico (2) y Córdoba (1)-, y que termina traducándose en torno a un volumen total que asciende a 155 acciones armadas, casi en su totalidad, responsabilidad de parte del Bloque Caribe²⁷⁵ pero que, en todo caso, se encuentran muy alejadas de conexiones directas sobre escenarios de cultivos ilícitos, que para aquel entonces se encuentran sobre dominio paramilitar²⁷⁶.

La única excepción a esta realidad la representaría el departamento de Bolívar que, a la vez que experimenta un incremento sustancial de la violencia armada de las FARC (78), acumula

²⁷⁴ Esta tendencia se extiende, igualmente, a otras de las grandes ciudades del país, como Medellín, Cali, Pereira o Barrancabermeja.

²⁷⁵ El Bloque Caribe, en la actualidad conocido como “Martín Caballero”, tenía presencia en los departamentos de la costa Atlántica. Concretamente, en Bolívar, con los Frentes 35 y 37; en Cesar, con el Frente 41; en La Guajira, con los Frentes 19, 41 y 59 más la compañía móvil “Efraín Guzmán”; y en Magdalena y Sucre, con los Frentes 19 y 35, respectivamente. Este bloque es dirigido por Iván Márquez pero, con anterioridad, tuvo figuras guerrilleras significativos como Simón Trinidad o Martín Caballero (Medina, 2011).

²⁷⁶ Los enclaves productores así como los grandes latifundios y corredores, casi en su totalidad, para esta época, y tal como se verá en un capítulo posterior de esta tesis doctoral, van a ser objeto de control por el Bloque Norte (Reyes, 2009)

un importante crecimiento de la superficie objeto de cultivo ilícito. Ello, porque de un total de 2.735Ha en 2002, se llega a las 4.470Ha en 2003. Así, y dentro de esta tesitura, la presencia de las FARC en Bolívar se va a focalizar en los Montes de María (50)²⁷⁷, por un lado, y en el sur de Bolívar, por otro, muy particularmente en los municipios de Arenal, Cantagallo, Montecristo, Morales y San Pablo, donde se superan las 2.000Ha de cultivos ilícitos.

Ya en cuanto a los enclaves tradicionales, Norte de Santander y Arauca van a condensar un incremento sustancial de la violencia relacionada sobre los escenarios con presencia de plantaciones de coca. En el caso de Arauca, entre 2002 y 2003 se llega a la nada desdeñable cifra de las 209 acciones armadas, las cuales se ubican con especial importancia en Arauquita (70), y que es de paso, la localidad departamental con mayor presencia de cultivos de todo el departamento, con 1.941Ha. Sea como fuere, y con la excepción de Cravo Norte (0), la presión de la guerrilla se va a consolidar en todo un escenario que, empero, reduce significativamente su superficie cultivada de coca de 2.214Ha en 2002 a 539 Ha en 2003.

Más evidente si cabe va a ser en Norte de Santander, donde va a ponerse de manifiesto un fortalecimiento de las FARC como actor local, al llegar a las 45 acciones armadas entre 2002 y 2003 – hasta entonces el mayor registro conocido por esta guerrilla-, y que se van a condensar mayoritariamente sobre el municipio de Tibú (23), erigido como el centro nuclear de producción de coca del departamento, y que entre 2002 y 2003 concentra hasta 8.738Ha.

De hecho, quizá Norte de Santander uno de los departamentos en los que más se evidencia la potencial conexión entre violencia armada y persistencia de plantaciones de coca, al coincidir en más de un 90% la superposición de presencia municipal y acciones armadas con respecto a escenarios de producción de cultivo ilícito²⁷⁸.

Mientras, de otro lado, y en esta misma región noroccidental, quedaría Santander (13), en términos más relegados con respecto a otros enclaves y con respecto al ELN en el mismo departamento, y Casanare (47)²⁷⁹, donde hay un importante recrudescimiento, inspirado en buena medida por la intensificación del paramilitarismo²⁸⁰, pero en todo caso, desconectado directamente de los enclaves productores de coca.

De todos los escenarios con mayor presencia en la conexión violencia armada /narcotráfico – nororiente, región amazónica y suroccidente-, en los años 2002 y 2003, donde más visible

²⁷⁷ En la región de los Montes de María, las acciones guerrilleras de las FARC se distribuirían del siguiente modo: Carmen de Bolívar (34), Zambrano (2), San Juan Nepomuceno (2), El Guamo (1), Córdoba (5) y San Jacinto (6), ODHDIH (2014).

²⁷⁸ Este tipo de consideración se puede ver en el Anexo en el que se aprecia la relación entre presencia de cultivos y violencia armada de la guerrilla

²⁷⁹ Especialmente en torno a tres municipios que serían Aguazul (18), Yopal (8) y Chameza (5), ODHDIH (2014).

²⁸⁰ Conviene precisar que, es entre los años 2001 y 2003, que en Casanare se da un valor añadido para entender la violencia, pues dentro del propio paramilitarismo tiene lugar una confrontación por hacerse con la hegemonía regional, entre las AUC, a través de los Urabeños y las ACC, o Autodefensas Campesinas de Casanare, también conocidos vulgarmente como los Buitragueños (Vega, 2009).

se hace esa relación es claramente dentro de la región amazónica. En primer lugar porque es en los departamentos de Putumayo (106), Caquetá (224) y Meta (155) donde se van a superar las 25.000Ha de cultivos ilícitos.

Para el caso de Putumayo, con 13.725Ha en 2002 y 7.559Ha en 2003, las FARC en 2002 van a protagonizar 31 acciones armadas las cuales, todas, tienen lugar sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos²⁸¹. Incluso, en el año 2003, aun cuando no se mantienen niveles del 100%, esta relación mantiene una notable presentación, pues las FARC duplican la intensidad de sus ataques (71), y su concentración termina por afectar a 11 de los 13 municipios del departamento. De este modo, son prioritarios para las FARC municipios como Valle del Guamuez (850Ha), San Miguel (600Ha), Puerto Guzmán (2297Ha), Puerto Asís (1527Ha), Orito (352Ha) o Villagarzón (178Ha)²⁸².

Algo parecido va a suceder en el departamento de Caquetá, que entre 2002 y 2003 va a presentar los mayores niveles de violencia guerrillera de toda la década (224). Esta violencia va a estar mostrarse muy relacionada con la existencia de cultivos ilícitos, pues la totalidad de la presencia municipal así como de las acciones armadas de las FARC se va a concentrar sobre enclaves con cultivos ilícitos. Ello, especialmente sobre localidades como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Solita, Valparaíso, Belén de los Andaquies, El Doncello, El Milán, Curillo, La Montañita o Solano, donde solo en 2003 se superará, en suma, las 7.000Ha.

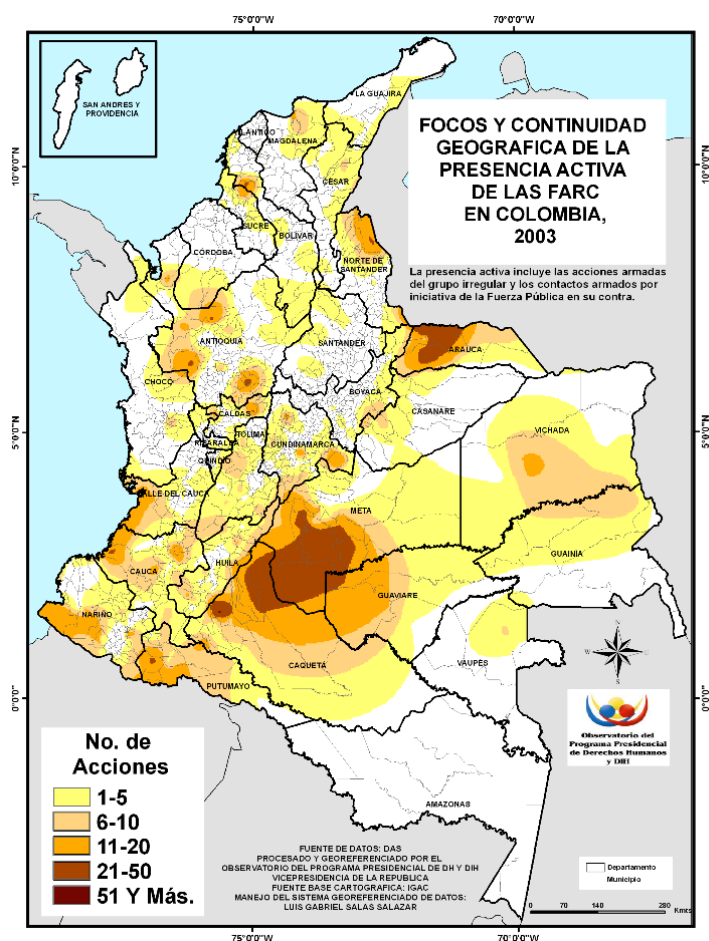
Por último, en el departamento de Meta, las lógicas van a resultar muy similares a las de Caquetá y Putumayo. En 2002, de las 87 acciones armadas protagonizadas por las FARC, 37 acciones se van a dar sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos. Sin embargo, a partir de 2003 esta relación se va a incrementar sustancialmente, toda vez que de las 68 acciones armadas, casi tres cuartas partes (49) van a tener lugar sobre enclaves con plantaciones de coca. Incluso, en 2003, por ejemplo, la presencia de las FARC va a gravitar en torno a localidades como La Macarena, Mapiripán o Vistahermosa, que son, con diferencia, los tres municipios productores más importantes del departamento²⁸³.

²⁸¹ En el desglose municipal, para el año 2002 la presencia de cultivos de coca se distribuye de la siguiente manera: Mocoa (122Ha), Orito (1.442Ha), Puerto Asís (2.898Ha), Puerto Caicedo (709Ha), Puerto Guzmán (2.494Ha), San Miguel (903Ha), Santiago (8Ha), Valle del Guamuez (1.553Ha) y Villagarzón (410Ha). UNODC (2014).

²⁸² Por acciones armadas de las FARC, estos municipios acumulan las siguientes acciones guerrilleras: Valle del Guamuez (3), San Miguel (19), Puerto Guzmán (7), Orito (20), Puerto Asís (7) y Villagarzón (1). ODHDIH (2014)

²⁸³ Para el año 2003, La Macarena va a producir 1.033Ha por 5.368Ha y 1.357 de Mapiripán y Vistahermosa, respectivamente, UNODC (2014).

Mapa 37: Presencia de FARC en Colombia en 2003



Fuente: ODHDIH (2014)

Cabe destacar que departamentos con menor presencia armada de las FARC, dentro del corredor amazónico, van a empezar a evidenciar signos de mayor activismo guerrillero, los cuales van a resultar especialmente significativos en Guaviare (26). Es allí donde entre 2002 y 2003 se computan máximos históricos en cuanto a la presencia de las FARC, básicamente en torno a Calamar y San José del Guaviare, y que en algunos escenarios va a resultar objeto de disputa con el paramilitarismo²⁸⁴ al superar entre ambos municipios las 8.000Ha de cultivo ilícito. Menor importancia, por otro lado, va a tener el departamento de Guainía que, no obstante, de prácticamente no registrar acciones armadas de la guerrilla, solo en 2003 va a

²⁸⁴ En Guaviare, como se verá con posterioridad, en 2003 va a haber un especial impacto, sobre todo en el norte departamental, del Bloque Centauros. Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centauros> Consultado el 27 de julio de 2015.

contabilizar hasta 7 acciones armadas, todas ellas, en torno a Barranco Minas (405Ha) e Inírida (137Ha).

En lo que respecta a la región del Pacífico, nuevamente los enclaves de mayor importancia son Cauca y Nariño. Sin embargo, no van a seguir siendo tan preponderantes como lo serán después en cuanto a su relación con los cultivos de coca. En el caso de Cauca, como en los años anteriores, las acciones armadas de las FARC (208) van a continuar dándose a lo largo de todo el departamento, aunque Argelia, El Tambo o incluso Piamonte van a ser centros neurálgicos de las acciones de las FARC, habida cuenta de que son los enclaves productores más importantes de Cauca²⁸⁵.

En Nariño, igualmente, entre 2002 y 2003 se van a dar hasta 134 acciones de las FARC que van a afectar a 34 de los 64 municipios del departamento, y aunque cerca de la mitad de las acciones (69) van a ser sobre municipios con cultivos, resulta evidente la presencia de la guerrilla sobre los municipios con mayor nivel de producción de coca. Municipios que, como Barbacoa o Tumaco, experimentarán hasta 23 acciones armadas mientras que, únicamente entre los dos, superan ampliamente las 7.000Ha en plantaciones de coca.

Del resto de departamentos ribereños con el Pacífico, tanto Chocó (27) como Valle del Cauca (64) van a poner de manifiesto, dentro de la tendencia creciente descrita de presión de la guerrilla, mayores niveles de violencia que, a pesar de todo, no se van a traducir en relación directa sobre escenarios con plantaciones de coca. Esto, habida cuenta que toda la acción armada sobre estos departamentos se va a hacer en municipios sin rastro aparente de cultivos ilícitos pero con otras conexiones, especialmente de minería ilegal para el caso de Chocó, y de disputa territorial con el paramilitarismo, en el departamento de Valle del Cauca.

Siguiendo con este escenario suroccidental, en cuanto a los departamentos de interior, dos enclaves con alta tradición guerrillera como son Huila o Tolima, tampoco van a ser ajenos a esta presión creciente. En el caso de Huila, las acciones de la guerrilla se van a incrementar exponencialmente, al triplicarse y ascender a las 82 acciones armadas en el año 2002, y 70 acciones armadas en el año 2003.

Así, la presencia de las FARC durante estos dos años se va a concentrar, principalmente, en torno a cinco municipios: Gigante (15), Algeciras (13), Pitalito (14), Suaza (10) y, sobre todo, Neiva (23), la capital departamental. Junto a la tradicional región de las FARC, ubicada en el sur de Tolima, paulatinamente la presencia de la guerrilla se va a ir expandiendo en estos dos años a lo largo, prácticamente, de todo el departamento. Así, se tiene constancia de presencia guerrillera en 28 de los 47 municipios del departamento, con 37 acciones armadas

²⁸⁵ El departamento de Cauca acumuló 2.121Ha en 2002 – Balboa (218Ha), El Tambo (698Ha), Guapi (102Ha), López (98Ha), Piamonte (818Ha), Santa Rosa (3Ha) y Timbiquí (185Ha). En el año 2003 esa superficie ascendió a 2.153Ha, en torno a Argelia (93Ha), Balboa (94Ha), El Tambo (187Ha), Guapi (146Ha), Piamonte (651Ha), Timbiquí (253Ha), López (15Ha), Mercaderes (3Ha) y Bolívar (1Ha). (UNODC, 2014).

en 2002 y 59 acciones en 2003, que, en esta ocasión, gravitan alrededor de la capital departamental, Ibagué (12) y los municipios de Dolores (10), Murillo (8) y Planadas (7).

Finalmente, quedaría el departamento de Antioquia que, igualmente, va a computar los mayores niveles de violencia pues, solo entre 2002 y 2003, casi se alcanzan las 200 acciones armadas de parte de las FARC (193). Esto, sin embargo, bajo una conexión relativa respecto de los escenarios cocaleros pues el activismo guerrillero apenas se condensa a municipios como El Bagre (524Ha en 2003), Ituango (330Ha entre 2002 y 2003), Tarazá (537Ha en 2003) y Yondó (144Ha entre 2002 y 2003).

Con otras palabras, la presencia geográfica de las FARC se va a concentrar, primero, en el suroriente antioqueño, más alejado de la presencia de los cultivos ilícitos²⁸⁶, y muy especialmente en municipios como San Carlos o San Luis - donde se van a registrar 30 acciones armadas-, y después, en el norte, en municipios como Ituango (25) o Dabeiba (9), de claro predominio de las FARC²⁸⁷.

Lo cierto es que, a diferencia de lo descrito, para los años que transcurren entre 2004 y 2006, si bien el activismo guerrillero dista del millar de acciones armadas de los años inmediatamente anteriores, la fuerza de las FARC sigue arrojando unos números más que relevantes. Es decir, se va a mantener inalterada la cifra de 700 acciones. Unas acciones que cada vez más se van a ir concentrando con mayor notoriedad en el Pacífico, en el nororiente, y en el tradicional corredor amazónico controlado por las FARC. Estos tres escenarios, incluso, seguirán siendo los enclaves prioritarios una vez que empiecen a decaer las cifras de la violencia, con especial énfasis, entre 2007 y 2008, en buena medida por su consolidación como los escenarios productores de coca más importantes de todo el país²⁸⁸.

Iniciando por el nororiente colombiano, en Arauca, las acciones armadas de las FARC van a decaer a los niveles de finales de los noventa, próximos a la media centena de acciones al año. De hecho, en estos tres años que transcurren entre 2004 y 2006, se van a registrar un total de 125 acciones armadas, focalizadas principalmente en Tame (55), Arauquita (28) y Fotul (19). Con la excepción de la localidad de Arauca, las FARC van a tener presencia en todos los municipios del departamento dentro de los cuales, la presencia de cultivos ilícitos va a ser una constante. De hecho las tres ciudades mencionadas van a ser fundamentales en la articulación que imbrica violencia armada y narcotráfico pues, en estos tres años,

²⁸⁶ San Carlos o San Luis son municipios de una altísima tradición guerrillera que va más allá de la presencia de cultivos ilícitos, la cual solo pasa a ser importante a partir del año 2006.

²⁸⁷ Especialmente, de parte de los Frentes 5, 18 y 58 del Bloque Caribe. Para el caso de Ituango, un estudio pormenorizado se puede encontrar en el trabajo de Valencia (2012).

²⁸⁸ Entre 2007 y 2008, y de acuerdo a las cifras facilitadas por UNODC (2014) se van a acumular, entre los años 2007 y 2008, los siguientes niveles en cuanto a superficie de cultivo ilícito: Arauca (2.563Ha), Norte de Santander (4.832Ha), Meta (15.911Ha), Caquetá (10.621Ha), Putumayo (24.471Ha), Nariño (39.871Ha), Cauca (9.590Ha) y Chocó (3.874Ha), UNODC (2014)

Araucuita va a acumular una superficie cultivada de cerca de 1.000Ha, muy por encima de las 250Ha que presentan Fotul y Tame respectivamente.

Para el caso de Norte de Santander, si en 2004 se registraban apenas 14 acciones armadas, en 2005 éstas van a ascender hasta las 61 y en 2006 van a ostentar la cifra récord en este departamento, al darse un total de 81 acciones. Coincidiendo con el *aggionarmiento* del ELN, y la pérdida de presencia en Arauca, va a ser este departamento, especialmente importante en lo que a cultivos ilícitos se refiere, un valor en alza para las FARC. Tanto es así que, poco a poco, se va a concentrar una ingente presencia de las FARC, muy particularmente, en la región del Catatumbo, y hasta el punto que municipios como Tibú, en estos años, van a sufrir hasta 81 acciones armadas – de las cuales 31 se van a dar solo en el año 2006²⁸⁹.

En lo que afecta al eje amazónico que transcurre por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, este último va a ser el que experimente un incremento más importante en lo que a violencia de la guerrilla se refiere. Ello, al darse en estos años los mayores números de presencia de las FARC en la historia reciente del departamento, con 64 acciones armadas en 2004, 89 acciones armadas en 2005 y 92 acciones armadas – record histórico- en el año 2006. Por otro lado, lo cierto es que las acciones de las FARC decaen en el eje Meta-Caquetá, si bien no por ello dejan de ser nucleares en la composición geográfica de la guerrilla. En Meta, en estos tres años, se dan un total de 188 acciones armadas, especialmente en municipios clave y tradicionalmente dominados por las FARC como son Puerto Rico (41), Vistahermosa (32), Mesetas (18) y Puerto Lleras (18).

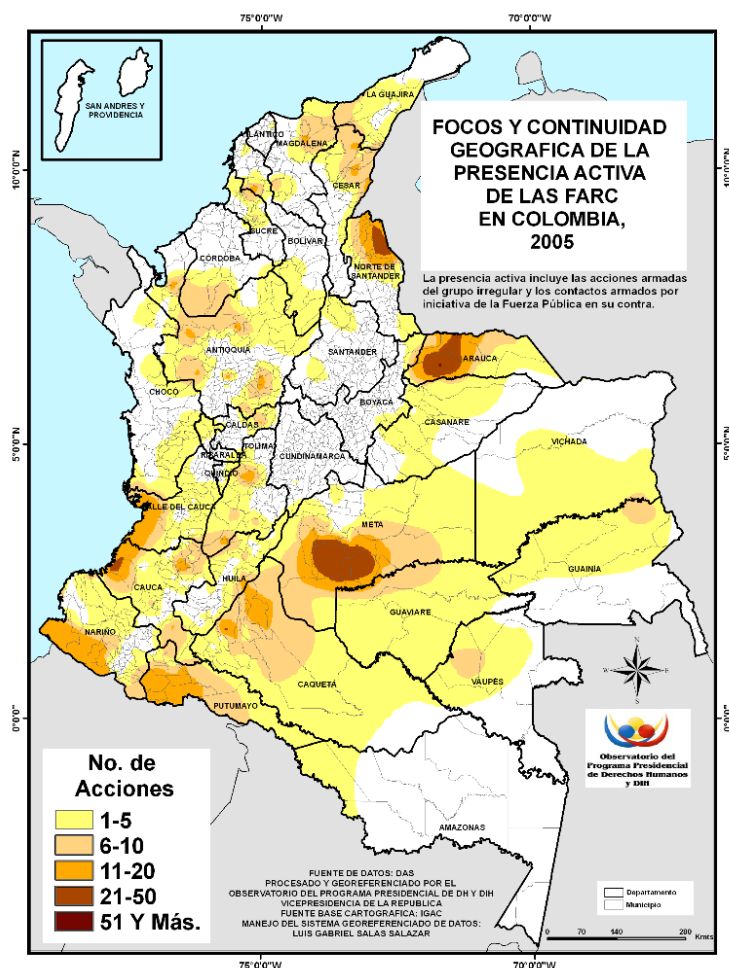
Asimismo, se va a ir desarrollando una mayor relación entre la presencia activa de las FARC y la concurrencia de cultivos ilícitos de manera tal que, por ejemplo, de las 147 acciones que tienen lugar entre 2004 y 2005, el 82.2%, es decir, 122 acciones, van a tener lugar sobre municipios con importante presencia de plantaciones de coca, como es el caso de Puerto Rico, Puerto Lleras, La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia o La Uribe; seis municipios que concentraría buena parte de la superficie cultivada de un departamento que registró 18.740Ha en 2004, 17.305Ha en 2005 y 11.063Ha en 2006.

²⁸⁹ En el Catatumbo la presencia de las FARC se desarrolla, sobre todo, a través del frente 33 pues el segundo frente relevante en la región, el frente 45, fue concebido para garantizar presencia militar en la región del Sarare – en los municipios de Pamplona, Chigatá, Silos, Mutiscua, Toledo, Toledito, La Laguna, Samore y San Bernardo de Bata (Movimiento de Víctimas, 2006) Véase:

<http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/NortedeSantander.pdf> Consultado el 27 d ejulio de 2015.

Particularmente, en la región del Catatumbo, el municipio con mayor activismo guerrillero es Tibú (31), seguido de Ábrego (3), Convención (1), El tarra (7), Hacarí (4), Teorama (6) y San Calixto (5), ODHDIH (2014).

Mapa 38: Presencia de FARC en Colombia en 2005



Fuente: ODHDIH (2014)

En el lado de Caquetá, entre 2004 y 2006 se van a contabilizar un total de 125 acciones armadas, de manera que se identifica una importante reducción con respecto al activismo armado de años anteriores. Empero, a pesar de ello, continúa siendo especialmente significativa la presencia en torno a la capital departamental, Florencia (27)²⁹⁰. En estos tres años se va a computar hasta una superficie de cultivos ilícitos que asciende a las 6.500Ha en 2004, y las 4.967Ha y 4.988Ha, respectivamente, en 2005 y 2006, siendo en municipios como Curillo (505Ha), La Montaña (796Ha), San José del Fragua (1.079Ha) y San Vicente del

²⁹⁰ El Florencia, el mayor activismo de parte de las FARC tiene lugar a partir del activismo del Frente 14, 15 y 60, ya que el Frente 3, por ejemplo, actúa más en los límites de Caquetá con Huila, y el Frente 49, hacia el departamento de Cauca.

Mapa 39: Presencia de FARC en Colombia en 2006



322

Villagarzón²⁹¹. En todos ellos, tanto la presencia de las FARC como la concurrencia de plantaciones cocaleras van a ser una constante, al ser los municipios donde se focaliza la mayoría de unos cultivos que en Putumayo ascienden a una extensión de 4.386Ha en el año 2004, 8.963Ha en 2005 y, por último, en 12.254Ha en el año 2006.

Mapa 40: Densidad de los cultivos en Colombia en 2006



Fuente: UNODC (2007: 10)

²⁹¹ Para los años que transcurren entre 2004 y 2006, solo entre Leguízamo (10), Orito (51), Puerto Asís (36), Puerto Caicedo (22), Puerto Guzmán (5), San Miguel (41), Valle del Guamuez (28) y Villagarzón (15) se concentra el 84.8% de las acciones de las FARC en Putumayo. Asimismo, estos municipios concentran sobre un total de superficie cultivada de 25.605Ha, condensarían 25.352Ha, es decir, un 99%. ODHDIH (2014), UNODC (2014).

Muy alejados de estos términos de violencia y preponderancia de las FARC estarían los departamentos, en primer lugar, de Vaupés, donde, a pesar que se van a registrar 20 acciones armadas entre 2004 y 2005, a partir de 2006 dejará de ser un enclave con presencia significativa de la guerrilla. Lo mismo para Casanare, donde en los dos primeros años se dan hasta 29 acciones armadas, decayendo a 3 para el año 2006, en lo que será una tendencia de reducción de las FARC en cuanto a un activismo guerrillero que, incluso, persiste muy minoritariamente en la actualidad. Para el caso de Guaviare, se va a reducir la presión armada de las FARC (21), aunque ello no va a afectar a la concurrencia sobre espacios con presencia de narcotráfico. De esta manera, se concentra la presencia de las FARC, en torno a las localidades del departamento más vinculadas a la producción de coca, tal y como es el caso de San José del Guaviare o El Retorno, ambos, con registros que superan las 3.000Ha anuales.

En lo que tendría que ver con el Pacífico colombiano, debe mencionarse que en el departamento de Cauca ya se advirtió del fuerte incremento que se experimenta en cuanto a un importante repunte en la violencia unilateral de la guerrilla. Sin embargo, de un total de 309 acciones armadas, solo 48 se van a concentrar sobre enclaves con cultivos ilícitos. Dicho de otro modo, de un total de 31 municipios sobre los que se va a registrar presencia de las FARC, solo 6 van a tener presencia de las FARC.

No obstante, el conjunto total de superficie objeto de cultivos en el departamento oscilará entre las 1.266Ha en 2004, ascendiendo a 2.705Ha en 2005 y estabilizándose en las 2.104Ha en el año 2006. Esta circunstancia ameritaría plantear al menos dos cuestiones. En primer lugar, que la presencia de las FARC en Cauca va a concentrar presencia, especialmente en el municipio más importante en materia de cultivos ilícitos, como es El Tambo, y en menor medida también en Piamonte, donde se da la mitad de los cultivos del departamento. También se encontrarían en Timbiquí, el gran tercer municipio más afectado por este problema pero con una presencia menor que las anteriores en el transcurso de toda la década²⁹².

De otro lado, como se verá, cabe adelantar que Cauca, con el paso de los años, va a responder a una doble lógica, tanto de mayor presencia y presión armada de las FARC, como de una mayor evidencia de cultivos ilícitos, sobre todo porque su superficie total de los mismos se duplicará en apenas unos años.

Respecto de Nariño, dentro de la tendencia ya descrita de acumulación más intensiva que extensiva, se van a presentar los niveles más elevados de violencia de su historia – solo equiparados en la actualidad - en tanto y en cuanto se condensan en estos tres años hasta 262 acciones armadas. Un número muy significativo de acciones que, como en años anteriores, van a responder a lógicas nucleares en torno a los municipios con mayor número de hectáreas

²⁹² La presencia dominante en Timbiquí, que a su vez tiene una gran importancia por recursos de oro y platino, ha sido mayoritariamente objeto de presencia, primero, del Frente Pacífico, del Bloque Calima, de las AUC, y después de Los Rastrojos en connivencia, en todo caso, con las FARC a través de los Frentes 29 y 60 (González, 2013).

de cultivos ilícitos, y que siguen siendo Barbacoas y Tumaco, y después, en menor medida, otras localidades como Magüí Payán, Ipiales o Cumbitara.

Traducido en cifras, Barbacoas durante estos tres años va a sufrir hasta 23 acciones armadas – 17 solo en 2006- dados sus notables niveles de cultivos ilícitos, los cuales se traducen en 1.469Ha en 2004, 1.920Ha en 2005 y 1.460Ha en 2006. Algo similar sucedería con la segunda ciudad departamental y uno de los puertos de mar más importantes del país, Tumaco, en el que se van a registrar hasta 42 acciones armadas, y donde si entre 2004 (4.806Ha) y 2005 (4.004Ha) presenta una de las cifras más elevadas de todo el país, en el año 2006 se incrementan si cabe más, alcanzando las 7.045Ha para ser el municipio con más cultivos del país. Finalmente, en Ipiales se darán 7 acciones armadas dentro de un municipio con una media anual próxima a las 500Ha cultivadas de coca al año; Magüí Payán, con 1.102Ha en 2006 va a presentar hasta 6 acciones armadas, y ya en menor medida estaría Cumbitara, con 4 acciones guerrilleras, va a acumular hasta 939Ha en el transcurso de estos tres años.

En otros departamentos del Pacífico se destacan también importantes repuntes de violencia, como en el departamentos de Valle del Cauca (206), donde el control y presencia sobre municipios con cultivos ilícitos se va a debilitar respecto de años anteriores aunque se erige como un departamento con una elevada intensificación, tanto por el creciente activismo paramilitar²⁹³ como por el impacto de la PSD.

Igualmente sucedería en Chocó (43), donde los mayores niveles de violencia de la guerrilla sobre el departamento tampoco se van a traducir en una presencia, ni mucho menos significativa, sobre escenarios con presencia de plantaciones ilícitos.

En cuanto a los dos departamentos tradicionales del interior de la región suroccidental se van a desarrollar lógicas contradictorias. Ello, porque mientras en Huila (99), acontece un relativo retroceso de la presión de la guerrilla, en Tolima (122) tiene lugar un ciclo expansivo de la misma que, en todo caso, tanto para uno como para otro departamento, tienen lugar sobre lógicas, en principio, alejadas del control directo sobre los escenarios productores de coca pero no de los corredores estratégicos de distribución.

En última instancia, quedaría el caso de Antioquia, donde sí que se va a apreciar un importante retroceso en el accionar de la guerrilla, con 157 acciones armadas en estos tres años – cabe recordar al respecto, que en el año anterior, en 2003, se computaron 125 acciones armadas. Además, con la excepción de municipios ya destacados con anterioridad como Anorí, Remedios o Tarazá²⁹⁴, como sucediera en Huila o Tolima, la presencia de las FARC

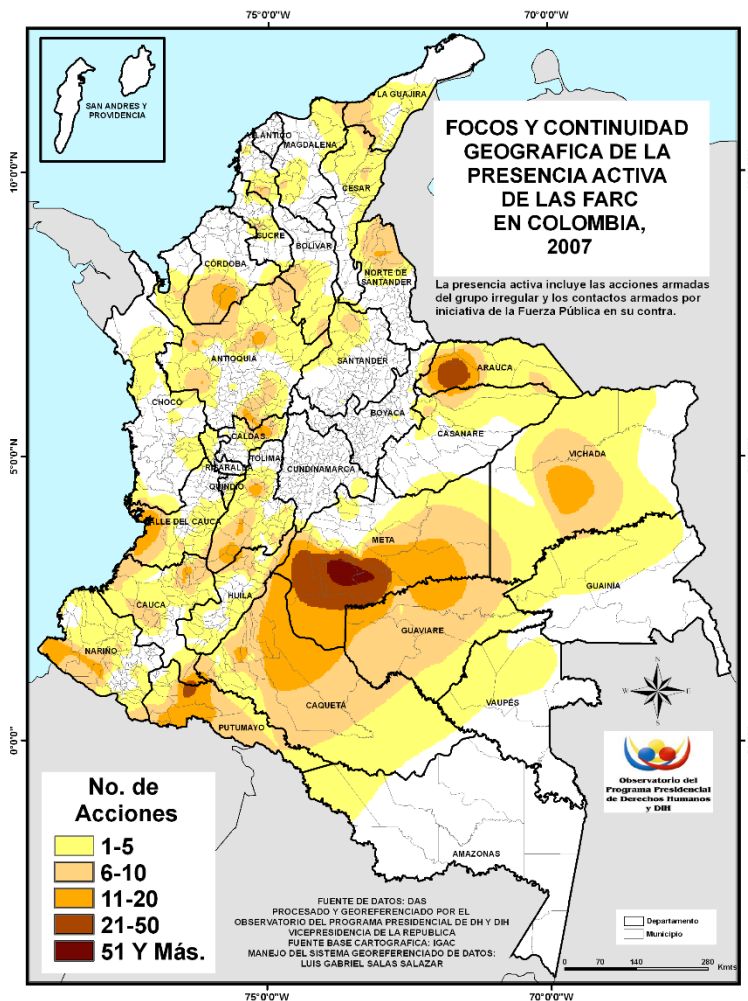
²⁹³ Como ya se señaló, a través del Bloque Calima.

²⁹⁴ Conviene recordar que estos tres municipios, dentro de las dinámicas de Bajo Cauca, en la que se incluye Tarazá, se encuentran en una subregión en la que, tradicionalmente, se han consolidado la mitad de los cultivos de todo el departamento (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

Sobre las dinámicas particulares de Bajo Cauca, no se pueden pasar por alto la importancia extractiva que, como es consabido, es la mayor explotación aurífera, desde los años ochenta, del departamento. Véase:

termina por afectar a municipios en su mayor parte alejados de la producción directa de cultivos ilícitos. Esto, en buena medida, porque será más bien el paramilitarismo quien se va a encargar de controlar la mayor parte de los enclaves productores dentro de un departamento que aun, en estos años, y a pesar de la PSD y el Plan Colombia, va a mantenerse próximo a las 6.000Ha anuales de cultivos ilícitos.

Mapa 41: Presencia de FARC en Colombia en 2007



Fuente: ODHDIH

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=597:el-codiciado-oro-y-el-bajo-cauca-&catid=78:general&Itemid=176 Consultado el 27 de julio de 2015.

Mapa 42: Densidad de los cultivos de coca en Colombia, en 2007



Fuente: UNODC (2008: 10)

A diferencia de lo anterior, y como se verá en el siguiente capítulo con mayor detenimiento, en la estrategia envolvente sobre Bogotá, ya señalada en este capítulo de la tesis, las FARC, fruto sobre todo por el impacto de la PSD, van a empezar a debilitarse de manera notable. De hecho, en estos tres años, su presencia se relega drásticamente sobre Boyacá (17), Risaralda (17) y Quindío (18). Asimismo, prácticamente desaparecen de Bogotá (7) y, en general, de todo del departamento de Cundinamarca (2). La única salvedad que rompería esta lógica de repliegue de la guerrilla sobre la región central se encontraría en el departamento cafetero de Caldas, donde sí que se mantendrá un recrudecimiento de la violencia, al computarse hasta 56 acciones armadas, principalmente en los municipios de Samaná (20), Pensilvania (11) y

Marulanda (9) que, en cualquier caso, responden a una lógica bien diferente de la conexión directa con el tráfico de drogas²⁹⁵.

Una tendencia similar en estos años transcurre en la costa Atlántica, donde Magdalena (0), Atlántico (9) – especialmente Barranquilla (4), y Córdoba (7) presentan niveles de escasa presencia de las FARC en comparación con Cesar (23) y La Guajira (21) que, igualmente experimentan una reducción considerable de la misma²⁹⁶. Los dos reductos con mayor presencia guerrillera, aunque también afectados en lo que serán los años siguientes, son el departamento de Bolívar (71), con especial mención, como en los años anteriores, a los Montes de María²⁹⁷, y el departamento de Sucre, que entre 2004 y 2005 registran 63 acciones armadas si bien, ya en 2006 las acciones decaerán hasta 7.

Fuera de los enclaves mencionados, lo que se va a encontrar es una paulatina menor presencia de la guerrilla, que inicia su fase de repliegue, aunque ésta será mucho más evidente, como ya se ha señalado, entre 2007 y 2008 cuando la tendencia se agudice, al caer a mínimos históricos el activismo de unas FARC que protagonizan 414 acciones en el año 2007 y, el mínimo histórico de 381 en el año 2008.

Esta reducción de la presión armada de las FARC, como es obvio, se va a hacer evidente a lo largo de todo el país. Así, en todos los departamentos se va a apreciar una reducción importante de las acciones guerrilleras empezando por el nororiente colombiano.

En Arauca, la presión armada de las FARC cae a 15 acciones armadas en estos dos años, la mayoría en torno a Tame (11), que presentará apenas 297Ha en 2007 y 96Ha en 2008.

En Norte de Santander, donde se habían consolidado como actor hegemónico rozando la centena de acciones armadas solo en 2006, entre 2007 y 2008, van a decaer hasta las 36. De las mismas, 32 acciones se van a dar sobre escenarios con presencia de coca. Especialmente significativo, a tal efecto, va a ser el municipio de Tibú, que concentrará 24 acciones, toda vez que presentará una superficie cultivada de 702Ha en 2007 y 1.033Ha en 2008. Igualmente

²⁹⁵ Esta región siempre ha sido más importante por servir de “corredor de movilidad para el narcotráfico” y relaciones con el campesinado cafetero, sobre todo, a partir de la crisis del café, que permitió a las FARC la posibilidad de encontrar comunidades de legitimación, a inicios de los noventa (MOE, 2007j :3)

²⁹⁶ En el caso de Cesar la tendencia decreciente es evidente mientras que en La Guajira, si bien a partir de 2006 se reducen drásticamente las acciones de las FARC, mientras que en 2004 solo se computa una acción armada, y en 2005 se registran 4 acciones, es en 2006 cuando las acciones se disparan a 16. Ello, porque el Frente 59 va a asumir varias acciones contra el Bloque Norte si bien, traducidas en su mayoría en forma de ataques a la infraestructura eléctrica, férrea y domésticas de cooperativas próximas a los nexos con Jorge 40. (Ávila, 2014)

²⁹⁷ Para el caso de los Montes de María de Bolívar se destaca la presencia de las FARC en El Carmen de Bolívar (22), Zambrano (4), María La Baja (1), El Guamo (5), San Jacinto (8), Córdoba (3), San Juan Nepomuceno (12). Del lado de Sucre, la parte de los Montes de María, igualmente copada por los frentes 35 y 37 de las FARC se concentra la presencia guerrillera del departamento. De hecho, de las 63 acciones guerrilleras en Sucre, entre 2004 y 2006, Morroa (5), Los Palmitos (4), Chalán (4), Ovejas (8), San Onofre (4) y Toluvié (2), casi la mitad, 27, tienen lugar en los Montes de María sucreños, ODHDIH (2014).

significativa va a ser la presencia en El Tarra (6), con un total de cultivos que asciende a las 764Ha en 2007 y las 480Ha en 2008.

En adición, además, será a partir de 2008 cuando, definitivamente, el grupo armado abandone su presencia territorial en el departamento de Santander²⁹⁸ y en Casanare resulte igualmente *invisibilizada*, con apenas 2 acciones armadas.

De una manera menos evidente, en Antioquia también se van a reducir las acciones armadas de las FARC aunque se van a mantener constantes, en torno a las 40 acciones armadas. Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, la presencia del grupo guerrillero se va a concentrar en menos municipios, pero de un modo más intenso. Es más, desde 2008 sobre todo, lo que se va a apreciar es una mayor proyección de las FARC sobre el norte antioqueño y el bajo Urabá. En 2007 se va a dar una acción armada en Anorí (553Ha) y una acción armada en Cáceres (552Ha) como vestigios más significativos en cuanto a municipios con presencia de coca (García de la Torre y Aramburo, 2011).

Empero, de manera contraria, el año 2008 se va a consolidar como el momento en que se hace más visible en relación a lo transcurrido en la década, la presencia de las FARC sobre escenarios productores de coca. Tanto es así, que se van a presentar 3 acciones armadas en Ituango (228Ha), 2 acciones en Nechí (328Ha), y más significativas, 7 acciones sobre Tarazá (931Ha) y 6 acciones sobre Valdivia (409Ha). Cuatro municipios que, rompiendo con las dinámicas territoriales del pasado, son donde se van a concentrar la mayoría de las acciones de la guerrilla desde este año 2008, hasta la actualidad.

Por otro lado, la mayor correspondencia sobre violencia armada y cultivos, nuevamente se va a presentar en la región amazónica y en el suroccidente del país. De este modo, y aunque el repliegue armado también va a resultar evidente en la región amazónica, el trinomio conformado por Meta, Caquetá y Putumayo va a seguir erigiéndose como escenario fundamental para las FARC, mientras que en Vaupés o en Casanare, la presencia pasa a ser más que nada testimonial.

En Meta, de las 31 acciones armadas 27 acciones van a ocurrir sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos, siendo significativa la presencia en Vistahermosa (5), con 3.792 en 2007 y 1.487 en 2008, y en Mapiripán (6), con 2.230Ha y 2.180Ha para 2007 y 2008 respectivamente.

Por su parte, en Caquetá, de un total de 34 acciones armadas, la totalidad, como en años anteriores, tienen lugar sobre localidades con presencia de plantaciones de coca y dentro de un departamento que, prácticamente, resulta controlado en su conjunto por la guerrilla. De

²⁹⁸ Véase: <http://www.elspectador.com/impreso/articuloimpreso111609-se-desvanecen-farc> Consultado el 28 de julio de 2015.

hecho, la superficie acumulada con presencia de cultivos ilícitos en Caquetá, para el año 2007 iba a ascender hasta las 6.318Ha en 2007, para nuevamente reducirse a 4.303Ha en 2008²⁹⁹.

Finalmente, en Putumayo sobre un total 51 acciones armadas, como en Caquetá, todas quedarían concentradas en enclaves con registro de cultivos ilícitos. Especialmente notoria sería la presencia sobre Puerto Asís (15), con 4.531Ha en 2007 y 2.627Ha en 2008; San Miguel (8), con 867Ha en 2007 y 481Ha en 2008; y Orito (8), que presentará 1.740Ha en 2007 y 1.269Ha en 2008. Mientras, en el resto de departamentos del corredor amazónico, en Vichada (1), Vaupés (0) y Guainía (1), la acción armada de la guerrilla va a brillar por su ausencia, con la salvedad del departamento de Guaviare³⁰⁰, que con 13 acciones armadas concentrará toda su presencia en municipios con cultivos ilícitos que, entre 2007 y 2008 van a ascender a un total de 9.229Ha y 6.629Ha respectivamente³⁰¹.

En lo que afecta al Pacífico colombiano y, además, los departamentos de Huila y Tolima en el suroccidente, esta región se van a consolidar como el principal escenario de presencia armada de las FARC. Tanto es así, que en estos dos años de repliegue estratégico de la guerrilla, Cauca va a registrar la nada desdeñable cifra de 142 acciones armadas, a la vez que Nariño va a acumular otras 107 acciones armadas y Valle del Cauca 74. Los departamentos de Huila (51) y Tolima (60) también van a entrar en dinámicas en las que, hasta 2012, se registrará una continuidad estable en el grueso de sus acciones armadas, en todo caso, comprensible, como se señalaba, más por su alto valor estratégico de conexión con la prioritaria región del Pacífico colombiano que por tratarse de enclaves productores.

En el caso de Nariño, por ejemplo, de las 107 acciones armadas, 82 se van a concentrar sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos. Al respecto, es destacable la presencia en Tumaco (23), con una superficie cultivada que entre 2007 y 2008 supera las 5.000Ha, o en los municipios colindantes de Roberto Payán y Barbacoas (9), donde acumulan en estos dos años hasta 9.000Ha de plantaciones de coca.

En cuanto al departamento de Cauca, y a pesar de la tendencia decreciente en términos nacionales, se va a consolidar como el departamento con mayor violencia de la guerrilla (142) y también, poco a poco, el que va a ir presentando mayores niveles en cuanto a su conexión con escenarios de cultivo ilícito. Así, se consolida en estos dos años la presencia de las FARC en municipios como Argelia, El Tambo, Piamonte, Balboa o Morales, donde se concentra

²⁹⁹ De las 34 acciones que tienen lugar en Caquetá entre 2007 y 2008, se destacan con mayor presencia de las FARC en San Vicente del Caguán (8), Puerto Rico (8) y El Doncello (5). Solo estos tres municipios, de por sí, concentran hasta 1.600Ha. ODHDIH (2014)

³⁰⁰ Especialmente, por el activismo del Frente 1 de las FARC

³⁰¹ La mitad de las acciones armadas de las FARC tienen lugar en San José del Guaviare, donde entre 2007 y 2008 hubo una fuerte presencia de las FARC. Sin embargo, se aprecia una creciente importancia del paramilitarismo, a partir de la herencia de la presencia del Bloque Centauros, a partir de las Águilas Negras primero, y del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, en un tiempo dirigido por el famoso Pedro Oliverio Castillo Guerrero, “Cuchillo”, y el famoso narcotraficante, “Loco Barrera” (MOE, 2007h). Véase International Crisis Group (2012) y Prieto (2013).

buena parte de las 4.168Ha y 5.122Ha que presenta el departamento para los años 2007 y 2008 respectivamente, si bien el importante activismo guerrillero en el departamento se

En el tercer departamento ribereño del Pacífico, el departamento de Valle del Cauca, con una cifra de hasta 74 acciones armadas, no se van a evidenciar, como en los casos previos, una conexión tan relevante sobre los enclaves productores de cultivos ilícitos. Ello, con la excepción de la cruenta presión armada que se va a producir sobre la segunda ciudad más importante del departamento y, asimismo, el segundo puerto más importante de Colombia: Buenaventura. En esta localidad, entre 2007 y 2008 se van a registrar hasta 47 acciones armadas de las FARC habida cuenta de tratarse de un enclave estratégico de alto valor agregado para los intereses de la guerrilla, no solo por su condición portuaria, sino también por presentar una superficie de 400Ha de cultivo ilícito en 2007, y que se cuadruplica para llegar a las 1.651Ha en el año 2008.

Aparte quedaría el departamento de Chocó (18), donde la presencia sobre escenarios de cultivos ilícitos más bien quedaría reducida al municipio de Nóvita (3), que presentaría 215Ha en el año 2008.

Finalmente, cabría destacar que el proceso envolvente, que había venido debilitándose paulatinamente en los años anteriores, también va a evidenciar una reubicación geográfica de las FARC, que invita a pensar en el abandono de la estrategia, a tenor de la diferente correlación de fuerzas que empieza a resultar marcadamente evidente en estos años.

En Boyacá deja de registrarse presencia de las FARC, y prácticamente lo mismo en Risaralda (2) y Quindío (8). En Cundinamarca tampoco se recoge presencia relevante de las FARC (6), con la única salvedad de Bogotá, que en 2008 sí que registrará hasta 17 acciones armadas, a pesar de que a partir de entonces, igualmente, la desaparición de las FARC de la capital será un hecho irrefrenable³⁰². Finalmente, Caldas en 2007 sí que mantendrá mayores niveles de violencia (14), aunque a partir de entonces las FARC desaparecerán también de este departamento.

Más evidente si cabe va a ser la desaparición de las FARC de la costa Atlántico. Entre 2007 y 2008 no se van a registrar acciones armadas ni en Cesar ni en Atlántico, donde nunca más se va a registrar activismo armado de la guerrilla. En Sucre se reducen los hostigamientos a 3 si bien y en Magdalena a 6 aunque a partir de 2008 desaparece la presencia de las FARC en ambos departamentos. En La Guajira las acciones armadas se reducen a 6 en estos dos

³⁰² La reactivación de la presencia de las FARC sobre Bogotá responde a una coyuntura específica, que se enmarca en lo que se conoce como “Plan Renacer”. Tal y como lo define Valencia (2010: 44), “a mediados del 2008 comenzó la reorganización de las FARC con la elección de Alfonso Cano como sucesor de Marulanda y el lanzamiento posterior del “Plan Renacer” que plantea una reactivación militar de las FARC y la retoma de varios territorios. Se trata de la utilización intensiva de las minas antipersonal, la movilización de la tropa en pequeños grupos, la especialización de francotiradores para hostigar al ejército en movimiento, la fabricación y uso de armas artesanales para sustituir el armamento convencional, la apertura de escenarios de combate en la Cordillera Central y en las fronteras para atraer a la Fuerza Pública y disminuir la gran presión sobre la guerrilla en la Cordillera Oriental”.

años, y nunca más se volverán a superar las 5 acciones armadas al año con la única excepción de 2012³⁰³; y en Bolívar las acciones caen a mínimos históricos que se mantendrán en los siguientes años, con un registro de apenas 2-3 acciones al año, aunque todas alrededor de los municipios de Montecristo (1.239Ha en 2007), Cantagallo (485Ha y 909Ha respectivamente para 2007 y 2008) y San Pablo (579Ha en 2007)³⁰⁴.

En términos generales y con base en lo anterior, lo que evidencian los años 2007 y 2008 es una presencia territorial que paulatinamente cae a mínimos históricos. De los 22 departamentos en los que se recoge presencia de las FARC, se apreciaría, según lo descrito, una desaparición sustancial tanto en los departamentos centrales como en la costa Atlántico aunque no coincidente con la desmovilización de las AUC en 2004 y 2005. Además, ello se acompañaría con un repliegue estratégico sobre escenarios que poco a poco se van consolidando como fundamentales – Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander-, y sobre otros como Huila, Tolima o Arauca, que son donde más arraigo tuvo la presencia guerrillera a lo largo de la década anterior

De otro lado, la proximidad entre los enclaves de presencia de esta guerrilla y aquellos escenarios productores de coca comienza a afianzarse de un mayor modo, de igual forma que había sucedido con el ELN, a partir de este momento. Si se decía que en 2001 solo el 30% de los municipios con presencia y activismo de las FARC presentaba existencia de cultivos ilícitos, en 2007 y 2008 ese porcentaje se eleva a un 42.7% y un 43.5% respectivamente.

Misma tendencia se pondría de manifiesto de acuerdo al indicador que supone las acciones armadas. Si en 2001, 194 sobre un total de 496 acciones armadas se concentraron en municipios con presencia de cultivos ilícitos, es decir, un 39.1%, en 2007 y 2008 esa correlación ya se ha incrementado significativamente, ascendiendo hasta un 47.8% y un 62.2% respectivamente. Así, la mayor relación en este significativa y creciente binomio en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Caquetá, y en menor medida en Meta y Casanare.

Ya, en lo que afectaría a los años de 2009 y 2010, se van a computar un total de 664 y 724 acciones respectivamente, lo cual responde a una dinámica *in crescendo* en un activismo de la guerrilla que, nuevamente, va a ir poco a poco repuntando en su activismo hasta el mismo año 2012. Así, en 2009 del conjunto de las mismas, el 60% (399) se van a concentrar sobre con importante presencia de municipios ilícitos. Igualmente, del lado de la presencia municipal, 77 municipios sobre un total de 169 van a evidenciar plantaciones de coca (43.8%).

³⁰³ El impacto del paramilitarismo, unido a la ausencia de cultivos ilícitos y el mayor impacto, como se verá con posterioridad, de la PSD, va a coadyuvar una tendencia paulatina de fuerte debilitamiento del Bloque Caribe en La Guajira (Peralta *et al.*, 2011).

³⁰⁴ A través, mayormente, del Frente 37 de las FARC

En similares términos, en el año 2010 se va a seguir afianzando esta tendencia, de manera tal que de las 724 acciones, 426 acciones (58.8%) se van a dar sobre enclaves con presencia de cultivos ilícitos. De igual forma, sobre una presencia municipal que afectaría a 166 municipios, en 79 de ellos (47.5%) se podrá apreciar una concurrencia en cuanto a existencia de cultivos ilícitos.

Con base en esto, y a diferencia de lo que sucedía antes del repliegue estratégico de 2007, a partir de 2009, la mayor presión armada de la guerrilla y la nueva ubicación espacial de la misma no se traduce tanto en términos extensivos – es decir, reaparición sobre departamentos sobre los cuales la presión de la guerrilla había desaparecido-, sino más bien intensivos, sobre la base de una mayor presión y fortaleza con respecto a aquellos enclaves que bien eran, bien empiezan a ser, fundamentales para las FARC.

Esto se apreciaría en la región Atlántico. Sobre un total de 7 departamentos, entre 2009 y 2010 no se encuentra acción armada alguna en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y Sucre. Igualmente, el activismo de las FARC en Córdoba (6), La Guajira (7) y Bolívar (5) se aleja mucho de lo que, años atrás, fue el enclave natural de control y presión armada del ya mencionado BC.

Lo mismo sucedería en los departamentos de la región central del país. Tanto en Cundinamarca (9)³⁰⁵ como en Caldas (1), Risaralda (0), Quindío (6) y Boyacá (11)³⁰⁶ la nueva tendencia creciente de la guerrilla de las FARC se va a traducir en una diezmada presencia sobre esta parte del país.

A diferencia de esto, en el caso del nororiente del país, en el Norte de Santander (99), casi se van a triplicar las acciones armadas de las FARC, quedando éstas focalizadas sobre la región del Catatumbo, donde se continúa concentrando la casi totalidad de las 3.037Ha registradas en 2009 y las 1.889Ha contabilizadas en 2010. Tanto es así que sobre el total de acciones armadas habrá una especial intensidad de la guerrilla en Tibú (47), Teorama (25), El Tarra (5), Hacarí (3), Convención (4) y San Calixto (4).

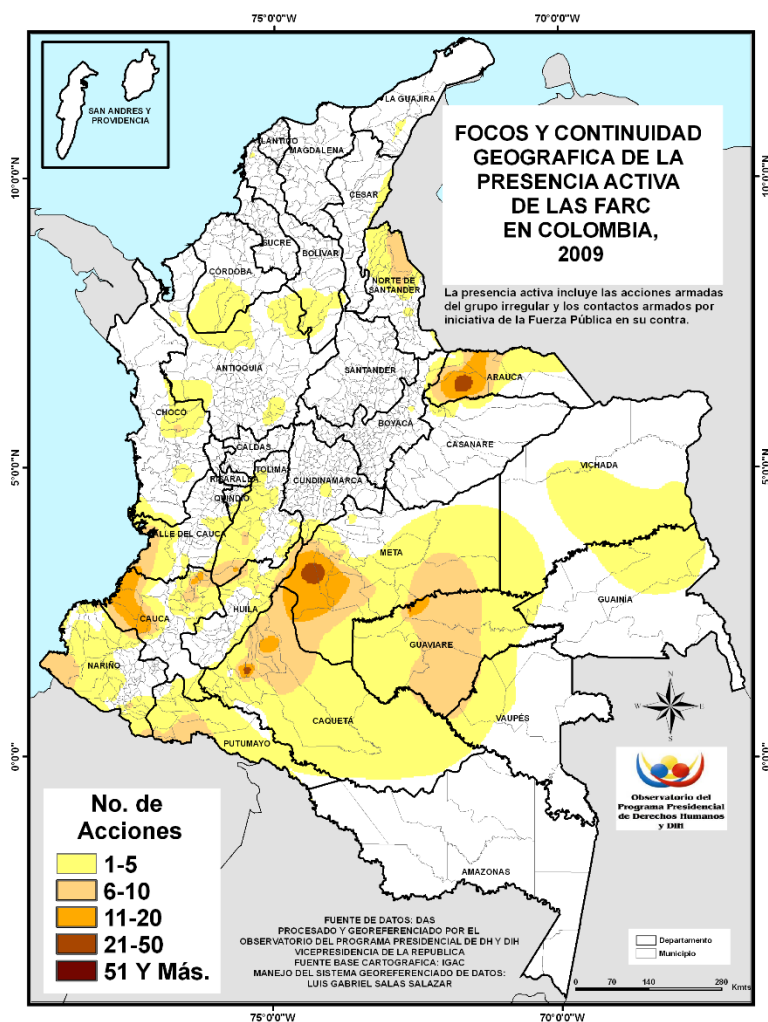
Nuevamente, en Arauca se experimenta un resurgir de la acción armada guerrillera (69), tras haber transitado por mínimos históricos en su accionar armado. Asimismo, estos años coincidirán con los registros más bajos de presencia de cultivos en el departamento – 430Ha en 2009 y 247Ha en 2010, y que se concentran especialmente en torno a las localidades de Arauquita y Tame, con alta presencia, también, del ELN (Fundación Ideas para la Paz,

³⁰⁵ Cuatro de esas acciones fueron en Bogotá si bien, contrasta con el Plan 2010 ideado por el entonces dirigente de las FARC, Alfonso Cano. De hecho, con base a esta estrategia se busca mayor descentralización, y una tendencia de conflicto más dinámica, especialmente, con base en francotiradores, minas antipersonal y una presencia creciente sobre los enclaves rurales (Valencia y Ávila, 2011).

³⁰⁶ Especialmente por el activismo que en ese año protagoniza el Frente 28, dirigido por “Loca Ricardo”, que finalmente fue dado de baja, por una intensificación de las acciones de la fuerza pública, en septiembre de 2010.

2014)³⁰⁷. Por fuera de los escenarios de prioridad para las FARC, en este nororiente colombiano, quedarían nuevamente, como enclaves relegados, tanto Santander (2) como Casanare (8).

Mapa 43: Presencia de FARC en Colombia en 2009



Fuente: ODHDIH (2014)

Una de las regiones donde va a ser más evidente la nueva proyección armada de las FARC va a ser en la región amazónica. Por ejemplo, en Meta las acciones armadas de la guerrilla vuelven nuevamente a niveles más que notables (118), donde existe una proporción altísima

³⁰⁷Véase: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53e2ac3725816.pdf> Consultado el 28 de julio de 2015

de correlación con respecto de enclaves con presencia de cultivos ilícitos (108), y que termina por superar una correspondencia del 90%. Así, entre los municipios con mayor presencia de la guerrilla destacarían Mapiripán (6), que presentará una superficie de cultivos ilícitos de 2.123Ha en 2009 y 1.144Ha en 2010; Puerto Rico (7), con un total de cultivos ilícitos por extensión de 860Ha en 2009 y 757Ha en 2010 o Vistahermosa (19), con 729Ha en 2009 y 541Ha en 2010.

Mapa 44: Densidad de cultivos de coca en Colombia, en 2009



Fuente: UNODC (2010: 11)

Sea como fuere, la presencia de las FARC se extenderá también hacia otras localidades que, aun con menores niveles de plantaciones de coca, no por ello resultan menos importantes en la presencia territorial de la guerrilla. Esto sucedería con La Uribe (39), Puerto Concordia (11), Mesetas (12) o La Macarena (6), donde entre 2009 y 2010 se acumularán un total de 500Ha, aproximadamente, de presencia de cultivos ilícitos.

En lo que respectaría a Caquetá, va a continuar el hecho de que toda la presencia municipal y todas las acciones armadas de las FARC, se van a producir sobre municipios con presencia de cultivos cocaleros. Igual que aconteciera en Meta, en Caquetá también se va a registrar mayor presencia armada de la guerrilla, como reflejan las 139 acciones armadas protagonizadas en estos dos años. Especialmente relevantes van a resultar en los municipios de Cartagena del Chairá (13), que entre 2009 y 2010 acumulará un total de 1.383Ha; La Montañita (36), que registrará en estos dos años un total de 506Ha; Puerto Rico (19), que acumulará hasta 578Ha; San Vicente del Caguán (19) con 760Ha; o la localidad de Solano (4), que entre 2009 y 2010 llegará a presentar un total de superficie cultivada de 1.210Ha.

Finalmente, quedaría el departamento de Putumayo (99), con igual tendencia creciente y una presencia de las FARC que afecta a casi a todo el departamento. Se va a mantener la misma dinámica de total correspondencia entre las acciones armadas de la guerrilla y su focalización sobre enclaves con presencia de cultivos ilícitos, especialmente importantes en Valle del Guamuez (10), donde se registran 584Ha en 2009 y 335Ha en 2010; Puerto Caicedo (28), donde en estos dos años acumulan hasta 607Ha; u Orito (9), donde se alcanzan las 1.138Ha de plantaciones de coca entre 2009 y 2010. Igualmente, resultarían significativos municipios como Leguízamo (4), que presentará hasta 2.144Ha en estos dos años o, por otro lado, San Miguel, con 15 acciones armadas y una superficie cultivada de coca que asciende a 399Ha.

De otro lado, y en esta misma región amazónica, la presencia en departamentos como Guainía (0), Vaupés (2) o Vichada (3) va a ser intrascendente, aunque en este último caso, siempre en torno al municipio de Cumaribo, principal productor de coca del departamento³⁰⁸. También cabría destacar a Guaviare (20), donde también se mantiene la presencia creciente de la guerrilla así como una total correspondencia entre las acciones armadas de las FARC y la concurrencia de cultivos ilícitos. Ello afectaría en este caso, y muy especialmente en 2009, a Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, donde se concentraría la totalidad de las cerca de 7.000Ha anuales que se cultivan en el departamento, y a pesar de que ya, en 2010, las acciones de las FARC terminarán por reducirse a en San José del Guaviare (11), donde, no obstante, se mantendrá una superficie cultivada de hasta 1.704Ha concurrente con una elevada presencia paramilitar.

³⁰⁸ Solo entre 2009 y 2010, Cumaribo acumuló un total de 5.798Ha dentro del departamento de Vichada. Casi la totalidad del registro de cultivos del departamento pues, en estos dos años, los otros dos municipios, que son Santa Rosalía y La Primavera van a acumular un total de 85Ha. UNODC (2014).

En lo que afectaría al suroccidente del país, Huila (69) y Tolima (60), van a mantener sus niveles estables en cuanto a presencia armada de las FARC, aun con ausencia de cultivos ilícitos. Sin embargo, y dentro de esta misma dinámica expansiva de la violencia unilateral de la guerrilla, quedaría como prioritaria la vertiente del Pacífico, especialmente en el eje Cauca (291) y Nariño (201), donde se contabilizan entre 2009 y 2010 hasta 492 acciones armadas, siendo, de largo, los dos departamentos junto con Norte de Santander, con mayor presión y accionar armado de la guerrilla.

En Nariño, en el transcurso de estos dos años se van a dar un total de 201 acciones armadas de las cuales, en dos terceras (130) partes, van a coincidir con la concurrencia enclaves productores de coca. Así, las FARC van a tener presencia directa tanto en los municipios como en las inmediaciones de los principales municipios productores del departamento, tal y como sucede con la región que conforman Magüí Payán, Barbacoas, Olaya Herrera y Roberto Payán, paulatinamente consolidados como cuatro de los municipios productores de coca más importantes de Nariño, junto con Tumaco, y que registran hasta 26 acciones armadas dentro de una superficie cultivada que supera las 14.000Ha. De hecho, en adición quedaría la mencionada ciudad de Tumaco, donde se van a dar hasta 29 acciones armadas sobre una superficie cultivada que, igualmente, supera en estos dos años las 10.000Ha.

Del lado de Cauca también se va a intensificar la acción armada de las FARC³⁰⁹, llegándose a las 291 acciones armadas, de las que “solo” 59 coinciden con municipios productores de coca. Municipios productores entre los que destaca nuevamente Argelia (37), donde se registran 595Ha entre 2009 y 2010, y en mucha menor medida El Tambo (3), que es el gran productor cocalero del departamento y Piamonte (1). También estaría, como enclaves cocaleros y de alta presencia de FARC, los municipios de Guapi (5), López (6) y Timbiquí (3)³¹⁰.

Otro departamento ribereño, de la costa del Pacífico, sería Valle del Cauca (48), donde además de evidenciarse un importante retroceso en el conjunto de acciones armadas de las FARC³¹¹, no se corresponde con la presencia de enclaves productores salvo para el ya referido caso de Buenaventura (21), que seguirá siendo de gran importancia para los intereses de la guerrilla en tanto que presenta un acumulado de casi 1.400Ha en estos dos años.

Aparte, como departamento del Pacífico, quedaría Chocó, que para los años 2009 y 2010, va a presentar una presencia armada de las FARC que va a caer hasta las 15 acciones armadas, de las cuales 11, a pesar de todo, se van a corresponder tanto con municipios productores de coca, como con la presencia de un ELN también, cada vez, más activo en el departamento y

³⁰⁹ En Cauca hay un gran activismo de parte del Bloque Occidental, y más concretamente del combativo frente 8 y también, en el norte del departamento, del Frente 6.

³¹⁰ De hecho, entre 2009 y 2010, se acumulan 1.845Ha en El Tambo, 296Ha en Piamonte, 1.490Ha en Guapi, 1.713Ha en López y, finalmente, 3.280Ha en Timbiquí, UNODC (2014)

³¹¹ Especialmente, en torno al Frente 30 de las FARC

articulado bajo alianzas estratégicas, incluso, con Bacrim (Guerrero, 2011; Núñez y Vargas, 2013; International Crisis Group, 2010).

Como último escenario por analizar en estos años 2009 y 2010 quedaría el departamento Antioquia, en el que en estos años se va a repuntar significativamente la presión armada de las FARC, al incrementarse ésta hasta las 97 acciones armadas. Asimismo, y como se apreció en el año inmediatamente anterior, se mantiene la creciente conexión sobre escenarios próximos al narcotráfico, de acuerdo a como sucede en los municipios de Anorí (8), con 239Ha en 2009 y 526Ha en 2010; El Bagre (3), con 715Ha en 2009 y 1.110Ha en 2010; o Tarazá (10), con 773Ha en 2009 y 886Ha en 2010. Igualmente, en menor medida, estarían los casos de Segovia (316Ha), con 2 acciones en 2008; Zaragoza (348Ha) con 1 acción en 2008; o Ituango, con 16 acciones y un acumulado en estos años de apenas 220Ha en el que, además, se adiciona la presión del Frente 18 sobre la importante represa hidroeléctrica del municipio (Mcdermort, 2013).

Llegados los años más próximos a la actualidad que resulta objeto de esta tesis doctoral, esto es, 2011 y 2012, se puede afirmar que se mantiene la trayectoria ascendente del activismo guerrillero de las FARC, tanto, que incluso se llega a las 669 acciones armadas en 2011, y las 824 acciones armadas en el año 2012.

Además, en estos últimos dos años es cuando van a concurrir los mayores promedios en cuanto a la conexión entre violencia armada y presencia de cultivos ilícitos. De hecho, solo en 2012, del total de 824 acciones armadas, 518 se van a dar en enclaves con presencia de cultivos ilícitos, lo que arroja la correspondencia más alta de la última década, de 62.8%. Parecido va a suceder con la presencia municipal, en la que en 90 municipios sobre un total de 190 municipios con presencia de las FARC, van a ser productores de coca, lo cual supone un 47.3% y, por ende, tras 2010, los niveles de correspondencia más elevados de este binomio en los últimos doce años.

La tendencia, igualmente, de *periferalización* se va a traducir en mayores términos de intensidad, por iniciativa armada de las FARC, en Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo, fundamentalmente, y que son, junto con los departamentos de Meta y Caquetá, los enclaves productores de la mayor parte de producción de coca que condensa Colombia. Lo anterior, toda vez que las FARC presentan registros mínimos a nivel departamental total de acuerdo a los últimos quince años.

En el nororiente, con absoluta claridad, el centro nuclear de las FARC va a ser Norte de Santander (150), donde se va a repuntar muy notablemente la violencia unilateral de la guerrilla toda vez que ésta se va a concentrar, exclusivamente, en la región del Catatumbo. Una región, que seguirá concentrando la totalidad de unos cultivos que, con 3.490Ha en 2011, y 4.516Ha en 2012, convierten al departamento en uno de los mayores productores cocaleros del país.

Un segundo enclave seguiría siendo Arauca (106), donde su superficie cultivada en la actualidad apenas es de 81Ha, de manera que en el departamento cobra mayor importancia por su condición petrolera y fronteriza, a modo de contrabando, que por el volumen de la superficie cultivada. Muy alejados, por otro lado, quedarían los departamentos de Santander (2) y Casanare (7), desde hace años, escenarios marginales en cuanto a presencia de FARC.

En un marco nada comparable, como se ha podido poner de manifiesto según lo descrito, estaría la región amazónica. En Meta (96), Caquetá (99) y Putumayo (123) se van a registrar, en total, entre 2011 y 2012, más de 300 acciones guerrilleras. En Caquetá se sigue manteniendo el férreo control territorial de las FARC sobre un departamento en el que, como en otros años, toda la presencia municipal de la guerrilla concentra presencia de unos cultivos ilícitos que para 2011 registraban 3.372Ha y para 2012 un total de 3.695Ha.

Igual de íntima relación se apreciaría en Putumayo, el departamento más violento del corredor amazónico, y que, igualmente, aúna la totalidad de la presencia de las FARC respecto de municipios productores de coca³¹². De hecho, la guerrilla en este departamento, va a continuar controlando la práctica totalidad de unos productores cocaleros que acumularon 9.951Ha y 6.148Ha en 2011 y 2012, respectivamente.

Para el caso de Meta, se va a seguir evidenciando también un fuerte control de las FARC si bien hay que señalar que el departamento ha venido reduciendo considerablemente la superficie cultivada, de modo tal que en 2012 se llegó al mínimo histórico de 2.699Ha. Así, la presencia se concentra, como en los casos anteriores, en torno a Puerto Rico, donde solo en 2012 se registraron 8 acciones armadas. Ello, habida cuenta de que se trata del municipio con mayor peso en la producción de coca, con 1.064Ha, dada la pérdida de superficie cultivada en enclaves igualmente propios de la guerrilla como La Macarena (22) o La Uribe (15), que en los últimos dos años acumularon 379Ha y 182Ha respectivamente, muy lejos de sus particulares registros de años atrás.

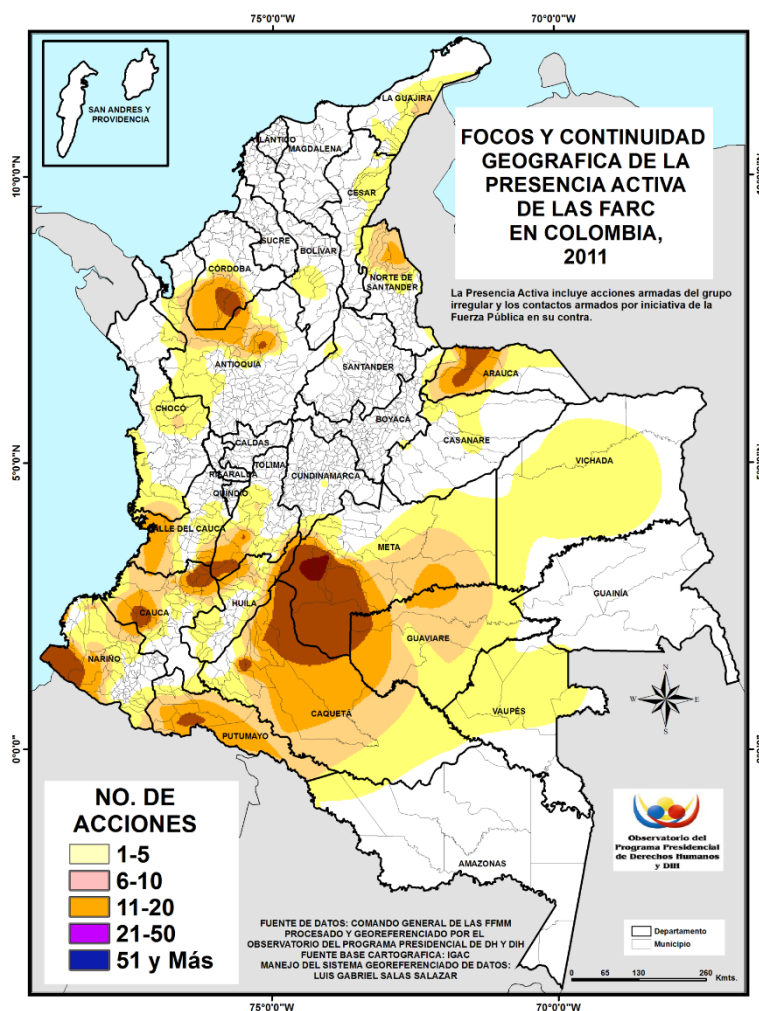
Mucha mayor fuerza cobraría, como en años anteriores, el Pacífico sur, consolidado como el principal bastión de fuerza de la guerrilla³¹³. De las 150 acciones protagonizadas por las FARC en Nariño, entre 2011 y 2012, 129 se van a concentrar sobre municipios con presencia de cultivos ilícitos. Tumaco (34) va a seguir siendo el enclave prioritario dado que en estos dos años se va a acumular una superficie cultivada que se eleva por encima de las 10.000Ha. Igualmente, la región referida anteriormente, que se conforma por las localidades de Barbacoas, Olaya Herrera, Magüí Payán y Roberto Payán, va a acumular en estos dos años un total de 28 acciones armadas sobre una extensión de cultivos ilícitos que también supera

³¹² En Putumayo se destaca un fuerte activismo de los Frentes 32, 48 y 63. Entre 2011 y 2012 son especialmente reseñables, de las 123 acciones guerrilleras, las 25 del Valle del Guamuez, las 25 de San Miguel, las 26 de Puerto Asís o, igualmente, las 26 de Orito, ODHDIH (2014)

³¹³ Por acción del combativo, y ya señalado, frente 29, presente en Tumaco y el “triángulo del Timbiquí”. Se puede, observar, en adición, la entrevista con el personero de Nariño, el cual se refiere muy expresamente al activismo de la guerrilla, y concretamente del Frente 29, en esta región.

las 10.000Ha³¹⁴. Incluso, se consolidan otros nuevos escenarios de violencia y producción de coca, como El Rosario (4), con 203Ha cultivadas en 2011; Ipiales (9), con una plantación de coca que ascendió a 247Ha en 2011 y 163Ha en 2012; Ricaurte (17) con 129Ha acumuladas en estos dos años o, más significativamente, Santa Bárbara, donde se registraron 2 acciones armadas así como un monto de cultivos ilícitos que dejó un total de 587Ha en 2011 y 294Ha en 2012.

Mapa 45: Presencia de FARC en Colombia en 2011



Fuente: ODHDIH (2014)

³¹⁴ En el caso particular de estos cuatro municipios, la superficie cultivada solo entre 2011 y 2012 sería de 5.008Ha en Barbacoas, 2.057Ha en Magüí Payán, 1.816Ha Olaya Herrera y, por último, 2.518Ha en Roberto Payán, UNODC (2014).

En el otro departamento nuclear dentro de la geografía de las FARC en el Pacífico, Cauca (305), aparte de erigirse como el principal bastión de activismo armado de la guerrilla, se evidencia una tendencia de un creciente control y presencia respecto de escenarios productores de coca, y de acuerdo a unos niveles de relación que son los más altos de la década. En términos agregados, entre 2011 y 2012 se van a dar hasta 117 acciones armadas sobre espacios con presencia de cultivos ilícitos. Ello, toda vez que el departamento se ha venido desarrollando como un escenario con una presencia cada vez mayor de cultivos cocaleros. Tendencia que, si en 2004 apenas superaba las 1.000Ha, actualmente se eleva por encima de las 4.000Ha.

Mapa 46: Densidad de cultivos de coca en Colombia en 2011



Fuente: UNODC (2012: 14)

Así, se registra una proximidad más que considerable en municipios con tradición de presencia guerrillera como Argelia (59), con un acumulado entre 2011 y 2012, de 670Ha cultivadas, y El Tambo (9), que es el principal productor de coca del departamento, tal y como se puede deducir de una superficie cultivada de 1.514Ha en 2011 y 1.876Ha en 2012. También resultaría destacable la presencia en otros enclaves con menor tradición guerrillera como López (4), con 1.040Ha cultivadas en 2011, o Timbiquí (7), con 507Ha en 2012, y que empiezan a presentar mayores niveles de activismo guerrillero.

Finalmente, en el caso de Valle del Cauca (61), como en casos anteriores, el centro neurálgico de la violencia guerrillera se va seguir focalizándose en la ciudad portuario de Buenaventura (14), no obstante, con menor presión armada que en los años anteriores, lo cual coincide con una fuerte reducción en la superficie cultivadas dentro de la localidad, que en 2012 apenas fue de 422Ha.

Mención aparte tendrían los departamentos de Chocó y Antioquia. En el primero de los casos, el departamento habría venido concentrando, conforme a lo señalado, un incremento sustancial en su superficie cultivada de coca, que en 2012, con 3.429Ha, habría alcanzado su máximo histórico.

De otro lado, en Antioquia (176) los niveles de violencia armada y presencia municipal de las FARC van a volver a los registros más notables, esto es, en los niveles de los años 2002 y 2003 y con una conexión mucho más evidente y directa sobre los escenarios con existencia de cultivos ilícitos. Tanto es así que hasta 111 acciones se van a dar, con un máximo histórico en el departamento, sobre localidades con presencia de cultivos ilícitos. Esto resultaría, especialmente relevante, en los tradicionales enclaves de Anorí (32), con 569Ha acumuladas entre 2011 y 2012; Ituango (20), con 220Ha de cultivos registradas en estos dos años; Tarazá (9), con 1.130Ha y, finalmente Valdivia (13) con una superficie de 275Ha registrada entre los años 2011 y 2012. Asimismo, habría que añadir otros tantos pequeños municipios del norte del departamento y la subregión del Urabá donde, de igual manera, también se acumularían hasta 1.500Ha en cultivos de coca. Unas cifras, en suma, que terminan por erigir al departamento de Antioquia como un valor en alza para las FARC muy a tener en cuenta, dado el rearme de la guerrilla y su posible proyección en los próximos años.

3. Conclusiones. FARC y presencia sobre enclaves con cultivos ilícitos. Una tendencia creciente en retrospectiva

A diferencia de lo que acontecía con el ELN, que entre 1998 y 2012 fue acumulando dificultades que estuvieron a punto de hacer desaparecer a la guerrilla, las FARC, si bien han perdido la mitad de su pie de fuerza y buena parte de su poder territorial, sin embargo, esto no se ha traducido, en términos generales, en lo que afecta a su activismo armado. Un activismo que todavía, y como se observó para el año 2012, supera las 800 acciones guerrilleras anuales, muy alejadas de las 65 del ELN.

Del modo que plantea la siguiente tabla 11, y a pesar de que la presencia departamental es una tercera parte menos que en los mejores momentos de la guerrilla, su presencia municipal sigue afectando a casi 200 municipios del país, en unos términos similares a los de inicios de la década pasada, y con base en una tendencia expansiva que acontece desde 2008. En ese año, tras cinco de PSD y de Plan Colombia, la presencia municipal de las FARC cae a los 131 municipios, cifra que, sin embargo, ha ido paulatinamente creciendo en casi una tercera parte, hasta los 190 municipios de presencia de las FARC, registrados en 2012.

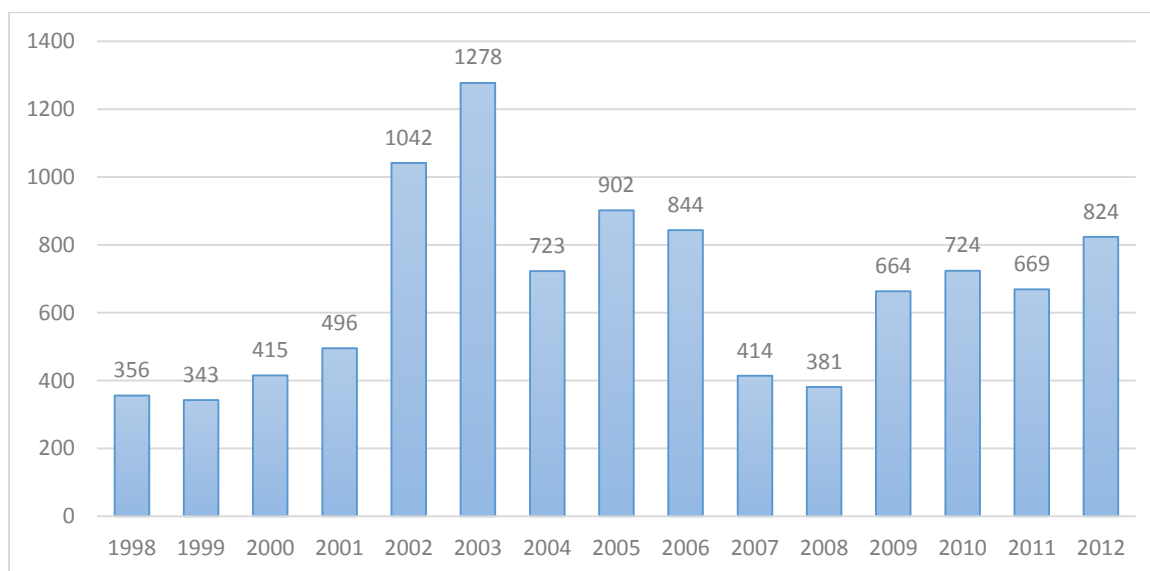
Tabla 11: Evolución municipal y departamental de la presencia de las FARC entre 1998 y 2012

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Municipios con presencia de FARC	186	194	208	206	346	313	218	234	234	152	131	164	166	180	190
Departamentos con presencia de FARC	25	27	29	26	28	31	29	29	29	22	24	24	21	23	20

Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

Si se analiza la evolución de la geografía de las FARC, se puede apreciar que, respecto de 2002 y 2003, que son los años de mayor poder territorial, hay una pérdida de fuerza paulatina, muy considerable, en dos enclaves. Por un lado, la región central, conformada por Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero; y por otro lado, la región Atlántica.

Gráfico 9: Evolución de las acciones armadas de las FARC entre 1998 y 2012

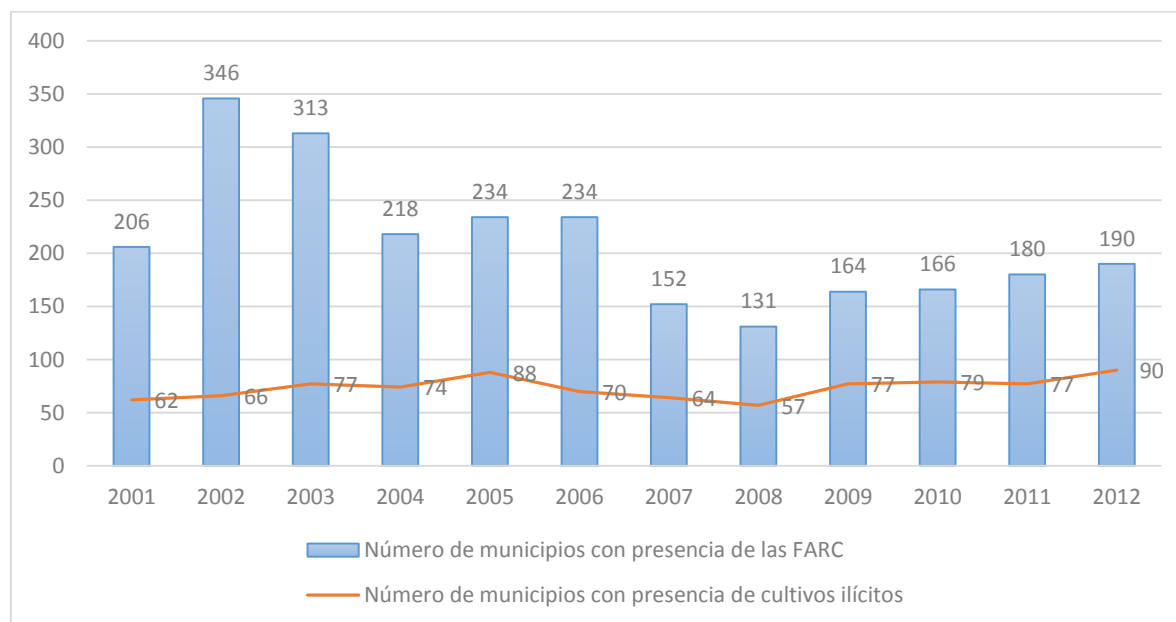


Fuente: ODHDIH (2014)

En la primera de ellas, y como se podrá ver en el siguiente capítulo de esta tesis doctoral, hay un gran impacto de una PSD que rompe con la mencionada estrategia envolvente de la guerrilla sobre Bogotá. En el segundo, y a pesar de que, como se verá en el capítulo VII, hay un especial arraigo y consolidación del proyecto paramilitar, tras su desmovilización, especialmente, entre 2004 y 2005, las FARC más que el ELN mantienen términos notablemente activos de presencia guerrillero. Términos que decaen, más por el impacto de la PSD y la falta de cultivos ilícitos para la financiación del activismo beligerante, a partir del año 2007 y 2008³¹⁵.

No por casualidad, hay tres escenarios que resultan nucleares para la guerrilla y que, en el fondo, no se han visto alterados, más allá de altibajos propios de la coyuntura, en el activismo de la guerrilla en los últimos años. En primer lugar, el nororiente del país, en torno a los departamentos, como sucediera con el ELN, de Arauca y Norte de Santander. En segundo lugar, el corredor amazónico formado por los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Por último, y de acuerdo a una dinámica creciente, mucho más notoria e importante que la también llevada a cabo por el ELN, se encuentra la región del Pacífico, fundamentalmente Cauca y Nariño, y en menor medida, pero también relevante, Chocó y los departamentos de interior en la región suroccidental de Tolima y Huila.

Gráfico 10: Presencia armada de las FARC en relación a los municipios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012



Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

³¹⁵ Esta afirmación será desarrollada, con profundidad, en los dos siguientes capítulos de esta tesis.

De hecho, estos tres enclaves, y con un renacimiento en el activismo armado de las FARC en Antioquia, condensan la mayor parte de un activismo beligerante de las FARC que, aun con todo, en los últimos años, se ha revitalizado de manera importante.

El proceso de desnaturalización de la guerrilla no es comparable al experimentado por el ELN, especialmente, por el abandono de Santander y en Antioquia. En el caso de las FARC el nororiente siempre sirvió, como se ha podido ver, de retaguardia estratégica, toda vez que el corredor amazónico ha sido su tradicional enclave de dominación. Un enclave, no obstante en el cual, paulatinamente, sí que se aprecia una movilidad hacia el occidente, sobre el Pacífico colombiano. Un Pacífico que si hace años era un enclave de retaguardia, hoy, respecto del eje Cauca-Nariño, se ha terminado por consolidar, de largo, como el principal bastión armado y territorial de las FARC.

El abandono de la región del Atlántico, hubiera sido importante en Sucre, Bolívar y Cesar, más que en el resto de departamentos. Sin duda, en estos tres escenarios tiene lugar una tesitura similar a la experimentada por el ELN, y salvo en enclaves concretos, se encuentra tan desconectada de la presencia de cultivos como la región central, que más bien, en los momentos de mayor activismo guerrillero, respondió a una estrategia más coyuntural que a un factor de presencia *estructural*

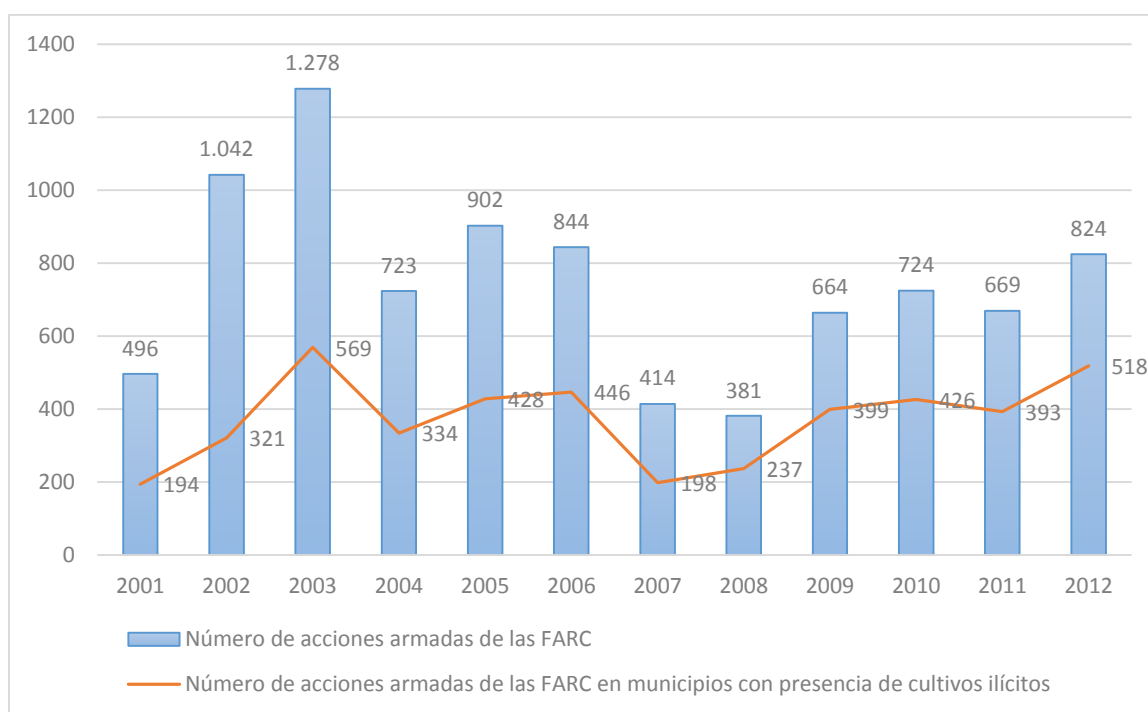
Sin embargo, lo que sí que se puede apreciar es que tanto Norte de Santander, como cada vez más Antioquia, los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, y los de la cuenca del Pacífico, son los escenarios en los que la presencia de las FARC, aun con el paso de los años, se ha mantenido, y en muchos casos intensificado. Quizá, la persistencia del grueso de cultivos ilícitos en el país de acuerdo a estos departamentos, unido a una coyuntura mayormente fronteriza y unas ventajas geográficas nada desdeñables condensen buena parte de las razones explicativas

De acuerdo al mismo gráfico 11, si se observa el año 2001, que es cuando comienza el análisis del factor del cultivo ilícito a tenor de los informes de UNODC, se puede dar cuenta que sobre un total de 206 municipios con activismo de las FARC, en 62 había concurrencia de cultivos ilícitos. Transcurridos once años, y con un número similar de municipios con presencia de FARC (190), el número de municipios con presencia de cultivos adicional, se ha incrementado en más de un 50%. Esto, en buena medida, se explicaría por el abandono de los enclaves mencionados y la intensificación sobre el Pacífico y el corredor amazónico, que condensan la gran mayoría de las plantaciones de coca del país, y que invitan a pensar en el atractivo que suponen de cara a entender la intensificación estratégica de las FARC sobre escenarios en los que, de un modo u otro, siempre dispuso un importante control territorial.

De hecho, si se toma como valor las acciones armadas que se presentan en el gráfico anterior, se redunda, igual que sucediera con el ELN, la hipótesis que se planteaba al inicio de esta tesis doctoral y de este capítulo. Es decir, si en 2001 sobre un total de 496 acciones de las FARC 194 acciones armadas tenían lugar sobre municipios con presencia de cultivo, dicha

proporción aumenta significativamente una década después. Ello, porque para el año 2012, sobre un total de 824 acciones guerrilleras, 518 se han desarrollado sobre escenarios con presencia cocalera. Es más, en este año 2012 se condensó el segundo mayor número de acciones armadas sobre municipios con cultivos ilícitos, pues las 518 acciones referidas solo resultaron superadas en el transcurso de la década pasada, por las 569 del año 2003. El año de mayor fuerza de la historia de las FARC, si bien, en aquel momento el activismo sobre cultivos ilícitos se dio sobre un total de casi 1.300 acciones guerrilleras.

Gráfico 11: Acciones armadas de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012



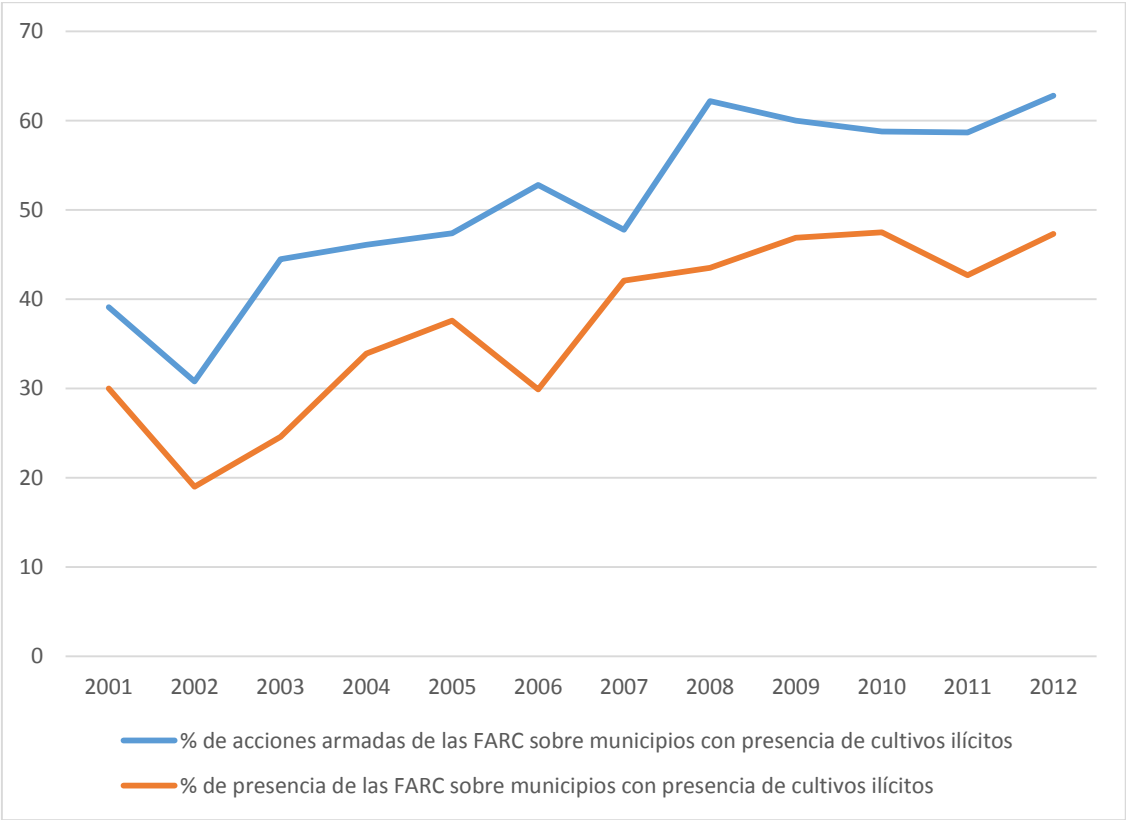
Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

Igualmente, se puede apreciar que, el número de intensificación guerrillera viene acumulando una mayor presencia sobre enclaves cocaleros desde el año 2008, la cual se acompaña de una mayor intensidad armada y, como se veía anteriormente, de una mayor presencia territorial, que bien puede entenderse en términos de la proximidad a los réditos económicos que favorecen los cultivos ilícitos.

Planteado de otro modo, si en 2001 o en 2002, la presencia de las FARC a nivel municipal, apenas afectaba a un 30% y un 19% de municipios con presencia de cultivos ilícitos, esa proporción asciende, de manera creciente, a lo largo de toda la década pasada para llegar, en 2012, a niveles de casi el 50%.

Por tanto, se aprecia una lógica similar a la planteada en el capítulo anterior con el ELN y que, de igual forma, se hace mucho más evidente con el medidor que suponen las acciones armadas. Así, para el año 2001 y 2002, la proporción de acciones guerrilleras sobre municipios con presencia de cultivos era de un 39.1% y un 30% respectivamente. Una proporción que casi se duplica, con el transcurso de los años, al llegar al 62.8%, siendo la proporción más elevada en la relación activismo armado/presencia de cultivos ilícitos, de la historia reciente de las FARC.

Gráfico 12: Relación porcentual entre las acciones armadas y la presencia municipal de las FARC sobre escenarios con presencia de cultivos ilícitos, 1998 - 2012



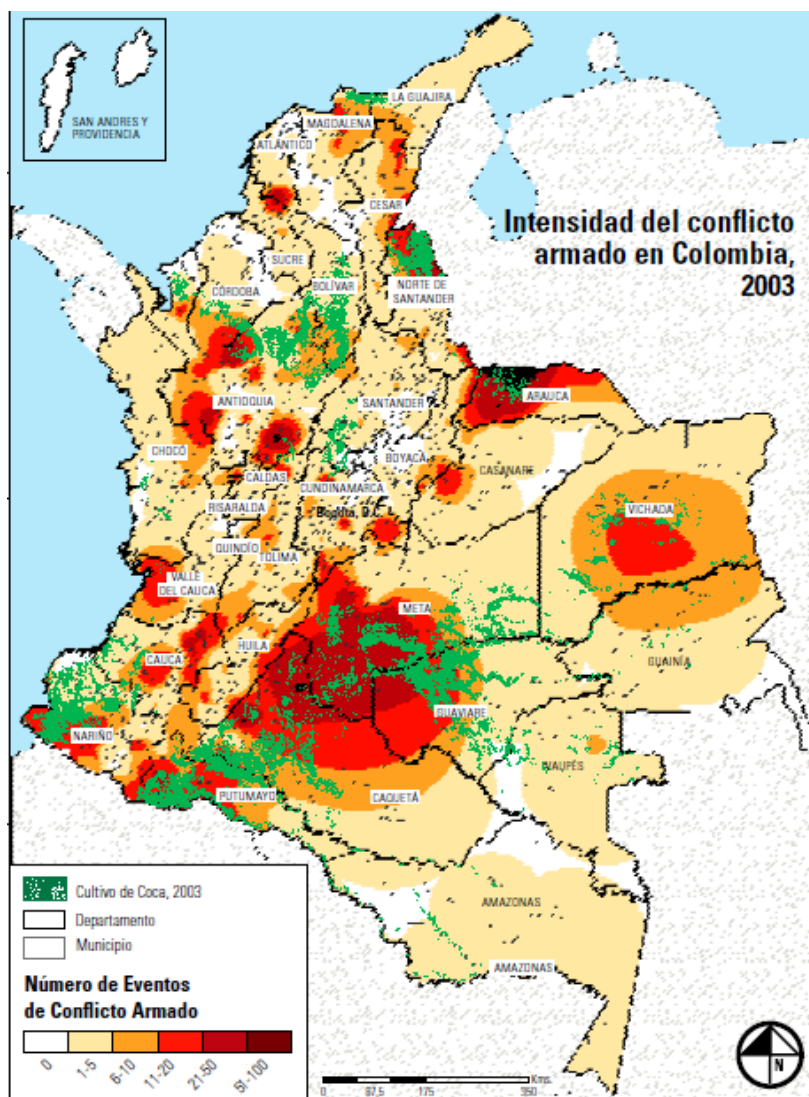
Fuente: ODHDIH (2014) y UNODC (2014)

4. Síntesis final. La *periferialización* y la *narcotización* de la violencia directa en el ELN y las FARC

Con base en lo expuesto en estos capítulos IV y V, perfectamente se puede apreciar cómo FARC y ELN han concentrado sus acciones armadas y su presencia municipal sobre enclaves con fuerte influencia en cuanto a presencia de cultivos ilícitos en los últimos quince años transcurridos entre 1998 y 2012. En el caso de las FARC, la *periferialización* de su activismo

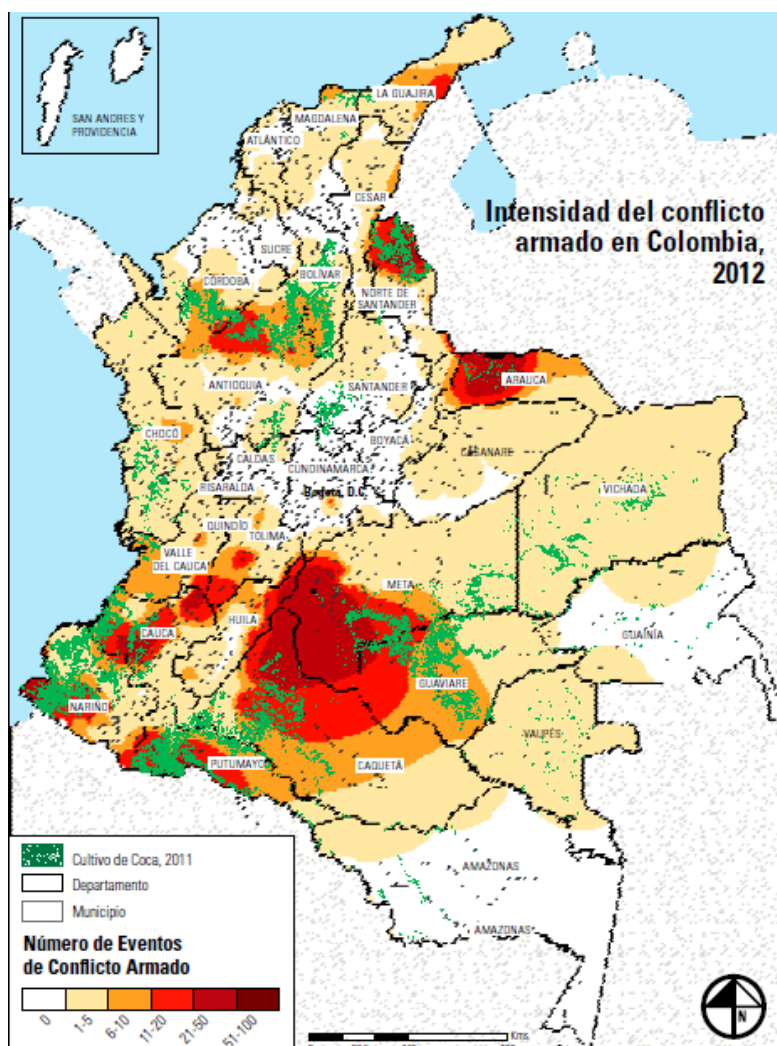
armado se ha condensado, fundamentalmente, en Arauca y Norte de Santander, en el nororiente, en toda la región suroccidental – sur de Tolima, Huila, Cauca y Nariño, además de en el tradicional corredor de conecta, hacia el sur, Meta, Caquetá y Putumayo.

Mapa 47: Concurrencia de cultivos ilícitos y activismo guerrillero en 2003



Fuente: Salas (2015: 166)

Mapa 48: Concurrencia de cultivos ilícitos y activismo guerrillero en 2012



Fuente: Salas (2015: 166)

Estos departamentos, con la excepción de Nariño y Norte de Santander, desde hace dos décadas han sido enclaves de notable presencia guerrillera. Todos, tienen conexión directa con el narcotráfico, bien como enclaves productores, bien como corredores estratégicos. Y en todos, los testimonios de excombatientes de las FARC, de las AUC o miembros de la Fuerza Pública reconocen la importancia de los cultivos ilícitos para la financiación de la guerrilla como igual sucede con las entrevistas en profundidad realizada a los personeros. La expectativa recae sobre el departamento de Antioquia. Bastión tradicional de la violencia cuyas cifras alertan de un fuerte activismo guerrillero en 2012, si bien es pronto para realizar afirmaciones categóricas que inviten a pensar un nuevo control territorial sobre algunos municipios desde luego las cifras invitan a pensar en la conexión entre presencia de FARC y concurrencia de cultivos ilícitos.

Lo mismo sucede con el ELN, cuyo activismo se ha consolidado en Arauca y Norte de Santander, como las FARC así como en Chocó, Cauca y Nariño, en la vertiente del Pacífico. Igual proceso de *periferialización*, en tanto que cuatro de estos cinco departamentos son de índole fronteriza. Asimismo, testimonios incluso desde dentro del ELN además de los mismos miembros de la Fuerza Pública o los personeros convergen en los testimonios en cuanto a vincular, como a las FARC, al ELN con el negocio de los cultivos ilícitos.

Además de lo anterior, tanto en el caso de FARC como de ELN, aun con las diferentes tendencias experimentadas en los últimos quince años, de expansión en cuanto a los niveles de violencia, entre 1998 y 2001-02, de repliegue, entre 2002 y 2007-08, y nuevamente de expansión, desde 2009 y hasta 2012, se puede apreciar que buena parte de los escenarios de mayor intensidad han sido los mismos. Escenarios en los que, cuando menos, se puede aceptar la posibilidad de que los cultivos ilícitos, dominantes en todos los enclaves de mayor activismo, con la excepción particular de Arauca, han permitido nutrir de recursos a las guerrillas a efectos de continuar las lógicas de confrontación propias del conflicto armado.

Es más, estos enclaves, intervenidos en su totalidad sobre la PSD no han ofrecido resultados exitosos para los gobiernos de Andrés Pastrana y, sobre todo, de Álvaro Uribe. Resultados, que como se pueden observar en los mapas 51 y 52 sí que se aprecian en el centro del país, sobre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el eje cafetero así como sobre buena parte de la costa Atlántica.

Este tipo de consideraciones se ajustan, igualmente, sobre la base de los cuestionarios realizados a las 221 alcaldías del país pues, como se señalaba en la introducción, varias preguntas del cuestionario precisamente se orientan a conocer la presencia de los diferentes grupos armados, especialmente FARC y ELN, y sus conexiones sobre la violencia y sobre los cultivos ilícitos.

Así, cuando se le preguntaba a las alcaldías sobre cuál era la concurrencia de los grupos armados en su municipio, hacia 1998, y su valoración de 1 a 10, para el caso de las FARC los departamentos con mayor nivel de percepción en cuanto a presencia de esta guerrilla eran Guainía (10.0), Guaviare (10.0), Caquetá (9.5), Putumayo (9.0), Nariño (8.0), Valle del Cauca (7.14), Casanare (6.16) y Magdalena y Tolima (6.0). Para el caso del ELN, los departamentos en los que se percibía mayor presencia de esta guerrilla eran Casanare (7.0), Norte de Santander (7.0), Cesar (7.0), Chocó (5.33), Santander (5.3), Nariño (5.28), Bolívar (4.5), Boyacá (3.75). Es decir, mientras que las FARC presentan una disposición espacial mucho más amplia, en el caso del ELN se condensa, especialmente, en el norte y nororiente del país, con seis de ocho departamentos siendo los otros dos restantes, en el Pacífico, Chocó y Cauca.

Transcurridos quince años, la misma pregunta tiene una respuesta bastante similar de parte de las alcaldías. Ello, porque en el caso de las FARC la mayoría de los departamentos que presentan niveles más altos de percepción frente a la presencia guerrillera entran dentro de la

categoría utilizada de departamentos periféricos. Es decir, Caquetá (10.0), Guaviare (10.0), Putumayo (9.0), Nariño (7.71), Norte de Santander (6.5), Cauca, (5.77), Chocó (5.66), Valle del Cauca (5.28) y Tolima (4.66). Dicho de otro modo, el corredor amazónico, en el que destacan, Putumayo, Caquetá y Guaviare se mantiene inalterado con elevada presencia de FARC. El suroccidente, igualmente, se condensa en torno a Valle del Cauca, Tolima y Nariño de manera que la única diferencia se encuentra en que los enclaves que en 1998 son destacados, como Guainía y Magdalena, y que quince años después son sustituidos por dos departamentos fronterizos con consabida presencia de activismo de FARC: Chocó, con salida al Pacífico, y Norte de Santander, con la segunda gran concentración de cultivos en el Catatumbo.

En el caso del ELN sucede prácticamente la misma tendencia. Es decir, aquellos escenarios que eran destacados en 1998, en el norte y nororiente del país, y en algunos departamentos del Pacífico, prácticamente repiten resultado quince años después. Ello, porque se destacan los departamentos de Santander, Norte de Santander, Bolívar y Boyacá en el norte y nororiente del país, y en el Pacífico, los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño.

Tabla 12: Percepción de la presencia de grupos armados en 1998 y en 2012

Departamento	FARC		ELN		EPL	
	1998	2012	1998	2012	1998	2012
Antioquia	3.85	2.25	3.15	1.05	1.6	1.05
Atlántico	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bolívar	3.5	2.25	4.5	3.25	1.0	1.0
Boyacá	4.58	1.83	3.75	2.08	1.0	1.0
Caldas	4.0	1.37	2.37	1.0	1.75	1.0
Caquetá	9.5	10.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Casanare	6.16	3.33	7.0	2.5	1.0	1.0
Cauca	5.55	5.77	3.55	3.0	1.0	1.11
Cesar	7	4.5	7	1.0	4	1.0
Chocó	5.33	5.66	5.33	5.33	1.0	1.0
Córdoba	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0
Cundinamarca	3.9	1.9	1.6	1.0	1.0	1.0
Guainía	10.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Guaviare	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Huila	3.75	3.25	1.0	1.0	1.0	1.0
Magdalena	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
Meta	3.66	3.16	1.0	1.0	1.0	1.0
Nariño	8.0	7.71	5.28	4.14	1.14	1.0
Norte de Santander	4.5	6.5	7.0	5.75	1.0	2.5
Putumayo	9.0	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Quindío	5.25	1.75	1.0	1.0	1.0	1.0
Risaralda	4.33	2.33	1.33	1.33	1.33	1.33
Santander	4.2	1.9	5.3	2.6	1.9	1.0
Sucre	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
Tolima	6.0	4.66	1.0	1.0	1.0	1.0
Valle del Cauca	7.14	5.28	2.57	1.71	1.42	1.0
Media Nacional	4.87	3.43	3.12	1.99	1.31	1.12

Fuente: Elaboración propia

Es por esto que la hipótesis de *periferalización* se cumpliría en la medida en que las dinámicas de mayor activismo de las guerrillas, mayormente sobre enclaves periféricos, no se han visto afectada por las dinámicas que, desde el Estado, han buscado reducir el conflicto armado. Una búsqueda que, puede afirmarse, ha desarrollado resultados positivos en buena parte del país si bien, especialmente, sobre departamentos y escenarios donde el arraigo de las guerrillas ha resultado menor.

Tabla 13: Percepción de presencia de cultivos y vínculo con grupos armados

Departamento	Impacto cultivos	Vínculo con grupos armados
Antioquia	2.26	2.31
Atlántico	1.0	1.75
Bolívar	2.75	2.75
Boyacá	1.58	1.66
Caldas	1.62	1.67
Caquetá	4.33	4.33
Casanare	2.25	2.40
Cauca	2.80	3.10
Cesar	2.5	2.5
Chocó	4	4
Córdoba	1	1
Cundinamarca	1.3	1.3
Guainía	1	1
Guaviare	4	4
Huila	1.6	1.6
Magdalena	2	2
Meta	2.75	2.50
Nariño	3.14	4.28
Norte de Santander	4	4
Putumayo	4	4
Quindío	1.25	1.75
Risaralda	2.5	3.0
Santander	1.5	1.5
Sucre	1	1
Tolima	1	1.5
Valle del Cauca	3.5	3.5
Media Nacional	2.19	2.28

Los valores del cuestionario son Muy baja (1.0), Baja (2.0), Media (3.0), Alta (4.0) y Crítica (5.0).

Fuente: Elaboración propia

Contrastada la hipótesis de la *periferalización*, la segunda aseveración, en cuanto a proximidad de estos grupos armados con base en la presencia de cultivos ilícitos y su participación sobre la industria del narcotráfico también queda probada a tenor de los resultados que muestran los cuestionarios.

Tal y como puede verse en la tabla 13, los departamentos en los que la presencia de cultivos ilícitos resulta mayor, ésta directamente conecta con la mayor concurrencia de grupos armados. De hecho, los departamentos en los que las alcaldías reconocen mayor presencia de cultivos ilícitos son Caquetá (4.33), Putumayo (4.0), Norte de Santander (4.0), Chocó (4.0), Guaviare (4.0), Valle del Cauca (3.5), Nariño (3.14), Cauca (2.8) y Bolívar (2.75), precisamente, los que tienen mayor presencia, a tenor de lo que se decía con anterioridad, tanto de FARC como de ELN y que igualmente evidencian los cuestionarios recogidos en la siguiente tabla 13.

De hecho, desglosando los municipios, por ejemplo, en Antioquia, de los 12 municipios que reconocía sufrir un mayor impacto por la presencia de cultivos ilícitos, en cuatro de ellos hay una especial concurrencia de las FARC como principal grupo activo en el municipio. Sin embargo, esa proporción se incrementa sustancialmente en el resto de departamentos. En los municipios de 5 municipios de Bolívar en los que se reconoce presencia de cultivos ilícitos en la actualidad, en todos ellos se reconoce la presencia predominante de FARC y de ELN. En el caso de Boyacá, en los cuatro municipios en los que se reconoce alguna concurrencia de cultivos, igual que en Bolívar, FARC y ELN aparecen como grupos predominantes. En el caso de Caquetá la correspondencia es del 100% de manera que en todos los municipios encuestados se reconoce la presencia importante de cultivos y, tras todos ellos, el activismo armado de las FARC. En los cinco municipios de Casanare en los que se reconoce existencia de cultivos ilícitos, también se reconoce la presencia dominante a nivel local de parte de las FARC de igual forma que en los seis municipios de Cauca que reconocen mayor impacto de la plantación de coca, en todos aparecen las FARC como grupo dominante y en tres de ellos, además, se reconoce una presencia importante del ELN. Igual en Chocó, en la que en cuatro municipios se reconocería una alta presencia de cultivos, acompañada por una alta presencia de FARC y de ELN.

La proporción es menor en el departamento de Meta, donde de los cinco municipios que reconocen adolecer de un importante problema de cultivos, en dos de ellos únicamente se destaca a las FARC como principales actores armados. En Nariño, de seis municipios con cultivos de coca, en todos se reconoce la presencia dominante de FARC además de que, en tres de ellos, se reconoce presencia menor del ELN. En Norte de Santander, igualmente, la coincidencia es completa, pues de los cuatro municipios que reconocen problemas con las plantaciones de coca, en todos se reconoce la concurrencia, predominante de las FARC, pero también relevante del ELN.

En Putumayo, hay una correspondencia completa entre los tres municipios productores y el reconocimiento de las FARC como grupo armado dominante si bien, en Valle del Cauca, de los nueve departamentos con reconocimiento de cultivos ilícitos, en cinco aparece como principal grupo armado del municipio, sobre todo, por la importante concurrencia de grupos pos-paramilitares en el departamento.

Dicho de otro modo, sobre el escenario de cultivos ilícitos, respecto del total de 221 municipios, en aquellos 60 municipios en los que se reconoce una mayor importancia a los cultivos de coca, en 50 de ellos las FARC aparecen como el grupo armado dominante en el municipio mientras que en el caso del ELN, dicha coincidencia se amplía, igualmente, a otros 27 municipios haciendo valer la hipótesis de la creciente narcotización del activismo guerrillero.

CAPÍTULO VI: EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DEL PLAN COLOMBIA EN LAS TRANSFORMACIONES ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO

1. Introducción

En este capítulo de la tesis doctoral, el objetivo pasa por evidenciar cómo las políticas de seguridad llevadas a cabo por las tres últimas presidencias, tanto desde una dimensión temporal como desde una dimensión espacial, han ido, paulatinamente, desarrollando una tendencia centrífuga, en lo que a condensar los operativos de la Fuerza Pública sobre las guerrillas se refiere.

Es decir, la intención es la de mostrar cómo, con el paso de los años, el conflicto armado interno colombiano se ha ido enquistando en departamentos fronterizos, periféricos territorialmente pero también con base en otros indicadores socio-económicos, que serán abordados en el capítulo VIII, y que permiten incorporar la variable de la violencia estructural, como factor adicional.

Nuevamente, se trata de hacer evidente la hipótesis de la *periferialización*, constante en los capítulos anteriores, pero ofreciendo una interpretación tanto particular como adicional. Es decir, la *periferialización*, a tenor de este capítulo se entiende como el resultado de una política de confrontación directa con los grupos armados cuyos resultados finales muestra rupturas y continuidades. Rupturas, porque paulatinamente han permitido expulsar a las guerrillas de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander y el eje cafetero, primero, y la costa Atlántica después; y continuidades, porque el conflicto se ha consolidado en departamentos que junto a la referida condición periférica, concurre una importancia adicional, expuesta en los capítulos anteriores: la presencia de cultivos ilícitos.

Como se veía en el capítulo anterior, los actuales enclaves más violentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo – todos fronterizos- o Caquetá y Antioquia, tradicionalmente han sido siempre, con algunas variaciones, objeto de disputa armada y territorial por parte de Policía y Fuerzas Militares. Sin embargo, y como se verá en el capítulo que aborda la violencia estructural, aparte de cultivos ilícitos, han respondido a una lógica predominante de menor atención y presencia institucional por parte del Estado, mayores dificultades para generación de oportunidades laborales así como una deficitaria consolidación en cuanto a las políticas públicas orientadas a efectos de una mayor inclusión social. Sobre estos enclaves, el éxito de las políticas de seguridad, como se mostrará, debe relativizarse, tanto por todo lo anterior como por las dificultades que en cuanto a operativos representa el hecho adicional de que se traten de departamentos, no ya solo fronterizos, sino con una geografía compleja, mayormente selvática o montañosa.

Para evidenciar el carácter centrífugo de las políticas de seguridad que en cuanto a resultados tangibles sobre la violencia directa trata de mostrar este capítulo, ello se puede dar cuenta, muy particularmente, en el período que transcurre entre 2002 y 2010, cuando bajo la puesta en marcha de la PSD, se describe el número de operativos unilaterales por iniciativa de las Fuerzas Militares, desglosados por grupo – FARC y ELN- y bajo un prisma netamente regional.

Como se señala, este volumen de operativos militares y policiales resultan siendo exitosos, especialmente en la región central, formada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío y en los departamentos próximos a este centro, de Antioquia y Santander. En la segunda etapa de la presidencia de Álvaro Uribe habría que añadir la costa Atlántico, que presenta una variable adicional como es el paramilitarismo, objeto de estudio en el siguiente capítulo. Sin embargo, a tenor de los resultados que en este capítulo se presenta, y aunque pudiera tener algún grado de afectación, parece responder más bien a otras lógicas como la ausencia de terrenos favorables para la acción guerrillera o las menores fuentes de financiación que el menoscabo real del paramilitarismo.

Si se integrase la lógica de variables expuestas en los capítulos IV y V, con las de este capítulo VI, se pueden entender las dos dinámicas que integran la afectación más importante en cuanto a la transformación espacial del conflicto armado. Es decir, toda vez que la continuidad se da sobre la *periferalización* y la *narcotización* de las guerrillas, se puede observar como la intensidad en el volumen de operativos de la Fuerza Pública desde el centro hacia la periferia, supone a su vez un efecto de expulsión evidente, pero no suficiente en términos de superación del conflicto armado.

Dicho de otro modo, más presencia de la Policía y del Ejército y menos cultivo ilícito permiten adicionar dos elementos que se retroalimentan en la comprensión de las nuevas dinámicas geográficas que ha presentado el conflicto armado interno colombiano en los últimos años.

Para *operacionalizar* la noción de mayor presencia militar y policial del Estado colombiano se toma como indicador el número de combates unilaterales de la Fuerza Pública contra las FARC y el ELN, entre 1998 y 2012. Esto, como en los casos anteriores, de acuerdo a la base de datos facilitada por el ODHDIH. Así, se entiende que un departamento o una región se convierten en prioridad militar en el momento en que se condensa un número notable de este tipo de operativos. Cuando el número de acciones guerrilleras de FARC y ELN se mantiene elevado, se presume que es un enclave en disputa, pues cabe pensar en que las guerrillas rehúsan desaparecer del mismo. Si el departamento muestra una tendencia creciente en la intensidad de operativos policiales y militares y una tendencia marcadamente decreciente del activismo de las guerrillas, entonces cabe inferir que la situación resultante, cuando menos, es de repliegue. Si la tesis es contraria, es decir, el volumen de acciones de FARC y ELN supera ampliamente al volumen de operativos de la Fuerza Pública, entonces se entiende que hay una mayor preponderancia o arraigo local de los grupos guerrilleros, incluso con

independencia de que el departamento o región en cuestión haya venido incrementando la presencia de Policía y Ejército con respecto a los años anteriores.

El activismo guerrillero, por su parte, se sigue entendiendo en los mismos términos que en los capítulos anteriores, esto es, sobre la suma de ataques contra la Fuerza Pública y hostigamientos, emboscadas, ataques a la población y otros eventos de terrorismo.

En adición, para ilustrar el impacto del Plan Colombia, como factor adyuvante a esta política pública de seguridad del Estado colombiano, se incorpora el factor de las aspersiones aéreas con glifosato así como la erradicación manual de cultivos – que es mucho más limitada-, de acuerdo a las estimaciones, igualmente, que no son de libre acceso, y que fueron facilitadas por UNODC.

Dicho esto, el capítulo consta de tres grandes partes. En primer lugar, incursiona en el alcance y sentido regional de la política pública de seguridad de Andrés Pastrana, para lo cual se toma como referencia los años 1998-2001, aunque con referencia también, a algunos indicadores del gobierno anterior, de Ernesto Samper. Tras ello, se analiza la PSD bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). El modelo de análisis es el mismo. Es decir, con un enfoque regional en los operativos de la Fuerza Pública, separando FARC y ELN, e incorporando sus acciones guerrilleras para visibilizar el nivel de confrontación o repliegue y, en adición, las acciones de aspersión aérea. Finalmente, se cerraría con los dos primeros años de presidencia de Juan Manuel Santos. Dos años especialmente ilustrativos en lo que a entender el proceso de *periferialización* referido, el enquistamiento regional del conflicto así como el agotamiento de la política beligerante mantenida durante toda una década atrás y que ha abierto una nueva etapa a tenor del proceso de negociación iniciado en agosto de 2012.

2. Colombia en 1998. Aproximaciones al concepto de “Estado fallido”

Como ya se planteó con anterioridad en esta tesis doctoral, hacia el año 1998 y durante buena parte del gobierno de Andrés Pastrana, Colombia va a transitar por una difícil tesitura, habida cuenta de la Fuerza Armada y el vasto control territorial que van a desarrollar las guerrillas, especialmente las FARC, va a poner al Estado en una tesitura compleja.

Por todo lo descrito en esta tesis, sobre todo en lo que concierne al período que transcurre entre 1998 y 2002, es de entender que algunos estudiosos, en lo que afecta al caso colombiano, se refirieran a éste como un “Estado débil en vías de fracasar”, tal y como lo hacen Rotberg (2004: 107), o Mason (2000; 2002). Ello, en la medida en que quedan desdibujadas las funciones nucleares del Estado como garantizar la seguridad de la vida humana, el orden nacional y el control territorial. Tales apreciaciones quedarían justificadas, habida cuenta de la incapacidad de la Fuerza Pública colombiana para mantener la seguridad, la protección, el control territorial y el monopolio de las armas dentro de un intrincado escenario en el que, como ya se planteó, los grupos armados, además de agitar de manera creciente el desorden interno, dispondrían de un entramado de fuentes de poder político,

económico y militar, materializado en un control territorial que terminaba por afectar a casi la mitad de los municipios del país.

Similares consideraciones se encontrarían en los trabajos de Pizarro y Bejarano (2001; 2003), quienes han definido el Estado colombiano como un “Estado débil” (*Weak State*), en cierto modo paradigmático, en tanto y en cuanto, si bien reúne muchos de los rasgos definitorios de lo que vulgarmente y de manera imprecisa se conoce como “Estados fallidos” (*Failure State*), encontraría rasgos diferenciales. Ello, porque para estos autores, pese a todo, Colombia respondería de manera idónea a los cánones de Estado nación, además de no albergar enfrentamientos constituidos desde identidades colectivas enfrentadas que, por lo general, son el mayor acicate para que la conflictividad devenga en la casuística del colapso.

Por su parte, otros como Wallensteen (2000) o Esty (1998) reducen su comprensión de analizar la posición en el *continuum* de fortaleza/debilidad del Estado con base en el nivel de conflictividad que dentro de sus márgenes se llevan a cabo en Colombia. Así es como para estos autores Colombia se percibe como Estado fallido, resultado de una representación de la violencia tan ubicua como incontrolable, tal y como pondrían de manifiesto el nivel de violaciones a los DD.HH y el DIH o los desplazamientos forzados, que incluso terminan por trascender como consecuencias de una amenaza regional. Al respecto, los matices pueden ser muchos, como sostiene Moncada (2007: 102) cuando señala la necesidad de llegar más allá que al reduccionismo de entender el fracaso de un Estado en respuesta a una casuística de violencia, puesto que “un Estado puede fracasar sin que medie violencia y que ésta puede tener lugar y no llevar al fracaso, *siendo* Albania y Colombia ejemplos, respectivamente, de esta consideración insoslayable”.

De acuerdo a esta noción, podría señalarse como más elaborados los planteamientos de Chomsky (2006), para quien el “Estado fallido”, además de por la pérdida del control y poder político del Estado sobre su territorio, adolece de una incapacidad para articular decisiones colectivas y hacer valer el imperio de la ley. Asimismo, no dispone de mecanismos para consolidar el sistema fiscal que debe servir de pilar financiero para toda función de Estado; y adolece de problemas tales como clientelismo, corrupción, patrimonialismo y desarticulación de la sociedad civil. Una suma de factores que sí que completarían la visión de Estado fallido, por ejemplo, defendida por Valencia (2002).

Finalmente, muchos otros serían los calificativos para un modelo conceptual tan impreciso como revelador de una serie de debilidades objetivas que, azotadas por la violencia del conflicto colombiano, desembocaron en un escenario de completa ingobernabilidad hace algo más de una década. Fruto de la ausencia de mecanismos garantes del orden legal, civil y militar en todo el territorio y para toda la población civil del país, Koonings y Krujit (2004; 2008) arguyen en Colombia un “fracaso parcial del Estado” mientras que Rice (2002), Briscoe (2007) o Salazar y Castillo (2001), inciden en la debilidad del Estado fruto de una pérdida del monopolio de la fuerza y una falta de control sobre buena parte del territorio. Dos prioridades sin resolver en el marco de un necesario fortalecimiento del Estafo colombiano.

Estas acepciones lo cierto es que tendrán su relativa plasmación durante el último año y medio de presidencia de Andrés Pastrana y los inicios de la PSD de Álvaro Uribe, y que de cierto modo, construyen la necesidad en el conflicto de una “paz negativa”. Ello, porque, al ser los elementos referentes del Estado el monopolio legítimo de la fuerza y el control territorial, se termina por concebir que la posición del Estado en aras de revertir la cruenta situación derivada del conflicto armado pasa, necesaria y casi únicamente, por fortalecer aquellos aspectos que más tienen que ver con violencia y soberanía. En otras palabras, dentro de los márgenes que plantea el difícil escenario del enfrentamiento armado en Colombia, el Estado, en pos de fortalecer su situación, se entiende que debe dar prioridad a la seguridad y al aspecto más puramente militar del Estado, en tanto que se comprende como *prima facie* para la construcción y sustantivación de lo que debe ser el Estado en Colombia.

Esta circunstancia genera un importante distanciamiento entre el presidente Álvaro Uribe y su primera ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. De hecho, cuando es preguntada por esta cuestión su respuesta es:

“Quizá el aporte más valioso de esa PSD, después desvirtuado, era el programa para estimular la desmovilización. Además de por medio de un fortalecimiento de la Fuerza Pública, por medio de inversiones en mejorar la información y la coordinación y, sobre todo, la inteligencia. Lo más importante va a ser debilitar la fuerte cohesión interna de las FARC a fin de generar desconfianza y promover desventajas en el seno del enemigo. Aunque yo inicié eso siempre me quedará frustración pues de haberse implementado la PSD como yo la diseñé el resultado hubiera sido mucho mejor. Lo malo es que el presidente Uribe jamás le hizo seguimiento a eso y lo peor, se dejó vender la tesis de que la PSD era una política militarista, beligerante cuando, verdaderamente, en su fondo, no lo era. Era algo mucho más integral de lo que finalmente se convirtió”. (EP 3, junio de 2015).

3. El gobierno de Andrés Pastrana: buscando superar el colapso del Estado

Los niveles de violencia derivados del conflicto armado, especialmente en relación a las guerrillas de las FARC y el ELN, fueron abordados con profundidad en capítulos anteriores. Sin embargo, y siguiendo la hipótesis que se plantea, desde la mitad de mandato de Andrés Pastrana se inicia un proceso de modernización de la fuerza colombiana que conferirá al Estado una posición ventajosa y de favorabilidad en cuanto a la correlación de fuerzas respecto de los grupos armados.

Un buen indicador para lo anterior pasaría por tomar en consideración la capacidad de combate de la Fuerza Pública, en término de número de operativos militares unilaterales, y contrastarlo con el número de acciones guerrilleras. Esto, a fin de crear una aproximación al estado de correlación de fuerzas y al impacto que la presión de la Policía y las Fuerzas Militares generó sobre el volumen de activismo guerrillero.

Así, a primera vista, durante los años de presidencia de Andrés Pastrana se pone de manifiesto de qué modo la capacidad de iniciativa de su Fuerza Pública se encuentra muy por debajo de

la capacidad de presión de la guerrilla. Mientras que en 1998, las acciones por iniciativa de la primera apenas llegaron a las 300 (294), en 1999 y en 2000, se incrementan, aunque tímidamente, a las 378 y 528 respectivamente. No obstante, y aun cuando las acciones de FARC y ELN superan ampliamente a las acciones militares de Colombia, se evidencia una tendencia *in crescendo* que responde, en buena medida, a las políticas de modernización de referidas, que inician en 1999 y que para 2001 ya presenta resultados tangibles en cuanto a la favorabilidad de la correlación de fuerzas en beneficio del Estado colombiano cuando éste protagoniza 950 acciones y operativos frente a 496 acciones de las FARC y 317 acciones del ELN³¹⁶.

Para el año 1998, el volumen de efectivos de la Policía colombiana ascendía a 103.958 policías; 102.904 en el año 1999; 91.155 en el año 2000 y 97.160 en el año 2001 (Revista Criminalidad, 2002: 390). A estas cifras habría que añadir la de las Fuerzas Militares, que si en 1998 era de 177.300 efectivos en julio de 2002, antes de la toma de posesión del sucesor de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, esa cifra era de 181.414 (Ministerio de Defensa 2010: 68).

El cambio en la fuerza militar colombiana acontecida durante el gobierno de Andrés Pastrana, no obstante, lo recoge el General (r) del Ejército entrevista, cuando reconoce que:

“El punto de inflexión lo marca la fracasada toma de Mitú, en Vaupés. De parte de las FARC y que coincide en el tiempo con la reforma militar, la cual yo dirigí, y el Plan Colombia, en cuya puesta en marcha yo tuve una relación más que directa. Es este el punto de quiebre real, que después continúa con Uribe, pues las FARC habían dejado atrás la guerra de guerrillas, habían consolidado la guerra de movimientos y estaban a punto de iniciar la guerra posiciones, cumpliendo así con las tres fases doctrinales de la guerra de guerrillas. Desde el 2000 el declive de las FARC ha sido permanente. De hecho, además del PC y de la PSD hay que destacar el impuesto para la guerra, que nos proporcionó 447.000 millones de pesos y que sirvieron para hechos muy concretos que afectaron a cambiar la relación militar. Se fortaleció, por ejemplo, la capacidad de combate nocturno, se compró 25.000 visores nocturnos, se crea la aviación del Ejército, se adquieren helicópteros para operativos nocturnos, así como una mejor dotación de combate. Estos aspectos no se pueden obviar”. (EP 6, septiembre de 2015).

De lado de las FARC, si en 1999 se computaba un total de 11.300 combatientes, tras el proceso del Caguan se ascendía, gracias al reclutamiento llevado a cabo durante ese lapso, a 16.492 efectivos en el año 2000; que eran 16.980 en el año 2001 y 16.900 en el año 2002. Asimismo, el ELN, que partía de los 3.500 combatientes en 1999, fue ascendiendo a los 4.533

³¹⁶Como se señala en la entrevista realizada con Germán Bula, Ministro de Educación de la administración Pastrana y presidente del Centro Mundial de Resolución de Conflicto de Naciones Unidas, “A partir de este momento, la favorabilidad se traduce en que el Estado colombiano no vuelve a ser derrotado por las FARC en ningún momento, desde 1999. El Caguan no prosperó como negociación, pero es indudable que (re)oxigenó al Estado y le confirió un margen de maniobra que marca el punto de cambio en la tendencia propia del conflicto interno colombiano” (EP 4, septiembre de 2015).

guerrilleros en el año 2000, decreciendo a 4.065 en 2001 y, finalmente, a 3.700 en el año 2002 (Ministerio de Defensa, 2005: 28).

Siguiendo con algunas cifras con las que visibilizar el escenario de contienda armada en Colombia, entre 1998 y 2002, lo cierto es que durante la presidencia de Andrés Pastrana, los desplazamientos forzados ascienden a los niveles más elevados de la historia colombiana, de tal modo que si en 1998 se registraba un total de 160.533 casos, en 2002, el volumen del desplazamiento forzado por causas directas del conflicto armado termina por afectar a 596.950 personas, acumulándose en estos cinco años un total de 1.886.885 casos de desplazamiento forzado.

También los secuestros se disparan, de manera que si en el año 1998 la cifra anual de víctimas era de 2.860 secuestros, durante el mandato de Andrés Pastrana esta cifra se llega a superar ampliamente, hasta contabilizarse por encima de 3.500 casos al año, esto es, el mayor número de secuestros de la historia del conflicto, al reportarse, solo entre 1998 y 2002, un total de 15.435 secuestros y más de 600 asesinatos por motivaciones políticas. Todo, dentro de una tesitura en la que ni los desplazamientos, ni los secuestros, ni mucho menos los asesinatos políticos, experimentan tendencias decrecientes dentro de este período (ODHDIH, 2014).

En cuanto a la tasa de homicidios violentos, en el año 1998 va a ser de 58.92, incrementándose paulatinamente y ascendiendo a 65.76 en el año 2000, y a 69.62 en el año 2002. Igual para el caso de los homicidios, que contabiliza un total de 23.087 de muertes violentas en el año 1998, éstas ascienden a 26.499 muertes violentas en el año 2000, y 28.775 muertes en el año 2002. Las acciones de las FARC terminan por triplicarse, hasta un punto en el que si en 1998, esta guerrilla protagonizaba 356 acciones armadas en 186 municipios del país, en el año 2000, son 408 acciones en 208 municipios y en el año 2002, ya son 1.042 acciones en 346 municipios.

Lo mismo para el caso del ELN, pues en 1998 esta guerrilla protagoniza 229 acciones armadas en 90 municipios, por 343 y 317 acciones en 2000 y 2001 en 129 y 131 municipios respectivamente. No obstante, en este último caso, producto del paramilitarismo –lo cual se verá en el siguiente capítulo- y de la propia política de seguridad puesta en marcha por Andrés Pastrana, desde el año 2000 se empiezan a identificar resultados decrecientes en el activismo del ELN que son perfectamente apreciables en el año 2002, cuando su activismo guerrillero decae a las 154 acciones en 65 municipios. Esto lo evidencian las siguientes palabras de “Byron”:

“En el oriente antioqueño, desde 2002, la PSD fue contundente. Con una gran ofensiva. Pero eso venía de Pastrana. Uribe lo que hizo fue montarse en una maquinaria militar que le venía dada. Sentimos mucho el impacto”. (EP 10, junio de 2015).

La realidad es que a pesar de que estas cifras evidencian una clarísima debilidad de un Estado sumido en una vorágine creciente, en la mayoría de los datos e indicadores propios de la violencia sí que se aprecian tendencias positivas, algunas muy tímidas, pero que marcan un

cambio en los comportamientos estadísticos venideros. Comportamientos ya evidentes bajo la presidencia de Álvaro Uribe en cuanto a consolidar la modernización de la Fuerza Pública, promover el crecimiento sistemático del pie de fuerza, incrementar el número de operativos contra la guerrilla o reducir la superficie objeto de cultivos ilícitos. Una superficie que gracias al Plan Colombia suscrito por Pastrana y desarrollado por Uribe va a permitir romper con la tendencia expansiva en la superficie cultivada de coca, que si entre 1998 y 2000 se eleva de 101.800Ha a 163.289Ha, entre 2001 y 2002 decae a 144.807Ha y 102.071Ha, respectivamente.

4. El Plan Colombia. Una intervención por invitación que comparten Andrés Pastrana y Álvaro Uribe

La lógica del Plan Colombia se entiende sobre la base de un contexto muy particular pues, como señala Mejía (2012), entre el 60 y 70 por ciento de la cocaína consumida en el mundo hacia el año 1998 era producida en Colombia y, su vez, consumida en un 60% en Estados Unidos y en un 40% restante, en Europa. Antes de 1994, lo cierto es que Colombia tenía un papel secundario es los mercados de coca hasta que, desde entonces, se conectan los escenarios productivos, junto con Bolivia y Perú, y los canales de distribución, potenciando el protagonismo de Colombia como productor principal cocalero.

Bajo un contexto en el que la connivencia de los grupos armados ya ha sido planteada con detenimiento en el capítulo anterior, hacia el año 1999, y ante la posibilidad de incurrir como modelo de Estado fallido por lo argüido en el inicio de este capítulo, Andrés Pastrana y Bill Clinton suscriben lo que, popularmente, va a ser denominado como Plan Colombia. Esto es, un proyecto bilateral enmarcado sobre la imperativa urgencia de conseguir dos resultados en un plazo casi inminente. De un lado, reducir a la mitad, en el período de seis años, el total de producción y cultivo de coca acontecido en Colombia. De otro, cooperar con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y favorecer el control territorial de la Fuerza Pública en su lucha contra los actores irregulares armados, interviniendo sobre lo que se definió como la mayor debilidad estructural en la construcción del Estado colombiano. Así lo reflejan las siguientes palabras del General (r) de la Policía Nacional entrevistado:

“Cuando se pone en marcha la PSD y el Plan Colombia la principal amenaza es el terrorismo, el cual, sobre todo, se identificaba con las FARC. Unas FARC frente a las que se destinó un mayor nivel de concentración de recursos y estrategia que sirvió para debilitar, sistemáticamente, y entre 2002 y 2008, a esta guerrilla. Es así, que se reduce los principales indicadores de violencia como la tasa de homicidios o de secuestro de modo que se ponía de manifiesto que la política producía resultados. Mire para el caso de las FARC. En 2008 es tanto que sienten la ofensiva, que el mismo Alfonso Cano reconoce lo que denomina “la derrota progresiva de las FARC” en lo que fue el “Plan Estratégico de Alfonso Cano”. De ahí es que se vuelve a la guerra de guerrillas y a un punto de inflexión por el cambio de correlación de fuerzas, y a tenor de la recuperación y consolidación de las ventajas estratégicas”. (EP 5, abril de 2015).

Aunque el objeto y alcance del Plan Colombia ya fue abordado a inicios del el capítulo III, se trata de traer a colación alguna información adicional desde la contextualizar el análisis que en los siguientes epígrafes se desarrolla. Así, sobre la base de este propósito, el Plan Colombia se concreta, en el año 1999, con base en tres pilares. Un primer eje, centrado en reducir el volumen de cultivos y mejorar la seguridad, un segundo eje, destinado a promover la justicia económica y social, y un tercer eje, encargado de fortalecer y hacer valer el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

No obstante, cabe precisar que este inicial Plan Colombia va a quedar fuertemente afectado por un cambio continuo, pues si inicialmente el Plan Colombia apoyaba la negociación con las guerrillas –en la medida en que el narcotráfico o la inseguridad dependían del conflicto armado–, tal vez, por su imperativa acomodación con la (cambiante) realidad colombiana, termina por erigirse en un plan anti-narcóticos que, tras la ruptura de las negociaciones, y la llegada de Álvaro Uribe, concluye siendo un plan netamente militarizado.

Sea como fuere, lo cierto es que el Plan Colombia termina por distanciarse, absolutamente, del modo de intervención planteado desde Europa, es decir, de acuerdo a dinámicas participativas, incluyentes, de *peacebuilding* y paz positiva, y que perfectamente queda recogido en su proyecto “estrella”: los Laboratorios de Paz.

De acuerdo a valoraciones resultadistas, en menos de lo esperado, el Plan Colombia habrá resultado exitoso gracias, sobre todo, a una evidente reducción en cuanto a la superficie objeto de cultivo cocalero, si bien, a su vez, habrá generado, por ausencia de un enfoque integral, que otros Estados de la región experimenten incrementos en su producción de cultivos, tal y como sucede en los referidos Bolivia y Perú. De igual manera, por medio del Plan Colombia se mejorarán los niveles tanto de identificación y destrucción de laboratorios como de incautaciones de narcóticos.

Del lado de las aspersiones aéreas, elemento nuclear del Plan Colombia, entre 2001 y 2012, se llegan a asperjar con glifosato un total de 1.501.878Ha, a las que se añaden otras 409.096Ha erradicadas manualmente, las cuales hasta 2005, como práctica en sí, casi resultaron irrelevantes.

Para muchos, la realidad del Plan Colombia fue la de acrecentar la crisis humanitaria en la que queda sumida Colombia, una vez que se integra en la PSD (Rojas, 2003), favoreciendo a su vez una internacionalización del conflicto (Tickner, 2002; Coy 2003; Barnett y Finnemore, 2004). Bien es cierto que, entre estas *sombras* del Plan Colombia estarían las afectaciones al derecho de la vida, y el especial impacto que ha tenido en las comunidades indígenas, al fumigarse de manera especial, parques naturales y resguardos indígenas, aun contraviniendo el Plan de Manejo Ambiental. A pesar de que la Defensoría del Pueblo trató en su momento de suspender las fumigaciones y evitar criminalizar al pequeño cultivador, ello nunca sucedió y la lógica y alcance del Plan Colombia siguió inalterado. Esto se apreciaría claramente en lo que a reparar daños por la aspersión aérea se refiere, pues de los

más de 2.000 casos presentados entre 2002 y 2003, solo 2 fueron indemnizados por esta cuestión – siendo además, casos relacionados con grandes empresarios de palma de aceite en Nariño y Norte de Santander. Esto queda reflejado en la entrevista al personero de Putumayo:

“aquí el Plan Colombia tuvo unos efectos desastrosos. Sí, se redujeron los cultivos, pero se afectó negativamente al ecosistema, a los cultivos, a los ríos y a la salud de las personas. Las aspersiones generaron abandono de tierras y miles de desplazamientos. No existen mecanismos de defensa cuando se producen las aspersiones pues hay todo un entramado jurídico, y de desinformación, que impide la restitución de derechos. El Estado y la Policía son conscientes. Se fumigaba sin avisar y cuando se afectaba negativamente a la población civil, ésta quedaba en una situación de completa indefensión. Los personeros nos sentimos impedidos. Y después de todo, mire, en Putumayo, vuelve a haber los mayores niveles de cultivos del país. Continúan las FARC y hay nuevas bandas criminales”. (EP, abril de 2015).

Lo mismo señala el personero, por ejemplo, de Nariño, cuando reconoce que:

“las aspersiones no han servido de nada. Hemos sido, cada año, el departamento con más aspersiones, y ahí estamos, los primeros productores de coca del país, y de los departamentos que más incrementa los cultivos. Todo sigue igual. El Frente 29 continúa operando, colaborando con el ELN y, se adicionan los intereses que en la droga tienen Urabeños, Rastrojos y Águilas. ¿De qué ha servido el Plan Colombia?” (EP 18, febrero de 2015).

Asimismo, en muchas ocasiones, las fumigaciones han generado desplazamientos en las superficies cultivadas, además de un proceso de traslación en las propias dinámicas del conflicto, tal y como sucede, muy particularmente, en el Pacífico colombiano. Es decir, en los casos de Chocó, Cauca o Nariño, la relación entre traslado de cultivos, traslado de actores e incremento de violencia directa derivada del conflicto, ha terminado por generar un mayor impacto de la crisis humanitaria como, perfectamente, por ejemplo, evidenciarían los casos de Tumaco o Buenaventura. Este impacto de la violencia, de otro lado se traduciría muy bien en el número de desplazamientos transfronterizos, toda vez que, para el Plan Colombia, Nariño y Putumayo terminan siendo escenarios nucleares.

Por ejemplo, en lo que respecta al caso de Ecuador, si en 2000 se aprobaron 283 solicitudes de refugio a colombianos, y se registraron 323 nuevos solicitantes, solo en 2002, las solicitudes aceptadas fueron 1.701 y los nuevos solicitantes 6.244. El recrudecimiento en Venezuela, especialmente por las acciones del Plan Colombia sobre Arauca y Norte de Santander, generaron que si en 2000 las solicitudes de refugiados colombianos eran 95, en 2002, se hubiesen disparado a 803 (ACNUR, 2003, citado en Rojas, 2003: 5). Igualmente, en la región occidental, Panamá fue el que mantuvo sus niveles más estables, quizá porque los enclaves próximos presentaban otro tipo de violencia en sus dinámicas regionales, en las que el impacto humanitario de las aspersiones fue otro bien distinto, al menos, en los inicios del Plan Colombia, tal y como evocan las 711 solicitudes de refugio aceptadas en 2000, por las 989 aprobadas en el año 2002.

Sea como fuere, la lógica planteada por el Plan Colombia no es ni mucho menos nueva. De hecho, entre 1989 y 1999 Colombia ya había recibido una ayuda de la cooperación estadounidense por valor de 1.100 millones de dólares, de manera que lo que, más bien plantea el Plan Colombia, es una intensificación en la confrontación y en el sentido de la ayuda, pues esa cifra acumulada en una década pasó a ser transferida en su conjunto el mismo año en que empezaba el Plan (Tokatlian, 2001).

Inicialmente, y durante la presidencia de Andrés Pastrana, el Plan Colombia se conformó sobre montos específicos. Es decir, ya en 2000, fueron autorizados 1.319 millones de dólares en ayuda. Del total de cooperación, 519 millones, en ese año, se destinaron a cooperación militar, a los que se añaden 123,1 en ayuda policial. Asimismo, se busca fortalecer las fuerzas armadas, sobre la base de crear tres nuevos batallones que operen en el sur del país y 16 helicópteros Black Hawk y 30 helicópteros UH-1H Huey, además de técnicas de aspersión y fumigación. Las categorías más reducidas serían las de desarrollo alternativo (68.5 millones), ayuda a desplazados (37.5 millones), DD.HH. (51 millones), reforma judicial (13 millones), fortalecimiento del Estado de Derecho (45 millones) y construcción de paz (3 millones), Tokatlian (2001: 166).

En suma, solo en el año 2000, Andrés Pastrana recibiría directamente de Estados Unidos un total de 860.3 millones de manera tal que los 458.8 millones restantes se destinarían, a través de la IRA, con extensión al resto de países de la región.

En todo caso, la supuesta *vietnamización* de Colombia quedaba por completo descartada, de manera tal que el apoyo militar y policial de Estados Unidos en Colombia, dentro del Plan, quedaba siempre vinculado a una intervención, en todo caso, indirecta, y más bien incorporando las lógicas de la cooperación que, en su momento, recibió El Salvador³¹⁷.

Ya con la llegada de Bush a la presidencia, se identificaría en Colombia una prioridad para su política exterior si bien, en términos que dejan de ser concebidos exclusivamente en el plano de política anti-drogas. De hecho, el perfil del gabinete de política exterior invita mucho a pensar en el viraje que va a experimentar desde entonces el Plan Colombia. Nombres tales como Dick Cheney (Vicepresidente), Colin Powell (Secretario de Estado), Donald Rumsfeld (Secretario de Defensa), John Ashcroft (Secretario de Justicia) o Condoleezza Rice (consejera de Seguridad Nacional), denominados por Mann (2004) como los *Vulcanos de Bush*, van a converger, en su mayoría, en la necesidad de politizar el caso colombiano, al entender que la amenaza del país es más la insurgencia económica, territorial y militar fuerte, más allá del narcotráfico y el crimen organizado (Tokatlian, 2001).

Es aquí, por tanto, donde se entremezcla indistintamente una semántica del conflicto en la que se asocia a la guerrilla términos indistintos como terrorismo, criminalidad o narco-terrorismo. De hecho, el gobierno Bush va a presionar a Pastrana para que termine con el

³¹⁷ Para entender la semejanza en cuanto a políticas de asistencia y cooperación militar, un documento revelador sería el de Asenjo (1985) así como, más actual, el trabajo de investigación elaborado por Portillo (2010).

proceso del Caguán a cambio de más cooperación militar y técnica. Una vez fracasado el proceso de diálogo, la relación con Washington se traduce en un mayor intervencionismo a modo de tecnología militar e interdicción, fumigaciones masivas y una disputa frontal con los grupos armados, especialmente las FARC, en buena medida, gracias a un sustancial número de preparadores y expertos estadounidenses así como cooperación articulada a través de agencias de seguridad privada, cuyo culmen tendrá lugar durante los años de presidencia de Álvaro Uribe.

De hecho, entre 2002 y 2005, entre Estados Unidos y Colombia gastarán 1.200 millones de dólares por año, en una intervención que llega a representar el 1.5 por ciento del PIB del país en ese mismo período (Mejía, 2009: 4). En esta tesitura, y como se señaló anteriormente, si bien es cierto que la superficie cultivada se redujo en un 50% para el año 2006, de 160.000Ha a 80.000Ha, no lo hizo en los mismos términos la producción, que se redujo de 687 TN a 610 TN, esto es, poco más de un 10%, lo cual dejaba de manifiesto el énfasis sobre el productor antes que en el distribuidor.

De igual forma, algunos trabajos, como el de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca terminaron por señalar que, a pesar de la reducción en la superficie cultivada, la producción de cocaína podría haberse incrementado hasta en un 4%, entre los años 2000 y 2006. Ello lo confirma el propio Mejía (2009: 10), cuando como resultado de la mayor productividad invertida sobre los cultivos ilícitos, si en el año 2000 se producía 4.3 Kg de coca por hectárea cultivada, en 2006 ese rendimiento se elevaba a los 7.7 kilogramos.

Lo cierto es que ya, durante el mandato de Uribe, se desdibuja el Plan Colombia que, como sostiene Rojas (2007: 17), termina por fundirse, en sus logros, como parte de la PSD y que “parecen ser lo mismo pero que son presentados como estrategias relacionadas pero distintas”. Sobre esta ambigüedad, el Plan incorpora diferentes intervenciones. Una con base en promover la recuperación económica; otra en la referida lucha antinarcóticos; y otra en pos de promover la reforma del sistema judicial y la promoción de los DD.HH. si bien, en la reestructuración que comienza ya en la segunda etapa de Uribe, se incorporan nuevos componentes como desmovilización, desarme o reinserción, aparte de un replanteamiento del concepto de amenaza terrorista.

Según la propia interpretación de la presidencia de Álvaro Uribe, entre los logros del Plan Colombia se identificaría, por ejemplo, el restablecimiento en la confianza de los inversores y consumidores además de la recuperación macroeconómica del país, lo cual da muestra de una importante pero también deseada imprecisión.

Asimismo, dentro de los resultados de Plan, se incorporan otros programas que nada tienen que ver con el mismo, tales como la Red de Apoyo Social y sus programas de Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción además de otras iniciativas como la ampliación de las coberturas en salud o en educación. De hecho, en relación con lo anterior,

cuando Álvaro Uribe rindió cuentas de su primera etapa presidencial, y particularmente del Plan Colombia, la lucha anti-narcóticos y el terrorismo aparecieron como tercer componente, relegados a un protagonismo secundario, e intencionado, como identifican Rabasa y Chalk (2001) o Marcella (2003). Especialmente, porque todo lo contrario, y como se viene señalando, el Plan Colombia tenía como elemento nuclear, sobre todo desde 2003, la modernización de la Fuerza Pública casi en exclusiva para, con ello, hacer posible la puesta en marcha de instrumentos de fumigación aérea sobre escenarios controlados por la guerrilla³¹⁸, adicionandol a puesta en marcha de operativos nocturnos, el desarrollo de tareas de inteligencia así como la unificación de los sistemas de comunicación.

De hecho, este componente va ser clave, a partir de 2006, cuando Uribe, una vez finalizado, en sentido estricto, el Plan Colombia, busca su continuidad a través de lo que se denominó como la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del desarrollo Social 2007-2013, y que Rojas (2007) denomina como Plan Colombia II. Ello, porque las FARC se mantienen en niveles notables de violencia y un escenario próximo de negociación es absolutamente impensable.

Sea como fuere, algunos como Cárdenas, Cadena y Caballero (2005:11), por esta imprecisión en las cifras, terminan por cuestionar sus consecuencias dentro de todo el entramado dispuesto por el Plan Colombia:

“lastimosamente, la información sobre los resultados directos de las acciones de la fuerza pública contra la insurgencia es muy reciente (...) y poco se puede decir sobre el impacto de la estrategia pues no se cuenta con periodos anteriores que permitan establecer una comparación”.

Igual, para el caso de anti-narcóticos se plantean importantes cuestionamientos, pues en las evaluaciones que se plantean más allá de la reducción de hectáreas cultivadas o las aspersiones realizadas, en ningún momento, por ejemplo, se evalúa el impacto de esto en la participación colombiana dentro del negocio ilícito; su impacto en el marco mundial; su afectación a la demanda, o hasta qué punto se ha repercutido y debilitado la estructura económica de los grupos además de si éstas se han diversificado.

Asimismo, la tendencia demostrada es de una mayor dependencia, de un incremento de la relación entre violencia y cultivos, de un impacto sobre el desplazamiento además de un resultado que en algunos casos, debe relativizarse notablemente.

Más bien, como reconoció la Contraloría durante los primeros años del Plan Colombia, las aspersiones son de dudosa de legalidad³¹⁹, y los hechos de intervenir en Colombia sobre los narcóticos han terminado por tener un resultado mínimo a nivel mundial hasta el punto de que, en los últimos años, lejos de incrementarse, se ha reducido, por ejemplo, el precio en el

³¹⁸ De aquí se deriva, claro está, la creación de batallones anti-narcóticos que finalmente generaron una confusión que fue resuelta por el propio 11-S y la adaptación de la lucha global contra el terrorismo.

³¹⁹ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-441981> Consultado el 30 de julio de 2015.

mercado estadounidense. Tampoco es que, como se verá con posterioridad, al analizar el tema de los DD.HH y el DIH es que se hayan conseguido grandes logros en esta materia.

Sobre estas circunstancias, toda la segunda etapa presidencial de Álvaro Uribe, especialmente, mientras coincida con la presidencia de George W. Bush, condice a que, en el fondo, el Plan Colombia se caracterice, casi exclusivamente, por una continuidad en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas, de manera que el que el fortalecimiento de la justicia o del Estado de Derecho quedarán desdibujado por los continuos atropellos al ordenamiento jurídico y por presentar opciones para una desmovilización, desarme y reintegración del entramado paramilitar, también, desvirtuado y sin atenciones estructurales.

Tampoco el desarrollo social como componente, a tenor de los peores registros en inequidad, informalidad o desarrollo socio-económico quedarán claramente identificados como objetivos consumados. Más bien, el resultado de continuidad al Plan Colombia, entre 2006 y 2010 quedará reducido, como acertadamente señala Rojas (2007: 32) a la triple “C”: *consolidación* de la primera etapa; *continuidad* de todos los programas implementados; y *colombianización*, dentro de un contexto en el que cada vez más Colombia, y menos Estados Unidos, abanderan los recursos para la intervención directa sobre el conflicto armado interno.

5. El alcance regional de la política de seguridad de Andrés Pastrana en el conflicto armado colombiano, 1998-2001

Con base en lo anterior, es que para entender las dinámicas particulares experimentadas por el conflicto armado colombiano, se hace imprescindible analizar el impacto de las diferentes políticas de seguridad transcurridas durante el lapso objeto de estudio, transcurrido entre los años 1998 y 2012.

De acuerdo con la hipótesis planteada al inicio de este capítulo, la intención es visibilizar el alcance real de las diferentes políticas de seguridad a partir del número de operativos por iniciativa de Policía y Ejército, de acuerdo al volumen de acciones y combates unilaterales contra los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. La confluencia de ambas tendencias permite plantear si existe o no una reducción de la violencia directa ejercida dentro de la tesitura del conflicto armado.

Como se decía, al respecto, cabe pensar en dos escenarios distintos. En primer lugar, el escenario menos concurrido sería el de poca presencia de la Fuerza Pública y, por ende, una escasa afectación al activismo guerrillero de las FARC y del ELN o viceversa. Un segundo escenario sería el que tendría lugar sobre escenarios de disputa, tradicionalmente controlados por las guerrillas, y que experimentan un escalamiento del conflicto armado fruto del mayor número de combates y operativos. Esta circunstancia admite dos posibilidades, que si bien en los años de gobierno de Andrés Pastrana no se perciben con total claridad, sí sucederá con los años posteriores de la PSD. Es decir, por un lado el mayor número de operativos contra las guerrillas por parte de la Fuerza Pública puede generar un repliegue de las mismas que se

traduzca en una reducción de su activismo unilateral. Por otro lado, puede conducir a un enquistamiento de la violencia en el que, por el notable arraigo de la guerrilla, la intensidad mayor número de combates no resulte eficaz a efectos de “desescalar” el conflicto armado (Pérez Salazar, 2004).

Sea como fuere, con la presentación de las tres presidencias colombianas transcurridas entre 1998 y 2012 que son objeto de estudio, se podrá construir una perspectiva temporal a la vez que espacial que clarificará las hipótesis planteadas en el inicio de este capítulo.

8.1. La región nororiental durante la presidencia de Andrés Pastrana

De acuerdo a cómo se planteó en los capítulos anteriores, a efectos de comprender regionalmente el país en sus dinámicas territoriales con respecto del conflicto armado, por región oriental se entendía, básicamente, a los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander y Casanare.

En lo que a las FARC respecta, y como se presentó con mayor detalle en los capítulos anteriores, a excepción del departamento de Arauca, no se aprecian sustanciales focos de activismo guerrillero, tanto hacia finales del siglo pasado como en los dos primeros años de presidencia de Andrés Pastrana. De hecho, los frentes más combativos de esta guerrilla en la región son los Frentes 10 y 45, que llegaron a acumular, en total, en estos años, hasta 182 acciones. Un activismo que, sin embargo, supera ampliamente las 40 operaciones acumuladas por parte de la Fuerza Pública que, entre los años 1998-2000, tienen lugar sobre Arauca. Es más, incluso adolecen de mayores diferencias cuando en el año 2001, a pesar de intensificarse los combates por iniciativa militar hasta contabilizarse un total de 45, las FARC terminan por recrudecer su activismo y llegar a las casi cien (94) acciones.

Para los casos de Casanare y Norte de Santander, el activismo de la Fuerza Pública sobre las FARC se va a intensificar respecto de años anteriores³²⁰. De hecho, en Casanare, frente a las 34 acciones de la guerrilla en estos cuatro años se dirigen un total de 43 combates militares, lo cual invita a pensar en una correlación de fuerzas cada vez más favorable al Estado, y que resulta más evidente en el caso de Norte de Santander, donde el apenas relevante Bloque Magdalena Medio de las FARC, a través del frente 33, va a ser objeto de 37 iniciativas de la Fuerza Pública toda vez que protagoniza 21 acciones guerrilleras³²¹.

³²⁰ No tanto en el caso de Casanare, donde las acciones entre 1994 y 1998, por ejemplo, se acumulan unas 12 acciones militares al año, similar a los años de presidencia Pastrana. En el caso de Norte de Santander la intensificación sí que resulta mucho más evidente pues nunca se superaron, desde 1994, las 6 acciones militares en este departamento, (ODHDIH, 2014).

³²¹ Para entender las dinámicas regionales del Frente 33, es recomendable la siguiente entrevista al jefe del frente, Rubén Zamora. Véase: <http://farccom.blogspot.com/2012/11/entrevista-al-comandante-del-frente-33.html> Consultado el 30 de julio de 2015.

Mapa 49: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 1998



Fuente: ODHDIH (2014)

De los cuatro departamentos, el que verdaderamente más importante va a resultar para la política de seguridad del presidente Andrés Pastrana, va a resultar, sin ninguna duda, el departamento de Santander. Así, entre 1998 y 2001 se dirigen hasta 79 combates del lado de la Policía y el Ejército, y que minan el activismo de los frentes operativos en la región, como son los Frentes 20, 12, 46 y 23. Frentes que en estos cuatro años terminan por protagonizar un total de 39 acciones armadas.

En lo que afectaría al ELN, sí que resulta apreciable, como se puso de manifiesto en capítulos anteriores, un mayor arraigo, especialmente, alrededor de los departamentos de Santander, sobre todo, y de Norte de Santander y Arauca, en menor medida. Esto se observa en el hecho

de que el activismo guerrillero presenta unos números muy superiores con respecto a las iniciativas de la fuerza colombiana, principalmente, porque el nororiente del país resultaba ser un enclave marcadamente con presencia del ELN. Solo en Arauca, entre 1998 y 2001, sobre 149 acciones del ELN, apenas se identifican 16 combates del lado de las Fuerzas Militares.

La importancia de Santander para el ELN se pone encuentra en el hecho de que el departamento, únicamente en 1998, acumula 68 acciones guerrilleras, especialmente por la notable concurrencia de algunos de sus frentes más importantes, como los “Guillemro Antonio Vázquez”, “Capitán Parmenio”, “Efraín Pabón Pabón”, “Manuel Gustavo Chacón” o “Claudia Isabel Escobar Jerez”, y que apenas son contrastables con los 12 combates por iniciativa del Ejército en ese mismo año. No obstante, la presencia de la Fuerza Pública frente al ELN no va a ganar peso específico entre 1999 y 2000, pues apenas supera la decena de operativos y solo se intensifica, aunque con notable importancia, a partir del año 2001, cuando se registran 26 operativos militares, en una relevancia que, por primera vez en la historia reciente del departamento, empieza a equiparse a la correlación de fuerzas de la guerrilla.

Por último, en lo que afectaría a Norte de Santander, se dan dos tendencias paralelas, de mayor activismo del ELN, que acumula entre 1998 y 2001 hasta 84 acciones guerrilleras, por 97 combates de la fuerza colombiana, sobre todo, contra los frentes “Carlos Germán Velasco”, “Camilo Torres Restrepo” y “Juan Fernando Porras”. El mayor nivel de intensificación del conflicto en este departamento, precisamente se dará en el año 2001, cuando las 41 acciones del ELN ese año en Norte Santander se acompañan de otras 46 acciones de la Fuerza Pública.

8.2. La región central durante la presidencia de Andrés Pastrana

Igualmente, por región central colombiana se tenía en consideración a los tres departamentos del eje cafetero, Risaralda, Quindío y Caldas, así como Cundinamarca y Boyacá. Lo cierto es que, precisamente, hasta el año 2001, como ya se pudo apreciar, esta región presenta dinámicas diferenciales entre sus departamentos.

En estos cuatro años, en el antiguo Viejo Caldas apenas se recogen 18 acciones en Risaralda, 19 acciones en Caldas y 4 en Quindío. Sobre un total de 41 acciones guerrilleras de las FARC se van a acumular hasta 62 combates armados contra la guerrilla, si bien, se identifica una mayor presencia de la fuerza del Estado en Risaralda (26) antes que en Caldas (21) y Quindío (15). Ello, sobre todo, como respuesta al activismo que en esos años protagonizan el frente 50, del Bloque Central en Risaralda y Quindío, y los Frentes 4 y 9 del Bloque Noroccidental.

Mucho más importantes para las FARC son Cundinamarca y Boyacá. Tanto, que hasta el año 2000, el número de acciones guerrilleras (59) supera al número de iniciativas de la Fuerza

Pública (50)³²², fruto del ya señalado ejercicio de asfixia sobre la capital bogotana llevado a cabo, a través de frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54, 55 y 65, todos pertenecientes al Bloque Central. Sin embargo, desde 2001, roto el proceso del Caguán e iniciada una respuesta contundente del Ejército sobre la guerrilla conduce a que, solo en este año, se supere ampliamente el número de operativos militares acumulados en los últimos tres años (66), lo cual triplica el número de acciones guerrilleras, convirtiendo, al departamento de Cundinamarca en una prioridad militar, tal y como también sucederá, igualmente, en Antioquia, Meta y Caquetá.

De otro lado, en Boyacá, particularmente en el norte, por el activismo del Frente 45 perteneciente al Bloque Oriental se van a concentrar un número importante de acciones guerrilleras, las cuales ascienden hasta 55 por 47 combates de la Fuerza Militar colombiana. No obstante, durante todos los años de la presidencia de Andrés Pastrana, el número de acciones de las FARC termina siendo superior al número de acciones de Policía y Ejército.

Para el caso del ELN, el escenario central resulta mucho menos atractivo que para las FARC. Tanto que, por ejemplo, las acciones en el norte de Boyacá entre 1998 y 2001 (8), son en el norte del departamento, y por acción del frente “Domingo Laín Sanz”, el cual empieza a ser debilitado, en los años 2000 y 2001, cuando la política de seguridad dirige 15 operativos militares focalizados todos en esta región (MOE, 2007).

Igual sucede en Cundinamarca, donde el activismo del ELN se condensa en el sur, a través del Frente Regional “Óscar Fernando Serrano”, protagonista de 5 acciones en el año 2000, pero expulsado del departamento una vez que se intensifica la presión militar sobre el municipio de Guaduas, con 5 acciones de la Fuerza Pública, y bajo un total de 3 acciones más en la región, sin respuesta guerrillera alguna.

Finalmente, en el eje cafetero, durante los años de presidencia de Andrés Pastrana nunca se recogió presencia relevante del ELN, la cual se centró sobre todo en Caldas, entre 2000 y 2001, a través de los frentes “Martha Elena B.”, “Cacique Calarcá” y “Ernesto Che Guevara”, responsables de hasta 31 acciones armadas casi sin respuesta de las Fuerzas Militares, que solo dirige tres acciones frente a esta guerrilla. Igualmente, sucedería en Risaralda, cuando las 15 acciones guerrilleras del ELN acumuladas entre 1998 y 2001, apenas son contrarrestadas por 3 operativos militares, lo cual pone de manifiesto el especial interés, en este escenario, por combatir a las FARC antes que al ELN.

8.3. La región suroccidental durante la presidencia de Andrés Pastrana

La región suroccidental, formada por dos enclaves claramente diferenciados como son, por un lado, los departamentos de la cuenca del Pacífico - Nariño, Cauca y Valle del Cauca-, y

³²² Esto, de acuerdo a romper la estrategia de asfixia y disputa sobre el centro de las FARC, en su propósito de disputar e intentar tomar el poder político. De ahí que Cundinamarca, como departamento clave en tanto que concentra a Bogotá, resulte prioritario (Rivas y Rey, 2010).

por otro lado, los departamentos de interior, Huila y Tolima, responderían a dos dinámicas diferenciadas en cuanto a la representación de la disputa armada dentro del conflicto.

En lo que respectaría a la primera subregión, de fuerte influencia, sobre todo, del Bloque Occidental, en estos años que transcurren entre 1998 y 2001 se observa, en primer lugar, uno de los mayores desequilibrios entre el activismo guerrillero de las FARC y la respuesta en cuanto a número de operativos militares. Así, si en Nariño se acumulan hasta 68 acciones de las FARC, en Cauca 121 acciones y en Valle del Cauca 60 acciones, el número de iniciativas de parte de la Fuerza Pública es de 48, 84 y 57 operativos, respectivamente, esto es, siempre, notablemente, por debajo del activismo guerrillero de las FARC.

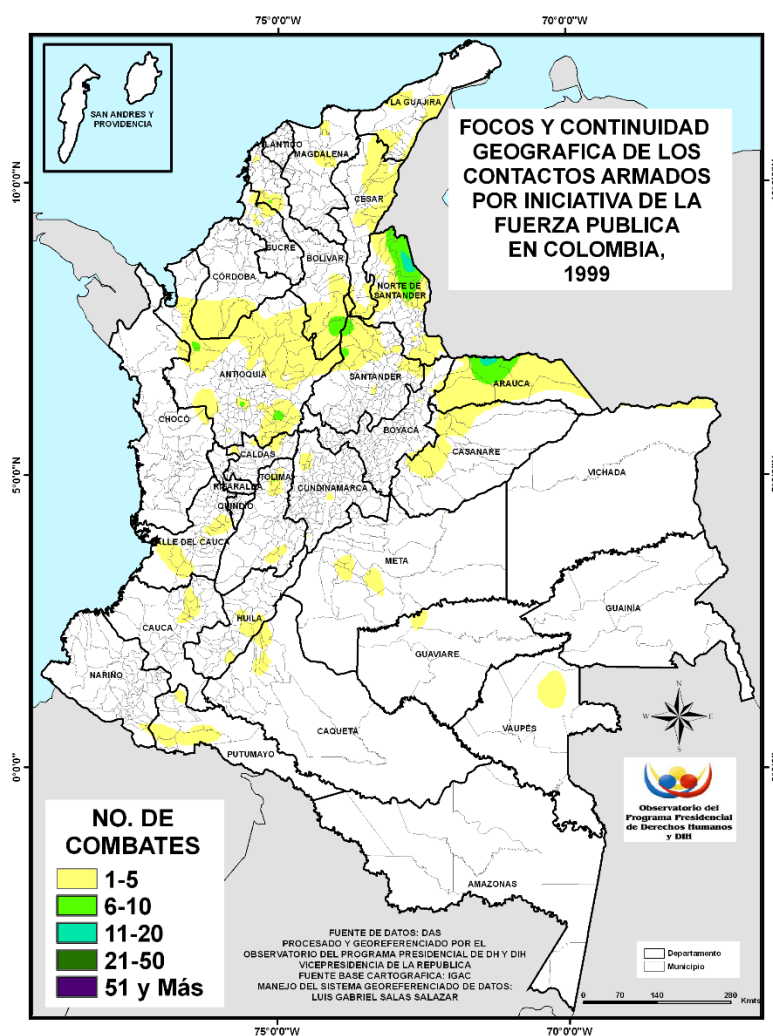
En el caso de Nariño, lo cierto es que no se aprecia una presión de la fuerza colombiana suficiente como para revertir una correlación de fuerzas y que se entiende marcadamente desfavorable. Igual en Cauca, pues habría que precisar que la mitad de esos 84 operativos mencionados tuvieron lugar en 2001, de manera que hasta entonces, si cabe, es más evidente el activismo de las FARC sin confrontación de parte del Estado. Distinto sería el caso de Valle del Cauca, donde sí que se aprecia un nivel de presión de la fuerza pública mayor, pero también, a partir de 2001, cuando se concentra el 40% del total de acciones militares puestas en marcha durante la presidencia de Andrés Pastrana.

En cuanto a los departamentos de interior, se presenta una mayor presencia de operativos del Ejército, especialmente en Tolima (79), y muy particularmente desde el año 2000, cuando se triplica la intensidad de los combates contra las FARC – particularmente sobre los Frentes 29 y 21 del Bloque Central. Por primera vez, el número de acciones de la Fuerza Pública supera al número de acciones guerrilleras. Igual, y aunque en menor proporción, sucedería en Huila, donde las 59 acciones militares identificadas entre 1998 y 2001 empiezan a tornarse positivas, en la correlación de fuerzas frente a las FARC, a partir de 2001, cuando los 29 combates por iniciativa del Estado, además de superar el número de acciones guerrilleras de las FARC, triplica los registros de los años anteriores, marcando el punto histórico más alto en el número de combates por acción militar en el departamento.

Para el caso del ELN, su mayor presencia guerrillera se concentraría en Valle del Cauca y Cauca, si bien, a partir del año 2000 y la tendencia expansiva que, en el caso de Cauca, se concentra a través del frente “Manuel Vásquez Castaño”, es que se condensan hasta 22 acciones guerrilleras. Una cifra muy relevante, sobre todo, si se tiene en cuenta que anteriormente, el ELN nunca superó las 5 acciones. En paralelo, lo cierto es que apenas se recogen operativos militares contra esta guerrilla pues, de hecho, entre 1998 y 1999 solo se identifican 4 acciones de la Fuerza Pública. Cuatro acciones que pasan a 25, tanto en 2000 como en 2001 y que unido a la violencia de las Autodefensas Campesinas de Ortega - ACO, pero sobre todo del Bloque Calima – BCa-, van a afectar muy considerablemente a esta guerrilla.

En cuanto a Valle del Cauca, si cabe, hay mayor activismo del ELN, sobre todo, hasta el año 2000. El número de acciones guerrilleras del ELN (42), entre 1998 y 2000 van a duplicar al número de operativos del Ejército aunque, desde 2001 esa circunstancia empieza a cambiar, como consecuencia de los golpes sistemáticos de la fuerza colombiana a tres importantes frentes como el regional “Omaira Montoya” y los frentes “José María Becerra” y “Luis Carlos Cárdenas”.

Mapa 50: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 1999



Fuente: ODHDIH (2014)

Respecto del departamento de Nariño, el fuerte activismo del frente “Comuneros del Sur” que, entre 2000 y 2001, protagoniza hasta 17 acciones guerrilleras, de otro lado, apenas es

respondido por tres operativos militares, que parecen estar más centrados en combatir a las FARC, como igual sucedía en la anterior mencionada región del eje cafetero.

Finalmente, cabría destacar presencia del ELN en Tolima, y muy particularmente en el norte, por medio del referido frente “Bolcheviques de Líbano”, sobre todo activo entre 1998 y 1999 (16), pero que no empieza a ser objeto de acciones militares, prácticamente, hasta 1999, cuando desde entonces y hasta 2001, terminan por dirigirse un grueso de 25 acciones de combate que contribuyen a mermar sobremanera el pie de fuerza de la guerrilla en el departamento.

8.4. La región atlántica durante la presidencia de Andrés Pastrana

La región, comúnmente conocida como costeña, hace referencia a los siete departamentos próximos a la costa Atlántica, y va a presentar, en este particular análisis de la política de seguridad desarrollada bajo el gobierno de Pastrana, una doble tendencia en lo que afecta a las FARC. Por un lado, en estos años, La Guajira (12), Córdoba (9) o Atlántico (0), van a ser departamentos donde la presencia tanto del Bloque Norte – para La Guajira y Atlántico-, como del Bloque Occidental, en Córdoba, no va a resultar especialmente relevante en términos de violencia armada. De otro lado, quedaría una especial presencia guerrillera de las FARC en Cesar (38), a través del Frente 41; en Bolívar (59) y Sucre (40), por medio del Frente 35 y 37, y en Magdalena (47), por el activismo del Frente 19.

Lo más preocupante sería que con las salvedades de Atlántico, donde se recogen 2 acciones armadas de la fuerza colombiana en 1999, y en Córdoba, donde para el mismo lapso de tiempo se dan hasta 13 operativos militares, en el resto de departamentos se hace evidente una presencia de la Policía y del Ejército muy por debajo de lo que es la presencia guerrillera y del conjunto de acciones unilaterales que protagonizan dentro de este lapso que transcurre entre 1998 y 2001³²³.

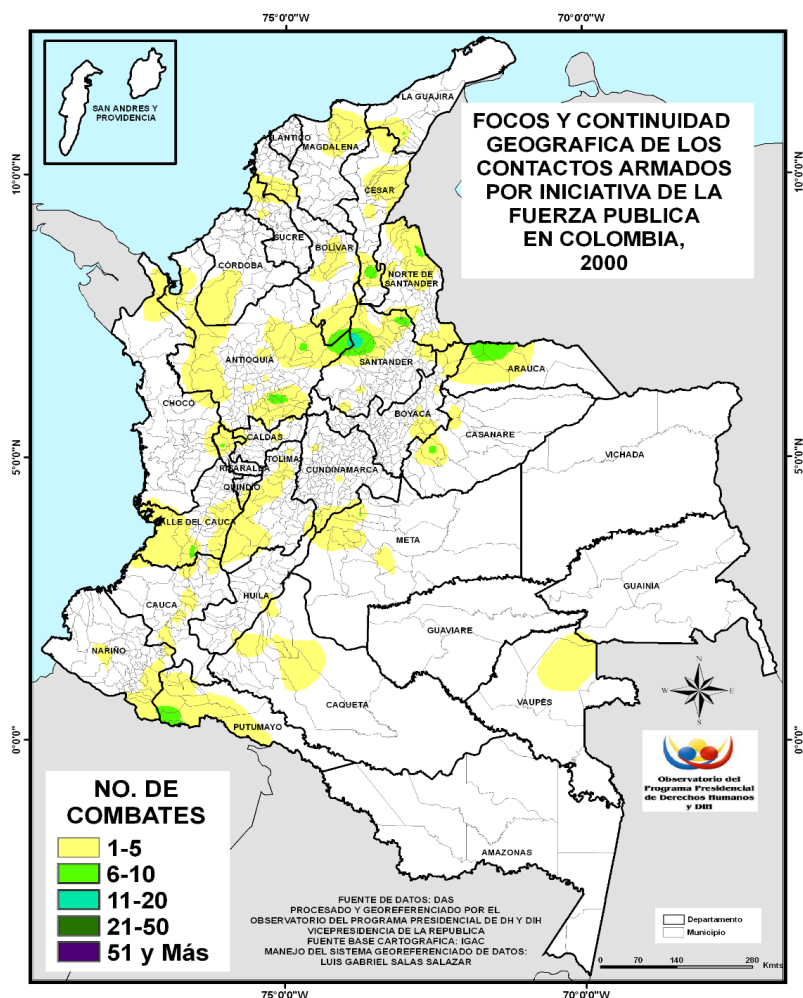
Tanto es así que, por ejemplo, en Cesar o en Magdalena, pero sobre todo en Sucre y en Bolívar, las acciones armadas de las FARC van a estar muy por encima, incluso casi duplicando a las acciones por iniciativa de la Fuerza Pública. Ello, muy especialmente, entre 2000 y 2001, dejando de manifiesto la dificultad imperante para que el Estado colombiano consolide su condición hegemónica y haga valer el monopolio legítimo de la violencia en esta región del país. De hecho, prácticamente se trata de la región donde la correlación de fuerzas en detrimento del Estado, dadas las circunstancias, resulta más inoperante.

Para el caso del ELN la dinámica es distinta. Debe partirse, no obstante, de una completa ausencia del ELN en los departamentos, entre los años 1998 y 2001, tanto de Atlántico como de Magdalena. Tampoco es que fuese especialmente significativa la ubicación en el

³²³ Entre 1998 y 2002 las acciones de las FARC en la costa Atlántica se intensifica como consecuencia del fortalecimiento de la misma estructura guerrillera, especialmente su Frente 37, que llega a articular hasta 500 guerrilleros, y por la disputa tanto con las AUC primero, como con la política pública de seguridad, después. Véase, por ejemplo: <http://www.semana.com/on-line/articulo/con-baja-martin-caballero-bloque-caribe-farc-queda-herido-muerte/89051-3> Consultado el 30 de julio de 2015.

departamento de Sucre, donde operaba el frente “Jaime Bateman Cayón”, aunque en términos poco significativos durante el transcurso de los años mencionados si bien, en todo caso, siempre por encima del número de operativos militares. Por ejemplo, si en el año 2000 se dieron hasta 8 acciones guerrilleras del ELN, solo se encuentra un operativo militar dirigido contra esta guerrilla.

Mapa 51: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2000



Fuente: ODHDIH (2014)

Tampoco La Guajira se erige como un enclave de gran relevancia para un ELN, cuya presencia a través del rente “Luciano Ariza” es insignificante hasta el año 2001, cuando el número de acciones pasa de una a 10 acciones armadas y toda vez que se pasa de 4 a 14 en

el número de operativos militares. Todo, dentro de uno de los años de mayor escalamiento del conflicto armado en el departamento con respecto de estos dos actores.

Cuestión distinta se apreciaría en los departamentos de Bolívar y Cesar que, de largo, van a ser los más importantes para una Fuerza Pública que, por la intensidad de los combates, parece estar más centrada en combatir al ELN que a las FARC. En Bolívar, los frentes “Jaime Bateman Cayón”, al norte, “Alfonso Gómez Quiñónez”, en el centro, y “Héroes de Santa Rosa”, van a protagonizar un total de 21 acciones guerrilleras, mientras que son destino de hasta 33 iniciativas de la Fuerza Pública. Una Fuerza Pública, especialmente beligerante entre 1999 y 2000, donde este departamento va a resultar prioridad en la disputa frente al ELN.

Más importante, incluso, va a ser el departamento del Cesar, que se trata del enclave más importante para el ELN dentro de esta región atlántica durante los años de presidencia de Andrés Pastrana. Ello, por la ubicación de importantes frentes de la guerrilla como el “Camilo Torres Restrepo”, “José Manuel Martínez Q.”, “Seis de Diciembre” o “José Solano Sepúlveda” y que, de manera notable, van a acumular hasta 74 acciones armadas en estos años. Lo cierto es que la mayor disputa con el Ejército va a ser a partir del año 2000 pues, solo entre este año y el siguiente, se contabilizan hasta 59 acciones guerrilleras por 55 acciones del Estado colombiano, en un registro que, solo en 2001 (34), llega al histórico del departamento. Esto resultaría coherente con la interpretación de entender que Cesar pasa por ser el centro neurálgico del ELN en el norte del país y, por ende, deviene fundamental fortalecer la presencia pública si de debilitar a esta guerrilla se refiere.

8.5. La región amazónica interior durante la presidencia de Andrés Pastrana³²⁴

La región amazónica, en su corredor interior, se encontraría formada por los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, y como se presentó en el capítulo anterior de esta tesis, se comprende como el primer gran enclave estratégico de las FARC, habida cuenta de que allí se ubican muchos de sus escenarios fundacionales más importantes como, por ejemplo, el municipio de La Uribe o San Vicente del Caguán mientras que, de otro lado, la presencia del ELN brilla por su ausencia.

Entre 1998 y 1999, la región se caracteriza por una preponderancia manifiesta de la guerrilla sobre la Fuerza Pública, pues mientras que en Caquetá se concentran 29 acciones de las FARC por 5 del Estado, en Putumayo se registran hasta 57 acciones de la guerrilla por 14 del Estado. Asimismo, en Meta se dan 47 acciones de las FARC por apenas 27 combates por iniciativa del Ejército. De hecho, y como sucediera en la costa Atlántica, se aprecia el notable activismo guerrillero unido a una correlación de fuerzas con el Ejército, básicamente, que no termina por evidenciar una balanza positiva con respecto de la fuerza del Estado. Al margen de estas dinámicas de violencia quedaría el departamento de Guaviare, con 8 acciones

³²⁴ Esta denominación, es circunstancial, a efectos, simplemente, de integrar el eje selvático-montañoso que une Meta, Caquetá y Putumayo.

guerrilleros de las FARC por 21 operativos de las Fuerzas Militares, 13 de ellos, en el año 2001.

No obstante, sorprende que, entre 2000 y 2001, siendo buena parte de los departamentos de Meta y Caquetá el escenario correspondiente con la “zona de despeje”, y siendo esta región el enclave prioritario para las FARC, se evidencie, asimismo, un crecimiento notable de los combates por iniciativa del Estado. En Meta las iniciativas de combate por parte del Ejército van a duplicar a las de las FARC en 2001 – 62 por 31, y en Putumayo casi van a cuadruplicarse, dándose 48 combates por iniciativa de la Fuerza Militar frente a 13 acciones de la guerrilla. En adición, en Caquetá, donde los combates por acción del Ejército van a pasar de 10 en el año 2000 a 37 en el año 2001, se va a registrar una notable intensificación del activismo guerrillero, el cual se eleva a cifras similares a las protagonizadas por la Fuerza Pública³²⁵. En todo caso, resulta importante señalar de qué modo, si bien el corredor amazónico durante los dos primeros años de la presidencia de Andrés Pastrana son enclaves claramente con una preponderancia armada de las FARC, desde el año 2000, ese activismo empieza a relativizarse, al incrementarse el pie de fuerza y el número de combates por iniciativa de unas Fuerzas Militares que, claramente, consideran a esta región como prioritaria, en buena medida, por su conexión directa al fracaso del proceso negociador y la ingente presencia de cultivo ilícito.

8.6. La región amazónica fronteriza durante la presidencia de Andrés Pastrana

En cuanto a los departamentos que hacen parte de la frontera con Venezuela, tal y como sucede con los escenarios amazónicos de Amazonas, Guainía, Vichada y Vaupés, se pondría de manifiesto una pauta particular y diferenciada, de un lado en cuanto a Amazonas y Guainía, que no sufren violencia armada directa de las FARC, y por ende, sin combates militares, y de otro, respecto de Vichada y Vaupés. Estos dos departamentos sí que recogen un mayor activismo de la guerrilla, en el caso de Vichada (9), especialmente entre 2000 y 2001, y en Vaupés (14), entre 1998 y 2000.

Esta presencia de las FARC, poco relevante, unida a una ausencia total del ELN en esta región, explicaría que el volumen total de operativos de la Fuerza Pública hasta el año 2001 resulte prácticamente insignificante aun cuando, por ejemplo, solo en este año el volumen del cultivo ilícito asciende hasta las 1.000Ha en Vichada y las 9.000Ha en Vaupés, lo que explicará, ya bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, que estos departamentos resulten prioritarios en el combate para afectar las finanzas de la guerrilla, tanto con operativos directos como con un ingente volumen de aspersiones aéreas.

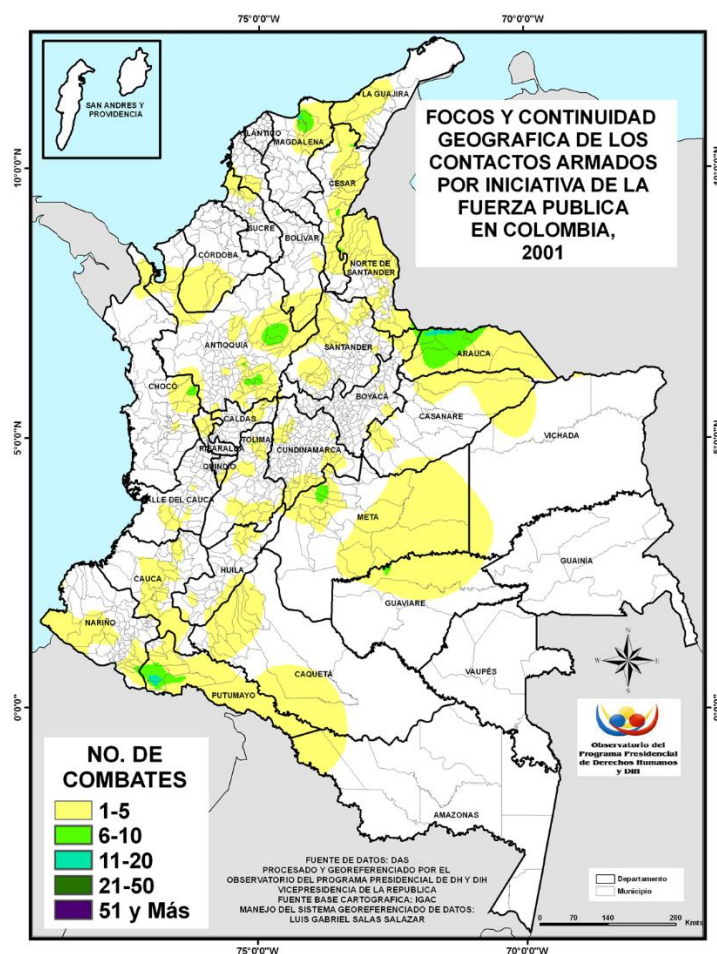
8.7. La región occidental durante la presidencia de Andrés Pastrana

Como último enclave a destacar, se encontraría la región occidental, básicamente interpretada en esta tesis doctoral, en relación a los departamentos de Antioquia y Chocó. En esta región,

³²⁵ Las acciones de las FARC en Caquetá, entre los años 2000 y 2001 protagonizan hasta 50 acciones, especialmente en Puerto Rico (6), Florencia (7) y El Paujil (8). Lo cierto es que, en este departamento, de sus 16 municipios, en 14, en estos dos años, se recogen acciones de las FARC, ODHDIH (2014).

en primer lugar, se identifica una fuerte correlación de fuerzas entre las FARC y la presencia del Ejército y la Policía. Ello, porque si entre 1998 y 2001 las FARC acumulan un total de 171 acciones, por su parte, la Fuerza Pública va a desarrollar hasta 201 combates. De este modo, incluso, entre 1998 y 2000, la presencia de las FARC y su número de acciones guerrilleras supera de largo el volumen de operativos del Estado si bien, solo en 2001, se incrementa este rubro de manera sustancial, al pasar de 46 operaciones a 72, lo cual supone un especial fortalecimiento de la política de seguridad. Esto, en cuanto que a partir de este momento se interpreta a Antioquia como una prioridad territorial y en disputa al Frente 4, perteneciente al Bloque Magdalena Medio, y a los Frentes 36 y 9 del Bloque Noroccidental.

Mapa 52: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2001



Fuente: ODHDIH (2014)

Sensu contrario, en Chocó el activismo armado de las FARC en estos años va a resultar poco significativo, como ponen de manifiesto las 15 acciones guerrilleras de las FARC acumuladas

entre 1999 y 2001 y que son apenas acompañadas de un volumen total, en estos tres años, de 16 operativos militares, mayormente dirigidos al frente 57 de las FARC.

En relación al ELN, ya se señaló en un capítulo anterior la importancia estratégica del departamento de Antioquia, principalmente para los Frentes “Manuel Hernández el Boche”, en el Urabá; “Carlos Alirio Buitrago” y “Ernesto Che Guevara”, en el suroriente departamental, y en el noroccidente del departamento, por medio de los Frentes “José Antonio Galán”, “Compañero Guillermo Tomás”, “Bernardo López Arroyabe”, “María Isabel Cano”, “Compañía Anorí” y “Capitán Mauricio”.

En suma, Antioquia es tan importante para el ELN que basta con observar el dato de 291 acciones armadas entre 1998 y 2001 – de las cuales 193 se dan entre 2000 y 2001, en un número que sobrepasa por mucho el número de combates de la Fuerza Pública contra esta guerrilla. Sin embargo, la tendencia *in crescendo* de Antioquia como prioridad en la estrategia de seguridad, para el gobierno de Pastrana, sea como fuere, se traduce también en un dato significativo: si en 1998 el volumen de operativos por iniciativa del Estado era de 20 acciones militares, en 2001 esa cifra asciende hasta 78.

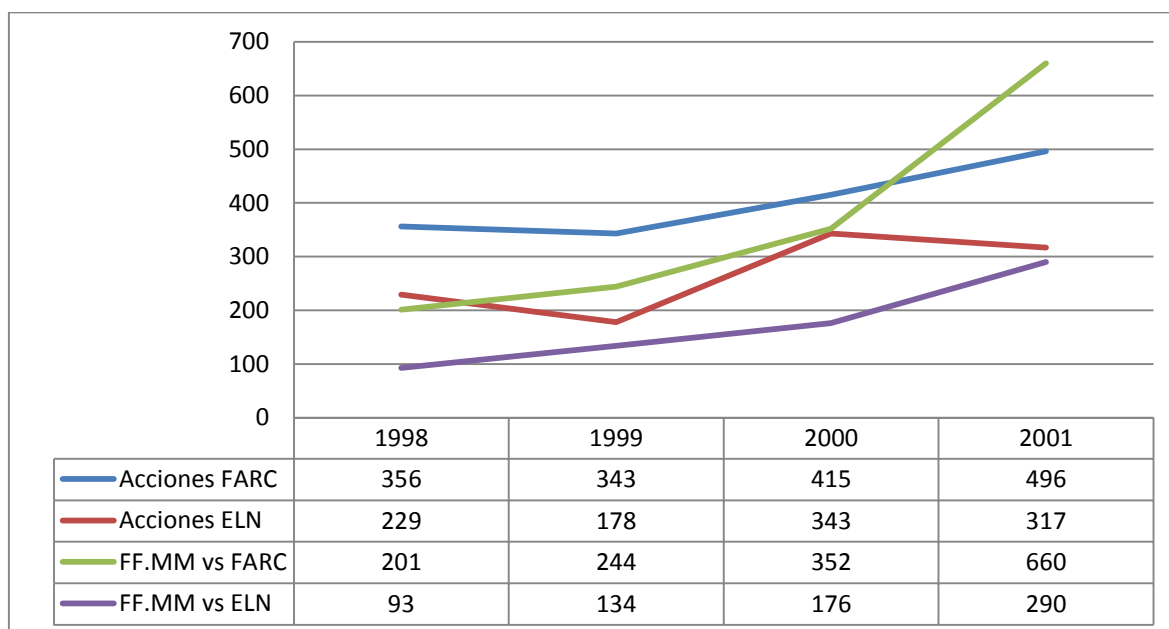
Por su parte, en cuanto a Chocó, para el ELN el nivel de violencia guerrillero será incomparable en su volumen (9), a los niveles de Antioquia, entre 1998 y 2001, del mismo modo que tampoco es relevante el número de acciones por iniciativa de las Fuerzas Militares que, entre 1998 y 2001, igualmente, no supera las 10 acciones.

8.8. Conclusiones. Valoraciones al impacto de la política de seguridad entre 1998 y 2001

Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, durante la presidencia de Andrés Pastrana, especialmente entre 1998 y 2001, se pone de manifiesto una tendencia creciente en cuanto al volumen de acciones del conflicto armado, siendo evidentes tres tendencias claras. La más importante, se traduce en términos de operativos militares por iniciativa de la Fuerza Pública pues si en 1998 las acciones contra las FARC y el ELN son 201 y 93, respectivamente, en 2001, éstas han ascendido 660 y 290 respectivamente.

De hecho, por primera vez las acciones de la Fuerza Pública superan a las acciones de las FARC por un lado, y por otro, en cuanto al ELN se llega a niveles semejantes, pues en el año 2001 se registran 317 acciones de esta guerrilla por 290 acciones contra la misma de parte del Estado. Así, se observan dos tendencias que van a tener una clara continuidad en el transcurso de toda la década siguiente. Primero, porque desde el año 2001, los operativos militares superan ampliamente el número de acciones de la guerrilla si bien, igualmente, se va a prolongar, al menos durante los siguientes dos años, una tendencia expansiva en el activismo de las FARC. Segundo, porque el ELN va a entrar en un proceso de repliegue, cada vez mayor, toda vez que el volumen de operativos contra esta guerrilla termina por ser muy superior, si bien esto será evidente ya durante los años de la presidencia de Álvaro Uribe.

Gráfico 13: Evolución del conflicto armado entre 1998 y 2001

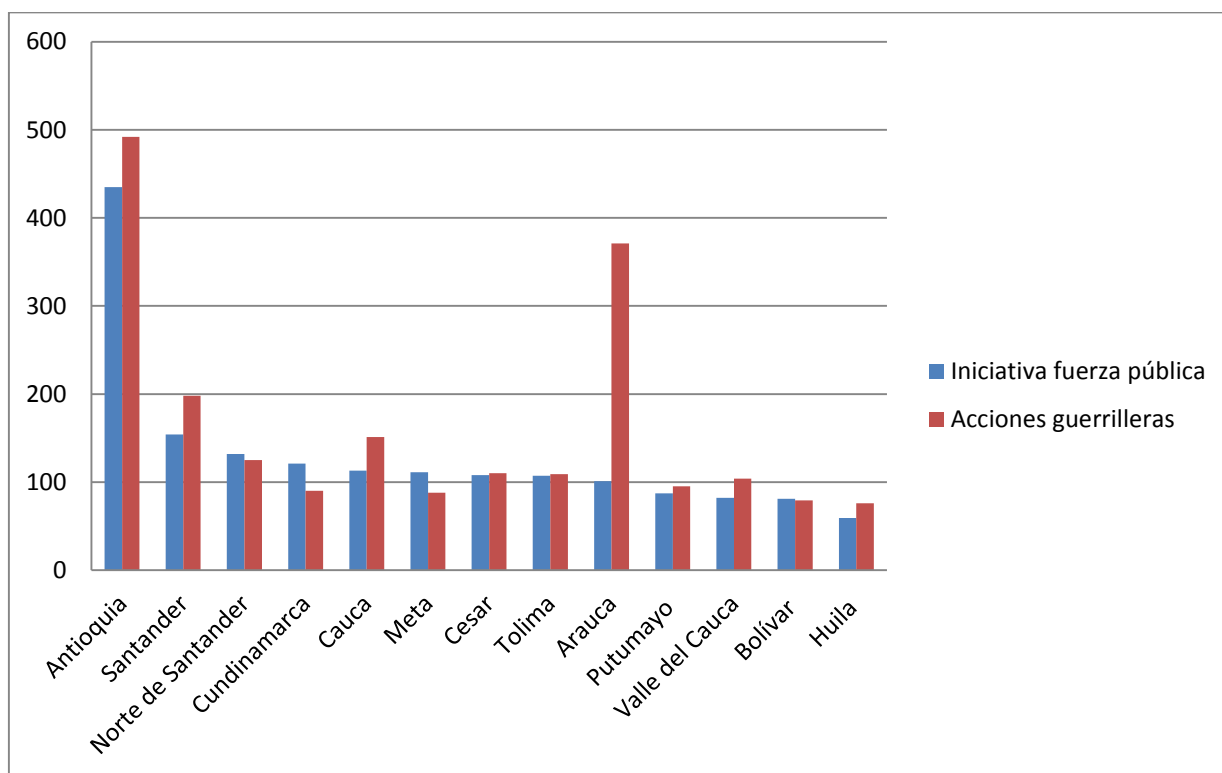


Fuente: Elaboración propia

En un desglose regional, entre 1998 y 2001, Antioquia se erige como el principal escenario de intervención para Andrés Pastrana. Sea como fuere, si se observa, muchos de los primeros enclaves de mayor intervención son Santander, Norte de Santander, Cesar, Arauca o Bolívar, que aglutinan una elevada presencia tanto de FARC como de ELN. Sin embargo, la debilidad se entiende en la medida en que casi la totalidad de los mayores escenarios de presencia de la Fuerza Pública, todavía entre 1998 y 2001 se encuentran caracterizados por un muy superior activismo guerrillero de FARC y ELN respecto del volumen de operativos iniciados por el Estado.

Tanto, que en términos agregados, de los trece departamentos con mayor presencia de operativos militares, nueve presentan cifras desfavorables si se comparan estos con el nivel de acciones armadas directas de parte de la guerrilla. Sea como fuere, lo cierto es que se observa un cambio de tendencia que será profundizado durante los años siguientes. Así, si en 1998 en 19 departamentos hay mayores niveles de activismo guerrillero que de operativos de la Fuerza Pública, en 2001, esa cifra se ha reducido a 6 departamentos, gracias al impacto de la modernización puesta en marcha por la presidencia.

Gráfico 14: Prioridades de la Fuerza Pública, 1998 - 2001



Fuente: Elaboración propia

En la región nororiental, el Estado va a fortalecer su presencia frente a las FARC en Casanare y Norte de Santander, donde el alcance de esta guerrilla es menor, toda vez que va a consolidar, prioritariamente el control del Santander, en el que las FARC quedan relegadas. Mientras, en Arauca se dista mucho de los niveles de presencia guerrillera, claramente preponderantes tanto en favor de las FARC como del ELN. En relación con esta última guerrilla, su posición dominante, se evidencia mayormente en Santander y Norte de Santander donde acontecen, a pesar de todo, tendencias de repliegue y mayor presencia de la Fuerza Pública, solo desde el año 2001.

De otro lado la región central va a emerger como prioritaria para la seguridad pública, y tanto en el eje cafetero como en Cundinamarca se registra una intensidad creciente que hacer que los operativos militares superen ampliamente a las acciones guerrilleras de las FARC, con la excepción de Boyacá. Asimismo sucede con el ELN, con mucho menor arraigo y que no es prioritario en cuanto a las acciones militares, lo que le permite tener un protagonismo mayor en el eje cafetero que, no obstante, desaparecerá en los años venideros.

En la región suroccidental hay una intensificación que no sirve para mitigar el elevado arraigo de las FARC, sobre todo, en Valle, Cauca y Nariño, de manera que solo entre 2000 y 2001 se evidencia una mayor presencia pública y una tendencia de relativo mayor control en

beneficio del Estado en los casos Huila y Tolima. En el caso del ELN, sí que se va a preciar mayor impacto por parte de los operativos de la Fuerza Pública, especialmente, a partir del año 2000, en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, y en el interior, en Tolima, donde para 2001, el número de operativos militares pasa a superar ampliamente a los del ELN.

En el caso de la región Atlántica no se puede destacar una mejora de las condiciones de seguridad, donde Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar no reducen sus niveles de activismo guerrillero en lo que se refiere a las FARC. Igual para el caso del ELN si bien, desde el año 2000, tanto en Bolívar como en Cesar, los dos enclaves más importantes de esta guerrilla, se empieza a apreciar una tendencia creciente en la presión del Estado sobre esta guerrilla, y que marcará el inicio de un repliegue en el que, sin duda, el factor paramilitar será de gran importancia, a efectos de su desaparición en esta región del país.

Si el eje Meta-Caquetá-Putumayo va a ser de dominio incuestionable de las FARC hasta el año 2000, desde entonces erosionado primero, y roto después el proceso del Caguán, va a experimentar una mayor intensificación de la Fuerza Militar en su intento por romper la hegemonía local de las FARC, principalmente en Meta y también en Putumayo. Ello, con niveles de presencia del Estado nunca antes vistos aunque, por todo, insuficientes para poner fin al fuerte arraigo local de esta guerrilla. Todo lo contrario que en el corredor amazónico fronterizo con Venezuela, que no termina por ser de interés para la política de seguridad de Andrés Pastrana.

Finalmente Antioquia, como se dijo, pasaría a ser la prioridad departamental, sobre todo, por el gran arraigo guerrillero, tanto de las FARC como, muy especialmente, del ELN. Esta guerrilla, durante estos años va a quedar fuertemente diezmada por un recrudecimiento de la acción pública pero también por el impacto creciente del paramilitarismo.

9. La presidencia de Álvaro Uribe y la Política de Seguridad Democrática, 2002-2010

A lo largo del capítulo III de esta tesis doctoral se abordaba con relativa profundidad el alcance, el éxito y los cuestionamientos que acompañaron a la PSD puesta en marcha por el presidente Álvaro Uribe.

Como con anterioridad se señalaba, una vez que lleva Álvaro Uribe a la presidencia, concurren tres tendencias que, inicialmente dispuestas por la presidencia anterior, van a encontrar continuidad así como mayor intensificación entre 2002 y 2010. Desde el año 2000 se inicia un cambio en la correlación de fuerzas con las guerrillas y en el volumen de operativos por parte del Estado. Asimismo, el Plan Colombia se intensifica y empieza a mostrar los resultados inmediatos³²⁶, especialmente, en lo que a reducción de cultivos se

³²⁶ El año 2001 es el año de mayor aspersiones de la administración Pastrana, con un total de 94.153Ha asperjadas. Con la llegada de Uribe, entre 2002 y 2005, de manera sostenida, se supera cada año las 130.000Ha asperjadas llegando a superar las 170.000Ha en el año 2006 (UNODC, 2014).

refiere y transferencia de mayor conocimiento y coordinación respecto de los operativos de la Fuerza Pública. Finalmente, un tercer aspecto, particular de la propia figura política de Álvaro Uribe se encontraría en su propia experiencia como gobernador de Antioquia, cuando bajo su mandato se consolidaron las controvertidas cooperativas de seguridad privada – Convivir- y que para muchos, terminan por ser, la nueva razón de ser del renovado paramilitarismo colombiano³²⁷, en la segunda mitad de los años noventa (Rivera, 2007).

A todo lo anterior cabría añadir la propia afectación de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el alineamiento inmediato de Colombia sobre el código geopolítico construido, en la lucha con el terrorismo, por la administración de George W. Bush. Como se planteaba, esto transforma la semántica del conflicto armado. Una semántica en la que las FARC pasan de ser concebidos como guerrilleros a hacerlo en términos de terroristas.

Dentro de esta tesitura, Marta Lucía Ramírez plantea, desde el Ministerio de Defensa, lo que inicialmente se definía como la Política de Seguridad y Defensa Democrática³²⁸, la cual dista del recuccionismo uribista, y cuyo eje nuclear responde a la prioridad de llevar la presencia del Estado colombiano a la mayor parte de su territorio. Esto haciendo valer la premisa de que Colombia tiene más territorio que Estado. De hecho, de acuerdo a una entrevista personal concedida a efectos de esta tesis doctoral la propia Ramírez reconocía:

“Al presidente Uribe yo le advertí en la necesidad de que tuviera en cuenta que la fuerza pública tiene en última instancia que proteger a los ciudadanos pero salvaguardando la democracia. Había que tomar la iniciativa y controlar territorios pero para controlar un territorio hacía falta mucho más que fuerza pública. Hacia falta verdadera y efectiva presencia del Estado en todo el territorio. Consciente de esto, a un año de entrar me reuní con todo el gabinete en Hato Grande. Les planteé cinco objetivos que no podíamos perder de vista. En primer lugar, hacía falta llevar la justicia a todo el territorio. Cerrar las vías de la corrupción y la impunidad. Esto, por ejemplo, nunca funcionó. En segundo lugar hacía falta largo plazo. Visión de futuro y no cortoplacismo. El cortoplacismo nos llevaba a crear continuamente nuevos militares y policías a la vez que articulando programas e iniciativas de intervención simultáneas. En tercer lugar hacía falta acompañar el proceso militar de dinámicas sociales, económicas, comerciales que tampoco fueron implementadas y que afectaron, en cuarto lugar, al relativo impacto de las fumigaciones, que no ofrecían posibilidades reales y alternativas”. (EP 3, junio de 2015).

³²⁷ Tal y como lo reconoció Verdad Abierta (s.f.) “las asociaciones de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, fueron una fachada del proyecto paramilitar en el Urabá antioqueño. Así lo demostraron investigaciones de los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz durante la audiencia de legalización de cargos ante un magistrado de conocimiento, contra el ex jefe del Bloque Bananero Ever Velosa García, alias ‘HH’, realizada en Bogotá esta semana que pasó. Velosa está hoy en prisión en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado en marzo de 2009”. Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/3216-convivir-fachada-del-paramilitarismo-en-uraba> Consultado el 30 de julio de 2015.

³²⁸ Además del documento original, pueden destacarse como algunos documentos susceptibles de revisión: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2010), Velásquez y Ortiz (2012) Ministerio de Defensa Nacional (2006) o Buitrago (2006).

Dicho de otro modo, la urgencia para Álvaro Uribe en su primer mandato presidencial es fortalecer la seguridad de acuerdo a un mayor espacio de confrontación con la guerrilla, principalmente con las FARC, y de manera más focalizada, en la mitad sur del país. Esta confrontación contrasta con las dinámicas llevadas a cabo en la mitad norte del país, donde más bien, de lo que se trata es de desarmar y pacificar los territorios azotados por el paramilitarismo, especialmente la costa Atlántica, y explorar vías de negociación con el ELN, aunque en todo caso, improductivas³²⁹.

Es por esto que termina por acontecer un distanciamiento entre el propio Uribe y Ramírez. De hecho, en la propia entrevista concedida a esta tesis, Ramírez apuntaba la siguiente consideración:

“Finalmente, estaría la periferalización que usted acertadamente plantea, y que en mi opinión se debe a la falta de una perspectiva integral en la agenda y en el territorio. Es verdad que, no obstante, teníamos escenarios urgentes sobre los que intervenir pero no podemos obviar que jamás se hizo caso a una recomendación que yo solicité. Soberanía social de las fronteras, esa era la clave. Sin infraestructura siquiera, ¿cómo abordar la pobreza es la base estructural más importante de la violencia en Colombia? Nada de esto fue implementado por el presidente Uribe a quien le pudo un afán resultadista que terminó siendo negativo”. (EP 3, junio de 2015).

Así, es por lo anterior que la política de “mano dura” que se instaura en Colombia, tiene como propósito mermar al máximo el pie de fuerza, sobre todo, de las FARC y, por ende, generar espacios crecientes de confrontación directa que permitan relegar a la guerrilla a escenarios de mucha mayor dificultad en cuanto a su supervivencia. Esto llega a su nivel de mayor algidez, entre los años 2005 y 2006, cuando, como se señalaba anteriormente, Camilo Ospina Bernal llega al Ministerio de Defensa y promueve, con unas consecuencias nefastas en materia de DD.HH., la necesidad permanente de causar bajas a la guerrilla, antes que la construcción de percepción de seguridad o la superación de las condiciones estructurales de la violencia³³⁰.

³²⁹ El propio exdirigente del ELN, “Felipe Torres”, al respecto, en una entrevista concedida para esta tesis reconocía lo siguiente: “Uribe intenta la desmovilización y desarme del ELN y de las AUC. Pero con el ELN el intento de desarmar era el de promover una rendición total. Entregar las armas. Vale. ¿Y a cambio qué? Es por esto que logra exitosamente el desarme paramilitar, pero no el del ELN. De hecho, fuimos testigos en vivo y directo de ese desarme. Nosotros veíamos muy bien el diálogo, pero eso no era posible con las condiciones que había en la PSD. El ELN quería seguir respetando la impronta social. Nosotros, ya estábamos convencidos de que el camino no era el de las FARC. No podíamos sencillamente librar una guerra abierta. Además, no teníamos cercanía con esta guerrilla. No podía haber emulación”. (EP 9, mayo de 2015)

³³⁰ El instrumento jurídico objeto de controversia fue la Directiva 029. Como señala Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2014:66) “En noviembre de 2005, el Ministro de Defensa Camilo Ospina, expidió la Directiva 029, que establece como política la compensación monetaria por las acciones que conducen a la muerte de los miembros de grupos armados ilegales”

La realidad del alcance de la PSD de pacificación en el norte y ataque frontal en el sur, que también sostiene “Felipe Torres”³³¹, va a ser dada durante las dos legislaturas de la presidencia de Álvaro Uribe. La pacificación en el norte va a permitir, sobre todo, la desmovilización de más de 33.000 combatientes de las AUC, sobre todo, también de otros bloques paramilitares, al albor de una controvertida norma, ya expuesta, como es la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz.

Lo realidad de todo es que, en su discurso, la presidencia de Álvaro Uribe siempre mantuvo abierta la puerta de una supuesta negociación. Una negociación que, para materializarse, requería de un cese al fuego total, unilateral e incondicional, previo, sin albergar posibilidad alguna de una zona de despeje y sin atisbo alguno de negociación política más allá que la mera discusión respecto de las condiciones de desmovilización, con plena garantía de reinserción y acompañamiento, desde una misión de observación internacional. Dada esta tesitura, desde el inicio, FARC y ELN van a desestimar tal posibilidad de negociar. Empero, sorprendentemente, el paramilitarismo sí que se acogió a esa posibilidad, paradójicamente, cuando más fuerte se encontraba las AUC, principalmente, porque el Estado no les presionaba militarmente y porque sus cotas de poder podían haber seguido incrementándose sin problema alguno. A tal efecto, son relevantes las palabras de “El Alemán”:

“Hacia 2002-2003 lo cierto es que nos damos cuenta que somos unos idiotas útiles de la Fuerza Pública y de la estrategia de Estados Unidos. Todos querían que les hiciésemos el trabajo sucio. Eso nos llevó a la decisión de poner un alto el fuego en la confrontación armada. El Estado tenía ya capacidades de combate. Ya le habíamos hecho el trabajo sucio. Teníamos que dar un paso al costado. Castaño no quería que fuésemos un cartel. Lo cierto es que la desmovilización fue un golpe duro a las FARC. Les dimos donde más les dolía. Nos sometimos a la justicia y les demostramos que no puede haber impunidad. Pero fue un fracaso, más de 30.000 combatientes sin empleo. Con desigualdad. Se excluye a las AUC como actor político. Piense que la exclusión de las AUC como actor político será el inicio de la próxima guerra. El ELN siempre ha visto a las FARC como su hermano mayor y las Bacrim tienen una gran oportunidad criminal pero son más exguerrilleros que pasaron por las AUC que hombres de nuestras estructuras. “Carapollo” o “Ever Veloza” son el mejor ejemplo de ese tipo de individuos”. (EP 13, junio de 2015).

Cabe pensar en que la desmovilización paramilitar, la cual será abordada con profundidad en el siguiente capítulo, respondió a varias razones como puede ser la dificultad de la vida dentro de un grupo irregular, siempre en contextos y escenarios hostiles, aunque lo cierto es que se puede precisar que, sobre todo, respondió a un error del cálculo. Esto, porque a tenor de los movimientos producidos, parece ser que el paramilitarismo presumió que el cese de la actividad criminal sería, como en el pasado, con amnistía, impunidad y no reparación, de

³³¹ Al respecto, “Felipe Torres” señala que. “en la estrategia de Alvaro Uribe se identifica un modelo de abordaje en el orden público que contiene dos grandes elementos. Hacer la guerra del centro hacia el sur del país y la pacificación del centro hacia el norte del mismo. Guerra total hacia el sur, donde está el 80% de las FARC y pacificar el norte, donde se concentra el grueso de las AUC y el 90% del ELN”.

manera tal que el beneficio de la actividad criminal se presentaba idóneo. Más si cabe, porque el personalismo político del propio Álvaro Uribe ayudaba a pensar en desestimar la extradición. Todo lo anterior condujo a un escenario precipitado, en el que el paramilitarismo cesó las acciones contra la población civil, a la vez que propició el desarme y la desmovilización. El resultado de un proceso de justicia transicional *sui generis* terminó por generar tensiones, malestares y fracturas que, sin embargo, quedaban auspiciadas bajo un claro contexto de irreversibilidad que traería consigo los consabidos escándalos de las connivencias de la política con el paramilitarismo, en lo que fue denominado como *parapolítica*³³².

Asimismo, bajo la PSD el ELN se va a encontrar fuertemente diezmado, tanto por el impacto paramilitar que reconocen los dos testimonios del ELN encuestados, como son “Torres” y “Byron”, como por el impacto de una PSD que si bien tiene como prioridad combatir a las FARC, también va a focalizarse sobre un ELN en repliegue estratégico y militar³³³. De igual forma, las FARC se consolidarán como el primero y gran objetivo militar para la PSD del presidente Álvaro Uribe.

A la confrontación propia de la PSD hay que adicionar el factor, especialmente de fortalecimiento de la inteligencia, la logística y la fuerza aérea, que se va a ver coadyuvado por el Plan Colombia y que, además, va a incorporar las aspersiones aéreas con glifosato como una acción inmediata, nuclear. Aunque esta prioridad es anti-narcóticos, a nadie le queda duda de que existía una relación íntima con las guerrillas, en la medida en que el narcotráfico era la razón de ser que permitía entender el crecimiento exponencial de los grupos armados desde los años noventa³³⁴.

Con la PSD se convierten en prioridad una serie de amenazas perfectamente definidas sobre las cuales se focaliza la intervención de la Fuerza Pública. Estas son: terrorismo, narcotráfico, finanzas ilícitas, secuestro, extorsión y homicidio. Y la forma para llevar a cabo tal propósito

³³²Acertadamente, Álvaro (2008: 290) considera que “A mediados de la década de los ochenta se inició el proceso de descentralización política y administrativa en Colombia, que provocó un cambio en el marco institucional del Estado al favorecer el fortalecimiento del ámbito municipal en materia política, administrativa y fiscal. Uno de los avances más importantes de la descentralización política fue la elección popular de alcaldes a partir de 1988. Asimismo la descentralización política provocó el surgimiento de nuevas alternativas políticas, pues entre los objetivos de este proceso se encontraba el incremento de la legitimidad política del régimen democrático colombiano, incrementando la participación política y la gobernabilidad democrática. Esta medida otorgó un papel preponderante al municipio sin embargo en un contexto de conflicto armado, el proceso descentralizador intensificó y expansionó la violencia de los grupos armados”.

³³³No solo por la PSD sino, igualmente, por el impacto paramilitar. Debe mencionarse lo que, por ejemplo, señalan Echandía y Bechara (2006: 34), cuando reconocen que “Las más golpeadas por los paramilitares fueron las estructuras pequeñas, que se ocupaban del trabajo político más que militar. Como resultado, los frentes del ELN se vieron forzados a replegarse hacia las zonas montañosas, donde tuvieron que buscar el apoyo de las FARC. Lo anterior evidencia que las FARC han logrado absorber al ELN, proceso que se ha venido cumpliendo de varias formas: reforzando algunos de los frentes para evitar más derrotas militares (como se puede constatar en el sur de Bolívar), haciendo presencia en zonas de influencia tradicional (como se ha visto en Arauca) y defendiendo territorios de manera conjunta (como ha ocurrido en Norte de Santander).

³³⁴Recuérdese los trabajos de Pécaut (2008) o Henderson (2010) que fueron abordados en el capítulo anterior.

pasa por definir cuáles van a ser los escenarios estratégicos de control territorial, a fin de iniciar la ardua labor de protección a la población por medio de una mayor presencia del Estado. Esto, disuadiendo, a la vez, la concurrencia de grupos armados para hacer convencer a la población que la confrontación contra la guerrilla no requería de apoyo alguno de la ilegalidad, o mejor precisado, del paramilitarismo.

De hecho, la presencia territorial es una prioridad pues, como señala Rangel (2010: 7), el Estado había sido expulsado de hasta 168 municipios, lo cual evidenciaba una profunda ausencia territorial, tal y como daban cuenta las pescas milagrosas o retenes ilegales desde los que se producían secuestros y robos a la población civil y cuyo número, solo en 2002, ascendió hasta los 423 casos.

De esta manera, el control de las carreteras va a ser prioritario para la primera ministra de Defensa del gobierno de Uribe, Martha Lucía Ramírez, quien va a poner en marcha un proyecto piloto que busca recuperar el control de las vías, experimentalmente, en el departamento de Cesar, sobre los ejes Valledupar-Santa Marta, Valledupar-Maicao-Riohacha y Valledupar-Pailitas, primero, y después, en extensión, sobre las carreteras que unen Cartagena y Sincelejo, y Medellín-Mutató, y que apenas en días se convierte en un éxito en cuanto a control territorial y presencia policial (Medellín, 2010: 126)³³⁵.

Es por lo anterior, que para la PSD era urgente reducir el impacto que los secuestros y la extorsión tenían en la población civil. Tanto, que solo en 2002 la cifra de secuestros en Colombia fue de 2.882 secuestros, toda vez que, solo entre FARC y ELN se acumularon un total de 262 casos de extorsión (Silva, 2006). Asimismo, en 2002, la cifra de homicidios era de 28.775, es decir, la cifra más elevada desde 1990, a lo que se adicionaban 680 masacres y una tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de 69.62, lo cual era el registro más alto de muertes violentas desde 1994. De igual forma, el volumen de hectáreas cultivadas con coca era el más elevado del mundo, superando las 100.000Ha (UNODC, 2003: 7).

³³⁵ Los paramilitares controlaban los enclaves urbanos, frente al control rural de la guerrilla. Esta dinámica fue muy evidente en otros departamentos en disputa, como el caso de Norte de Santander. Así lo manifestaba el personero entrevistado en Norte de Santander cuando señalaba: “Piense que entre 2002 y 2006 estimamos que tuvimos 5.000 muertes violentas, es decir, una cuarta parte del municipio y en su mayoría se debieron al paramilitarismo. Tanto, que la guerrilla desaparece por completo pues se intensifican los enfrentamientos directos, las confrontaciones y los combates contra la guerrilla. Los paramilitares son los que combaten a la guerrilla, y no el Ejército, que tuvo un protagonismo secundario. Sin embargo, no piense que hubo derrota de la guerrilla. Más bien hubo casos de resistencia y victoria guerrillera. Ahí tiene un corregimiento en el municipio de Concepción, Guajiles, donde las FARC, el ELN y el EPL se alían y tuvieron una victoria militar en ese escenario. Lo que sucede es que, mayoritariamente, los paramilitares toman los enclaves urbanos de modo que el único frente de resistencia que van a encontrar allí es el ELN. En otros, también las FARC fueron derrotadas aunque pelearon. Recuerde la masacre de La Gabarra. Se podría decir, con todo, que los enclaves urbanos pasaron a ser de las AUC y los rurales y las veredas de las FARC y las otras guerrillas. Había hasta corregimientos enteros como El Juncal o Alta Gracia, en Teorama, que eran bases paramilitares de control y narcotráfico”. (EP 19, mayo de 2015).

Por seguir planteando otras cifras sobre la dimensión del conflicto colombiano se pueden señalar 1.042 acciones y 346 municipios con presencia de las FARC, 154 acciones y 65 municipios con presencia del ELN, 318 víctimas por mina antipersonal, 596.950 desplazados forzosamente y 288 asesinatos políticos, más todo el andamiaje de la estructura paramilitar.

Así, durante la PSD, entre 2002 y 2010, la prioridad es transformar este conjunto de cifras, muy próximas a las nociones de Estado fallido planteadas al inicio de este capítulo. Es por ello que, con base en una media del 4% del PIB destinado a aspectos de seguridad y defensa, y en adición al volumen de la ayuda proveniente del Plan Colombia, es que se pone en marcha todo un proceso de transformación de la estructura sobre la que se sostenía el conflicto armado colombiano. El resultado se traduce en un incremento del 40% de policías y militares, o la creación de 429 nuevas operativas en las Fuerzas Militares; 180 estaciones de Policía, 152 subestaciones de Policía que permiten acumular, entre 2002 y 2010, un total de 16.921 combates contra las guerrillas (ODHDIH, 2014)

También, se consigue desmovilizar a 15.095 guerrilleros de las FARC y 3.188 guerrilleros del ELN; 36.664 guerrilleros, principalmente de FARC y ELN son capturados y otros 13.879 guerrilleros son dados de baja. Tanto es así, que por primera vez, la inteligencia de la Fuerza Pública pasa a asumir una posición ofensiva, de intercepciones y de infiltración, que permite llevar a cabo operativos en los que son abatidos o capturados algunos de los cabecillas más importantes de las FARC y del ELN. Así suceden “JJ”, “Negro Acacio”, “Martín Caballero”, “Martín Sombra”, “Iván Ríos”, “Karina”, “Raúl Reyes”, Rodrigo Granda o “Negro Antonio”, para el caso de las FARC. Lo mismo, para “Pablito” o “Timoleón”, en el caso del ELN.

Asimismo, se destaca la creación de 60 batallones anti-guerrilleros, 15 brigadas móviles, 8 brigadas territoriales, más de 40 destacamentos con francotiradores de alta precisión, 24 centros de instrucción y entrenamiento, 12 compañías Plan Meteoro para las carreteras o 9 batallones de apoyo. También, estarían los batallones de Alta Montaña que, desarrollados en el Parque de Farallones (Valle del Cauca), El Espino (sobre el eje Arauca, Boyacá, Casanare), Valencia (Cauca), Génova (Quindío) y en la Sierra Nevada de Santa Marta así como en la Serranía de Perijá. Batallones de Alta Montaña que van a buscar actuar directamente sobre enclaves de presencia guerrillera, con poca población, pero que permite articular escenarios de confrontación sobre ejes que, sin duda, son vertebrales para la guerrilla (Medellín, 2010: 154).

Con base en lo anterior, entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros, se incautaron 1.233 toneladas de marihuana, 5.3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Si en 2002, la superficie de coca era de 130.364Ha, en 2010, la superficie se había reducido a 58.073Ha. De igual manera, los homicidios habían caído a 15.459 y las masacres a 183, la tasa de homicidios se reducía a 33.97 muertes violentas, y el número de secuestros y de extorsiones fue de 282 y 152, respectivamente – 134 para las FARC y solo 18 para el ELN. De igual forma, las acciones de las FARC cayeron a 724 en 166 municipios y las del

ELN a 65 en 27 municipios³³⁶. Finalmente, el volumen de desplazados forzados cayó a 162.611 y el número de asesinatos políticos decayó hasta los 51 casos.

La gran mayoría de todo este conjunto de acciones y cifras se concentran sobre la guerrilla, de manera tal que algunos estimaron que el ELN, entre 2002 y 2010 perdió hasta un 77% de su fuerza de combate, por un 83% para el caso de las FARC (Fundación Seguridad y Democracia, 2008: 5). Todo gracias a un esquema de intervención sobre el aspecto de seguridad que se consolidó con base en fortalecer la estructura de la inteligencia en seguridad, identificar con claridad las funciones y el alcance de cada uno de los grupos de la Fuerza Pública, fortalecer el impacto sobre ciertas regiones, especializar los escuadrones y las unidades de combate, ganar presencia, fundamentalmente, en enclaves rurales, tradicionalmente de especial arraigo guerrillero, para, desde la desaparición de grupos armados, construir lo que fue denominado como “zonas de rehabilitación”.

Sin embargo, el coste de lo anterior debe relativizarse. El Estado de Derecho quedó desdibujado por casos como los mencionados en cuanto a despojo de tierras, las “chuzadas”, desplazamientos forzados, o “falsos positivos”. Asimismo, se militarizó la seguridad pública hasta niveles irreconocibles pues, se pusieron en marcha iniciativas como el Plan de Soldados Campesinos o Soldados de mi Pueblo, que buscaban formar y garantizar presencia civil armada en los enclaves rurales de Colombia, desprovistos de Fuerza Pública.

Estos grupos se van a crear en todos los departamentos del país, con la excepción de Amazonas, Guainía, San Andrés y Vaupés, de acuerdo a un conjunto de pelotones con campesinos que pasan a hacer las veces de fuerza policial. Tanto, que se llegan a crear hasta 598 pelotones de 36 integrantes cada uno lo cual supone militarizar hasta 21.500 campesinos del país (Arbeláez, 2006).

De igual forma, se crean redes de informantes que va a involucrar, igualmente, a civiles en todo el entramado de tácticas de inteligencia militar, tal y como sucede con el control territorial o el aporte de información o la vigilancia. El mejor ejemplo eran los “lunes de recompensa”, pagos de 2.5 millones de pesos a todos aquellos ciudadanos que cooperasen con información suficiente para capturar guerrilleros o evitar actos de terrorismo. No casualmente, los primeros aportes a este tipo de recompensas, para mayor desazón, terminaron por ser enclaves de control paramilitar que contribuyeron a debilitar al Bloque Caribe, y a los frentes operativos en los Montes de María³³⁷.

³³⁶ No obstante, conviene precisar que a pesar del repliegue en cifras que plantea una serie temporal de cinco años, lo cierto es que esta tendencia se concentra, sobre todo, entre 2006 y 2008, pues a partir de 2009 comienza un lento proceso de recomposición y mayor activismo.

³³⁷ En Montes de María, como ya se ha señalado, el frente de las FARC más activo fue el frente 37, dirigido por Martín Caballero. Este frente tuvo importantes enfrentamientos con el Bloque Héroes de Montes de María. Así lo reconoce el antiguo Jefe Político de las AUC, “Diego Vecino”, quien reconoce que “Nosotros combatimos especialmente contra el Frente 35 de las FARC, que llegó a la región a inicios de los noventa, y que luego fue sucedido por Martín Caballero y el Frente 37, el cual llegó entre 1998 y 1999. También había un reducto del ELN, una especie de columna Cimarrón que sin embargo estaba plegada por completo a las FARC. La verdad

Es más, para 2004 el número de informantes ascendió a 3.200.000 ciudadanos. Ciudadanos que colaboraban en la guerra contra-insurgente de acuerdo a la base ideológica oficial de la PSD, y en una tendencia que, preocupante, se fue incrementando en los años anteriores en lo que terminó por ser, como señala Angarita (2011:318-319):

“una fuente de corrupción en la medida en que se prestó para cobros indebidos mediante alianzas entre delincuentes y agentes de la fuerza pública quienes, amparados en la confidencialidad, escaparon a los controles que debe tener toda actividad estatal y más, en la que están involucradas altas cifras de dinero”.

Si cabe más, habría que añadir un personalismo presidencial que en muchas ocasiones tomaba decisiones militares unilateralmente, rompiendo la jerarquía de mando, y poniendo tareas o exigiendo resultados a las tropas militares. A ello se añadieron otros elementos tales como el recorte sustancial a los tiempos de los cursos de formación o la supresión de ciertas exigencias para ascender en la carrera militar pues, en el fondo, el cortoplacismo y la inmediatez de resultados terminaba por exigir el nutrir continuamente de personas en la Fuerza Pública. Esta celeridad incluso convertía al mismo presidente en un actor que tomaba decisiones que correspondían a los comandantes de la Fuerza Pública y que le permitía destituir públicamente a aquellos que, bajo su perspectiva, no cumplían satisfactoriamente con el cometido asignado. Un resultado que, como cabe esperar, terminó por debilitar la propia institucionalidad de las Fuerzas Militares (Medellín, 2010).

Incluso, en el plano regional, no se puede pasar por alto el resultado de una acción como la Operación Fénix, cuando las Fuerza Aérea Colombiana, en una operación coordinada con la Policía Nacional y el Ejército, intervino militarmente en el norte de Ecuador, en las proximidades del municipio de Santa Rosa del Yanamaru, en la provincia de Sucumbíos. Allí, dentro del Frente 48, perteneciente al Bloque Sur, se encontraba el número 2 de las FARC, “Raúl Reyes” quien fue abatido en el operativo junto con otros 21 guerrilleros y a lo que se añade la muerte de un miembro de la Fuerza Pública.

Más allá de esto, unido a los cuatro civiles mexicanos fallecidos por la expansión de los ataques, y dada la vulneración flagrante a la soberanía ecuatoriana, se generó una crisis regional que ha sido, tal vez, la más importante del continente en las últimas dos décadas. De un lado, las FARC criticaron fuertemente a Álvaro Uribe, por actuar en un contexto en el cual, de fondo, se estaba negociando un canje humanitario a través tanto de Venezuela como de Francia, en relación a Ingrid Betancourt.

Del lado de Ecuador, hubo una profunda crítica en cuanto al atropello de las Fuerzas Militares colombianas, desencadenando la ruptura de relaciones diplomáticas, al expulsar al embajador

es que nosotros tuvimos mucha confrontación armada. Confrontación, sobre todo, directa, contra las guerrillas comunistas, pero no se puede obviar la atención sobre la población civil. Usted sabe que en la guerra irregular las bases del enemigo son el enemigo. Es más, son peor, porque terminan por saber más que el combatiente y eso desbalanza”.

colombiano de Quito, movilizar tropas al norte del país y denunciar a Colombia ante la Comunidad Andina y la OEA. Venezuela también movilizó tropas a la frontera, rompió relaciones diplomáticas con Colombia y se posicionó marcadamente del lado ecuatoriano mientras que otros Estados de la región también se pronunciaron. México, porque inicialmente Uribe juzgó a las víctimas como terroristas, cuando en el fondo se trataban de estudiantes de la UNAM. Lo mismo, Nicaragua y Chile, y después, conjuntamente, con excepción de Estados Unidos, de manera colectiva, todos los países en el marco de la OEA, en lo que evidenciaba el distanciamiento regional de Colombia con sus vecinos del sur.

Algo similar sucedió en la Operación Jaque, cuando las Fuerzas Militares consiguen infiltrarse en las FARC y persuadir al Frente 1 correspondiente al Bloque Oriental, sobre la necesidad de movilizar a un grupo de secuestrados entre los que se encontraba Ingrid Betancourt, y para lo cual fue fundamental la información proporcionada por un militar estadounidense secuestrado, pero que consiguió escapar de las FARC.

Tras la información proporcionada, las Fuerzas Militares terminaron por simular un intercambio humanitario, por medio de una ficción que fue llevarle los secuestrados a “Alfonso Cano” para que éste capitalizase la dimensión del acuerdo. Asimismo, se creó una aparente ONG para incursionar en el campamento y llevarse a los 15 secuestrados además de a dos guerrilleros que terminaron siendo detenidos.

La operación, según *Der Spiegel*, fue financiada por Estados Unidos, lo cual generó, nuevamente, discrepancias regionales³³⁸. Sin embargo, lo que focalizó mayores críticas, nuevamente, por los excesos cometidos, fue la utilización, según CNN, del emblema del Comité Internacional de Cruz Roja a lo cual se añade que la ONG ficticia, creada bajo el nombre “Misión Humanitaria Internacional”, utilizó la página web y el número de registro legal de una ONG española, establecida en Barcelona bajo el nombre “Global Humanitaria”. Es decir, otra muestra de cómo el Estado de Derecho se encontraba desdibujado a efectos del resultadismo en el que quedaron sumidas todas las dinámicas de la PSD.

10. El impacto de la política pública de seguridad democrática durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

Tal y como se hizo con la presidencia de Andrés Pastrana, y de acuerdo con lo descrito, se plantean las dinámicas regionales de la PSD, a fin de contrastar, entre una y otra etapa de la PSD, la hipótesis del carácter centrífugo de esta política, especialmente en lo que afecta a combates directos por iniciativa de la Fuerza Pública, tanto contra FARC como contra ELN y que visibilizan el proceso de *periferalización* creciente del conflicto. Se va a incorporar en el análisis el desglose departamental del impacto de las aspersiones y fumigaciones con glifosato sobre los cultivos ilícitos así como la erradicación forzosa.

³³⁸ Véase: <http://www.spiegel.de/international/world/freeing-ingrid-months-of-intelligence-work-led-to-betancourt-s-rescue-a-563619.html> Consultado 1 de agosto de 2015.

10.1. La región nororiental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

Desde el año 2002, una vez que llega el presidente Álvaro Uribe a la presidencia, lo cierto es que, a lo largo del transcurso de su primera legislatura, el nororiente del país va a experimentar un incremento, nada comparable, en lo que a presencia de la Fuerza Pública se refiere, con respecto a los años inmediatamente anteriores.

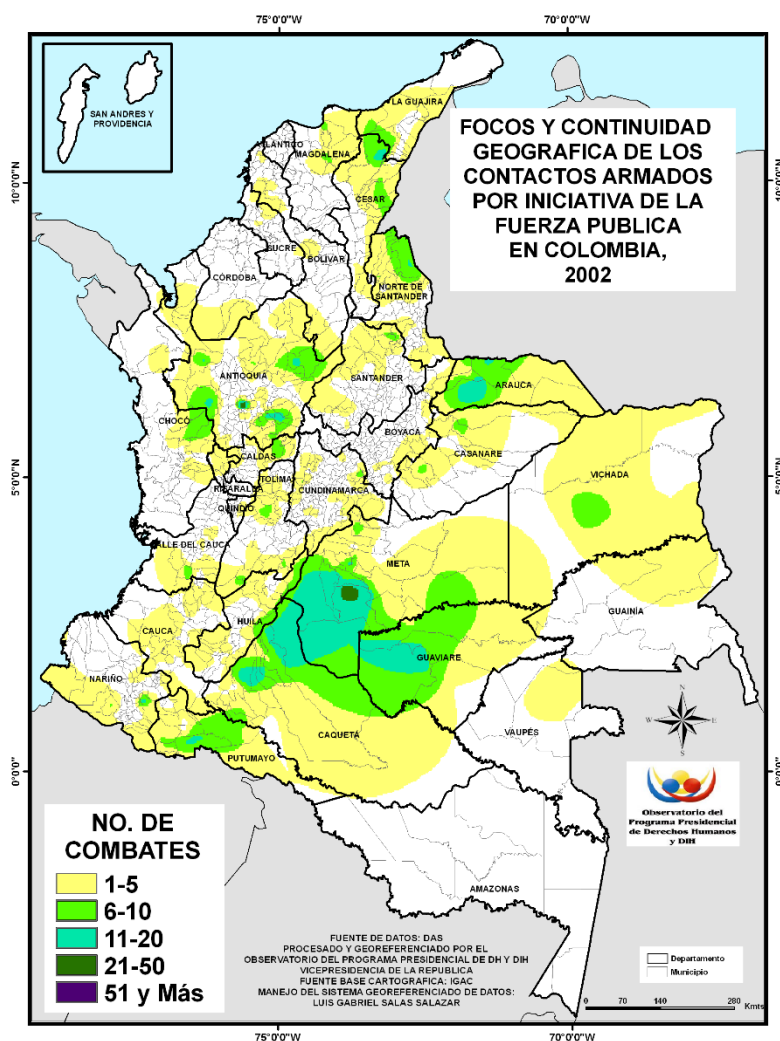
Un departamento importante para la PSD, tal y como lo había sido, especialmente en 2001, para Andrés Pastrana, va a ser el departamento de Santander. Es así que, en lo que al activismo de las FARC se refiere, éste cae a mínimos históricos pues, solo entre 2002 y 2003 apenas se contabilizan 13 acciones guerrilleras por un total de 38 combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Una iniciativa dirigida a menoscabar los Frentes 12, 20, 23 y 46, activos en el departamento como parte del Bloque Magdalena Medio. Tanto es así, que las acciones guerrilleras en los dos últimos años de PSD, decaen a 3 acciones, sin embargo, por 33 combates militares, lo cual evidencia una notable correlación de fuerzas, en este caso, favorable al Estado.

En lo que afecta a Casanare, sí que se recoge un escalamiento notable en cuanto a intensidad armada, pues tanto las FARC como el Ejército van a duplicar sus acciones en el continente entre 2002 y 2005. En estos cuatro años existe una relativa paridad, al contabilizarse 69 acciones de las FARC por 81 acciones de la Fuerza Pública aunque, como se verá, progresivamente se empieza a apreciar una mayor presencia e intensidad en el número de combates del Ejército. Tanto, que en el mismo año 2005 si los combates unilaterales de las Fuerzas Militares ascienden a 28, para el caso de las FARC, apenas se identifican 7 acciones guerrilleras.

En otras palabras, tanto Santander, que ya venía experimentando un fortalecimiento creciente en el poder militar y territorial del Estado sobre las FARC, como Casanare, a finales del primer mandato de la PSD, se van a consolidar como escenarios con una notable presencia territorial del Estado la cual, paralelamente, se acompaña de un sustancial repliegue de parte de las FARC en lo que a su violencia directa se refiere.

De otro lado, Arauca va a ser, en términos de número de acciones por iniciativa militar, la prioridad departamental dentro de esta región. Especialmente, desde 2003, pues en consonancia con los años anteriores, y hasta ese año, lo cierto es que el departamento se mantenía por debajo de la decena de operativos militares anuales. Una cifra sin parangón, si se tiene en cuenta que entre 2002 y 2005, los combates por acción de las Fuerzas Militares ascienden a la nada desdeñable cifra de 211, y que pese a todo, se dan en paridad con un volumen de acciones de las FARC. Ello, por el activismo de los Frentes 10 y 45, que terminan por acumular hasta 223 acciones armadas, y que convierten al departamento en uno de los enclaves con mayor intensificación del conflicto armado, aunque sin una favorabilidad evidente para el Estado colombiano.

Mapa 53: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2002

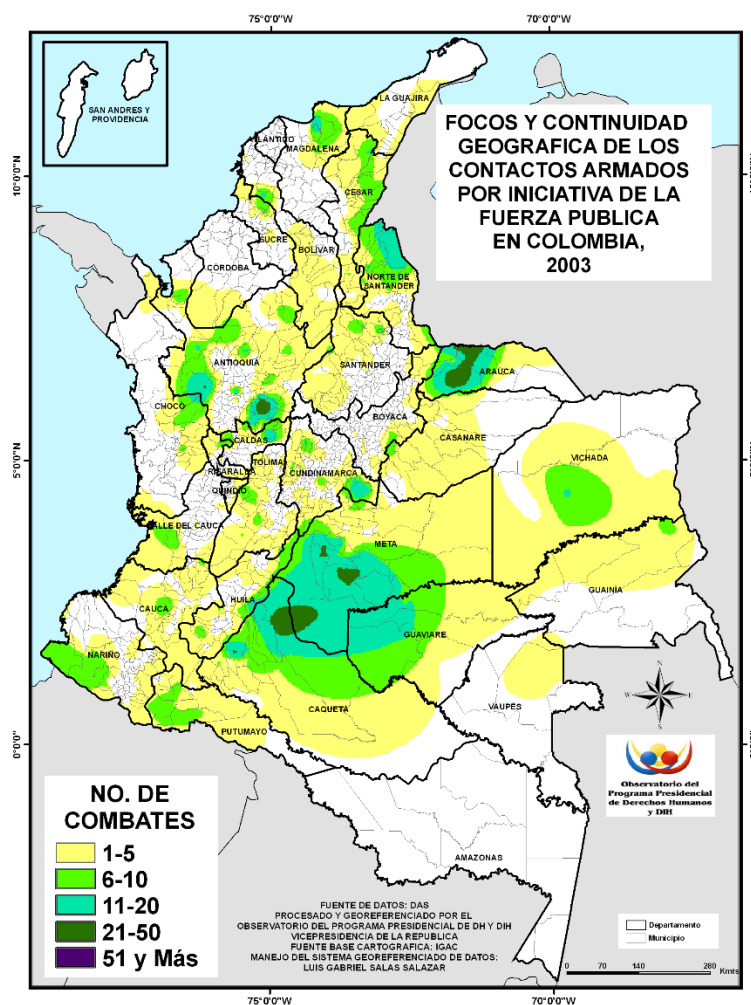


Fuente: ODHDIH (2014)

Por último, para el caso de Norte de Santander, también se experimentaría una mayor presencia de la fuerza colombiana con respecto de años anteriores de modo tal que, por ejemplo, solo entre 2002 y 2003 terminan por cuadruplicarse el número de combates (54). Empero, y como va a suceder en Arauca, la intensificación de la Fuerza Pública va a tener como respuesta un mayor activismo, principalmente, del Frente 33 de las FARC, que solo entre 2004 y 2005 multiplicará por cuatro su número de acciones (61), superando incluso el número de iniciativas del Ejército (58) en este departamento que, como en el caso anterior, se convierte en un escenario, claramente, en disputa territorial.

En lo que afectaría al ELN, durante el primer mandato presidencial del Álvaro Uribe se va a apreciar, igualmente, un fuerte contraste con respecto de los años de su predecesor. Ello, porque el ELN se va a erigir como destinatario directo de los ataques de la Fuerza Militar en la región nororiental, y que va a propiciar su importante repliegue estratégico.

Mapa 54: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2003



Fuente: ODHDIH (2014)

En el caso de Casanare, que fue un departamento de retaguardia para el ELN, y que en algún momento tuvo algo de presencia armada en el suroccidente, a través del Frente “José David Suárez”, se van a registrar durante los años que transcurren entre 2002 y 2005, hasta 63 combates por iniciativa del Estado por ninguna acción armada del ELN. Ello, con el propósito de romper con este corredor estratégico que servía, especialmente, por su conexión, al norte, con el departamento de Arauca.

Santander va a experimentar, igualmente, un importante declive, el cual ya tiene su inicio durante el final del gobierno de Andrés Pastrana. Tanto, que solo entre 2002 y 2003 se concentran hasta 98 combates por iniciativa de la Fuerza Pública por 18 acciones del ELN, especialmente, de parte de los frentes “Alfonso Gómez Quiñónez”, “Capitán Parmenio” y “Guillermo Antonio Vázquez”. Sin embargo, y a modo de un registro sin parangón alguno, fruto de este tipo de confrontación y mayor presencia militar, en el año 2005 las acciones del ELN se quedarán en 0, desapareciendo definitivamente del departamento a la vez que se mantienen importantes niveles de presencia de la Fuerza Militar y en los años siguientes.

En lo que afectaría a Norte de Santander, que fue ganando importancia para el ELN durante el período anterior, con el primer mandato de Álvaro Uribe, el departamento va a acumular, igual que en los casos anteriores, mayor intensidad en cuanto a combates por acción del Estado. Entre 2002 y 2005 se contabilizan hasta 152 iniciativas, lo cual triplica el volumen de acciones guerrilleras (55) y, de paso, supera ampliamente los 97 combates militares llevados a cabo durante los años que transcurren entre 1998 y 2001. Además, el debilitamiento que experimenta el ELN al final del primer mandato de la PSD, como consecuencia de esta mayor intensidad de la presencia pública se traduce en el simple hecho de que si en 2002 el ELN era protagonista de hasta 29 acciones guerrilleras, en 2005 apenas protagoniza 5, todas ellas, de paso, focalizadas en la región del Catatumbo.

En última instancia quedaría el caso de Arauca, donde el ELN va a experimentar una tendencia similar a la descrita en Norte de Santander. Ello, porque si esta guerrilla acumulaba hasta 54 acciones en 2001, en el año 2002 éstas decaen a 17. Durante el primer mandato de Álvaro Uribe, el ELN va a protagonizar en el departamento un total de 57 guerrilleras, contrarrestadas por otras 65 acciones de la Fuerza Pública, principalmente dirigidas contra el frente “Domingo Laín Sanz” y la “Compañía Simacota”. Aunque la correlación es similar, la verdad es que mientras que el activismo del ELN va decayendo de forma exponencial en estos años, paralelamente, se produce un mayor activismo de las acciones militares de modo que, por ejemplo, en 2005, por las 5 acciones del ELN en el departamento se acumulan hasta 29 operativos del Ejército.

De otro lado, y más allá de la PSD, en lo que afectaría al Plan Colombia, dentro de esta región nororiental, el departamento de Norte de Santander representará un escenario prioritario, tal y como acreditan las cerca de 41.000Ha asperjadas con glifosato, entre 2001 y 2005 a las que se suman, en 2005, otras 2.209Ha erradicadas manualmente. Una intervención que se focaliza con claridad sobre Tibú, donde se acumula una aspersión cuyo volumen asciende casi a 35.000Ha, de gran valor, pero que paulatinamente va a perder protagonismo, de acuerdo a un volumen de aspersiones claramente decreciente, ineficaz para contener un volumen de cultivos en ascenso.

Sea como fuere, sí que se apreciaría una convergencia entre el mayor impacto de la PSD y la mayor presencia de aspersiones aéreas, especialmente, entre 2001 y 2004, y con un punto

álvido en el año 2003, coincidiendo, a su vez, con el año de mayor recrudecimiento en el activismo guerrillero de las FARC.

En el caso de Arauca, la aspersión aérea de cultivos ilícitos se va a focalizar entre 2003 y 2004, cuando se van a asperjar 11.734Ha y 5.336Ha respectivamente, de las cuales, el 79.9% se va a concentrar, exclusivamente, en la localidad de Arauquita, donde se registran en estos dos años hasta 13.646Ha objeto de aspersión. No obstante, esta concentración no va a resultar suficiente para reducir la presencia de cultivos ilícitos en el departamento, de manera que las aspersiones van a continuar, aunque en menor nivel, entre 2005 y 2008.

En esta primera etapa de la PSD, como en Norte de Santander, se aprecia una clara convergencia entre los mayores niveles de disputa territorial de la historia del departamento y una clara política de aspersiones que, en suma, permite entender el repliegue al que se van a ver sometidos los grupos guerrilleros en este departamento, durante la primera etapa presidencial de Álvaro Uribe.

En cuanto al departamento de Santander, aunque la presencia de cultivos ilícitos nunca fue muy significativa, la política de aspersión aérea va a iniciarse en los años 2004 y 2005, cuando se acumula un volumen de aspersiones que afectan a 3.897Ha, frente a un volumen cultivado de 4.036Ha. Ello va a tener continuidad, sobre todo, en los dos primeros años de la segunda etapa de la PSD, y a lo que se añadirían otras 1.145Ha erradicadas manualmente. Lo cierto es que el Plan Colombia y las aspersiones aéreas vienen a darse en el departamento, sobre todo, una vez que se ha intensificado el volumen de operativos contra la guerrilla, entre los años 2002 y 2003 y la presencia de las FARC y del ELN en el departamento, pasan a ser testimoniales. Esto, toda vez que en Casanare, por su falta de presencia de cultivos ilícitos, no se presenciara aspersión alguna con glifosato.

10.2. La región central durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

El elemento nuclear de la PSD, más allá de disputar territorialmente a las FARC y al ELN el enclave nororiental, va a ser el escenario central, a tenor de romper la estrategia envolvente llevada a cabo por las FARC sobre Cundinamarca. De los apenas 20 combates llevados a cabo por la Fuerza Pública hacia finales de los noventa, solo entre 2002 y 2003 se van a contabilizar hasta 390 acciones militares contra la guerrilla en el departamento. Muy particularmente, a tenor de que en 2002 se contabilizan hasta 128 acciones guerrilleras de las FARC en Cundinamarca, igualmente, de acuerdo a una mayor intensificación que ponía directamente en peligro la integralidad del Estado en su respuesta al conflicto armado.

Tal es la intensidad de los operativos de del Estado entre 2002 y 2003, que en un solo año, las acciones de las FARC se reducen en una tercera parte (84), y toda vez que las iniciativas del Ejército pasan de 130 a 260 operativos, debilitando y desarticulando buena parte de los frentes del Bloque Oriental, como son los casos de los frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54, 55 y 65. De hecho, y con base en esto, tal es el impacto de la PSD sobre este Bloque, que ya en 2004 y 2005, sus acciones se reducen a 7 y 0 acciones guerrilleras, respectivamente, las cuales

resultan superadas ampliamente por los casi treinta operativos militares que siguen teniendo lugar en el departamento, dentro de un claro repliegue de las FARC en Cundinamarca.

En lo que respecta a Boyacá, los combates armados por iniciativa militar se van a cuadruplicar entre 2002 y 2004 con respecto de los años anteriores. De hecho, si durante la presidencia de Pastrana se acumulan un total de 37 combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC, durante la primera legislatura de Álvaro Uribe, esa cifra se incrementa hasta 126. Lo cierto es que si a inicios de la legislatura, las acciones guerrilleras (48) superaban las acciones provenientes de la Fuerza Pública (38), a finales de la misma, la correlación de fuerzas ha cambiado sustancialmente. Las 11 y 2 acciones guerrilleras protagonizadas por las FARC en 2004 y 2005, respectivamente, van a quedar ampliamente superadas por los 47 operativos dispuestos por el Ejército y que evidenciarán una dinámica por completo similar a la acontecida en Cundinamarca.

Menos inmediatos van a ser los resultados en el eje cafetero, sobre todo, en el mayor de los departamentos, Caldas. En el mismo, las acciones armadas por iniciativa de la fuerza colombiana se van a incrementar muy notablemente entre 2002 y 2003, cuando en Caldas se contabilizan hasta 83 acciones, lo cual contrasta claramente con los 21 operativos militares llevados a cabo durante la administración Pastrana, y que terminan por duplicar el total de acciones guerrilleras de las FARC.

Sea como fuere, entre 2004 y 2005, los niveles de combate se reducen a niveles de relativa paridad entre Estado y FARC, lo cual manifiesta una mayor intensificación de disputa territorial entre Estado y las FARC, especialmente activas a través de sus Frentes 4 y 9, pertenecientes al Bloque Noroccidental.

Algo parecido sucedería en Quindío, donde de prácticamente la ausencia de combates a finales de los noventa, tanto del lado de las FARC como de la Fuerza Pública, pasa un mayor nivel de encuentros e intensidad en la confrontación dentro del marco del conflicto. Ello, por la expulsión de Cundinamarca de la guerrilla, y la resistencia que ofrece el Frente 50, mayormente relegado en esta parte del eje cafetero. Entre 2002 y 2005 se dan un total de 35 combates por acción de las Fuerzas Militares por 31 actos de la guerrilla, de modo que habrá que esperar, ya al segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, a que esta intensidad se resuelva del lado favorable para el Estado.

La única salvedad en la que se evidencia con mayor notoriedad un retiro paulatino de las FARC dentro del eje cafetero sería en el departamento de Risaralda, cuando a partir de 2003, el activismo guerrillero (18) se presenta en paridad al número de operativos militares y comienza a desarrollarse un decrecimiento en la violencia de las FARC, que ya entre 2004 y 2005 apenas contabiliza 6 acciones por 15 operativos del Ejército.

En lo que afectaría al ELN sobre esta región, Cundinamarca o Quindío nunca se trataron de departamentos prioritarios, como sí lo fueron para las FARC. De hecho, y tal y como

sucediera en la región nororiental, el ELN va a quedar fuertemente debilitado durante el transcurso de la primera etapa de la PSD, tanto en Caldas y Risaralda, como en Boyacá.

En los casos de Caldas y Risaralda, solo entre 2002 y 2005 terminan por concentrarse hasta 24 y 23 operativos militares, respectivamente, por una acción de esta guerrilla en cada uno de los departamentos, donde sus estructuras, a través de los Frentes Urbanos “La Gaitana” o “Martha Elena B” y el Frente “Ernesto Che Guevara” van a pasar a encontrarse sumamente debilitadas.

Así, donde se va a dar una mayor resistencia guerrillera va a ser en el norte de Boyacá, donde el combativo Frente “Domingo Laín Sanz” va a recrudecer su activismo, sobre todo, a partir de 2004, en respuesta a la intensificación de combates de la Fuerza Pública. Intensificación que se traduce en el hecho de que, si entre 2002 y 2003 se dan 2 acciones guerrilleras por 15 combates por iniciativa del Estado, entre 2004 y 2005 la cifra se incrementa sustancialmente, a 17 y 34, respectivamente.

De acuerdo a los operativos derivados por el Plan Colombia, lo cierto es que esta región termina no siendo tan importante como la recién analizada región nororiental. Esto, porque apenas se recoge una presencia importante de cultivos ilícitos. De hecho, ni Quindío ni Risaralda registran cultivos, del mismo modo que en Cundinamarca y Caldas van a ser muy poco significativos.

El mayor volumen lo representa Boyacá, con un nivel álgido en 2003 que, a pesar de todo, no supera las 600Ha. Es por esto que, en esta apuesta de la PSD, la aspersión aérea va a ser poco relevante si bien, hacia 2005 se termina por acumular un volumen de aspersiones que afectan a 925Ha en Boyacá, 1.090Ha en Caldas y 43Ha en Cundinamarca. Así, el departamento boyacense, desde el inicio, va a ser uno de los departamentos donde más impulso va a tomar las erradicaciones manuales de plantaciones de coca, como acreditan las 5.233Ha erradicadas sobre el total de 32.000Ha para ese año, y a las que se adicionan otras 1.522Ha erradicadas en Cundinamarca, y casi 600Ha, en el departamento de Caldas.

10.3. La región suroccidental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

A diferencia de lo prioritario de las regiones anteriormente descritas, se encontraría la región suroccidental que, por otro lado, entre 2002 y 2005, se va a consolidar como un escenario de notable crecimiento y presión armada de la guerrilla, donde además no hay evidencias de una correlación de fuerzas, ni mucho menos, favorable a la Fuerza Pública y el Estado colombiano.

Por ejemplo, en Cauca, las FARC van a acumular entre 2002 y 2005 hasta 442 acciones armadas, algo que se encuentra muy alejado del total de los 290 combates por iniciativa militar que acontecen durante estos cuatro años. Esto evidenciaría que la presencia Estado, a pesar de ascender hasta máximos históricos en el departamento y poner de manifiesto los mayores registros de intervención armada de todo el país, sin embargo, no terminan por

traducirse en un incremento en el control territorial o en la mitigación del activismo armado de las FARC.

De hecho, más bien parece que Cauca se tratase como un enclave sometido al fuerte activismo del Frente 8 de las FARC, muy combativo, y con niveles de activismo armado que, año por año, durante la primera legislatura de Álvaro Uribe, superan ampliamente al volumen de operativos militares.

En el caso del departamento de Nariño, igualmente, la tendencia que se aprecia es similar a Cauca, pues se duplican las acciones militares, de manera sostenida, respecto de 2001, sobre un total de 214 combates por iniciativa de la Fuerza Pública, pero que no terminan por ser suficientes para mitigar un activismo guerrillero de las FARC que, entre 2002 y 2005, condensa hasta 298 acciones guerrilleras. Acciones, en buena medida, por acción del combativo Frente 29, del Bloque Occidental, y también por el Frente 2, perteneciente Bloque Sur.

Así, de los departamentos ribereños al Pacífico solo en Valle del Cauca se evidenciarían mayores niveles de paridad entre las acciones directas de la Fuerza Pública y las FARC. Todo, porque hay un escalamiento del conflicto a partir del año 2002 y hasta 2005, cuando los operativos militares ascienden a los 40 combates anuales y generan una respuesta reactiva en unas FARC que concentran sus mayores niveles de activismo armado, superando de manera reiterada la media centena de acciones guerrilleras por año. De hecho, entre 2002 y 2005 se terminan por registrar un total de 154 acciones de la guerrilla por 127 operativos militares, de manera tal que habrá que esperar hasta 2007 para que, paulatinamente, la seguridad y la correlación de fuerzas empiece a resultar favorable para el Estado.

Ya, en lo que afectaría a los departamentos de interior de esta región suroccidental, Huila y Tolima, se encontrarían tendencias diferentes. En Huila, como sucedería en Cauca, hay una mayor presencia de la Fuerza Pública que entre 2002 y 2005 protagoniza hasta 179 combates, con unos niveles de activismo constantes en esta primera legislatura. Activismo que acaba siendo insuficiente para minimizar un activismo guerrillero que se dispara hasta las 227 acciones de las FARC, especialmente protagonizadas, por los Frentes 3, 13, 60 y 61.

Solo en Tolima, el más septentrional de los departamentos y próximo a Cundinamarca, la mayor presencia de la Fuerza Pública parece consolidar una posición de disputa superior a la derivada del activismo guerrillero. Entre 2002 y 2005 las acciones de las FARC apenas superan las treinta acciones guerrilleras, con la excepción de 2003, cuando la guerrilla protagoniza hasta 59 acciones armadas. Así, en lo que afecta a la puesta en marcha de la PSD, en Tolima hay una tendencia creciente, que obtiene los mayores niveles de presencia de la fuerza pública de la historia del departamento. Tanto, que si entre 1998 y 2001 el departamento concentró hasta 79 operativos militares contra las FARC, entre 2002 y 2005 esa cifra asciende a 266, pero aun con todo, insuficientes en cuanto a reducir

significativamente el activismo de la guerrilla. Un activismo en alza los siguientes años, por la beligerancia de los Frentes 17 y 21 en el sur, y los Frentes 25 y 42 en el norte.

En lo que afectaría al ELN dentro del contexto de PSD entre 2002 y 2005 en esta región suroccidental, cabe señalar, primeramente, que de los dos departamentos de interior, Huila y Tolima, solo este último, y concretamente en el norte, albergará presencia guerrillera. Ésta, a partir de las acciones del Frente “Bolcheviques de Líbano”, el cual protagoniza 9 acciones entre 2002 y 2003, y que pasan a brillar por su ausencia entre 2004 y 2005, cuando no se recoge evidencia alguna de activismo guerrillero si bien, termina por ser el destinatario de hasta un total de 24 operativos militares. Lo cierto es que en Tolima no se aprecia un incremento tan importante, como sucediera con las FARC, respecto de operativos contra la guerrilla pues, en el caso del ELN, se recoge una tendencia muy reducida de activismo y una escasa capacidad de combate, lo cual plantea un escenario absolutamente distinto al que presentan las FARC.

En cuanto a los departamentos de la cuenca del Pacífico, se contabilizan un total de 25 operativos militares, si bien el ELN, en estos cuatro años, no termina por protagonizar ninguna actividad guerrillera unilateral y sus frentes quedan a punto de la desarticulación. Tal es el caso de los Frentes “José María Becerra” y “Luis Carlos Cárdenas”, así como el Frente regional “Omaira Montoya”³³⁹. Lo mismo, aunque en menor medida, sucedería en Cauca, donde el frente “Manuel Vásquez Castaño” protagoniza entre 2002 y 2005 un total de 13 acciones, 7 de las cuales en 2005, ampliamente superadas por los 46 operativos militares que contribuirán, como se verá en los años venideros, a debilitar sobremanera a las estructuras guerrilleras del ELN en este departamento.

Por último, en Nariño se va a incrementar la presencia militar, sobre todo en 2002, cuando se dirigen hasta 15 combates contra el combativo Frente Comuneros del Sur y se terminan por acumular hasta 39 operativos militares, que contrastan con las 21 acciones guerrilleras. Acciones, imbuidas dentro de una tendencia de repliegue evidente, de mayor modo, entre 2004 y 2005, cuando las acciones por iniciativa del Estado (20), quintuplican a las acciones protagonizadas directamente por el ELN.

En lo que afectaría a acciones antinarcóticos, en Cauca se inician las primeras aspersiones en el año 2003, con un volumen de poco más de 1.300Ha junto con otras 1.616Ha de erradicación manual, de cualquier modo, insuficientes para el volumen de cultivos que el departamento presentaba en aquel entonces. No obstante, este tipo de acciones se inician

³³⁹ A tal efecto, no puede obviarse el contexto de guerra que tiene lugar entre FARC y ELN, y que se condensa con especial virulencia en Arauca, Valle o Nariño. Es importante, al respecto, el testimonio de “Felipe Torres” cuando señalaba que “(...) con las FARC desde ese año [1998] hay unas fuertes tensiones. Los enfrentamientos armados se han venido acumulando, sobre todo, en Arauca, Cauca, Valle y Nariño fruto de las importantes divergencias y van cobrando vida propia, con lógicas regionales particulares, y aun cuando el Secretariado, y nosotros, el Comando Central, tratamos de bajar la tensiones. La verdad, se nos escapó de las manos”.

cuando el departamento pasa a ser considerado con mayor prioridad territorial y disputa, pues entre 2003 y 2005 se acumulan hasta 6.451Ha frente a 10.666Ha, siendo los municipios objeto de aspersión más importantes, Balboa (1.811Ha) Bolívar (1.020Ha) y Piamonte (1.581Ha)

En cuanto a Nariño, como Cauca, dentro del marco del Plan Colombia, resulta igualmente ilustrativo el limitado alcance de las acciones de aspersión aérea como adición a la confrontación directa frente a las guerrillas. Así lo evidencian las 151.756Ha asperjadas entre 2001 y 2005 – de las que una tercera parte lo son, únicamente, en el año 2005- y que superan de largo las 68.862Ha objeto de cultivo de coca en ese mismo período. A ello hay que añadir mayores niveles de erradicación manual de todo el país, por encima de las 6.000Ha. Sin embargo, y pese a todo, cabe precisar una relativa eficacia, claramente ilustrativa en la medida en que, a pesar de todo, si en 2001, en Nariño se contabilizaba una superficie cultivada de coca por extensión de 7.494Ha, tras todo lo expuesto, para el año 2005 la misma se había duplicado, ascendiendo hasta las 13.875Ha.

Finalmente, en lo que afectaría a Valle del Cauca, como último departamento de la región Pacífico, el volumen de acciones en el marco de las aspersiones aéreas propiciadas por el Plan Colombia, en esta primera etapa de la PSD, evidenciaría su escasa relevancia, en buena medida por las apenas 405Ha cultivadas entre 2001 y 2005, y que terminarían justificando la ausencia, por completo, de acciones de aspersión aérea. Aspersiones que son suplidas por erradicaciones manuales que, concentradas en 2005, abarcan un total de 1.551Ha.

10.4. La región atlántica durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

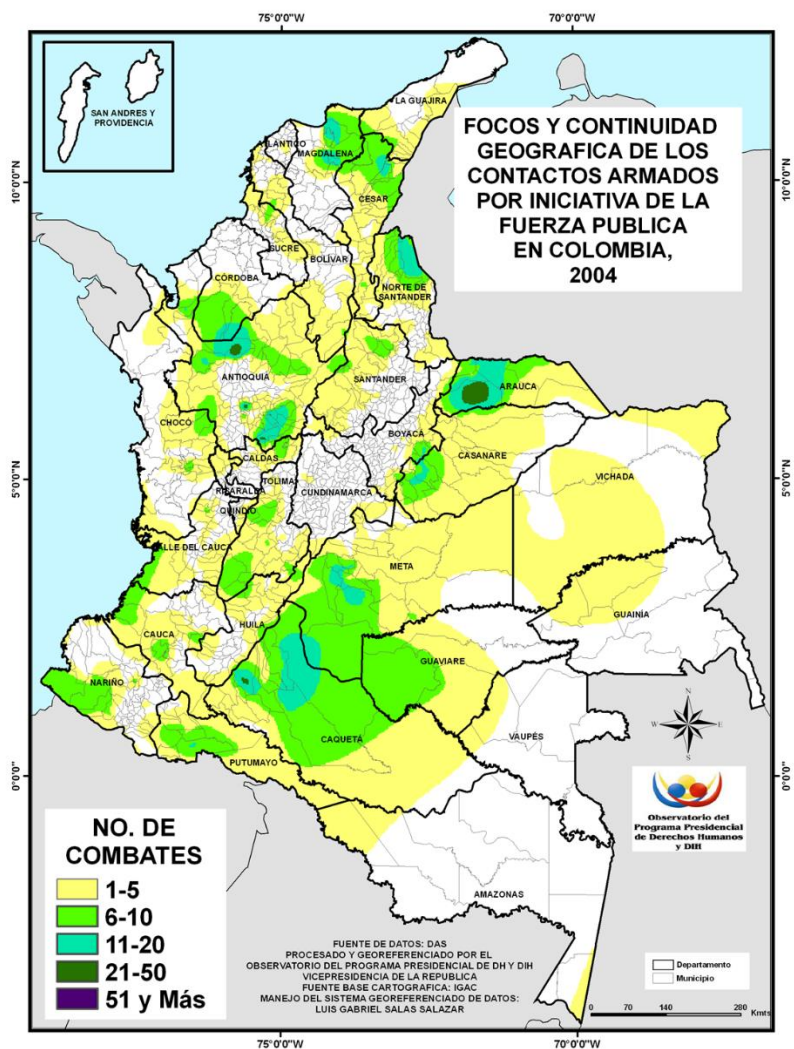
Como se pudo advertir en un capítulo anterior, cuando se analizaba de qué modo la región Atlántico se une a unas dinámicas semejantes a las experimentadas en la región central en cuanto a las acciones armadas de FARC y ELN entre 2002 y 2005, lo cierto es que ambas guerrillas van a quedar sumamente debilitadas en el transcurso de estos años, a tenor de que la región es positiva al propósito del gobierno de Uribe por consolidar un control territorial en este enclave.

En los departamentos de Atlántico y Córdoba, que son los departamentos en los que la presencia de las FARC resultaba mucho más marginal, se van a focalizar combates por iniciativa de la Fuerza Pública que, prácticamente, van a hacer desaparecer a esta guerrilla de ambos escenarios. Ello, especialmente en Córdoba, donde entre 2003 y 2005 se registra hasta 36 combates por iniciativa del Ejército frente a apenas 4 acciones armadas por parte de las FARC. Igual aunque en menor medida, en Atlántico, donde las FARC protagonizan 8 acciones guerrilleras, pero son objetivo de hasta 17 operativos militares, suficientes para menoscabar su presencia en el departamento.

De otro lado, en La Guajira y en Cesar, se van a encontrar otras dinámicas particulares. En ambos casos, desde 2003, se experimenta una reducción más que considerable en la presión armada de las FARC. Ello, en buena parte, porque en Cesar se van a concentrar hasta 120

acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública frente a 24 acciones de las FARC. Igualmente, en La Guajira se van a dar en estos tres años hasta 52 combates armados a instancia del Ejército, por solo 11 acciones de la guerrilla. Esto permite que, desde entonces, en estos dos departamentos, la presencia de las FARC quede relegada al ostracismo hasta su tímida reaparición, ya en el año 2011.

Mapa 55: Presencia de operativos de la Fuerza Publica en 2004



Fuente: ODHDIH (2014)

También en Magdalena se va a producir un debilitamiento paulatino de las FARC, pues los combates por iniciativa de la Fuerza Pública ascienden a registros históricos, que entre 2002 y 2005 llegan a los 162 combates por apenas 52 acciones de las FARC. De hecho, si se

compara con la presidencia de Pastrana, en el mismo número de años, en el departamento apenas se habían dado 32 operativos militares frente a 47 acciones de la guerrilla. Una diferencia especialmente perceptible en cuanto a la correlación de fuerzas a favor del Estado y que podrá constatarse los años 2004 y 2005, cuando las acciones del Ejército colombiano registran hasta 100 combates por tan solo 16 acciones de las FARC. En otras palabras, el prolegómeno de la desaparición de la guerrilla en el departamento, evidente a partir del año 2007 y fruto de la desaparición de los Frentes 5, y sobre todo, 18.

Mayor resistencia van a presentar las FARC tanto en Bolívar como en Sucre, dos de los enclaves con mayor presencia guerrillera dentro de la región Atlántica, y donde se va a triplicar la intensidad de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública. No obstante, ello va a hacer de estos dos departamentos, dos escenarios con un crecimiento sustancial de la violencia derivada del conflicto también, por un mayor activismo, en respuesta, de parte de las FARC.

Así, en el caso de Bolívar, la mayor presencia del Ejército se va a traducir en un incremento en el número de acciones unilaterales de parte de la guerrilla, en torno a su combativo Frente 37, ubicado tanto en el sur del departamento como en la región de los Montes de María. Si hasta 2003 la correlación de fuerzas, en cuanto a activismo armado, parecía favorecer a las FARC, a partir, sobre todo, del año 2004 se va a identificar un importante repliegue de la guerrilla toda vez que la fuerza colombiana va a registrar, en tan solo dos años, hasta 82 acciones armadas por 44 acciones de las FARC. Unas FARC que, en apenas dos años más, van a quedar al borde de la desaparición.

Del lado de Sucre va a haber mayor equidad en el número de acciones de las FARC, por medio del Frente 35, y en correspondencia con unas acciones militares del Estado colombiano que se incrementan sustancialmente. Es decir, si entre 1998 y 2001 el volumen de operativos en Sucre contra las FARC fue de 29 iniciativas; entre 2002 y 2005 esa presencia se incrementa hasta los 117 combates. Del lado de las FARC, y sobre todo, en relación a este Frente 35, terminan por contabilizarse hasta 116 acciones guerrilleras, en un registro muy superior a las 47 contabilizadas en la presidencia Pastrana. Dicho de otro modo, Sucre y Bolívar, en esta primera etapa de la PSD terminan por consolidarse como departamentos en disputa y confrontación armada y territorial, con una notable capacidad de respuesta y resistencia de las FARC, y dentro de una dinámica muy diferente a la de construcción de una paulatina correlación de fuerzas, favorable al Estado, tal y como sucede en el resto de departamentos de la región.

En cuanto a lo que sucede con el ELN en la costa Atlántica, va a resultar, si cabe mucho más evidente que con respecto a lo referido para las FARC, pues para el año 2005, su presencia va a resultar por completo testimonial. Resulta sorprendente cómo en Cesar, cuando en 2001 se habían contado hasta 32 acciones del ELN frente a 34 combates por iniciativa de la Fuerza Pública - en un departamento que era el más importante para esta guerrilla en la región-, tan solo, un año más tarde, las acciones se quedan en una, y en dos, para el resto de años los que

conforman la primera presidencia de Uribe. *Sensu contrario*, las acciones militares se engrosan sustancialmente, llegando a 131 entre 2002 y 2005, y que unido al factor paramilitar, especialmente arraigado en esta región del país, permite entender la súbita e irrecuperable desaparición del ELN del departamento de Cesar.

Algo similar va a suceder en Magdalena, donde la confluencia paramilitar junto con una mayor capacidad de combate, especialmente sobre el frente “Francisco Javier Castaño”, va a hacer que entre 2002 y 2005 se den hasta 72 operativos de la Fuerza Pública por ninguna acción de la guerrilla. También, en Bolívar, especialmente, entre 2004 y 2005, se dirigen hasta 36 combates contra el ELN, y que tienen como consecuencia la práctica desaparición de la guerrilla del departamento al contabilizarse, tan solo 2 acciones armadas.

Para el caso de Sucre, el paramilitarismo, por medio del BHMM, se encargó de diezmar sobremanera a una guerrilla que en cuatro años apenas protagoniza 4 acciones guerrilleras, ampliamente superadas por los 16 operativos militares que terminan por resultar suficientes para expulsar al ELN de este departamento.

Por último quedaría La Guajira, ya que ni en Córdoba ni en Atlántico hay resquicio alguno para el activismo armado del ELN. Así, en La Guajira, entre 2002 y 2005, se va a consolidar un recrudecimiento de la ofensiva militar, que ya había iniciado en el año 2001, y que busca mermar al Frente “Luciano Ariza”. Tal es el impacto, que si bien el ELN protagoniza 9 acciones entre 2002 y 2003, termina por desaparecer del departamento a partir del año 2004, cuando aún se mantiene activo un volumen de operativos que, en esta primera fase de la PSD, asciende a un total de 28 operativos militares.

En cuanto a la dinámica de aspersiones de cultivos, en esta región del país se apreciaría un alcance sumamente limitado, similar, por ejemplo, y más marcadamente en la región central. Ello porque ni en Atlántico, ni en Cesar ni en Sucre van a registrar ningún tipo de aspersiones aéreas pues tampoco van a presentar cultivos ilícitos durante su historia reciente. Tampoco son muy significativas las cifras que en cuanto a cultivos de coca ofrecen otros dos departamentos como Magdalena y La Guajira. En el caso del primer departamento, entre 2001 y 2005, los niveles de aspersión son de 2.015Ha – especialmente concentrados en 2004, y de acuerdo a un volumen de cultivos de 2.527Ha, cada vez más reducido e irrelevante y donde cobran importancia las 1.180Ha erradicadas manualmente en 2005.

En el caso de La Guajira, los cultivos de coca siempre se han concentrado en el municipio de Dibulla, aunque incluso en proporciones menores a las de Magdalena. Así, entre 2001 y 2005, la superficie cultivada es de 2.028Ha por una superficie asperjada de 1.021Ha, que solo registrará acciones de aspersión, en el transcurso de la década, en los años 2004 y 2005 siendo mayores, al respecto, las acciones de erradicación manual, como evidencian las 1.681Ha afectadas en 2005.

Los operativos verdaderamente importantes en el marco del Plan Colombia serían, claramente, en Bolívar y Córdoba. En el caso de este último, entre 2001 y 2005 todavía

estarían por llegar los mayores niveles de intervención sobre el cultivo ilícito del departamento aunque se registran hasta 3.051Ha asperjadas, de las cuales la mitad lo serán, únicamente, en el año 2005, y a lo que se adicionan 2.498Ha erradicadas manualmente. De la parte de Bolívar la enjundia de los cultivos resultará mucho mayor, de 19.100Ha cultivadas entre 2001 y 2005, frente a 29.263Ha asperjadas. Estas cifras hacen del departamento una prioridad tanto para la PSD como para el Plan Colombia, aunque con resultados cuestionables pues si en 2002 la superficie cultivada era de 2.735Ha, en 2005 la misma había ascendido a 3.670Ha.

10.5. La región amazónica de interior durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

De acuerdo a las cifras que plantea la PSD, el corredor amazónico de interior se va a erigir como una prioridad de disputa tanto militar como territorial. Y se señala el término disputa porque en este enclave se aprecia una capacidad de presencia tanto armada como territorial, sobre todo de las FARC – pues no se recoge presencia alguna del ELN-, que no es comparable a otras regiones salvo la suroccidental.

Esta coyuntura de disputa va a ser especialmente significativa más en Meta y Caquetá que en Putumayo, cuyas lógicas serán más propias, en esta ocasión, de los departamentos de la región suroccidental. En el caso de Meta, ya se ha señalado en esta tesis doctoral cómo, tradicionalmente, ha operado en tanto que escenario de concentración y control de las FARC, especialmente, hacia el sur del departamento. Con base en esta circunstancia, el Ejército colombiano va a tratar de incursionar y romper la hegemonía territorial de esta guerrilla de manera que, entre 2002 y 2005, se asciende a la cifra sin parangón alguno, ni en el departamento, ni en el país, de 619 operativos militares. Una cifra de gran magnitud que duplica las nada desdeñables 322 acciones guerrilleras de las FARC y que, aun con todo, hacen de Meta en estos años, el departamento con mayor número de activismo armado por parte de las FARC.

Igual va a suceder en el segundo departamento de mayor tradición guerrillera de la región, Caquetá, donde igualmente se dan hasta 439 acciones provenientes de la Fuerza Pública que, si bien son contrarrestados por un importante activismo de las FARC entre 2002 y 2003, en el que se contabilizan hasta 224 acciones de la guerrilla, queda evidente una cierta tendencia de repliegue entre 2004 y 2005, cuando en Caquetá, las FARC protagonizan 66 acciones armadas y reducen sustancialmente su activismo unilateral armado.

De hecho, para entender la importancia de estos dos departamentos en la PSD, basta con realizar un ejercicio sencillo de comparación con los números que arroja la presidencia anterior. Si en Meta y Caquetá, entre 1998 y 2001 se dieron un total de 163 operativos militares contra las FARC, solo en Meta, en 2002, se dan hasta 154 acciones del Ejército y entre los dos departamentos, en toda la primera etapa de la PSD, se contabilizan un total de 1.060 acciones militares.

La excepción, de acuerdo a estas dinámicas, se encontraría en Putumayo, donde la mayor presencia de la fuerza colombiana en estos años, entre 2002 y 2005, seguiría quedando muy distanciada del activismo guerrillero. Ello, porque las FARC van a protagonizar el mayor número de acciones guerrilleras de la historia del departamento. Tanto, que la media centena de acciones armadas por iniciativa del Ejército que se dan en 2005, el año de mayor presencia de activismo del Estado en el departamento, quedan desdibujadas, y casi duplicadas, por el número de eventos protagonizados por los combativos Frentes 32, 48 y 63 del Bloque Sur. Así, frente al total de 187 acciones unilaterales provenientes de la PSD y del Estado colombiano, las FARC acumulan un total de 259 acciones guerrilleras.

Nuevamente, Guaviare, más como enclave cocalero y retaguardia estratégica, volvería a plantear unos niveles de conflicto mucho menores. De hecho, entre 2002 y 2005 se condensan hasta 46 acciones de las FARC, lo cual supone el nivel de activismo guerrillero mayor en la historia reciente del departamento, en todo caso, contrarrestado en los 97 operativos desplegados por la Fuerza Pública colombiana. Tal vez a ello contribuya el hecho de que, entre 2002 y 2005, este departamento concentra una ingente cantidad de cultivo, como muestran para este período, Calamar (8.830Ha), El Retorno (15.359Ha), Miraflores (20.204Ha) y San José del Guaviare (17.578Ha), y que se vuelve objeto de un volumen total por aspersiones aéreas que en estos cuatro años supera las 100.000Ha asperjadas³⁴⁰

Dentro del marco del Plan Colombia, en esta región amazónica, Putumayo va a ser preponderante y prioritario, como Nariño, en la región suroccidental, en lo que aspersiones con glifosato se refiere. Los mayores volúmenes de aspersiones tienen lugar, sobre todo, entre 2001 y 2002, cuando se asperjan hasta 104.379Ha. Tanto en estos años, como en el transcurso de la PSD, los municipios objeto de interés para las aspersiones del Plan Colombia son siempre los mismos. Así, entre 2001 y 2005, destacarían Orito (42.909Ha), Puerto Asís (24.014), Puerto Caicedo (8.806Ha), Puerto Guzmán (11.133Ha), San Miguel (15.665Ha), Valle del Guamuez (32.132Ha) y, con menor importancia, Villagarzón (5.865Ha). Unas cifras que evidencian el papel relegado de las erradicaciones manuales, que conforme a este nivel de cultivos, apenas afectan a 1.500Ha.

Si bien en 2001 el departamento acumulaba una superficie cultivada que superaba las 47.000Ha y que, como consecuencia del Plan Colombia – con más de 100.000Ha asperjadas para el año 2003 la superficie cultivada se reduce notablemente (7.559Ha), es igualmente cierto que las aspersiones de 2004 y 2005, no van a ser suficientes, y nuevamente la superficie cultivada asciende a 9.000Ha. Es más, ese incremento va a darse dentro de un contexto, de recrudescimiento de la guerrilla y preponderancia sobre la presencia de la Fuerza Pública, insuficiente para satisfacer las necesidades en seguridad que demandaba el departamento.

³⁴⁰ De acuerdo a estas cifras, como sucederá en los otros departamentos de la región, son irrelevantes las 1.888Ha objeto de erradicación manual, UNODC (2014).

En cuanto al departamento de Meta, durante la década pasada se consolidó como uno de los principales enclaves cocaleros del país. Tanto, que solo entre 2001 y 2005 se acumulan 69.506Ha cultivadas, con un volumen de aspersiones que, asimismo, ascienden a 30.063Ha³⁴¹, aunque insuficientes a efectos de reducir la superficie cultivada. No obstante, sí es cierto que desde 2005, cuando se asperja la mitad de esta superficie, comienza a desarrollarse una tendencia creciente de presencia de operativos y que volverán al departamento una prioridad de disputa, incluso superando a Cundinamarca y Antioquia.

Finalmente, en Caquetá, y como en Meta, se condensarán importantísimos niveles de erradicación aérea, que en los años 2001, 2002 y 2004 van a recibir un volumen de aspersiones equivalentes a 17.252Ha, 18.567Ha y 16.276Ha, respectivamente - en 2003, apenas se registran 1.060Ha asperjadas-. Todo, permitirá entender cómo, igual que en el anterior departamento, se acaba por reducir la superficie cocalera, al pasar de 14.515Ha a poco más de 7.200Ha en apenas tres años, y en clara consonancia con un mayor impacto de los operativos militares que se integran en el marco de la PSD.

10.6. La región amazónica fronteriza durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

En el caso de la región amazónica fronteriza, como arrojan las cifras, ni mucho menos responde a una prioridad estratégica para la Fuerza Pública pues, para el caso de las FARC – dada la usencia de ELN en esta región-, la importancia es otra por la ingente presencia de cultivos ilícitos.

Si bien en Amazonas siguen manteniéndose niveles prácticamente nulos de violencia guerrillera o de combates por iniciativa del Ejército, en estos años que transcurren entre 2002 y 2005, sí que se aprecia una mayor intensidad del conflicto en el departamento de Guainía. Tanto, que en esta primera etapa de la PSD se dan hasta los 30 combates por iniciativa del Estado por 17 acciones de las FARC. Unas FARC que acumulan en estos años sus mayores niveles de activismo en la historia del departamento, por la presión del Frente 16, del Bloque Oriental, aunque a partir de 2005, los niveles de violencia guerrillera decaen hasta su práctica desaparición.

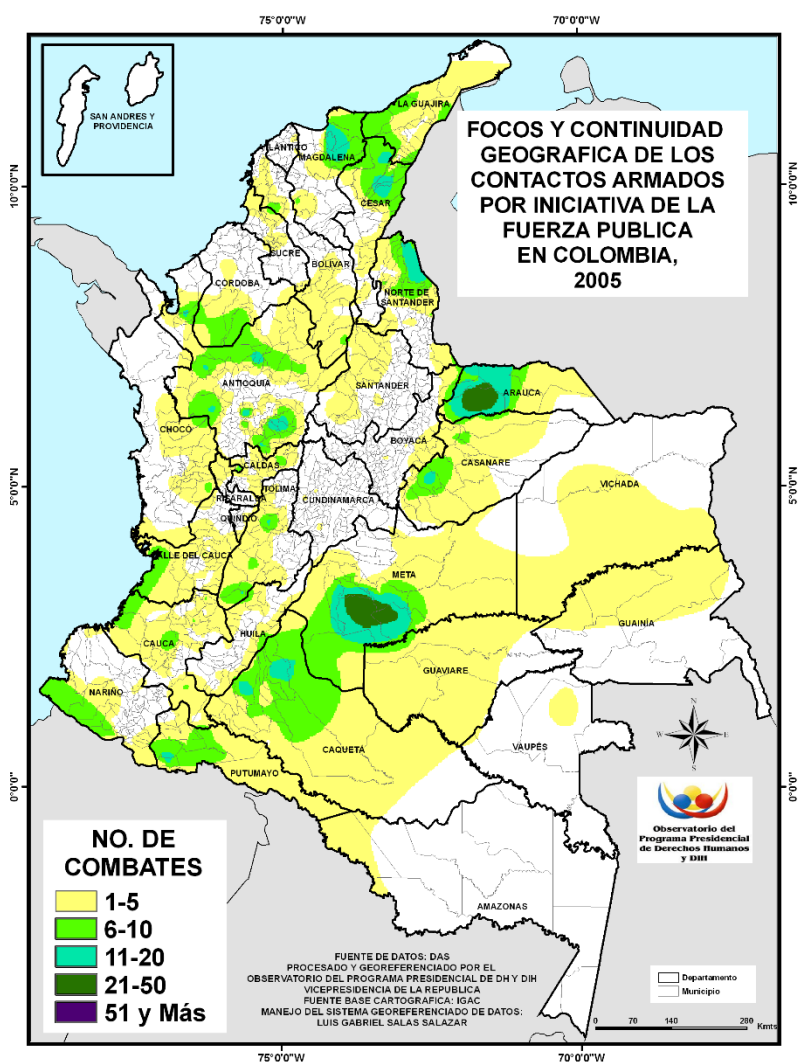
En lo que respectaría a Vichada, por otro lado, también se va a consolidar la presencia de la fuerza colombiana, la cual va a protagonizar hasta 33 combates por apenas 9 acciones de las FARC, además, concentradas exclusivamente entre 2002 y 2003. De hecho, desde 2005 y hasta 2012, las acciones de esta guerrilla transitarán, como mucho, entre 1 y 2 acciones armadas, fruto del fortalecimiento y mayor presencia pública del Estado. El volumen de la primera etapa de la PSD en cuanto a operativos militares es muy superior si se atiende la circunstancia de que nunca antes se evidenció presencia alguna de las Fuerzas Militares en la región. En adición, la segunda etapa de la PSD, sin embargo, será si cabe más intensa

³⁴¹ Son irrelevantes las apenas 700Ha erradicadas manualmente en 2005, UNODC (2014).

aunque, en todo caso, evidenciando un repliegue de las FARC y una correlación de fuerzas positiva y visiblemente a favor del Estado.

Finalmente, quedaría señalar que de todos los departamentos de la región, el que presentaría una correlación de fuerzas más favorable a la guerrilla y con un activismo armado más evidente sería Vaupés. Ello, por el creciente activismo del Frente 1 de las FARC, el cual tiene un especial arraigo en este departamento, por tratarse del mayor productor cocalero de la región, y uno de los mayores productores del país. Es más, los años de mayor intensidad del conflicto armado, las FARC van a seguir protagonizando hasta 20 acciones por solo 6 operativos militares en una correlación que, sin embargo, cambiará sustancialmente en los siguientes años a esta primera etapa de la PSD.

Mapa 56: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2005



Fuente: ODHDIH (2014)

Sea como fuere, en esta región amazónica, el factor de los cultivos ilícitos nunca resultó notable en cuanto a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, y, por ende, tampoco se vislumbró la posibilidad de llevar a cabo aspersiones con glifosato³⁴². En Amazonas, además de la escasa presencia de activismo guerrillero, los cultivos ilícitos nunca superaron las 900Ha anuales de manera que entre los años 2001 y 2005, la superficie cultivada condensó un total de 3.621Ha, aunque sin una sola acción de fumigación. De otro lado, en Guainía la dinámica habría sido parecida, con un volumen en estos primeros años, entre 2001 y 2005, de un total de 4.266Ha e igualmente, sin aspersiones con glifosato.

Respecto de Vaupés y Vichada, especialmente en este último departamento, las dinámicas son algo diferentes. En primer lugar, porque se aprecian mayores niveles de presencia de cultivos ilícitos. En Vaupés, en el año 2001 se presentaban casi 2.000Ha de cultivos ilícitos aunque el volumen de aspersiones no fue especialmente considerable, como revelan las 1.096Ha asperjadas entre 2004 y 2005 y, sobre todo, a tenor de que desde 2005 nunca se superan las 600Ha.

Por último quedaría Vichada, de largo el departamento más violento de esta región colombiana. Además de por los niveles de activismo de las FARC, ya expuestos, porque sus niveles de presencia de cultivos han sido, de largo, muy superiores en suma al de los otros tres departamentos. De hecho, hacia 2001 el volumen de cultivos de coca casi llegaba a las 10.000Ha, y entre 2001 y 2005 va a ser objeto de un volumen de aspersiones que termina por afectar a 4.266Ha. No obstante, en este contexto, lo cierto es que el Plan Colombia termina por quedar interrumpido, pues entre 2002 y 2004 no se acumulan aspersiones por un lado, y por otro, éstas quedan ampliamente superadas por las 30.411Ha acumuladas de coca cultivada y que hacen que, en el transcurso de estos años, apenas se reduzcan los niveles de cultivo.

10.7. La región occidental durante la primera presidencia de Álvaro Uribe

Por último, en el caso de la dinámica propia de la región occidental, Chocó y Antioquia van a representar dos tendencias bien diferentes, tal y como ya había sucedido con la presidencia anterior. En primer lugar, Antioquia, el departamento más próspero del país, en los años anteriores venía experimentando una mayor intensificación tanto de las FARC como, sobre todo, del ELN. Sin embargo, tras la llegada de Álvaro Uribe, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, va a hacer, junto con Cundinamarca, que Antioquia sea un punto clave de consolidación territorial de parte de la Fuerza Pública y de recomposición del Estado bajo el contexto de la PSD.

Esto, traducido en cifras, si entre 1998 y 2000 se promedian unos 40 operativos anuales unilaterales del Ejército, tras la llegada de Álvaro Uribe éstos se elevan, de manera sostenida, entre 2003 y 2005, a las 300 acciones anuales. Así, si entre 2003 y 2005 se registran hasta 1.035 operativos militares contra las FARC, paralelamente, se contabilizan un total de 280

³⁴² Únicamente se destacarían 216Ha erradicadas en Amazonas

acciones guerrilleras, lo cual supone una cifra muy considerable pero, marcadamente a la baja. Ello, especialmente, a partir de 2004, una vez que los operativos de la Fuerza Pública debilitan sustancialmente los Frentes 4, 9 y 36 de las FARC.

A diferencia de Antioquia, en Chocó el alcance de los combates por iniciativa del Estado, entre 2002 y 2005 apenas asciende a las dos decenas, sobre todo dirigidas a mermar un Frente 57 de las FARC cuyo nivel de acciones se presenta en cifras similares a las de los combates por acción de la Fuerza Pública. Incluso, estos llegan a ser superiores, tal y como sucede en 2005, lo que evidencia cómo, en esta primera etapa de la PSD, la prioridad que representa Antioquia, en la lucha contra las FARC, queda desdibujada por la escasa relevancia que, a igual efecto, supone Chocó.

Para lo que afecta al ELN, igual que sucede con las FARC, el departamento de Antioquia se erige como una prioridad de disputa militar y territorial. Por ello, y en concordancia con una dinámica que ya había venido aconteciendo durante la presidencia de Pastrana, el ELN pasa de las casi cien acciones, en los años 2000 y 2001, a la mitad en 2002, y por debajo de la decena en los años 2003 y 2004. Es más, se llega al borde de la inactividad armada en 2005 (5).

Sensu contrario, los combates por iniciativa militar se duplican de tal manera que, sistemáticamente, se supera ampliamente la media de 100 combates por año y se acumulan, entre 2002 y 2005, hasta un total de 451 combates que ponen de manifiesto la profunda brecha en la correlación de fuerzas. Bajo esta tesitura, la presencia armada de la fuerza pública de Colombia prácticamente va a copar todo el departamento, toda vez que el ELN va a ir desapareciendo del mismo, quedando, como últimos reductos, y cada vez con menor capacidad de combate, con los frentes ubicados en el oriente antioqueño.

Posiblemente, en algún grado consecuencia de lo anterior, en Chocó se va a registrar un incremento de la violencia derivada del activismo guerrillero, principalmente, con base al activismo del frente disidente del ELN, “Resistencia Cimarrón”, el cual se va a mantener, de igual manera que sucedía con las FARC, en unos niveles de activismo guerrillero superiores a la decena de acciones anuales, y en términos similares al volumen de operativos militares.

De esta manera, entre 2002 y 2005 se dan hasta 44 acciones guerrilleras y 50 operativos militares, de los cuales la mitad se producen en 2003, en una tendencia, irresoluta en esta primera fase de la PSD, de confrontación armada. De hecho, estas cifras superan notablemente las 11 acciones guerrilleras del ELN y los 10 operativos militares transcurridos durante el gobierno de Andrés Pastrana, poniendo de manifiesto el mayor nivel de disputa armada y territorial.

En cuanto al Plan Colombia, el departamento de Antioquia va a resultar de gran importancia si bien, el impacto y la eficacia, como en otros escenarios, tienen un resultado, cuando menos, discutido. De hecho, el volumen de cultivos ilícitos de Antioquia, entre 2002 y 2005 va a acumular una superficie cultivada de coca de 22.055Ha, por un total de 41.003Ha asperjadas,

especialmente, focalizadas en Tarazá (22.540Ha), y en menor medida en Cáceres (5.138Ha), El Bagre (3.824) y Anorí (2.375Ha). A éstas, además, se suman otras 1.684Ha erradicadas manualmente. Sin embargo, como sucediera en Bolívar o en Nariño, la afectación a la superficie cultivada queda cuestionada habida cuenta que si en el año 2002 había 3.030Ha cultivos de coca en el departamento, para el año 2005 esa cifra se había duplicado.

El caso de Chocó, nunca supuso una prioridad para las prácticas de aspersión aérea, quizá porque en 2002 no registraba hectárea alguna de cultivos ilícitos. Sin embargo, por ello mismo y por presentar unas condiciones geográficas especialmente atractivas para el cultivo de coca, a partir del año 2003 se comienza a dar una presencia creciente de este tipo de plantaciones. Solo en este año se computan 453Ha que se triplicarán en apenas dos años, si bien, dentro de un margen, por ese entonces, poco preocupante, a comparación de otros escenarios cocaleros descritos.

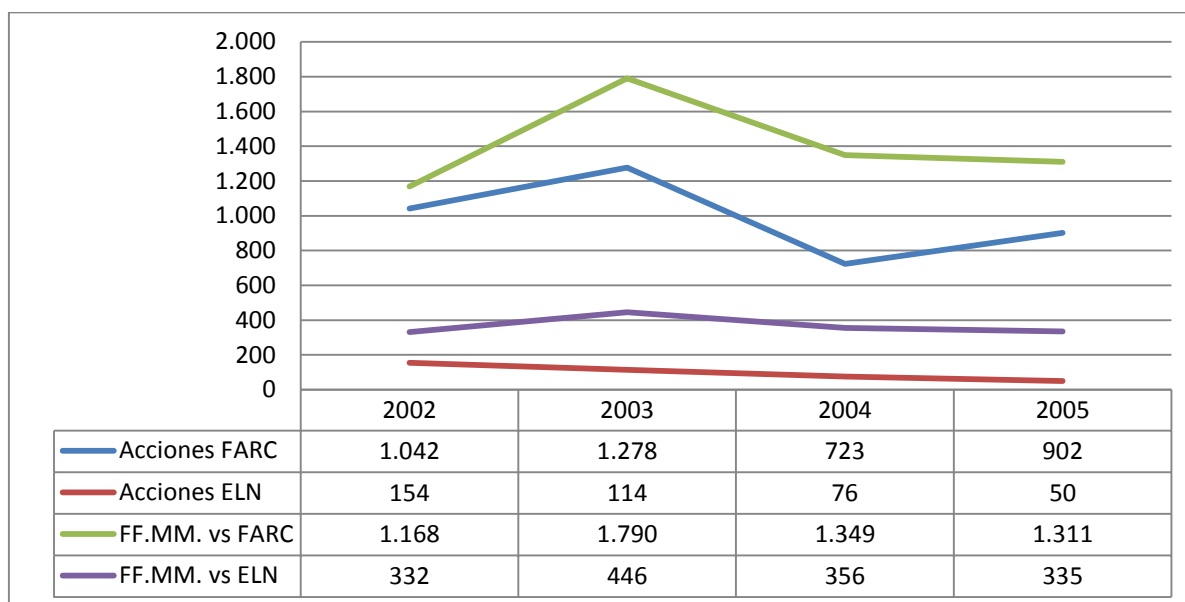
10.8. Conclusiones. Valoraciones al impacto de la PSD entre 2002 y 2005

Tal y como nos muestra el siguiente gráfico, se aprecia una continuidad creciente en las dinámicas del conflicto armado, especialmente, en lo que al activismo guerrillero de las FARC y el volumen de operativos de la Fuerza Pública. Ambas, de manera casi sostenida, se llegan a duplicar durante el período 2002-2005, con base en un escalamiento y un nivel de violencia derivado de esta confrontación que llega a los más elevados de la historia reciente del conflicto armado colombiano. Así se aprecia con los más de 1.000 combates que la Fuerza Pública destina contra las FARC, y que tiene su mayor nivel en 2003, cuando se llega a los 1.790 operativos. Asimismo, las FARC protagonizan el mayor activismo guerrillero de su historia, igualmente, sobrepasando las 1.000 acciones guerrilleras en 2002 y 2003, y nuevamente, aproximándose en 2005.

En lo que afectaría al ELN, se pondría de manifiesto la tendencia de repliegue, ya iniciada desde 2001, cuando se obtienen los mayores niveles de activismo de esta guerrilla y que, paulatinamente, entre 2002 y 2005 van decayendo hasta llegar a los niveles más bajos de las últimas dos décadas, cuando acumulan apenas 50 acciones. Acciones, ampliamente superadas por un volumen constante, incluso creciente, de los operativos militares que, de media, entre estos años 2002 y 2005, se mantiene en torno a los 350 operativos, con el mayor nivel, con casi 450 operativos, en el año 2003.

En cuanto a un desglose regional, nuevamente, se apreciaría una relativa continuidad con la focalización regional de la presidencia anterior de Andrés Pastrana, al menos en cuanto a las prioridades, pues de los 13 departamentos con mayor presencia de Fuerza Pública entre 1998 y 2001, bajo la presidencia de Uribe se mantiene tal continuidad en diez departamentos. Las salvedades serían los departamentos de Putumayo, Huila y Valle del Cauca, prioritarios en el mandato de Pastrana, y que son sustituidos por Magdalena, Caquetá y Nariño, en el gobierno de Álvaro de Uribe.

Gráfico 15: Evolución del conflicto armado entre 2002 y 2005



Fuente: Elaboración propia

Antioquia, en ambos casos se mantiene como la prioridad si bien, en estos años, la intensidad de los operativos casi triplica al número dispuesto en el gobierno anterior. De igual manera, en un intento por disputar a la guerrilla de las FARC algunos de sus enclaves tradicionales, se aprecia una intensificación sobre el eje Meta-Caquetá-Putumayo además de mantenerse la prioridad en el nororiente – Arauca, Norte de Santander y Santander. Asimismo, en la costa Atlántica se intensifican los operativos sobre Bolívar, Cesar y Magdalena, con unas cifras claramente a favor del Estado y que contrasta con una intensificación insuficiente en el suroccidente, especialmente en Cauca y Nariño, donde las acciones de las FARC sobrepasan ampliamente a las iniciativas de la Fuerza Pública.

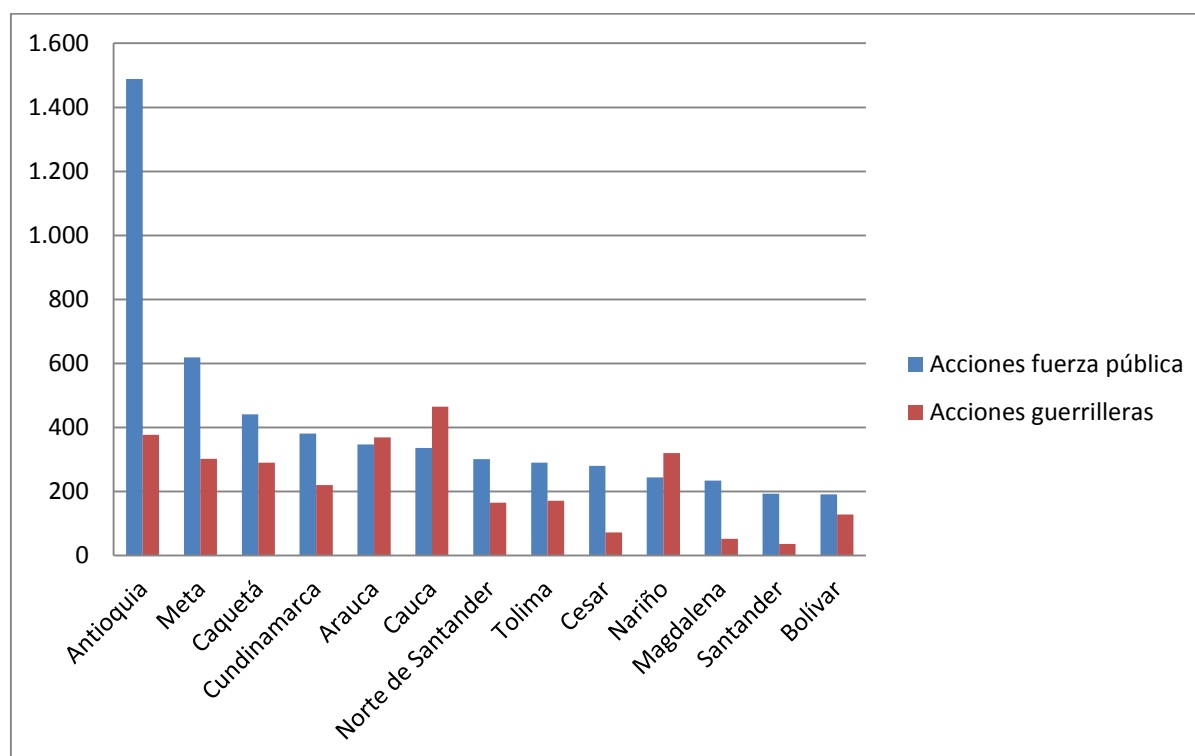
En esta tendencia creciente de conflicto, especialmente por la disputa frontal que las FARC plantean frente al Estado, se aprecia que salvo Huila, Vaupés, Arauca, Cauca, Nariño y Putumayo, en toda la geografía colombiana el volumen de operativos de la Fuerza Militar supera ampliamente el volumen de acciones guerrilleras. Así, si en 2002 había 7 departamentos con mayor activismo guerrillero que operaciones de la Fuerza Pública, para el año 2005, esa cifra se mantiene estable, especialmente en los cuatro departamentos del Pacífico – Chocó, Valle, Cauca y Nariño, donde el arraigo y el activismo guerrillero se intensifica y no parece quedar afectado por el aparente mayor impacto de la Fuerza Pública.

En la región nororiental, Santander, especialmente entre 2002 y 2003, se termina de consolidar como un departamento libre de FARC, en continuación al hostigamiento iniciado ya por Andrés Pastrana. En Casanare se fortalece sobremanera la presencia de la fuerza del

Estado toda vez que se acompaña de un incremento de las acciones de las FARC que, no obstante, empiezan a decaer a partir de 2005. Mientras, en Arauca y Norte de Santander se aprecia un escalamiento de la violencia que no se traduce, ni mucho menos, en una reducción en cuanto al activismo de las FARC. Del lado del ELN, mientras que va a desaparecer de Santander y Casanare, va a resistir en Norte de Santander y Arauca aunque en una tendencia de repliegue, resultado de la intensificación de los operativos sobre esta guerrilla.

En la región central, Cundinamarca va a resultar prioritario, a fin de evitar el ya mencionado escenario envolvente que planteaban las FARC sobre el departamento. Sin embargo, tal es el volumen de operativos de la Fuerza Pública, que para 2004 la guerrilla prácticamente habrá desaparecido del departamento, en igual retroceso que en Boyacá y Risaralda, manteniéndose aún, como escenarios de disputa, Caldas y en menor medida, Quindío. A la vez, el ELN, para el año 2004 se encontrará alejado de cualquier atisbo de control municipal, en ninguno de estos cinco departamentos.

Gráfico 16: Prioridades para la Fuerza Pública, 2002 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Sensu contrario, el suroccidente va a ser un marcado enclave de disputa, a la vez que de fuerte arraigo de las guerrillas. En Cauca, Valle del Cauca y Nariño, a pesar de la

intensificación de combates, las acciones de las FARC superan ampliamente el número de iniciativas militares. Lo mismo en Huila, de manera que, únicamente Tolima se vislumbra como un escenario en el que la paridad de fuerzas se va decantando, paulatinamente, del lado favorable del Estado. Para el ELN, Tolima y Valle van a ser los escenarios donde va a sufrir los mayores golpes por el impacto tanto de la PSD en el primer caso, como por el paramilitarismo y la particular guerra con las FARC, en el segundo. Tal vez por esto se explique su mayor consolidación territorial en escenarios de retaguardia como Cauca o Nariño.

En la costa Atlántica se identificaría una de las prioridades nucleares de esta primera etapa de la PSD, siendo muy amplio y evidente el impacto y la intensificación de los operativos militares sobre las FARC y el ELN en los siete departamentos. Tanto, que para 2005, solo Bolívar y Sucre resisten como emplazamientos con presencia notable de las FARC, pues para ese entonces el ELN habrá abandonado su activismo en esta región y las FARC habrán reducido sustancialmente sus niveles de activismo.

Como la región suroccidental, el corredor Meta-Caquetá-Putumayo va a ser prioritario para actuar militarmente sobre unas FARC que, pese a la intensidad, van a mantener niveles de disputa y resistencia que impiden considerar este escenario como susceptible de victoria militar de parte de la Fuerza Pública. Algo que sí se podría señalar para Antioquia, en la región occidental, al acumularse hasta 1.500 operativos militares que superan ampliamente el activismo guerrillero de las FARC. Asimismo, para 2005, la presencia del ELN, también azotada por el impacto paramilitar, habrá quedado relegada a una posición marginal en un departamento en el que, solo cuatro años atrás se trataba del actor armado regional por antonomasia.

11. El alcance regional de la política de seguridad de Álvaro Uribe en el conflicto armado colombiano entre 2006 y 2010

Con base en lo anterior, a continuación se continúa analizando la PSD, aunque ya en su segundo período, entre los años 2006 y 2010, de manera tal que se podrán observar los cambios tanto en la lógica de la confrontación como en la representación espacial de la disputa con los grupos armados que fue detallada al inicio de este capítulo.

11.1. La región nororiental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

Durante la segunda parte del mandato presidencial de Álvaro Uribe, durante los años 2006 y 2010, se encuentran, según la región, unas lógicas de continuidad que, como en años anteriores, se focalizan en combatir militar y frontalmente los enclaves de control territorial de las FARC, habida cuenta de que más allá de ciertos escenarios como Cundinamarca, parte del eje cafetero, o parte de la costa Atlántica o Santander, continuaron en disputa con las guerrillas.

Así, en continuidad con años anteriores, en esta segunda etapa de la PSD, por ejemplo, Santander termina por consolidarse como un departamento libre de activismo guerrillero, sobre todo, a partir de 2008, y a lo cual contribuyen los 34 operativos militares acumulados entre 2006 y 2007, que terminan por duplicar el activismo de un Bloque Magdalena Medio muy debilitado en este departamento.

Una tendencia similar se puede decir que tiene lugar en el departamento de Casanare, donde entre los años 2006 y 2007, también en continuidad con una presencia mucho más notoria de la Fuerza Pública en el departamento, se van a dar hasta 67 combates por iniciativa militar, especialmente sobre los Frentes 28 y 56, que hacen parte del Bloque Oriental. Asimismo, las FARC apenas protagonizarán 3 acciones de modo que, como sucediera en Santander, en estos dos departamentos los niveles de activismo de las FARC van a reducirse a mínimos históricos.

Dinámica diferente va a suceder en los departamentos de Arauca y Norte de Santander. En el caso de Arauca, por ejemplo, se concentran los mayores esfuerzos de la fuerza colombiana por combatir directamente a los Frentes 45 y 10 del Bloque Oriental. Tanto es así, que entre 2006 y 2008 se van a dar hasta 259 combates por iniciativa militar por apenas 41 acciones de parte de las FARC. Incluso, en 2007 tan solo se van a contabilizar 2 acciones de las FARC en todo el departamento, lo cual evidencia una reducción en la violencia directa sin precedentes pero que, sin embargo, a diferencia de otros enclaves, no va a ser sintomático de su desaparición.

Al respecto, las particularidades de un departamento fronterizo como Arauca, con fuerte presencia del ELN, que sigue siendo el actor hegemónico local³⁴³, y un alto valor agregado en cuanto a petróleo y cultivos ilícitos, además de unos niveles de contrabando, capitalizados en buena medida por las guerrillas, van a permitir entender que el incremento de presión del lado del Ejército no se traduzca en la desaparición de estos grupos como sí va a suceder en otros escenarios.

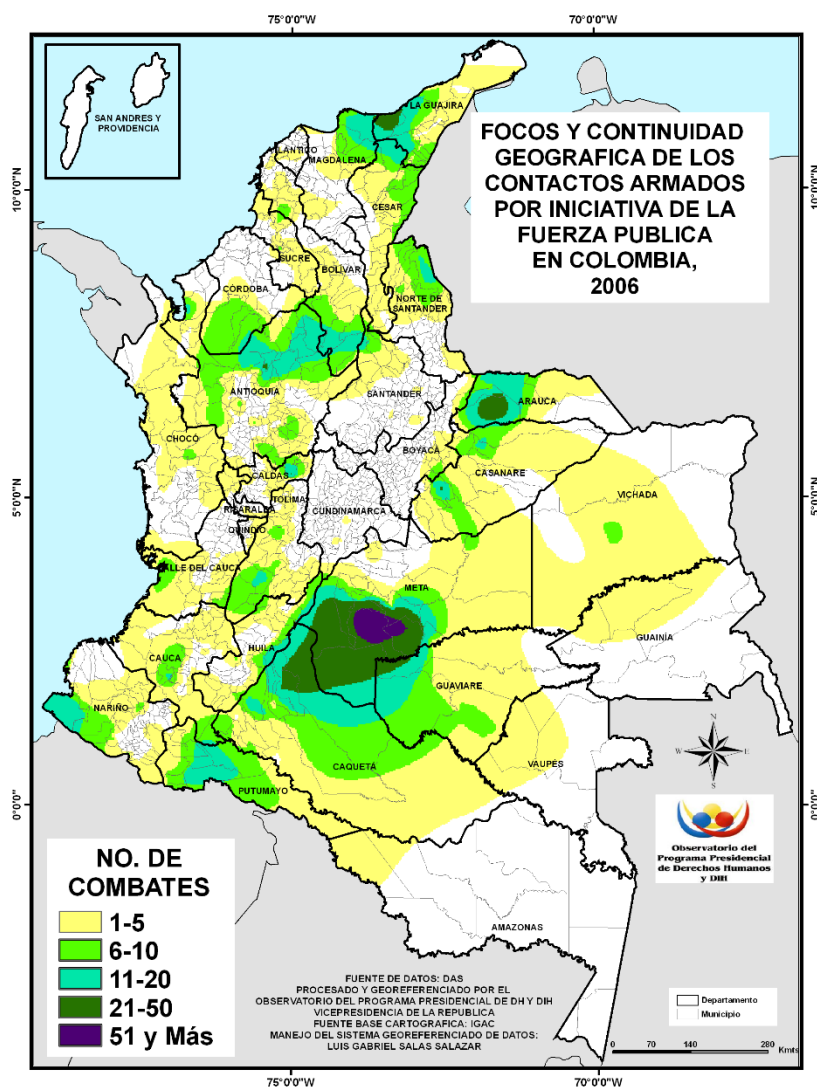
Sobre todo, porque entre 2009 y 2010, si bien se mantienen niveles elevados de operativos militares contra las FARC (209), ni mucho menos el activismo guerrillero va a decaer. Todo lo contrario, en un proceso y una coyuntura nuevamente de disputa, las FARC terminan por protagonizar hasta 69 acciones, dentro de una tendencia creciente, continuada en los siguientes años, y que pone de manifiesto el escenario de disputa actual que hoy seguiría siendo Arauca. Un departamento con ingentes niveles de activismo guerrillero y, por el momento, con gran dificultad para poner fin a un importante arraigo tanto de FARC como de ELN.

Más evidente si cabe va a ser la consolidación territorial de las FARC en Norte de Santander. Para el año 2006, las iniciativas de esta guerrilla (81), especialmente por el fortalecimiento

³⁴³ Sobre la complejidad del conflicto en Arauca, se recomiendan los trabajos de CODHES (2008) o Gutiérrez Lemus (2010).

del Frente 33 en el Catatumbo, van a duplicar al número de combates respecto de los que resultan iniciativa de la Fuerza Pública colombiana (44). Es cierto, sin embargo, que esta tendencia en cuanto a correlación de fuerzas se va a equiparar en 2007 y 2008, cuando, al contrario, el total de operativos militares (93) casi triplique el número de acciones de las FARC.

Mapa 57: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2006



Fuente: ODHDIH (2014)

Empero, por el reajuste de los frentes de las FARC en la región, y la desaparición de Santander y Casanare, nuevamente en 2009 y 2010 termina por darse un nuevo incremento,

esta vez muy sustancial de activismo guerrillero (99), y que contrasta con una reducción sustancial en cuanto a los números que presenta la Fuerza Pública. De hecho, en 2010 apenas se registran 33 operativos, lo cual supone la cifra más baja de acciones militares desde 2003 y evidencia un cierto agotamiento de los niveles de confrontación directa allí donde las guerrillas, como en este caso las FARC, presentan un mayor arraigo.

En cuanto a lo que afectaría al ELN, y tal y como se señaló con anterioridad, la región nororiental va a terminar por ser el enclave más importante para los intereses de supervivencia y arraigo de la guerrilla. En la segunda etapa de la PSD se mantiene la ausencia de activismo en Santander y aun cuando, principalmente, entre 2006 y 2007 se terminan por dar hasta 30 del total de 38 operativos militares que tienen lugar dentro de este segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe.

Igualmente, el departamento de Casanare tampoco va a registrar acciones del ELN, y como en Santander, se aprecia un importante número de acciones militares, que asciende a 71, y que en su mayor parte (58), se condensan entre 2006 y 2007. Años en los que se termina por poner de manifiesto el profundo debilitamiento experimentado por un un Frente como el “José David Suárez”, en clara retaguardia en el departamento.

En Arauca, en estos años, y sobre todo hasta el año 2009, se aprecia también un repliegue del ELN, que apenas contabiliza hasta 7 acciones guerrilleras, de los Frentes “Domingo Laín Sanz”, el más combativo, y la “Compañía Simacota”. Sus acciones resultan ampliamente superadas por los 28 operativos a instancia de la Fuerza Pública. Sin embargo, y como sucediera con las FARC, desde el año 2010, y en continuación, hasta 2012, el ELN va a recuperar una tendencia incremental en lo que a violencia directa se trata, llegando, en última instancia, a volverá hacer de Arauca el departamento prioritario para sus intereses. Esto, tal y como refleja un número de acciones armadas que hacia 2010 vuelve a superar ampliamente al volumen de operativos por iniciativa de la Fuerza Pública.

Por último, en Norte de Santander se va a mantener constante una media anual próxima al medio centenar de combates por iniciativa del Ejército, entre 2006 y 2008, y que se acompaña, como en Arauca, de un primer repliegue en el activismo armado del ELN, el cual contabiliza un total de 15 acciones. No obstante, con unas particularidades muy similares a las de Arauca, la realidad es que la confluencia, en torno al Catatumbo, de FARC y ELN³⁴⁴, unida a la dimensión fronteriza, selvática y fuertemente marcada por el contrabando, va a permitir una supervivencia de la mayoría de las estructuras más importantes de la guerrilla.

³⁴⁴ No hay grupos paramilitares en el Catatumbo pues, como señala el personero de Norte de Santander, “No hay presencia de Bacrim con la excepción de Ocaña y Cúcuta, donde si existen grupos paramilitares. Se ha hablado de que las Bacrim ya no pelean con las guerrillas sino de que hay alianzas entre ambos grupos para garantizar el negocio del narcotráfico, especialmente, con el EPL. Si bien, estas alianzas no se dan en el Catatumbo. No hay reductos paramilitares, pues estos salieron una vez desmovilizados estos. Es más, una vez que ellos se fueron, como nada cambió, las guerrilleras se fortalecieron e incrementaron sus niveles de presencia y control territorial”.

Ello, tal y como sucede con los frentes “Carlos Armado Cacua Guerrero”, el Frente Urbano “Carlos Germán Velasco” y el “Juan Fernando Porras”. Frentes que, como se verá con posterioridad, y desde 2010, contribuyen en una nueva dinámica creciente en una guerrilla que termina por presentar un volumen de fuerzas (42) en igual correlación al conjunto de acciones por impulso del Ejército (39), cuestionando, como en resto de casos, la capacidad para hacer desaparecer la violencia directa de estos grupos.

De lado del Plan Colombia, el volumen total de aspersiones, por ejemplo, en Norte de Santander, van a caer en un 300% en comparación con el anterior período presidencial, de manera que apenas se superan las 9.000Ha asperjadas, también, al cobrar mayor relevancia las erradicaciones manuales (11.500Ha). Las acciones de aspersión van a ir decayendo hasta el punto de su desaparición en 2010, cuando apenas se asperjan 149Ha. Un volumen de aspersiones muy inferior respecto de la superficie cultivada que en estos años se incrementará hasta en cinco veces, consoldándose como el segundo enclave cocalero más importante del país.

En Arauca, aunque en un nivel de aspersiones resulta muy inferior al de los años previos, se siguen superando las 2.000Ha asperjadas³⁴⁵ frente a unos cultivos de coca que, especialmente, a partir de 2008, y en una tendencia irrefrenable, van a caer por debajo de las 450Ha. Si bien desde el año 2009 no se recogen aspersiones con glifosato en el departamento, tal y como sucediera con Norte de Santander, a diferencia de este departamento, esta cuestión se da cuando los cultivos ilícitos han decaído en un 75% y sobre la base de umbrales poco preocupantes. Niveles que invitan a pensar en una traslación de FARC y ELN hacia otras fuentes de financiación, en la que cobra especial importancia el contrabando además de la extorsión o el secuestro.

Para el caso de Santander, las aspersiones mantienen elevados niveles de continuidad, fundamentalmente, en 2006 y 2007, cuando las aspersiones ascienden a 3.900Ha frente a un volumen cultivado de 1.729Ha, y en el que la acción de las guerrillas, casi inexistente, permite mostrar al departamento de Santander como uno de los mayores escenarios de conquista y consolidación territorial del poder de la Fuerza Pública. Es más, desde el año 2009, la tendencia va a ser de reducción paulatina hasta niveles casi inexistente de cultivos, igualmente, acompañados de una ausencia total de activismo guerrillero y a lo que se añade un impacto considerable en cuanto a un volumen de erradicaciones manuales que supera las 10.000Ha.

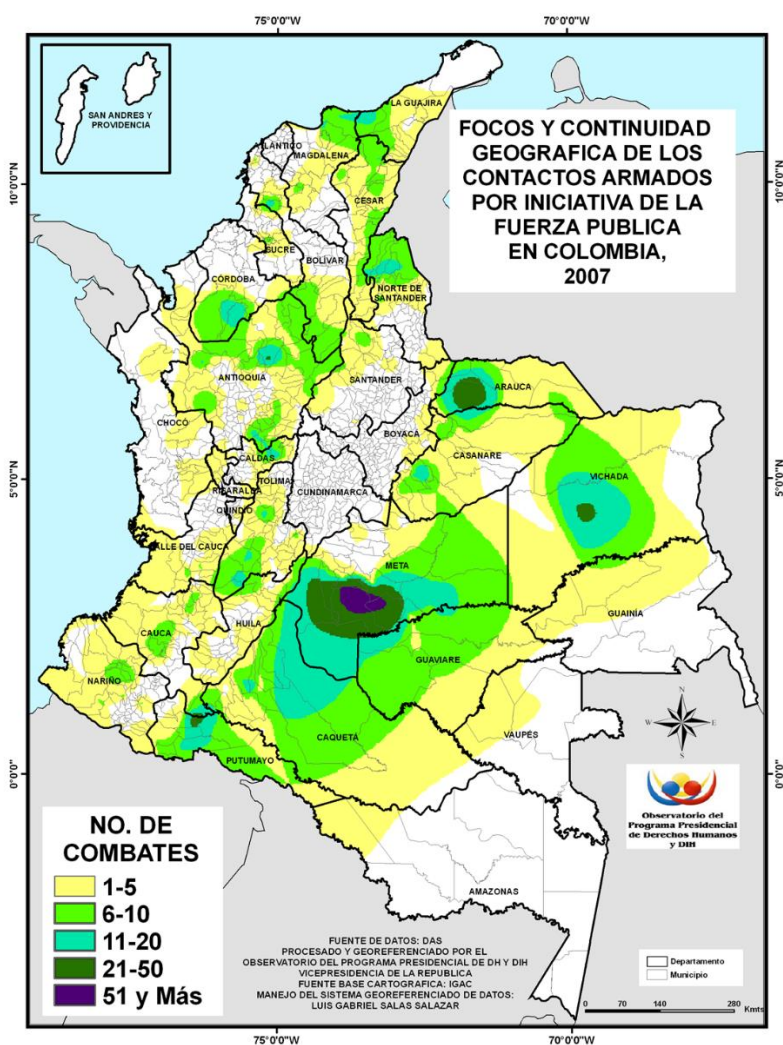
11.2. La región central durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

La región central, ya durante esta segunda etapa de la PSD va a mostrarse como un escenario, no ya de disputa, como en el anterior, sino de consolidación, tanto territorial como militar. Durante el período anterior se señalaba de qué modo tanto Boyacá como Cundinamarca,

³⁴⁵ Habría que adicionar poco más de 1.100Ha erradicadas manualmente en Arauca en esta segunda legislatura de Uribe.

especialmente, habían concentrado los mayores esfuerzos militares de confrontación y derrota sobre las FARC. Ya en estos años, por ejemplo, en Boyacá, entre 2006 y 2008, se van a dar un total de 34 combates por iniciativa de la Fuerza Pública que apenas contrastan con las 4 acciones guerrilleras, del Frente 28 o del Frente 45, en el norte del departamento. Se apreciaría, desde 2008, una pequeña tendencia al alza en las acciones de las FARC, fruto del mencionado “Plan Renacer” que sin embargo, no va a tener continuidad en los años siguientes, de manera que el activismo de las FARC en Boyacá, a partir de 2010, brillará por su ausencia.

Mapa 58: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2007



Fuente: ODHDIH (2014)

Igual va a suceder en el departamento de Cundinamarca, donde las acciones de las FARC y la presencia municipal de la guerrilla prácticamente pasan a ser testimoniales, con excepción de 2008 y 2009 cuando, de acuerdo con el mismo “Plan Renacer”, se registran en Bogotá hasta 21 acciones armadas que tampoco van a tener continuidad en los años siguientes, principalmente, desde 2010.

La prioridad militar, de control territorial, va a darse, una vez consolidada Cundinamarca y Boyacá, en el eje cafetero. Esto es, en Quindío, Caldas y Risaralda. En Caldas, sobre todo, entre 2006 y 2008 se va a acumular un máximo histórico de 161 acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública, especialmente contra los Frentes 9 y 4 del Bloque Noroccidental de las FARC. Así, dada esta disparidad en la correlación de fuerzas, en apenas tres años esta guerrilla desaparece del departamento, sobre todo, desde el año 2008, cuando por las 3 acciones de las FARC se terminan por contabilizar hasta 43 combates del Ejército.

Igual va a suceder en Risaralda, el departamento más próspero de la región, donde solo entre 2006 y 2007 acontecen hasta 40 combates por iniciativa militar, dirigidos contra el Frente 50, y el cual va a desaparecer del departamento a partir de 2007, dado que sus últimas acciones notables en Risaralda (11) fueron en el año 2006. Así, por ejemplo, en 2010, por un total de 29 acciones armadas por iniciativa del Ejército colombiano, apenas se cuentan 2 acciones de la guerrilla.

En cuanto al último departamento, en Quindío, se va a dar una mayor persistencia del lado de la Fuerza Pública pues, a diferencia de los otros dos departamentos, las operaciones unilaterales de ésta prácticamente van a extenderse, de manera constante, a lo largo de todo el período 2006-2009. En estos cuatro años se dan hasta 47 combates por iniciativa militar por 14 acciones de las FARC. Unas FARC, igualmente, como en el resto de casos, claramente debilitadas a partir de 2010, cuando terminan por desaparecer, también de este departamento.

En relación al ELN, éste no va a presentar presencia activa ni en Cundinamarca ni en los departamentos cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda, aunque, de manera excepcional, en el año 2007, este departamento termina por acumular hasta 7 operativos militares que sirven como espaldarazo a la presencia del ELN en la región. Solo en Boyacá se aprecia activismo guerrillero, aunque un activismo poco relevante, con 10 acciones entre 2006 y 2010 – de las que 7 se concentran en 2007. Esto, porque desde este año, el ELN no supera las 2 acciones anuales, en buena medida, fruto de la intensificación de combates por iniciativa militar, y que en estos años terminan por ascender a 52 operativos.

Igual que en años anteriores, sobre la región central no termina por concurrir una amenaza de presencia de cultivos ilícitos de manera tal que las aspersiones aéreas en el marco del Plan Colombia son poco significativas aunque focalizadas en Boyacá, con aspersiones de 831Ha, 166Ha y 117Ha, en 2006, 2008 y 2009, respectivamente y casi 4.000Ha erradicadas manualmente. También se destacarían acciones de aspersión en Caldas, por volumen de 1.521Ha entre 2006 y 2009, duplicadas en acciones por erradicación manual, aunque

concentradas en su práctica totalidad en 2006, y nada comparables con las apenas 41 Ha asperjadas en Cundinamarca, únicamente, en el año 2006.

11.3. La región suroccidental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

En la región suroccidental, a diferencia de la región central del país, la posición del Estado va a ser de mayor confrontación militar y territorial, aunque de acuerdo a tendencias diferentes. En primer lugar, durante esta segunda etapa del gobierno de Álvaro Uribe se va a encontrar una lógica de continuidad en el departamento de Valle del Cauca, donde la dimensión del conflicto va a presentar unas cifras muy similares a las recogidas durante el primer mandato presidencial.

Tanto, que la Fuerza Pública, en estos años que transcurren entre 2006 y 2010, acumula hasta 227 combates por iniciativa propia, frente a unas acciones de las FARC que, por medio de los Frentes 6 y 30 del Bloque Occidental, protagonizan 218 acciones guerrilleras, poniendo de manifiesto una capacidad de acción similar en unos términos que incluso, como se verá, van a persistir durante la posterior presidencia de Juan Manuel Santos.

Los dos departamentos con mayores niveles de violencia acumulada de las FARC y también con mayor presencia de la Fuerza Pública, aunque insuficiente para imponer una correlación de fuerzas favorable al Estado, van a resultar Cauca y Nariño. Así, Cauca, a pesar de ser el cuarto departamento con mayor volumen de operaciones militares entre 2006 y 2010 (615), va a ser, de largo, el mayor departamento con acciones de las FARC (508). Es decir, se tratará del departamento donde más evidente resulte el arraigo militar y territorial de la guerrilla.

Lo mismo podría decirse para Nariño, donde se produce una importante intensificación de la Fuerza Pública entre 2006 y 2007, cuando se dan hasta 80 operativos militares. Sin duda, un record histórico que queda desdibujado por la intensificación de la respuesta de las FARC, que llegan a superar en estos años las 100 acciones. Es más, incluso, desde 2008 se atiende a una reactivación del Frente 2, perteneciente al Bloque Sur, y del Frente 29, integrado en el Bloque Oriental, de largo, las dos estructuras más importantes de las FARC. Solo entre 2008 y 2010 ambos frentes terminan por acumular hasta 239 acciones armadas, en una cifra muy superior a los 115 operativos puestos en marcha por la fuerza colombiana dentro de este período.

Ya en el interior, con dinámicas diferentes, Tolima va a ser el departamento en el que más se van a intensificar los combates de parte de la Fuerza Pública contra las FARC, a efectos de obtener una correlación favorable de fuerzas. Tanto es así, que durante esta segunda etapa del gobierno de Uribe, los combates sobrepasan en la mayor parte de la legislatura el centenar de acciones militares unilaterales, registrándose entre 2006 y 2010, hasta un total de 546 acciones armadas. Una cifra sin precedentes de presencia del Estado en el departamento de Tolima.

Sin embargo, mientras que el Ejército va a tratar de disputarle militar y territorialmente el sur de Tolima, con gran presencia y arraigo guerrillero, las FARC, por su parte, van a enfatizar

su presencia en el norte y oriente del departamento, dentro de una dinámica en la que, pese a la reducción notable de las acciones armadas de la guerrilla, se van a mantener en los mismos número que en los quince años anteriores y sin atisbo de reducción en los años que seguirán.

Como en Tolima, en el departamento de Huila, se va a dar una lógica similar, de mucha intensificación de los combates por parte del Ejército, y que llegan hasta el punto de triplicar a las acciones de las FARC, especialmente protagonizadas por los Frentes 3, 13, 61 y 64 del combativo Bloque Sur. Igual que en los anteriores departamentos, ello no termina por reducir la presencia de la guerrilla y su capacidad de combate, constante, en idénticos niveles que en el resto de años anteriores.

Para el caso del ELN, por lo transcurrido durante la presidencia de Andrés Pastrana y el impacto paramilitar en el departamento, Valle del Cauca no va a registrar presencia o activismo alguno de parte del ELN, más allá de 6 operativos militares, dispersos, entre 2006 y 2010. Asimismo, en Cauca se va a evidenciar una tendencia de continuidad en los niveles de presión de la Fuerza Pública, que no terminan por ser definitivos, oscilando en torno a las 15 acciones armadas por año, y que van a permitir sobrevivir a una guerrilla que, a partir de 2009, gracias en buena medida a la normalización de relaciones con las FARC³⁴⁶, parece recomponerse. Una recomposición que se traduce en un incremento del número de acciones unilaterales, el cual pasa de 0 a 5 en el año 2010, y que se mantendrá estable, favorecido por la tendencia decreciente en cuanto al volumen de operativos militares que tendrá lugar bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Por último, en la costa del Pacífico, Nariño va a actuar con fuerza el Frente “Comuneros de Sur”, en guerra con las FARC hasta 2009. De hecho, entre 2006 y 2008, en repliegue estratégico apenas protagoniza 2 acciones por un volumen de operativos militares que asciende a 39. Como en otros departamentos de la región, desde 2009 se aprecia nuevamente mayor visibilidad, hasta el punto de que se asciende a 23 las acciones por una tendencia decreciente, con apenas 17 acciones, de parte de la Fuerza Pública. Este hecho, además, pondría de manifiesto hasta qué punto el departamento de Nariño, tras Arauca y Norte de Santander, ha terminado por consolidar unas particularidades que resultan afines a la supervivencia del ELN, sobre todo, una vez que se ha constatado su desaparición de Huila, Tolima y Valle del Cauca.

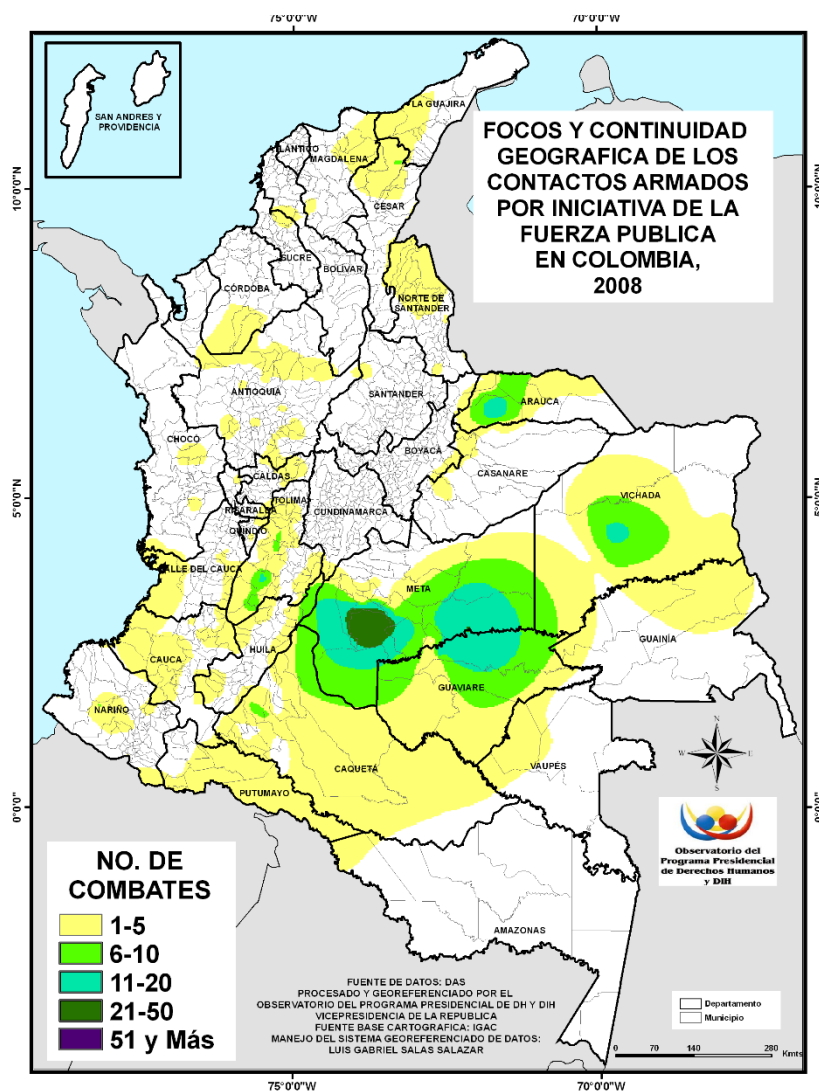
En lo que afectaría a los departamentos de interior, si bien Huila no recoge violencia guerrillera del ELN, en Tolima, la misma termina por desaparecer. Así, aun cuando a inicios de la segunda legislatura, el departamento había acumulado presencia del ELN, por medio del ya referido frente “Bolcheviques de Líbano”, y que aunque protagoniza un total de 8 acciones, entre 2006 y 2008, es objetivo de hasta 39 acciones del Ejército. Un volumen de

³⁴⁶ Véase: <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/3573-un-singular-pacto-de-paz-eln-farc>
Consultado el 2 de agosto de 2015.

operativos que terminan, como ya se vio en un capítulo anterior, por disolver su estructura en el año 2009.

En cuanto al Plan Colombia, lo cierto es que el número de acciones de aspersión aérea se va a condensar en Cauca, especialmente, entre los años 2007 y 2010, de manera tal que se incrementan las hectáreas asperjadas, de 3.557Ha en 2007, a más de 11.000 en 2010. Si a ello se suman las 12.500Ha erradicadas manualmente en estos tres años, se puede entender de qué modo, en la lucha antinarcótics, el departamento de cauca pasa a concebirse como una prioridad. Sin embargo, la eficacia nuevamente vuelve a quedar en cuestionamiento a tenor de la escasa reducción que experimentan los cultivos en el departamento. Ello, porque si la superficie cultivada en 2006 era de algo más de 2.000Ha, para el año 2010 ésta se había multiplicado por tres.

Mapa 59: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2008



Fuente: ODHDIH (2014)

En Nariño, la tendencia de fuerte presencia del Plan Colombia va a resultar si cabe, muy superior a la de los años anteriores, la cual, ya de por sí, es mucho mayor que en el resto de departamentos. Así, entre 2006 y 2010 se asperjan hasta 216.122Ha y se erradican manualmente cerca de otras 68.000Ha, aunque nuevamente, con las excepciones de 2008 y 2009, la presencia de la Fuerza Pública se encuentra muy por debajo del volumen de acciones guerrilleras. Una tesitura ésta, que dificulta sobremanera la capacidad de transformación real sobre las dinámicas locales de presencia guerrillera y su control territorial. Al igual que Cauca, y en otros escenarios, la aspersión con glifosato queda desdibujada pues si en 2006 la superficie de cultivos de coca era de 15.606Ha, en 2010 esa cifra quedaba inalterada, por un valor de 15.951Ha con presencia cocalera.

Por último, en Valle del Cauca se apreciaría una inobservancia a un problema creciente de los cultivos ilícitos pues, a falta de acciones de erradicación, el departamento termina por acumular un incremento en su superficie cultivada que asciende a 4.485Ha acumuladas entre 2006 y 2010, solo contrarrestadas por las 1.171Ha intervenidas en el año 2009.

11.4. La región atlántica durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

Si durante la primera etapa del mandato de Álvaro Uribe las prioridades regionales de disputa son el departamento de Antioquia, la región central, sobre todo Cundinamarca y Boyacá, y Santander en el noroccidente; en esta segunda etapa, la ampliación de la política de seguridad afecta positivamente, muy particularmente, tal y como se ha presentado, al eje cafetero, y también a la región Atlántica, donde se termina por consolidar como escenario controlado territorialmente por la Fuerza Pública.

Si bien en el departamento de Atlántico la presencia de las FARC brilla por su ausencia, en los años del segundo mandato de la PSD se va a identificar hasta qué punto la región costeña se convierte en prioridad, en cuanto a hacer desaparecer a esta guerrilla de este enclave. Tanto lo anterior que, prácticamente, a finales de 2010, las FARC habrán perdido la mayoría de su dominio militar y territorial, y el Bloque Caribe habrá quedado profundamente debilitado (Granada, Restrepo y Vargas, 2009).

Desde 2008, por ejemplo, ya no se recogerá presencia de las FARC en Magdalena, toda vez que entre 2006 y 2008 se concentran hasta 66 combates por iniciativa de la Fuerza Pública; su mayoría, destinados a reducir al Frente 19, del Bloque Norte, presente en el departamento. Tampoco Cesar escapa a esta tendencia de superación y disputa directa contra la guerrilla pues, sobre todo, entre 2006 y 2007 se llegan a concentrar hasta 83 combates por iniciativa militar que relegan al relevante Frente 41, del Bloque Norte. De hecho, tal es el repliegue de las FARC en este departamento, que queda al borde de la desaparición, como evidencia la ausencia de activismo armado alguno, entre los años 2007 y 2010.

En La Guajira, las acciones militares se van a concentrar entre 2006 y 2007, cuando se asciende a números nunca antes recogidos en el departamento. La Fuerza Armada colombiana protagoniza, en su conjunto, 117 acciones militares por apenas 17 acciones de

las FARC, de las cuales, además, 16 de ellas se concentran en 2006. Así, el Frente 59, el más activo en el departamento, va a quedar fuertemente afectado, registrando menos de 5 acciones anuales, y que son ampliamente superadas por el volumen de operativos militares a lo largo de toda la segunda presidencia de Uribe. No obstante, y como se verá, la tendencia de activismo guerrillero, contra pronóstico, cambiará en los años 2011 y 2012.

Para el caso de Córdoba la intensidad militar, de desgaste y consolidación de control territorial, básicamente sobre el Frente 18 de las FARC, se va a dar durante toda la segunda legislatura uribista, cuando se promedian cerca de medio centenar de combates militares por apenas dos o tres acciones armadas, dispersas, de parte de las FARC. Así, si entre 2006 y 2010 se cuentan un total de 229 contactos armados por iniciativa del Ejército, las acciones de las FARC apenas llegan a 13 en estos cinco años.

Incluso el departamento en el que esta guerrilla fue más fuertes, como es Bolívar y Sucre, va a experimentar un repliegue territorial y armado sin precedentes. Ello, porque el Estado colombiano va a centrar sus fuerzas en ganar presencia tanto en los Montes de María como en el sur de Bolívar, ambos, enclaves con un tradicional arraigo guerrillero, de los Frentes 35 y 37, relegados al ostracismo, con especial notoriedad, entre 2008 y 2010, cuando sus acciones guerrilleras se reducen a 6 - la cifra más baja de toda la década-, y con un contingente de operativos militares que en estos tres años se eleva a 67.

En lo que tiene que ver con la región Atlántica para los intereses del ELN, de una manera mucho más plausible, se constata un importante retroceso en cuanto a sus niveles de activismo armado. Partiendo de que en Atlántico y en Córdoba no se registra ni presencia de la guerrilla ni de operativos militares contra ella, la práctica expulsión del resto de departamentos, para el año 2010, es un hecho confirmado.

Así, en La Guajira, entre 2006 y 2010 no se recogen acciones del ELN si bien se cuentan 31 operativos militares, todos entre 2006 y 2008. Similar tendencia acontece en Sucre, cuando en 2006 se registran las últimas 5 acciones armadas por iniciativa de la Fuerza Pública de toda la década, en un escenario de fondo en el que no volverá a darse presencia activa del ELN.

En el caso de Magdalena, los últimos 17 combates por iniciativa del Ejército contra el ELN se van a dar, también, entre 2006 y 2007, sin réplica o acción armada alguna de parte de la guerrilla, y en la última constatación del ELN en el departamento.

Por último, en Bolívar, su consabido departamento de mayor arraigo, se van a contabilizar hasta 84 combates por iniciativa de la Fuerza Pública, entre 2006 y 2010, en una tendencia de intensificación, principalmente en el sur del departamento, y que relega a mínimos históricos el activismo de una guerrilla que, en el mejor de los casos, contabiliza dos acciones armadas por año.

Igual, en Cesar, se van a dar en este mismo período de tiempo, hasta 92 combates por iniciativa militar sin que se registre acción armada unilateral alguna de parte de un ELN obligado a su reubicación fuera del departamento, sobre todo, con miras hacia Norte de Santander y, en cualquier caso, fruto de la fuerte disparidad de fuerzas y un creciente control militar y territorial consolidado con el paso de los años.

Del lado del Plan Colombia, para el período 2006-2010, se evidencia, como en la etapa anterior, una completa ausencia de cultivos ilícitos en Atlántico, Cesar, Sucre, y casi irrelevante en La Guajira (729Ha) y Magdalena (1.230), con niveles mucho más reducidos en el cultivo ilícito que en la etapa anterior, y que directamente no demandan la presencia de operativos de aspersión aérea. Esto, porque terminan por concentrarse, únicamente, en dos departamentos de la costa Caribe como son Córdoba y Bolívar, nuevamente³⁴⁷.

De hecho, entre 2006 y 2010, la prioridad de intervención para el Plan Colombia va a ser Córdoba, que acumula un total de 16.696Ha asperjadas, y otras casi 16.500Ha erradicadas manualmente, especialmente focalizadas entre 2006 y 2008, frente a un volumen de cultivos ilícitos por valor de 11.786Ha, en unos niveles récord en la historia del departamento. Niveles que justifican este mayor volumen de acciones de aspersión, igualmente acompañadas, de un mayor volumen de operativos militares.

También, en Bolívar se da una coyuntura de continuidad respecto de los años anteriores. Se concentra una tendencia expansiva de la superficie cultivada, que asciende a 22.531Ha, frente a una superficie asperjada de 25.053Ha y casi otras 9.000Ha erradicadas manualmente, en unos niveles, igualmente, muy superiores a los de la etapa 2001-2005. Al igual que entonces, se dan también de mayores niveles de activismo militar a fin de reducir al máximo el nivel de presencia guerrillera en el departamento, siempre, en torno al sur de Bolívar y los Montes de María. No obstante, como excepción, en esta ocasión tampoco se termina por reducir la superficie cultivada pues, de acuerdo a las cifras oficiales, si en 2006 ésta era de 2.382Ha, en 2010 la misma había ascendido a 3.324Ha.

11.5. La región amazónica de interior durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

Durante la primera etapa de la PSD, recuérdese, la iniciativa de disputa militar y territorial de la Fuerza Pública se va a condensar en Meta y Caquetá, mientras que en Putumayo, precisamente, sucede lo contrario a tenor del recrudecimiento de la violencia de las FARC, especialmente, a partir de los Frentes 48, 63 y 32, muy activos en el oriente del departamento; departamento, a su vez, desprovisto de presencia significativa alguna de ELN.

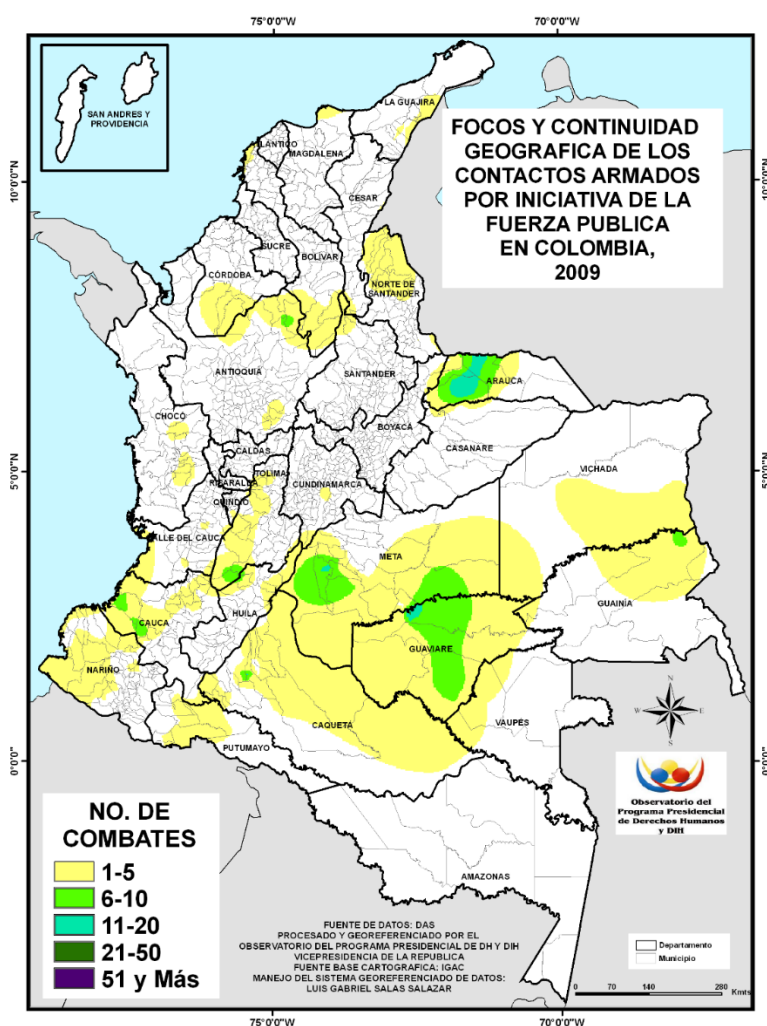
Así, durante el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, se va a dar plena continuidad a una lógica que tiene como prioridad, a la vez que consolidar militar y territorialmente el eje cafetero y la región atlántica, donde la PSD va a resultar exitosa, obtener un repliegue

³⁴⁷ El volumen de acciones de erradicación manual afectan, entre 2006 y 2010, a 2.865Ha en Magdalena y 1.212Ha en La Guajira, UNODC (2014).

territorial de las FARC en el corredor amazónico del interior, especial y nuevamente, en Meta y Caquetá.

En el caso de Caquetá, entre 2006 y 2010 se van a computar hasta 703 combates armados por iniciativa de la Fuerza Pública – lo que representa el máximo histórico en el departamento, por una nada desdeñable cifra de 232 acciones armadas protagonizadas por las FARC. Sin embargo, y a pesar del recrudecimiento de la presión militar sobre esta guerrilla, ni mucho menos ello va a servir para derrotar al poderoso Bloque Sur, ubicado en el departamento en forma de los Frentes 14 y 15.

Mapa 60: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2009



Fuente: ODHDIH (2014)

Con base en lo anterior, el centro y sur del departamento van a concentrar buena parte de los intentos del Estado colombiano por reducir a la guerrilla, y lo cual, entre 2007 y 2008, conduce a indicios evidentes de repliegue al que se ven obligadas las FARC, cuando deja apenas 15 acciones al año, en los niveles más bajos de toda la década. Empero, por las particularidades locales que presenta un enclave de alto arraigo guerrillero y una profunda condición selvática, nuevamente, desde 2009, las FARC recrudecen su presión armada, al acumular hasta 139 acciones armadas en solo dos años, lo cual pone de manifiesto su resistencia a abandonar este departamento. En todo caso Caquetá se trata de un enclave que por su simbolismo, deviene como nuclear para entender la posición de la guerrilla dentro del contexto regional que presenta el conflicto.

Más evidente y revelador va a ser el caso de Meta, donde la intensidad de los combates por iniciativa del Ejército van a ser incluso superiores a los de Caquetá, muy presumiblemente, bajo el intento de romper el inicio del corredor estratégico que llega hasta el departamento fronterizo con Ecuador, de Putumayo. Así, Meta se va a erigir, de largo, como el departamento con más presencia militar de todo el segundo mandato de Uribe, especialmente, con la intención de reducir a los Frentes 31, 39, 26, 40, 27, 43, 44, 7 y 1, dominantes en el mismo e integrantes en el poderoso Bloque Oriental.

A modo de cifras, entre 2006 y 2010 se van a acumular hasta 1.395 combates por iniciativa militar que conducen a las FARC a que, por ejemplo, en 2008 apenas protagonicen 8 acciones, en un repliegue sin precedentes. No obstante, y a pesar de este impacto de la PSD en el departamento, como sucediera en Caquetá, las FARC no van a desaparecer y nuevamente, entre 2009 y 2010 evidencian un rearme que se traduce en 118 acciones armadas, y que significa un número de acciones en el promedio de violencia y disputa acontecida durante la primera etapa de mandato de Álvaro Uribe.

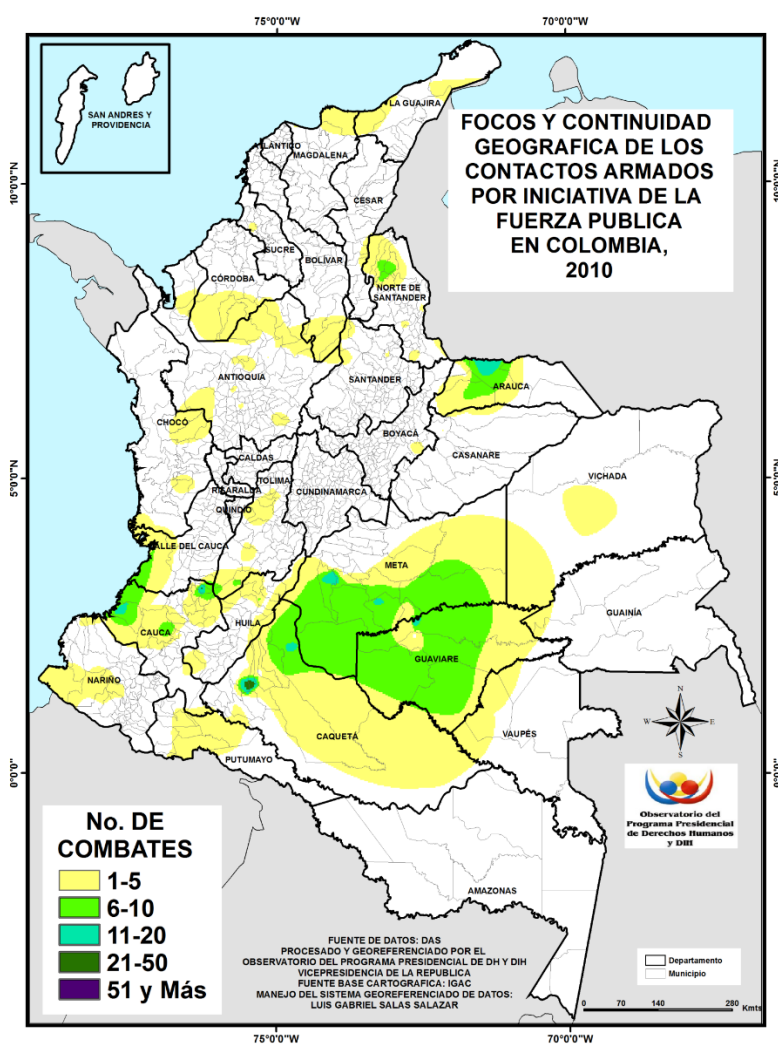
De la misma manera, como en los años anteriores, en Putumayo también se va a buscar consolidar territorialmente el departamento si bien, salvo en 2007 y 2008, la correlación de fuerzas y los niveles de acciones por uno y otro lado van a ser muy parejos. Incluso, a diferencia de los anteriores casos, se evidencia un fortalecimiento de las FARC que tiene lugar a partir de 2009 y que, hasta la actualidad, va a llevar consigo una mayor presencia armada de las FARC, por el activismo de los Frentes 32, 63 y 48, del Bloque Sur. Así, esta guerrilla, en sus niveles de activismo armado, va a registrar un número manifiesta y sistemáticamente superior al de operativos provenientes del Ejército, lo cual invita a pensar en la falta de resultados de la PSD sobre esta región en el período que transcurre entre 2006 y 2010.

Del lado de Guaviare, el volumen de aspersiones aéreas va a mantenerse sobre niveles más que notables, como muestran las 68.942Ha asperjadas y algo más de 5.000Ha erradicadas manualmente, y sobre las que se añade, una intensificación contra la guerrilla en la que el volumen de operativos militares se septuplica respecto de la media anual del departamento. Así, solo entre 2008 y 2010, se acumulan un total de 140 operativos militares que

contrastarían con apenas 31 acciones guerrilleras que, en todo caso, responde a un volumen estable e inalterado en lo que a las cifras de las FARC en este departamento se refieren.

Así, en lo que tiene que ver con el Plan Colombia, Putumayo, a pesar de ser foco de un gran volumen de aspersiones, tal y como evidencian las 80.366Ha asperjadas y casi otras 70.000Ha erradicadas manualmente en la región, se mantiene uno de los niveles en cuanto a superficie cultivada de coca más elevados del país. De hecho, en 2006 y 2010 se repunta sustancialmente estos cultivos, al acumularse hasta casi 50.000Ha, con unos niveles de producción anuales estables cuando no crecientes, y que se acompañan por un importante decrecimiento en la presión de la fuerza colombiana, sobre todo, a partir de 2008, cuando el activismo guerrillero pasa a superar con amplitud el volumen de operativos derivados por iniciativa de la Fuerza Pública.

Mapa 61: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2010



Fuente: ODHDIH (2014)

En Meta, las aspersiones se intensifican, en consonancia con las acciones y operativos por iniciativa militar con una intensidad tal que desde 2008, empieza a hacer visible la reducción en cuanto a la superficie cultivada. De hecho, entre 2006 y 2010 se asperjan 63.080Ha y otras 22.986Ha son erradicadas manualmente, esto es, más del doble que en la etapa anterior de la PSD. El resultado de ello se encuentra en que si en 2006 la superficie cultivada de coca en Meta era de 11.063Ha, en 2010 apenas superaba las 3.000Ha.

En cuanto a Caquetá, y si bien es cierto que en los años anteriores se reduce la superficie cultivada por debajo de las 5.000Ha, aun cuando se intensifican, si cabe más, los combates por acción de la Fuerza Pública, el volumen de aspersiones se mantiene en notables condiciones – se asperjan 44.434Ha y otras 9.500Ha erradicadas manualmente-, aun cuando la superficie cultivada apenas se reduce en 1.000Ha y, lo más grave, con tendencias de crecimiento en los siguientes años, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Por último, en el caso de Putumayo, donde la presencia del Estado resulta más endeble, empero, sí que se encontrarían mejores resultados en cuanto a la reducción de cultivos, en la medida en que en apenas cuatro años se pasa de más de 12.000Ha cultivadas a una superficie en el año 2010, de 4.785Ha.

11.6. La región amazónica fronteriza durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

Diferente suerte, dentro de la región amazónica colombiana, va a experimentar el corredor fronterizo con Venezuela que, Vichada, Guainía y Vaupés principalmente, representa de cara a los intereses de las FARC, y donde no se atisba arraigo alguno del ELN. Ello, porque los dos frentes de las FARC presentes en esta región, el Frente 16, operativo en Vichada y Guainía, y el Frente 1, en Vaupés, van a desaparecer de estos departamentos durante el transcurso de la segunda etapa de la PSD.

En el caso de Vaupés, porque el Frente 1 se va a concentrar mucho más en el apoyo sobre Caquetá, lo cual, unido a una concentración de esfuerzos por fumigar y reducir los cultivos en el departamento, van a invitar a entender la posición territorial en el departamento como poco rentable en estos términos³⁴⁸. Asimismo, hay que recordar que Amazonas nunca fue un escenario de disputa y persistencia de las FARC, y a ello hay que añadir que la Fuerza Pública colombiana va a concentrar hasta 29 ataques entre 2006 y 2009, los cuales van a reducir al máximo, y hasta la actualidad, cualquier presencia de la guerrilla.

Principalmente, los esfuerzos de la política de seguridad se van a concentrar sobre Guainía y Vichada. En el caso de Guainía, donde ya de por sí la violencia de la guerrilla nunca fue tampoco especialmente notoria, se van a contabilizar hasta 54 combates por iniciativa de la Fuerza Pública, entre los años 2007 y 2009, que van a contribuir a desestructurar la presencia

³⁴⁸ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-973940> Consultado el 2 de agosto de 2015.

del Frente 16, perteneciente al Bloque Oriental³⁴⁹. De igual manera, este mismo frente, en Vichada, va a ser objeto de una especial atención por parte del Ejército, pues entre 2007 y 2010, en el departamento se van a contabilizar hasta 111 combates dirigidos contra el referido Frente 16, obligado a un profundo repliegue, como evidencia la única acción armada desarrollada en Guainía, y los 5 acciones transcurridas en Vichada, dentro de los años 2006 y 2010.

Del lado del Plan Colombia, y tal y como se señaló con anterioridad, no se aprecia una prioridad en la región, a tenor de que los cultivos de coca en Amazonas y Guainía son poco relevantes, al igual que en Vaupés, tras las aspersiones puntuales acumuladas entre 2001 y 2005. De esta manera, solo Vichada es prioridad en las aspersiones con glifosato del Plan Colombia. Una prioridad que contrasta con la irregularidad de las mismas en los años anteriores pero que, en este segundo mandato de la PSD, terminan por superar las 20.000Ha asperjadas (21.703Ha). Todo un record histórico que permite entender de qué modo, unido a las más de 13.000Ha erradicadas manualmente entre 2008 y 2010, y la reducción drástica en cuanto a la presencia de grupos armados, el departamento reduce su plantación cultivada, de casi 8.000Ha en 2005, a 2.743Ha en 2010.

11.7. La región occidental durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe

En última instancia, en la región occidental se van a mantener las dinámicas protagonizadas en el período anterior, de modo que Antioquia, junto con Cauca y con el eje Caquetá-Meta, va a seguir siendo un objetivo de consolidación territorial y victoria militar de valor fundamental. Entre 2006 y 2007, el departamento va a acumular hasta 752 combates por iniciativa de la Fuerza Pública por 92 acciones de las FARC. Durante estos dos primeros años, la acción militar va a afectar integralmente a todo el departamento si bien, a partir del año 2008, se va a ir concentrando la prioridad territorial sobre el norte y el suroccidente.

Asimismo, las FARC van a concentrar su presencia armada y territorial sobre la región de Urabá y el norte del departamento, especialmente a partir de 2010, donde nuevamente, sobre todo los Frentes 4, 18 y 5, integrantes del Bloque Noroccidental, reavivan su accionar armado. Ello, por protagonizar hasta 68 acciones y dejar entrever que, ni mucho menos, su repliegue estratégico en los años anteriores responde a su desaparición del departamento. Más bien, lo anterior respondería a una reubicación que se distancia de Medellín pero que parece mirar hacia el departamento de Chocó y hacia el occidente departamental.

En el caso de Chocó, tanto el nivel de combates de la Fuerza Pública como de acciones de las FARC se van a mantener en unos términos estables, similares a los años venideros, aunque bien es cierto que, muy posiblemente, por las transformes territoriales de la guerrilla en esta región, se va a ir consolidando una mayor presencia de las FARC. Una presencia que incluso, como se verá, para los años 2011 y 2012, termina por superar al conjunto de acciones

³⁴⁹ Un documento para entender la evolución que ha tenido el bloque Oriental de las FARC sería el reciente trabajo, del mes de marzo, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (2015).

protagonizadas por la iniciativa militar colombiana al coaligarse con el ELN y las Bacrim activas en el departamento (INDEPAZ, 2012).

En lo respectivo al ELN, en la región noroccidental se van a identificar dos tendencias muy diferentes respecto de los departamentos de Antioquia y Chocó. En cuanto al primero de los departamentos, se termina por consolidar el control territorial y militar del Estado colombiano sobre el ELN toda vez que, fundamentalmente entre 2006 y 2008, se producen hasta 153 combates por iniciativa militar - de los que 98 son en 2006.

El ELN va a quedar prácticamente desmantelado, especialmente sus reductos al norte de Antioquia, donde cobraban especial relevancia frentes como el “José Antonio Galán”, “Compañero Guillermo Tomás”, “Bernardo López Arroyabe”, “María Isabel Cano”, “Capitán Mauricio” y “Compañía Anorí”.

Sin embargo, en Chocó, ni mucho menos se van a encontrar estos niveles de presencia de la Fuerza Pública, de manera que el activismo del frente del ELN, a través del Frente “Resistencia Cimarrón”³⁵⁰, no va a encontrar una significativa superioridad en cuanto al número de iniciativas armadas. Aunque entre 2006 y 2007 hay una mayor capacidad de hostigamientos del lado de la fuerza colombiana, que acumula hasta 19 acciones de combate por apenas 4 de la guerrilla, la tendencia se va a ir paulatinamente equilibrando. Tanto, que entre 2008 y 2010 por los 20 combates por iniciativa del Estado se registran hasta 16 acciones armadas de la guerrilla. Acciones que incluso, irán en ascenso en los años siguientes, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

En cuanto al Plan Colombia, lo cierto es que Antioquia va a acumular un mayor nivel de aspersiones, en consonancia, igualmente, con el mayor nivel de operativos, descritos de parte de la Fuerza Pública. Entre 2006 y 2010 se terminan por asperjar un total de 67.415Ha, a lo que se añaden otras casi 40.000Ha erradicadas manualmente, aunque no terminan por tener un gran impacto a tenor de que si en 2006, el volumen de hectáreas cultivas era de 6.100, en 2010, se mantenía sobre 5.350Ha.

Peor parado saldría el departamento de Chocó, cuando además del menor volumen de operativos militares descrito, y del creciente activismo de las FARC, se experimenta una ausencia absoluta de acciones de fumigación³⁵¹. Ausencia que permite entender que el departamento, en cuatro años, triplique nuevamente, como en la etapa anterior, su volumen de cultivos ilícitos. Tanto, que supera las 3.000Ha cultivadas con coca, en lo que representa los mayores niveles de cultivos de la historia del departamento.

³⁵⁰ Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/5402-alto-baudo-entre-el-desplazamiento-forzado-y-la-ausencia-estatal> Consultado el 2 de agosto de 2015.

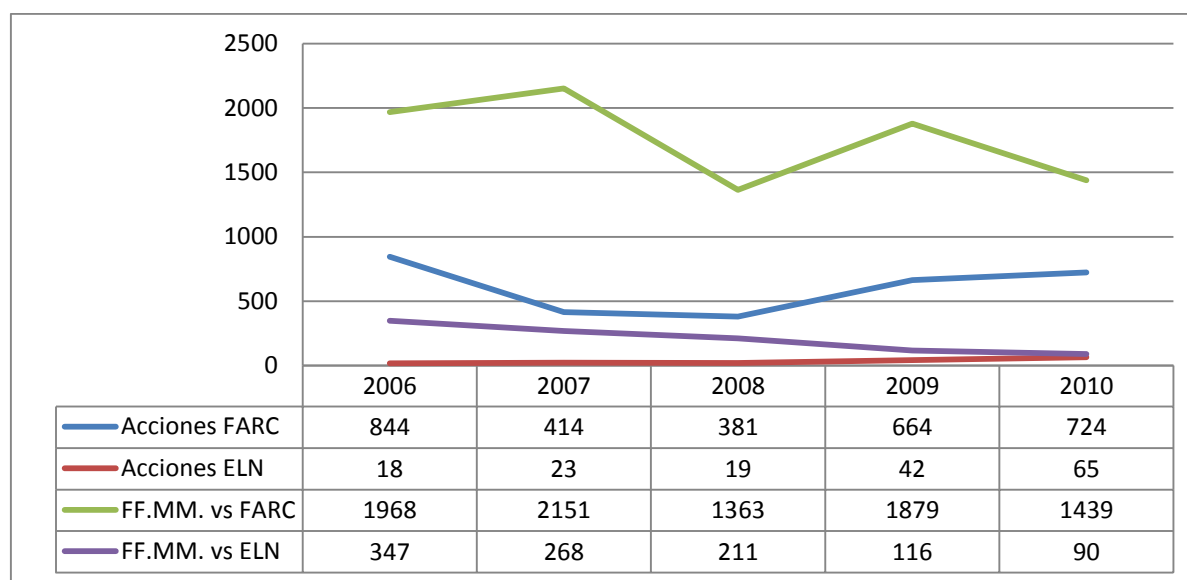
³⁵¹ Solo se encuentra un volumen significativo de acciones de erradicación manual, en 2009, cuando se computan hasta 1.673Ha intervenidas, UNODC (2014).

11.8. Conclusiones. Valoraciones al impacto de la PSD entre 2006 y 2010

De acuerdo con el gráfico siguiente, en lo que representa el segundo período de mandato presidencial de Álvaro Uribe, se identifican tres tendencias que permiten cuestionar el sobredimensionado impacto que, generalmente, se le ha dado a esta política de seguridad.

En primer lugar, se identifica, fruto del agotamiento de la intensificación de los operativos puestos en marcha por iniciativa de la Fuerza Pública, un ingente volumen de acciones militares que, sin embargo, poco a poco van decayendo, y entre 2006 y 2010 terminan por reducirse en casi una cuarta parte. Derivado de esto, una tendencia preocupante es que desde el año 2008 hay un nuevo incremento en la presión armada de las FARC, de manera que tras cinco años de intensos operativos militares, hacia 2010, las FARC terminan por evidenciar niveles de presión guerrillera similares a los del año 2006, lo cual invita, cuando menos, a cuestionar el real alcance de la PSD. En tercer lugar, quedaría una tendencia decreciente, notable, en el número de operativos de la Fuerza Pública contra el ELN, que en cinco años pasa de 347 operativos anuales, a 90 en el año 2010. Todo, mientras que desde 2008 se aprecia la misma dinámica de recomposición, aunque nada comparable con las FARC, en el ELN, el cual pasa de 18 operativos en 2006 a 65 en 2010.

Gráfico 17: Evolución del conflicto armado entre 2006 - 2010



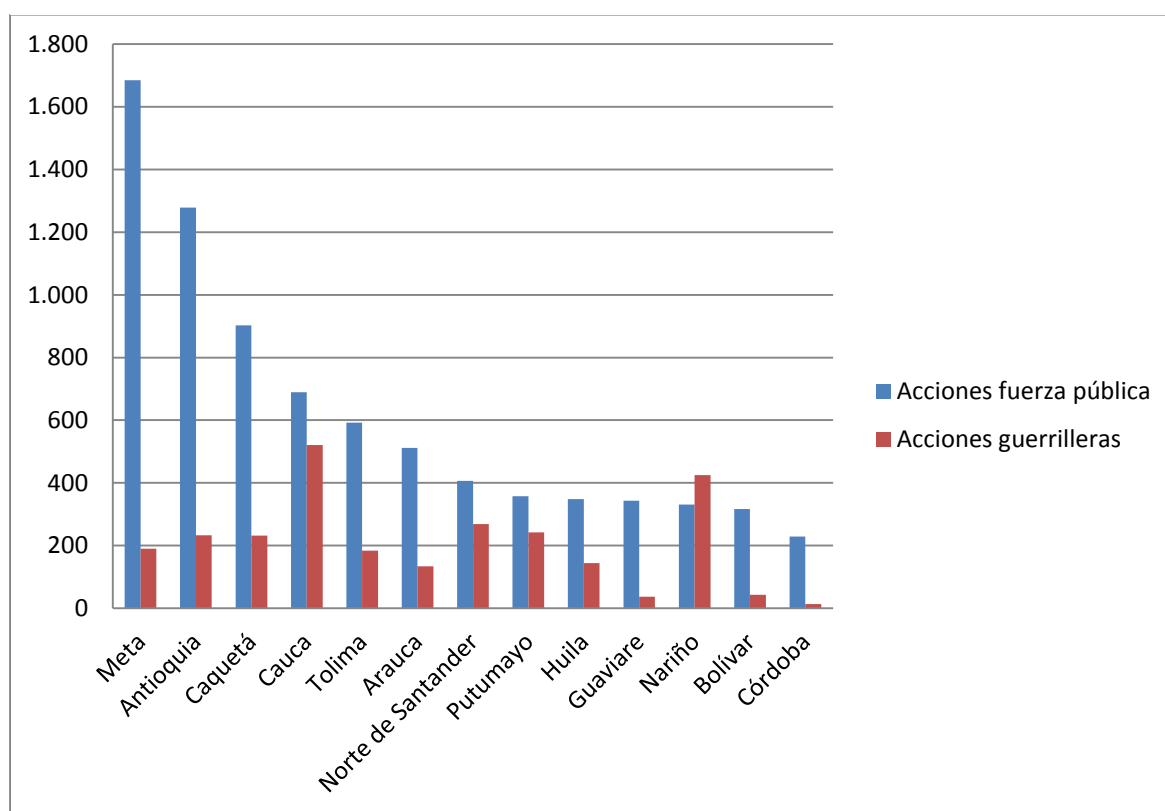
Fuente: Elaboración propia

Desde una aproximación regional, solo en Nariño, de manera agregada, entre 2006 y 2010, se mantiene la dinámica de mayor volumen de operativos guerrilleros respecto del número de combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Asimismo, si en el año 2006 solo Nariño y Valle del Cauca concentraban más acciones guerrilleras que acciones de la Fuerza Pública,

para el año 2010, esa tendencia, inspirada por la recomposición de las guerrillas y un aparente agotamiento de la PSD, termina por afectar a Nariño, Norte de Santander y Putumayo – los tres mayores productores de coca del país-, y en términos de relativa paridad, a los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y Casanare.

Todo lo anterior, con una precisión más, y es que respecto a los 13 departamentos con mayor presencia de la PSD, se aprecia una notable continuidad respecto de su primera etapa, de manera que diez departamentos siguen siendo prioritarios como enclaves de disputa con las guerrillas, y solo se aprecian cambios en tres casos. Es decir, Magdalena, Cesar y Santander, prioritarios durante la primera etapa de la PSD pero que pasan a ser sustituidos por Córdoba, Guaviare y Huila como escenarios de mayor presencia y disputa de parte de la Fuerza Militar.

Gráfico 18: Prioridades para la Fuerza Pública, 2006 - 2010



Fuente: Elaboración propia

Antioquia mantiene su carácter prioritario, también en la segunda etapa de PSD, por encima de las 1.300 acciones aunque, en todo caso, desbancada como primer escenario de disputa, el cual va a ser el departamento de Meta, con un volumen total de 1.600 operativos militares

y que, igualmente, se extiende sobre el corredor Caquetá-Putumayo, el suroccidente colombiano – Huila, Tolima y Cauca-, y el nororiente en Arauca y Norte de Santander. Es mucho menor ya la preminencia de la costa Atlántica, si bien Bolívar y Córdoba, especialmente en 2006, resultan los escenarios de presencia de la fuerza pública más destacados al efecto.

En la región nororiental, en Santander y Casanare, las FARC caen a registros mínimos de activismo guerrillero a la vez que el ELN desaparece prácticamente de los mismos. *Sensu contrario*, Norte de Santander y Arauca son prioridad para la Fuerza Pública si bien, en ambos casos, el ELN y las FARC consiguen aguantar los envites más duros de la PSD, entre 2006 y 2008, para después recomponerse y nuevamente intensificar su activismo guerrillero, particularmente en torno al Cataumbo, habida cuenta de las ventajas competitivas que ofrece para el activismo guerrillero.

En la región central las guerrillas, con apenas supervivencia de las FARC, terminan por recibir el espaldarazo definitivo. Tras mantener cierto activismo en Caldas, entre 2006 y 2007, desaparecen del departamento, como también lo hacen del eje cafetero. En Cundinamarca, con la excepción del Plan Renacer, en 2008, las FARC también pasan a ser relegadas a un escenario marginal, que solo subsiste, aunque en niveles de intensidad igualmente reducidos, en Boyacá.

En la región suroccidental, se identificaría una intensificación de combates en Huila y Tolima, a la vez que los tres departamentos del Pacífico registran niveles de acciones militares de los más altos del país, aunque insuficientes para mitigar el importante arraigo de las FARC, y que en el caso de Cauca y Nariño, terminan por albergar un redefinido activismo, aunque menor, también del ELN.

Como sucediera en los años anteriores, la costa Atlántica se consolida como un escenario en el que el ELN no tiene presencia activa, y en el caso de las FARC, se termina por perder Sucre y Bolívar de manera que su activismo armado, igualmente, termina por ser marginal.

Como la región suroccidental, el corredor Meta-Caquetá-Putumayo continuará siendo prioritario para actuar militarmente sobre unas FARC que, pese a la intensidad, van a mantener inalterados los niveles de disputa y resistencia, sobre todo desde el año 2009 en adelante. De los tres departamentos, Putumayo es el que evidencia más capacidad de combate de las FARC mientras que Meta y Caquetá, a pesar de mostrar menos niveles de activismo armado guerrillero, ponen de manifiesto, tras cinco años de PSD su fuerte arraigo. Arraigo y resistencia que, igual que sucede en el suroccidente y en el nororiente del país, coincide con los mayores niveles de presencia de cultivo ilícito.

Por último, en cuanto a Antioquia, sucedería algo parecido, tal y como evidenciaría el hecho de que si en 2006 se condensaban casi 500 operativos contra las FARC, básicamente, en 2010, esos operativos no llegan a 90, toda vez que las acciones guerrilleras, en ese lapso, pasan de 50 a 70, dejando entrever una notable capacidad de resistencia. Resistencia que, ya

en los siguientes años se nutrirá de una presencia creciente en Chocó de FARC y ELN, aprovechando el reducido número de operativos militares en el departamento.

Así, estas limitaciones son perfectamente recogidas por la exministra de Defensa, Ramírez, al identificar cinco debilidades que lastraron sobremanera el alcance real y el éxito de la PSD:

“Consciente de esto, a un año de entrar me reuní con todo el gabinete en Hato Grande. Les planteé cinco objetivos que no podíamos perder de vista. En primer lugar, hacía falta llevar la justicia a todo el territorio. Cerrar las vías de la corrupción y la impunidad. Esto, por ejemplo, nunca funcionó.

En segundo lugar hacía falta largo plazo. Visión de futuro y no cortoplacismo. El cortoplacismo nos llevaba a crear continuamente nuevos militares y policías a la vez que articulando programas e iniciativas de intervención simultáneas.

En tercer lugar hacía falta acompañar el proceso militar de dinámicas sociales, económicas, comerciales que tampoco fueron implementadas y que afectaron, en cuarto lugar, al relativo impacto de las fumigaciones, que no ofrecían posibilidades reales y alternativas.

Finalmente, estaría la *periferalización* que usted plantea, en mi opinión se debe a la falta de una perspectiva integral en la agenda y en el territorio. Es verdad que, no obstante, teníamos escenarios urgentes sobre los que intervenir pero no podemos obviar que jamás se hizo caso a una recomendación que yo solicité. Soberanía social de las fronteras, esa era la clave. Sin infraestructura siquiera, ¿cómo abordar la pobreza es la base estructural más importante de la violencia en Colombia? Nada de esto fue implementado por el presidente Uribe a quien le pudo un afán resultadista que terminó siendo negativo”. (EP 3, junio de 2015).

En unos términos similares estarían las apreciaciones al respecto de Angelino Garzón, Vicepresidente de la República en el primer mandato de Juan Manuel Santos:

“el Estado se ha preocupado más de fortalecer sus Fuerzas Militares so pretexto de combatir los grupos que de controlar y fortalecer las fronteras. Puede decirse que somos un país de espaldas a nuestras fronteras. Basta observar la frontera del Pacífico, con unos departamentos muy pobres.

Sin embargo, todo esto es resultado de un proceso consciente. El Estado ha facilitado esto. La corrupción desde el Estado como aliado de la violencia.

Respecto de la PSD, esa política fue resultado del presidente Uribe, con el fin de derrotar militarmente a la guerrilla. Pero fíjese usted, llevan en guerra desde 1964 y en todo ese tiempo ni Estado ni guerrilla han obtenido una victoria militar. Ambos comparte un fracaso mutuo y así se entiende el actual proceso de paz. Un diálogo entre perdedores”. (EP 2, junio de 2015).

12. El alcance regional de la política pública de seguridad de Juan Manuel Santos en el conflicto armado colombiano en 2011 y 2012

Aunque dos años no es tiempo suficiente para valorar una política de seguridad en el marco presentado por el conflicto armado colombiano, sí que resulta suficiente para identificar un cambio de tendencia, cuando menos, que debe ser tenido en cuenta.

En principio sí que resulta destacable una tendencia de estabilidad en lo que tiene que ver con la evolución de algunos indicadores macro de violencia e inseguridad como, por ejemplo, la tasa de homicidios violentos, que empeora en 1.3 puntos, o el número total de muertes violentas, que pasa de 15.459 en el año 2010 a 16.440 en 2012 (Ministerio de Defensa, 2015: 19 y ss.). El secuestro también empeora, de 282 secuestros en 2010 a 305 secuestros en 2012, y los casos de extorsión reportados se incrementan de 1.352 en el año 2012, a 2.316 en 2012.

Así, la tendencia de empeoramiento del orden público coincide con la descrita con profundidad, en capítulos pasados, de recomposición de FARC, ELN, y también de Bacrim, y se acompaña de una reducción sustancial respecto del número de operativos por iniciativa de la Fuerza Pública, que se reducen en un 50% con respecto de 2010 y que pasan a concentrarse sobre escenarios más específicos.

De hecho, por ejemplo, los actos de terrorismo pasan de 472 actos en 2010 a 894 en 2012 y las acciones hostiles, mayoritariamente contra la Fuerza Pública de parte de los grupos armados se incrementan de 131 en 2010 a 167 en 2012 (Revista Criminalidad, 2012: 34)

En lo que respectaría al volumen de superficie cultivada de 2010 a 2012 se produce una reducción considerable, al pasarse de 61.812Ha cultivadas con coca en 2010 a 47.790 en 2012³⁵² y las incautaciones pasaron de 157.1Tn a 187.6Tn en el transcurso de estos dos años.

Aun con todo, y a pesar de un freno en la evolución de las deserciones, entre 2011 y 2012 se desmovilizaron 2.667 guerrilleros, casi la misma cifra de los desmovilizados en 2010, y 8.679 guerrilleros fueron neutralizados, entre abatidos y capturados, lo cual supone unos niveles estables con la tendencia de años pasados, incluso al alza en lo que a capturados de Bacrim se refiere, puesto que solo entre 2011 y 2012 la cifra asciende a 8.396. Asimismo, los niveles

³⁵² Debe destacarse que según UNODC (2014: 17), en 2013 se rompió esta tendencia inalterada por más de quince años, al incrementarse la superficie cultivada en casi 500Ha, y registrando una superficie total de 48.189Ha – especialmente concentradas en departamentos fronterizos como Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Norte de Santander. Más preocupante son los datos para 2014, y que muestran un incremento de los cultivos de coca en más de 20.000Ha, nuevamente, y notablemente focalizados en Nariño (+31%), Putumayo (+78%), Norte de Santander (+9%), Caquetá (+51%), Cauca (+92%), Guaviare (+20%), Meta (+74%), Antioquia (+131%) y Chocó (+5%). Estos departamentos, son los más mencionados y estudiados en esta tesis doctoral, por la relación entre cultivo y violencia, a tenor de que ademas de concentrar la mayor presencia guerrillera, suman el 95% de la superficie de coca del país (UNODC, 2015: 18).

de efectivos Fuerza Pública se mantuvieron estables pues, entre Policía y Ejército si en 2010 sumaban un total de 446.236 integrantes, en 2012 esa cifra fue de 447.678³⁵³.

12.1. La región noroccidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos

Una vez que inicia la presidencia de Juan Manuel Santos, en la región nororiental, Arauca y Norte de Santander continúan siendo enclaves de disputa de control territorial, lo cual muestra la escasa capacidad resolutive que durante los ocho años anteriores supuso la PSD.

Si bien entre 2011 y 2012 en Santander solo se recoge una acción de las FARC, en Barrancabermeja, y 3 operativos militares; en Casanare, se condensan 7 acciones de las FARC por 12 operativos del Ejército. Es decir, en ambos casos hay una continuidad en los niveles de bajo impacto de conflicto armado, de acuerdo a unas cifras estables y coherentes con las dinámicas llevadas a cabo durante la segunda etapa de la PSD.

Cuestión distinta sucedería en Arauca y Norte de Santander, cuando en 2011 y 2012, a diferencia de los departamentos descritos, acontece una dinámica de recrudecimiento y de importante intensificación del conflicto armado. Del lado de Arauca, las FARC agudizan su tendencia creciente de activismo, pues en 2008, en los años de repliegue, apenas se acumularon 13 acciones, ya en 2010 esa cifra se elevaba a 37 y en los años 2011 y 2012, el volumen de acciones sigue creciendo, a 49 y 57 actos guerrilleros respectivamente. Lo más preocupante es que esta circunstancia, contrastaría con un paulatino abandono de la seguridad y el orden público, pues aun siendo una prioridad estratégica, en lo que tiene que ver con confrontación directa sobre las FARC, si la fuerza colombiana protagonizaba 154 operativos en 2009, en 2011 y 2012 esa cifra decae hasta 63, en ambos años. Dicho de otro modo, tras una intensificación de casi 500 operativos militares en el departamento, la correlación de fuerzas del orden público parece no haber sido resuelta y, nuevamente, parece quedar en entredicho.

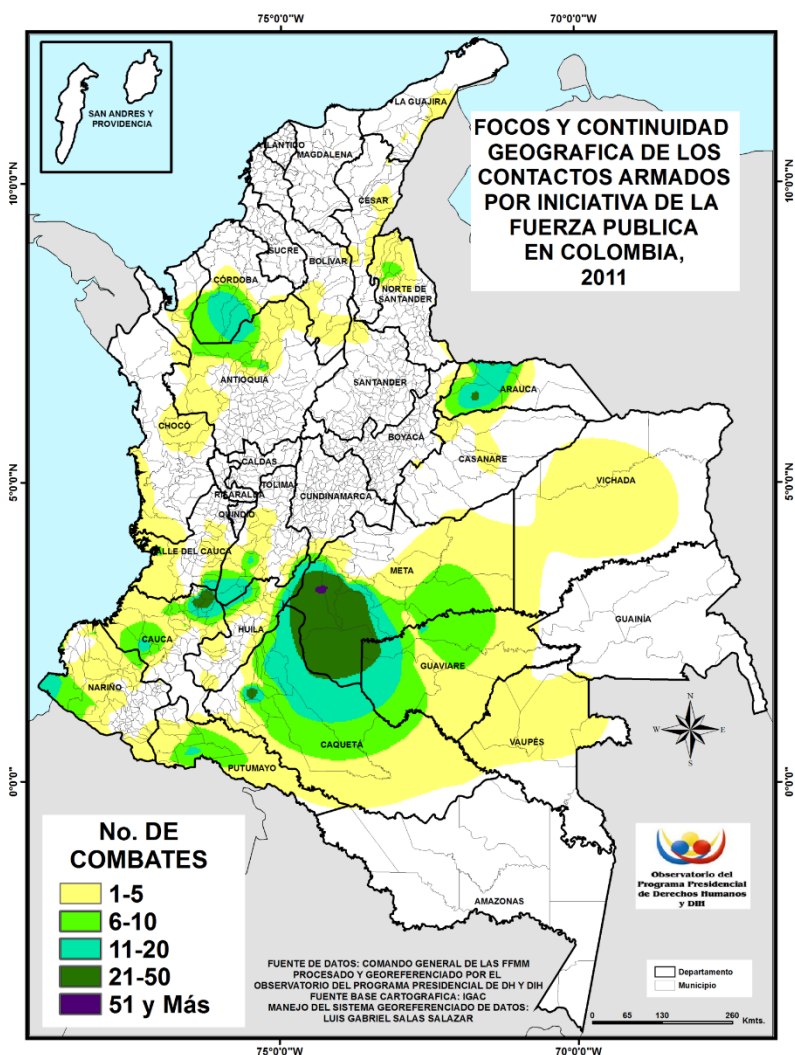
En Norte de Santander sucedería una tesitura similar, incluso, si cabe más preocupante en términos de desorden público. Esto, porque igualmente se recrudece la tendencia que había iniciado en los últimos años de PSD, con Álvaro Uribe. Las FARC, entre 2011 y 2012 protagonizan 108 acciones guerrilleras, tres cuartas partes, solo en 2012, lo que supone un repunte de la violencia que implica el segundo registro de mayor activismo guerrillero de los últimos quince años. Un activismo, claramente favorecido por la reducción sustancial en cuanto a presión de la Fuerza Pública, que acumula en estos dos años 37 operativos, es decir, la cifra más baja de los últimos diez años.

En lo que afecta al ELN, Santander (1) y Casanare (0) son escenarios de ausencia en cuanto a activismo guerrillero y, por extensión, de escenarios de confrontación militar. Tal y como sucedería con las FARC, en Norte de Santander se mantienen niveles estables (20), mientras

³⁵³ En 2010 el desglose de fuerza pública era de 160.848 miembros de la Policía Nacional y 285.388 del Ejército, mientras que en 2012 la proporción era de 165.906 miembros de la Policía Nacional y 281.772 integrantes del Ejército (Ministerio de Defensa Nacional, 2015: 69).

que en Arauca las acciones guerrilleras se disparan a 54, concentradas, principalmente, en torno al Frente “Domingo Laín”, y de acuerdo a un volumen de activismo armado que no se había encontrado en el departamento hasta una década atrás. Del lado del Ejército, igual que con las FARC, se identifica un notable debilitamiento en el número de operativos por iniciativa de la fuerza colombiana, con 14 y 25 operativos en Norte de Santander y Arauca, respectivamente, siendo en ambos casos superados por los índices de presión armada de la guerrilla.

Mapa 62: Presencia de operativos de la Fuerza Pública en 2011



Fuente: ODHDIH (2014)

En cuanto al tema de los cultivos ilícitos, Arauca, Casanare y Santander son marginales habida cuenta de que su superficie cultivada o no existe, o termina siendo irrelevante, lo cual contrastaría con la realidad particular de Norte de Santander y, concretamente, el Catatumbo. Esto termina siendo preocupante porque en apenas tres años, una superficie que con motivo de las aspersiones de años anteriores resultó notablemente diezmada parece haberse recompuesto. Si en 2010 computaban 1.889Ha con cultivos de coca, en 2012 se eleva por encima de las 4.500Ha, en buena medida, por la ausencia de acciones de erradicación tanto aérea como manual y que cuestiona la propia política de seguridad en el departamento³⁵⁴.

12.2. La región central durante la presidencia de Juan Manuel Santos
En cuanto a la región central, se dan dinámicas de continuidad en cuanto a estabilidad y orden público. En Cundinamarca se dan 3 acciones menores de las FARC, que a su vez son objeto de 5 operativos militares y que, en todo caso, plantean una situación de marginalidad en lo que a importancia o relevancia del activismo guerrillero se refiere. En Boyacá se recogen 2 acciones guerrilleras, ambas en 2011, contrarrestadas por 3 operativos militares, mientras que en el eje cafetero, ni Caldas ni Quindío registran actividad alguna de las FARC. El único escenario en el que se apreciaría un empeoramiento del orden público, aunque nada relevante o significativo, sería en Risaralda, cuando en 2012 se cuenta hasta 4 acciones, acompañadas de 3 operativos militares, en lo que sería la situación de mayor confrontación armada en el departamento desde el año 2006.

En lo que tiene que ver con el ELN, no hay presencia alguna ni en Cundinamarca, Caldas, ni en Quindío ni en Risaralda, de igual manera que la presencia termina siendo, como en años anteriores, marginal en Boyacá (4), las cuales se acompañan de 3 operativos militares, todos en el año 2012.

La estabilidad y la reducida violencia derivada del conflicto armado, fruto del impacto de las políticas de seguridad acumuladas en años anteriores se acompaña de la falta de presencia de cultivos y, por extensión, de aspersiones y acciones de erradicación.

12.3. La región suroccidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos
En primer lugar, en Nariño se aprecia una continuidad respecto del final de la PSD. Una continuidad en la que el activismo armado de las FARC, con un volumen ingente acciones, venía superando ampliamente al dispositivo de operativos militares. De hecho, si entre 2011 y 2012 se acumulan 150 acciones guerrilleras, solo se contabilizan 30 operativos al año de parte de la Fuerza Pública. Dicho de otro modo, unos niveles constantes de presencia y operativos que ya venían dándose en el departamento, sin transformaciones sustanciales, desde el año 2008.

En Cauca, igual, la intensidad guerrillera de las FARC se mantiene constante en sus cifras, con 305 acciones armadas, y en lógica con el repunte iniciado desde 2008. Igualmente, y

³⁵⁴ Entre 2011 y 2012 en Norte de Santander se registran 1.967Ha con erradicación manual y 0 Ha por aspersión. En Santander, serían 1.218Ha erradicadas manualmente y 92Ha por aspersión, UNODC (2014).

aunque en Cauca el nivel de presencia de la Fuerza Pública es mucho mayor que en Nariño, con 231 operativos militares, del mismo modo se aprecia una tendencia decreciente, por ejemplo, alejada de los 337 combates por iniciativa militar acontecidos entre 2009 y 2010.

De los departamentos de la ribera del Pacífico, el departamento de Valle del Cauca sería el de mayor estabilidad, al concurrir niveles estables de activismo guerrillero de las FARC, en torno a las 25-30 acciones al año, por un nivel similar del lado de la Fuerza Pública. Un nivel notablemente incrementado en 2012, cuando se llegan a los 51 operativos, y que termina siendo el más alto desde el año 2007

En Tolima se dan dinámicas de continuismo en lo que afectaría a la violencia directa de las FARC, con 30 acciones guerrilleras al año, en lo que vendría siendo una constante inalterada desde casi 2007 mientras que, por ejemplo, sí que se aprecia una reducción en el número de operativos militares. Tanto, que si en 2009 y 2010 se acumularon hasta 158 acciones de la Fuerza Pública, entre 2011 y 2012 esa cifra decae hasta las 83 acciones.

Finalmente, en Huila sucedería un calco de la coyuntura en Tolima, es decir, continuismo en los volúmenes de activismo de las FARC, en la treintena de acciones al año, y algo por encima los operativos militares, en torno al medio centenar, si bien, insuficientes en lo que respecta a la transformación de las dinámicas del conflicto armado en el departamento.

De acuerdo con el ELN, su ausencia en Valle del Cauca, Tolima y Huila, la presencia de acciones del ELN se reduce a Cauca y Nariño. En Cauca se acumulan 11 acciones guerrilleras, que evidencian un protagonismo emergente en el departamento, ya iniciado en 2008, y que supera el número de 8 acciones militares llevadas a cabo; mientras que en Nariño, las 18 acciones guerrilleras superan los 16 operativos militares. Cifras que en ambos casos pondrían de manifiesto la recomposición del ELN, y su no afectación por la política pública de seguridad en el Pacífico colombiano.

En cuanto al Plan Colombia y la política de aspersiones, si Huila y Tolima carecen de este tipo de acciones por su ausencia de cultivos, en Cauca, Nariño y Valle se encuentran dinámicas particulares que ameritan ser resaltadas. En Valle del Cauca, por ejemplo, se van a concentrar casi 1.700Ha asperjadas y otras 1.160Ha erradicadas manualmente si bien la presencia de hectáreas cultivadas con coca, en ningún caso termina por superar las 1.000Ha al año³⁵⁵. Todo lo contrario sucede en Nariño, donde se asperjan, entre 2011 y 2012 hasta 73.000Ha junto con otras 20.635Ha erradicadas manualmente y que, por primera vez, arrojan un saldo positivo, en lo que a cifras cultivadas se refiere, pues de 15.900Ha cultivadas en 2010, en 2012 la superficie decae a 10.733Ha. Sin embargo, por las propias tendencias

³⁵⁵ Concretamente, según las estimaciones de UNODC (2014) en Valle del Cauca, entre los años 2011 y 2012 se concentraron los mayores niveles de cultivo ilícito en el municipios de Buenaventura, con 842Ha cultivadas en 2011 y 422Ha en 2012, muy alejado de los registros de los otros municipios como Bolívar (66Ha), Calima (119Ha) y Dagua (14Ha).

oscilantes de los cultivos en Nariño, esto no quiere decir que exista una relación causal directa a tenor de que, por ejemplo, en 2011, las hectáreas cocaleras superaron las 17.000Ha. Finalmente, en Cauca, igual que en Nariño, es igualmente pronto para advertir afectaciones importantes sobre la reducción del cultivo ilícito, pues si se pasó de 5.900Ha en 2010 a 4.400Ha en 2012, en 2011 se superaron las 6.00Ha de manera que, por estas particularidades, se requieren de plazos temporales más largos a efectos de entender si, verdaderamente la tendencia ha sido de reducción en cuanto al volumen de cultivos ilícitos³⁵⁶.

12.4. *La región atlántica durante la presidencia de Juan Manuel Santos*

Las FARC rompiendo con la dinámica consolidada de la anterior presidencia, van a mejorar sustancialmente su presencia en la costa Atlántico de acuerdo a una posición de mucha mayor violencia unilateral que, sin embargo, no termina por traducirse en un mayor volumen de operativos de la Fuerza Pública.

Si bien es cierto es que en Sucre, Atlántico y Magdalena la violencia directa de las FARC, y por ende, las respuestas de militares brillan por su ausencia, no sucede lo mismo con el resto de departamentos. Por ejemplo, en La Guajira, por el nuevo activismo del Frente 59, se dispara la violencia unilateral de la guerrilla, al registrarse 17 acciones tanto en 2011 como en 2012, lo que supone los niveles de activismo más alto de los últimos 15 años, y ampliamente por encima de un volumen de operativos de 20 acciones militares.

Asimismo, en Bolívar, solo en el año 2012 se registraron hasta 7 acciones armadas de las FARC, por solo 4 acciones de la Fuerza Pública, pero que igual supone el mayor nivel de presencia de las FARC en el departamento de los últimos seis años.

En Cesar, tras cuatro años sin una sola acción armada, entre 2011 y 2012 se producen un total de 12 acciones guerrillera, frente a 10 operativos militares, y en Córdoba, con 16 acciones guerrilleras en estos dos años, se concentra el mayor registro de acciones de las FARC, toda vez que se contabilizan 23 acciones de la Fuerza Pública, esto es, tres veces menos que tres años atrás.

Tal vez, la despolitización de las nuevas bandas criminales, herederas del paramilitarismo, por su propia condición criminal y no anti-guerrillera, pueden hacer valer la hipótesis de alianzas en la ilegalidad que finalmente terminan por fructificar a tenor de que el enemigo común ya no es la guerrilla, como inicialmente pudieron entender AUC, sino el Estado en sí. No obstante, esta razón será abordada con posterioridad, a fin de poder entender las alianzas, en alguna ocasión mencionadas en esta tesis, entre las FARC, el ELN y las diferentes Bacrim a lo largo del territorio nacional.

Por su parte, la desaparición del ELN de la región Atlántica será un hecho consumado, traducido en la ausencia de acciones de la guerrilla en casi todos los departamentos y que

³⁵⁶ Entre 2011 y 2012 en Cauca se intervinieron con erradicación manual un total de 415Ha y por aspersión otras 23.431Ha, UNODC (2014).

justifica la ausencia de operativos militares. Solo en Bolívar se identifica 1 acción guerrillera y 2 acciones más en Cesar, poco significativas y apenas contrarrestadas con el mínimo necesario de esfuerzos dirigidos a efectos de preservar cierta presencia territorial de la Fuerza Pública sobre estos enclaves³⁵⁷.

En lo que afectaría al Plan Colombia, el incremento del desorden público en la región Atlántico contrastaría con la mayor intensificación de las acciones de erradicación forzosa. De esta manera, solo en Córdoba y Bolívar se asperjan con glifosato hasta 5.000Ha y 6.300Ha respectivamente, y que permiten observar un proceso de disminución paulatina que conduce a mínimos históricos en ambos departamentos³⁵⁸.

De hecho, si en Bolívar se registraban 3.324Ha de coca en 2010, en 2012 no se llega a las 2.000Ha y, a su vez, en Córdoba, si el volumen de cultivos en 2010 era de casi 4.000Ha, en 2012 apenas es de 1.040Ha.

12.5. *La región amazónica de interior durante la administración Santos*

En la región amazónica de interior, formada por Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, con exclusiva presencia de las FARC, se dan dos dinámicas distintas que, pese a todo, terminan por converger en el cuestionamiento mismo de la política de seguridad exclusivamente entendida en términos de beligerancia. Así, en Meta el nivel de intensidad decae sustancialmente, aunque no por ello supone negar su importancia prioritaria en la dinámica propia del conflicto. Si entre 2009 y 2010 el departamento termina por acumular hasta 836 operativos unilaterales de la Fuerza Pública, entre 2011 y 2012 esa cifra se reduce a 259, con un trasfondo de continuismo en lo que a activismo guerrillero se refiere, pues las FARC mantienen inalterado su volumen de medio centenar de acciones armadas por año.

Por su parte, en Caquetá, sucede algo parecido a Meta pero más significativo. Es decir, si entre 2009 y 2010 se condensaban 485 acciones de la Fuerza Pública, en 2011 y 2012 apenas se registran 160 acciones. Todo, con base a un activismo de las FARC que, como en Meta, se mantiene constante, con un nivel de acciones, igualmente, en torno al medio centenar.

Distinta tesitura presentaría Putumayo. Donde el activismo de las FARC vendría *in crescendo* para alcanzar niveles propios de 2003 y 2004, de mayor algidez bajo la PSD, al acumularse entre 2011 y 2012 por encima de las 120 acciones guerrilleras, y que contrastan con un número de operativos que apenas llega a 20, esto es, en el nivel más bajo de presencia activa de la Fuerza Pública en el departamento desde el año 1999.

Finalmente, Guaviare mantendría los menores niveles de activismo guerrillero, con 7 acciones de las FARC en 2011 y otras 15 en 2012, en todo caso, dentro del volumen normal de este tipo de acciones en los últimos años. Asimismo, los operativos militares decaen

³⁵⁷ Entre 2011 y 2012 las acciones del ELN concurren una acción en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y 2 acciones en Curumaní (Cesar). Del lado, de la fuerza pública se producen operativos de respuesta en Santa Rosa del Sur (2) si bien, ninguna en Curumaní, ODHDIH (2014).

³⁵⁸ Asimismo, se erradicaron manualmente 873Ha en Bolívar y 6.978Ha en Córdoba, UNODC (2014).

profundamente, a 16 en 2011 y 21 en 2012. Una cifra, por completo, alejada de los 145 que tuvieron lugar en 2009 o los 106 del año 2010.

En cuanto a las acciones antinarcóticos, especialmente de orden de aspersión aérea, Putumayo mantiene estables los niveles de aspersión (15.984Ha), al igual que Caquetá (18.400Ha), siendo Meta el departamento en el que sí se encuentran repercutidas este tipo de acciones, al reducirse en más de un 50% el total de superficie cultivada (5.697Ha)³⁵⁹. Sin embargo, a diferencia de otros enclaves, más que reducirse el cultivo, en los últimos dos años se habría incrementado en Caquetá, pasando de 2.578Ha en 2010 a 3.695Ha en 2012, y en Putumayo, al incrementarse de 4.785Ha en 2010 a 6.148Ha en 2012. Solo en Meta los términos de superficie cultivada se mantendrían estables, al reducirse apenas 300Ha, de 3.008Ha en 2010 a 2.699Ha en 2012, en estos dos años transcurridos toda vez que en Guaviare se reducen de casi 7.000Ha en 2011 a 3.851Ha en 2012, en buena medida, porque se mantiene el notable volumen de aspersiones, próximo a 20.000Ha, en continuidad con los años anteriores.

12.6. La región amazónica fronteriza durante la presidencia de Juan Manuel Santos

En Amazonas, Guainía y Vaupés se continuaría, como en los años anteriores, sin presencia de activismo guerrillero, toda vez que en Vichada se registraría una única acción. Este corredor, fuertemente reducido en lo que a violencia directa se trata, no obstante, concentraría 11 operativos de la Fuerza Pública contra las FARC en Vaupés, en términos estables con respecto a años pasados, y en Vichada con otros 9 operativos, no obstante, dentro de una cifra mucho menor, nada comparable a los 44 operativos puestos en marcha, por ejemplo, en 2008.

Puede que a tal efecto, haya tenido un factor explicativo en la desaparición de las FARC, la ausencia creciente de cultivos no ya en Guainía o Amazonas, donde siempre resultó minoritario, sino igualmente en Vaupés – con cultivos marginales desde 2006, o Vichada, donde en 2012 se consigue obtener los menores niveles de superficie cultivada (1.242Ha), muy lejos de las más de 7,000Ha cultivadas en 2007, y que concentraron acciones de aspersión por valor de 1.014Ha.

12.7. La región occidental durante la presidencia de Juan Manuel Santos

Finalmente, en la región occidental, en Antioquia nuevamente se dispara la violencia, dejando un escenario de preocupante incertidumbre, a tenor de que conviene recordar que, durante los dos mandatos presidenciales, fue un enclave prioritario, acumulando miles de combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Solo entre 2011 y 2012 se dan 176 acciones guerrilleras de manera que hay que retrotraerse a 2003 para encontrar niveles similares de violencia directa de las FARC. Esta cifra, por ejemplo, contrastaría con las 97 acciones

³⁵⁹ Por objeto de erradicación manual deben añadirse 1.610Ha en Caquetá, 3.645Ha en Guaviare, 1.780Ha en Meta y, finalmente, 13.573Ha en Putumayo, UNODC (2014).

acumuladas entre 2009 y 2010, si bien, ya respondían entonces a una tendencia creciente respecto de años anteriores.

Lo más preocupante al respecto es la notable reducción en el número de dispositivos de la Fuerza Pública pues si en 2009 y 2010 se contabilizaban hasta 238 operativos militares, entre 2011 y 2012 esa cifra decae a 126, evidenciando un claro cuestionamiento respecto del real impacto y efectividad de la política pública de seguridad.

Igualmente las FARC, en el departamento de Chocó, se intensifica el activismo armado, con 27 acciones entre 2011 y 2012, esto es, con niveles estables pero crecientes desde el año 2006. Estos, en buena medida, favorecidos porque en ningún transcurso de la década, los operativos militares contra las FARC en Chocó superaron las 30 acciones.

En lo que tiene que ver con el ELN, las acciones en Antioquia resultan marginales, de acuerdo a su casi absoluto repliegue, materializado desde 2004. De hecho, en 2011 se recoge una sola acción guerrillera y en 2012, 3 acciones más, en todo caso, objeto de hasta 7 operativos militares en el departamento³⁶⁰. Igualmente, en Chocó, de mayor importancia para el ELN, solo en 2012 se dan hasta 8 acciones guerrilleras, contrarrestadas por 15 operativos de la Fuerza Pública pero, en todo caso, en términos de continuidad con la dinámica de mayor activismo, sobre todo, desde el año 2008.

Por último, las aspersiones sobre Antioquia, en 2011 y 2012, ascienden a 16.818Ha, a lo que se suman otras 5.344Ha bajo erradicación manual, y que por primera vez en varios años, invitan a pensar en una consolidación de las dinámicas de reducción de la superficie cultivada. Una superficie que si en 2010 era de 5.350Ha, en 2012, por primera vez en 12 años presenta niveles de cultivo por debajo de las 3.000Ha (2.725Ha). De igual manera, en Chocó la tendencia ha sido bien distinta, pues si bien la erradicación manual ascendió a 1.100Ha y las aspersiones aéreas terminaron por afectar a 17.566Ha, lo cual evidencia un sentido prioritario dentro de la política antinarcóticos, lo cierto es que la superficie cultivada, aun con todo, se ha incrementado de 3.100Ha a 3.400Ha, y que si bien no es ni mucho menos sustancial, sí supone el volumen de superficie cultivada más alto de toda la década.

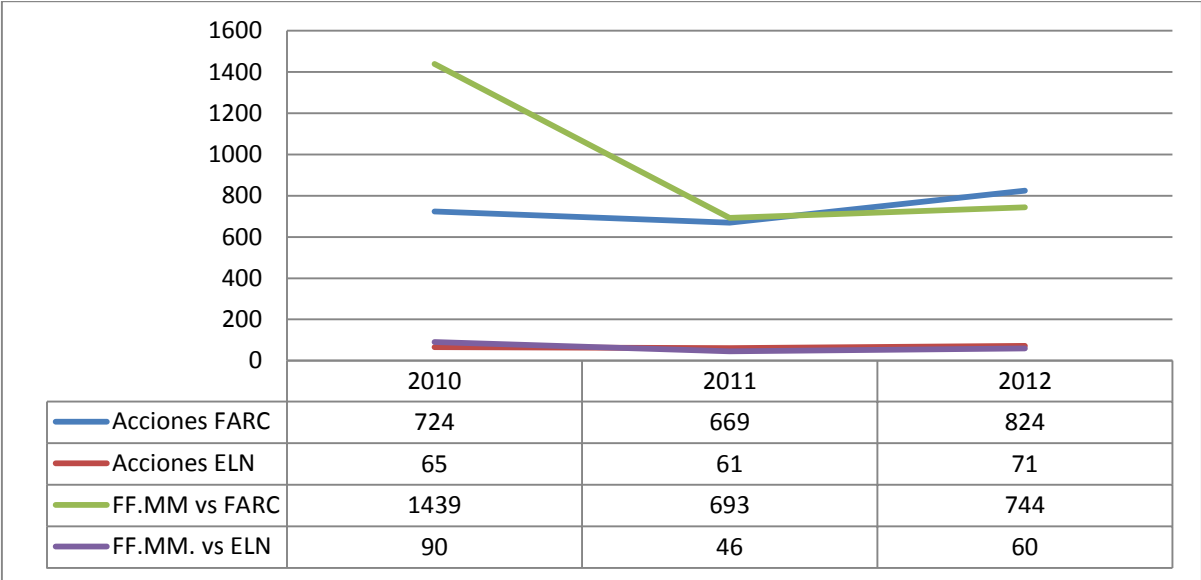
12.8. Conclusiones. Valoraciones al impacto de la política pública de seguridad de Juan Manuel Santos entre 2011 y 2012

Sobre la base del siguiente gráfico 19 se confirman parte de las tendencias descritas para el final de la segunda presidencia de Álvaro Uribe y continuadas, como se han señalado en este epígrafe, durante los inicios del gobierno de Santos. En primer lugar, se observaría una reducción muy sustancial en el número de acciones de la Fuerza Pública, de manera tal que si en 2010, el último año de presidencia Uribe, aún se mantenía por encima de las 1.400 acciones, en 2011 y 2012, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, esa cifra se reduce en un 50%, en ambos ejercicios. Asimismo, las acciones de las FARC mantienen la tendencia

³⁶⁰ Los operativos militares en el departamento contra el ELN se condensan en Cáceres (4), Amalfi (1), Segovia (1) y Tarazá (1), ODHDIH (2014).

de recomposición descrita, llegando a superar, tras muchos años, las 800 acciones guerrilleras anuales, toda vez que el ELN mantiene constantes sus niveles de activismo y decrecen los combates del Ejército contra esta guerrilla.

Gráfico 19: Evolución del conflicto armado entre 2011 y 2012



Fuente: Elaboración propia

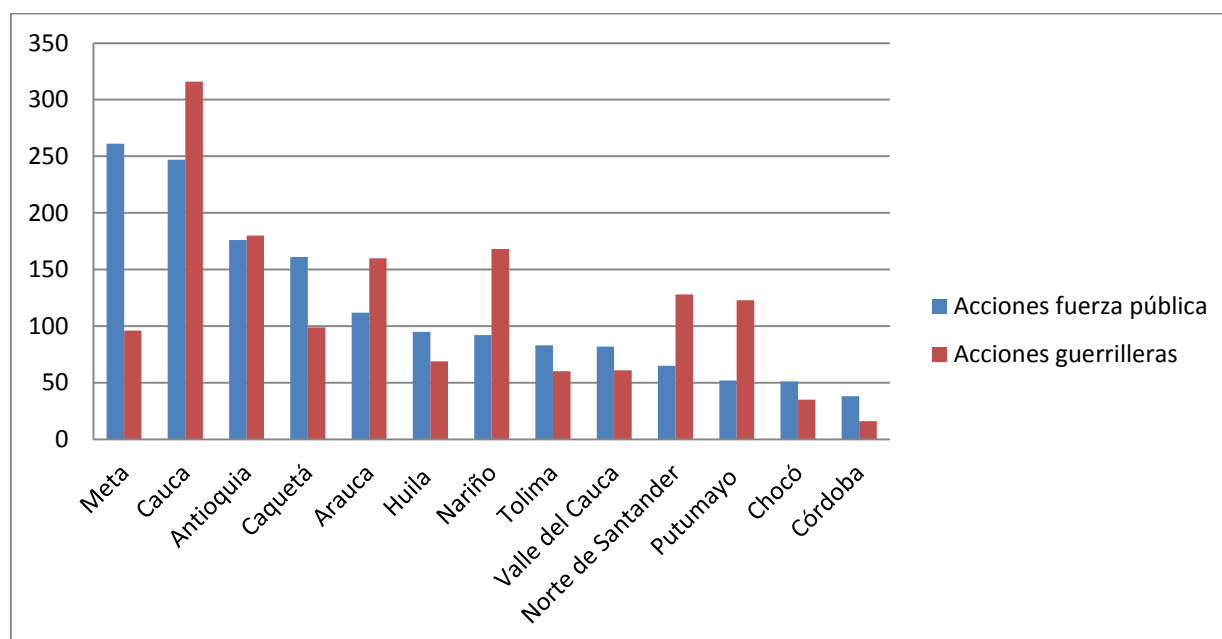
Aunque no cambian los enclaves de disputa con respecto a la PSD, es decir, Antioquia, el nororiente – Arauca y Norte de Santander- el suroccidente – Valle, Cauca, Nariño, Huila y Tolima, y el corredor Meta-Caquetá-Putumayo, quizá, más que nunca se hace evidente la tendencia creciente de *periferialización* en los enclaves de violencia derivada del conflicto armado colombiano.

Sea como fuere, la reducción de la intensidad en las acciones de la fuerza colombiana, unido a la tendencia creciente en el activismo, sobre todo, de las FARC, permite entender una nueva tesitura, en la que nuevamente se aprecian cifras similares entre el número de acciones guerrilleras anuales y el número de operativos de la Fuerza Pública. Una similitud cuantitativa que se focaliza en enclaves periféricos como el suroccidente y el nororiente, principalmente.

Lo anterior se entiende en la medida en que, si en 2010 solo tres departamentos – Norte de Santander, Nariño y Putumayo-, concentraban más acciones guerrilleras que operativos militares, en 2012, tras dos años y medio de presidencia de Juan Manuel Santos, esa tendencia termina por afectar, de manera visible, a Antioquia, Arauca, Cauca, La Guajira, Nariño, Norte

de Santander y Putumayo, esto es, cinco de siete departamentos con condición fronteriza, y a lo que se añadirían Cauca y Antioquia; los dos departamentos, junto con Meta, más intervenidos militarmente por Juan Manuel Santos. En definitiva, esta tesitura redundaría en los cuestionamientos respecto de la eficacia de este tipo de política de confrontación armada.

Gráfico 20: Prioridades para la Fuerza Pública, 2011 - 2012



Fuente: Elaboración propia

A grandes rasgos y a modo de conclusión respecto de lo expuesto, en la región nororiental, Norte de Santander y Arauca recrudecen, entre 2011 y 2012, de manera más que preocupante, su activismo guerrillero. Ello, por una nueva emergencia de las FARC y del ELN en la región, en la que nuevamente se superan ampliamente los operativos de la Fuerza Armada en la región.

En el centro – eje cafetero, Boyacá y Cundinamarca-, la presencia de las FARC es muy marginal, toda vez que en la costa Atlántica, que venía acuñando los menores niveles de presencia guerrillera de su historia, va a experimentar un importante repunte en La Guajira, por un fuerte accionar guerrillero de las FARC, y en Bolívar y Córdoba. De esta manera, se abre la puerta de posibles cuestionamientos a una PSD que en estos dos años no recoge un importante número de operativos militares en la región.

El empeoramiento de las condiciones de orden público en los años 2011 y 2012 se hace evidente, igualmente, en la región suroccidental. En Cauca y Nariño se intensifican las

acciones guerrilleras, no solo de las FARC, sino también, aunque en otra medida, del ELN, superando ampliamente a las acciones de la Fuerza Pública. Asimismo, Huila y Tolima, a pesar de la intensificación de los combates entre 2006 y 2010, en estos dos años de presidencia de Juan Manuel Santos van a mostrar niveles prácticamente inalterados en su activismo guerrillero, como igualmente acontece en Valle del Cauca.

Igual tendencia, a la de la PSD se apreciaría en los departamentos de Meta, Caquetá, esto es, de resistencia frente a la presión del Estado, y que en el caso de Putumayo, por una nueva intensidad de las acciones guerrilleras, termina por casi triplicar al conjunto de operativos de la fuerza colombiana.

Finalmente, quedaría Antioquia, prioridad militar irresoluta, con una creciente actividad guerrillera que llega, como más de una década atrás, a plantear un mayor volumen de acciones guerrilleras sobre el conjunto de operativos militares. Igualmente Chocó donde el ELN y las FARC recobran activismo guerrillero haciendo del departamento uno de los enclaves de mayor desplazamiento y disputa territorial de los últimos dos años.

Es decir, sería visible un agotamiento y un relativo empeoramiento en el orden público y en las dinámicas asociadas a la violencia del conflicto armado colombiano. Sin embargo, cuando era preguntado por esto el expresidente Álvaro Uribe, sus consideraciones invitaban a entender un abandono en la política que sucedió a la PSD que él emprendió:

“el empeoramiento del orden público en Colombia es un hecho. Claro. Yo siempre dije que esas tres prioridades (seguridad, inversión y política social) eran embriones. Unos más avanzados que otros pero, en última instancia, embriones. Esos embriones necesitaban continuidad. En efecto, como usted plantea, hay una reubicación pero esta reubicación necesitaba continuidad, al estar inacabada como se encontraba. No olvidemos que Juan Manuel Santos se comprometió a cumplir ese proceso. De haberlo hecho hoy Colombia sería un país de paz y sus cabecillas estarían en Caracas o en La Habana de haber continuado la PSD. A tal efecto el narcotráfico es la fuente más importante para entender las dinámicas del conflicto en la actualidad. Norte de Santander, Cauca, Nariño o Putumayo. Todos son escenarios de cultivos. En todos, las guerrillas manejan el cultivo de coca y actúan en la mayoría de los casos con las Bacrim. Piense en el nudo del Paramillo. A eso se añade la minería ilegal, sobre todo, como consecuencia del incremento en el precio del oro durante los últimos ocho años. Aquí el funcionamiento es otro si bien, en el caso del narcotráfico, que es la base del narco-terrorismo siempre es lo mismo. Las guerrillas manejan el cultivo y, de ser necesario, se lo entregan a las Bacrim para su distribución. La PSD es una política autónoma, distinta, con un enfoque integral. Supone fuerza política y pública. Determinación. Nada de eso está presente hoy”. (EP 1, junio de 2015).

13. Conclusiones

Tal y como puede observarse a lo largo de todo este capítulo, lo cierto es que el alcance de las políticas de seguridad implementadas en los últimos quince años, sí que han determinado

los cambios espaciales propios de las FARC y el ELN dentro de la tesitura del conflicto armado, sobre la base fundamentalmente de enclaves de ruptura y de continuidad.

De ruptura, fundamental, en los departamentos que ocupan el centro geográfico del país, y que en buena medida, en tanto que el arraigo guerrillero era menor, así como la concurrencia de ingresos directos por el cultivo ilícito, tuvieron menos disposición de servir como focos de resistencia.

De otro lado, el continuismo se puede observar en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo o Norte de Santander, en los que la dimensión fronteriza, selvática o montañosa, y de mayor arraigo de cultivos condensa una circunstancia de mejor confrontación frente a las políticas de seguridad provenientes del Estado. Igualmente para otros departamentos como Caquetá, Chocó, Meta o Antioquia, donde las dinámicas del conflicto bien se han mantenido, bien se han intensificando, cuestionando la real eficacia, muy particularmente, de la PSD, en tanto que se trata del instrumento más combativa en lo que a reducir el alcance real de los grupos guerrilleros en Colombia

A pesar de que las cifras, testimonios y mapas expuestos permiten aceptar la hipótesis referida, cabe apreciar que los cuestionarios, de igual manera, redundan en la forma en la que se valora el alcance real de las políticas de seguridad en Colombia, en función del departamento o la región en cuestión.

La primera valoración se puede obtener de la pregunta 1 del cuestionario, en la que se hacía referencia a cómo se valoraba, de parte de las alcaldías, la respuesta al problema del conflicto armado colombiano en función de las políticas acontecidas en los últimos quince años. De este modo, y según ilustra la siguiente tabla, sobre la base de las siguientes opciones “Excelente – 1”, “Bueno – 2”, “Regular – 3” y “Malo – 4”, el resultado medio que ofrecen los 221 cuestionarios es de 2.91, es decir, “regular”.

Asimismo, si se observa con detenimiento, todos los departamentos que condensan mayores niveles de violencia unilateral, es decir, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander – con la excepción de Antioquia y Meta- son enclaves de clara presencia guerrillera. De igual forma, los departamentos que tienen un volumen notable de presencia de FARC, sobre todo, como Guaviare, Valle del Cauca y Tolima están presentes como, igualmente lo están, algunos de los departamentos donde mayor presencia se recoge de Bacrim, como sucedería en la costa Atlántica. De tal modo, que con esta cuestión cabe encontrar un argumento de peso con respecto a cuestionar el alcance y la eficacia real de las políticas de seguridad puestas en marcha por los últimos tres gobiernos colombianos.

Tabla 14: Valoración del impacto de las políticas de seguridad y las aspersiones aéreas, 1998 - 2012

Valoración de las políticas de seguridad en el municipio		Valoración de la eficiencia de las políticas de aspersión aérea sobre cultivos	
Chocó	4	Chocó	5
Guainía	4	Guaviare	5
Guaviare	4	Nariño	5
Valle del Cauca	3,12	Putumayo	5
Atlántico	3	Norte de Santander	4,7
Caquetá	3	Bolívar	4,5
Cauca	3	Cundinamarca	4,5
Cesar	3	Antioquia	4
Nariño	3	Caldas	3,75
Norte de Santander	3	Cauca	3,75
Putumayo	3	Caquetá	3,5
Risaralda	3	Boyacá	3,25
Tolima	3	Meta	3,25
Casanare	2,66	Atlántico	3
Boyacá	2,61	Casanare	3
Bolívar	2,5	Cesar	3
Córdoba	2,5	Córdoba	3
Meta	2,5	Magdalena	3
Antioquia	2,25	Risaralda	3
Huila	2,25	Santander	3
Cundinamarca	2,2	Tolima	3
Caldas	2,12	Valle del Cauca	3
Magdalena	2	Huila	2,5
Quindío	2	Guainía	2
Santander	2	Quindío	N/A
Sucre	2	Sucre	N/A

Fuente: Elaboración propia

Otra consideración que se puede plantear es cómo los peores niveles de valoración a las políticas de seguridad se dan sobre departamentos en los que concurre un elevado nivel de cultivo ilícito. Así, de los departamentos que están por encima de la media nacional de 2.91 sobre la valoración de las políticas de seguridad en los municipios, condensan casi el 77% de los cultivos que se producen en Colombia (UNODC, 2013: 11)

La misma consideración crítica se encontraría sobre la política de aspersiones aéreas utilizadas para reducir el volumen de cultivos ilícitos. Así, se dan cinco respuestas posibles a la pregunta *¿los resultados de la fumigación aérea sobre los cultivos ilícitos en su municipio han sido?*, que son “1- muy buenos”, “2- buenos”, “3- regulares”, “4- malos” y “5- muy malos”. El promedio, peor que cuando se preguntaba a las alcaldías sobre la superación del conflicto, es de 3.60, lo cual le aproxima a la categoría de malo. Nuevamente, los departamentos más violentos y con mayor presencia de cultivos ilícitos tanto hace años como en la actualidad son los departamentos con mayor presencia guerrillera. De hecho, incluso Antioquia y Meta, casi siempre por fuera de los peores indicadores por la concentración del fenómenos guerrillero y narcotraficante sobre ciertos enclaves del país aparecen como escenarios escépticos donde, cuando menos, se cuestiona el alcance real de las acciones de aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos.

De hecho, cuando se solicita información sobre qué aspectos son destacables tanto a nivel positivo como a nivel negativo en cuanto a las políticas de superación del conflicto, prácticamente las respuestas abiertas se orientan siempre hacia los mismos resultados.

Es decir, de un lado, en lo que afecta a los aspectos más positivos, las alcaldías destacan, sobre todo, la mayor presencia del Estado, especialmente, a modo de cámaras de videovigilancia y mayor presencia de la Fuerza Pública si bien, las debilidades refuerzan todo lo argüido hasta el momento pues, el 80% de las respuestas se condensan en el mismo tipo de problemas sin resolver. Problemas que se traducen, sobre todo, en alternativas sociales, nuevas formas de criminalidad, alianzas de las Bacrim con las guerrillas y desplazamiento forzado por la intensificación del conflicto. Asimismo, se destaca la débil institucionalidad del Estado y, sorprendentemente, en muchos casos se advierte del incremento y fortaleza de la Policía en el municipio, a la vez que se reclama mayor presencia de la Fuerza Militar, o viceversa, lo que plantea dudas sobre la integralidad en cuanto a la respuesta armada del Estado respecto de aquellos enclaves en los que concurren grupos armados.

CAPÍTULO VII. EL PARAMILITARISMO Y SU IMPACTO EN LAS LÓGICAS ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

1. Introducción

A lo largo del siguiente capítulo de tesis doctoral, se busca explorar el alcance y el sentido del factor paramilitar como elemento de expulsión y de transformación espacial de las dinámicas derivadas del conflicto armado colombiano. Es decir, se trata de entender si, verdaderamente, el paramilitarismo se comprende como un fenómeno que permite entender las nuevas cartografías experimentadas en la violencia armada durante la última década o si por el contrario, su grado de afectación debe relativizarse.

La hipótesis de partida es entender que el paramilitarismo no representa en sí un factor explicativo dentro de esta circunstancia aunque sí que es cierto que en Antioquia, especialmente, y en algunos escenarios muy concretos del norte del país, la coincidencia espacial y temporal, así como el relato recogido de algunos actores involucrados permite aceptar su influencia en la transformación de la presencia territorial de las guerrillas. Especialmente, el paramilitarismo se puede decir que va a ser un factor coadyuvante en el debilitamiento que, especialmente, va a experimentar el ELN. Sin embargo, en lo que respecta a las FARC, lo cierto es que en aquellos enclaves con mayor arraigo, como el nororiente o el suroccidente, no cabe aceptar la noción del paramilitarismo como factor de repliegue o expulsión.

El grado de arraigo paramilitar, más concentrado en el norte del país, tal vez permita entender que afectó en mayor medida a las cartografías departamentales de la violencia de las guerrillas, tal y como se mostrará, aunque se descarta esa posibilidad una vez que las AUC buscan expandirse hacia otros emplazamientos con el objetivo de combatir a la guerrilla como Cauca, Nariño, Chocó, Arauca o Norte de Santander.

A partir tanto de las audiencias de los jefes paramilitares procesados por la Ley de Justicia y Paz, los trabajos cartográficos favorecidos por el ODHDIH así como los trabajos del CNMH y la plataforma Verdad Abierta³⁶¹, es que se ha recompuesto cuales fueron los enclaves de control de los principales grupos paramilitares, sobre todo, de las AUC. De igual forma, ha sido de gran valor los testimonios de los líderes paramilitares y de la guerrilla, aquí entrevistados, tanto de AUC, FARC o ELN, y que han resuelto dudas metodológicas que confieren mayor rigor a lo que aquí se presenta.

³⁶¹ La plataforma Verdad Abierta se trata de uno de los portales más completos en lo que a recoger información y testimonios de víctimas y victimarios paramilitares.

Sobre la base de toda esta información, que permite poner en conocimiento los enclaves municipales y departamentales que experimentaron mayor arraigo paramilitar, se toma como variable dependiente el activismo guerrillero. Es decir, se trata de observar si los años de mayor dominación paramilitar - según la región y según el bloque paramilitar de afectación, condensada mayoritariamente entre 1998 y 2005, existe una afectación al activismo guerrillero de FARC y ELN en cuanto a su presencia municipal y su activismo armado.

La conclusión general a la que se llega es que, salvo excepciones coadyuvadas por factores abordados en el capítulo anterior, como el impacto de la PSD, no se evidencian dinámicas decrecientes o desaparición, sobre todo, de las FARC cuando coinciden temporal y espacialmente con el activismo paramilitar. En el caso del ELN, y tal y como reconocían algunos de sus dirigentes, la situación es bien diferente, pues en ocasiones esta guerrilla llega a ser objeto de disputa frente a Ejército, Policía, AUC y las mismas FARC.

Con base en lo anterior, el capítulo VII de esta tesis doctoral se articula en tres grandes partes. Una primera parte, descriptiva, en la cual se presenta la aparición, construcción y evolución del fenómeno paramilitar en Colombia, haciendo especial énfasis en la estructura paramilitar más importante y que objeto de estudio: las AUC. De hecho, se presenta igualmente la dimensión, el alcance y el sentido de los distintos bloques de mayor importancia.

En la segunda parte se condensa el mayor peso analítico, a efectos de que se busca contrastar la hipótesis de partida, con base a evidenciar, por medio de un desglose espacial, de qué manera las AUC no permiten aceptar categóricamente su influencia en las lógicas territoriales del conflicto armado a modo de factor de expulsión tanto de las FARC como del ELN. De hecho, para el caso de las FARC, donde mayor confluencia hubo con el paramilitarismo, se presentan unas dinámicas de activismo guerrillero y presencia municipal bien inalteradas, bien crecientes.

Finalmente, la tercera parte, más como análisis adicional, busca abordar, aun por fuera de la hipótesis nuclear del capítulo, de qué modo cabe entender a las Bacrim como el resultado de un fenómeno de reorganización pos-paramilitar. Esto es, como grupos criminales herederos de la estructura y el andamiaje delictivo de las AUC y que ante la falta de transformaciones estructurales en el Estado colombiano – que concibió la desmovilización de las AUC en términos de “paz negativa”-, vuelven a delinquir. Sin embargo, esta delincuencia organizada, como se presentará, reproduce los enclaves de dominio paramilitar de las dos décadas anteriores. Ello queda contrastado, no solo a tenor de las fuentes indirectas trabajadas sino, igualmente, por los testimonios involucrados y entrevistados. Todos ellos coinciden en remarcar a las Bacrim como el resultado de un proceso de despolitización criminal que termina por encontrar un margen de ventaja en la puesta en marcha de alianzas estratégicas con FARC y ELN. Todo, haciendo valer una suma racional de intereses en la que, en última instancia, el enemigo sigue siendo el Estado colombiano y la legalidad y donde el fin siempre justifica los medios.

2. El origen del paramilitarismo en Colombia

El paramilitarismo va a surgir, al igual que la guerrilla, en enclaves bajo una importante ausencia del Estado si bien, a diferencia de la naturaleza guerrillera, y tal y como señala Velásquez (2007:137), en Colombia solo se puede interpretar el paramilitarismo, no como hecho aislado, sino en términos de estrategia contrainsurgente del mismo Estado³⁶².

Los escenarios particulares sobre los que se construye el paramilitarismo desde los años ochenta³⁶³ en Colombia encuentran su punto de partida en la región del Magdalena Medio y el departamento de Antioquia, primero, y en el litoral Caribe, especialmente en Córdoba, Cesar y Sucre, después. Finalmente, termina por extenderse, a su vez, sobre los departamentos fronterizos con Venezuela de Norte de Santander y Arauca, y sobre el eje del Pacífico que conecta Buenaventura-Tumaco, ya a finales de la década de los noventa.

Como señala Robinson [en Ronderos] (2014: 18) “el paramilitarismo floreció porque prácticamente no había un Estado que lo detuviera” si bien, con motivaciones dispares que, como se abordarán con posterioridad, van desde la lucha contra la guerrilla, hasta la construcción, en sí, de un proyecto criminal, siendo en todo caso, la línea que separa ambas, casi siempre difusa e interconectada. Por ejemplo, mientras que en Nariño la intención pasaba por expropiarle tierras a las negritudes y organizar la producción de coca, en Cesar la intención pasaba por evitar una reforma agraria así como la posible invasión de tierras de parte del campesinado. De otra parte, en Norte de Santander el principal propósito paramilitar era el de *patrimonializar* el contrabando arraigado en esta región fronteriza, especialmente, respecto del mercado de droga.

Un punto de partida particular, pero contrastado tanto por las fuentes primarias como por las fuentes secundarias, reposa en entender el paramilitarismo como un proyecto criminal propio, del cual las FARC y el ELN son la alteridad óptima para construir la imagen anti-subversiva. Esto, con independencia de que, en última instancia sus motivaciones resulten siendo las mismas.

Si bien, varias de las entrevistas con dirigentes de las AUC que se integran en este capítulo dan cuenta de ello, como las llevadas a cabo con “Diego Vecino” o “El Alemán”, algunos autores como Duncan (2006, 2014), Ronderos (2014), CNMH (2012), Rivas y Rey (2006) o Cruz (2009), entre otros, plantean una consideración similar.

³⁶² El Decreto 3398 de 1965, que se transformó en la Ley 48 de 1968 se caracteriza porque en la organización de la Defensa Nacional y Civil cabe aceptar dotación de armas y adoctrinamiento a la población civil que se encuentre bajo escenarios de conflicto a fin de favorecer la lucha contra las guerrillas, institucionalizando la emergencia de grupos paramilitares y de autodefensa. Esta norma estuvo en vigor hasta la entrada en vigor del Decreto 815 de 1989. Tras esta ilegalización del paramilitarismo volverá a ser (re)legalizado a través de las Convivir (Colectivo de Abogados, 2006: s.p.).

³⁶³ Durante la etapa de la Violencia el paramilitarismo se conforma en torno a lo que se denominó como “chulavitas” o “pájaros”, y que fueron abordados en el capítulo primero de esta tesis doctoral.

Así, aunque el paramilitarismo surge bajo ciertas condiciones estructurales, coincidentes en muchos casos, con la presencia de la guerrilla en otras ocasiones parece que no sucede así. Esa coincidencia, en todo caso, siempre rompe la hegemonía local de las FARC y del ELN, lo cual se traduce en iguales prácticas de narcotráfico, extorsión y secuestro, si bien agudizadas por el propio contexto de confrontación armada. Esa ruptura, además, se traduce en despojo de tierras, desplazamiento forzado y una dinámica expulsión/resistencia que va a responder a pautas diferentes, muy especialmente, en el litoral Atlántico con respecto al resto del país. En todo caso, la esencia guerrillera terminará por ser una fuente de legitimación idónea toda vez que, inexorablemente, conduce a una disputa que avivará sustancialmente los niveles de violencia armada derivados del conflicto armado colombiano, bien por tratarse de una respuesta inmediata, bien por tratarse de un horizonte sobre el que intervenir³⁶⁴.

El paramilitarismo, tal y como recoge un destacado trabajo del profesor Medina (1990), tras el contexto de la Violencia, extensible hasta mediados de los años sesenta, tienen su origen en la localidad boyacense de Puerto Boyacá, la cual durante largo tiempo fue conocida como la “capital antsubversiva” de Colombia. Puerto Boyacá era y es una de las localidades más importantes de la región conocida como Magdalena Medio, una región construida sobre las dos orillas del río más importante del país, y que se erigió como un escenario de colonización por agricultores en la década de los años sesenta. Empero, por la propia estructura económica y agraria, y por la concurrencia de pobreza e inequidad, tales colonos se vieron obligados a vender sus tierras a la vieja clase media, copada por ganaderos.

A tal efecto, es reveladora la concepción que, sobre el paramilitarismo mostraba el General (r) del Ejército entrevistado:

“Respecto del paramilitarismo yo tengo centenares de aprobaciones para la creación de grupos de autodefensa, lo cual era un derecho legal y legítimo. El problema es cuando se construye como acción criminal frente al Estado en la que los grupos finalmente se reparten iguales acciones y disputas de poder y donde la verdaderamente derrotada acaba siendo la sociedad. Y desde luego, lo peor termina siendo la confluencia de intereses en la lucha anti-subversiva. Cuando yo en la PSD expuse mi posición en el marco de las máximas instancias del Ejército, ésta fue minoritaria. Se pensaba que por la influencia del maoísmo, si la guerrilla se podía servir de todas las formas de lucha, el Ejército también. Pero no podía ser así. Eso nos volvía iguales a ellos. El Estado no podía estar con los paramilitares en esos términos. Sin embargo, se impuso la mayoría y las connivencias de operativos con las AUC, sobre todo a nivel de campo, no de doctrina institucional, resultó siendo una realidad innegable”. (EP 6, septiembre de 2015).

Especialmente, desde finales de los años setenta, el Frete 11 de las FARC empezó a generar una mayor presión, a modo de una extorsión que, trascendiendo de los tradicionales

³⁶⁴ En algunos casos el paramilitarismo surge como respuesta inmediata a la presión de la guerrilla. Una vez que esa respuesta, especialmente se articula sobre ganaderos y hacendados del noroccidente del país o Antioquia, busca mimetizar y disputar la presencia a la guerrilla sobre otros enclaves que responden a particularidades bien diferentes como sucede en el suroccidente del país, por ejemplo.

hacendados, empezaba a afectar también a estratos socioeconómicos de menor nivel³⁶⁵. Esta coyuntura se va a dar bajo un contexto jurídico como el entonces vigente “Estatuto de Seguridad” del presidente Turbay Ayala, el cual, aparte de militarizar la seguridad pública, permitía conferir a las Fuerzas Militares, con base en la legislación referida al inicio, importantes prerrogativas que, incluso, acogían la potestad de nombrar alcaldes militares.

Así, frente a la presión guerrillera en Boyacá, un conjunto de ganaderos dirigidos por Henry de Jesús Pérez van a solicitar armarse, al amparo del Estatuto, frente al recién Batallón Bárbula instaurado en la localidad. Sin embargo, ante la desatención obtenida de parte de la Fuerza Pública, algunos van armarse y organizarse autónomamente, esperando a que la guerrilla proceda con su tradicional extorsión para que, una vez suceda, proceder a dar de baja a los guerrilleros. Tras varias respuestas exitosas por parte de algunos vecinos de Puerto Boyacá, finalmente se va a institucionalizar la respuesta paramilitar de una manera cada vez más organizada (CNMH, 2011: 109).

Al respecto, el propio trabajo de Medina (1990: 173) señala de qué modo, en la conformación del grupo anti-guerrillero estuvieron presentes, el que desde 1981 sería alcalde militar de Puerto Boyacá, Óscar Echandía, además de representantes de la empresa Texas Petroleum asentada en la región (Avellaneda, 2004: 477), ganaderos, vecinos, miembros de las Fuerzas Armadas y otros interesados en combatir la guerrilla. Como una de las primeras cuestiones pasaba por recaudar fondos para financiar este tipo de respuesta, por ejemplo, en estos orígenes se instauró la necesidad de que cada ganadero aportase 2.000 pesos por res, lo cual permitió reunir una suma de 200 millones de pesos que, en todo caso, terminaba por ser insuficiente para mantener alejada a la guerrilla (Ronderos, 2014: 36).

Al mismo tiempo, en un municipio en la otra orilla del Magdalena Medio, en este caso, en la localidad antioqueña de Sonsón, igualmente de tradición ganadera, emerge otra figura nuclear en la historia del paramilitarismo colombiano como es Ramón Isaza. Éste había conformado su grupo de autodefensa frente a la guerrilla en muy similares términos a los de Henry Pérez si bien, contando en principio con ocho escopetas que, en este caso, le cedió la IV Brigada del Ejército allí asentada³⁶⁶.

Tal y como plantea el trabajo de Ronderos (2014: 36), en estos años que transcurren entre finales de los setenta e inicios de los ochenta surgen otra pluralidad de grupos como “Los Escopeteros” del Mono Celín³⁶⁷, también en Sonsón, o “Los Escopeteros” de Rigoberto

³⁶⁵Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimarios/2743-la-maquina-de-guerra-de-ramon-isaza> Consultado el 5 de agosto de 2015.

³⁶⁶Baste ver la exposición del fiscal ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de Justicia y Paz, en audiencia de cargos contra Ramón Isaza, el 8 de febrero de 2012. Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimarios/673-perfil-ramon-isaza-alias-el-viejo> Consultado el 5 de agosto de 2015.

³⁶⁷ Véase: <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2014/12/2014-08-01-832001-GUSTAVO-AURELIO-ROA.pdf> Consultado el 5 de agosto de 2015.

Quintero³⁶⁸, operativos en el municipio santandereano de Santa Helena del Opón y en el municipio cundinamarqués de Yacopí. Poco a poco estos grupos dejaron de actuar en defensa propia para pasar a imponer una lógica del terror, amparada en la desaparición de ciudadanos que eran acusados de pertenecer a la guerrilla o con base en infundir el terror para así, evitar comunidades de apoyo entre los ciudadanos de los enclaves en los que operaban tanto FARC como ELN³⁶⁹.

Estos grupos van a desarrollarse de manera desarticulada si bien bajo parámetros iguales de acción que, en última instancia, desde mediados de los años ochenta, quedaban organizados en lo que se pasó a conocerse como las Autodefensas de Puerto Boyacá, ya sí, lideradas por Henry Pérez y responsables directas de que las FARC hubieran sido expulsadas del municipio de Puerto Boyacá. Esto, a la vez que cualquier viso de comunismo o liderazgo a lo largo del Magdalena Medio había quedado soterrado (Gutiérrez y Barón, 2007: 285)³⁷⁰.

Tampoco por casualidad se encontraba en esta misma región, José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”³⁷¹, primer gran narcotraficante colombiano de inicios de la década de los ochenta, y con varias haciendas en la otra orilla del Magdalena Medio, frente a Puerto Boyacá. “El Mexicano” se inició en la ilegalidad a través de las esmeraldas aunque rápidamente se centró en la producción de cocaína, sembrando coca y creando laboratorios que darían lugar a todo un emporio al que se sumarían Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa o Carlos Lehder, para exportar droga fuera del país en lo que, posteriormente, sería mundialmente conocido como el cártel de Medellín.

Desde inicios de la década de los ochenta, las FARC venían cobrando a los narcotraficantes el conocido como impuesto de gramaje, es decir, un cobro a la salida de la hoja de coca que tenía lugar en los territorios que controlaba. Territorios que, como en los Llanos de Yarí, en Caquetá, “El Mexicano” se veía obligado a tener que manejar, dada la fuerte presencia de las FARC a través de poderosos frentes pertenecientes al Bloque Sur y el Bloque Oriental³⁷². Ello, a pesar de que en ese momento la posición de las FARC con respecto al narcotráfico

³⁶⁸ Véase: <https://www.verdadabierta.com/component/content/article/177-entrevista/2804-la-venganza-es-muy-jodida-adan-el-negro-rojas> Consultado el 5 de agosto de 2015.

³⁶⁹ Según el testimonio de alias “Karina”, jefe del frente 47 de las FARC, “los paramilitares sabían que podían detener nuestro avance si acababan con la población civil. Hablaban, literalmente, ‘de quitar el agua al pez’ y la verdad que nos hicieron mucho daño. Yo estuve en la dirección del frente 5 y en el Urabá chocoano por primera vez nos tocó sembrar’. También, el dirigente máximo del COCE en el ELN, alias “Mauricio Torres” cuando reconoce que “el paramilitarismo nos empieza a hundir, sin darnos cuenta, en los noventa, cuando acaban con todos nuestros movimiento sociales y democráticos”.

³⁷⁰ Véase: <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/asi-fue-genesis-del-paramilitarismo-articulo-436386> Consultado el 5 de agosto de 2015.

³⁷¹ Gonzalo Rodríguez Gacha (1947-1989) fue la cabeza visible junto a Pablo Escobar más importante del Cartel de Medellín y conocido vulgarmente como “El Mexicano” por su fascinación por la cultura de este país. Son libros de referencia para estudiar su figura los de Gugliotta y Leen (1989) y Strong, S. (1995).

Véase: http://www.verdadabierta.com/las-victimas/index.php?option=com_content&id=3557 Consultado el 6 de agosto de 2015.

³⁷² De largo, los bloques con mayor participación en el negocio del narcotráfico dentro de las estructuras de las FARC.

era claramente de oposición; a tenor de la férrea influencia del que ha sido conocido como ideólogo de las FARC, Jacobo Arenas. Éste siempre fue renuente a que la guerrilla hiciera parte de un negocio que desvirtuaba el espíritu guerrillero y que incluso, como se propuso en el marco de la VII Conferencia Guerrillera de 1982, debía ser desaparecido de aquellos enclaves controlados por las FARC (Aguilera, 2010: 149)³⁷³.

Así, la convergencia de intereses entre Ejército, autodefensas y narcotráfico no tardó en desarrollarse pues, bajo parámetros semejantes a los descritos en Puerto Boyacá o Sonsón se unió la creación del MAS – Muerte a Secuestradores. Este grupo, creado a partir del secuestro en noviembre de 1981, de Martha Nieves Ochoa, hermana del clan familiar cercano a Escobar, por parte de la guerrilla M-19 y que es concebido como otro referente de la historia del paramilitarismo colombiano de la década de los ochenta (Cañón, 1994: 90).

El MAS surge bajo una aportación inicial del narcotráfico de 8 millones de dólares provenientes del cártel de Medellín y del cártel de Cali, y que, igualmente, se reproducía a través de varias fincas en el Magdalena Medio de donde surgieron ejércitos privados para combatir a la guerrilla. De hecho, estos ejércitos, conocidos como “masetos”, actuaron de un modo institucionalizado, incluso anterior en meses a las Autodefensas de Puerto Boyacá. Tanto, que terminaron por ser el primer grupo armados paramilitar responsable de acabar con decenas de líderes sindicales, líderes agrarios o concejales comunistas (Cadavid *et al.*, 2009: pp.33 y 111)

En un debate del Congreso fechado el 17 de octubre de 1984, a tal efecto, el congresista comunista Gilberto Vieira, como ya se señalaba al inicio de esta tesis doctoral, denunciaba que desde enero de 1981 y hasta finales de septiembre de ese mismo año 1984, se habían dado un total de 316 desapariciones forzadas de las cuales, 129 habían sido cometidas por paramilitares, 135 por militares, 48 por policías y 4 por el DAS. Todas las muertes, no casualmente, en su gran mayoría, se correspondían con dirigentes campesinos y sindicales de diferentes partes del país.

Dada esta tesitura es cuando se crea la referida Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio – ACDEGAM- en Puerto Boyacá, el 22 de junio de 1984³⁷⁴ de la cual, según han avanzados trabajos como los del referido Medina (1990) u otros, como el de Romero (2003) se adquirieron armas, equipos, uniformes y sueldos con los que operativizar una lucha antissubversiva que terminó por ser exitosa y, por desgracia, exportable como modelo, a través de juntas de autodefensa, en otros 17 departamentos del país.

³⁷³ La propia “Karina”, a efectos de esta tesis doctoral reconocía que “la posición de las FARC con respecto a la coca, al menos en la década de los ochenta y principios de los noventa era clara y crítica con el asunto. De hecho, a mí me tocó destruir cultivos y avisar al señor de que o cambiaba de mata o se le daba de baja”.

³⁷⁴ Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/241-las-relaciones-de-los-paras-y-la-sociedad> Consultado el 7 de agosto de 2015.

La hipótesis que se mantiene de entender el fenómeno paramilitar como proyecto criminal reposa en que esa extensión, no quizá por casualidad, comienza darse en enclaves donde, igualmente, se encontraban importantes focos de producción de coca. Por ejemplo, el propio Ramón Isaza, se expande hacia los Llanos del Yaré, en Caquetá. Se consolidaron autodefensas en el Bajo Cauca, en los municipios de Vista Hermosa y San Martín, en Meta – en lo que después sería el Bloque Centauros-, y también en Putumayo. Asimismo, se consolidaron los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio santandereano y también cundinamarqués y, a modo de brigada móvil, surgía un operativo con la finalidad de comunicar y dar cierta articulación a los diferentes grupos.

También se identifican reductos paramilitares en La Dorada, en Caldas, en Mariquita, en Tolima, y en parte de Vichada si bien, va a resultar especialmente importante en la región de la costa Atlántica colombiana, que termina siendo el escenario nuclear en la construcción del paramilitarismo. Tanto en la región de Urabá, como sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta había “escopeteros” paramilitares desde finales de los setenta que van a consolidarse como grupo armado una vez que se intensifica la presión guerrillera a los finqueros por parte del Bloque Caribe de las FARC en estos inicios de los ochenta (MOE, 2007a: 4; Hoyos, 2008: 20)³⁷⁵.

De igual forma, comienzan a proliferar este tipo de grupos en Bolívar, concretamente en torno a la localidad de Magangué, por la necesidad que una empresaria popular, que posteriormente ha sido más que conocida como “La Gata”³⁷⁶, de requerir protección frente a la guerrilla, concretamente el frente 35 y 37 de las FARC. Es por esto que, por petición de Rodríguez Gacha, Pérez le remitió un grupo de protección a “La Gata”, igualmente exitoso en su carácter antisubversivo (Robinson, sf.: 10).

De este modo, con base en este enfoque regional, se podría observar la aparición embrionaria del paramilitarismo. Un paramilitarismo cuyas fuentes de poder social se encuentran presentes desde inicio de la década de los ochenta con base en intereses políticos, mayormente locales, apoyo de grandes hacendados, y bases económicas en el tráfico ilícito de la esmeralda pero, sobre todo, de coca.

Sin embargo, todo este engranaje no hubiera sido posible de desarrollar sin elementos de formación militar de alto valor agregado. Por ejemplo, se identifican varias escuelas de formación militar de las que surgieron los que después fueron los máximos responsables de las Autodefensas en Colombia.

³⁷⁵ Véase: <https://www.verdadabierta.com/por-un-gramo-de-tierra-caen-muertos?start=1> Consultado el 7 de agosto de 2015.

³⁷⁶ La Gata se consolidó como un referente en la construcción del paramilitarismo de las AUC, ya en los años noventa, claramente, por su cercanía a Salvatore Mancuso y a “Diego Vecino”. Véase: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/enilse-lopez-lavaba-dinero-de-paramilitares/14069157> Consultado el 7 de agosto de 2015.

La primera escuela de entrenamiento militar se llamó El Tecal, y se encontraba en Puerto Boyacá, donde los fines de semana se entrenaban, también en las instalaciones militares, a los campesinos que buscaban combatir a la guerrilla.

Un entrenamiento no solo militar sino también ideológico, de superación al miedo a la guerrilla y de odio frente al comunismo. Los centros de formación se fueron desarrollando a lo largo del Magdalena Medio. Después El Tecal vinieron “La 01” y “La 50”, si bien estas escuelas precarias, una vez que se filtraron del narcotráfico, evolucionaron cualitativamente en cuanto a su logística y alcance, tal y como es el caso de “Las Galaxias” o “La 081”³⁷⁷. En estas escuelas, “más sofisticadas”, solo podían ingresar personas con el bachillerato terminado y en ellas se podía llevar a cabo el curso de patrullero tras el cual, finalizado el entrenamiento, la persona recibía “una hamaca, un toldillo, sogas de nylon o poliéster, plástico y carpa, cubiertos, un fusil FAL, g-3 o Galil, una granada para fusil, entre 200 y 300 tiros de munición, 2 a 4 granadas de mano y un uniforme verde o azul (Ronderos, 2014: 59; Semana, 1989: s.p).

En estas escuelas fueron formados los que una década después serían los sanguinolentos líderes de los grupos paramilitares como Fidel y Carlos Castaño, Manuel Jesús Pirabán³⁷⁸, Negro Vladimir, los hijos de Ramón Isaza, e incluso su yerno, McGuiver³⁷⁹. No todo terminó ahí. Llegaron a Colombia mercenarios británicos e israelíes, que el propio “Aleman” reconoció en la entrevista para esta tesis, y que siguieron contribuyendo al proceso formativo de paramilitares. Son los consabidos nombres de David Tomkins o de Yair Gail Klein, que para Behar (2012), marcan el verdadero punto de inicio de lo que será el paramilitarismo en Colombia.

El proceso formativo que enriquece el constructo paramilitar en algunos casos tuvo lugar sobre regiones pacificadas, como en buena parte del Magdalena Medio, donde el paramilitarismo servía de garante a los negocios del narcotráfico y tuvo un factor clave de expulsión de las guerrillas, especialmente en Antioquia. En todo caso, con el paso de los años se ha sabido que miembros de las fuerzas paramilitares de Fidel Castaño en Córdoba, Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta o el esmeraldero Víctor Carranza³⁸⁰ en los

³⁷⁷ De hecho, tal y como recoge el dossier de Semana (1989: s.p.): “La Escuela “081”, dirigida por Henry Pérez era el epicentro logístico y administrativo de la organización. Control de todas las operaciones del Magdalena Medio y algunas a nivel nacional. Nexos con miembros del Batallón Bárbula. Funciona el centro de comunicaciones y la imprenta”. Véase: <http://www.semana.com/especiales/articulo/el-dossier-paramilitar/11674-3> Consultado el 7 de agosto de 2015.

³⁷⁸ Manuel Jesús de Pirabán, alias “El Pirata” era la máxima figura del Bloque Héroes del Llano y del Guaviare. Véase: <http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/671-perfil-manuel-de-jesus-piraban-alias-pirata> Consultado el 8 de agosto de 2015.

³⁷⁹ Luis Eduardo Zuluaga, alias “MacGuiver” era el yerno de Ramón Isaza y se encontraba al mando del frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas del Magdalena Medio. Véase: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones-seccion/539-macguiver-el-constructor> Consultado el 8 de agosto de 2015.

³⁸⁰ Víctor Carranza (1935-2013) se consolidó como el gran esmeraldero del país, desde inicios de los noventa. Hay serios indicios que muestran su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico. De hecho, su estrecha relación con “El Mexicano” o las relaciones de “Ernesto Báez”, que le consideraba, no el zar de las esmeraldas,

Llanos, enviaron hombres a ser entrenados en Puerto Boyacá por estos mercenarios extranjeros.

Tanto es así que la masacre de Segovia, cometida el 11 de noviembre de 1988, en la que murieron 43 personas y otras 50 fueron heridas, fue llevada a cabo por medio del conjunto de enseñanzas que los paramilitares, entonces integrantes del comando Muerte a Revolucionarios del Nordeste³⁸¹ (Ronderos, 2014: 111), los cuales aprendieron de Klein³⁸² y la cual fue perpetrada con el objetivo de dar de baja a supuestos militantes de la UP. Incluso, el propio Tomkins, acompañado de otros mercenarios como McAleese, Shelley o Lennox, fueron contratados por la fuerza colombiana para dar de baja a Escobar junto con el apoyo del Cartel de Cali (Tomkins, 2008: cap. XX).

Sin embargo, para entender el fenómeno paramilitar más actual es imprescindible detenerse en la familia Castaño. Una familia oriunda del antioqueño pueblo de Amalfi de la que el mayor de tres hermanos, Fidel Castaño, impulsó su figura en los negocios ilícitos, especialmente de droga, y sobre la cual, ya en la década de los ochenta, arrastró a sus dos hermanos pequeños, Vicente y Carlos.

De Amalfi también será la familia Rendón, de donde serán naturales otros tres nombres clave del paramilitarismo: Daniel, John Jairo y Fredy, respectivamente, “Don Mario”, “Germán Monsalve” y “El Alemán”³⁸³. Tres hermanos de una familia afincada con plantaciones de caña para panela³⁸⁴ que a partir de mitad de los ochenta empiezan a sentirse afectados por la presencia del Frente 4 de las FARC, especialmente activo, a partir de 1982-83 en la región del nordeste antioqueño. Es por esta razón que siendo niños, los hermanos Daniel y Fredy Rendón Herrera son enviados por su padre a Medellín a pesar de que años después, Daniel en los Llanos y Fredy en la región de Urabá lideraban sendos bloques paramilitares de las AUC.

sino el zar de los paramilitares plantean dudas sobre una controvertida personalidad que no llegó a pasar más de tres años en la cárcel y siempre quedó absuelto tanto de las innumerables acusaciones como de tres atentados que estuvieron a punto de cobrarse su vida. Véase: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4524-victor-carranza-el-patron-que-nunca-toco-la-justicia> Consultado el 8 de agosto de 2015

³⁸¹ Este grupo paramilitar, dirigido en los ochenta por Fidel Castaño funcionó con el firme propósito de expulsar a las FARC y el ELN del nordeste antioqueño. Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenanza-perez-garcia-masacre-de-segovia-articulo-422211> Consultado el 8 de agosto de 2015.

³⁸² Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/vladimir-se-confiesa/33340-3> Consultado el 8 de agosto de 2015.

³⁸³ “Don Mario” acabaría dirigiendo el Bloque Centauros primero, y tras la desmovilización, de la cual rehusó, fundó un grupo llamado las Autodefensas Campesinas Gaitanistas, semilla embrionaria de las Águilas Negras. Fue capturado en Necoclí, en 2009: Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/2101-don-mario-daniel-rendon-herrera>. En cuanto a “Germán Monsalve”, nunca se pudieron demostrar sus vínculos con el despojo de tierras paramilitar, de manera que tras dos años en la cárcel quedó libre, y sin poder ser extraditado a Estados Unidos, tal y como requirió la DEA en su momento. Consultado el 8 de agosto de 2015.

Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9360237>

³⁸⁴ La panela es un derivado de la caña de azúcar que se toma como bebida o comida de uso cotidiano.

Fidel Castaño siempre acuñó un bajo perfil a diferencia de otros como Pablo Escobar. Su actividad ilícita le permitió cooptar a la Fuerza Pública pero la trascendencia de su poder le llevó a cambiar su enclave de acción. Hacia finales de 1982 abandona el nordeste antioqueño para ubicarse en Urabá. Una región que albergaba la posibilidad de concentrar ingentes títulos de propiedad en virtud de un pacto social entre los grandes hacendados tradicionales y los capitales del narcotráfico que llegaban a ubicarse. Al respecto, Córdoba por aquel entonces se erigió en un departamento con especial arraigo del EPL, que igualmente va a contribuir a la dinámica de expulsión y abandono de las tierras. Para muchos campesinos de origen, transformados en los primeros años de los ochenta en narcotraficantes, Córdoba además de un escenario tranquilo, tenía unas disposiciones climáticas óptimas para el cultivo de coca, además de una salida al mar óptimo como corredor a los circuitos del tráfico ilícito.

Fidel Castaño consigue enriquecerse sin mucho ruido entre 1983 y 1986, sin que haya atisbo alguno de asesinatos políticos, masacres u otro tipo de acciones ilegales a nombre de la causa antisubversiva. Lo cierto es que no hay registro de inicio de cuando Fidel Castaño se suma al ejercicio paramilitar de las Autodefensas de Puerto Boyacá pero sí es seguro que cuando Fidel llega a Córdoba, el narcotráfico está fuertemente arraigado y frente a la amenaza de la guerrilla, Fidel acude a Puerto Boyacá a pedir ayuda (MOE, 2007b: 3). Allí obtuvo quince hombres que fueron entrenados en una de sus fincas por un capitán del Ejército.

Entre 1985 y sobre todo, 1988, se produce un envilecimiento de la acción guerrillera, especialmente de FARC y EPL. Por ejemplo, en septiembre de 1986 se produce la toma de Saiza, en la que caen 38 muertos, mayormente civiles³⁸⁵. Una entre muchas que convierten al tranquilo departamento cordobés en pretensión de la guerrilla. Coincidiendo con año electoral, la guerrilla va a extender su influjo sobre la notable mano de obra bananera y el sindicalismo cordobés toda vez que la UP parecía ganar peso en la región. La reacción de Castaño no se hizo esperar. Reclutó jóvenes amalfitanos que hubieran cumplido el servicio militar y comenzó a instaurarse el terror en Córdoba. En apenas ocho semanas se cometen siete masacres³⁸⁶ que buscan afectar a las elecciones municipales de 1988. Córdoba y Urabá empiezan a sufrir sistemáticamente muertes selectivas en la izquierda colombiana. Muertes en las que convergen los nombres de Castaño, Henry Pérez o Hernán Giraldo³⁸⁷ y que

³⁸⁵Tal y como reconoce Verdad Abierta (2012: s.p.) “La Coordinadora Guerrillera incidió en grandes acciones sindicales y sociales conjuntas: “Ahí se realizó una de la acciones más exitosas que tuvo la guerrilla, que fue la toma de Saiza en el 88 en la que las Farc y el Epl aniquilaron un puesto de Policía y uno del Ejército” dice Agudelo”. Véase: <http://www.semana.com/especiales/articulo/38-muertos/10744-3> Véase también: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/4293-frente-5-de-las-farc-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia> Consultado el 9 de agosto de 2015.

³⁸⁶ Ahí se concentran masacres además de las referidas como Segovia, otras como las de Honduras, La Negra, Mejor Esquina, Caño Sibao, Saiza o El Tomate. Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/25-anos-de-un-tiempo-de-masacres-articulo-408650> Consultado el 9 de agosto de 2015.

³⁸⁷ Señala Verdad Abierta (s.f.) que “el 2000 se soltó una fuerte pelea interna entre Rojas y Giraldo por el control del narcotráfico y que dejó varios civiles muertos y heridos. Carlos Castaño entró en la pelea apoyando a Rojas hasta que en el 2001, luego de varias explosiones y atentados en Santa Marta, llegaron al acuerdo que creó el Frente Resistencia Tayrona con Hernán Giraldo como su comandante y alias “Jorge 40” como su jefe militar.

vulgarmente pasan a ser conocidos, y temidos, como “Los Magníficos”³⁸⁸. Toda una maquinaria de violencia imparable se había puesto en marcha. Una maquinaria cada vez más refinada, con mayores recursos y mejores insumos.

La proximidad, especialmente entre el cártel de Medellín y el paramilitarismo era evidente pero no indisociable. De hecho, aunque Escobar simpatizaba con la izquierda, no tuvo dificultades para impulsar el MAS. Así, si Escobar era de izquierda, de otro lado, Fidel Castaño podía ser calificado como de extrema derecha y fiel aliado de Rodríguez Gacha, igualmente, en última instancia, amigo y aliado de Escobar.

El cártel de Medellín necesitaba cooptar a Castaño en su causa frente a la extradición, aun incluso cuando Gacha es asesinado en diciembre de 1989 y su rol como intermediario entre las difíciles relaciones entre Escobar y Castaño las asume “El Negro Galeano”³⁸⁹. Según recoge el testimonio de Ronderos (2014: 193) había tres tendencias en Los Extraditables³⁹⁰. La de Fidel Castaño, que combatía a la guerrilla por convicción. La de Rodríguez Gacha, igualmente por convicción pero a partir de un ejército paramilitar propio que distaba del *modus operandi* de Castaño, más integral, que trascendiendo de la guerrilla, apuntaba a todo lo que tuviera que ver con la construcción de ideales o acciones de izquierda. Y finalmente, estaba Escobar, que buscaba aliarse con la guerrilla para que le dieran un tratamiento especial como el que le dieron a aquélla de cara al dialogo de paz, sobre todo, a efectos de impunidad o, cuando menos, de no extradición.

En todo caso el trasfondo era el mismo. El miedo se traducía en asesinatos selectivos como los de Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, de José Antequera, de la UP, el atentado sobre Ernesto Samper, la muerte de Carlos Pizarro, las bombas sobre *El Espectador* y *Vanguardia Liberal*, o el atentado sobre el avión de Avianca, en el que murieron 110 personas, el 29 de noviembre de 1989, por presumirse que en el vuelo se encontraba el que sería presidente, Cesar Gaviria. Ronderos (2014: 194) apunta a que el apellido Castaño, de un modo u otro estuvo detrás de estos sucesos. Sucesos que no de tanta magnitud, terminaban por focalizarse en territorios que, por el arraigo de las FARC, en ese entonces, ni mucho menos fueron pacificados, como fueron Córdoba y Urabá. Solo en 1990 murieron en el departamento 14 líderes sociales.

Este grupo paramilitar alcanzó a reclutar 1.200 hombres y mujeres”. Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/1403-acusan-a-hernan-giraldo-de-violar-a-19-ninas> Consultado el 9 de agosto de 2015.

³⁸⁸ “Los Magníficos es como se conocía en Colombia a la famosa serie dirigida por Stephen Cannell y Frank Luego, “El Equipo A”.

³⁸⁹ El Negro Galeano era un narcotraficante del Cartel de Medellín que acusaron a Escobar de robarles a través de uno de sus sicarios 20 millones de dólares. Escobar entendió que de aliado se había convertido en enemigo y lo mandó matar y descuartizar.

³⁹⁰ Los Extraditables era como se conocía a los grandes narcotraficantes de segunda mitad de los ochenta, especialmente del Cartel de Medellín, entre quienes destacan el mismo Escobar, Carlos Lehder, “El Mexicano” y Fabio Ochoa Vásquez.

Un punto de inflexión, para con lo anterior, llega finalizando el gobierno de Virgilio Barco, cuando el M-19 firma un acuerdo de paz. Entre el paramilitarismo fluye en ese momento la convicción de las posibilidades que abría un eventual proceso de desmovilización que provenía incluso desde sectores de la guerrilla que, entendían, debían incorporar todos los espectros del conflicto colombiano. En su momento, esta posibilidad fue bien vista por Vicente Castaño, o por el propio Fidel Castaño, que decidió apoyar un marco de negociaciones entre EPL y Gobierno³⁹¹. Empero, si bien los Ochoa o el líder de los ganaderos de Córdoba, García Caicedo, se acogieron al trato de favor dispuesto por Gaviria, no así lo hizo Fidel Castaño y, por extensión, algunos de sus hombres.

Dada esta situación de desmovilización, tal y como se puede ver en el ODHDIH (2014), entre 1991 y 1994 se produce una sustancial reducción de la violencia. No obstante, tras el EPL, las FARC así como una disidencia de la misma guerrilla ocuparon el espacio de violencia. Espacio del cual sufrieron las consecuencias desmovilizados del partido Esperanza, Paz y Liberación que, finalmente, se vieron obligados a pedir protección al propio Fidel Castaño³⁹². Así, las cifras se traducen en 37 líderes y activistas sociales muertos, de los cuales la mitad pertenecieron a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, toda vez que, paralelamente, el mayor de los hermanos Castaño pasaba a hacer parte activa del grupo que será conocido como Los Pepes³⁹³. Razón ésta por la que se va a esperar un trato diferencial que permita mayor condescendencia pero que, por otro lado, nunca va a llegar.

³⁹¹ A efectos de esta tesis, Freddy Rendón, “El Alemán”, dirigente máximo del BEC reconocía que “Los Castaños encuentran pequeños grupos de Autodefensa para protegerse pues frente a la pequeña presencia militar y policial allí existente no se puede decir que allí hubiera fuerza del Estado. La democracia en apariencia funcionaba, pero el orden y el poder real lo tenían las guerrillas. Tras encontrar pequeños grupos de autodefensa y Comandos Populares se organizan y arranca la confrontación con FARC y ELN a la vez que con un reducto del EPL. Estos últimos son atacados y se entregan a las AUC. Castaño contacta con el gobierno para organizar su desarme pero póngale atención doctor. Se entregan como guerrilleros y a los tres pasos, con el mismo fusil, pasan a ser miembros de las AUC. El propio gobierno fue el que impulsó su entrada en las AUC”.

³⁹² Al igual efecto, “El Alemán” señala que “Hacia 1995 en la región del norte antioqueño y chocoano sobre el golfo del Urabá se encontraba una región dominada exclusivamente por el EPL y las FARC, concretamente sus frentes 57 y 58 y una disidencia del EPL que se reacomodó en Necoclí. Las AUC de Fidel Castaño, desmovilizadas en el marco de 1991 habían acordado la entrega de armas a cambio de que las FARC, dentro de ese contexto, no entrasen en Córdoba. El EPL, antes las agresiones frente a su desmovilización opta por rearmarse y crear los Comandos Populares toda vez que los Castaño se rearmen para combatir a las FARC. Estos protegen a los Comandos Populares frente a FARC y ELN y surgen de ese modo las ACCU”.

Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/organizaciones/5521-extermio-de-epl-en-uraba-crimen-de-lesa-humanidad> Consultado el 11 de agosto de 2015.

³⁹³ Los PePes, especialmente pertenecientes al Cartel de Cali, era como se conocía vulgarmente a los Perseguidos por Pablo Escobar.

Masacres como las de Honduras³⁹⁴, Segovia y Puerto Bello³⁹⁵ así como la responsabilidad de asesinatos como el de Bernardo Jaramillo, máximo exponente de la UP, eran acciones de ingente responsabilidad que la justicia no podía obviar en un eventual trato de favor para los Castaño.

Sea como fuere, a lo largo de toda la década de los ochenta e inicios de los noventa, Córdoba se terminó por consolidar como un departamento en el que ganaderos, comerciantes y narcotraficantes habían acabado por confluir en un escenario de grupos armados cuya razón de ser era la violencia y el despojo, y que hacían valer lo que algunos trabajos denominaron como la *pax castaña*. Como señala Germán Bula:

“el paramilitarismo que surge con los Castaño en Córdoba es el resultado de una doble trenza de tres hilos que va, paulatinamente, desarrollándose. Por un lado, los Castaño finalmente se habían desmarcado de Pablo Escoba, habían formado los PePes y habían contribuido a darle de baja. De otro lado, y resultado de lo anterior, eso les ponía cerca del establecimiento y, en esa dualidad, de parte del Estado. Finalmente, reivindicaban, al menos en el discurso, terminar con la corrupción y renovar la política local. La segunda trenza la formaban, por un lado, el sector ganadero cordobés, el cansancio de las presiones de la guerrilla y, finalmente la propia magnitud de la droga. No obstante, ésta era un valor agregado al control de tierras, y el despojo que, finalmente, era el epicentro entre Tierralta y Valencia, de donde surge el paramilitarismo cordobés”. (EP 4, septiembre de 2015).

En ella, frente a FARC y la disidencia del EPL, se desarrollaban prácticas extorsivas sobre campesinos y ganaderos del departamento, abocados a buscar la defensa en la contrapartida paramilitar, dadas las circunstancias, no obstante, de un Ejército precario y débil. Tras la muerte de Escobar, la máxima expresión del poder lo encarnaba un Fidel Castaño que ya había despertado los recelos de sus hermanos. Apenas un mes después de la muerte de “El Capo”, muere el mayor de los Castaño sin que se supiera quién fue su autor material, es decir, si las FARC y, concretamente, el Frente 58, si la facción disidente del EPL o si, como apuntan otros, fue alguno de sus hermanos. Bien Carlos, que venía de experimentar un crecimiento de su figura tras la muerte de Escobar, o si había sido Vicente, activo, por disidencias con Fidel, en el sur de la costa Pacífico. Incluso, hay quienes hablan de una acción de agentes del

³⁹⁴ Como recoge El Espectador (6 de marzo de 2013) “Ese día, hacia la una 1:00 a.m., gritando consignas contra la Unión Patriótica y el Frente Popular, un grupo de unos 30 individuos armados y con sus rostros cubiertos, irrumpió violentamente en la hacienda ‘Honduras’, ubicada en el caserío de Currulao, del municipio de Turbo (Antioquia) y masacró a 17 trabajadores bananeros, a quienes previamente ubicó en una lista que llevaban en sus manos”. Véase: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/25-anos-de-un-tiempo-de-masacres-articulo-408650>. Véase también: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-masacre-de-uraba/10064-3> Consultado el 15 de agosto de 2015

³⁹⁵ Como reconoce Semana (2012): “La noche del 14 de enero de 1990 aproximadamente 60 paramilitares del grupo ‘los Tangueros’, al mando de Fidel Castaño llegaron al corregimiento de Pueblo Bello y por la fuerza llevaron a varios de sus habitantes a la plaza principal. Allí los hicieron acostarse boca abajo. De todos, seleccionaron a 43 campesinos. Se los llevaron amordazados. Nunca más se volvió a saber de ellos”. Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-pueblo-bello-22-anos-esperando-reparacion/251840-3> Consultado el 15 de agosto de 2015.

Estado. Cualquier teoría es por el momento mera especulación (Aranguren, 2001: 11; Cívico, 2009: 169, International Crisis Group, 2003: 8).

Lo importante es que sobre las cenizas del paramilitarismo, que había decaído sustancialmente desde 1991 y hasta 1994, una vez muerto su máximo exponente, Fidel Castaño, se pone fin a un proceso de desarticulación creciente de los grupos de autodefensa del Magdalena Medio de manera que desde 1994, ya con Vicente y Carlos Castaño se desarrolló un proceso de reavivación de los fantasmas paramilitares. Unos fantasmas encarnados en estos dos hermanos y sobre el cual se desarrolla una nueva faceta del paramilitarismo, el cual se redefine y busca poner en marcha todo un andamiaje de terror, en inicio, de fuerte impronta anti-subversiva.

3. El paramilitarismo como actor armado frente a las FARC y el ELN

Hacia 1993-1994 las FARC llevaban a cabo un importante operativo de violencia, especialmente sobre San Pedro de Urabá al cual los grupos paramilitares tuvieron que responder³⁹⁶. A pesar de caer herido Carlos Castaño, a inicios de 1995 tanto los dos hermanos como un tercero, Carlos Mauricio García, alias “Doblezero”, van a refundar el proyecto de las ACCU, iniciado en 1993 (Romero, 2003: 286). La jefatura militar del paramilitarismo cordobés recaería en Carlos, la logística en Vicente y, por último, “Doblezero” quedaría como lugarteniente del primero³⁹⁷. Las ACCU nacían con importantes bases legitimadoras, desde el narcotráfico, los ganaderos y hacendados del departamento, los grandes conglomerados empresariales así como otras estructuras criminales.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para entender el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir y que en capítulos anteriores ya fueron planteadas. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria – Decreto 356 de 1994, no eran más que una forma más sofisticada que la norma de 1968, por la que se regularizaba la seguridad privada hasta el punto que podían disponer de armas de fuego (cortas) de Policía y Ejército, y para lo cual bastaba la autorización de la figura de un superintendente. Rápidamente, se crearon por encima de 400

³⁹⁶ Sería conveniente recordar, por ejemplo, que a inicios de 1994 se produjo la muerte de 35 obreros y habitantes de un barrio de invasión conocido como La Chinita, en Apartadó – ocurrida el 23 de enero de 1994. Tal y como lo reconoce el observatorio del Programa Presidencial de DD.HH (2006:11): “Con la irrupción de Castaño al eje ganadero de Urabá en 1994, la consolidación de San Pedro de Urabá, y luego de un frustrado ataque de las Farc en diciembre de 1994, se inició el proceso de expansión de este grupo, que después de la desaparición de Fidel Castaño, fue dirigido por su hermano Carlos”. Ver: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/uraba.pdf Consultado el 16 de agosto de 2015.

³⁹⁷ Alias “Doblezero” es como se conocía a Carlos Mauricio García Fernández, que con el tiempo quedará al frente del Bloque Metro. Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/687-perfil-carlos-mauricio-garcia-fernandez-alias-doble-zero> Consultado el 16 de agosto de 2015.

Convivir aunque van a ser especialmente importantes en el departamento de Antioquia y de Santander (Molano, 2006: 95)³⁹⁸.

Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, parece que en algún momento va a proveer de armas largas a estos grupos (Ronderos, 2014); grupos que se habían venido desarticulando en los años anteriores y que reviven nuevamente desde 1994. Reviven nueva y rápidamente de modo que, cuando Samper, viendo el auge y las nefastas consecuencias que esta decisión llevaba consigo, ya es demasiado tarde para apagar el fuego paramilitar. Entre 1994 y 1997 tanto Santander como Córdoba y Antioquia se habían erigido como caldos de cultivo óptimos para el paramilitarismo, ya no solo a modo de grupúsculos de autodefensa y ACCU, sino también de Convivir, actuando como enlace de todo ello, la Fuerza Pública³⁹⁹

Tanto es así que por aquel entonces, Vicente Castaño se había consolidado en Urabá y Antioquia además de incursionar en Chocó, Cesar, Santander, sur de Bolívar y Sucre e, incluso, descender a los Llanos y a Tolima. En Chocó, porque tras controlar Córdoba, envía a “El Alemán” a encontrar un nuevo nicho de expansión paramilitar, en un contexto claramente marcado por el dominio guerrillero del Frente 58 de las FARC – desdoblado del Frente 5- y, en mucha menor medida del Frente de Guerra Occidental⁴⁰⁰ del ELN:

³⁹⁸A tal efecto se deben destacar algunas Convivir que fueron dirigidas por líderes paramilitares en Antioquia. Así sucede con “la “Convivir Horizonte” y la “Convivir Guaymaral”, ambas dirigidas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso; la “Convivir Avive”, a la cual pertenecía Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”; la “Convivir Costa Azul”, de la cual era miembro el paramilitar Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias “el Mochacabezas”; la “Convivir Nuevo Amanecer”, integrada por Rodrigo Pelufo, alias “Cadena”; la “Convivir Los arrayanes”, del paramilitar Juan Francisco Prada; la “Convivir Bellaván”, del paramilitar Rodrigo Pérez, alias, “Julián Bolívar”; una “Convivir” dirigida por el jefe paramilitar José María Barrera Ortiz, alias “Chepe Barrera”; y la “Convivir Papagayo”, dirigida por Arnulfo Peñuela (Comisión Colombiana de Juristas, 2008: 2-3). A tal efecto, Álvaro Uribe, literalmente, reconocía lo siguiente: “si no nos unimos con la comunidad organizada y el Estado, con una gran voluntad que parece no existir, no solo para trabajar en lo interno sino para incorporar la solución internacional, vamos simplemente a seguir asistiendo al registro y registro de masacres”.

³⁹⁹Señala alias “Byron”, jefe militar del frente Carlos Alirio Buitrago, a tal efecto: “Entre 1998 y 2002 llegamos al tope de poder militar y el CAB llega a sus máximos. Veníamos de ser muy pequeños pero experimentamos un alto desarrollo. Ese valor nos pone en una situación a la par del Ejército y grupos del paramilitarismo, a los que combatimos conjuntamente. Nos fue bien hasta que llegan las AUC y se fortalece a las FF.MM. Eso nos afecta muchísimo. En esa época luchamos fervientemente contra Policía y Ejército. Llegaron a la región varios batallones y es a partir de entonces, 1998, que la región se pone compleja. En CAB llegó a tener 300 hombres pero a diferencia de las FARC nosotros no somos Ejército de un partido y, por tanto, nuestra organización era más flexible. Más parecida a Nicaragua. Así, la parte militar se configuraba según el objetivo. Era una guerra irregular de manera que yo dirigía operativos de 5 hasta 100 hombres, por ejemplo, pero nuestros mayores enemigos eran siempre los mismos, Ejército, Policía y AUC”.

Asimismo, “El Alemán” reconoce que “Lo cierto es que todo benefició a Uribe. El y gente muy cercana a él se benefició de la guerra y de ahí su posición a que no acabe de manera negociada. Si bien Uribe no ha estado a la cabeza de nada, con sus tentáculos fomentó esta situación. Las AUC, junto con paramilitares y Convivir erradicaron parte de las milicias existentes en la región. Solo en Urabá murieron 7.000 personas de las cuales 4.500 eran guerrilleros. Todos, policía, Ejército, AUC, actuábamos contra un enemigo común”.

⁴⁰⁰El Frente de Guerra Occidental se componía de estructuras tales como la Regional Omaira Montoya, y los Frentes José María Becerra y Luis Carlos Cárdenas en Valle del Cauca, el Núcleo Marta Elena B., el Frente Cacique Calarcá en el eje cafetero, el Regional Óscar Fernando Serrano en el sur de Cundinamarca, el Frente

“Hacia 1995 en la región del norte antioqueño y chocoano sobre el golfo del Urabá se encontraba una región dominada exclusivamente por el EPL y las FARC, concretamente sus Frentes 57 y 58 y una disidencia del EPL que se reacomodó en Necoclí. Los grupos de autodefensa de Fidel Castaño, desmovilizadas en el marco de 1991 habían acordado la entrega de armas a cambio de que las FARC, dentro de ese contexto, no entrasen en Córdoba. El EPL, antes las agresiones frente a su desmovilización opta por rearmarse y crear los Comandos Populares toda vez que los Castaño se rearmen para combatir a las FARC. Estos protegen a los Comandos Populares frente a FARC y ELN y surgen de ese modo las ACCU.

Los Castaños encuentran pequeños grupos de Autodefensa para protegerse pues frente a la pequeña presencia militar y policial allí existente si bien no se puede decir que allí hubiera fuerza del Estado. La democracia en apariencia funcionaba, pero el orden y el poder real lo tenían las guerrillas. Tras encontrar pequeños grupos de autodefensa y Comandos Populares se organizan y arranca la confrontación con FARC y ELN a la vez que con un reducto del EPL. Estos últimos son atacados y se entregan a las AUC. Castaño contacta con el gobierno para organizar su desarme pero póngale atención doctor. Se entregan como guerrilleros y a los tres pasos, con el mismo fusil, pasan a ser miembros de las AUC. El propio gobierno fue el que impulsó su entrada en las AUC y ahí empezó todo”. (EP 13, junio de 2015).

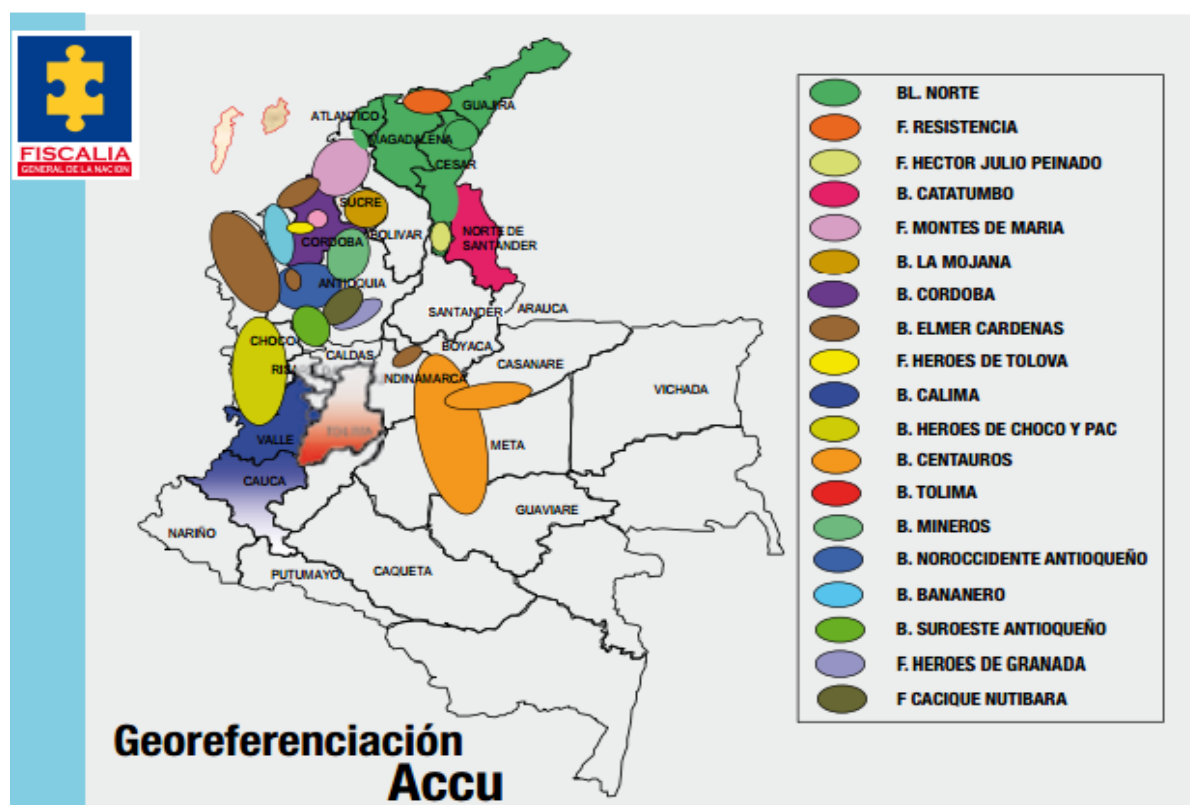
Asimismo, se combate a todo el Bloque Caribe, organizado en los Frentes 35, 37, 59 y 41, y al Frente de Guerra Norte⁴⁰¹ llegando incluso a buscar incursionar en escenario de tradicional arraigo, como Tolima y Meta, del núcleo de los Bloques Central y Oriental, respectivamente.

Estas ACCU inicialmente, en su organización, se van a conformar en un Estado Mayor Central y conforme a cuatro bloques, un frente y una escuela móvil que en poco tiempo van a ser muchas más. Inicialmente, junto con el Estado Mayor Central se van a destacar un Bloque Norte – operativo en Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, el sur de Bolívar, la serranía de San Lucas y en La Gabarra; un Bloque Metro, operativo en torno a dos grandes frentes suroeste y occidente, y erigido en torno al departamento de Antioquia; un Bloque Nordeste, presente en el Magdalena Medio y Bajo Cauca; un Bloque Occidental, operativo en dos frentes, uno en Chocó y otro en Urabá; un Bloque Sur, presente en Caquetá y Putumayo y por último, un Bloque Llanero, activo a través de los Frentes Ariari, Guaviare y Piedemonte. En adición, se encontrarían el Frente Tolima y la Escuela Móvil

Bolcheviques de Líbano, en Tolima, el Frente Benkos Biohó en Chocó, el Núcleo Urbano La Gaitana en Huila, el Frente Manuel Vásquez Castaño en Cauca y el Comuneros del Sur en Nariño (Echandía, 2006: 60).

⁴⁰¹ A su vez, el Frente de Guerra Norte se encontraba compuesto por el Frente Urbano Kaled Gómez y Francisco Javier Castaño en Magdalena, el Frente Luciano Ariza, en La Guajira, los frentes 6 de Diciembre y José Manuel Martínez Q. en Cesar, y los frentes Jaime Bateman, Alfonso Gómez Quiñónez, Héroes de Santa Rosa y José Solano Sepúlveda, entre Bolívar y Sucre. *Ibidem*.

Mapa 63: Georreferenciación de los Bloques de las ACCU - AUC



Fuente: Fiscalía General de la Nación (2010, s.p.)

Lo cierto es que las ACCU, redefinidas bajo una estructura más amplia y compleja como AUC a partir de septiembre de 1997, en pocos años se habían consolidado en torno a 19 grandes bloques: 1) Bloque Suroeste Antioqueño, 2) Bloque Occidente Antioqueño, 3) Bloque Héroes de Tolová, 4) Bloque Mineros, 5) Bloque Norte, 6) Bloque Héroes de Granada, 7) Bloque Élmer Cárdenas, 8) Bloque Tolima, 9) Bloque Bananero, 10) Bloque Calima, 11) Bloque Cacique Nutibara, 12) Bloque Centauros, 13) Bloque Héroes del Chocó y Pacífico, 14) Bloque Montes de María, 15) Bloque La Mojana, 16) Bloque Córdoba, 17) Bloque Catatumbo, 18) Bloque Tayrona y finalmente, el 19) Bloque Héctor Julio Peinado Becerra. Es decir, todo un cúmulo de estructuras paramilitares, en todo caso, con importantes asimetrías entre el alcance y la fuerza de combate de unos respecto de otros.

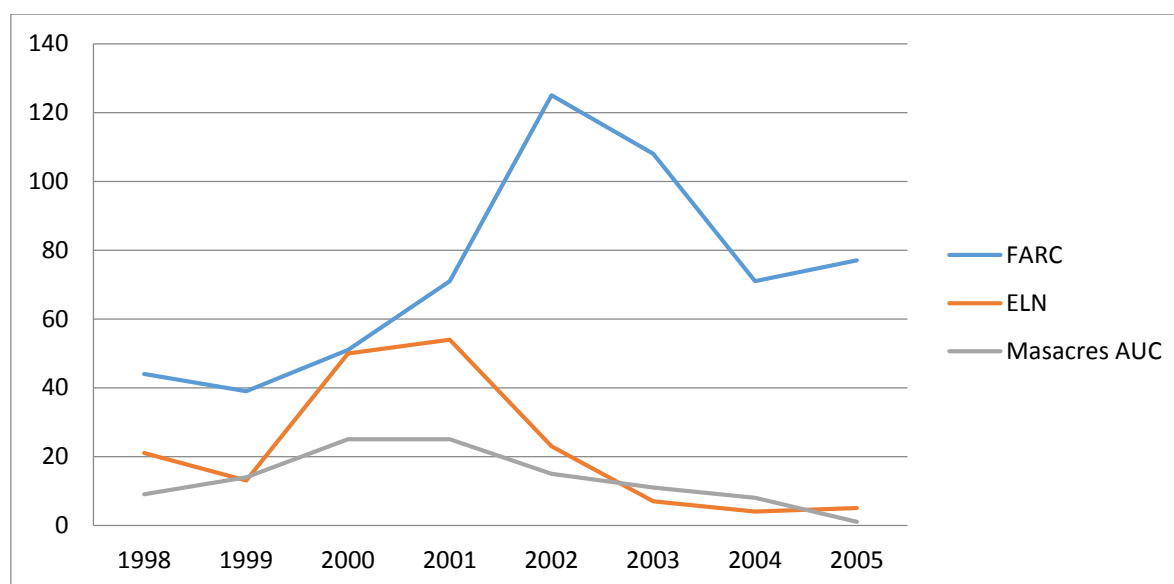
En todo caso, y a pesar de esta estructura compleja, se mantenía una lógica federalizada, primero de las ACCU, pero sobre todo de las AUC, tal y como en su momento señaló Mancuso (2007:11), citado en CNMH (2012: 31):

“(…) un bloque estaba conformado por dos frentes o más. Un frente por dos compañías o más, que son 160 hombres. Una compañía por dos grupos que son cada grupo de ochenta

hombres o más. Un grupo por dos secciones cada una de cuarenta hombres o más. Una sección por dos escuadras que son veinte hombres o más. Una escuadra por dos equipos cada uno de diez hombres o más. Y cada equipo o comando tenía cinco hombres”.

Sin embargo, y a pesar de que se describe un importante arraigo sobre Antioquia y los departamentos, especialmente, de la costa Atlántica respecto del paramilitarismo, no se puede aceptar de que tal paramilitarismo llevase consigo una desaparición de las guerrillas. De hecho, tal y como se puede observar en los gráficos 21 y 22, los indicadores de violencia de las FARC así como de presencia municipal dentro de este contexto paramilitar no se traducen en dinámicas de repliegue o desaparición sino, más bien bajo términos de una coyuntura de relativa continuidad. Todo, en unos términos que son bien diferentes a efectos del ELN.

Gráfico 21: Evolución del activismo guerrillero en la Costa Atlántica, 2008 - 2005



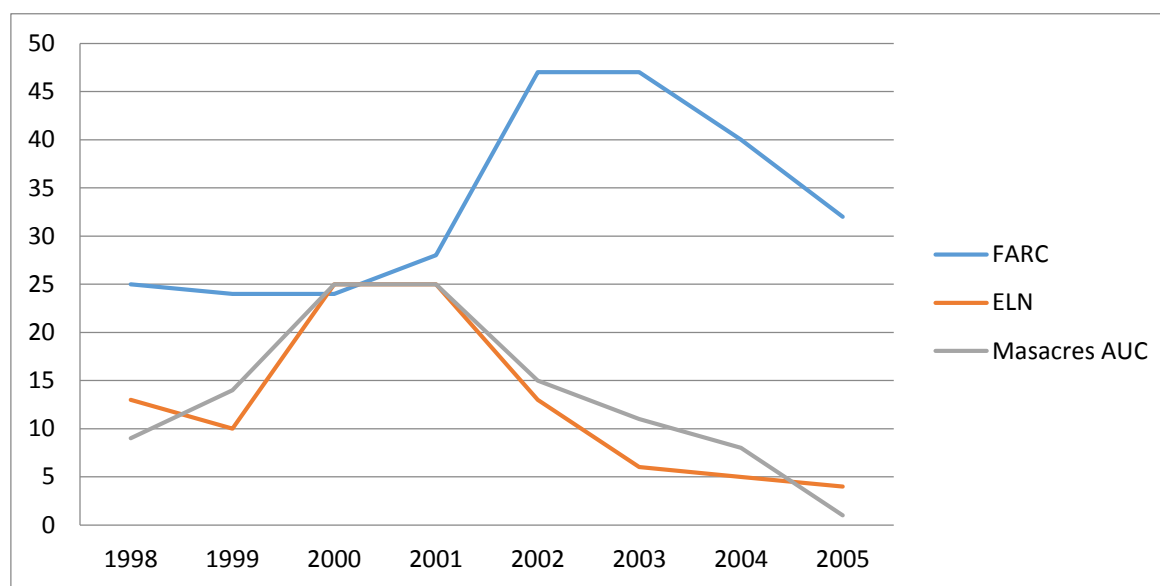
Fuente: Elaboración propia

El bloque que más territorio va a cubrir va a ser el BN. Conocido inicialmente como Gran Bloque Norte, va a extenderse por la región Caribe y por el departamento de Norte de Santander, una vez que los hermanos Castaño se (re)consolidan en Córdoba y Urabá y le piden a Salvatore Mancuso un nuevo reto de expansión.

Un nuevo reto de expansión que llevó a que este Gran Bloque Norte, durante el proceso de incorporación de nuevos enclaves, a dividirse en cuatro bloques: el Bloque Córdoba, presente en los grandes municipios del departamento, y liderado por el propio Mancuso; el Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y efectivo en los departamentos de La Guajira, Cesar (salvo el sur), Atlántico, casi todo el departamento de Magdalena, y la

porción noroccidental del departamento de Norte de Santander; el Bloque Montes de María, surgido en 1996 y dirigido por Edward Cobos Téllez, el cual se va a concentrar en la región de los Montes de María, en torno al nororiente de Córdoba, el norte de Sucre y buena parte del norte de Bolívar; y por último el Bloque Catatumbo, creado en 1999, y arraigado sobre todo en el sur de Cesar y casi todo el departamento de Norte de Santander y consolidado en poco tiempo como uno de los más importantes para las AUC (CNMH, 2012: 26).

Gráfico 22: Evolución de la presencia guerrillera a nivel municipal en la Costa Atlántica, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Igualmente, habría que adicionar el fortalecimiento del que fue el Bloque Occidental cuyos dos frentes, Chocó y Urabá, se van a transformar en el Bloque Bananero - BB, comandado por Ever Veloza⁴⁰², alias “HH”, posteriormente mandado a dirigir el BCa, y secundado por Raúl Emilio Hasbún⁴⁰³. Este Bloque se consolidó en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y parte de Mutatá, en Antioquia. De otro lado quedaría el BEC, operativo también

⁴⁰² Ever Veloza, como comandante, fue responsable de más de 3.000 delitos que supusieron la extradición a Estados Unidos en el año 2009. Después de asumir el Bloque Bananero, entre 1994 y 1997, comandó el Bloque Calima entre 1997 y 2001. Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/hebert-veloza-una-historia-de-guerra/363026-3> Consultado el 20 de agosto de 2015

⁴⁰³ Hasbún, alias “Pedro Bonito”, era un gran empresario bananero de la región que si bien se desmovilizó con el BB, dentro de las AUC se encargaba del sistema de pagos de parte de las grandes empresas exportadores que, por medio de la comercialización del banano, permitió financiar al paramilitarismo. Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/2936-raul-hasbun-condenado-a-20-anos-por-asesinar-dos-militantes-de-la-up> Consultado el 20 de agosto de 2015

en torno al golfo del Morrosquillo, y presente en varios municipios del norte de Urabá, parte de la jurisdicción de Turbo, y parte de los municipios del margen izquierdo del río Sinú.

Así, si se observan las masacres cometidas de las AUC entre 1998 y hasta su desmovilización, como se puede ver, el mayor número se concentra en la región norte del país, y en torno a estos bloques: Bloque Norte, Bloque Córdoba, Bloque Montes de María, Bloque Catatumbo, Bloque Bananero y Bloque Élder Cárdenas. Bloques que, a continuación, se detallarán con mayor profundidad, mostrando tanto su arraigo local como la evolución de la interacción con FARC y ELN, muy especialmente, en el tiempo que transcurre entre 1998 y 2005⁴⁰⁴.

Tabla 15: Municipios afectados por masacres de las AUC entre 1998 y 2005

1998: Becerril (Cesar); Maicao, Villanueva (La Guajira); Ciénaga, Fundación, Pivijay, Santa Marta (Magdalena); Colosó (Sucre).
1999: Guadalupe (Antioquia); Morelia, San José del Guaviare (Caquetá); Dibulla (La Guajira); Cumbal, Imués, San Pablo (Nariño); Armero (Tolima); La Cumbre, Palmira (Valle del Cauca).
2000: Andes, San Carlos, Yarumal (Antioquia); Neira (Caldas); Chiriguaná (Cesar).
2001: Caldas, Concepción y San Carlos (Antioquia); Soledad (Atlántico); San Jacinto (Bolívar); Chiriguaná (Cesar); Pitalito (Huila); Maicao (La Guajira); Arataca (Magdalena); Samaniego (Nariño).
2002: Chiriguaná (Cesar); Santa Marta (Magdalena); Tumaco (Nariño).
2003: Caldas (Antioquia); Florencia y Puerto Rico (Caquetá); Yopal (Casanare); Acevedo, Suaza (Huila); Tumaco (Nariño).
2004: Barranquilla (Atlántico); Paz de Ariporo, Yopal (Casanare); Quinchía (Risaralda).
2005: Pensilvania (Caldas); Puerto Rico (Caquetá); Pitalito (Huila); Icononzo (Tolima).

Fuente: Elaboración propia

3.1.El Bloque Héroes de Montes de María (BHMM)

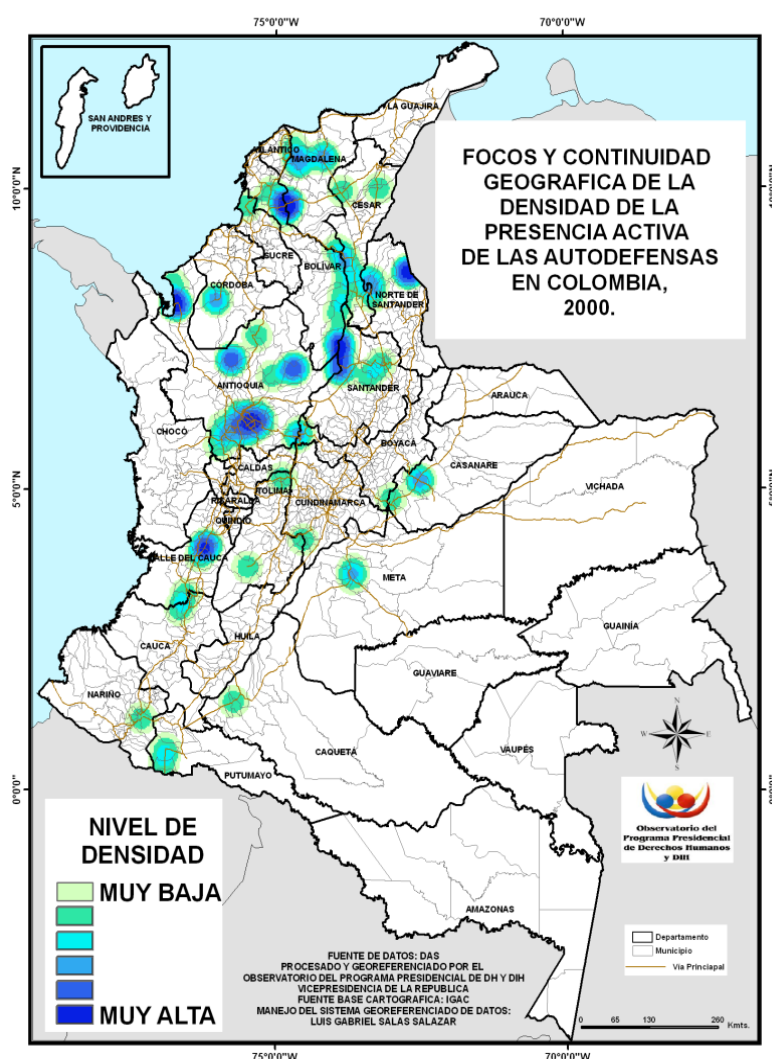
El BHMM va a surgir en 1996, a partir de una decisión adoptada entre los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, de construir un modelo que replicase el llevado a cabo en Urabá, y el cual se va a erigir a partir del apoyo de ganaderos, políticos locales y las respectivas Convivir,

⁴⁰⁴ Se van a dejar por fuera de este capítulo, por razones de alcance y relevancia, los bloques del paramilitarismo menos relevantes a efectos de cartografía y consolidación espacial. Son grupos paramilitares de gran importancia pero cuyas dimensiones termina por ser muy locales y, por ende, de una relevancia mucho menor a la de los bloques objeto de estudio. Así sucede, por ejemplo, con Autodefensas de Los Rojas, Autodefensas Campesinas Ortega, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Tolima, Bloque Hernán Giraldo, Bloque Mineros, Autodefensas del suroeste antioqueño, Autodefensas del noroccidente antioqueño o Los Buitragueños.

a las cuales deben unirse otros grupos de tradición paramilitar, tal y como es el caso de los esmeralderos de Víctor Carranza.

Inicialmente conocido como Bloque Sucre-Bolívar, va a ser dirigido por Edward Cobos, alias “Diego Vecino”, actuando en torno a tres frentes regionales. Uno, que controlaría el Golfo del Morrosquillo, y que operaría en la totalidad de los municipios de Sucre, especialmente, en San Onofre, Sincelejo, Corozal, Betulia, El Roble, Sampués, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, San Antonio del Palmito, Toluvié, Ovejas, Morroa, Chalán, Colosó, y de Córdoba, en San Antero, Chinú, San Andrés de Sotavento, Purísima, Chimá y Momil.

Mapa 64: Presencia activa de las AUC 2000



Fuente: ODHDIH (2014)

Un segundo frente sería el operativo el departamento de Bolívar, concretamente en María La Baja, Arjona, Turbaco, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Bayunca, San Estanislao, Calamar, Mahates, Arroyohondo, San Cristóbal, Soplaviento, Arenal, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina, Guamo, Santa Rosa y Cartagena.

Por último, quedaría un tercer frente con influencia en Galeras, Zambrano, San Pedro, Buenavista y Sincé.

Durante su vida activa, especialmente entre 1998 y 2001 se responsabiliza a este bloque de la realización de 14 masacres y 133 muertes, las cuales quedaron concentradas en los departamentos de Sucre – con las localidades afectadas de Colosó y San Onofre, y Bolívar – con las localidades afectadas de Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja y Zambrano, lo cual, a su vez, se traduce con los años de mayores niveles de desplazamiento forzado en la región.

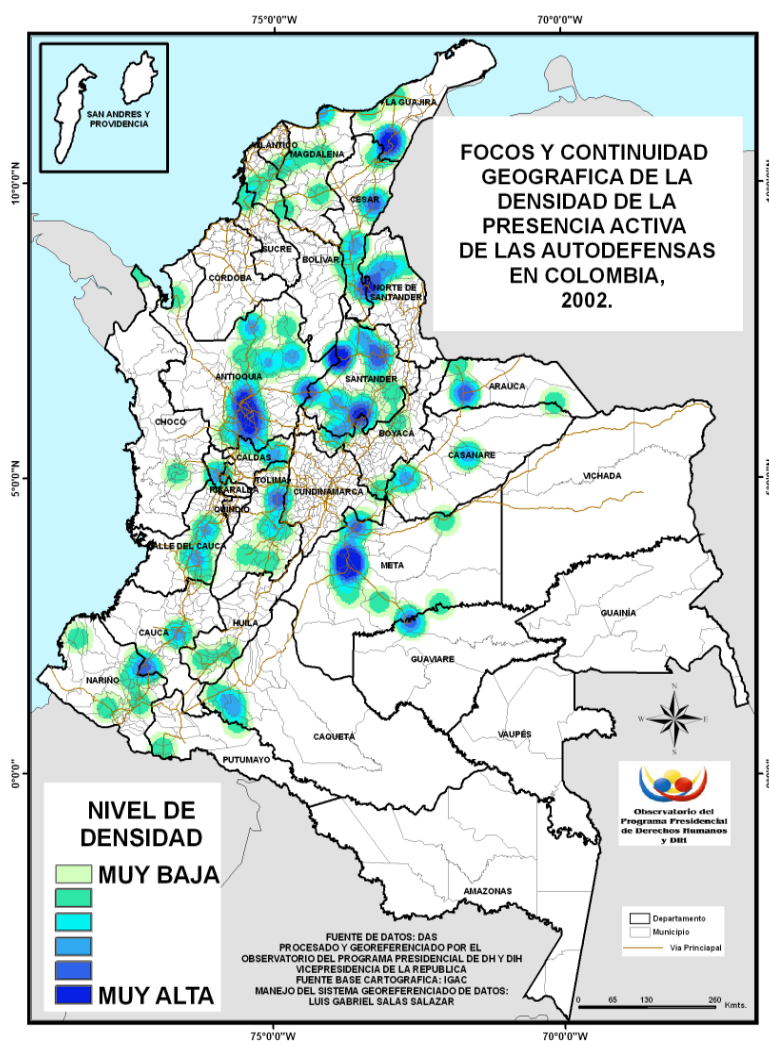
Cuando este grupo paramilitar surge, son especialmente activos los Frentes 35 y 37 de las FARC y también se registra presencia del ELN si bien, muy reducida. Sin embargo, el factor de expulsión de la guerrilla por parte de este bloque va a resultar, en realidad, muy relativo. Así lo reconoce “Diego Vecino”:

“Nosotros combatimos especialmente contra el Frente 35 de las FARC, que llegó a la región a inicios de los noventa, y que luego fue sucedido por Martín Caballero y el Frente 37, el cual llegó entre 1998 y 1999. También había un reducto del ELN, una especie de columna Cimarrón que sin embargo estaba plegada por completo a las FARC. La verdad es que nosotros tuvimos mucha confrontación armada. Confrontación, sobre todo, directa, contra las guerrillas comunistas, pero no se puede obviar la atención sobre la población civil. Usted sabe que en la guerra irregular las bases del enemigo son el enemigo. Es más, son peor, porque terminan por saber más que el combatiente y eso desbalanza.

Ante la falta de Estado, nosotros terminamos por atacar y capturar todos los apoyos de las FARC. Empezamos a construir nuestro Estado. Por ejemplo, nos hicimos con el hospital de San Onofre. Eso nos garantizaba atención urgente en caso de bajas y heridos. En muchas ocasiones el cruce del fuego generaba bajas. Las llevábamos al hospital para, bien tartar de atenderlo, bien arreglarlo, meterlo en un ataúd, y con 5 ó 10 millones de pesos, enviárselo, con dolor, a la familia. Pero eso no fue visible. Lo que era visible eran las masacres”. (EP 12, mayo de 2015).

Si se observa el primer frente del BHMM, operativo en Sucre y la frontera de Córdoba con este departamento se extraen dos conclusiones. La primera es que en los municipios cordobeses de San Antero, Chinú, San Andrés de Sotavento, Purísima, Chimá y Momil no se registra ningún tipo de actividad guerrillera desde que se crea la estructura paramilitar del Bloque hasta su desmovilización en 2005, lo cual invita a pensar en la narrativa anti-subversiva como una justificación existencial más que como una verdadera razón de ser.

Mapa 65: Densidad de la presencia activa de las AUC en el año 2002



Fuente: ODHDIH (2014)

En cuanto a la presencia en Sucre, la estructura paramilitar va a operar durante estos años, sobre todo, a lo largo de 19 municipios en los que solo en diez de ellos se evidencia una presencia relativa de las FARC. Entre 1998 y 2005 se registran actividades de esta guerrilla en Chalán (9), Colosó (9), Galeras (14), Los Palmitos (12), Morroa (10), Ovejas (24), San Juan de Betulia (8), San Luis de Sincé (12), Sincelejo (9), Tolú Viejo (7), si bien lo más importante es que en ningún momento el activismo guerrillero decrece sino más bien, todo lo contrario, al experimentar una dinámica creciente y expansiva durante todo el tiempo de presencia del BHMM en el departamento de Sucre.

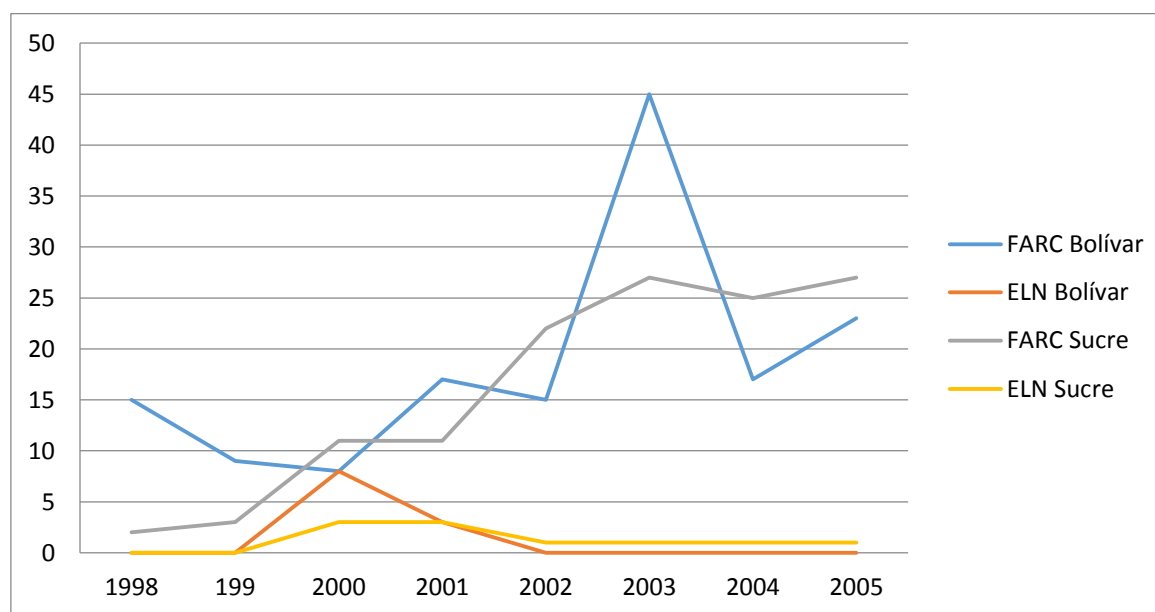
De las 128 actividades guerrilleras de las FARC en municipios con presencia e influjo paramilitar, apenas 23 se dan entre 1998 y 2001, mientras que la mayor intensidad se concentra en el período previo a la desmovilización del frente paramilitar, entre 2002 y 2005.

Ello, claro está, cuestionaría el verdadero alcance del paramilitarismo, en sentido estricto, como factor de expulsión de las FARC e incluso, de un ELN que nunca tuvo mayor presencia en el departamento, apenas reducida en estos años a los municipios de Ovejas (3) y San Onofre (3).

En cuanto a Bolívar el resultado es similar. En los 21 municipios en los que en inició se concentró el influjo paramilitar entre 1998 y 2005, en seis municipios se puede decir que había una presencia de las FARC notable. Presencia que, traducida en acciones guerrilleras, se concentraba en Cartagena (6), El Carmen de Bolívar (66), San Jacinto (19), San Juan Nepomuceno (16), San Pablo (8) y Zambrano (13).

En Bolívar, como es evidente, la presencia de las FARC siempre fue mucho mayor que en Sucre. Sin embargo, tal y como sucedía en Sucre, sobre el total de 149 acciones guerrilleras acontecidas en los municipios con influjo paramilitar, 49 se dieron en el período 1998-2001 siendo las dos terceras partes de la intensidad guerrillera realizadas en los años previos a la desmovilización. Aunque 2003 termina siendo uno de los años de mayor activismo de esta guerrilla, al llegar a las 45 acciones en todo el departamento, lo cierto es que la tendencia, igual que en Sucre, fue creciente entre el período que transcurre entre 1998 y 2005, lo cual hace valer la misma hipótesis que en el período anterior.

Gráfico 23: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BHMM, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en el caso del ELN, la presencia en estos municipios, tal y como sucedía en Sucre, es minoritaria, apenas focalizada en el período 2000-01 en María La Baja (4), San Jacinto (3) y San Juan Nepomuceno (3), tras lo cual desaparece y sí cabe pensar en el paramilitarismo como factor, cuando menos, coadyuvante a su desaparición. Sin duda, el factor de las masacres, a tal efecto, tenía un papel disuasor orientado a socavar las bases sociales de la guerrilla Asó, el propio “Diego Vecino” reconocía:

“Claro que nosotros hicimos masacres. Usted ya sabe. El Salado⁴⁰⁵, Chengue⁴⁰⁶ o Mampuján⁴⁰⁷. Todas esas masacres, siempre fueron precedidas por confrontación entre bloques. Con el Frente 37 en El Salado. Con el Frente 35 en Chengue. Quizá la única excepción fue la de Mampuján, donde sí entramos fue por informaciones a la guerrilla. Es decir, esos combates siempre nos supusieron bajas. Bajas que, como le trataba de decir, fueron invisibilizadas. No cuentan. Claro que las masacres son la degradación del conflicto, pero hay otra historia detrás que es conveniente conocer. Murieron muchos de los nuestros. Y con actitud vergonzante le reconozco que en muchos casos murieron inocentes pero el contexto de la guerra nos llevaba a entrar a veces con miedo propio a los poblados. El combatiente de turno iba con una lista de un miliciano o un infiltrado. Y ya sabe usted. Entrábamos en la casa, y buscábamos un nombre. Ese nombre tiene familia. Mujer, hijos. Y claro, ellos se resistían lo cual muchas veces terminaba con muchas muertes que no estaban previstas”. (EP 12, mayo de 2015).

Dicho de otro modo, de los 46 municipios en los que operó el BHMM con mayor intensidad entre 1998 y 2005, en 16 se registró una presencia importante de la guerrilla que, claramente de las FARC, no evidencia, ni mucho menos, signos de debilitamiento durante los años en los que tiene lugar este tipo de paramilitarismo. No obstante esta realidad que evidencian los indicadores de violencia, especialmente, para el caso de Sucre, contrastaría con las palabras de “Diego Vecino”:

“A pesar de todo, lo nuestro era un proyecto político. Pero en ese escenario, además éramos, nos creíamos, dueños de la vida ajena. Ese poder nos extralimitaba en muchas ocasiones.

En este contexto, quizá los años más complejos fueron los que transcurren entre 1998 y 2001. En ese tiempo combatimos directamente a los bloques. Vencimos. Tomamos el territorio. Lo consolidamos e implantamos, por último, nuestro modelo de Estado bajo el poder de las armas. Fíjese, si usted compara el BHMM siendo pequeño, en comparación con el Bloque Norte, el BcB o el Bloque Calima, sin embargo, nos hicimos con Sucre. Dos gobernadores,

⁴⁰⁵ La masacre de El Salado, en Bolívar, fue cometida entre el 16 y 19 de febrero de 2000. El número de muertes supera las 60 y junto con los desaparecidos, se contabilizan hasta más de 100 muertes violentas. De hecho, se ha llegado a afirmar que puede tratarse de la mayor masacre paramilitar de la historia del conflicto armado. Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4341911> Consultado el 11 de septiembre de 2015.

⁴⁰⁶ La masacre de Chengue, en Sucre, fue cometida el 17 de enero de 2001, con un balance de 28 víctimas mortales y el despojo y desplazamiento de otras 100 más.

⁴⁰⁷ La masacre de Mampuján, en Bolívar, fue cometida el 10 de marzo de 2000, y supuso el despojo y desplazamiento de 300 personas más 11 asesinatos de personas que fueron acusadas de colaboradores de la guerrilla pero que, según las investigaciones de la Fiscalía, se trataba de campesinos sin conexión alguna con las FARC.

dos alcaldes de su capital y 17 de 26 municipios eran nuestros. Ese era mi proyecto político e ideológico. Un modelo de Estado que explicaría que el 90% de los congresistas que fueron judicializados por la parapolítica fueran de Sucre. Mientras que “Cadena” era el responsable militar, yo dirigía todo un proyecto político que encuentra en Sucre el mejor ejemplo de qué querían ser las AUC. Un proyecto con confrontación militar pero un proyecto político”. (EP 12, mayo de 2015).

3.2.El Bloque Élmer Cárdenas (BEC)

El BEC empieza a operar con especial importancia a partir de 1997. Fundado inicialmente por Carlos Ardila⁴⁰⁸, se denominó inicialmente “Las Defensas” y posteriormente se rebautizó como “La 70”, hasta que en 1997 fallece uno de sus mayores integrantes, Élmer Cárdenas, del cual toma su nombre, ya en 1998, y hasta que el 8 de septiembre de 2005 decide aceptar su incorporación al proceso de desmovilización.

El BEC va a concentrar su estructura en torno a cinco frentes, Gabriel Auai, Costanero, Norte Salaquí, Tanela y Pavarandó. Sus principales enclaves de acción van a ser en torno a la frontera con Panamá y el golfo de Urabá. Así, los principales municipios afectados por el BEC van a ser Arboletes, Dabeiba, Necoclí, Mutatá, Uramita, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, Murindó en el departamento de Antioquia; Carmen de Atrato, Nuquí, Riosucio, Juaradó, Bojayá, Unguía, Acandí, Bajo Atrato y Medio Atrato en el departamento de Chocó⁴⁰⁹.

Durante su actividad paramilitar, el BEC fue responsable de hasta 13 masacres que se cobraron hasta 70 víctimas mortales, en los municipios antioqueños de Mutatá, Dabeiba y Murindó; y en los municipios chocoanos de Carmen de Atrato, Juaradó, Riosucio, Bojayá y Nuquí, tratándose de uno de los bloques con mayor impacto en lo que a desplazamiento forzado se refiere.

Del activismo paramilitar del BEC, sobre los nueve municipios chocoanos sobre los que hay conocimiento de influjo paramilitar, entre 1998 y 2005, solo en tres de ellos se evidencia una importante presencia de la guerrilla. Una presencia que se centra, en estos años, en Bojayá (6), El Carmen de Atrato (11) y Riosucio (7). Nuevamente, el factor de expulsión es cuestionable, cuando de un total de 30 acciones guerrilleras sobre los municipios de influjo paramilitar en Chocó, solo 9 se dan entre 1998 y 2001. Asimismo, en cuanto al ELN solo se registra presencia en estos municipios, en la localidad de Carmen de Atrato (9), de las cuales, 6 tienen lugar entre 2002 y 2005 lo que, igualmente cuestiona el impacto de expulsión paramilitar.

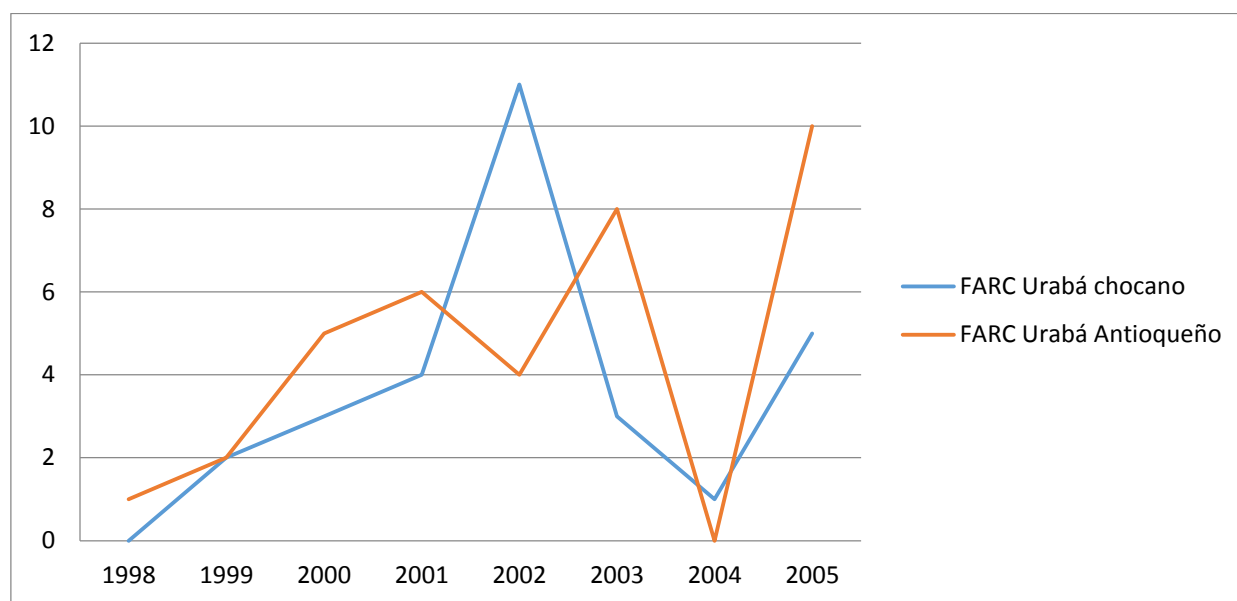
Para el caso de los ocho municipios antioqueños bajo influjo del BEC, solo en dos se evidencia una presencia guerrillera de las FARC relevante. Estos son, Dabeiba (20) y Mutatá

⁴⁰⁸ Carlos Ardila, alias “Carlos Correa”, inicialmente financiaba al frente 58 de las FARC hasta que se desmarca del pago a la guerrilla y conforma su grupo paramilitar que será semilla embrionaria del BEC. Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/4009-la-ultima-version-de-vicente-castano-antes-de-desaparecer> Consultado el 22 de agosto de 2015.

⁴⁰⁹ “El Alemán”, en su testimonio, incluye como municipios de disputa a Vigía del Fuerte (Antioquia)

(11), a los que se podría añadir Uramita (5). Nuevamente, el activismo guerrillero de las FARC en estas tres localidades se intensifica, más que en el período 1998-2001, cuando se dan 13 acciones guerrilleras; en el período 2002-2005, cuando se supera la veintena. De otro lado, no se registra presencia guerrillera del ELN en ninguno de los municipios mencionados.

Gráfico 24: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BEC, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

No obstante, en su testimonio, por ejemplo, “El Alemán”, reconoce cómo se desarrolla la disputa regional con las FARC, del siguiente modo:

“Durante 15 años jamás se interceptó una avioneta de las que llegaban. El Ejército, aun sabiendo, no atacó jamás a las FARC en esa región. De hecho, aquellos policías eran generalmente provenientes de otros lugares y enviados allí como castigo, a quienes no les quedaba otra que llegar a acuerdos locales de colaboración que luego fueron los mismos que llevaron a cabo con nosotros. El arraigo de las FARC allí venía gracias a la figura de Víctor Tirado. Un comandante de las FARC de grandes relaciones personales con los ganaderos de la región. Las FARC tenían tal nivel de popularidad que no necesitaban intimidar. Tenían todo. Incluso 3 ó 4 pistas de aterrizaje, habían asesinado a los policías, de manera que dominaban todo. La presencia del gobierno quedaba reducida solo a enclaves urbanos. De hecho, todo aquello era su zona de descanso. Las FARC allí recibían a su familia, descansaban durante semanas, incluso los miembros del Secretariado. Les entraban muchas armas por el golfo de Urabá, por el fin de la guerra en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Armas que luego también serían para nosotros. Allí se hacían los canjes de armas por drogas”. (EP 13, junio de 2015).

3.3.El Bloque Bananero (BB)

El BB comenzó a actuar a partir de 1995 bajo la comandancia de Éver Veloza García, según el propio Veloza, con el firme propósito de evitar la proliferación de paros y huelgas de los trabajadores bananeros de la región. A tal efecto, el propio Veloza afirmó que su frente actuó en coordinación con la Fuerza Pública y con el firme apoyo de empresas bananeras. No obstante, desde 1996 empezó a ganar fuerza un segundo frente dirigido por Ramón Emilio Hasbún.

Ambos frentes se encargaban de controlar el denominado “eje bananero”, conformado por los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Murindó e, incluso, una parte de Mutatá, en un conjunto de municipios propios de la región del Urabá antioqueño y actuando también actuó en el municipio de Tierralta, en Córdoba.

Entre 1998 y 2004 fue responsable de 6 masacres que dejaron 40 muertes, especialmente, en las localidades de Munridó, Chigorodó, Tierralta y Apartadó. Además, entre 1995 y 1997 fueron responsables de otras cinco masacres, en la misma región bananera que, afectando a Mutatá, Apartadó, Turbo y Chigorodó, dejando otras 47 víctimas mortales en municipios antioqueños que, a su vez, fue donde se dieron los mayores niveles de desplazamiento forzado del departamento.

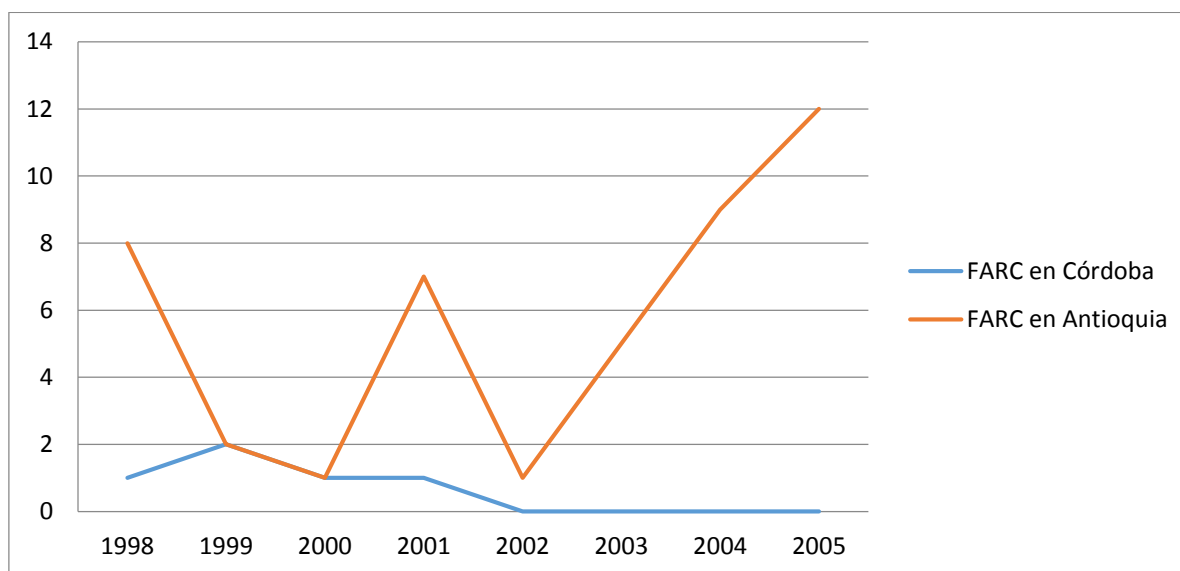
De estos siete municipios, entre 1995 y 2004 – fecha de desmovilización del grupo- no existe evidencia alguna, por ejemplo, de presencia del ELN. De igual parte, para el caso de las FARC solo es destacable la presencia en Apartadó (24), Turbo (5) y Mutatá (11) y en Tierralta (5)⁴¹⁰.

Sin embargo, en estas tres localidades tampoco se evidencia el fenómeno de expulsión evidente en cuanto al activismo guerrillero. Entre 2003 y 2005, por ejemplo Apartadó llega a un registro máximo de violencia guerrillera, al acumular hasta 17 acciones armadas, toda vez que Mutatá acumula 11 acciones, de las cuales 7, tienen lugar en 2005. Es decir, ni mucho menos se observa una desaparición de los frentes operativos de las FARC en la región. Claro está, la excepción sería Tierralta⁴¹¹, ubicado en Córdoba, y que para inicios de la década pasada ya se ha terminado por consolidar en bastión nuclear de control territorial de las AUC tanto en el departamento como en la costa Caribe colombiana.

⁴¹⁰En estos años se recogen 2 acciones en Chigorodó, 3 acciones en Carepa y ninguna en Murindó, ODHDIH (2014)

⁴¹¹Desde 2001 no se recoge activismo armado de las FARC en el municipio, ODHDIH (2014).

Gráfico 25: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BB, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

3.4.El Bloque Norte (BN)

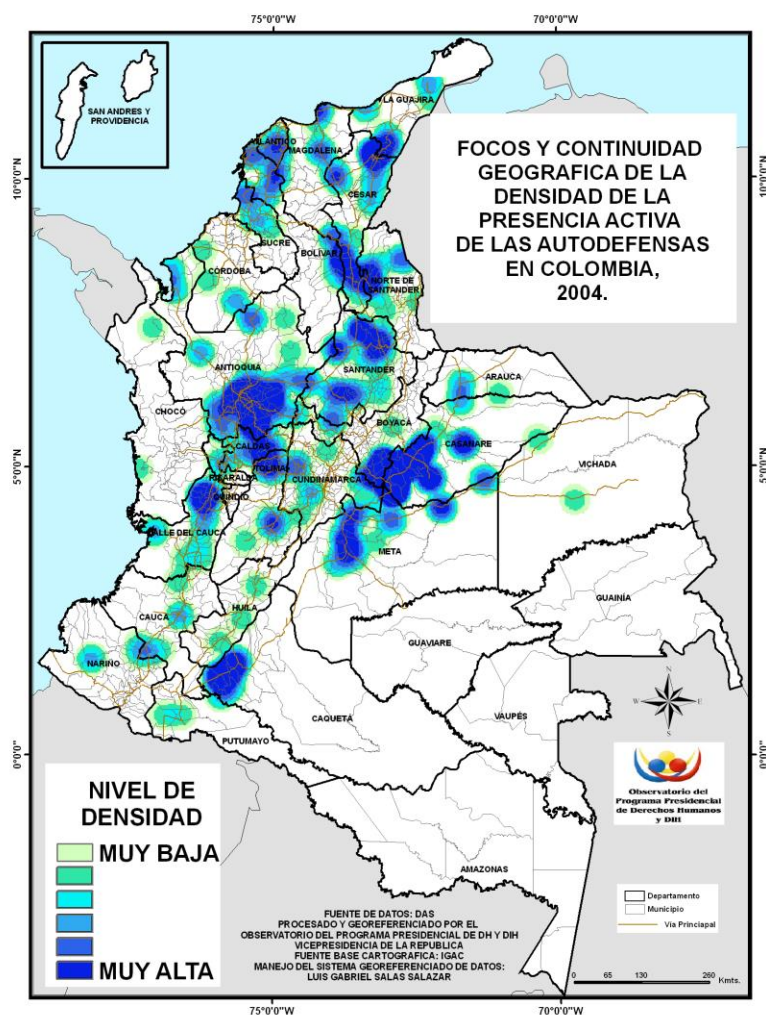
El BN como estructura, tal y como se señalaba, deriva del Gran Bloque Norte, una bloque paramilitar creado por los hermanos Castaño para controlar toda la región Caribe. Sin embargo, durante el proceso de desmovilización bajo la administración Uribe fue denominado BN. Como señaló el propio Tovar Pupo (2007) citado en CNMH (2012: 41) “... a finales del 98 me convertí en el segundo hombre del Bloque Norte de las autodefensas, hasta la desmovilización de Salvatore (Mancuso), que es cuando asumo el mando de lo que queda Lo que fue conocido como “estados de autodefensa” va a hacer que el BN controle social y militarmente los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar, de tal modo que en muchos enclaves se erigió como actor hegemónico, sobre todo, una vez que es derrotado el competidor paramilitar creado bajo la sombra de Hernán Giraldo Serna.

El poder del BN terminó por afectar a los 24 municipios de Atlántico, 15 municipios de La Guajira, 21 municipios de Cesar – al no incluirse bajo el poder del BN los cuatro municipios de sur del Cesar como San Alberto, San Martín, González y Río de Oro⁴¹², y 28 municipios de Magdalena, por las excepciones de Santa Ana y Nueva Granada⁴¹³.

⁴¹² Estos municipios eran controlados por las Autodefensas Campesinas de Santander y sur del Cesar, parte del posterior BCet.

⁴¹³ Santa Ana y Nueva Granada eran controladas por Chepe Barrera si bien, con el tiempo, pasaron a ser zonas de control de BM, por “Jorge 40”.

Mapa 66: Densidad de la presencia activa de las AUC en el año 2004



Fuente: ODHDIH (2014)

De largo, el BN ha sido el brazo armado paramilitar más sangriento de todos. Solo entre 1998 y 2005 se le atribuyen hasta 82 masacres y 598 víctimas mortales, siendo las localidades más azotadas por su violencia Barrancas, Dibulla, Distracción, Hato Nuevo, Maicao, Maricazo, Villanueva, Riohacha, Urumita y San Juan del Cesar, en La Guajira; Arataca, Ariguani, Ciénaga, El Piñón, Fundación, Pivijay, Pueblo Viejo, Santa Marta, Sitio Nuevo, Zona Bananera, en Magdalena; Barranquilla, Luruaco, Malambo y Soledad en Atlántico y, finalmente, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Curumaní y Valledupar, en Cesar.

En el caso del ELN, por comenzar el análisis, la presencia en el departamento de Atlántico siempre fue testimonial. En el caso de Cesar, el grueso de sus acciones guerrilleras se va a condensar entre los años 2000 y 2002, cuando el grupo armado protagoniza hasta 72 acciones

guerrilleras de las cuales 25 se dan entre Valledupar (18) y Curumaní (7), dos localidades afectadas por el paramilitarismo a modo de cuatro masacres acontecidas que dejaron hasta 29 muertos. No obstante, el ELN va a cesar su activismo guerrillero a partir de 2002, cuando sus acciones decaen a 2 y a partir de 2005 desaparecen del departamento.

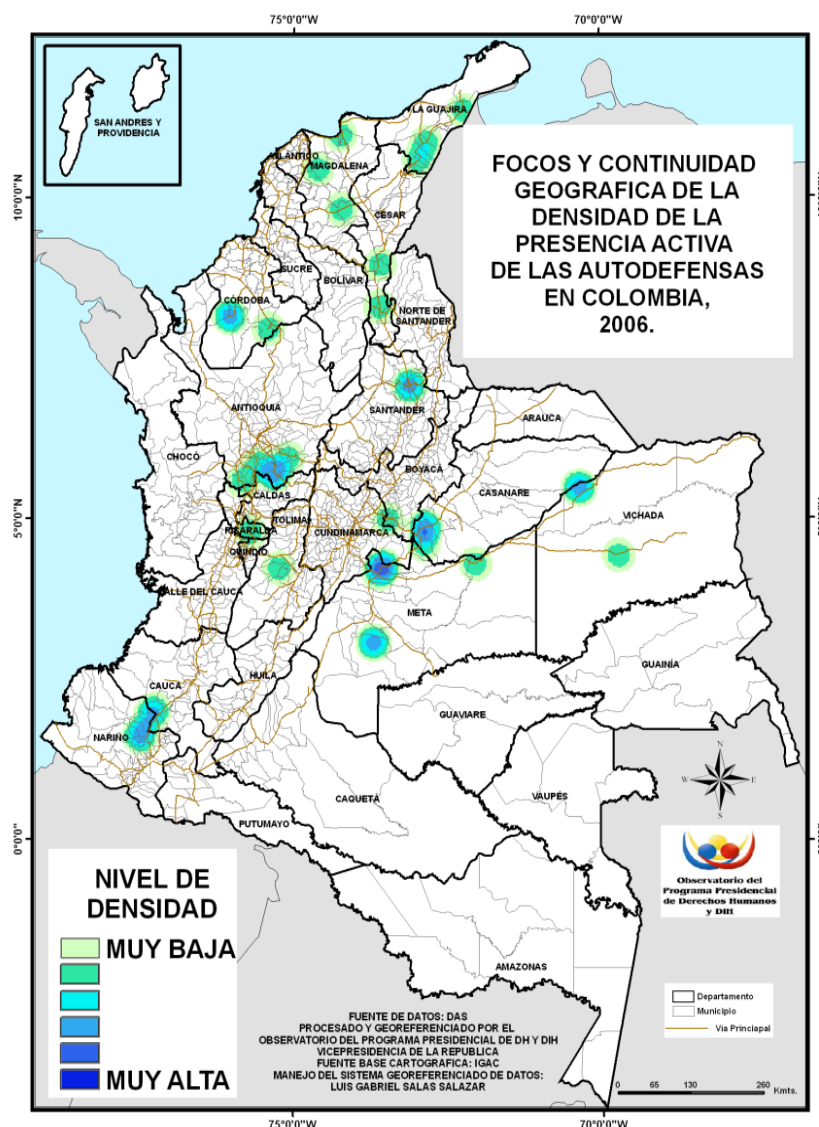
La presencia en La Guajira de esta guerrilla solo va a ser importante entre 2001 y 2002, cuando va a condensar los máximos históricos de presencia en este departamento. De las 16 acciones que va a protagonizar, 7 se van a dar en cuatro municipios con alta presencia paramilitar como son Barrancas, Dibulla, Urumita y Riohacha. Así, el año 2002 también marca un punto de inflexión de retirada de la guerrilla en el departamento pues, desde finales de 2003 no se volverá a registrar presencia alguna en el departamento.

Por último, en Magdalena, las acciones guerrilleras del ELN nunca fueron preponderantes. Desde 2002 no se volverá a registrar presencia de este grupo en el departamento y, en sus años más activos, entre 1998 y 2001 se alcanzan las 21 acciones guerrilleras. Acciones que, en dos terceras partes, van a coincidir con municipios de influjo paramilitar como son los casos de Arataca (1), Ariguaní (2), Ciénaga (6), Fundación (3), Pivijay (1), Santa Marta (1). Influjo paramilitar que solo entre 1998 y 2002 condensarán en el departamento hasta 37 masacres y 274 muertes lo cual sí que invita a pensar en el socavamiento de las bases sociales de la guerrilla que pueden encontrar en este factor una razón coadyuvante a su desaparición en la región.

En el caso de las FARC se hace mucho más evidente que, a diferencia de lo sucedido con otros departamentos, coincide la presencia de la guerrilla con el BN. En Atlántico, igual que sucediera con el ELN, la presencia guerrillera fue siempre minoritaria mientras que en Cesar, entre 1998 y 2005, la mayoría de las acciones de las FARC se van a dar en cuatro de los cinco municipios con mayor presencia paramilitar del BN. Esto es, en Agustín Codazzi (16), Becerril (9), Curumaní (9) y Valledupar (24). Si bien, como sucediera con el ELN, entre 2001 y 2002 se condensa el mayor número de actividades por parte de las FARC (40), para después caer dos terceras partes en 2003 y desaparecer del departamento a partir de 2006

En cuanto a La Guajira solo en 2002 cabe destacar una presencia significativa de la actividad guerrillera. Del total de 20 acciones protagonizadas por las FARC en ese año – lo cual supone un registro histórico, 15 coinciden con localidades con alta presencia paramilitar como son los casos de Hato Nuevo (1), Riohacha (2), Villanueva (8), Urumita (3) y San Juan del Cesar (1). Desde 2003, las acciones de las FARC decaen tres cuartas partes aunque, siempre coincidiendo con enclaves de influjo paramilitar, como los mencionados, si bien una vez desmovilizado el BN se registrará un segundo incremento sustancial, en el que las acciones de las FARC nuevamente se acercarán a la veintena y sobre los mismos enclaves de disputa que permiten cuestionar, a diferencia de lo que sucedió en Cesar, la verdadera expulsión de este grupo armado en el departamento.

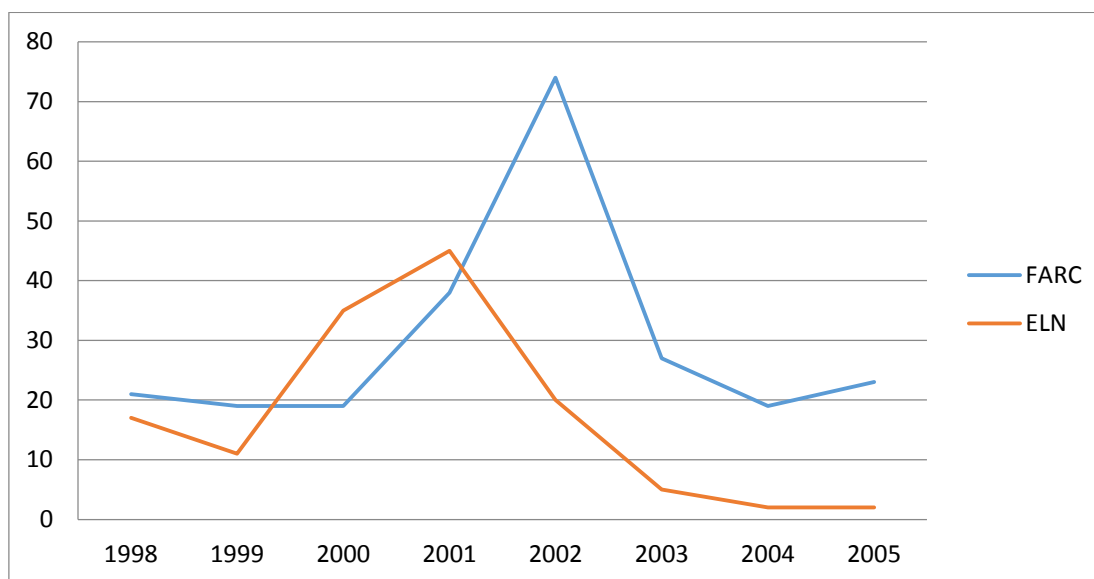
Mapa 67: Presencia activa de las AUC en 2006



Fuente: ODHDIH (2014)

Finalmente, en lo que se refiere a Magdalena también es en los años 2001 y 2002, como con el ELN, cuando se concentra el mayor número de actividades guerrilleras (44) y como sucedía en aquel caso, la mayoría coinciden con enclaves de influjo paramilitar. Así, en estos dos años se registran 14 acciones guerrilleras en Zona Bananera, 10 en Ciénaga, 8 en Fundación y 6 en Ciénaga. Serán los años de mayor recrudecimiento, pues las masacres paramilitares en el departamento también se incrementarán. Sin embargo, no se temrina por experimentar una desaparición en cuanto a un activismo guerrillero que no temrina por hacerse patente hasta el año 2008.

Gráfico 26: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BN, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Es decir, el impacto del BN sobre las FARC y sus enclaves de control territorial, puede decirse, genera una suerte dispar pues salvo en el caso de Cesar, en el resto de departamentos se mantienen unos niveles de activismo guerrillero más o menos estables y que incluso, como en La Guajira o Magdalena repuntan una vez se desmoviliza el bloque paramilitar. Es más, entre 2005 y 2006, las acciones de las FARC en La Guajira pasan de 4 a 16, mientras que en Magdalena lo hacen de 1 a 7, toda vez que en Atlántico se recogen 3 acciones guerrilleras anuales – el mayor registro en la década- entre 2004 y 2006.

3.5. Bloque Catatumbo (BCat)

El BCat se conforma en 1999, según Salvatore Mancuso, por el interés de ingresar en la región a través del sur de Cesar y forzar una eventual negociación del ELN con el gobierno de Andrés Pastrana si bien, la región, en realidad, suponía un enclave prioritario por la conexión con uno de los mayores escenarios de producción de coca del país.

El propio Iván Laverde Zapata, “Rodrigo Doble Cero”, reconoció que la intención de la casa Castaño, en el fondo, era la de apoderarse de los medios financieros de la subversión (CNMH, 2013: 50).

El bloque, como el propio Mancuso (2006) narra, llegó a operar en cerca de cincuenta municipios, lo cual supone la práctica totalidad del departamento con la excepción de los municipios de El Carmen y Teorama. No obstante, los principales municipios afectados por la presencia paramilitar fueron, la capital departamental, Cúcuta, El Zulia, El Tarra, Tibú, Salazar, Sardinata y Villa del Rosario. Estos cinco departamentos, por ejemplo, son los que concentraron las masacres del bloque, entre 1999 y 2003, cuando se acumularon hasta 23

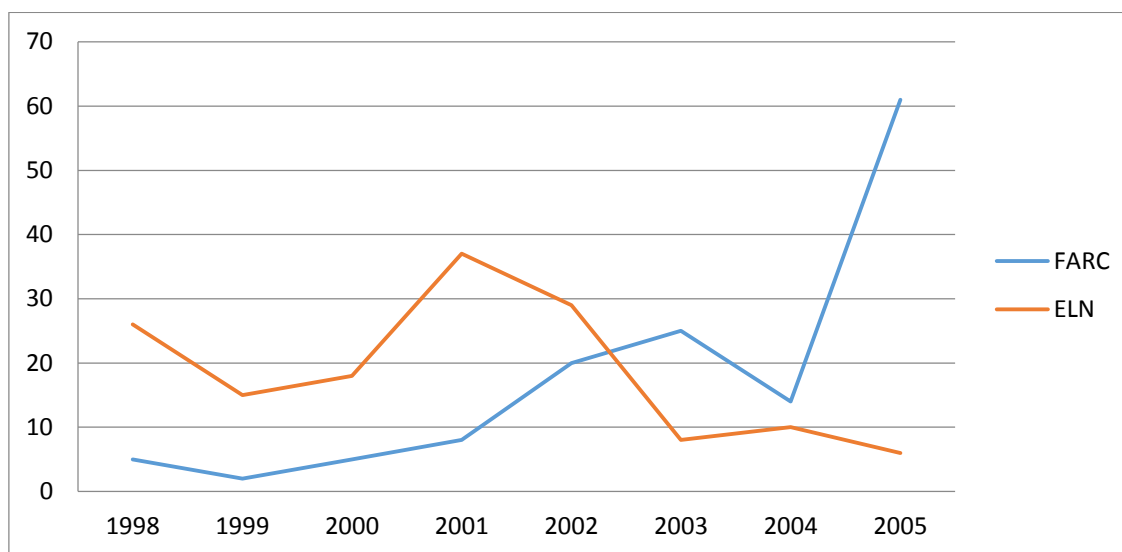
masacres y un saldo de 188 muertos, coincidentes con los años de mayor desplazamiento forzado.

En lo que respecta a las FARC, especialmente entre 1998 y 2001 su presencia en el departamento fue muy reducida, de manera que en ningún caso se superaron las 8 acciones y siempre de manera dispersa a excepción de en Tibú, la localidad por antonomasia productora de coca en la región del Catatumbo. Sea como fuere, desde 2001, la presencia guerrillera va a pasar a desarrollarse sustancialmente. En 2002 se van a registrar 20 acciones de las FARC, de las cuales tres cuartas partes se van a dar sobre enclaves de presencia paramilitar, especialmente en Tibú y en Cúcuta. Sin embargo, lejos de remitir, en 2003, las acciones van a ascender a 25, de las cuales 18 repiten nuevamente municipios de disputa con el paramilitarismo, y aunque en 2004, una vez desmovilizado el BCat, las acciones de las FARC van a caer a 14, un año después van a registrar un máximo, hasta ese momento histórico, de 61 acciones guerrilleras. Un registro que relega la posibilidad del paramilitarismo de terminar con las FARC en el departamento y, por tanto, aceptar, como en los casos anteriores, su factor de expulsión en la región.

Nuevamente, con el ELN sucede todo lo contrario. Entre 1998 y 2002 opera como el grupo más importante y, precisamente, como se recordará, el motivo por el cual el BCat surge para contrarrestarlo. Protagoniza en esos cinco años, en cifras estables, hasta 133 acciones guerrilleras que tienen lugar en casi todo el departamento pero, en torno a la mitad se dan en las localidades de El Tarra, El Zulia, Cúcuta, Tibú y Sardinanta. Todos, municipios con fuerte presencia del BCat en estos años. Sin embargo, si las FARC hacia 2003 evidencian un proceso de fortalecimiento y protagonismo creciente, en el ELN las acciones decaen a mínimos históricos, de una decena de acciones al año, especialmente entre los años 2003 y 2004. Además, tras ello el ELN queda al borde de la inacción, y habrá que esperar a una leve recuperación que no llegará hasta 2009⁴¹⁴.

⁴¹⁴ En 2005 y 2006, las acciones del ELN caen a mínimos históricos. Por ejemplo, se recogen 2 acciones del ELN en todo el departamento de Norte de Santander – El Tarra (1) y Sardinata (1), si bien el activismo estará recompuesto desde 2009, como muestran las 22 acciones guerrilleras llevadas a cabo, ODHDIH (2014).

Gráfico 27: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCat, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

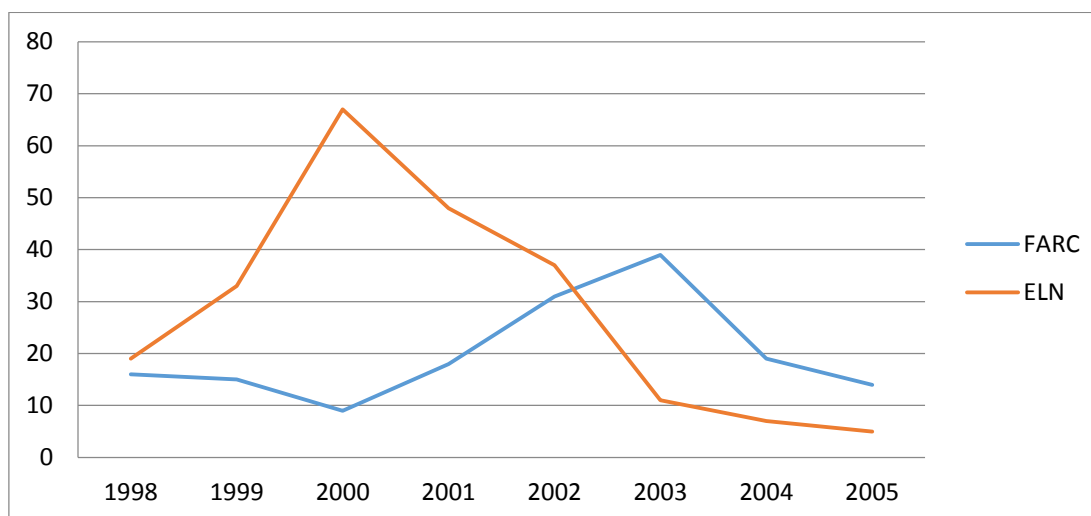
Tal vez, y a diferencia de las FARC cabe pensar en un proceso de debilitamiento en el que, junto al impacto de los operativos de la Fuerza Pública, pudo tener que ver de manera directa el factor paramilitar como consecuencia de que, a tenor de lo planteado en este capítulo y en algunos testimonios recogidos, la propia filosofía y relación con la población civil le hace más vulnerable al desplazamiento forzado y al despojo de tierras que en el caso de las FARC.

3.6.El Bloque Metro (BM)

El BM surge en 1997 como parte de las ACCU, y a diferencia de otros grupos, su principal fuente de financiación no va a estar en el narcotráfico sino en la extorsión y en el contrabando de gasolina. A tal efecto, se entiende su control sobre la carretera que unía Bogotá y Medellín, y su proximidad a diferentes bandas criminales antioqueñas. Existen consideraciones de que hacia inicios de la década pasada el BM albergó a narcotraficantes que terminaron por enfrentarlo, y hacerlo desaparecer, frente a dos poderosos grupos de autodefensa como fueron el BCB y el Cacique Nutibara.

El primer enclave de control de este bloque de las AUC se encontró en el nordeste antioqueño, donde entre 1998 y 2003 se piensa que protagonizó hasta 47 masacres con el saldo de 381 víctimas mortales que, nuevamente, coinciden con los registros de mayor desplazamiento forzado de la región. Así, se destaca su presencia en Remedios, Vegachí, Yolombó, Yalí, para a partir del año 2000, sobre todo, operar a lo largo del oriente antioqueño, incorporando como localidades de su ámbito de acción los municipios de San Carlos, Alejandría, Sabanalarga, Caracolí, Barbosa, Montebello, Granada, San Rafael, San Vicente, Santa Rosa de Osos, Támesis, El Peñol, Marinilla, Maceo, San Luis y San Francisco.

Gráfico 28: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BM, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

De estos 20 municipios antioqueños, el ELN mantenía una fuerte presencia, sobre todo, en diez de ellos – Barbosa, Granada, Marinilla, El Peñol, Remedios, San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael y San Vicente, y más esporádicamente en Maceo, Montebello, Vegachí y Yolombó⁴¹⁵.

Así, entre 1998 y 2003, en esta región del país el ELN concentró hasta 154 acciones guerrilleras si bien, durante este lapso, la guerrilla reduce sustancialmente el número de acciones, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. En Antioquia las acciones del ELN pasan de 94 en el año 2001, a 15 en 2003 del mismo modo que en esta región del país se pasan, respectivamente, de 36 a 1, de manera que sí que cabe inferir una influencia del paramilitarismo como factor de expulsión.

Para el caso de las FARC, entre 1998 y 2003 se concentraron 91 acciones protagonizadas por las FARC y si bien, de los 20 municipios, 15 tuvieron algún tipo de presencia de las FARC, lo cierto es que solo se puede destacar una importancia local de las FARC en San Carlos (27), San Luis (20), San Rafael (14) y Granada (9), San Francisco (6).

No obstante, el factor de expulsión sobre las FARC no adquiere las dimensiones de las descritas con el ELN. Primero, porque la presencia local de las FARC, especialmente en San Carlos, San Francisco y San Rafael persistió en los años siguientes, al menos, hasta 2008.

⁴¹⁵ En algunos casos la presencia de este bloque coincidió con la presencia del BcB, analizado con posterioridad y detalle, en este capítulo, y el Bloque Cacique Nutibara fue dirigido por Diego Fernando Murillo, alias “Adolfo Paz”, con gran arraigo en Medellín, al ser heredero en buena medida del Cartel, y, por extensión, sobre municipios aledaños como Bello, Envigado, Guarne o Itagüí, activo entre 2000 y 2003. Llegó incluso a tener hostigamientos con el BM, también de las AUC por el control del narcotráfico en torno a Medellín.

De otro lado, si en 1999 las FARC estaban por detrás del ELN en nivel de activismo guerrillero, protagonizando 41 acciones guerrilleras, se mantuvo inalterado con, tendencias crecientes, y que no han remitido hasta la actualidad, aunque sí es cierto que la presencia de la guerrilla en esta parte del departamento ha caído a niveles considerablemente reducidos.

De hecho, si se atiende el gráfico anterior, se puede dar cuenta de qué manera, hasta 2003, y desde el año 2000, los años de mayor activismo paramilitar se traducen con tendencias crecientes en el activismo armado de las FARC, que solo decae una vez desmovilizado el bloque paramilitar, y en buena medida, por el mayor impacto que en esta región de Antioquia conlleva la PSD.

3.7.El Bloque Centauros (BCen)

El BCen es el resultado de la agrupación de los paramilitares que en 1997 los hermanos Castaño reorganizan para disputarle el control de las tierras cocaleras a las FARC, donde además, con mayores evidencias, se va a forjar un proceso de expulsión del campesinado. Así, el BCen va a desarrollarse, especialmente, hasta 2001, que es cuando llegan a la comandancia tanto Miguel Arroyave como Diego Rendón, “Don Mario”, que pasaron a dominar buena parte del negocio de la droga en el departamento. Ello, hasta 2004 que muere Arroyave por sus propios hombres, y un año después se desmoviliza el bloque si bien, una parte liderada por Pedro Olivero Guerrero, ‘Cuchillo’, continuó con la actividad delictiva a través de la Bacrim conocida como ERPAC. Bacrim activa en el límite de Meta y Casanare, al menos hasta la muerte del mismo, por acción de la Fuerza Pública, en diciembre de 2010.

Durante los años de existencia del BCen, su influencia se expandió por la mayor parte del departamento de Meta, sobre todo en los enclaves cocaleros del mismo y con la excepción de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. También extendieron su influencia a San José del Guaviare y Miraflores, en Guaviare y a Vichada –Cumaribo, Cumaral, Puerto Carreño y La Primavera. También hubo presencia, menor, en el norte de Tolima, y en el límite con Casanare.

Los principales núcleos de presencia de este BCen fueron El Castillo, Lejanías, Villavicencio, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Cumaral en Meta. Asimismo, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores en Guaviare; Cumaribo y La Primavera en Vichada; Cunday en Tolima, y Chipaqué en Cundinamarca. Así, estos 13 municipios, entre 1998 y 2005 sufrieron hasta 22 masacres que dieron lugar a 112 víctimas mortales siendo especialmente virulentos los años que transcurren entre 2001 y 2004.

Para el caso del ELN, nunca hubo registro alguno de activismo guerrillero en el departamento de Meta. Cosa bien diferente para el caso de las FARC, para quien Meta siempre constituyó un enclave de alto valor agregado. Tal vez porque durante el proceso de negociación, parte del departamento de Meta sirvió para conformar la conocida zona de despeje, entre 1998 y 2001, se computan un total de 88 acciones guerrilleras, que son ampliamente superadas desde 2002 en adelante. Ese año las acciones de las FARC ascienden a 87 y se mantienen en

términos estables hasta 2005. En 2006 las acciones caen a 41, y siguen cayendo los siguientes años para llegar casi a una ausencia de activismo guerrillero en 2008 si bien nuevamente, desde el año siguiente se recupera para mantener estables, y hasta la actualidad, la cifra del medio centenar de actividades guerrilleras.

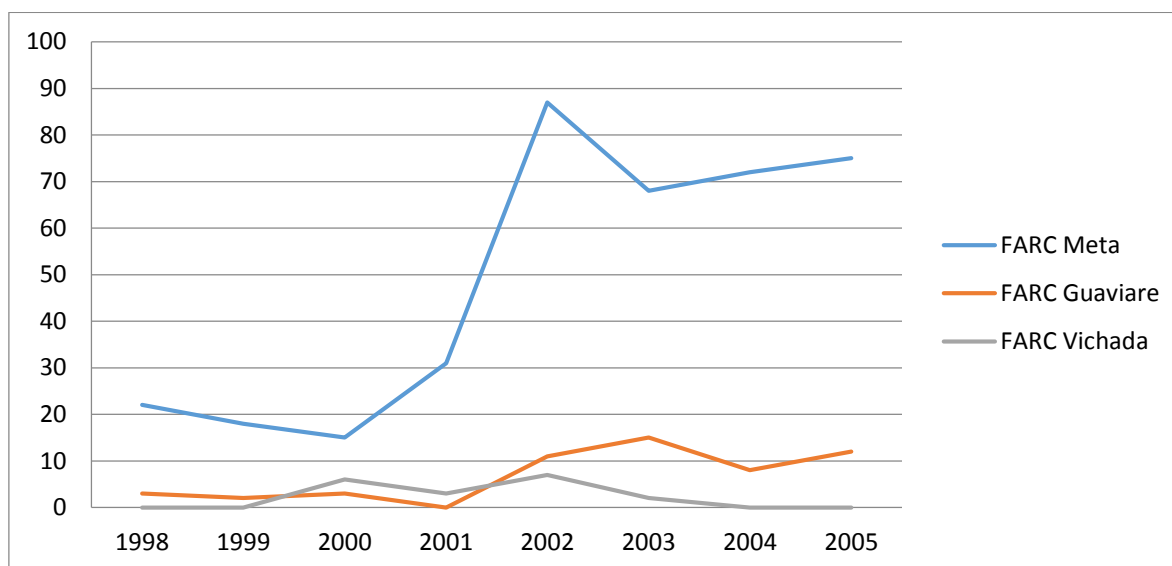
Lo cierto es que de los municipios de Meta más azotados por el paramilitarismo - El Castillo, Lejanías, Villavicencio, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Lleras y Cumaral, entre 1998 y 2005, también sufrieron un elevadísimo acoso de las FARC. Tanto es así que en estos siete municipios, junto con Granada, entre los años que transcurren entre 1998 y 2005 se registran hasta 159 acciones guerrilleras⁴¹⁶. Sin embargo, y a pesar de que las acciones de las FARC decaen a partir de ese año en el departamento, después vuelven a remontar, en Cumaral, El Castillo, Granada y en Villavicencio. Es más, en el resto de municipios mencionados los niveles de presión guerrillera se mantienen inalterados de modo que hacen difícil, si cabe más, aceptar que el paramilitarismo llevase consigo un verdadero factor de expulsión.

En el caso de Vichada, tanto La Primavera como Cumaribo se va a registrar presencia de las FARC, entre 2000 y 2003, aunque nunca hubo presencia guerrillera del ELN y tampoco es que las FARC tuvieran una presencia notable aunque sí estable y continuada tras el fin de la presión paramilitar en Cumaribo.

Por último, en el departamento de Guaviare, el paramilitarismo concentró sus esfuerzos en torno a las localidades de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores, especialmente, entre 2002 y 2004. Para el caso de Miraflores, la presencia y la presión guerrillera siempre fue minoritaria de manera que prácticamente, hasta 2009 es inexistente. Por el contrario, San José del Guaviare, es un bastión local y guerrillero de gran valor aunque entre 1998 y 2002 presenta una débil presión guerrillera, especialmente, por tratarse de una localidad de las cinco que compuso la zona de despeje. Sin embargo, desde 2003, asciende para acumular, hasta 2012, un total de 56 acciones guerrilleras, en un promedio estable de 6 acciones por año que permiten desestimar cualquier atisbo de expulsión de lado de la presión paramilitar. De igual manera, en Calamar hay una tendencia decreciente en el activismo de las FARC, entre los años 2002 y 2004, pero nuevamente se recompone desde 2007, toda vez que en El Retorno se mantienen constantes e inalterados los registros de presencia de las FARC desde 2003 y hasta la actualidad.

⁴¹⁶ Las acciones se desglosan de la siguiente manera: Cumaral (6), El Castillo (25), Granada (16), Lejanías (14), Mapiripán (27), Puerto Concordia (15), Puerto Lleras (28), Villavicencio (28), ODHDIH (2014).

Gráfico 29: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCen, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

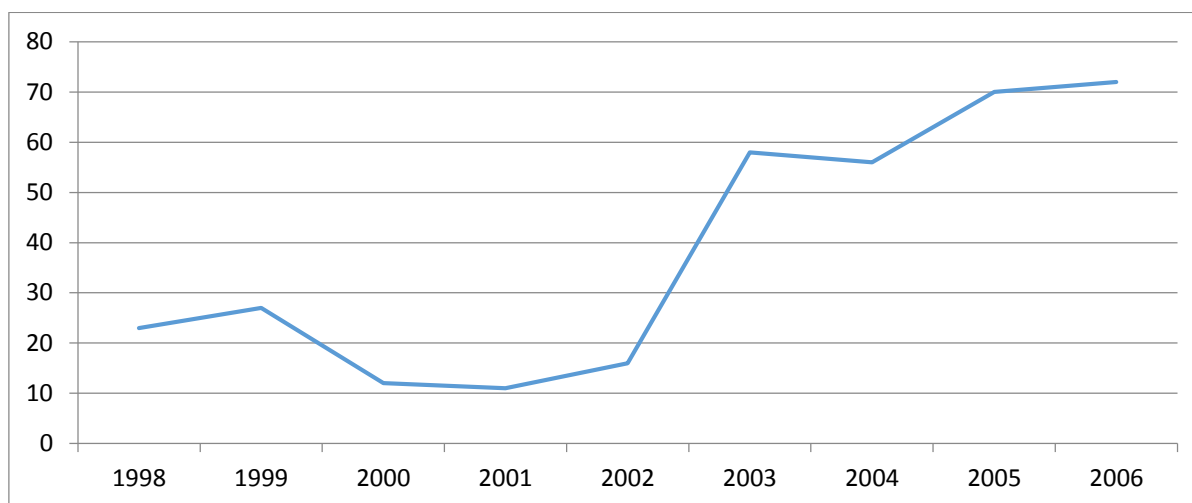
3.8.El Bloque Sur (BS)

El Bloque Sur va a surgir hacia 1996, creado igualmente, como en el resto de casos, por la Casa Castaño. La intención manifiesta del grupo pasa por apropiarse de la ruta del narcotráfico del que se había erigido como el mayor de los productores de coca de todo el país: el departamento de Putumayo. La verdadera presencia del grupo en el departamento tiene como punto de inflexión la masacre de El Tigre y El Placer, en 1999, y que va a persistir hasta el 1 de marzo de 2006, fecha en la cual se desmoviliza el Bloque aunque antes, entre 2000 y 2002, tendrán lugar los años de mayor violencia paramilitar en el departamento.

Los principales ámbitos de acción del BS se van a dar en torno al medio y bajo Putumayo, concretamente sobre los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, seis municipios que en seis años protagonizaron hasta 18 masacres con un bagaje de 236 víctimas mortales y que suponen la realidad del grupo más sanguinolento de todos, al presentar el preocupante promedio 13.1 muertes por masacre, y a lo que se añade una importante presencia, en otros municipios aledaños como, sobre todo, es el caso de Puerto Gumzán.

Sin embargo, entre 1998 y 2006, precisamente, lejos de remitir la presión guerrillera, lo que se evidencia es un incremento cualitativo y cuantitativo a modo de presencia de las FARC. Tanto es así, que si entre 1998 y 2002 en Putumayo se daban entre 25 y 30 acciones guerrilleras, en el período posterior, de 2003 a 2006 se elevan a 75 acciones que, tras decaer en 2007 y 2008, nuevamente superan, de manera constante y hasta la actualidad. Por su parte, nunca se registró presencia activa destacable del ELN.

Gráfico 30: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BS, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

En los siete municipios de más activismo paramilitar hubo un 100% de presencia guerrillera. Solo entre 1998 y 2006, tiempo de vigencia del BS, se computan 67 acciones guerrilleras en Puerto Asís; 62 en Valle del Gamuez; 74 en San Miguel; 92 en Orito; 20 en Villagarzón, 27 en Puerto Caicedo y 10 en Puerto Guzmán. Así, además de evidenciarse un 100% de concurrencia del BS sobre municipios con alta presencia de la guerrilla, nuevamente el factor de expulsión es discutible, especialmente, porque si por un lado la presencia guerrillera fue siempre notable, con el paso de los años, la presencia en municipios y en intensificación de acciones guerrilleras va escalando hasta el punto, tras los años 2007 y 2008, de mantener pautas de continuidad y persistencia inalterables.

3.9.El Bloque Calima (BCa)

El Bloque Calima surge en 1999 también, como los anteriores casos, por iniciativa de la Casa Castaño. Desde el CNMH (2012b: 159) existe una profunda información de cómo el bloque surge por demanda de muchos empresarios de la región de los departamentos de Valle y Cauca y que buscaban protección frente a la guerrilla, y también por demandas explícitas del cartel del norte del Valle⁴¹⁷ que encontró en el paramilitarismo una perfecta fuente de protección (López, 2008).

El ámbito de acción, hasta diciembre de 2004 que se produce la desmovilización, se va a desarrollar prácticamente en todo el departamento de Valle, buena parte del norte de Cauca más focos en el sur de Huila y Quindío. En estas regiones, en apenas cuatro años se van a registrar hasta 45 masacres y 323 muertes.

⁴¹⁷ El cartel del Norte del Valle sobrevivió a la desaparición de Medellín y Cali para controlar el negocio del tráfico de drogas y las rutas hacia México, Venezuela, Europa y Estados Unidos.

En el caso del departamento de Cauca, el BCa va a focalizar su presencia, sobre todo, en el norte, en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Corinto; en la región central, en torno a la capital, Popayán, El Tambo, Patía y Timbío; y al sur en Piamonte. En todos los municipios, durante los años de expansión paramilitar se va a recoger presencia más que notable de las FARC, especialmente en El Tambo (23), Corinto (21), Santander de Quilichao (19) y Patía (14); en menor medida en Popayán (8) y Timbío (7) y va a ser mucho menos relevante en Suárez (5) y Piamonte (3). En todo caso y mayormente, serían, como se vio en capítulos anteriores, de enclaves caracterizados por una notable presencia de cultivos ilícitos.

Nuevamente se cuestiona el factor de expulsión del paramilitarismo sobre una guerrilla como las FARC, que ha terminado por convertir a Cauca en su principal escenario de acción. Si entre 1998 y 2001 las acciones de esta guerrilla giran en torno a la treintena de acciones armadas, éstas se triplican en los años siguientes, incluso, llegando a las 150 acciones anuales, tal y como sucede entre 2003 y 2005. Tras decaer a las 70 acciones guerrilleras, nuevamente, desde 2010 se atiende a un proceso irrefrenable de presencia y activismo guerrillero que, cada vez más, se acerca a las 200 acciones armadas anuales.

Tanto es así que todos los municipios que tuvieron presencia del BCa, en ningún momento experimentaron una reducción de la presión armada. En todos, desde 1998, se evidencia una continuidad dominante, que incluso, en casos como Suárez, o sobre todo Corinto, ha terminado por recrudecerse en los últimos años.

En lo que respecta al ELN, el norte del departamento de Cauca nunca fue su prioridad de modo que la lógica de presencia paramilitar del BCa en esta parte del departamento le apunta claramente a las FARC. En cuanto a la región central, es donde más se evidencia su activismo guerrillero, especialmente entre 1998 y 2001, cuando se acumulan 8 acciones guerrilleras en Popayán, 2 en Timbío, 3 en Patía y, finalmente, 1 en El Tambo. Lo cierto es que coincidiendo con la presencia y expansión paramilitar, el ELN sí que experimenta una reducción notable, y creciente, sobre todo desde 2001 y que se extiende a 2004, cuando se acumulan los registros históricos de inacción de la guerrilla en el departamento, coincidiendo con la falta de activismo en todos estos municipios. De hecho, desde entonces y hasta casi 2010, el ELN queda relegado a un plano muy marginal aunque hasta la actualidad parece haberse reactivado con el recrudecimiento de la violencia en el departamento y con el fortalecimiento del ELN en parte de la región del Pacífico. De hecho, en los últimos años tiempo acumuló hasta 17 acciones, la gran mayoría en la región central y en torno a Popayán y sus municipios colindantes.

Finalmente, en lo que afectaría al Valle del Cauca, aunque el paramilitarismo se va a expandir con fuerza a lo largo de todo el departamento, va a ser especialmente incisivo en los municipios de Buga, Bugalagrande, San Pedro, Tuluá, Sevilla, Buenos Aires, Calima del Darién, y Jamundí.

Entre 1998 y 2002 el Valle del Cauca ni mucho menos aparece como uno de los departamentos con mayor activismo guerrillero. De hecho, el cartel del norte del Valle, unido al paramilitarismo se van a consolidar como agentes disuasorios de clara importancia⁴¹⁸. Así, en estos años, las acciones de las FARC, por ejemplo, se sitúan en las 15 acciones anuales. Es más, en estos cinco años, solo en Tuluá se aprecia un activismo importante, al acumularse 9 acciones guerrilleras; siendo residual la presencia en Buga (3), Sevilla (3) y Jamundí (4) e inexistente en el resto de municipios.

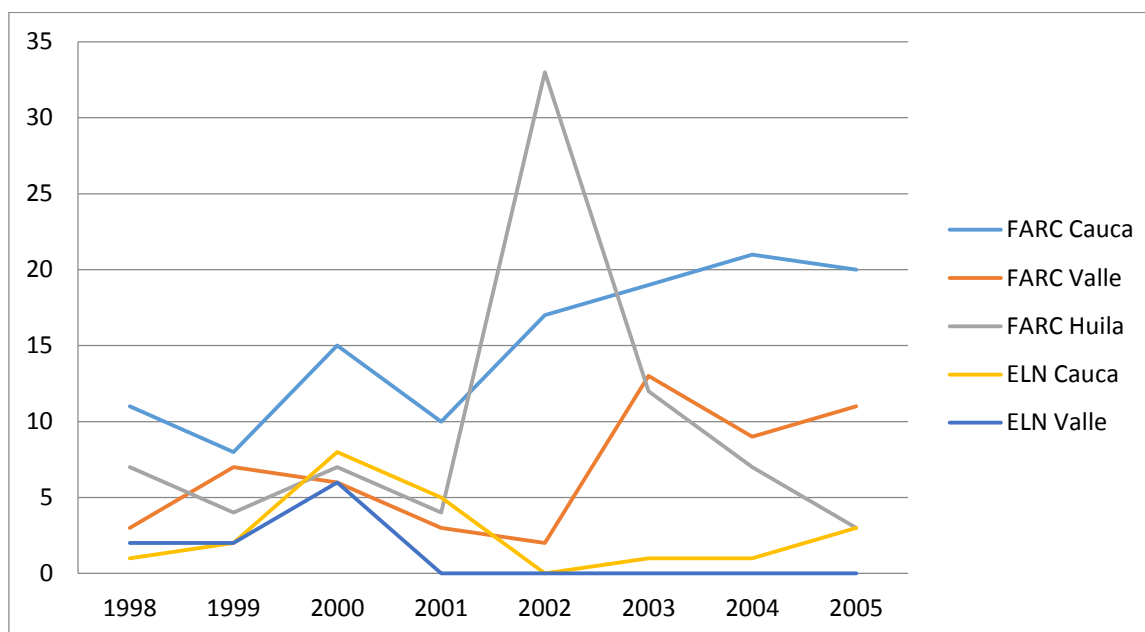
En otras palabras, durante la emergencia del BCa, salvo Tuluá, los enclaves de disputa de control territorial sobre la guerrilla son poco coincidentes, y allí donde coinciden son poco significativos. Sorprendentemente, pudiendo ser por esta circunstancia, desde 2003 y hasta 2007, el departamento experimenta un crecimiento sin precedentes del activismo guerrillero. De hecho, las acciones insurgentes de las FARC se triplican y casi llegan incluso al centenar, en el año 2006. Durante este tiempo, de paulatina desmovilización del paramilitarismo se evidencia un resultado de relativa sorpresa al incrementarse la fuerza de la guerrilla.

Sin embargo, ese crecimiento no es ni mucho menos sustancial en los municipios de mayor influencia del paramilitarismo. Esto es, salvo Tuluá (27), el resto de municipios encuentra poco afectados los registros de activismo de las FARC hasta que en 2010 se intensifica el accionar guerrillero, cuestionando la desaparición de las FARC del departamento. De esta manera, entre 2010 y 2012 se acumularon 2 acciones guerrilleras en Bugalagrande, cuando en los doce años anteriores se dieron 3; 7 acciones en Jamundí, 5 en Tuluá - después de que las FARC hubieran desaparecido del municipio desde 2007- o 7 en San Pedro, cuando en los últimos diez años solo se registró una sola acción guerrillera.

En cuanto el ELN, el factor de expulsión paramilitar sí que puede vislumbrarse de mayor manera, pues desde el año 2000 desaparece del departamento, habida cuenta especialmente de que su centro de operaciones era Cali, donde tanto el incremento de la política de seguridad, como los medios de la violencia derivada del narcotráfico y el paramilitarismo van a confluir a efectos de materializar a su rápido desmantelamiento.

⁴¹⁸ De hecho, desmovilizadas las AUC, el cartel del Norte va a controlar dos estructuras pos-paramilitares como Los Rastrojos y Los Machos.

Gráfico 31: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BCa, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en el departamento de Huila la presencia paramilitar fue importante, por ejemplo, en el municipio limítrofe departamental de Pitalito, masacrado en 2002, y que tradicionalmente siempre tuvo presencia de las FARC. Una presencia que incluso llega a las 10 acciones guerrilleras en el mismo año 2002, y que mantiene niveles importantes en los siguientes años, especialmente entre 2003 y 2004 y que si bien es cierto, desaparecen desde 2005, nuevamente desde 2010 y hasta 2012 parece haberse reactivado el foco de presencia guerrillera en la localidad. Los municipios de mayor impacto de este BCa en Huila fueron Gigante, Elías, Guadalupe, Acevedo, Pitalito, San Agustín e Isnos, igualmente de arraigo guerrillero pero poco importantes en la geografía de la violencia de las FARC a nivel departamental – con las excepciones, sobre todo, de Pitalito y Gigante⁴¹⁹-.

3.10. *El Bloque Pacífico (BP)*

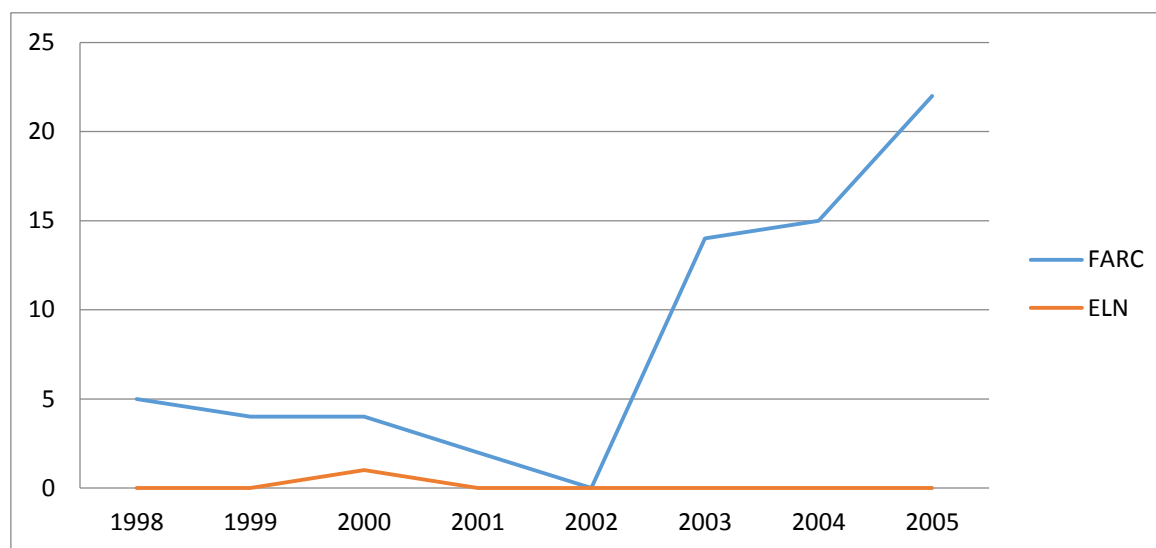
El Bloque Pacífico inicialmente surge inicialmente dentro del BCa pero a partir del año 2000, los hermanos Castaño deciden venderlo al conocido narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, “Gordolindo”, que adquiere la facción paramilitar para crear un bloque autónomo que actuará por cuenta propia hasta su desmovilización, el 23 de agosto de 2005.

Un grupo paramilitar concentrado en torno a la ciudad de Buenaventura, la cual supone el puerto más importante del Pacífico colombiano, por encima de Tumaco, y que va a

⁴¹⁹ Entre 1998 y 2005, Pitalito y Gigante acumulan, respectivamente, 26 y 28 acciones guerrilleras, ODHDIH (2014).

concentrar 15 masacres, con un resultado de 121 mortales. Los mayores niveles de violencia en Buenaventura, de parte del paramilitarismo, se darán en 2001 y 2003, coincidentes con los años de mayor impacto del desplazamiento forzado, y en la que igualmente es la segunda ciudad más importante del departamento de Valle del Cauca.

Gráfico 32: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BP, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Esta ciudad, durante todo este tiempo va a encontrarse hostigada igualmente por las FARC y aun con una notable presencia guerrillera, las acciones de la guerrilla entre 1998 y 2002 apenas asciende a 4 acciones armadas de promedio al año. Sin embargo, desde 2003 y hasta 2005, mientras se mantiene activo el BP en Buenaventura, estas acciones ascienden hasta casi la veintena y tras la desmovilización, en 2005, en el año siguiente se experimenta un aumento si cabe mayor, al contabilizarse hasta 46 acciones guerrilleras. Un volumen que, nuevamente, cuestionaría el factor de expulsión paramilitar. Es más, desde ese año se mantienen elevadísimos niveles de presión armada guerrillera por un período de cuatro años para, desde finales de 2009, paulatinamente ir decayendo hasta las 8 acciones guerrilleras en promedio⁴²⁰.

Más allá del factor de expulsión, el municipio evidencia una práctica que se ha terminado por consolidar en muchos otros enclaves donde el paramilitarismo surgido a finales de los noventa e inicios de la década pasada no se terminó por desmovilizar y se redefinió a modo de Bacrim. Así, ambos actores en la actualidad mantienen una relación criminal cooperativa

⁴²⁰ Si en 2005 se computan 22 acciones de las FARC, éstas aumentan a 43 y 29, respectivamente, en 2006 y 2007. Entre 2008 y 2010 se acumulan 38 acciones guerrilleras, que han ido decayendo a 17 acciones – una cifra nada desdeñable- entre 2011 y 2012, ODHDIH (2014).

que, igualmente se encuentra en muchos otros departamentos como Norte de Santander, Arauca o Nariño.

3.11. *Bloque Libertadores del Sur (BLS)*

El BLS también es creado por los hermanos Castaño, en esta ocasión, a partir de 1999, como buena parte de los anteriores, dentro de su plan de expansión de las AUC al resto del país, y una vez consolidada su posición en el norte del país. El BLS se organizaba en torno a tres frentes en este departamento de Nariño – Héroes de Tumaco y Llorente, Lorenzo Aldana y las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, y su financiación provenía tanto de la extorsión como del narcotráfico

Solo en Tumaco, Barbacoas, Samaniego, Ipiales, Túquerres y La Unión, el BLS protagonizó, entre 1999 y 2005, hasta 16 masacres con el resultado de 125 muertos, especialmente intensas entre 2001 y 2003. Además, hubo un importante arraigo paramilitar en otras localidades como Francisco Pizarro, Mosquera, Roberto Payán, Llorente, Pasto, Taminango, Ricaurte y Policarpa, Magüí Payán, Olaya Herrera, Santa Bárbara y La Tola.

De los 18 municipios con mayor presencia e influencia paramilitar, durante los años de activismo del BLS, en siete de ellos la preponderancia de las FARC va a devenir elevadísima. Tanto, que entre 1999 y 2005, esto es, en el transcurso de siete años, se registran 15 acciones guerrilleras en Samaniego, 14 en Ipiales, 40 en Tumaco, 22 en Barbacoas, 35 en Pasto, 42 en Ricaurte y 10 en Policarpa⁴²¹.

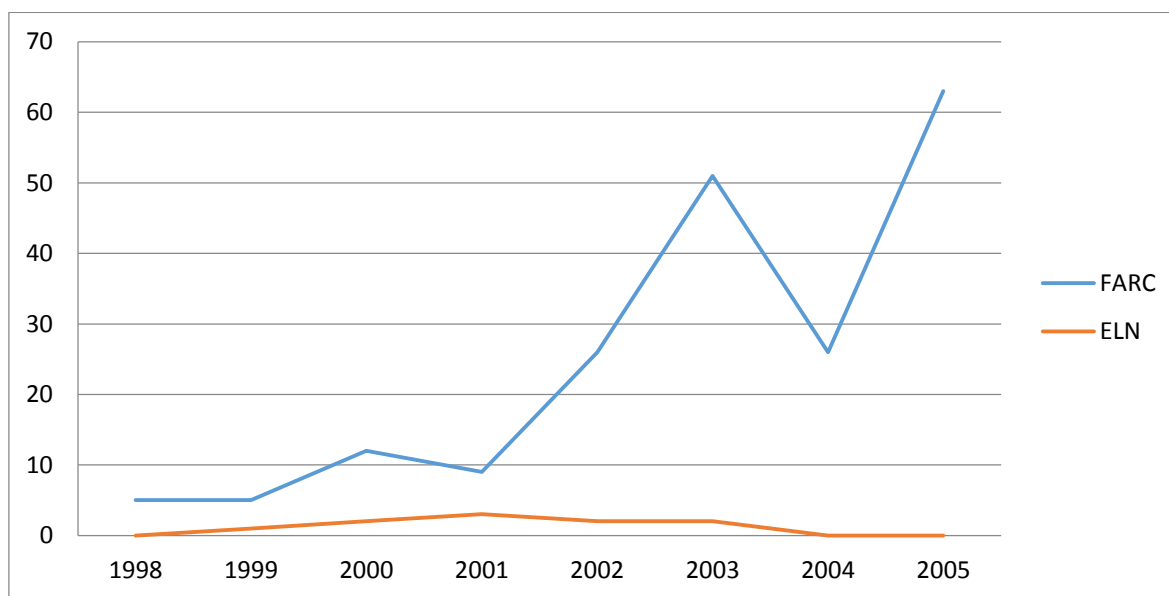
Igualmente, se evidencia una presencia, aunque minoritaria, del ELN, que en estos años experimenta un fuerte declive en su activismo guerrillero que, claro está, pasa por afectar a su presencia armada en el departamento. No obstante, entre 2000 y 2003, que son los años de mayor intensidad del ELN, prácticamente hasta su reaparición en 2010⁴²², se dan hasta 34 actividades guerrilleras, las cuales la mitad se focalizan en los mencionados municipios de Túquerres (2), Taminango (1), Samaniego (8), Barbacoas (1), Tumaco (1), Pasto (2), Ricaurte (1) y Policarpa (1).

Como sucediera en Putumayo, Nariño responde a una prioridad regional en el que el arraigo territorial, las ventajas competitivas, la industria del narcotráfico y la presencia de las FARC es más que notable. De hecho, analizando la evolución de los municipios donde confluyen paramilitarismo y FARC, en ninguno de ellos se aprecia un cambio sustancial en cuanto a los niveles de violencia o persistencia derivada del activismo de la guerrilla.

⁴²¹No obstante, se registra presencia minoritaria en Magüí Payán (1), Olaya Herrera (2), La Tola (5), Taminango (2), Túquerres (1), ODHDIH (2014).

⁴²² Desde 2010 y hasta 2012 el ELN ha protagonizado en Nariño hasta 36 acciones guerrilleras, ODHDIH (2014).

Gráfico 33: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BLS, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

Tanto es así, que los niveles de violencia de las FARC se vieron inalterados en la mayoría de los municipios con presencia paramilitar, primero durante la persistencia del fenómeno y después tras su desmovilización. Es más, el activismo, como muestra el gráfico 44, se intensificó sustancialmente en municipios como Ipiales, Ricaurte, Roberto Payán, Tumaco o Barbacoas – reduciéndose únicamente para el caso de la capital departamental, Pasto

Así, por ejemplo, solo entre 2011 y 2012 se cometieron en Nariño hasta 150 acciones guerrilleras de las FARC, lo cual evidencia y responde a una tendencia *in crescendo* extensiva a todo el departamento. Tanto, que dentro de los municipios mencionados se contabilizaron hasta 90 acciones de las FARC a las que se añade, asimismo, una nueva tendencia creciente del activismo guerrillero del ELN y que debilita la hipótesis de la expulsión de las guerrillas a razón del factor paramilitar.

3.12. Bloque Central Bolívar (BcB)

A inicios de 1999, Carlos Castaño va a buscar crear un bloque paramilitar que ocupe el espacio desde años disputado por ELN y EPL en la región antioqueña de Bajo Cauca y el norte de Antioquia; una región con un especial atractivo de explotación minera y de presencia de cultivos. Así, la incursión se realiza por el sur de Bolívar a partir del año 2000, con la intención de utilizar ambas regiones y articular el poder paramilitar en torno a lo que este mismo año se empieza a conocer bajo el nombre de BcB.

Desde el año 2000, el BcB va a recaer sobre tres nombres, Carlos Mario Jiménez “Macaco”, Iván Roberto Duque “Ernesto Báez” y Rodrigo Pérez Álzate “Julián Bolívar”. Además, con

el fin de fortalecer el activismo paramilitar, los Castaño van a desmontar las Autodefensas de Santander y sur del Cesar, a fin de conformar un bloque paramilitar que verdaderamente sirviera de expulsor de una región con especial arraigo de la guerrilla.

De acuerdo a los registros del CNMH (2014), en cuanto se comprobó la fuerza del BcB, el propio “Macaco” parece ser que le compró el bloque a los Castaño para, con él, centrarse en el control de las rutas del narcotráfico operativas en el norte de Magdalena Medio y en el nororiente antioqueño. Lo que sí parece cierto es que desde finales de 2001 el bloque se desmembró de las AUC, sobre todo, una vez que empieza a manifestarse la voluntad de Carlos Castaño de desvincular el proyecto paramilitar del narcotráfico.

Repitiendo las mismas dinámicas expansivas que los Castaño, el BcB ofrecía sus servicios al narcotráfico de manera que frentes como Vencedores del Sur⁴²³ o bloques como el Vencedores de Arauca van a quedar sometidos al mandato de los nuevos dirigentes del BcB si bien, van a negociar su desmovilización junto con el marco del conjunto de las AUC, tras el pacto de Santa Fe de Ralito⁴²⁴.

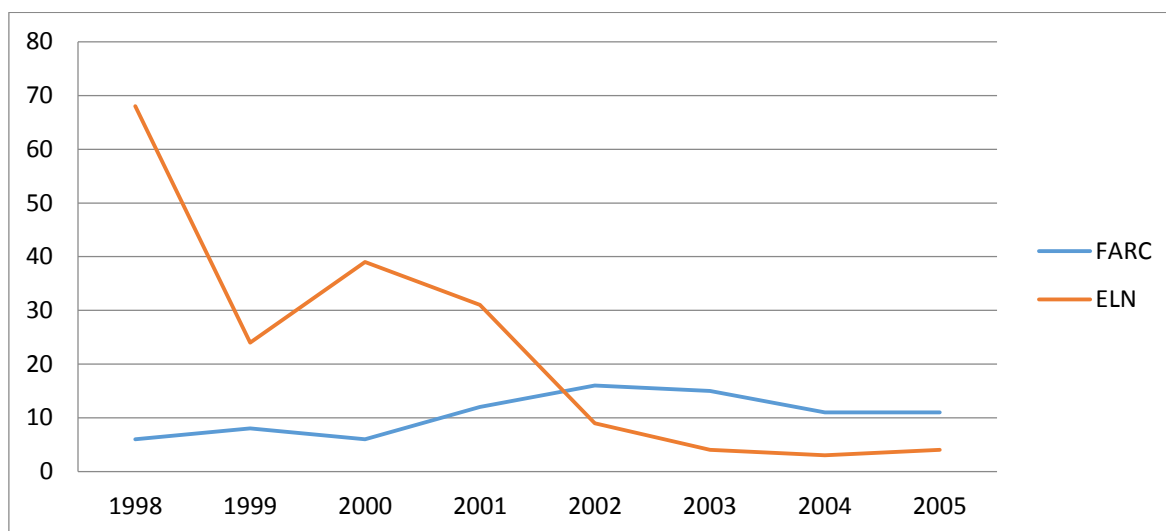
Entre 2000 y 2006 los principales enclaves de presencia del BcB se van a centrar, fundamentalmente, en Barbosa y Barrancabermeja, en Santander; en Quinchía y Dos Quebradas en Risaralda; en San Pablo y Simití, en Bolívar; Valparaíso en Caquetá; Chinchiná, Marmato, Neira, Palestina, Supía, Manizales y Riosucio, en Caldas – donde van a acumular hasta 28 masacres y 177 muertes; y en Antioquia, en las localidades de Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó – en el nordeste antioqueño; y en el Bajo Cauca, en los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.

En lo que afectaría la departamento de Sananteder, respecto de las FARC, la presencia en Barbosa es irrelevante – al igual que el ELN, a diferencia de Barrancabermeja, que sin ser un enclave prioritario, sí es cierto que entre 1999 y 2000 se acumulan hasta 10 acciones guerrilleras que, después desaparecen hasta el período que transcurre entre 2005 y 2007, cuando tiene lugar un pequeño repunte de la violencia que, no obstante, no termina por ser continuado.

⁴²³ El Bloque Vencedores del Sur operaba en el sur de Bolívar.

⁴²⁴ El Pacto de Santa Fe de Ralito – corregimiento de Tierralta, departamento de Córdoba-, fue suscrito el 15 de julio de 2003 por el entonces Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, con las AUC. Ver anexos.

Gráfico 34: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BcB, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

En el caso del ELN y Barrancabermeja es mucho más evidente su posición, a tenor de que se trata quizá, en torno a 1998 y 2000, del enclave urbano más importante desde su creación como guerrilla. De hecho, en 1998 las acciones del ELN en Barrancabermeja llegan a 56 acciones guerrilleras, que decaen a 16 en 1999, que repuntan a 27 en 2000 pero que tras 2001, cuando caen a mínimos históricos de 9 acciones guerrilleras, terminan por desaparecer, en esta ocasión, sí por el impacto que el paramilitarismo va a tener en la ciudad.

Dicho de otro modo, antes de que se configurase el BcB, ya las Autodefensas de Santander y sur del Cesar⁴²⁵, habían protagonizado hasta 7 masacres entre 1998 y 1999, y que habían dejado el saldo de 67 muertos.

Ese mismo factor de no persistencia tras los años del paramilitarismo, tanto del ELN como de las FARC, puede encontrarse en Risaralda. No tanto en el municipio de Dos Quebradas, donde nunca hubo arraigo de las FARC ni del ELN, pero sí en Quinchía, con un fuerte activismo guerrillero, sobre todo en 2003, cuando ascienden a 7 las acciones de las FARC aunque, tras ello, la presencia guerrillera desaparece definitivamente del departamento. Igualmente, entre 1998 y 2002 el ELN mantuvo una acción guerrillera anual si bien, tras la última, en 2002, nunca vuelven a actuar de modo que, en ambos casos, por la coincidencia tanto temporal como espacial, cabe aceptar un posible impacto del paramilitarismo respecto del debilitamiento de la posición de las guerrillas.

⁴²⁵ Este grupo de autodefensa actuó también en Aguachica, entre los años 1999 y 2000, donde había una presencia poco significativa, de las FARC y del ELN.

En lo que respecta a Bolívar, en Simití nunca se registró presencia de las FARC, así como tuvo lugar una presencia mínima del ELN, antes de la presencia del BcB en la región. De la misma manera que en San Pablo, el mayor activismo guerrillero se focaliza entre 2003 y 2007, cuando la localidad acumula hasta 8 acciones guerrilleras de las FARC para, desde entonces, desaparecer del municipio. En lo que afectaría a Valparaíso, la presencia guerrillera, en este municipio de Caquetá, se reduce prácticamente a 2002, cuando se concentran hasta 5 acciones armadas que después, en los años venideros no van a tener continuidad. Asimismo, el ELN nunca hubo registro alguno de actividad.

En el caso de Caldas, la expansión geográfica del BcB se va a concentrar, entre 2000 y 2006 sobre 7 municipios del departamento, sin embargo, lo cierto es que la presencia de FARC y ELN en el departamento, pero sobre todo, en estos municipios, siempre fue minoritaria. De hecho, el ELN apenas llega en esos siete años a 7 acciones armadas – Chinchiná (1), Marmato (1), Supía (1), Manizales (3) y Riosucio (1). Del lado de las FARC, la presencia igualmente es insignificante con la excepción de Riosucio, de tradicional presencia de las FARC y que, por ejemplo, en estos años acumula hasta 12 acciones. Sin embargo, desde 2003, las FARC van a desaparecer de la región que no del departamento lo que evidencia, más bien, un reparto en cuanto al poder territorial sobre Caldas, entre grupos guerrilleros y paramilitares.

En cuanto al nordeste antioqueño, especialmente desde finales de los noventa y hasta 2006, por ejemplo, las acciones de las FARC siempre fueron muy minoritarias. Amalfi, Cisneros, Vegachí o Yalí nunca registraron presencia de las FARC, y en una década el registro apenas fue de una acción guerrillera en Yolombó o Santo Domingo. De hecho, los municipios del nordeste antioqueño donde en estos siete años hubo mayor presencia paramilitar fue en Remedios, en Anorí y en San Roque, aunque siempre por debajo de las cuatro acciones armadas.

Así, la ausencia de las FARC persistió hasta la actualidad en Amalfi, Cisneros, Vegachí, Yalí, Yolombó, Segovia, Santo Domingo y San Roque de modo que el único reducto destacable de las FARC en el nordeste antioqueño fue Anorí, donde especialmente, y solo desde 2010 se viene produciendo una fuerte intensificación de la presión guerrillera. Si en dicho año se contabilizaron hasta 7 acciones guerrilleras, en 2011 las mismas ascendieron a 20 y se mantuvieron en 12 para el año 2012.

Igual sucede con la región de Bajo Cauca, en la que las FARC tampoco nunca presentaron un especial arraigo ni antes ni durante la conformación del BcB. De hecho, solo en Tarazá se puede decir que haya un especial interés de la guerrilla, el cual se intensifica, no obstante, desde 2008, cuando, y hasta diciembre de 2012 se computan hasta 26 acciones guerrilleras.

De acuerdo con la presencia y activismo del ELN, nuevamente parece que el BcB surge más como forma de cooptación y proyecto paramilitar que como razón antisubversiva. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, al igual que las FARC, la presencia del ELN resultó ser muy

minoritaria pues en Cáceres, Caucasia, Nechí o Tarazá, El Bagre o Zaragoza, nunca se superaron las tres acciones por municipio durante todo el transcurso de tiempo mencionado.

Igual sucedía en el nordeste antioqueño, donde el ELN solo mantenía, de los nueve municipios que comportan la región, presencia relevante en Anorí y en Remedios, donde se registran 8 y 13 acciones de la guerrilla a lo largo de la década del 2000. Sin embargo, y como sucede en el resto del departamento, se aprecia una tendencia decreciente tal, que a partir de 2006 prácticamente la guerrilla ya ha desaparecido de todo Antioquia.

Es decir, en lo que afectaría a Antioquia, el factor de posible afectación sobre las guerrillas durante la proyección espacial del BcB, en el caso de las FARC es menos relevante, en primer lugar, porque a inicios de la década pasada, por un lado, no había especial arraigo territorial en la región, y por otro, porque la mayor presencia pasa a constatarse en la segunda mitad de la misma, una vez que se ha desmovilizado el BcB.

En cuanto al ELN sí que, nuevamente, parece haber una mayor coincidencia que invita a pensar en que el BCB coadyuvó a la expulsión de la guerrilla, especialmente en el nordeste antioqueño, toda vez que se trató de una región, igualmente, de fuerte impacto por razón de la PSD.

3.13. *Bloque Vencedores de Arauca (BVA)*

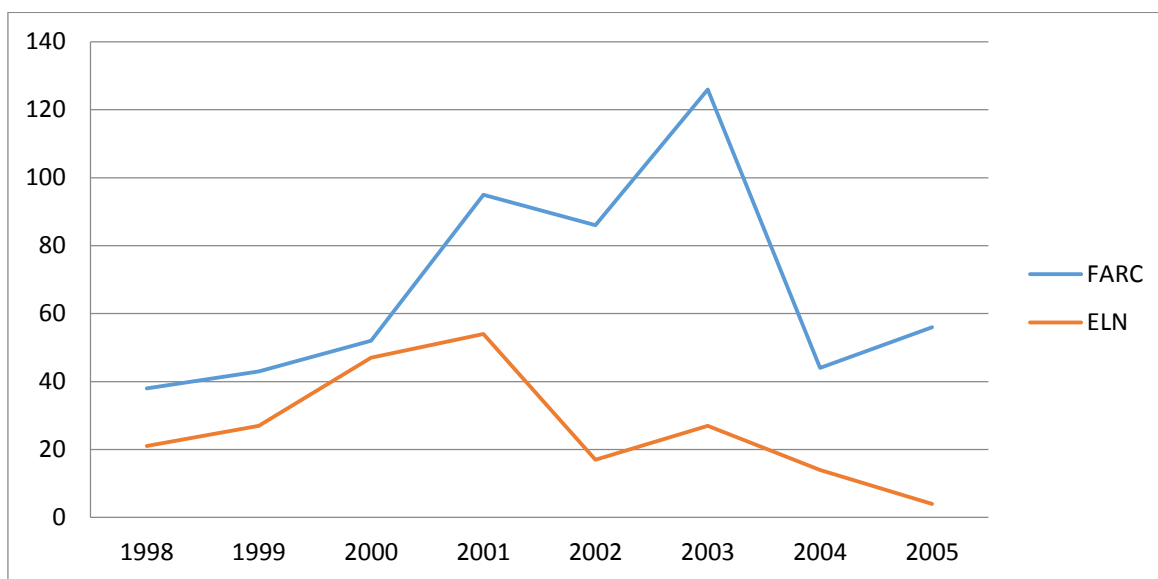
El Bloque Vencedores de Arauca tiene como origen la voluntad de Carlos Cataño, hacia mediados del año 2000, de disputarle el control territorial que sobre Arauca se repartían el Bloque Oriental de las FARC, y buena parte del ELN. La tarea de comandar la creación del paramilitarismo recae, en esta ocasión, en los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía, conocidos como “Los mellizos”. Hermanos que según versiones libres al amparo de Justicia y Paz, compraron la estructura paramilitar por cinco millones de dólares⁴²⁶.

Inicialmente, el bloque surge con 200 combatientes, de los cuales la mitad fueron reclutados en el municipio de Barranca de Upía y la otra parte provenía de parte del BCE, ya mencionado. El grupo va a operar hasta diciembre de 2005⁴²⁷, y focaliza sus acciones de extorsión, despojo y narcotráfico en torno a los municipios urbanos de Saravena, Tame, Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón, y en los enclaves urbanos de Hato Corozal, Tame, Arauca, Arauquita y Puerto Rondón. Su mayor impacto se da entre 2002 y 2004, cuando coincide un incremento exponencial en las tasas de desplazamiento forzado si bien, a diferencia del resto de enclaves descritos, en este caso, permanecen bajo una tendencia expansiva que abarca hasta 2006, en buena medida, por la propia guerra interna que en ese entonces se encuentran disputando FARC y ELN.

⁴²⁶ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3861926> Consultado el 27 de agosto de 2015.

⁴²⁷ Después de la desmovilización en diciembre de 2005, ‘Rubén’ y ‘Los Mellizos’ crearon la banda Los Nevados, que controlaba rutas de narcotráfico hacia Europa, hasta que fueron capturados en el 2008.

Gráfico 35: Evolución del activismo guerrillero durante el control paramilitar del BVA, 1998 - 2005



Fuente: Elaboración propia

El BVA va a protagonizar, especialmente en Arauca, Saravena, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, y a lo largo de los años 2002, 2003 y 2004, un total de 11 masacres que se tradujeron en 84 víctimas mortales si bien, como en la mayoría de los casos, cabe cuestionar el factor de expulsión propio del paramilitarismo.

En el caso de las FARC, porque entre 2000 y 2005, sus acciones mantienen niveles estables, bajo pautas similares a las otras mencionadas. Es decir, los mayores años de activismo paramilitar se condensan mayor número de acciones guerrilleras pero, en 2005, en aras de la desmovilización de las AUC en Arauca, el nivel de presencia sigue siendo de 55 acciones guerrilleras – Tame (22), Arauquita (13), Arauca (9), Fotul (7), Puerto Rondón (2) y Saravena (2)-, esto es, incluso por encima de las 50 acciones guerrilleras recogidas en el año 2000.

Para el caso del ELN, hacia 2005 prácticamente ha desaparecido del departamento, habida cuenta, tal y como se especificó en el capítulo IV de esta tesis doctoral, que se encuentra en un proceso de crisis interna que, ya en 2007 le llevan a no cometer, por ejemplo, ni una sola actividad guerrillera.. Así, las 4 acciones protagonizadas por esta guerrilla en 2005 – Arauca (2), Arauquita (1), Saravena (1)-, van a quedar muy lejos de las 54 acciones del año 2001 o incluso de las 27 acciones de 2003.

4. ¿Son las AUC un fenómeno de expulsión de las guerrillas?

Como se ha podido observar, el impacto del paramilitarismo, desde la institucionalización de las AUC, sobre todo, a partir de 1997 de parte de la Casa Castaño, ha sido muy dispar tanto en su representación espacial en cuanto a la cartografía del conflicto armado colombiano, como en cuanto a su presencia regional. Se podría decir que el alcance verdaderamente de consolidación del proyecto paramilitar solo resulta sobre escenarios concretos del país pues, en muchos otros lugares, el paramilitarismo no llega a representar, ni siquiera, un factor de afectación real a la presencia guerrillera. Así, como se puede ver en el siguiente mapa 76, esos enclaves, mayormente en el norte del país, se concentran sobre la costa Atlántica y sobre el departamento de Antioquia.

Sin embargo, control y consolidación territorial no termina siendo sinónimo de desaparición de las guerrillas, especialmente de las FARC. Por ejemplo, en el caso del BHMM, que se ubicaban en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, la presencia de ELN resultaba muy minoritaria pero, en particular para el caso de las FARC, no solo no se evidencia un factor de expulsión en sentido estricto sobre aquellos enclaves con tradicional arraigo guerrillero, sino que además, éste se consolida una vez que desaparecen las AUC.

Algo similar sucedió con el BEC o con el BB, operativos en torno al Urabá antioqueño y chocoano, y donde igualmente el ELN resultaba poco significativo. Sin embargo, las FARC, con mayor presencia regional, no terminaron por ser expulsadas durante la expansión del fenómeno paramilitar.

La mayor evidencia de la emergencia del paramilitarismo como proyecto criminal se encuentra en la configuración del BN y del BcB. En Atlántico, la presencia guerrillera siempre fue testimonial, tanto de las FARC como del ELN. La guerrilla oriunda de Santander fue minoritaria también en los departamentos de Magdalena, mientras que en La Guajira y Cesar, si bien son mucho más relevantes, casi terminan por desaparecer a partir de 2002, en buena medida, por una yuxtaposición de parte de los mapas del paramilitarismo y, por extensión, de un desplazamiento forzado que tanto socavó sus bases sociales.

Las FARC, mucho más presentes en Cesar, terminan por desaparecer desde 2006, pero no sucede igual ni en La Guajira ni en Magdalena ni en Atlántico. También es evidente esta circunstancia con el BM y BcB, beneficiados por el impacto del primer germen paramilitar de los años setenta, y donde la estructura paramilitar se consolida, prácticamente, gracias a una débil posición de la guerrilla, y un férreo control de las rutas del narcotráfico en torno a municipios como San Pablo, Simití, Valparaíso, Anorí, Remedios, Segovia, Cáceres, Zaragoza o Tarazá. En ambos casos, sí que se observa una paulatina reducción del activismo guerrillero, aunque cabe pensar que coadyuvado por el hecho, como se vio en el capítulo anterior, de que el departamento de Antioquia en su totalidad termina por ser un escenario prioritario durante todo el mandato presidencial de Álvaro Uribe.

A pesar de los cuestionamientos al factor de expulsión que el paramilitarismo termina por hacer respecto de la guerrilla, lo cierto es que desde 1999, la proyección de las AUC sobre la geografía colombiana coincide con enclaves de presencia guerrillera, especialmente de FARC, pero sobre todo, coincide con escenarios de importante arraigo de cultivos cocaleros⁴²⁸. Basta con observar los comportamientos espaciales de BCat, BCe, BS, BCa, BP o BVA.

Sin embargo, y aunque la hipótesis nuclear de este capítulo ha quedado mayormente contrastada, no se quiere finalizar el mismo sin antes atender dos factores que terminaron por afectar las lógicas de la violencia en Colombia hasta la actualidad.

Quizá, una de las evidencias mayores que reposan en la consolidación del factor paramilitar, muy especialmente, en el norte del país, tiene su explicación en la dimensión de las conexiones directas que las AUC van a llevar a cabo con la política de orden local y regional, en lo que termina por ser conocido como la *parapolítica* y cuya representación se condensa, muy especialmente, sobre los referidos escenarios de la costa Atlántica.

Así, cabe interpretarse que tras el poder militar que permite la creación de las ACCU, en 1994, y su redefinición en 1997 en torno a las AUC, el paramilitarismo va consolidando un proyecto de control territorial cuya tercera fase sería un proyecto de consolidación paramilitar a través del proyecto de la parapolítica. Es decir, primero, una fase de poder militar y poder económico. En paralelo, una fase de apropiación espacial y consolidación regional. Y en tercer lugar, quedaba entonces una fase de cooptación del poder local, cuya máxima expresión se puede observar en la consecución de una serie de pactos a continuación referidos.

4.1.El Pacto de Ralito

El Pacto de Ralito⁴²⁹ fue un acuerdo suscrito el 23 de julio de 2001 por algunos de los jefes más significativos de las AUC junto con más de cincuenta políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores cuyo último propósito no era otro que el refundar la patria (López Hernández, 2010)⁴³⁰.

⁴²⁸ Tal y como se ha podido observar, es el caso de Norte de Santander, los Llanos Orientales y la región Pacífico.

⁴²⁹ No confundir con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito (2003) planteado unas páginas atrás.

⁴³⁰ Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (1) hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (2)

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad (3) y tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad (4). Es nuestro desafío.

El nombre de este acuerdo viene del corregimiento de Santa Fe de Ralito, perteneciente al municipio de Tierralta, en Córdoba, y en él toman especial relevancia muchos nombres de la política local y regional que luego engrosaron las firmas del uribismo. Según algunas investigaciones al respecto, por medio de este acuerdo, se albergaba el firme propósito de construir un proyecto político financiado desde el narcotráfico, y que si bien se iniciaría desde la región Caribe, su intención terminaba por expandirse al conjunto del Estado colombiano, como proyecto político *per se*.

De acuerdo a lo señalado en algún punto anterior de esta tesis, el Pacto de Ralito, en el fondo, terminaba por contravenir los intereses de un Carlos Castaño que ya se había distanciado de los propósitos de los dirigentes del BN. Un bloque fuertemente empoderado y distante del inicial propósito paramilitar y que, de hecho, permite dar sentido a las palabras pronunciadas por el propio Carlos Castaño cuando afirmaría: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”⁴³¹.

El Pacto de Ralito, por lo que se sabe terminó por involucrar, como puede observarse en la siguiente tabla, a todo un entramado de dirigentes y políticos pertenecientes a Sucre, Bolívar, Córdoba y Magdalena, y que concetaron muy particularmente con las dinámicas de poder del BN y del BHMM.

4.2.El Pacto de Chivolo

El Pacto de Chivolo, como en el caso anterior, fue un acuerdo suscrito el 28 de septiembre de 2000, entre algunos dirigentes de las AUC con un total de 13 candidatos a alcaldías y otros 395 aspirantes a la Asamblea departamental. Asimismo, suscribieron el acuerdo los concejos de los municipios de Magdalena de Algarrobo, Ariguaní, Chivolo, El Piñón, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Plato, Remolino, San Antonio y Tenerife, lo cual evidencia el importante arraigo local que las AUC cosechaban en el departamento costero de Magdalena.

La iniciativa de este Pacto de Chivolo recayó en la figura de “Jorge 40”, máximo dirigente del BN, dominante en la región, y que fue capaz de unir a más de un centenar de dirigentes políticos y sociales en el corregimiento de La Estrella, perteneciente al municipio magdalenense de Chivolo. Todo, con el firme propósito de posicionar candidaturas políticas tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador.

Tal y como señala Valencia (2009: 330), el punto de encuentro giró en torno a una gran convención del movimiento regional “Provincia Unida por una mejor opción de vida”, y que

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a propender el logro y mantenimiento de la paz (5). Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos.

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.

⁴³¹ Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-renuncia/46515-3> Consultado el 28 de agosto de 2015.

impulsó el propio Tovar Pupo. Así, “en el pacto quedó establecido que Provincia Unida apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y exalcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta”.

La lógica del Pacto de Chivolo fue tal, que el referido Dávila Armenta obtuvo en las elecciones del año 2000 cerca de dos terceras partes al interior de Provincia Unida. Del mismo Pacto salió lo que después conformaría la Asamblea Departamental de Magdalena además del total de las alcaldías magdalenenses de los municipios firmantes, anteriormente señalados. Incluso, se constituyó un nuevo municipio, Zapayán, del cual, igualmente, se controló al que sería su primer alcalde, Franklin Lozano.

4.3.El Pacto de Granada

En el mes de marzo de 2000, en la vereda de Nueva Granada, perteneciente al municipio de Tierralta, en Córdoba, Salvatore Mancuso acordó lo que, desde el Pacto de Granada, determinaría quiénes serían los tres siguientes alcaldes de este municipio. El resultado fue que, por las armas, el paramilitarismo de las AUC iba a conseguir imponer a su candidato, Sigifredo Senior, quien iba a concurrir comocandidato único a la alcaldía en las elecciones del año 2000 e iba a ser sucedido, como efectivamente sucedió, primer por Humberto Santos Negrete y, después, por Aníbal Ortiz Naranjo. Ambos, efectivamente materializados en el cargo⁴³² y acusados por la justicia tras el destape del escándalo de la parapolítica.

4.4.La Cumbre de El Caramelo

El objetivo de la reunión llevada a cabo en el corregimiento de El Caramelo, perteneciente a Tierralta, Córdoba, acontecida en la primavera de 2003, era básicamente que el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, tuviera una reunión muy cercana a varios miembros muy importantes del Congreso, para persuadirlos de la importancia de la negociación y de una futura Ley de Justicia y Paz o proyecto de posibilidad alternativa a la justicia penal, que se cursaría en el Congreso de la República. Al encuentro acudieron, presuntamente, Salvatore Mancuso, Rocío Arias, Representante a la Cámara por Córdoba, próxima a “Don Berna”, Eleonora Pineda, también Representante a la Cámara por Córdoba, Muriel Benito Rebollo, Representante a la Cámara por Bolívar, junto con el exsenador por Córdoba Miguel Alfonso de la Espriella. Todos, condenados por parapolítica.

4.5.El Pacto de Puerto Berrío

Puerto Berrío se trata de uno de los departamentos más importantes de la región del Magdalena Medio, en Antioquia, en el que tradicionalmente hubo un importante arraigo paramilitar desde finales de los setenta e inicios de la década de 1980. De hecho, durante muchos años fue un enclave de tradicional control del BcB, con “Ernesto Báez” al frente.

Según las indagaciones de la Fiscalía existieron pruebas de un pacto político suscrito por el grupo político del senador por Santander, Luis Alberto Gil, con las estructuras paramilitares

⁴³² Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/591-el-pacto-de-granada-cordoba-el-meridiano> Consultado el 29 de agosto de 2015.

que actuaban en el mismo departamento. De hecho, parece ser que la primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2001, en Medellín, y a la que acudió el mismo “Ernesto Baez”. En el segundo encuentro, la Fiscalía determinó que acudieron además de Gil y Báez, alias “Julián Bolívar”.

Esta reunión, producida en Puerto Berrío también contó con la presencia de varios concejales de Barrancabermeja, a fin de que se apoyara al candidato del Movimiento Alternativo Regional, Nelson Naranjo. Según informa Semana (2007, s.p.), en estos dos encuentros se fijó un como propósito un acuerdo mutuamente beneficioso para Gil y sus precursores y el BCB en el que fijar:

“una alianza en la que los primeros recibirían apoyo económico y facilidades para hacer campaña política, mientras el segundo se beneficiaría con decisiones de los nuevos elegidos. La cita se habría realizado por la misma época del Pacto de Ralito de 2001, en el que 28 líderes de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Báez acordaron *refundar la Patria*”⁴³³.

4.6. La Reunión de Coordinación

La conocida como “Reunión de Coordinación” fue firmada el 23 de agosto de 2000, por el máximo dirigente paramilitar en el departamento de Casanare, Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”, quien en ningún momento se acogió a la desmovilización y siguió operando como el último gran jefe paramilitar, hasta que fue capturado el 4 de febrero de 2012⁴³⁴.

En esta reunión, el máximo dirigente de Los Buitragueños se sentó con los candidatos a las alcaldías – todos investigados por parapolítica-, de Maní, Henry Montes, de Monterrey, Aleyder Castañeda, de Tauramena, Jorge Eliecer Barreto, de Villanueva, Raúl Cabrera, y de Sabanalarga, Mauricio Chaparro, de Sabanalarga.

Presuntamente también estuvo en el encuentro el que fuese alcalde de Aguazul, Leonel Torres, si bien no consta como firmante del acuerdo. Asimismo, se contó con la presencia del exgobernador, condenado por parapolítica, Miguel Ángel Pérez, el cual junto con los anteriores se comprometería a destinar un porcentaje de la contratación y de las regalías de sus municipios a engrosar las finanzas de los paramilitares.

4.7. El Pacto de Pivijay

El Pacto de Pivijay podría entenderse como una continuación del Pacto de Chivolo, el cual fue firmado en noviembre de 2001 con el objetivo de fijar las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que tendrían lugar en marzo de 2002. Así, se determinó la que debía ser la elección de los Representantes a la Cámara, Dieb Maloof, Jorge

⁴³³ Véase:

<http://www.semana.com/on-line/articulo/pacto-ernesto-baez-enreda-cuatro-congresistas-santander/87638-3>
Consultado el 29 de agosto de 2015.

⁴³⁴ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746> Consultado el 29 de agosto de 2015.

Castro y Gustavo Orozco, además de ratificar los siguientes candidatos a las alcaldías de Algarrobo, Ariguaní, Chivolo, Pivijay, Remolino, Salamina, San Ángel y Zapayán.

En el Pacto de Pivijay, aparte de lo anterior, buscaba destinar fondos para legitimar las comunidades por medio de la puesta en marcha de obras públicas comprometiendo, asimismo, a que los participantes aportasen un mínimo de votos a los candidatos seleccionados mientras que los candidatos a la Cámara de Representantes debían garantizar, como contraparte, recursos para inversiones sociales además de participación directa sobre sus administraciones. De igual manera, retroalimentando el control del poder local, los Representantes deberían apoyar la política de las alcaldías comprometidas en el Pacto a fin de perpetuar y dar sostenibilidad a la cooptación política local.

4.8.El Pacto de La Lorena

A los días de una masacre en un corregimiento de El Guamo, La Chamba, en Tolima, presuntamente atribuido al Bloque Tolima – el 14 de noviembre del año 2000-, la Fiscalía colombiana va a indagar si, verdaderamente, si el Representante a la Cámara por Tolima, Martínez Rosales, acordó con el Bloque Tolima de las AUC un acuerdo político y militar desde el que proteger a los alcaldes pertenecientes a su movimiento, Alianza por el Cambio, en Ataco, Guamo, Natagaima y Rioblanco.

Como informaba en su momento *El Tiempo* (2007, s.f.) el exjefe paramilitar “Orlando Carlos” confirmaba que este acuerdo fue sellado junto con otros tres jefes paramilitares, ya fallecidos, como “Elías”, “Víctor” y “Jairo”⁴³⁵ de manera tal que a cambios de proporcionar votos para la alineación de Martínez Rosales, el Bloque Tolima recibía una aportación en contrapartida por valor de 200 millones de pesos.

4.9.El Pacto de Chocó

De acuerdo a las audiencias pronunciadas por “El Alemán”, el BEC tuvo una injerencia directa sobre la política local y departamental del departamento de Chocó⁴³⁶. De este modo, la estructura paramilitar aportó 100 millones a la campaña del Representante a la Cámara, Edgar Ulises Torres⁴³⁷, 150 millones al que sería elegido senador y gobernador de Chocó, Julio Ibargüen y otros 50 millones al Representante a la Cámara, Odín Sánchez⁴³⁸.

El BEC intervino en la política local, casi siempre de los responsables y Promotores de Desarrollo Social⁴³⁹ – PDS-, que se encargaban de trabajar con los consejos comunitarios, si bien estas acusaciones siempre fueron negadas por los acusados de la parapolítica que, a lo

⁴³⁵ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302> Consultado el 30 de agosto de 2015.

⁴³⁶ Véase: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/1163-el-aleman-asegura-que-financio-23-politcos-en-todo-el-pais> Consultado el 30 de agosto de 2015.

⁴³⁷ Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/condenado-excongresista-edgar-ulises-torres/358850-3> Consultado el 30 de agosto de 2015.

⁴³⁸ Véase: <http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/4781-parapolitica-odin-sanchez-montes-de-oca> Consultado el 30 de agosto de 2015

⁴³⁹ Los Promotores de Desarrollo Social son perfiles profesionales orientados a diagnosticar, planificar, ejecutar y supervisar programas y proyectos de impacto en el desarrollo económico y social de comunidades locales.

sumo, reconocieron la extorsión y la violencia que finalmente suponía una presión imposible de evitar, dadas las dinámicas locales en el departamento. Declaraciones que, en todo caso, siempre colisionaron con las del propio Freddy Rendón, quien en sus testimonios llegaría a reconocer que todos los *parapolíticos* del departamento de Chocó, en algún momento, fueron sus amigos: “No es nada personal contra ustedes, solo pienso que si esas reuniones fueron un delito, ustedes deben asumir su responsabilidad, así como nosotros asumimos la nuestra. Nadie que fuera a hablar conmigo, fue bajo amenazas”⁴⁴⁰.

Sea como fuere, lo cierto es que Freddy Rendón terminó por entregar una lista a la Corte Suprema de Justicia de 23 nombres que, en principio, fueron favorecidos y apoyados por las AUC a fin de crear un proyecto político para Antioquia, Córdoba y Chocó. Proyecto que debía de quedar respaldado desde el Congreso, las gobernaciones y asambleas y, finalmente, las alcaldías. De hecho, entre otros nombres, se encontrarían, aparte de los referidos, personalidades políticas como los exgobernadores de Chocó Patrocinio Sánchez, e Higinio Mosquera.

4.10. *El Pacto de Urabá*

El conocido como Pacto de Urabá sale a la luz pública una vez que un político de arraigo local en la región de Urabá, como es Dagoberto Tordecilla, en mayo de 2008 acusó a cuatro exalcaldes del departamento de Chocó – Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá, de haber tenido vínculos con el BEC. Ello, bajo los mismos criterios que, meses atrás, permitió enjuiciar y encarcelar a dos senadores del Urabá antioqueño como fueron los casos de Rubén Darío Quintero y Humberto Builes. De hecho, el propio Tordecilla, como señaló *El Tiempo* (2008, s.p.):

“participaron en la reunión realizada en el 2001, en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí, en la que se acordó que los paramilitares apoyarían una lista al Congreso para el periodo 2002-2006 *donde cobraron fuerza los nombres* de Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Augusto Andrade para la lista a la Cámara, con el acuerdo de que cada uno se rotaría un año, como en efecto ocurrió”⁴⁴¹.

Lo cierto es que toda esa lista, finalmente, resultó electa del mismo modo que, en el Senado, fue elegido Rubén Darío Quintero que, como el resto de nombres, terminó siendo investigado por *parapolítica*.

4.11. *El Pacto del Eje cafetero*

Otro acuerdo de connivencias locales con figuras del paramilitarismo de las AUC va a tener lugar en la región del eje cafetero – Caldas, Quindío y Risaralda-, donde al parecer, según una información de El Espectador de marzo de 2008, “Ernesto Báez” desarrolló todo una puesta en marcha de cirugía electoral – *gerrymandering*- que garantizase la victoria de las

⁴⁴⁰ Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimarios/3423-condenados-los-aliados-politicos-del-elmer-cardenas-en-choco> Consultado el 30 de agosto de 2015.

⁴⁴¹ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4203537> Consultado el 30 de agosto de 2015

candidaturas paramilitares en las elecciones de Cámara y Senado en el departamento de Caldas⁴⁴². De hecho, tras la publicación de El Espectador, las investigaciones de la Fiscalía apuntaron a los Representantes a la Cámara, Emilio Enrique Ángel y Dixon Ferney Tapasco, de la misma manera que afectó a la senadora por Caldas, Adriana Gutiérrez.

4.12. *El Pacto de Las Canarias*

Las Canarias era una finca situada en la zona rural de Sincelejo, en el departamento de Sucre, a la que asistieron como medio centenar de ganaderos, comerciantes y empresarios de la región, especialmente de Sucre y Antioquia, en un encuentro con los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Edward Cobos Téllez.⁴⁴³

Las investigaciones, a partir de las declaraciones del propio Mancuso, las fuentes de financiación y organización de las AUC, evidencian que el encuentro tuvo lugar con un firme propósito de escalar de la esfera local y regional al ámbito nacional. No obstante, como señala el propio Cobos:

“no fue un hecho fortuito. No fue que un día nos levantamos y mientras nos tomábamos un tinto, nos inventamos a las Auc. Ya estaban, ya había grupos, como dije anteriormente como ‘Los Carranceros’ en San Onofre y María la Baja; en la Isla de San Fernando y Mompós, el grupo de ‘Chepe Barrera’ y en la Sierra Nevada ‘Giraldo’ y ‘Los Rojas’; lo que no tenían era la vocación expansiva que tuvieron las AUC”⁴⁴⁴.

Del encuentro de Las Canarias quedarían afectados nombres como los de diputados por el departamento de sucre, Ángel Villarreal y Mario Silgado; o importantes ganaderos y empresarios de la región⁴⁴⁵.

5. El fenómeno pos-paramilitar

No se puede finalizar este capítulo sin abordar un fenómeno mencionado de manera recurrida, como el pos-paramilitarismo y que, en cierto modo, ha redefinido la lógica de la violencia y la criminalidad en Colombia en los últimos años. Ello, porque la desmovilización de las AUC y otros grupos paramilitares al albor de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, no va a terminar con el fenómeno paramilitar en sí, aun cuando cerca de 33.000 combatientes se van a acoger a esta controvertida normativa, vigente hasta el año 2006.

Desde finales de 2008 se empiezan a recoger diferentes trabajos académicos como el de Romero y Arias (2008) o institucionales, como el del Ministerio de Defensa (2008), así como

⁴⁴² Véase: <http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas> Consultado el 30 de agosto de 2015

⁴⁴³ Véase: <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-pruebas-hablan-si-solas/81948-3> Consultado el 30 de agosto de 2015

⁴⁴⁴ Véase: <http://www.verdadabierta.com/victimarios/3535-vicente-castano-fue-cerebro-de-la-expansion-para-vecino> Consultado el 31 de agosto de 2015.

en medios de comunicación, como *Semana* o *El Espectador*, que ponen su atención en la reconfiguración de grupos que desde entonces, comúnmente, pasan a ser conocidos como Bandas Criminales – Bacrim, o grupos narcoparamilitares, entre otras varias acepciones.

De hecho, según INDEPAZ (2012: 3), ya en 2008 se recogieron acciones criminales de hasta 53 grupos, en ese momento, atomizados, que terminaron por afectar a 266 municipios. En noviembre de ese mismo año, la Policía, acuñando el término de Bandas Emergentes, señalaba que terminaban por aglutinar hasta casi 2.000 efectivos bajo presencia en 17 departamentos y 94 municipios, especialmente, en departamentos en los que las AUC habían tenido una importante presencia como era los casos de Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Guaviare y Nariño. Todos, salvo los dos primeros, centros productores nacionales de coca, como se pudo ver en los capítulos IV y V.

Lo cierto es que estas bandas se van a organizar como pequeños grupos, despolitizados, con mayor énfasis en la criminalidad y con flexibilidad estratégica y operativa, por la cual van a poder asumir otra tipo de relación con los grupos armados, particularmente guerrilleros⁴⁴⁶. En otras palabras, al desvalerse del discurso legitimador de las AUC y perder su capacidad de permear en los escenarios políticos y militares, especialmente regionales, la relación que se propicia, especialmente con las FARC, pasa a ser de mutuo interés, cooperativa, tal y como brindan muchos testimonios recogidos a lo largo de esta tesis doctoral. Esta consideración, de hecho, perfectamente se puede resumir en el testimonio del personero de Norte de Santander entrevistado:

“Tras todo. Tras PSD y tras Plan Colombia, la verdad, nada cambió. Bien, no hay presencia de Bacrim en el departamento, con la excepción de Ocaña y Cúcuta, donde sí existen grupos paramilitares. Se sabe que las Bacrim ya no pelean con las guerrillas sino de que hay alianzas entre ambos grupos para garantizar el negocio del narcotráfico, especialmente y sobre todo, con el EPL. Si bien, estas alianzas no se dan tanto en el Catatumbo pues éstas se dan entre guerrillas. Ya no hay reductos paramilitares, pues estos salieron una vez desmovilizados. Es más, una vez que ellos se fueron, como nada cambió, las guerrilleras se fortalecieron e incrementaron sus niveles de presencia y control territorial”. (EP 19, mayo de 2015).

Algo similar señalaría el personero del departamento de Nariño, por ejemplo:

⁴⁴⁶ Edward Cobos Téllez, “Diego Vecino”, para esta tesis doctoral reconocía que: “Las Bacrim surgen de los que usted comentaba. La falta de cambios estructurales. El encarcelamiento de los jefes de las AUC propició que muchos mandos medios, con todo el saber hacer, las armas, la logística, y apolitizadas, pudieran encontrar una gran oportunidad para mantenerse en la criminalidad y, como el fin justifica los medios, pasar a aliarse estratégicamente con las guerrillas.

Las Bacrim no pueden ser comparadas por esta razón con las AUC. Además, por su número. Piense que solo un 9-10% de los desmovilizados volvieron a la criminalidad. Fíjese en los Urabeños, y cómo colaboran con las FARC en el Nudo del Paramillo, en el Urabá. Quisiera incluirle la frase, que se ha convertido en un dicho, entre los mandos medios de las AUC que quedaron entre las Bacrim: “los jefes ya hicieron lo que tenían que hacer”. Ellos tienen el conocimiento, los contactos, conocen desmovilizados y además es responsabilidad de un Estado que no garantizó ni cambios estructurales ni reinserción”.

“En cuanto al paramilitarismo, desde finales de 2003 y hasta el 2008, hubo una importante presencia de las AUC en el departamento. Sin embargo, desde el proceso de desmovilización, esa presencia ha adoptado el nombre de Urabeños, Águilas y Rastrojos que se reparten la región con la guerrilla y que están formados por la misma gente. Estos paramilitares tienen más presencia, por ejemplo, en Barbacoas que en Magüí Payán y, en todo caso, nunca se han dado enfrentamientos directos entre estos y la guerrilla. No por nada. Por el hecho de que el cordón de seguridad de los paramilitares se lo brinda la Fuerza Pública, en una alianza de intereses. Una alianza que se traduce en que los paramilitares asumen funciones que, en principio, la Fuerza Pública no puede asumir. De otro lado, tan compleja es la realidad, que Urabeños y FARC fueron, por un tiempo, aliados. Ahora no lo son. Pero nada impide que, como en ocasiones anteriores, lo vuelvan a ser”. (EP 18, febrero de 2015).

Tabla 16: Evolución de la presencia territorial de las Bacrim en términos de mayor concentración regional

Departamentos con mayor actividad paramilitar. Comparativo 2008-2012											
Departamentos	Total de municipios	Número de municipios con actividad paramilitar					Afectación (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Chocó	30	9	7	16	19	28	43	47	70	63	93
Cesar	25	15	14	21	23	23	60	56	76	92	92
Córdoba	28	15	21	23	24	25	54	75	82	85	89
Valle	42	16	20	20	26	32	38	48	50	61	76
Sucre	26	9	7	16	17	19	34	27	61	65	73
Meta	29	12	13	16	20	19	41	45	55	68	65
Bolívar	45	11	7	23	34	24	24	16	51	75	53
Antioquia	125	48	40	64	71	65	38	32	51	57	52
Magdalena	30	8	7	13	15	15	27	23	43	50	50
Cauca	41	10	17	17	14	19	24	41	41	31	46
Atlántico	23	3	2	8	12	10	13	9	35	52	43
Nariño	64	13	18	24	28	26	10	28	37	43	40
Norte de Santander	41	9	6	16	19	16	22	15	40	46	39

Fuente: INDEPAZ (2012: 4)

Quizá sea importante profundizar, antes de finalizar este capítulo, en este fenómeno heredero del paramilitarismo, que termina por contruir un nuevo grupo armado, de especial arraigo en el norte del país y la costa Atlántica, y que actúa intensamente sobre los principales enclaves

con presencia de narcotráfico y de las FARC en el país. Todo, porque una vez que se desmonta, aunque sea parcialmente la estructura armada de las AUC y su superestructura ideológica, el narcotráfico subsiste como infraestructura y redefine elementos para su protección de modo que el crimen organizado es la real causa que determina el sentido y el alcance de estos nuevos grupos armados al margen de la ley.

Sea como fuere, lo cierto es que respecto de estas Bacrim han surgido una disputa semántica respecto de cómo deben ser denominados. A tal efecto, por ejemplo, Álvaro Uribe negó desde el inicio que fueran nuevos paramilitares sino más bien grupos delincuenciales a tenor de que el paramilitarismo había finalizado, exclusivamente, al albor de la desmovilización. Una afirmación que, por ejemplo, contrastaría con lo planteado por el exjefe paramilitar, “Diego Vecino” o por los generales entrevistados a efectos de esta tesis y cuyos testimonios ya han sido incorporados.

Así, las cifras manejadas por la Policía Nacional (2012), citado en INDEPAZ (2012: 3), a 25 de septiembre de 2012, llevan a reconocer la presencia de varios grupos, incluso, con estimaciones en su número de integrantes, entre las que se destacan: Los Urabeños (1.970), Los Rastrojos (1.656), disidencias de ERPAC (335), Renacer (140) y Los Machos (45). Esto, al sostener que los Águilas Negras no existen y los Paisas han sido desarticulados. No obstante, la suma de efectivos, en todo caso, ascendería a la nada desdeñable cifra de 4.170 integrantes.

Es por esto que, sobre la base de lo anterior, existiría una reproducción prácticamente completa respecto de los enclaves territoriales en los cuales se han desarrollado las Bacrim, lo cual pone de manifiesto, en primer lugar, un cuestionamiento directo sobre el alcance de la desmovilización del paramilitarismo y, por otro, las propias lógicas de concebir la paz en términos de “paz negativa”, entendiendo que con la mera desmovilización y desactivación del mayor grupo paramilitar que suponía las AUC era posible consolidar una paz regional. Una paz que, en cualquier caso, desatendía cualquier atisbo de transformación estructural⁴⁴⁷

De manera más detallada, como primer grupo destacable dentro de estas Bacrim estarían los Rastrojos, que junto con Los Machos, hacían parte de los grupos criminales al servicio del cartel que operaba en el norte del Valle si bien, su primera organización desaparece con la captura de los líderes de la estructura narcotraficante.

⁴⁴⁷ “Diego Vecino”, en la entrevista concedida a esta tesis afirmaba que “En nuestro caso, nosotros pasamos por la cárcel, como dirigentes de la estructura. Sin embargo, por fuera, desamparados, quedaron 30.000 hombres con más puntería que cultura y que, por ello, muchos de ellos terminarían conformando las Bacrim. Hay que hacer, por tanto, una importante función de seguimiento que garantice a todos la reinserción plena en la sociedad y eso pasa, necesariamente, por reformas de tipo estructural”. (EP 12, mayo de 2015).

Tabla 17: Evolución de la presencia territorial de las Bacrim, 2008 - 2012

Presencia de Bacrim 2008-2012					
	2008	2009	2010	2011	2012
No. de estructuras	16	6	6	7	5
No. de municipios	94	159	159	151	118
No. de departamentos	17	18	18	17	17
No. de integrantes	2.000	3.749	3.749	4.154	4.170

Fuente: Policía Nacional, citado en INDEPAZ (2013: 3)

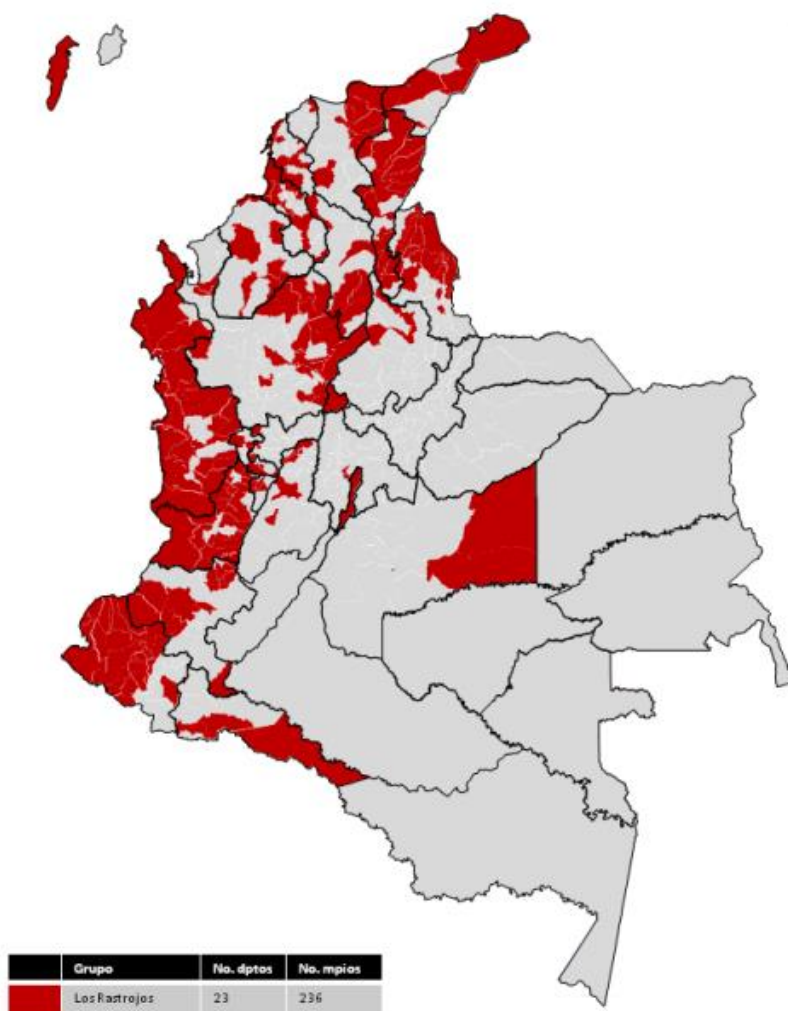
No obstante, desmanteladas las AUC, vuelven a operar si bien, aliándose con algunos frentes de las FARC, especialmente en torno al Pacífico colombiano y, muy particularmente, en el departamento de Valle. Además, con base en nombres que si bien no fueron significativos en la dirección de las estructuras narcotraficantes de inicios de los noventa, hoy en día son de los más buscados de Colombia, tal y como es el caso de los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, o el detenido en 2014, Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”.

El principal arraigo de Los Rastrojos, además de en Valle – donde es el actor más importante, se concentra en la referida vertiente del Pacífico. En los últimos años se ha consolidado en todo el departamento de Chocó, y muy especialmente, sobre la base de los municipios que la década pasada fueron objeto de control por parte del BEC, y en Nariño, donde en un 95% mimetiza los municipios que sufrieron la violencia del BLS y que actualmente se disputan, por un lado, con Los Paisas, y por otro, con la alianza FARC-Águilas Negras.

Un segundo enclave prioritario se encontraría en los siete departamentos de la costa Atlántica. Así, tiene presencia en 16 municipios de Cesar, 8 de Magdalena, 5 de La Guajira y 3 de Atlántico, lo que se proyecta sobre buena parte del anterior escenario ocupado por el BN. Asimismo, se concentra en 14 municipios de Sucre y otros 12 de Bolívar, emulando el control territorial, casi en un 90%, del BHMM, y en 8 municipios de Córdoba, cuna como ya se ha señalado, de las ACCU primero, y de las AUC después. Esta región es de fortísima disputa con Los Urabeños que siguen siendo el actor más importante.

Además, este grupo armado tendría un gran arraigo en Antioquia, donde su presencia asciende a 24 municipios si bien, es especialmente evidente en los enclaves propios del BcB, esto es, en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Del mismo modo sucedería en Norte de Santander, donde extiende su presencia a 16 municipios, 15 de los cuales – a excepción de Teorama, ya experimentaron un fuerte arraigo paramilitar en torno al BCat.

Mapa 68: Presencia de Los Rastrojos (2012)



Fuente: INDEPAZ (2012: 10)

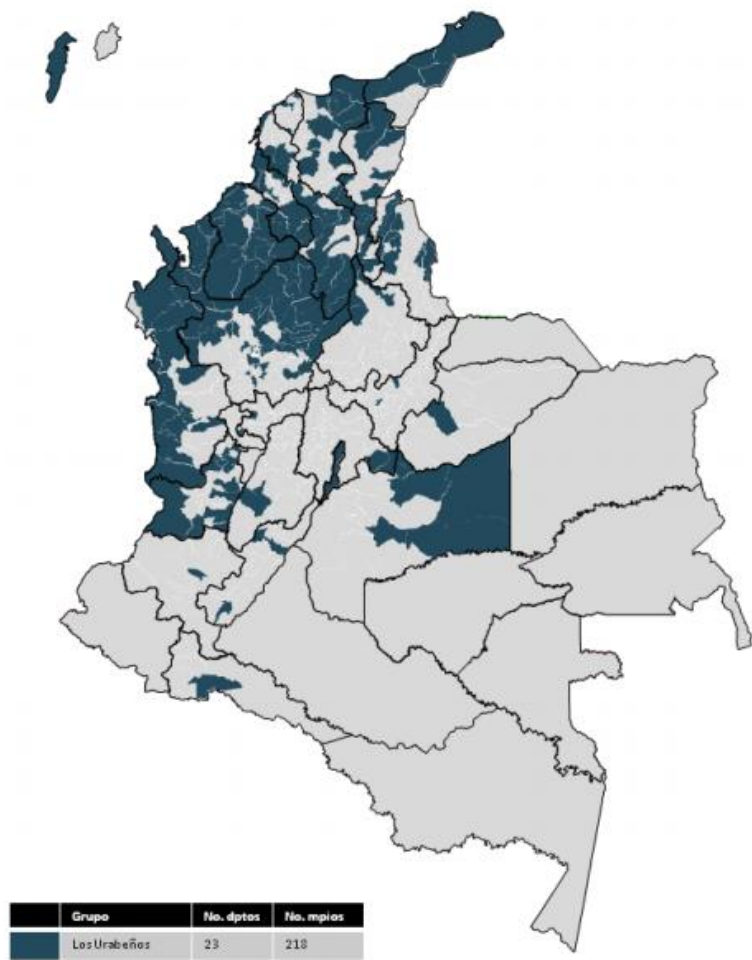
En un segundo lugar estarían Los Urabeños, cuyo principal arraigo se extiende en torno a la región Caribe, Antioquia, Chocó y Norte de Santander. Tienen especial presencia en Córdoba, donde se disputa la hegemonía local con Los Paisas y Los Rastrojos pero, sobre todo, en Bolívar, donde tienen presencia en 19 municipios y Sucre, con 16 municipios, confiriendo continuidad a buena parte de los enclaves que fueron objeto de control por el BHMM. Asimismo, tienen presencia en 6 municipios de La Guajira, 13 de Cesar, 4 de Atlántico y 12 de Magdalena, que igual que en el caso de Los Rastrojos, responden a una herencia directa en el control territorial ejercido en el pasado, por el BN.

Su arraigo en Chocó, como en el caso de Los Rastrojos, afecta a buena parte del departamento, especialmente en lugares clave para el antiguo BEC, si bien donde mayor

arraigo tiene este grupo es en Antioquia, al proyectar como municipios con presencia posparamilitar, tanto los enclaves propios del BcB como los del BEC, el BB y el BM, pues su dominio territorial termina por afectar hasta 54 localidades antioqueñas.

A diferencia de Los Rastrojos, no termina por permear en Valle, más que en municipios concretos, y muestra una ausencia tanto en Cauca como en Nariño si bien, juega a su favor, la alianza con las FARC y con el ELN, tanto en el procesamiento como en el tráfico de drogas.

Mapa 69: Presencia de Los Urabeños (2012)



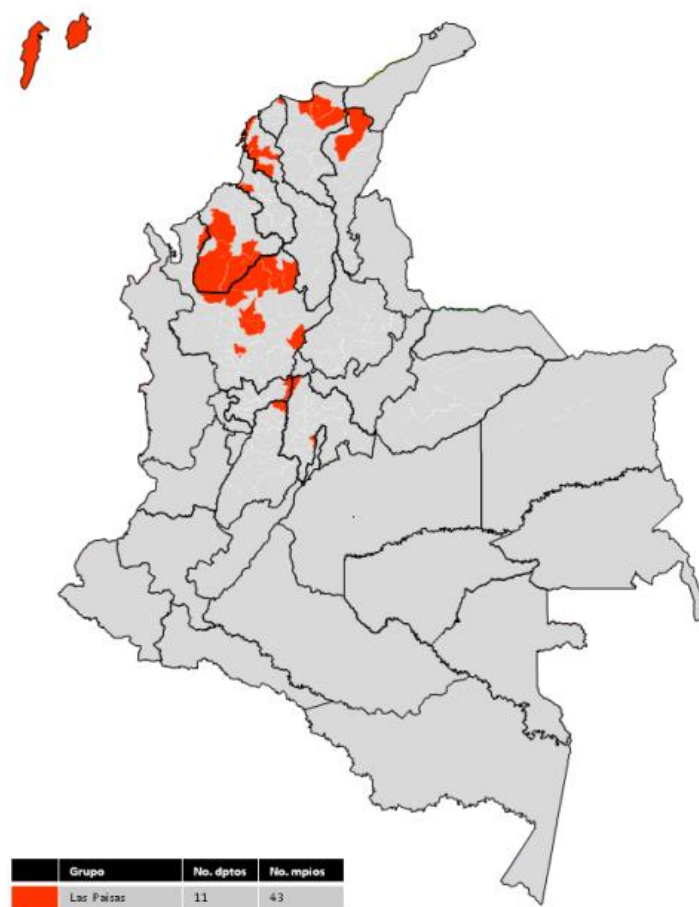
Fuente: INDEPAZ (2012: 12)

Finalmente, quedaría el escenario de Norte de Santander, próximo a los intereses de las FARC y del ELN, pero también de Los Rastrojos, tal y como se puso de manifiesto. Tanto es así, que según las autoridades colombianas, especialmente en este departamento, la alianza

incluso trasciende al abastecimiento o compra y venta de armamento⁴⁴⁸ y condensa toda una amplia red de extorsión sobre empresarios locales así como ganaderos y campesinos,

Los Paisas, como tercer gran grupo armado, igualmente se concentraría en el norte del país aunque, no obstante, de acuerdo a unas dimensiones territoriales nada comparables a los dos grupos anteriores. De hecho, de los 43 municipios con presencia de este grupo armado, 20 municipios pertenecen a la región Atlántica, y en su mayoría, a localidades objeto de dominio bien del BN, bien del BHMM, sobre todo en Córdoba y Bolívar. A estos habría que adicionar otros 16 municipios antioqueños, especialmente en el norte del departamento donde, como con Los Urabeños, han encontrado apoyos de las FARC para enfrentar a otros grupos posparamilitares.

Mapa 70: Presencia de Los Paisas (2012)



Fuente: INDEPAZ (2012: 14)

⁴⁴⁸ Véase: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10980468> Consultado el 31 de agosto de 2015.

Por su parte, los Águilas Negras aparecen por primera vez en Norte de Santander, una vez que las alianzas entre FARC, ELN y EPL consiguen contener el avance paramilitar en la región, con la excepción de Ocaña y Cúcuta. Estos Águilas Negra ya parece que emergen en la primavera de 2006, cuando vulgarmente se hacían llamar como “Águilas”, dentro de un grupo heterogéneo, en el que se identificaban diferentes colores, cada uno perteneciente a un grupo criminal. Esto es, “Águilas Azules”, “Águilas Doradas” y “Águilas Rojas”, toda vez que otros grupos, mayoritarios, hicieron valer el nombre de “Águilas Negras” (Reyes, 2012).

Estos últimos paulatinamente, y hasta 2008, se fueron expandiendo por la región, de oriente a occidente, es decir, Cesar, Santander, Antioquia y descendiendo a Caquetá.

Su principal representación territorial ha ido evolucionando, orientándose hacia la vertiente del Pacífico pues, de los 81 municipios que en 2012 tuvieron presencia de este grupo, 30 se registraron entre Valle (2), Nariño (6), Cauca (12) y Chocó (10); 10 en Antioquia – especialmente sobre enclaves de acción del otrora BB; y 21 en la costa Atlántico, en Sucre (4), Córdoba (3), Cesar (1), Atlántico (3) y Bolívar (10).

Ya en lo que tendría que ver con los Llanos orientales, como se planteó, controlada en su momento por el BCet y en menor medida los grupos Andaquíes de Caquetá y Los Buitragueños, actualmente, y tras el fenómeno Bacrim, esta región fue, primero cooptada por las ERPAC, y tras su desarticulación, escindida en lo que se conoce como el Bloque Meta y el Bloque Libertadores de Vichada.

El Bloque Meta, actualmente se extendería sobre 16 municipios, incluyendo algunos municipios que, en su momento, no llegaron a ser controlados por el BCet, como Puerto Gaitán o Puerto López, y en menor medida, otros municipios de tradicional presencia de FARC como San Vicente del Caguán, en Caquetá, y de mayor arraigo paramilitar, como son Aguazul, Par de Ariporo, Villanueva y Yopal, en Casanare, y los cuatro municipios de tradicional arraigo del BCet en Guaviare, estos son Calamar, Guaviare, El Retorno y San José del Guaviare.

De otro lado, el Bloque Libertadores de Vichada, acabaría teniendo una presencia mucho más focalizada, sobre los municipios, en el departamento de Meta, de Granada, Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín, Villavicencio y Vistahermosa, en Meta; Inírida en Guainía, Aguazul en Casanare, Calamar, San José del Guaviare y El Retorno en Guaviare y, finalmente, Cumariba, La Primavera y Puerto Carreño en Vichada, lo cual, en suma, termina por reproducir toda la presencia paramilitar en la región de los tiempos de dominio espacial de las AUC.

Por último, y minoritariamente estaría la aparición de Los Machos en Valle del Cauca y, muy concretamente, en los municipios de Cartago, El Dovio, Buga, La Unión, La Victoria, Palmira, Roldanillo, Trujillo, Tuluá y Zarzal, donde operan aliados con Los Urabeños frente

a Los Rastrojos. De la misma manera quedaría la Bacrim Renacer, reducida a los municipios de Alto Baudó, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, Condoto, Isthmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Quibdó y Tadó, donde por lo general operan aliados con las FARC en estos enclaves del departamento de Chocó.

6. Conclusiones

Con base en lo anterior se puede cerrar este capítulo recogiendo tres precisiones que quedan más o menos evidentes. En primer lugar, y la más importante a efectos de esta tesis doctoral, es que el alcance del paramilitarismo como factor de expulsión de las FARC debe cuando menos relativizarse a enclaves muy concretos. Enclaves que impiden aceptar la hipótesis del factor paramilitar como responsable de la desaparición de las FARC en aquellos enclaves de mayor coincidencia tanto temporal como espacial. La segunda aseveración se encuentra en el hecho de que, la falta de una transformación estructural de la realidad colombiana, mayormente en términos económicos y sociales, es la gran causante de la recriminalidad de las Bacrim, en clara continuidad con el fenómeno paramilitar, como coinciden la mayor parte de los testimonios integrados. Asimismo, y como tercer elemento cabe destacar la conexión que, por su despolitización, ha permitido a estos grupos criminales coaligarse con las guerrillas, que encuentran en este fenómeno, un respiro que coadyuva sus intereses en el marco de la ilegalidad.

Nuevamente, los cuestionarios realizados sobre las 221 alcaldías del país arrojan luz y se alinean, en cuanto a su interpretación, con las hipótesis y afirmaciones realizadas. En primer lugar, como se puede ver en la siguiente tabla, los departamentos que en 1998 declaraban percibir una mayor presencia de paramilitarismo, quince años después son los mismos que reclaman un mayor activismo de las Bacrim. De hecho, con especial relevancia ello sucede en Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Nariño, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Este último departamento, por sus relaciones particulares con los diferentes cárteles de la droga, si bien resulta significativa la continuidad en cinco de los siete departamentos del corredor Atlántico, así como en los Llanos Orientales y en Nariño y Putumayo. Sin embargo, y la segunda hipótesis que se puede observar es que allí donde había mayor percepción en cuanto a coincidencia de AUC y FARC en 1998, como son los casos de Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Nariño, Putumayo o Valle del Cauca, se han mantenido inalterados, tanto como enclaves de violencia como de presencia de las FARC.

Tabla 18: Percepción de presencia de FARC, ELN y paramilitares, 1998 y 2012

	AUC (1998)	FARC (1998)	ELN (1998)	Bacrim (2012)	FARC (2012)	ELN (2012)
Antioquia	6,9	3,85	3,15	3,7	2,25	1,05
Atlántico	7,5	1	1	6	1	1
Bolívar	5,5	3,5	4,5	5,5	2,25	3,25
Boyacá	2,58	4,58	3,75	1,16	1,83	2,08
Caldas	4,62	4	2,37	2	1,37	1
Caquetá	2	9,5	1	1,5	10	1
Casanare	8,16	6,16	7	6,16	3,33	2,5
Cauca	4,66	5,55	3,55	1,66	5,77	3
Cesar	7	7	7	7	5	1
Chocó	1	5,33	5,33	2,33	5,66	5,33
Córdoba	7,8	1	1	8,6	1	1
Cundinamarca	1	3,9	1,6	1,6	1,9	1
Guainía	4	10	1	4	3	1
Guaviare	10	10	1	10	10	1
Huila	1	3,75	1	1	3,25	1
Magdalena	7	6	2	1	1	1
Meta	5,16	3,66	1	1	3,16	1
Nariño	5,14	8	5,28	5,57	6,71	4,14
Norte de Santander	2,75	4,5	7	2,25	6,5	5,75
Putumayo	7	9	1	7,66	9	1
Quindío	1	5,25	1	1	1,75	1
Risaralda	3	4,33	1,33	1,33	2,33	1,33
Santander	2,1	4,2	5,3	1	1,9	2,6
Sucre	10	2	2	8	1	1
Tolima	3,66	6	1	1	4,66	1
Valle del Cauca	9,42	7,14	2,57	7,57	5,28	1,71
Media Nacional	4,68	4,87	3,12	3,36	3,43	1,99

Fuente: Elaboración propia

Quizá con el ELN, como se planteaba, la relación de resistencia con respecto al fenómeno paramilitar no puede ser explicada, en la medida en que en la mayor parte de los enclaves con mayor presencia de las AUC, también concurre una mayor presencia de las políticas de

seguridad, y solo se observan tendencias de continuidad, tímidas, en Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño y Santander. Esto, por ejemplo, además de los testimonios de personeros o exparamilitares, también lo reconocen los miembros de la Fuerza Pública, de tal manera que deben destacarse las palabras del General (r) de la Policía Nacional entrevistado:

“Frente a las AUC siempre se encontraron alianzas y maniobras estratégicas conjuntas de las FARC y el ELN, los cuales tomaron una distancia prudente frente al fenómeno del paramilitarismo pero con el que se aliaron tras la desmovilización. Ello, porque supone el distanciamiento ideológico y mayor margen de maniobra con un actor clave y politizado del conflicto y que tras la desmovilización se criminaliza si cabe más. Todos los que no se desmovilizaron tenían todo el conocimiento de las armas, la presencia territorial y el armamento. Además, comparte causa con las guerrillas. ¿Para qué hacerse la guerra si ambos pueden ganar? Es como usted plantea en sus tesis. Las Bacrim, por todo esto, han terminado por fortalecer a las FARC, al ofrecer continuidad territorial donde antes estaban las AUC. Es así que se entienden las dinámicas regionales. Las guerrillas terminan por aliarse con los grupos más fuertes, en este caso, Los Urabeños, si bien, las particularidades locales son las que explican estas alianzas en la actualidad”. (EP 5, abril de 2015).

CAPÍTULO VIII: EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN LAS TRANSFORMACIONES ESPACIALES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

1. Introducción

El objetivo del siguiente capítulo, penúltimo de esta tesis doctoral, busca entender las dinámicas de las transformaciones espaciales del conflicto armado colombiano en su particular relación con la violencia estructural. A este concepto se le dedicó una notable reflexión en el primer y segundo capítulo, tanto en su noción teórico conceptual como en su relación con la disciplina de la resolución de conflictos y, particularmente, con el caso colombiano.

Si se opta por un enfoque como el estructuralista, a fin de entender dinámicas tan propias como la violencia en un conflicto armado, la dimensión económica y social del Estado deviene como un elemento imprescindible. De hecho, como también se explicó al inicio de esta tesis, son innumerables los trabajos que hacen referencia a las condiciones socio-económicas como factor explicativo tanto de los conflictos armados en general, como del colombiano en particular.

Lo cierto es que, como se verá, de acuerdo a la disposición existente de datos oficiales con los que medir la violencia estructural, resulta un ejercicio difícil cuando no imposible el hecho de valorar hasta qué punto cabe entender una relación directa entre las dinámicas de violencia directa, fruto de mayor presencia y activismo, en este caso, de FARC y de ELN, por un lado, y su concurrencia con escenarios con menos desarrollo en cuanto a calidad de indicadores sociales y económicos.

Con base en esto, en el siguiente capítulo se pueden apreciar algunas ideas claves que rodean la hipótesis nuclear del mismo: los factores socio-económicos, cabe pensar, en los últimos años, son coincidentes con las mayores continuidades espaciales del conflicto armado. Es decir, son un factor de atracción de gran valor para entender el arraigo de FARC y ELN. Sin embargo, no existen mecanismos suficientes que permitan integrar las variables de violencia directa y de violencia estructural, a tenor de la falta de datos sobre series temporales o incluso por departamentos. Si ya de por sí, es imposible obtener correlaciones y regresiones sobre el impacto real de este tipo de indicadores socioeconómicos hace cincuenta años, es igualmente imposible hacerlo en la actualidad, tomando como marco de referencia el año 1998, en el que parte este estudio.

Por tanto, ni todos los departamentos disponen cifras, ni todos aquellos de los que se disponen datos, los tienen, de manera interrumpida, entre 1998 y 2012. De este modo, cualquier ejercicio econométrico, cuando menos, resulta complejo de realizar.

Así, no se puede explicar el factor socioeconómico como factor causal del conflicto, al menos en estos términos estadísticos, y tampoco sobre lapsos más cercanos. Sin embargo, por estadística descriptiva, y con base a los datos y documentos oficiales, puestos a disposición desde el DPS a efectos de realizar este artículo, se pueden inferir algunas hipótesis que terminan por reforzar las afirmaciones que gravitan en torno a la importancia de los factores estructurales en su relación con la violencia directa, tal y como mostrarán las siguientes líneas.

2. La dificultad estadística para medir el impacto de la violencia estructural

Los métodos econométricos se emplean cuando se desea probar una teoría económica o cuando se piensa en una relación que tiene alguna importancia en un eventual proceso de adopción de decisiones así como para el análisis o resultado, por ejemplo, de ciertas políticas públicas. En un análisis empírico como resulta, en buena parte, esta tesis doctoral, lo normal es que en algún momento se recurra a la estadística a efectos de para contrastar teorías o estimar relaciones.

Como hipótesis de partida, se busca entender que la violencia estructural opera como factor explicativo de las dinámicas de violencia directa que acontecen en Colombia y para lo cual, requiere de hacer uso, como categoría espacial, de la unidad de gobierno sub-nacional que es el departamento. Dicho de otro modo, cabría pensar, al respecto de esta hipótesis, que sobre un marco temporal que transcurre entre 1998 y 2012, los departamentos de Colombia que adolecen de menores niveles de desarrollo socio-económico son aquellos que experimentan mayores niveles de violencia directa. Violencia entendida como el número de acciones llevadas a cabo por los grupos armados de las FARC y del ELN.

Este tipo de relaciones se pueden abordar a través de un modelo económico formal, basado en ecuaciones matemáticas que describan estas relaciones. Es decir, bajo supuestos hipotéticos, por medio de la estadística, es posible deducir una ecuación - modelo económico, que describa la violencia armada cometida por las FARC y el ELN en los departamentos de Colombia de acuerdo a la concurrencia de ciertos factores sociales y económicos:

$$y = f(X_1, X_2, X_3)$$

y : Cantidad de acciones armadas perpetradas por las organizaciones armadas ilegales de Colombia

X_1 : Tasa de desempleo

X_2 : Incidencia de la pobreza

X_3 : Renta per cápita⁴⁴⁹

⁴⁴⁹ La desigualdad en principio se descartó por que en las primeras aproximaciones sobre la violencia estructural, los departamentos con mayor coeficiente de Gini no se correspondían, en ningún caso, con los departamentos con mayor activismo armado de las guerrillas.

En general, se puede encontrar otros factores de esta misma naturaleza social y económica que podrían influir en la cantidad de acciones armadas perpetradas por estas dos guerrillas, pero las seleccionadas, en inicio, representan aquellas que pueden tener un mayor impacto y relación con la violencia directa. No obstante, a tal efecto, se realizó una discriminación previa de algunos factores que no mostraban correspondencia alguna y que, por ende, fueron desestimados.

Así, de acuerdo a lo anterior, y una vez identificadas las variables y sus indicadores, las cuales, en términos causales construyen el modelo económico, es imprescindible *operacionalizarlos*, a efectos de transformarlo en un modelo econométrico:

$$aarmadas = \beta_0 + \beta_1 td + \beta_2 ip + \beta_3 pibpercapita + u,$$

aarmadas: Cantidad de acciones armadas cometidas por perpetradas por las guerrillas en Colombia (acciones armadas FARC y ELN),

td: Tasa de desempleo

ip: Incidencia de la pobreza

pibpercapita: Renta per cápita

La elección de estas variables es determinada tanto por la propia construcción teórica desde la que se construye esta tesis, como por consideraciones acerca de los datos disponibles. A efectos de fórmula, el término *u* comprende factores no precisados como la educación o la salud, que indistintamente pueden afectar a las dinámicas de la violencia directa. De otro lado, las constantes β_0 , β_1 , β_2 y β_3 son los parámetros del modelo econométrico y describen dirección y fuerza de la relaciones entre las acciones armadas de FARC y ELN y cada uno de los factores (indicadores) empleados para determinar la cantidad de acciones armadas en el modelo explicativo.

Los datos para la estimación del modelo econométrico provienen de un modelo de datos de panel el cuál se aplica en toda la regresión utilizada, a efectos de la estimación de los parámetros de interés, la variabilidad temporal y la transversalidad de los datos. Todo, dentro de un marco histórico de análisis que abarca, como el conjunto de esta tesis doctoral, desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

En todo caso, para que un análisis de datos cumpla de manera eficiente con su cometido, son necesarios varios los elementos estadísticos y econométricos que deben garantizar que la estimación sea consistente además de eficiente. Los datos deben pasar pruebas de significancia antes de poder ser utilizados como fuentes de información para efectos causales. Así, según esta investigación, se esperaría que el número de acciones armadas perpetradas sobre los municipios y departamentos de Colombia, tengan una alta relación con los índices de pobreza, desarrollo y desempleo. Sin embargo, para que ello suceda, es imprescindible

que entre estas variables independientes y la variable dependiente se cumplan ciertos supuestos de estimación (Wooldridge, 2009).

En primer lugar, la estimación no debe tener problemas de simultaneidad, es decir, que lo que se produce cuando las variables explicativas tienen efecto sobre la variable explicada y la variable explicada, tiene efecto sobre las variables explicativas.

En segundo lugar, en toda regresión, la significancia estadística es la que determina si efectivamente hay relación entre las variables analizadas. Tal significancia es imprescindible pues, en su ausencia, no deviene posible realizar inferencias estadísticas. Dicho de otro modo, la inferencia estadística operaría como el conjunto de métodos estadísticos que permiten deducir (inferir) de qué modo se distribuye la población en el estudio o las relaciones estocásticas entre varias variables de interés, a partir de la información que proporciona una muestra.

Finalmente, en términos estadísticos es importante generar una medida de confianza en cuanto a la correlación múltiple y el poder explicativo que tienen las variables independientes con la variable dependiente. Ello, en Estadística se conoce como R-cuadrado y se utiliza con el fin de mostrar qué tan bueno es el modelo para predecir efectos sobre el modelo construido.

Con estas tres breves reglas garantizadas, la metodología estadística podrá cumplir con los objetivos del trabajo, en donde será posible encontrar efectos causales sobre la variable dependiente. En dado caso en donde los datos no permitan ser manejados y las estimaciones no cumplan con las reglas estipuladas, una de las posibilidades para solucionar este problema cuantitativo y cualitativo termina siendo con el análisis de la correlación, tal y como sucederá en esta tesis, dada la imposibilidad real de llevar a cabo regresiones en STATA.

Lo anterior, porque la correlación es la forma numérica en la que la Estadística ha podido evaluar la relación de dos o más variables, de acuerdo a medir la dependencia de una variable en su relación con otra variable. Con respecto al efecto causal, se tendría la dirección del efecto pero no la magnitud, como permiten las regresiones, dado que las correlaciones no provienen de un proceso de estimación. Sin embargo, las razones logísticas son las que, por imperativo, hacen que finalmente se tenga que desestimar la regresión y optar por la correlación.

Integrando las estadísticas disponibles a efectos de violencia directa, tasa de desempleo, impacto de la pobreza y PIB per cápita, sobre un desglose departamental entre 1998 y 2012, el resultado de la correlación sería la que ofrece la tabla 21.

Tabla 19: Correlación estadística entre acciones armadas de las guerrillas y las variables socio-económicas

	aarmadas	td	ip	pibpercapita
aarmadas	1.0000			
td	0.0697	1.0000		
ip	0.1758	-0.1119	1.0000	
pibpercapita	-0.1222	-0.0443	-0.6933	1.0000

Fuente: Elaboración propia

Interpretada esta correlación, se identifica una tendencia en principio, favorable a la hipótesis de partida, por la cual, la violencia estructural, afecta positivamente a la violencia directa en la medida en que peores indicadores socioeconómicos afectan directa y proporcionalmente a los mayores niveles de violencia directa.

Ante un cambio en la tasa de desempleo el efecto sobre las acciones armadas es positivo. Es decir, por ejemplo, cabría pensar que en un contexto de ausencia de oportunidades laborales, puede ser posible que concurra un mayor arraigo de las guerrillas y, por tanto, una presencia creciente de FARC y ELN.

Por otro lado, la incidencia de la pobreza tiene un efecto positivo sobre las acciones armadas, es decir, se esperaría que si hay menos porcentaje de pobreza en un departamento, las acciones armadas disminuyan, tal vez, debido a que hay menos vulnerabilidad de la población a enfrentarse a situaciones violentas o a condiciones que la induzcan.

Por último, la renta per cápita tiene un efecto negativo sobre las acciones armadas, es decir que una menor producción por persona en un departamento, en principio, opera como causa para que se den mayor número de acciones armadas y mayor presencia de las guerrillas.

Sin embargo, el modelo econométrico descrito presentaría problemas que impiden que este produzca una estimación confiable que determine efectivamente la afectación de las variables independientes sobre la variable de la violencia directa. Es decir, el modelo presentaría problemas de simultaneidad, en tanto que la manera como se calculan las variables implica que ambas se determinan y dependen de las otras, mutuamente, por lo que en algunos casos es difícil determinar un efecto causal que produzca resultados acertados. Otro problema que se presenta es el de *colinealidad*, es decir, para el cálculo de algunas de las variables se utilizan las otras. De esta manera, queda como opción abordar un análisis de correlaciones a nivel departamental, por medio de estimaciones simples. Así, cuando se realizan estas estimaciones simples, a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, con base en analizar la relación entre violencia directa y estructural en los diferentes departamentos del país, uno a uno, tampoco es que los resultados resulten mucho más explicativos.

1. $aarmadas = \beta_0 + \beta_1 td + u$
2. $aarmadas = \beta_0 + \beta_1 ip + u$
3. $aarmadas = \beta_0 + \beta_1 pibpercapita + u$

Utilizando como modelo econométrico el anterior, los resultados, nuevamente, no arrojan un factor explicativo, causal, en la relación entre violencia directa y violencia estructural. Tanto, que solo en unos pocos departamentos se encuentra algo de significancia, en la relación entre las dos variables objeto de explicación.

Así, para lo que tiene que ver con la relación entre violencia directa y tasa de desempleo, solo se apreciarían correspondencias positivas en Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca y Huila.

a) *Antioquia*

Source	SS	df	MS			
Model	7597.24558	1	7597.24558	Number of obs =	11	
Residual	8928.93624	9	992.104026	F(1, 9) =	7.66	
Total	16526.1818	10	1652.61818	Prob > F =	0.0219	
				R-squared =	0.4597	
				Adj R-squared =	0.3997	
				Root MSE =	31.498	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
td	15.94325	5.76139	2.77	0.022	2.910076	28.97642
_cons	-132.1347	75.71279	-1.75	0.115	-303.4089	39.13952

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -132.13 + 15.94td$$

Si la tasa de desempleo es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Antioquia disminuyen en 132 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la tasa de desempleo se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 15.94(\Delta td)$. Esto significa que cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente 16 más. El R^2 presentado en la tabla muestra que la tasa de desempleo explica en más de 45% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Antioquia. La tasa de desempleo es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

b) Boyacá

Source	SS	df	MS	Number of obs =	11
Model	1958.38983	1	1958.38983	F(1, 9) =	79.47
Residual	221.791986	9	24.643554	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.8983
				Adj R-squared =	0.8870
Total	2180.18182	10	218.018182	Root MSE =	4.9642

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
td	5.381842	.6037165	8.91	0.000	4.016141 6.747544
_cons	-42.81629	6.6263	-6.46	0.000	-57.80602 -27.82656

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -42.81629 + 5.38td$$

Si la tasa de desempleo es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Boyacá disminuyen en 42 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la tasa de desempleo se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 5.38(\Delta td)$. Esto significa que cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente 5 más. El R^2 presentado en la tabla muestra que la tasa de desempleo explica en más de 90% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Boyacá. La tasa de desempleo es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

c) Chocó

Source	SS	df	MS	Number of obs =	11
Model	232.980252	1	232.980252	F(1, 9) =	6.70
Residual	313.019748	9	34.779972	Prob > F =	0.0293
				R-squared =	0.4267
				Adj R-squared =	0.3630
Total	546	10	54.6	Root MSE =	5.8975

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
td	-2.047205	.7909817	-2.59	0.029	-3.83653 -.2578803
_cons	40.06614	8.709179	4.60	0.001	20.3646 59.76767

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 40.066 - 2.047td$$

Si la tasa de desempleo es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Chocó aumentan en 40 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la tasa de desempleo se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -2.047(\Delta td)$. Esto significa que cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente 2 menos. El R^2

presentado en la tabla muestra que la tasa de desempleo explica en más de 42% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Chocó. La tasa de desempleo es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

d) *Cundinamarca*

Source	SS	df	MS			
Model	10854.099	1	10854.099	Number of obs =	11	
Residual	2149.90101	9	238.87789	F(1, 9) =	45.44	
Total	13004	10	1300.4	Prob > F =	0.0001	
				R-squared =	0.8347	
				Adj R-squared =	0.8163	
				Root MSE =	15.456	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
td	10.67524	1.583684	6.74	0.000	7.092694	14.25778
_cons	-107.7405	19.51502	-5.52	0.000	-151.8865	-63.59446

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -107.74 + 10.675td$$

Si la tasa de desempleo es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Cundinamarca disminuyen en 107 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la tasa de desempleo se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 10.67(\Delta td)$. Esto significa que cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente 10 más. El R^2 presentado en la tabla muestra que la tasa de desempleo explica en más de 83% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Cundinamarca. La tasa de desempleo es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

e) *Huila*

Source	SS	df	MS			
Model	2327.05185	1	2327.05185	Number of obs =	11	
Residual	1534.58452	9	170.509391	F(1, 9) =	13.65	
Total	3861.63636	10	386.163636	Prob > F =	0.0050	
				R-squared =	0.6026	
				Adj R-squared =	0.5585	
				Root MSE =	13.058	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
td	3.858985	1.044586	3.69	0.005	1.495967	6.222003
_cons	-10.4547	13.9066	-0.75	0.471	-41.91361	21.00422

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -10.45 + 3.85td$$

Si la tasa de desempleo es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Huila disminuyen en 11 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la tasa de desempleo se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 3.85(\Delta td)$. Esto significa que cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente 4 más. El R^2 presentado en la tabla muestra que la tasa de desempleo explica en más de 60% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Huila. La tasa de desempleo es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

En relación con la relación entre violencia directa e índice de pobreza, nuevamente los resultados quedan reducidos a solo cuatro departamentos: Boyacá, Caldas, Huila y Meta.

a) *Boyacá*

Source	SS	df	MS	Number of obs = 8	
Model	1055.24203	1	1055.24203	F(1, 6) =	7.35
Residual	861.632973	6	143.605496	Prob > F =	0.0351
				R-squared =	0.5505
				Adj R-squared =	0.4756
Total	1916.875	7	273.839286	Root MSE =	11.984

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ip	1.258375	.4642156	2.71	0.035	.1224808	2.39427
_cons	-54.1238	26.25889	-2.06	0.085	-118.377	10.12938

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -54.1238 + 1.2583ip$$

Si la incidencia de la pobreza es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Boyacá disminuyen en 54 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la incidencia de la pobreza se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 1.2583(\Delta ip)$. Esto significa que cuando la incidencia de la pobreza aumenta en un punto porcentual, $\Delta ip = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán disminuyen en aproximadamente 1. El R^2 presentado en la tabla muestra que la incidencia de la pobreza explica en más de 55% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Boyacá. La incidencia de la pobreza es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

b) Caldas

Source	SS	df	MS	Number of obs =	8
Model	433.24734	1	433.24734	F(1, 6) =	6.83
Residual	380.75266	6	63.4587767	Prob > F =	0.0400
				R-squared =	0.5322
				Adj R-squared =	0.4543
				Root MSE =	7.9661
Total	814	7	116.285714		

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ip	2.016042	.7715736	2.61	0.040	.1280689 3.904014
_cons	-77.64339	33.46998	-2.32	0.059	-159.5415 4.254695

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -77.6433 + 2.01ip$$

Si la incidencia de la pobreza es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Caldas disminuyen en 77 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la incidencia de la pobreza se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 2.01(\Delta ip)$. Esto significa que cuando la incidencia de la pobreza aumenta en un punto porcentual, $\Delta ip = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán disminuyen en aproximadamente 32. El R^2 presentado en la tabla muestra que la incidencia de la pobreza explica en más de 53% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Caldas. La incidencia de la pobreza es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

c) Huila

Source	SS	df	MS	Number of obs =	8
Model	1921.45224	1	1921.45224	F(1, 6) =	11.17
Residual	1032.42276	6	172.07046	Prob > F =	0.0156
				R-squared =	0.6505
				Adj R-squared =	0.5922
				Root MSE =	13.118
Total	2953.875	7	421.982143		

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ip	2.298319	.6877786	3.34	0.016	.6153853 3.981253
_cons	-91.97278	41.06519	-2.24	0.066	-192.4557 8.510133

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -91.97 + 2.29ip$$

Si la incidencia de la pobreza es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Huila disminuyen en 92 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la incidencia de la pobreza se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 2.29(\Delta ip)$. Esto significa que cuando la incidencia de la pobreza aumenta en un punto porcentual, $\Delta ip = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán disminuyen en

aproximadamente 3. El R^2 presentado en la tabla muestra que la incidencia de la pobreza explica en más de 65% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Huila. La incidencia de la pobreza es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

d) *Meta*

Source	SS	df	MS	Number of obs = 8		
Model	2448.51065	1	2448.51065	F(1, 6) =	8.09	
Residual	1815.36435	6	302.560725	Prob > F =	0.0294	
				R-squared =	0.5742	
				Adj R-squared =	0.5033	
				Root MSE =	17.394	
Total	4263.875	7	609.125			

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
ip	4.731994	1.663411	2.84	0.029	.6617749	8.802213
_cons	-110.8395	59.88749	-1.85	0.114	-257.3789	35.69987

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -110.8395 + 4.731td$$

Si la incidencia de la pobreza es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Meta disminuyen en 111 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la incidencia de la pobreza se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = 4.731(\Delta ip)$. Esto significa que cuando la incidencia de la pobreza aumenta en un punto porcentual, $\Delta td = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán disminuyen en aproximadamente 5. El R^2 presentado en la tabla muestra que la incidencia de la pobreza explica en más de 57% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Meta. La incidencia de la pobreza es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

Finalmente, en la relación correlacional entre la violencia directa de FARC y ELN y PIB per cápita, el resultado no se distancia de los anteriormente obtenidos si bien obtiene resultados más relevantes que en el resto. Es decir, únicamente se encuentra algo de evidencia en los términos de afectación a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Casanare, Cesar, Guainía, Quindío, Risaralda, Santander y Sucre.

a) *Antioquia*

Source	SS	df	MS	Number of obs = 12		
Model	12389.2923	1	12389.2923	F(1, 10) =	16.35	
Residual	7578.37441	10	757.837441	Prob > F =	0.0023	
				R-squared =	0.6205	
				Adj R-squared =	0.5825	
				Root MSE =	27.529	
Total	19967.6667	11	1815.24242			

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
piibpercapita	-.0000337	8.33e-06	-4.04	0.002	-.0000522	-.0000151
_cons	365.5705	70.86908	5.16	0.000	207.6644	523.4767

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 365.57 - .0000337pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Antioquia son de 366 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.0000337(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .0000337 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 62% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Antioquia. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

b) Bolívar

Source	SS	df	MS	Number of obs = 12		
Model	1224.97392	1	1224.97392	F(1, 10) =	8.63	
Residual	1419.69274	10	141.969274	Prob > F =	0.0149	
				R-squared =	0.4632	
				Adj R-squared =	0.4095	
Total	2644.66667	11	240.424242	Root MSE =	11.915	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	-.0000103	3.49e-06	-2.94	0.015	-.000018	-2.48e-06
_cons	92.86021	25.60362	3.63	0.005	35.81179	149.9086

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 92.86 - .0000103pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Bolívar aumentan en 93 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.0000103(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .0000103 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 46% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Bolívar. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

c) Casanare

Source	SS	df	MS			
Model	749.170341	1	749.170341	Number of obs =	12	
Residual	847.079659	10	84.7079659	F(1, 10) =	8.84	
Total	1596.25	11	145.113636	Prob > F =	0.0140	
				R-squared =	0.4693	
				Adj R-squared =	0.4163	
				Root MSE =	9.2037	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	1.03e-06	3.48e-07	2.97	0.014	2.59e-07	1.81e-06
_cons	-12.97514	9.532402	-1.36	0.203	-34.21465	8.264377

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = -12.97 - .00000103pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Bolívar disminuyen en 12 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = .00000103(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000103 más. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 46% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Casanare. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

d) Cesar

Source	SS	df	MS			
Model	1633.54668	1	1633.54668	Number of obs =	12	
Residual	887.369991	10	88.7369991	F(1, 10) =	18.41	
Total	2520.91667	11	229.174242	Prob > F =	0.0016	
				R-squared =	0.6480	
				Adj R-squared =	0.6128	
				Root MSE =	9.42	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	-9.43e-06	2.20e-06	-4.29	0.002	-.0000143	-4.53e-06
_cons	82.97632	15.63483	5.31	0.000	48.13975	117.8129

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 82.97 - .00000943pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Cesar aumentan en 82 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.00000943(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se

cometerán son aproximadamente .00000943 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 64% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Cesar. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

e) *Guainía*

Source	SS	df	MS	Number of obs = 12		
Model	27.8386196	1	27.8386196	F(1, 10) = 14.04		
Residual	19.8280471	10	1.98280471	Prob > F = 0.0038		
				R-squared = 0.5840		
				Adj R-squared = 0.5424		
				Root MSE = 1.4081		
Total	47.6666667	11	4.33333333			

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	-5.22e-06	1.39e-06	-3.75	0.004	-8.32e-06	-2.12e-06
_cons	19.56589	4.661265	4.20	0.002	9.179949	29.95184

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 19.56 - .00000522pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Guainía aumentan en 19 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.00000522(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta per cápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000522 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 58% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Guainía. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

f) *Magdalena*

Source	SS	df	MS	Number of obs = 12		
Model	231.020563	1	231.020563	F(1, 10) = 6.68		
Residual	345.896104	10	34.5896104	Prob > F = 0.0272		
				R-squared = 0.4004		
				Adj R-squared = 0.3405		
				Root MSE = 5.8813		
Total	576.916667	11	52.4469697			

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	-7.98e-06	3.09e-06	-2.58	0.027	-.0000149	-1.10e-06
_cons	42.60906	12.69962	3.36	0.007	14.31255	70.90556

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 42.60 - .00000798pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Guainía aumentan en 42 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones

armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta aarmadas = -.00000798(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000798 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 40% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Guainía. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

g) Quindío

Source	SS	df	MS	Number of obs =	12
Model	65.9616471	1	65.9616471	F(1, 10) =	19.01
Residual	34.7050196	10	3.47050196	Prob > F =	0.0014
Total	100.666667	11	9.15151515	R-squared =	0.6552
				Adj R-squared =	0.6208
				Root MSE =	1.8629

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
pibpercapita	-6.59e-06	1.51e-06	-4.36	0.001	-9.96e-06
_cons	40.48552	8.309911	4.87	0.001	21.96989
					59.00116

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$aarmadas = 40.48 - .00000659pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Quindío aumentan en 41 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta aarmadas = -.00000659(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta percápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000659 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 65% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Quindío. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

h) Risaralda

Source	SS	df	MS	Number of obs =	12
Model	140.638947	1	140.638947	F(1, 10) =	6.56
Residual	214.27772	10	21.427772	Prob > F =	0.0283
Total	354.916667	11	32.2651515	R-squared =	0.3963
				Adj R-squared =	0.3359
				Root MSE =	4.629

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
pibpercapita	-4.64e-06	1.81e-06	-2.56	0.028	-8.68e-06
_cons	35.05709	11.2589	3.11	0.011	9.970711
					60.14348

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 35.05 - .00000464pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Risaralda aumentan en 35 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.00000464(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta per cápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000464 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 40% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Risaralda. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

i) *Santander*

Source	SS	df	MS			
Model	1180.118	1	1180.118	Number of obs =	12	
Residual	1200.54867	10	120.054867	F(1, 10) =	9.83	
Total	2380.66667	11	216.424242	Prob > F =	0.0106	
				R-squared =	0.4957	
				Adj R-squared =	0.4453	
				Root MSE =	10.957	

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pibpercapita	-5.08e-06	1.62e-06	-3.14	0.011	-8.69e-06	-1.47e-06
_cons	74.11915	19.95901	3.71	0.004	29.64769	118.5906

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 74.11 - .00000508pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Santander aumentan en 74 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.00000508(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta per cápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .00000508 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 50% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Santander. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

j) *Sucre*

Source	SS	df	MS	Number of obs =	12
Model	1374.02929	1	1374.02929	F(1, 10) =	25.78
Residual	532.887373	10	53.2887373	Prob > F =	0.0005
				R-squared =	0.7206
				Adj R-squared =	0.6926
Total	1906.91667	11	173.356061	Root MSE =	7.2999

aarmadas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
pibpercapita	-.0000227	4.46e-06	-5.08	0.000	-.0000326
_cons	95.16463	16.041	5.93	0.000	59.42305

El modelo estimado se presenta a continuación:

$$\widehat{aarmadas} = 95.16 - .0000227pibpercapita$$

Si la renta per cápita es cero, el número de acciones armadas que se cometen en Sucre aumentan en 95 aproximadamente. Luego, el cambio que se predice para las acciones armadas en función de la renta per cápita se expresa como: $\Delta \widehat{aarmadas} = -.0000227(\Delta pibpercapita)$. Esto significa que cuando la renta per cápita aumenta en un punto porcentual, $\Delta pibpercapita = 1$, se predice que las acciones armadas que se cometerán son aproximadamente .0000227 menos. El R^2 presentado en la tabla muestra que la renta per cápita explica en más de 72% la variación en la cantidad de las acciones armadas que se cometen en Sucre. La renta per cápita es significativa para explicar la cantidad de acciones armadas que se cometen en el departamento.

3. La violencia estructural entendida por grupos de departamentos y violencia directa

Lo cierto es que, con base en lo anterior, si se busca desarrollar una retrospectiva del conflicto armado, entre 1998 y 2012, y se busca entender la fuerza explicativa de las dimensiones estructurales, socioeconómicas, del Estado colombiano sobre las dinámicas de violencia directa, más bien, cabría cuestionar los planteamientos teóricos de Galtung expuestos al inicio.

Lo anterior, porque, por un lado, a nivel nacional, si bien la tendencia es positiva en todo caso, su nivel de relevancia no termina siendo, ni mucho menos, consolidada. Menos si cabe, cuando se utiliza la óptica departamental, y se recurre a correlaciones simples, *univariabes*, puesto que solo en 7 de un total de 32 departamentos se aprecian relaciones significativas. Es por ello que los resultados en las estimaciones y el análisis de las correlaciones, apenas logran comprobar, de una manera muy simple, la hipótesis inicial.

Sin embargo, cuando por las limitaciones de datos e información y por las dificultades para explicar una causalidad en los términos de la violencia directa y estructural se recurre a otros

enfoques de análisis, lo cierto es que el resultado invita a consideraciones de un signo bien diferente.

Es decir, si se desglosan los departamentos de acuerdo a los niveles de violencia, y se presenta un recurso a la estadística descriptiva con base en los últimos años, parece que la importancia del factor estructural como factor explicativo de la violencia directa cobra enteros con respecto hasta lo entonces mostrado.

Las mismas correlaciones efectuadas con anterioridad, dentro de la presidencia de Juan Manuel Santos, para los años 2011 y 2012, cuando se hace uso de dos grupos de análisis distintos, uno con los diez departamentos más violentos, es decir, aquellos con más de 30 acciones guerrilleras al año, y otro con el resto de departamentos, ofrece consideraciones de mayor profundidad. Esto, porque en el grupo de los departamentos más violentos, la correlación ofrece un resultado estadístico más importante que aquél en el que la violencia es menor.

Así, quedaría conformando el grupo I, entendido como el más violento, por los departamentos de: Antioquia (99), Arauca (83), Caquetá (64), Cauca (165), Huila (38), Meta (55), Nariño (82), Norte de Santander (85), Putumayo (70), Valle del Cauca (36). De otro lado, estarían el resto de departamentos, entre los cuales, como mayores enclaves de violencia directa unilateral de parte de las guerrillas destacarían Tolima (30), La Guajira (16), Guaviare (15) y Chocó (19). Sobre esta diferenciación, la correlación muestra un resultado sustancialmente diferente.

Tabla 20: Correlación de la violencia estructural con los departamentos de mayor violencia (>30 acciones armadas)

	aarmadas	td	ip	pibpercapita
aarmadas	1.0000			
td	0.4262	1.0000		
ip	0.5299	0.3161	1.0000	
pibpercapita	-0.3150	-0.2681	-0.6436	1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, en relación a las correlaciones entre las acciones armadas y las características socioeconómicas, los datos para el grupo I muestran que ante un cambio en la tasa de desempleo el efecto sobre las acciones armadas es positivo, es decir que los departamentos con violencia máxima tienen mayores tasas de desempleo. La incidencia de la pobreza tiene un efecto positivo sobre las acciones armadas, es decir, estos departamentos al tener mayores acciones armadas presentan peores índices de pobreza. Por último, la renta per cápita tiene un efecto negativo sobre las acciones armadas, es decir que estos departamentos al tener

menor producción por persona pueden tener más cantidad de acciones armadas. Asimismo, y en todo caso, la intensidad de relaciones entre variables es, sustancialmente, más relevante que en el resto de casos expuestos con anterioridad en este capítulo. De igual manera, es mucho más acentuada que para el caso de los departamentos con menor violencia armada de FARC y ELN.

Tabla 21: Correlación de la violencia estructural con los departamentos de mayor violencia (>30 acciones armadas)

	aarmadas	td	ip	pibpercapita
aarmadas	1.0000			
td	0.2835	1.0000		
ip	0.2314	-0.0638	1.0000	
pibpercapita	-0.0997	-0.1173	-0.6979	1.0000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22: Clasificación tripartita de los departamentos de Colombia en función de la violencia directa de las guerrillas, 2011 - 2012

Grupo I. Violencia máxima (<60 acciones guerrilleras)	Grupo II. Violencia intermedia (15-59 acciones guerrilleras)	Grupo III: Violencia reducida (>15 acciones guerrilleras)
Antioquia Arauca Cauca Nariño Norte de Santander Putumayo Caquetá	Chocó Guaviare Huila La Guajira Meta Tolima Valle del Cauca	Amazonas Atlántico Bogotá D.C. Bolívar Boyacá Caldas Casanare Cesar Córdoba Cundinamarca Guainía Magdalena Quindío Risaralda Santander Sucre Vaupés Vichada

Fuente: Elaboración propia

Este mismo resultado de mayor incidencia de la violencia estructural sobre los que recientemente se han consolidado como departamentos con mayor violencia directa, se puede observar, de forma más nítida cuando, igualmente tomando en consideración los datos de 2011 y 2012, los departamentos se organizan de acuerdo a una clasificación tripartita. De un

lado, los departamentos que superan las 60 acciones guerrilleras al año; en otro los que contabilizan entre 15 y 59 acciones de FARC y ELN al año y, finalmente, como departamentos de violencia reducida, aquéllos en los que tiene lugar menos de 15 acciones guerrilleras al año.

Con base en esta clasificación, se puede observar la relación creciente entre violencia estructural y violencia directa pues, en las variables socioeconómicas utilizadas – PIB per cápita, desempleo, umbral de pobreza y PIB per cápita por unidad familiar – sistemáticamente se encuentran peores cifras a medida que se encuentran mayores niveles de violencia guerrillera.

Así, el grupo I, presenta en comparación con los otros arroja unos niveles de desarrollo socioeconómicos menores del mismo modo que el grupo II, denominado de “violencia intermedia”, lo hace con respecto del grupo de departamentos con violencia reducida. Dicho de otro modo, para los años 2011 y 2012, las condiciones socioeconómicas de los departamentos parece que determinan (en promedio), que se perpetúen un mayor número de acciones armadas (y/o allá más violencia).

Tabla 23: Indicadores socioeconómicos en función del grado de violencia departamental

MEDIA	Grupo I. Violencia máxima (<60 acciones guerrilleras)	Grupo II. Violencia intermedia (15-59 acciones guerrilleras)	Grupo III: Violencia reducida (>15 acciones guerrilleras)
Acciones Armadas	83,8	26,9	4,91
PIB per cápita	7.323.414	8.029.678	8.130.575
PIB per cápita por unidad de gasto	330.632	365.752	434.846
Incidencia de la pobreza	44,4	43,1	37,8
Tasa de desempleo	11,75	10,53	9,84

Fuente: Elaboración propia

4. La percepción de la violencia estructural a través de las alcaldías de Colombia

Más allá de estas consideraciones, la violencia estructural en su impacto con la violencia directa fue uno de los elementos que, a efectos de analizar su eventual relación, fue objeto de estudio en el cuestionario realizado con las 221 alcaldías de Colombia. Un objeto de estudio que, no obstante, hace valer la hipótesis de partida en la medida en que, como se verá, mayoritariamente las alcaldías de los departamentos más violentos y con mayo presencia de

cultivos ilícitos son, a su vez, los que peores niveles de desarrollo económico y social presentan.

De hecho, una de las preguntas más ilustrativas del cuestionario, a efectos de este capítulo, sería la pregunta número 9, la cual solicitaba a los entrevistados que valorasen de 1 a 10, siendo 1 “nada relevante” y 10 “muy relevante”, diferentes problemas que afectaban institucionalmente al municipio. Así, el resultado obtenido se recoge en estas tablas 26 y 27, y de la que se puede extraer una valiosa información.

Lo primero de todo, es la relevancia en cuanto al orden y la valoración que las 221 alcaldías realizan respecto de los principales problemas que afectan el bienestar y la gobernabilidad en sus municipios.

En cuanto al orden de los problemas, los dos más importantes son estructurales y el tercero, de violencia directa. Clasificados sobre una referida medición de 1-10, las mayores preocupaciones para las alcaldías son, en primer lugar, el desempleo (6.45), la pobreza (6.25) y, en tercer lugar, la concurrencia de grupos armados, guerrillas y Bacrim, en los escenarios locales (5.11). Sorprende que la desigualdad esté casi un punto y medio por debajo de la pobreza, en cuanto a su percepción problemática (5.08). En quinto lugar, muy próximo, estaría la percepción en cuanto a ausencia institucional del Estado (5.06), y finalmente, como problemas de un orden más relativo se encontrarían la corrupción (3.38) y la presencia de cultivos ilícitos (3.14). Muy posiblemente, estos dos problemas queden relegados, en primer lugar, por la propia naturaleza de las encuestas respecto de las alcaldías, que invita a pensar en la consideración bondadosa respecto de los niveles de corrupción y, por otro lado, el propio hecho que acompaña a la existencia de cultivos ilícitos, muy focalizada geográficamente en el país.

En primer lugar, si se analizan las tres variables socioeconómicas más preocupantes, desempleo, pobreza y desigualdad, se puede observar que de los 27 departamentos analizados en los cuestionarios, dentro del grupo de departamentos más violentos destacan Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Nariño y Cauca. Antioquia y Meta, quedarían por fuera, en la medida en que se trata de dos de los departamentos de mayor PIB del país toda vez que Arauca no fue cubierto por el cuestionario.

De otro lado, Chocó, Caldas, Huila, Tolima cerrarían el grupo de los departamentos en los que se aprecia mayor severidad percibida respecto del problema de desempleo. Cuatro departamentos que encajan perfectamente en lo anterior pues, en suma, de los nueve departamentos con mayor percepción del desempleo como factor negativo, cinco son fronterizos, y los tres restantes, en buena medida, harían parte del violento, y abandonado corredor que parece ser la región suroccidental del país.

Tabla 24: Percepción de los problemas más importantes por municipio pero con desglose departamental

Desempleo		Pobreza		Desigualdad		Presencia de grupos	
Chocó	9	Putumayo	9	Guaviare	10	Caquetá	10
Putumayo	9	Atlántico	9	Cesar	10	Norte de Santander	8,3
Caldas	8,75	Caquetá	8,33	Tolima	8,66	Putumayo	8
Caquetá	8,33	Guainía	8	Caldas	8	Chocó	7,75
Huila	8,2	Nariño	7,83	Caquetá	7,66	Valle del Cauca	7,57
Norte de Santander	8	Chocó	7,75	Chocó	7	Cauca	7,1
Tolima	7,33	Tolima	7,7	Norte de Santander	6,5	Nariño	6,96
Nariño	7,23	Norte de Santander	7,5	Nariño	6,33	Antioquia	6,93
Cauca	7,16	Cauca	7,4	Atlántico	6,25	Risaralda	6,83
Atlántico	7	Cesar	7,3	Cundinamarca	6	Guaviare	6,83
Guaviare	7	Guaviare	7,3	Putumayo	6	Cesar	6,66
Magdalena	7	Huila	7,2	Cauca	5,75	Casanare	6,65
Cesar	7	Antioquia	7	Casanare	5,42	Bolívar	6,53
Valle del Cauca	7	Magdalena	7	Córdoba	5,33	Sucre	5,6
Risaralda	7	Córdoba	6,6	Risaralda	5,33	Meta	5,16
Córdoba	6,66	Risaralda	6,33	Huila	5,2	Magdalena	5
Antioquia	6,72	Cundinamarca	6,3	Boyacá	5,08	Tolima	4,33
Sucre	6	Casanare	6,14	Guainía	5	Boyacá	3,08
Boyacá	5,58	Sucre	6	Antioquia	5	Cundinamarca	2,9
Casanare	5,42	Valle del Cauca	5,85	Magdalena	5	Córdoba	2,33
Cundinamarca	5,4	Boyacá	5,16	Valle del Cauca	4,57	Guainía	2
Córdoba	5,33	Santander	4,6	Santander	3,9	Huila	2
Guainía	5	Caldas	4,12	Meta	3,33	Atlántico	2
Quindío	4,25	Bolívar	4	Bolívar	3,25	Quindío	1,75
Santander	2,9	Quindío	3,25	Quindío	2,75	Caldas	1,75
Bolívar	2,5	Meta	3,16	Sucre	1	Santander	1,7
Media Nacional	6,45	Media Nacional	6,25	Media Nacional	5,08	Media Nacional	5,11

Fuente: Elaboración propia

Como es de esperar, en lo que afecta al problema de la pobreza los resultados, nuevamente, son similares en su interpretación. De los 7 departamentos que se señalaban como los más violentos del país, en cinco de ellos - Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, nuevamente, se reivindica un mayor impacto de la pobreza. Nuevamente, se excluyen por razones de desarrollo socioeconómico, Meta y Antioquia, y cierran la mayor preocupación por esta cuestión los departamentos de Atlántico, Tolima, Guainía y Chocó. Nuevamente, dos fronterizos – Guainía y Chocó- y otro correspondiente al suroccidente del país – Tolima.

De una manera muy similar cabe entender la percepción del problema de la desigualdad, que responde a interpretaciones similares, tanto en su valor, como en su ubicación, con respecto a los problemas de desempleo y pobreza. De hecho, del referido grupo de departamentos con mayores niveles de violencia, en esta ocasión solo destacarían, como los más afectados, los departamentos de Caquetá, Nariño y Norte de Santander si bien, a estos, se adicionan otros departamentos fronterizos como Chocó y Cesar. Este último ya destacaba por la importancia descrita del problema de la pobreza, y que también lleva a que repitan presencia Tolima y Atlántico junto con Caldas (donde se destacaba la importancia de la pobreza) y Guaviare.

En lo que afecta a la presencia de grupos armados, de los 7 departamentos calificados como los más violentos del país, en lo que las alcaldías destacan como problema importante, tienen presencia los siete departamentos: Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Nariño y Antioquia, lo cual, en inicio, redundaría en la lógica de la selección y de la hipótesis planteadas sobre *periferialización* de la violencia. Ello, porque de acuerdo con las cifras y estadísticas, también las encuestas coinciden, plenamente, en reconocer a los departamentos más violentos, como los departamentos en lo que, a nivel de alcaldía, se percibe mayor problemática.

A los seis departamentos se adicionarían Valle del Cauca y Chocó, fronterizos y con los mayores niveles de pos-paramilitarismo y presencia de Bacrim, y Risaralda, uno de los departamentos, por el impacto del municipio de Dos Quebradas, conexo a Pereira, de mayor reproducción de la violencia, tal y como explica el hecho de que esta ciudad destaque, por ejemplo, en el puesto 36° entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo⁴⁵⁰.

En el otro orden de respuestas, e identificando los menores niveles de preocupación en cuanto a las alcaldías encuestadas estaría la ausencia institucional del Estado y la corrupción, y por fuera de las dinámicas de violencia estructural, la presencia de cultivos ilícitos, que por su propia naturaleza y geografía se percibe como el menos relevante, en términos agregados, para las alcaldías.

⁴⁵⁰ Véase: <http://www.forbes.com.mx/las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo/> Consultado el 13 de septiembre de 2015.

Tabla 25: Percepción de los problemas más importantes por municipio pero con desglose departamental

	Ausencia		Corrupción		Cultivos
Guaviare	10	Guainía	10	Guaviare	10
Cesar	10	Magdalena	9	Cesar	10
Norte de Santander	9	Cesar	8	Caquetá	9,3
Caquetá	8,66	Nariño	6,16	Putumayo	8
Guainía	8	Sucre	6	Norte de Santander	7
Nariño	8	Córdoba	5,33	Chocó	5,75
Putumayo	8	Atlántico	5,25	Nariño	5,66
Casanare	7,85	Caquetá	5	Cauca	5,62
Chocó	7,75	Risaralda	4,33	Valle del Cauca	4,57
Bolívar	6,5	Casanare	4,28	Meta	4
Cauca	5,62	Antioquia	4,22	Antioquia	3,77
Antioquia	5,5	Bolívar	4	Bolívar	3,75
Valle del Cauca	5,28	Tolima	4	Huila	2,6
Huila	4,4	Huila	3,8	Casanare	2,42
Tolima	4,33	Valle del Cauca	3,42	Guainía	2
Córdoba	4	Norte de Santander	3	Risaralda	2
Risaralda	4	Cauca	2,87	Magdalena	2
Magdalena	4	Cundinamarca	2,6	Córdoba	1,66
Meta	3,83	Caldas	2,37	Boyacá	1,16
Santander	3,8	Chocó	2,25	Santander	1
Cundinamarca	3,8	Boyacá	2,16	Quindío	1
Boyacá	3,75	Putumayo	2	Cundinamarca	1
Caldas	3	Quindío	1,75	Sucre	1
Atlántico	2	Meta	1,5	Tolima	1
Quindío	1,25	Santander	1,1	Caldas	1
Sucre	1	Guaviare	1	Atlántico	1
Media Nacional	5,06	Media Nacional	3,38	Media Nacional	3,14

Fuente: Elaboración propia

No obstante, es importante destacar la proximidad, en cuanto a percepciones, que existe entre el problema relativo a la ausencia institucional del Estado con otros como la inequidad o la presencia de grupos. De hecho, las respuestas nuevamente responden a un orden similar al

planteado para el resto de problemas identificados. De este modo, en los departamentos, con base en las encuestas realizadas a las alcaldías, más afectadas por ausencia del Estado y corrupción vuelven a ser los departamentos más violentos descritos y expuestos con anterioridad. Así, Nariño, Norte de Santander, Caquetá, Cauca y Putumayo aparecen entre los más afectados y, en adición, otros dos departamentos periféricos y fronterizos como son Chocó y Cesar, además del departamento de Guaviare.

Sorprende que solo en la valoración de la corrupción, el resultado de los cuestionarios arroja resultados distintos. Tal vez, porque al ser las propias alcaldías el objeto de estudio, cabe esperar una respuesta sesgada y, en cierto modo, “exculpatoria” respecto de la realidad.

Únicamente Nariño y Caquetá, de entre los departamentos más violentos, aparecen como los más afectados por la corrupción, toda vez que destaca, por su ubicación espacial, una importante afectación sobre la costa Atlántico. Tanto, que Cesar, Magdalena, Atlántico y Córdoba aparecen entre los más afectados junto con otros departamentos afectados notablemente por la dimensión estructural de la violencia, tal y como se recoge en otros indicadores, y como sucede con Chocó y Guaviare y, sorprendentemente, Valle del Cauca.

A efectos de valorar la violencia estructural y su relación con los enclaves de mayor violencia directa, de la misma manera, se pueden extraer otras posibilidades de análisis del cuestionario orientado sobre las alcaldías.

Como se expuso al inicio de esta tesis, cuando con detalle se explicaba la metodología, una de las preguntas apunta, directamente, a una valoración de 1 a 10, de menor a mayor, en cuanto a la evolución del municipio a efectos integrales, entre 1998 y 2012, en cuanto a fortalecimiento institucional, capacidades de gestión y creación de oportunidades.

El resultado de ese cuestionario nuevamente se ajusta con la hipótesis de la violencia estructural pues del grupo de los siete departamentos más violentos, están presentes con los peores indicadores de valoración los departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Nariño – con la excepción de Meta y de Antioquia, donde las variables estructurales son relativas-, y a los que se añaden Cesar y Chocó, que son los departamentos del país con mayores niveles de paramilitarismo e, igualmente, Guaviare y también Valle del Cauca.

En cuanto a la pregunta relativa a las capacidades socioeconómicas del municipio, nuevamente las cifras parecen conferir importancia a la relación entre violencia estructural y violencia directa pues tomando como categorías de respuesta de 1 a 4, siendo 1 “excelentes” y 4 “críticas” el resultado medio es 2,63, lo cual supone un valor regular. En todo caso, del grupo de los departamentos más violentos del país destacan los mismos cinco departamentos periféricos: Nariño, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá, además de otros tres departamentos fronterizos como Chocó y Cesar, además de Guaviare y, novedosamente, el departamento de Boyacá.

Tabla 26: Percepción de las capacidades institucionales y socioeconómicas de las alcaldías, en desglose por departamento

Evolución institucional		Capacidades socioeconómicas	
Cesar	1	Guaviare	4
Chocó	4,33	Norte de Santander	3,33
Nariño	4,57	Caquetá	3
Norte de Santander	4,66	Cesar	3
Caquetá	4,75	Chocó	3
Guaviare	5	Putumayo	3
Putumayo	5	Cauca	2,88
Valle del Cauca	5,25	Boyacá	2,83
Cauca	5,33	Nariño	2,83
Huila	5,5	Magdalena	2,8
Boyacá	5,91	Risaralda	2,8
Risaralda	6	Tolima	2,75
Santander	6,09	Atlántico	2,75
Antioquia	6,31	Valle del Cauca	2,75
Cundinamarca	6,5	Casanare	2,66
Bolívar	6,6	Antioquia	2,52
Casanare	7	Bolívar	2,5
Córdoba	7	Córdoba	2,5
Magdalena	7	Cundinamarca	2,5
Sucre	7	Huila	2,5
Meta	7,25	Meta	2,5
Atlántico	7,5	Santander	2,3
Tolima	7,5	Caldas	2,25
Caldas	7,87	Guainía	2
Quindío	8,26	Quindío	2
Guainía	9	Sucre	2
Media Nacional	6.12	Media Nacional	2,63

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, por ende, tanto cuando se pormenorizan los indicadores socioeconómicos de acuerdo a la percepción de las alcaldías, como cuando se utilizan nociones multidimensionales, además, con retrospectiva histórica, cinco de los siete

departamentos concebidos como más violentos ocupan, indistintamente, las primeras posiciones. Posiciones, sea como fuere, complementadas siempre por los departamentos que son denominados como de violencia intermedia, como es el caso de Chocó, Guaviare o Valle del Cauca.

Tabla 27: Indicadores de Desarrollo Humano y Necesidades Básicas Insatisfechas

	IDH			NBI
Caquetá	0,752	Medio	Córdoba	76,60
Putumayo	0,759	Medio	Chocó	76,11
Guainía	0,768	Medio	Sucre	69,48
Guaviare	0,768	Medio	Bolívar	67,37
Chocó	0,77	Medio	Cesar	66,92
Nariño	0,773	Medio	Arauca	64,26
Sucre	0,775	Medio	Cauca	61,97
Norte de Santander	0,776	Medio	Guaviare	61,86
Cauca	0,782	Medio	Nariño	59,32
Magdalena	0,785	Medio	Caquetá	59,20
Córdoba	0,798	Alto	Norte de Santander	58,91
Arauca	0,804	Alto	Magdalena	58,68
Tolima	0,804	Alto	Casanare	57,34
Huila	0,807	Alto	Tolima	50,92
Cesar	0,81	Alto	Boyacá	49,00
Meta	0,822	Alto	Huila	48,83
Bolívar	0,823	Alto	Antioquia	47,48
Caldas	0,828	Alto	Putumayo	46,22
Quindío	0,832	Alto	Santander	45,37
San Andrés	0,834	Alto	Meta	44,46
Atlántico	0,835	Alto	Atlántico	42,57
Cundinamarca	0,837	Alto	Cundinamarca	32,22
Risaralda	0,839	Alto	Risaralda	32,06
Boyacá	0,842	Alto	Caldas	29,18
Antioquia	0,849	Alto	Bogotá D.C.	27,84
Valle del Cauca	0,861	Muy alto	Valle del Cauca	26,22
Casanare	0,867	Muy alto	Quindío	22,23
Santander	0,879	Muy alto	San Andrés y Providencia	15,34
Bogotá D.C	0,965	Muy alto	-	-
Media Nacional			Media Nacional	53,51

Fuente: DPS (2014) y DANE (2014)

Quedan por fuera Meta y Antioquia si bien puede haber factores que, de cara a investigaciones ulteriores, pueden requerir una atención especial. Ello, porque en Antioquia, un factor clave lo representa Medellín, que condensa buena parte de la población del departamento y que mejora sustancialmente el valor de muchos de los condicionantes socioeconómicos. De otro lado, estaría el departamento de Meta, uno de los de mayor PIB per cápita, dado su alto valor en cuanto al concepto de regalías por la presencia de la industria petrolera pero que debe relativizarse por el denso factor de concentración de riqueza que, como en Antioquia, *invisibiliza* parte de la magnitud de los indicadores socioeconómicos

Además de indicadores unidimensionales y apreciaciones y percepciones recogidas por los cuestionarios, en la relación de la violencia directa y la violencia estructural, igualmente, cuando se recurre a variables complejas como el INBI o el IDH, también, los departamentos con mayores niveles de violencia copan los primeros puestos en cuanto a posiciones deficitarias con respecto de estos valores.

Como se puede observar, en lo que respecta al IDH, del grupo de departamentos con mayores niveles de violencia directa unilateral, nuevamente se encuentra, sobre el total de ocho departamentos - incluyendo a Arauca al disponer de datos al respecto-, se da la circunstancia en la que cinco de esos departamentos son los que adolecen de menores niveles de desarrollo humano, tal y como sucede con Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Norte de Santander, encontrándose igualmente otros departamentos con niveles intermedios, pero significativos de violencia, como es, particularmente, el caso de Chocó y Guaviare.

En lo que tiene que ver con los medidores de necesidades básicas insatisfechas, los resultados nuevamente son muy semejantes. Este medidor se sitúa, como media nacional, en un nivel del 53,51%. Un valor que superan 5 de los 7 departamentos más violentos del país, tal y como son Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño y Caquetá.

Sorprendentemente, Putumayo presenta un NBI que le acerca a departamentos, en inicio, que parecen ser mucho más prósperos, como es el eje cafetero o los departamentos de la región central. Asimismo, y como sucede con el resto de medidores, Meta y Antioquia escapan de las dinámicas explicativas que, *per se*, puede ofrecer la violencia estructural.

5. Conclusiones

En definitiva, y como se puede dar cuenta, hasta el momento, en este capítulo, a pesar de las dificultades metodológicas, y de las imposibilidades de comprobación en términos de regresión, lo cierto es que cabe aceptar, cuando menos, una proximidad en cuanto a la relación violencia directa – violencia estructural. Si bien las correlaciones ganan fuerza cuando se profundiza en el alcance de la dimensión de la violencia directa, diferenciando entre niveles de violencia según, en este caso, el activismo guerrillero, lo cierto es que parece darse una notable coincidencia, no solo con las percepciones de las 221 encuestas realizadas

a las alcaldías sino, igualmente, con base en los medidores estadísticos que, como el desarrollo humano o las necesidades básicas insatisfechas representan.

Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto es que, por sí misma, la violencia estructural se erige como una condición necesaria aunque no suficiente a fin de entender los enclaves que adolecen de mayor violencia estructural. Es decir, en inicio, existen departamentos que sin hacer parte del grupo de mayor violencia, presentan niveles de violencia estructural.

Mayormente, es cierto que además de los departamentos periféricos de Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander o Caquetá, hay otros como Chocó, Guaviare o Arauca que, siendo categorizados como de violencia intermedia, arrojan cifras de desarrollo social y económicos insuficientes. Empero, otros departamentos como Guainía, Cesar, Atlántico, Sucre, Magdalena o Boyacá presentan deficiencias estructurales que, sin embargo, no se traducen en notables niveles de activismo o presencia guerrillera.

La diferencia entre estos y los anteriores puede reposar en la condición particular que representa la concurrencia de cultivos ilícitos y que, en adición a la violencia estructural, parece suponer el escenario idóneo para interpretar las dinámicas espaciales que, en la actualidad, experimenta el conflicto armado colombiano.

Si se observan las cifras que ya se mostraron, en cuanto a hectáreas cultivadas de coca en 2012, para los departamentos de Guainía (301Ha), Cesar (13Ha), Atlántico (0Ha), Sucre (0Ha), Magdalena (37Ha) o Boyacá (10Ha), todos ellos carecen de presencia de cultivos ilícitos.

De este modo, se puede aceptar la hipótesis de que, verdaderamente, la violencia estructural y la concurrencia de cultivos ilícitos son un atractivo que casi, a modo de binomio indisociable, garantiza la presencia en la actualidad de FARC y ELN.

Si se revisan nuevamente los departamentos con peores indicadores de Desarrollo Humano y Necesidades Básicas Insatisfechas, entre los diez peores registros se encuentran Caquetá (8%), Putumayo (13%), Nariño (22%), Norte de Santander (9%), Cauca (9%). Todos estos son escenarios nucleares en lo que respecta al cultivo ilícito pues condensan un total del 61% de todos los cultivos del país además de encontrarse en el grupo de los departamentos con mayor violencia guerrillera. Es decir, aglutinan violencia directa, cultivos ilícitos y violencia estructural. Los otros departamentos que acompañan a estos en cuanto a IDH e ICV son Cesar, Sucre, Guainía, Guaviare, Magdalena, Bolívar, Chocó y Guaviare. Todos, salvo Chocó y Guaviare se encuentran en los departamentos de violencia directa reducida si bien, casualmente, en ninguno concurren cantidades ni tan siquiera relevantes de cultivos de coca. Es más, estos cinco departamentos apenas representan el 4.19% del total de la superficie cultivada. Asimismo, los departamentos de Chocó y Guaviare, son los únicos del total que presentan niveles de violencia intermedia, toda vez que acogen importantes niveles en cuanto a cultivos de coca. De un lado Chocó, el departamento en el que más se han intensificado los cultivos ilícitos en los últimos años y que ya representa el 7% del país, con casi 4.000Ha

cultivadas. De otro lado, Guaviare, que representa el 8% de los cultivos con unos niveles semejantes a los de Chocó.

Tal reveladora es esta cuestión que el resto de departamentos, con la excepción de Antioquia, Meta y Arauca, los departamentos restantes apenas concentran el 4.25% de la superficie cultivada de coca. De hecho, solo los más violentos, Antioquia, Arauca y Meta, con relativas dosis de violencia estructural concluirían con el 12% de los cultivos restante.

Dicho de otro modo, los mayores niveles de violencia del país se dan siempre en departamentos con cultivos ilícitos, con la excepción de Arauca. Todos esos departamentos, con la excepción de Antioquia y Meta son periféricos, mayormente, de condición fronteriza, y todos adolecen de graves problemas de violencia estructural, con igual excepción de Antioquia y Meta.

Es decir, con base a esta afirmación, cabría pensar en la importancia, como condición relevante, de la violencia estructural a efectos de que la mayoría de los departamentos más violentos del país, son departamentos que están, sistemáticamente entre los peor situados en cuanto a desarrollo socioeconómico y, además, incurren en albergar cultivos de coca. Los casos de Meta, Arauca y Antioquia, del conjunto de 8 departamentos, resultan algo excepcionales aunque por particularidades similares. Arauca y Meta reciben ingentes cantidades de recursos en concepto de regalías, a tenor de su vocación extractiva. Esto hace que los indicadores sociales y económicos puedan estar inflados, a lo cual ayuda el hecho de que, cuando se analizan las percepciones, las posiciones de estos departamentos empeoran sobre el conjunto global con base en los datos estadísticos. Asimismo, Antioquia y Arauca tienen dos de los cinco coeficientes de Gini más elevados del país, por encima de 0.530, de manera que se pueden realizar salvedades que ameritarían un análisis que, cuando menos, tenga en consideración estas cuestiones (DPS, 2014).

Quizá, por todo lo anterior, las expectativas sobre un eventual marco de posconflicto, como sugiere la siguiente tabla, invite más bien al desánimo. Ello, porque cuando a las alcaldías se les pregunta, por tanto, de acuerdo a las dimensiones de violencia estructural y directa expuestas, que valoren las condiciones de su municipio, y por extensión, su departamento, en un eventual marco de posconflicto, por primera vez seis y no cinco de los departamentos más violentos del país encabezan la lista. De hecho, solo Antioquia muestra niveles optimistas para un eventual marco de superación de la confrontación armada.

Todos los demás, incluido el departamento de Meta, presentan valores iguales o inferiores a 4,0 y comparten percepción negativas en cuanto a las posibilidades reales de un escenario de posconflicto con los departamentos fronterizos de Guainía, Cesar y Chocó, estos dos últimos, fuertemente azotados por el paramilitarismo, y de Guaviare, constante en buena parte de los medidores de violencia estructural y también de violencia directa.

Tabla 28: Expectativas sobre el posconflicto según las alcaldías pero con desglose departamental

Expectativas posconflicto	
Cesar	1
Norte de Santander	2,33
Putumayo	3
Nariño	3,14
Chocó	3,33
Caquetá	3,5
Cauca	4
Guainía	4
Guaviare	4
Magdalena	4
Meta	4
Valle del Cauca	4,37
Boyacá	4,66
Casanare	4,8
Risaralda	5
Cundinamarca	5,4
Huila	5,5
Santander	5,9
Caldas	6
Tolima	6
Bolívar	6,2
Antioquia	6,4
Córdoba	6,5
Atlántico	7
Sucre	7
Quindío	9
Media Nacional	5,17

Fuente: Elaboración propia.

Tal vez, la mejor manera de temrina sea evocando las palabras del personero de Norte de Santander que, perfectamente, concluyen estas afirmaciones:

“Tenemos preocupantes niveles de pobreza, desigualdad y falta de presencia del Estado así como marginalidad que, claro, termina por hacer de este lugar un lugar válido para la

presencia de grupos. No tenemos vistas de mejoramiento. De hecho, en el municipio estamos convencidos de que lo que se firme en La Habana no va a cambiar nada. Contamos con un médico para 20.000 habitantes. Empezamos el curso escolar en mayo y no en enero porque no tenemos docentes. La situación de las carreteras, además de insegura, es crítica- No tenemos infraestructura. ¿Cómo vamos a pensar en el posconflicto? Además, la presencia de la fuerza pública es muy violenta, tal vez, porque es un territorio aun hoy en disputa. Los combates son constantes y lo más preocupante, es la fuerza pública la principal causante de desplazamientos y violaciones a los Derechos Humanos en la región. No confiamos en el Estado y eso que en último tiempo, en los últimos 4-5 meses las FARC han estado más tranquilas, a diferencia eso sí, del ELN y del EPL”. (EP 19, mayo de 2015).

CONCLUSIONES GENERALES

I

Lo cierto es que a lo largo de todas estas páginas, se ha buscado estudiar el impacto real de algunos de los factores que más han afectado a la lógica y evolución de las guerrillas en el conflicto armado colombiano en estos últimos años. Factores que, como se ha repetido a lo largo de todo el escrito, fundamentalmente son cuatro: narcotráfico, política de seguridad, paramilitarismo y situación estructural, y que convergen en un resultado transversal: la *periferialización* del conflicto armado interno colombiano.

En primer lugar, se puede aceptar que, en el transcurso desde los años 1998 y 2012, ha habido una evolución tendente, casi paralela, entre el activismo armado de las guerrillas colombianas de las FARC y del ELN, por un lado, y la concurrencia de cultivos ilícitos de coca, por otro. Ello, por la reducción de las tradicionales fuentes de financiación, como el secuestro y la extorsión, y que obliga a entender que el narcotráfico se erige como el principal rubro para sostener una dinámica armada como la que tiene lugar en Colombia.

Esta reducción de ingresos, que permite plantear la hipótesis de lo que se podría denominar como *narcotización* de las guerrillas, además de un debilitamiento en el volumen de sus finanzas, termina siendo el resultado de quince años de beligerancia y de políticas de seguridad que buscan, casi por primera vez en Colombia, la confrontación real y duradera a efectos desactivar el conflicto armado colombiano desde una única dimensión militar.

El resultado es que el ELN tiene que terminar por concentrarse en unos pocos departamentos en los que aún mantiene un importante arraigo, que a su vez conecta con sus principales fuentes de financiación. Tal es el caso de los departamentos de Arauca y Norte de Santander, donde se encuentran sus estructuras más poderosas así como sus mayores ingresos. En menor medida, habría una supervivencia de la guerrilla también en el Pacífico, y más particularmente, en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño donde, no obstante, hay una prevalencia de las FARC. En todo caso, la realidad es que estos dos escenarios periféricos, nororiente y Pacífico, han sido siempre de importante presencia de un ELN que, sin embargo, por las propias dinámicas del conflicto y las direcciones de la política de seguridad, terminaron por ser expulsados de sus principales enclaves de poder: Antioquia, Santander y algunos escenarios concretos del Atlántico.

En lo que afectaría a las FARC se puede observar una evolución, igualmente, de relativa *periferialización*, aunque nada comparable a lo expuesto para el ELN. Si bien se ha perdido su mayor arraigo en el eje cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Santander y la costa Atlántica, donde a la falta de cultivos se suma un mayor impacto de la PSD, de otro lado, se evidencia

una absoluta continuación en lo que respecta a sus niveles de activismo armado en el nororiente del país, en el suroccidente, y en la región de los Llanos Orientales.

Dicho de otro modo, las FARC, igual que el ELN, tienen una importante presencia en el nororiente y en el Pacífico pero, además, su arraigo se condensa en el suroccidente, en los departamentos de Huila, sur de Tolima y en el corredor que conecta Meta – Caquetá – Putumayo, que es de importancia nuclear en la supervivencia de la guerrilla.

A partir de esta tesitura, lo que se puede afirmar es que la primera de las hipótesis que se planteaba al inicio de esta tesis doctoral queda contrastada. Es decir, se apuntaba como hipótesis que, entre 1998 y 2012 tiene lugar un proceso de *periferialización y narcotización* en ambas guerrillas. Si se toma como variable dependiente la violencia armada de estos grupos, y como variable independiente la concurrencia de cultivos ilícitos, cabe afirmar que, como muestra este trabajo doctoral, a mayor presencia de cultivos, mayores niveles de presencia armada guerrillera. Presencia armada guerrillera que, a su vez, se contempla, como se repite, en buena medida, en departamentos fronterizos o ribereños con el Océano Pacífico. Es decir, todos estos departamentos con mayores niveles de cultivos de coca, y mayores niveles de presencia guerrillera son frontera terrestres - bien con Venezuela, como es el caso de Norte de Santander y Arauca; bien con Perú, como Putumayo; con Ecuador (Nariño)- o con salidas al Pacífico, como es el caso de este departamento y otros como Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

De hecho, de entre los departamentos más violentos en cuanto a activismo guerrillero, todos comparten esta condición periférica con la excepción de Meta y Caquetá, enclaves tradicionales de las FARC y de Huila y Tolima, donde tampoco se minimizó el arraigo guerrillero. En todo caso, el eje Caquetá, Huila y Tolima condensa buena parte del activismo guerrillero en la región suroccidental del país al tratarse de un corredor directamente integrado en las dinámicas particulares del suroccidente.

Así, esta hipótesis de la *periferialización y narcotización* guerrillera ha sido constantemente corroborada por medio de las cartografías presentadas. Ello, no solo por la concurrencia geográfica y la evolución que relaciona las acciones guerrilleras de FARC y ELN con la presencia de cultivos allí donde actúan, sino por los diferentes testimonios y apreciaciones, tanto de los cuestionarios analizados como, sobre todo, de las entrevistas en profundidad, que en ningún momento desestimaron o negaron esta afirmación. Basta con decir que FARC y ELN duplican, e incluso triplican, los niveles de activismo y presencia guerrillera en aquellos enclaves cocaleros; enclaves que concentran la mayor parte de las acciones armadas que, en la actualidad, tienen lugar.

De otro lado, cabe concluir que, en lo que afecta al caso colombiano, las diferentes políticas de seguridad, especialmente las puestas en marcha por los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, no puede decirse que hayan resultado exitosas en lo que a la superación del conflicto armado se refiere. Es decir, tras miles de operativos unilaterales de la Fuerza

Pública y miles de millones de dólares invertidos en seguridad y defensa, el alcance real y la mitigación del activismo guerrillero ha sido dispar, en función de las particularidades espaciales de las diferentes regiones del país. Como se planteaba en la segunda hipótesis, siendo la variable dependiente el número de acciones guerrilleras y la variable independiente el número de operativos militares y de seguridad contra las FARC y el ELN, solo cuando hay gran disparidad entre ambas – lo cual va relacionado con el arraigo guerrillero a un lugar y sus capacidades de financiación del conflicto- es que el conflicto se reduce.

La costa Atlántica, el centro del país y otros departamentos como Boyacá o Santander sí que evidencian un repliegue más que notable de las guerrillas. Sin embargo, este tipo de realidad no puede ser extendida al resto del país. Esto, porque, por ejemplo, enclaves que desde hace quince años vienen siendo una prioridad para el Estado en cuanto al volumen de operativos de la Fuerza Pública como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Putumayo, Meta o Caquetá, continúan siendo escenarios de predominio guerrillero y de ingente presencia de cultivos ilícitos, lo cual dificulta una reducción real en el activismo y la presencia guerrillera.

Dicho de otro modo, las políticas de seguridad inspiradas en las nociones beligerantes de “paz negativa”, esto es, de comprender la paz como ausencia de guerra, muestran sus limitaciones en el caso colombiano donde, mayormente, en el mejor de los casos se puede entender que la intención de hacer llegar el Estado al conjunto del territorio bastaba con hacerlo en términos de presencia policial o militar. Ni las cifras ni los testimonios recogidos secundan esta realidad, de manera tal que la paz, como concepto, resulta una necesidad o un reto mucho más complejo e integral de lo que se ha interpretado tradicionalmente en Colombia.

Tras miles de operativos dirigidos a combatir las guerrillas en estos enclaves periféricos, y de mayor arraigo en la presencia de cultivos, la desactivación del conflicto por la vía armada ha sido infructuosa. La intensidad de los combates de la guerrilla no se han reducido; la presencia municipal de la misma en los departamentos sigue siendo muy relevante; e incluso, dado la anterior, desde los últimos años se aprecian importantes dinámicas de creciente en el volumen de operativos de una Fuerza Pública que presenta visos de agotamiento. Lo mismo se extendería a las acciones reactivas sobre erradicación de cultivos. Tras quince años de aspersiones, y más de un millón de hectáreas afectadas, todos estos departamentos, con la excepción de Arauca, presentan niveles de cultivo exactamente iguales a los de hace una década, e incluso, muy superiores. Tal vez esto permita entender la reciente desaparición, en 2015, de las aspersiones de glifosato como instrumento de lucha anti-narcóticos.

Otra de las conclusiones a las que se puede llegar es, por otro lado, a la desestimación del paramilitarismo como un factor que, verdaderamente, haya contribuido a la desaparición de las FARC como grupo guerrillero. Es decir, con las mencionadas excepciones del Magdalena Medio, de Antioquia o de algunos escenarios muy concretos de la costa Caribe, mientras coincidió temporal y espacialmente el fenómeno paramilitar con la presencia guerrillera, ésta ni se minimizó ni mucho menos dejó de actuar. Ello es especialmente evidente en los

enclaves que, como Arauca, Norte de Santander, el Pacífico o la mitad sur del país, se encontraban mayormente controlados por las FARC.

Es decir, si como se señalaba, se toma como variable dependiente las acciones guerrilleras y como variable independiente el activismo y la presencia paramilitar, éste, no afecta ni determina dinámicas de ruptura o continuidad. Es decir, especialmente las FARC siguen resultando el grupo guerrillero más importante, y sus niveles de activismo se mantienen estables e incluso crecientes allí donde en espacio y tiempo coinciden con el paramilitarismo. No obstante, a mayor arraigo guerrillero y mayor presencia de cultivos, menor afectación a las guerrillas. De hecho, basta con observar la escasa afectación que sufren en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo o Caquetá.

Al respecto hay una convergencia entre lo que muestran las cifras disponibles, las cartografías resultantes y los testimonios de los actores involucrados así como las percepciones de las alcaldías encuestadas. Es decir, si bien es cierto que el paramilitarismo surge con una naturaleza anti-subversiva, más pronto que tarde parece que termina operando como un proyecto criminal autónomo que, en todo caso, termina por replicar las mismas lógicas de violencia, cuando no más, de las guerrillas. Además, llegado el caso, aspirando a arrebatar sus fuentes de apoyo social primero, y de financiación, en torno a los cultivos ilícitos, después. Sin embargo, y a pesar de que el auge paramilitar se concentró, mayormente, en Antioquia y en los siete departamentos de la costa Caribe, algunos de los testimonios recogidos, sobre todo provenientes de la guerrilla, por su conexión con lo que evidencian las cifras, más bien, invitan a pensar en la capacidad de resistencia, principalmente de las FARC que, en muchas ocasiones, terminaron por sobreponerse a los envites del paramilitarismo.

Más bien se podría incluso plantear una conclusión contradictoria con lo anterior, pues con el proceso de desmovilización de las AUC, en 2005, y como reconocen algunos de sus máximos dirigentes en entrevistas concedidas para esta tesis doctoral, se desatendieron las transformaciones estructurales que debían garantizar una reinserción en la sociedad y una recomposición del tejido social colombiano.

Entendiendo que con la desaparición de la marca AUC era suficiente por parte del gobierno de Álvaro Uribe, se produjo una redefinición del fenómeno paramilitar y que en este trabajo de investigación se ha denominado como pos-paramilitarismo. Es decir, todo un saber hacer criminal heredado, en el que el control territorial, el conocimiento logístico y el poder armado se mantenían inalterados y en disposición de readaptarse a la nueva realidad posterior a la Ley de Justicia 975 de 2005.

Es más, el resultado previsto no se hizo esperar y apenas en dos años ya se hablaba en Colombia de las Bacrim. Grupos que mimetizaron el arraigo territorial de las AUC pero con una importante particularidad. Al no erigirse con la razón “anti-subversiva”, de combatir a la guerrilla, pero manteniendo su activismo criminal, las FARC, sobre todo, dejaban de ser

entendidas como enemigos para ser, más bien, concebidas como colaboradores frente a un enemigo común: el Estado.

Este tipo de alianzas, como se mostraba en la tesis, tienen lugar en el sur de Cesar, en Chocó, en Valle del Cauca, en Nariño o en Antioquia, y son puestas en conocimiento, igualmente, desde las entrevistas en profundidad abordadas. Sin duda, un llamado de atención a lo que debe entenderse por construcción de paz. Esto es, un proceso integral de transformaciones estructurales, de notable implicación de la población civil, y de una complejidad que integran factores económicos, sociales, políticos y culturales así como de reconstrucción, reparación y resolución.

Ello, porque la paz se entiende como la ausencia de violencia directa, cultural y estructural, orientada a la satisfacción de necesidades básicas, esto es, calidad de vida, bienestar, identidad y libertad para todos. Es decir, un intrincado panorama de inclusión social, política y económica que en Colombia aún resulta difícil de aceptar.

Como se vería en el último de los capítulos, y aunque es imposible hacer regresiones, por la ausencia de datos confiables, y las correlaciones también adolecen de importantes dificultades, la violencia estructural no por ello puede ser desestimada como factor explicativo. Así, si se toman los últimos dos años de estudio del conflicto armado, los departamentos con mayores niveles de violencia como Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Cauca son los que presentan menores niveles de desarrollo económico y social, en términos de PIB, umbral de pobreza, desarrollo humano, calidad de vida además de adolecer de los peores registros en cuanto a la percepción recogida por las 221 alcaldías trabajadas. Las únicas excepciones serían Antioquia y Meta, si bien con unos niveles en todo caso que se ven afectados por el factor Medellín en Antioquia, y en el caso de Meta por los ingresos en concepto de regalías habida cuenta de su fuerte impronta extractivista. De hecho, Medellín condensa el 40% de los algo más de seis millones del departamento de Antioquia, formado a su vez por 125 municipios.

Es decir, la hipótesis se corrobora en la medida en que se pone de manifiesto hasta qué punto el mayor activismo de las FARC y del ELN se habría visto favorecido por una mayor dependencia de los cultivos ilícitos, un menor impacto de la PSD, una ausencia relevante en lo que al factor paramilitar se refiere y, en última instancia, una mayor concurrencia en lo que a escenarios con menores niveles de desarrollo económico y social se trata. Dimensiones estructurales estás que más que causales, sí que son explicativas de las transformaciones experimentadas en las lógicas de ruptura y continuidad del activismo armado guerrillero haciendo valer la hipótesis, no de causalidad, pero sí de explicación de la actualidad, en la que, a menores niveles de desarrollo económico o institucional, mayores probabilidad de existencia de guerrilla.

II

Uno de los factores a los que no se ha hecho tradicional atención ni durante los gobierno de Andrés Pastrana ni Álvaro Uribe, pero tampoco de Juan Manuel Santos, ha sido el que tiene que ver con la violencia estructural. Colombia, según ACNUR, es el segundo país del mundo con mayor número de desplazamientos forzados, con motivo de conflicto armado, superando los 6 millones. Asimismo, la OEI, CEPAL o PNUD señalan que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra de América Latina, hasta el punto de que solo un 1% de la población es propietaria de más del 50% de la superficie del país. Se trata del país más desigual del continente, con un coeficiente de Gini de 0.54, solo superado por el 0.60 de Honduras. En los últimos años se cuentan en millones las hectáreas objeto de despojo por parte de los actores armados involucrados en el conflicto. Si a ello se añaden 3 millones de personas que no saben leer y escribir y otros 20 millones de pobres, la situación estructural debe resultar una prioridad en que lo que a aspirar a construir un escenario de paz se trata.

De igual manera, y dadas las particularidades regionales que presenta Colombia, y que por extensión afectan al conflicto armado interno, las reformas estructurales deben orientarse, en todo caso, a impulsar dinámicas de mayor simetría regional, mejores niveles de bienestar, mayores niveles de ingreso y, sobre todo, mayor presencia institucional del Estado colombiano.

Es decir, más allá de la simple noción de, como sucede en muchos municipios del país aún hoy, pensar que el Estado queda encarnado, a lo sumo, en un puesto de Policía. Ello hace que resulte prioritario, por ejemplo, superar el modelo de descentralización municipalista que acontece en Colombia.

La Constitución de 1991, se ha concentrado durante todo este tiempo en el municipio como ente administrativo y de gobierno favoreciendo, en todo caso, un desequilibrio estructural que niega la posición estratégica del nivel intermedio de gobierno dentro de la organización territorial del Estado. Así, el nivel intermedio, el cual tradicionalmente está llamado a articular y generar beneficios compensados entre las municipalidades y el gobierno central, facilitando la coordinación inter-administrativa para la prestación de servicios o la ejecución de proyectos de impacto subregional o regional queda en el caso de Colombia, claramente desdibujado.

De otro lado, hasta el momento, la descentralización sustantiva sigue desnaturalizada pues apenas los niveles municipales de gobierno asumen como funciones propias, y exclusivamente, la provisión de servicios sociales básicos a la población - salud, educación, servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, y transporte urbano. Nada más. Sobre todo, porque la asignación presupuestaria para lo anterior, en la mayoría de las ocasiones, resulta a su vez siendo deficitaria.

En el caso de los departamentos, la tesitura es peor. Ello, porque aunque a tenor de la Constitución, este nivel de gobierno estaría facultado, prácticamente, para todo, a tenor de lo que reconoce el artículo 298 de la Constitución, en términos de poder asumir todas aquellas responsabilidades en aras de promover el desarrollo económico y social de sus territorios. Sin embargo, esto se imposibilita, en primer término, por toda una “babel legislativa” de asignaciones concretas por sector y competencia que acaban lastrando su ejercicio e imposibilitando su emergencia como actores reales de gobierno.

Por último, un tercer aspecto a considerar sería el derivado del fuerte desequilibrio fiscal y la dependencia del departamento respecto a unas transferencias por completo condicionadas en su gasto. Recuérdese que la autonomía de gasto y las capacidades propias de generación de ingresos son dos factores nucleares a efectos de promover la generación de recursos en un marco de descentralización territorial.

A tal efecto, desde el punto de vista fiscal, luego de dos décadas de descentralización formal, las principales fuentes de ingreso tributario han continuado concentradas en el nivel nacional, el cual recauda los impuestos de renta, de valor agregado y de comercio exterior. En este orden de ideas, se manifiesta un desequilibrio vertical de la estructura tributaria colombiana en el que, de cada \$100 pesos de impuestos en Colombia, \$83 van para el gobierno central, \$5 van para los 32 departamentos y \$12 van para los 1.123 municipios.

Esta tendencia, además, paulatinamente, se ha ido profundizando en la medida en que las reformas tributarias impulsadas por el nivel central han llevado a una recentralización de los ingresos tributarios.

Si bien en términos absolutos, han crecido las transferencias territoriales entre 1986 y 2012, varios expertos han sugerido al respecto que, en realidad, las normas reglamentarias del sistema de transferencias no estuvieron orientadas a establecer un sistema que les otorgara mayor autonomía fiscal a los gobiernos sub-nacionales sino, más bien, a mejorar la eficiencia del gasto público nacional delegando su ejecución en las regiones.

Al tratarse, por ende, de una delegación y no de una descentralización del gasto, se imprime un alto grado de inflexibilidad al manejo presupuestal, no solo al asignar destinaciones específicas, sino al mantener los criterios de asignación constantes, restringiendo así, la discrecionalidad de los gobiernos locales para atender necesidades de gasto cambiantes en tiempo y lugar. Esto genera que, en la mayoría de ocasiones, no puedan llevarse a cabo las inversiones para potencializar las ventajas comparativas y competitivas de los territorios.

Por su parte, los municipios y departamentos han continuado con sus fuentes tradicionales de ingreso, las cuales no son tan dinámicas como las del gobierno central y, en consecuencia, conduce a que la descentralización se base en la utilización de transferencias. Frente a ellas, con el transcurso del tiempo, los ingresos sub-nacionales manifiestan una creciente dependencia fiscal.

Tanto, que la dependencia fiscal y, por extensión, la condicionalidad del gasto que hace de Colombia el segundo país más re-centralizado del continente, solo superado por Venezuela, no ayude a dinamizar políticas de construcción de paz y de transformación de la realidad social, política y económica del país. Ello, porque algunos de los departamentos con más violencia, como son Putumayo, Meta, Cauca, Nariño, Chocó o Caquetá tienen un nivel de dependencia de más del 70% que lastra las posibilidades regionales de responder, bajo parámetros de democracia local, a las exigencias que un escenario de paz va a requerir en enclaves tan diversos como éstos.

III

Con base en lo expuesto, se ofrecen importantes pistas en cuanto a entender la actualidad inmediata por la que transcurre el conflicto armado en Colombia. *Periferalización, narcotización*, agotamiento de las políticas de seguridad más beligerantes y creciente consciencia de las condiciones estructurales, socioeconómicas del país, son factores nucleares en la tesitura actual de posible superación y desactivación del conflicto armado interno.

Quizá, lo anterior puede permitir entender el cambio en la política de seguridad acontecido en Colombia tras la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos. Especialmente, una vez que a partir de agosto de 2012 se hacía público, por parte del propio presidente Santos, las aproximaciones con las FARC a efectos de iniciar un diálogo de paz como el que, en su momento, había supuesto el Caguán. Un diálogo que desde el 1 de marzo de 2011 había empezado a modo de reuniones exploratorias si bien, bajo una coyuntura bien diferente a la de 1998 y que, por muchas razones, ya explicadas en este trabajo, invitan de mayor modo al optimismo.

En primer lugar, y tal y como han reconocido las partes, tanto del gobierno como de las FARC, los primeros contactos por encontrar un marco de desactivación del conflicto armado por medio de la palabra fue objeto de consecución a los pocos meses de llegar Juan Manuel Santos a la presidencia. Es decir, el factor personal de éste, muy diferente a Álvaro Uribe, confería un talante a la jefatura de Estado muy distinto, en términos de establecer unos mínimos de diálogo y aproximación. El elemento configurador más importante del gobierno ha sido y es el de desactivar el conflicto armado interno con las guerrillas, por medio del diálogo.

En segundo lugar, y como se pudo observar en esta tesis, la correlación de fuerzas entre FARC y Estado, si en 1998 era pareja e incluso casi favorable a la guerrilla, en 2012, son sencillamente incomparables. Las FARC en los cinco años que transcurren entre 2001 y

2006, prácticamente han tenido que abandonar la guerra de movimientos, dejar de soñar con la guerra de posiciones, y volver a la realidad de una guerra de guerrillas que devolvía a las FARC a tres décadas atrás.

A la vez, y aunque el pie de fuerza del Estado se había incrementado en un 40%, los operativos militares se contaban por miles y el presupuesto y gasto público en seguridad y defensa era de miles de millones de dólares, sin embargo, el Estado tampoco había ganado la “guerra” en Colombia.

De hecho, y como se podía observar en alguno de los capítulos anteriores, la PSD parece llegar a un profundo agotamiento en cuanto a la capacidad de obtener resultados exitosos, incluso antes de que finalizase el segundo mandato de Álvaro Uribe.

Esto es, puede entender que en 2012 el conflicto armado llega a un punto de “doble estancamiento doloroso”, real, en el que FARC y gobierno verdaderamente encuentran razones de peso para llegar a intercambios cooperativos y mutuamente satisfactorios. Aunque la posición de simetría de 1998 ya no era posible para las FARC, se pueden aceptar algunas consideraciones que merece la pena destacar.

Las FARC para el año 2015 han reducido sus efectivos a unos 7.500 guerrilleros con presencia en unos 150 municipios del país, lo cual supone la mitad del poder armado y territorial que quince años atrás. Igual, en el caso del ELN, que apenas llega a 1.500 combatientes con presencia en 50 municipios. Asimismo, los secuestros y las extorsiones han seguido decayendo de manera que cabe pensar en una mayor dependencia del narcotráfico para sostener los costes del conflicto armado y que, de manera consciente en los órganos de gobierno de la guerrilla, desnaturaliza a las FARC y mucho más, al ELN. Sin embargo, los niveles de activismo se han mantenido estables en los corredores del nororiente y del suroccidente, y los cinco departamentos con mayor violencia guerrillera siguen siendo los mismos que en 2012. Esto es, departamentos fronterizos en los que, además, el pos-paramilitarismo continúa cada vez más asentado si bien, en torno a un grupo nuclear que parece haberse consolidado sobre los demás: Los Urabeños – redefinidos en lo que se conoce actualmente como “Clan Úsuga”. De hecho, la alianza entre guerrillas y Bacrim, ya no desconocida para nadie, termina por adaptarse a la lógica compartida del rédito criminal que supone el narcotráfico y el contrabando.

En lo que afecta a las políticas del gobierno, han empeorado todos los indicadores que tienen que ver con el orden público, como la tasa de homicidios, el número de muertes, el número de acciones guerrilleras o el número de atentados terroristas. Más preocupante si cabe, el número de hectáreas cultivadas, por primera vez en quince años ha cambiado de signo y en solo un año, desde 2014 a 2015, ha pasado de 48.000Ha a 69.000Ha. Una superficie cultivada, que se concentra, casi en exclusiva en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Meta y Putumayo. Es decir, tras un millón y medio de hectáreas asperjadas y erradicadas, el éxito de la política de aspersiones cabe

interpretarlo en términos de fracaso. Tanto, que en 2015 se ha terminado por poner fin al empleo de aspersiones con glifosato, que por muchos años fueron la bandera del Plan Colombia.

Lo anterior conduce al conflicto armado colombiano a un punto de enquistamiento en buena parte de las fronteras en el que, con la lógica de continuidad en las armas, ambos *actores* pierden. Del lado de las FARC, porque la vuelta a la guerra de guerrillas y la *periferialización* del conflictos los coloca en una posición geográficamente marginal, selvática y montañosa, que les aleja del nivel de vida que habían tenido durante buena parte de la década anterior. A ello, se le adiciona una tendencia irreversible de paulatino debilitamiento en su pie de fuerza y en su control territorial que, pese a todo, se va reduciendo muy poco a poco aunque no se traduce en una reducción notable en cuanto a las posibilidades de activismo guerrillero.

De otro lado, el gobierno ha encontrado un punto de insostenibilidad en cuanto a continuar con el sentido de las políticas de seguridad que habían predominado en la década pasada. Los grandes éxitos militares parecen ser cosa del pasado, pues para encontrar combates y desplegar operativos contra la guerrilla es necesario hacerlo sobre escenarios de una compleja geografía, de mayor desconocimiento, altamente minado, y que sugieren la inversión de importantes recursos que, a diferencia del pasado, no garantizan la consecución de resultados a modo de éxito. Algunos estudios han estimado la necesidad de mantener un volumen de gasto militar como el de la PSD de cerca de cuarenta años para, verdaderamente, encontrar una posición de posible victoria militar.

POST-SCRIPTUM

Así, en todo caso, la proyección de los resultados de esta tesis doctoral se podría desarrollar en torno a dos afirmaciones que, perfectamente, podrían ameritar un objeto de estudio más detallado. En primer lugar, la necesidad de abandonar las políticas beligerantes, de “paz negativa”, y cuyos resultados han terminado por llegar a un punto de no avance. De otro lado, el repliegue estratégico de las guerrillas que, pese a todo, se ha mantenido inalterado en sus tradicionales enclaves de control territorial, a su vez, mayormente, con notable presencia cocalera. En ese contexto, una lógica de intercambios cooperativos puede construir un escenario de desactivación del conflicto a tenor de que los actores y el contexto que presenta en conflicto colombiano, alrededor de la negociación de La Habana, nada tiene que ver con Caguán.

Las FARC debilitadas, aunque consolidadas, ya no pueden tomar el poder por las armas. El gobierno, que si bien ha conseguido el repliegue de los grupos armados, parece mostrarse ineficaz en la superación del conflicto, una vez que cada vez resulta más complejo la obtención de resultados exitosos. Cuanto más se demoren las FARC en negociar, peores resultados obtendrán pues su debilidad será mayor. Cuanto más se demore el gobierno en firmar, más recursos seguirá gastando en armas, y más víctimas irán engrosando en el libro negro del conflicto armado.

De trasfondo, se pueden destacar positivamente unas reuniones exploratorias en Oslo y una negociación en La Habana, fuera de los focos de unos medios de comunicación que coadyuvaron a debilitar el proceso del Caguán. Igualmente, un equipo negociador con mayor talento político, con nombres como “Iván Márquez”, “Pablo Catatumbo” o Rodrigo Granda. Asimismo, una agenda de solo cinco puntos, cuestión agraria, participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos y víctimas, alejada de las agendas inabarcables del pasado muestra el nivel de lecciones aprendidas pero, sobre todo, la voluntad real por negociar. En el Caguán, recuérdese, había 16 temas que nunca se discutieron, y a los que se añadían otros 48 subtemas.

Una voluntad de negociar, en definitiva, comprensible, en concordancia con lo expuesto en esta tesis, dentro de una coyuntura sin vencedores, con dos perdedores que, en diferentes términos, finalmente deben recurrir al intercambio cooperativo de pretensiones para superar una situación de confrontación armada que ha dejado de resultar beneficiosa en cualquiera de sus términos – con independencia de si, verdaderamente, alguna vez lo fue.

De hecho, en la actualidad, aparte de estarse cerrando el último de los puntos, ambas partes han conseguido adelantar un proceso de *desescalamiento* paulatino del conflicto que está *ad portas* de un cese bilateral de las hostilidades que ponen al proceso negociador a escasos

meses de su finalización. Tanto, que hacia agosto de 2015, los niveles de beligerancia han caído a registros que no se daban en Colombia desde 1975.

A su vez, no pueden pasarse por alto palabras como las recogidas en el comunicado de las FARC del 17 de septiembre de 2015, en el que señalaban:

“Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos”.

Foto 1: Momento del acuerdo entre Juan Manuel Santos y “Timochenko”.



Fuente: EFE

Es más, el 23 de septiembre de 2015, Juan Manuel Santos viajaba a La Habana a firmar el acuerdo sobre justicia transicional, que había sido el punto de mayor complejidad de la negociación. Tras una foto emblemática con el comandante en jefe de las FARC, “Timochenko”, ambas partes se comprometían a cerrar el conflicto armado en el tiempo de seis meses.

Si a ello se añade la negociación con el ELN, avanzada en las rondas exploratorias durante septiembre, y que invitan a pensar en un escenario de negociación paralelo a partir de enero de 2016, Colombia se encuentra ante la oportunidad más importante de desactivar un

conflicto armado vigente por más de medio siglo. Sin duda, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de las unidades que no se desmovilicen – posiblemente las más próximas al negocio de la coca - seguirán siendo una amenaza para la seguridad del país - si bien dentro de un escenario de violencia delincriminal diferente al actual, y que permite abrir una nueva etapa en lo que a construcción de paz, reforma estructural y paradigmas de seguridad se refiere.

Todo, por la casi imperativa necesidad mutua de negociar y proceder a una lógica de intercambios cooperativos dado que, de ninguno de los lados, la victoria militar resulta una posibilidad factible. Así lo muestra la evolución del conflicto armado que ha abordado esta tesis doctoral, y que en sus más de 600 páginas ha tratado de mostrar tanto la complejidad del conflicto como la necesidad de incorporar, como variables de resolución, otros aspectos de comprensión que trasciendan de las armas.

Sin duda, se abre un nuevo horizonte para Colombia. El camino se bifurca y las opciones de análisis y de construcción de conocimiento se multiplican. Una de esas opciones podrá ser cómo entender la construcción de paz, una vez que las FARC, el ELN y el gobierno, suscriban un acuerdo. Otra, será la de entender los nuevos paradigmas de violencia e inseguridad que continuarán en el país, mientras que el narcotráfico, el pos-paramilitarismo o la violencia estructural sigan siendo abordados, como hasta el momento, en términos estrictamente reactivos y cortoplacistas.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrisketa, J. (2009) “La población internamente desplazada en Colombia: Claves para interpretar la regulación internacional”. En *Revista Electrónica de Relaciones Internacionales*, núm. 18, 28pp.
- ACNUR (2003) *Report of Boundaries humanitarian situation*. Bogotá, Colombia.
- ACNUR (2004) “Extractos del documento Desplazamiento intraurbano como consecuencia. El caso de Barrancabermeja”. En *Desplazamiento intraurbano en Colombia*. (pp. 48-58). Bogotá, Colombia: ACNUR.
- ACNUR (2006) *Diagnóstico departamental para Boyacá*. Bogotá, Colombia: ACNUR.
- Acemoglu D. y Robinson, J. (2012) *Por qué fracasan los países*. Barcelona, España: Ediciones Deusto.
- Acosta, C. (2012) “Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI”. En *Revista Científica Guillermo de Ockham*, vol. 10, núm. 1, pp. 83-99.
- AECID (2012) *Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acapramiento de tierra*. Bogotá, Colombia: AECID.
- Aguilera, M. (2010) *Las FARC: la guerrilla campesina 1949-2010*. Bogotá, Colombia: Arfo Editores.
- Agnew, J. (1987) *Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society*. Londres, Reino Unido: Allen and Uwin.
- Agnew, J. (2005) *Geopolítica: Una Re-Visión de la política mundial*. Madrid, España: Trama.
- Ahumada, C., Moreno, A. y Sánchez, J. (2004) *El desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador en el contexto del Plan Colombia*. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Javeriano.
- Ahumada, C. (2007) “La hegemonía de Estados Unidos y el conflicto sociopolítico en la región andina”. En Guillermo Hoyos (ed.). *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía*. (pp. 95-112). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Akerlof, G. y Kranton, R. (2000) “Economics and Identity”. En *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. CXV, núm.3, pp. 715-753.
- Alape, A. (1983) *El Bogotazo: así fue el 9 de abril*. Bogotá, Colombia: Editorial Pluma.
- Alape, A. (1993) *La paz, la violencia. Testigos de excepción*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.

- Alcántara, M. e Ibeas, J. M. (2001) *Colombia ante los retos del siglo XXI: desarrollo, democracia y paz*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Almond, G. y Verba, S. (1963) *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Nueva Jersey, Estados Unidos: Princeton University Press
- Alonso, M. (1997) *Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio*. Medellín, Antioquia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Álvaro, M. (2008) “La parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana”. En *Ánfora*, vol. 15, núm. 24, pp. 287-305.
- Ambos, K. (2010) *Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y el Derecho Internacional Humanitario*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.
- Amnistía Internacional (2005) “Los paramilitares en Medellín, ¿desmovilización o reintegración?”. [En línea] <https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=25530952323>. [Consultado el 4 de agosto de 2015].
- Andrades, S. M. (2008) *Barrancabermeja: un puerto de lucha, conflicto y poder*. Tesis de grado dirigida por Amparo Cadavid Bringe. Universidad Javeriana.
- Angarita, P. M. (2011) *Seguridad democrática. Lo invisible de un régimen político y económico*. Bogotá. Colombia: Siglo XXI Editores.
- Aponte, D. (2011) “Terminando el conflicto violento con el ELN: de la necesidad de finalizarlo más allá del recurso de las armas”. En D. Aponte y A. Vargas. *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN*. (pp. 32-110). Bogotá, Colombia: CINEP.
- Aprile-Gniset, J. (1981) “El caso de la colonia de Sumapaz y la guerra de Villarrica”. En *III Congreso Nacional de Historia*, 18-21 de noviembre de 1981, Medellín.
- Aprile-Gniset, J. (1991) *La crónica de Villarrica*. Bogotá, Colombia: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.
- Arango, A. M. (2007) “10 años de desplazamiento forzoso en Colombia. La política, la cooperación internacional y la realidad de más de dos millones de colombianos”. En *OASIS*, núm. 13, pp. 5-43.
- Aranguren, M. (2001) *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*. Bogotá, Colombia: Oveja Negra.
- Arbeláez, A. M. (2006) *Análisis de la efectividad de la políticas de defensa y seguridad democráticas del Presidente Uribe. Seguridad y Territorio en Colombia 2002-2006*. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Archila, M. (2006) *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá, Colombia: CINEP.

- Ardon, P. (1998) *La paz y los conflictos en Centroamérica*. Ciudad de Guatemala, Guatemala: OXFAM-CIDECA.
- Arenas, J. (1973) *Diario de la resistencia de Marquetalia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Abejón Mono.
- Arendt, H. (2005) *Sobre la violencia*. Madrid, España: Alianza.
- Arias, G. I., Prieto, C. A. y Peralta, M. (2010) *¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz*. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz.
- Arocha, J. (1996) “Afrogénesis, eurogénesis y convivencia interétnica”. En A. Escobar y A. Pedrosa (ed.). *Pacífico, ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. (pp. 316-328). Bogotá, Colombia: CERAC.
- Asenjo, D. (1985) “El Salvador: guerra civil y política exterior”. En H. Muñoz (comp.) *Políticas Exteriores Latinoamericanas frente a la crisis*. (pp. 245-256) Buenos Aires, Argentina: GEL.
- Atehortúa, A. L. y Rojas, D. M. (2008) “El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos”, en *Historia y Espacio*, núm. 31, pp. 1-27.
- Atehortúa, C. I., Sánchez, L. A. y Jiménez, B. I. (2009) “El conflicto armado afecta todas las esferas. Implicaciones del conflicto armado en la comuna 13”. En *Revista de Derecho de la Universidad del Norte*, núm. 32, pp. 116-138.
- Avellaneda, A. (2003) “Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia”, en Martha Cárdenas y Manuel Rodríguez (eds.). *Guerra, sociedad y medio ambiente*. Bogotá, Colombia: FESCOL.
- Ávila, A. (2008) “FARC: dinámica reciente de la guerra”. En *Arcanos*, núm. 14, pp. 4-23.
- Ávila, A. (2009) *Conflicto armado en Nariño: Reconfiguración del poder regional de los actores armados*. Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Ávila, A. (2012) *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Bogotá, Colombia: Debate.
- Ávila, A. (2014) “Informe de La Guajira. Paz y Reconciliación”. [En línea]. <<http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2014/03/INFORME-LA-GUAJIRA-REDPRODEPAZ-Y-PAZ-Y-RECONCILIACION.pdf>>. [Consultado el 23 de febrero de 2015].
- Ávila, A. y Celis, L. (2008) “ELN: el camino hacia la resistencia pasiva”. En *Arcanos*, núm. 14, pp. 24-39.
- Ávila, A. y Núñez, M.P. (2009) “Las dinámicas territoriales del Ejército de Liberación Nacional: Arauca, Cauca y Nariño”. [En línea]. <http://prensarural.org/spip/IMG/pdf/eln.pdf>. [Consultado el 27 de febrero de 2015].

- Ayala, C. A. (2011) *La explosión del populismo en Colombia. Anapo y la participación política durante el Frente Nacional*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Ayala, G. et al. (2001) “Un acercamiento al actual éxodo colombiano al exterior”. En *Colombia Internacional*, núm. 51, pp. 87-97.
- Ayala, G., Duque, O. y Hurtado, G. G. (2006) *Medios de comunicación y Seguridad Democrática: de la democracia radical al unanimismo ideológico*. Bogotá, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.
- Azar, E. (1990) *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Aldershot, Reino Unido: Dartmouth
- Bachrach, P. y Baratz, M. S. (1970) *Power and poverty: theory and practice*. Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.
- Bagley, B. (1988) “Winning Battles, Losing the War: U.S. Anti-Drug Policies in Latin America”. En *Hemisphere*, vol. 1, núm. 1, pp. 31-34.
- Bakunin, M. (1997) *Dios y El Estado*. Madrid, España: El Viejo Topo.
- Ballén, R. (2014) “La negociación del conflicto armado colombiano”. En *Almenara*, núm. 6, pp. 58-76.
- Ballentine, K y Nitzschke, H (2003) *Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict*. Nueva York, Estados Unidos: International Peace Academy.
- Ballentine, K. y Sherman, J. (2003) *The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance*. Londres, Reino Unido: Lynne Rienner.
- Barbé, E. (2007) *Relaciones Internacionales*. Madrid, España: Tecnos.
- Barlett, S. J. (2005) *The Patology of Man: A study of Human Evil*. Illinois, Estados Unidos: Charles Thomas Publisher.
- Barnett, M. y Finnemore, M. (2004) *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. Ithaca, Estados Unidos: Cornell University Press.
- Barreto, M. (2009) “El Laboratorio de Paz del Magdalena Medio”. En J. Restrepo y D. Aponte (eds.) *Guerra y violencias en Colombia. Herramientas*. (pp. 501-544). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Basedau, M y Pierskalla, J. (2013) “How Ethnicity Conditions the Effect of Oil and Gas on Civil Conflict: A Spatial Analysis of Africa from 1990 to 2010”. En *Political Geography*, núm. 38, pp. 1-11.

- Bates, R.H. (2008) "State failure". En *Annual Review of Political Science*, vol.11, núm. 1, pp.1-12.
- Beck, U. (2003) "Las instituciones de gobernanza global en la sociedad mundial del riesgo" En M. Castells y N. Serra (eds.) *Guerra y Paz en el siglo XXI*. (pp. 53-66). Barcelona, España: Tusquets.
- Bedoya, V. A. (1950) *Etnología y conquista del Tolima y la hoya del Quindío*. Ibagué, Colombia: Imprenta del Departamento del Tolima.
- Behar, O. (1985) *Las guerras de la paz*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Behar, O. (2012) *El caso Klein. El origen del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ícono.
- Bejarano, A. M. y Pizarro, E. (2001) "The Coming Anarchy: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring State Makers in Colombia". En *Workshop at the Punk Center of International Relations*. Universidad de Toronto.
- Bejarano, A. M. y Pizarro, L. (2003) "Colombia: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring State-Makers". En P. Kingston e I. Spears (eds.) *States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era*. Nueva York, Estados Unidos: Pallgrave MacMillan.
- Bejarano, J. A. et al. (1997) *Colombia: Inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Bejarano, E. (2010) "Minas anti-persona, su relación con el conflicto armado y la producción de narcóticos de Colombia". En *Revista Opera*, núm. 10, pp. 263-279.
- Berdal, M. y Malone, D. (2000) *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*. Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- Bernal, H.H. (2003) "Impacto ambiental ocasionado por las sustancias químicas, los cultivos ilícitos y las actividades conexas". En *Seminario Problemática ambiental de las drogas en Colombia*. Dirección Nacional de Estupefacientes. Bogotá. Colombia.
- Betancourt, D. y García, M. (1990) *Matones y cuadrilleros: origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Blair, E. (1993) *Las fuerzas armadas. Una mirada civil*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Blair, E., Grisales, M. y Muñoz, A.M. (2008) "Conflictividades urbanas vs guerra urbana: otra clave para leer el conflicto en Medellín". En *Universitas Humanística*, núm. 67, pp. 29-54.
- Blattman, C. y Miguel, E. (2010) "Civil war". En *Journal of Economic Literature*, vol. 48, núm. 1, pp. 3-57.
- Bolaños, T. G. (2011) "Víctimas y el conflicto armado. Sobre la aplicación de la Ley de Víctimas en Colombia". En *Revista de Derechos Fundamentales*, núm. 6, pp. 51-70.

- Bonilla, A. (2001) "Colombia, Estados Unidos y seguridad nacional en los países andinos". En *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 11, pp. 17-28.
- Bonilla, A (2004) "Percepciones de la amenaza a la seguridad nacional de los países andinos: regionalización del conflicto colombiano y del narcotráfico". En J. A. Gómez (comp.). *América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas*. (pp. 151-172). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.
- Borrero, A. (2004) "El conflicto armado interno, los cultivos ilícitos y la gobernabilidad local en la 'otra Colombia'". En *Revista Opera*, núm. 4, pp. 285-316.
- Bottía, M. (2003) "La presencia y expansión municipal de las FARC". En *Documento CEDE*, núm. 3, 56 pp.
- Boulding, K. (1962) *Conflict and Defense: A General Theory*. Nueva York, Estados Unidos: Harper and Row.
- Boulding, K. (1977) "Twelve Friendly Quarrels with Johan Galtung". En *Journal of Peace Research*, núm. 14, pp. 75-86.
- Boulding, E. (1992) "The Concept of Peace Culture". En VV.AA. *Peace and Conflict Issues after the Cold War* (pp. 107-133). París, Francia: UNESCO.
- Bouthoul, G. (1984) *Tratado de polemología*. Madrid, España: Editorial Ejército.
- Bouthoul, G. y Carrere, R. (1976) *Le défi de la guerre. 1740-1974*. París, Francia: Presses Universitaires de France.
- Bouza Brey, L. (2006) "El sistema político". En M. Caminal (comp.) *Manual de Ciencia política*. (pp. 38-84). Madrid, España: Tecnos.
- Bracanti, D (2006) "Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?" En *International Organization*, vol. 60, núm. 3, pp. 651-685.
- Brett, R. y Specht, I. (2005) *Jóvenes, soldados y combatientes ¿por qué van a luchar?* Bogotá, Colombia: OIT.
- Briscoe, I. (2007) "Crimen y droga en los Estados frágiles". [En línea]. FRIDE, 20 de julio de 2007. <<http://www.fride.org/publicacion/151/crimen-y-drogas-en-los-estados-frágiles>>. [22 de abril de 2014].
- Brown, M. (1996) *The International Dimension of Internal Conflict*. Cambridge, Estados Unidos: MIT Press.
- Buhaug, H. y Rød, J. (2006) "Local Determinants of Africa Civil Wars, 1970-2001. En *Political Geography*, vol. 25, núm. 3, pp. 315-335.

- Buitrago, L. (2006) “La Política de Seguridad Democrática 2002-2005”. En *Análisis Político*, núm. 57, pp. 3-30.
- Bushnell, D. (2012) *Colombia. Una nación a pesar de sí misma*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Burton, J. (1972) *World Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burton, J. (1990) *Conflict: Resolution and Provention*. Nueva York, Estados Unidos: St. Martin's Press.
- Buzan, B. (1991) *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Londres, Reino Unido: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B. y Wsever, O. (2003) *Regions and Powers*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Caballero, H. (2013) “Movimiento armado indígena Quintín Lame, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y proceso de paz”. En *II Congreso sobre Izquierdas, movimientos sociales y cultura política en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia. 7 de noviembre de 2013, Bogotá.
- Cabrera, I. (2009) “La guerrilla en las fronteras. ¿Un problema de seguridad regional?”. En *Revista Política Colombiana*, núm. 2, pp. 185-195.
- Cabrera, I. (2012) “Frontera colombo-brasilera, persistencia del conflicto armado y alcances de las estrategias de seguridad”. En *Boletín Científico Sapiens Research*, vol. 2, núm. 2, pp. 11-17.
- Cadavid, P. et al. (2009) *Víctimas, violencia y despojo. Informe de la investigación acerca de las víctimas del conflicto*. Bogotá, Colombia: Universidad San Buenaventura – CRR.
- Cadena, J. L. (2008) “Geografía, conflicto y poder en Colombia”. En *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 3, núm. 2, pp. 179-227.
- Caicedo, E. (1975) *Historia de las luchas sindicales en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones CEIS.
- Calderón, P. (2009) “Teoría de conflictos de Johan Galtung”. En *Revista de Paz y Conflictos*, núm. 2, pp. 60-81.
- Calduch, R. (1993) *Dinámica de la sociedad internacional*. Madrid, España: CRERES.
- Calvo, F. (1998) *Manuel Pérez: un cura español en la guerrilla colombiana*. Madrid, España: VOSA.
- Camacho, A. y Guzmán, A. (1990) *Ciudad y violencia: contribuciones al estudio de la violencia urbana en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones Foro Nacional.
- Camacho, A. (2002) “Credo, necesidad y codicia: Los alimentos de la guerra”. En *Análisis Político*, núm. 146, pp. 137-150.

- Cañón, L. (1994) *El Patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (2006) “Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia”. En línea]. < <http://colectivodeabogados.org/nuestro-trabajo/lucha-contr-la-impunidad/seguimiento-ley-975-05/CONSOLIDACION-PARAMILITAR-E>>. [Consultado el 15 de mayo de 2015].
- Cárdenas, M., Cadena, X. y Caballero, C. (2005) “Análisis en el incremento en el gasto de defensa y seguridad: resultados y sostenibilidad de la estrategia”. [En línea]. <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/964>. [23 de abril de 2015].
- Carmona-Parra, J.A., Moreno, F. y Tobón, F. (2012) “Child soldiers in Colombia: Five views”. En *Universitas Psychologica*, vol. 11, núm. 3, pp. 755-768.
- Carvajal, L. y Pardo, R. (2002) “La internacionalización del conflicto doméstico y los procesos de paz”. En M. Ardila, D. Cardona y A. Tickner (eds.) *Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana*. (pp. 181-236). Bogotá, Colombia: Fescol.
- Castañeda, D. (2009) “Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea”. En *Colombia Internacional*, núm. 69, pp. 162-179.
- Castel, R. (1995) *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Castillo, M. P. (2004) “Las redes del conflicto: el caso del Valle del Cauca”. En *Revista Sociedad y Economía*, núm. 7, pp. 25-44.
- Castillo, L. (2005) *El Estado pluriétnico y multicultural colombiano: la lucha por el territorio en la reimaginación de la nación y la reivindicación de la identidad étnica de negros e indígenas*. Tesis doctoral dirigida por Heriberto Cairo Carou. Universidad Complutense de Madrid.
- Castillo, L. et al. (2010). *Etnicidad, acción colectiva y resistencia: El norte del Cauca y el sur del Valle a comienzos del siglo XXI*. Santiago de Cali, Colombia: Editorial Universidad del Valle
- Castro, G. (1998) *En secreto*. Bogotá, Colombia: Talleres de Colombia Libre.
- Castro, M., Arabia, J y Celis, E. (2000) “El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998”. En *Revista de Planeación y Desarrollo*, vol. 30, núm. 3, pp. 81-105.
- Cairo H. y Pastor, J. (comp.). (2006) *Geopolítica, guerras y resistencias*. Madrid, España: Trama.
- Ceballos, M. A. (2013) “El desplazamiento forzado en Colombia y su ardua reparación”. En *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, año 15, núm. 29, pp. 169-188.

- Cederman, L.E. *et al.* (2013) "Transborder Ethnic Kin and Civil War". En *International Organization*, vol. 67, núm. 2, pp. 389-410.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2011) *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13*. Bogotá, Colombia: Taurus.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2012) *Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares*. Bogotá, Colombia: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2012b) *El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo*. Bogotá, Colombia: Taurus
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, Colombia. [En línea]
- <<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/BYColombiaMemoriasGuerraDignidadAgosto2014.pdf>>. [Consultado el 2 de diciembre de 2014].
- Cepeda, E. (2012) "Corte Constitucional y conflicto armado. Control de políticas sociales en el marco del conflicto en Colombia". En *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, vol. 42, núm. 117, pp. 435-453.
- Cepeda, F. (2001) *Making Peace: Reflections and Perspectives for the Peace Process in Colombia*. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz.
- Chernick, M. (2012) *Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá, Colombia: Ediciones Aurora.
- Chomsky, N. (2006) *Failed States: The abuse of Power and the Assault on Democracy*. Nueva York, Estados Unidos: Metropolitan Books.
- CINEP (2008) *Marco conceptual del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- CINEP (2010) *The Legacy of Uribe's Policies: Challenges for the Santos Administration*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- CINEP (2011b) *Informe Especial. 'Falsos Positivos 2010': Clamor por la vida y la justicia*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Cívico, A. (2009) *Las guerras de "Doblezero"*. Bogotá, Colombia: Editorial Intermedio.
- CODHES (2008) *Arauca: dilemas de guerra, desafíos humanitarios*. Bogotá, Colombia: CODHES.
- CODHES (2011) "De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto", *Documentos CODHES*, núm. 23, 143 pp.
- CODHES (2013) "La crisis humanitaria en Colombia persiste. El Pacífico en disputa", *Documentos CODHES*, núm. 26, 93 pp.

- Coghlan, N. (2004) *The Saddest Country: On Assignment in Colombia*. Montreal, Canadá: McGill-Queen's University Press.
- Collier, P. (2000) *Economic causes of civil conflict and their implications for policy*. Washington, Estados Unidos: Banco Mundial.
- Collier, P., Hoeffler, A. y Soderbom, M. (2001) "On the duration of civil war". En *Journal of Peace Research*, vol. 41, núm. 3, pp. 253-273.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (2004) "Greed and grievance in civil war". En *Oxford Economic Papers*, vol. 56, núm. 4, pp. 563-595.
- Collier, P., Hoeffler, A. y Rohner, D. (2009) "Beyond greed and grievance: Feasibility and civil war". En *Oxford Economic Papers*, vol. 61, núm. 1, pp. 1-27.
- Comisión Colombiana de Juristas (2008) "Todas las Convivir eran nuestras". [En línea]. http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n27_975.pdf. [Consultado el 15 de mayo de 2015].
- Comisión Sudamericana de paz, Seguridad y Democracia (1994) "Propuestas emanadas de los Foros Regionales de Actores sociales para promover una Agenda social en América Latina". Santiago de Chile, Chile.
- Constantino, S.D. y Lasa M. A. (2010) "Las industrias de las FARC: secuestro y narcotráfico", en Nelson Specchia (ed.) *Conflicto, guerrillas y búsqueda de la paz en Colombia*. (pp. 79-90). Córdoba, Argentina: OVASI.
- Córdoba, J.M. (1952) *Jorge Eliécer Gaitán: Tribuno popular de Colombia*. Bogotá, Colombia: Litografías Cor-Val.
- Corporación Autónoma Regional de Nariño (2007) *Diagnóstico minero-ambiental del distrito minero de La Llanada*. Nariño, Colombia: Corponariño.
- Coser, L. (1961) *Las funciones del conflicto social*. México D.F., México: Fondo de Cultura Económica.
- Coy, F. (2003) "Injerencia y desnarcotización fallida: las relaciones Colombia – Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría". En *Desafíos*, núm. 9, pp. 165-192.
- Crocker, C. y Osler F. (1996) "Making Peace Settlements Work". En *Foreign Policy*, núm. 104, pp. 54-71.
- Cruz, E. (2009) "Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto hegemónico". En *Ciencia Política*, núm. 8, pp. 82-114.
- Cruz, F. (2003) "Modernidad, sentimientos negativos y conflicto social en Colombia". En *Cuadernos de administración*, vol. 29, núm. 29, pp. 100-112.
- Cubides, F., Olaya, A. y Ortiz, C. (1998) *La violencia y el municipio colombiano, 1980-1997*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

- Cunningham, D. *et al.* (2009) "It Takes Two: A Dyadic Analysis of Civil War Duration and Outcome". En *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, núm. 4, pp. 570-593.
- Curle, A. (1976) "Peace Studies". En *The Year Book of World Affairs*. Vol. 30, pp. 5-13.
- Curle, A (1994) *El campo y los dilemas de los estudios por la paz*. Guernica, España: Guernica Gogoratuz, 1994.
- Currea de Luego, V. (2015) *¿Por qué negociar con el ELN?*. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana
- Dalby, S. (1990) "American Security Discourse: The Persistence of Geopolitics". En *Political Geography*, núm. 9, pp. 171-188.
- David, S. R. (1997) "Internal Wars: Causes and Cures". En *World Politics*, núm. 49, pp. 552-576.
- De Gabriel, J. (2000) "La formación del Estado Moderno". En R. del Águila (ed.) *Manual de Ciencia Política* (pp. 35-52). Madrid, España: Trotta.
- De los Ríos, E. (2011: 28) "La región de Montes de María. Escenario actual de riesgo y violación de los Derechos en Colombia". En *III Seminario Internacional de Derechos hacia una Cultura de Paz*. Círculo de Bellas Artes, Madrid. 10-11 de mayo de 2011.
- Soysa, I. (2000) "The Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity?" En M. Berdal y D. Malone (eds.) *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*, (pp. 113-135). Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- Deas, M. y Gaitán, F. (1995) *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Dedring, J. (1981) "Toward Appropriate Peace Research". En *Peace and Change*, núm. 3, pp. 1-17.
- Defensoría del Pueblo (2011) *Decimonoveno Informe del Defensor del Pueblo*. [En línea] <http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/02/19_informe_congreso_I.pdf>. [Consultado el 29 de noviembre de 2014].
- Defensoría del Pueblo (2014) *Crisis humanitaria en Chocó. Diagnóstico, valoración y acción de la Defensoría del Pueblo*. Bogotá, Colombia: Defensoría del Pueblo.
- Del Águila, R. (2000) "Poder y legitimidad". En R. del Águila (ed.). *Manual de Ciencia Política*. (pp. 21-34). Madrid, España: Trotta.
- Delgado, J. (2009) "Hacia un re-despliegue político de las FARC". [En línea]. Observatorio de Política Exterior y Estrategia de América Latina. <http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/redesplieguepolitico_farc.pdf>. [Consultado 03-03-2014].
- Departamento Nacional de Planeación (2002) "Todo sobre el Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia?" [En línea]

<http://www.dnp.gov.co/01_CONT/PLACOLOM/Plan.htm> [Consultado el 8 de enero de 2014].

Departamento Nacional de Planeación (2006) “Balance Plan Colombia 1999-2005” [En línea] <<https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-seguridad-y-gobierno/Paginas/plan-colombia.aspx>> [Consultado el 8 de enero de 2014].

Díaz, B. (2002) “Política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia: el paquete de ayuda de 1.300 millones de dólares de apoyo al Plan Colombia y la región andina”. En *América Latina Hoy*, núm. 31, pp. 145-186.

Djalili, M. (1986) “Reflexiones sobre una tipología de los conflictos en el Tercer Mundo”. En *Anuario de estudios sobre paz y conflictos*. Vol. 2. (pp. 23-33). Barcelona, España: Fontamara.

Domínguez, J. F. (2011) *Las FARC-EP: de la guerra de guerrillas al control territorial*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Douzinis, C. y Estepa, M. C. (2010) “La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia”. En *Diálogo de Saberes*, núm. 33, pp. 219-239.

Dover, R. y Ocampo, M. I. (2002) *Informe final: etnografías de casos de jurisprudencias alternativas en contextos de conflicto*. Bogotá, Colombia: Colciencias.

Dudouet, V. (2006) *Transitions from Violence to Peace. Intervention in Conflict*. Berlín, Alemania: Berghof Institute

Dugan, M. (1996) “A Nested Theory of Conflicts”. En *A Leadership Journal: Women in Leadership*. Vol. 1. pp. 9-20.

Dukes, F. (1999) “Structural Forces in Conflict and Conflict Resolution in Democratic Society”. En H. Won Jeong (ed.). *Conflict Resolution: Dynamics, Process and Structure* (pp. 155-172). Brookfield, Estados Unidos: Ashgate.

Duncan, G. (2004) *Violencia y conflicto en Colombia como una disputa por el control del Estado en lo local*. Bogotá, Colombia: CEDE.

Duncan, G. (2006) *Los señores de la guerra*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.

Duncan, G. (2014) *Más que plata o plomo*. Bogotá, Colombia: Editorial Debate.

Dunn, D. (1978) “Peace Research”. En T. Taylor (ed.) *Approaches and Theory in International Relations*. (pp. 167-191) Londres, Reino Unido: Longman.

Echandía, C. (1999) *Geografía del conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes – CEDE.

Echadía, C. (2000) “El conflicto armado colombiano en los años noventa. Cambios en las estrategias y efectos económicos”, en *Colombia Internacional*, núm. 49-50, pp. 117-134.

- Echandía, C. (2000b) Geografía de la violencia homicida en Bogotá. Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes – CEDE.
- Echandía, C. (2004) “La guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano”. En *Sociedad y Economía*, núm. 7, pp. 65-89.
- Echandía, C. y Salas, L. (2005) *Dinámica espacial de las muertes violentas en Colombia, 1990-2005*. Bogotá, Colombia: ODHDIH.
- Echandía, C. (2006) *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado.
- Echandía, C. y Bechara, E. (2006) Conducta de la guerrilla durante el gobierno de Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico. En *Análisis Político*, núm. 57, pp. 31-54.
- Echandía, C. (2008) “El fin de la invulnerabilidad de las FARC. El estado actual del conflicto armado en Colombia”. En *Nueva Sociedad*, núm. 217, pp. 4-13.
- Echandía C., Bechara, E. y Cabrera, I. (2010) “Colombia: Estado del conflicto armado al final de la Administración de Álvaro Uribe”. En H. Mathieu y C. Niño (eds.) *Seguridad regional en América Latina. Anuario 2010*. (pp.136-172). Bogotá, Colombia: Friedrich Ebert Stiftung en Colombia.
- Echandía, C. (2012) “Punto de partida de debilitamiento de las FARC”. En *Revista Zero*, núm. 28, pp. 54-61
- Echandía C. (2013) “Violencia contra sindicalistas en medio del conflicto armado colombiano”. En *Revista de Economía Institucional*, vol. 15, núm. 29, pp. 103-124.
- Echandía, C. (2013) “Auge y declive del ELN. Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación”. En *Informes de la Fundación Ideas para la Paz*, núm. 21, 22pp.
- Egea, C. y Soledad, J. I. (2008) “Migraciones y conflictos. El desplazamiento interno en Colombia Convergencia”. En *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 15, núm. 47, pp. 207-235.
- Eide, A. (1974) “Méthodes et problèmes de la recherche sur la paix: le choix de valeurs”. En *Revue Internationale des Sciences Sociales*, vol. 26, pp. 129-144.
- Eisenstadt, S.N. (1966) *Los sistemas políticos de los imperios*. Madrid, España: Revista de Occidente.
- Escobar, A. (2004) “Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano” En E. Restrepo y A. Rojas. (eds.) *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. Popayán, Cauca: Universidad del Cauca.
- Espejo, G. y Garzón, J. C. (2005) *La encrucijada del ELN*. Bogotá, Colombia: Fundación Seguridad y Democracia.

- Espinosa, M. A. (1996) *Surgimiento y andar territorial del Quintín Lame*. Quito, Ecuador: Editorial Abya-Yala.
- Esty, D. *et al.* (1998) "State Failure Task Force Report: Phase II Findings". [En línea]. *Environmental Change and Security Project Report*, Issue 5, verano de 1999. <<http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Phase2.pdf>>. [22 de noviembre de 2014].
- Faivre, H. (2005) "Del Plan "Colombia" al Plan "Patriota", impacto del conflicto armado colombiano en el Ecuador, análisis de una estrategia de seguridad subregional". En *Revista complutense de América Latina*, núm. 31, pp. 215-230.
- Fajardo, J., Pabón, R. y Roldán, M.A. (1980) *Soy el comandante uno*. Bogotá, Colombia: La Oveja Negra.
- Fajardo, L. E (2003) "From the Alliance for Progress to the Plan Colombia: A retrospective look at U.S aid to Colombia". *Working Paper*, núm. 28. Crisis and States Programme Development Research Centre. London School of Economics.
- FARC-EP (1987) *Informe Central al Pleno del Estado Mayor de las FARC-EP*, 17-20 de febrero 1987.
- Fearon, J. y Laitin, D. (2003) "Ethnicity, insurgency, and civil war". En *The American Political Science Review*, vol. 97, núm.1, pp. 75-90.
- Fearon, J. (2005) "Primary commodity exports and civil war". En *Journal of Conflict Resolution*, vol. 49, núm. 9, pp. 483-507.
- Federación Nacional de Departamentos (2013) "Fronteras, paz y desarrollo". En *LVIII Cumbre de Gobernadores de Colombia*, San Andrés, Colombia. 18 de febrero de 2013.
- Fernández de Soto, G. (2004) *La ilusión posible. Un testimonio sobre la política exterior colombiana*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Ferrajoli, L. (2001) "Pasado y futuro del Estado de Derecho". En *RIFP*, núm. 17, pp. 31-45.
- Ferro, J. G. y Uribe, G. (2002) *El orden de la guerra. Las FARC-EP entre la organización y la política*. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Javeriana.
- Fisas, V. (2002) *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Barcelona: Icaria.
- Fisas, V. (2010) "Introducción a los procesos de paz". En *Quaderns de Construcció de Pau*, núm. 12, 23 pp.
- Fiscalía General de la Nación (2011) *Informe de Gestión 2011*. [En línea] <<http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Informe-de-Gestion-2011.pdf>>. [Consultado el 25 de noviembre de 2014].

- Flórez, J. A. (2012) *La doctrina conjunta en Colombia: Análisis de las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega*. Tesis de Maestría dirigida por Eduardo Pizarro. Universidad Nacional de Colombia.
- Fonseca, D., Gutiérrez, O. y Rudovist, A. (2005) *Cultivos de uso ilícito en sur de Bolívar. Bogotá, Colombia*: PNUD.
- Forero, O. (2002) “Pastrana-militares: mantenimiento del régimen en medio de dificultades y mutuo apoyo”. En *Revista Opera*, vol. 2, núm. 2, pp. 165-189.
- Forø, A. y Buhaug, H. (2015) “Insurgency and Inaccessibility”. En *International Studies Review*, núm. 17, pp. 6-25.
- Foucault, M. (2007) *El nacimiento de la biopolítica*. México D.F, México: Fondo de Cultura Económica.
- Franco, E. (1976) *Las guerrillas del Llano*. Medellín, Colombia: Ediciones Hombre Nuevo.
- Fundación Ideas para la Paz (2014) *Dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario*, Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz, USAID, Organización Internacional para las Migraciones.
- Fundación Ideas para la Paz (2015) *Hoy y ayer del Bloque Oriental de las FARC*. Bogotá, Colombia: FIP.
- Fundación Paz y Seguridad (2008) “El debilitamiento de los grupos irregulares en Colombia, 2002-2008”. En *Revista Coyuntura de Seguridad*, núm. 23, pp. 5-11.
- Gallardo, J. (2005) *El Plan Colombia y sus efectos sobre Ecuador*. Quito, Ecuador: Esqueletra.
- Gallón et al. (2007) *Anotaciones sobre la Ley de Justicia y Paz. Una mirada desde los derechos de las víctimas*. Bogotá, Colombia: Comisión Colombiana de Juristas.
- Galtung, J. (1964) “An editorial”, en *Journal of Peace Research*, vol. 1, núm.1, pp. 1-4.
- Galtung, J. (1985) *Sobre la paz*. Barcelona, España: Editorial Fontamara.
- Galtung, J. (1990) “Cultural Violence”. En *Journal of Peace Research*, núm. 27, pp. 291-301.
- Galtung, J. (1995) *Investigaciones teóricas. Sociedad y Cultura contemporáneas*. Madrid, España: Tecnos.
- Galtung, J. (1998) *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao, España: Gernika Gogoratuz
- Galtung, J. (2003) *Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos*. México D.F., México: Transcend-Quimera.

- Galtung, J. (2003b) *Violencia Cultural*. Guernica, España: Guernica Gogoratuz
- Galtung, J. (2003c) *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao, España: Gernika Gogoratuz
- Galtung, J. (2007) *Toward a Conflictology: the Quest for Trans-Disciplinary*. Oslo, Noruega: Trascend.
- Galtung, J. (2013) *Johan Galtung. Pioneer of Peace Research*. Londres, Reino Unido: Springer.
- Garay, L. J. (2001) "Una nota sobre la problemática social, el conflicto armado, el narcotráfico y el Plan Colombia". En Summit of the Americas Center, *Colombia: conflicto armado, perspectivas de paz y democracia*, Florida, Estados Unidos: Florida International University.
- García, M. (1992) *De La Uribe a Tlaxcala: procesos de paz*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- García, M. (2008) "El conflicto armado colombiano: ¿el fin del fin?", en *Informe Especial CINEP*. [En línea]
- <<http://www.alboan.org/docs/articulos/canales/alboan/informeciNEpsitu.pdf>>. [Consultado el 3 de febrero de 2014].
- García, C. I. (1998) "Antioquia en el marco de la guerra y la paz: transformaciones: de la lógica de los actores armados". En *Controversia*, núm. 172, pp. 69-97.
- García, C. I. (2003) *El caso del Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- García, C.I. y Aramburo, C. I. (2011) *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- García Reyes, P. (2014) "Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción". En *Revista de Estudios socio-jurídicos*, vol. 16, núm. 1, pp. 207-242.
- Gaviria, J. O. (2005) *Los sofismas del terrorismo*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Giha, Y., Riveros, H. y Soto, A. (1999) "El gasto militar en Colombia: aspectos microeconómicos y macroeconómicos". En *Revista de la CEPAL*, núm. 69, pp. 163-180.
- Gilhodès, P. (1972) *Las luchas agrarias en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial La Carreta.
- Giraldo, F. (2001) *Democracia y discurso político de la Unión Patriótica*. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Javeriano.
- Giraldo, F. (2006) "El nombre sí importa. El debate sobre la naturaleza actual de la guerra colombiana". En *Empresas Políticas*, núm. 7, pp. 147-156.

- Giraldo, J. (2008) Conflicto armado urbano y violencia homicida. En *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, núm. 5, pp. 99-113.
- Goebertus, J. (2008) “Palma de aceite y desplazamiento forzado en Zona Bananera: ‘trayectorias’ entre recursos naturales y conflicto”. En *Colombia Internacional*, núm. 67, pp. 152-175.
- Goffman, E. (1983) “Interaction Order”. En *American Sociological Review*, núm. 48, pp. 1-17.
- Goldstone, J., Gurr, T., Marshall, M. y Vargas, J. (2004) “It’s all about state structure: New findings on revolutionary origins from global data”. En *Homo Economicus*, vol. 21, núm. 2, pp. 429-455.
- Gomes, V. (2005) *Guerra en los Andes*. Quito, Ecuador: Editorial Abya-Yala.
- Gómez Araujo, B. (2007) “Análisis jurídico y constitucional de la Ley de Justicia y Paz”, en *Revista Diálogos de Saberes*, núm. 27, pp. 73-100.
- Gómez, C.M. (2001) “Economía y Violencia en Colombia”. En A. Martínez Ortiz (ed.) *Economía, Crimen, Conflicto*. (pp. 41-58) Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Gómez Isa, F. (2010) “La restitución de tierras y la prevención del desplazamiento forzado en Colombia”. En *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 12, núm. 2, pp. 11-58.
- González, F. (1997) *Para leer la Política. Ensayos de historia política colombiana*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- González, F. y Posada, C. (2001) “Criminalidad, violencia y gasto público en defensa, justicia y seguridad en Colombia”. En *Revista de Economía Institucional*, núm. 4, pp. 78-102.
- González, F. et al. (2012) *Conflicto y territorio en el oriente colombiano*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- González, F. et al. (2014) *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- González, L. (2013) *Impacto de la minería de hecho en Colombia. Estudios de caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa Bárbara*. Bucaramanga, Santander: Universidad Industrial de Santander.
- González Arana, G. (2001) “El conflicto armado ante la comunidad internacional”. En *Investigación y Desarrollo*, vol. 9, núm. 2, pp. 488-513.
- Gómez Araújo, L. A. (2003) “La rama judicial frente al conflicto armado”. En *Revista de Derecho de la Universidad del Norte*, núm. 19, pp. 103-118.
- González Jácome, J. (2007) “Hacia una reflexión ética del conflicto colombiano: buscando la verdad”. En *Vniversitas*, núm. 113, pp. 45-69.

- González Piñeros, N. C. (2006) *Resistencia indígena, alternativa en medio del conflicto colombiano*, Cali, Colombia: Universidad Pontificia Javeriana.
- Government Accountability Office (2008) “Plan Colombia. Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security has Improved; U.S Agencies Need More Detailed Plan For Reducing Assistance”. [En línea] <<http://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf>>[Consultado el 5 de febrero de 2013].
- Granada, C. y Rojas, L (1995) “Los costos económicos del conflicto armado en Colombia: 1990-1994”. En *Revista de Planeación y Desarrollo*, vol. 26, núm. 4, pp. 119-151.
- Granada, S., Restrepo, J. y Vargas, A. (2009) “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes del conflicto armado colombiano”. En J. Restrepo y D. Aponte (eds.) *Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones*. (pp. 27-124). Bogotá, Colombia: Universidad Pontificia Javeriana.
- Guáqueta, A. (2003) “Dimensiones políticas y económicas del conflicto armado en Colombia: Anotaciones teóricas y empíricas”. En *Colombia Internacional*, núm. 55, pp.19-36
- Guedán, M. y Darío Ramírez, R. (2005) *Colombia, ¿la guerra de nunca acabar?*, Madrid, España: Trama Editorial.
- Guerra de Hoyos, C., Pérez, M. y Tapia, C. (2011) *El territorio como Demo: demo(a)grafías, demo(a)cracias y epidemias*. Sevilla, España: Universidad Internacional de Andalucía.
- Guerrero, J. (1991) *Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la violencia*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Guerrero, J. (2011) “Obstáculos que impiden el fin del conflicto en Chocó”, en CINEP, [En línea] <http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Aobstaculos-que-impiden-el-fin-del-conflicto-en-el-choco&catid=104%3Aultima-edicion-de-cien-dias&lang=es&showall=1>. [Consultado el 11 de febrero de 2015].
- Guerrero, H. (2011) *Colombia: una democracia desdibujada por la guerra*. Madrid, España: EAE.
- Guevara, E. (1997) *La guerra de guerrillas*. Guipúzcoa, España: HIRU.
- Gugliotta, G. y Leen, J. (1989) *Kings of cocaine. Inside the Medellin Cartel*. New Jersey, Estados Unidos: Hardcover Edition.
- Gurr, T. (1970) *Why Men Rebel?* Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.
- Gurr, T. (1995) *Minorities at Risk*. Washington, Estados Unidos: Institute of Peace.
- Gutiérrez, F. (1998) *La ciudad representada. Política y conflicto en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.

- Gutiérrez, F. (2002) *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Gutiérrez, F. (2004) "Criminal Rebels? A Discussion on Civil War and Criminality from the Colombian Experience". En *Politics and Society*, vol. 32, núm. 2, pp. 257-285.
- Gutiérrez, F. y Barón, M. (2006) "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo". En F. Gutiérrez y M. E. Wills (coord.) *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. (pp. 267-309). Bogotá, Colombia: Norma.
- Gutiérrez Lemus, O. (2010) "Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad". En *Análisis Político*, vol. 23, núm. 69, pp. 3-34.
- Guzmán, A. (1999) *Violencia urbana y pobreza*. Cali, Colombia: Mimeo.
- Guzmán, A., Hernández, J., Ortiz, C. y Escobar, J. (2003) *Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo XX*. Cali, Colombia: CEREC.
- Guzmán, G., Fals Borda, O y Umaña, E (1962) *La Violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Habermas, J. (1997) "La idea kantiana de paz perpetua. Desde la distancia histórica de doscientos años". En *Isegoría*, núm. 16, pp. 61-90.
- Hardin, G. (1983) "Is Violence Natural?" En *Journal of Religion and Science*, vol. 18, núm. 4, pp. 405-413.
- Hardy, M.A. (1979) "Economic growth, distributional inequality, and political conflict in industrial societies". En *Journal of Political and Military Sociology*, núm. 7, pp. 209-227.
- Harnecker, M. (1988) *Colombia, combinación de todas las formas de lucha. La Habana*. La Habana, Cuba: Biblioteca Popular.
- Harto de Vera, F. (2004) *Investigación para la paz y resolución de conflictos*. Valencia, España, Tirant Lo Blanch
- Harto de Vera, F. (2013) "La mediación y las investigaciones para la paz: la búsqueda de alternativas pacíficas a los conflictos en el área internacional". En *Política y Sociedad*, vol. 5, núm. 1, pp. 53-70.
- Hegel, W. (2004) *Lecciones sobre filosofía de la historia universal*. Madrid, España: Alianza.
- Hegre, H. et al. (2009) "Poverty and Civil War Events: A Disaggregated Study of Liberia". En *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, núm. 4, pp. 598-623.
- Henao, F. et al. (2008) *Paramilitarismo, desmovilización y reinserción*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

- Henderson, J. D. (1984) *Cuando Colombia se desangró. Un estudio de la Violencia en metrópoli y provincia*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.
- Henderson, J. D. (1988) *Conservative Thought in Twentieth Century Latin America: The Ideas of Laureano Gomez*. Ohio, Estados Unidos: Ohio University Press.
- Henderson, H. D. (2001) *Modernization in Colombia: The Laureano Gomez Years, 1889-1965*. Florida, Estados Unidos: Florida University Press.
- Henderson, J. D. (2010) *Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Hernández, M. (2006) *Rojo y Negro. Historia del ELN*. Tafalla, España: Editorial Txalaparta.
- Hirschman, A. O. (2013) “La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia”. En *Revista de Economía Institucional*, vol. 15, núm. 28, pp. 351-360.
- Hobsbawm, E. (1967) “Peasants and rural migrants in Politics”, en Veliz, C. (ed.) *The politics of conformity in Latin America*. (pp. 43-55). Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.
- Hobsbawm, E. (1974) *Rebeldes primitivos*. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Holmes, J.S., Gutiérrez de Piñeres, S. y Curtin, K.M. (2006) “Drugs, violence, and development in Colombia: A department-level analysis”. En *Latin American Politics & Society*, vol. 48, núm. 3, pp.157-184.
- Horowitz, D. (1985) *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley, Estados Unidos: California University Press.
- Hoyos, D. (2009) “Dinámicas político-electoral en zonas de influencia paramilitar. Análisis de la competencia y la participación electoral. En *Análisis Político*, núm. 65, pp. 13-32.
- Hueso, V. (2000) “Johan Galtung. La transformación por medios pacíficos”. En *Cuadernos de Estrategia*, núm. 111, pp. 125-159.
- Human Rights Watch (2000) *Lazos que unen. Colombia y las relaciones militares-paramilitares*. Nueva York, Estados Unidos: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch (2001) *La “Sexta División”. Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia*. Nueva York, Estados Unidos: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch (2008) *¿Rompiendo el control? Obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia*. Nueva York, Estados Unidos: Human Rights Watch of California Press.
- Hurtado, M. y Pereira, C. (2011) “Legitimidad empresarial, conflicto de tierras y producción palmera en Colombia”. En *Revista de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa*, vol. 6, núm. 2, pp. 91-110.

- Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (2012) “Breve repaso por las finanzas de las FARC”. [En línea]. <[file:///C:/Documents%20and%20Settings/col172.OEI/Mis%20documentos/Downloads/INFORMATIVO%20N%C2%BA%20120-BREVE%20REPASO%20POR%20LAS%20FINANZAS%20DE%20LAS%20FARC%20\(1\).pdf](file:///C:/Documents%20and%20Settings/col172.OEI/Mis%20documentos/Downloads/INFORMATIVO%20N%C2%BA%20120-BREVE%20REPASO%20POR%20LAS%20FINANZAS%20DE%20LAS%20FARC%20(1).pdf)>. [Consultado 1 de marzo de 2015].
- Instituto de Estudios Geoestratégicos y Análisis Político (2013) “Desarme, desmovilización y reintegración: una introducción para Colombia”. En *Cuaderno de Análisis*, núm. 01/13, pp. 88.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ (2012) “VIII Informe sobre grupos narcopararmilitares”. [En línea]. <<http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/08/Informe-VIII-Indepaz-final.pdf>>. [Consultado el 08 de 11 noviembre de 2014].
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ (2013) “XI Informe sobre grupos narcopararmilitares”. [En línea]. <<http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/11/IX-Informe-sobre-grupos-narcoparamilitares.pdf>>. [Consultado el 7 de septiembre de 2015].
- International Crisis Group (2002) “Colombia Elusive Quest for Peace”. En *ICG Latin American Report*, núm. 1. [En línea] <<http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/colombia/001-colombias-elusive-quest-for-peace.aspx>>. [Consultado el 3 de febrero de 2014].
- International Crisis Group (2003) “Colombia: Negotiating with the paramilitaries”. En *Latin American Report*, núm. 5, 45 pp.
- International Crisis Group (2007) “¿Se está avanzando con el ELN?”. En *Boletín informativo sobre América Latina*, núm. 16, 19pp.
- International Crisis Group (2008) “Corregir el curso: las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia”. En *Informe sobre América Latina*, núm. 29, 35pp. [En línea] <http://www.observatori.org/paises/pais_51/documentos/29_correcting_course_victims_and_spanish.pdf>. [Consultado el 27 de noviembre de 2014].
- International Crisis Group (2010) “Mejorar la política de seguridad en Colombia”. En *Informe sobre América Latina*, núm. 23, 16 pp.
- International Crisis Group (2012) “Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento”. En *Informe sobre América Latina*, núm. 41, 28 pp.
- International Crisis Group (2012b) “Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: jugar la carta correcta”. En *Informe sobre América Latina*, núm. 30, 38 pp.
- International Crisis Group (2014) “¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia”. En *Informe sobre América Latina*, núm. 51, 36 pp.

- Jackson, R. (1990) *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Jaulin , R. (1973) *La paz blanca: Introducción al etnocidio*. Buenos Aires, Argentina: Tiempo Contemporáneo.
- Jordán, J. (2011) “Delimitación teórica de la inseguridad: conceptos, fines y medios”. En *Análisis GESI*, núm. 8.
- Junta de Inteligencia Conjunta (2005) Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003. Bogotá, Colombia: JIC.
- Kaldor, M. (1999) *New and Old Wars: Organized Violence in Global Era*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press.
- Kaldor, M. (2013) “In Defence of New Wars”. En *Stability*, vol. 2, núm. 1, pp. 1-16.
- Kalmanovitz, S. (2003) *Economía y Nación. Una breve historia de Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Kalyvas, S. (2001) “La violencia en medio de una guerra civil. Esbozo de una teoría”. En *Análisis Político*, núm. 42, pp. 3-25.
- Kalyvas, S. (2001b) “New and Old Civil Wars. A Valid Distinction?” En *World Politics*, vol. 54, núm. 1, pp. 99-118.
- Kalyvas, S. (2007) "Civil war". En C. Boix y S. C. Stokes (eds.) *Oxford Handbooks of Political Science* (pp. 416-434). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
- Kalyvas, S. (2008) “Promises and pitfalls of an emerging research program: The microdynamics of civil war”. En S. Kalyvas, Shapiro, I. y T. Masoud (eds.). *Order, Conflict and Violence*. (pp. 397-421). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Kant, I. (2004) *Sobre la paz perpetua*. Madrid, España: Tecnos.
- Kaplan, R. (2013) *La venganza de la geografía*. Madrid, España: RBA Editores.
- Keen, D. (2001) “War and Peace: What's the Difference?”. En *International Peacekeeping*, vol.7, núm.4, pp. 1-22.
- Kennan, G. (1947) By Mr. X. “The Sources of Soviet Conduct”. En *Foreign Affairs*, vol. 25, núm. 4, pp. 566-582
- Keohane, R. y Nye, J. (1988) *Poder e interdependencia*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Latinoamericano
- Kissinger, H. (1969) “The Vietnam Negotiations”. En *Foreign Affairs*, vol. 48, núm. 2, pp. 38-50.
- Koonings, K. y Kruijt, D. (2004) *Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America*. Londres, Reino Unido: Zed Books.

- Kriesberg, M. (1999) "Conflict transformation". En *Peace and Conflict*, Vol. 2 (pp. 413-425). Nueva York, Estados Unidos: Academic Press.
- Kruijt, D. y Koonings, K. (2008) "Colombia: A Paradoxical State" [En línea]. <http://fride.org/descarga/COM_Colombia_Paradoxical_State_ENG_ene08.pdf>. [Consultado el 18 de octubre de 2012].
- Kumar, K. (1997) *Rebuilding Societies after Civil War*. Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- Kumar, K. (1998) *Postconflict Elections, Democratization and International Assistance*. Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers.
- Latin American Working Group (2011) "A Cautionary Tale: Plan Colombia's Lessons for U.S Policy Toward Mexico and Beyond". [En línea]. <<http://www.lawg.org/storage/documents/Mexico/lawgef%20cautionary%20tale%20f.pdf>>. [Consultado el 23 de octubre de 2013].
- Lair, E. (2000) "Una guerra contra los civiles". En *Colombia Internacional*, núm. 49, pp. 135-147.
- Lair, E. (2004) "Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar". En G. Sánchez y E. Lair (eds.) *Violencias y estrategias colectivas en la región andina* (pp.103-143). Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Le Billon, P. (2001) "The political ecology of war: natural resources and armed conflicts". En *Political Geography*, núm. 20, pp. 561-580.
- Legrand, C. (1988) *Colonización y protesta campesina en Colombia*. Bogotá, Colombia: Centro.
- Legrand, C. (2003) "The Colombian crisis in historical perspective". En *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, vol. 28, núm. 155, pp. 165-209.
- Leal, F. y Dávila, A. (1990) *Clientelismo: El sistema político y su expresión regional*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Leal, F. (1994) *El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Leal, F. (2006) *En la encrucijada, Colombia en el Siglo XXI*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Leal, F., Restrepo, J. A. y Ramírez, W. (2008) "20 años de Análisis Político". En *Análisis Político*, vol. 21, núm. 62, pp. 75-96.
- Leal, F. (2010) "La Política de Seguridad Democrática". [En línea]. <<http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/693-la-polica-de-seguridad-democrca.html>>. [Consultado el 18 de octubre de 2012].

- Lederach, J.P. (1997) *Building Peace. Sustainable Reconciliation In Divided Societies*. Washington, Estados Unidos: USIP Press.
- Lederach, J. P. (2000) *El abecé de la paz y los conflictos. Educación para la paz*. Madrid, España: La Catarata.
- Lederach, J.P. (2005) *The Moral Imagination. The Art and Soul of Building Peace*. Oxford, Estados Unidos: Oxford University Press.
- Lenin, V. (2006) *El Estado y la revolución*. Madrid, España: Alianza
- León, P.C. (2012) “La ambivalente relación entre el M-19 y la Anapo”, en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 39, núm. 2, pp. 239-259.
- Lincoln, P. B. y Leiss, A. C. (1990) *Controlling Small Wars*. Nueva York, Estados Unidos: A. Knopf.
- Linke, A., Witmer, F. y O’Loughlin, J. (2012) “Space-Time. Granger Analysis of the War in Iraq: A Study of Coalition and Insurgent Action-Reaction. En *International Interactions*, vol. 4, núm. 38, pp. 402-425.
- Linke, A. y O’Loughlin, J. (2015) “Reconceptualizing, Measuring, and Evaluating Distance and Context in the Study of Conflicts: Using Survey Data from the North Caucasus of Russia”. En *International Studies Review*, núm. 17, pp. 107-125.
- Lombana, P. C. (2005) “Relación del conflicto armado en Colombia con el desplazamiento y la resistencia indígena”. En C. V. Zambrano (coord.) *Etnopolíticas y racismo: conflictividad y desafíos interculturales en América Latina*. (pp. 221-252). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.
- López Hernández, C. (2010) *Y refundaron la patria. De como mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá, Colombia: Editorial Debate.
- López López, A. (2008) *El cartel de los sapos*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- López de Mesa, L. (1956) *Escrutinio sociológico de la historia colombiana*. Bogotá, Colombia: Academia Colombiana de Historia.
- López-Pintor, R. (1997) “Reconciliation Elections: A Post-Cold War Experience”. En K. Kumar (ed.) *Rebuilding Societies After Civil War: Critical Roles for International Assistance* (pp. 43-62), Boulder, Estados Unidos: Lynne Rienner.
- López Vigil, M. (1989) *Camilo camina en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial Nuestro Tiempo.
- Lozada, R. y Vélez, E. (1988) *Muertes violentas en Colombia entre 1976 y 1986*. Bogotá, Colombia: Instituto SER de Investigación.
- Lozano, M. C. y Gómez González (2004) “Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento forzado”. En *Acta Colombiana de Psicología*, núm. 2, pp. 102-119.

- Lund, M. (1996) *Preventing Violent Conflict: A Strategy for Preventive Diplomacy*. Washington, Estados Unidos: United States Institute of Peace Press.
- Luna, M. (2007) “El reconocimiento de sí mismo en los militantes del M-19”, en *Revista Sociedad y Economía*, núm. 13, pp. 44-65.
- Mac Ginty, R. (2010) Mac Ginty, R. (2006). *No War, No Peace: The rejuvenation of stalled peace processes and peace accords*. Basingstoke, Reino Unido: Palgrave Macmillan.
- McDoom, O. (2014) “Predicting Violence within Genocide: A Model of Elite Competition and Ethnic Segregation from Rwanda”. En *Political Geography*, núm. 42, pp. 34-45.
- Mackenzie, E. (2010) “FARC y Bacrim: un frente común”. [En línea]. <http://www.gees.org/files/article/22052010151814_Analisis-07814.pdf> [Consultado 1 de marzo de 2015].
- Maddaloni, J. P. (2009) “An Analysis of the FARC in Colombia: Breaking the Frame of FM 3-24”. [En línea]. <<http://www.cgsc.edu/sams/media/Monographs/MaddaloniJ-21MAY09.pdf>>. [Consultado 1 de marzo de 2015]
- Mann, J. (2004) *Rise of the Vulcans. The History of Bush's War Cabinet*. Nueva York, Estados Unidos: Penguin Books.
- Mann, M. (1992) *Las fuentes del poder social Vol.1*. Madrid, España: Alianza.
- Mann, M. (1997) *Las fuentes del poder social Vol.2*. Madrid, España: Alianza.
- Marcella, G. (2003) *The United States and Colombia: The Journey to Ambiguity to Strategic Clarity*. Pennsylvania, Estados Unidos: Instituto de Estudios Estratégicos.
- Martínez, A. (1999) *La guerra de los mil días*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Martínez Román, M. A. (1997) “Pobreza y exclusión social como formas de violencia estructural”. En *Alternativas: cuadernos de Trabajo Social*, núm. 5, pp. 17-36.
- Martínez Sanabria, C. y Pérez Forero, A. C. (2012) “La restitución de tierras en Colombia expectativas y retos”. En *Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho*, vol. 15, núm. 29, pp. 111-127.
- Martínez, O. (2011) *El Salvador. Las negociaciones de los acuerdos para la paz*. San Salvador, El Salvador: Nuevo Enfoque.
- Marulanda, M. (1978) “Notas autobiográficas de Manuel Marulanda”. En *Estudios Marxistas*, núm. 15, pp. 52-57.
- Marulanda, E. (1990) *Historias de la frontera: colonización y guerras en el Sumapaz*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Marulanda, E. (1991) *Colonización y conflicto: las lecciones de Sumapaz*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.

- Marshall, T. H. (1992) *Ciudadanía y clase social*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Marx, K. (2010). *El Capital: crítica de la economía política*. Madrid, España: Alianza.
- Mason, A. (2000) “La crisis de seguridad en Colombia: causas y consecuencias internacionales de un Estado en vías de fracaso”. En *Colombia Internacional*, núm. 49, pp. 82-102.
- Mason, A. (2002) “Exclusividad, autoridad y Estado”. En *Análisis Político*, núm. 47, pp. 55-75.
- Mason, S. y Rychard, S. (2005) *Conflict Analysis Tools*. Berna, Suiza: Swiss Agency for Development and Cooperation.
- Mattié, M. (2007) *La economía no deja ver el bosque*. [En línea] <<http://www.librosenred.com/libros/laeconomianodejaverelbosquearticulos20022006.html>> [Consultado el 1 de abril de 2014].
- Maynes, C. W. (1993) “Containing Ethnic Conflict”. En *Foreign Policy*, núm. 90, pp. 3-21.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2001) *Dynamics of Contention*. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
- McDermort, J. (2013) Las FARC, el Proceso de Paz y la Posible Criminalización de la Guerrilla. InSight Crime En línea: http://www.pensamientocolombia.org/AllUploads/Docs/CPPCDoc_2014-06-22.pdf
- Medina, C. (1990) *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso “Puerto Boyacá”*. Bogotá, Colombia: Editorial de Documentos Periodísticos
- Medina, C. (1996) *ELN: una historia contada a dos voces*. Bogotá, Colombia: Rodríguez Quito Editores.
- Medina, C. (2008) *Ejército de Liberación Nacional. Notas para una historia de las ideas políticas*. [En línea]. <http://www.cedema.org/uploads/Medina_Gallego_ELN.pdf>. [Consultado 18-11-2014].
- Medina, C. (2011) *Las FARC-EP y ELN. Una historia comparada*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Medina C. (2011b) *Las FARC-EP: Flujos y reflujos. La guerra en las regiones*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Mejía, D. (2009) “La guerra contra la producción y el tráfico de drogas: una evaluación económica del Plan Colombia”. En *Debates de coyuntura económica*, núm. 76, pp. 16-20.
- Mejía, D. (2012) “The War on Drugs under Plan Colombia”. En E. Zedillo y H. Wheeler (eds.) *Rethinking the "War on Drugs" Through the US-Mexico Prism*. (pp.19-32) New Haven, Estados Unidos: Yale Center for the Study of Globalization.

- Merva, M. y Fowles, R. (1992) “Effects of Diminished Economic Opportunities and Social Stress: Herath Attacks, Strokes and Crime”. En *Briefing Papers of Economic Policy Institute*, 17 pp.
- Meschler, E. (1999) *Dinámicas socioeconómicas en el espacio colombiano*. Bogotá, Colombia: DANE.
- Miall, H., Mitchell, C., Ramsbotham, O. y Woodhouse, T. (2015) *The Contemporary Conflict Resolution Reader*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press.
- Ministerio de Defensa Nacional (2005) *Logros y retos de la Política de Seguridad Democrática*. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa Nacional (2006) *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa (2008) *Memorias al Congreso, 2007-2008*. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa (2010) *Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011) *Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad*, Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011b) *Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2011*, Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Defensa Nacional (2015) *Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad*. Bogotá, Colombia.
- Miranda, A. (2008) *Jorge Eliécer Gaitán: el fuego de una vida*. Bogotá, Colombia: Editorial Intermedio.
- Misión de Observación Electoral (2007a) *Monografía político-electoral. Departamento de Cauca*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007b) *Monografía político-electoral. Departamento de Chocó*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007c) *Monografía político-electoral. Departamento de Cesar*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007d) *Monografía político-electoral. Departamento de Casanare*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007e) *Monografía político-electoral. Departamento de Cundinamarca*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007f) *Monografía político-electoral. Departamento de Sucre*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.

- Misión de Observación Electoral (2007g) *Monografía político-electoral. Departamento de Cundinamarca*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007h) *Monografía político-electoral. Departamento de Guaviare*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007i) *Monografía político-electoral. Departamento de Nariño*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes
- Misión de Observación Electoral (2007j) *Monografía político-electoral. Departamento de Caldas*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes
- Misión de Observación Electoral – MOE (2007k) *Monografía político-electoral del departamento de Boyacá. 1997 a 2007*. Bogotá. Colombia
- Misión de Observación Electoral (2007l) *Monografía político-electoral. Departamento de Putumayo*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Misión de Observación Electoral (2007m) *Monografía político-electoral. Departamento de Norte de Santander*. Bogotá, Colombia: MOE – Universidad de Los Andes.
- Mitchell, C. (1981) *The Structure of International Conflict*. Londres, Reino Unido: Palgrave Macmillan.
- Mitchell, C. (2014) *The Nature of Intractable Conflict*. Londres, Reino Unido: Palgrave MacMillan.
- Mitrany, D. (1948) “The Functional Approach to World Organization”. En *International Affairs*, vol. 24, núm. 3, pp. 350-363.
- Molano, A. (1987) *Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores
- Molano, A., Fajardo, D. y Carrizosa, J. (1989) *La colonización: voces y caminos*. Bogotá, Colombia: Corporación Araracuara.
- Molano, A. (1997) *Trochas y fusiles*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.
- Molano, A. (2001) “El Plan Colombia: ¿un salto cualitativo en la guerra?”. En M. Aguirre y M. González (ed.). *Políticas mundiales, tendencias globales*. (pp. 77-104). Barcelona, España: Icaria.
- Molano, A. (2006) “Aproximaciones históricas al paramilitarismo”. [En línea]. http://www.observatori.org/paises/pais_51/documentos/E_MOLANO.pdf. [Consultado el 15 de mayo de 2015].
- Molina, N. (2005) *Resistencia Comunitaria y Transformación de Conflictos. Un Análisis desde el Conflicto Político-Armado de Colombia*. Tesis doctoral dirigida por Miguel Domenech Argemí. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Molina, J. (2007) “Gaston Bouthoul y la polemología”. En *Anuario Filosófico*, núm. XL/1, pp. 187-201.

- Moncada, P. (2007) “El fenómeno de la debilidad y el fracaso: un debate inconcluso y sospechoso” En R. Rotberg (ed.). *Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso*. (pp.21-150) Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Mondragón, H. (2002) “Plan Colombia: gasolina al fuego”. En *Ábaco. Revista de cultura y estudios sociales*, núm. 32, pp. 89-108.
- Montúfar, C. y Whitfield, T. (2003) *Turbulencia en los Andes y Plan Colombia*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Morales, J. (2015) *¿Qué es el postconflicto?* Bogotá, Colombia: Ediciones B.
- Moreno, A. (2006) “Transformaciones internas de las FARC a partir de los cambios políticos por los que atraviesa el Estado colombiano”. En *Papel Político*, vol. 11, núm. 2, pp. 595-645.
- Moreno, C. E. (2009) “Relaciones entre Colombia y Europa 1999-2002: alianzas y conflicto en la cooperación internacional”. En *Revista CS*, núm. 3, pp. 147-176.
- Morgenthau, H. (1948) *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*. Nueva York, Estados Unidos: Knopf.
- Mosca, G. (1985) *La classe política*. Bari, Italia: Laterza.
- Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2014) *"Falsos positivos" en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010*. Bogotá, Colombia.
- Narváez, G. E. (2012) *La guerra revolucionaria del M-19 (1974-1989)*. Tesis de Maestría dirigida por Mario Aguilera Peña. Universidad Nacional de Colombia.
- Negri, A. y Hardt, M. (2004) *Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Debate.
- Newman, E. y Richmond, O. (2006) “The Impact of Spoilers on Peace Process and Peacebuilding”, en *Policy Brief*, núm. 2, 8 pp. Universidad de Naciones Unidas.
- Nieto-Navia, R. (2008) “¿Hay o no hay conflicto armado en Colombia?” En *ACDI*, vol. 1, núm. 1, pp. 139-159.
- Nivia, E. (2001) “Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos sí son peligrosas. Algunas aproximaciones”. En *Seminario Las Guerras en Colombia: Drogas, Armas y Petróleo*. Instituto Hemisférico de las Américas. Universidad de California, Davis. 17-19 de mayo de 2001.
- Núñez, M. (2012) “ELN – FARC: ahora sí juntos”, en *Arcanos*, núm. 12, pp. 60-75.
- Núñez, M. y Vargas, N. (2013) *¿Cómo llega el ELN a la mesa de negociaciones?* Bogotá, Colombia: Fundación Paz y Reconciliación.

- O'Loughlin, J. *et al.* (2012) "Climate Variability and Conflict Risk in East Africa, 1990-2009. En *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 45, núm. 109, pp. 18344-18349.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2010) *Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la violencia y los derechos humanos*. Bogotá, Colombia.
- Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR (2012) *Presencia de organizaciones guerrilleras y Bacrim en territorio colombiano en 2012*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.
- Observatorio para la Paz. (1999) *Las verdaderas intenciones de las FARC*. Bogotá, Colombia: Intermedio Editores.
- Ocampo, J. A. *et al.* (1987) "La consolidación del capitalismo moderno (1945-1986), en Ocampo, J. A. (ed.) *Historia económica de Colombia*. (pp. 243-334). Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Ocampo, S. (2009) "Agroindustria y conflicto armado". En *Colombia Internacional*, núm. 70, pp. 169-190.
- Olave, G. (2011) "Los marcos del conflicto: Aproximación al conflicto armado colombiano desde el concepto de marco". En *Discurso y Sociedad*, vol. 5, núm. 3, pp. 514-546.
- Olave, G. (2013) "El proceso de paz en Colombia según el Estado y las FARC-EP". En *Discurso y Sociedad*, vol. 7, núm. 2, pp. 338-363.
- Oquist, P. (1978) *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá, Colombia: Instituto de Estudios Colombianos.
- Ortiz, A. y Lara, O. (1988) *Operación Cobra: historia de una gesta romántica*. Bogotá, Colombia: Florelia Editor.
- Ortiz, I.D. (2009) *El genocidio político contra la Unión Patriótica*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Ortiz, R. (2000) "Guerra y narcotráfico en Colombia". En *Cuadernos de la Guardia Civil*, nú. 22, 15 pp.
- Ortiz, W. (2006) *Los paraestados en Colombia*. Tesis doctoral dirigida por Antonio Trinidad Requena. Universidad de Granada.
- Osler, T. (1996) "Why Orphaned Peace Settlements Are More Prone to Failure". En C. A. Crocker, F. Osler y P. Aall (eds.) *Managing Global Chaos: Sources and Responses to International Conflict* (pp. 533-550). Washington, Estados Unidos: Institute of Peace Press.
- Osterling, J.P. (1989) *Democracy in Colombia: Clientelist Politics and Guerrilla Warfare*, Oxford, Reino Unido: Transaction Publishers.

- Otero, D. (2007) *Las cifras del conflicto armado en Colombia*. Bogotá, Colombia: INDEPAZ.
- Otero, D. (2010) *El papel de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano*. Bogotá, Colombia: Ediciones Aurora.
- Óthuatail, G. (1996) *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space*. Minneapolis, Estados Unidos: Minnesota University Press.
- Pachón, X. (2009) “La infancia perdida en Colombia: los menores en la Guerra”. En *Working Papers de Georgetown University*, núm. 15, 21 pp.
- Palacio, G. y Rojas, F. (1990) “Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia”, en Germán Palacio (ed.) *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*. (pp. 69-104) Bogotá, Colombia: ILSA-CEREC.
- Palmer, R. (2000) “Estructura institucional del Estado”. En R.del Águila (ed.). *Manual de Ciencia Política*. (pp. 177-204). Madrid, España: Trotta.
- Pareto, V. (1968) *The Rise and Fall of the Elites. An Application of Theoretical Sociology*. New Jersey, Estados Unidos: Bernminster Press.
- Parsons, T. (1976) *La estructura de la acción social*. Madrid, España: Revista de Occidente.
- Pastrana, A. (1999) “Discurso de clausura de los cursos de Altos Estudios Militares, Estado Mayor eIntegral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra”, en Bogotá, Colombia. [En línea] <<http://www.ideaspaz.org/tools/download/51391>> [Consultado el 7 de abril de 2014].
- Pastrana, A. (2013) *Memorias olvidadas*. Bogotá, Colombia: Editorial Debate.
- Pataquiva, G. N. (2009) “Las FARC, su origen y evolución”. En *UNISCI*, núm. 19, pp. 154-185.
- Patiño, C. (2003) *El mito de la nación violenta*. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Pattie, C. y Johnston, R. (2000) “People Who Talk Together Vote Together: An Exploration of Contextual Effects in Great Britain”. En *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 90, núm. 1, pp. 41-66.
- Payne, J. L. (1968) *Patterns of conflict in Colombia*. New Haven, Estados Unidos: Yale University Press.
- Pécaut, D. (1973) *Política y sindicalismo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial La Carreta.
- Pécaut, D. (1987) “Crise, guerre et paix en Colombia”. En *Problemes de l’Amerique Latine*, núm. 84, pp. 3-28.

- Pécaut, D. (2000) "Populismo imposible y Violencia: el caso colombiano". En *Estudios Políticos*, núm. 16, pp. 45-70.
- Pécaut, D. (2001) *Guerra contra la sociedad*. Bogotá, Colombia: Espasa.
- Pécaut, D. (2006) *Crónica de cuatro décadas de política colombiana*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Pécaut, D. (2008) *Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines?* Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Pécaut, D. (2008b) "Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión". En *Análisis Político*, núm. 63, pp. 22-50.
- Pécaut, D. (2011) *Orden y Violencia: Colombia 1930-1953*. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad Eafit.
- Peñaranda, D.R. (2010) *El movimiento armado Quintín Lame: una guerra dentro de otra guerra*. Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Peralta, M. et al. (2011) *La Guajira en su laberinto. Transformaciones y desafíos de la violencia*. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz.
- Pérez Flórez, G. (2014) "Colombia se asoma a la paz". En *Política Exterior*, vol. 28, núm. 158, pp. 78-85.
- Pérez, M. A. (2007) *Comercio Internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.
- Pérez Murcia, L. E. (2001) "Una mirada empírica a los determinantes del desplazamiento forzado en Colombia". En *Cuadernos de Economía*, vol. 20, núm. 35, pp. 205-243.
- Pérez Pérez, T. (2011) "Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática". En *Magistro*, vol. 5, núm. 10, pp. 129-150.
- Pérez Salazar, B. (2004) "La negociación del conflicto armado interno en Colombia: Dos escenarios probables y otro posible, pero improbable". En *Nueva Sociedad*, núm. 7, pp. 91-108.
- Pinto, M. E., Vergara, A. y Lahuerta, Y. (2002) "Diagnóstico del programa de reinserción en Colombia: mecanismos para incentivar la desmovilización voluntaria individual". En *Archivos de Economía*, Documento 211, Departamento Nacional de Planeación, 80pp.
- Piña, E. (2012) *Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia*. Quito, Ecuador: FLACSO
- Pissoat, O. y Gouëset, V. (2002) "La representación cartográfica de la violencia". En *Análisis Político*, núm. 45, pp. 3-33.
- Pizarro, E. (1986) "El proyecto reformista de Belisario Betancur". En *Revista de la Universidad de Antioquia*, núm. 204, pp. 4-34.

- Pizarro, E. (1989) "Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia". En *Análisis Político*, núm. 7, pp. 3-35.
- Pizarro, E. (2002) "Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra anti-terrorista o guerra ambigua? En *Análisis Político*, núm. 46, pp. 164-180.
- Pizarro, E. (2003) "Colombia: ¿una guerra de perdedores?" En *Revista de estudios sociales*, núm. 16, pp. 85-93.
- Pizarro, E. (2004) *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Pizarro, E. (2006) "Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión", en Francisco Gutiérrez y Maria Emma Wills (eds.) *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp.173-207) Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Pizarro, E. y Bejarano, A. M. (2008) "Colombia: ¿Guerra civil, contra la sociedad, guerra ambigua o antiterrorista?", en *Vanguardia Dossier América Latina. Democracia, Neoliberalismo Populismo* (pp. 78-80). Barcelona, España: Editorial La Vanguardia.
- Pizarro, E. (2011) *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- PNUD (1995) "Hacia una Sociedad para Todos". En *Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social*, Copenhague, Dinamarca. 6 - 12 marzo de 1995.
- PNUD (2003) *Informe Nacional sobre Desarrollo Humano*. Colombia. [En línea]http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/ca pitulo_2.pdf. [Consultado el 7 de septiembre de 2015]
- PNUD (2010) Análisis de la conflictividad en el oriente antioqueño. Bogotá, Colombia: PNUD. [En línea]
<<http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058220/Analisis%20conflictividad%20Oriente%20Antioque%C3%B1o.pdf>>. [Consultado el 5 de febrero de 2015]
- PNUD (2011) *Informe sobre Desarrollo Humano. Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos*. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas.
- PNUD (2011b) *Informe sobre Desarrollo Humano. Colombia rural: Razones para la esperanza*. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas
- PNUD (2013) *Informe sobre Desarrollo Humano. El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso*. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas.
- Pollock, J. (1975) "Violence, politics and elite performance: The political sociology of La Violencia in Colombia". En *Studies in Comparative International Development*, vol. 10, núm. 2, pp. 22-50.

- Portillo, E. (2010) *Cambio ideológico en el gobierno de El Salvador y política exterior frente a Estados Unidos: giros, reformas o ajustes tras la llegada del FMLN al poder*. Tesis de maestría dirigida por Anabella Busso. FLACSO Argentina – Universidad de Barcelona.
- Posada, E. (2001) *¿Guerra civil? El lenguaje del conflicto en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ideas para la Paz.
- Posada, E. (2005) “Tomarse las palabras en serio”, en *Semana*, [En línea] <<http://www.semana.com/opinion/articulo/tomarse-palabras-serio/74000-3>>. [Consultado el 1 de diciembre de 2014].
- Posada, E., Nasi, C., Ramírez, W. y Lair, E. (2005) “Guerra civil”. En *Revista de Estudios en Ciencias Sociales*, núm. 15, pp. 157-162.
- Presidencia de la República (2005) *Informe al Congreso* [En línea] <http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe_congreso_2005-AUV.pdf>. [Consultado el 3 de septiembre de 2013].
- Presidencia de la República (2007) *Informe al Congreso* [En línea] <http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe_congreso_2007-AUV.pdf>. [Consultado el 3 de septiembre de 2013].
- Presidencia de la República (2010) *Informe al Congreso*. [En línea] <http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/InformeCongreso/Informe_congreso_2010.pdf>. [Consultado el 3 de septiembre de 2013].
- Presidencia de la República (2014) Situación de la población afrocolombiana: Elementos de diagnóstico para la focalización de políticas públicas. [En línea] <http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/Documents/1-Presentacion-Afros-120910.pdf>. [Consultado el 7 de septiembre de 2015].
- Prieto, C. A. (2013) “Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia”, en *Policy Paper FESCOL*, núm. 47, 19pp.
- Puyana, J. R. (2005) “Colombia frente a los retos del multilateralismo”. En *OASIS*, núm. 11, pp. 85-102.
- Rabasa, A. y Chalk, P. (2001) *ColombianLabyrinth. The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability*. Santa Mónica, Estados Unidos: Rand Corporation.
- Raffo, L. (2010) “Narcotráfico y conflicto, ¿por qué bajó el precio de la cocaína? En *Revista de Economía Nacional*, vol. 12, núm. 23, pp. 229-258.
- Raleigh, C. y Johnston, J. (2009) “Population Size, Concentration and Civil War: A Geographically Dissagregated Analysis. En *Política Geography*, vol. 28, núm. 4, pp. 224-238.

- Ramírez, M. C. (2001) *Entre el estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Bogotá, Colombia: ICANH.
- Ramírez, M.C. (2009) “Negotiating Peace and Visibility as a Civil Society in Putumayo amid the Armed Conflict and the War on Drugs”, en Virginia M. Bouvier (ed.) *Colombia. Building Peace in Time of War*. (pp.311-334). Washington, Estados Unidos: United States Institute of Peace.
- Ramírez, M. L. y Robledo, J. E. (2011) *Relaciones militares Colombia-Estados Unidos*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Ramírez, S. (2004) “Colombia y sus vecinos”. En *Nueva Sociedad*, núm. 192, pp. 144-156.
- Ramírez, W. (1981) “La guerrilla rural en Colombia: ¿una vía hacia la colonización armada?” En *Estudios rurales Latinoamericanos*, vol. 4, núm. 2, pp. 199-205.
- Ramírez, W. (1998) *Estado, violencia y democracia*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.
- Ramírez, W. (2000) “Violencia, guerra civil, contrato social”. En F. Gutiérrez Sanín *et al.* *Colombia, cambio de siglo: balances y perspectivas*. (pp. 21-68). Bogotá, Colombia: Planeta.
- Ramírez, W. (2001) “Colonización armada, poder local y territorialización privada”. En *Journal of Iberian and Latinoamerican Research*, vol. 7, núm. 2, pp. 63-81.
- Ramírez, W. y Jiménez, M. C. (2002) *Marquetalia: la violencia en provincia 1946-1965*. Barranquilla, Colombia: Autores.
- Ramos, A. (1999) *"Derecho a no ser desplazado". Derechos Humanos y Democracia*. Bogotá, Colombia: Editorial Faid.
- Ramsey, R. (1981) *Guerrilleros y soldados*. Bogotá, Colombia: Editorial Tercer Mundo.
- Range, A. (1993) “Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia”. En M. Cárdenas y M. Rodríguez (ed.) *Guerra, sociedad y medio ambiente*. (pp. 49-66). Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes.
- Rangel, A (1998) *Colombia, guerra en el fin de siglo*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Rangel, A. (2003) *Fuerzas Militares para la guerra. La agenda pendiente de la reforma militar*. Bogotá, Colombia: Fundación Seguridad y Democracia.
- Rangel, A. y Medellín, P. (2010) *La Política de Seguridad Democrática*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Rapoport, A. (1960) *Fights, Games and Debates*. Ann Arbor, Estados Unidos: University of Michigan Press.
- Rapoport, A. (1978) “Three Modes of Conflict”. [En línea].

< <http://anatolrapoport.net/node/19>>. [Consultado el 5 de septiembre de 2015].

Rashid, A. (2001) *Los Talibán. El Islam, el petróleo y el Nuevo Gran Juego en Asia Central*. Barcelona, España: Península.

Restrepo, L. C. (2004) “La difícil recomposición de Colombia”. En *Nueva Sociedad*, núm. 192, pp. 46-58.

Restrepo, J. A. (2006) “El Conflicto en Colombia: ¿Quién hizo qué a quién? Un Enfoque Cuantitativo (1988-2003)”. En F. Gutiérrez Sanín, M. E. Wills O. y G. Sánchez (eds.) *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*. (pp. 505-542). Bogotá, Colombia: Editorial Norma.

Reuter, P., Crawford, G. y Cave, J. (1988) *Sealing the Borders: The Effects of Increased Military Participation in Drug Interdiction*. Santa Mónica, Estados Unidos: The Rand Corporation

Revista de la Policía Nacional (1962) Bogotá, Colombia. Núm. 5.

Revista Criminalidad (2003) Bogotá, Colombia. Vol. 45. Núm. 1.

Revista Criminalidad (2006) Bogotá, Colombia. Vol. 49. Núm. 1

Revista Criminalidad (2008) Bogotá, Colombia. Vol. 50. Núm. 1.

Revista Criminalidad (2011) Bogotá, Colombia. Vol. 53. Núm. 1

Revista Criminalidad (2012) Bogotá, Colombia. Vol. 54. Núm. 1.

Rey, C. (2013) “Análisis espacial de la correlación entre cultivo de palma de aceite y desplazamiento forzado en Colombia”. En *Cuadernos de Economía*, vol. 32, núm. 61, pp. 683-719.

Reyes, A. (1993) *Geografía de la violencia en Colombia. Informe de investigación*. Bogotá, Colombia: IEPRI.

Reyes, A., Duica, L. y Pedraza, W. (2007) *El despojo de tierras por paramilitares en Colombia*. [En línea] <<http://www.ideaspaz.org/tools/download/52149>>. [Consultado el 12 de febrero de 2015].

Reyes, A. (2009) *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.

Reyes, L. F. (2012) *El desmonte parcial de las AUC y la reconfiguración del fenómeno paramilitar*. Tesis de maestría dirigida por Gloria Restrepo. Universidad Nacional.

Rice, S. (2002) “U.S Foreign Assistance and Failed States”. [En línea]. The Brookings Institution, 25 de noviembre de 2002. <<http://www.brookings.edu/research/papers/2002/11/25poverty-rice>>. [22 de agosto de 2014].

Richani, N. (1997) “The Political Economy of Violence: The War System in Colombia”. En *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 39, núm. 2, pp. 37-82.

- Richani, N. (2002) *Systems of violence: the political economy of war and peace in Colombia*. Albany, Estados Unidos: State University of New York Press.
- Richani, R. (2003) *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial Temas de Hoy.
- Richardson, L. (1960) *Arms and Insecurity. A Mathematical Study of the Causes and Origins of War*. California, Estados Unidos: Boxwood Press.
- Richardson, L. (1960) *Statistics of Deadly Quarrel*. California, Estados Unidos: Boxwood Press.
- Rico, D. (2013) *La Dimensión Internacional del Crimen Organizado en Colombia: Las Bacrim, sus Rutas y Refugios*. Washington, Estados Unidos: Wilson Center.
- Rifkin, J. (1996) *El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era*. Ginebra, Suiza: ILO.
- Rivas, P. y Rey, P. (2008) “Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006)”. En *CONfines*, núm 4/7, pp. 43-52.
- Rivas, P. y Rey, P. (2010) “Evolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia e inestabilidad del área andina en el primer decenio del siglo XXI”. En M. Requena (comp.) *Luces y sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo XXI*. Madrid, España: Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
- Rivera, E. J. (2007) “Historia del paramilitarismo en Colombia”. En *Revista História*, vol. 26, núm. 1, pp. 134-153.
- Rizo, H. (2002) *Evolución del conflicto armado en Colombia e Iberoamérica*. Cali, Bogotá: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.
- Robinson, J. (2011) “Colombia: Another 100 Years of Solitude?” [En línea]. <http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/colombia_otros_100_anos_de_soledad.pdf>. [Consultado el 16 de mayo de 2015].
- Rodgers, G. (1995) “What is special about a ‘social exclusion’ approach?” En G. Rodgers, C. Gore y J. B. Figuereido (eds.) *Social Exclusion: Rethoric, Realty, Responses*. (pp. 43-56). Ginebra, Suiza: ILO.
- Rodríguez Cuadros, J. D. (2015) *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Rodríguez González, I. (2014) “Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta, Colombia), entre 1980 y 2010”. En *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 16, núm. 1, pp. 311-338.
- Rodríguez Núñez, J. J. (2010) “El Plan Colombia y la geopolítica del imperio estadounidense”. En *Revista de Estudios Culturales*, núm. 5, pp. 217-272.

- Rodríguez Pinzón, E. (2015) *El discurso político de la seguridad en Colombia entre 1998 y 2010: la convergencia entre política exterior e interior*. Tesis doctoral dirigida por Heriberto Cairo Carou. Universidad Complutense de Madrid.
- Rodríguez Rodríguez, C. (2010) “¿Conflicto armado interno en Colombia? Más allá de la guerra de las palabras”. En *Magistro*. Vol. 4, núm. 7, pp. 111-125.
- Rojas, D. M. (2007) “Plan Colombia II: ¿más de lo mismo?”. En *Colombia Internacional*, núm. 65, pp. 14-37.
- Rojas, D. M. (2015) *El Plan Colombia. La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012)*. Bogotá, Colombia: Editorial Debate.
- Rojas, J. (2003) Plan Colombia, conflicto armado y migraciones forzadas. En *Revista Aportes Andinos*, núm. 7, pp. 1-11.
- Röling, B. (1984) “Investigación sobre la paz”. En VV.AA. *Los científicos de la carrera armamentista y el desarme*. (pp. 276-279). Barcelona, España: Serbal-UNESCO.
- Romero, M. (2003) *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*. Bogotá, Colombia: IEPRI-Planeta.
- Romero, M. y Arias, A. (2008) “Bandas Criminales, Seguridad Democrática y corrupción”. En *Revista Arcanos*, núm. 14, pp. 40-51.
- Romero, J. E. (2004) “El Plan Colombia: nueva definición de sujetos hegemónicos en Latinoamérica y su impacto sobre el proceso venezolano”. En *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 10, núm. 1, pp. 51-69.
- Ronderos, T. (2014) *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Editorial Aguilar.
- Ross, M. (2004) “What do we know about natural resources and civil war?” En *Journal of Peace Research*, vol. 41, núm. 3, pp. 337-356.
- Rotberg, R. (2004) *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.
- Rubenstein, R y Blechman, F. (1999) “Introduction: Conflict Resolution and Social Justice”. En *Conflict and Peace Studies*, vol. 6, núm. 1, pp. 1- 4.
- Rubio, M. (2001) “Del rapto a la pesca milagrosa”. En *Semana*. pp. 25-33. 12 de noviembre de 2001.
- Rummel, R. (1998) *Statistics of Democide. Genocide and Mass Murder from 1900*. Berlín, Alemani: LIT Verlag.
- Salas, L. G. (2007) “Identificación de patrones espaciales de la confrontación armada en Colombia con el Método de Densidades Focales Kernel”. En *Perspectiva Geográfica*, vol. 12, pp. 37-70.

- Salas, L. G. (2010) “Corredores y territorios del conflicto armado colombiano: una prioridad en la geopolítica de los actores armados”. En *Perspectiva Geográfica*, vol. 15, pp. 9-36.
- Salas, L. G. (2015) “Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012”. En *Cuadernos de Geografía*, vol. 24, núm. 1, pp. 157-172.
- Salazar, B. y Castillo, M. (2001) *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*. Bogotá, Colombia: CEREC.
- Salazar, B., Castillo, M. P. y Pinzón, F. (2007) “Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca”. En *Revista Sociedad y Economía*, núm. 1, pp. 93-123.
- Salcedo, D. (2013) “Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia”. En *Revista de Paz y Conflictos*, núm. 6, pp. 124-151.
- Salehyan, I. (2007) “Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary for Rebel Groups”. En *World Politics*, vol. 59, núm. 2, pp. 217-242.
- Salehyan, I. (2009) *Rebels Without Borders: State Boundaries, Transnational Opposition and Civil Conflict*. Nueva York, Estados Unidos: Cornell University Press.
- Salgado, M. (2001) *Falacias y verdades sobre el Plan Colombia*. Quito, Ecuador: Casa de la Cultura Benjamín Carrión.
- Salgado, H. (2004) *El Plan Colombia, una política de (in)seguridad humana para las poblaciones del Putumayo*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Samper, E. (2000) *Aquí estoy y aquí me quedo*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Samper, E. (2013) *Drogas. Prohibición o legalización*. Bogotá, Colombia: Editorial Debate.
- Sánchez, F. y Chacón, M. (2005) “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local 1974-2002”. En *Documento de Trabajo*, núm. 70, Crisis State Program, London School of Economics.
- Sánchez, F., Díaz, A.M, y Formisano, M. (2003) “Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial”. En *Documento Cede*, núm. 2003-05, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 60 pp.
- Sánchez, F. y Chacón, M. (2006) “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002”. En F. Gutiérrez Sanín, M. E. Wills O. y G. Sánchez (eds.) *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*. (pp. 347-403). Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Sánchez, G. y Meertens, D. (1983) *Bandoleros, gamonales y campesinos*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.

- Sánchez, G. (1986) “Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas”, en Sánchez, G. y Peñaranda, R. (comp.) *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. (pp. 17-32) Bogotá, Colombia: Editorial La Carreta.
- Sánchez, G. (1989) “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias”, en *Nueva Historia de Colombia*, vol. II, Bogotá, Colombia: Planeta.
- Sánchez, G. (2009) *Colombia: violencia y democracia. Comisión de Estudios para la Violencia*. Bogotá, Colombia: Editorial La Carreta.
- Sánchez, R. (1982) *Historia política de la clase obrera en Colombia*. Bogotá, Colombia: La Rosa Roja.
- Sánchez Steiner, L. (2008) “Éxodos rurales y urbanización en Colombia. Perspectiva histórica y aproximaciones teóricas”. En *Bitácora urbano-territorial*, núm. 13, pp. 57-72.
- Sandole, D. e Sandole, I. (1987) *Conflict management and problem solving: interpersonal to international applications*. Londres, Reino Unido: London F. Pinter.
- Sandole, D. (1997) “Task Sharing for European Security”. En *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, núm. 38, pp. 41-45.
- Sandoval, E. A. (2008) *La Guardia Indígena Nasa y el Arte de la Resistencia Pacífica*. Bogotá, Colombia: Hemera.
- Sandoval, I. (2004) *Callejón con salida... hacia una nueva política nacional de paz*. Bogotá, Colombia: PNUD.
- Sandoval, J. y Abello, J. (2006) “La Corte Penal Internacional y la salida negociada al conflicto armado”. En *Revista de Derecho de la Universidad del Norte*, núm. 25, pp. 3-46.
- Santos, A e Ibeas, J. (1995) “Elecciones y reforma política en Colombia”. En *Revista de Derecho Político*, núm. 40, pp. 341-378.
- Schmid, H. (1968) “Politics and Peace Research”. En *Journal of Peace Research*, núm. 5, pp. 217-232.
- Schelling, T. (1961) *La estrategia del conflicto*. Madrid, España: Tecnos.
- Schutte, S. y Donnay, K. (2014) “Matched wake analysis: Finding causal relationships in spatiotemporal event data”. En *Political Geography*, núm. 41, pp. 1-10.
- Schutte, S. (2015) “Geography, Outcome and Casualties: A Unified Model of Insurgency”. En *Journal of Conflict Resolution*, vol. 59, núm. 6, pp. 1101-1128.
- Segura, N. y Meertens, D. (1997) “Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia”. En *Nueva Sociedad*, núm. 148, pp. 30-43.
- Serrano, M. (2013) “El proceso de paz en Colombia”. VV.AA. *Panorama geopolítico de los conflictos* (413-438). Madrid, España: Instituto de Estudios Estratégicos.

- Sharpless, R. (1978) *Gaitán of Colombia: A Political Biography*. Pittsburgh, Estados Unidos: Pittsburgh University Press.
- Sierra, G. (1954) *Las guerrillas de los Llanos Orientales*. Manizales, Colombia: Imprenta del Departamento de Caldas.
- Sierra, J.E. (1997) *Pensamiento político de Gaitán*. Bogotá, Colombia: Plaza y Janés.
- Snyder, R. (2006) "Does lootable wealth breed disorder?" En *Comparative Political Studies*, vol. 8, núm. 39, pp. 943-968.
- Soto, C.L. y Rodríguez, M. (2006) *Generación de políticas gubernamentales de derechos humanos a partir de la constitución de 1991*. Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes.
- Spykman, N. J. (1944) *The Geography of the Peace*. Nueva York, Estados Unidos: Harcourt
- Stern, J. (2000) *The Ultimate Terrorists*. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.
- Stinchcombe, A. (1968) *Constructing Social Theories*. Nueva York, Estados Unidos: Harcourt, Brace and World.
- Sriram, C.L. (2004) *Confronting Past Human Rights Violations: Justice vs. Peace in Times of Transition*. Nueva York, Estados Unidos: Frank Cass.
- Stewart, F., et al (2001) *War and Underdevelopment: The Economic and Social Consequences of Conflict*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
- Stewart, F. (2002) "Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development". En *QEH Working Paper Series*, núm. 81, 40 pp.
- Stewart, F. (2008) *Horizontal Inequalities and Conflict*. Londres, Reino Unido: Palgrave MacMillan
- Strong, S. (1995) *Whitewash: Pablo Escobar and the cocaine Wars*. Londres, Reino Unido: MacMillan.
- Suárez, A. (1999) "Colombia: justicia y conflicto". En *América Latina Hoy*, vol. 23, pp. 105-110.
- Sudarsky, J. (1997) "Perspectivas para el desarrollo del capital social en Colombia". En *Coyuntura Social*, núm. 16, pp. 183-204.
- Sudarsky, J. (1999) *El capital social en Colombia: la medición nacional con BARCAS*. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación. Archivos de Macroeconomía, Bogotá.
- Sudarsky, J. (2001) *El capital social de Colombia*. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación.

- Taylor, P. y Flint, C. (2002) *Geografía Política: Sistema-mundo, Estado-nación y localidad*. Madrid, España: Trama.
- Tajfel, H. (1982) "Social psychology of intergroup relations". En M. R. Rosenzweig y L. R. Porter (eds.). *Annual Review of Psychology*. (pp. 1-29). California, Estados Unidos: Annual Reviews.
- Tickner, A. (2002) "Colombia es lo que los actores estatales hacen de ella. Una (re)lectura de la política exterior colombiana hacia Estados Unidos". En M. Ardila, D. Cardona y A. Tickner (eds.). *Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana*. (pp. 353-393). Bogotá, Colombia: FESCOL.
- Tickner, A. y Pardo, R. (2003) "En busca de aliados para la Seguridad Democrática. La política exterior del primer año de la administración Uribe". En *Colombia Internacional*, núm. 56, pp. 64-81.
- Tickner, A. (2007) "Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales". En *Colombia Internacional*, núm. 65, pp. 90-111.
- Tilly, C. (1975) *The formation of national states in Western Europe*. New Jersey, Estados Unidos: Pricetown University Press.
- Tilly, C. (2006) "Guerra y construcción del Estado como crimen organizado". En *Relaciones Internacionales*, núm. 5, pp. 1-26.
- Tilly, C. (2007) *The Politics of Collective Violence*. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
- Tokatlian, J. G. (2001) "El Plan Colombia: ¿un modelo de intervención?". En *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, núm. 54, pp. 203-219.
- Tokatlian, J. G. (2011) "Colombia, el Plan Colombia y la región andina". En *Nueva Sociedad*, núm. 173, pp. 126-143.
- Tomkins, D. (2008) *Dirty Combat. Secret Wars and Serious Misadventures*. Edimburgo, Escocia: Mainstream Publishing.
- Torres, C. (1970) "Social change and rural violence in Colombia". En I. Horowitz (ed.) *Masses in Latin America*. (pp. 503-546) Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press.
- Torres, M. C. (2011) *Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo*. Bogotá, Colombia: CINEP
- Tovar, H. (1975) *El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y XX*. Bogotá, Colombia: Ediciones Libres.
- Touval, S. y Zartman, W. (1985) *International Mediation in Theory and Practice*. Boulder, Estados Unidos: Westview

- Trejos, L. F. (2013) “Aproximaciones a la actividad internacional de una organización insurgente colombiana. El Ejército Popular de Liberación. De China a Cuba vía Albania”. En *Investigación y Desarrollo*, vol. 21, núm. 2, pp. 370-394.
- Trejos, L. F. (2013) “Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado”. En *Revista Enfoques*, vol. 11, núm. 18, pp. 55-75.
- Trujillo, A. M. (2012) “La internacionalización del conflicto colombiano hacia Ecuador en la primera década del siglo XXI. Una lectura a partir de las estrategias del Estado y de las FARC”. En *Papeles Políticos*, vol. 17, núm. 2, pp. 577-620.
- Trujillo, E. y Badel, M. (1998) "Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996". En *Archivos de Macroeconomía*, núm. 76, pp. 1-49.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2007) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2006*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2007b) *World Drugs Report 2006*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2008) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2007*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2009) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2008*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2010) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2009*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2011) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2010*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2012) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2011*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2012b) *World Drugs Report 2012*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2013) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2012*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2014) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2013*. Viena, Austria.
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2015) *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2013*. Viena, Austria.
- Uribe, M. V. (2007) *Salvo el poder todo es ilusión*. Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

- Urrea, F., Ramírez, H. y Viáfara, C. (2002) *Perfiles sociodemográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del SXXI*. Cali, Colombia: Universidad del Valle
- Urrego, M. A. (2005). “La crisis del Estado nacional en Colombia. La perspectiva del Estado y sus funciones”. En *Diálogos de Saberes: investigaciones y ciencias sociales*, núm. 22, pp. 156-168.
- Urrutia, M. (1969) *Historia del sindicalismo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Valcárcel, J. M. (2008) “Beligerancia, terrorismo y conflicto armado”. En *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, núm. 13, pp. 363-390.
- Valencia, C. (2012) “La reconquista de Ituango: un reto en seguridad y defensa nacional del Estado colombiano”. En *Analecta política*, vol. 3, núm. 4, pp. 141-160.
- Valencia, L. (2002) *Adiós a la política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz*. Bogotá, Colombia: Editorial Intermedio.
- Valencia, L. (2009) “Ni justicia ni paz”, en Eduardo Pizarro y León Valencia. *Ley de Justicia y Paz* (pp. 186-338). Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Valencia, L. (2010) “El laberinto de la seguridad”. En *Revista Política Colombiana*, núm. 4, pp. 38-45.
- Valencia L. y Ávila, A. (2011) “La nueva realidad de las FARC”. En Corporación Arco Iris. [En línea]
<http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4e98c218-7b55-44e7-85c9-366e0227998f/CNAI%20-%20Nueva%20realiad%20FARC%202011.pdf>
 .[Consultado el 19 de febrero de 2015].
- Vargas, A. (1991) “Guerrilla, régimen político y Estado: lecturas y re-lecturas”. En Germán Palacio (comp.) *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*. (pp. 249-268). Bogotá, Colombia: CEREC – ILSA.
- Vargas, A. (2003) “Nueva prospectiva para la paz en Colombia”. En *Investigación y Desarrollo*, vol. 11, núm. 11, pp. 104-133.
- Vargas, A. (2006) “El conflicto interno armado colombiano y sus efectos en la seguridad en la región Andina”. En *Ciencia Política*, núm. 2, pp. 168-202.
- Vargas, A. R. (2008) “Guerra civil y violencia de la Guerra contra las organizaciones sociales en Barrancabermeja: 1996-2003”. En *Documentos CERAC*, núm. 9, 15 pp.
- Vargas, A. (2010) *Colombia: escenarios posibles de guerra o paz*. Bogotá, Colombia: UNIJUS.

- Vargas, A. R. (2009) “Guerra civil en Colombia. El caso de Barrancabermeja”. En J. Restrepo y D. Aponte (eds.) *Guerras y violencias en Colombia*. (pp. 423-466). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Vargas, O. (2005) “Economía del narcotráfico, Plan Colombia y conflicto interno en Colombia”. En *Apuntes del CENES*, vol. 25, núm. 39, pp. 31-68.
- Vásquez, T. et al. (2011) *Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Vega, M. (2009) “El contexto en profundidad: las imágenes del petróleo y el paramilitarismo”, en VV.AA. *Casanare: exhumando el genocidio* (pp. 77-90). Bogotá, Colombia: CINEP.
- Velásquez, C.A. (2006) “El ámbito político en el conflicto armado con las FARC 1990-2006”. En *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 1, núm. 2, pp. 157-190.
- Velásquez, C. A. y Ortiz, R. (2012) “Las Políticas de Seguridad en Colombia. Desde el Frente Nacional hasta nuestros días”. *Policy Paper*. Corporación Pensamiento SIGLO XXI. Konrad Adenauer Stiftung. Bogotá. Colombia. 67 pp.
- Velásquez, E. (2007) “Historia del paramilitarismo en Colombia”. En *História*, vol. 26, núm. 1, pp. 134-153.
- Velásquez, F. (2009) *Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos*. Bogotá, Colombia: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ.
- Vélez, M. (2001) “FARC-ELN: evolución y expansión territorial”. En *Desarrollo y Sociedad*, núm. 47, pp. 151-225.
- Vergara, R. (1998) “Colombia, ¿elecciones hacia el cambio?”. En *Nueva Sociedad*, núm. 156, pp. 23-31.
- Vicepresidencia de la República (2002) *Panorama actual de Arauca y Casanare*. Bogotá, Colombia.
- Vicepresidencia de la República (2002b) “Los Derechos Humanos en el departamento de Magdalena”. [En línea]. <
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_271.pdf?view=1>. [Consultado el 23 de febrero de 2015].
- Vicepresidencia de la República (2004) *Los Derechos Humanos en el departamento del Cauca*. Bogotá, Colombia.
- Vicepresidencia de la República (2010) *Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos*. Bogotá, Colombia. [En línea]

- <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdf>. [Consultado el 2 de diciembre de 2014].
- Vieira, G. (1965) “Nueva etapa de lucha del pueblo colombiano”. En *Documentos Políticos*, núm. 47, pp. 10-17.
- Villa, W. y Houghton, J. (2005) *Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia*. Bogotá, Colombia: Centro de Cooperación al Indígena – CECOIN.
- Villamarín, A. (2010) *Operación Sodoma*. Bogotá, Colombia: Colección Conflicto Colombiano.
- Villamarín, A. (2014) *El ELN por dentro. Historia de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago*. Bogotá, Colombia: Colección Conflicto Colombiano.
- Villarraga, A. (2013) “Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia”. En *Colombia Internacional*, núm. 77, pp. 107-140.
- Villarraga, S. (2008) *El proceso de paz en Colombia, 1982-2002*. Bogotá, Colombia: Fundación Cultura Democrática.
- Viloria, J. (2008) Economía extractiva y pobreza en la ciénaga de Zapatosa. En *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional*, núm. 103, 67pp.
- Vinyamata, E. (2001) *Conflictología. Teoría y práctica en Resolución de Conflictos*. Barcelona, España: Ariel.
- Vinyamata, E. y Benavides, F.S. (2011) *El largo camino hacia la paz. Procesos e iniciativas de paz en Colombia y en Ecuador*. Barcelona, España: Ediciones del Campus per la Pau.
- Yaffe, L. (2011) “Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta”. En *Revista CS*, núm. 8, pp. 187-208.
- Yepes, D. (2013) “Los complejos de seguridad regional en América Latina: Colombia y la securitización de la ayuda oficial al desarrollo”. En *Analecta Política*, vol. 4, núm. 5, pp. 371-387.
- Wade, P. (1997) *Gente negra, nación mestiza: Dinámicas de las identidades en Colombia*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
- Wade, P. (2010) *Race and Ethnicity in Latin America*. Londres, Reino Unido: Pluto Press.
- Waldman, P. (1997) “Cotidianización de la violencia: el ejemplo de Colombia”. En *Análisis Político*, núm. 32, pp. 33-51.
- Wallenstein, P., Axell, K. (1993) “Armed conflict at the end of the Cold War”. En *Journal of Peace Research*, vol. 30, núm. 3, pp. 331-346.

- Wallensteen, P. (2000) "Beyond State Failure: On Internal and External Ways of Ending State Failure". [En línea]. III Encuentro sobre Estados Fallidos, Universidad de Florencia, abril de 2000.
- <http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/2000/papers/wallensteen.ht>. [25 de noviembre de 2014].
- Wallensteen, P. y Sollenberg, M. (2001) "Armed Conflict, 1989-2000". En *Journal of Peace Research*, vol. 38, núm. 5, pp. 629-644.
- Wallensteen, P. (2007) *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and Global System*. Londres, Reino Unido: Sage.
- Wallerstein, I. (2004) *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas-mundo*. Madrid, España: Akal.
- Walter, B. (1997) "The Critical Barrier to Civil War Settlement". En *International Organization*, vol. 51, núm. 2, pp. 335-364.
- Waltz, K. (1967) *Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience*. Nueva York, Estados Unidos: Brown and Company.
- Weber, M. (1977) *¿Qué es la burocracia?* Madrid, España: Alianza
- Weber, M. (1992) *La política como profesión*. Madrid, España: Austral.
- Weede, E. y Tiefenbach, H. (1981) "Some recent explanations of income inequality: An evaluation and critique". En *International Studies Quarterly*. Vol. 25, núm. 2, pp. 255-282.
- Weinert, R. S. (1978) "Violence in Pre-Modern Societies: Rural Colombia". En *American Political Science Review*, vol. 60, núm. 2, pp. 340-347.
- Wickham-Crowley, T. (1992) *Guerrillas and Revolution in Latin America: A comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*. Princetown, Estados Unidos: Princetown University Press.
- Wieviorka, M. (1993) *The Making of Terrorism*. Chicago, Estados Unidos: University of Chicago Press.
- Wooldridge, J. (2009) *Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno*. México, México D.F.: CENGAGE.
- Wright, Q. (1957) "The Value for Conflict Resolution of a General Discipline of International Relations". En *Conflict Resolution*, vol. 1, núm. 1, pp. 3-8.
- Wright, Q. (1965) *Study of War*. Chicago, Estados Unidos: Chicago University Press.
- Zartman, W. (1993) "The Unfinished Agenda. Negotiating Internal Conflicts". En R. Licklider (ed.) *Stopping the Killing: How Civil Wars End*. (pp. 20-34). Nueva York, Estados Unidos: New York University Press.

- Zartman, W. (2001) "The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments". En *The Global Review of Ethnopolitics*, vol. 1, núm. 1, pp. 8-18.
- Zukerman, S. (2012) "Organizational legacies of violence: Conditions favoring insurgency onset in Colombia, 1964-1984"- En *Journal of Peace Research*, vol. 49, núm. 3, pp. 473-491.